

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA**

**Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología**



**TESIS DOCTORAL**

**Fiscalidad y ordenación del territorio en el occidente romano: su  
impacto social en el noroeste de "Hispania" (SS. I a.C.-II d. C.)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Antonio Rodríguez Fernández**

Directoras

**Inés Sastre Prats  
María Rosario Hernando Sobrino**

**Madrid, 2019**



UNIVERSIDAD  
**COMPLUTENSE**  
MADRID

**FISCALIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL OCCIDENTE ROMANO:  
SU IMPACTO SOCIAL EN EL NOROESTE DE *HISPANIA* (SS. I A.C.-II D.C.)**

**Antonio Rodríguez Fernández**

Tesis doctoral dirigida por:

**Dra. Inés Sastre Prats**

**Dra. María Rosario Hernando Sobrino**

- Madrid, 2018 -

**FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA**

**DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA**



A mi abuela Lola,  
en recuerdo y agradecimiento, por todo.



*Además de las calamidades modernas, nos oprime toda una serie de calamidades heredadas, oriundas de modos de producción superados, con su séquito de relaciones sociales y políticas anticuadas. No sólo tenemos que sufrir por los vivos, sino también por los muertos: 'Le mort saisit le vif!'*

K. Marx, Prólogo a la edición alemana de *El Capital*.



## AGRADECIMIENTOS:

Este trabajo ha sido posible gracias a muchas personas que de un modo u otro me han acompañado y apoyado en todo este tiempo. Antes de nada, agradecer la financiación del programa de formación FPI, por haberme dado la oportunidad de trabajar en este mundo y vivir tantas experiencias enriquecedoras en el plano personal y profesional en tiempos desesperanzadores para la investigación.

Gracias especialmente a mis dos directoras, Inés Sastre y Charo Hernando, por haber sido un apoyo incondicional durante todo el proceso y por confiar en mí para sacar este trabajo adelante. Sin su paciencia infinita y ayuda en los mejores y peores momentos nunca hubiera sido capaz.

Por supuesto, gracias a todo el grupo de investigación Estructura Social del Territorio – Arqueología del Paisaje (IH-CSIC), en el que he desarrollado mi tesis doctoral, por haberme transmitido su forma de ver y entender el pasado: a Javier Sánchez-Palencia, Domingo Plácido, Almudena Orejas, Brais Currás, Damián Romero, Guillermo Reher, Juan Luis Pecharromán, Elena Zubiaurre, Alejandro Beltrán y Luis Arboledas. Pertenecer a un grupo con tanta trayectoria es un verdadero privilegio y siempre estaré agradecido por la oportunidad que me dieron de formar parte de él.

También hay que mencionar a todo el departamento de Arqueología y Procesos Sociales del IH por su ayuda desinteresada siempre que lo he precisado, por sus conversaciones y su simpatía en todo momento. Especialmente a Maribel Martínez Navarrete, Juan Vicent, Pedro Díaz del Río, María Ruiz del Árbol, Susana González Reyero, Óscar García Vuelta, Antonio Uriarte, Sonia García, Marc Gener y Susana Consuegra. Gracias al antiguo departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, a M<sup>a</sup> Cruz Cardete por su entrega siendo mi profesora y después como amiga, a Santiago Montero y Estela García por despertar mi inquietud por Roma cuando fui su alumno, al archivo *Hispania Epigraphica* por iniciarme en la epigrafía de la mano de la propia Charo y Paloma Balbín, a Ana Mayorgas y Fernando Echeverría por su ayuda durante mi experiencia docente en la facultad.

Recuerdo con gran cariño mis dos estancias en el extranjero, en la Università Federico II de Nápoles y en la Liverpool University. Debo agradecer especialmente la enorme generosidad y hospitalidad de mis dos tutores, Francesca Reduzzi y Alfred Hirt, que me abrieron la puerta de su despacho y de todo el departamento. También a Cosimo Cascione, Raffaella Pierobon y Carla Masi por integrarme como uno más en todas las actividades del grupo. De mi estancia en Nápoles también tengo que recordar a mis amigos Marco, Stefania, Enza, Manila, Francesco y David por su gran acogida.

El trabajo ha sido mucho más sencillo gracias también a todo el apoyo de mis amigos incondicionales, de David, Dani, Luis, Víctor, Christian, Sergio, Cuesta, Pablo, Manu, Álvaro, Alicia, Miguel, Begoña, Adam, Andrea, Elena, Óscar, Ángel, Manuel...

Nunca podré agradecer lo suficiente a mi familia: gracias a mis padres, Isabel y Antonio, a mi hermana Lola, y a mi abuela. Finalmente, gracias a María por entrar en mi mundo y querer quedarte.





# ÍNDICE

<b>Agradecimientos</b> .....	7
<b>I. Introducción</b> .....	12
1. Objetivos y puntos de partida. ....	13
2. Las comunidades peregrinas en el proceso de integración provincial: un recorrido historiográfico y metodológico sobre los modelos de imposición fiscal. ....	16
2.1 La modelización decimonónica del sistema administrativo romano. ....	16
2.2 Revisión crítica de los modelos tradicionales.....	28
2.3 La construcción de la alternativa teórica. Consecuencias metodológicas. ....	39
2.3.1 Las <i>civitates peregrinae</i> en los nuevos esquemas de ordenación jurídica.....	39
2.3.2 La aportación de las lecturas sintéticas y el registro arqueológico. ....	53
2.3.3 Conclusión. Hacia una metodología integrada.....	62
<b>II. El censo provincial y las <i>civitates peregrinas</i>: Aproximación a los diferentes sistemas de control gestión y explotación fiscal de las poblaciones.</b> .....	64
3. El censo provincial: introducción al problema de estudio. ....	66
3.1 Las “excepciones del censo provincial”: provincias senatoriales e imperiales. ....	69
4. Censo y peregrinidad en los sistemas de tributación fija: <i>tributum capitis</i> y propiedad. ....	75
4.1 <i>Laographia</i> y registros “casa por casa”: Egipto.....	75
4.2 Judea y el <i>fiscus Iudaicus</i> : la secularización de un impuesto étnico-religioso. ...	83
4.2.1 El <i>tributum capitis</i> de la colonia <i>Caesarea Maritima</i> y la cuestión del “suelo judío” .....	88
4.3 <i>Tributum capitis</i> , <i>ager publicus</i> y colonización.....	98
4.3.1 La capitación de los judíos en las comunidades griegas orientales. ....	98
4.3.2 Capitación e incolado dependiente.....	101
4.3.3 Capitación y otros formatos de sometimiento: <i>Camulodunum</i> .....	107
4.3.4 Valoración general sobre el <i>tributum capitis</i> .....	115
4.4 ¿ <i>Tributum capitis</i> en el Noroeste?.....	118
5. El censo provincial en la <i>Citerior</i> y el Noroeste. ....	129
5.1 El censo a escala provincial.....	129
5.2 El censo y el papel intermediador del <i>conventus</i> en el Noroeste. ....	135
5.2.1 Las obligaciones personales en el marco conventual: <i>munitiones viarum</i> , <i>dilectus</i> y <i>operae mineras</i> .....	137

5.2.2 Censo y orden conventual.....	155
5.3 El censo provincial y la <i>civitas</i> peregrina. ....	181
5.3.1 <i>Civitas peregrina</i> y censo centralizado: La cuestión de los <i>castella</i> .....	181
5.3.2 El modelo de censo descentralizado: una nueva propuesta a partir de la experiencia republicana.....	207
5.3.3. La ideología censitaria en el Noroeste: una ausencia.....	221
5.4 La pizarra de Pelóu: ¿una <i>tabula censualis</i> ? .....	225
5.4.1 Contexto arqueológico: el castro romano y su paisaje minero. ....	225
5.4.2 La población del recinto fortificado como factor interpretativo.....	228
5.4.3 La lista de Pelóu: ensayo sobre su naturaleza y composición interna. ....	231
5.4.4 Comparativa con otras listas de nombres.....	235
5.4.5 Replanteamiento: La pizarra de Pelóu como documento de gestión militar. ....	238
<b>III. Catastro y <i>civitates</i> peregrinas: Aproximación a los diferentes sistemas de control, gestión y explotación de los suelos provinciales.....</b>	<b>243</b>
6. El proceso formativo del suelo itálico. ....	245
7. El suelo Itálico en las provincias durante el Alto Imperio.....	253
7.1 Italia fuera de Italia: la creación del <i>ius Italicum</i> :.....	256
7.2 Relación entre <i>ius Italicum</i> e <i>immunitas</i> .....	263
7.3 El <i>ius Italicum</i> personal.....	270
8. El suelo provincial.....	275
8.1 La ambigüedad del suelo provincial: un espacio “en negativo” respecto a Italia. ....	275
8.2. El suelo provincial y las relaciones de propiedad. ....	278
8.3 La propiedad peregrina en el Noroeste hispano. ....	293
9. Las <i>civitates</i> peregrinas: fiscalidad y territorio. ....	314
9.1 Las <i>civitates</i> peregrinas en los esquemas de ordenación territorial. ....	314
9.2 Las <i>civitates</i> peregrinas y el fundamento ideológico de la imposición fiscal colectiva: <i>Bellum iustum</i> y <i>deditio in fidem</i> . ....	323
9.3 El <i>ius post bellum</i> y el acto de <i>reddere</i> de leyes y territorios en el <i>Corpus Agrimensorum Romanorum</i> . ....	327
9.4 La <i>assignatio</i> del <i>ager civitatis</i> a las comunidades peregrinas.....	333
9.5 El <i>tributum soli</i> de las comunidades peregrinas: la cuestión de la <i>aestimatio soli</i> . ....	347
9.6 El <i>ager civitatis</i> de las comunidades peregrinas y el <i>ager publicus</i> minero: relación y expropiación .....	351

<b>10. La comunidad Vadiniense como ejemplo de integración cívica desde la peregrinidad.....</b>	<b>358</b>
10.1 La ruralidad de la <i>civitas Vadiniensis</i> .....	359
10.2 <i>Vadinia</i> y los <i>vadinienses</i> : las formaciones políticas y socioeconómicas como elemento de cohesión.....	367
10.3 Análisis de acceso a los recursos y costes de producción en relación con los soportes de las inscripciones vadinienses.....	369
10.4 Relaciones políticas: <i>principes</i> , <i>amicitia</i> y genitivos de plural. ....	372
<b>11. Los fenómenos de resistencia al tributo. ....</b>	<b>387</b>
11.1 El concepto de “revuelta nativa”: romanización y pacificación. ....	387
11.2 El episodio de revuelta antifiscal astur en el contexto de las políticas públicas de Nerón. ....	390
<b>12. El impacto del <i>ius Latii</i> en el Noroeste: ruptura o continuidad. ....</b>	<b>401</b>
12.1 El derecho Latino: naturaleza y concepto. ....	402
12.2 Edicto y municipio latino. Modelos para el Noroeste. ....	409
12. 3 El municipio latino en el Noroeste: implantación formal y plasmación material. ....	413
<b>Conclusiones. ....</b>	<b>421</b>
Bibliografía. ....	429
Indice de figuras. ....	493
Resumen.....	495
Abstract.....	497

## **I. Introducción.**

# 1. Objetivos y puntos de partida.

El objetivo general de la presente tesis doctoral es procurar un modelo explicativo coherente y diacrónico sobre las formas de dominación que condicionaron la integración del Noroeste de la península Ibérica en las estructuras provinciales romanas. Dentro de este objetivo, se pone especial énfasis en la lectura e interpretación de las estructuras jurídicas, administrativas, fiscales e institucionales que participan en el proceso de integración y explotación del territorio. La investigación implica un marco cronológico amplio, que engloba desde el periodo final de la República, cuando las relaciones sociales previas comienzan a mutar por la construcción de los primeros vínculos de dependencia política y social, hasta el nuevo marco augusteo de ordenación territorial y su despliegue hasta el siglo II d.C. Sin embargo, el trabajo se ha centrado principalmente en el Alto Imperio.

Esta investigación ha formado parte de la actividad del grupo de investigación “Estructura social y territorio. Arqueología del Paisaje” del Instituto de Historia (CSIC). Concretamente, se ha llevado a cabo en el marco de dos proyectos de investigación: *Paisajes de dominación y resistencia. Procesos de apropiación y control social y territorial en el Noroeste hispano* “PADORE” (HAR2012-33774) y *Paisajes rurales antiguos del Noroeste peninsular: formas de dominación romana y explotación de recursos* “CORUS” (HAR2015-64632-P), financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La tesis comparte con el grupo de investigación dos cuestiones de fondo, que afectan al enfoque y a la metodología. En primer lugar, la consideración de los aspectos espaciales, fundamentales en el enfoque adoptado. Es por ello que se ha tenido en cuenta la información arqueológica cuando ésta estaba disponible. Se ha partido de los planteamientos teóricos de la Arqueología del Paisaje, es decir, de la consideración del territorio como espacio de síntesis de las relaciones humanas en todas sus vertientes. De modo más específico, la Arqueología del Paisaje es el fundamento de algunos estudios de caso, como el realizado para la *civitas* peregrina vadiniense, o la reinterpretación de la documentación epigráfica específica a partir de su contexto arqueológico. La espacialidad de la arqueología del paisaje implica otros aspectos metodológicos, como el análisis epigráfico “en bloque” dentro de un espacio predeterminado de interés, de modo que dentro de ese marco pueda relacionarse con otros aspectos: su poblamiento, la explotación de recursos, sus manifestaciones culturales específicas, etc. Al ser el paisaje un entorno multifactorial, éste requiere el análisis de fuentes de distinta naturaleza en pie de igualdad para ser leídas de manera conjunta, ya sean arqueológicas, epigráficas, literarias, jurídicas, etc. Esto es, el principal condicionante es la propia disponibilidad de las fuentes sin implicar una jerarquización de partida entre unas y otras. Con estos objetivos, se ha ensayado en algunos casos puntuales la proyección espacial de la documentación a partir fundamentalmente de aplicaciones de *ArcGIS* 10, por sus

herramientas de geoprocesamiento y de visualización multivariable (cronológica, tipológica, onomástica, etc).

En segundo lugar, la interpretación de las relaciones sociales y de sus procesos de cambio como eje fundamental de la investigación. Aun cuando el foco de interés resida en el factor fiscal y administrativo, éste sólo toma un sentido pleno al insertarlo en las dinámicas profundas de las sociedades sobre las que ejerce su influencia. Si bien se ha tenido en cuenta la información arqueológica, esta tesis se basa sobre todo en el estudio de fuentes escritas, con especial importancia de las fuentes jurídicas. Esto ha implicado una reflexión sobre el papel de la información jurídica, y del derecho, dentro de la interpretación histórica y, en algunos casos, dentro de un análisis arqueológico. Lo jurídico no debe considerarse un ente abstracto que se superpone a lo social, sino que es un producto histórico sujeto al cambio y, sobre todo, es un elemento más en la configuración de relaciones sociales desiguales y de dominación. Por lo tanto, en la tesis se parte de la base de que la información jurídica debe analizarse dentro del contexto social en la que se produce y no al revés, evitando con ello el riesgo de considerar que el modelo ideal que trazan este tipo de fuentes es el referente al que debe ajustarse este tipo de fuentes.

Pero, al mismo tiempo, el análisis de las fuentes jurídicas exige necesariamente la extrapolación y la comparación. El estudio de las formas de dominación del Noroeste no puede abordarse sólo con la escueta información disponible relativa a estas regiones, y tampoco tendría sentido hacerlo así. Este tipo de estudio exige la imbricación entre las dinámicas imperiales y los procesos de cambio locales, lo específico y lo general y, por lo tanto, abordar distintas escalas de análisis así como las particularidades de las diferentes regiones de forma comparada. Así es como se ha abordado el estudio de instrumentos y figuras fiscales específicos (*tributum soli*, *tributum capitis*, *census* provincial, etc.), en una gradación descendente.

La tesis toma como punto de partida la interpretación general que han planteado los investigadores del grupo de investigación EST-AP sobre las formas de integración del Noroeste en el Imperio, principalmente la importancia de la *civitas* como elemento de articulación política y territorial, la relevancia del *tributum soli*, y la definición del suelo como *ager provincialis* y no como *ager publicus*. El objetivo de la tesis es revisar estas cuestiones y proponer una interpretación global del funcionamiento fiscal y administrativo del Noroeste en época altoimperial teniendo en cuenta dos instituciones esenciales: censo y catastro. Se parte, para ello, de una revisión historiográfica sobre modelización decimonónica del sistema administrativo romano y los cambios que se han desarrollado desde entonces, sobre todo a partir de la consideración de la peregrinidad como un elemento esencial en la configuración provincial. Se ha revisado la información existente sobre el censo y el control de las poblaciones. Se ha procedido también a sistematizar las informaciones sobre la fiscalidad en suelo provincial a partir del Principado de Augusto, destacando las diferencias respecto a la fase republicana. También se han analizado los datos relativos a las tierras sometidas en ese periodo para determinar si existe una fiscalidad asociada a formas de sometimiento precisas, a

estatutos jurídicos personales o comunitarios, a áreas geográficas, etc. Con ello se ha podido trazar un modelo general de funcionamiento de la fiscalidad imperial y valorar su grado de implantación en el Noroeste peninsular y su proceso evolutivo desde el siglo I a.C. hasta el II d.C. en función de los principales factores de cambio (provincialización, concesión de *ius Latii*, desarrollo de la minería aurífera y de las propias *civitates* peregrinas de la región).



## **2. Las comunidades peregrinas en el proceso de integración provincial: un recorrido historiográfico y metodológico sobre los modelos de imposición fiscal.**

La naturaleza del nexo de dominación entre Roma y el mundo provincial ha sido objeto de una constante revisión y actualización historiográfica que se extiende hasta el presente. No es de extrañar si tenemos en cuenta que el análisis de sus cualidades es un ejercicio especialmente sensible a matizaciones sobre la concepción del Estado y el funcionamiento mismo de la sociedad que lo produce. Como ocurre en cualquier ámbito de estudio, la formulación de modelos analíticos va intrínsecamente ligada a unas determinadas coordenadas de la historia intelectual o, dicho en otras palabras, nunca es consecuencia del simple desarrollo metodológico por asépticas que puedan ser sus intenciones. A menudo la realidad romana ha servido, así, de trasunto y escenario de contraste subliminal entre diversas formas de organización social y política, algunas veces bajo la forma de un recipiente en que volcar expectativas sobre el futuro a partir de una lectura consciente y didáctica del pasado, otras como instrumento para construir un pasado, y con ello un presente, definido por su estatismo. Ante la complejidad de estas cuestiones se hace necesario un repaso que sirva de síntesis sobre los principales enfoques que han predominado en la comprensión del mundo provincial durante el Principado en relación a la actividad tributaria. En este transcurso, desde las primeras obras caracterizadas por un enfoque erudito y tendente a la uniformización social (producto de una imposición administrativa con carácter unitario) se ha llegado a los estudios territoriales como espacio en que esa imposición se expresa de forma genuina y diversa. De esta manera, definiremos en las páginas siguientes los centros de interés que han dominado en cada periodo, el desarrollo metodológico que exigieron, así como las principales líneas de interpretación que han permanecido vigentes de una manera u otra hasta el estado actual de conocimiento<sup>1</sup>. En último lugar, se perfilará el acomodo que esta evolución teórica ha encontrado en el Noroeste como marco regional de referencia: los principales problemas, limitaciones y perspectivas de futuro de la investigación sobre el andamiaje jurídico sobre el que la tributación se asienta y adapta.

### **2.1 La modelización decimonónica del sistema administrativo romano.**

Las primeras obras que se preocuparon de estas cuestiones con un carácter sistemático no aparecen antes del siglo XIX, época de confección de los grandes tratados sobre el funcionamiento administrativo y jurídico romano. Con anterioridad ya

---

<sup>1</sup> Dada la complejidad del tema y la diversificación de su contenido se ha optado por la siguiente estructura de cara a la exposición de los contenidos, metodología y crítica. Los grandes apartados están definidos por una secuencia cronológica orientativa. Dentro de cada uno de ellos el contenido sigue el orden temporal cuando es posible. Sin embargo, un determinado hilo argumental pueden extenderse bibliográficamente sobre el esquema previo con el fin de favorecer la lectura y la unidad del texto, sin los saltos temáticos constantes que se producirían en caso de un criterio cronológico estricto.

se habían producido algunas tentativas sobre estudios parciales y con los rudimentos metodológicos propios del periodo. A modo de ejemplo, a este estadio anterior pertenecen obras como *De re frumentaria* de Schaughen (1709) que sirve como primer acercamiento y en el que predomina el enfoque filológico como es común en estudios de carácter erudito. El principal objetivo de Schaughen se limita a la localización y compilación de alusiones a la voz *frumentum* para después recoger de forma descriptiva las referencias a la legislación y a las procuratelas relacionadas con la institución de los *alimenta* y la *annona*. Dentro de un marco territorial más amplio observa cómo la tributación en forma de *decuma* frumentaria está presente también en otras civilizaciones mediterráneas (1709: 51). Sin embargo, no hay una intención de discernir si las menciones constan o no de un carácter técnico, se intercalan en la narración de forma independiente a la naturaleza de la fuente textual y a su propio contenido y contexto específicos.

Una primera visión general sobre la tributación romana puede extraerse de la obra de Burman *De vectigalibus populi romani* (1734). A pesar de sus deficiencias, fácilmente comprensibles dado que ni siquiera se tenía conocimiento de las *Institutiones* gayanas, este estudio tiene el mérito de ser el primero con una pretensión más histórica y completa, aunque el resultado sea todavía muy esquemático. Es sorprendente comprobar en este sentido cómo algunas de las ideas que están presentes en las obras decimonónicas de obligada referencia ya se perfilan con Burman. Tal es el caso de la relación que observa entre *vectigalia*, como la carga impositiva propia de la explotación del *ager publicus*, y cuya expansión al ritmo de la conquista pasa a engrosar el *aerarium* (1734: 5). A pesar del estado embrionario de estas cuestiones, Burman realiza también una primera aproximación a las formas impositivas establecidas en los *metalla* provinciales, que considera sometidos a *decuma* en su totalidad (1734: 104 y ss.) y sin distinciones en la gestión fiscal de los diversos *genera metallorum*, ya sean de oro, plata, cobre, hierro, canteras o salinas. Evidentemente no profundiza en cuestiones que no surgen hasta el análisis sistemático de las fuentes epigráficas como, por ejemplo, la definición del *ager publicus* local en relación con los *vectigalia* sobre propiedad comunitaria (*cfr.* 1734: 18-19). Esta limitación metodológica parte del mantenimiento de una concepción objetual de las fuentes epigráficas y arqueológicas, que desde la perspectiva del anticuario carecen de mayor pretensión que la de ambientar o complementar visualmente a la narración clásica. La tipología fiscal no se incardina en una evolución constitucional de los estatutos jurídicos del suelo, de las comunidades o de las personas. Parte del esquema general que define el entramado normativo en dos grandes ámbitos: el que depende directamente del Estado romano y aquel que permanece ajeno a él. Respecto al primer grupo, los *vectigalia* se consideran en función del tipo de explotación: *ex agris*, *ex pascuis* y *ex portubus*, sometidos a *decumae*, *scriptura* y *portorium* respectivamente. Pero la proliferación de formas fiscales más allá de los *vectigalia* públicos es por ello ambigua, bajo la fórmula imprecisa de *stipendium vel tributum* sobre los conquistados como *poena belli* (1734: 3 y 9), falto todavía de una reflexión más profunda sobre el proceso de provincialización. En cualquier caso, esta omisión es fácilmente explicable dado el desinterés que las fuentes clásicas tuvieron por la ordenación de territorios no articulados mediante las instituciones romanas; unas

fuentes que, por otra parte, constituían aún la única vía de aproximación a estas realidades.

El salto cualitativo en el estudio de la ordenación jurídica general de los territorios imperiales se produce en el siglo XIX, unido a un proceso de construcción de los estados-nación europeos que invita a la reflexión en torno a otros modelos de funcionamiento político de sociedades pasadas. En cierta medida, y a pesar de la pretendida objetividad del historicismo, puede apreciarse cómo los principales discursos de la modernidad son vertidos sobre la concepción del Estado romano tanto en lo relativo a su naturaleza misma como al modelo evolutivo que lo erige en la cúspide de las formas de organización socio-política. Este esquema aparece ya de forma clara en el tratado de Mommsen, *Derecho público romano* (1877), que ha configurado la denominada teoría patrimonialista sobre el mundo provincial. Su modelo analítico parte del apriorismo basado en una concepción unitaria del Estado que se extiende por sus dominios con una vocación territorial en su sentido más material y efectivo. Un dominio que, por otra parte, se presenta además de modo estático, sin ningún tipo de matización cronológica<sup>2</sup>. En cierta medida, puede apreciarse la translación de un funcionamiento institucional con el cariz de un Estado de Derecho contemporáneo, de un *imperio de la ley*, escrito “with all the ardent emotions of a German liberal who had been out in 1848” como poco más tarde le achacará Haverfield (1904: 84; *vid.* López Barja, 2005: 207-210). Desde su perspectiva la estructura estatal no se limita a aspectos jurisdiccionales sino a una propiedad patrimonial que se despliega sobre bienes y personas. El texto de partida es el conocido fragmento de Gayo:

*Sed in provinciali solo placet plerisque locum religiosum non fieri quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usum fructum habere videmur; utique tamen etiamsi non sit religiosus pro religioso habetur. Item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur (Inst., 2, 7).*

Fijar en suelo provincial un *locus religiosum* es incompatible con un régimen de propiedad estatal que hace inviable cualquier enajenación privada como supondría la *derelictio* del *sepulchrum* en suelo provincial, que se entiende con carácter definitivo. Sin la crítica que reconocería en el fragmento gayano un síntoma de su carácter didáctico-escolar, una cita aislada puede convertirse en dogma para la explicación global del funcionamiento administrativo en las provincias. A ello se añade una concepción a la manera constitucional de las *Institutiones* como texto básico bajo la presunción de la efectividad determinista del derecho en el territorio. Este sesgo empaña en cierto modo su carácter no sistemático, en donde la *interpretatio* en ámbito procesal y legislativo parte de estos esquemas simples para transformarlos. No sin razón a menudo se ha afirmado que el derecho pretorio fue la principal fuente de innovación

---

<sup>2</sup> La representación de este marco estático está ya presente en su propia esencia metodológica, como ejemplifica una neta separación entre la Historia y el Derecho: “el intento de seguir en un trabajo de este tipo el desarrollo histórico debe necesariamente fracasar y no puede sino hacer más difícil la empresa. Yo no lo he intentado” (en Escribano, 2005: 261).

legislativa, que se impone en la práctica frente a estos modelos abstractos para atajar problemas reales dentro de la especificidad provincial. La consecuencia necesaria de esta ordenación fue, desde la perspectiva de Mommsen, la asimilación de todo el territorio conquistado en *ager publicus* y sometido a la libre disposición del Estado (1877: 388) y, en lo que atañe a los conquistados, una condición de *dediticii* mantenida en el tiempo y difícilmente reversible.

La base constitucional de la teoría mommseniana cohibe además de manera determinante las formas de tributación. En primer término, por lo ya enunciado en torno a la necesidad de una precariedad jurídica en la tenencia individual de bienes *nec mancipi* provinciales (Gai. *Inst.* 2, 27), cuya propiedad inalienable pertenece siempre en última instancia al Estado. En segundo lugar, porque la problemática intrínseca a la diversa tipología fiscal en las provincias romanas se resuelve mediante una dualidad patrimonial: aquella que pertenece al *populus Romanus* (*aerarium*) y la que depende del *Princeps* (*fiscus*). Y, a su vez, a cada forma de tenencia parece además asignarse un tipo específico de gravamen: *stipendium vel tributum*. El resultado de esta esquematización supone la limitación a compartimentos cerrados de dos esferas provinciales. Desde la perspectiva de Mommsen la secuencia podría resumirse de la siguiente manera según el tipo de provincia, el titular de la propiedad, la forma de tenencia, el gravamen y el depósito fiscal:

- Provincia senatorial –*populus Romanus* –*possessio* –bienes inmuebles estipendiarios –*aerarium*.
- Provincia imperial – *Princeps* – *ususfructus* – bienes inmuebles tributarios – *fiscus*.

En cierto modo, el diálogo decimonónico en torno al derecho público y privado como dicotomía fija es transferido verticalmente a la explicación del funcionamiento administrativo romano. Sólo así puede comprenderse el título mismo de la obra, *Derecho Público*, en donde “lo público” aglutina las instituciones políticas y toda relación de propiedad que no es privada. Los bienes dependen de una u otra esfera según sea su titular, individuo o Estado, bajo la premisa de una definición de propiedad con carácter ahistórico. Se obvian, por tanto, los mecanismos culturales que afectan a la definición misma de propiedad, lo que limita su naturaleza, su transmisión y el tipo de ligazón institucional y tributaria. En este sentido, la crítica sistemática a la obra gayana en obras posteriores, como veremos, será clave en la definición de las relaciones de propiedad a partir de las características de los derechos reales y del concepto de *dominium*. Respecto a la diferencia entre *stipendium* y *tributum* la problemática se concreta en el destino de la imposición fiscal y en la institución que los gestiona: el *populus* o el *Princeps*. Sí recoge la tradición ciceroniana (2*Verr.* 3, 6, 12) a partir de la cual el *stipendium* habría consistido en un impuesto fijo (en dinero o especie) mientras el *tributum* no ciudadano depende de la declaración personal (*professio*). Pero el proceso de exacción sobre las provincias sigue vertebrado y condicionado por un esquema patrimonial en el que las comunidades son simples intermediarias entre el tesoro estatal y la explotación económica local. La intermediación se produce, además,

sólo de forma fáctica, debido a la tolerancia y permisividad del Estado romano, puesto que toda renta pertenecía de derecho a la comunidad romana (1877: 99-101). La abolición del *tributum ex censu* de la ciudadanía romana del 167 a.C. habría dado paso en época de Augusto al establecimiento de dos formas de tributación generalizadas en las provincias imperiales, concebidas como renta por el disfrute del suelo público: *tributum capitis* y *tributum soli*.

Este esquema osificado en lo relativo a la diferenciación entre Italia y mundo provincial en el Alto Imperio también ha tenido una incidencia importante. La fiscalización de una u otra esfera, lejos de integrarse en un determinado proyecto político, se perfila como una emanación circunstancial de esta misma dualidad entre lo privado y lo público. El reduccionismo de considerar todo el *ager* provincial como *ager publicus* provoca que se deba poner el acento en las características de la propiedad (pública o privada) en vez de en los estatutos jurídicos del suelo. La inmunidad de Italia, por ello, tan sólo es el producto de un proceso de privatización de tierras que se presuponen exentas por su mismo carácter privado. En contrapartida, el *tributum soli* como seña de identidad de la exacción provincial parte de un determinismo normativo que convierte toda propiedad en estatal, toda tenencia en un uso interino y gravado (1877, 388). No se contempla un *ager provincialis* con carácter técnico y rasgos tributarios propios (*vid.* Tibiletti, 1974: 100, n. 41; Sastre, 2001a: 97-113), sino una fiscalidad condicionada por la propiedad pública de todo lo que contiene. A ello se suma, además, la imposibilidad de *usucapere*, que impide revertir una situación a priori inmutable por la vía jurídica (*cfr.* Ducos, 1999: 125-29).

La dualidad entre lo público y lo privado no se aborda en ningún momento en la obra de Mommsen más allá de ilustrar transversalmente el proceso histórico en términos de lucha de *clases* políticas. Weber, en su *Historia agraria romana* (1891) será el primero en conectar esta lucha de clases, con marcada inspiración liberal, con lo que él considera la base material sobre la que ésta se ejerce en términos públicos/privados. Mientras para Mommsen se da por supuesta, la diferenciación entre ambos conceptos se relaciona con la formulación weberiana de los *tipos ideales* como instrumento analítico, pero, sobre todo, como advirtió Mueller, con influencias materialistas (1984: 10-17). Para el filósofo alemán la propiedad privada no podría haber surgido de forma orgánica, como así era compartido por el grueso de la doctrina capitalista, sino como consecuencia de un proceso revolucionario que habría de marcar un paso abrupto respecto al orden anterior (Weber, 1891: 85-88). Este fenómeno, por otra parte, sólo habría podido desarrollarse gracias a la pujanza del mercantilismo romano, a la identificación en clave nacional del patriciado en las distribuciones de tierras públicas y la consiguiente apertura de una profunda brecha social interclasista. La aparición de antagonismos sociales habría terminado por desmembrar la unidad agraria dominada hasta entonces por un sistema colectivista con la creación de la propiedad privada como demanda secular del campesinado, codificada en el derecho positivo y no sujeta ya a las arbitrariedades derivadas del consuetudinario.

Dentro de las extrapolaciones que han condicionado la interpretación de la cuestión tributaria debe señalarse también la esquematización anacrónica de las formas

impositivas en directas e indirectas, es decir, aquellas que establecen la barrera analítica en función de si gravan la fuente de riqueza (sea la renta, la propiedad o la persona misma) o bien la actividad económica y el consumo. Esta tradición planteada poco antes por Naquet (1875) y Cagnat (1882) se popularizó a partir de la obra de Marquardt (1888), sobre lo que considera por un lado *impots indirects*, los cuales agrupan: *centesima rerum venalium*, *quinta et vicesima venalium mancipiorum*, *vectigal ansarii et foricularii promercialium* y diversos derechos de paso con *portoria*<sup>3</sup>. Los paralelismos pueden existir en algunos casos, como el carácter progresivo del *tributum civium romanorum* de época republicana (según la *classis*) o los *epikephalia* de las provincias orientales (según la renta censada), también la apariencia de impuesto sobre el valor añadido que representa la *XX rerum venalium mancipiorum* al no gravar el bien sino la actividad económica de intercambio. En el caso de Marquardt, la representación actualista de las distintas modalidades tributarias hace emanar sin embargo un modelo uniformizante y generalizado para la tributación directa a partir de la perspectiva de Mommsen<sup>4</sup>. Así, por ejemplo, sobre la cuestión del censo y del catastro en ámbito provincial por iniciativa de Augusto, también considera una correspondencia lógica con el *tributum capitis* y el *tributum soli* como formas impositivas globales, en donde la poca elocuencia de las fuentes en lo que a comunidades peregrinas se refiere favorece la generalización de contenidos. Al inventario con vocación universal de Augusto se le presupone exhaustivo para el conjunto, una repertorización de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, de personas y de comunidades, como respuesta a una fiscalización estandarizada para todo el Imperio (Marquardt, 1888: 273-87). Aunque la naturaleza centralista de las nuevas imposiciones resulta innegable, un modelo único de territorialización provincial sólo es posible si se contemplan estructuras administrativas sólidas que no requieran una interlocución a nivel local. Así se pone de relieve en el caso del *tributum capitis* en el que a menudo, ante la escasez de información, no se ha matizado su carácter multifacético al resumirse dentro del esquema ambiguo de la capitación como complemento al impuesto sobre el suelo tal y como es común en los impuestos directos contemporáneos<sup>5</sup> cuando, por el contrario, se circunscribe a una especificidad circunstancial e histórica y puede expresarse mediante distintas variantes según sea la condición jurídica personal y la responsabilidad fiscal (individual o colectiva: *vid.* Brunt, 1981; Sastre, 2003). De igual manera, dentro del debate sobre las

---

<sup>3</sup> En este sentido resulta sintomático cómo la diferenciación fiscal más amplia que se desprende de las fuentes clásicas no se atiene a estas fórmulas y, por el contrario, pone el énfasis en la dicotomía entre *vectigalia* y *tributa* (Tac. *Ann.* 1, 11, 7), es decir, los ingresos del Estado según una procedencia patrimonial (*vectigal*) o aquella, más compleja, que procede de otros ámbitos que no pueden definirse propiamente como estatales (*tributa*). La única salvedad sería la apropiación en término local sobre *ager provincialis* del término *vectigalia* para referir los bienes comunitarios tenidos en arriendo del que dan cuenta algunos testimonios epigráficos (*cfr.* Cardovana, 2014).

<sup>4</sup> La importancia menor que se le confiere a estos asuntos puede percibirse en la propuesta en nota al pie de la lectura a Mommsen, que Marquardt asume sin atisbo de crítica, a pesar de contar con una importancia capital en la interpretación (1888: 277, n. 4).

<sup>5</sup> La capitación igual por persona (*phoros somaton*) preexistente en Egipto y Judea con anterioridad a la dominación romana y más tarde registrada en las provincias de *Africa*, *Cilicia*, *Asia* y *Britannia* induce a Marquardt “a conclure qu’il constituait la seule forme de l’impôt personnel pour les provinciaux”, si bien acepta la posibilidad de variantes según las formas fiscales preexistentes que Roma aprovecha en aras de una explotación eficaz sobre los provinciales desde época republicana (1888: 249-251; 255).

relaciones patrimoniales del mundo provincial a la que antes nos referíamos, y que atañen en especial a la caracterización del *tributum soli*, algunos investigadores han reconocido en estos sesgos modernizantes un elemento distorsionador de la naturaleza del impuesto<sup>6</sup>.

A modo de ejemplo representativo sobre la pervivencia metodológica de estas categorías destaca el libro, ya clásico, de Muñiz Coello (1980) sobre el sistema fiscal en la península Ibérica. En su interpretación global sobre el sistema impositivo implantado por Roma, al establecer el foco de su estudio en la diferenciación entre impuestos directos o indirectos, provoca de manera colateral un cierto regusto de homogeneidad para el conjunto de *Hispania*. La causa es meramente metodológica, pues un objetivo tan ambicioso como el que desvela su mismo título, requiere la interpretación a escala peninsular de unos testimonios que pueden no verse distribuidos con un mismo patrón mantenido en el espacio. Si bien es cierto que esta estructura de análisis puede ser una de las escasas vías de sistematización “en bloque”, también es cierto que la pluralidad de variantes regionales se ve irremisiblemente oscurecida. Cabe señalar, en cualquier caso, que esta distinción modernizante ha sido contestada con perseverancia hasta la actualidad advirtiendo de los peligros de caer en abstracciones anacrónicas (France, 2007: 334; 2001: 359, n. 1), y ha continuado manteniéndose como categoría útil cuando se ve acompañada de las medidas necesarias de profilaxis (*i.e.* Corbier, 1988: 260).

La estructura desarrollada por Mommsen, que coincide a su vez con la de Marquardt en líneas generales, ha tenido también un peso específico en la explicación contemporánea sobre el funcionamiento del mundo rural como parte integrante del dibujo administrativo. En ella la conformación del Estado se entiende como un producto evolutivo dirigido al ensanchamiento del régimen de ciudad en el territorio (Mommsen, 1877: 383; Marquardt, 1889: 21-23). Es decir, impera una visión del mundo rural mediatizada por la concepción totalizante del Estado, en donde “ningún axioma se afirmó desde luego en la evolución del Estado de Roma tan enérgicamente como el de la absoluta centralización política, que excluye toda autonomía de las partes” (Mommsen, 1877: 105). Los vestigios que revelan una situación de autonomía efectiva en las comunidades locales sólo son producto de la decisión, mantenida en el tiempo, de un gobernador que tolera *de facto* la restitución de la comunidad, del territorio y de sus leyes. Las comunidades urbanas se conciben como el órgano vectorial del poder romano que, de forma centrífuga, se extiende por el territorio. Así lo extraen de algunas citas aisladas como, por ejemplo, de la ironía de Cicerón sobre la pretendida autonomía de los cilicios tras haber logrado tener jueces no romanos (*ad Att.*, VI, 1, 15). El centralismo administrativo se presume a partir de un control riguroso de las finanzas

---

<sup>6</sup> En estos términos se expresa, a modo de ejemplo, Grelle en torno a la cuestión de la pervivencia de los modelos decimonónicos bien entrado el siglo XX, en donde no sólo sobresalen los problemas epistemológicos característicos de este campo de estudio, sino la conexión con el debate sobre las nuevas estructuras fiscales en la construcción de la nación italiana unificada: “D'altra parte la concezione patrimonialistica del territorio, sabbene già superata all'inizio dell'800 dalle teoriche dei diritti reali pubblici, sopravviveva ancora a metà del secolo, fra gli studiosi di diritto pubblico, proprio nella problematica dei fondamenti dell'imposizione fondiaria (si ricordino *ad es.* le polemiche che accompagnarono in Italia le riforme postunitarie del sistema tributario), condizionando evidentemente la ricerca storica contemporanea” (1963: 5, n. 11).

locales de los *oppida* por parte del gobernador, quien vela por el pago de las deudas contraídas, establece los pagos extraordinarios, revisa las cuentas locales y asegura el pago equitativo entre los distintos ciudadanos (Marquardt, 1889: 110). No hay una reflexión en torno a la viabilidad de unas estructuras administrativas de semejante calibre. De este modo, la ciudad como entelequia construida para el debate filosófico sobre la buena gobernanza es asumida como depositaria única de las formas organizativas, uniformizadas y dependientes de Roma. La transferencia de concepciones evolucionistas concibe el mundo rural como forma organizativa *inferior* a la urbana en tanto en cuanto se entiende como su estadio anterior y, por tanto, teleológicamente orientado. La influencia que han tenido estos presupuestos, heredados después por Schulten, ha sido la causa última de la indefinición de los *pagi* y *vici*, en los que se ha presumido un formación natural y organicista que se dirige a su comunión paulatina en forma de sinecismo necesario (*cfr.* Capogrossi, 2002: 81-105) o quedando, en caso contrario, como unidades residuales sin significación histórica. Este aspecto central que toma la ciudad clásica como unidad canónica para todo tipo de formación social, huelga decir, hipoteca todo intento de aproximación a realidades sociopolíticas distintas. El desarrollo teórico posterior, como veremos, sólo será posible gracias a un análisis contextual y metodológicamente integrado que pase por el reconocimiento de un horizonte rural dotado de entidad propia y que atienda a sus formas genuinas de estructuración interna.

Debe ponerse también de relieve el influjo que el clásico de Fustel de Coulanges, *La città Antique* (1864), ha tenido en la configuración de esta visión. A pesar del carácter aparentemente aislado de la obra, que parece obviar toda referencia a la historiografía erudita anterior o coetánea, incluyendo a Mommsen (*vid.* Dumézil, 1984: 10-13), llega sin embargo a unas conclusiones semejantes. Podría decirse que mientras Mommsen y Marquardt otorgan una superioridad a “lo político”, para Fustel de Coulanges son las ideas las que construyen, mediante su aplicación, todo entramado organizativo. Aunque la consecuencia es la misma (la omnipotencia del Estado) es la religión y el culto familiar en este caso el eje que vertebra toda actividad económica, política y administrativa. El Estado como institución engendrada a partir de la religión y órgano rector del culto, es dueño de todo individuo en cuerpo, alma y bienes (1864: 236). Así, la propiedad privada se integra en un sistema de ordenación en tanto en cuanto requiere sanción religiosa para su existencia: la señalización sagrada de los fundos familiares, la tumba de los antepasados, etc. Se reconoce la propiedad privada al existir coincidencia entre el culto privado y el estatal, ambos administrados conforme a las mismas leyes sagradas. Pero el carácter religioso del que se reviste el territorio determina, en contrapartida, los cauces jurídicos para la apropiación legal de zonas *no romanas*, pues la inexistencia de tal garantía divina impide que puedan ser disfrutadas como propias. Por supuesto, aquí se deja sentir igualmente el mencionado fragmento de las *Institutiones* de Gayo (*vid. supra*).

También debe ponerse el acento en las cualidades que reviste este derecho de propiedad como condición indispensable para que toda sociedad pueda adquirir el rango de civilización. Sobre esta cuestión, Mommsen ya había expresado una tesis similar en la que la gobernabilidad de los pueblos incivilizados sólo pasaba por el trasvase de



estructuras organizativas a quienes carecían de ellas (*i.e.* para el caso de celtas e iberos *vid.* Mommsen: 1877: 99-100). Ello supone, huelga decir, un claro paralelo con la ideología colonial del periodo, según la cual siempre hay una mayor facilidad de gobierno sobre el civilizado que sobre el salvaje. Estas premisas de base constituyen la presunción de existencia de propiedad privada con carácter reglado sólo en entes políticos con ciertas cotas de sofisticación en su entramado interno. A los pueblos que se mantienen en los márgenes de la periferia cultural, desde una posición evolucionista, se les niega esa posibilidad en su desarrollo tras enfatizar su naturaleza itinerante, su organización tribal, su espíritu aguerrido y caótico, etc. Las analogías con el discurso liberal del periodo, en donde la protección sobre la propiedad privada se erigía en sinónimo de progreso y generadora de bienestar en oposición a las formas de propiedad estancas del Antiguo Régimen, son claras. Así parece observarse en algunos asertos como el siguiente:

Sin discusión, sin fatiga, sin sombra de duda, llegó de una vez por todas y en virtud única de sus creencias a la concepción del derecho de propiedad, del derecho que hizo surgir toda civilización, ya que por él mejoró el hombre la tierra mejorándose a sí mismo (Fustel de Coulanges, 1864: 80).

Subyace aquí una concepción de propiedad privada con una carga ideológica importante. Consta de unas connotaciones que la convierten en la base material imprescindible para que pueda darse un incentivo a la inversión, sólo posible cuando productor y dueño se identifican como beneficiario directo. Por supuesto esta premisa sólo se sostiene a partir de dos aspectos: las estrategias productivas tendentes a la acumulación de riqueza y búsqueda de beneficio, como facetas consustanciales a la naturaleza humana, y la omisión de otras dinámicas económicas distintas según la estructura de explotación. Aunque no sea ahora momento de profundizar en estas cuestiones, la conceptualización posterior de otros condicionantes que actúan en el comportamiento económico abre otras posibilidades. Por un lado, que la actividad económica puede o no dirigirse a aumentar la producción y los márgenes de beneficio<sup>7</sup>. Por otro, que cuando ésta se produce no necesariamente debe asimilarse a los esquemas de la propiedad privada de forma automática. Así, a modo de ejemplo, el establecimiento de una tasa impositiva sobre la tenencia puede fomentar comportamientos económicos análogos por el acicate que representa ampliar la producción y, con ello, la minimización de riesgos y la ventaja económica sobre el porcentaje gravado (*cfr.* Erdkamp, 1999, 561-64). También se ha observado este

---

<sup>7</sup> Así lo observó décadas después la escuela economicista rusa a partir de experiencias contemporáneas. La observación de comportamientos *anti-económicos* del campesinado desde perspectivas capitalistas brindó algunos ejemplos recurrentes: la bajada de precios del grano solía verse inmediatamente acompañada de un aumento en la producción cuando la lógica económica indica lo contrario, o el mantenimiento de actividades económicas no rentables por un subempleo determinante (Chayanov, 1985: 11 y 92-93). La explicación de este tipo de fenómenos fomentó el análisis de subconjuntos económicos con estructuras propias que ya no se entendían como meros apéndices del funcionamiento económico global. En el caso del campesinado, la crítica a la noción de beneficio, que el mismo Chayanoff considera inexistente en la mentalidad campesina, y la definición de la unidad familiar como único ente económicamente significativo permitió atender a esta especificidad de las estructuras campesinas marcadas en último término por un régimen económico de subsistencia.

espectro liberal como causante de la desatención historiográfica de otras formas organizativas y de acceso a la propiedad que no fueran la de propiedad quiritaria debido a su identificación como antecedente arcaico de la propiedad liberal (Capogrossi, 1991; *cfr.* Burdese, 1989; Mastrocinque, 1999), generalizando el modelo itálico basado en el latifundio y la mano de obra de esclava.

Sobre esta perspectiva resulta ilustrativo que en estos momentos sólo se aceptara que la propiedad privada pudiera llegar a desarrollarse con anterioridad a la expansión civilizatoria romana en los reinos con estructuras complejas como en el de Egipto. Dentro del diálogo entre el pasado y el presente estos supuestos recibían además acomodo en algunas citas de los autores clásicos. Ello se explica por la coincidencia en la utilidad de la oposición discursiva entre salvaje-civilizado tanto para los autores romanos, que se sirven de tal recurso para enfatizar el contraste entre el orden y el caos (íntimamente conectado a su vez con el papel ideológico del triunfo y del *imperium* mismo: Woolf, 2012: 28-32), como para el etnocentrismo decimonónico imperante en el análisis histórico. Unos y otros parecen reconocer en Germania el ejemplo paradigmático sobre el que comprobar tales hipótesis. El mismo Fustel de Coulanges, en su obra miscelánea *Recherches sur quelques problèmes d'Histoire*, dedica dos capítulos a la cuestión de la propiedad en Germania a partir del estudio pormenorizado de algunos testimonios en César y Tácito (1894: 258-89). En cuanto al primero se apoya en una referencia explícita al desconocimiento germano sobre la agricultura (Caes. *Gall.*, 4, 1), y aunque expresa sus dudas sobre la veracidad de César, pues se refiere sólo a los suevos y apenas había realizado dos incursiones en sus territorios, el testimonio sobre el carácter itinerante y belicoso de todos los germanos (Caes. *Gall.*, 6, 22) resulta en una prueba suficiente para concluir la inexistencia de la propiedad privada.

El texto de Tácito reviste una mayor complejidad (Tac. *Ger.*, 22). En él se explican algunas características de las explotaciones agrícolas germanas que entran en confrontación con sus presupuestos: aunque desconocen los ciclos agrarios se infiere una repartición de las tierras, *inter se pariuntur*, en función de su condición social<sup>8</sup>. La argumentación de Fustel de Coulanges a partir de este fragmento resulta muy representativa y conviene detenernos un poco en ella a modo de ejemplo. En primer lugar recoge las principales conclusiones que se habían extraído del análisis anterior del mismo: la rotación trianual de cultivos (Eichhorn, 1843: § 14; Landau, 1854: 62), las distribuciones de tierras comunitarias en el seno de cada poblado como unidad política (Waitz, 1844-78, I: 107-127) y el régimen de tierras comunes del conjunto germano que son intercambiadas anualmente por cada tribu para adaptarse a su condición itinerante (Von Maurer, 1854; Thudichum, 1860). Las dos primeras las rechaza categóricamente al estar apoyadas *ex silentio*, sin ninguna alusión explícita en el texto de Tácito<sup>9</sup>, y porque presumen cierto nivel organizativo local. En cuanto a la tercera hipótesis hace una crítica sistemática a la traducción sobre la que se ha apoyado la teoría: *ab universis*

---

<sup>8</sup> *Agri pro numero cultorum ab universis in vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur [...] Arva per annos mutant et superest ager* (Tac. *Germ.*, 26).

<sup>9</sup> Del primero crítica que no se hable en ningún momento de alternancia de cultivos de forma explícita. En cuanto al segundo observa que toda su argumentación se apoya en el término *vicis* que introduce él mismo, cuando en las diferentes tradiciones manuscritas sólo se puede leer *vice*, *in vices* e *invicem* (Coulanges, 1894: 264).

por “chaque tribu” denota igualmente una autoridad político-pública que debe sustituirse por un reparto “entre eux”, en condiciones de horizontalidad (1894, 365); *arva mutant* no designa para Fustel de Coulanges campos intercambiados en sentido genérico, sino campos cultivados que van cambiando de lugar; *superest ager* no complementa a *arva mutant* sino que establece una comparación entre opuestos con el fin de reflejar el predominio de *agri* yermos con los escasos *arva* (cultivados) en Germania. Como puede apreciarse, es el apriorismo el que guía la traducción y no a la inversa y, de hecho, también él se apoya en argumentos *ex silentio*<sup>10</sup>. La negación de toda forma de propiedad, sea individual o comunitaria, le invita a proponer opciones que se escapan de la literalidad de algunas citas. Así ocurre con el explícito *partiuntur sencundum dignationem*, del cual se infiere claramente por el sentido del texto que alude a un reparto desigual de tierra según el capital político o socioeconómico interno en el seno de la “unidad organizativa”, cualquiera que fuera la naturaleza de ésta. Esta traducción implica aceptar ciertos niveles de desigualdad derivados de la estructura política que para Fustel de Coulanges sólo pueden explicarse bajo la forma de derechos individuales de acceso a la tierra, pero en ningún caso de un vínculo que una a la persona con un terreno de explotación. De tal manera que será el crecimiento secular de cada segmento parental en individuos el que determine la prorrata del mencionado derecho, pero en ningún caso un vínculo o ligazón con una propiedad específica de manera estable (Fustel de Coulanges, 1894: 279-82). La escasa importancia que se le otorga a la organización de la producción hace que no se observe una interrelación entre la estructura de explotación y la conformación de un determinado modelo social<sup>11</sup>. En cierto modo, dentro del estado embrionario de una antropología todavía comtiana, subyace una sociedad germánica tipificada dentro de la transición entre las “sociedades de bandas” y las “tribales”, que por su movilidad inherente y su articulación parental resuelven sus necesidades mediante la cooperación externa en vez de recurrir a una agricultura con carácter no sistemático como catalizador de transformaciones sociales (*vid.* Vicent, 1998: 829; Gilman, 1997: 83).

Volviendo al organigrama general del funcionamiento administrativo imperial, Fustel de Coulanges diferencia dos amplios marcos de ordenación en el proceso de expansión romana: *in civitate* e *in imperio* (1864: 366 ss.). Como ocurre con Mommsen, entre ambos espacios se mantiene una plena coherencia interna y una diferenciación

<sup>10</sup> “Tacite songeait-il au droit de propriété foncière, il devait employer des termes tels que *terra propia*, *ager privatus*, *fundus*, *dominium*, *possessio*, *fines*, *termini*.” (Fustel de Coulanges, 1894: 267).

<sup>11</sup> Así, por ejemplo, para Mommsen no se concibe un comportamiento económico distinto según las formas de distribución y reparto de las tierras, pues “el pequeño cultivo sólo se diferenciaba del grande en las proporciones en que se verificaba” (1855-186, 1074). Anteriormente las pautas económicas que se habían identificado tenían más que ver con el estereotipo del salvaje desde un enfoque fenomenológico que no apreciaba tampoco la importancia de las estructuras productivo-organizativas: “Cuando las naciones cultas son las dueñas del mundo, va aumentándose cada día el oro y la plata, ora los saquen de su territorio, ora vayan a buscarlos adonde los hay. Por el contrario cuando las naciones bárbaras son las que prevalecen, se disminuyen estos metales. Sabido es cual fue la escasez de ellos cuando por una parte los Godos y los Vándalos, y por otra los Sarracenos y los Tártaros lo invadieron todo [...]. El aumento de la cantidad de oro y plata es pues útil cuando se miran estos metales como mercadería; pero no lo es si se consideran como signo, porque su abundancia es opuesta a la calidad del signo, la cual estriba mucho en su escasez.” (Montesquieu, 1820, 116-17).

neta. El modelo *in civitate* es el único reconocido de *iure*, de carácter ciudadano y regido por el *ius civile*. Lo forma la ciudadanía romana y todo el territorio por el que se extiende como extensión de la propia Roma. El segundo está compuesto tanto por los territorios sometidos a partir de una *deditio* como los *socii* y las ciudades libres. Sin embargo, sólo la forma *in civitate* es reconocida como parte integrante del Estado (1864: 365)<sup>12</sup>. La causa ideológica que impera en esta definición parte nuevamente de la concepción religiosa y cultural del edificio estatal. Como encarnación de un pueblo que se extiende por un territorio que le es intrínseco, casi a la manera del *Volkgeist*, se hace inviable la adhesión al mismo de territorios ajenos a la religiosidad y costumbres romanas<sup>13</sup>. Esto se observa claramente en su acotación del *ager romanus*, que sólo existe dentro de la integración *in civitate*, muy restringida por otra parte, por razones religiosas. Por el contrario, los conquistados (*dediticii*) constan por entero de *ager publicus* tras la abolición del derecho propio y de todo régimen de ciudadanía, por lo que dependen de la libre disposición del gobernador en su pleno ejercicio jurisdiccional (*in imperio*). Sin personalidad jurídica, carecen de capacidad para cualquier clase de negocio y de protección, sólo *in bonis*, en un estado de interinidad perpetua. Las provincias se perfilan así como fundos puramente económicos de explotación y sometidos a cualquier tipo de arbitrariedad gracias al *imperium*. Ello implica aceptar unas condiciones de extrema dureza y una brutalidad sistémica en la aplicación del derecho por conquista si se entiende en abstracto como forma general de ordenamiento no ciudadano. Dentro de este esquema, para Fustel de Coulanges la expansión paulatina de una ciudadanía romana se enmarcaba en el progresivo ensanchamiento del Estado sobre el territorio a través de movimientos sociales que buscaban su integración y el beneficio que la *immunitas* de la ciudadanía llevaba consigo (1864: 370-376). Desde esta premisa la apetencia de ciudadanía, de la lucha por los derechos, se convierte para Fustel de Coulanges en el motor de la historia romana imperial a partir de revoluciones teledirigidas como “consecuencia del progreso natural del espíritu humano” (1864:

<sup>12</sup> Sobre este punto Mommsen sí incluye a los *socii* extratálcos en el Estado al disfrutar de ciudadanía propia reconocida frente a los *dediticii*. De hecho, a ellos se circunscribe la peregrinidad como “segunda forma de pertenecer al Estado” y “con el peor derecho de todos” (Mommsen, 1877, 102; 1896, vol. V, 242-43).

<sup>13</sup> De forma análoga se expresa Marquardt sobre las consecuencias inmediatas de la expansión de la ciudadanía romana al dar prioridad en su explicación a la pérdida de los dialectos locales tras la imposición del latín como “langue officielle” (1889, 86). Los primeros trabajos que se dedicarán en las décadas siguientes a la definición del concepto de Romanización, con anterioridad sólo perfilado vagamente, reproducen estos mismos esquemas: “Firstly, Romanization in general extinguished the distinction between Roman and provincial, alike in material cultura, politics and language. Secondly it did not everywhere and at once destroy all traces of tribal and national sentiments or fashions” (Haverfield, 1923, 18; en Webster, 2001, 211). Incluso puede rastrearse este sedimento en numerosos trabajos actuales, por ejemplo, traspasado a la interpretación del *ius Latii* como modelo de integración jurídica, pero también cultural: “Roma [...] - primero en Italia, y poco después por el resto de la cuenca mediterránea - fue hallando en su avance infinidad de comunidades en diferente grado de progreso” (Espinosa, 2009, 236: la cursiva es mía); “reconocimiento del extranjero como potencial ciudadano romano” (*ibid.*, 237), “exportación del *modus vivendi* romano” (*ibid.*, 237), “Roma implantó decididamente el modelo de ciudad, de *ciuitas*, y procedió a la progresiva y selectiva extensión de sus derechos ciudadanos” (*ibid.*, 238), “por la acción de dicho privilegio [*ius Latii*], convivían en una misma comunidad individuos con dos niveles diferentes de ciudadanía. [...] El resultado, comunidades mixtas regidas por un *modus vivendi* romano regulado por el *ius civile*” (*ibid.*, 240).

241)<sup>14</sup>. Subyacen, de hecho, algunas analogías respecto a la percepción que se tenía en época del autor de los movimientos de la burguesía en el proceso de construcción de los estados modernos: un proceso en el que la extensión de mejores condiciones jurídicas sólo pudo materializarse a partir de la secularización del derecho y de los movimientos revolucionarios de sociedades que parecían haber perdido su ingenuidad a la luz de la filosofía (*vid.* Fustel de Coulanges, 1864: 347-54).

## **2.2 Revisión crítica de los modelos tradicionales.**

La confección de los grandes tratados de funcionamiento romano brevemente descritos en las páginas precedentes sirvió para marcar unas pautas generales bien definidas de la que se nutrieron los estudios sucesivos en la primera mitad del siglo XX. Estas primeras obras tuvieron el enorme mérito de construir los primeros modelos explicativos que, dirigidos a establecer una lógica global que aglutinara testimonios dispersos en el tiempo y en el espacio, precisaron de la elaboración de los principales catálogos y compendios de la documentación textual y epigráfica. La información como hecho positivo permite una conexión íntima y directa con el pasado, ya que no lo interroga, simplemente se limita a describirlo. Y es que la pervivencia de la concepción ilustrada de la Ciencia, efectivamente, se manifiesta todavía en la acumulación de información como un fin en sí mismo, indicador del desarrollo de la disciplina metodológica, pero que establece sin embargo una jerarquía implícita de las fuentes.

En relación al contenido, estas obras canónicas dejarán su impronta en la investigación de las décadas siguientes como marco teórico con una naturaleza objetivada. Aunque de forma un tanto artificial se ha establecido aquí el cambio en el ecuador del siglo XX, lo que define este espectro temporal es la crítica a los aspectos específicos desde el esquema impuesto por la historiografía decimonónica, pero no una crítica a la base de sus concepciones. El guión fundamental no se debate, sino que se matiza y, con él, se reproducen buena parte de sus defectos, como los ya comentados someramente: los esquemas rígidos en la comprensión del comportamiento administrativo romano, el predominio del estatismo frente a concepciones diacrónicas, el aspecto homogéneo del mundo provincial, la transferencia de nociones liberales a las relaciones de propiedad, la reducción del mundo rural predominante a mero apéndice del urbano, etc. Como ha podido apreciarse, este espectro ideológico ha tenido su incidencia en la forma de entender el proceso de territorialización romana, convertido también en escenario de transposición de referentes ligados al colonialismo e imperialismo europeos (Ñaco, 2003: 1-3; Cardovana, 2012: 458-62). De hecho, y esto

---

<sup>14</sup> Así se desprende también de algunas concepciones actuales de la romanización que puede considerarse sus herederas directas: “Por romanización (o asimilación) entendemos ese largo proceso de integración que llevó a las poblaciones indígenas por la senda de la paulatina aceptación de la autoridad romana, [...] y en el que, como no podía ser de otro modo, tomó parte activa la propia voluntad de los indígenas, deseosa esta última de formar parte de un nuevo contexto político administrado por Roma, con esa inequívoca mezcla de aspiración y/o fascinación que siempre mostraría por integrarse dentro del Imperio” (Pitillas Salañer, 2007, 212-213).

es sintomático, algunos de estos paradigmas no serán superados hasta que la propia experiencia contemporánea los proponga como contingentes. A tenor de la resistencia a abandonar estos planteamientos, la producción científica de estas primeras décadas del siglo XX no permitirá dar respuestas eficaces sobre el funcionamiento provincial en comunidades no romanas donde, como ya había advertido Marquardt: “il n’est pas encore possible de résoudre avec une entière certitude” (1889: 308).

La revisión de algunos elementos que habían quedado poco perfilados en las obras rectoras del siglo anterior sirvió para consolidar lo que el investigador Ñaco del Hoyo ha definido como “el modelo del *stipendium*” (2003: 5-12). Este modelo supone la consecuencia natural de una concepción patrimonialista del Estado en la interpretación de la fiscalidad republicana e imperial. Al ser el suelo dominio eminente del aparato estatal toda fórmula tributaria queda englobada dentro de la definición de *vectigal*. Ésta, a su vez, habría quedado subdividida en dos grandes entes en función de la naturaleza del gravamen: por un parte aquellos que sustraen un beneficio porcentual en forma de diezmo (*decuma*, o *vicesima* si se trata del cinco por cierto como en el caso de la Bética); por otro, los que se sirven de una imposición fija y con carácter perpetuo sobre la tierra (*stipendium/tributum*), acompañada después por la capitación personal (*tributum capitis*). De este modo, el transcurso desde el periodo republicano al que da comienzo con Augusto no presentaba grandes novedades desde el punto de vista de las estructuras fiscales, más allá del cambio que se produce en un punto indeterminado donde las indemnizaciones post-conquista terminan por convertirse en tributación con carácter fijo (*vectigal certum*). Una vez llegado a este punto, el nudo de la cuestión se limitaba a la apreciación de cuál de los dos modelos de imposición agraria que se desprenden del célebre fragmento de Cicerón se habría establecido para cada caso provincial (2Verr. 3, 6, 12; *cfr.* Ñaco, 2003: 249): aquel representado por la *decuma* de Sicilia y Asia, o el de las comunidades sometidas a *stipendium* con independencia del volumen producido al basarse en el trasvase del pago legionario sobre el vencido.

Dentro de la historia revisionista que sobresale en estas décadas aparecen diversos trabajos centrados en el establecimiento del punto de arranque de las formas patrimonialistas de dominación romana en términos cronológicos más que cualitativos<sup>15</sup>. Este periodo habría estado marcado por una ruptura con un estadio anterior en que el balance presupuestario del erario público había podido sostenerse gracias a la tributación de carácter ciudadano *ex censu* y la explotación de rapiña sobre los vencidos tras la victoria militar. Como excepción a esta regla tan sólo cabría destacar la teoría de Klingmüller, fuertemente contestada por otra parte, en la que las relaciones proto-estatales de propiedad comunitaria se consideran ya un elemento inherente a la articulación del territorio romano desde su mismo nacimiento (1910: 79; *vid.* Frank, 1929: 142). El autor dota ya a la *limitatio* romúlea de un carácter cuasi-técnico en donde las sucesivas conquistas expanden unos límites ideológicamente definidos e independientes a factores organizativos desde su origen. La tesis de Klingmüller, a pesar de sus problemas, tiene la originalidad de reivindicar una causa

---

<sup>15</sup> Mommsen tan sólo había sugerido el primer atisbo de la concepción de propiedad sobre las provincias en la política gracana, en la *lex Sempronia* de Asia, donde se recoge una *locatio censoria* que invita a pensar en un nuevo marco jurídico.

endógena en la concepción romana del territorio frente a factores externos. Por el contrario, la visión paradigmática que terminará por imponerse verá el hecho diferencial en el contacto con el mundo helenístico, presente en el sur de la península Itálica.

En este segundo grupo se incluyen los estudios iniciales de autores como Rostovtzeff o Wilcken, quienes reparan en la existencia de un derecho unitario helenístico compartido por todos los reinos de la cuenca oriental mediterránea, incluyendo a Egipto, para ser después aprehendido por las estructuras administrativas romanas<sup>16</sup>. En el caso del estudioso ruso, critica duramente las conclusiones a las que previamente había llegado Klingmüller (*cfr.* 1910: 238, n. 3). El *ius belli* no sería suficiente como derecho básico sobre el que asentar una anexión territorial en términos de propiedad ya que debería asumirse una creación espontánea por parte de Roma a expensas de la experiencia de conquista sobre comunidades sin entidad organizativa compleja. Es decir, para Rostovtzeff sólo puede considerarse la evolución jurídica de estos lazos de dominación como producto de un proceso de difusión y aculturación paulatino en el que el punto de inflexión está marcado por el contacto y la asimilación de estados ya articulados territorialmente que pasan a estar bajo su control. Sobre este aspecto pueden observarse de nuevo algunas similitudes con la consideración funcional del Estado que hemos descrito previamente en la obra de Mommsen. Además de por el carácter unitario y centralista del aparato administrativo, porque se pone de relevancia la capacidad de aprendizaje del Estado romano para adaptar todas ellas a un único eje de funcionamiento. Este primer aporte, que habría dado inicio a las relaciones patrimoniales del Estado que más tarde articulará el *dominium in solo provinciali*, lo sitúa concretamente en Sicilia (Rostovtzeff, 1910: 231-304), en donde actuaba la *decuma* heredada de la *lex hieronica* y que se habría mantenido con certeza hasta la época de Cicerón<sup>17</sup>. Este sistema impositivo, como advertíamos, se basaba en cuotas que ligaban al contribuyente como *possesor* de un *fundus* con una administración estatal romana que va sustituyendo la interlocución de la *civitas* por la injerencia directa de los funcionarios imperiales. La capacidad adaptativa para aprovechar estructuras preexistentes, en este caso asentadas sobre la ideología griega de la *oikonomia basiliké* (1910: 235), se habrían exportado después a otras realidades provinciales como Asia. Para alcanzar tales conclusiones parte, sin embargo, de dos premisas indispensables no exentas de ciertas problemáticas, una que atañe al origen del impuesto y otra relacionada con el proceso de adaptación y asimilación de la *decuma* como instrumento útil para la fiscalización de otros territorios.

1. El sistema político originario sobre el que se asienta la tributación siciliana: un reino de corte tiránico en donde el monarca posee derechos reales sobre toda la isla como esquema jurídico del que se hace depender la exacción sobre el suelo bajo el régimen de *decuma*. Es por ello que además del mencionado

---

<sup>16</sup> “sulla basi dei risultati ottenuti in Egitto, porre in primo luogo la questione della misura in cui rapporti agrari -dal punto de vista statale- della Sicilia e dell'Asia Minor, in età ellenistica sono simili a quelli dell'Egitto e se, prottutto, si può parlare, in una forma qualsiasi, di primi passi verso la formazione di un globale diritto agrario ellenistico” (Rostovtzeff, 1994 [1910], 234; *cfr.* Wilcken, 1897).

<sup>17</sup> Cic. 2*Verr.*, 13 (32); 26 (63); 60 (146); 3, 6 (14); 8 (19); 10 (24); 15 (38).

derecho helenístico se presupone que “Sicilia veniva trattato in modo assolutamente uniforme” (1910: 235). La propiedad estatal sobre bienes inmuebles no se limita por tanto al *patrimonium* privado del rey como señalará la historiografía posterior (Frank, 1927a: 149) o la diferenciación entre *civitates foederatae* y *decumani* (cfr. Luzzato, 1985) sino a la isla en toda su extensión.

2. La absorción de la estructura previa de Sicilia se entiende, de este modo, como un simple cambio de titularidad en la propiedad fondiaria: de Hierón, “secondo cui il territorio dello Stato apparteneva a lui” (1910: 237), al *populus Romanus*. Este punto de partida, este aprendizaje, se produce además en un momento en que Roma no ha experimentado todavía la expansión territorial que seguirá después de la segunda guerra contra Cartago. El contacto e integración territorial a partir de entonces, con marcadas diferencias organizativas y culturales entre el oriente y occidente mediterráneo, requiere para Rostovteff de una racionalización administrativa: “un amministrazione statale ha (...) la tendenza naturale alla generalizzazione, che semplifica enormemente il sistema della tassazione e del calcolo” (1910: 235). Las limitaciones logísticas de la burocracia romana, con sistemas de control escasos, promueven la uniformidad en el régimen de la imposición con la salvedad del mencionado “modelo de *stipendium*” como segunda opción. La elección de una u otra tipología fiscal estaría determinada por la variación o constancia de la producción agrícola según fueran las características meteorológicas y el tipo de cultivo<sup>18</sup>. La pretendida racionalidad de la administración romana constituye la única solución, por otra parte, para mantener la tesis de un estado centralista sin recursos reales para serlo.

Otro argumento central de su teoría se relaciona con el valor técnico que recibe el término *arator* y que Rostovtzeff contrapone al de propietario<sup>19</sup> (Cic. 2Verr., 3, 57; 102; 228). Estos *aratores* aparecen junto al genitivo *populi Romani* en estos tres casos aislados, de donde Rostovtzeff extrae una relación de dependencia patrimonial respecto al *populus* como *possesores decumani*. Para ello se apoya en una dudosa analogía con la expresión del derecho helenístico egipcio *georgós basilikós*, es decir, los *aratores* del monarca ptolemaico como lo serían en Sicilia respecto a Hierón y, después, al *populus*. Una primera crítica a la homogeneidad de un derecho helenístico que se establece simultáneamente (en este caso en la creación de la *lex hierónica* y su análoga en el

---

<sup>18</sup> Un determinismo válido para algunas zonas con importantes fluctuaciones, como podría ser el caso de Asia Menor, pero que supone una contradicción para Sicilia al tener un volumen de producción de grano estable y, por tanto, con una previsible cantidad disponible para el Estado. Desde el enfoque de racionalidad y simplificación burocrática que propone Rostovtzeff, la estimación periódica que requiere la *decuma* sería un esfuerzo prescindible. Otros autores han defendido posteriormente el peso de una *pactio* con carácter previo (Pritchard, 1979).

<sup>19</sup> “*colonus aratorque vester*”, “*aratores populi Romani*”, “*Siculi, coloni populi Romani atque aratores*”, respectivamente, si bien el número total de alusiones a la voz *arator* roza las doscientas ocasiones según el cómputo de Frank (1927a, 143).



reinado de Ptolomeo Filadelfo) la recibe ya con Carcopino<sup>20</sup> (1919). Algunos años más tarde Frank publica un influyente artículo orientado a establecer en el reinado de Claudio el momento de concreción jurídica del carácter patrimonialista de la dominación romana provincial (1927a). Sus conclusiones nacen, por tanto, del cuestionamiento a los principales trabajos previos que, como Rostovtzeff o el mismo Mommsen, habían retrotraído este fenómeno a periodos anteriores. En este sentido el análisis pormenorizado de las tres referencias a los *aratores* + genitivo demuestra, con gran acierto, que la situación jurídica de estos *aratores* no debe relacionarse con un dominio material de la provincia siciliana, sino con un régimen de explotación específico sobre *ager publicus* como *coloni*. Los *aratores* no tendrían por tanto el sentido técnico que quiso atribuirles Rostovtzeff para el conjunto siciliano, siendo tan sólo una referencia genérica a los pagadores de una tasa en vez de una renta estatal (*vid.* Frank, 1927<sup>a</sup>: 143-44). Algunas de las conclusiones de Frank, sumado a las críticas sucesivas de autores posteriores como Pritchard (1979), han remarcado una mayor independencia de la *civitates* y las necesidades del ejército frente al componente patrimonial que, en su día, quiso convertir el caso siciliano en punta de lanza de un régimen de ordenación constante y uniforme.

Una relectura de los complejos discursos *In Verrem* del arpinate ha permitido flexibilizar el contenido de la *lex* hierónica adaptada por Roma, en donde ya en tiempo de Hierón se reconoce que “the Sicilian *civitates*, although no longer important politically, still played an important administrative part and were directly involved in the collection of the revenue” (Pritchard, 1970, 368). En la actualidad tiende también a aceptar que el modelo de la *decuma* sólo estaba implantado en los dominios reales de Hierón, posteriormente traspasado al *populus*, en vez de al conjunto de la isla. La teoría sobre el inicio de la concepción patrimonialista provincial a partir de la experiencia siciliana ha tenido, a pesar de todo, un sedimento muy firme en la historiografía posterior hasta la actualidad, desde el cercano Levy (1929) o los influyentes trabajos posteriores del prestigioso jurista italiano De Martino (1973; *cfr.* Grelle, 1963, 4-5, n. 11) hasta buena parte de escuela española (*eg.* Murga Gener, 1982: 26-27; Castillo, 1996: 70; González Román, 1999: 164-65; Santapau, 2002-2003: 196).

En estas primeras décadas otros ejemplos sugerentes para contrastar el dominio-propiedad como práctica asimilada ya en época republicana a las actuaciones de integración provincial los encontraron en el reino de Macedonia, Pérgamo, Egipto y África. No vamos a detenernos ahora en el tratamiento historiográfico de cada uno de ellos por economía de espacio, pues de los tres primeros la línea argumentativa es semejante a la que ha podido observarse para Sicilia, es decir, el acervo helenístico absorbido sin grandes mutaciones por parte del sistema administrativo romano. Basta

---

<sup>20</sup> Carcopino mantiene sin embargo la fuente común de derecho helenístico, sólo matiza el ámbito cronológico en que habría aparecido la *lex* en época de Hierón II y la fuente del derecho, dependiente de la egipcia: “Le nombre et la fidélité des ressemblances que nous venons de constater excluent l’hypothèse d’une source commune, d’un *nómos telonikós* de la Grèce propre, dont les Grecs installés en Egypte depuis cinquante ans auraient pu, soudain et à la même date, s’inspirer indépendamment les uns des autres. Au contraire, l’idée d’une imitation directe est confirmée par l’histoire” (1919; *vid.* Lepaulle, 1922, 184).

con mencionar el significado de la anexión de Egipto como nuevo espacio de innovación y aprendizaje que completa el rígido esquema fiscal propuesto por los autores decimonónicos. Si de Sicilia se había extraído un régimen de tenencia generalizado que había sustraído a las *civitates* los derechos materiales sobre su territorio, de Egipto se adquieren las formas de tributación personales, la capitación mediante *laographia* y *syntaximon*, que habrían de completar las rentas fondiarias en el resto de ámbitos provinciales. En este caso, a diferencia del gravamen progresivo de las *epikephalia*, tanto la *laographia* como la *syntaximon* son cantidades personales fijas. La interpretación en términos patrimonialistas durante este periodo se resolvió a partir de dos posibilidades: o bien que fueran sinónimos de un pago personal único en torno a 40-44 dracmas (Keyes, 1931), o bien que mientras la *laographia* se relacionaba con el gravamen a *aegyptioi*, la *syntaximon* era la tasa requerida para financiar el mantenimiento de los templos y de las actividades culturales (Otto, 1905, I: 382, n. 1; *vid.* Keyes, 1931, p. 382, n. 1). En cualquier caso, la preferencia por una u otra línea se presenta de forma disociada respecto a la condición jurídica personal y sin vínculo a un expediente específico del suelo al presentarse unificado como dominio-propiedad del *ager provincialis*. La dicotomía *tributum soli* y *tributum capitis* que habría de caracterizar la tributación estandarizada para el Alto Imperio quedaba así claramente perfilada.

Un único salto en el camino representó la publicación y análisis de Meyer (1910, 1-2) del controvertido *P. Giessen 40*. Sus posibles alusiones a *pol[is] ton [de]deitikon* en Egipto, que parecían haber sido excluidos de la adquisición de ciudadanía romana otorgada globalmente con la *constitutio Antoniniana* del año 212 d.C., hizo necesario un primer replanteamiento de algunos presupuestos en torno a la definición misma del contenido jurídico de los *dediticii* que aparecen en distintas fuentes<sup>21</sup> e identificar el grupo social al que iba dirigida esta excepción. Como ya hemos señalado antes, la teoría de Mommsen asimilaba *de iure* a los *dediticii* con toda organización cívica abolida tras la conquista de Roma, siendo *civitates stipendiariae* y *civitates dediticiae* formas sinónimas de una misma condición, tanto comunitaria como personal. En esta línea, la consecución de ciudadanía romana sólo podía contemplarse para aquéllos que ya contaran con una ciudadanía reconocida, como ocurría con los *cives* dotados de *ius Latii*. El resto del cuerpo social era el producto de la conjunción de las definiciones Gayo y de Ulpiano: *qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnauerunt, deinde victi se dediderunt* (Cai. *Inst.* 1, 14) pasando a engrosar el cuerpo de *nullius certae civitatis cives* (Ulp. *Reg.*, 20, 14). Los argumentos de Meyer a partir del papiro dan un giro de tuerca a la cuestión, aunque éstos sean exclusivamente de carácter filológico. Para este papirólogo debían conectarse con las alusiones en otros fragmentos que hablaban de *laographoimenoí* como grupo social igualmente exento de

<sup>21</sup> A modo de ejemplo sobre esta nueva preocupación puede ser representativo el estudio de Laistner, en donde aborda en términos de idoneidad metodológica el uso de referencias tardías a *dediticii*. En concreto lo analiza en San Isidoro de Sevilla (*Etym.*, 9, 4, 49-50), y considera finalmente a la jurisprudencia clásica como fuente de información directa, pero complementada con algún tipo de compendio, manual o diccionario posterior que pudo distorsionar su contenido (Laistner, 1921).

condición ciudadana en Egipto y con una genuina marca fiscal *per capita*<sup>22</sup>, tesis que profundiza poco después Wilcken (1912), discípulo de Mommsen. Desde estos presupuestos se infería una condición marcada por una situación histórica particular y una composición jurídico-social muy específica (*dediticii-aegyptioi*) como seña de identidad de la ordenación de una prefectura de Egipto siempre revestida de excepción. Esta lectura, por tanto, entraba en directa confrontación con la tesis anterior en dos elementos esenciales:

- El alcance de la *Constitutio Antoniniana*: de la anomalía que representaba Egipto podía inferirse la posibilidad de que comunidades sin ciudadanía reconocida pudieran adquirirla en el 212 a.C. Ello animó el debate sobre si el edicto del emperador se imbricaba en un proyecto reformador con vocación universal, tal y como finalmente se asentó en la historiografía a partir de las numerosas alusiones textuales sobre esta intencionalidad (D. Cass. 77, 9, 5; *SHA, Vita Severi* 1, 2; *Dig.* 1, 5, 17; *Aug. Civ. Dei* 5, 17; *vid.* Bernario, 1954, 188-189).
- La naturaleza de la condición *dediticia* como figura con carácter comunitario o personal, ante la incongruencia que representaba la denominación de *civitates stipendiariae/dediticiae*, compuestas por personas que no tenían capacidad jurídica para constituirse en tales<sup>23</sup>.

Desde este momento surgieron dos grandes corrientes interpretativas que fueron completando su contenido. Por un lado, la que arranca con Mommsen y que, lógicamente, gira en torno a la historia constitucional comunitaria de las *civitates dediticias* y *estipendiarias*, como dieron cuenta los trabajos posteriores de Segrè (1922) y Capocci (1925)<sup>24</sup>. Por otro, los que fueron definiendo la condición *dediticia* como figura jurídica con rasgos propios y aparece sólo en determinadas circunstancias, dentro de un largo proceso de transformación diacrónica al que se van sumando nuevos conjuntos: latinos junianos a partir de la *lex Aelia Sentiae* (Stroux, 1933), “bárbaros” emigrados asentados en comunidades a las que no pertenecen según la muy discutida

<sup>22</sup> Los sujetos sometidos a *epikephalia* se corresponden con la población helenizada de Egipto que sí había disfrutado de la concesión de ciudadanía romana con el edicto según pudo comprobar en su estudio.

<sup>23</sup> Por ejemplo, Jones afirma: “Strictly speaking *civitates dediticiorum* is nonsense, since *dediticii* were *ex hypothesi* persons without political rights” (1936, 225).

<sup>24</sup> Intentaron salvaguardar el modelo de Mommsen relacionando la expresión *politeumatōn* con la inmediatamente posterior de *pol[is] ton [de]deitikon*. En el papiro se hace una matización, afirmando que se confería la ciudadanía romana a todos aquellos ciudadanos que ya contaran con una (*politeumatōn*), y dentro de esta catalogación estaban insertos los *dediticii*, si bien como grupo excluido. De tal forma que los *dediticii* referidos en el *P. Giessen* harían referencia a una condición comunitaria que debía identificarse con las *civitates stipendiariae* no promocionadas con el edicto. Otra propuesta posterior de interés puede encontrarse en Seston y Euzennat (1961). Para estos autores la comparación del fragmento de *P. Giessen* 40 con la fórmula de la *tabula Banasitana*, donde se otorga *civitatem romanam, salvo iure Gentium, dedimus*, debe conectarse con esquemas peregrinos, con el fin de garantizar “à tout pèlerin que rien ne sera changé pour lui quel qu’il soit, où qu’il soit, en raison de sa dignité nouvelle de citoyen romain. Ainsi les habitants de la *chora* égyptienne, tout comme les Berbères du Rif, seront des citoyens romains” (1961, 321).

tesis de Bickermann (1926), bárbaros enrolados en el ejército y personas con relaciones de dependencia directa respecto al Estado (normalmente relacionados con formas de tenencia sobre *ager publicus* y labores en templos) como habría ocurrido en Egipto (Jones, 1936, 227-235). Una visión intermedia puede apreciarse en el estudio de Radin sobre las campañas de César en Galia (1916), en donde tras la *deditio* algunas poblaciones “permitting local autonomy” *de facto*, a la manera de Mommsen, como habría ocurrido en la mayor parte de las ocasiones, pero reconoce también casos particulares en que se reconoce *suis legibus uti iubere e iura legesque reddere* (vid. Caes. BG. 1, 45, 3). No relaciona sin embargo esta segunda posibilidad con las *civitates* estipendiarias, sino más bien con ciudades libres cuyas obligaciones son sólo de carácter moral con respecto a Roma (1916: 27-33).

En algunos artículos de la investigación reciente todavía se mantienen las resonancias de esta doble vertiente interpretativa, todavía no resuelta, como puede observarse en Mastrocinque (2008) y Sastre (2003; *cfr.* Brunt, 1981: 166-170), respectivamente.

Retomando los escenarios elegidos para comprobar el dominio patrimonial en el horizonte de las provincias romanas durante estas décadas debe destacarse el caso de África. La ordenación de esta provincia fue el resultado de una excepcionalidad post-bélica que nace por la beligerancia de Cartago hacia Roma durante las guerras Púnicas. El fin de la contienda bélica el año 146 a.C. se saldó con la destrucción de Cartago, una decisión simbólica que, en plano jurídico, suponía la abolición de la comunidad preexistente. En lo que atañe a la condición jurídica del suelo provincial es interesante, en primer término, una primera equiparación entre el *ager privatus vectigalisque* que aparece en la *lex agraria* del 111 a.C. dentro de los capítulos dedicados a África (vid. l. 2, 49 y 66) y el *ager quaestorius* por parte de Mommsen. Ante el modelo tradicional de administración imperial la convivencia de los dos adjetivos (*privatus vectigalisque*) suponía una contradicción al ser términos auto-excluyentes como hemos visto. Sólo cabía reconocer en esta singularidad, por tanto, una venta estatal *ex lege quaestoria*, característica de las asignaciones coloniales, y que en principio continuaba siendo *ager publicus* (vid. Mateos, 1999: 96, n. 314; Roselaar, 2008: 580-581) como aparece en los dos únicos casos en que se conoce con mayor certeza: parte del *ager Sabinus* (Sic. Flacc., *De cond. agr.*, Th., 100=La. 136.8) y del *Campanus* (Liv. 28, 46, 4). A efectos prácticos, el *vectigal* sería una cantidad irrisoria como indicativo simbólico de la titularidad pública, como habría ocurrido con el *ager trientabulus*<sup>25</sup>, pero que funcionaría como dominios privados. Se habla en estos casos de un “*vectigal* nominal”

---

<sup>25</sup> Según la narración de Livio (31, 13, 2-9), el endeudamiento del Estado durante las guerras contra Cartago, en un contexto de inminente conflicto con Macedonia, impedía al erario público devolver lo prestado a sus acreedores privados. Al no poder cumplirse el tercer plazo de la devolución, contraída durante los consulados de Marco Valerio y Marco Claudio el 210 a.C., se concedió el disfrute de tierras públicas en Italia, denominado *ager trientabulus*, por la minúscula cantidad de un as por yugada como sustitutivo del pago en metálico de la tercera parte prestada. En el caso del *ager privatus vectigalisque* la *lex agraria* parece fijarlo en un sestercio: *Queique ager locus ita ex h(ac) l(ege) datus redditus erit, ei, quoui ex h(ac) l(ege) factus erit, HS n(unno) I emptus esto, isque ager locus privatus vectigalisque [...]* (l. 66).

como instrumento del Estado para asegurar sus propiedades y, en caso de necesidad, poder sustraerlas sin tener que dañar dominios garantizados por el derecho quirritario.

La otra posibilidad, ya planteada por Weber, reconoce en el *ager privatus vectigalisque* africano un régimen enfiteútico que él mismo denomina como *vectigal real*. En este caso, a diferencia de Mommsen, considera que el gravamen sería por tanto una parte proporcional en función de la producción, que se habría tasado mediante una *aestimatio* previa apoyada en un fragmento de Livio: *consules agrum aestimatueros et in iugera asses vectigal testandi causa publicum agrum esse imposituros* (Liv. 31, 13, 7). Esta otra vía interpretativa, sin ánimo de transgredir tampoco el modelo mommsiano como él mismo reconoce (Weber, 1891: 112-13), plantea otra fórmula jurídica que no menoscabe el carácter patrimonial del dominio político. El origen de esta figura no debería para Weber adscribirse a la singularidad de África, sino a un producto mixto que representa la transición del sistema agrario gracano al proceso de privatización de la legislación que se promulga en los años siguientes. En concreto, la apreciación de este *vectigal real* debería ubicarse en el pequeño lapso de tiempo que separa la *lex Thoria* (119/118 a.C.) de la *lex agraria* del 111 a.C. Una vez acabado con el carácter inalienable de las tierras repartidas por la comisión triunviral según había establecido la *lex Sempronia*, la *lex Thoria* establecía un *vectigal real* que respaldaría jurídicamente una tenencia ahora perpetua, hereditaria e intercambiable. Sólo sería la *lex agraria* del 111 a.C. la que habría de distinguir la situación de Italia con la de las provincias como África al abolir dicho *vectigal* en el caso itálico, convirtiéndolo en base material para su futura proyección jurídica *ex iure Quiritium*. Por esta razón Weber prefiere hablar aquí de enfiteusis en vez de *ager quaestorius*, pues se habría mantenido un *vectigal real* que, por módico que pudiera ser, mantenía la dicotomía del dominio directo del Estado, con el dominio útil y precario del enfiteuta<sup>26</sup>. Huelga señalar que los adscritos posteriormente a la teoría patrimonialista del suelo provincial han entendido que el disfrute del suelo provincial, al ser *ager publicus* en su totalidad, habría sido posible gracias al régimen del *ager privatus vectigalisque*, en donde el uso era posible gracias al pago de una renta al Estado (De Martino, 1979).

En este estado de la cuestión aparece la interpretación de Frank que, recordemos, debe encuadrarse en otro orden de análisis donde “the *ager publicus* is always kept distinct from the tributary lands which are nowhere spoken or treated as a Roman possession” (1927a, 144). Frente a la ambigüedad que reflejan los intentos interpretativos de Mommsen y Weber, Frank busca nuevamente dotar de una lógica en la ordenación de la provincia que absorba las distintas manifestaciones sin tener que recurrir *a priori* a relaciones patrimoniales para el periodo republicano. Así pues, como más tarde observará detenidamente buena parte de la investigación, la *redactio in formam provinciae* de África se imbrica en un proceso de apropiación, redistribución,

---

<sup>26</sup> La crítica posterior reconocerá en la enfiteusis un régimen de propiedad tardío, sólo existente como figura jurídica real en el derecho post-clásico. Por otra parte, se consideran también por la historiografía posterior otros recursos sin necesidad de recurrir a la enfiteusis, como demuestra el desarrollo que se observa en el *ius in agro vectigali*, hereditario en la práctica (Ducos, 1999) e incluso mediante *locationes* de *ager vectigalis inter vivos* transmitiendo asimismo el impuesto asignado (Grelle, 1963, 8-9).

arrendamiento y devolución de tierras en distintos momentos. Quizás porque de forma tácita el *ager privatus vectigalisque* africano no es considerado por el autor como indicativo del suelo provincial ordinario (*vid.* 1927a, 146, n. 3), no se da la circunstancia de evaluar el tratamiento como dominio-propiedad sobre los conquistados. Es sintomático que lo que había sido considerado hasta entonces el nudo de la cuestión para el caso África, tiene un valor muy secundario para el autor estadounidense. Ya fuera el *ager privatus vectigalisque* un constructo derivado de una *locatio censoria*, una venta *quaestoria* o enfiteusis, sólo se circunscribiría a un régimen de propiedad-posesión sobre el *ager publicus* de una pequeña parte de la provincia y, por tanto, sin incidencia alguna en la conformación de la doctrina patrimonial del suelo provincial. Por el contrario, identifica en otro episodio de la provincialización africana un problema jurídico cuya resolución sí constituye para Frank una *conditio sine qua non* del posterior *dominium*-propiedad, que sitúa a partir de Claudio. Se trata en este caso de la guerra en época de Tiberio contra los nómadas africanos liderados por Tacfarinas y de la que nos informa Tácito (*Tac. Ann.*, 3, 73-74; 4, 22-24). El objetivo de Tiberio, a diferencia del proyecto colonizador augusteo (*RG* 28, 1), buscaba establecer un domicilio fijo a estas poblaciones nómadas con una doble función: fiscal y pacificadora.

Si rescato este pequeño fragmento de su disertación sobre el tema es porque representa a mi modo de ver una importante novedad metodológica que no he apreciado en otros autores del periodo. Ya fuera de forma consciente o inconsciente, incorpora por vez primera los patrones de poblamiento y el sistema social como argumento del que poder extraer conclusiones sobre el estatuto jurídico relacionado con sus suelos de ocupación, aunque éstos sean más deudores de las referencias clásicas que de estudios sistemáticos del territorio. En este pasaje son varias las ocasiones en que Tácito enfatiza la movilidad de estas poblaciones, acostumbradas a un modo de vida itinerante, ganadero y con la necesidad de incursiones eventuales de rapiña, pero sin más especificaciones. En cierto modo, la descripción de la anatomía socioeconómica de este grupo es semejante a la recogida por Estrabón en los capítulos dedicados a la conquista de los lusitanos, entre otros muchos casos (3, 3, 5; *vid.* Sayas, 1989b). Sin embargo, la diferencia esencial se da en la relación que existe con el medio: al ocupar en este caso terrenos desérticos exentos de sedentarización, puede identificarse un territorio de actuación circunscrito a esta forma de vida aunque la ocupación sea cambiante e irregular. Si bien en la narración se personaliza la acción bélica mediante el liderazgo de Tacfarinas, resulta improbable reconocer una coordinación estructurada y efectiva que aglutine a este conjunto de poblaciones móviles como unidad política. Esta suma de condicionantes hace pensar a Frank que, por vez primera, la ordenación jurídica de estos territorios sometidos tras la victoria romana requiere actuar sobre *territorium* que se concibe como *res nullius*, hecho que imposibilita una interlocución en el proceso de *deditio* (1927a, 160-61). De este modo, la administración romana se habría visto forzada a adoptar una solución más cercana a los esquemas patrimoniales al actuar sobre un territorio que no se circunscribía a ninguna entidad o comunidad específica. Para ello, incluso se atreve con una comparación con el problema jurídico que representó en época moderna el asentamiento de población sudafricana en los territorios de los nativos americanos tras la guerra de los Boer (1927a, 160).

De igual manera, su explicación sobre los cuatro grandes grupos de tierras africanas según su expediente<sup>27</sup> tampoco está exenta de algunos condicionantes materialistas, economicistas y ecológicos que se alejan de las normas habituales de análisis. Así por ejemplo, Frank identifica el patrón predominante que define los *agri redditii* africanos en manos de peregrinos con las zonas con una orografía más accidentada, como el amplio territorio que se extiende entre Vaga y Thugga, con más precipitaciones pero con suelos superficiales, inclinados y vulnerables a la erosión. Por el contrario, la primera política de colonización gracana habría seguido una apropiación selectiva de las mejores tierras, no siendo hasta época de Mario cuando, forzados por la presión coercitiva y la necesidad de asignaciones a veteranos, las fundaciones sobre *ager publicus* se extiendan por estas zonas menos acondicionadas pero aprovechables mediante la construcción de sistemas de terrazas y bancales (1927b, 84).

Hasta entonces hemos visto cómo la lectura descriptiva de los pasajes clásicos había constituido una verdadera rémora que imposibilitaba un análisis jurídico con una mayor profundidad de la que podía desprenderse de las lacónicas referencias textuales. La obra de cinco volúmenes *An Economic Survey of Ancient Rome* (1933-38) dirigida poco después por Frank, y que viene a completar su obra *An Economic History of Rome* (1927b), pero con un fin más compilador, debe insertarse en esta misma línea divergente. Por supuesto, todavía no puede exigirse un enfoque que integre los hechos descritos con las emanaciones sociales que pueden apreciarse a escala local y regional en el territorio, cosa que para el caso africano no aparece antes del estudio de Piganiol (1954). Pero lo cierto es que estas nuevas aportaciones, por modestas y deterministas que puedan parecer, en su intento por matizar desde parámetros positivistas las bases de conocimiento, propusieron a su vez algunos elementos sobre los cuales se articulará la crítica profunda a la modelización fiscal decimonónica en la segunda mitad del siglo XX.

Con el fin de ilustrar esta nueva tendencia, y a modo de conclusión, puede ser representativa la opinión desarrollada por Sherwin White en su artículo “Geographical Factors in Roman Algeria” de 1944, donde reivindica el estudio exhaustivo sobre las suposiciones que ya se había aventurado a elucubrar Frank para la provincia africana y que, a mi modo de ver, resume el agotamiento de un modelo sobre el siempre conflictivo y complejo proceso de provincialización romana:

We have acquired a pin-point knowledge about specific places, but the life of the towns has not been related to the life and nature of the country. There has also been a tendency to write not about the life of the towns but about their constitutional history. It is not an adequate summary of a province's life to establish that at a certain date it contained a certain number of Roman colonies, *municipia* and municipalities with Latin rights. These are but the forms clothing a certain development of social, economic, and political activity. The weakness of such methods is that they neglect human geography (Sherwin-White, 1944, 1).

---

<sup>27</sup> Una pequeña minoría de lo que denomina simplemente “private tax-paying property” en referencia al *ager privatus vectigalisque*; tierras estipendiarias explotadas por poblaciones que se mantienen en la *peregrinitas*; las grandes propiedades de 200 *iugera* de la colonización gracana y, por último, los *agri* con contratos quinquenales de arrendamiento por *locatio censoria* (Frank, 1927b, 83-86).

## **2.3 La construcción de la alternativa teórica. Consecuencias metodológicas.**

En la segunda mitad del siglo XX, bajo la mediación de la caída de los grandes imperios europeos, se impusieron nuevas formas de comprensión de la naturaleza de la dominación romana sobre su territorio. Y es que si algo pudo aprenderse de la experiencia contemporánea post-colonial fue lo prescindible que había resultado la absorción territorial efectiva cuando los nuevos sistemas de control y explotación social y económica sobre estos países, ahora emancipados, mostraban una eficacia sin precedentes. Bastaba una política injerencista, oportuna, dirigida a operaciones de mantenimiento de la dependencia, ahora consolidada sobre nuevos factores: más geopolíticos y económicos, menos territoriales e institucionales. Resultaría arriesgado evaluar la capacidad de sugestión del presente en el análisis histórico de forma mono-causal, pero sin duda pudo favorecer el contexto para el fin del paradigma dentro de los cauces de la ciencia normal. Como veremos en las siguientes páginas, la ruptura de la visión monolítica (y monopolística) del Estado dará paso a nuevas perspectivas y métodos de aproximación que, dejando a un lado la dogmática subyacente al modelo patrimonialista y unidireccional, nacen de una nueva consideración de la redes de poder y de dominación que integra a los subalternos en su tejido. Dada la inabarcable producción científica que se desarrolla en estas décadas he optado por sintetizar el contenido según las principales líneas temáticas con el fin de mostrar sucintamente esta pluralidad de enfoques. Con este objetivo, un primer apartado abordará la reacción que se produce en el ámbito de las estructuras ideales de funcionamiento, es decir, de la revisión a las bases del derecho romano regulador de un marco administrativo general. En el segundo sub-apartado se sintetizan las consecuencias teóricas derivadas de las aportaciones pluridisciplinarias, con especial atención al desarrollo de unos estudios territoriales que sólo serán posibles gracias al reconocimiento de un registro arqueológico no hipotecado, con entidad suficiente en la que sustentar el concepto mismo de territorio y, finalmente, el de paisaje.

### **2.3.1 Las *civitates peregrinae* en los nuevos esquemas de ordenación jurídica.**

Los autores que con anterioridad se habían ocupado del proceso de provincialización romana eran plenamente conscientes de las diferencias que radicaban entre las sociedades modernas y antiguas. De hecho, casi siempre se produce en algún determinado momento de la narración una justificación que advierta sobre esta distancia insalvable y enfatice la necesidad de no equiparar procesos históricos distintos. A pesar de todo, los sesgos en la concepción del dominio sobre las provincias prevalecieron, aunque fueran más una consecuencia de algunas omisiones interpretativas, de presunciones que se dan por supuestas, que de una lectura consciente e intencional por establecer extrapolaciones. Probablemente motivado por esta situación A. H. M. Jones



aporta la primera crítica explícita al paradigma en su influyente artículo “*In eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris*” (1941), que bien puede considerarse pionera en la enmienda a la totalidad de las siguientes décadas. La frase que da comienzo al artículo es representativa del tratamiento hasta entonces dado a un concepto de *dominium* “taken far more seriously in modern, than it ever was in ancient times” (1941: 26), pues a pesar de no ocupar un lugar destacado en la jurisprudencia clásica, se había revestido de una importancia capital para autores modernos que habían encontrado en él un vehículo de reflexión sobre preocupaciones actuales. En unas pocas páginas el investigador británico plantea una serie de interrogantes sugerentes en torno al suelo provincial como territorio de anexión del Estado, que ya con anterioridad había considerado “difficult to believe” (1936: 229). Observa que esta asimilación estatal del suelo no encuentra mayor apoyo en las fuentes que las escuetas sentencias de Gayo (*Inst.*, 2, 7; 21) pero que sin embargo daba lugar a un esquema teórico con profundas implicaciones. En su revisión sobre las controvertidas citas de Gayo, Jones encuentra una contradicción hasta entonces obviada: el límite que se establece a la hora de poder convertir un lugar en *sacer* o *religiosum* resulta de la capacidad jurídica del *populus* y del *cives* romano respectivamente. En la célebre cita gayana afirma que el suelo provincial no puede ser convertido en *religiosum*, sino *pro religioso*, es decir, *como si* fuera religioso pero sin serlo a efectos jurídicos. Lo mismo ocurriría en los territorios *non ex auctoritate populi Romani*, que tras ser consagrados tan sólo adquirirían un tratamiento *pro sacro*. Esta situación había sido relacionada, como vimos, con formas de propiedad provincial inalienable y encontraba su acomodo en la afirmación gayana del *ager provincialis* como *nec mancipi* (*Inst.*, 2, 27). Pero esa circunstancia no supone ningún problema para Jones, ya que en su opinión no tiene por qué extraerse de la incapacidad de enajenación una forma de propiedad estatal como se ha había pensado, sino precisamente lo contrario: el reconocimiento de un *solum peregrinarum civitatum*<sup>28</sup> (1941: 30). Para argumentar su propuesta se basa en dos aspectos.

El primero es la ambigüedad que domina este fragmento. Mientras parece claro que el “suelo religioso” en suelo provincial supone una incapacidad que extralimita el contenido del *ius civile*, Gayo deja abierta la cuestión sobre qué carácter tienen aquellos territorios aparentemente fuera del alcance jurisdiccional del *populus* y que, a lo sumo, podían ser *pro sacra*. La explicación de Jones parte de la crítica a la funcionalidad de las *Institutiones*, que no tendrían una vocación normativa global para el autor británico, sino dirigida a dilucidar problemas relativos al acceso de la propiedad privada por ciudadanos romanos que, fuera de Italia, parecen encontrarse en cierta situación de desamparo jurídico, sólo al abrigo del *ius gentium* sobre *solum peregrinarum*. Por tanto, puede apreciarse ya una relectura global del significado y la funcionalidad de la obra, más tarde desarrollada por otros autores (Grosso, 1974; Giliberti, 1996), y en la que se distancia del contenido normativo, legal y procesual de carácter sistemático que había

---

<sup>28</sup> La postura de Jones respecto a los expedientes del suelo entra en consonancia con las ideas que ya había expuesto sobre las comunidades peregrinas *pleno iure*: “it seems to me probable that by the grant of autonomy provincials ceased to be *dediticii* and became ordinary peregrine. The autonomy of the provincial communities was not merely 'tolerated'” (1936: 229).

condicionado hasta entonces su análisis. Una solución a este vacío cree encontrarla en una de las cartas escritas por el emperador Trajano a Plinio el Joven:

*Potes, mi Secunde carissime, sine sollicitudine religionis, si loci positio uidetur hoc desiderare, aedem Matris Deum transferre in eam quae est accommodatior: nec te moueat quod lex dedicationis nulla reperitur, cum solum peregrinae civitatis capax non sit dedicationis, quae fit nostro iure*<sup>29</sup> (Plin. Ep., X, 50).

La afirmación autorizada del emperador soluciona algunos de los elementos que habían quedado dispersos mediante un *solum peregrinae civitatis* que no se articula internamente según *nostro iure* como debería esperarse si existe una propiedad patrimonial. Por el contrario, parece congruente pensar que existe una diferencia cualitativa en los estatutos jurídicos del suelo provincial que escapa de la condición de ciudadanía<sup>30</sup>. De haberse producido una extensión del *ager romanus* (según Jones caracterizado por formas de propiedad *ex iure Quiritium* exentas en tanto en cuanto no se aplicó el *tributum ex censum* desde Augusto) que acompañara la promoción de *municipia* y la fundación de colonias, las consecuencias financieras hubieran sido difíciles de asumir para Roma. De ahí que la *mancipatio* e *in iure cesio*, procedimientos habituales en la compraventa de propiedad quiritaria, no puedan ser un medio de intercambio jurídicamente apropiado, como tampoco lo es la consagración de lugares ajenos al *ager romanus* y la adquisición por *usucapio*. Si más tarde pudieron producirse controversias derivadas del *ius adispiscendae civitatem romanam per magistratum*, que externaliza la producción de ciudadanía romana en municipios y colonias de derecho latino asentadas en *ager provincialis* (a excepción de aquellas, las menos, con *ius Italicus*), ésta sería la preocupación esencial de autores como Gayo.

En segundo lugar, Jones pone en evidencia algunas de las limitaciones interpretativas del modelo tradicional en su definición de los derechos reales y el concepto de *dominium*, pues en ámbito provincial se resolvería mediante *traditio* sin posibilidad de *usucapir*. Se pregunta entonces, desde el prisma del *ius civile*, qué ocurriría con el *dominium* en ámbito provincial cuando se produce una concatenación de *possessiones in bonis* por personas distintas a lo largo del tiempo. Ante la transmisión de la propiedad de unos a otros sin la intermediación del dueño a efectos jurídicos, el *dominium* parece disolverse y desaparecer (1941: 29). En cualquier caso, la transferencia de una concepción todavía poco desarrollada de los derechos reales hace que las dudas continúen rodeando la cuestión de la titularidad patrimonial *populus Romanus* a la manera de las relaciones de propiedad de *res corporales* en ámbito privado. Este condicionante, que refleja los mecanismos más estereotipados del

---

<sup>29</sup> “Puedes, mi queridísimo Segundo, sin preocupación por los escrúpulos religiosos, trasladar el templo de la Madre de los Dioses al lugar que sea más adecuado, si te parece que su emplazamiento lo reclama: no te perturbe el hecho de que no se encuentre ningún acta de consagración, pues el suelo de una ciudad extranjera no necesita una consagración, como la que se hace conforme a nuestro derecho” (trad. de J. González, 2005).

<sup>30</sup> Esta disociación fundamental entre los expedientes personales y fondiarios hará posible, por ejemplo, que algunas décadas más tarde pueda afirmarse que la difusión del *ius Latii* con el Edicto de Vespasiano *ab universis Hispaniae* del 74 a.C. (Plin., *NH.*, 3, 30) carezca de implicaciones directas en los regímenes del suelo (D’Ors, 1974: 256).

Derecho Romano, todavía carece de las armas necesarias para reconsiderar la naturaleza misma del *dominium*.

El guante lanzado por Jones es recogido por otros estudiosos del Derecho Romano entre los que sobresale Luzzato pocos años más tarde. En su influyente artículo “La riscossione tributaria in Roma e l’ipotesi della proprietà-sovrانيتà” (1953) critica también la pretendida permisividad o tolerancia *de facto* del Estado romano para explicar la diversidad organizativa de las *civitates* sometidas a él y apreciar sus peculiaridades fiscales y de ordenación jurídica y financiera. La innovación en sus reinterpretaciones del marco administrativo y tributario desde un enfoque territorial amplio se produce para el periodo de la República romana fundamentalmente. Respecto al imperial no supone grandes novedades tras reconocer el manido dominio eminente sobre las provincias, que sitúa en el comienzo del Principado como ya había aventurado Frank<sup>31</sup> (1927a). Para lo que nos interesa, los aspectos más innovadores en el plano metodológico se encuentran a nivel metodológico en su obra *Roma e le province* de publicación póstuma, en donde dirige su mirada a las genuinas formas en que el dominio romano se expresa como elemento que mediatiza toda práctica política, social y económica. Aparta a un lugar secundario las citas de Gayo, que considera “un tentativo di costruzione isolato, e piu o meno felice” sin ecos en fuentes contemporáneas ni posteriores (1985: 35). El peso que habían adquirido sus pequeños asertos había dado como producto un escenario homogéneo de sometimiento provincial, una estructura demasiado rígida como para poder explicar un imperio diverso que encuentra en cada caso una situación singular a la que debe adaptarse. Ante este estado de conocimiento, su análisis provincia por provincia busca demostrar la inutilidad de los enfoques puramente binarios que dejan sin espacio la posibilidad de desarrollo a figuras intermedias: Oriente y Occidente, Italia y *ager publicus* provincial. Para ello integra las fuentes clásicas con los testimonios que hablan de estructuras locales en el medio epigráfico y arqueológico sin apriorismos distorsionadores y con una actitud más dialéctica en la comprensión de los procesos históricos. Estas nuevas premisas suministran un marco flexible que dota de una relevancia renovada a las relaciones políticas bidireccionales en términos de praxis posibilista. Como más tarde defenderá también Badian en su famoso *Foreign clientelae* (1958) las relaciones de poder y dependencia caen a menudo en una vertiente difícilmente explicable desde los modelos osificados de control territorial vertical:

Tra i diversi tentativi di spiegazione, il riferimento al principio della personalità delle leggi sembrerebbe meglio giustificare la persistenza degli ordinamenti e degli aggregati locali nell'ambito dei grandi imperi dell'antichità: purché però si intenda il principio in questione, più ancora che come un criterio rigidamente giuridico (e che rimane tale nei rapporti privatistici e nei conflitti nascenti dalla coesistenza di ordinamenti giuridici diversi) come un indirizzo politico, e come il portato di una determinata realtà storica, suscettibile di adattamenti e modifiche in funzione delle particolari situazioni concrete e delle necessità nascenti dalla convivenza tra le diverse nazionalità dell'impero (Luzzato, 1985, 33).

---

<sup>31</sup> Desde su perspectiva el cambio más significativo se habría producido con la anexión de Egipto al ser el primer reino absorbido que cuenta previamente con un catastro fondiario regularmente actualizado sobre el que fijar la imposición fiscal (1985: 35).

Los puntos esenciales que Luzzatto rescata de la tesis de Jones pueden, por tanto, resumirse en dos: la importancia silenciada en la historiografía moderna del *solum peregrinarum* “oggetto di una proprietà peregrina, considerata come tale anche dal punto di vista giuridico” (1985: 45) y el carácter excepcional del establecimiento del *ager publicus* como instrumento político de injerencia patrimonial directa en los dominios provinciales (*ibidem*). La *deditio* para Luzzatto ejemplariza, en síntesis, un punto de arranque con variantes múltiples en vez de constituir el comienzo de una condición jurídica inamovible. Por ejemplo, en los capítulos dedicados a *Hispania* (1985: 58-67) el desarrollo de la conquista se salda con un escenario marcado por abusos económicos y manifiesto desinterés por las formas organizativas locales, mientras se producen las primeras fundaciones colonitarias, normalmente con una vocación de control militar sobre el territorio (*Valentia, Corduba*, etc.). La recolecta extraordinaria en este primer periodo se realizaba para Luzzatto bajo el procedimiento de la *frumentum aestimatio*, *frumentum emptum* (comprado) y *frumentum imperatum*, apoyándose en Livio (29, 3, 5) y Apiano (*Bell. Hisp.*, 54) y basado en la estructura política de las redes clientelares, sobre todo a partir de Sertorio. Pero para Luzzatto fue la minería lo que verdaderamente atrajo la atención de Roma y marcó las pautas de su organización provincial, primero gestionada a través de *privati* y, en el caso del Noroeste, mediante dominio patrimonial tras su confiscación y división en distritos mineros<sup>32</sup> (1985: 337-339). La explicación de cómo se recaba la tributación fondiaria de época imperial va de la mano de los presupuestos de la *romanización* cultural en su sentido más clásico mediante el proceso de urbanización, ya fuera municipalizante o colonizadora, según el grado de aculturación hacia el *ser romano*. El abrazo a la *romanidad* termina por afectar los modos en que la sociedad se organiza, en que institucionalmente se representa, en que concibe su espacio y su suelo, y en fin, también en las formas progresivas en que tributa como réplicas a pequeña escala de la propia Roma. Donde no se reproduce esta adaptación al modelo romano, el Estado romano debe implicarse estableciendo un control personal. A pesar de lo novedoso de algunos de sus presupuestos teóricos continúan manteniéndose algunos de los antagonismos gayanos, como la dicotomía de las provincias senatoriales e imperiales, paulatinamente gravadas “direttamente sul suolo e sui singoli proprietari fondiari” tras la experiencia aportada por Egipto (1974: 21; 1985: 249), a veces complementado con el *tributum capitis* (1985: 250). No trata la situación de las *civitates stipendiariae* de un modo preferente, tan sólo advierte de su equiparación con las ciudades libres gracias a la autonomía interna en su organización, dejando al margen las diferencias en sus obligaciones tributarias. Así sería el caso del Noroeste según se desprende de algunas referencias directas. La pervivencia de sus *oppida* castreños entra en consonancia con un interés puramente económico sobre la minería, por lo que la ordenación de estos territorios parece pasar de puntillas sobre sus formas atávicas de organización social, con la salvedad del tan comentado pasaje de Floro sobre “bajar al llano” (2, 33, 52;

<sup>32</sup> Una crítica posterior sobre el carácter no sectorial de la minería del Noroeste en relación con los llamados distritos mineros puede verse en: Orejas (1996: 181-184), Sastre, Beltrán y Sánchez-Palencia (2010: 119).

Luzzatto, 1985: 336; *vid.* Sastre y Domingo, 2008: 507-8). Desde la perspectiva puramente cultural se obvia en ocasiones los factores que intervienen en el dibujo de una sociedad conformada por entidades socioeconómicas desigualmente representadas pero que marcan, sin embargo, los parámetros sobre los que pivota la argumentación en torno al cambio social. La transmisión de este tipo de esquemas culturales como elementos vectores del cambio en el Noroeste ha sido, en última instancia, la causa profunda de la relativización del impacto romano en el siglo I d.C. ante la supervivencia de una cultura castreña marginal, rural y atrasada frente al *progreso*, que sólo parece empezar a agotarse a partir del edicto de Latinidad de Vespasiano (Tranoy, 1995-96: 31).

De forma paralela a la visión de Luzzatto, se publican además en estos años nuevos trabajos que la complementan, dirigidos a dilucidar cuáles son los patrones del comportamiento de Roma respecto a los sometidos tras la rendición desde diferentes ángulos intrínsecamente ligados entre sí y con su consiguiente desarrollo teórico en la historiografía posterior:

- Los cambios detectados en las relaciones diplomáticas a partir del denominado *modified fetial procedure*, que transmuta el orden del procedimiento heredado del sacerdocio, en el que anteriormente era el senado y el pueblo romano quienes decidían antes del envío de legati<sup>33</sup> y éstos se limitaban a cumplir sus órdenes (Walbank, 1949; Macdonald y Walbank, 1937: 192-97; Oost, I. 1954). Esta modificación implicaba capacidades de decisiones *ad hoc* por parte de los legados en el proceso de conquista y en la ordenación posterior al contar con una mayor experiencia y conocimiento de la situación local que los órganos centrales de poder. Este elemento, aunque sólo de forma secundaria, pudo fomentar sin duda el enfoque más flexible al que nos referíamos, siempre oscilante entre la teoría y la praxis.

---

<sup>33</sup> El nuevo orden establecido a partir del 172-171 a.C., en pleno contexto de expansión imperialista, sería el siguiente: *senatus censet, populus iubet, res repetuntur* (por *legati*), *bellum denuntiatur* (por *legati*) y *bellum indicitur* en Roma (rito fetial). El cambio de los *fetiales* con funciones diplomáticas por la comisión de *Xviri* se habría producido ya con la *indictio belli* contra Pirro a finales del siglo III a.C., como ya observaron Mommsen y Wisowa (*vid.* Walbank, Macdonalds y Walbank, 1937: n. 87). Wiedemann (1986) se opuso más tarde a la visión de Walbank, Macdonalds y Oost mostrando su escepticismo sobre la eficacia de las leyes fetiales como instrumento de contención a la beligerancia romana, y propone que éstas quizás no fueran sino una fundación augustea. Para demostrar la inexistencia del rito *fetial* en época republicana parte sin embargo de una premisa metodológica radical: “Cincius tells us what happened in Augustus’ time; Livy and Dionysius tell us what some people in Augustus’ time thought had happened in the seventh century B.C.” (1984: 479), además de no dar suficiente respuesta a las pruebas aportadas por Oost (1954) sobre las huellas de este procedimiento diplomático durante la guerra contra Jugurta. Estamos más en sintonía, por tanto, con la interpretación de Penella como constructo: “as one perceptive critic put it, this Roman institution struck Livy as “*ideelles Moment* rather than as *historisch-straatrechtliche Detail*” (1987: 237). La exaltación del rito que se produce en época de Augusto (en donde el mismo emperador pudo erigirse en *fetial* con la guerra contra Egipto el 32 a.C.) tiene un sentido pleno en un periodo de recuperación simbólica de las *mores maiorum* y de la visibilidad renovada que requiere la *fides* como vínculo ideológico de sometimiento *in provinciali solo*. La nueva ordenación del territorio provincial, convertido justo ahora en *dominium populi Romani vel Caesaris*, requería una redefinición de la *fides* al ser cualitativamente distinta la relación jurídica con Roma y, por extensión, la naturaleza misma de la imposición tributaria.

- Revisión de la *fides* como instrumento jurídico que marca un pacto vinculante con el Estado romano. Frente al aspecto más ritual y simbólico de las obras precedentes<sup>34</sup>, comienzan ahora a definirse los cambios en su contenido desde un punto de vista diacrónico antes obviados. Así se desprende en primer término del artículo de Heinze (1937; trad. en Ramelli, 2002: 37-65) como primera aproximación al reconocimiento de unas reglas globales sancionadas por derecho. También autores como Bellini se insertan ahora en este grupo crítico con los valores tradicionales de la *fides* y defienden un carácter más flexible: “Dans la mentalité primitive, en effet, la *fides*, conception plurivalente, embrasse tout un ensemble d’aspects, lesquels, à travers l’évolution des idées et la diversification des liens sociaux, donneront à la valeur sémantique du mot des acceptions qui, différenciées du premier complexe indistinct, sont quelquefois profondément différentes entre elles” (Bellini, 1964: 448, n. 3). Este enfoque da pie a nuevas consideraciones sobre el proceso de integración romana, en donde la *fides* se erige en garantía del mantenimiento de la dependencia respecto al poder romano como estrategia predominante sobre los modelos clásicos de dependencia: el mantenimiento de la condición dediticia y las esclavizaciones masivas<sup>35</sup>. El proceso adaptativo y variable que siguió la *fides* fue años más tarde ampliamente estudiado como elemento de un derecho internacional incipiente. En este sentido debe mencionarse a Dieter Nörr, aunque su periodo de interés sea el republicano fundamentalmente. Su obra *Die Fides im römischen Völkerrecht* (1991) descompone mediante numerosos ejemplos cómo la *fides* actúa dentro de los canales de interlocución públicos entre Roma y comunidades de diversa naturaleza, concluyendo finalmente una naturaleza contractual que implica a ambas partes de forma efectiva, aunque las relaciones de poder fueran claramente asimétricas. Esta línea ha sido continuada hasta el presente por diferentes autores, bien apreciando cómo la religión es capaz de somatizar las prácticas bélicas y la ordenación posterior a través de la noción del *bellum iustum* y el desarrollo jurídico de la *Humanitas* (Sini, 2003; Calore, 2003-2004), bien poniendo el acento en la práctica política que ya se intuye en Bellini

<sup>34</sup> Aunque no podamos profundizar en este tema, la teoría tradicional que dotaba de un contenido religioso efectivo al *ius fetiale* entronca asimismo con la versión defensiva del imperialismo romano. Será en esta segunda mitad del siglo XX cuando se produzca el auge de la concepción del imperialismo ofensivo, lo que pasaba (a diferencia de la anterior) por la secularización de diferentes conceptos jurídicos, entre ellos la *fides*, sin presuponer un escrúpulo religioso que nunca se tuvo o que, al menos, nunca llegó a suponer una cortapisa real a las prácticas imperialistas más allá de la instrumentalización política. A pesar de todo, aún se mantienen ambas líneas interpretativas, como demuestra la abundante bibliografía que, hasta la actualidad, mantiene que la *fides* es indisociable de la religión, y no se trata sólo de un aspecto retórico (*i. e.* Boyancé, 1962; Freyburger, 1986: 206-22).

<sup>35</sup> Un síntesis sobre la caracterización previa de la *deditio in fidem*: “*Deditio* was, in theory, nothing more than a multiplication of such individual surrender - a group surrender. It might involve the slavery of the whole group to the conquering group or to the chief of that group, and where it did not that was originally an unconstrained act of clemency” (Radin, 1916: 28).

(Rosenstein, 2007; López Barja, 2007, 275-90; 2011; García Riaza, 2011; 2012; Martínez Morcillo, 2011; 2012; 2013; Gómez, Ñaco, Vidal, 2012). Por último, también se ha puesto de relieve la importancia que adquiere la *fides* dentro de los márgenes del derecho de peregrinos a partir del siempre complicado, por lo fragmentario, *ius gentium*, incluyendo el carácter doctrinal de las relaciones de propiedad en él contenidas (Kaser, 1993, 113 y ss.). La observación de algunos fenómenos aparentemente contradictorios invitaron a la reflexión sobre cómo pudieron interferir las relaciones sociales en las estructuras jurídicas canónicas. Las élites provinciales en ámbitos peregrinos locales parecen no encontrarse tan constreñidas *de iure* como se pensaba, pues cuentan con una base material que flexibiliza las prácticas jurídicas en su diálogo con los poder centrales. El rastreo de algunas pruebas que evidencian la posibilidad de *mancipatio* entre *peregrini*, al menos imitada (D'Ors, 1974: 261), e incluso la adquisición de propiedad quiritaria (Kaser, 1993: 114), así parecerían indicarlo.

Una vez hecho este pequeño paréntesis, sintético pero necesario de cara a una contextualización historiográfica, debemos volver ahora con aquel concepto, el de *dominium*, que habíamos dejado en suspense tras observar su tratamiento por Jones y Luzzatto. En 1963 aparece la influyente obra de Grelle, *Stipendium vel tributum*, que comprende una relectura absoluta en torno a la naturaleza jurídica del *dominium* sobre el cual se establece la imposición tributaria sobre las provincias. Como ha podido apreciarse en las páginas precedentes, hasta esta fecha no se habían propuesto modelos alternativos al clásico para el periodo imperial, tan sólo variantes de un mismo tronco común, aquel que englobaba diferentes formas patrimoniales de relación e interlocución en todas las facetas que regían la vida institucional y económica del *ager provincialis*. Mientras las nuevas reinterpretaciones de los testimonios para el periodo republicano habían suministrado un marco mucho más flexible<sup>36</sup>, el Principado seguía considerándose en la práctica un horizonte uniforme en donde el Príncipe y el Senado contaban con sendos derechos reales sobre las provincias. De una forma más metódica respecto a las sugerencias y apreciaciones de Jones en torno a la ambigüedad de Gayo, el romanista italiano Grelle propuso una definición precisa de algunos elementos que habían participado activamente en la interpretación del texto y cuyo contenido se había dado, en gran medida, por supuesto. Así había ocurrido, por ejemplo, con la relación patrimonial del Senado y el César bajo la apariencia de propiedad quiritaria del suelo provincial, puesto que el *ager publicus* varía de titularidad pero siempre escindido entre dueño legítimo que ostenta el *dominium* (emperador o senado) y el poseedor *in precario* tal y como es característico en los derechos reales entre *privati*. Sin embargo, esta caracterización del *dominium* resulta en contrasentido jurídico cuando se interpola con la definición de *publicus* en el mismo Gayo (*Inst.*, 2, 11). El contenido de lo público se

---

<sup>36</sup> Y sobre el que siguen girando la mayoría de los trabajos actuales, concediendo mayor importancia al elemento logístico de los ejércitos y a la economía de guerra que a la implantación de un espacio ordenado y jerarquizado jurídicamente: *vid.* Ñaco, 2003; 2010-11; Ñaco y Arrayás, 2006; Cadiou, 2008.

aleja de la visión actualista de la bienes públicos en su sentido de aprovechamiento común cuando dice de él *nullius videntur in bonis esse*<sup>37</sup>, mientras el ámbito de aplicación bajo la fórmula quiritaria se circunscribe a personas individuales, *singuli homines* (*ibid.*) y no un colectivo como sería el *populus* (1963: 3-4). Por tanto, el *populus* no puede ostentar tal titulación, de lo que se infiere que el *dominium populi Romani vel Caesaris* se establece conforme a otros términos. Debe señalarse que su argumentación no puede volverse contra sí en forma de crítica cuando se fija excepcionalmente *ager publicus* (fuera o dentro de Italia) y en donde las relaciones patrimoniales son más evidentes, ya que el elemento distintivo entre ambas situaciones lo sitúa en el *ager provincialis*, dentro del cual no se inscribe el *ager publicus*, y que en época de Vespasiano parece ya ingresar en el *patrimonium* del emperador definitivamente (1963: 5-6). En cuanto a la cita sobre la imposibilidad de conversión del suelo provincial en *religioso* (Gai. *Inst.*, 2, 7) concluye de manera semejante a la de Jones, esto es, que aun bajo el *dominium populi Romani vel Caesaris* la incapacidad surge por ser una *inlatio in alienum* y que, desde coordenadas patrimoniales, está *extra nostrum patrimonium* (1963: 7; 9-11).

Las dos grandes esferas de dominio eminente aparentemente basaban su señal distintiva en el vínculo diferenciado respecto al *populus* y a *Caesar*. Ante esta situación, Grelle descompone nuevamente algunos elementos. En primer término, observa que la teoría patrimonialista sólo cobra sentido cuando considera la referencia al *populus* (que acompaña a *Caesar*) en *Inst.* 2, 21 como la masa social de *cives romani* que compone el Estado y ostenta el dominio de las provincias senatoriales. Sin embargo, en otros pasajes Gayo hace una contraposición explícita entre el *populus* con respecto al *Princeps* y el senado (*Inst.*, 1, 95; 1, 98), de donde se infiere que *populus* aquí deba identificarse con los comicios tribados. Está hablando, por tanto, de los diferentes órganos que actúan en la administración del imperio desde límites jurisdiccionales distintos. Cuando se vuelve a repetir este mismo contraste en *Inst.* 2, 21 sobre el suelo provincial, parece más lógico entender de nuevo una alusión a estos *comitia*, única explicación satisfactoria para dar respuesta a la observación que ya había manifestado Jones de que “Caesar's appearance is unexpected and, on any sound constitutional doctrine, inexplicable” (1941: 30). La otra acepción de *populus*, que aparece por ejemplo en *Inst.* 1, 1, sí englobaría a la comunidad romana en su conjunto, lo que incluye tanto a sus ciudadanos como a los distintos organismos que la conforman de un modo u otro; así sería el caso del Senado o el César que, de hecho, no se mencionan en este fragmento al estar integrados en su significado.

Esta torsión interpretativa no es una matización caprichosa, sino la base sobre la que Grelle sostiene su teoría del *dominium* como derechos de señorío de carácter político, lo que marca una ruptura frente al constructo previo basado en la extrapolación del sistema de los derechos reales al ámbito público. De este modo, el tan comentado *dominium est populi Romani vel Caesaris* es un *dominium* no fragmentado, del *populus* en su versión de *civitas romana* que incluye a ambos subconjuntos explicitados y se

---

<sup>37</sup> “están consideradas de no contar en el número de nadie en particular” (trad. de Núñez de Prado, 1965; *vid.* Roselaar, 2010: 15).



extiende por todas las provincias romanas sin distinción (1963: 15). La naturaleza de este nexo de dominación política sobre todas las comunidades dependientes lo encuentra en Séneca intercalando numerosos ejemplos ilustrativos, y cuyo contenido fundamental conviene reproducir en extenso:

En derecho civil, todo es del soberano; y no obstante, todas estas cosas cuya pertenencia universal recae en el monarca, están distribuidas entre muchos dueños y cada cosa tiene su poseedor propio. Así es que podemos dar al rey la casa, el esclavo y el dinero, y no por ello decimos que le damos de lo suyo. A los reyes pertenece la potestad de todas las cosas, y la propiedad a cada uno. Nosotros acostumbramos denominar límites de los atenienses y de los habitantes de Campania unos terrenos que luego los vecinos distinguen por particulares delimitaciones. Todo el territorio es de esta o de esta otra república, pero luego lleva el nombre de su propietario; de manera que podemos hacer donación de nuestros campos a la república, aunque se digan ser de la república, porque bajo un concepto son suyos y bajo otro concepto son míos [...] y con efecto, yo digo que todas las cosas son del sabio en el sentido de que cada cual mantenga su derecho personal sobre sus bienes; no de otra manera que, bajo un buen rey, el rey lo posee todo por derecho de soberanía, y cada poseedor lo posee por derecho de propiedad [...] Con todos estos ejemplos que te cité, dos amos lo son de una misma cosa. ¿Cómo? Porque el uno es amo de la cosa; y otro, de su uso [...] la propiedad de cada uno está repartida individualmente; y puede, por tanto, recibir dones y contraer deudas, alquilar y comprar. Todo pertenece al César, pero el fisco tiene sus propios bienes privados y personales; su propiedad personal contiene el imperio; la propiedad personal, su patrimonio. Sin que por ella su autoridad sufra mengua, se le puede demandar por lo que es suyo y lo que no es suyo; pues aquello mismo de que está desposeído por pertenecer a otro, es suyo bajo otro aspecto [...] todo es de los dioses, pero no todo está consagrado a los dioses (Sen., *Ben.*, 7, 4-7; trad. de Lorenzo Riber, 1966).

El *Caesar omnia habet* (*Ben.*, 7, 6) adquiere unas connotaciones radicalmente distintas para Grelle, asentadas sobre los derechos de señorío político del *populus Romanus* sobre todas las provincias, si bien el creciente poder del emperador terminará por imponerse sobre el poder soberano del *populus* del que, en teoría, emana.

El espectro dinámico que adquieren los sistemas jurídicos incide con especial significación en las formas impositivas que Roma establece sobre los territorios sometidos, dentro del profundo proceso de cambio que la misma Roma experimenta durante su expansión y consolidación como ente político. En concreto, ya vimos cómo las fuentes parecían referirse a dos amplias tradiciones dentro del marco fiscal, que los primeros estudiosos de la fiscalidad romana entendieron como figuras fiscales estables. Por un lado, la que aparece en Cicerón (2*Verr.* 3, 6, 12) en donde el *stipendium* se caracteriza por la imposición de una cantidad fija en natura o especie, mientras el *tributum* hace referencia a la fiscalidad *ex censu* de los ciudadanos romanos según la *classis*, aunque no se exigía desde el 167 a.C. Por otro lado, la fiscalidad provincial que hemos visto en Gayo según el tipo de provincia, con una identidad radicalmente distinta. No hay una hoja de ruta clara que pueda vincular una evolución lineal desde una concepción a otra. Mommsen buscó un nexo de unión entre ambos *tributa* aludiendo a que la coincidencia filológica del *tributum* habría supuesto una sustitución de una realidad por la siguiente (*cfr. supr.*; Grelle, 1963: 19). Es decir, el *tributum ex censu* de la ciudadanía republicana hasta el 167 a.C. se habría trasladado linealmente a

las provincias dependientes del *Princeps* una vez realizado el catastro y el censo de todos individuos que componen las poblaciones sometidas con el *tributum soli* y *tributum capitis* desde su genuina comprensión del Estado romano. En estos casos, habría un vínculo directo entre los *possesores* privados y el Estado que era recogido en el censo a través de las declaraciones personales de todos los provinciales. El *stipendium*, que en origen era el pago legionario recaudado mediante el *tributum ex censu*, se habría institucionalizado recayendo colectivamente sobre comunidades conquistadas que ahora asumían lo que con anterioridad competía a los *cives Romani*. En el Alto Imperio se presume un continuismo de la misma figura fiscal republicana, en tanto que cantidad económica fija impuesta sobre la comunidad pero con, la salvedad introducida por Gayo (*Inst.*, 2, 21): se relacionaría con el tipo de graven propio de las provincias senatoriales, que no estarían sometidas al censo provincial por esa razón. A la hora de analizar este asunto Grelle observa una confusión en diferentes autores que no parecen tener en cuenta la distinción gayana, sino el uso indistinto de ambos conceptos. Aunque no de forma sistemática, recoge diferentes ejemplos que parecen romper con el cuadro dibujado por Gayo, con alusiones a *tributa* en provincias senatoriales. Su análisis de la obra Plinio, que sí recoge ambas variantes, tampoco refleja para Grelle un marco coherente que pueda insertarse en la disyuntiva provincial de Gayo entre senatoriales e imperiales. El paisaje administrativo del naturalista entra más en consonancia con la compilación de fuentes de diverso origen cronológico, desde un afán más enciclopédico que normativo, en donde conviven datos procedentes de la primera ordenación augustea junto a la actualización parcial que se produce en su propio tiempo a partir de época Flavia.

Para Grelle *tributum* y *stipendium* en época altoimperial son, en suma, una hendiadís de elementos sinónimos o complementarios más que compartimentos administrativos cerrados. Sus pequeñas variantes y matices son la manifestación de una realidad provincial cambiante y compleja, nunca homogénea, en donde la diversidad de poderes indiferenciados y la yuxtaposición de expedientes jurídicos diversos dan, como producto, esta imposición fiscal ambigua que destilan las fuentes (1963: 16-21). La diferencia entre concepto y realidad histórica, huelga decir, está marcado por luchas políticas, por intereses enfrentados, que en ámbito tributario encuentran su propia manifestación en las controversias que se producen en los límites jurisdiccionales del *aerarium* y el *fiscus*<sup>38</sup>. El emperador se arroga derechos y competencias que no se aprehenden *de iure* pues, entre otros aspectos, el discurso de las *Res Restituta* y de las *mores maiorum* se mantiene, aun cuando su contenido sea, cada vez más, una entelequia vacía. Los cambios en la gestión provincial a consecuencia del creciente despotismo del

---

<sup>38</sup> Los cambios en la gestión provincial a consecuencia del creciente despotismo del príncipe fueron más tarde ampliados por Baldacci en su artículo “*Patrimonium e ager publicus* al tempo dei Flavi” (1969), con nuevos testimonios que reflejan la asimilación de los *fisci* provinciales con el *fisco* imperial bajo un poder directo del emperador. Para ello se sirve de los monopolios estatales de Judea con una metodología más inductiva, a partir de la cual propone algunas reinterpretaciones doctrinales sobre los textos de la jurisprudencia clásica (1969: 361-364). También en esta misma línea cabe señalar en este periodo el artículo de De Dominici (1964) a partir de un fragmento de Ulpiano (*D.* 1, 16, 9) en donde la jurisdicción en provincias senatoriales parece verse sometida a la autoridad del *Princeps* cuando se trata de *fiscalis pecuniaria causa* y que, en principio, debería contar entre las competencias del gobernador proconsular y vinculado al *aerarium*.

príncipe fueron más tarde ampliados por Baldacci en su artículo “*Patrimonium e ager publicus al tempo dei Flavi*” (1969), con nuevos testimonios que reflejan la asimilación de los *fisci* provinciales con el *fisco* imperial bajo un poder directo del emperador. Para ello se sirve de los monopolios estatales de Judea a partir de la cual propone algunas reinterpretaciones doctrinales sobre los textos de la jurisprudencia clásica (1969: 361-364). También en esta misma línea cabe señalar en este periodo el artículo de De Dominicis (1964) a partir de un fragmento de Ulpiano (*D.* 1, 16, 9) en donde la jurisdicción en provincias senatoriales parece verse sometida a la autoridad del *Princeps* cuando se trata de *fiscalis pecuniaria causa* y que, en principio, debería contar entre las competencias del gobernador proconsular y vinculado al *aerarium*.

El concepto redefinido de *dominium* como poder de soberanía política establece un modelo organizativo semejante a un imperio articulado por un modo de producción tributario que se suministra y sostiene a partir de una red descentralizada de *civitates* dependientes mediante la *fides*. Se supera, por tanto, el aparato administrativo del modelo decimonónico que había dado como fruto un territorio profundamente burocratizado, inviable, en donde las injerencias directas de la administración parecían regular todos los ámbitos de la vida política local, incluyendo sus formas de propiedad, su acceso a las mismas, los límites en su transmisión y, finalmente, su fiscalización individualizada. Por el contrario, ahora ya se reconoce una organización interna *pleno iure*, no sólo tolerada, y que entra en consonancia desde el punto de vista fiscal con lo que los tratadistas de agrimensura denominaron *ager per extremitatem mensura comprehensus* dentro de la rama administrativa (Grelle, 1963: 23-48). El reconocimiento de la libre disposición interna sólo tenía como límites el pago de las exigencias fiscales interpuestas sobre el *ager universus* de las comunidades peregrinas, marca de su sometimiento.

Un línea interpretativa que toma ahora fuerza en el tratamiento de Gayo para explicar algunas de sus sorprendentes afirmaciones es el factor de las reelaboraciones posteriores en el derecho post-clásico. La abolición de la diferencia entre Italia y mundo provincial desde la constitución de Caracalla constituye una formulación jurídica distinta del Estado romano en sus relaciones ciudadanía-territorio, de tal forma que su reaprovechamiento en los compendios justinianos sólo pudo ser posible gracias a un rescate parcial de sus postulados, unas veces omitidos, otras completados, pero siempre con un aditivo de distorsión que obliga a la profilaxis en su tratamiento. El tránsito desde el modelo impositivo provincial a otro marcado por la desaparición del elemento distintivo de la ciudadanía romana comporta repercusiones inmediatas en las relaciones jurídicas de propiedad y en la naturaleza política del gravamen. Así por ejemplo, Solazzi ya había observado la referencia a *usufructus* en *Inst.* 2, 21, un elemento extraño que responde a una forma de tenencia agraria sólo desarrollada posteriormente. Propone, en sustitución, la más ajustada *possessio* de *fundi stipendiari* o *tributari*, mientras la disyunción *vel usufructus* constituye un añadido posterior del jurista post-clásico Papiniano (*D.* 4, 6, 23, 2; Solazzi, 1934: 381 y ss.; *cfr.* Grosso, 1974). También Bozza, sirviéndose de la crítica desde el derecho post-clásico, desgrana algunas

características constitutivas de la *possessio* republicana y de la evolución que recibe a partir de Escévola, cuando se escinde el *usus* (tenencia *de facto*) y la nueva *possessio* que ya reconoce usucapión<sup>39</sup> (1964). La decantación de diferentes conceptos referidos al suelo provincial mediante métodos comparativos a partir del también post-clásico Teófilo (Grelle, 1966) es igualmente representativa de esta línea de interpretación de las *Institutiones*. Finalmente, en algunos trabajos posteriores, recibe ya la catalogación explícita de *prepostclásico* (Grosso, 1974: 66). Desde esta línea interpretativa autores como Goffart (1974) cuestionaron incluso la implantación de una fiscalidad regular en el Alto Imperio, que habría sido fruto de la distorsión del derecho post-clásico y de la reforma fiscal de Diocleciano. Aunque el autor presenta una visión bastante radical, es cierto que el esquema del *tributum soli* y *tributum capitis* del Alto Imperio ha tendido a considerarse generalizado por el desarrollo posterior de la *capitatio-iugatio* que da comienzo con Diocleciano.

Ante el nuevo abanico de posibilidades y problemas que se abrían con los nuevos presupuestos teóricos tenía lugar en Roma poco después, en 1971, un Congreso Internacional bajo el título *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* que terminará por publicarse en 1974. Su convocatoria tenía como objetivo el tratamiento monográfico de diferentes aspectos relacionados con la nueva comprensión de los lazos de dominación de Roma a través de la asistencia y debate de los principales romanistas del periodo para provincias concretas. En este caso, por economía de espacio, tampoco podemos resumir todos los aspectos tratados en el mismo pero sí, al menos, rescatar algunos elementos comunes que se ponen de relieve con cierto consenso. En primer lugar, el reconocimiento de esta multiplicidad de derechos locales coexistentes dota de una relevancia mayor al papel que toman las decisiones de los gobernadores provinciales a través del edicto, perfilándose como la principal fuente de innovación jurídico-administrativa para adaptarse a la casuística de cada provincia (Tibiletti, 1974: 99-100; D'Ors, 1974: 253; *vid.* Burdese, 1989: 416-18). En el plano metodológico destaca una creciente reivindicación del enfoque integrado “fra storico delle istituzioni, archeologo ed epigrafista” que permita una localización lo más exhaustiva de esta diversidad de expedientes (Luzzatto, 1974: 53) así como cualquier tipo de indicio sobre huellas de ordenamiento local o imperial (Mócsy, 1974b). La experiencia de autores como Laffi (1966) había demostrado que también de las huellas arqueológicas podía rescatarse

---

<sup>39</sup> En D. 41, 2, 3, 23 Paulo afirma que Escévola se equivoca al hablar de una *possessio* sin *usucapio*, pero cuya confusión se debe a su inexistencia en el derecho post-clásico, pues para Bozza es con Escévola precisamente cuando aparecen los dos tipos de *possessio* arriba referidos. Una visión alternativa en estudios posteriores puede encontrarse en Rosafio (1993). Ambos autores relacionan la gestación de la *possessio* con la evolución de los sistemas clientelares en Italia a partir de la conformación del *precarium*. Dentro de las formas arcaicas de tenencia agrícola, las relaciones entre patrono y cliente se cimentan sobre este *precarium* para poder ser después recuperadas en un determinado momento gracias a la hegemonía política del patriciado en la gestión de *ager publicus* itálico. Ello genera lazos de dependencia hacia los clientes, de cuya fidelidad pasa a depender el mantenimiento o no de los privilegios por la explotación de estas propiedades. Cuando el *precarium* se extiende a no clientes, es decir, cuando se produce un acceso a la tenencia de las tierras públicas por estratos sociales más bajos, es cuando aparece la *possessio*. Para Bozza, por el contrario, el *precarium* existe con anterioridad como atributo inmanente del *usus* arcaico sobre la pequeña propiedad y no tanto por el oligopolio de las tierras públicas.

pruebas y argumentos sobre el modo en que la ordenación jurídica (en el caso de Laffi, comunitaria para reflejar la distinción entre *adtributio* y *contributio* técnica, hasta entonces indiferenciada) se atiene a una especificidad local y a un desarrollo histórico genuino. El estudio aislado de los principios teóricos del derecho romano se había mostrado insuficiente al reflejar un esquema tan rígido y coherente que sólo parecía tener lugar gracias a la negación de las contradicciones consustanciales al proceso histórico. Sólo de este modo podía superarse un sistema con valor absoluto, unitario desde sus mismos orígenes a través del ya comentado derecho helenístico. La presunción del acervo mediterráneo en el ámbito del derecho tenía un campo de irradiación amplio, construido mediante sucesivas influencias difusionistas asumidas por el conjunto pero que, sin embargo, se diluye irremediabilmente cuando se contrasta con fenómenos particulares de un entramado provincial profundamente diverso. En este sentido, con el fin de apreciar una especificidad provincial no condicionada por tales apriorismos, toma una importancia renovada el estudio de documentación diversa en diferentes materias sin asimilarse a la totalidad como automatismo metodológico (Volterra, 1974). Artículos como los de D’Ors o Harmatta, recogidos en esta edición, resultan ilustrativos de estos nuevos métodos de aproximación que se alejan de las figuras estereotipadas en *Hispania* (1974: 253-68) y *Pannonia* (1974: 77-88) respectivamente. En concreto Harmatta, aunque no bebe de Grelle y defiende el modelo de Mommsen sobre el *stipendium*, se sirve de nuevos factores para extraer conclusiones sobre la viabilidad del presunto estipendio bajo la formulación clásica de imposición indirecta sobre unas *civitates* que carecen de estructuras políticas y tributarias previas y contienen posibilidades agrarias limitadas<sup>40</sup> (*Aur. Vict.* I. 7: *Pannonios stipendiaries adiecit*; *cfr.* 1974: 78-79; 87): “the conditions of land property [...] determined to a great extent the relations of production” (1974: 77), añadiendo después “The clarification of this question is important not only from the viewpoint of the legal position of land, but it renders also necessary the drawing of certain conclusions from the viewpoint of the level of the social development of the Pannonian peregrine communities” (1974: 79). Parecen regir en este caso criterios más inductivos sobre las condiciones de explotación provincial panónicas y que actúan de manera determinante en la conducta que Roma mantiene en el proceso de territorialización sobre la realidad preexistente y con el papel activo del ejército (*cfr.* Mócsy, 1974a: 53-79). La aplicación de este tipo de procedimientos, por el momento sólo sugeridos, irá íntimamente ligado al desarrollo teórico de la *New Archaeology* y su diversificación metodológica dentro de la arqueología procesual (*cfr.* Orejas, 1998) como exploraremos en último término.

---

<sup>40</sup> La conocida cita sobre los cinco tipos de tierras en Panonia (Hyg., *grom.*, 205) Harmatta la encuadra como una secuencia que evalúa la calidad de las tierras para calcular un *vectigal* entendido como impuesto porcentual directo sobre la cosecha y establecido directamente desde el poder imperial. Aun sin ánimo de profundizar en este aspecto, no hay razón para desechar que la medición de las posibilidades de explotación de los campos pueda producirse para estimar el volumen total del *stipendium* con carácter fijo, se entienda o no como sinónimo del *tributum soli*. No tiene, por tanto, que presumirse una fiscalización individualizada de la propiedad ni porcentual sobre la producción a partir de este fragmento. Este aspecto lo retomaremos en otro punto de la tesis (*vid.* 9.5).

### 2.3.2 La aportación de las lecturas sintéticas y el registro arqueológico.

En los años siguientes, el proceso heurístico y hermenéutico continuó su desarrollo tras el agotamiento de los modelos tradicionales de análisis, basados en constructos teóricos bajo el casi exclusivo cimiento de las fuentes textuales y su consiguiente aparato arqueo-filológico. Si ya vimos que la relectura de las estructuras jurídicas propiciaba ahora una mayor versatilidad en las formas de respuesta local y regional, el estudio de los efectos materiales de la ordenación administrativa genera asimismo un análisis más bidireccional. En él, las huellas sobre las consecuencias de la dominación imperialista también son significativas para reconstruir el proceso inverso, aunque los problemas derivados de las fuentes materiales en que esta dominación se expresa nunca puedan ser extrapolados de forma lineal al ámbito jurídico. Es decir, nunca forman parte de una relación monocausal en donde la identificación del producto material sea la consecuencia directa y aislada de una acción o situación jurídica/fiscal concreta. Sin embargo, si se entienden las estructuras administrativas como un condicionante, como un factor histórico, deben integrarse también dentro de los procesos de transformación a escala local y regional. Asumidas las limitaciones aproximativas y abandonadas las aspiraciones de un conocimiento holístico y en un marco de completa coherencia, toma una fuerza creciente la interdisciplinariedad como único medio para comprender situaciones multifactoriales. Como veremos en las páginas siguientes, las nuevas vías de interpretación según sus presupuestos iniciales encararán la influencia de las relaciones de poder imperialista desde distintos niveles de concreción.

En este sentido, el diálogo entre las estructuras administrativas centrales y la construcción de formaciones sociales de carácter regional se nutrió de la profunda reflexión habida durante estas décadas sobre la carta de naturaleza de la economía antigua desde diferentes escalas. Por supuesto, la clásica obra de Finley no había pasado desapercibida para nadie y la dirección de los análisis se bifurcaba cada vez más acusadamente entre posiciones ortodoxas del *modernismo* y el *primitivismo* en materia económica. Aunque ambas vías pueden encontrar su correlato en la investigación actual, debe advertirse una tendencia creciente a un enfoque sincrético que se aleje de un maniqueísmo demasiado simplificador (Andreau, 2002). En cualquier caso, una manifestación de estas preocupaciones en el estudio de la fiscalidad antigua podemos ya observarla en el debate que tuvo lugar entre Marchetti y Nicolet en unos de los diversos *Rencontres* del Centro G. Glotz (1973-76), finalmente publicados bajo el título *Points de vue sur la fiscalité Antique* (1979). Frente a la postura tradicional que mantiene el estudioso italiano sobre el *tributum ex censu* republicano en forma de porcentaje fijo, Nicolet expone un modelo contrario basado en el reparto de gastos sobre el telón de fondo de la evolución política y militar romana. De manera soterrada, el artículo de Nicolet ejemplifica bien la creciente necesidad de una reflexión en economía política sobre el papel que debe recibir el Estado como sujeto consciente o inconsciente de intervención en el territorio. Ello se debe a que un modelo de financiación estatal basado en una fiscalidad directa sobre sus ciudadanos mediante una tasa fija implica asumir una política de gasto planificada y presupuestada que difícilmente puede

enfrentarse con solvencia a los picos de inversión que requiere la guerra y la construcción de infraestructuras públicas a largo plazo. Esta hipótesis de trabajo requería atender a los mecanismos que actuaban en la financiación estatal desde un enfoque más apegado a criterios economicistas que a las habituales pautas de la investigación precedente.

Su crítica parte del uso de ciertos paralelismos anacrónicos a la hora de explicar el proceso de endeudamiento de los estados antiguos análogamente al que se produce, aun hoy, en los contemporáneos. Si en el orden capitalista el déficit público es el denominador común de los estados occidentales, lo es precisamente por la incapacidad de enfrentarse a la inversión a corto plazo desde los presupuestos generales, pero con el recurso al crédito privado de los poderes financieros como elemento consustancial al sistema. La distancia del presente con el pasado en la capacidad para sufragar gastos se concibe en términos simplemente cuantitativos, como puede desprenderse de la lectura detenida del artículo de Marchetti, en donde se repiten las mismas claves, con Roma actuando y planificando su política pública de acuerdo a unos presupuestos económicos predefinidos y estables. Como destaca Nicolet, la situación en época romana es cualitativamente distinta, entre otros aspectos, porque las situaciones de riesgo llevan aparejada una inmediata repercusión patrimonial en las élites socioeconómicas que encarnan las líneas políticas de actuación pública. En sintonía con lo anterior, sobre el siempre espinoso asunto de la racionalidad económica en época antigua, Nicolet (1979) recoge una serie de casos que ponen en evidencia cómo el comportamiento romano tiende más a la reacción espontánea sobre la experiencia situacional que a una política de cálculo previo en términos de inversión y estimación de beneficio. La política de hechos consumados se manifiesta finalmente en la repartición anual de los gastos anuales por la vía del *tributum ex censu* una vez conocidas las cantidades. Los gastos ordinarios y regulares, es decir, previsibles, parecen dirigirse a la cobertura del funcionamiento administrativo básico (1979: 437), que no cambia de forma abrupta, mientras los sobreesfuerzos se concentran en los sectores subalternos del sistema republicano: las indemnizaciones de guerra sobre los conquistados y los aliados itálicos y transmarinos hasta la guerra Social. El paisaje de dominación que se eleva a partir de estos supuestos va de la mano del desarrollo de las estructuras imperialistas de sometimiento hasta encontrar en época imperial un marco de intervencionismo estatal constante, pero no por ello homogéneo ni de corte actualista. El peso que recibe la crítica desde la economía política se ve representado en la importancia otorgada a la abolición de la tributación cívica el 167 a.C., identificada por Nicolet como el cambio sistémico clave dentro del organigrama fiscal que nos encontramos en el Principado, lo que metodológicamente se aleja de manera clara respecto a los presupuestos patrimonialistas, más atentos a las relaciones de propiedad que a los modelos de financiación pública a la hora de apreciar el origen de esta transición<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> En mi opinión, la inexistencia de una reforma profunda de las estructuras fiscales en este periodo que arranca en el 167 a.C. se pone en evidencia con el mantenimiento del censo republicano de los bienes patrimoniales de la ciudadanía (Cic. *De off.*, 2, 74) como observa en este mismo volumen Gabba (1979). Por ello, no supondría tanto un cambio estructural como una suspensión auspiciada por un contexto favorable que hace prescindible esta fuente de ingresos; prueba de ello será su puesta en vigor de nuevo

Estudios como el de Nicolet son ilustrativos del paulatino cambio de rumbo a la hora de establecer unas líneas maestras sobre las que acometer el análisis del fenómeno provincial romano y la evolución de las estructuras fiscales en un sentido diacrónico. Esta torsión interpretativa se relaciona, en cierta medida, con la creciente fuerza de los estudios de corte macroeconómico, en los que la interpretación a gran escala se sustenta sobre una concepción más o menos unitaria de la economía antigua desde coordenadas tanto temporales como geográficas, al contar con una base material más o menos uniforme. Esta tesis, que ya en su día defendió Finley (1973) para señalar el punto distintivo en aspectos derivados de la cultura y mentalidad económica, parte de la negación de cambios sustantivos en las posibilidades de explotación. Para Finley el fundamento económico que explica la realidad antigua es la importancia de la que se reviste la tierra frente a cualquier otro factor, pero las limitaciones en la implementación de innovaciones tecnológicas y el consiguiente aumento de la productividad, la constriñen estructuralmente. La actividad comercial, la otra gran práctica económica con capacidad para catalizar cambios socioeconómicos de envergadura, tendría en el plano social una incidencia limitada a pequeños colectivos ante los elevados costes de transporte, que prácticamente restringirían la posibilidad de mercado y distribución a los bienes de prestigio. Cabría hacer muchas matizaciones al respecto, pero no cabe duda de que el cuadro resultante consta de un aspecto homogéneo de partida sobre el que realizar ulteriores análisis de fenómenos económicos mediante la apreciación de fluctuaciones a gran escala y en periodos dilatados de tiempo, pues sólo entonces pueden ser apreciables. Por esta razón, en el plano metodológico predomina un enfoque deductivo hacia el que se dirige la construcción de amplias bases de datos orientados a la gestión masiva y puramente cuantitativa de su contenido bruto, objetivado, en aras de corroborar (o no) las hipótesis establecidas al inicio.

Debe advertirse que una consecuencia inmediata de la aplicación de estos presupuestos al ámbito de la fiscalidad romana es la independencia que cobran las prácticas económicas respecto a cualquier marco jurídico-administrativo de ordenación. Ello se debe a que la construcción de estadísticas y cálculos cuantitativos resulta difícil de matizar dentro de la matriz que representa lo jurídico-administrativo y su consiguiente efecto limitador en la praxis económica. Los espacios específicos en que se produce la interacción económica prescinden de este elemento socio-jurídico para dotar de un protagonismo totalizador al Estado y a diversos agentes económicos que actúan con cierta apariencia de proto-empresas (Davies, 2005: 126-33). A expensas de estos sacrificios, no han sido pocos los autores que han observado además en la prevalencia analítica de estos supuestos la construcción de leyes económicas dirigidas a la naturalización del capitalismo (y, con ello, a su legitimación) como sistema intrínseco de un *homo economicus* atemporal (Meickle, 2002: 248-259).

Aunque no podamos ahondar más en estas cuestiones, demasiado complejas y prolíficas como para ser abordadas aquí con un mínimo de detenimiento, debe

---

durante el tramo final de las guerras civiles (43-36 a.C.). Sin negar la importancia capital que supone este episodio dentro del transcurso de la tributación cívica a la imperial, el punto de inflexión debe relacionarse con Augusto.



destacarse en este periodo la representativa obra de Hopkins, que no en vano sucedió a Finley en su cátedra de Cambridge. Su penetrante artículo “Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400)” (1980), tiene un inmenso mérito por lo novedoso de sus planteamientos, aunque se reproduzcan algunos de los problemas antes mencionados, quizás irremediables desde un enfoque de largo recorrido y con vocación a muy amplia escala. La implementación del método hipotético-deductivo queda reflejada en la secuencia proposicional que hilvana el hilo de su argumentación y que da comienzo con la demostración del carácter unitario de la economía antigua como avanzó su maestro. Con este objetivo elabora un gráfico (*vid.* 1980: 113-116) en donde las fluctuaciones en la producción interregional de moneda sugieren fenómenos económicos con una incidencia global. La moneda se torna en indicativo del flujo económico, pero sin atenerse a la tipología fiscal, sólo a la relación entre producción y consumo a expensas de las dinámicas económicas que la tributación establece entre los territorios a los que les sustraen el excedente (las provincias) y los receptores del mismo (Italia-zonas militarizadas). Es por esta razón que cuando Hopkins interconecta las relaciones existentes entre tributación y comercio, para él sólo reviste de importancia la variable sobre la naturaleza del gravamen, en moneda o en especie, sin otros matices como pudieran ser los formales (porcentaje, fijo, variable), los derivados de distintas relaciones de propiedad (*possessiones*, vínculos usufructuarios, etc.), la situación y condición jurídica de la mano de obra (libre/esclava, ciudadana/peregrina/dediticia), las dinámicas económicas según la estructura de explotación (intervencionismo imperial, subsistencia, reciprocidad, etc.)... Toda esta diversidad queda agrupada en unidades fiscales imprecisas pero que constan, a pesar de la abstracción, de la base material común que supone la exacción del impuesto.

A diferencia de Finley, Hopkins expone su propuesta sobre la dinamización del comercio como respuesta lógica a este heterogéneo grupo de comunidades fiscalizadas. Para ello sigue un axioma muy simple: cuando el excedente esquilado se exige en forma de moneda se produce una incentivación colateral de la actividad de intercambio para convertir los productos en dinero con el que afrontar los pagos; la tributación en especie, huelga decir, fomentaría el fenómeno opuesto. Con esta relación causal Hopkins busca además dar respuesta al problema que suponen las limitaciones logísticas en el proceso de propagación de moneda, cuya acuñación es monopolio estatal y a priori carece de instrumentos de redistribución más allá de las inversiones públicas y el pago de las soldadas. Este vacío estaría ocupado por el auge de la actividad comercial como respuesta a las imposiciones tributarias y dentro de un esquema de funcionamiento regulado por tres anillos: uno interior ocupado por Italia, exenta, receptora de la moneda sustraída fiscalmente al tesoro estatal y ámbito esencial de inversión; uno intermedio ocupado por la gran franja sometida a tributo en moneda/especie con las dos reacciones ya mencionadas; el más exterior compuesto por zonas fronterizas como áreas de especial presencia estatal y, en consecuencia, núcleos de llegada de divisas desde los órganos centrales, con interacción económica respecto al anillo inmediatamente anterior.

Este flujo económico, sin fronteras ni condicionantes de cualquier naturaleza, toma indirectamente una apariencia librecambista<sup>42</sup> frente al sistema reglado y gravado que nos aparece en las fuentes. Si, por ejemplo, nos atenemos a una imposición generalizada del pago de *portoria*, de los que existen diversos testimonios<sup>43</sup>, ha de asumirse un inmediato efecto de rémora en la actividad comercial y la circulación monetaria (*cfr. i.e.* France, 1993). Al gravar la movilidad del producto, se encarece y limita la posibilidad de exportación de gran alcance si nos movemos en las mismas coordenadas de racionalidad económica en las que se mueve Hopkins. El autor sólo trabaja con los productos finales, es decir, con el hecho consumado que suponen los vestigios conservados de la distribución de moneda y que no entienden de los condicionantes diversos que los llevó hasta el lugar que ahora ocupan. De ahí la apariencia engañosa que pueden destilar los trabajos puramente economicistas. De igual manera, se soslaya el problema de la interlocución económica con comunidades sin un sistema monetario anterior a la llegada de Roma y en las que, por esta razón, puede actuar con más seguridad el valor de uso sobre el de intercambio al no existir un baremo tan claro de equiparación como el que la abstracción del valor en moneda puede representar. Sobre la forma en que esta circunstancia actúa de cara a la tributación, algunos autores han propuesto fenómenos como la *adaeratio* para el caso de *Hispania*, en donde la cuantificación en moneda del tributo exigido puede resultar abusiva de manera consciente (Aguilar y Ñaco, 1997, 81; Ñaco y Prieto Arciniega, 1999, 223-29). Pero todos estos aspectos limitadores, nuevamente, permanecen enterrados sobre la fría capa de los datos brutos y de la macro-escala.

Por otra parte, la estrecha relación causal tributación-comercio no deja un espacio significativo a las relaciones de propiedad fondiaria como elemento agente de la circulación de moneda, clave si nos atenemos a las características de una economía predominantemente agraria. Me refiero en concreto a las zonas con predominio de grandes propiedades transmarinas en las que el *dominus* absentista deja el arriendo a un *conductor* o *villicus* en quien delega. En este caso, como se ha observado para amplias zonas de la provincia africana (Kehoe, 1984, 249 y ss.; Mattingly, 1997, 124-126), la necesidad de movilizar este excedente en forma de renta a su dueño, ya sea en moneda o especie, debe a la fuerza formar parte de la explicación de una economía que se presume integrada. El valor discreto de este factor, objeto de numerosas críticas posteriores como la que protagoniza Duncan-Jones (1994), hizo que finalmente lo incorporara en su *model remodelled* trazado en 1997 como proposición complementaria a sus postulados (1997, 208-28). En este sentido, su mismo título, “Rome, Taxes, Rents and Trade”, constituye una declaración de intenciones. Una prueba sobre la importancia de esta variable puede comprobarse en el adelgazamiento teórico que recibe ahora su modelo de

---

<sup>42</sup> Sus conclusiones finales sobre la baja carga impositiva de época imperial unida al florecimiento de un comercio *not proved* que estimula *private profits* (*cfr.* 1980, 116) no está exenta tampoco de cierta carga ideológica. Retrata como trasunto subliminal la gran discusión económica de la segunda mitad del siglo XX, asentada sobre los antagonismos simbólicos del fenómeno bipolar de la Guerra Fría, época en la que Hopkins escribe su artículo. Uno dominado por la fluidez en los intercambios comerciales frente al sistema burocratizante y limitador de la movilidad económica; una barrera al crecimiento económico que en este caso es auspiciado por el auge de la tributación controlada de especie en la crisis del siglo III.

<sup>43</sup> Para el caso de *Hispania* *vid.* Muñiz Coello (1980, 225-49).

economía unitaria. Sin llegar a negarlo, su funcionamiento como ente absoluto aparece en detrimento de otras dinámicas y mecanismos económicos locales y regionales: “the greatest part of the Roman remained local and circumscribed, in that producers, both farmers and partisans, either consumed their own produce or sold the bulk of it locally. The relatively sophisticated, relatively integrated, monetary economy sat on top of this basic natural economy. But it was the relatively sophisticated and integrated sector of the Roman economy which helped the empire maintain its political unity” (1997, 229). De igual modo también puede apreciarse una postura más laxa en la consideración de Hopkins sobre los mecanismos económicos, que aparecen como fenómeno independiente con respecto a otros factores. En este sentido, trabajos como los de Kehoe son representativos de una línea teórica economicista, pero que refleja un esfuerzo manifiesto por una mayor labor de contextualización e interdisciplinariedad. Sus obras *Investment, Profit and Tenancy* (1997) y la más reciente *Law and the Rural Economy in the Roman Empire* (2007) muestran un diálogo constante entre los procesos de transformación económica con los sucesivos cambios en materia institucional, jurídica y administrativa.

La postura radical de Hopkins en algunas de sus facetas constituyó una gran oportunidad de reflexión colectiva en aras de la cada vez más patente necesidad de síntesis metodológica (*vid.* Bartel, 1980). Como él mismo reconocía en su revisión, su modelo no aspiraba a construir un sistema homogéneo de funcionamiento, sino a apreciar las virtudes de una óptica amplia, sólo aproximativa, que por su misma carga de abstracción permitiera ilustrar una evolución sin los atenuantes de la excepcionalidad documental (1997, 193). Los sucesivos trabajos que exploraron los modos de integración provincial y el fenómeno tributario dieron cuenta de esta ambivalencia. El reto interpretativo era considerar los fenómenos locales desde una especificidad territorial, social, productiva, organizativa, etc. de tal forma que, sin negar los testimonios concretos de sus manifestaciones, pudiera imbricarse la situación en un proceso común como es el sistema de explotación y dominación imperialista. En caso contrario, la consecuencia sería nuevamente la disyuntiva entre la “amplia escala” generalizadora de realidades totales o el enfrentamiento con los testimonios arqueológicos y epigráficos en términos de constante extrañeza y anomalía, fenómenos insulares sin trascendencia histórica.

En un artículo reciente, y en mi opinión con bastante acierto, Gardner ha sabido ver en estas dos visiones antitéticas un correlato de la tendencia postcolonial y la que él mismo denomina como *sistémica* o de *globalización* (dentro de la cual debe incluirse la línea que representa Hopkins), para buscar soluciones intermedias (2013). El papel que ha jugado la arqueología en este diálogo de escalas ha sido desigual, y no siempre satisfactorio. A veces el excesivo localismo y contextualización puede dejar la apariencia de anomalía a cada situación particular, sobre todo cuando el afán de redención otorga un protagonismo distorsionante a los sometidos en las relaciones de poder. Así se aprecia, por ejemplo, cuando la capacidad de negociación que se presupone al *indigenismo*, en términos de resistencia, excede los medios de coacción

que en principio puede permitirse dada su estructura política, económica o social. Esta tendencia ha solido construirse a partir de una conceptualización ontológica del *indígena*, con inspiración post-colonial, como conjunto homogéneo que se opone esquemáticamente al *romano*-colonizador. Acercamientos posteriores matizaron mejor esta basculación de poderes a través de la aplicación de conceptos como *criollización* para las realidades antiguas con el fin de trascender estos parámetros esencialistas en las relaciones sociales (Webster, 2001; Sastre, 2007). Así, el proceso de integración-negociación parte de una interlocución asimétrica entre poderes, en la que pueden aceptarse ciertos resquicios de protagonismo para los subalternos sin que éstos tomen una apariencia casi horizontal con las partes dominante. La prolija teoría crítica sobre la romanización de los últimos años, especialmente en la academia anglosajona, también ha seguido esta misma línea a la hora de comprender el proceso en que se produce el cambio cultural (eg. Woolf, 1998; Hingley, 2003; 2005). Un enfoque arqueológico que aspire a comprender las contradicciones inherentes del proceso histórico requiere, en síntesis, combinación de escalas e integración metodológica para aunar ambos extremos en un continuo explicativo. Sólo de este modo pueden superarse, por un lado, aquel relacionado con el carácter monopolístico del Estado y asociado normalmente a la concepción de *romanización* como proceso de sustitución de unas realidades por otras. También, con aquel de raigambre postcolonial que en cierta medida obvia el peso de la diversidad socioeconómica interna de estos colectivos ideales colonizados, relegando a un papel secundario las funciones de control social que pueden desempeñar sus élites en las dinámicas de funcionamiento imperialista.

De cara a la tributación, este desarrollo teórico ha dejado su sedimento en el tratamiento de las denominadas *revueltas antifiscales* a partir de los primeros trabajos de reconocido influjo post-colonial en los que reproduce claramente la abstracción del colonizado como premisa de base (*vid.* Dyson, 1971). Es por esta razón que la primera línea de carácter nativista se centra en el conflicto hostil, la confrontación directa, siempre leída en clave de subversión y lucha irreverente. Como observó Corbier (1988), la casuística de estos conflictos estaba demasiado mediatizada por este sistema binario de entidades totales: ciudadanía romana y mundo indígena, dominadores y dominados. Un esquema que no atendía al colaboracionismo que puede fomentar el aprovechamiento de las élites locales en un contexto de jerarquización, o el silenciamiento de la presión fiscal que igualmente pudo producirse en sectores desfavorecidos de la ciudadanía romana por diversas causas. Por el contrario, la autora dota de un mayor peso a las variantes que toman las formas de desigualdad, y que en la práctica suelen imponerse sobre las realidades estatutarias y los expedientes personales. Las reacciones a la imposición fiscal pueden tomar entonces diferentes caminos según sea la anatomía de sus formaciones sociales, las estrategias que puedan emprender los núcleos de poder local (hacia “arriba” o hacia “abajo”) y sus propios medios y posibilidades de oposición. La confluencia de diferentes factores ha ayudado de este modo a definir nuevas respuestas a la tensión provocada por el marco de funcionamiento imperial y enriquecer el contenido de las denominadas *revueltas antifiscales*. Sin negar la importancia de la oposición frontal al dominio romano a partir de los levantamientos de los primeros siglos del Alto Imperio, se han complementado

con otros fenómenos menos explícitos: la resistencia pasiva mediante retraso en los pagos (Corbier, 1988; France, 2001: 375-78), la relación entre fraude fiscal local y evergetismo (Le Roux, 1999: 156-58), el factor de la territorialización y confiscación de tierras (Clavel-Lévêque: 1988) o el componente discursivo entre *orden y desorden* (Woolf, 2012).

De vuelta a las carencias de la micro-escala en la lectura del registro arqueológico cuando ésta se concibe de forma excesivamente autónoma, debe destacarse su tendencia a atomizar los procesos al aparecer desligada de relaciones de poder y de espacios de interacción más amplios. Esta cuestión resulta determinante si, como es el caso, el objetivo es la observación de pautas de ordenación jurídico-territorial teniendo en cuenta las manifestaciones materiales, sociales y espaciales del Noroeste hispano. En este sentido, la reivindicación de esta necesidad, no siempre resuelta con solvencia, queda patente en la opinión que se desprende de una entrevista a Colin Renfrew relativamente reciente, un investigador que si por algo se ha caracterizado ha sido por la búsqueda de explicaciones integradas:

I think you're right that the mode of thinking is to excavate things and to have them in a chronological order, and arrange them taxonomically, but that alone would be rather restrictive. For example, one of the strong points of the New Archaeology was to look at the subsistence base of ancient societies and make a big thing of it"; "I think one of the central problems in archaeology today is how to deal with large political units and power structures, how to make sense of them. They clearly have a major causal role in social development and in the ways that societies change, and I think postprocessual archaeologists have completely neglected that field (Harding, 2008, 158-59; 161).

La experiencia de los últimos años, de la mano de la arqueología del paisaje, ha permitido aproximaciones hasta un nivel de concreción impensable hace algún tiempo gracias a la interdisciplinariedad. Esta nueva línea, puede apreciarse en autores como Roselaar y su reconstrucción histórica del *ager publicus* republicano: "Although all materials are in some way defective, when we take into account all literary, legal, technical, archaeological, and comparative evidence, I think we are able to arrive at a reasonably detailed reconstruction" (2010, 17). Aunque el área de interés de esta autora sea el republicano, esta afirmación es perfectamente extrapolable a la situación que nos encontramos en época imperial a través de los testimonios más directos del intervencionismo romano en la estructuración y explotación del territorio. Un ejemplo muy claro lo constituye el análisis de las centuriaciones, pues gracias a su estructura reticular, el tratamiento comparativo de las redes modulares ha permitido identificar una serie de coincidencias en los parcelarios actuales hasta poder reconstruirlo casi por completo en algunos casos, si bien de manera aproximativa, y ponerlo en relación con otras fuentes, como la estructura social brindada por el medio epigráfico (Clavel-Lévêque, 1983; Clavel-Lévêque y Orejas, 1998; *vid.* Orejas, 1995-96, 63-65). Con anterioridad a este tipo de estudios la dependencia de los testimonios explícitos, como el catastro de Orange, se convertía en una condición indispensable. Así, se ha propuesto incluso la elaboración de una estratigrafía de los parcelarios agrarios (Ariño Gil *et al.*, 1994; 2004, 43-65), basada en una secuenciación diacrónica de las sucesivas

distribuciones que han configurado el paisaje agrario de manera acumulativa hasta alcanzar la situación actual. Desde esta línea se han desarrollado prácticas complementarias con el fin de reducir algunos riesgos de extrapolaciones anacrónicas, como la que puede producirse en el caso de retrotraer a época romana restos de parcelarios con módulos semejantes a los de la centuriación pero que se relacionan con épocas posteriores. Con este fin, el empleo flexible de fuentes e instrumentos complementarios según las circunstancias del caso de estudio puede ayudar a reducir estos márgenes de error gracias a una mejor definición estratigráfica: análisis de fotografía aérea y ortofotografía, consulta de la documentación catastral de las diferentes intervenciones gromáticas desde época medieval, prospecciones sobre el terreno, indicios en la toponimia, etc.

La implicación directa del Estado en la gestión de ciertas áreas de explotación de recursos estratégicos también ha podido registrarse mediante la lectura de su plasmación en el paisaje. Así ha quedado demostrado en el caso de la minería de oro del Noroeste gracias a la información indirecta que nos brindan sus propias infraestructuras, la relación que puede establecerse entonces con la epigrafía, los cambios en las dinámicas de poblamiento, etc. (una síntesis en Sánchez-Palencia *et al.*, 2006; 2007). Además, la identificación del *ager publicus* abre paso a nuevos problemas de ámbito jurídico que inmediatamente surgen en su relación con el entorno peregrino. Podemos ver algunos ejemplos en el Noroeste: la existencia de estructuras agrarias en lugares como Fuente de la Mora (Salamanca) que pudieron beneficiarse de la red hidráulica de las explotaciones auríferas, lo que sugiere un inmediato problema de compatibilidad de expedientes (formas de propiedad peregrina y *ager publicus* provincial *nec mancipi*), que ha podido resolverse apelando a posibilidades reconocidas en el derecho minero como la extensión por valor de uso del *ager publicus* (Sánchez Palencia y Ruiz del Árbol, 2000). Los *corrugi* de la infraestructura hidráulica entendidos como dominio estatal abren, asimismo, nuevas cuestiones sobre los modos de apropiación imperialista del territorio en ámbito peregrino como puede apreciarse en la propia plasmación que reciben dentro del paisaje, de forma disociada respecto a cualquier tipo de aprovechamiento agrario local, es decir, remarcando esta diferenciación clave entre *ager publicus* y *ager peregrinus* (Sastre y Sánchez-Palencia, 2002). Más recientemente, por ejemplo, la lectura de pautas repetitivas en el plano espacial han permitido también proponer la tendencia de la administración romana por establecer los límites del *ager publicus* en zonas interfronterizas de dos o más *civitates* asociadas a minas para favorecer la disminución de controversias territoriales y un mejor aprovechamiento de la mano de obra local fiscalizada en tareas mineras (Sánchez-Palencia *et al.* 2009). Los anteriores son sólo algunos ejemplos de las posibilidades interpretativas que aporta esta conceptualización del *paisaje* en el plano jurídico-administrativo. Sus efectos en la jerarquización del espacio resultan esenciales como explicación complementaria sobre otros aspectos que tradicionalmente han centrado la atención sobre la organización del Noroeste desde el punto de vista exclusivamente epigráfico, como el prolífico debate sobre la *○* y su comprensión como entidad gentilicia o territorial, pero que sólo cobran una plena significación si se relacionan con un proceso de cambio global desde una perspectiva de paisaje (Sastre, 2001a: 161-86; Orejas y Ruiz del Árbol, 2010).

### 2.3.3 Conclusión. Hacia una metodología integrada.

En este sentido, el depositario de una solución intermedia desde la década de los ochenta ha sido el *paisaje* como escenario explicativo de síntesis y único medio para comprobar la incidencia a escala local y regional de las estructuras administrativas romanas. La multiplicidad de sus variantes teóricas no puede resumirse en unas pocas líneas, pero si algo las aúna es su concepción del territorio como medio de interacción y socialización a todos los niveles. Frente a la historia del acontecimiento y la arqueología monumental, la conceptualización del paisaje no se ve restringida por el registro de la cultura material y del asentamiento, aunque por supuesto también formen parte de él. Como consecuencia espacial de la actividad humana, el paisaje es un instrumento que brinda la oportunidad de leer acotadamente cada uno de los elementos agentes que participaron en su conformación, aunque sólo con la suma de todos ellos pueda cobrar un sentido pleno.

Como es fácil de imaginar, dentro de este espectro dinámico y multifactorial la ordenación jurídico-administrativa se erige en un agente de primer orden en la transformación del paisaje<sup>44</sup>. La incorporación a un sistema jurídico, administrativo y fiscal como el romano cataliza transformaciones sociales profundas; más aun si, como ocurre en el Noroeste, se superpone artificialmente sobre una realidad preexistente caracterizada por la segmentariedad para ingrosar en los esquemas de la interdependencia y de un poder vertebrado por estructuras de dominación más complejas (*vid.* Orejas y Sastre, 1999). El establecimiento artificial de fronteras y áreas jurisdiccionales como condición indispensable para el cobro de tributo, mediatiza entonces toda práctica social, política y económica. Así ocurre cuando, por ejemplo, se incluyen dentro de una *civitas* como unidad fiscal diversas comunidades que con anterioridad carecían de cualquier tipo de vínculo formal y eran autónomas a todos los efectos. No es necesario siquiera considerar un intervencionismo estatal exhaustivo en el área interna de la comunidad, es decir, una implicación directa del Estado con el objetivo de regular todas las actividades que se producen en su seno, como pueden ser los modos en que ésta debe organizarse. De hecho, como hemos esbozado previamente, nunca fue ésta tampoco la razón de ser que marcó la entidad de las *civitates* peregrinas. En este sentido es suficiente la definición de las unidades fiscales y el establecimiento de un nuevo régimen de explotación para que eclosione una situación cualitativamente distinta y surjan nuevas formaciones sociales de manera orgánica, tal y como trataremos de argumentar a lo largo de la presente tesis doctoral.

Como ha podido apreciarse a lo largo de todas las páginas precedentes, las características inherentes a los modos de articulación de las comunidades peregrinas han

---

<sup>44</sup> Esta perspectiva ha generado todo un entramado de definiciones imprecisas con el fin de captar los diversos matices que recibe esta comunión entre paisaje y ordenación jurídica, no siempre bien perfilados en su contenido. Sobre este punto, opto por el uso del término “territorialización” al concebirse en oposición al *paisaje natural* y parte integrante del *paisaje cultural* de manera clara. Una muestra de la diversidad terminológica, que a veces genera más confusión que claridad, puede verse representada por nociones usadas en la investigación reciente, como identidad legal (Mathisen, 2006), ecosistemas históricos (Cardovana, 2010), o paisajes legales (Ando, 2011), etc. Todos ellos, sin embargo, buscan poner el acento en esta línea investigación.

requerido, más si cabe, una lectura entre líneas como consecuencia directa de la parcialidad de las fuentes, para las que nunca fueron una prioridad en los tratados de agrimensura, en el derecho civil o en la narración histórica de los clásicos latinos. Ello ha propiciado en ocasiones un clima de escepticismo ante un panorama aproximativo desesperanzador ante la frustración que genera la precariedad de los testimonios. Ante esta circunstancia considero, más si cabe, que es posible redoblar los esfuerzos a partir de la construcción de un modelo coherente sobre el funcionamiento de las comunidades peregrinas desde los propios esquemas de ordenación romano. Esto sólo es posible, como trataremos de hacer a lo largo de toda la tesis doctoral, a través de un diálogo de escalas en el que se parta del análisis de la estructura fiscal y administrativa general, se analice la naturaleza y contenido de la peregrinidad y, a partir de ella, descender a la escala local en la medida en que nos lo permita la documentación. Algunos estudios de caso a lo largo de este trabajo permiten evaluar cómo la teoría se materializa en respuestas concretas proporcionadas por el medio epigráfico, arqueológico o literario para el Noroeste hispano. El tipo de documentación que manejemos dependerá de la escala, del problema planteado y de la propia disponibilidad de las fuentes, pero no conllevará una jerarquización implícita, sino un uso relacional y complementario.

Por esta razón, el estudio de la fiscalidad antigua no debe ceñirse exclusivamente al análisis de las figuras fiscales, en aquello que Mommsen denominaba “su tan necesario como fatigante aparato filológico-arqueológico” (1893: 7). También hay que descender a un plano inferior, en el que esas estructuras administrativas generan respuestas institucionales, políticas y socio-económicas concretas en el seno de la *civitas* y en un territorio concreto. En este sentido, el grado de éxito dependerá de la superación de un enfoque integrado que aúne ambos componentes en un continuo explicativo y rompa con el resorte mecanicista de unas “causas” que generan “consecuencias” lineales en el territorio y en las comunidades, lo que equivale al aislamiento si, como en el Noroeste, no se materializa el paradigma de la romanización cultural. El paisaje en sí no da respuestas concretas, pero plantea interrogantes y contradicciones que también deben ser integrados en la explicación histórica y en los propios esquemas de ordenación.



## **II. El censo provincial y las *civitates* peregrinas: Aproximación a los diferentes sistemas de control gestión y explotación fiscal de las poblaciones.**

En este bloque nos proponemos explorar el papel del censo provincial y su naturaleza poliédrica, de cara a la comprensión de diferentes modos de integración y pertenencia al Imperio. Como veremos, frente al dibujo de unos modelos ideales de funcionamiento, la diversidad en el establecimiento de estructuras fiscales de explotación y las necesidades de Roma en las diferentes regiones deben ser tomados como los condicionantes esenciales que marcaron la caracterización del censo, en vez de a la inversa. Desde esta premisa, planteamos una aproximación a diferentes modos de registro para el control de las personas según sea la naturaleza de las obligaciones personales. Es decir, se dejará al margen la tributación sobre el suelo (de la que nos ocupamos en los capítulos correspondientes (caps. 6-9) y atenderemos en este caso a las diferentes fórmulas que Roma empleó para consolidar mecanismos de control sobre las poblaciones sometidas. Con este fin, un primer apartado irá dedicado a la síntesis de los principales modelos teóricos esbozados sobre el funcionamiento del censo provincial desde una perspectiva global y sintética, avanzando algunas de sus problemáticas de fondo. En segundo lugar, ya a una escala provincial, se encarará la cuestión del censo en diferentes contextos de integración provincial, abordando la cuestión del *tributum capitis* como impuesto personal que ha tendido a considerarse una de las figuras fiscales propias de la peregrinidad provincial. Finalmente, analizaremos el papel del censo en la provincia *Citerior* y en el Noroeste a partir de la documentación disponible y el análisis de las principales teorías que se han ocupado de este objeto.

### 3. El censo provincial: introducción al problema de estudio.

La profunda transformación del *census* de época republicana a época imperial es una de las concrecciones más evidentes del proyecto reformador augusteo, en donde el establecimiento de una estructura fiscal racionalizada y estable se asienta sobre el control de las poblaciones y de los recursos provinciales, en aquello que Nicolet denominó “el inventario del mundo” (1988). A pesar de la entidad de esta empresa los testimonios no son tan abundantes como cabría esperar y plantean un alto grado de incertidumbre en diferentes cuestiones que iremos desgranando a lo largo de todo este bloque.

El problema de partida que ha permanecido vigente en la caracterización del censo provincial ha sido nuevamente el aspecto homogéneo construido a partir de la definición de figuras fiscales estereotipadas que anticipábamos en el capítulo anterior. La tendencia de identificar estructuras continuas y uniformes en el tiempo y en el espacio que da comienzo con los grandes tratados administrativos del siglo XIX ha asentado una base de principios teóricos no siempre cuestionada, pero cuyo sedimento influye de manera notable, aún hoy, en lo que atañe a la naturaleza y el procedimiento censal. Los fragmentos de Gayo sobre la estructura fiscal del Alto Imperio, basados en la dualidad de las provincias senatoriales e imperiales, han servido para construir un modelo total para el funcionamiento administrativo provincial y que, concretamente, mediatiza de forma determinante la lectura e interpretación de la institución del censo. La perspectiva clásica sobre el censo provincial está bien representada en la visión de Lo Cascio (2000b), que retoma de manera declarada la visión establecida por Mommsen, Marquardt y Weber en relación al censo provincial, a la que incorpora la nueva documentación suministrada por los documentos papirológicos del mar Negro<sup>45</sup>. Es preciso, por tanto, reparar en los principios sobre los que se ha construido el funcionamiento del censo en época imperial.

Aun a riesgo de resultar reiterativo, la primera cuestión fundamental que mediatiza el censo radica nuevamente en los tan discutidos pasajes de Gayo que han configurado el *dominium populusque Romanus vel Caesaris* (*Inst.*, 2, 7; 14; 21; 27), a partir de los cuales toda provincia queda englobada en dos grandes entidades patrimoniales. Por un lado, las constituidas por el Senado y el Pueblo Romano, basadas en el *stipendium* y, por otro, por el César, relacionadas con el *tributum* (*Inst.*, 2, 21). Nada dice el jurista sobre las características que comprendería la dicotomía *stipendium-tributum*. Sin embargo, desde la perspectiva clásica quedar englobado dentro de una u otra esfera patrimonial implica una determinada forma de tributar y, en consecuencia, un método diverso de registrar la base imponible sobre la que ejercer la exacción a través del censo. Empezando por el *stipendium* de las provincias senatoriales, se trata de una figura a la que se le dota de un contenido estable, como herencia directa del periodo republicano.

---

<sup>45</sup> Esta documentación la trataremos en el cap. 5.

El argumento es simplemente el continuismo terminológico y conceptual del propio *stipendium*, que en época republicana supuso la transferencia a la comunidad vencida del pago de las soldadas que con anterioridad se recaudaban mediante la tributación de la ciudadanía romana (*tributum ex censu*) y que, a decir de Cicerón era un gravamen estable, al menos en el siglo I a.C.: *vectigal certum quod stipendiarium dicitur* (2Verr., 3, 6, 12). El *stipendium* de Gayo hereda linealmente el contenido de su precedente republicano. Por un lado, se trataría de un pago en moneda a la manera de las soldadas (*stips*; vid. Isid. *Etym.*, 16, 18, 8; D. 50, 16, 27) en vez de en especie y, lo más importante, al ser una reminiscencia de la imposición republicana sobre las comunidades derrotadas recaería también en época imperial sobre la comunidad “en bloque”, no sobre el individuo. El *stipendium* en Gayo, que recoge esta tradición, supone que las provincias senatoriales habrían sido excluidas del censo provincial, pues el procedimiento de recolecta y de control sobre los bienes se resolvía a través de los censos locales en coherencia con la imposición colectiva del *stipendium* sobre la comunidad. En las provincias senatoriales, también por su mayor adaptación a los ejes organizativos romanos, se entiende que el *stipendium* colectivo se entrega directamente al cuestor provincial a partir de las exigencias establecidas desde los organismos centrales, una vez hecha la recolecta mediante los censos locales. Esta perspectiva entraría en relación con la escasez de indicativos sobre las operaciones de *censitores* y *legati ad census accipiendos* en las provincias senatoriales con respecto a las imperiales. Y cuando se documentan se leen en clave de excepcionalidad o se presume su transformación en una *provincia Caesaris*, aspecto que retomaremos en el siguiente apartado (3.1).

Por otro lado, la base para construir el modelo censual y tributario de las provincias imperiales no se fundamenta en criterios filológicos muy distintos, basados en la transmisión del *tributum* republicano sobre los *cives Romani* a los provinciales, toda vez el *tributum ex censu* (no así el censo) había dejado de recolectarse desde el 167 a.C. De este modo el *tributum* gayano, propio de las provincias imperiales, implicaba la sujeción directa entre el *fiscus* imperial y el individuo como sujeto fiscal sometido a las dos figuras generales de imposición directa: el *tributum capitis* y el *tributum soli*. De este modo el censo provincial que da comienzo con Augusto habría suministrado una base informativa sistemática, que englobaría de modo centralizado toda la información necesaria sobre los sujetos y sobre sus propiedades con el fin de recaudar ambos *tributa*. Con este objetivo, los *censitores*, *procuratores* y *legati ad census accipiendos* serían los enviados directos por el poder imperial para registrar individualmente a cada uno de los provinciales en las provincias imperiales. El papel atribuido a los encargados del censo se asienta además en una circunstancia compartida en las provincias imperiales de Occidente, en donde el interés político del emperador por controlar aquellas con destacamentos militares suele coincidir, por razones obvias, con las situadas en zonas confinales, más inestables y sin la tradición urbana de la zona oriental del imperio. Ello daría el contexto apropiado para que el Estado se involucrara en el cómputo directo de no ciudadanos, cuya escasa adaptación las estructuras organizativas romanas implicaría una injerencia directa en el registro de los bienes y de las personas, más aún en las zonas carentes de una experiencia estatal previa, como el propio Noroeste.

La polarización que se produce entre ambos tipos de provincia se reduce al procedimiento fiscal y el destino de los fondos recolectados: el *fiscus* de las provincias imperiales (subdividido a su vez en determinados *fisci* como unidades menores) y el *aerarium* central del templo de Saturno bajo gestión del Senado. Algunas citas aisladas como la de Dion Casio, quien afirma que “The procurators [...] he sends out to all the provinces alike, to those of the people as well as to his own [...] but the proconsuls may exact the tribute from the people (*démon*) they govern” (53, 15, 3; trad. de E. Cary), sirvieron a Mommsen como prueba para apuntalar su constructo teórico y señalar que en las provincias senatoriales “il n’y avait pas en ce sens d’impôt romain direct” (vol. V, 1896: 299) y no era por tanto necesario la implantación del censo provincial. Sin embargo, como el mismo Dion Casio recoge anteriormente, las excepciones parecen ser numerosas respecto al esquema administrativo uniformizante que se nos presenta: “Some emperors have sent men of their own choosing of these [senatorial] provinces also, and have allowed certain of them to hold office for more than a year; and some have assigned certain provinces to knights instead of to senators”. (53, 14, 4). La identificación entre el *tributum* republicano y el *tributum* de las provincias imperiales sobre el que tácitamente se reproduce una forma de censo individual, basada en la declaración personal generalizada (*professio*) que recuerda a la descrita por Livio *inter gradus dignitatis fortunaeque* en el contexto de la organización serviana para asignar una *classis* (1, 42, 4-5), carece sin embargo de bases para sustentar esa afirmación.

En realidad, la principal fuente disponible sobre el censo provincial de las provinciales imperiales son las expresiones epigráficas de los mencionados *legati ad census accipiendos*, *censitores* y *procuratores ad census accipiendos*. Sin embargo, la información que proporciona es fundamentalmente prosopográfica y sólo permite adivinar labores de censo para una provincia y momento concreto. De estos testimonios no puede extraerse cómo se desarrolla el proceso de elaboración del censo, qué tipo de información recoge o si la responsabilidad es efectivamente individual. De hecho su desigual distribución en el tiempo y en el espacio ha llegado a plantear que no existiera en realidad una labor de censo sistemática y periódica, salvo algunos casos aislados como Egipto (cada catorce años). Sobre la cuestión de la periodicidad del censo, el principal interrogante ha girado en torno a si los *legati ad census accipiendos* deben identificarse o no con los gobernadores provinciales, y qué papel desempeñan los *legati* consulares en las obras de censo, para lo cual se han planteado opiniones muy dispares (vid. Jacques, 1977; Thomasson, 1982). Basta con señalar en este sentido algunas soluciones planteadas por autores como Brunt (1981: 163-66), para quien habría que distinguir entre los censos del gobernador, que efectúa una mera actualización regular y periódica, y los censos no rutinarios que, al implicar intervenciones de mayor entidad o de carácter novedoso, se entendían como una operación prestigiada socialmente. Ello explicaría que, a diferencia de las labores rutinarias del gobernador, estas labores excepcionales sí fueran visibilizadas y rememoradas en el medio epigráfico. De opinión semejante es Aichinger (1992) al plantear la existencia de dos tipos de censo, el “censo pequeño” realizado por el gobernador de manera periódica, y un “censo grande”

realizado por *legati* con un encargo específico. Es decir, la continuidad del censo se puede intuir pero ni siquiera puede confirmarse a través de los testimonios con los que contamos. Menos aún, puede esperarse entonces un procedimiento tan definido y sistemático como el que implica el registro de cada uno de los bienes por parte del *fiscus*, que sólo se basa en el contenido dado al *tributum* como figura fiscal.

Ello nos lleva a una segunda cuestión. Los estudios que han abordado la terminología fiscal romana para el periodo alto-imperial han puesto en evidencia que el *stipendium* y el *tributum* funcionan como una endíadis que simplemente sirve para referir las cargas tributarias de manera genérica, pero que se ha desligado totalmente del contenido republicano. Es decir, ni sigue una lógica marcada por la dualidad gayana de las provincias senatoriales e imperiales, ni presupone un contenido o una forma de tributar distinta según el valor dado tradicionalmente al *stipendium* o al *tributum* (Grelle, 1963; France, 2001; Ñaco, 2003; Pereira, 2005a; Soraci, 2010).

Esta perspectiva abre una vía interpretativa de gran importancia, que no ha puesto el acento en la dicotomía gayana y en figuras fiscales estancas, sino en la cuestión de la responsabilidad fiscal individual o comunitaria respecto al tributo. Con el fin de no avanzar conclusiones que serán tratadas monográficamente en distintos puntos de la tesis, es suficiente con señalar que autores como Grelle (1963) o Brunt (1981), a partir de los tratados de agrimensura y de fuentes jurídicas, enfatizaron la importancia de la responsabilidad fiscal colectiva de las comunidades peregrinas y de los municipios, siendo sólo el expediente de los *agri divisi et assignati*, característico de las centuriaciones, el sometido a un vínculo directo entre el *possesor* y el estado romano. El censo provincial no tendría por tanto un objetivo dirigido al registro individual de los bienes y a la tributación predial individual, sino a una información cuyo grado de detalle sería oscilante según el tipo de imposiciones fiscales. Algunas de estas conclusiones dan un contenido sensiblemente distinto al censo provincial y abren la puerta al papel desempeñado por las comunidades provinciales en su proceso de elaboración, como se tratará más adelante (cap. 5).

### **3.1 Las “excepciones del censo provincial”: provincias senatoriales e imperiales.**

Aunque el censo en las provincias senatoriales no sea nuestro principal foco de interés, sí lo es en tanto en cuanto algunos de los testimonios que cuestionan de forma clara la pretendida dicotomía provincial han sido considerados como manifestaciones marginales excepcionales, en ocasiones mediante interpretaciones forzadas que sólo tienen por objeto apuntalar el constructo gayano de la dicotomía provincial de funcionamiento. Ésta, como decíamos, no contempla que Roma impusiera un censo en las provincias senatoriales, lo que ha tenido un doble efecto: o bien recogen una anomalía marginal o la existencia de este tipo de labores debe convertirse en indicativo de un cambio del estatuto como *provincia Caesaris*. Veamos la interpretación reciente de dos ejemplos:

El primer caso contradictorio lo encontramos en el censo realizado por Torcuato Novelio Ático, del que se dice [*leg(atus) a*]d cens(us) accip(iendos) et dilect(um) et [*proco*]s provinciae Narbonensis (CIL XIV, 3602), sobre el que se han aducido visos de excepcionalidad para mantener la pretendida inexistencia del censo en las provincias senatoriales (Lo Cascio, 2000b: 213-14). El primero de estos elementos extraordinarios se produce ante la circunstancia, defiende este mismo autor, “perché lo conferma Plinio, che Torquatus Novellius Atticus non raggiunse il consolato e che dunque la funzione di censitore venne rivestita, eccezionalmente, da chi non aveva rango consolare. Il primo elemento di eccezionalità della funzione di questo personaggio è appunto il fatto che si tratta di un pretorio” (*ibid.*). A mi modo de ver, la expresión pliniana *ad proconsulatum usque e praetura honoribus gestis* (Plin. NH., 14, 22, 144) no necesariamente debe implicar un salto de la pretura al proconsulado, sino una sucesión de *honores* de uno hasta el otro que abarca igualmente el consulado como cargo intermedio, omitido por economía del lenguaje. No habría por tanto nada de extraordinario en su *cursus honorum*. Por otro lado, el *dilectus* como competencia infrecuente en las labores de censo es cierto que resulta extraordinaria, pero consta de pleno sentido si nos atenemos a la historia administrativa y al papel que el censo desempeñó en las primeras décadas del Principado. Los nuevos mecanismos de funcionamiento que la fiscalidad imperial establece dan comienzo con la organización y registro censal del 27 a.C. para el conjunto de las Galias (Liv. Per., 134; D. Cass. 53, 22, 5). La conversión a provincia senatorial el 22 a.C. no parece representar una ruptura en esta práctica como se ha supuesto (Lo Cascio, 2000b: 213-14; *vid.* 207, n. 7) con el fin de defender el carácter excluyente del estatuto senatorial en relación al censo. De hecho, la sucesión hasta el año 12 a.C. de diferentes tumultos *qui ob censum exortus in Gallia erat* (Liv. Per. 139) refleja tanto la continuidad de su elaboración como la identificación del censo como causa principal del conflicto. Ya fuera por una mala estimación de la capacidad contributiva de determinadas poblaciones por parte de los agrimensores para establecer el montante comunitario del *tributum soli* o por la falta de adaptación de la estructura política gala, las desavenencias bien pudieron mantenerse en el reinado de Tiberio, época en que Torcuato Novelio realiza el censo. Que pudieron existir defectos estimativos en algunos de ellos queda probado, al menos, para el caso de los alejados frisonos, grupo incluso en la tarea censal acometida para el conjunto galo por Druso (Liv. Per., 138-139) y cuyas repercusiones en forma de revuelta se expresan en época de Tiberio tras un proceso acumulativo de depauperación y construcción de fuertes vínculos de dependencia (Tac. Ann., 4, 72)<sup>46</sup>. Por otro lado, una prueba de esta falta de

<sup>46</sup> Aunque en ocasiones se espere una reacción inmediata, este ejemplo narrado por Tácito desvela el proceso paulatino de sometimiento social construido de manera orgánica a partir de la exigencia de un excedente como motor de cambio en las relaciones sociales y desintegrador de los vínculos establecidos en el anterior orden socioeconómico. Según se observa en el texto de Tácito, el conflicto descrito no es sino la consecuencia última de la mala estimación de Druso, cuya exigencia presumiblemente desmedida de piezas de cuero, genera primero la paulatina conmutación de estos bienes por tierras, esclavitud por deudas después y, finalmente, el *tumultus* durante el gobierno de Tiberio al que antes nos referíamos. Cabe aclarar por otro lado que la fórmula fiscal aplicada a los frisonos no parece ser en este caso el *tributum soli* (como sin duda sí sería predominante en la Narbonense desde época imperial temprana al contar con una situación preexistente de mayor injerencia de Roma en fenómenos de reorganización, apropiación y reordenación del territorio, no exentos tampoco de conflictos desde época temprana: *vid.*

asimilación la encontramos incluso en época de Claudio, quien todavía se refiere a la elaboración del censo en ciertas zonas galas como *novum opus et inusitatum Gallis* (FIRA2 I, 284-5). Aunque lógicamente en la Narbonense no se trataría de un procedimiento tan nuevo, nada indica una situación distinta si consideramos que hay constancia de oficiales designados para todas las provincias galas desde momento temprano (aunque ulteriormente pudieran dividirse según provincias o distritos) como el de Germánico el año 14-15 d.C.: *agendum Galliarum censui tum intentum* (Tac. Ann., I, 13), *Germanico per Gallias, ut diximus, census accipiendi excessisse Augustum adfertur* (Tac. Ann., I, 33), *missit ad census Galliarum P. Vitellius et C. Antio* (Tac. Ann. 2, 6)<sup>47</sup>. Esta relación directa entre los tumultos por razones fiscales que anduvieron detrás de la mayoría de revueltas del primer siglo d.C. en ámbito galo junto a otras zonas de Imperio (vid. Corbier, 1988; Woolf, 2012) creo que puede explicar este componente militar del *dilectus* reconocido al *censitor* Torcuato Novelio dentro de su tarea de registro y reorganización socio-política y fiscal, también en la Narbonense.

El segundo contraejemplo lo personifica D. Terencio Gentiano, heredero de diversos lazos de clientela contruidos por su padre como gobernador de la recién conquistada provincia Dacia en época de Trajano. Fue, de hecho, *patronus* de la colonia *Ulpia Traiana Sarmizegetusa*, nueva capitalidad provincial y posiblemente agraciada ya desde su fundación con el *ius Italicum*<sup>48</sup> (D. L, 15, 1, 8-9). El epígrafe que nos da esta información (CIL III, 1463=ILS, 1046) menciona a su vez su labor como *censor* o *censitor provinciae Macedoniae*, un cargo de responsabilidad como hombre de confianza de Trajano. De hecho, así lo demuestra su participación como *comes* en las guerras contra los partos y en las ceremonias de triunfo del 116 d.C., con juegos circenses dedicados *pro salute* explícitamente al emperador y a sus más directos colaboradores entre los que él se encuentra (AE, 2005, 305). Su participación como enviado directo del emperador para acometer esta tarea en una provincia del *populus* representa, huelga decir, nuevos problemas ante la tesis de la dicotomía provincial durante el Imperio en relación al censo. Este testimonio ha intentado interpretarse como una manifestación de labores censuales en calidad de gobernador provincial en vez de como enviado *ex profeso* por parte de Trajano/Adriano, manteniendo explícitamente la vigencia de los esquemas perfilados por Mommsen, Marquardt y Weber (Lo Cascio, 2000b, 213). Para Lo Cascio, el problema puede solucionarse apelando a su vuelta como *provincia Caesaris*, expediente mantenido durante veintinueve años durante el

---

Clavel-Lévêque, 1988: 194-195) sino el *stipendium* en especie, más común en época republicana conforme se va desarrollando la fiscalidad arcaica del *vectigal certum* (vid. Naco, 2003).

<sup>47</sup> Otros censos, como el más tardío del 61 d.C., presentan algunos problemas, pues a pesar de constar de una referencia global para el conjunto de las provincias galas (Tac. Ann., XIV, 46: *census per Gallia a. Q. Volusion et Sextio Africano Trebellioque Maximo acti sunt*), la inscripción AE 1972, 175 refleja la asignación de Quinto Volusio a la provincia belga. De tal modo que no puede conocerse con rotundidad la asignación provincial de los restantes y si alguno de ellos pudo relacionarse con un censo en la Narbonense.

<sup>48</sup> En la lista de colonias de la *forma censualis* de Ulpiano se habla inmediatamente antes de la colonia dacia de Zerna a la que se dice que Trajano concedió el derecho itálico, por lo que parece probable que se omitiera para el caso de *Sarmizegetusa* al ser extensible su concesión con el mismo emperador. El contraste se establece en este caso con respecto a las colonias de Napoca, Apulo y el pueblo de Patavisa, que no lo habrían conseguido hasta época de Septimio Severo.



siglo I d.C.<sup>49</sup> (15-44 d.C.). Ante esta interpretación que, en último término, sirve para defender la excepcionalidad de la medida frente a la norma de la indiferenciación cada vez más acusada entre ambos tipos de provincias (*cfr.* Grelle, 1963, 1990; Fergus Millar, 1966) deben abordarse dos cuestiones. La primera, y quizás la más evidente, sea el contrasentido que se produce ante la presencia de un gobernador como *legatus Augusti pro praetore* en una provincia que se presume senatorial tal y como observa Lo Cascio, apoyándose en la inscripción que Claudiano Maximo, centurión de la *legio I Minervia*, le dedica (*AE* 1924, 57). Sin embargo, la referencia a este cargo no resulta en una prueba suficiente, como veremos, para afirmar este tránsito hacia la administración imperial, al menos no con anterioridad a las reformas de época Severa, en donde se recoge ya la figura de L. Egnatelio Sabino *procurator Augustali ad census accipendos Macedoniae* con un *cursus honorum* de claro orden ecuestre en este caso (*CIL* VIII, 10500). Terencio Gentiano, por el contrario, ostenta un rango consular bien conocido, como reflejan diversos cargos de los que tenemos constancia: tribuno militar, tribuno de la plebe, cuestor, pretor<sup>50</sup>, cónsul sufecto en el 116 d.C. y pontífice. El rango consular en los administradores de las provincias del César fue una práctica común, sin embargo es preciso diseccionar la carrera magistratual, reconstruida a partir de los tres epígrafes que lo nombran como conjunto unitario, para poder extraer algunas conclusiones:

En primer lugar está la cuestión de si Terencio Gentiano realizó esta labor de censo como una de sus tareas en calidad de gobernador provincial, que es lo que en último término justificaría esta conversión a provincia *Caesaris*, o lo hizo en distintas etapas. En este sentido resulta sorprendente que la inscripción antes mencionada (*AE* 1924, 57) únicamente recuerde su cargo como *legatus Augusti pro praetore*, sin referencia alguna al censo ni a la provincia de Macedonia, tan sólo se mencionando la imposición de límites entre *geneates* e *[-]ixinos*, de los que no se dispone de mayor información. El hecho de que su labor como *censitor* esté omitida, se ha explicado en otros casos como manifestación de dos niveles en la elaboración del censo (se habla incluso de un censo doble, *vid.* Aichinger, 1992; *cfr.* López Barja, 1999: 349): uno rutinario con sucesivas actualizaciones y de escaso reconocimiento; otro exhaustivo para áreas de cierta envergadura, de forma que sería este último caso el que correspondería con las alusiones explícitas encontradas en el ámbito epigráfico como marcador de prestigio social, lo que no ocurriría con la modesta tarea antes referida. Esta posibilidad no se da en el caso de Terencio Gentiano como demuestra el epígrafe métrico inscrito por su hermana, en

<sup>49</sup> Desde el reinado de Tiberio, y al parecer a petición propia por razones fiscales (*onera deprecantes*) (*Tac. Ann.*, I, 76, 2) hasta Claudio, quien *senatui reddidit* (*Suet. Claud.*, 25, 3).

<sup>50</sup> Quizás pudiera añadirse su cargo como *praetor tutelaris*, si lo identificamos con el Terencio Gentiano que aparece en *AE* 2006, 118. En tal caso conoceríamos el nombre de la hermana, Terencia Flavula, virgen vestal, que habría sido la dedicante de la inscripción métrica registrada en una de las pirámides de Egipto recogiendo la labor de su hermano en el censo (*ILS* 1046a): *Vidi Pyramidas sine te, dulcissime frater, et tibi, quod potui, lacrimas hic moesta profudi, et nostri memorem luctus hanc sculpo querelam. Sit nomen Decimi [G]entia[n]i pyramide alta, pontificis comitisque tuis, Traiane, triumphis, lustra sex intra censoris, consulis, exst[et]*. A mi modo de ver es muy posible que se trate del mismo individuo de *ILS* 1049 por la referencia a la labor de censo y, sobre todo, por el recuerdo al triunfo de Trajano. La referencia a la pretura tutelar plantea problemas de cronología si aceptamos la creación de la magistratura en época de Marco Aurelio (*SHA, Marc. Aur.*, 10, 11; siendo el primero Arrio Antonino, según *CIL* V, 1874).

donde tan sólo recoge sus dos actividades más meritorias: el censo y su consulado sufecto, sin siquiera referir su actividad como legado propretor, quizás por ser gobernador con posterioridad a su labor previa del censo macedónico (*CIL* III, 21). En tal caso, habría que entender la *limitatio* dentro de su labor jurisdiccional como gobernador, en vez de como tarea en su etapa previa de *censitor*. Sea como fuere, parece razonable descartar, por tanto, que esta omisión en *AE* 1924, 57 se deba a una tarea burocrática secundaria y, quizás, sea indicativa de que el censo fue algo más que la *limitatio* entre *geneates* e *[-]ixinos*. La omisión proporciona un primer indicio de duda sobre la conexión del censo testimoniado de la provincia macedónica con el ejercicio de gobierno de la misma, quizás cargos sucesivos, a lo que podría añadirse la forma separada en que se presentan ambas funciones en *CIL* III, 1463 como *legatus Augusti* y, más adelante, su papel como *ensor provinciae Macedoniae*, constando entre medias la alusión a *pontifex* cuando la fórmula común (y ampliamente representada en la epigrafía) para referir las funciones censuales del gobernador es *legatus ad censos accipendos*. Es semejante a otros casos en donde se infiere también una distinción entre ambas funciones como ocurre en *CIL* V, 7784 entre ejercicio de gobierno y registro de bienes y personas: *[p]roc(uratori) provinc(iae) Lusita[n]iae, proc(uratori) provinciae / [T]hraciae, censori eius/[de]m prouinciae*.

Por otro lado, la existencia de un legado propretor no es prueba suficiente para afirmar la conversión de una provincia, aunque resulte anómalo. Así ocurre, por ejemplo, en la experiencia de Bitinia-Ponto, en donde aparece el sucesor de Plinio el Joven en su gobierno, *C. Cornutus Tertullus*, del que se dice *legatus pro praetore divi Traiani [Parthici] provinciae Ponti et Bith[yniae]*, si bien sabemos que no es hasta época de Antonino Pío cuando se produce la conversión a provincia imperial (Mastino y Zucca, 2014: 205). Un argumento definitivo lo encontramos finalmente en la alusión en un rescripto de Adriano a Junio Rufino como procónsul de Macedonia poco después, certificando su continuidad como provincia senatorial (*D.* 22, 5, 3, 3 = *Call.* 4 de *cognit.*). También sabemos por un diploma militar datado el 19 de junio del 120 d.C. (*CIL* XVI, 67=AE 1979, 515) que su posible sucesor en el cargo, Octavio Antonino, “était alors sans doute proconsul de Macédonie” (Bérenger-Badel, 2007: 142). Sus disposiciones en el conflicto liminal entre *geneates* y *-xinos*, podrían haberse aplicado a partir de sus atribuciones como gobernador sin inferir por ello un necesario cambio estatutario de la provincia, o bien como *ensor* en un momento anterior a su etapa como gobernador. En el rescripto que le dirige personalmente Adriano (*Coll.* 13, 3 = *Call.* 3 de *cognit.*; *cfr.* *D.* 47, 21, 2) tan sólo establece la magnitud de las penas por corrimiento de mojones en función de la edad, la voluntariedad y el rango, sin más especificaciones. Podría ser un caso comparable al que tenemos para la provincia de África (74 d.C.) en donde se ha apuntado igualmente a Rutilio Gálico como enviado de Augusto en calidad de censor para dirimir sendas disputas entre Lepcis Magna y Oea (AE 1979, 648 y 649) y la división entre la ‘nueva’ y ‘vieja’ provincia de África (Elliot, 2004: 53; 94-98), si bien este episodio presenta algunas oscuridades. También la participación de Mucio Vero en las disputas fronterizas entre los *bendiparoi* y otra comunidad de nombre desconocido cercana a Filipópolis (AE 1979, 552; *IGBulg.* 3, 1472; 3, 1455; Elliot, 2004: 155-156), y del que se conoce su misión por otro testimonio como *censitor*

*provinc(iae) Thraciae* (CIL V, 7784) puede considerarse un caso análogo posterior (111-112 d.C.; Le Glay, 1981: 182).

Así pues, aunque no nos podamos extender más en este tipo de cuestiones, que sin duda requerirían un trabajo monográfico de envergadura, basta por ahora con reafirmar nuestro cuestionamiento sobre la lógica administrativa que Gayo presenta de un modo dicotómico y simplificado. Así dan muestra también los cada vez más habituales *mandata* a gobernadores y oficiales que actúan en provincias senatoriales y sin distinción según fuera la naturaleza de su cargo: *procuratores*, *legati*, *proconsules*, etc. (e.g. D. Cass. 53, 15, 4; D. 1, 16, 6, 3; 47, 11, 11, 6; 48, 3, 10; 48, 19, 27, 1-2). La capacidad de actuación del *Princeps* para el conjunto del Imperio no parece atenerse a la dualidad provincial superando tales demarcaciones. Salvo algunas escasísimas excepciones en que la decisión del emperador fue dirigida únicamente a las provincias teóricamente adscritas a su dominio, como el caso, quizás por ser de época imperial temprana, de Cornelio Galo, excluido sólo del gobierno de provincias dependientes del príncipe (Suet. *Aug.* 66; D. Cass. 53, 23, 6: *vid* Millar, 1966: 160), el modo de proceder fue más bien indistinto y encuentra, en términos de nomenclatura fiscal, una consecuencia en la confusión terminológica reinante.

De nuevo las injerencias cada vez más constantes del emperador en el conjunto del imperio sin atenerse a tal diferenciación nos hablan de una praxis administrativa más tendente a la adaptación y la flexibilidad que al dogmatismo jurídico. El poder del *Princeps* y el vaciado de las instituciones capaces de actuar como mecanismos de control convirtieron el entramado provincial en un medio donde se impuso el *imperium* del *Princeps* hasta el punto de configurar un sistema de implicaciones fiscales y administrativas vertebrado por su propio poder despótico.

## 4. Censo y peregrinidad en los sistemas de tributación fija: *tributum capitis* y propiedad.

### 4.1 *Laographia* y registros “casa por casa”: Egipto.

El desarrollo historiográfico que ha seguido el *census* provincial en las últimas décadas debe ser considerado desde dos perspectivas temáticas distintas: las que llamaríamos de la *diversidad* y de la *bipolaridad* provinciales, a partir de los esquemas perfilados anteriormente (cap. 3). En oposición a un esquema forzosamente unitario en el proceso de elaboración del censo se ha construido un modelo teórico que si bien ha mantenido la noción de la *bipolaridad* ya comentada entre provincias senatoriales e imperiales, ha huido en líneas generales de las pretensiones por establecer sistemas fijos en el tiempo y el espacio. El estudio sistemático de los testimonios que contamos ha revelado la imposibilidad de fijar un marco de análisis de esas características, no sólo por lo fragmentario de las fuentes, sino por las evidentes contradicciones que aparecen en su contraste. Pero a pesar de la observación generalizada de que la praxis administrativa romana fue más flexible y adaptativa que normativa en el mundo provincial, no se han planteado alternativas en relación al censo, que sigue haciéndose depender en gran medida del procedimiento republicano relacionado con el tributo ciudadano suspendido desde el año 167 a.C. y que en época imperial recae sobre las provincias imperiales. Esto se observa, por ejemplo, en la presunción de un *tributum capitis* generalizado sobre la renta o de carácter fijo, especialmente en las provincias imperiales que, como hemos visto, establecen una obligación fiscal que une de manera personal al individuo y sus propiedades con el fisco (Lo Cascio, 2000b: 205; 2000a: 188 y ss.; *cfr.* Sastre, 2003: 159-163). Se perpetúa, de este modo, la confusión terminológica que acompañó a los mismos autores antiguos en relación al *tributum*, como si la palabra, su origen etimológico y la continuidad en el uso fueran suficientes para obviar el paso fundamental que se produce entre las formas de tributación ciudadana y la tributación imperial. La primera, amparada en la *professio* del ciudadano y su personalidad jurídica, gravada de modo progresivo en franjas según sus capitales y bienes; la segunda, fundamentada en la estimación sobre la producción del suelo agrario. Este tránsito supone un cambio de concepción muy importante. Mientras la primera entra en consonancia con una idea de comunidad cívica que tiene por sujetos de la imposición fiscal a los individuos particulares que las conforman (las unidades domésticas a partir de la *patria potestas*), el procedimiento de exacción provincial concuerda con el nuevo sentido adquirido del *dominium* en su dimensión territorial y material.

Esta ambigüedad queda presente, por ejemplo, en algunos argumentos esgrimidos para defender la expansión del *tributum capitis* desde Egipto, que se convierte en el “laboratorio fiscal” desde época augustea para proceder a su exportación posterior con

carácter universal como ha defendido Rathbone (1993a: 99). Así, dentro del cuadro coherente y exhaustivo que el autor observa para los *nomoi* egipcios, reconoce asimismo una serie de indicios cuestionables a la hora de analizar los cauces de su expansión al resto de provincias. Según su lectura el origen de este impuesto debe relacionarse con la *laographia*, a partir de la cual pudo establecerse un impuesto anual y personal que establecía una cantidad fija, recaudada con seguridad a partir del año 24/23 a.C. y que representaría una innovación romana <sup>51</sup>. Su etimología hace referencia en sí misma a un censo, “el registro de *laoi*”, siendo los *laoi* los habitantes de la *chora* en oposición a Alejandría como única comunidad exenta y al grupo de las élites urbanas de los *metropolitai*, que debían pagar una cantidad reducida. Es por tanto, un impuesto no progresivo y que no distingue entre franjas de riqueza, pero que tiene por objeto gravar a una masa social mayoritaria y probablemente poco heterogénea como sería el campesinado en tanto que formación socioeconómica sometida al centralismo egipcio. Siguiendo a Rathbone, el procedimiento de recaudación de este impuesto no se basaría en un registro propio (como el que sí observa para el catastro egipcio, independiente respecto al censo) sino a través de la imposición del censo provincial general del año 10/9 a.C. “in order to improve registration for the poll tax” (1993a: 90).

Desde esta línea interpretativa, el censo aplicado en Egipto y que posteriormente se extendería al resto del imperio con variaciones es el mejor conocido gracias a los testimonios papirológicos, lo que también ha propiciado, precisamente, el abuso en la traslación de su contenido a otras provincias por analogía. Veamos primero algunas de sus características. Parece claro que, aunque la *laographia* se pagara anualmente, la elaboración del censo se acometía cada 14 años por parte de diferentes oficiales de la administración, que efectuaban el conocido registro “casa por casa” (*kat’oikian*). De este modo se ajusta la periodicidad del censo con la edad en que los individuos deben hacer frente a sus obligaciones fiscales en aras de simplificar el procedimiento. Bastaba con indicar los años restantes que les quedaban a los menores nacidos durante el censo anterior (y no registrados por ello) antes de comenzar a hacer frente a su cantidad correspondiente de capitación. Catálogos sistemáticos de estas declaraciones de censos “casa por casa” como el elaborado por Bagnall y Frier<sup>52</sup> (1994: 181-312) nos permiten extraer algunas conclusiones sobre sus características esenciales:

- El declarante era el principal de cada casa, quien debía reconocía las relaciones familiares de las unidades domésticas. Así aparece en la inmensa mayoría de los registros. Podían ser varios cuando no existía una diferencia de estatus familiar por ser hermanos (*e.g.* 33-Ar-1 en *SB* X 10759; 75-Ox-1 en *P Oxy.* II, 361; 131-Ox-10 en *PSI* I

<sup>51</sup> En este sentido existe un debate todavía no resuelto entre quienes defienden la autoría romana del impuesto o un origen ptolemaico. Rathbone se inclina sobre la primera opinión, reconociendo la influencia de otros impuestos personales precedentes, de época ptolemaica, cualitativamente distintos pero necesarios para el desarrollo de la maquinaria burocrática que Roma encuentra a su llegada. Tal sería el caso de la *halike* (impuesto de la sal: con cantidades fijas con diferencias por sexo), o el “*obol-tax*” (de origen macedónico y sin distinciones étnicas, aplicado a hombres, y que representaría el sometimiento a la nueva élite griega ptolemaica).

<sup>52</sup> Se sigue en lo sucesivo la nomenclatura establecida por estos autores para el censo *kat’oikian* acompañado de su referencia papirológica estándar.

53, col. X; 145-Ar-21 en *P. Wisc.* I 18; 173-Pr-10 en *P. Brux.* I 10; 187-Ar-23 en *P. Tebt.* 504; 201-Ar-6 en *P. Fam. Tebt.* 48). También hay alguna excepción al incluir a los hijos como declarantes junto al padre (131-He-4 en *P. Bon* I 18, col. ii). El declarante solía ser hombre, aunque contamos también con algunas excepciones como el caso de *Vettia*, hija de *Vettius*: 173-Ar-9 (*cfr.* BGU II, 447 = I, 26), si bien su testimonio quizás deba relacionarse con su condición jurídica personal como se infiere de su onomástica latinizada. Otro caso lo encontramos en 173-Ar-10 (*SB* VI 9573), también con estructura onomástica latinizada. Sin embargo, esta nueva excepción puede explicarse por el hecho de ser una unidad doméstica ocupada sólo por mujeres, la declarante *Petronia Gaia* y su hermana *Petronia Gemella*, tal y como ocurre igualmente en 173-Pr-3 (*P. Brux.* I 3), 173-Pr-12 (*P. Brux.* I 12) y, quizás (por lo fragmentario), en 215-Ar-8 (*P. Tebt.* II, 446). 173-Pr-13 (*P. Brux.* I, 13) presenta también una anomalía al aparecer todos los ocupantes como declarantes al censo, hombres y mujeres, sin un parentesco claro entre todos ellos.

- El registro de la edad era sistemático, tanto a los menores por lo ya visto en relación a la *laographia*, como a personas exoneradas de estas cargas una vez cumplidos los 62 años de edad (a veces hasta los 65, *vid.* Rathbone, 1993a: 87). En ocasiones aisladas se recogían también algunas características de tipo étnico.

- En alguna ocasión se recogen también los oficios. Sin embargo, dado que no era la norma habitual, considero que podrían existir razones fiscales detrás de estas excepciones. Algunos ejemplos podemos encontrarlos en *SB* VI 9572 donde aparece un albañil (61-Ar-1), también una mujer tejedora (187-Ar-4 en *BGU* I 115 i = W. Chr. 203#), un limpiador de lana (187-Ar-11), tejedor de lino (197-Ar-16), un vendedor de vino (201-Ar-5 en *BGU* XIII, 2226), etc. El hecho de que aparezcan en la misma unidad doméstica, en donde no se explicita el oficio de los otros integrantes de la casa, podría indicar la necesidad por parte de la administración de recolectar los datos de aquellos oficios sobre los recaía algún tipo gravamen, como la *cheironaxia* sobre actividades artesanales y el comercio, también una cantidad fija que el estado cobraba de modo paralelo a la *laographia* (Capponi, 2011: 24). También se explicitan los individuos que desempeñaran labores sacerdotales. Algunos de estos ejemplos (*e.g.* 201-Ar-2 en *PSI* X 1147 o 215-Ar-2 en *SPP* II, p. 29 no. 3, i) en *Arsinoe* no resultan tampoco extraños si tenemos en cuenta la recolecta del *syntaximon* en este *nomos* particular, basado en cantidades fijas dedicadas al mantenimiento de templos y diversas actividades culturales<sup>53</sup> (Otto, 1905: I, 382, n. 1; en Keyes, 1931: 382, n. 1) del que los sacerdotes estarían exentos.

- El registro *kat'oikian* marca el indicador de la *origo*, no el *domicilium*. Sabemos por un edicto del pretor Vibio Máximo (*P. Lon.* 904, parte 3) que se requería el retorno

---

<sup>53</sup> Otros autores como el mismo Rathbone aportan otra interpretación al contenido del *syntaximon* como suma compleja de distintas cargas fiscales como la *haliké* o la propia *laographia*, lo que explicaría asimismo la práctica inexistencia de referencias a esta última en la documentación papirológica de *Arsinoe*.

físico de los habitantes que residieran fueran del *nomos* para efectuar el nuevo censo. De este modo es el distrito al que jurídicamente se liga el individuo mediante el censo donde debe satisfacer sus obligaciones fiscales, no su lugar de residencia. Por otro lado, la datación de este edicto fragmentario, el séptimo año del gobierno de Trajano (103/04 d.C.), permite comprobar la continuidad ininterrumpida de los ciclos censuales egipcios cada catorce años si hacemos una suma sencilla a partir del primero del que tenemos certeza cronológica (33/34 d.C.). Este sería, por tanto, el sexto ejercicio<sup>54</sup>. En cualquier caso, es un proceso capitalizado por el Estado cuyos oficiales se desplazan al lugar de los censados y no a la inversa, lo que presenta una diferencia procedimental, como veremos, respecto a otros casos como el de Arabia.

- Un rasgo peculiar lo encontramos en el registro de los bienes inmuebles, que Rathbone considera independiente al censo. En éste sólo se incluirían las edificaciones de la *chora* junto a sus respectivos dueños, mientras otras propiedades gravadas con el *tributum soli* se recogen separadamente. Ello supone una anomalía pues, como Nicolet ha observado de forma genérica para el censo provincial<sup>55</sup>, en las ciudades habitadas en su mayoría por no ciudadanos apenas pueden distinguirse el censo de sus poblaciones con respecto a los registros de sus bienes (Nicolet, 1988: 213), hasta tal punto que, en su opinión, “à vrai dire, il est certainement artificiel, pour le *census* provincial comme pour celui des citoyens romains, de vouloir distinguer trop strictement les personnes et les choses” (Nicolet, 1988: 194). Sin embargo, aun aceptando este rasgo como probable en el caso de Egipto, las dudas surgen cuando Rathbone defiende la expansión de este procedimiento censual y forma de capitación a todas las provincias del Imperio siguiendo una “tendency towards standardisation”. Para este autor, la translación del censo y el *tributum capitis* a otras provincias carece de cambios cualitativos, siendo siempre una cantidad pagada en moneda y con carácter fijo y no progresivo, es decir, arbitraria respecto a los bienes del *patrimonium* personal. Estas variaciones, como muestra el caso de Siria recogido en la *forma censualis* de Ulpiano (*D.* 50, 15, 3), serían sólo de naturaleza cuantitativa, es decir, con variaciones entre provincias respecto a la horquilla de edad sujeta a contribuciones obligatorias. Así, mientras en Egipto el periodo de imposición se extendía desde los 14 a los 62<sup>56</sup>, en Siria abarca de los 14 a los 65 años. También la extensión a otros grupos sociales sujetos a capitación, como las mujeres en el caso sirio (de los 12 a los 65 años), mientras en Egipto sólo pesa sobre los hombres. O el caso de los esclavos, sujetos a *laographia* en Egipto, que no aparecen indicados en el caso de la provincia Siria, lo que arroja ciertas dudas sobre su extensión a este colectivo.

---

<sup>54</sup> Sobre la existencia de censos anteriores no podemos detenernos, pues sólo hay indicios como el *P. Oxy.* II, 254, que Rathbone relaciona con el inmediatamente anterior al citado, catorce años antes (19/20 d.C., *vid.* 1993: 89) o el indicado para el 12/13 d.C. tras el hallazgo de Bagnall (*P. Mil* I 3; *vid.* 1991: 260-65) y que han servido para reparar en la posibilidad de que los ciclos censuales inicialmente fueran cada siete años. Rathbone, de hecho, así lo reconoce también para asociar esta periodicidad con el primer censo provincial augusteo (1993a: 90). Por otro lado, Bagnall ofrece algunas dudas sobre si los censos llevados durante todo el siglo I d.C. fueron de carácter sistemático y global (Bagnall, 1991: 255-60).

<sup>55</sup> De hecho, así lo considera también para Egipto (*vid.* 1988: 194).

<sup>56</sup> Algunas veces también, de forma excepcional, se extiende hasta los 65.

Merece ahora la pena detenernos en los argumentos sobre los que se ha sostenido esta pretendida expansión del modo de elaboración del censo y la capitación egipcia a otras provincias, que considero débiles. En primer lugar debe mencionarse que esta neta distinción entre registro personal y fondiario entra en sintonía con el carácter mismo de la *laographia*, pues es evidente que el diseño de este impuesto de cuño romano está dirigido al gravamen de los no propietarios. Por muchos paralelismos que pueda existir entre la *laographia* con la exacción personal *ad hoc* de época ptolemaica, en el fondo subyace una continuidad histórica: la desigualdad en el acceso a la tierra. La articulación de un impuesto que establece una cantidad fija sólo puede formularse en cantidades lo suficientemente bajas como para poder ser cobrado a estas clases mayoritarias, dependientes y no propietarias, e incluso a los esclavos (*e.g.* 145-Ar-12). De esta filosofía fiscal dejan constancia las palabras de Tiberio a Emilio Recto, prefecto de Egipto, cuando parece aconsejarle que no suba este impuesto: “Quiero que mi rebaño sea esquilado, no rapado” (D. Cass., 52, 10, 5; *cfr.* Suet. *Tib.*, 32, 2; Tac. *Ann.*, 4, 6, 7). Es una medida impositiva que se erige en una solución genuina para gravar a una masa social que de otro modo quedaría exenta como sería este heterogéneo grupo, en sus condiciones económicas y jurídicas, que trabaja la tierra sin ostentar su *dominium*, a la par que propicia una reproducción del sistema social mediante cantidades reducidas sobre los *metropolitai*, habitantes de las ciudades que eran gravados a partir de otros medios e instrumentos sobre su actividad económica, cosa que se desprende del registro de determinados oficios (*vid. supra*). El propio edicto antes mencionado del pretor de Egipto se dirige a este subgrupo de campesinos que trabajan en arriendo o son jornaleros, poniendo el censo como condición necesaria para poder adquirir estos derechos sobre la *ge demotiké* (las tierras públicas, reconvertidas desde la *ge basiliké* ptolemaicas), sin referencia alguna a los propietarios, que en principio deberían ser los primeros implicados en un censo. En primer término, esta innovación romana y la separación entre censo y catastro encuentra por tanto su explicación en la propia especificidad socioeconómica de la prefectura egipcia. La inusitada concentración en la propiedad de la tierra entra además en consonancia con las altas cotas de producción de los latifundistas egipcios, como da buena cuenta de ello los altos gravámenes de *tributum soli* capaces de absorber manteniendo su rentabilidad<sup>57</sup> y explotación continuada. Mientras en otras provincias como Sicilia impera una carga sobre la producción del 10% (*decuma*) en Egipto alcanza el 20-30% con pago en especie (Rathbone, 1993: 84). Es además en estos casos donde se materializa una mayor flexibilidad (y sensibilidad) en la valoración de las cargas para cada propiedad, teniéndose en cuenta el tipo de campo y el régimen hidráulico del Nilo que, por su variabilidad, requería una estimación de periodicidad anual. Así aparece, por ejemplo, en la clasificación propuesta de las distintas y complejas categorías fondiarias y catastrales definidas por Ruey-Lin Chang (2014: 101-19) a partir de los nuevos hallazgos papirológicos del *nomos* hermopolitano a finales del siglo I d.C., en donde se

---

<sup>57</sup> Entiéndase *rentabilidad* en su vertiente no ideológica, es decir, no basada en aquella de carácter actualista sobre la optimización de recursos, sino en la existencia de una cierta racionalidad que guía el comportamiento económico en distintas sociedades antiguas (*vid.* Andreau, 2002: 42-43) que, en el caso de Egipto, no asumiría una tendencia deficitaria.



diferencia de forma clara una casuística muy diversa para las grandes propiedades privadas de carácter latifundista. Sin embargo, en los arrendamientos de suelo público se registra de modo separado los titulares de los ingresos (los *Ancianos* como responsables ante el fisco) y los campesinos arrendatarios, cuya producción es además paulatinamente dirigida por el Estado hacia el cultivo de trigo. Para concluir, el mantenimiento de la cantidad requerida de la *laographia* sin apenas cambios en el largo periodo denota el limitado progreso material de estas clases sociales mayoritarias y dependientes asociadas a las labores agrícolas de la *chora* egipcia y de cuyo empobrecimiento nos informa Plinio el Joven (*Pan.*, 31, 6).

Trabajos recientes, mediante la aplicación de sistemas de gestión masiva a los datos censuales papirológicos, igualmente han permitido comprobar la inestabilidad de los ocupantes en las unidades domésticas (*vid.* Hin *et al.*, 2015). Análisis por franjas de edad y comparativas campo-ciudad como las realizadas por Scheidel (2001: 144-162) proporcionan también valiosa información sobre un fenómeno interesante, el de la aguda migración que, desde la *chora* egipcia, se produce hacia la ciudad en coincidencia con la edad de inicio en el cobro de la capitación: “The attested age-composition in the Egyptian villages differs considerably from that in the cities. Taken at face value, these data suggest that no men died between ages five and fifty. Indeed, there are more men aged forty-nine than aged five to fourteen. None of this is at all possible” (2001: 156). La incidencia económica que estas cantidades pudieron tener sobre el campesinado dependiente motivaron, según concluye el autor, la resistencia en la medida de sus posibilidades a ser inscritos en el censo, siendo el entorno ciudadano más propicio para acometer esta forma de evasión fiscal. Sin duda una huella estadística de tales dimensiones de nuevo sólo es posible si tenemos en cuenta su mayoritaria condición como clase social que carece de los incentivos y los vínculos que a las relaciones de propiedad agraria les son propios y a la que una cantidad a priori baja pudiera ser lo suficientemente costosa como para motivar una migración masiva de estas características. Que el diseño de este impuesto vaya dirigido al gravamen de una clase social amplia que tiene como nexo coincidente un acceso vedado a la propiedad agraria, queda también en evidencia con su extensión a otros colectivos que desempeñan actividades económicas relacionadas con el comercio, producción de manufacturas, etc. en el entorno metropolitano y cuyos oficios se incluyen en el censo de forma esporádica como hemos visto.

Otro aspecto sobre el que es preciso reflexionar, es la cuestión de si *laographia* y condición *dediticia* conforman o no un binomio necesario en el caso de Egipto. Para dilucidar la cuestión tradicionalmente ha tomado relevancia el caso del médico egipcio Harpócrates<sup>58</sup>, cuya situación viene reflejada en la relación epistolar entre Plinio, durante su estancia en esta provincia, y Trajano (*Plin. Ep.* 10, 5-7 y 10). El emperador, gracias a la insistencia de Plinio por conseguir su promoción, termina por otorgarle *viritim* la ciudadanía romana, lo que sin embargo no sería adecuado siguiendo el

---

<sup>58</sup> Teoría planteada ya en los trabajos de Meyer (1910) y Wilcken (1912) como punto de inicio de diferentes vertientes interpretativas hasta la actualidad (*vid.* Marotta, 2014) dentro de la inabarcable bibliografía relacionada con la cuestión de los *dediticii* en la *constitutio Antoniniana*.

procedimiento escrupuloso habitual sobre los *aegyptioi*, que al parecer requerían ser ciudadanos alejandrinos antes de alcanzar la ciudadanía romana. La existencia de este paso intermedio, que el emperador omite en razón de su *imperium*, sería el indicativo de la carencia de adscripción ciudadana de los egipcios de la *chora*, la inexistencia de *civitas* y la imposibilidad de acceso a la romana, tal y como Ulpiano y Gayo establecen como marca definitoria de la condición dediticia (Ulp. *Reg.*, 20, 14; Gai. *Inst.* 1, 26). Sin ánimo de extendernos demasiado en el debate, es necesario retomar el argumento de si el propio Harpócrates refleja una efectiva condición dediticia y, en función de la conclusión perfilada, ponerlo en relación con la naturaleza que pudo tener la capitación en la prefectura egipcia junto a otros testimonios. En este sentido deben hacerse varias observaciones:

- En primer lugar, el retrato descrito de Harpócrates no parece coincidir con una de las figuras de sometimiento más duras que ejerció la administración romana, como es el mantenimiento de la condición dediticia comunitaria, sino más bien con cierta posición de privilegio. En efecto Harpócrates, médico, no sólo se relaciona con las más altas escalas de la administración romana, sino que ésta llega hasta el punto de poder ser protagonista en varias cartas dentro de la relación epistolar mantenida entre Plinio y Trajano entre los 98 y 99 d.C. con el fin de obtener el favor imperial.
- En segundo lugar, no considero necesario forzar la interpretación si las cartas explicitan una lectura mucho más natural y coherente, es decir, que Harpócrates era simplemente un peregrino, que habría sido adquirido su condición a efecto de la manumisión de su patrona Termudis, asimismo peregrina, *peregrinae condicionis manumissus a peregrina* (Plin. *Ep.* 10, 5, 2), y con arreglo al derecho local como también concluye Gonzales (2002: 38 y ss.). De hecho, en otra carta, reconoce este procedimiento nuevamente como *peregrina manumissum* (Plin. *Ep.*, 10, 6, 2). Por el contrario, si la condición dediticia la adquiere de su patrona Thermudis, aparecen inmediatamente numerosos problemas: ¿significa que su patrona también lo era? ¿Cómo una dediticia podría tener esclavos y capacidad para manumitirlos? En tal caso, ¿dónde está el beneficio de la manumisión cuando implica el paso de la esclavitud a una situación dediticia? Por el contrario, si la condición de los dediticios se caracterizaba por una *pessima libertas*, resulta problemático considerar que entre estas limitaciones del *ius gentium* una dediticia conservara la capacidad de manumisión. Según la opinión de Volterra (1991) y Marotta (2014), los libertos no podían cambiar su *status civitatis* sin el consenso del *patronus*, razón por la cual Plinio se asegura de precisar que su antigua patrona ya había fallecido para poder obtener la *civitas* romana sin el beneplácito de Termudis. El esclavo manumitido por un peregrino se somete al mismo ordinamiento jurídico de su patrono, es decir, habría adquirido su vínculo con el distrito de Menfis (Volterra, 1991).
- Incluso si Harpócrates fuera un liberto juniano, es decir, que su patrona fuera ciudadana (cosa que hay que rechazar) y él engrosara en el colectivo *in dediticiorum numero* tras un procedimiento de manumisión informal por la *lex Iunia Norbana* (única posibilidad en este sentido), el factor que se aduce sobre la necesidad de adquirir

primero la ciudadanía alejandrina con anterioridad a la romana no se relaciona en ningún momento con el hecho de ser liberto sino con el hecho de contrarse entre los *aegyptioi*. Estos egipcios, además, son tratados en este mismo pasaje como una parte del conjunto de peregrinos, de “los restantes peregrinos” convencionales, dentro de los cuales los *aegyptioi* constan de una especificidad que Plinio dice desconocer: *inter Aegyptios ceterosque peregrinos nihil interesse credebam* (X, 6, 1; D’Ors, 1944: 174-175).

- Que esta peregrinidad signifique “extranjero” en vez de peregrino para salvaguardar la diferenciación estricta entre *peregrini* y *dediticii* como conjuntos auto-excluyentes (en vez de ser los segundos una variante específica de los primeros) es poco probable si nos atenemos a la distribución de su onomástica. Sabemos que Harpócrates estaba censado en el distrito de Memphis (*Ep.* X, 10), si bien lo más probable es que procediera del cercano *nomos* de *Arsinoe*, lugar en donde existe una importante concentración tanto de su nombre (con 40 casos en total) como de su patrona *Thermuthin* o *Thermouthis*, con 37% según los registros papirológicos (de los 650 casos del total)<sup>59</sup>.

- Por último me gustaría subrayar que el interés de Plinio y del propio Harpócrates no creo que fuera ni la adquisición de ciudadanía romana ni seguir de forma escrupulosa el procedimiento convencional, pues de ser así no tendría demasiado sentido la insistencia por incluir al médico dentro de la *civitas* alejandrina cuando el emperador ya había podido superar este obstáculo gracias a su *imperium*. Sin duda las ventajas fiscales, socioeconómicas y políticas (a pesar de que Alejandría careciera de *boulé*) por ser la única comunidad inmune a diversos impuestos entre los que se encuentra la *laographia*, están detrás de la petición de Plinio por privilegiar a Harpócrates, con beneficios más directos del que podría desprenderse de la simple adquisición de ciudadanía romana. Ello explica las mayores reticencias por parte de la política imperial a la hora de extender la ciudadanía alejandrina frente la romana, *civitatem Alexandrinam secundum institutionem principum non temere dare proposui* (Plin. *Ep.*, X, 7, 1; *cfr.* X, 10, 1), pues no está claro siquiera que la romana garantizara ningún tipo de exención fiscal si, como hemos visto, también podría recogerse en los registros *kat’oikian*.

Si los argumentos anteriores nos sirven para clarificar que Harpócrates era peregrino y, por tanto, no hay indicios para dudar de su *status libertatis*, las dificultades procedimentales para acceder a la *civitas* alejandrina devienen de su estatuto personal como peregrino egipcio, sin necesidad de inferir que, necesariamente haya de ser *dediticio* (y menos aún *dediticio* en un sentido antitético al de peregrino). Si hay una vinculación que aparece con extraordinaria claridad en la extensión de la *laographía*, ésta es la que parte de una contraposición entre la *civitas* (con *immunitas*) y la *chora* (sometida a *laographia*). El contraste entre estas dos entidades (a la manera de como

---

<sup>59</sup> La cuantificación y visualización de resultados (Broux y Depaux, 2014) está disponible en la infraestructura masiva de datos papirológicos desarrollada en el seno del proyecto Trimegistos (KU Leuven).

ocurre entre el *ager provincialis* y el *ager italicus*) debe su naturaleza a factores fundamentalmente fiscales y jurídicos que superan el componente étnico o cultural de la dicotomía griego/indígena-egipcio. Es decir, aunque la desigualdad tenga una manifestación cultural innegable que tienda a identificar “lo griego” con la élite social, y que es fruto en último término de la génesis histórica de la prefectura egipcia, el factor que delimita el cobro o no de la capitación es la no pertenencia a las *civitates* privilegiadas (Naucratis, Ptolemais o Alejandría) y la adscripción a la *chora*. En este sentido, como ha defendido Marotta recientemente con gran claridad (2014: 8-18; *vid.* Gonzales, 2002: 42), los dos escalafones de tradición griega en la *chora* (metropolitanos simples y, en un grado superior, los metropolitanos *apó tou gymnásiou*) deben ser considerados egipcios a estos efectos jurídicos y fiscales, subsumidos en su posición dependiente respecto a las grandes *civitates* egipcias, de las que están igualmente excluidos: “In conclusione la concessione della cittadinanza alessandrina consente d’entrare nel novero dell’élite dei peregrini esente, al pari dei *cives Romani* del resto, dall’imposta personale (*capitatio*, *laographia*), e distinta, sul piano del diritto, dagli *Aegyptii* (*Aigýptioi*), un gruppo eterogeneo, all’interno del quale v’erano, da un canto, gli abitanti della *chora* di cultura greca, dispensati dal pagamento di metà della capitazione, dall’altro gli autoctoni sottoposti, invece, al suo intero ammontare” (Marotta, 2014: 18). Su diferenciación respecto a los restantes egipcios sólo se materializa en la cantidad reducida de capitación gracias a su posición de privilegio a nivel local, pero la ligazón jurídica que los une al pago de la capitación es igualmente compartida por ambos colectivos, esto es, su pertenencia a la *chora*. Que algunos de los integrantes de la *chora* pudieran ser *dediticii* y estuvieran asimismo sujetos a la capitación es muy posible ante la proyección egipcia del controvertido *P. Giessen 40*, en el que se exceptúa a los *dediticios* de la concesión universal de ciudadanía, pero no exclusivamente.

En mi opinión, como se procederá en el análisis de las siguientes páginas, la capitación se circunscribe a diferentes grados de *libertas*, dentro de los cuales se incluye la condición *dediticia*, pero que parece extensivo a otras posibilidades puntuales de carácter igualmente excepcional en ámbito peregrino.

## 4.2 Judea y el *fiscus Iudaicus*: la secularización de un impuesto étnico-religioso.

El problema nace cuando la expansión de una vaga formulación del *tributum capitis* obvia este matiz de tasa fija en correspondencia con su propia naturaleza (gravamen a no propietarios) para contemplar su implantación en otras provincias como Siria o Cilicia a partir de la experiencia de Egipto: “Subsequently the poll-tax was introduced into (probably) all the other provinces of the Roman Empire, including long-established and ‘senatorial’ provinces such as Macedonia” (Rathbone, 1993: 97). El texto en que normalmente se apoyan los defensores de esta vertiente interpretativa se fundamenta en la analogía respecto al caso judío descrito por Apiano:

The Jewish nation alone still resisted, and Pompey conquered them, sent their king, Aristobulus, to Rome, and destroyed their greatest, and to them holiest city, Jerusalem, as Ptolemy, the first king of Egypt, had formerly done. It was afterward rebuilt and Vespasian destroyed it again, and Hadrian did the same in our time. On account of these rebellions the poll-tax imposed upon all Jews is heavier than that imposed upon the surrounding peoples. The Syrians and Cilicians also are subject to an annual tax of one hundredth of the assessed value of the property of each man. (App. *Syr.*, 50; trad. de H. White).

Para la interpretación correcta de este fragmento deben explorarse las entidades que son comparadas de modo separado, es decir, el colectivo judío respecto a las provincias de Siria-Cilicia, por un lado, y a la ambigua categoría de las “poblaciones rendidas” por otro. También, el contenido de lo que el autor denomina capitación en función de los sucesivos contextos históricos. En primer lugar, la propuesta de Rathbone no puede extrapolarse al caso de Siria y Cilicia, pues a renglón seguido Apiano afirma que, en este caso, “The Syrians and Cilicians also are subject to an annual tax of one hundredth of the assessed value of the property of each man” (*ibídem*. La cursiva es mía). Ello implica no sólo una forma diferente de tributar y de registro, sino una concepción y funcionalidad radicalmente distinta del censo, más afín a sociedades cívicas y difícilmente equiparables a la realidad de la *chora* egipcia, mayorariamente no propietaria. De hecho fue el mismo Quirino quien se encargó de realizar asimismo el catastro de los suelos de Siria (no sólo el censo de sus poblaciones), a la que añadió además el territorio cilicio antes dependiente de Archelao para su venta, seguramente *ex lege quaestoria* (Joseph, *A.J.*, 17, 355).

El impuesto progresivo sobre la propiedad que refiere Apiano para Siria y Cilicia implica el registro de la propiedad predial y la estimación de su valor, como también concluye Brunt (1981: 172), y dudo que tenga algo que ver, por tanto, con el conocido *annum tributo capitis obligantur* del que nos informa Ulpiano para Siria (*D.* 50, 15, 3) y que, desde Balleine (1906: 51-52), se ha leído de forma complementaria respecto al fragmento de Apiano como una unidad temática. Entre otros aspectos, resulta difícil de justificar que pueda caducar un tributo sobre el patrimonio por razón de la edad y que éste variara según el sexo del contribuyente (14-65 varones y 12-65 mujeres). Por ejemplo, y con toda lógica, el procedimiento municipal de declaración de los bienes en el censo, según la debatida *lex Iulia municipalis* (l. 143-158) no hace alusiones de este tipo. Parece más lógico, dadas estas características de la fiscalidad en Siria y Cilicia, hablar de *tributum soli*, cuya cuota depende del valor del suelo y de su extensión independientemente de la producción que generase.

Desde mi punto de vista, buena parte de la confusión se debe a que la referencia de Ulpiano sobre *tributum capitis* se haya malentendido. En primer lugar, porque no debe relacionarse con la provincia de Siria que conocemos para la mayor parte del periodo altoimperial como tampoco que ésta gravara a todos sus habitantes. Resulta más apropiado pensar que sus palabras se refieran únicamente a la provincia *Syria Palaestina*, operante en época del jurisprudente, y que engloba el antiguo territorio de Judea con algunas variaciones, ya desgajada a efectos administrativos respecto a la Siria histórica de los dos primeros siglos (ahora *Syria Coele*). Que Ulpiano utilice la división

administrativa de su propia época viene confirmado cuando especifica poco antes que la colonia de Laocidea se encuentra en la mencionada *Syria Coele* en vez de hablar genéricamente de Siria (Ulp. *I de cens.* = D. 50, 15, 1, 3). También en su enumeración de las colonias, *Syria Palaestina* se mencionan de forma expresa y separada respecto a las pertenecientes a *Syria Coele* (Ulp. *I de cens.* = D. 50, 15, 1, 6). Si se tiene en cuenta el sesgo cronológico que impregna la sentencia de Ulpiano puede entenderse mejor que su alusión al *tributum capitis* no se refiera a una ambigua generalización del impuesto, sino exclusivamente al *aurum Iudaicum*, plenamente institucionalizado y absorbido por la administración romana en el siglo III d.C. De hecho, aparte del texto ambiguo de Ulpiano para la genérica “Siria”, todas las huellas de capitación se circunscriben a Judea como veremos en las siguientes páginas<sup>60</sup>. No pueden alegarse tampoco desavenencias respecto a la edad para negar esta vinculación<sup>61</sup>, es decir, que sean impuestos distintos porque el *aurum Iudaicum* empiece a cobrarse a varones desde los 20 años hasta los 50 mientras el *tributum capitis* ulpiano lo fija en 14/16 hasta los 60/65. La edad de veinticinco años en varones sólo se apoya en un texto de la antigüedad del Éxodo (30, 14) y que posiblemente pudiera haber cambiado con el paso del tiempo, más aun cuando se produce la confiscación definitiva del impuesto por parte de Roma. En este sentido hay documentación de Egipto que muestra cómo también la capitación judía recayó sobre mujeres y niños, además de esclavos (*vid.* Thompson 1982: 333; Moshe Gil, 2006: 296), al igual que en época de Domiciano parece que fue exigido a judíos por encima de los sesenta años (Suet. *Dom.*, 12, 2).

Para contextualizar las palabras de Ulpiano es preciso advertir que nada indica una imposición del *tributum capitis* tras la provincialización de Siria-Judea por Augusto<sup>62</sup> (6 d.C.), sino la instrumentalización del tributo judío. Tras la victoria anterior de Pompeyo y la primera integración como reino aliado, con Herodes reconocido como *rex socius et amicus* (Pastor, 1997: 226, n. 38), el impuesto judío aun se hacía depender del tesoro del templo de Salomón, como así ocurrirá hasta la dinastía Flavia. Sin embargo estas aportaciones se habían convertido paulatinamente en forzosas. Así por ejemplo, Pedro y Jesús de Nazaret son increpados por personal encargado de su cobro (Mt. 17, 24-27), y en donde se intuye que pudiera operar ya una *societas* de *publicani*, como pudiera ser el caso del *princeps publicanorum* que parece aglutinar la actividad en Jericó en esa época (Lc. 19, 1-8). Son mencionados vagamente como aquellos *qui didrachma accipiebant*, pero que reclaman un *tributum vel census* sobre los judíos (como serían Jesús y Pedro a ojos de la administración romana) de la que se dice es una suma de la que ellos mismos estaban exentos<sup>63</sup>. Igualmente, la alusión al censo por el que ahora se ven forzados a

<sup>60</sup> Para comprobar esta extrapolación de contenidos apoyándose en las huellas de la tributación judía *vid.*: Kennedy, 2006: 112-113.

<sup>61</sup> 20 años para el inicio del pago del *aurum Iudaicum*, 14/16 para el *tributum capitis* de Ulpiano (D. 50, 15, 3).

<sup>62</sup> El efecto retroactivo de fuentes posteriores sobre el *tributum capitis* hasta la victoria de Pompeyo se basa, pienso que erróneamente, en considerar toda alusión al *didrachmon* un testimonio del *tributum capitis* romano. Esta tendencia ya se observa en Ginsburg (1931: 283-284) y está presente en numerosa bibliografía posterior.

<sup>63</sup> *‘Quid tibi videtur, Simon? Reges terrae a quibus accipiunt tributum vel census? A filiis suis an ab alienis?’*. Cum autem ille dixisset: *‘Ab alienis’*, dixit illi Iesus: *‘Ergo liberi sunt filii’* (Mt. 17, 25-26).

estos pagos, es el elaborado por los que dicen ser los nuevos *reges terrae*. Se trata por tanto del conocido censo de Quirino ya mencionado en Siria a instancias del edicto de Augusto del año 6 d.C., *ut describeretur universus orbis* (Lc. 2, 1-5). En él todos los individuos, al menos en lo que atañe a Siria y Judea, se ven obligados al registro en su ciudad de procedencia, lo que implicó numerosos desplazamientos como muestra el pasaje y, en el caso de Judea, una anotación complementaria en caso de ser judíos. Como ha observado Ando (2015-2016) con acierto, la virtud de Augusto fue, precisamente, la de bascular entre su propia iniciativa por hacer prevalecer ciertas cotas de autonomía al colectivo judío a la vez que propiciaba su integración en las estructuras de explotación fiscal del Principado. Así pues, pudieron salvaguardarse algunos escollos ideológicos como los que el culto imperial representaba a través de cambios en la titulatura imperial (de Churruca, 1998: 50-52) o la retirada de imágenes (Joseph, A. J., 18, 3, 1), aspectos que se respetaron hasta el gobierno de Calígula. Esta línea política entra en sintonía con el tratamiento que recibe el propio tributo judío. En esta etapa incluso se relee una de las profecías judías recogidas en el Talmud para considerarse cumplida con la elaboración del censo provincial de Augusto por los propios rabinos: “But by the time of the conversation recorded in the Talmud, the actions of Roman government [*census*] had become so naturalized, the sages’ identification with its processes and aims so complete, that reflecting on them caused the Rabbis to think of their own scriptures [...] In making of the Roman emperor a Solomonic king, the rabbis constructed themselves as Roman subjects” (Ando, 2015-2016). La antigua institución de las contribuciones al templo de Jerusalén aparece ya en las sagradas escrituras judías como una forma de expiación del alma (*Ex.30, 16*) que ahora aprehende la administración romana para su propio provecho. Por tanto, la referencia al *aurum Iudaicum* como *tributum vel censum* no resulta extraña y responde perfectamente a la paradoja, desde el prisma judío, de tener que sostener el erario con unos impuestos culturales que, bajo una falsa apariencia de voluntariedad (*accipiere*), se colectan en beneficio de otros (*alieni*) y desde sus propios instrumentos de dominio: el censo.

Dentro de la compleja historia de las revueltas del siglo I esta entelequia permite de este modo a la capitación judía mantenerse como un impuesto autónomo y no perteneciente al genérico *tributum capitis*. Volviendo al fundamental aserto anterior de Ulpiano, *annum tributo capitis obligantur* (D. 50, 15, 3) que relacionamos con el tributo judío, éste es dependiente de la confiscación posterior del *aurum Iudaicum* por parte de Vespasiano, ahora convertido en una “caja” propia, el *fiscus Iudaicus*. Tras la destrucción del año 70 del templo de Salomón, que pone fin a la revuelta, el antiguo *didrachmon* se establece a todos los efectos dentro de la estructura fiscal del Principado mediante el traslado físico e ideológico del secular tesoro al templo de Júpiter Capitolino (D. Cass., 65, 7, 2; Joseph. B.J., VII, 216-217). Con él no sólo cambia de una forma más directa su beneficiario, sino la propia naturaleza del impuesto desde su origen, más o menos instrumentalizado por Roma para el mantenimiento del culto, a su nuevo significado como carga fiscal específica en tanto que pueblo derrotado en guerra contra Roma. Esta idea se desprende de forma bastante clara en el señalado fragmento de Dion Casio y no responde ahora a un castigo por un *tumultus* sino que adquiere las

características clásicas del vencido que se entrega a Roma a la manera en de la descripción gayana: *hi qui quondam adversus populus Romanum armis suscepti pugnaverunt, deinde victi se dediderunt* (Cai. *Inst.*, 1, 14). Desde esta perspectiva pueden comprenderse mejor las palabras de Apiano mencionadas al inicio (App. *Syr.*, 50) sobre los altos gravámenes que pesaban sobre la población judía en comparación con otras comunidades derrotadas. Los términos de la analogía con respecto a las poblaciones vencidas no deben relacionarse con un carácter general del impuesto de capitación, sino con la especificidad de la tributación judía. Que Apiano observe de forma concatenada la tributación de estas provincias respecto al caso judío indica una comparación no técnica, sino encaminada simplemente a referir las cargas distintas que pesan sobre los habitantes del entorno sin ninguna pretensión de rigor jurídico ni fiscal. De este modo, mientras el impuesto por excelencia sobre el vencido es el *tributum soli*, los judíos de Judea estaban sometidos a una tasación doble de carácter excepcional, lo que supone un gravamen añadido: el *tributum soli* en tanto que vencidos desde la provincialización de Augusto y los dos denarios que con carácter personal han de pagar como judíos al tesoro de Júpiter Capitolino a partir de época Flavia tras la revuelta. De esta situación nos informa Eusebio de Cesarea (*HE* 3, 20, 2), buen conocedor de las prácticas fiscales en su propia región de origen. El fragmento señala cómo en época de Domiciano se exige el cobro de ambos impuestos, pues los recaudadores exigen conocer no sólo la tasación de sus bienes inmuebles, sino también si son descendientes de David seguramente para la recolección del tributo judío<sup>64</sup>, que no pesaría sobre los restantes habitantes de Judea (mayoritariamente griegos). En sintonía con este proceso, la capitación judía adquiere connotaciones político-sociales como nota infamante, les señala respecto al resto de la población, a la vez que pierde sus antiguas funciones religiosas. Se laiciza como instrumento de sometimiento y explotación de modo directo.

Las palabras de Suetonio al hablar de las medidas de Domiciano sobre la capitación, *imposita genti tributa* (*Dom.*, 12, 2), señalan también que nos encontramos ante un impuesto de nuevo cuño de la dinastía Flavia en Judea. La confiscación del *aurum Iudaicum* fue a todos los efectos una tributación problemática en tanto que parece ligar una obligación fiscal con unas determinadas características culturales y étnico-religiosas que desde la perspectiva subjetiva de la administración romana deben adquirir la categoría de judío. Esta confusión está bien reflejada en la descripción de Dion Casio, “the country has been named *Judaea* (*Ioudaía*), and the people themselves *Jews* (*Iudaioi*). I do not know how this title came but it applies also to all the rest of mankind, although of alien race, who affect their customs.” (D. Cass., 37, 17, 1). La ambigüedad se expresó especialmente cuando Domiciano parece generalizar este impuesto a quien

---

<sup>64</sup> “Les preguntó si eran descendientes de David y ellos lo confesaron. Luego les preguntó acerca del número de sus bienes o cuánto dinero poseían, pero ellos dijeron que entre ambos sólo sumaban nueve mil denarios, la mitad cada uno; y persistían en decir que ni siquiera esto tenían en metálico, sino que se trataba de la tasación de sólo treinta y nueve *pletros* de tierra, por la que pagaban impuestos y la trabajaban ellos mismos para su subsistencia” (Euseb. *HE.*, 3, 20, 2). En cuanto a las restricciones a la propiedad por ser judíos (*vid.* Sastre, 2003: 178-180) considero que corresponden a un periodo posterior y no generalizable a toda Judea como analizaremos en el apartado siguiente (*vid.* cap. 4. 2. 1). Por poner un ejemplo, el propio Flavio Josefo cuenta con propiedades en la provincia en época de Vespasiano (Joseph. *Vit.*, 425), aunque ya convertido en ciudadano romano.



*Iudaicam viverent vitam* (Suet. *Ibid.*), lo que ha despertado numerosas especulaciones sobre el alcance de la medida y el conjunto social que puede incluirse en este grupo dentro y fuera de Judea<sup>65</sup> (*vid.* Thompson, 1982). Finalmente la emisión de monedas en época de Nerva con la leyenda *fisci Iudaici calumnia sublata* invita a pensar en los abusos que pudieron cometerse por la indefinición inherente a la categoría de “judío” más allá de Judea, y que pudo suponer una abolición temporal del impuesto (Goodman, 2006). En cualquier caso, dada la complejidad de algunas cuestiones y la amplitud de variantes interpretativas, nos centraremos sólo en los elementos y claves del debate que pueden incidir de modo más directo en la lectura del *tributum capitis* judío.

#### **4.2.1 El *tributum capitis* de la colonia *Caesarea Maritima* y la cuestión del “suelo judío”.**

El caso de la colonia de Cesarea constituye otro de los escasos testimonios del impuesto de capitación, pero cuya interpretación resulta problemática. De nuevo, este testimonio ha servido para rubricar la teoría de un *tributum capitis* generalizado. Cronológicamente su *deductio* con Vespasiano se encuadra en este estado de la cuestión de época Flavia y, en términos territoriales, coincide con la lectura restringida a *Syria Palaestina* que hemos defendido para el *tributum capitis* de Ulpiano. De ella dice el jurisprudente Paulo que Vespasiano no le concedió el derecho itálico *sed tributum his remisit capitis* y que su sucesor Tito *etiam solum immune factum interpretatus est* (Paul. 2 de cens=D. 50, 15, 8, 7). Sin embargo no está claro sobre quién recaería el *tributum capitis* que se perdona y en calidad de qué, pues considero de todo punto improbable que pueda tratarse de los *coloni* (como corresponde a un *tributus capitis* global) tal y como se tiende a pensar al interpretarse el pasaje (*vid.* Caballos Rufino, 2010: 70, n. 28). Dado que este testimonio puede resultar en un contraejemplo debe tenerse en cuenta en primer lugar, que la *immunitas* no tiene por qué significar una inmunidad total, sino un dejación por parte del Estado en su cobro. Ello constituye un claro privilegio pues aunque el impuesto en cuestión siga recolectándose, se hace ahora en beneficio comunitario al no ser exigido por Roma. Este procedimiento se observa claramente en los episodios de desastres naturales que devastan ciudades y que, para fomentar su revitalización, Roma les declara la inmunidad por un determinado periodo de tiempo (*vid.* Brunt, 1980). También el fenómeno del evergetismo y la construcción de las desigualdades internas suele estar detrás de este tipo de privilegios en muchas ocasiones, pues las ventajas de la concesión de *immunitas* respecto a los *fisci provinciales* se adscriben, en la práctica, a las minorías rectoras de la comunidad que gestionan el montante perdonado. Por ejemplo, una inscripción de Cartago (*CIL* X, 6104) muestra este fenómeno de forma clara y es semejante al caso que nos ocupa.

---

<sup>65</sup> Sin duda afectó a todo el Imperio, pero no ha quedado todavía suficientemente claro su alcance: si engloba a todos judíos de la diáspora y sus descendientes (etnia judía), a los que desempeñan formas de culto cercanas al judaísmo independientemente de su procedencia, si incluye o no a los cristianos que, por ejemplo, Dion Casio nunca nombra y que podrían identificarse con sus “judaizantes”, es decir, una secta dentro del judaísmo, etc. Probablemente fueran judíos los *disimulata origines* de Suetonio (*Dom.* 12, 2) para evadirse del impuesto.

Como bien es sabido, se trata también de una colonia con *immunitas* en toda su *pertica* (Gascou, 1984: 105 y ss.; Cautadella, 1987: 124), pero sin embargo los *castella* de su *territorium* parecen estar obligados a pagar los *vectigalia* locales. Como ha defendido Corbier la existencia aquí de un *praefectus i(ure) d(icundo) vectig(alibus) quinq(uennalibus) locandis in castellis* (33 d.C.) indica uno de los recursos de Roma para favorecer a una determinada comunidad al estar exenta respecto al fisco, pero cuyos habitantes no tienen por qué estarlo de un modo literal (Corbier, 1991: 656 y 660-62; Orejas y Ruiz del Árbol, 2010: 1102). Por otro lado, la inmunidad de Cartago se mantiene durante los tres primeros siglos del Imperio sin una necesidad aparente de conceder a sus suelos *ius Italicum*, cosa que finalmente no ocurre hasta Septimio Severo y en un contexto distinto<sup>66</sup>. La colonia de Cesarea, como también sucede con la colonia Aelia Capitolina que ocupará el lugar de la antigua Jerusalén en época de Adriano, tampoco parecen alcanzar nunca la asimilación de sus suelos al Itálico a pesar de su *immunitas* (D. 50, 15, 1, 6).

Hechas estas aclaraciones preliminares, hay dos explicaciones más probables para la situación que nos describe Paulo, pues en este ejemplo se manifiestan concentrados los dos fenómenos que observo más ligados al *tributum capitis*: las restricciones de acceso a la propiedad y la tributación judía. Recojamos el artículo completo:

*Divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto, ut et iuris Italicum essent, sed tributum his remisit capitis: sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est; similes his Capitulenses esse videntur* (D. 50, 15, 8, 7 =Paul. 2 de cens.<sup>67</sup>).

En primer lugar resulta fundamental darle un contenido al pronombre en dativo *his*, pues sobre ellos *tributum remisit capitis*, y conocer si *his* hace referencia o no a un antecedente en el texto. Sobre esta cuestión conviene actuar con cautela antes de ver inmediatamente en *his* una forma pronominal de los mencionados *coloni Caesarienses* pues el texto presenta importantes problemas, quizás por algún tipo de corrupción. Esto se observa, por ejemplo, en el empleo verbal *essent* para mencionar que no se les otorgara el derecho itálico a los *coloni*. Sin embargo, el *ius Italicum* es una condición inherente a la colonia y nunca a sus habitantes, aunque la obtengan a través de ella. Como se abordará posteriormente (cap. 7) el *ius Italicum* afecta a los suelos, y sólo indirectamente a sus ciudadanos, que al ser asimilados al suelo itálico pierden las propiedades del *ager* provincial, tributario por definición<sup>68</sup>. Las fórmulas utilizadas son

<sup>66</sup> La inscripción en cuestión está datada en el 26 a. C. (Orejas y Ruiz del Árbol, 2010: 1102).

<sup>67</sup> “Vespasiano, de consagrada memoria, hizo colonia a Cesarea, sin añadir que fuera de derecho itálico, pero les exoneró del tributo de capitación, y Tito, de consagrada memoria, interpretó que también su suelo se había hecho inmune”.

<sup>68</sup> El *ius Italicum* supone un privilegio comunitario de la colonia de la que se benefician sus *coloni*, nunca es una concesión para una persona concreta, pues nunca existió un ciudadano itálico a la manera en que se articuló, por ejemplo, la ciudadanía romana. Puesto que carece de contenido un derecho itálico asimilado a la titulación ciudadana, no comparto algunas interpretaciones que, como las de Sawicki, han considerado la exoneración automática del *tributum capitis* cuando los suelos de una *civitas* adquieren el *ius Italicum* (2012: 63). A mi modo de ver, si la capitación no puede darse en las colonias de derecho itálico es porque han dejado de ser suelo provincial, en este mismo sentido iría dirigida probablemente la advertencia de Paulo sobre Cesarea. La teoría sobre el formato personal del derecho Itálico lo retomamos en otro capítulo de la tesis (cap. 7.3).

diversas en sus matices, pero siempre se refieren en singular a la colonia y no a los *coloni*<sup>69</sup>. Aunque este elemento no tiene incidencia directa en la interpretación sí sirve para reflejar este mismo problema de concordancia en la frase al estar intercalada respecto a la que ahora nos ocupa y tener en *coloni* un supuesto sujeto compartido.

Para la identificación de quienes son “éstos” (*his*) exonerados del *tributum capitis*, por tanto, debe tenerse en cuenta en un primer término la importancia de una *deductio* a efectos de la ordenación territorial del territorio y todo lo que implica en los cambios dentro de las relaciones de propiedad. Como tal, aunque no adquiriera la máxima distinción jurídica con el derecho itálico, toda deducción supone una alteración e injerencia directa que transforma las relaciones de propiedad precedente. Las interpretaciones que han defendido que la adquisición del rango de colonia en Cesarea fuera sólo un cambio de titulación de carácter honorario sin llegada de colonos (Isaac, 1980-81, 1984 y 2008; Millar, 1990) han sido fuertemente contestadas y en la actualidad, a través del estudio integrado de fuentes arqueológicas, epigráficas y textuales se ha comprobado la transformación radical que experimenta la colonia a partir de su *deductio* con un bajo nivel de incertidumbre. Frente al relato de Apolonio de Tiana que nos transmite Filostrato sobre su paso por la *polis* (fundada un siglo antes por Herodes y antes de la deducción colonial), donde nos describe una comunidad administrada desde la *boulé* y a la que alaba por sus costumbres y leyes griegas (Philostr. V. A. 11), la adquisición del nuevo rango afectó drásticamente a su organización interna, no muy distinta a la que puede observarse en la mayor parte de las colonias de la parte occidental del Imperio. La *deductio* sobre la comunidad preexistente se relaciona de forma intrínseca con el fin de la revuelta judía y tiene como objetivo un control más directo de la región, así como la reordenación de todo el territorio adyacente. Convertida en *Iudaeae caput* (Tac. Hist., 2.78), era sede de un *procurator Augusti propraetore* y sus aspectos financieros estaban a cargo de un *procurator* ecuestre a escala provincial. En el plano del funcionamiento local se observa cómo se usa exclusivamente el latín desde Vespasiano hasta el siglo III d.C. y no sólo en las inscripciones monumentales, sino en todos los actos de evergetismo de la colonia y expresiones funerarias, también en sus emisiones monetarias, etc (*vid.* Patrich, 2011). Aunque no se documentan *aediles* ni *quaestores*, los magistrados locales son denominados como *Ilviri* y también aparecen *decuriones* del *ordo* local. Otro aspecto semejante a las colonias y municipios de la parte occidental del Imperio es el procedimiento censual. La colonia cuenta con varios *Ilviri quinquennales* cuyas funciones se relacionan de modo directo con las operaciones de elaboración del censo romano: el *lustrum*. Son semejantes a los que se recogen en numerosos municipios y colonias de *Hispania*, sobre todo en la Bética, seguramente con un procedimiento semejante al contenido en la tabla de Heraclea (Rodríguez Neila, 1986: 61-82). Debe pensarse en un registro mediante *professio* o juramento de las propiedades y bienes de

---

<sup>69</sup> *ius Italicum dedit* (D. 50, 15, 1, 0) *ius italicum habet* (D. 50, 15, 1, 1 y 6; 8, 0) *Italicae coloniam rem publicam accepit* (D. 50, 15, 1, 2) *ius Italicum concessit* (D. 50, 15, 1, 3), *iurisque Italici eam fecit* (D. 50, 15, 1, 4 y 8, 6), *iuris Italici est* (D. 50, 15, 6, 0 y 7, 0; 8, 0; 8, 1; 8, 8; 8, 9; 8, 10), *Eiusdem [Italici] iuris facta est* (8, 4; 8, 11). Sólo son referidas en plural cuando se refiere a varias colonias (*e.g.* D. 50, 15, 8, 0).

los ciudadanos locales, que ostentaban la ciudadanía romana, y que en cuanto a procedimiento es el principal vestigio del censo romano republicano, ahora adaptado a comunidades promocionadas de modo descentralizado como ya se observa de nuevo en la *tab. Heracleensis* (Nicolet, 1985: 17-24; 1988: 177-200). La naturaleza del censo quinquenal en la colonia vuelve a ponernos en la idea del carácter que debió tener este tipo de *immunitas* al que antes nos referíamos: las propiedades se registran para su control pero posiblemente también para el gravamen que posibilita el sostenimiento económico de la ciudad, no están totalmente exentas. Además de otras aportaciones específicas igualmente recogidas en este censo, como la *summa honoraria* adscrita al *album ordinis* de Cesarea (Patrich, 2011: 75), la *immunitas* de sus *agri* concedida por Tito posiblemente sólo fuera de la colonia respecto al fisco, y no de los ciudadanos respecto a su comunidad.

Dentro de la composición social de la colonia es evidente, como vemos, un fuerte componente exógeno que viene demostrado en primer término por la presencia de altos oficiales del organigrama administrativo imperial y por el modo en que ésta se organiza a efectos institucionales. Pero también fue un centro de llegada de numerosos veteranos de las legiones romanas a las que fueron asignadas importantes porciones del *ager* de la ciudad para su explotación agraria, y que sin duda se erige en factor de primer orden en los cambios en las relaciones de propiedad anteriores. Así, se han documentado diversas villas cercanas dentro del territorio de la ciudad y de morfología romana, algunas con mosaicos. También, en el sector sur de la ciudad y anejos al muro defensivo de la época de su fundación, durante el reinado de Herodes, se han hallado diferentes tumbas de cremación romanas de los siglos II-III d.C., algunas de las cuales recogen su antigua pertenencia a las legiones, especialmente a la *legio X Fretensis* (vid. Patrich, 2011). Aunque no podamos extendernos mucho más, queda fuera de toda duda el calado de la intervención, y que va un paso más respecto a este simple carácter honorario de la nueva titulación como colonia, sólo apoyado en el hecho de ser una comunidad preexistente y que, sin embargo, sigue repitiéndose en parte de la bibliografía (e.g. Butcher, 2003: 230).

Por tanto, si nos atenemos a la importancia del colectivo de *coloni* de origen externo, muchos de los cuales llegan de la mano de una *deductio* colonial y cuyo asentamiento se fundamenta en repartos agrarios, es difícil de justificar que sobre ellos pudiera recaer este hipotético *tributum capitis* del que Vespasiano les exonera, y que compartirían con el restante conjunto de *coloni* griegos e incluso judíos. Más si tenemos en cuenta el carácter infamante del que paulatinamente se va revistiendo la capitación en Judea, y en pleno contexto de efervescencia política y religiosa tras la última revuelta. Sobre la cita central de Paulo por tanto, lo que sí parece más probable que pueda relacionarse con los *coloni* de manera clara, dada la configuración socioeconómica de la colonia, es sólo que sus propiedades fueran inmunes para favorecer el despegue económico de la *civitas* al ser recolectadas en su beneficio. Pero en cualquier caso tampoco hay base alguna que permita concluir que la *interpretatio* de Tito sobre sus suelos sea consecuencia de que *tributum remisit capitis* por ser categorías

cualitativamente distintas e independientes entre sí, y sólo debe relacionarse con el hecho *ut non adiecto ut et iuris Italici essent* (vid. *supra*).

Dicho esto, vayamos a las dos líneas interpretativas sobre el *tributum capitis* de *Caesarea Maritima* que considero más probables y pueden ajustarse más a la realidad de la colonia. La primera parte de que, en efecto, *his* haga referencia a los *coloni Caesarienses*. Pero no a la totalidad de sus integrantes (que estaría compuesta por una composición social heterogénea: *coloni*, veteranos, miembros de la administración, población griega preexistente, etc.), sino sólo a un sector sobre el que recae esta excepción, y que dada la interpretación del texto Ulpiano que hemos defendido para el *annum tributum capitis obligantur* (D. 50, 15, 3) circunscrito a Judea, sólo puede tratarse de población judía. Esta posibilidad permite coincidir con la lectura habitual que se da a *his* en coordinación con los *coloni Caesarienses* para matizarla. Se trataría de un grupo reducido de judíos que hubieran podido ingresar a la colonia a pesar de ser tales. Muchos de ellos habrían pertenecido a la antigua *polis* de Cesarea, que debió contar con una considerable población judía e incluso parecen constar de *politeuma* hasta Nerón, quien finalmente anuló su *isopoliteia*. Estos antiguos habitantes de la ciudad habrían mantenido su fidelidad a Roma que es, por otra parte, el elemento iconográfico central en todas las representaciones artísticas de la ciudad. Se trataría de una exención dirigida a esta minoría, con casos como el que podría representar el judío L. Cornelio Simón que sirvió a Roma durante la revuelta (vid. Isaac, 1980-81: 50) y que reconoce en Cesarea su *patria* según aparece en un diploma datado en el 71 d.C. (CIL XVI, 15)<sup>70</sup>. Evidentemente las crónicas tienden a tomar como unidad a la totalidad del colectivo judío, ya sea para su apología (como Flavio Josefo) o para su denostación étnica y cultural (cronistas grecorromanos), pero nada impide considerar que un segmento de la comunidad judía fuera leal a la causa romana hasta el punto de verse recompensado. Sin embargo, esta línea interpretativa todavía conserva a mi juicio algunos problemas, y no tanto relacionados con el caso particular de Cornelio Simón, que también, sino por otros interrogantes que suscita. Por ejemplo resulta problemático que el *tributum capitis* fuera extensivo a los judíos que adquirieran la ciudadanía romana, como sería el caso de este legionario judío. Ello sería un testimonio totalmente aislado de la supuesta relación entre capitación y ciudadanía romanía, que carece de paralelos. También ofrece dudas que el colectivo judío que ingresara en la colonia tras su licenciamiento militar pudiera ser importante en el caso de la colonia Cesarea Marítima, puesto que la política militar romana siempre fue defensora de evitar que los legionarios lucharan en contiendas que tuvieran lugar en su lugar de origen, aunque aquí pueda servir para justificar esta exención impositiva de carácter excepcional dentro Judea. Quizás, y esto parecería más razonable, debe encuadrarse en la observación de Isaac para dos de sus colonias: “all male citizens of the city [de la colonia Aelia Capitolina] could serve in the legions. This, as in the case of Caesarea, would include inhabitants of the colonial territory” (1980-81: 51). Aunque no fuera común hasta la reforma militar de época Severa luchar donde se

---

<sup>70</sup> Sin embargo, no la define como colonia, lo que ha dado lugar a especulaciones de todo tipo sobre la fecha precisa en que se produce la *deductio*. En cualquier caso nada impide considerar, dada la cercanía a la revuelta en que él mismo participa, que fuera un *colonus* de la misma con posterioridad.

es originario, ambas colonias pudieron representar una excepción en este sentido. Todos los judíos dependientes que vivieran en la pértica de la colonia aun siendo *peregrini*, de este modo, podrían estar exentos del *tributum capitis* si servían a los intereses de Roma, aunque no por ello fueran ciudadanos romanos ni veteranos de las legiones. Muchos de ellos pudieron hacer su servicio desde los *auxilia* y beneficiarse de estas exenciones. Un diploma más tardío (157 d.C.) nos vuelve a abrir esta misma posibilidad, se trata de un cesariense que “must have been one of the few Jews who helped to suppress that revolt” (1980-81: 50) en alusión a la revuelta del 132 d.C. en donde nuevamente aparece un judío cesariense defendiendo los intereses romanos, esta vez desde las tropas auxiliares (vid. *CIL* XVI, 106). A pesar de todo, faltan elementos de juicio para afirmar esta posibilidad de manera rotunda. En especial, como decíamos, por las dudas que ofrece la entidad de estos contingentes militares judíos y otros colaboradores de la causa romana en la colonia hasta el punto de constituir una excepción a la regla.

Por otro lado, considero que hay otra hipótesis posible respecto al aserto de Paulo y que, a mi juicio, se ajusta mejor a la realidad social de la colonia así como al contexto dominante que se respira para una amplia mayoría de judíos durante los reinados de las dinastías Flavia y Antonina en Judea. Como antes advertíamos, *his tributum remisit capitis* puede referirse a la obligación y responsabilidad colectiva que la *civitas* cesariense contrae respecto al *fiscus* en tanto que comunidad asentada en Judea. De este modo, en caso de no contar con tal prerrogativa, debería rendir cuentas sobre la población judía asentada en su *territorium* como sería habitual en la inmensa mayoría de las *civitates* de esta provincia. Ello debió suponer un claro privilegio añadido para los *coloni* y que entra en consonancia con la política romana por promocionar y beneficiar a su centro de operaciones en la provincia. Es decir, aunque no adquiere su *ager* la categoría de itálico, este hecho es compensado no sólo con su *immunitas*, sino erigiendo a la comunidad en beneficiaria directa de la capitación que todavía pesa sobre los judíos dependientes que habitaran en su *territorium* desde una casuística diversa. Los *his* [judíos] *tributum remisit capitis* se liberan respecto al *fiscus Iudaicus* pero no así respecto a sus *munera* locales, fenómeno igualmente presente en la situación de muchos judíos asentados en comunidades griegas fuera de Judea, como veremos (cap. 4.3.1). Esta es, a mi juicio, la lectura correcta del fragmento del jurisprudente y que rubrica la estrecha relación del *tributum capitis* de Ulpiano (*D.* 50, 15, 3) sólo con las circunstancias que envuelven el sistema fiscal de Judea-Syria *Palaestina*.

La situación de los judíos cesarienses resulta problemática al intercalarse también con otros dos aspectos de singular importancia que pueden incidir en la naturaleza del *tributum capitis* en este caso y se interrelacionan entre sí. En primer lugar el hecho mismo de ser una colonia, con una clara intervención en su territorio como antes se ha señalado y, por otro lado, el debate sobre “el suelo judío” en Cesarea y el resto de Judea. Sobre las implicaciones de una *deductio* colonial y el acceso a la propiedad de sus habitantes preexistentes me remito a lo que puede observarse en otras provincias con indudables paralelos en relación a la capitación y conflictos bélicos que se saldan con una *deductio* y que son explorados más adelante (cap. 4.3). Sobre el segundo aspecto,

existe un prolijo debate sobre la capacidad patrimonial de los judíos en Judea a partir de época Flavia. Sin entrar en los pormenores del asunto, huelga señalar a partir de las fuentes que son objeto de la controversia que es difícil sostener que todo el territorio de Judea fuera requisado<sup>71</sup>, lo que suele entrar en consonancia con la presunción, ya tratada, del *dominium Caesaris* y la bipartición administrativa provincial, regida según relaciones patrimoniales y contractualista por parte del Estado respecto a sus súbditos. Los fragmentos en que esta tesis se apoya en el caso de Judea, se relacionan bien con procesos de deducciones coloniales y asignaciones a veteranos, bien con territorios en los que el *fiscus* estatal o el *patrimonium* del *Princeps* tienen un interés directo. Así, por ejemplo, el fragmento de Flavio Josefo sobre la carta que Vespasiano envía a Baso y a su *procurator* Laberio Máximo, “con la orden de arrendar todo el territorio judío” y que “conservó esta región como propiedad personal” (Joseph. *B.J.*, 7, 216-17.), se ha entendido para la totalidad de la provincia<sup>72</sup> o una confiscación generalizable a todo el colectivo judío que en ella se asienta<sup>73</sup>. Sin embargo, la intervención de Roma se restringe sólo al territorio periférico de Jerusalén, núcleo de la revuelta, como al afirmar que en “esta región” se dan lotes a veteranos de las legiones, en alusión a la cercana Emaús. Del mismo modo, su advertencia de que en este lugar no se fundó ninguna colonia hace de nuevo referencia a la destruida Jerusalén pues sí hay *deductiones* en otras zonas de Judea en este mismo momento, como es el caso de la misma Cesarea. Esto entra en consonancia con los dos fragmentos ya vistos anteriormente, como el de la doble tributación a la que los judíos de otras zonas están sometidos y que implica un acceso a la propiedad (Euseb. *HE* 3, 20, 2). O el también citado caso del judío Flavio Josefo, a quien se le otorga una propiedad en otro sitio que no fuera Jerusalén por la presencia del ejército, seguramente en alusión a estas confiscaciones y repartos similares a los de Emaús (Joseph. *Vit.*, 425). También Judah, el segundo marido de la famosa Babatha (ambos judíos) tiene propiedades registradas en En-Gedi, dependiente del territorio de Jericó durante el gobierno de Adriano (*P. Yadin* 16 y 26), perteneciente a Judea a pesar de residir en Maoza<sup>74</sup>. Por último las confiscaciones posteriores en el reinado de Adriano (*vid. infra*) carecerían de sentido si toda Judea fuera ya propiedad imperial.

Lo que parece claro en el caso de Cesarea es que su suerte, y la de sus suelos, presentan grandes semejanzas con respecto a Jerusalén tras la *deductio* en su antiguo

---

<sup>71</sup> Por ejemplo Patrich lo limita a las tierras que estaban en manos de judíos antes de las revueltas (2011: 73).

<sup>72</sup> Así se entiende, por ejemplo, en las notas a la edición del texto: “Judea era propiedad personal del emperador, que la administraba por medio de un representante suyo, un *procurator*, como era este Laberio Máximo, o un *legatus Augusti pro praetore*, como era habitual en las provincias imperiales” (Nieto Ibáñez, 1999: 362, n. 94).

<sup>73</sup> E.g.: “the lands of the Jews were seized and reserved by Vespasian as his private property” (Patrich, 2011: 73).

<sup>74</sup> Este importante testimonio de la propiedad y su relación con el censo lo abordaremos más adelante (cap. 5). Sobre el hecho de que las propiedades de Judah que son objeto de litigio entre sus dos mujeres estén en territorio de En-Gedi, dependiente de Jericó (y, por tanto, en Judea) en vez de en Maoza (en la recién constituida Arabia), es la lectura más común si tenemos en cuenta los traslados que Babatha debe hacer a En-Gedi para defender la herencia de su difunto marido (*vid. Oudshoorn*, 2007: 225; *Lewis*, 1994: 244).

lugar de la colonia Aelia Capitolina en tiempo de Adriano. Este parecido, que expresa el propio Paulo a continuación del famoso fragmento, que tras hablar del caso de Cesarea afirma *similes his Capitulenses esse videntur* en relación a la condición del suelo immune, nos permite intuir una forma análoga de integración y sometimiento que las separa respecto a las *deductiones* coloniales preflavias en la provincia Siria, como *Berytus* en época de Augusto o *Ptolemais* con Claudio. En este sentido podría parecer suficiente que los términos de la comparación se limiten al beneficio de la *immunitas* disfrutada por sus suelos a pesar de no verse acompañada por el derecho itálico (*vid. supra: D. 50, 15, 1, 6*). Sin embargo, también hay que poner de relieve el contexto de crecientes restricciones de acceso a la propiedad al colectivo judío en estas zonas coloniales como factor a tener en cuenta. Aunque los testimonios escuetos, permiten advertir una creciente línea de intervención sobre el colectivo judío por parte de la administración romana y que, tras la gran revuelta del 132-135 d.C., permite completar de significado lo ya mencionado sobre la capitación judía y la comparación de las circunstancias entre ambas colonias.

En el mismo periodo de fundación de la colonia de Cesarea la administración romana comienza a intervenir de forma creciente en el territorio de otras zonas, con especial incidencia en los ámbitos de interés del *fiscus*. Autores como Baldacci ya reivindicaron la importancia que algunos codiciados productos pudieron tener en la reordenación del territorio cercano a Jerusalén, anteriormente explotados bajo control de comunidades judías para pasar a un ejercicio monopolístico de explotación (Baldacci, 1969: 355-362). Esto se aprecia de un modo particular en el caso del preciado *balsamum iudaicum*, motivo de disputa y posiblemente convertido en *ager publicus* en época Flavia con regímenes de explotación directo e indirecto. No en vano Plinio se refiere a su propio presente (*nunc*), una vez terminada la primera revuelta judía, y se contempla una injerencia de mayor grado frente a la escasa entidad de los antiguos jardines reales de Jericó donde hasta entonces el *balsamum iudaicum* bajo dependencia estatal se concentraba<sup>75</sup>. El contexto histórico de revuelta que domina el cambio de siglo favoreció una escalada de intervenciones y expropiaciones a las propiedades judías por parte de la administración romana. Mientras los *horti regii* de Jericó habían sido adquiridos por herencia de la dinastía herodiana, el *balsamum* se extiende ahora de la mano de la expropiación, que nunca ha sido tan numeroso y está bajo dependencia del fisco, ya sea para su arrendamiento o explotación directa: *servit nunc haec ac tributa pendit cum sua gente [...] seritque nunc eum fiscus, nec unquam fuit numerosior*<sup>76</sup> (Plin. *NH.*, 12, 112-13).

<sup>75</sup> Se ha discutido si la titularidad pública del *balsamum iudaicum* era sólo *ager publicus* dependiente del *fiscus* o había engrosado el *patrimonium Caesaris* (*vid. Baldacci, 1969*).

<sup>76</sup> Plin., *NH.*, 12, 112-13: “Sobre todos los demás perfumes el preferido es el bálsamo, otorgado en exclusiva a una parte del mundo: Judea. Antaño crecía en dos huertos, ambos del patrimonio real: uno de no más de veinte yugadas y otro de poco menos. Los emperadores Vespasianos [Tito y Vespasiano] exhibieron este árbol en Roma. [...] En la actualidad (*nunc*) está sometido a servidumbre y paga tributo junto con su propio pueblo (*tributa pendit cum sua gente*) [...] Los judíos se mostraron implacables con este árbol (como con sus propias vidas); los romanos, por el contrario, salieron en su defensa ¡y se combatió por un arbusto!; el fisco se ocupa actualmente de su cultivo y nunca ha proliferado más”.



Un paso más se produce a partir de la *deductio* de la colonia Aelia Capitolina en época de Adriano, una vez terminada la segunda gran revuelta judía, y que se salda con una expropiación definitiva de las propiedades judías de Jerusalén. A mi modo de ver, es en estos momentos cuando adquiere el mismo tratamiento que pocas décadas antes habría sufrido Cesarea, pues ante unas circunstancias compartidas se opta también por una solución semejante en relación a la *immunitas* y a la capitación judía. Esto sería lo que les hace similares según el fragmento de Paulo, y que atañe tanto a sus campos como seguramente también a la exoneración en el cobro de la capitación respecto al fisco, aunque no se diga de forma explícita en el caso de *Aelia Capitolina*. Si se acepta esta hipótesis algunas de las observaciones para Jerusalén podrían ser asimismo extensibles para los judíos de Cesarea. El contemporáneo a los hechos Aristón de Pella (s. II), aunque su obra se haya perdido y nos es transmitida por Eusebio, describe cómo tras el fin del conflicto en Jerusalén se impuso el derecho de guerra y se confiscó su tierra (*HE* 4, 6, 3). Al parecer la orden fue emitida por Adriano mediante un decreto en que además parece prohibirse el acceso de los judíos a la ciudad, aunque seguramente no haya que entenderlo de un modo literal de acceso físico como reflejan exageradamente los apologetas cristianos (Euseb. *Ibid.*; Tert. *Apol.*, 21, 5<sup>77</sup>; Tert. *Ad. Iud.*, 13, 3, 4) sino en el sentido de limitación de sus capacidades jurídicas (se anula su ciudadanía local) y de su patrimonio (tras ser desposeídos). Como ya se ha destacado, las fuentes que narran las peregrinaciones a Jerusalén corresponden a un periodo posterior (s. IV) y la prohibición de entrada aún no parece existir como tal en estos momentos, ni siquiera aparece en los escritos rabínicos (Cotton *et al.*, 2010: 22-25 y n. 108). En cualquier caso resulta evidente que las limitaciones jurídicas impuestas a los judíos en el decreto de Adriano debieron favorecer una salida más o menos forzada de buena parte de sus antiguos pobladores o mantenerlos como *incolae* no integrados. Julio Africano, procedente de la misma *Aelia Capitolina*, informa cómo en una de sus puertas una inscripción recuerda los términos de la dominación romana, con privaciones de acceso a la ciudad en un sentido más político, jurídico y patrimonial que físico<sup>78</sup>, al estar sometidos a la *potestas* de los magistrados romanos. Por tanto, aunque entre las *deductiones* de ambas colonias se separaran varias décadas en términos cronológicos, la similitud de sus suelos se enmarca en una política común del Estado hacia las propiedades judías. Este proceso tendría un primer paso en la expropiación flavia para ambas *civitates* aunque sólo Cesarea adquiriera el rango colonial en estos momentos y se le concediera la *immunitas*. Del mismo modo en época de Adriano, cuando los judíos son privados de toda capacidad jurídica en Jerusalén como quizás estuviera ya ocurriendo en Cesarea tras la primera revuelta, se funda Aelia Capitolina en su lugar con las mismas cualidades fiscales que aquella, al constar de una realidad común. Aunque en el caso de Cesarea no haya testimonios textuales sobre la suerte de las propiedades judías de un modo literal como sí aparecen referidos a Jerusalén, deben apuntarse otros indicios. En este sentido debe destacarse la creciente percepción entre la

<sup>77</sup> Tert. *Apol.* 21, 5: *quibus nec advenarum iure terram patriam saltim vestigio salutare conceditur.*

<sup>78</sup> *Aelia ab Aelio Hadriano condita, et in fronte eius portae, qua Bethleem egredimur, sus sculptus in marmore, significans Romanae potestati subiacere Iudaeos:* Hieron., *Chron.* 2153 (ed. Schoene vol. 2, 169), extraído de Cotton *et al.*, 2010: 22, n. 98.

ortodoxia rabínica por no considerar a Cesarea como parte de Israel, la tierra de David, ajena ahora a las leyes judías desde el periodo que abarca ambas revueltas. Su territorio se reviste de impureza en algunas zonas o en su totalidad como consecuencia directa de la intervención romana (sobre todas estas cuestiones *vid.* Patrich, 2011: 55-62). Todo lo que las fuentes talmúdicas de este periodo mencionan en torno a la “Tierra de los gentiles” puede considerarse, de este modo, un trasunto doctrinal a los cambios que en estos mismos momentos están experimentando las cualidades jurídicas de un *ager* sometido al efecto de la colonización y restringido, como en Jerusalén, para los judíos que allí seguían habitando.

La propuesta interpretativa hilvanada en las páginas precedentes permite extraer algunas conclusiones sobre la naturaleza del *tributum capitis* en Judea a la vez que abre nuevos interrogantes. Hemos visto cómo a medida que Roma absorbe un impuesto ajeno a su tradición, la capitación judía sufre una transformación profunda de su naturaleza. Desde su origen étnico-religioso la absorción e instrumentalización del mismo a partir de época Flavia hace que se entremezcle con unas circunstancias de sometimiento que tienen entre sus consecuencias directas las restricciones a sus derechos reales en el caso de estas colonias y la expansión de *ager publicus*, si bien a priori el impuesto también seguiría existiendo en el resto de la provincia ligado a su carácter étnico sin estas limitaciones. Es entonces cuando me pregunto hasta qué punto puede ser circunstancial esta constante o bien terminó por afectar a la caracterización del *tributum capitis* de Judea con el paso del tiempo para poder ser asimilable a lo que hemos observado para los habitantes de la *chora egipcia*. Es decir, cuándo el “ser judío” deja de ser el vínculo que lo liga a su capitación hasta verse superado por la “incapacidad de acceso a la propiedad”, si es que este salto pudo llegar a producirse, y cómo y de qué manera pudo llegar a afectar a otros colectivos del conjunto social de la provincia. O bien si, por el contrario, estas circunstancias que lo asemejan a Egipto sean una eventual coincidencia, es decir que sólo se dieran en algunos casos concretos que, como las dos mencionadas colonias, ejemplificaban un trato especialmente duro para el colectivo judío en oposición a otras zonas donde éstos se integraron de forma más laxa en sus condiciones de dependencia. Sea de una u otra forma, la alusión de Ulpiano, *annum tributo capitis obligantur* (D. 50, 15, 3) puede vincularse al colectivo judío sin extraer necesariamente de ello la existencia de un impuesto unitario, que varíe sólo en sus flecos, entre unas provincias y otras. Quizás *tributa capitis* haga más justicia a la versatilidad de este impuesto del que, en su forma en singular como la utiliza Ulpiano, sólo puede extraerse con seguridad su contenido más sumario. Es decir un genérico “pago por cabeza”, normalmente cantidades fijas, sin inferir conclusiones generalizantes que sospechosamente recuerdan a los sistemas impositivos actuales como complemento al *tributum soli*. A mi juicio, lejos de ser una figura fiscal estereotipada y general, es más bien un recurso puntual del Estado. La ambigüedad que se respira en sus manifestaciones (tan escasas, por otra parte, respecto al *tributum soli*) no hace sino confirmar este carácter flexible, multifacético y puntual, que se materializa para señalar unas condiciones duras de integración de *peregrini* en el Imperio y que suelen verse acompañadas por situaciones de indefinición jurídica y restricciones a la propiedad

como constante. Así parece ser el caso de Egipto como vimos y también en algunas partes de Judea, cuyo sistema fiscal sobre los judíos Flavio Josefo dice no ser mejor que la introducción a la esclavitud (*AJ*, 18, 1, 1). El apologeta Tertuliano siglos más tarde reconocerá esta misma cualidad compartida respecto al *tributum capitis*. Dentro de este carácter multifactorial y flexible, si algo parece definir todas sus formulaciones es su connotación infamante, un recuerdo de las circunstancias en que se produjo su sometimiento al Imperio y, huelga decir, nada más alejado de los esquemas de integración y del reconocimiento a la ciudadanía: *hominum capita stipendio censa ignobiliora, nam hae sunt notae capitivitatis*<sup>79</sup> (Tert. *Apol.*, 13, 6).

### **4.3 *Tributum capitis*, *ager publicus* y colonización.**

La cuestión judía también resulta interesante para considerar las características del impuesto de capitación en otras provincias del Imperio. En este caso se comenzará con el análisis de la situación en que este colectivo vive dentro de las comunidades fuera de Judea para proceder por método comparativo a asimilarlo a otras circunstancias en el seno de la peregrinidad. Como veremos, las constantes en estos casos son:

- La carencia de contenido étnico-religioso de la capitación.
- La gestión se desarrolla en las administraciones locales como figura fiscal comunitaria más que estatal.
- Se producen distintas coyunturas de indefinición jurídica que justifican el cobro de la capitación.

#### **4.3.1 La capitación de los judíos en las comunidades griegas orientales.**

En primer término, debe repararse sintéticamente en la coyuntura histórica general y la legislación que configuran la situación anómala en que vive el colectivo judío en comunidades griegas desde el siglo I a.C. La capitación que pesa de facto sobre ellos es, en este caso, cualitativamente distinta a la que hemos visto en el caso de Judea. No se basa en una derrota previa o en una tasa religiosa, sino en una consideración especial de “extranjero” que cuenta con unas cualidades ciudadanas problemáticas desde el punto de vista de las administraciones locales. Esto se produce como consecuencia de las oscilaciones y de la falta de adecuación entre los dispositivos dictaminados por los gobernadores en diversas provincias orientales para proteger a este colectivo y su escasa plasmación real en el funcionamiento tributario de las comunidades.

---

<sup>79</sup> “los hombres a quienes se grava con el impuesto de capitación pierden categoría, pues esto es indicio de cautividad”. La cuestión entre *tributum capitis* y *captivitas* la analizaremos de nuevo en el caso de *Camulodunum* (cap. 4.3.3).

El punto de partida es la definición del tipo de relación jurídica que se establece entre el colectivo judío y la *civitas* en que se asienta. Por un lado la línea política desde César fue otorgar ciertas prerrogativas y protecciones a los colectivos judíos asentados en numerosas comunidades griegas orientales, dada la influencia política y económica que este grupo ejercía en estas regiones, hasta el punto de conformar un genuino formato de ciudadanía que se integraba dentro de otras (*vid.* De Churrua, 1998: 40-67). Así por ejemplo, el cónsul Lucio Léntulo reclutó en Asia dos legiones en las que las comunidades judías de Éfeso quedaron exentas de servicio por contravenir sus preceptos religiosos y, más tarde, un senadoconsulto del año 49 a.C. dirigido al estado-cliente de Palestina ratificaba estas condiciones específicas a la que estaban sometidas las comunidades judías, respaldando su capacidad de asociación, el tributo de capitación mediante sus propias colectas, el respeto a sus prácticas culturales y ritos religiosos, etc. (*vid.* Joseph. A.J., 14, 10). Pero para lo que ahora nos interesa, cabe resaltar la conformación de esta genuina “ciudadanía judía” mediante el uso del *ius edicendi* de los magistrados provinciales. Para Asia contamos con dos epístolas que buscan hacer extensivo y aplicable el contenido del *sc.* del 49 a.C., la del procónsul, Publio Servilio, a la *civitas* de Mileto y Cayo Rabirio para la ciudad de Laodicea (Joseph. A.J., 14, 10, 20-21). Gracias a su *imperium* proconsular sus mandatos se imponen sobre los decretos locales, como el que habría tenido lugar en Trales (*ibidem*) o en la colonia *Iulia Pariana* (Joseph. A.J., 14, 10, 8) al contravenir la *auctoritas* senatorial sobre estos asuntos. Del mismo modo, Éfeso y Halicarnaso fueron presionadas para que hicieran efectiva esta autonomía de la colectividad judía a instancias de Roma como pasaría en un elevado número de *civitates* orientales (Joseph. A.J., 14, 10, 23).

Aunque no podamos extendernos en los diversos problemas que entraña la cuestión, las ventajas asignadas al “ser judío” (es decir, una ambigua categoría pseudociudadana de implicaciones no territoriales) supone una seña distintiva que los separa respecto al conjunto de la comunidad en algunos de sus *munera*, aunque desconozcamos la entidad de su auto-organización y el alcance en el reconocimiento de sus instituciones. Sobre este punto basta señalar la escasa trascendencia que estas disposiciones de los edictos translaticios provinciales debieron tener en el medio local, subsumidas por la práctica ordinaria de funcionamiento de las administraciones locales (*vid.* Valiño, 2006). El mismo Cicerón reconoce el pequeño alcance de la acción del pretor en estas ciudades griegas con abundantes minorías judías (Cic. *Flac.*, 71). Así se respira también en la insistencia por recordar la especificidad judía en la sucesiva legislación del Principado: Augusto reincide en los antiguos privilegios reconocidos por César en su edicto del año 12 a.C. del mismo modo que Claudio reincide en la autonomía de los judíos en las *civitates*, *municipia* y *coloniae* de Italia y fuera de ella (*vid.* Millar, 1966: 161). Finalmente, fuentes posteriores todavía recuerdan los privilegios dados a los judíos sobre cuestiones que fueran contrarias a la religión, aunque se les reconoce ya sujetos a las cargas locales (*D.* 27, 1, 15, 6= *Mod. 6 ex cus.*).

En este contexto de diálogo entre lo provincial y lo local, las comunidades parecen imponer al colectivo judío, por actuar como ciudadanía independiente respecto a la *civitas* en que se asientan, impuesto de capitación que terminan por recolectar a través de la confiscación del *didrachmon* cultural. La corrupción de esta práctica por parte de

las autoridades locales sobre las minorías judías debió ser continuada, hasta el punto de convertirse en un impuesto informal de capitación a través de la expropiación de estas cantidades. Sobre este problema ya nos informa un autor menos sospechoso de afinidad judía como es Cicerón, al referirse a estas recaudaciones en Apamea, Laodicea, Adraminto y Pérgamo desde décadas atrás (Cic. *Flac.*, 66-69). De nuevo, un edicto del año 14 a.C. se hace eco del incumplimiento generalizado de las prerrogativas dirigidas a la comunidad judía, dentro de las cuales toma un lugar destacado la obligación de estos pagos por cabeza (Joseph. *A.J.*, 14, 10).

En esta coyuntura se produce la audiencia de Agripa y su *consilium* el año 12 a.C. ante el conflicto abierto en las comunidades griegas de Jonia entre ambos conjuntos poblacionales (Joseph. *A.J.*, 16, 2, 4-5), lo cual aporta algunos elementos de juicio sugerentes para nuestra propuesta. En este sentido tiene importancia que la imposición de la capitación no se considere una consecuencia del hecho de ser judíos, sino por su calidad de extranjeros en las comunidades griegas en las que habitaban. Según se desprende de la postura griega en el fragmento, el impuesto local de capitación está plenamente justificado si no se pertenece a la comunidad pero se habita en ella en circunstancias no regladas. Aunque la información de este pequeño episodio es limitada, pues desconocemos en detalle las circunstancias de convivencia física, institucional y jurídica, destaca por ejemplo que el defensor de la causa judía, Nicolás de Damasco, afirmara que los judíos allí asentados tuvieron que reconocer su origen autóctono para librarse de esta carga. A mi modo de ver, lo que determina en este caso la imposición del tributo se fundamenta en un procedimiento extraño de “integración”, generado por los problemas de convergencia entre los sistemas cívicos griegos y este régimen de pseudo-ciudadanía, aparentemente ajena a la *civitas* en donde viven, y que asimismo cuenta con sus propios instrumentos, estructura organizativa y autonomía reconocidos en los edictos provinciales. De hecho, en el discurso que el historiador pone en boca de Nicolás de Damasco, éste reconoce a ambas comunidades como cuerpos jurídicos plenamente separados, y por esta causa no consideran verse sometidos a las leyes locales, pues su condición emana de instancias superiores de gobierno. La perspectiva griega es, obviamente, contraria, y confiesan que la imposición de esta capitación local se debe precisamente a su constante negativa a someterse a las leyes locales. Una de las quejas de los judíos era precisamente el hecho de ser llamados a declarar ante los tribunales locales en *sabbath*, día festivo y de descanso según sus preceptos religiosos. Cabe considerar que la relación que los judíos establecen con la *civitas* sea análoga a la del incolato, pues habitan en calidad de naturales sin integrarse en la *civitas* pero sujetos a la jurisdicción local, como reconoce Gagliardi entre las características fundamentales del *incola* (2006: 225). Por tanto, aunque la fragmentación de las fuentes impida dibujar un retrato perfecto de su situación de dependencia, estamos, en suma, ante una ciudadanía no completa en donde vuelve a expresarse la interrelación recurrente de indefinición jurídica y establecimiento de cantidades fijas de capitación.

### 4.3.2 Capitación e incolado dependiente.

Si se acepta este continuo entre las relaciones de tributación personal fija y una situación determinada de peregrinidad que, por una casuística diversa, ve disminuida su capacidad jurídica, deben explorarse otras posibilidades. En concreto me refiero a otras circunstancias análogas que se producen en el seno del incolado y, por tanto, vinculadas al proceso de *deductiones* coloniales. Las fuentes epigráficas y literarias dan testimonio de un subtipo de incolado que, a mi juicio, comparte ciertas características con el enigmático grupo de los *dediticii* en tanto que *nullius certae civitatis cives* (Ulp. *Reg.*, 20, 14). Se trata de un colectivo no adscrito a los aportes poblacionales foráneos en vías de integración, es decir, a aquellos *incolae* en situación transitoria que tienen una ciudadanía de origen y constan sólo de *domicilium* en la comunidad de acogida, lo que supone solo un escalón previo a su integración y con una situación medianamente regularizada (*vid.* Novillo López, 2012). Me refiero, por el contrario, a la actuación recurrente de Roma en algunos casos que, tras episodios de rebeldía o confrontación bélica, se saldaba con la sustracción de las tierras y la eliminación jurídica y administrativa de la comunidad peregrina a todos los efectos mediante la *deductio* de una colonia romana en su antiguo lugar. Es decir, la *deditio in fidem* no se veía superada, lo que producía una situación anómala para la antigua población peregrina que seguía habitando en su antiguo territorio sin disfrutar de derechos cívicos ni acceso a la propiedad<sup>80</sup>: “Esta carencia de ciudadanía (la suya propia ya no existe, y en la nueva fundación son meros residentes carentes de derechos) les sitúa jurídicamente en tierra de nadie. En esto precisamente ha consistido el castigo” (García 1997: 177). La pérdida de *origo* personal implica convertir el *domicilium* en la principal ligazón administrativa que ata al individuo con la comunidad a la que, sin pertenecer, se asocian. Constituye un caso de lo que Rodríguez Neila denominó como “dobles comunidades” (1978: 152), cuando la situación de conflicto que desemboca en la deducción colonial carece de pretensiones por integrar a sus antiguos habitantes más allá de su control fiscal una vez incorporados al censo mediante su *domicilium*. De hecho, como sabemos por la jurisprudencia clásica, este nuevo vínculo tampoco estaba exento de las cargas fiscales

---

<sup>80</sup> Debe advertirse el uso no técnico del término *incolae* como “habitante”, lo que puede implicar un contenido contrario al que nos estamos refiriendo, es decir, puede aludir a peregrinos que habitan en su propia *civitas* y que, por tanto, podría constituir a priori un contr Ejem p lo a nuestra interpretación. Un ejemplo de la problemática terminológica que acompaña a los *incolae* se aprecia en la traducción de Requejo Prieto (1990) a partir de Cic.2Verr., 3, 91 y de la que se hizo eco en su momento Lomas (1987-88: 386): “los halicienses, cuyos avecindados pagan los diezmos, pero los ciudadanos tienen los campos inmunes”. El pasaje, sin embargo, no da lugar a la duda: *Halicyenses, quorum incolae decumas dant, ipsi agros immunes habent*. En ningún caso puede tratarse de *incolae* como contingente poblacional foráneo que establece el *domicilium* y tiene acceso a la propiedad como se desprende de la traducción mencionada de “avecindado” contrapuesto a “ciudadano”, y en donde sólo los primeros deben pagar la *decuma*. El mismo Cicerón nos informa de la situación de esta comunidad, excepcional en Sicilia junto con otras cuatro *civitates* más, precisamente por no estar sometida a la *decuma* impuesta por Roma en la mayor parte de la isla (Cic. 2Verr., 3, 13). Ahí reside el privilegio, el hecho de conceder la inmunidad hacia la administración romana redundando en beneficio comunitario, pero no por ello desaparece el pago del diezmo por parte de sus ciudadanos, pues al fin y al cabo entronca con las fórmulas fiscales tradicionales de Sicilia antes de ser incorporadas a la órbita romana como el mismo Cicerón recuerda inmediatamente después (*ibidem.*).

que eventualmente pudieran derivar del domicilio, lo que explica la resistencia ocasional a declararlo (D. 50, 2, 37; 50, 1, 34). De aceptar la hipótesis propuesta en las páginas precedentes, puede plantearse la posibilidad de que recayera sobre este subtipo específico de incolado la tasa fija de capitación a la que nos venimos refiriendo. A ésta harían alusión algunas contribuciones económicas de poblaciones en tales circunstancias pero recogidas de forma sucinta, como aquellas exigidas a los salasos, *Salassi incolae qui initio se in colo(niam) cont(ulerunt)* (ILS 6573). La derrota de esta comunidad alpina conllevó la sustracción de sus tierras y la desaparición de la comunidad desde el punto de vista administrativo, siendo una parte de su población vendida como esclavos mientras, los restantes, engrosaron como *incolae* en la colonia de Augusta Pretoria, fundada el 24 a.C., a instancias de Terencio Varrón. Mientras la mayor parte de sus tierras eran sustraídas para repartos entre pretorianos, a sus antiguos habitantes se les exigió una “suma fija” (D. Cass. 53, 25, 4-5; Str. IV, 6, 7). Del mismo modo, los vecinos camunios, con quienes Plinio los compara, fueron distribuidos entre los municipios adyacentes y presumiblemente en similares circunstancias como *incolae* (Plin. NH., 3, 134), aunque en este caso no se menciona la capitación.

Dicho esto, resulta también tentadora la comparación con los conocidos *incolae contributi* recogidos en las leyes de Urso, relativas a la colonia *Genetiva Iulia*, que harían referencia a este mismo subgénero de incolado por conquista, sin ciudadanía y capacidad jurídica muy restringida. El fragmento que a ellos se refiere es, sin embargo, bastante parco en detalles, tan sólo recoge la posibilidad de que tanto los colonos como los residentes *contributi* sean armados en caso de emergencia para la defensa de la *civitas*: *is colon(os) incolasque contributos quocumque tempore colon(iae) fin(ium) defendorum causa* (lex Urs. cap. 103). Si aceptamos que no existe una coordinación entre *incolas* y un supuesto *contributos(que)* como así se ha defendido en los mencionados trabajos que han explorado la cuestión, se deduce una partición interna en el seno del incolado de la comunidad: *incolae* genéricos e *incolae contributi* (Rodríguez Neila, 1978: 152; García, 1997). De este modo, los otros apartados de la ley que recogen diversas disposiciones referentes a los *incolae* (lex Urs. caps. 91, 95, 89 y 126), implicarían a todos aquellos definidos por su oposición a los *cives*, siendo los *incolae contributi* una formación específica. Para este incolado genérico el establecimiento de *domicilium* conlleva una serie de ventajas y garantías que, de manera conjunta al cumplimiento de determinadas obligaciones inherentes a su condición, daría la posibilidad de un futuro ingreso en la ciudadanía por *adlectio* en algunos casos (Rodríguez Neila, 1977). Así se observa en algunos testimonios epigráficos más o menos explícitos en este sentido procedentes de *Hispania*, como el acceso de Lucio Lucrecio Severo al ordo decurional *ex incolatu* (CIL II, 1055) o en los *incolae* de la *lex Irnitana* que tienen propiedades en el municipio (vid. Calzada, 2010). Sin embargo, la incertidumbre domina a la hora de identificar al conjunto de *incolae contributi*. Una solución se ha buscado en el fenómeno de la *contributio* en sentido técnico según la definición de la clásica obra de Laffi (1966; vid. García, 1997: 177). Ello arroja algunas dudas si tenemos en cuenta que la naturaleza de la *contributio* se caracterizaba para el autor italiano como un recurso del Estado romano cuando, en situaciones de decadencia cívica, otra comunidad más fuerte, y normalmente cercana, las asume. Sin embargo

debe notarse en este sentido que la dependencia a la nueva *iurisdictio* y la pérdida de autonomía local no implica la supresión de la comunidad *contributa*. Se trata sólo de una medida provisional de cara a cubrir las mutuas deficiencias económicas o administrativas de ambas comunidades, a veces incluso *motu proprio*. La fusión de competencias se da además entre dos comunidades promocionadas (como seña distintiva respecto a la comunidad *adtributa*, nunca privilegiada) y que encuentra en el caso de Capua y Urbana su plasmación paradigmática (*vid.* Laffi, 1966). Ello otorga a la *contributio* un significado más político, administrativo y fiscal que jurídico, pues resulta en un recurso o enmienda dirigido a paliar las carencias en el control de los bienes y personas para transferir dicha competencia a otra comunidad cercana que sí cuente con capacidad para asumirlas eficazmente. Los escasos testimonios que recogen el fenómeno en las fuentes clásicas y epigráficas nunca niegan la supervivencia jurídica de la comunidad *contributa* aunque en la práctica ésta fuera imprecisa o viera reducido de modo palmario su capacidad de acción. Dicho lo cual, la aplicación de esta acepción para los *incolae contributi* de Urso, que precisamente se caracterizan acertadamente por su carencia “de ciudadanía alguna y por tanto de derechos, pues la suya propia [...] ha sido suprimida por Roma” (García, 1997: 176) no resulta del todo satisfactoria. El propio Laffi lo atribuye a un posible “error del copista”, pues aun más cercano a la *adtributio*, “i tentativi di spiegazione finora avanzati non soddisfano molto di più” (1966: 133). Dentro de este prolijo debate, si no se abandona una separación estricta entre *incolae* y *contributi*, sólo huelga por reconocer en este epíteto un uso más literal como “contribuyente” en un sentido práctico. Ello no deja de tener sentido si nos atenemos a este continuo que hemos perfilado en las páginas precedentes en relación al acceso restringido a la tierra. Los *incolae* requieren de un privilegio específico para poder acceder a la propiedad, como ocurrió posiblemente con los habitantes de *Sabora*, a los que Vespasiano les otorga *per epistulam* un *oppidum de mio nomine [Flavium] e in planum*, constituido probablemente por los antiguos *incolae* de la ciudad (D’Ors, 1953: 61-63). Sin embargo, en estos casos más excepcionales de *incolae* sin *origo*, castigados por su oposición a Roma, cuentan en su indefinición jurídica la marca de su castigo. Excluidos de la tierra, sólo podrían trabajar para otros para pagar los impuestos de capitación. Así, de hecho, se inclina por entender el pasaje D’Ors, aunque sin especificar un valor seguro al tipo de carga en cuestión: “por *contributi* puede entenderse los *incolae* en general, que deben ‘contribuir’ a los *munera*” (1953: 234). Podría lanzarse la hipótesis de que entre estos *munera*, estuviera la carga de capitación personal además de la explícita disponibilidad para la defensa militar de la colonia en caso de ataque, de la que el resto de *incolae* quedaría exentos por no habitar necesariamente en su territorio (podrían ser simplemente propietarios). Las variaciones en el uso de la forma *contribuere/contributio* tampoco se restringen a la fusión administrativa de la *contributio* y abren otras posibilidades. En ocasiones toma el sentido de “dar” en textos tanto literarios (*e.g.* *Tib.*, I, 6, 64<sup>81</sup>) como jurídicos (*D.* 35, 2, 15) y otras se refieren explícitamente a pagos: *soluta contributione a Cirtensibus* (*CIL*

---

<sup>81</sup> Los dones o regalos de la primavera son representados aquí con la curiosa forma *contribuat sua munera* en referencia a la flores. Sobre este sentido de *munera* *vid.* Pereira, 2005: 416 y ss.



VIII, 8210) o *pecunia contributione* (D. 19, 2, 30), *onera annonarum et contributum temporarium* (D. 26, 7, 32, 6), entre otros ejemplos. Este significado sería el que caracterizara a estos *incolae contributi* del capítulo 103 de las leyes de Urso, una precisión respecto al conjunto restante de *incolae*.

Avanzando en esta línea interpretativa hay dos pasajes tardíos del Digesto en los que puede apreciarse una huella de esta diferenciación que podría apuntalar la mencionada hipótesis sobre los dos tipos de incolado o, mejor dicho, el subtipo específico de *incolae* dependiente y de derechos restringidos frente al residente genérico. El primero de ellos ya lo apreció en su momento Kornemann para buscar una interpretación al caso de Urso (*vid.* Laffi, 1966: 130), defendiendo la posibilidad de que estos *incolae contributi* se caracterizaran por vivir *extra muros* en el territorio de la ciudad apoyándose en:

*‘Incola’ est, qui aliqua regione domicilium suum contulit: quem Graeci πάροικον appellant. nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant*<sup>82</sup> (D. 50, 16, 239, 2).

En línea semejante, Rodríguez Neila también apuntó a que los *incolae contributi*, por las circunstancias de su proceso de conquista e integración, estuvieran “no viviendo *intra muros*, sino en el territorio de la ciudad, bien aisladamente o enclaves de rango inferior” (1978: 152). No se trata sin embargo, a mi modo de ver, de residentes en un sentido físico, o no únicamente, sino a los propietarios cuyos gravámenes van ligados a la ciudad que los gestiona sin tener *origo* en ella. A pesar de la traducción, “con el poder de vivir en ella”, el fragmento original habla de *agrum habent* y *sede recipiant*, es decir, parece indicar que la asignación del *domicilium* se relaciona con la adquisición de propiedad sobre el suelo.

Menos atención ha recibido sin embargo otro pasaje de indudable interés que debe contrastarse con el anterior: “Debe saberse que el que vive en el campo no se considera que sea residente, pues el que no tiene las ventajas de la ciudad, no se considera que sea residente” (D. 50, 1, 35). Esta sentencia a primera vista resulta, cuanto menos, problemática. Pues ¿por qué el lugar de habitación ha de inmiscuirse en la consideración de un individuo como residente o no residente? Aparentemente se llega a un punto contradictorio con la primera sentencia, pues una lectura conjunta de ambos fragmentos puede hacer pensar que no fueran propiamente íncolas *qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent* (D. 50, 16, 239, 2), puesto que este segundo pasaje excluye de forma muy clara a “los que viven en el campo” del colectivo de los *incolae*. Una solución presumible es que deben abstraerse dos sentidos distintos a los íncolas que aparecen en cada una de las sentencias. En la primera se refiere al valor genérico de *incola*, el que tiene relaciones patrimoniales con ella como hemos visto o simplemente habita en su territorio. El segundo, sin embargo, otorga un significado mucho más restringido al *incola* para que pueda considerarse tal, pues requiere una ligazón con la comunidad en

---

<sup>82</sup> “Es *incola* el que transfirió su domicilio a alguna otra región, lo que los griegos llaman *paroikon*; y no son sólo residentes los que viven en la ciudad, sino también los que tienen una finca dentro de los límites de una ciudad con el fin de poder vivir en ella”.

la que habita, es decir, un *incola* en vías de integración. Desde esta perspectiva habría para el jurisprudente unos mal llamados *incolae*, falsos íncolas, que se considerarían comúnmente como tales sin serlo, lo que dota de sentido a su intento de aclaración. Este indefinido grupo de los habitantes del campo, en efecto, pudiendo parecer *incolae* por habitar en el *territorium* de la *civitas*, no cuentan con las ventajas de la ciudad que sí disfruta el *incolae* con sentido pleno, el verdadero *incola*. El contraste entre ambos fragmentos induce a pensar que entre estas ventajas aparecería, nuevamente, la capacidad de *agrum habere* que sí tiene, como hemos visto, la versión privilegiada del incolato, los “verdaderos *incolae*” y la automática recepción del domicilio. He aquí la confusión que el jurisprudente busca subsanar respecto a los habitantes del campo y que, por su especificidad (extensible, por otra parte, a los *incolae contributi* de Urso) son tomados por incolas sin serlo, pues a pesar de vivir en el *territorium* circundante no lo hacen de un modo reglado, no son *incolae* completos, sino exluidos.

Un contexto análogo de este tipo de imposiciones *per capita* lo encontramos en la reproducción de una carta que Antonino Pío envió a una comunidad no identificada de Macedonia y que, como ya apuntó en su momento Oliver, parece tratarse de una *civitas* de reciente fundación (Oliver, 1958: 56-57), si bien desconocemos el estatuto que pudiera ostentar. La noticia la conocemos a partir del hallazgo en 1946 de un decreto local que inmortaliza y rememora algunos años más tarde (189 d.C.) las indicaciones dadas por Antonino Pío en respuesta a demandas previamente formuladas por el gobierno local, de cara a afrontar las acuciantes necesidades económicas comunitarias<sup>83</sup>. En el texto aparecen varios elementos interesantes que es preciso comentar. En primer lugar, que la dirección de las medidas propuestas para lograr el equilibrio deseado de sus *rationes* apunta a tres grandes colectivos que parecen constituir de modo abstracto el sistema político y socioeconómico que marca el funcionamiento local básico.

- 1) Por un lado, el grupo ciudadano de pleno derecho (1§). Aunque la parte dedicada a este contingente es escasa por el estado fragmentario de la inscripción en su parte superior, indica la deuda que la comunidad debía tener contraída con el fisco, causa principal del envío de la embajada al emperador. La onomástica de estos legados está además compuesta por nombre único y filiación, lo que permite suponer que no se trate de una

---

<sup>83</sup> Reproducimos aquí la traducción completa de la edición de Oliver (1958): “ 1§ - - - the outsiders - - - on the land, when you, the citizens have so much to pay on whatever - - -and slaves and objects of silver are not for use in your house. 2§ Seeing that they would only inform me again that something ought to be prescribed concerning this on which it is right for you to make the final decision, I hereby grant to you permission to impose also a tax of one denarius apiece on those free persons who traditionally pay a poll tax, in order that you could put your hands on this tax too, a ready source of income to meet your *compelling* needs. 3§ Let your council be one of eighty councilors and let each contribute 500 Attic drachmas, in order that there may come to you prestige from the importance of your council and an income from the sums which they will contribute. 4§ The outsiders who have acquired estates in your territory shall be subjects to the jurisdiction of your magistrates, both as plaintiff and as defendants, in cases up to 250 *denarii*. 5§ As ambassadors were acting Demeas son of Paramonus and Crispus son of Tuscus, to whom the travel money is due unless they have offered to bear the expense themselves. Farewell”.

comunidad promocionada todavía, al menos durante el gobierno de Antonino Pío. Ello contrasta con la onomástica latinizada que dos décadas más tarde presentan los “poliarcas” que firman el decreto decurional. Dentro del colectivo ciudadano se especifican además algunas medidas dirigidas a la ampliación del *ordo* local hasta los ochenta miembros y el aumento de la *summa* honoraria hasta 500 dracmas. Esta cantidad nos sitúa en un enclave de importancia media. 500 denarios es lo que se intuye que podía pagar una comunidad de mediana entidad como fue Laccipo (*CIL* II, 1934), un montante discreto si se compara con los 2.000 de Urso o los 5.000 denarios de la confederación de Cirta<sup>84</sup>.

- 2) Los propietarios extranjeros (1§ y 4§). Quizás la evasión en las cargas fiscales de este colectivo hacia la *civitas* (alegando los *munera* en su comunidad de origen) pudo motivar la intervención del emperador. Antonino Pío parece resolver el conflicto de la manera habitual, esto es, que la *iurisdictio* sobre los fundos depende de la comunidad en que éstos se sitúan en vez de la comunidad originaria de quien ostenta su propiedad, estableciendo límites pecuniarios por encima de los cuales pasan a instancias superiores del gobierno provincial (*vid.* Ulp. 3 *de cens* =D. 50, 15, 4, 2). Aunque no podamos profundizar más en la anatomía social del grupo, es suficiente apuntar a un incolado genérico, como el anteriormente perfilado, que está en vías de integración al constar de capacidad para adquirir propiedad local.
- 3) Por último, aparece el colectivo sometido a capitación (*sómaton*) de un denario anual (2§). Aunque es preciso ser precavidos sobre la condición jurídica particular de este grupo por la escasez de información, considero sintomática la repetición de esta serie de elementos asociados al pago de formas personales fijas de tributación con marcas de exclusión ciudadana en comunidades de nuevo cuño. En este sentido, el fragmento es parco en detalles, pero el estatuto jurídico de este grupo parece dibujarse en oposición a los anteriores. Por un lado, se reconoce explícitamente su *status libertatis*, pero sin embargo no parecen integrar el conjunto de *cives*, o al menos no se dice, lo cual ya resulta sospechoso en primer término. Por otro lado, no parecen ser tampoco población que pueda identificarse con los “propietarios extranjeros” pues el argumento que se aduce para justificar la capitación se remonta a la tasa análoga que tradicionalmente debieron pagar los antiguos habitantes del lugar, cuyos detalles desconecemos, y que ahora es instrumentalizada dentro del contexto de integración en las estructuras fiscales del Imperio con un fin legitimador. Cabe entonces plantear la hipótesis de que estemos nuevamente ante un incolado incompleto y limitado

---

<sup>84</sup> Para una aproximación sobre las variaciones de la *summa legitima* en *Hispania* *vid.* Melchor Gil, 1994: 194-200.

en sus capacidades, excluido tanto del colectivo ciudadanos como de los *incolae* propietarios de origen externo y en vías de integración comunitaria. A ello se suman los indicios de su reciente fundación, quizás superpuesta a una preexistente que es, de este modo, absorbida pero no necesariamente integrada. Este testimonio reincide además en la dimensión local de estos pagos “por cabeza”. Aunque la intención que se esconda sobre estas nuevas imposiciones sean las deudas contraídas con el fisco, el alcance del impuesto no supera el marco administrativo comunitario, lo que contrasta de nuevo con la presunción del *tributum capitis* como figura fiscal estereotipada requerida desde los organismos centrales de la administración imperial. Como reconoce el propio emperador, no es materia suya la decisión a la hora de imponer este tipo de gravámenes, que depende del gobierno local *de iure*: “it is right for you to make the final decision” (2§). Su permiso es solo simbólico, no atañe al emperador el procedimiento interno para la recolecta de las cantidades tributarias impuestas “en bloque”, por mucho que reconozca la utilidad de estas medidas para equilibrar el adeudo comunitario. Esta petición de permiso debe entenderse, por tanto, dentro del protocolo de deferencia hacia el emperador y con un fin meramente informativo. Los motivos de la embajada tuvieron que ser otros, como la negociación de las cargas o la ampliación del *ordo*, que sí requerían la intervención del gobernador como sabemos, por ejemplo, por las indicaciones de Trajano para algunas ciudades de Bitinia que buscaron aumentar sus senados locales (*e.g.* Plin. *Ep.*, 10, 112).

#### 4. 3.3 Capitación y otros formatos de sometimiento: *Camulodunum*.

Para completar esta panorámica contamos con otra de las escasas referencias explícitas del *tributum capitis*<sup>85</sup> y que sirven para reafirmar nuestras hipótesis. Se trata de la de la conocida rebelión de poblaciones britanas de la zona sur y sudoriental de la isla de la que nos informan en lo fundamental Tácito (*Ann.*, 14, 29-39; *Agr.*, 13, 1-16,4) y los epítomes de Dión Casio (62, 1-12) durante el gobierno de Nerón. Concretamente la alusión que se ha identificado como *tributum capitis* sobre estas poblaciones en este caso parte de la reproducción del discurso que Dión atribuye a la antigua reina de los trinovantes, Boudica, que encabeza la revuelta: “les pagamos un tributo anual con nuestros cuerpos” (*tōn sómaton*) (D. Cass., 62, 3, 3). Sobre que el sistema fiscal impuesto sobre algunas de estas poblaciones fuera un factor de primer orden en el desarrollo de la la revuelta hay poco que objetar, dado el énfasis que se da a este

<sup>85</sup> También para la parte occidental del imperio se ha apuntado el caso de un galo del que se dice *tributarius* y que ha sido tomado como signo de *tributum capitis* (Suet. *Aug.*, 40, 3; Le Teuff, 2012: 154), pero que a mi juicio resulta más probable relacionarlo con el impuesto imperial por excelencia en ámbito provincial, el *tributum soli*, para el cual cobra además mayor sentido la *immunitas* que Augusto parece concederle (en contrapartida por la negativa a otorgarle la ciudadanía romana como quería Livia). Esta lectura de Le Teuff, parte de una asociación directa entre *tributum capitis* y peregrinidad como figura fiscal característica de todos los peregrinos.

elemento en las diferentes versiones. Sin embargo, resulta también preciso circunscribir la capitación a su contexto específico pues, dada la generalización que se infiere del discurso de Boudica para el conjunto de los insurrectos, podría invitar a observar una dimensión extensiva del impuesto en el caso britano cuando, más bien, parece más comedido relacionarlo con un fenómeno concreto de integración provincial como venimos haciendo desde las páginas precedentes. De hecho, la personificación en Boudica de las aspiraciones de los *britannii* en cierto modo sintetiza la amalgama de distintas situaciones de dependencia y explotación, que tienen en común las condiciones excesivas que motivan la revuelta, pero que engloban en la práctica sistemas impositivos dispares. Algunas de estas medidas que pueden extraerse son, por ejemplo, préstamos de carácter público a las élites locales desde el comienzo de la provincialización durante el gobierno de Claudio con el fin de granjearse su fidelidad y asentar los cimientos de formas más semejantes a la clientela que a las de propiamente estado-súbdito. Al igual que las anteriores, también se recogen préstamos de carácter privado, como el que contrajo Séneca con algunas de estas comunidades, al parecer con una tasas de interés demasiado elevadas (D. Cass., 62, 2, 1). Dentro de los sistemas de tributación ordinaria, el *tributum soli* debió ser el principal instrumento de fiscalización de estas *civitates* peregrinas y que pagarían presumiblemente en bloque, tal y como se observa en referencia al tributo de las propiedades que sí mantuvieron bajo su control directo y que fueron mayoritarias entre las comunidades sublevadas (*vid.* 62, 3, 2).

Un capítulo aparte merece las numerosas referencias a las confiscaciones que, en íntima conexión con el *tributum capitis*, deben relacionarse sólo con la reordenación del territorio circundante de la colonia de *Camulodunum*, renombrada tras la revuelta como *colonia Claudia Victricensis* (AE 1996, 954a)<sup>86</sup>. Su *deductio* durante el gobierno de Claudio (49/54? d.C.) ocupó de forma simbólica y material el antiguo lugar que había sido sede del vencido reino de los trinovantes, *Camuloduno*, “el fuerte de los camulos”, y cuya importancia se revela como foco de producción monetaria (Williams, 2007) además de algunos restos arqueológicos detectables (Drury, 1984: 9-35; Dunnett, 1975: 19-32)<sup>87</sup>. Como ha sido puesto de relieve la *deductio* sobre la comunidad preexistente fue de carácter excepcional y ejemplarizante, un caso único entre las quince fundaciones coloniales de época de Claudio, al menos para la parte occidental del Imperio (Dudley y Webster, 1963: 44; Watkins, 1983: 323). La desposesión de las tierras de estas poblaciones se repite en varias ocasiones, pero casi siempre en relación con la colonia y las distribuciones de tierras en su pértica. Tácito enfatiza el odio hacia los veteranos, principales beneficiarios de los repartos, por haberles echado de sus casas y expulsado de sus campos (Tac. *Ann.*, 14, 31, 3) así como el ensañamiento del procurador sobre sus bienes<sup>88</sup> (Tac. *Agr.*, 15, 1, 2). Otros fragmentos que hablan de modo más general sobre las expropiaciones de casas (Tac. *Agr.*, 15, 3) y campos (D. Cass. 62, 13, 2) sólo cobran

---

<sup>86</sup> En la actual Colchester.

<sup>87</sup> Sobre el primer campamento de época de Claudio puede apreciarse la nueva retícula ortogonal urbana, que alcanzó importantes cotas de monumentalización, sobre todo a partir del siglo II d.C.

<sup>88</sup> El *procurator* tenía en Cala su sede en tanto que capital provincial, sin duda con funciones en las asignaciones de tierras y la ordenación del territorio, tanto de la colonia como en otros diversos ámbitos de interés para el fisco.

sentido para la colonia, único núcleo de entidad urbana reconocible en toda la región, cuyos patrones de asentamiento fueron predominantemente rurales en oposición a otras zonas que experimentan urbanismo en diversos focos, como los cercanos *Coritani* y *Dobunni* (Dunnett, 1975: 63-81). Las sustracciones asentaron a su vez nuevas prácticas fiscales, como los *agri compascua* de la colonia, cuyo uso parece estar sujeto a tasa<sup>89</sup> (D. Cass., 62, 3, 2), o el arrendamiento de tierras que, según dice, eran propias pero cultivadas para otros (*ibid.*).

El significado de la colonia en el nuevo paisaje provincial explica su asimilación, por metonimia, con el del propio Estado romano. La colonia, y en concreto el templo de Claudio que custodiaría el tesoro local, es identificado como la causa de todos los males acaecidos. Esto se observa en numerosos pasajes en las distintas versiones, en donde el mencionado templo es concebido como *arx aeternae dominationis* (Tac. *Ann.*, 14, 31, 4) y en torno al cual se concentró la defensa romana hasta su final destrucción (Tac. *Ann.*, 14, 32, 3). Esta fase ha podido identificarse con uno de los estratos inferiores del templo de época Flavia, cuyos niveles presentan indicios del incendio durante su destrucción, aunque es objeto de debate (*vid.* Fishwick, 1997: 34). También se ha planteado la posibilidad de que los peregrinos dependientes hubieran podido contraer distintas obligaciones culturales y económicas hacia el templo (Simpson, 1993). La colonia es asimismo considerada repetidamente como el foco de su esclavitud, *sedem servitutis* (Tac. *Agr.*, 16,1).

Todos estos elementos, a la vista de lo ya mencionado y del carácter ejemplarizante de la capitación, que siempre parece relacionarse con condiciones especialmente duras de sometimiento, entran por tanto en consonancia con la situación que pareció vivir buena parte de la comunidad de los trinovantes que, de un modo u otro, se mantuvieron relacionados en condiciones de dependencia respecto a la nueva colonia. De este modo se explica asimismo la aparición de una figura anómala desde el gobierno central que se inmiscuye en las labores de censo de la colonia. Según sabemos por la *Tabula Heracleensis*, el procedimiento general confería autonomía a las colonias a la hora de acometer sus propios censos, que eran dirigidos por las magistraturas locales a tal efecto<sup>90</sup> (los *Ilviri quinquennales*), al menos en contexto itálico. Sin embargo, el caso de *Munatius Aurelius Bassus* dice ser *censitor civium Romanorum coloniae Victricensis quae est in Britannia Camaloduni* (CIL XIV, 3955), es decir, un enviado directo desde las dependencias centrales para el registro, en principio, de los ciudadanos romanos. Sin embargo, dada su excepcionalidad es posible suponer que sus competencias no se restringieran a esta tarea, cosa para la cual la colonia estaba perfectamente dotada, sino que el recuento de los ciudadanos romanos implicaba asimismo disociar al conjunto privilegiado del montante poblacional dependiente para que no se hiciera pasar por tal y su situación quedara, de este modo, registrada por escrito y vinculada en lo sucesivo al pago de la capitación. Efectivamente, que el gobierno central se implicara en las labores

---

<sup>89</sup> Una clarificación sobre las ambigüedades en torno al *ager compascuus* y *scripturarius* puede encontrarse en Naco (2008: 456) en relación al llamado *ager publicus* local.

<sup>90</sup> Sobre los problemas de datación y alcance de la *lex Heracleensis*, de carácter local o considerada la *lex Iulia municipalis* de época Cesariana, puede encontrarse una síntesis en: López-Redondo, 2010.

de censo locales sólo toma sentido si su función va encaminada al control de un impuesto directo como es el *tributum capitis* sobre esta población dependiente.

Sin embargo, es todavía necesario considerar la condición o situación jurídica que parece vincularse en este caso al cobro de los impuestos por cabeza, de nuevo sobre personas aparentemente desposeídas. Sobre este asunto ya se ha indicado que la suerte de los trinovantes parece distinta a la que puede apreciarse para otras poblaciones que se integraron a partir de un sistema federal de sometimiento bajo una máscara de independencia. Este instrumento está ya puesto de relieve por el propio Tácito, al reconocer el recurso de Roma a la hora de ingresar a poblaciones en su eje de dominio empleando a reyes como instrumento de esclavitud: *vetere ac iam pridem recepta populi Romani consuetudine ut haberet instrumenta servitutis et reges* (Tac. Agr., 14, 1). Así parece que fue el caso de los propios Icenos liderados por Boudica durante la revuelta, y que habían sido gobernados por su marido Prasutargo hasta su muerte, momento en que se transfiere el reino a Roma *ex testamento*, cosa que con toda seguridad ya habría sido establecida en el *foedus* que regía la relaciones del reino vencido con Roma. Como pone de ejemplo el mismo Tácito, así sería también el caso de las ciudades britanas dadas a Cogidumno dentro de esta misma estrategia. Sin embargo, el núcleo colonial de *Camulodunum* fue la punta de lanza de la provincialización de la zona, pues en este caso la *deditio in fidem* no se vio superada por un *foedus* que marcara nuevas relaciones bilaterales (por asimétricas que éstas pudieran ser), sino con un control directo capitalizado por este núcleo respecto a su territorio dependiente, un claro contraste respecto a la dirección que toma la política romana en este caso particular britano: *redactaque paulatim in formam provinciae proxima pars Britanniae addita insuper veteranorum colonia* (Tac. *ibid.*). La indeterminada situación en que debieron vivir los habitantes sometidos a *Camulodunum* es dibujada de forma confusa en ambas versiones, si bien resulta sintomático el énfasis que ambas ponen en representarla como un estadio inmediatamente superior a la esclavitud, a la que, sin pertenecer, se acerca.

Sobre esta cuestión, una de las posibilidades más plausibles es que estemos ante población dediticia como ya planteó Dunnett en relación a los trinovantes y ha sido más recientemente defendido por Sastre<sup>91</sup> (2003: 180-183): “[los trinovantes] were dediticii – defeated enemy people who were completely at the disposal of the Roman authorities and had few, if any, legal rights. Their territory was to be closely garrisoned and the people themselves heavily taxed and, in some cases, deprived of their land” (Dunnett, 1975: 32). Antes de adoptar una resolución definitiva sobre este asunto y anticipar conclusiones es preciso reparar en las palabras de Tácito sobre un concepto general, el de *captivitas*, que utiliza para referirse a este escalafón cercano a la esclavitud y que cuenta, a mi juicio, con un sentido jurídico técnico<sup>92</sup>. La información de Dion Casio

---

<sup>91</sup> Si bien para un mayor espectro regional que incluiría a los *Iceni* y vinculado a la expansión del *ager publicus* en vez del *ager colonialis*.

<sup>92</sup> Han sido ya advertidos los riesgos de otorgar valor técnico a los pasajes literarios que mencionan la *captivitas*, pues éstos pueden expresarse en un modo coloquial (Sanna, 2007: n. 3). Así parece ocurrir en lo referente a la “captura” de ciudades por parte de Tácito (*vid. supra*). Sin embargo, no es menos cierto que tampoco puede desecharse toda alusión que, por excesivo puritanismo, no sea estrictamente

sobre este pasaje, aun nutriéndose como lo hizo de la narración de Tácito, pasa este contenido sensible por el tamiz de los esquemas binarios de la *eleutheria* (libertad) y *douleia* (esclavitud) (vid. Sastre, 2003: 181). Éstos, de profunda raigambre en el pensamiento griego, desvirtúan sin embargo nuestro concepto, con connotaciones intermedias entre ambos supuestos ideales. El uso que hace Tácito de la *captivitas* en relación a los trinovantes resulta, por el contrario, de gran interés, pues a pesar de su insistencia en este caso no es una concepción que esté especialmente presente en el vocabulario habitual de Tácito para los conquistados<sup>93</sup>. Y, cuando lo está, suele usarse para aludir a la “captura” de ciudades (*Ann.* XVI, 16), de generales o reyes (Tacfarinas: *Ann.*, IV, 25, 3; Caracato: *Ann.*, 12, 38; Zenobia: *Ann.*, 12, 51) o bien cautivos de guerra enemigos (*Ann.*, XI, 23; *Dial.*, 17, 4). Esta última acepción es la que aparece relacionada con los trinovantes, pero que es preciso desgranar.

En general desde época republicana, y con sucesivos desarrollos en la jurisprudencia clásica y post-clásica, la *captivitas* era una situación jurídica particular y precaria, que comportaba la pérdida temporal de la tutela sobre los bienes y personas cuando la persona que caía en cautividad en territorio enemigo se convertía en su *servus hostium*. Evidentemente la información con que contamos está casi exclusivamente circunscrita al objeto de interés de la jurisprudencia, que no es otro que la revelación de distintas circunstancias que podrían darse en el seno del *ius civile* para ciudadanos romanos capturados en territorio enemigo o en acto de servicio exterior. Sobre toda esta casuística en torno al *ius postliminii* (derecho por el cual se podía producir la *restitutio* en las relaciones de *potestas* del cautivo una vez regresaba a territorio romano si se cumplían algunas condiciones<sup>94</sup>) hay diferentes matizaciones por parte de Gayo, Ulpiano y Paulo especialmente, pero que dejan en un segundo plano, como es lógico, casos como el que ahora nos ocupan (vid. *D.* 4, 5, 1-11; 49, 15, 1-30).

A pesar del sesgo, pueden exponerse algunas consideraciones sobre la situación de los trinovantes dependientes de la colonia, sobre los que pesa una relación de *captivitas*. Una primera definición de interés podemos encontrarla en S. Isidoro, quien la relaciona de forma intrínseca con una inmediata *capitis deminutio*, la pérdida de ciudadanía y libertad: *Captivus dicitur quasi capite deminutis; ingenuitatis enim fortuna ab eo excidit, unde et ab iuris peritis capite deminutus dicitur*<sup>95</sup> (Isid., *Orig.*, X, 54). A pesar de su carácter tardío, tal y como reconoce, recurre a las obras de la jurisprudencia. Ello puede contrastarse, como veremos, con una de las categorías específicas que perfilaron tanto Gayo como Ulpiano: la *capitis deminutio maxima*. En concreto, definieron tres, y todas ellas suponían una transformación del *status* personal, pero a diferentes niveles: *libertas, civitas y familia* (Gai. *Inst.*, 1, 159-162; *D.* 4, 5, 11). La más laxa era la *capitis*

---

perteneciente al ámbito de la jurisprudencia. Más si, como sabemos de la carrera política de Tácito, éste llegó a alcanzar el consulado (Moralejo, 1979: 7) y entra dentro de lo razonable pensar que tuviera algún tipo de conocimiento de este tipo de disquisiciones en su ejercicio jurisdiccional, como sería el caso en este conflicto específico, cronológicamente cercano al periodo en que desarrolló su actividad política.

<sup>93</sup> Para un inventario completo vid. Gerber y Greef, 1903: 151.

<sup>94</sup> Vid. por ejemplo, en relación al *iustum matrimonium*: D’Amati, 2003.

<sup>95</sup> “Se denomina cautivo al que ha perdido sus derechos ciudadanos; ha perdido el privilegio de la libertad y eso es lo que los jurisperitos denominan *capitis deminutio*”.



*deminutio minima*, que ocupó el centro de su interés, pues atañe sólo a las restricciones en las relaciones familiares, es decir, en el derecho privado del cautivo, ciudadano romano, respecto a las relaciones de potestad sobre sus familiares y bienes: la capacidad de testar, la hederabilidad de los bienes, la tutela sobre los hijos, el matrimonio, etc. Éstos quedaban en suspenso durante el periodo de cautiverio o ausencia, con posible restitución del *status quo* anterior, y que iba dirigida en todo lo afectante a los ciudadanos romanos que, por diferentes causas, rebasaran los límites del Imperio. Por el contrario, sus derechos públicos quedaban intactos, la *civitas* y la *libertas* se mantenían, incluso los cargos en caso de ostentar una magistratura (*D.* 4, 5, 5, 2=Ulp. 51 *Sab.*). Un segundo género es la llamada *capitis deminutio minor sive media*, que tenía mayores consecuencias, pues suponía la pérdida de la ciudadanía pero manteniendo la *libertas*. Conocemos pocos casos explícitos de cómo esta degradación podía materializarse, pues las fuentes siempre hablan del ejemplo paradigmático para la ciudadanía romana, el *aqua et igni interdictum*, aunque existieran otros supuestos con toda seguridad como se intuye en Ulpiano (12 *Sab.* = *D.* 38, 17, 1, 8). El “interdicto del agua y el fuego” fue un constructo jurídico ideado en la *lex Cornelia* con el fin de no menoscabar la ciudadanía romana de forma activa aplicando una *capitis deminutio* directa. Por el contrario, la pérdida de la *civitas* romana se promovía mediante un subterfugio, la prohibición de ingesta de alimentos y agua en la misma, y que equivalía a un destierro forzado. En ámbito provincial, este tipo de *capitis deminutio* también podría estar presente en los casos antes analizados de *incolae* sin *civitas* tras la supresión de la antigua comunidad.

El género que estaría presente en el pasaje de Tácito respecto a los trinovantes dependientes de la colonia es, como decíamos, la *capitis deminutio maxima*, la pérdida irreversible tanto de la *libertas* como de la *civitas*, reservado a los procesos más duros y ejemplarizantes de integración provincial. Mientras se refiere a los diversos pueblos britanos vencidos en época de Claudio y que ahora se oponían a Roma lo hace desde atributos genéricos, como *domiti* (Tac. *Agr.*, 13, 1; 13, 3), *dediti* (Tac. *Agr.*, 16, 3; 16, 5), *hostes* (Tac. *Agr.*, 16, 3) o *multitudine barbarorum* (Tac. *Ann.*, 33, 2), resulta mucho más explícito en sus alusiones a los trinovantes sometidos a *Camulodunum* y su aparente cercanía a la esclavitud. Dice de éstos que, siendo “cautivos”, eran considerados como esclavos: *captivos, servos apellando* (*Ann.*, 31). Cuando Suetonio Paulino había abandonado la colonia, se preguntan por los males de su servidumbre (*mala servitutis*: *Agr.*, 15, 1). También, que no parecían estar habituados a ella (*servitio*) y que buscan recuperar su libertad (*resumere libertatem*) (*Ann.*, 31, 2). Sin embargo, en otro pasaje, también se afirma que aunque toleran la sumisión no pueden considerarse esclavos: *nondum ut serviant* (*Agr.* 13, 1).

En este sentido, como comprobaremos a continuación, debemos encuadrar lo que la *captivitas* significa respecto a la condición dediticia y que ha venido sobrevolando todas las páginas precedentes en íntima conexión con el *tributum capitis*. Aunque no sea momento para referir todos los problemas inherentes a esta debatida condición, sí lo es en la medida en que consta de implicaciones directas en la lectura que hemos mantenido sobre el *tributum capitis*, y exige, por ello, una definición al menos sumaria. En primer

lugar, me gustaría poner de relieve una aparente contradicción, que se defiende en algunos trabajos recientes, entre la “peregrinidad” y los *dediticii* como cuerpos jurídicos autoexcluyentes. Esta suele partir de una delimitación, a mi modo de ver no del todo precisa, entre las características intrínsecas de la *libertas* y la *civitas* respectivamente, sobre las cuales los anteriores pasajes que abordan la tipología de las *capitis deminutiones* resultan reveladores. La confusión suele partir de una asimilación, que en efecto suele darse, entre la peregrinidad y la recepción de una *civitas* propia, pero comprendida en términos de causa-efecto. Por ejemplo, en su justo contexto, una definición de peregrinos sería la de aquellos extranjeros generados por el Estado romano que recuperan su propia ciudadanía. Sin embargo, esta interrelación olvida que no hay nada que impida mantener la *libertas* y carecer de ciudadanía, no hay ningún contrasentido, pues mientras la primera (*status libertatis*) atañe a las diferentes *societates iuris* (derecho natural, de gentes y civil) la segunda responde a los ordenamientos locales (*status civitatis*). Es decir, aun cuando se careciera de *civitas* nada impediría apelar al *ius gentium* en razón de ser libre, aunque lógicamente su ejercicio práctico se viera irremisiblemente limitado por carecer de ciudadanía. No olvidemos que el *ius gentium* engloba, asimismo, al *ius civile* y que, en suma, también los ciudadanos romanos podían hacer uso de él, en especial, en los negocios con población peregrina<sup>96</sup> (Kaser, 1993). Desde este punto de vista la latinidad no sería tanto una ciudadanía sino un específico *status* de *libertas* que está subsumido, con todo el sentido, *in peregrinorum numero* (Gai. *Inst.*, 1, 79), es decir, una concreción del *ius gentium* que se manifiesta en ciertos privilegios a la hora de interactuar con el *ius civile*: *ius conubium*, *ius commercium* y, finalmente, el *ius adipiscendae civitatem romanam per honorem*.

Partiendo de esta declaración de intenciones, la unión de ambos conceptos, *peregrini* y *dediticii*, no puede constituir contrasentido jurídico alguno, pues resultaría descabellado aplicarlo a los intérpretes de las leyes que son, al fin y al cabo, de quienes emana su propia definición con un sentido positivo en la aplicación de las mismas, por muchos problemas que éstos puedan presentar. En este sentido, y dejando al margen a quienes *dediticiorum numero sunt* (concepto que abarca otras situaciones ligadas a los libertos aelianos y latinos junianos), los *peregrini dediticii* aparecen reiteradamente ligados para representar el espectro de pueblos rendidos a Roma que simplemente se caracterizan por ser *nullius certae civitatis civis* (Ulp. *Reg.*, 20, 14). Es decir, se da la primera de las condiciones, la carencia de *civitas* como elemento compartido respecto al cautivo. Sin embargo, ¿qué ocurre con su *libertas*? La cuestión en torno a los *peregrini*

---

<sup>96</sup> Y para lo cual, en cualquier modo, tuvo siempre gran utilidad el régimen de *fictiones* jurídicas, en aras de someter a personas ajenas al *ius civile* a sus propios procedimientos. *E.g.*: “Lo mismo, se finge que un extranjero tiene la nacionalidad romana si es demandador o demandado en una acción abierta por nuestras leyes, a condición que sea justo extender esta acción al extranjero. Por ejemplo si es demandador o demandado en materia de robo. Se empieza así en la fórmula: ‘Que él tenga un juez. Si resulta que es con ayuda y consejo de Dion, hijo de Hermes, que ha sido robada una pátera de oro, motivo por el cual, si era ciudadano romano convendría considerarlo ladrón, etc’... Lo mismo si un extranjero acciona en materia de robo, se le supone la nacionalidad romana. Parecidamente, si un extranjero es demandador o demandado en una acción de indemnización por daños de la ley Aquilia, se da la instancia suponiéndole la nacionalidad romana” (Cai. IV, 37).

*dediticii* supone, asimismo, una concreción en el grado de *libertas* que Gayo define en este caso como una *pessima libertas* (*Inst.*, 1, 26). Su contenido jurídico no lo conocemos bien, pero parece razonable pensar que esta “libertad pésima” consistiera en una disposición limitada del *ius gentium* y que, por esta razón, anteceda inmediatamente a la situación subsiguiente, la carencia de *libertas*, es decir, la esclavitud. Esto, como vemos, coincide a priori con el retrato de Tácito sobre la población trinovante dependiente de *Camulodunum*. No son esclavos, pero se les trata por tales, son libres en apariencia (*Agr.*, 13, 1). Aunque desconocemos todas las limitaciones jurídicas de esta enigmática condición, no debe desdeñarse que, en la práctica, la indefinición jurídica que marca la naturaleza de su castigo fuera todavía menos deseable que la propia esclavitud. Así pues, a modo de ejemplo, mientras los esclavos públicos tenían *testamenti factio* de la mitad de sus bienes (*Ulp. Reg.*, 20, 16), no parece que fuera así en el caso de los *dediticii*, al menos en opinión de D’Ors (1944: 179). La concepción de *libertas*, nada más alejada de la libertad en los términos actuales (pues ni siquiera se contempló nunca la “privación de libertad” en los esquemas punitivos romanos), significaba ante todo una comunión de derechos (Blanch Nougues, 2013), lo que explica que el propio Tácito relacione a menudo *libertas* de los ciudadanos con la *res publica* (es decir, en el sentido de su sometimiento al derecho romano: *vid.* Tellería, 2006: 279-84). Desde la óptica de la jurisprudencia clásica la distancia de ambos conceptos es clara, pues la servidumbre se regula como *res corporal*, de modo que su no *libertas* se supera mediante la cosificación de las personas, los derechos reales. Por el contrario, respecto a la *capitis deminutio maxima* se insiste en la analogía con la muerte, la desaparición del sujeto jurídico (Gai. *Inst.*, 3, 153; *Ulp. 12 Sab.* = *D.* 17, 2, 63, 10). No es nadie y, como tal, en caso de no restituirse tanto su *civitas* como su *libertas* en el acto de *reddere* (Sastre, 2001a: 105-08), entraba dentro de esta misma lógica, bien la esclavización o el mantenimiento de esta condición indefinida como marca de su castigo tras la conquista, sin *civitas* y *pessima libertas*.

Los umbrales difusos entre ambos conjuntos son, en su justa medida, parte de esta definición anteriormente vista de S. Agustín sobre los *captivi*, quien asume la inexistencia de *libertas* cuando ésta es *pessima*. ¿En qué se diferencia, entonces, el *captivus* del *peregrinus dediticius*? A mi juicio, sólo en la plasmación de algunas cláusulas, pues mientras el peregrino *dediticio* lo engloba en tanto que *nullius certae civitates civis* y *pessima libertas*, sobre las comunidades en que mediara la noción de *captivitas* era posible una aplicación todavía más dura del *ius Belli*. Así por ejemplo, Livio distingue ya el *dediticio* del *captivus*, como una concreción específica de aquel, al poder ejercer sólo sobre este último el derecho de saqueo (*Liv.* 37, 32, 12; *vid.* D’Ors, 1944: 164). Quizás de alguno de estos elementos se haga eco el mismo Tácito, quien los relaciona como casi sinónimos pero manteniendo la entidad propia del cautivo en otro pasaje: *captivum ac dediticium increpat* (*Tac. Hist.*, IV, 80), en donde critica a Caecina por tratar a los *dediticii* como cautivos<sup>97</sup>. La referencia a *Camulodunum*, *deducitur in*

<sup>97</sup> Esta estructura se repite de nuevo en Germania, esta vez en torno a la esclavitud, en donde Tácito recuerda el fracaso de Domiciano en la región y su falso triunfo, haciendo pasar a esclavos por personas *in captivatem speciem* (*Agr.*, 39).

*agros captivos* (Ann., 12, 32), aun cuando se refiere coloquialmente a la cosa en vez de a la persona de un modo coloquial para señalar la *captivitas*, reincide en estas duras condiciones de sometimiento, de esta forma de castigo ejemplar que, acompañado del *tributum capitis*, supone la marca de la peor de las formas de integración posibles.

#### 4.3.4 Valoración general sobre el *tributum capitis*.

La complejidad intrínseca de los escasos testimonios del *tributum capitis* es, en última instancia, una consecuencia necesaria de su carácter dúctil e instrumental. En una realidad provincial profundamente diversa en cuanto a las soluciones fiscales adoptadas, con expedientes jurídicos heterogéneos que conviven y combaten a un tiempo, resulta sumamente arriesgado inferir estructuras fiscales globalizantes como las que destilan los modelos ideales de la jurisprudencia clásica. Aunque no podamos eludir el contenido de estas fuentes fundamentales para comprender los métodos de control, gestión y explotación de las poblaciones sometidas, sí debe al menos procurarse una tentativa por aprehender la diversidad como parte del sistema mismo, superar la simplificación que emana de las modelizaciones con fines didácticos y apreciar los ámbitos en los que la teoría se materializa. La letanía de la dualidad tributaria, *tributum soli* y *tributum capitis*, no encuentra sustento suficiente en las fuentes de las que disponemos. En este sentido, a mi juicio, ha interferido un doble sesgo actualista. Por un lado, la imposición sobre las realidades antiguas de nociones actuales como es la fiscalidad sobre la renta y sobre la propiedad, concretado en este caso en la ambigüedad entre dos formas de tributación personal: la capitación de tasa fija (*tributum capitis*) y la *professio inter gradus dignitatis fortunaeque* (de carácter progresivo y en ámbito cívico), cuando constan de una naturaleza y funcionalidad distinta. Algo semejante puede observarse en la aplicación generalizada de los esquemas bipartitos modernos de la tributación directa (que englobaría a las anteriores) y la indirecta (que grava la actividad económica), para inferir un sistema semejante en el mundo antiguo. Cuando la indirecta, como por ejemplo la *centesima rerum venalium*, requiere infraestructuras logísticas inasumibles para la administración provincial y su aplicación sistemática parece reducirse, más bien, a la actividad de los *publicani* en Italia (vid. Brunt, 1990). En segundo lugar, dentro de la caracterización del *tributum capitis*, se ha impuesto también el sesgo y la distorsión de la jurisprudencia post-clásica, por efecto de retrotraer a periodos anteriores el sistema dual de la *capitatio-iugatio* desde una perspectiva romanística del Derecho, aunque éste sólo cobre sentido tras la profunda reforma fiscal de Diocleciano, la institución del colonato y el contexto de implantación global de un *ius Civile* vulgarizado (Jones, 1957; Goffart, 1974: 66-90; Bravo, 2001: 188 y ss.).

En este sentido, el análisis de los casos particulares nos revela diferentes situaciones de hecho que motivan la idoneidad del recurso fiscal de la capitación. Es, por ello, que no soy partidario de asociar de manera automática el denominado *tributum capitis* a una condición jurídica determinada, como tampoco de presuponer su implantación global en el Imperio, sino que definiendo una relación taxativa con un contexto político y

socioeconómico marcado por restricciones en el acceso a la propiedad, a menudo debidas a incapacidades jurídicas. Dada la dureza de estas situaciones de exclusión socioeconómica y jurídica, parece normal que aparezcan en procesos excepcionales de integración en donde la capitación se erige en un instrumento útil pues, al no existir posibilidad de gravar a estas poblaciones mediante imposiciones fondiarias, una suma fija es suficiente para rubricar su condición de dependientes. Seguramente el propio Dionisio de Halicarnaso, en un momento en que Roma empieza a cobrar la capitación (s. I a.C.), extrapola las características de la figura fiscal de su tiempo histórico con la analogía que observa cuando, en el conflicto patricio-plebeyo, la capitación se asocia también entonces a los desposeídos, a los exentos del *tributum ex censu* republicano, en contraposición con los propietarios<sup>98</sup>. Dentro de la diversidad pueden, sin embargo, extraerse algunas conclusiones generales sobre la caracterización y naturaleza del *tributum* o, más bien, de los *tributa capitis*:

1. La capitación parece cobrar sentido como recurso *ad hoc*, una solución genuina para fiscalizar a poblaciones dependientes y excluidas de los canales cívicos de participación en los *munera* locales.
2. La conclusión anterior nos lleva a otra de singular importancia: la dimensión puramente local de este tipo de impuestos, que se resuelve en los censos de las propias comunidades, pues aunque se denomine *tributum* no parece formar parte de las estructuras fiscales de ámbito imperial. Esto se observa de forma bastante clara en los diferentes casos estudiados ligados a procesos de *deductiones* coloniales, ya sea dentro de los esquemas de *incolae*, *peregrini dediticii* o también de los judíos asentados en las comunidades griegas orientales. La única excepción la encontramos en el *fiscus Iudaicus*, que no en vano tiene un significado de “caja” física o tesoro, es decir, un depósito específico para un tipo de impuesto imperial de Judea, custodiado en Roma.
3. Recae sobre población con diferentes grados de *status libertatis*, y no sólo *dediticii* vinculados a *ager publicus* como opina Sastre (2003), también debe asociarse a otros tipos de *peregrini* perjudicados por procesos de colonización o, como en el caso de Egipto, a poblaciones que simplemente se caracterizan a mi juicio por carecer de dominios agrarios (tanto los *laoi* de la *chora* como los artesanos y comerciantes metropolitanos).
4. No existen visos de homogeneidad ni en las cantidades cobradas, ni en los años sujetos a capitación, ni a diferencias claras según el sexo. Tampoco parece apropiado considerar un origen común y compartido de los diferentes tipos impositivos que son englobados como una figura fiscal única: el *tributum capitis*.
5. El *tributum capitis* siempre supone una señal degradante de la situación económica del individuo por razones de clase social. Aunque a veces tome

---

<sup>98</sup> “Después suprimió los impuestos basados en la renta y restableció el antiguo modo tributario, y cuando necesitaba dinero, pagaba el mismo tributo el más pobre y el más rico. Esta medida arruinó a muchos plebeyos al verse forzados a pagar, ya en la primera contribución, diez dracmas por cabeza” (Dion. Hal. 4, 43).

connotaciones étnicas, como en Egipto o *Syria Palaestina*, esta máscara esconde un conflicto de clase que rubrica la posición de predominio de un grupo social sobre otro que es sancionado por las nuevas estructuras de dominación provincial. No debe olvidarse que tanto el *fiscus Iudaicus* como la *laographia* fueron creaciones de nuevo cuño que se imbrican en el proceso de provincialización, y cuya pátina cultural y étnica se debe a la instrumentalización y transformación de contribuciones económicas seculares con fines legitimadores. Esta falsa continuidad, a mi juicio, ha intervenido en los numerosos problemas de interpretación que plantea la capitación como sistema único. Por el contrario, lo que dota a la capitación de connotaciones peyorativas es su vínculo continuado con poblaciones depauperadas y dependientes por diferentes motivos, pero que terminan asimilándose a la etnia a la que pertenecen al asumir el discurso étnico irradiado por las élites griegas y más tarde aprehendido por buena parte de la historiografía moderna. A los judíos que, como sabemos, mantuvieron acceso a la propiedad y una posición de privilegio, la cantidad irrisoria de la capitación no les supone, en la práctica, ningún perjuicio económico ni social, si es que llegaron a pagarlo, cosa que desconocemos. Sin embargo, el discurso étnico hace que sean englobados, por extrapolación, a partir de los judíos verdaderamente damnificados por la reordenación del territorio colonial en torno a Cesarea y Jerusalén y la expansión del *ager publicus* en áreas de interés económico para Roma. Es en éstos judíos, de clase social baja, en los que se materializan los condicionamientos asociables a la imposición del tributo personal que apreciamos en otros lugares.

En suma, no es extraña la ambigüedad si procedemos al contraste entre la teoría y la práctica y otorgamos al *tributum capitis* un carácter moldeable como lo que fue, un instrumento puntual, en vez de inferir conclusiones generalizantes. Si la filosofía política romana se caracterizó por algo, fue por su praxis posibilista, y esta riqueza de contextos es el producto de los distintos modos de pertenencia y sometimiento al Imperio. Como dijo ya hace mucho tiempo Álvaro D'Ors “¡Quién va a esperar de los Romanos uniformidad en el trato de los dominados!” (1944: 167).

#### 4.4 ¿*Tributum capitis* en el Noroeste?

La cuestión del censo provincial en los entornos peregrinos es un tema que ha levantado tradicionalmente un escaso interés a la hora de acometer estudios con carácter específico, menos aún para el caso del Noroeste, salvo algunas excepciones (López Barja, 1999, 2014). Esta cuestión parte de una situación complicada de partida, pues la escasez de la documentación disponible impide conocer cómo se aplicaba el censo en las comunidades peregrinas con exactitud. El procedimiento en principio no tiene por qué ser global, único ni sistemático, sino dúctil a los intereses fiscales de la región específica. En este sentido también cabe plantear el papel que pudieron desempeñar las *civitates* en la gestión interna. Existen, por tanto, dos planos independientes que deben explorarse por separado: por lado un nivel supra-*civitas*, es decir, la forma en que Roma exige y toma un registro de las poblaciones dependientes no promocionadas desde el ámbito provincial. Y, por otro, el procedimiento de control a nivel interno de la *civitas*, lo que requiere atenernos a la singularidad del Noroeste teniendo en cuenta sus condicionantes materiales, su articulación social y de poblamiento y la naturaleza de los requerimientos fiscales a los que debe dar una respuesta eficaz.

Antes de entrar a valorar estas cuestiones, es preciso plantear la pregunta de si en el Noroeste pudo establecerse un impuesto de capitación de este tipo. Aunque sabemos por Plinio que, con seguridad, se censó la población del Noroeste *NH.*, 3, 4, 28, no hay argumentos que permitan sostener que este recuento por unidades conventuales se debiera a la imposición del *tributum capitis* como planteó en su momento Bermejo (1978-80: 116). Si nuestras conclusiones anteriores sobre esta forma de impuesto son correctas, en el Noroeste no se dan los condicionantes excepcionales que normalmente parecen asignarse a esta figura. El proceso de transformación e integración en los sistemas de explotación imperiales tuvo consecuencias directas a todos los niveles, pero no fue la desposesión su tónica general. La desmembración de la comunidad-castro, que ahora pasa a ser dependiente de un esquema de más amplia escala, se asienta sobre la definición de la tierra asignada a cada *civitas*, pero no implica el cuestionamiento de las propiedades individuales. Si partimos de una situación precedente dominada por sistemas de propiedad basados en la unidad familiar (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1998; Currás, 2014, vol. I: 396-399) es de suponer que la jerarquización social y la construcción de un campesinado dependiente reprodujeran en su seno nuevas relaciones de propiedad, así como crecientes desigualdades de acceso. Es decir, una materialización de aquello que Pereira Menaut vino a llamar como “romanización estructural” (1988). Sin embargo, estos cambios se producen de forma orgánica, sin la iniciativa directa del aparato administrativo romano por inmiscuirse en asuntos de esa índole pues, como hemos defendido en el apartado 3, han sido presunciones en su mayoría aquéllas que relacionaban el registro directo del individuo con la necesidad de un control personal en aquellas regiones que “carecen” de civilización desde perspectivas evolucionistas.

El análisis precedente sobre la capitación de carácter fijo muestra, por un lado, que ésta no se asocia con todo el conjunto de peregrinos, en contraste con lo que autores como, por ejemplo, Le Teuff han afirmado recientemente (2012: 150-60). La *libertas* es una condición de partida, pero no la única, el vínculo no es automático y, en la parte occidental del Imperio parece relacionarse exclusivamente con procesos duros de integración que suelen pasar por las *deductiones* de colonias. El propio Plinio en su recuento poblacional del Noroeste los denomina *capita liberorum* (NH., 3, 4, 28), pero no se dan otros factores a los que parece asociarse esta solución de impuesto como comprobaremos en las siguientes páginas.

En primer lugar, debe analizarse la expropiación y la asignación de lotes en *ager colonialis* de la mano de la llegada de *coloni* que marcarían una clara ruptura con las relaciones de propiedad anteriores. La única excepción que ha sido apuntada en este sentido procede de la capital conventual de *Bracara Augusta* (Carvalho y Azevedo, 2011; Carvalho 2012), fundada en principio *ex novo* en época de Augusto, y en cuyo parcelario actual se han registrado algunas posibles huellas de un catastro romano, pero que cuenta con algunos problemas y resultaría, aun aceptándola, un hecho aislado. La reconstrucción de las centuriaciones romanas en la península Ibérica suele estar precedida bien por documentos epigráficos de partida que reflejen algún tipo de sorteo o repartos de lotes en *ager divisus et assignatus*, bien con comunidades que tienen rango colonial conocido. Estos indicativos suelen ser una medida común de profilaxis para acometer ulteriores análisis de las huellas de la centuriación en los parcelarios actuales, como es el caso de los estudios realizados sobre las seguras colonias romanas de Ampurias (Plana, 1989), *Ilici* (Gurt, Lanuza y Palet, 1996; Ariño, Gurt y Palet, 2000-2001), *Tarraco*, *Barcino* (Palet *et al.*, 2010; *cfr.* Olesti Villa, 2013) o *Emerita Augusta* (Ariño y Gurt, 1992-93) entre otros ejemplos. Estas medidas preventivas no dejan de tener sentido si, como vemos, un rastreo extensivo con mallas de diferentes módulos posibles (*vid.* Ariño Gil *et al.*, 2004: 50-51) y la aplicación de diversas orientaciones en el eje de la retícula terminan por dar coincidencias en algunos de los límites agrarios. En esta línea podrían añadirse algunas objeciones formales para la centuriación de *Bracara*, como la falta de correlación de la malla con más coincidencias respecto a la trama urbana como sí ocurre con otros casos mejor conocidos como el *ager Tarraconensis* en su trama III (Palet *et al.*, 2011: 634), mientras en este caso aparece desplazado. Así como tampoco el trazado de las *viae* XVI, XVII, XVIII y XIX parece haber influido en la configuración de estos límites fosilizados en el paisaje, pues especialmente la XIX (que atraviesa la zona con más indicios) no coincide en casi ninguno de sus tramos, cosa que sería esperable tanto si la división se produce con anterioridad a la construcción de la vía como a la inversa. La cuestión de una asignación cronológica romana parte, por otro lado, de fuentes fundamentalmente medievales. Éstas actúan como término *ante quem*, y de ellas se infieren algunos indicios de tramas cuadrangulares (modelos que, por otro lado, no son exclusivos de época romana: *vid.* Ariño *et al.*, 1994: 191-92), coincidencias con las redes de drenajes y con la organización eclesiástica y diocesana. Sin embargo las pruebas que se aducen para asociar las huellas del parcelario a época romana no me parece concluyentes. Por un lado, nada permite asegurar que los dos cipos demarcadores de sendos vértices sean de época romana, pues además de ser



anepígrafos, “não permite uma comprovação estratigráfica da sua antiguidade” (Carvalho, 2012: 159). Aunque la separación entre ambos parece ser de 20 *actus*, éstas coinciden con los límites de freguesías y los confines del espacio parroquial de Dume (*ibid.*), una huella de la osificación del catastro romano en época medieval según esta autora. En cuanto a la inscripción interpretada como marca de límite de una propiedad privada (AE 1983, 578) que parece alinearse con la trama ortogonal, consta de un escuto *Severi* en genitivo y en contexto de reutilización que, aun aceptando la lectura como marca de propiedad, no tiene por qué guardar relación con una centuriación. De hecho parece encontrarse en estado fragmentario en su parte superior, precisamente donde contendría la información inmediatamente anterior a *Severi* y que podría dar un sentido distinto a esta forma en genitivo. El castrato de *Bracara*, si se acepta como hipótesis, se trataría en cualquier caso de un modelo de ordenación totalmente excepcional en todo el cuadrante noroccidental de la península.

El Noroeste nunca fue una zona donde se impusiera un modelo colonial de establecimiento de grandes aportes poblaciones foráneas salvo, claro está, el ejército, pero en ejercicio. La única excepción que podría apuntarse serían las sucesivas operaciones de la minería aurífera que fueron ampliando el *ager publicus populi Romani* explotado por gestión directa a medida que avanzaba la explotación (Domergue, 1986: 43-53; Orejas, 1996: 181-84; Zubiaurre, 2017: 171-185; 238-249). El procedimiento y fundamento jurídico sobre el que pudo ejercerse la paulatina conversión del *ager* comunitario en *ager publicus* lo abordaremos con mayor detenimiento más adelante (cap. 9.6). En principio tiende a aceptarse que se basa en los derechos reales de Roma sobre el subsuelo, que va ampliando los *metalla publica* conforme se van abriendo los sucesivos frentes de explotación. Esto supone una suerte de subterfugio por el cual el *ager civitatis* local no se ve cuestionado por las explotaciones mineras, sólo horadado conforme Roma ejerce su derecho patrimonial sobre este recurso. La territorialidad y el reconocimiento de Roma a las *civitates* peregrinas, basada en la *assignatio* global del *ager civitatis* y la imposición del *tributum* sobre el *ager universus* también la exploraremos más adelante (cap. 9). En este sentido, sólo anticiparemos las conclusiones de Cortés Bárcena, en cuyo reciente trabajo sobre estas cuestiones liminales destaca precisamente que la mayoría de hitos suelen relacionarse con comunidades peregrinas en los *termini publici* conservados de *Hispania*, *Mauretania* y *Numidia* (Cortés, 2013: 236). En principio la territorialidad reconocida de los territorios comunitarios en el Noroeste está fuera de toda duda, nada más lejos de los esquemas de incertidumbre jurídica que se vislumbran detrás de los pagos de capitación con valor fijo.

Cuando el Estado romano interviene en el territorio del Noroeste se produce, de hecho, una escrupulosa delimitación de los contornos del *ager publicus* respecto a los conferidos al sistema de *civitates*. Esta reasignación y definición permite superar aquellas circunstancias relacionadas con la capitación fija, cuando población peregrina desposeída continúa viviendo de un modo no reglado en su antiguo territorio, y que ahora pertenece a una comunidad promocionada o al Estado romano. Así se observa en

los dieciocho *termini* dedicados a la separación de los *prata legionis* de la *legio IIII Macedonica* respecto al *agrum Iuliobrig(ensium)*<sup>99</sup> y otro más respecto al *agrum Segisamon(ensium)* (*CIL* II, 5807). Que sean de titularidad pública resulta evidente por su funcionalidad, a lo que se añade la denominación procedente de un testimonio de Mesia como *prat(a) pub(lica)* (*CIL* III, 13726). En el Noroeste lo mismo puede decirse de los hitos de los *prata cohortis IIII Gallorum* en los que se establecen unos límites claros respecto a las *civitates* de *Bedunia* y *Luggonum*<sup>100</sup> (León), además de otro asociado a la *legio X* (*ERPL*e 315), también asociado a la *civitas* de *Bedunia* probablemente (Cortés, 2009: 91). En este segundo caso se fijan de hecho por iniciativa imperial directa, *ex auctoritate Ti(berii) Claudi(i) Caesaris Aug(usti) Germanici*<sup>101</sup>, aunque sabemos que en otras ocasiones se hicieron a expensas del *procurator* provincial (Dalmacia: *CIL* III, 13250) o incluso del propio *tribunus cohortis* (Mesia: *CIL* III, 13726). De hecho y de forma redundante no sólo se dice en los *termini* las entidades que se separan (la unidad militar y la *civitas*) sino que se explicita que estos mojones pertenecen a la cohorte.

Sobre este aspecto cabe analizar diferentes cuestiones que han participado en la interpretación de estos *prata* militares y que, como decíamos, hacen las veces de “islas” en un amplio y generalizado *ager* conferido a las *civitates*<sup>102</sup>. Por un lado, en cuanto a su entidad territorial, las primeras interpretaciones para el caso hispano que veían en la distribución de estos hitos terminales la marca de amplios territorios bajo administración pública han sido matizadas. Así por ejemplo la opinión de García y Bellido (1961: 118; *vid. fig. 1*), para quien el área adscrita a la *IV Macedonica*<sup>103</sup> alcanzaba los 75 km<sup>2</sup> ha ido reduciéndose de envergadura (*vid. Morillo, 2000*). Y aunque la cuestión sea todavía objeto de debate, debe también recordarse la interpretación discontinua de los *prata* defendida por algunos autores, según la cual los *prata* no trastocan amplios dominios, sino que se adaptan a la organización territorial existente en la zona (Roldán, 1974: 197; Le Roux, 1994b; 2003 Cortés, 2009: 97). De este modo no delimitarían un amplio espectro territorial a la manera en el que lo hacen la *civitates*, sino pequeños enclaves dirigidos a la explotación de algunos recursos agrarios fundamentales con el fin de garantizar el suministro, el mantenimiento y la autonomía económica de la misma en caso de necesidad. Quizás incluso la diferencia de tamaño pudiera estar detrás de la diferenciación terminológica entre *prata* y *territorium legionis*, o al menos así lo observó Mason, para quien “the use of the term *prata* to describe an area which had come to contain a civil settlement as large as a fair-sized town, as well as numerous rural establishments, seemed increasingly anachronistic”, de

<sup>99</sup> Un análisis detallado del *corpus* en: Bárcena, 2013: 103-130.

<sup>100</sup> Un análisis detallado del *corpus* en: Bárcena, 2013: 85-100 y 131-133.

<sup>101</sup> Lo mismo ocurre con los hallados en Cantabria y Burgos, bajo la fórmula más escueta de *ter(mini) Aug(ustalis)*, que da pie a una relación cronológica con los gobiernos de Augusto o de Tiberio.

<sup>102</sup> A modo de ejemplo, *vid. Beltrán, Sastre y Ruiz, 2015: 610-18*, sobre los *termini* entre algunas ciudades peregrinas.

<sup>103</sup> Nuestro conocimiento sobre la actividad de la *legio IIII Macedonica* se ciñe al ámbito epigráfico, con la erección de los *termini*, y al todavía incompleto estudio arqueológico, desde una perspectiva espacial amplia, lo que sin duda favorecerá nuevas lecturas para comprender la entidad y naturaleza de estos *prata militares*. Para un análisis del *corpus* de hallazgos de esta legión en Herrera del Pisuerga, *vid. Fernández Ibáñez, 2010*.

ahí que fuera paulatinamente sustituido a partir del siglo II d.C. por *territorium* (1988: 166). Así sería en los casos donde se producía una estabilización permanente del ejército y que terminaba por adquirir una jurisdicción cuasi cívica semejante a la de municipios o colonias, como por ejemplo en la inscripción datada en el 162 d.C. en *Troesmis* (Escitia), donde veteranos y ciudadanos residían en el *territorium leg(ionis) V Macedonica* (Mason, 1988: 165-166). Lógicamente, la incidencia económica en la región en términos de transformación de las relaciones de propiedad preexistentes es dependiente de la entidad que confirmamos a estos *prata*. En este sentido, aunque desconozcamos si los *termini* de la cohorte *IV Gallorum* y el de la *legio X* delimitan un espacio continuo o discontinuo, es cuestionable que incluso llegaran a utilizarse por haber sido encontrados una mayoría de ellos apilados en un mismo lugar (El Espino). Pero incluso aceptando su uso, como ha defendido recientemente Cortés Bárcena puesto que dos de ellos aparecieron en contexto y la ocultación del resto pudo responder al escrúpulo religioso tras el abandono del sitio por el destacamento (Cortés, 2009: 92-93), todo parece indicar que debieron tener una vida efímera: desde un momento indeterminado del reinado de Claudio (41-54 d.C.) hasta la salida de esta cohorte auxiliar en un año indeterminado, quizás a la vez que el abandono del lugar por la *legio X Gemina* el 63 d.C., perdiendo entonces su vigencia y finalidad.

Sobre este punto conviene destacar la opinión de Abascal, que no comparto, quien defendió la existencia de un contraste entre los conjuntos de la *legio IIII Macedonica* (Cantabria-Burgos) y los de la IV cohorte *Gallorum* (León) en referencia a los suelos que ocupan. Parte de la observación de que mientras el primer conjunto mencionado hace referencia explícita a los *agri* de *Iuliobriga* no ocurre así con los segundos, de modo que concluye que “se trata de *civitates*, la de Bedunia y la de los Luggones, no de *municipia*, lo que implica que su *ager* es aún *ager populi Romani* propio de ciudades no privilegiadas”, “En ninguna de estas expresiones [...] se hace referencia a los *agri Bedunienses* o a los *agri Luggonum*, simplemente porque tales *agri* no existían. Dado que ambas comunidades carecían aún del rango del *municipia iuris Latini*, la instalación de los campamentos militares no obligó a segregar de *territoria* municipales bajo jurisdicción de magistrados locales los espacios físicos necesarios para el ejército” (Abascal, 2008: 80 y 82; *vid.* Santos, 1979: 64). Esta visión, además de partir de una concepción patrimonialista del suelo provincial que ya hemos comentado (cap. 2.2), supone dar por sentado una expropiación masiva por el simple hecho de ser mencionadas como *civitates*. Dejando al margen la falta de indicativos que permitan considerar que la adquisición de un rango municipal tenga implicaciones en sus suelos (pues en principio parecen mantener la misma condición estipendiaria de la que constan las ciudades peregrinas<sup>104</sup>), considero que parte del problema procede de la

<sup>104</sup> Así ocurre salvo que se produzca un reconocimiento oficial de *immunitas* o se conceda *ius Italicum*, como habría ocurrido en el municipio latino de Antípolis, en la Narbonense pero considerado comunidad itálica (Str. 4, 184; *vid.* Plin. *NH.*, 3, 35). Es decir, no debe inferirse necesariamente que su condición promocionada signifique exención fiscal ni cambios en las cualidades jurídicas del *ager* bajo jurisdicción municipal. Esto puede observarse de una forma todavía más clara en el caso de las fundaciones coloniales, más prestigiadas todavía, pero que del mismo modo constan de suelo gravado (*agros colonicos stipendiarios*) a menos que reciban una prerrogativa específica como afirma Agenio Urbico: *At si ad provincias respiciamus habent agros colonicos eiusdem iuris habent et (agros) colonicus qui sunt*

identificación de *civitas* con *urbs*. De este modo, la consideración de *civitates*, que al fin y al cabo es un término más amplio que engloba asimismo a los expedientes municipales, son considerados tan sólo como los núcleos habitados frente a un *ager* circundante que no le pertenece y del cual se desliga patrimonialmente. ¿Qué sentido podría tener entonces la mención de *civitas* si carece de trascendencia territorial o, mejor dicho, si el implícito reconocimiento de una ciudadanía local no tiene un correlato en los suelos en donde se establece? Entre muchas pruebas que podrían presentarse aquí baste con la siguiente cita de Agenio Urbico, un autor especialmente preocupado por la composición de los suelos provinciales, que refiere claramente y de un modo técnico los *agri civitatum peregrinae* y *agri municipales* en las provincias romanas: *Habent autem provinciae et municipales agros aut civitatum peregrinarum* (Th. 23, 12-18 = La. 62,25-63,6). No considero, en suma, que este argumento *ex silentio* sirva tampoco para determinar una desposesión masiva al grueso social del Noroeste, peregrino y organizado en *civitates*, a partir de estos testimonios militares. Como tampoco que éstos puedan servir como argumento a favor a la hora de ver unas condiciones de partida para el hipotético pago del *tributum capitis*. Más bien todo lo contrario, sirven para definir con precisión los propios límites entre las *civitates* peregrinas, cuya territorialidad se reconoce de manera implícita, y los propios *prata*.

Debe mencionarse también la interpretación defendida por García a propósito de la población indígena asociada a la *urbs magnifica* de *Asturica Augusta*, pues según la postura de la autora grandes contingentes poblacionales dependientes de la capital conventual podrían haberse “integrado en un principio en la misma o en su territorio en calidad de *incolae peregrini*” (1996: 160). Una posibilidad que, como vimos, se relaciona con la capitación fija en algunos casos, correspondientes normalmente a la parte occidental del Imperio. Esta hipótesis se fundamenta en el conocido pasaje de Floro en que se refiere la orden de bajar al llano y asentarse (*incolere*) en el campamento situado en ese momento en *Asturica Augusta* (Flor. 2, 33). La propuesta de García atiende al verbo *incolere* para plantear un sentido no literal sino técnico, que aludiría a las nuevas relaciones jurídicas contraídas entre *Asturica* y las poblaciones dependientes. Es decir, serían *incolae* cuya residencia o *domicilium* no se habría visto acompañado de una asimilación cívica, e implica la inexistencia de *origo*: “cuya condición jurídica sería la de meros residentes, privados de toda ciudadanía (a diferencia del incolado tradicional, carecen de ciudadanía de procedencia) y de derechos jurídicos o políticos (no son *cives* ni romanos, ni latinos)” (García 1996: 160). Sobre esta aguda interpretación considero sin embargo que se deben tener en cuenta otros elementos. En primer lugar, debe cuestionarse su carácter técnico. Floro se refiere al “incolado” varias veces más a lo largo de todo su epítome y nunca parece recibir un sentido análogo al asturicense. Aparece en varias ocasiones de forma sustantivada: *Tum ab incolis deserta civitas direpta primum, deinde tuba praecinente deleta est* (I, 32, 1). Este testimonio corresponde a Corinto, a la que en estos momentos se consideraba una *civitas* amiga en el contexto de la expansión romana republicana. Resulta sorprendente

---

*immunes haben et (agros) colonicos stipendiarios* (Th. 23, 8-13= La. 62, 23-27=; vid. González Román, 1997: 156). Este aspecto lo retomaremos en el cap. 9.1.

cómo, a pesar de la magnitud del castigo tras su sublevación, sus habitantes mantienen este apelativo de *incolae*, que difícilmente puede ser relacionado con un incolado técnico, pues incluso la *polis* es denominada como *civitas*. De tal modo, que otra interpretación que no sea la de “habitante” carecería de sentido en este caso pues es un castigo que se refiere a todos sus integrantes. Los otros ejemplos son todavía más evidentes, como el paralelismo con respecto a la llegada de los primeros habitantes de Roma (*incolae*) que, como ocurriría con *Asturica*, llegarán para habitarla (I, 1<sup>105</sup>). Los otros pasajes donde Floro utiliza este verbo pueden relacionarse de nuevo sólo con este mismo significado, como los aterrorizados habitantes de las ciudades de Olbia y Aleria en Córcega y Cerdeña, (I, 18, 6), o para indicar a los animales que son capaces de “habitar” (*incolendi*) tanto las tierras como las aguas (I, 41). Dicho esto, el caso de *Asturica Augusta* no creo que fuera una excepción, pues incluso se pone en explícita relación con este mismo sentido, *habitare et incolere*, dice Floro, vivir y habitar (2, 33). Por último, conviene recordar la existencia de un indicativo de *origo asturicense* de una peregrina, *Mariacca*, en un ara dedicada a las ninfas, datada en el siglo II d.C. (*HEp* 10, 388). Esta inscripción con *origo extra civitatem* encontrada en Maside (Ourense), no pertenece al periodo inmediatamente posterior a la conquista, pero permite cuestionar el mantenimiento de esta hipotética situación con un cierto recorrido cronológico<sup>106</sup>.

Evidentemente desconocemos toda la diversa casuística que pudo existir detrás de la integración de las distintas *civitates* del Noroeste por las limitaciones de la documentación, pero los testimonios existentes nos alejan de la presunción de esta desposesión como nota dominante en las relaciones de propiedad en ámbito peregrino. En este sentido cabe mencionar algunas referencias a propiedad privada en el Noroeste, cuya parquedad y escasez hacen inviable, por otro lado, las siempre deseables precisiones de orden cronológico, pero que en cualquier caso reflejan de forma fehaciente la existencia de propiedad privada como abordaremos de forma exhaustiva en el apartado correspondiente (cap. 8.3). De hecho, ninguna de ellas aparece asociada a individuos cuyo *status* pueda relacionarse con ciudadanos romanos, sino con personas de onomástica peregrina. Así, por ejemplo, encontramos varios demarcadores de propiedad, como el hallado en una finca rústica cercana a Trobajo del Camino (León) y en donde se lee *pri/vat(um)* (*ERPL* 317). También la inscripción del zoela *Titus Iulius Valens* señalada como testimonio de una medición o delimitación de terreno privado (*CIL* II, 2651=*ERPL* 316; Orejas y Morillo, 2013: 100), el *ortus (sic)* de *Reburrus P(ublii) f(ili)* en Numão (Vila Nova de Foz Côa, *HEp* 5, 1031), zona fronteriza con la *Citerior*, o si aceptamos la ya comentada indicación de propiedad, al margen de la centuriación, de *Severi* en el entorno de *Bracara Augusta* (*AE*, 1983, 578; *cfr.* Carvalho y Azevedo, 2011; Carvalho 2012) y que sería semejante al de Noval (Chaves), en este caso rupestre y con un desarrollo hipotético de *Cl(audii)* (*HEp* 2, 862). Estos

<sup>105</sup> *Imaginem urbis magis quam urben fecerat: incolae deerant.*

<sup>106</sup> Sobre que ésta sea producto de la superación de este incolado a través de la municipalización flavia es algo en lo que ahora no podemos detenernos, si bien ya ha sido puesto de relieve la nula existencia de testimonios relativos a tal promoción e incluso a su condición de *civitas* en publicaciones recientes (Orejas y Morillo, 2013). Esta situación se habría mantenido hasta un momento tardío en donde *Asturica* parece encabezar ya la *civitas* de los *amaci* (Ptol. 2, 6, 28).

indicadores y límites *inter privatos* (vid. Ariño *et al.*, 2004: 28) se suman a lo que puede apreciarse en otras regiones hispanas cercanas, como el hito liminal de la propiedad privada de *Calaitus* (*HEp* 13, 870) en el monte de São Martinho (Castelo Branco).

Un comentario aparte merece la interpretación de la conocida inscripción portuguesa en el penedo de Remeseiros, Vilarreal (*CIL* II, 2476), a partir de la cual se ha entendido que la forma de tenencia de la tierra por las comunidades del Noroeste se basó en un sistema de *locationes* sobre un *ager publicus* generalizado. Se trata de una inscripción con múltiples variantes de lectura motivadas por la abrasión de su superficie en la parte inferior, la tendencia asincopada de algunas de sus palabras y la complejidad de los elementos que se mencionan. Para lo que ahora nos ocupa, es preciso reparar en la lectura e interpretación propuestas por Pereira Menaut y Almeida tras su redescubrimiento a cargo de Lourenço Fontes un año antes (1980):

*Allius Reburri Rogo Deu(m) Adiutorem / In Ac (sic) conducta conservanda / qi(s)qis (sic)  
in ac (sic) conducta p(ossesionem) mici (sic) aut meis/ involaverit si r(emps) quaecunquae  
(sic) res at mici (sic) / it a v s l siquit ea res v s l v f/ Danceroi*

La traducción propuesta sería “Allius filho de Reburro, rogo ao deus protector para conservar o arrendamento destas terras (terras sob contrato de *locatio conductio*) e quenquer que usurpasse, a mimo u aos meus, a possessão destas terras arrendadas...” (Pereira y Almeida, 1981: 144; Dopico y Pereira, 1993: 634). Dejamos por tanto al margen los hipotéticos y arriesgados desarrollos para las abreviaturas finales (vid. Rodríguez Colmenero, 2010a: 137), pues, en principio, su contenido no parece sensible a lo que nos interesa ahora. En la parte mejor conservada aparecen sin embargo varias alusiones relativas a las relaciones de propiedad existentes: por un lado las características del supuesto contrato de arrendamiento (una *locatio conductio*, un arriendo), por otra los sujetos de esta contrata: el Estado en opinión de Pereira, tratándose de *ager publicus*, y el *conductor*: un peregrino con onomástica compuesta por nombre único y filiación.

Sobre el primer asunto, el “arriendo” se infiere de *conducta*, cosa que en principio parece clara por el buen estado de conservación del renglón, con el término sin abreviar. Este término aparece con este mismo sentido, por ejemplo, en la conocida carta de Tito a los ciudadanos de Munigua, por una suspensión de pagos a *Servilius Pollio*<sup>107</sup>, y no arroja problema alguno. La clave reside en el desarrollo de otras abreviaturas asociables a la *conductio*. Así es el caso de la “p” del tercer renglón, para la cual se propone *p(ossesio)* y que viene a completar de nuevo esta visión de desposeimiento masivo: “Se as populações locais perderam a propriedade real das terras depois da conquista romana, como de facto aconteceu quando o solo passou a ser *ager provincialis* e se foram obrigadas a pagar imposos, e *locatio-conductio*, com algumas variantes na sua aplicação, deve ter sido a grande maneira legal para que os indígenas se entregassem ao cultivo das terras, pagando as suas contribuições” (Pereira y Almeida,

<sup>107</sup> En este caso (*Reditus vectigaliorum vestrorum quae conducta habuisse Pollionem*) se trata de una *conductio* de los *vectigalia* locales a un privado, creándose un crédito no satisfecho por la debilidad económica del municipio (*CILA* II, 1052; vid. Liva, 2012: 2; Fernández Clemente: 15-16).

1981: 145; Pereira y Dopico, 1993). Hay sin embargo, dos cuestiones que deben plantearse. En principio, si seguimos el vocabulario habitual de la jurisprudencia clásica, la parte arrendataria toma siempre el bien en *possessio*, pues el *dominium* se mantiene en manos del *locator*. Es decir, incluso si aceptamos este desarrollo de la abreviatura, la tenencia no implica en modo alguno que ésta se deba a un suelo propiedad de Roma, sino que es característico también de los arriendos de carácter privado, que toman terminología romana para representar los negocios que pertenecen al ámbito del derecho local. De hecho, como ya ha puesto en evidencia Mateo sobre el uso del vocablo *conductor* frente a *redemptor*, el primero se relaciona con contratos de carácter privado mientras *redemptor* aparece asociado a las contratas públicas por sus funciones logísticas de intermediación (Mateo, 1999: 60-66). En segundo lugar, considero que hay otras opciones más plausibles que este vocablo técnico y escrupuloso para la “p”, pues el lapicida ni siquiera parece tener un gran dominio del latín como reflejan algunos elementos: *qiqis*, *ac*, *mici*, *quaecunquae*, etc. Una primera posibilidad que me parece más probable dado el contexto del hallazgo *in situ*, en una de las faldas de un monte junto a la Sierra de Lauroco, es que haga referencia al campo en cuestión: un *pratus*. Así lo propuso en su día Rodríguez Colmenero reconociendo en la abreviatura el término *p(ascua)*, aunque con un desarrollo completamente distinto y algo excesivo del epígrafe (1999: 449-54) y del que se ha retractado en una publicación más reciente (*vid.* Rodríguez Colmenero, 2010a).

Sin descartar esta posibilidad como “prado”, considero más natural desarrollar la *p* en sintonía con los términos que aparecen después: *mici* (*mihi*) y *meis*, y que además resulte lo suficientemente conocido como para darse de una forma abreviada en este contexto, cosa que parece inverosímil en el caso de un vocablo tan poco frecuente como es la *possessio*. Lo más lógico parece pensar que la *P* deba desarrollarse como una alusión al padre, en genitivo, de tal forma que dependa del término *conducta* inmediatamente anterior: *qi(s)qis in (h)ac conducta p(atris) mici aut meis involaverit*. Sin duda el antiguo titular de este arriendo sería bien conocido por los habitantes de la comunidad, lo que justifica la aparición de esta única abreviatura en la primera parte de la inscripción (mientras las restantes de las últimas líneas obedecen a la mala gestión del espacio por parte del lapicida), y resulta más natural respecto al sorprendente desarrollo como *p(ossessio)*. Esta pequeña modificación, sin embargo, permite dar un sentido sensiblemente distinto a la inscripción, pero más adecuado a la coyuntura: “Alio, hijo de Reburro, ruego al dios [Dancero] me ayude a conservar el arriendo, cualquiera que usurpase el arriendo de mi padre a mí y a los míos...”. Es decir, el motivo que habría movido a dejar esta apelación a Dancero con fines protectores no sería tanto una *defixio* dirigida simplemente a la conservación de los bienes o de un arriendo público, sino a un problema relativamente frecuente (incluso hasta la actualidad), que se produce con la renovación de los arriendos tras la muerte repentina del padre sin haberse asegurado la transmisión del mismo. Los hijos buscan, de este modo, mantener un arriendo que no parece garantizado, lo que da sentido a que más tarde sólo se refiera a “*at mi*” (*sic*), en alusión a las cosas (*quaecunquae res*) que pudieran faltar, como seguramente fueran los animales que allí seguían pastando o los *instrumenta* en caso de tratarse de terreno cultivado. Aunque desconozcamos los términos del procedimiento local, queda

implícito en Gayo que sólo en caso de los arrendamientos perpetuos se transfiere al heredero mientras satisfaga los pagos (Gai., *Inst.*, 3, 145). Del mismo modo, las “cosas que ocupan el suelo” podían sufrir *usucapio pro herede*, cuando en el plazo de un año una cosa sucesoria todavía no está en posesión efectiva por el heredero (*vid.* Gai., *Inst.*, 2, 52-56). No en vano esta forma de tenencia fue denominada como *lucrativa* hasta la regulación de Adriano, pues se trataba de una *possessio* o *usucapio* cuyo enriquecimiento personal pasaba por el lucro consciente sobre los bienes del otro (Gai., *Inst.*, 2, 56). La cuestión debió variar sensiblemente en el derecho post-clásico: *Locatio precariive rogatio ita facta, quoad is, qui eam locasset dedissetve, vellet, morte eius qui locavit tollitur.* (D. 19, 2, 4<sup>108</sup>; *vid.* D. 19, 2, 15, 9).

En segundo lugar, considero que, a menos que aparezca algún término específico que lleve a suponer una propiedad estatal del *fundus*, lo más conveniente es pensar que se trate de un arriendo privado en el marco de ordenamiento local de la *civitas* (*vid.* Roselaar, 2010: 136-45). Esta posibilidad, que ya ha sido planteada por Orejas y Sastre (1999: 178-79; Solana Sáinz, 2004: 56), resulta razonable si tenemos en cuenta que no parece un territorio especialmente codiciado como para ser considerado *ager publicus populi Romani*, en una zona de pendiente con modestos usos agrícolas. Este tipo de lecturas que buscan hacer extensiva la propiedad pública en ocasiones caen, en mi opinión, en la trampa de la propia terminología latina. Toda vez que ésta es a veces el producto de la asimilación local (de la *interpretatio*) de vocablos latinos, detrás de la pátina romanizante se esconden realidades distintas. Es evidente que este uso rudimentario del latín y de la referencia al contrato típico romano denota un esfuerzo de emulación, pero nada hay en él que evoque un contrato de un individuo con propiedad estatal, menos aun para convertirse en el “primer testemunho documental que possuimos sobre a forma da tenencia da terra entre os indígenas da Gallaecia” (Pereira y Almeida, 1981: 144). De esta tendencia por asumir vocablos latinos distorsionando su contenido da cuenta la misma jurisprudencia romana, como en el título dedicado *de verborum significatione* en que acusan el abuso de denominar público lo que en realidad es objeto de la administración local de la *civitas*: *Bona civitatis abusive ‘publica’ dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt* (Ulp. 10 *ed.*=D. 50, 16, 15). Una materialización lo encontramos, por ejemplo, en el *ager colonialis* de Urso, denominado *agri y silvae publicae coloniae Genetivae Iulia* (caps. 82, 93, 96; *vid.* Saez 1997: 138-140). Y, de hecho, también se emplear en otros contextos locales Noroeste como reflejan también los *agri publici* de Fuentes de Ropel (*HEp* 1, 733). A mi juicio, no puede descartarse que este bronce sea en realidad un *forma*, como analizaremos más adelante (cap. 9.4)<sup>109</sup>, pero cuya terminología ha llevado a interpretarlo como *ager*

<sup>108</sup> “El arrendamiento, o el precario, hecho hasta que el arrendador o el que dio la cosa, quiera, se extingue por muerte del que arrendó”.

<sup>109</sup> En el bronce se menciona: *Burriligia, Voligobenda, Seguisona, Cillobenda, Vagabrobenda, Cadarnavaegium, Amala, Caldobenda*, cuya importancia sólo trasciende en el medio local, siendo por lo demás obviadas por los sucesivos tratadistas que describieron la toponimia hispana. Por otro lado las *viae* que se mencionan en el bronce (*Via Cariensis Vetus* y *Via Burriligiae*) parecen a todas luces formar parte de una categoría análoga a la que Ulpiano considera como vecinales o agrarias, de carácter privado o bajo administración local, en oposición a las estructuras viarias entre núcleos importantes de población para las que se reserva la titularidad pública (*vid.* Ulp. 68 *ed.* = D. 43, 8, 2, 22-23).



*publicus populi Romani* asociado a la explotación de salinas (vid. Mayer, García y Abásolo, 1998).

No sabemos, en su suma, si el caso de Remeseiros tendría como propietario a un individuo o fuera *ager publicus civitatis*, un testimonio de *scriptura* sobre el arrendamiento de pastos comunitarios. Sin embargo, la onomástica peregrina de la parte arrendataria, *Allius Reburri f.*, no es motivo suficiente para concluir que “no es un ciudadano romano, y por tanto no tiene derecho a la propiedad de la tierra” (Dopico y Pereira, 1993: 636). En estos casos rige el derecho propio de la ciudad, que evidentemente no tiene por qué acomodarse a los rigores del *ius civile* pues no se trata de propiedad quiritaria, pero el sesgo que imprime el uso del lenguaje tiñe la apariencia de los negocios jurídicos. De hecho, más tarde, Paulo (*D.* 18, 1, 1, 2; 19, 2, 1) ya considera la *locatio conductio* uno de los contratos consensuales pertenecientes al *ius gentium*, lo que remarca su generalización en épocas precedentes gracias a la sencillez del procedimiento, simplemente basado en el consentimiento de las partes (*consensus*; vid. cap. 8.2). Si aceptamos la datación (s. I d.C.) y el desarrollo propuesto del epígrafe, la inscripción nos pone más bien sobre la pista de un reconocimiento de tierras temprano, nada más alejado de nuevo de los horizontes de incertidumbre jurídica relacionables con la capitación y con otros procesos de integración provincial.

## 5. El censo provincial en la *Citerior* y el Noroeste.

### 5.1 El censo a escala provincial.

El tan citado comentario de Plinio sobre el Noroeste (*NH.*, 3, 20) refleja el conocimiento numérico de las poblaciones que lo habitaron, seguramente en época Flavia, lo que sólo fue posible gracias a la política de Augusto por registrar todos los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, a disposición del Imperio. Así parece quedar establecido en la nueva filosofía política que domina este periodo, tal y como se desprende de algunas reflexiones de Cicerón, en las que la convivencia de expedientes jurídicos y fiscales profundamente diversos según el acervo que marcó el camino específico de la integración, no deben escapar nunca al conocimiento de Roma: *quid habeat militum, quid valeat aerario, quos socios res publica habeat, quos amicos, quos stipendiarios, qua quisque sit lege, condicione, foedere* (Cic. *De leg.*, 3, 41), e insiste, *quem socii, quem foederati, quem liberi, quem populi, quem stipendiarii, quem negotiatores, quem publicani* (Cic. *Pis.*, 41, 98).

La necesidad de control y registro requirió, en primer término, un cómputo de los ciudadanos romanos, que sabemos por iniciativa de Augusto se acometió de forma segura los años 28 a.C., 8 a.C. y 14 d.C., como rememora en sus *Res Gestae* (8, 1-4). A ello podría sumarse otro el año 11 a. C. en el que Octavio hace una lista de sus propiedades “como cualquier ciudadano privado” (D. Cass., 54, 35, 1). No queda claro si es exclusivo del *patrimonium Principis* o completaría el anterior junto a otros *cives Romani*, pues sí resulta sorprendente su omisión en las gestas del *monumentum Ancyranum*, dado el prestigio del que se reviste la empresa. Un motivo de fondo a esta iniciativa podría ser, a mi juicio, la necesaria actualización tras la ampliación de las propiedades del emperador a cuenta de la herencia lágida en Egipto. Sea de éste o de otro modo, lo interesante es cómo la recuperación de estas prácticas seculares de los ancestros (*vid. RG* 8, 5) reciben en su justa medida el nombre tradicional del procedimiento, el *lustrum*, pero adaptadas a las nuevas demandas administrativas y fiscales. Evidentemente, fuera ya del contexto republicano del abolido *tributum ex censu* y la reforma mariana del ejército, cuando se censaba *qui arma ferre possunt*, la nueva concepción fiscal del Principado fomenta un registro dirigido a satisfacer la tributación indirecta, que es ahora la fuente fundamental de exacción de los ciudadanos romanos en contexto itálico (Brunt, 1990). Son además ahora los municipios, colonias y prefecturas itálicas los que acometen sus propios censos y los envían a Roma (Lo Cascio, 2000b: 205). De este modo, el censo romano ya no sólo recoge a los hombres movilizables, sino a todos los sujetos sometidos a las nuevas imposiciones. Al menos ésta fue la teoría de Beloch, un cambio de concepción de los *civium capita* para explicar el gran aumento en el número de ciudadanos romanos en el siglo I a.C., aparte de la concesión de ciudadanía a Italia (*vid. Lo Cascio*, 1994). Aunque de este debate no podamos ocuparnos ahora en sus matices, así parece inferirse del gran aumento de *civium capita* registrados desde los últimos censos del 86 y del 69 a.C. respecto a los de

época augustea y que apuntan al registro también de mujeres y niños, además de otra información como la edad, etc. (*vid.* Wiseman, 1969; Nicolet, 1988: 187-88 Lo Cascio, 1994; Launaro, 2011: 11-24). Con una Italia cuyos suelos son exentos y se configura el *ius Italicum*, la amenaza de Augusto el año 13/14 d.C. de volver a registrar excepcionalmente las propiedades en Italia, por rebelarse a pagar la *XX hereditatem* (D. Cass. 56, 28, 6<sup>110</sup>), es representativa de estos cambios de concepción, en donde el censo de los ciudadanos romanos, al menos para Italia, es ya cualitativamente distinto al de los provinciales por la distancia en materia de tributación. El censo de la ciudadanía romana y el censo provincial actúan como procedimientos distintos y, a pesar de los intentos por conectar ambos en términos de periodicidad, tiende a aceptarse actualmente un carácter independiente (Lo Cascio, 2000b: 205-06).

La nueva filosofía política de control y registro tuvo también su correspondencia en ámbito provincial (incluyendo ya a las *civitates peregrinae*), aunque por la falta de homogeneidad resulte mucho más compleja. En este sentido el primer registro global del que tenemos constancia se acomete también a través de un edicto de Augusto para todo el Imperio, según el testimonio de Lucas: *ut describeretur universus orbis* (2, 1). En él aparecen ya algunos elementos característicos del *census* provincial. En primer lugar, el registro a partir de la *origo*. Es decir, a pesar de ser el primero en muchas zonas, la inscripción no se realiza en el lugar en donde el individuo se encuentre o tenga su residencia, sino en el seno de la comunidad de la que sea originario, quizás para favorecer una armonización con el resto de los registros familiares. Dado que la ciudadanía local se transmitirá por filiación, una falta de coherencia entre los diferentes miembros de la familia podría resultar problemática de cara, por ejemplo, a la transmisión de los bienes inmuebles en caso depender de *iura civitatum* distintos. Así el propio José, que se encontraba en Nazaret, Galilea, debe acometer sus obligaciones censuales en la *civitas* de Belén, en donde habitaba (*domo*) el resto de su familia. Esto nos lleva a su vez a otra característica de gran importancia del censo imperial en el que ya no son las personas, sino los documentos, los que viajan en el proceso de elaboración del censo, desde estas comunidades de origen hasta las instancias centrales (Nicolet, 1985; 1988: 177-211). La dinámica de descentralización, bien atestiguada desde el 45 a.C. en las colonias, municipios y prefecturas itálicas según se desprende de la *Tabula Heracleensis*, también se impondrá en ámbito provincial como solución necesaria para paliar la imposibilidad técnica del Estado romano para abordar directamente las labores de registro del nutrido elenco de comunidades dependientes. El testimonio de Lucas explicita cómo los individuos (*singuli*) se inscriben *in suam civitatem* (Lucas, 2, 3), no van a la capital provincial, sino que serán los documentos los que pasen a instancias superiores hasta llegar a las dependencias del gobierno imperial por intermediación de *legati* específicos.

---

<sup>110</sup> “Y cuando [Augusto] comprendió que los senadores estaban dispuestos a aceptar cualquier otro impuesto mejor que la vigésima, implantó un impuesto sobre los campos y las casas. De inmediato, y sin haber dicho ni por cuánto ni cómo se pagaría, envió a agentes a todas partes para que hicieran un registro tanto de los bienes particulares como de los de las ciudades, con la idea de que temieran que así sufrirían un daño mayor y acabarían prefiriendo el pago de la vigésima. Y así fue como sucedió”.

Partiendo desde las instancias superiores a las inferiores, la iniciativa imperial era continuada de este modo con una periodicidad variable por funcionarios encargados de esta tarea, como da cuenta el censo de Quirino ya comentado en Judea. Cabe señalar que la variada muestra de testimonios epigráficos en este sentido tiene una profunda problemática. Ésta se deriva, por un lado, de su relación (o no) con la diversa tipología provincial (*vid.* Le Teuff, 2012: 299-339; *vid.* cap. 3) y, por otra, con la expresión o el silencio en el desempeño de estas tareas, que por determinadas razones a veces parece obviarse y otras veces no. En cualquier caso la expresión que sintetiza esta iniciativa, sin entrar en las controversias sobre su jerarquía interna, es la que aparece asociada a tres cargos específicos con variantes en su nomenclatura: los *legati ad census accipiendos*, los *censitores* y los *procuratores ad census accipiendos*, estos últimos creados durante el gobierno de Adriano. Sobre esta cuestión, en lo relativo a la *Citerior*, esta competencia correspondería normalmente al propio gobernador (como ocurre en casi todos los testimonios del Alto Imperio), si bien cabe prevenir de que no le es intrínseca o exclusiva. Así por ejemplo en *CIL* II, 4121 se hacen destacar ambas funciones en el *cursus honorum* de *Q. Hediufus Rufus Lollianus Gentianus*. Dice ser *Legatus Augusti provinciae Hispaniae Citerioris item censitor Hispaniae Citerioris*, es decir, dentro de sus funciones al mando de la misma (*item*) se encargó del censo de la provincia<sup>111</sup> (191-92 d.C.). Pero sin embargo, según esta misma inscripción, no fue así el censo provincial de *Lugdunum* lo realizó en calidad de enviado *ad hoc* sin ser su gobernador, y de forma específica para la colonia de *Lugdunum*: *censitor prov(inciae) Lugd(unensis) item Lugdunensium*.

Sobre los censos realizados para el conjunto de la provincia *Citerior* carecemos de testimonio alguno que pueda datarse con anterioridad a época Flavia. Sin embargo, debemos dudar de que éstos fueran efectivamente los primeros si tenemos en cuenta que el funcionamiento de las explotaciones mineras ya cuenta con pleno rendimiento desde el periodo de gobierno de Tiberio, y la consiguiente necesidad de un control de la mano de obra desde un periodo anterior. Entre otras razones, porque la mayor parte de los castros enclavados en las propias infraestructuras mineras corresponde a esta época. Sobre los testimonios seguros tenemos en primer lugar el acometido por *Vibius Crispus* en calidad de *legatus Augusti pro praetore in censibus accipiendis*, entre los años 71-73 para López Barja (1999: 357) o el 73/74 d.C. (Ozcáriz, 2013: 203) según la inscripción hallada en Baalbek (Líbano: *AE* 1939, 60), en donde aparece asimismo su subalterno, *S. Attius Suburanus Aemilianus*, en este desempeño (*adiutor in censibus accipiendis*). Sin embargo, el silencio sobre un censo de conjunto se extiende hasta la siguiente época de gran reordenación jurídica del territorio y de sus poblaciones. Mientras el primero se tiende a considerar un producto derivado de la expansión del *ius Latii* en *Hispania* a instancias de Vespasiano, el siguiente nos remite a época Severa y a las consecuencias de la *constitutio* Antoniniana del 212 d.C., con el acceso general a la ciudadanía

<sup>111</sup> Esto es relativamente común por el prestigio del que se reviste la tarea, lo que hace que se destaque en la inscripción tal y como también ocurre, por ejemplo, con el *leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) provinc(iae) Galat(iae) Phryg(iae) / Pisid(iae) Lycaon(iae) Paphlag(oniae) item ad census Pa/phlag(oniae)* (*CIL* III, 6819=ILS 1039).

romana, a excepción del mencionado *supra* del 191-92 d.C (*CIL* II, 4121). Se trata del *leg(atus) Aug(usti) cens(ibus) acc(ipiendis) Hisp(aniae) Cit(erioris)* (*ILS* 1135=AE 2003, 100= *CIL* VI, 332), datado en el 214-16 d.C. y que, si seguimos a Ozcáriz, no se trataría tampoco de un gobernador al no indicarse *pro praetore*, sino de un subalterno de rango semejante al *legatus iuridicus* (Ozcáriz, 2013: 204). Este último censo, de hecho, no debería incluir en principio el registro poblacional de la por entonces independiente *provincia Nova Citerior Antoniniana* con la que se desliga *Asturia* y *Callaecia* (*vid.* Alföldy, 1969: 239).

Por otro lado, deben también analizarse los indicios e hipótesis de otros censos provinciales para nuestra zona de interés, aunque carezcan de referencias explícitas.

El primero de ellos ha sido defendido recientemente por Olmo (2016: 431-37) para un periodo muy temprano (22-19 a.C.), momento en que L. Sestio Quirinal se hizo cargo de la problemática *Transduriana provincia*. Su postura se basa en la premisa de que debe existir un censo sucesivo inmediatamente posterior a la conquista de un nuevo territorio, momento en que el gobernador debe tener un conocimiento al menos sumario de las poblaciones y recursos disponibles con fines administrativos. Una primera cuestión que subyace al problema, y en la que no entraremos, es si efectivamente la *Transduriana provincia* debe ya considerarse estrictamente con el sentido de “provincia” consolidada (López Barja, 2001; 2010: 176-77; 2017), o bien ha de entenderse con el significado transitorio de campo de acción jurisdiccional del magistrado *cum imperio*, es decir, en su versión republicana (*vid.* Villanueva, 2011: 70-76) o, como defendió Alföldy (2000a), como “distrito” dependiente de la *Ulterior*. A mi modo de ver, aceptando la propuesta de López Barja de que se tratara de una *provincia* a todos los efectos, aun de vida efímera, la elaboración de un censo en estos momentos tan tempranos plantea algunos problemas. El primero es de orden cronológico y supondría retrotraer a un periodo anterior al edicto de Augusto *ut describeretur universus orbis*, cuya fecha exacta se desconoce. El de Quirino en Siria durante el año 6 d.C. dice ser, según el evangelista, un producto directo del edicto, es decir, veinticinco años después al hipotético de Quirinal. Hay sin embargo algunos testimonios que hacen al de Quirinal “posible”, pues a pesar de la distancia cronológica, quizás el edicto de Augusto fuera la primera vez que se mantuviera una voluntad de censo a escala global, lo que no implica que no existieran censos de provincias particulares con anterioridad. Un testimonio para apuntalar esta teoría lo constituye el censo realizado en la Galia el año 27 a.C. como acompañamiento a su reforma administrativa y su nueva división provincial: “Hizo un censo de los galos y ordenó su régimen de vida y su sistema de gobierno. Y de allí marchó a *Hispania*, donde también puso orden” (D. Cass. 53, 22, 5). Cabe decir que este censo nada tiene que ver con el censo de los Helvecios del 58 a.C. tras su *deditio*, que es considerado en ocasiones como su precedente (Caes. *B.G.*, I, 29). El censo helvecio no se trata de un “censo romano” por el simple hecho de haberse realizado por orden de César (*ut Caesar imperaverat*), pues en realidad lo que hace es disponer de los censos locales de las comunidades helvecias como habían estado realizando antes de la llegada de Roma. Es decir, son censos elaborados conforme a su

propias necesidades y procedimientos (*censu habito*) al margen del romano. Prueba de ser un producto de consumo propio es que fueran *tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae*, cuando habría sido sin duda el latín el lenguaje pedido por parte de la administración romana para los documentos oficiales. El propósito de César era, de hecho, la comparación de efectivos una vez finalizadas las hostilidades, lo que sólo es posible si el censo ordenado por César atendiera al mismo procedimiento seguido en los anteriores. El recurso romano de utilizar los recursos logísticos y las prácticas administrativas previas con el fin de reaprovecharlas en su propio beneficio no es, en efecto, ninguna novedad, como más tarde ocurrirá con Judea o el propio Egipto según lo ya comentado anteriormente.

El principal problema que nos plantea el censo de Quirinal en el Noroeste es que el recuento de las poblaciones deba sobreenderse a partir de un fragmento del edicto de El Bierzo, lo que en mi opinión no está ni mucho menos claro. Dentro de la conocida intervención de Augusto para redimir las disputas y reacomodar fiscalmente a las *civitates* de *Susarri* y *Gigurri*, se dice que los *castellani Paemeiobrigenses*, además de gozar de *immunitas perpetua*, sus *agros et quibus finibus possederunt Lucio Sestio Quirinale leg(ato) meo eam provincia optinente* <m> *eos agros sine controversia possidere iubeo* (AE 2000, 760). Si mantenemos la tesis de Grelle (1963), como venimos haciendo, no hay lugar para pensar que el reconocimiento de tierras y la delimitación de los territorios de *civitates* deban ir automáticamente unidos al recuento poblacional, pues como ya hemos mencionado en el apartado 3, esta consideración parte del presupuesto de que el registro de la propiedad en las provincias imperiales resulta del sumatorio de los censos individuales, de una relación directa entre las propiedades particulares y el *fiscus*. Si tenemos en cuenta la prontitud de esta medida, parece más razonable pensar que la imposición del montante de la *civitas* se hubiera basado exclusivamente en la exacción del *tributum soli* a partir de la estimación global de sus suelos. Es decir, se estaba procediendo a la ordenación de los espacios comunitarios y a la imposición de tributos, pero no hay nada que permita entender la existencia de un censo a partir del edicto. Esto podemos inferirlo de dos aspectos. El primero y más obvio es que el edicto sólo parece ir dirigido a los campos (*agri* y *finis*) que, por otra parte, no parecen ser individuales sino colectivos, de los *castellani*. Aunque la *civitas* sea la unidad fiscal de referencia (*ex gente.../ipsa civitate*), Roma debe discernir unidades menores cuando la desestructuración de la misma, motivada en último término por la atomización del poblamiento y la consiguiente multipolaridad de sus fuerzas sociales internas, impide siquiera mantener una única posición política en su seno. De este modo Roma debe arbitrar y discriminar aquellos leales *qui permanssise in officio* de los que habían dejado de cumplir sus obligaciones fiscales, y no es necesario reconocer una existencia jurídica o administrativa a estos *agri castellani* (vid. Orejas y Ruiz del Árbol, 2010).

Por otro lado, el análisis de las referencias a la *immunitas* nos da otro argumento a favor de que la reordenación fiscal se acometiera en estos momentos desde un marco exclusivamente fondiario y territorial, sin tomar como vehículo a las personas para tales registros (al menos, en lo que puede inferirse del edicto). Se dice en la segunda parte del mismo que se trata de una *immunitas omnium rerum*, y estas *rei* obviamente sólo

pueden ser el producto de la estimación de los suelos fiscalizados. Parece inverosímil pensar que pudiera englobar asimismo los bienes muebles, y menos aún que tales fueran registrados mediante un censo personal. En efecto, la *immunitas* que empieza a configurarse en estos momentos de gestación del *ius Italicum*, tenderá a ser una medida de consolación para los suelos de las comunidades que no adquieran el rango itálico, pero sí el privilegio de la exención fiscal. De hecho sabemos por un fragmento de César que la *immunitas omnium rerum* no parece englobar en este periodo ciertas obligaciones personales como la *vacatio militiae* (Caes. *B.G.* 6, 4; Canto, 2001: 165, n. 51), lo que tiene todo el sentido al fiscalizarse por vías diferentes: el recuento poblacional para las obligaciones personales y un catastro global de la *civitas* ligado al *tributum soli*.

Por último, esta misma *immunitas omnium rerum* donada a los *castellani pameiobrigenses* parece tener un carácter permanente al describirse como *immunitas perpetua*. Aunque no sabemos a ciencia cierta su naturaleza en el siglo I a.C., resultan de gran interés las precisiones de Ulpiano en su *forma censualis* sobre este asunto, pues parecen cumplirse en el edicto berciano. Para el jurista, esta cualidad perpetua no parece poder recaer tampoco en las personas, pues no puede transmitirse y se extingue con su muerte. Dice por el contrario que la inmunidad permanente es exclusiva de aquella que recae en la cosa: *Quippe personis quidem data immunitas cum persona extinguitur, rebus nunquam extinguitur* (Ulp. 2 *de cens.*=D. 50, 15, 3, 1); o a la que se otorga al conjunto de la *civitas* o a uno de sus *loci* internos, como serían los propios *castellani pameiobrigenses*: *Quamquam in quibusdam beneficia personis data immunitatis cum persona extinguantur, tamen cum generaliter locis aut cum civitatibus immunitas sic data videtur, ut ad posteros transmittatur* (Ulp. 2 *de cens.*=D. 50, 15, 4, 3).

En suma, si existió un censo no es algo que pueda desprenderse del contenido del edicto de El Bierzo, del que sólo se infiere el dibujo de los contornos de la *civitates* y la imposición de los primeros tributos. De hecho, la *controversia* del edicto parece versar sobre los límites en un momento temprano, cuando empiezan a transgredirse de manera abrupta las relaciones sociales existentes con la imposición de los primeros tributos para conjuntos sociales quizás todavía disfuncionales desde el punto de vista de su articulación política con el fin de satisfacer sus obligaciones fiscales en bloque. Esta situación es la que ya hereda Quirinal de C. Furnio con las revueltas astures y cántabras incentivadas por las primeras delimitaciones territoriales (D. Cass., 54, 5). Como ya observó en su día Luzzato, la distancia cronológica entre este primer boceto (*redactio in formam provinciae*) y una *lex provinciae* que la regulara de forma definitiva podían pasar años (Luzzato, 1985: 40-43), y no sería hasta estos momentos cuando se acometiera el primer censo provincial como parte de esta regulación. Algunos testimonios nos remiten a tareas de censo en acompañamiento a la creación de una nueva provincia, como la antes mencionada del 27 a.C., cuando se modelan las provincias galas, o el que se produce tras la reforma provincial que da lugar a la *nea eparcheia Arabia* el 127 d.C. (Lo Cascio, 2000b: 208). Así pudo haber ocurrido con el primer censo para el Noroeste que resulta más probable, tal y como fue defendido por López Barja (1999: 353) sin disponer todavía de la información del edicto. Es el que nos transmite *CIL* X, 680, en donde aparece un tribuno militar *misso pro censore ad Lusitanos* que se data como probable para el 16 a.C. No conocemos si este censo sobre

*Lusitania* fue parcial o total de la provincia, pero si en este momento todavía pertenecía *Asturia et Callaecia* a *Lusitania* antes de su adscripción a la *Citerior* (vid. Str. 3, 4, 20; Plin. *NH.*, 4, 118) no puede desecharse que también se hubieran visto inmersa en esta obra censual. Parece más probable pensar en un censo cuando se produce la organización definitiva de la *Citerior* durante el viaje Augusto del 15-13 d.C. (independientemente de si el Noroeste pertenecía entonces a *Lusitania* o a la *Citerior*), dentro de una organización territorial más estable. De ser así, la cercanía en el tiempo añade nuevas dudas al censo de Quirinal por la cercanía cronológica y los grandes esfuerzos que debió conllevar un registro sin precedentes en la región.

Sea o no este censo coincidente con la división augustea, el inicio de la explotaciones auríferas del Noroeste durante el gobierno de Tiberio debe tomarse como un término *ante quem*, en donde Roma ya habría de tener conocimiento, de un modo más o menos detallado, de la disponibilidad de mano de obra para las *operae* mineras.

## 5.2 El censo y el papel intermediador del *conventus* en el Noroeste.

En un nivel inferior al provincial, debe plantearse el controvertido asunto de las competencias fiscales del *conventus iuridicus*, en especial, aquellas que atañen a una hipotética función de distrito para el censo de las poblaciones que engloban. Materia aparte resultan las complicaciones derivadas de su cronología, que ha tendido a reconocerse ya para el periodo de Augusto a partir de la información sumistrada por la *tabula Lougeiorum* (*HEp* 1, 458=7, 402), un pacto de hospitalidad y patronato entre C. Asinio Galo y esta *civitas*, de la que se dice *ex gente Asturum conventus Arae August(a)e*. Su datación consular fecha el pacto el año 1 d.C. de tal manera que el *conventus* ya estaba en funcionamiento desde un momento cercano, que quizás pudiera remontarse también a la reforma provincial de Augusto<sup>112</sup> y sería el precedente del futuro *conventus Asturum* (Dopico, 1986: 269-70) o una nueva entidad que agruparía los tres futuros *conventus* noroccidentales (Fernández y Morillo, 2002). Con este documento de indudable interés<sup>113</sup> parecía verse superada la tesis hasta ese momento predominante, que situaba la creación del orden conventual en el periodo de Vespasiano por la proliferación de referencias asociables a esa época (Santos, 1985). Por un lado, las dedicatorias *genio conventus* del último tercio del siglo I o principios del II d.C. (*CIL* II, 4072; 4073; 4074), los primeros *sacerdotes* y *flamines* encargados del culto imperial en las sedes conventuales (e.g. del *conv. Ast.*: *CIL* II, 2426; 2637; 4223) y, por último, el propio momento en que Plinio habría dibujado su relación de comunidades por *conventus* tras desempeñar la procuratela en la *Citerior* el 73 d.C. Una opinión discrepante la encontramos en la opinión de Albertini (1923: 55-66), para quien la

<sup>112</sup> Así lo intuyó D'Ors a pesar de no tener disponible la lectura de este documento, si bien no expone los argumentos que sostienen su afirmación (vid. D'Ors, 1953: 138-139). Sancho Rocher (1978: 188), por su parte, también defendió una hipotética datación augustea para el sistema conventual en el momento de reestructuración de las *Hispaniae* (16-13 d.C.). Tan sólo Luzzato (1985: 61-62) intuyó un sistema conventual anterior, que podría remontarse incluso al periodo republicano como más tarde reconstruyó Dopico (1986).

<sup>113</sup> Algunos autores han dudado de la veracidad del documento (vid. Canto, 1990).



dissección pausada del fragmento de Plinio permitía inferir, por sus contradicciones internas, que algunas de las fuentes de información del naturalista podían retrotraer la situación conventual al periodo de gobierno de Claudio o a los últimos años de Calígula para la *Tarraconense*. La parquedad de las fuentes en este sentido nos permite, en suma, saber que ya comienza a trazarse la división conventual en el Noroeste desde un periodo cercano a la conquista. Pero resulta todavía complicado matizar su evolución interna y competencial, si estos primeros *conventus* lo eran sólo en el sentido de “punto de reunión o asamblea, sede judicial<sup>114</sup>” (*cum - venire*) o adquieren ya trascendencia administrativa resulta difícil de determinar con precisión.

Los estudios monográficos sobre las funciones conventuales han hecho hincapié en su naturaleza de campo de acción jurisdiccional (Dopico, 1986; 2006: 431-35; 2013) o como núcleos irradiadores del culto imperial (Etienne, 1958). Por el contrario, su operatividad desde un punto de vista administrativo y tributario se ha minusvalorado hasta el punto de negarse por completo en algunas ocasiones (Beltrán y Velaza, 2013). En la actualidad, la línea general admitida sobre la naturaleza conventual la entiende como un ente aglutinador de las personas y comunidades de las que se compone (López Barja, 2008: 28-30). Es decir, en una faceta personal y sin implicaciones territoriales de “distrito”, al menos no directamente, sino sólo como “suma de los territorios de las ciudades que los integraban” (Beltrán y Velaza, 2013: 58). Desde mi punto de vista, estas conclusiones siguen siendo plenamente válidas como demuestran, por ejemplo, algunos pasajes de Plinio sobre las capitales de *conventus* de *Hispania* a las que los individuos adscritos deben acudir para dirimir sus pleitos, independientemente de su expediente comunitario (Plin. *NH.*, 3: López Barja, *ibid.*). Por otro lado, las pruebas sobre las que se ha defendido la existencia de un *ager* conventual no son convincentes. Se trata de dos hitos con una escueta referencia *Ter(minus) Aug(ustalis)*, uno procedente de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Colmenar Viejo, Madrid: *HEp* 4, 533) y el recientemente hallado en Lekunberri (Navarra: Peréx y Rodríguez, 2011). Sin embargo, no hay necesidad de considerar una delimitación de este tipo simplemente porque pueda coincidir con zonas fronterizas interconventuales<sup>115</sup>, cuyos contornos resultan difíciles de definir por otra parte. El argumento es puramente *ex silentio*, al carecer de indicación de la ciudad que delimitan como sí ocurre en otros *termini* de este tipo (*vid. e.g.* Ariño, 2005: 96-106), lo serían para los *conventus*, pero sin explicitarse en ninguna de las dos inscripciones. No debe olvidarse que el dibujo físico de los contornos a través de *termini* nunca fue sistemático, sino que suele esconder controversias que terminan por provocar la intervención del gobernador. Fueron, por el contrario, los hitos del paisaje y el conocimiento local los que construyeron un espacio

<sup>114</sup> Así se desprende de las alusiones en época anterior a estos *conventus*, como el que se tiene noticia del año 68 a.C. en donde César durante su periplo por la provincia Ulterior imparte justicia en diversas sedes a su paso, pero con un carácter circunstancial y no fijo: *ubi cum mandato praetoris iure dicundo conventus circumiret* (Suet. *Caes.*, 7; Sancho Rocher, 1978: 174). El análisis de otros *conventus* itinerantes de época republicana, por descansar su existencia simplemente en el *iure dicundo* del magistrado, fueron ya analizados por Dopico (1986: 269-275).

<sup>115</sup> Entre los *conventus* *Caesaraugustanus/Carthaginiensis*; *Cluniensis/Caesaraugustanus* respectivamente.

diferenciado de la comunidad respecto al otro. De modo que puestos a buscar una naturaleza funcional a estos *termini* tiene mucho más sentido que un conflicto fronterizo lo protagonicen dos *civitates* (*Complutum* / *Mantua* y *Varduli* / *Vascones*), en tanto son unidades fiscales, y no dos *conventus*, que obedecen a intereses imperiales de otro tipo.

Hecha esta declaración de principios, las siguientes páginas iran dedicadas a la revisión de las competencias administrativas del *conventus*, cuya principal función será la intermediación entre el gobierno central y las *civitates* para la gestión, recuento y control de la mano de obra local<sup>116</sup>. Así pues, analizaremos el binomio formado, en primer lugar, por los indicios de formas de tributación en *operae* de orden conventual para comprobar después su coherencia con las competencias censuales que reconocemos para el *conventus*. Al fin y al cabo, este plantemiento tampoco menoscaba la naturaleza aglutinadora de personas y comunidades que se le presupone al *conventus* (elemento sobre el que se construye la negativa a conceder al *conventus* competencias administrativas), pues no implica otorgar un refrendo a los, por otro lado, indocumentados “suelos conventuales”. Desde este modelo explicativo el control y registro personal a través del censo se desliga de la tributación fondiaria y la consiguiente declaración de las propiedades particulares. Pues, como se defiende en el cap. 9, la administración de los *tributa* sobre el suelo dentro del sistema de *civitates* fue competencia y responsabilidad fiscal comunitaria.

### **5. 2. 1 Las obligaciones personales en el marco conventual: *munitiones viarum*, *dilectus* y *operae mineras***

Me gustaría comenzar mi replanteamiento a partir de algunas antiguas observaciones hechas por investigadores que han caído en el olvido actualmente, pero cuya revisión puede apuntar a ciertos indicios sobre las competencias conventuales. Me refiero a los cambios en la nomenclatura de los cipos viarios en el Noroeste que fueron en su día estudiados<sup>117</sup> por Castro Nunes (1950) y Estefania (1958). En su análisis quedó en evidencia cómo para una misma vía y un mismo periodo de gobierno imperial, se mantenían sin apenas variantes las fórmulas originales toda vez se mantenían en un mismo *conventus*, pero sin embargo cambiaban sensiblemente al penetrar en otro. El primero en advertir el fenómeno fue Castro Nunes (1950) partir del estudio del formulario de los miliarios de Nerva, en lo que se comprobaba cómo la nomenclatura cambiaba según correspondieran al *conventus Bracarense* o *Asturum*, diferenciándose en dos tipos. La estela seguida por Estefania completó su hipótesis en un análisis más sistemático para el conjunto de *Gallaecia*, para los miliarios de Antonino según se tratara del convento Bracaraugustano (*CIL* II, 4740; 4753; 4754; 4801; 4804, 4837; 4842; 4843; 4846; 4848; 4850; 4872; 4876; 6218; 6236) respecto a *CIL* II, 8223 en

---

<sup>116</sup> Dejaremos de lado otras propuestas planteadas recientemente, como la relación del *conventus* en el cobro de los *portoria* (Ozcáriz, 2012; 570, n. 73). Se trata de una tesis sugerente pero de difícil comprobación al asentarse sobre una base débil, como es que el criterio seguido en la estructuración del *conventus* fuera facilitar una necesaria salida al mar.

<sup>117</sup> Un breve resumen puede encontrarse en: Cepas Palanca, 1995.

ámbito del *conventus Asturum* (Encina de la Lastra, León). También ocurría con los miliarios de Tito con respecto a los miliarios del *conventus Bracaraugustanus* (*CIL* II, 4798; 4803; 4838) o *Asturum* (*AE* 1928, 178; *CIL* II, 4854). Por el contrario, todos ellos presentaban evidentes rasgos de homogeneidad en el interior de cada *conventus*.

Si nos atenemos, a modo de ejemplo, al estado actual de conocimiento sobre la fase de construcción de la *via XVIII* en época Flavia, es decir, en un momento en que el sistema conventual está ya plenamente vigente, estas conclusiones resultan todavía válidas según aludan a una u otra sede conventual. Puede apreciarse en el mapa y tabla siguiente (*vid. infra*) la sintonía entre las fronteras normalmente adscritas a uno u otro *conventus* y el contenido de los miliarios. En este caso el texto epigráfico sigue una estructura más o menos uniforme, con algunas variantes en los elementos que se abrevian, pero que sin embargo recoge todo un conjunto informativo que se habría fijado de antemano por iniciativa provincial/imperial. El elemento de diferenciación en este caso no lo constituye la estructura o el contenido, sino la alusión a una u otra capital conventual desde la que arranca la vía (*ab Asturica* / *ab Bracara*) y, lo más importante, se mantiene en los territorios comunitarios que se asignan a ese *conventus*, cosa que se hace especialmente patente en los miliarios más alejados de *Asturica* y cercano al límite interconventual tradicionalmente señalado (nº 11 y 12).

Nº	Bibl.	Gobierno	Texto	Año	Lugar
1	<i>CIL</i> II, 4814	Vespasiano	<i>Imp(erator) Caes(ar) Vesp(asianus) Aug(ustus) Pont(ifex) Max(imus) trib(unicia) pot(estate) LX imp(erator) XIX p(ater) p(atria) co(n)s(ul) VIII</i>	78	Bargeas (Covide)
2	<i>CIL</i> II, 1869	Tito y Domiciano	<i>C(aio) Calpetano [Rantio] Quirinale V[alerio] Festo leg(ato) Aug(usti) [Propr(aetore)] a Bracara m(ilia) p(assuum) XIII</i>	79/80	Vilela (Amares)
3	Colmenero et al., 2004, nº 249		<i>Imp(eratore) Tito ca[es(are)] di[vl]i Vespasian(i) f(ilio) Vespasiano aug(usto) pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII caes(are) divi Vespasiani [f(ilio) Domitiano] co(n)s(ule) VII via nova facta C(aio) Calpetano Rantio Quirin(ale) Valerio Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore) a Bracara m(ilia) p(assuum) XIV.</i>	79/80	Santa Cruz (Terrasde Bouro)
4	<i>CIL</i> II, 4802		<i>[---] C(aio) Calpetano Rantio Quir(i)n(ale) Valerio Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore) via nova m(ilia) p(assuum) XVIII</i>	79/80	Chorense (Terras de Bouro)
5	<i>CIL</i> II, 4803		<i>Imp(eratore) Tito caesare divi Vespasiani f(ilio) Vespasiano aug(usto) pot(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII caes(are) divi Vespasian(i) f(ilio) [Domitiano] co(n)s(ule) VII via nova facta C(aio) Calpetano Rantio Quirinale Valerio Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore) a Brac(ara) m(ilia) p(assuum) XIX</i>	79/80	Saim (Terras de Bouro)
6	Colmenero et al., 2004, nº 312	Tito y Domiciano	<i>[Imp(eratore) Ti]to cesar divi [Vesp]asiani filio Vespasiano [aug(usto) p]ont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIII [imp(eratore) X]IV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII caesare divi [Ves]pasiani f(ilio) [Domitiano] [co(n)s(ule) VII] C(aio) Calpetano Rantio [Quirina]le Valerio Festo [leg(ato) au]g(usti) propr(aetore) [via nova a Bracara m(ilia) p(assuum) XXIX]</i>	79/80	Vilarinho da Furna (Terras de Bouro)
7	Colmenero et al., 2004, nº 330		<i>Imp(eratore) [Tito caesare d]ivi Vesp[asiani] filio Vesp[asiano] aug(usto) pot(ifice) max(imo) t[ri]b(unicia) p[ot(estate) VIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ule) VIII c]aesare divi Vespasi(ani) f(ilio) Domitiano co(n)s(ule) VII C(aio) Calpetano Rantio Quirinale Valerio Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore) via nova a Bracara m(ilia) p(assuum) XXXI</i>	79/80	Parque Nacional da Peneda-Gerês (Terrasde Bouro)
8	<i>CIL</i> II, 4838		<i>Imp(eratore) Tito caesare divi Vesp(asiani) f(ilio) Vespasiano aug(usto) pot(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) IX imp(eratore) XV p(atre) p(atriae) co(n)s(ulle) VIII caesare divi Vesp(asiani) f(ilio) [Domitiano] co(n)s(uli) VII C(aio) Calpetano Rantio Quirinale</i>	79/80	Portela do Homen (Terras de Bouro)

			<i>Valerio Festo leg(ato) aug(usti) propr(aetore) via nova a Brac(ara) m(ilia) p(assuum) XXXVIII.</i>		
9	Colmenero <i>et al.</i> , 2004, n° 390		<i>[...] divi [Vesp(ani) fil(io)] Domi[tiano]<sup>118</sup> [...]</i>	-	Portela do Homen (Terras de Bouro)
10	<i>CIL</i> II, 4847		<i>[...] [C(aio) Calp(etano) Rant]tio [Quiri]&lt;n&gt;ale Valerio [F]e[s]to [leg(ato) aug(usti)] [p]ro [p]r(aetore)] via [nova facta a Brac(ara)] m(ilia) p(assuum) XX]XVI<sup>119</sup></i>	-	Incierta
11	<i>CIL</i> II, 4854		<i>[I]mp(eratore) Tito caes(are) divi [V]esp(asiani) fil(io) Vesp[asia]no aug(usto) pont(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIII imp(eratore) XVI p(atre) p(atriciae) co(n)s(ule) VIII caes(are) divi Vesp(asiani) fil(io) Domitiano co(n)s(ule) [VII] via nova [facta ab] Asturica C(aio) Calp(etano) Rant]tio Quirin]ale [---]</i>	79/80	Ponte Navea (Trives)
12	Colmenero <i>et al.</i> , 2004, n° 503		<i>[Imp(eratore) Tito] caes(are) d[ivi Ves(asiani) f]ilio] Vesp(asiano) aug(usto) po[nt(ifice) max(imo) trib(unicia) pot(estate) VIII] imp(eratore) XV p(atre) p(atriciae) co(n)s(ule) [VIII] caes(are) divi Vesp(asiani) f]ilio] Do[mitiano] co(n)s(ule) VII via nova facta C(aio) Cal(petano) Rant(io) Q(uirinale) Val(erio) Festo leg(ato) Aug(usti) p(ro)p(raetore) ab Astur(ica) m(ilia) p(assuum) XCIV</i>	79/80	Ponte Bibei (Trives)
13	Colmenero <i>et al.</i> , 2004, n° 513		<i>Imp(eratore) Tito caes(are) Vespas(iani) f]ilio] Vespas(iano) aug(usto) p(ontifice) m(aximo) tr(ibunicia) pot(este) VIII imp(eratore) XV p(atre) p(atriciae) co(n)s(ule) VIII caes(are) divi Vespas(iani) f]ilio] [Domi tiano co(n)s(ule) VII] via nova facta ab Asturica Bracar(am) C(aio) Calp(ateano) Rant(io) Quir(inale) Valerio [Festo leg(ato) aug(usti) pr(o)pr(aetore)] m(ilia) p(assuum) XXIII<sup>120</sup></i>	79/80	San Justo de Cabanillas (Noceda de El Bierzo)
14	Colmenero <i>et al.</i> , 2004, n° 516		<i>[ - - - ] Rant(io) Quir(inale) Val(erio) [Fes]to leg(ato) aug(usti) pr(o)pr(aetore) ab Asturica<sup>121</sup> m(ilia) p(assuum) XXII</i>	79/80	Ribera de Folgoso
15	Colmenero <i>et al.</i> , 2004, n° 517		<i>[ - - - ] [via nov]a facta ab Ast[urica] C(aio) Calp(etano) Rant(io) Quir(inale) V[aler]io [Festo leg(ato) a]ug(usti) pr(o)pr(aetore) [ - - - ]</i>	79/80	Bembibre

Fig. 1. Tabla: miliarios de la *via Nova* (via XVIII).

<sup>118</sup> Propuesta de interpretación plausible, aunque sólo tenemos un conocimiento manuscrito sobre el miliarios: a partir de Colmenero, 2004 n° 390. Por esta razón, no se incluye en la representación gráfica.

<sup>119</sup> Desaparecida y de lugar incierto. Ha sido atribuida al grupo de Portela do Homen por la expresión de la milla. Sin embargo, sólo se cuenta con una transmisión textual incompleta, pudiendo aludir a una milla diferente y además la alusión a *Bracara* no se documenta. Por ello, le damos aquí una ubicación incierta y no se representará en el mapa.

<sup>120</sup> Se trata del único caso que registra también el destino, a *Bracara*, si bien toma como referencia *Asturica* al igual que el resto.

<sup>121</sup> No puede desecharse aquí la alusión estereotipada de *via nova facta ab Asturica* como aparece en el resto del conjunto por su mal estado de conservación y la abrasión de su superficie.

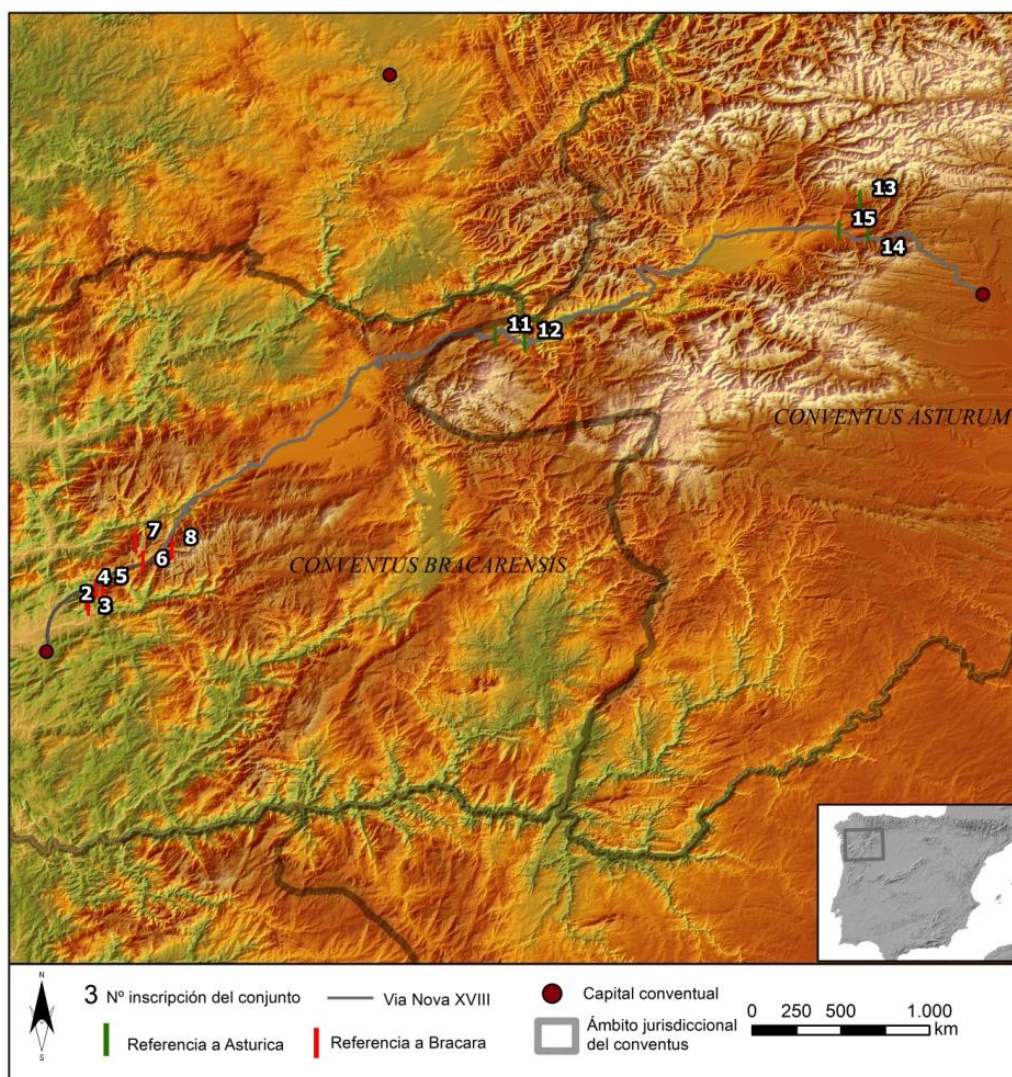


Fig. 2. Dispersión de miliarios de Tito y Domiciano en la *via* XVIII según su nomenclatura: (*ab Asturica* / *ab Bracara*).

Partimos de que los cambios en el formulario nos hablan de una intermediación del *conventus*. Sin embargo, este fenómeno no se ha documentado en otros *conventus* hispanos según algunos estudios que siguieron la propuesta de estos autores (*vid.* Sancho Rocher, 1978: 193, n. 106; Prieto, 1972; Cortijo Cerezo, 2007). Es decir, es en todo caso un rasgo específico de la forma en que funcionaban los tres *conventus* del Noroeste, pero no es un elemento inherente del orden conventual, cosa que cabría esperar si efectivamente gozaron de una proyección espacial como “distrito” territorial. Es en este punto cuando debemos preguntarnos si la alusión a uno u otro *conventus* (o a su capital) denota efectivamente una caracterización territorial del mismo o, como me inclino a pensar, si en realidad corresponde a la gestión de la mano de obra de las *civitates* que engloban, en este caso dirigidas a la construcción de las principales vías públicas. Para ello es preciso atenernos al modelo general de administración de la red viaria y ponerlo en relación con la situación que encontramos en el Noroeste a diferencia de otras regiones.



En primer lugar debe reflexionarse sobre por qué este tipo de *viae*, que en principio son *res publicae in usu publico* (Ponte, 2010: 78-81) y están construidas a instancias del aparato imperial, presentan luego rasgos diferenciados por unidad conventual. La titularidad pública de las vías que presentan esta anomalía por *conventus* no puede ponerse en duda, pues están encabezadas por una dedicatoria al emperador y algunas de ellas recuerdan también al gobernador, como sería el caso del *legatus Augusti propraetore C. Calpetanus* para la *via XVIII* en época flavia. De hecho, Ulpiano al hablar de las *viae publicae* frente a otro tipo de vías privadas (*vid.* Ulp. 68 *ed= D.* 43, 8, 2, 22) recoge como característica morfológica exclusiva esta función estructurante entre núcleos principales, como habrían de serlo aquellas que unieron las sedes conventuales del Noroeste.

Sin embargo, sabemos que a pesar de la titularidad pública el Estado solía disponer de contribuciones de mano de obra por parte de las comunidades para su construcción, y es en este punto donde cabe plantearse la labor de intermediación del *conventus* en el caso del Noroeste. El primer testimonio aparece ya en Cicerón, en cuya defensa de Marco Fonteyo como gobernador de la Galia, le recriminan que no hubiera forzado lo suficiente a las comunidades sometidas de cara a contribuir en la construcción de las vías (Cic. *Font.*, 8, 17). A ello se suman diferentes indicativos de la legislación local, en donde comunidades de distinto estatuto jurídico son las responsables colectivas de mantener en buen estado la red viaria, lo que denota indirectamente que también se habrían involucrado en las labores constructivas precedentes. Así la *Tabula Heracleensis* establece que, en su comunidad, son los propietarios de los fundos colindantes quienes tienen la obligación de mantener en buen estado la vía por el tramo en que lo atraviesa siguiendo las instrucciones del edil (*Tab. Heracleensis* 9). En caso de no hacerlo podían incurrir en penas bajo procedimiento judicial (*Tab. Heracleensis* 10). Según la *lex Tarentina* recae en el municipio la responsabilidad sobre las vías *intra eos fineis quei municipi erun[t]* (I, 39-41). Es también interesante que en las leyes de Urso (78), toda vía *intra fines* es considerada como *via publica*. Además del ya mencionado uso del término “*publicus*” en entornos locales<sup>122</sup> (*vid.* cap. 4.4), esta alusión debe entenderse como la competencia que, de nuevo, la comunidad adquiere respecto a las vías bajo su responsabilidad aun cuando fuera *ager publicus*<sup>123</sup>. Debemos tener en cuenta que algunas de ellas sí podrían ser, en sentido estricto, de la colonia, como es el caso de la categoría que Ulpiano define como *privatae, agrariae y vicinales* (*D.* 43, 8, 2, 22), pero no podrían serlo las de titularidad pública del Estado romano por este carácter inalienable antes mencionado<sup>124</sup>. La única

<sup>122</sup> Del que, por otra parte, esta alusión sin duda constituye un argumento más a favor, pues el mismo Ulpiano refiere que ni siquiera cuando son particulares los que colectivamente (*ex collatione*) soportan todos los gastos de mantenimiento de la vía puede considerarse privada (*vid.* *D.* 43, 8, 2, 22).

<sup>123</sup> *Quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt intra eos fines, qui coloniae dati erunt, quicumque limites quaeque viae quaeque itinera per eos agros sunt erunt fueruntve, eae viae eique limites eaque itinera publica sunt* (*lex Urs.* 78).

<sup>124</sup> Son, de hecho, *ager publicus populi Romani* (*D.* 43, 8, 2, 21). Dentro de estas vías principales de titularidad pública cabría destacar al menos dos que atravesarían con bastante seguridad el territorio bajo jurisdicción de Urso y servían de conexión con Astigi, sede de su *conventus*. Por un lado la *viae* que unía Carbula y Ostippo, con Urso en un punto intermedio entre ambas, y quizás también la *via* que partía

justificación posible, sin incurrir en contradicciones que torsionen estos principios, es que terminen por considerarse propias como producto de la *munitio viarum* para la construcción, mejora y conservación de la red viaria. De hecho, en el capítulo 77 de las leyes de Urso queda establecido que todos los gastos derivados de las vías en su territorio (e independientemente, por tanto, de su titularidad) sean sufragados por el erario de la colonia<sup>125</sup>. El mantenimiento y la construcción de las nuevas vías se sostiene sobre la autonomía conferida a la comunidad, que es al fin y al cabo quien dispone y gestiona su propia mano de obra y cuenta, como podría ser el caso del municipio de *Irni*, con un censo propio (Nicolet, 1991: 128-29)<sup>126</sup>. De hecho, según sabemos por la legislación de este municipio latino era responsabilidad de los *Ilviri* la gestión y construcción de las *viae* que pasaran por su territorio (*lex Irn.* 82), y que tanto los *municipes* como los *incolae* con propiedades estaban sometidos a *operae* y *munitiones* de hasta 5 jornadas de trabajo (*lex Irn.* 83). La *munitio viarum* comunitaria aparece también en otros testimonios más tardíos que demuestran que estamos ante un modelo bastante generalizado y coincidente respecto a lo que se observa en la *tabula Heracleensis* y en Urso, al ser una solución administrativa eficaz a la hora de paliar las limitaciones logísticas de los organismos centrales. Un testimonio muy interesante en relación a la *munitio viarum* y los miliarios lo encontramos en una extensa inscripción frigia publicada y reconstruida por Frend (*vid.* Frend, 1959: 46-48) y que data del siglo III d.C. Ésta nos informa de una larga disputa mantenida entre las comunidades peregrinas de Anossa y Antimacheia sobre las corveas (*angareia*<sup>127</sup>) que debían poner a disposición del Roma para diferentes fines, no especificados por la conservación fragmentaria del epígrafe, pero que parecen englobar tanto a personas como a bueyes para diversos trabajos viarios. En este caso, y de nuevo como ocurre en los ejemplos anteriores, estas obligaciones se resuelven asignándolas a tramos de vías, “unequivocally fixed road sections (το ἐπιβάλλου μέρος) which the single communities were responsible for were exactly marked by milestones” (Kissel, 2002: 140; *vid.* Lolos, 2009: 269-70). También la reparación de un tramo de la *via Egnatia* en Tracia, según se conoce por una inscripción más reciente hubo de ser reconstruida por los *kómai* adyacentes, y en ella se indican una serie de distancias y secciones de la misma sujetas a esta obligación “which were inambiguously marked by milestones” (Kissel, 2002: 141).

---

desde *Antikaria* hasta *Astigi* y que pudiera atravesar por la su parte septentrional parte del *territorium* colonial ursonense (*vid.* Cortijo Cerezo, 2007: 301).

<sup>125</sup> *Si quis vias fossas cloacas Ilvir aedilisve publice facere inmittere commutare aedificare munire intra eos fines, qui coloniae Iuliae erunt, volet, quot eius sine iniuria privatorum fiet, it is facere liceto* (*lex Urs.* 77).

<sup>126</sup> Según la *lex Irn.* 86 el *Ilvir* habría de conocer los nombres y propiedades de sus *municipes* para hacerlos elegibles en el *ordo decurionum*, pues se requiere ingenuidad y un patrimonio mínimo valorado en 5000 sesteracios. Si bien no creo, con López Barja, que toda esta información fuera suministrada al gobernador para la elaboración del censo provincial (2014: 460), pues sería inmanejable, sino un resumen cuyos detalles resultan difíciles de definir. Quizás sólo sus números en bruto a excepción de los nuevos ciudadanos romanos *per honorem*, o incluyera todo el conjunto nominal, pero no sus propiedades (salvo en las colonias). A lo sumo, puede conjeturarse una valoración general de las propiedades en sesteracios, como ocurre en el primer edicto de Augusto en Cirene (7-6 a.C.), donde parece conocer que 215 personas de todas las edades constan de al menos un patrimonio de 2.500 denarios para poder ser elegidos jueces.

<sup>127</sup> Sobre la diversidad de formas que adquiere la *angareia* como forma de fiscalizar la fuerza de trabajo, y no sólo su sentido originario relacionado con el transporte, todavía resultan acertadas y lúcidas las observaciones de Ste. Croix (1981: 14-15).

Este sistema incurre sin embargo en una clara contradicción en el caso del Noroeste por lo ya mencionado, pues cabría esperar que existiera un mayor número de menciones en los miliarios a las comunidades que surgían a su paso. Sin embargo los *conventus* parecen mediatizar en el Noroeste su entramado, cosa que no ocurre en los *conventus* en donde prevalece la capacidad organizativa de las comunidades respecto a la red viaria, como se demostró en estudios análogos para los miliarios de los *conventus Caesaraugustanus* (Sancho Rocher, 1978: 193, n. 106), *Cordubensis* (Prieto, 1972) o el más reciente para toda la Bética (Cortijo Cerezo<sup>128</sup>, 2007). Ante este problema creo que sería conveniente plantear la hipótesis de que, al menos en esta región, las *munitiones viarum* necesarias para la construcción de red viaria las hubiera asumido el *conventus* por ser el núcleo administrativo con una capacidad de control eficaz de la mano de obra disponible a través del censo. Es decir, si los miliarios denotan una vertebración conventual no se debe a una función de “distrito territorial” sino a la gestión de *operae* solicitadas a las *civitates* dependientes de las respectivas sedes conventuales, fundamentalmente para las obras de construcción. Como se defenderá más adelante (cap. 5.2.2), es probable que las sedes conventuales contaran con un registro de los individuos concretos (con edad y asignación ciudadana) frente al carácter más inventariado y sumario que sería remitido a las dependencias del gobernador provincial. Este control numérico de las comunidades, unido a la capacidad jurisdiccional del *conventus* si no se cumplían estas obligaciones<sup>129</sup> (vid. Dopico, 1986) constituyen dos claves fundamentales para comprender la potencialidad que las sedes conventuales tuvieron respecto a las *civitates* bajo su esfera de influencia. Al mismo tiempo, esta posibilidad entra en consonancia con el método de registro fondiario, pues si los organismos centrales no tenían conocimiento de las propiedades individuales, sino *universus modus* para cada *civitas*, tampoco podía ejecutarse una asignación individual para los tramos de vías como ocurre en la *tabula Heracleensis*, pues se carece de información sobre las propiedades colindantes. Bastaría, por tanto, con conocer la mano de obra disponible por cada *civitas* y requerir una determinada cantidad para la construcción de la *via*, entre o no en los contornos de la misma. Para su mantenimiento cabe imaginar una solución análoga al de Anossa y Antimacheia, en donde se asignaría globalmente a las *civitates* cercanas tramos de vías para que permanecieran en buenas

<sup>128</sup> En este sentido sus conclusiones son rotundas: “Aunque Plinio lo haga, la Bética [...] no necesitaba recalcar el papel administrativo de esta división interna ya que, incluso antes de tenerla, existían los mecanismos adecuados para una buena articulación territorial” (2007: 290), “En el caso bético, además, ni siquiera el primer vocablo (*conventus*) mereció (con los datos que tenemos a día de hoy) una mínima atención por parte de los provinciales. Quizás tomando un modelo cuya operatividad era tangible en Asia, Augusto diseñó un teórico armazón administrativo homogéneo para las tres provincias hispanas, que cada una se ocupó de rellenar con la práctica diaria individualizándolo. Así, el que la realidad conventual pase sin pena ni gloria por la epigrafía provincial bética es el mayor testimonio (*ex silentio*, desde luego) que hasta ahora tenemos del influjo que sobre la población tuvo esta reforma administrativa” (2007: 300; cfr. Urueña, 2011).

<sup>129</sup> En principio, en tanto que *viae publicae*, la supervisión era tutelada en última instancia por el gobernador provincial, que siempre guardaba la posibilidad de emitir interdicto si la red viaria era enajenada o no estaba convenientemente conservada (Ulp. 68 *ed.=D.* 43, 8, 2, 2-3), y que en el caso del Noroeste pudo haberse ejercido a través de la jurisdicción conventual o de los *legati* del gobernador provincial o de los posteriores *per Asturiam et Callaecia* a partir del siglo II d.C.



condiciones. Como trataremos en el cap. 8.3, algunas marcas de propiedad del Noroeste pudieron ser también indicativas de este tipo de obligaciones muneraticias por los tramos colindantes con su propiedad.

Otro aspecto relacionado con la capacidad de gestión y control del *conventus* es su posible función de leva de tropas auxiliares, para lo cual el censo se erige de nuevo en un instrumento vital. Sabemos, por una parte, que Augusto a su muerte lega el conocimiento sobre *quantum civium sociorumque in armis* (Tac. *Ann.*, 1, 11, 4), lo que fue posible en primera instancia gracias al ensachamiento del censo a los horizontes provinciales, que ya no se restringen a los *capita civium Romanorum* sino también a los de distinta condición, como serían los *socii* o las mayoritarias comunidades peregrinas. Desde este inventario básico, podrían abordarse otras cuestiones, como la disposición de personas en edad de servicio militar y las que, finalmente, llegaron a engrosar las filas del ejército, ya sea como legionarios o como auxiliares. De hecho es también en el largo transcurso de gobierno augusteo cuando se produce una reforma militar que sentará las bases de la cada vez más acusada incorporación de peregrinos auxiliares al ejército romano, hasta el punto de constituir buena parte de sus contingentes totales bien entrado el siglo I d.C. Pero desde el punto de vista metodológico, antes de comentar el problema de fondo, es preciso hacer dos aclaraciones preliminares. En primer lugar, es cosa sabida que los epítetos que reciben las unidades militares dependen del lugar en que se produjo el reclutamiento. Así aparece ya desde época republicana en ámbito hispánico en el bronce de Áscoli del 89 a.C. (*CIL* VI, 37045) cuando todavía no funcionaba el convento bajo la forma que encontramos en época altoimperial. La *turma Salluitana* recibe simplemente su denominación por haberse constituido en *Salduie*, al contar con algunas ventajas de tipo logístico para la movilización a Italia del destacamento (Pina Polo, 2003). En este caso su denominación *Salluitana* no implica dependencia administrativa alguna entre *Salduie* y las comunidades del valle del Ebro de las que proceden los auxiliares que son llamados a la participación en la contienda: *begarenses*, *ilerdenses*, *begenses*, *segienses*, etc.

Por otro lado, las alusiones de tipo étnico o administrativo sólo son coherentes con su composición interna en el momento del reclutamiento, pero no después. Es decir, toda vez son movilizadas a frentes lejanos con carácter estable no debe inmediatamente esperarse que los individuos aludidos a una *cohors* de astures, por ejemplo, sean por entero de esa procedencia. La necesaria renovación de sus filas por las bajas suponía la incorporación paulatina de auxiliares de otras zonas al mismo cuerpo. Encontramos ejemplos de este fenómeno incluso entre auxiliares del Noroeste que se reintegran en otros cuerpos del frente, como el *duplicarius Cloutius Clutami f.* que a pesar de ser *Susarrus domo Curunniace* pertenece al *ala Pannorior(um)* antes de su fallecimiento en *Dalmatia* (*CIL* III, 2016=8577). O, al contrario, encontramos también algunos auxiliares de origen diverso en unidades reclutadas en las unidades conventuales del Noroeste, como un suetrio *natione Ubius* que ingresa en el *ala Asturum*<sup>130</sup> (*CIL* XIII, 2613). De modo que el epíteto original, mantenido en el tiempo, muchas veces no haría

---

<sup>130</sup> Sobre estas cuestiones, *vid.* Roldán, 1974: 276-78; 340-41.

justicia respecto a la composición interna de la unidad. Esta aclaración es importante, pues en ocasiones se han sacado conclusiones sobre auxiliares considerados como originarios del Noroeste simplemente por pertenecer a destacamentos con nombres que remiten a esta región pero no indican su *origo* (vid. Pitillas, 2006: 31, nº 3 y 5). En sintonía con estos dos principios, a la hora de tratar a auxiliares concretos sólo se tendrán en cuenta los que expliciten su procedencia reconocida en una comunidad del Noroeste, mientras para el tratamiento de las unidades se recogen todas ellas (pues los cambios en su composición no afectan al hecho de haberse alistado originariamente en el marco conventual).

El principal argumento sobre el que se ha desechado la función de reclutamiento militar del *conventus* es la incoherencia con algunas *alae* y *cohortes* alistadas en ámbito hispánico que aluden a unidades superiores o inferiores como la *provincia*, las *regiones* o una *civitas* particular sin tener en consideración el *conventus*<sup>131</sup> (vid. Dopico, 1986: 277). Sin embargo la mayor parte de estos testimonios no proceden del Noroeste peninsular, sino de otras zonas. Esto, al fin y al cabo, refleja una realidad bien contrastada en el ámbito epigráfico: que a pesar de que la relación pliniana otorgue al *conventus* una función estructurante y homogénea para todo el territorio hispánico, la evidencia documental ofrece una enorme desigualdad en su visibilización y funcionalidad según qué ámbitos territoriales. Por tanto, esperar una manifestación plenamente consecuente para toda *Hispania*, como si el *conventus* fuera una institución monolítica que desarrolla una serie de competencias que le son intrínsecas es una perspectiva un tanto empobrecedora. El *conventus* fue, ante todo, una herramienta de intermediación, dúctil a los intereses romanos. Una herramienta que, por determinados condicionantes, encontró en el Noroeste un cauce especial de expresión y utilidad que no se muestra como un continuo para el resto del territorio (vid. Sancho Rocher, 1978). No en vano Plinio refiere exclusivamente el cómputo poblacional a partir de los *conventus* del Noroeste, lo que pudo descansar en un modelo diferenciado de control y gestión sobre sus comunidades (vid. cap. 5.2.2). Para clarificar el asunto deben despejarse de la ecuación, por tanto, los testimonios ajenos a este marco territorial<sup>132</sup> y analizar las contradicciones que sí le afectan directamente. Los contraejemplos que han invalidado esta competencia militar han sido las alusiones a dos unidades de orden superior al conventual, las *cohortes I y II Asturum et Callaecorum*, y tres de orden inferior, las *cohortes gigurrorum*, *lemavorum* y la heterogénea *Asturum et Luggonum*. Huelga recalcar que todas ellas constituyen una minoría frente al abundante número de unidades de las que conocemos su nombre, y que, dados sus altos numerales, invitan a

---

<sup>131</sup> También ha participado la decadencia del constructo historiográfico de las diócesis de carácter militar, entendidas como realidades administrativas superpuestas al *conventus*, a partir de los conocidos fragmentos de Estrabón sobre el Noroeste (Str. 3, 4, 20). Una síntesis reciente sobre el recorrido historiográfico de estas diócesis y su problemática puede encontrarse en: Ozcáriz, 2011.

<sup>132</sup> Así sería el caso de las *alae* y *cohortes Hispanorum*, pues simplemente revelan un origen heterogéneo que ni siquiera se circunscribe al provincial (del que parte la iniciativa del reclutamiento), sino que podría abarcar a los *peregrini* de las dos provincias imperiales hispánicas, *Lusitania* y *Tarraconense*; las *cohortes Lusitanorum* que, por cierto, no cuentan sospechosamente con un transunto en la provincia *Tarraconense*; *cohortes de regiones* o etnónimos genéricos como las *Cantabrorum*, *Celtiberorum*, *Vettonum*; o los reclutados en el marco de una comunidad concreta: las *alae Arevacorum*, y las *cohortes* de vascones, várdulos, arévacos, carietes, etc.

pensar tareas frecuentes de reclutamiento según el marco conventual que no se han documentado de manera directa (*vid.* Roldán, 1983: 244-51). Por tanto, parece más apropiado considerar coyuntural lo excepcional que negar la norma por la excepcionalidad.

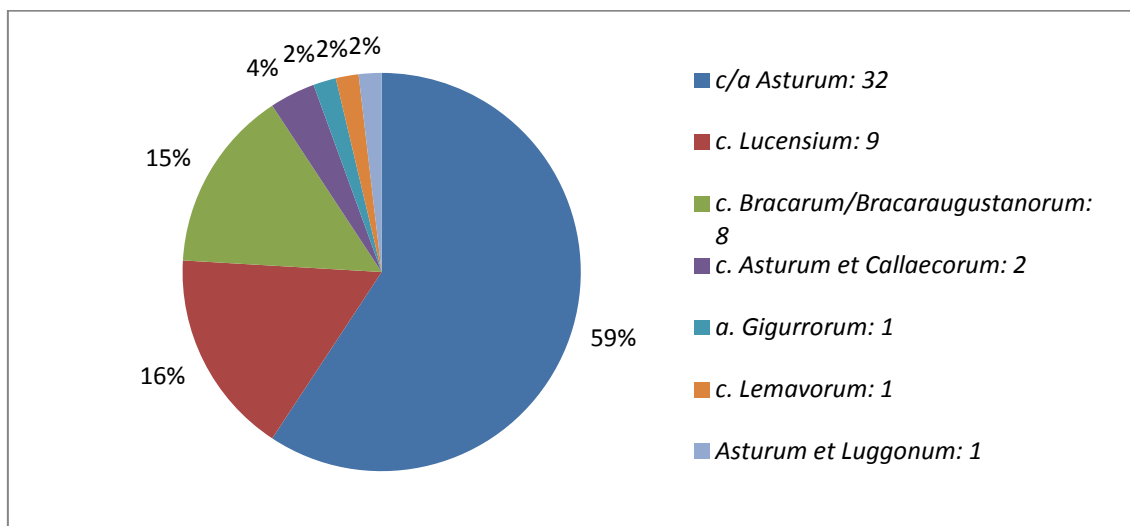


Fig. 3. Nº de menciones totales a *cohortes* y *alae* de auxiliares procedentes del Noroeste en epigrafía privada (ss. I-II d.C.). Datos actualizados a partir de: Roldán (1974: 361-444).

Dentro de los cinco contrajemplos el primero que debe desecharse es el epígrafe fragmentario *ERAs* 62, en donde la indicación *Asturu(m) et / Luggonu(m)* hizo pensar a García y Bellido en una posible cohorte de auxiliares de carácter mixto (1961: 145-46). Sin embargo, como demostró la crítica posterior no parece la opción más acertada pues, en realidad, no alude explícitamente a ninguna unidad militar y la mención de *astures* y *luggoni* puede obedecer a otras causas más verosímiles. El lugar del hallazgo, en la zona oriental de Asturias, en torno a Piloña, nos aleja también de esta hipótesis, pues la experiencia que brinda la documentación es que la inmensa mayoría de unidades auxiliares una vez reclutadas en el Noroeste se movilizaron rápidamente hacia el frente germano, dalmata y panónico, que es donde (y cuando) se immortalizan en la epigrafía. Resultaría ciertamente inverosímil ver actuar a una unidad auxiliar en el mismo territorio en que se produce la recluta en un momento tan temprano (Roldán, 1989: 249-50). Debe tenerse en cuenta que la inscripción fue hallada además en la zona normalmente asignada a los *luggoni*, y que esta *civitas* formaba parte del *conventus Asturum*. De modo que la opción más probable es que se trate de un *terminus*, quizás entre los *luggoni* y *cantrabri* (Mangas, 1983: 169; Diego Santos, 1985: 201; Orejas, 2002: 401-02) o, como propuso González y me inclino a pensar, entre dos comunidades del *conventus Asturum*: los *luggoni* y *Lucus Asturum* de la zona de Lugo de Llanera (González, 1997: 44-46; *vid.* cap. 9.4). Las propias características del soporte, con sus caras sin trabajar, resultan más coherentes con esta función liminal.

Algo semejante ocurre con una inscripción de complicada lectura hallada en el castro de Cabanca (Castrelo del Val, Ourense: AE 1976, 296; *HEp* 2, 521), entre cuyas muchas variables de desarrollo también García y Bellido (1961: 140-42) propuso para la tercera línea la alusión a un *dec(urio) al(ae) I Gig(urrorum)*<sup>133</sup> aceptada por varios autores (González Pardo, 1965; Santos, 1988: 176-77; Rodríguez Colmenero, 1999, n° 13; Carretero, 1999: 150). Es decir, se trataría de nuevo de una unidad que actúa en un ámbito muy cercano al lugar en el que fue reclutada, hecho que aparte del ya desechado testimonio de los *Asturu(m) et/ Luggonu(m)* (vid. *supra*) no se documenta en ningún otro cuerpo de auxiliares hispánicos de este periodo, que siempre parecen ser movilizados fuera de la península. Si de *DEC·ALICIC* puede derivarse *dec(urio) al(ae) I Gig(urrorum)*, lo que está lejos de ser seguro,



Fig. 4. *HEp* 2, 521. Fuente: *HEpOL*.

sería en cualquier caso el único testimonio que conocemos para esta unidad, que debería por tanto considerarse, de ser correcta, excepcional. Otra anomalía que invita a la duda sobre esta posibilidad es que, si se interpreta *TAMC* como mención de *origo* relativa a los *tam(a)c/g(ani)* (lo que de nuevo está por confirmarse), se trataría no sólo de un individuo que actúa en su propio territorio en calidad de auxiliar, sino que fue reclutado entre los *gigurri* en el siglo I<sup>134</sup>, una *civitas* que pertenece a un *conventus* distinto. No creo que pudiera haber ingresado en la renovación interna del cuerpo, pues las distinciones de guerra (*comp(luribus) bel(lis) torq(uibus) [p]hal(eris)*) indican una actividad bélica que difícilmente pudo haberse desarrollado en el Noroeste en estos momentos. Hubo de haberla obtenido en otro lugar de destino pues, efectivamente, no sería originario de esta región. El *ala I Gigurrorum* tiene en cualquier caso un difícil acomodo a la práctica administrativa y militar ordinaria. Si se acepta el desarrollo de todos los elementos implicados, supondría un *unicum* salpicado de excepcionalidad cuyas causas profundas se nos escapan.

Dado que la inscripción es bastante críptica pueden sopesarse otras posibilidades. Por ejemplo, muchas de las contradicciones se simplifican si se considera la lectura de Le Roux (1981) sobre este cuerpo auxiliar, para el cual leyó *al(ae) I Cl(audiana) G(allorum)* pues, en efecto, los trazos para la “l” son muy semejantes y permiten esta opción. La presencia de contingentes auxiliares galos es predominante en el Noroeste desde un momento temprano y se mantuvo en el tiempo, como prueba el *ala*

<sup>133</sup> El desarrollo completado más tarde para las tres últimas líneas sería el siguiente: *I(ulius) Cas(ius) Caen(onis) (filius) Tamac(anus) N(umeri) M(aurorum?) dec(urio) al(ae) I Gig(urrorum) comp(luribus) bel(lis) torq(uibus) [p]hal(eris) [bi]s donatus Iovi O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo)*. Resulta excesivo: *com(mentariensis) b(eneficiarius) tr(ibunus) cor(nicularius) o(ptio) (centurioni) L(egionis) II A(ugustae) exs donis Iovi O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo)* (Rodríguez Colmenero, 1999: n° 13).

<sup>134</sup> Datado a partir de la mención al *castellum Nem[---]*.

*II Gallorum Sebosiana* testimoniada en Braga datada en época julio-claudia (*CIL* II, 5610), o los *termini patrorum* de la *cohors IV Gallorum* de Castrocalbón y Soto de la Vega durante el gobierno de Claudio. También, el conjunto epigráfico de Villalís-Luyego-Priaranza cercano a *Asturica* registra la presencia de una *cohors I Gallica* en labores mineras durante la segunda mitad del siglo II (*ERPL*e 65, 66, 67, 68, 70, 72) o la *cohors II Gallica* más tarde que actúa *in provincia Callaecia* según informa la *Notitia Dignitatum* (*Occ.* 43, 23). En cuanto a la onomástica del individuo, si se contempla una vacilación M/N podría desarrollarse como un *cognomen Tanc(inus)* o *Tam(cimus)* posterior a la indicación del patronímico (*Caenis*). Es decir, *Iulius Casius Caenis Tancinus* en vez de una indicador de *origo tam(a)g(anus)* pues, como antes se aludía, resulta problemático ver actuar a un auxiliar en su propia zona de procedencia<sup>135</sup> y que además fuera reclutado en un *conventus* al que no pertenece su *civitas*. Por último, si se tiene en cuenta el carácter votivo a Júpiter y el hecho de tener como protagonista a un auxiliar, la  $\odot$  debe a mi juicio ser considerada una alusión a la *centuria* militar *Nem[---]*, en vez de un *castellum*.

El único testimonio que con seguridad obedece a un reclutamiento en el marco de una *civitas* del Noroeste es el caso de los *Lemavi*, asentados en el entorno de Lemos (Lugo). En este caso, sí parecen haber sido rápidamente movilizados hacia la provincia de *Mauretania Tingitana*. Allí permanecerá la *cohors I Lemavorum* con un arco cronológico del 88 al 162 d.C. según nos informa una serie de diplomas militares alusivos a un misma unidad auxiliar<sup>136</sup>, además de un *ala Lemavorum* mal conocida<sup>137</sup>. Si tenemos en cuenta las proporciones, constituye un caso excepcional y no parece suficiente para negar la intermediación habitual del *conventus* en el *dilectus*, que sigue resultando totalmente mayoritaria. Podría haberse debido a una coyuntura o necesidad específica, o simplemente al hecho de haberse solicitado el alistamiento en esta *civitas* en vez de en la capital conventual lucense como sería lógico, tomando entonces esa denominación aunque su composición originaria perteneciera a un ámbito territorial más amplio que el propiamente comunitario.

Algo semejante pudo haber ocurrido en relación a los alistamientos de un orden superior al conventual, del que sólo existen documentados dos cuerpos<sup>138</sup>, las cohortes I

<sup>135</sup> Este fenómeno no se produce hasta la reforma severiana del ejército, en donde se flexibiliza esta posibilidad de actuar en el lugar de origen. Así pudo ser el caso del Noroeste en un periodo más tardío, donde la *Notitia Dignitatum* reconoce el estacionamiento de una *cohors Lu<c>ensis* en el propio *Lucus*.

<sup>136</sup> Por orden cronológico: *CIL* XVI, 159; *AE* 2004, 1891; *CIL* XVI, 161; 165; 73; 173; *AE* 1985, 991; *AE* 2003, 2034; *CIL* XVI, 181; 182; *AE* 1985, 992; *vid. AE* 1983, 996; *HEp* 1, 214).

<sup>137</sup> Se testimonia sólo en la inscripción votiva de Arjona (Jaén: *CIL* II, 2103) dedicada por un prefecto de esta unidad, pero actualmente desaparecida y sólo conocida por transmisión textual. Sin embargo, no sabemos dónde desempeñó esta labor como su prefecto, pues según reza la misma lideró otras unidades auxiliares.

<sup>138</sup> La problemática de la *cohors I* obedece a su aparición en diversas provincias, lo que ha sugerido numerosas teorías sobre la identificación y cuantificación de este cuerpo militar. A mi juicio, dado que no existe una superposición cronológica en las referencias de los diplomas y a que no resulta extraña una movilización sistemática entre diversos frentes para una misma unidad, todas ellas pertenecen a una misma *cohors* en: Germania (comienzos del s. I: *CIL* XIII, 7037), Mauritania Tingitana (57 d.C.: *ILM* 58), Panonia (60 d.C.: *CIL* XVI, 4), Asia (104 d.C.: *CIL* III, 6064; 7119; 14195,04-09) y Mauritania Tingitana (121-ca. 162 d.C.: *CIL* XVI, 170; 73; 171; *AE* 1985, 991; 1960, 103; *AE* 1985, 992) con una pequeña estancia en la cercana *Baelo* en torno al 161 d.C. si la corrección de López Pardo (1986) del diploma *AE* 2008, 649 es correcta. Respecto a *AE* 2004, 1891, del 104 d.C., en Mauritania Tingitana,

y II bajo denominación *Asturum et Callaecorum*. La principal fuente de información para ambas unidades son una serie de diplomas militares que permiten reconstruir a grandes rasgos su periodo y lugar de servicio, aunque no aportan información sobre sus contingentes individuales a excepción de algunas inscripciones privadas. Desde mi punto de vista, esta anomalía respecto a la tónica general, puede obedecer a diferentes circunstancias sin necesidad de invalidar el sistema predominante que se realiza por *conventus*. Una primera posibilidad es que la recepción de este nombre no tenga su origen en el reclutamiento, sino en la fusión de dos *cohortes* ya estacionadas, de modo que la necesaria restitución de sus efectivos tras un número de bajas análogo se soslayara mediante la unión de ambos contingentes. Estos bien podrían ser cualquiera de las numerosas *cohortes Asturum* documentadas junto a una de las también abundantes (alcanzan hasta el numeral V en sucesivos reclutamientos) *cohortes Callaecorum Lucenses* del siglo I d.C. con los que comparten diversos frentes. Este fenómeno se evidencia con mayor claridad en los nombres compuestos de otras unidades auxiliares mixtas que remiten a lugares sin aparente relación entre sí, lo que sin duda denota este tipo de práctica. Así se extrae, por ejemplo, de la *cohors Ligurum et Hispanorum civium romanorum* estacionada en los Alpes Marítimos en el siglo I (CIL V, 7900; 7896), que se habría formado a partir de la *cohors Ligurum* allí acantonada previamente junto a los nuevos contingentes hispanos antes de ser enviados al frente germano (CIL XVI, 62, 63 y 80; *vid.* Roldán, 1974: 70-72). Una caso semejante seguramente se esconda también detrás de dos diplomas (CIL XVI, 179, 180) en los que aparece una *cohors II Nerviorum et Callaecorum* estacionada en Panonia Inferior el 148 d.C., y que se habría constituido (junto a la *cohors I* homónima) con los residuos de unidades reclutadas inicialmente en ámbito galaico (lucenses/bracarenses) y entre los *Nervi* procedentes de la provincia belga<sup>139</sup>.

Otra posibilidad es que estas unidades se constituyeran en un momento muy temprano, momento en que podría no estar plenamente operativo el *conventus* (para el que, recordamos, la primera mención no aparece hasta el I d.C.) o bien que éste no desempeñara todavía una labor intermediadora para el reclutamiento. Sabemos por Estrabón que el sistema del *dilectus* de auxiliares debió establecerse poco después de la conquista del Noroeste, cuando ya aparecen luchando junto a Roma<sup>140</sup> (Str. 3, 3, 8) a la vez que se ha sugerido que la existencia de una procuratela específica para *Asturia et Callaecia* bien conocida a finales de siglo pudo tener su origen en el gobierno de Augusto (Alföldy, 2000b: 45; *vid.* Str. 3, 4, 20; *cfr.* Andreu, 2004c: 200; Ozcáriz, 2013: 188-95), cuyas competencias militares están fuera de toda duda. La hipótesis me parece

---

quizás se trate de una restitución incorrecta, pues entra en contradicción con los testimonios de Asia y la unidad no aparece mencionada. Respecto a la *cohors II Asturum et Callaecorum*, su periodo de vida resulta mucho más claro, estacionada sin solución de continuidad en Panonia según los diplomas datados en un arco cronológico del 80-167 d.C. (por orden cronológico: CIL XVI, 26; 164; 91; AE 1983, 785; 784; CIL XVI, 112; 113; CIL III, 888).

<sup>139</sup> Desde esta perspectiva puede darse una solución al hecho habitualmente aducido, de que “the formation of this unit is a mystery” (Dubois, 2015: 191) y que ha tendido a considerarse producto de un error (Roldán, 1974: 95; Santos, 2007: 42; Roxan, 1999: 261, n. 86).

<sup>140</sup> El primer censo debió acometerse tras la nueva división provincial en el viaje de Augusto (*vid.* cap. 5.1), momento a partir del cual ya pueden plantearse exigencias de este tipo. Así, por ejemplo, también en la provincia Narbonense el censo provincial fue seguido de una leva (Sayas, 1989a: 146, n. 33).

especialmente probable para la *cohors I Asturum et Callaecorum* que aparece por primera vez documentada en una inscripción datable a comienzos del siglo I d.C.<sup>141</sup>, cuando ya está destinada en el frente germano (*CIL* XIII, 7037)<sup>142</sup>. Es decir, correspondería simplemente a que el reclutamiento fuera excepcionalmente ejecutado por un mando con competencias en toda la región antes de que fuera asumido tras la partición por los tres *conventus* noroccidentales. Las bases documentales no permiten unas conclusiones definitivas, pero si por un lado parece claro que el cuadrante Noroeste se singulariza muy tempranamente como última región conquistada (que cuenta con el precedente de la controvertida *Transduriana provincia*, el hecho de que fuera transferido en bloque desde la *Lusitania* a la *Tarraconense*, o la propia existencia de un *conventus Arae Augustae* que pudo aglutinar a toda la región: *vid.* Fernández y Morillo, 2002), este encaje pudo tener su justa consecuencia en las denominaciones anómalas de los primeros reclutamientos, las *cohortes Asturum et Callaecorum*, que anteceden a las tributarias del nuevo marco conventual. La fosilización de sus nombres, toda vez son movilizados tras el reclutamiento, explicaría su posterior convivencia en las menciones epigráficas de carácter privado y en los diplomas militares.

La norma sobre el sistema de abastecimiento de tropas auxiliares desde el siglo I parece dirigirse hacia un reclutamiento forzoso siguiendo un *dilectus* de orden conventual de carácter sistemático, como reflejan las unidades documentadas que se definen *Asturum*, *Lucensium*, *Bracarum/Bracaraugustanorum* en contraste con otras regiones peninsulares. Todavía quedan numerosas incógnitas sobre el momento en que la tripartición conventual pudo abrazar esta práctica, pero seguramente guarde relación con el periodo formativo de sus capitales en ciudades en época tardo-augustea o tiberiana. Es además en este contexto, cuando empiezan las primeras explotaciones auríferas en la región, para lo cual se hacía imprescindible un control de la mano de obra disponible a través del censo, hilo conductor del sometimiento, e imprescindible tanto para las contribuciones en *operae* como para el suministro de tropas auxiliares.

Los tres testimonios de carácter privado que denotan una *origo* indiscutible para auxiliares del Noroeste resultan extraordinariamente elocuentes sobre la intermediación que realiza el *conventus*. Esta fuente de información es fundamental para complementar el contenido de los diplomas militares, que mencionan a unidades completas y no tanto a individuos particulares. *Pintaius Pedilici f.* hubo de partir desde el *castellum Intercatia* al otro lado de la cordillera Cantábrica (se dice *astur transmontanus*) para

<sup>141</sup> Los criterios de datación resultan tanto de la falta del numeral en el cuerpo como en la forma en que es mencionado: *Aestureru(m) et Callaecoru(m)* (Roldán, 1974: 65).

<sup>142</sup> Por desgracia, los datos con los que contamos para la *cohors II Asturum et Callaecorum* corresponden exclusivamente a diplomas militares. Ello supone un doble sesgo cronológico, pues los diplomas se conceden muy posteriormente al alistamiento tras una serie de méritos y años de servicio y, además, se trata de concesiones (ciudadanía romana, *ius conubium*, etc.) que son menos comunes en las primeras décadas del Principado ante la máxima augustea de restringir el acceso a la ciudadanía romana. Por tanto, el hecho de que el primer diploma que mencione a esta unidad se date en el año 80 (*CIL* XVI, 26) no constituye un elemento de juicio válido a la hora de valorar el momento en que fue reclutada la unidad, pues la mayoría de las unidades tienen un largo periodo de vida sin que afecte a su denominación inicial. La misma *cohors I Asturum et Callaecorum*, por ejemplo, no aparece en los diplomas hasta el 60 d.C. a pesar de estar movilizada, al menos, desde comienzos de siglo. Para despejar el problema será necesario esperar, por tanto, a que nuevos hallazgos de epigrafía privada permitan matizar lo que ya sabemos sobre el periodo de servicio de esta unidad.

ingresar, seguramente en *Asturica*, en la *cohors V Asturum*<sup>143</sup>. Del mismo modo que *Claudius Pintamus* fue llamado entre los zoelas (*natione zoela*) a engrosar las filas del *ala I Asturum*<sup>144</sup>. *Flavos Bouti f.* ingresó como *miles* en las filas de una *cohors Lucensium*<sup>145</sup> mientras residía en la capital conventual (*domo Luco Augusti*). Tenemos por tanto una coherencia entre una denominación de las unidades con inspiración administrativa, respecto a la asignación de los sujetos llamados a filas, cuyas *civitates* de procedencia confluyen a su vez con su cuerpo auxiliar y con el *conventus* del que éstas dependen. Que se haya alegado en la escasez de la muestra un impedimento para considerar esta competencia no me parece aceptable (*vid.* Dopico, 1986: 277; Sancho Rocher, 1978: 190-191). Y es que en cierta medida los tres testimonios no son pocos cuando en una misma inscripción debe aparecer mención de *origo* junto al indicativo de su pertinencia a una cohorte auxiliar, siendo ambos elementos más bien excepcionales dentro del hábito epigráfico. El carácter forzoso, que seguramente compartió con respecto a las *operae* viarias y mineras, es producto de las circunstancias de la conquista y la caracterización del sistema impuesto, netamente diferenciado respecto al modo de integración que experimentaron otras regiones peninsulares. Así se desprende de la acusada desproporcionalidad del reclutamiento con origen en los tres *conventus* noroccidentales respecto al resto de *Hispania*. Lejos, por otra parte, del discurso evolucionista que en ocasiones ha visto en la barbarie intrínseca de estas comunidades una oportunidad para el aprovechamiento de sus recursos bélicos.

Por último, debería sumarse una reflexión sobre si es el *conventus* quien gestiona la mano de obra minera del Noroeste como parte de las aportaciones fiscales comunitarias para el trabajo en los *metalla publica* (*vid.* Orejas, Sastre y Zubiaurre, 2013; Orejas, 2014). Sería esperable que sí, pues si nuestras conclusiones son correctas en materia de las *operae* viarias y el *dilectus*, lo más lógico es que un instrumento de control como un censo de orden conventual se tornara también en una herramienta extremadamente útil para el control de la mano de obra minera local, sometida a la explotación de sus abundantes recursos auríferos. Ante esta situación nos encontramos con un escollo difícil de resolver desde el punto de vista metodológico. Por un lado, sabemos gracias a los análisis de poblamiento y población antiguos de escala regional que las zonas donde se desarrollaron actividades mineras importantes sufrieron un aumento demográfico que no puede explicarse por el simple crecimiento vegetativo, sino por aportes poblacionales externos que se concentraron en estos paisajes mineros antiguos (*eg.* Orejas, 1996). Muchos de estos individuos tenían además un origen regional (si bien indeterminado), como se infiere de la continuidad del recinto fortificado hasta comienzos del s. II d.C. como nuevo lugar de hábitat, ahora asociado a las labores mineras. Sin embargo, no contamos en este caso con testimonios explícitos en los que pueda relacionarse con

<sup>143</sup> CIL XIII, 8098 (Bonn, Alemania): *Pintaius Pedilici / f(i)lius Astur Trans/montanus castel(l)o / Intercatia signifer / c(o)ho(rtis) V Asturum / anno(rum) XXX stip(endiorum) VII / h(eres) ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit)*.

<sup>144</sup> AE 1992, 1458 (Dunaujvaros, Hungría): *[Ti(berius)] Claudius / [---]onis f(i)lius Pint[am]us natione / [Zoel]a eques alae / [Astur(um) I]I ann(orum) LIII sip(endiorum) / [---]*, si la restitución es correcta.

<sup>145</sup> CIL III, 9834 (Tepljuh, Croacia): *Flavos Bo/uti f(i)lius mil(es) / coh(ortis) / I Luce(nsium) / ann(orum) XXXI / stip(endiorum) X dom(o) / Luco Aug(usti) h(eres) f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(itus) e(st)*.



seguridad si los individuos immortalizados en la epigrafía cercana a las zonas mineras y que mencionan su *origo* se corresponden efectivamente con aquellos que las trabajaron pues, evidentemente, no explicitan esa condición ni ese desempeño; cosa que no ocurre con los miliarios por su relación inherente a la construcción y reforma de la red viaria o a los *auxilia* que se adscriben a una *cohors*. A priori, no parece lo más lógico pensar que los peregrinos imbricados en las labores mineras consten del perfil sociológico idóneo de quien se immortaliza en el medio epigráfico. En tanto que clases bajas sometidas a duras *operae* serían, por lo común, invisibilizados. En contraposición, son las élites de la administración y las comunidades quienes abrazan esta nueva práctica, a la vez que imprimen un sesgo aristocrático inmanente a la práctica totalidad de la epigrafía conservada en las zonas rurales mineras (Sastre, 2001a: 157-61; 2007). Esta carta de naturaleza condiciona la lectura que podría hacerse sobre los individuos con indicación de *origo* en contextos mineros, que nos ofrecen una procedencia diversa pero bien explicable por el atractivo que supone la presencia del aparato estatal y el ejército, elementos dinamizadores de la economía a la vez que centros del poder sociopolítico. Así se desprende, por ejemplo, de la zona minera por excelencia, El Bierzo, en donde la epigrafía votiva resulta, sintomáticamente, predominante. Por otro lado, es precisamente en el polo de atracción que representa *Bergidum Flavium* donde aparecen varios individuos de procedencia diversa: algunos de ellos externos al *conventus Asturum*, como un *interamicus* (ERPL 158) o un *bibalus* (ERPL 225), junto a una zoela de su interior (HEp 2, 436). La Valduerna (León) es otra de las zonas que experimentó un incremento demográfico de la mano de las explotaciones y una redistribución del poblamiento (Orejas, 1996: 176-79). Aquí predomina la epigrafía de culto imperial más tardío (siglo II d.C.) que se vincula a la capacidad irradiadora de *Asturica* en la región. Entre la escasa epigrafía funeraria anterior se testimonia un cileno, un supertamarco, un cluniense y un lusitano (Sastre *et al.* 2012: 46), pero no hay elementos que permitan interpretarlos como sometidos a *operae*, sino insertos en el encaje de las relaciones de poder de amplia escala. Algo semejante ocurre en el área minera de Trêz Minas (Vila Real, Portugal), de las casi veinte inscripciones localizadas (ss. I-II) la mitad son votivas, y la mayor parte la componen varias lápidas de militares. Sólo algunas denotan desplazamientos, de 5 clunienses (AE 1980, 583; HEp 19, 563; HEp 2, 893; CIL II, 1080; Rodríguez Colmenero, 1997, nº 329) además de un límico (HEp 2, 884). Constituye un conjunto que debe interpretarse por su orientación hacia la gestión de los *metalla publica*, en donde “el registro epigráfico muestra que los desplazamientos se dirigieron hacia los focos de poder y organización pilotados por el poder romano y las aristocracias locales” (Orejas y Beltrán, 2010: 411-12). En zonas con ausencia de centros administrativos como las explotaciones auríferas de Pino del Oro en el occidente de Zamora, en la *civitas Zoelarum*, no aparecen testimonios destacables de estos desplazamientos de mayor distancia (Orejas y Beltrán, 2010: 12; Sastre *et al.* 2012: 48-55). En este caso, la epigrafía es abundante y de carácter funerario sin indicación de *civitas*, lo que puede reflejar una visibilización de un espectro social más amplio y, en todo caso, de origen más localizado, pero de nuevo sin poder afirmar con solvencia su

vínculo directo con los trabajadores de las minas<sup>146</sup>. Los escasos testimonios de *origo* impiden, en suma, poder sacar conclusiones sobre el origen de los sometidos a *operae*<sup>147</sup>, si se movían en un marco conventual o no, pues se ven irremediabilmente mediatizados por una epigrafía de clase cuyos desplazamientos obedecieron a motivos distintos. Tampoco son concluyentes las escasas y complejas inscripciones rupestres asociadas a la infraestructura minera, como las que encontramos asociadas a los canales hidráulicos de Las Médulas en el Valle del Airoso (La Cabrera, León). En ellas apenas pueden reconocerse algunos nombres únicos, seguramente asociados con determinados tramos de canales mineros, como *Endius* y *Carancinus* (ERPLe 318) u otros de difícil reconocimiento por la abrasión de la superficie (vid. ERPLe 320<sup>148</sup>). En una de ellas, de la que sólo se conserva una parte del campo epigráfico por el efecto de la erosión, se ha propuesto: *Flaci / interciso / Seur(r)oru/[...]ITC / Susicus* (IRPLe 315=ERPLe 319), lo que podría representar la construcción del canal en la roca (*interciso*) realizada por los *seurri*, que pertenecen al *conventus Lucensis*, mientras *Susicus* y *Flacus* estarían encargados de su mantenimiento posterior (Sastre y Sánchez-Palencia, 2002: 230). Se trata, en cualquier caso, de una inscripción compleja, de lectura difícil y cuya gramática parece más bien dislocada. Desde mi punto de vista *Interciso* en participio<sup>149</sup> es más natural que tenga un sentido de “dividir” más que propiamente de “cortar por la mitad” la roca, en sintonía con las otras inscripciones que parecen remitir a la determinación de los segmentos del canal para la supervisión o el mantenimiento, algunas con numerales indicativos de distancias como el de Castrillo de la Cabrera documentado por Domergue (XXXV: 1972-74, 510, n. 34). Desde esta perspectiva tampoco parece tener mucho sentido la convivencia de individuos con comunidades, que aparecen además en casos distintos. Aunque nada se pueda afirmar con rotundidad al respecto, a mi juicio todavía no debe desecharse la posibilidad de que donde se lee *Seur(r)oru(m)* deba leerse en realidad *Sev(e)ro ru[...]*, como se planteó en la primera interpretación del epígrafe. Es decir, nombres únicos de carácter latinizante como aparecen en las otras inscripciones (vid. *supra*) y que bien podrían tratarse de miembros del ejército involucrados en las labores mineras, de carácter técnico y de supervisión<sup>150</sup> a los que se le asignan (*Severo*) o dependen (*Flaci*, *Susicus*) determinados tramos del canal.

<sup>146</sup> Recientemente se ha reinicidido en que todo el *corpus* adscrito a la *civitas Zoelarum* es una manifestación exclusiva de las élites sociales de la comunidad que expresan cambiantes relaciones de poder en el territorio (Beltrán, 2015, vol. I: 48-70; vid. Sastre, 2001: 236-243).

<sup>147</sup> Evidentemente tampoco pueden aplicarse criterios onomásticos de dispersión para extraer conclusiones administrativas de este tipo. Las tendencias según las cuales los individuos reciben un nombre determinado remiten a zonas vagas que resultan independientes de las divisiones administrativas de cualquier tipo, por lo que pueden ser útiles para otros fines de conocimiento, pero no para éste.

<sup>148</sup> Se ha leído: *on / sutr / am e / copc / iuxi v.*

<sup>149</sup> *Interciso* también se ha interpretado en concordancia con *Flaci* como parte de una misma estructura onomástica, es decir, “A Flaco Interciso de los Seurros...” (vid. ERPLe 319), con una apariencia funeraria o, incluso, una dedicatoria (Rodríguez Colmenero, 2010b: 229). Esta interpretación es a mi juicio errónea por el propio caso genitivo del dedicado (*Flaci*) y porque *interciso* carece de paralelos nominales. Aun cuando *interciso* podría interpretarse con un sentido de defunción en ablativo absoluto (“muerto”, “caído”), la íntima relación entre el epígrafe y el canal hidráulico creo que desecha toda posibilidad interpretativa en este sentido, más si tenemos en cuenta que se trata de una inscripción rupestre.

<sup>150</sup> Una interpretación quizás relacionable con la gestión del trabajo puede otorgarse a la pizarra de Pelóu, con nombres únicos de carácter latino vinculados a las explotaciones mineras del entorno (cap. 5.5; vid. Sastre, 2012: 259 y n. 20).

Las procuratelas que se crean a finales del siglo I d.C siguen, de hecho, la estructura conventual que antes realizaba el *procurator* de la provincia. Al menos, así lo refleja su denominación específica, *per Asturiam et Callaeciam*, y cuyas competencias y funciones en aspectos fiscales y mineros están fuera de toda duda:

***Procuratores provinciae Cit.***  
**en el Noroeste**

Año	Lugar	Fuente				
73/74?	-	<i>Plin.</i> XIX, 35;	<b><i>Procuratores Asturiae et Callaeciae earum</i></b>			
79 AD	Chaves	<i>CIL</i> II 2477	Año	Lugar	Fuente	<b><i>Inseguros: procuratores per Asturiam et Callaeciam? /provinciae Cit.?</i></b>  <b><i>LEGATI IURIDICI ASTURIAE ET CALLAECIAE (136-199)</i></b>
			92-102	Trieste	<i>CIL</i> V 534	
			114-16	Viena	<i>CIL</i> XII 1855	
			120-60	Roma	<i>CIL</i> VI 1620	
			100-150	<i>Asturica</i>	<i>CIL</i> II 2643	
			159	Roma	<i>CIL</i> VI 1599	
			161-69	<i>Legio</i>	<i>CIL</i> II 5678	
			185-92	<i>Asturica</i>	<i>ERPL</i> e 39	
			192-98	<i>Asturica</i>	<i>ERPL</i> e 35	
			192-98	<i>Asturica</i>	<i>ERPL</i> e 36	

Fig. 5. Tabla de *procuratores* relacionados con el Noroeste hispano (a partir de Ozcáriz, 2013: 181-200).

En cualquier caso, aunque la petición de mano de obra a las *civitates* se realizara por *conventus*, lo más común, por economía, es que esta demanda tendiera a resolverse con la población local de la zona minera, a menos que superara sus propias posibilidades demográficas y requiriesen aportaciones complementarias de otras *civitates*. Sin embargo, los datos no permiten ir más allá ni confirmar la hipótesis, en todo caso pendiente de que nuevos hallazgos epigráficos revelen testimonios más explícitos sobre

la cuestión minera. A mi juicio, en el estado actual de conocimiento, si se acepta que el *conventus* actuó como un marco censal clave para el *dilectus* y la *munitio viarum*, es muy posible que se utilizara para solicitar y disponer de la fuerza de trabajo de las *civitates*, también en las explotaciones auríferas del Noroeste.

### 5.2.2 Censo y orden conventual.

Tras la división provincial y la posible creación del *conventus*, como dijimos, es muy posible que Augusto realizara un censo, si no para cada uno, al menos sí para el nuevo territorio conquistado junto al resto de la *Citerior*<sup>151</sup>. En este sentido resulta imprescindible el análisis de un conjunto informativo, heterogéneo, pero que suma un conjunto de indicios a mi juicio suficientes para reivindicar la capacidad de intermediación del *conventus* entre la *civitas* y la sede provincial, a lo que debe añadirse lo ya mencionado respecto a las obligaciones personales, en un momento más avanzado. En este sentido debe analizarse en primer lugar la información transmitida por Plinio, en cuya descripción de la situación administrativa de la *Citerior* parece también incorporar datos extraídos del censo para cada *conventus* (NH., 3, 4, 28):

Provincia	Conventus	Civitates et populi	Capita libera
Citerior	Cluniensis (cantabri)	IX Populi	-
	Asturum	XXII Populi	240.000
	Lucensis	XVI Populi	166.000
	Bracaraugustanus	XXIV Civitates	285.000
Lusitania	Emeritensis	Total: XLV Populi.	-
	Pacensis	· 5 colonias.	
	Scallabitanus	· 1 municipio romano. · 3 oppida de derecho latino antiguo. · 36 tributarios ( nombra a 18).	

Fig. 6. Tabla sintética del cómputo poblacional pliniano.

Aunque la valía de la información pliniana ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones, considerado como simple transmisor de información caduca y desactualizada procedente del *breviarium totius imperii* de Augusto o del *orbis pictus* de Agripa, esta opinión debe desecharse, al menos en lo que ocupa a los datos censuales relativos a la provincia *Citerior*. Por un lado, porque Plinio manifiesta un sentido crítico respecto a las supuestas fuentes de información augustea en algunos momentos, a la vez que explicita la contemporaneidad de la situación que describe (*vid.* Canto, 1996: 213-19). Si nos ceñimos al apartado dedicado a los datos de censo, éstos debieron ser el producto

<sup>151</sup> Así, por ejemplo, en la Narbonense se produce menciona un censo en directa asociación con la constitución de un *conventus*, aunque su naturaleza y pervivencia resulta más difícil de determinar en este caso, pues bien pudo tratarse de una “reunión”, con el sentido republicano originario: *Cum ille conventum Narbone egit, census a tribus Galliis, quas Caesar pater vicerat, actus* (Liv. Per., 134, 2; *vid.* Dopico, 1986: 274).

de la información directa de la que dispuso cuando fue *procurator* de la provincia *Citerior* en torno al año 73/74 d.C. (*NH.*, 19, 35; 31, 23; *vid.* Ozcáriz, 2013: 186-89), pues su cargo lo ostenta en el momento inmediatamente posterior al censo antes mencionado, acometido por el *legatus Augusti pro praetore in censibus accipiendis Vibius Crispus*, entre los años 71-73 d.C. para toda la provincia *Citerior* (*AE* 1939, 60). Es decir, antes de su regreso a Roma el año 76 d.C., Plinio dispuso del tipo de información que manejaba el censo a escala provincial, en vez de la secuencia, seguramente mucho más resumida e inventariada, que era transmitida a las dependencias de los poderes centrales. De hecho, si nos paramos a analizar, por ejemplo, el tipo de información que Augusto legó en su *Brevarium totius imperii* sólo parece contener los datos realmente útiles para el ejercicio de poder a escala imperial, como era una relación general de *quantum civium sociorumque in armis* (*Tac. Ann.*, 1, 11, 4; *vid.* *Suet. Aug.*, 101, 6; *D. Cass.* 56, 33, 1-3) o el montante global de los impuestos que debía recaudarse por provincias, sin detenerse en disquisiciones detalladas que, en cualquier caso, debían ser solventadas a nivel provincial, como serían los mismos cálculos de las poblaciones según circunscripciones menores a la provincia.

Si partimos de este presupuesto, la forma en que Plinio expone sus datos relativos al censo resulta lógica, además de constar de coherencia respecto a otros documentos que veremos en lo sucesivo. La información censal la aporta *nunc per singulos conventus* (*NH.*, 3, 23) y en ella sigue una estructura y criterios uniformes dentro de la provincia *Citerior*. Por un lado el número total de *populi*, que en ocasiones han sido considerados un sesgo arcaizante que denota una situación administrativa anterior a la concesión de *ius Latii* en el caso del Noroeste, en términos de pervivencia. Sin embargo, al ser comunidades diversas opta por una nomenclatura genérica y no técnica como hace en otras ocasiones, pues con *populus* sólo buscar remitir los marcos de sujeción y control comunitario, que poco o nada tiene que ver con vestigios de formaciones sociales caducas de orden gentilicio. Además de las conclusiones a las que llega Sastre sobre este aspecto (2001a: 116-117), basta con apuntar el sentido sinónimo que adquiere *populus* para referirse a *civitas*, como recurso que permite englobar expedientes jurídicos diversos (*coloniae*, *municipia*, *oppida stipendiaria*, etc). Así entre los XLII *populi* del *conventus Tarraconensis* (*NH.*, 3, 3, 23) se mencionan tanto *populi civium romanorum*, *populi civium latinorum* o *stipendiarium*, al igual que ocurre en su relación del *conventus Caesaraugustanus*, añadiendo aquí la categoría de *populus foederatus y latinorum veterum* (*NH.*, 3, 3, 24). Lo mismo ocurre en el *conventus Carthaginensis*, entre cuyos *populi* LXV, engloba incluso a colonias con *ius Italicum* o utiliza otra categoría no técnica, *oppidum* (García, 2000b; *vid.* Woolf, 1993), para las comunidades con derecho del antiguo Lacio y *stipendiarii* (*NH.*, 3, 3, 25). Esta asimilación *populus-civitas* aparece ya con claridad en su descripción del *conventus Cluniense* (*NH.*, 3, 3, 26-27), entre cuyos catorce *populi* distingue una serie de comunidades a las que califica como *civitates*, a excepción de los Arvacos, de los que dice están compuestos por seis

*oppida*<sup>152</sup>. Lo mismo puede decirse de los *populi* lusitanos, después mencionados también como *civitates* de forma explícita, ya sean *coloniae*, *municipia*, etc.

El caso de los *conventus* del Noroeste resulta de gran interés, pues no sólo muestra las agrupaciones de *civitates* por *conventus* (también mediante la fórmula *populi*<sup>153</sup>) sino que aporta unas cifras de las poblaciones y lo hace para cada unidad conventual:

*Iunguntur iis Asturum XXII populi divisi in Augustanos et Transmontanos, Asturica urbe magnifica; in his sunt Gigurri, Pescii, Lancienses, Zoelae. Numerus omnis multitudinis ad CCXL liberorum capitum. Lucensis conventus populorum est XV, praeter Celticos et Lemaxos ignobilium ac barbarae appellationis sed liberorum capitum ferme CLXVI. Simili modo Bracarum XXIV civitates CCLXXXV capitum, ex quibus praeter ipsos Bracaros Biballi Coelerni, Callaeci, Equaesii, Limici, Querquerni citra fastidium nominentur (Plin. NH., 3, 3, 28).*

Sobre estas cifras de población global de los *conventus* *Lucense*, *Asturum* y *Bracaraugustanus* (que recordemos, no se repiten para ninguna otra de las provincias hispanas en la narración pliniana) debemos hacer una serie de observaciones. En primer lugar, resulta inédita hasta donde he podido indagar la alusión a personas como *capita libera* dentro del conjunto de la obra de Plinio. El término *caput* lo utiliza en infinidad de ocasiones, pero obviamente lo hace en su mayoría para aludir al elemento anatómico de cabeza<sup>154</sup> o mente<sup>155</sup>, nunca por metonimia como aparece en este fragmento para referirse a una persona o una población. Otras veces *caput* simplemente le sirve para hablar metafóricamente del comienzo o los extremos de algo<sup>156</sup> y aparece derivado al

<sup>152</sup> En el *conventus Cluniensis* la agrupación de estos *populi* en lo que aparentemente constituyen unas unidades mayores, como serían los pelendones, carietes, venenses, vaceos o cántabros, seguramente se debiera a una interpolación de información, que en este punto decide incluir datos de fuentes no censuales. Así se refiere de forma explícita cuando refleja las extensiones de territorio o de ríos de la península asignadas a diversos pueblos en las que dice seguir la cartografía de Agripa (*Agrippa prodidit*: 4, 22, 118) o de Varro (*ut auctor est Varro*: 4, 22, 115) entre otras fuentes. La confusa información del caso cluniense y esta relación de pueblos o adscripciones de carácter cultural tendría una fuente común que utiliza también en su descripción geográfica de la *regio Cantabrorum* (NH., 4, 20, 111). Otra dimensión que adquieren están concepciones “étnico-culturales” de más amplia escala, en donde parece superarse el nivel local de la *civitas*, suelen responder a fenómenos gestados en el seno de las relaciones políticas y de poder, esto es, desde una base materialista que no se ha de ajustar necesariamente a la estructura administrativa. Así se ha leído, por poner un ejemplo en relación a este tipo de alusiones a *Cantabri*, el intrigante *princeps Cantabrorum* representado en una estela vadiniense (Sastre, 2001b: 13-14; cfr. Mangas y Martino, 1997).

<sup>153</sup> Este sentido sinonímico *populus=civitas* en el Noroeste puede comprobarse, por ejemplo, con el *populus* de los *Limici* que Plinio destaca entre los bracarenenses, y que aparece como *civitas* al hablar de los *Laribus civitatis Limicorum* (IRG IV, 1) o ya más tardíamente en Hyd. Chron. pref. 1: *natus in Lemica civitate*. Lo mismo puede decirse de distintos *populi* plinianos del *conventus Asturum* como los *Zoelae* (*civi Zoelae* en CIL II, 5684).

<sup>154</sup> E.g.: Plin. NH., II, 104, 223; II, 33, 94; II, 34, 101; II, 41, 108; II, 111, 241; V, 8, 46; VI, 26, 108; VI, 28, 109; VI, 35, 135; VII, 2, 12; VII, 2, 22; VII, 2, 23; VII, 2, 27; VII, 6, 41; VII, 8, 46; VII, 53, 185; VIII, 11, 33; VIII, 30, 77; VIII, 35, 85; VIII, 51, 124; VIII, 54, 130; VIII, 74, 199; VIII, 77, 207; VIII, 78, 214; IX, 44, 83; IX, 46, 85; IX, 48, 93; X, 2, 3; X, 74, 148; X, 74, 149; X, 82, 169; X, 95, 206; XI, 42, 121; XI, 44, 122; XI, 45, 129; XI, 49, 135; VIII, 12, 35; VIII, 21, 54; VIII, 23, 62; VIII, 26, 69; VIII, 30, 72; VIII, 30, 76.

<sup>155</sup> Plin. NH., II, 1, 2.

<sup>156</sup> E.g.: Plin. NH., II, 33, 93; V, 5, 38; III, 5, 66; IV, 13, 93; IV, 22, 119; V, 35, 130; VI, 30, 126; XI, 72, 189-190; XI, 112, 270.

hablar de la pena capital<sup>157</sup> (*iudicium/sententia capitis*). Desde un punto de vista administrativo sólo es empleado para aludir a la capital o núcleo preponderante de una comunidad<sup>158</sup> (*caput civitatis/caput gentis*), de un reino<sup>159</sup> (*caput regni*) o del mundo entero (*Roma terrarum caput*: *NH.*, 3, 4, 38). Sorprende, por tanto, que a pesar de volver a utilizar esta expresión para referirse a conjuntos poblaciones, lo haga sin embargo por tres veces para este mismo fragmento. De forma explícita *capita libera* aparece tanto en el cómputo de los *conventus* Lucense como *Asturum*, si bien debe aplicarse también al Bracarense, pues a pesar de aparecer omitido *libera* por alguna razón, no habría cambios sensibles en torno al tipo de población censada, de la que se dice *simili modo*. Esta terminología la habría tomado, por tanto, de los propios documentos oficiales del *tabularium* del *fiscus* provincial en Tarraco y que, como ocurre con otras categorías generales que ya hemos mencionado (*oppida* o *populi*), permite englobar expedientes jurídicos diversos, en este caso de carácter personal. Este término *capita* es de hecho el utilizado en la nomenclatura común de los censos de distinto tipo<sup>160</sup> (*civium capita*), así por ejemplo Augusto en sus *Res Gestae* menciona los datos del censo de ciudadanos romano con la fórmula *quo lustrum civium Romanorum censa sunt capita* + numeral (*RG* 8, 2; 3 y 4) y que es extensivo a otro tipo de censos, como el ya comentado de los helvecios cuyo montante se traduce del griego *capita Helvetiorum* + numeral.

En el caso de los tres *conventus* del Noroeste, la mención de sus poblaciones como *capita libera* permite inferir que son datos que incluyen a toda la población, definida simplemente por un *status libertatis* independientemente de su grado<sup>161</sup>. Es decir, dentro del conglomerado de poblaciones que Plinio refiere como *numerus omnis multitudinis la libertas* sólo permite restringir del cómputo a los esclavos, de modo que los *capita libera* censados serían en su mayoría *peregrini* y en principio tampoco estarían exentos los *latini*. Más dudas alberga la cuestión del registro de *cives Romani* en estos *conventus* pues, si bien tendrían un peso irrisorio respecto al conjunto, en principio también entran dentro de esta categoría de individuos simplemente definida por su *libertas*. Sin embargo, parece difícilmente sostenible que una minoría de *cives Romani* situados en la cúspide de la pirámide social, estuvieran sujetos a este tipo de obligaciones personales, que son las que se asocian al censo y, en mi opinión, lo más lógico parece pensar que

<sup>157</sup> Plin. *NH.*, VI, 24, 90; VII, 56, 200.

<sup>158</sup> E.g.: Plin. *NH.*, II, 75, 184; III, 3, 25; III, 20, 135; V, 5, 36; V, 20, 85; V, 20, 86; V, 21, 90; V, 30, 112; V, 31, 117; V, 42, 146; VI, 17, 43; VI, 17, 44; VI, 23, 77-78; VI, 30, 121; VI, 30, 122; VI, 32, 155; VI, 35, 191; III, 4, 37; III, 25, 148.

<sup>159</sup> Plin. *NH.*, VI, 29, 115; VI, 30, 122.

<sup>160</sup> Así ya aparece la fórmula *capite censi* en el periodo republicano dominado por la organización centuriada, siendo el grupo más modesto de los incluidos en el censo, sólo por encima de los *proletarii* (Gell. *Not. Att.*, 16, 10, 10-16).

<sup>161</sup> Así lo han reconocido ya previamente otros autores (López Barja, 1999: 348-49 y 354; Sastre, 2001: 116) de forma muy acertada. Si bien no creo que para llegar a esta conclusión tengan un valor probatorio las inscripciones en que aparecen también mujeres y niños con mención  $\bigcirc$  (=castellum) y que López Barja entiende como unidades de censo (vid. López Barja, 1999: 354, n. 11): *D(is) M(anibus) / Lucila / Vitalis /  $\bigcirc$  Olca / an(norum)* XI (*CIRG* II, 84 = *HEp* 6, 764) ó el también niño *Virius / Caessi filius) Le/mav(u)s  $\bigcirc$  eo/dem an(norum) / VII (ERPL 155 = AE 1982, 575=1987, 610c).*

contaran con un censo separado<sup>162</sup>. Por otro lado las cifras de Plinio incluirían también a las mujeres, en principio igualmente sujetas a los diferentes tipos de obligaciones personales, como sería el trabajo en minas (*vid.* Diod. Sic. 3, 13, 1-2; Mangas y Orejas, 1999: 211-13) u otras, como la propia *munitio viarum*, pues no hay razones de base que permitan excluir al sector femenino (más allá de las aportaciones de *auxilia*) para contribuir, de este modo, a su silenciamiento. Los niños, por su parte, aun exentos de muchas de estas cargas<sup>163</sup>, sí debían aparecer en el censo de cara a futuras obligaciones a partir del registro de la edad, cosa que ya hemos visto para otras regiones del Imperio.

También algunas de las aproximaciones a la demografía antigua del Noroeste permiten una comprobación material de los datos que Plinio aporta y que corroboran este carácter extensivo de los *capita libera*. Pues a pesar de ser un análisis sujeto a los problemas inherentes de este tipo de estimaciones, resulta sorprendente el grado de acercamiento a la información pliniana. Así Currás (2014, vol. I: 443-444) a partir de la asignación de 150-200 personas por castro (con una superficie media de 1 ha) y aplicando un cálculo para el conjunto de los 1.135 castros conocidos del *conventus* Bracarense, obtiene una horquilla de 170.250-227.000 personas, es decir, bastante cercana a los 285.000 que recoge Plinio<sup>164</sup>. La fiabilidad de los datos de Plinio puede comprobarse también para el conjunto de los tres *conventus* a partir de la aplicación de estas mismas variables (*ibid.*), pues tanto las estimaciones a la baja del cómputo total de castros (4.000) como las altas (5.000) dan unos valores intermedios muy semejantes al resultado de sumar los datos de Plinio para los tres *conventus* (691.000): 600.000-800.000 / 750.000-1.000.000 habitantes.

---

<sup>162</sup> Frank, por ejemplo, ya consideró en su momento que los datos censuales de *cives Romani* que aporta Augusto en sus *Res Gestae* parecen incluir también a aquellos de ámbito provincial (Frank, 1924; *vid.* Lo Cascio, 1994: 29 y ss.). Otros indicios parciales podemos encontrarlos en algunas figuras excepcionales, como el *censitor civium romanorum* asociado a la colonia de Camuloduno (*ILS* 2740). Un capítulo aparte merece el desarrollo propuesto para la laguna del *censitor* [*civium romanorum*] del *conventus Caesaraugustanus*, que se comentará más tarde (*AE* 2011, 1775 = *CIL* VIII, 7070=19428 = *ILAlg.*, II, 1, 669). Este censo específico, como reconoce Lo Cascio a partir de Beloch, es el que va asociado a la expresión *civium capita*: “the expression *civium capita* must refer, during the Republic, to all the adult males, there was [...] no other possibility of explaining the different order of magnitude of the Augustan figures than supposing that they referred to all the *cives*” (1994: 31).

<sup>163</sup> La utilización de mano de obra minera infantil no está documentada en *Hispania*. Se ha planteado que la estela sepulcral hallada en Baños de la Encina (Jaén; *CIL* II, 3258), que recoge la escultura de un niño en una hornacina pudiera representar a un minero que trabajara en las explotaciones contiguas al lugar del hallazgo, pues parece llevar consigo un “martillo minero” (*vid.* Arboledas, 2009: 261-62). En principio habría que dudar que una estela de esta factura corresponda a un niño que desempeña este tipo de trabajo, más cuando sólo tiene cuatro años de edad (*vid.* Baena y Beltrán, 2002: 72). Parece más lógico pensar en un hijo de la élite local vinculada a estas explotaciones.

<sup>164</sup> No debe sorprendernos que el análisis construido sobre yacimientos de la edad del Hierro (y sus derivados problemas de datación) arrojen unas cifras menores a las de Plinio como ocurre en el *conventus Bracaraugustanus*, pues aunque el sentido común invite a pensar que estos números debieran ser, en todo caso, más altos (por agrupar poblamiento de un arco cronológico más amplio), no se pueden considerar los poblamientos en abierto que aparecen en época romana por toda la región al carecer de unos límites claros de se superficie a los que asignar un valor de personas/hectárea. En este sentido, dado que nunca fue el Noroeste un lugar de llegada de abundante población exógena y que el crecimiento vegetativo hubo de ser pequeño en el marco de una economía campesina, la utilización de los recintos fortificados tiene plena validez como fundamento para este tipo de estimaciones.



No parece casual que los datos poblacionales de Plinio sean expresados por unidad conventual (*nunc per singulos conventus*) tal y como seguramente aparecerían en los *libri* del *fiscus* provincial, y no sean el simple resultado de sumar los valores de cada *civitas*. Es cierto que Plinio en algunas ocasiones es del gusto de sumar conjuntos sencillos, como por ejemplo hace en su descripción geográfica del Noroeste, sumando las dimensiones de *Lusitania* a las de *Asturia* y *Callaecia* a partir del *pictus orbis* de Agripa<sup>165</sup>: *Lusitaniam cum Asturia et Callaecia patere longitudine DXL, latitudine DXXXVI* (*NH.*, 4, 22, 118). Sin embargo, en este caso ni siquiera menciona todas las *civitates* por cada *conventus* como prueba de esta importancia marginal que adquieren las *civitates* en el registro censual de escala provincial. Del *Asturum* sí destaca su sede conventual, pero resume sus 22 *civitates* mencionando sólo cuatro, del *Lucense* sólo dos de las quince (alegando *ignobilium ac barbara appellationis*) y únicamente seis (por *fastidium nominentur*) de las veiticuatro del *bracarense*. La imbricación en este fragmento de ambas entidades sería posiblemente el producto de la relación de *oppida* por *conventus* de la que se nutre en su descripción de *civitates* con sus distintos estatutos y cargas fiscales sobre el suelo (*vid. NH.*, 1, 118<sup>166</sup>), es decir, información de la *formula provinciae* que es aquí intercalada con los datos del censo. Si el *conventus* careciera de transcendencia como ente intermediador en el proceso de elaboración del censo, hubiera sido mucho más sencilla la indicación de la población por *civitates* en vez de este tipo de cálculos tan onerosos, más cuando decide no incluir siquiera los nombres de *populi* si parecen tener un poco de dificultad. Por el contrario, el filtro del *conventus* en este caso permite explicar esta singularidad de los datos del censo del Noroeste que aparecen en Plinio. Mientras en otras provincias como la Bética el *conventus* parece ser un órgano disfuncional y vacío y la elaboración del censo se resuelve por la interlocución *civitas-provincia* (*vid. Cortijo Cerezo, 2007; Ozcáriz, 2006: 65-66*), el registro del *fiscus* provincial sería mucho más detallado y pesado de resumir, de ahí que sólo incluyera datos de la *Citerior*, donde aparecen inventariados por convento y a los que, por otra parte, tuvo un acceso más sencillo siendo *procurator*.

Un argumento a considerar, pero obviado para la defensa de las funciones censuales del *conventus*, lo encontramos en la obra, recientemente rescada del olvido (Lopez Barja, 2014), de Flegonte<sup>167</sup>. A partir de ella, plantearemos un estudio integral de sus fórmulas censuales y el análisis de su coherencia interna. En su libro *Makrobíoi*, con el propósito de recoger los nombres de personas cuya edad superó la centena, da una lista de nombres de indudable interés y en la que debemos detenernos, pues dice haber

<sup>165</sup> Si bien en este caso es posible que la suma de toda esta región estuviera ya referida por el propio Agripa como vemos en uno de los geógrafos latinos menores, Claudio Rutilio Namaciano (24). Tampoco debe descartarse que esta alusión tenga una base real, dentro del todavía oscuro proceso evolutivo de la integración administrativa del Noroeste tras la conquista.

<sup>166</sup> *Nunc universa provincia dividitur in conventus septem, Carthaginiensem, Tarraconensem, Caesaraugustanum, Cluniensem, Asturum, Lucensem, Bracarum accedunt insulae quarum mentione seposita civitates provincia ipsa praeter contributas aliis CCXCIII continet oppida CLXXXIX in iis colonias XII, oppida civium Romanorum XIII, Latinorum veterum XVIII, foederatum unum, stipendiaria CXXXV.*

<sup>167</sup> La edición utilizada ha sido la reciente obra editada por T. Braccini y M. Scorsone (2013), *Il libro delle meraviglie e tutti i frammenti*, Turín.

extraído sus datos de la consulta de los censos oficiales pertinentes (Phleg. I, 0). En este sentido creo que no cabe duda de la veracidad de la información de que dispone<sup>168</sup>, pues se trata de una extensa lista que prescinde de un mínimo hilo narrativo y parece exponer datos en bruto que difícilmente podrían haber sido inventados. Del total de cien individuos que registra<sup>169</sup>, tan solo recurre a otras fuentes en siete casos. De éstos, cinco tiene un origen literario como él mismo reconoce: seguramente Demócrito de Abdera<sup>170</sup> (II, 79), *Ctebisio* de la *Chronica* de Apolodoro (II, 80), Jerónimo del libro XI de la *Historia de Asia* de Agatarchide (II, 81), el rey Argantonio a partir de las obras de Heródoto y Anacreonte (IV, 98) y la Sibila de Eritrea según su oráculo, que se encarga de reproducir íntegro (IV, 99). Completa la información con dos de estos longevos de los que habría tenido un conocimiento personal: seguramente la de nombre desconocido por una laguna de la que dice liberta y viva en su propio tiempo (III, 95) y Fausto, un liberto de César en el pretorio y de origen sabino, que dice haber visto personalmente al ser presentado ante el emperador Adriano (IV, 97). Es interesante comprobar cómo Flegonte suele dar una información más detallada cuando la tiene, como se observa en todos los casos que proceden de fuentes literarias o fruto de su propia experiencia, cosa que no ocurre con los datos extraídos del censo, en donde seguramente simplemente transcribe al griego la información, de un modo escueto, tal y como estaría recogida en los archivos consultados.

### *El censo de Itálicos*

Remitiéndonos ya a los datos recogidos del censo, existe una gran descompensación entre las zonas representadas, pues aunque su objetivo inicial parece en principio restringirse a los itálicos, que en cualquier caso ocupan una amplia mayoría de las entradas, recoge también, como veremos después, a peregrinos de tres zonas concretas: Lusitania, Macedonia y Bitinia-Ponto. Los registros itálicos se limitan, de hecho, a la *regio VIII Aemilia*, como ya ha sido notado por López Barja (2014: 463). No corresponden a otras zonas de Italia salvo en dos casos<sup>171</sup>. Este indicio nos pone de nuevo sobre la pista de un acceso directo a los archivos, en donde he rastreado pequeñas variantes en la forma en que el autor muestra las entradas de individuos de esta fuente con el fin de buscar divergencias. Aunque a simple vista puede parecer que existen cambios en la nomenclatura que inviten a pensar, en último término, en

<sup>168</sup> Evidentemente me refiero a los datos extraídos del censo, no a las entradas de origen literario, pero a las que él parece dar crédito.

<sup>169</sup> Ello si sumamos el registro de un liberto imperial, Fausto, que Flegonte no recoge pero sí Diógenes Laercio, que dice haber consultado su obra (I, 3).

<sup>170</sup> Por la información explicativa que excepcionalmente aporta, aunque si mencionar su fuente, afirmando que murió tras abstenerse de comer.

<sup>171</sup> Sobre esta *regio* ver Plin. *NH.*, 3, 115, 119; *cfr.* Str. 5, 1, 4; Para la cartografía antigua de las ciudades recogidas por Flegonte (las actuales Piacenza, Veleia, Brescello, Imola, Bolonia, Parma, Ravena, Faenza, Forlimpopoli, Basileia, Rimini, Reggio, Fidenza y Taneto) *vid.* Talbert, 2000 (hojas 39-40; *cfr.* h. 100). Sólo hay una excepción entre los itálicos recogidos: la comentada en nota (*vid. infra*) *Iulia Modestina* (Phleg. III, 94) de Carseoli, cerca de Roma (*regio VII*), debido probablemente a un origen literario de la fuente.

pequeñas huellas de distintos procedimientos censuales a nivel local, la sistematización de las entradas permite comprobar un criterio homogéneo que se sigue a rajatabla según el sexo y el *status* (ingenuos o libertos), sin cambios según sea la *origo* de adscripción del individuo<sup>172</sup> o el expediente jurídico municipal o colonial. Para ello he individualizado cada componente y seguido un criterio ordinal, pues partía de la hipótesis nula de que indicios de procedimientos distintos a escala local repercutirían en el orden en que los elementos aparecen y surgirían pautas según fuera la comunidad que se tratase:

Nº Id. Flego n	Nombre	Sex o <sup>173</sup>	Fórmula censual <sup>174</sup>	Status	Edad	Ciudad	Topónimo actual	Provincia /regio	Fuente
1	Lucio Cornelio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
2	Lucio Galusco Vero	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
3	Lucio Vetusto Segundo	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
4	Lucio Licinio Palo	M	PNCLIBCI V	LIB	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
5	Lucio Acilio Marcelo	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
6	Lucio Vettio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Brixellum</i>	Brescello	<i>Regio VIII</i>	Censo
7	Lucio Cusonio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Forum Cornelia</i>	Imola	<i>Regio VIII</i>	Censo
8	Lucio Gaminio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Veleia</i>	ca. Carignone	<i>Regio VIII</i>	Censo
9	Cayo Portesio Frontón	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
10	Cayo Nonio Máximo	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Brixellum</i>	Brescello	<i>Regio VIII</i>	Censo
11	Cayo Amornio Tirón	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Forum Cornelia</i>	Imola	<i>Regio VIII</i>	Censo
12	Cayo Casio Pudente	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo
13	Cayo Ticio Comen	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo

<sup>172</sup> Sólo presentan alguna anomalía dos casos, si bien las cualidades de su onomástica invitan a pensar que se trata de extranjeros censados como *incolae* en sus ciudades de adscripción: *Katía*, hija de Cayo, de la ciudad de Faenza<sup>172</sup> (I, 18) y Lucio, hijo de Pietro, de la ciudad de Imola (III, 93).

<sup>173</sup> Nomenclatura: M (=masculino), F (=femenino)

<sup>174</sup> Nomenclatura (siguiendo el orden de los elementos): P (=praenomen), N (=nomen), C (=cognomen), U (=nombre único), F (=filiación/patronymico), LIB (=liberto), CIV (=Civitas), PROV (=Provincia)

14	Cayo Vacio Tercio	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
15	Cayo Julio Poto	M	PNCLIBCI V	LIB	100	<i>Ravenna</i>	Ravenna	<i>Regio VIII</i>	Censo
16	Cayo Valerio Primo	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Veleia</i>	ca. Carignone	<i>Regio VIII</i>	Censo
17	Cayo Ceselio Ciro	M	PNCLCIV	LIB	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
18	Cazia	F			100	<i>Faventia</i>	Faenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
19	Publio Fulvio Fringe	M	PNCLCIV	LIB	100	<i>Forum Popilii</i>	Forlimpopoli	<i>Regio VIII</i>	Censo
20	Publio Nevio	M	PNFCIV	INC?	100	Βασιλείας ( <i>Basileia</i> )	-	-	Censo
21	Publio Decemio Demóstenes	M	PNCLCIV	LIB	100	<i>Ariminium</i>	Rimini	<i>Regio VIII</i>	Censo
22	Petronia Quinta	F	NCFCIV	LIB	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
23	Pollia Pola	F	NCFCIV	INC?	100	<i>Etosia</i>	-	-	Censo?
24	Marco Vilonio Severo	M	PNC[...]CI V	CR	100	<i>Veleia</i>	ca. Carignone	<i>Regio VIII</i>	Censo
25	Marco Terencio Albio	M	PNCLIBCI V	LIB	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
26	Marco Antonio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
27	Marco Tampio Vital	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
28	Marco Acellio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
29	Marco Nirellio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo
30	Tito Vibio Talbio	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo
31	Tito Emilio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Regium Lepidi</i>	Reggio Emilia	<i>Regio VIII</i>	Censo
32	Tito Veranio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
33	Tito Numerio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Placentia</i>	Piacenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
34	Tito Servio Segundo	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
35	Tito Petronio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Regium Lepidi</i>	Reggio Emilia	<i>Regio VIII</i>	Censo
36	Tito Antonio	M	PNFCIV	CR	100	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
37	Tito Erusio Polión	M	PNCFCIV	CR	100	<i>Fidentia</i>	Fidenza	<i>Regio VIII</i>	Censo

38	Tito Camurio Tercio	M	PNCFCIV	CR	100	Bononia	Bolonia	Regio VIII	Censo
39	Turela Forese	F	NCLCIV	LIB	100	Bononia	Bolonia	Regio VIII	Censo
40	Quinto Casio Rufo	M	PNCFCIV	CR	100	Regium Lepidi	Reggio Emilia	Regio VIII	Censo
41	Quinto Lucrecio Primo	M	PNCFCIV	CR	100	Regium Lepidi	Reggio Emilia	Regio VIII	Censo
42	Quinto Velio	M	PNFCIV	CR	100	Veleia	ca. Carignone	Regio VIII	Censo
43	Antonia Segunda	F	NCFCIV	CR	100	Veleia	ca. Carignone	Regio VIII	Censo
44	Albacia Sabina	F	NC[...F?] CIV	CR	100	Parma	Parma	Regio VIII	Censo
45	Salvia Varena	F	NCFCIV	CR	100	Βασίλεια (Basileia)	-	Regio VIII	Censo
46	Bebia Marcela	F	NCFCIV	CR	100	Hostilia	Ortiglia	Regio VIII	Censo
47	Bascila	F	UFPROVC IV	PER	100	Philippi	ca. Crénides (Grecia)	Macedonia	Censo
48	Bonze	M	UFCIVPR OV	PER	100	Paroikopolis (=Parthikopolis)	Sandanski (Bulgaria)	Macedonia	Censo
49	Frontón	M	UFPROVC IV	PER	100	Philippi	ca. Crénides (Grecia)	Macedonia	Censo
50	Sarces	M	UFPROVC IV	PER	100	Amphipolis	ca. Amphipoli (Grecia)	Macedonia	Censo
51	Edesio	M	UFCIVPR OV	PER	100	Paroikopolis (=Parthikopolis)	Sandanski (Bulgaria)	Macedonia	Censo
52	Biti	M ?	UFCIVPR OV	PER	100	Paroikopolis (=Parthikopolis)	Sandanski (Bulgaria)	Macedonia	Censo
53	Zecedente	M	UFCIVPR OV	PER	100	Paroikopolis (=Parthikopolis)	Sandanski (Bulgaria)	Macedonia	Censo
54	Manti	M ?	UFPROVC IV	PER	100	Amphipolis	ca. Amphipoli (Grecia)	Macedonia	Censo
55	Alessandro	M	UFCIVPR OV	PER	100	Tiana/Tyana? <sup>175</sup>	Kemerhisar (Turquía)	Bitinia-Ponto	Censo

<sup>175</sup> En las entradas 55-59 Flegonte recoge los nombres de cinco individuos de los que dice *Tiavori* y sitúa en Bitinia-Ponto, lo que resulta problemático si identificamos dicha ciudad con la conocida *Tyana* (Τύανα), pues en época del autor se enmarca en términos administrativos dentro de la provincia de *Galatia et Cappadocia*. Tal y como la transmite Flegonte sólo la encontramos en un pequeño grafito fragmentario *Tiav[ω?]* (IG XIII,5 712, 26) y que podría corresponder a la Tiana de Bitinia (= *Tium/Tieium?*), lugar de procedencia de un marino en su periplo por las Cícladas (vid. Savo, 2004: 31).

56	Gaza	F?	UFCIVPR OV	PER	100	<i>Tiana/Tyana?</i>	Kemerhis ar (Turquía)	Bitinia- Ponto	Censo
57	Creste	M	UFCIV[PR OV]	PER	100	<i>Tiana/Tyana?</i>	Kemerhis ar (Turquía)	Bitinia- Ponto [omitido]	Censo
58	Crisio	M	UFCIV[PR OV]	PER	100	<i>Tyana?</i>	Kemerhis ar (Turquía)	Bitinia- Ponto [omitido]	
59	Hierón	M	UFCIV[PR OV]	PER	100	<i>Tyana?</i>	Kemerhis ar (Turquía)	Bitinia- Ponto [omitido]	Censo
60	Mucazo	M	UFCIVPR OV	PER	100	<i>Nicomedia</i>	Izmit (Turquía)	Bitinia [Ponto: omitido]	Censo
61	Lucio Fidicula Nepote	M	PNCCIV	CR?	100	<i>Sinope</i>	Sinop (Turquía)	Bitinia- Ponto [omitido]	Censo
62	Alucio	M	UFCIVPR OV	PER	100	<i>Interaniesia</i> (=Interanni enses)	ca. Viseu (Viseu)	<i>Lusitania</i>	Censo
63	Ambato	M	UFCIV	PER	100	<i>Interaniesia</i> [omitido]	ca. Viseu (Viseu)	<i>Lusitania</i>	Censo
64	Camalo	M	UFCIV	PER	100	<i>Interaniesia</i> [omitido]	ca. Viseu (Viseu)	<i>Lusitania</i>	Censo
65	Celtio	M	UFCIV	PER	100	<i>Apilocario</i>	-	-	Censo
66	Arruncio	M	UFCIV	PER	100	<i>Conimbrigesia</i> (=Conimbri ga)	Condeixa -a-Nova (Coímbra )	<i>Lusitania</i>	Censo
67	Tanfio	M	UFCIV	PER	100	<i>Conimbrigesia</i> (=Conimbri ga)	Condeixa -a-Nova (Coímbra )	<i>Lusitania</i>	Censo
68	Docurio	M	UFCIV	PER	101	<i>Eburobisingesia</i> (= <i>Eburobrittium</i> )	Quinta das Janelas, Óbidos- Gaeiras (Leirias)	<i>Lusitania</i>	Censo
69	Cayo Leledio Primo	M	PNCFCIV	CR	101	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
70	Clodia Potesta	F	NCLIBCI V	LIB	101	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
71	Cusinia Moschide	F	NCLIBCI V	LIB	101	<i>Forum Cornelii</i>	Imola	<i>Regio VIII</i>	Censo
72	Cereonia Verecunda	F	NCLIBCI V	LIB	101	<i>Forum Cornelii</i>	Imola	<i>Regio VIII</i>	Censo
73	Livia Ática	F	NCLIBCI V	LIB	101	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo
74	Buria Lucnenide	F	NCLIBCI V	LIB	102	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo
75	Cayo Samio	M	PNFCIV	CR	102	<i>Veleia</i>	ca. Carignone	<i>Regio VIII</i>	Censo

76	Quinto Cornelio	M	PNFCIV	CR	102	<i>Regium Lepidi</i>	Reggio Emilia	<i>Regio VIII</i>	Censo
77	Tito Antonio	M	PNFCIV	CR	102	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo
78	Cocnania Musa	F	NCLIBCI V	LIB	103	<i>Forum Cornelia</i>	Imola	<i>Regio VIII</i>	Censo
79	Demócrito	M	-	-	104	-	-	-	Lit.?
80	Ctebisio	M	-	-	104	-	-	-	Lit. (Apolodoro, <i>Chronica</i> )
81	Jerónimo	M	-	-	104	-	-	-	Lit. (Agatarchide, <i>Historia de Asia</i> ).
82	Cayo Lallia Tioneo	M	PNCFCIV	CR	105	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
83	Publio Quisencio Efirión	M	PNCLIBCI V	LIB	105	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
84	Tito Cotina Crisanzo	M	PNCLIBCI V	LIB	105	<i>Faventia</i>	Faenza	<i>Regio VIII</i>	Censo
85	Marco Pomponio Severo	M	PNCFCIV	CR	105	<i>Tannetum</i>	Ca. Taneto	<i>Regio VIII</i>	Censo
86	Sesto Nevio	M	PNFCIV	CR	105	<i>Parma</i>	Parma	<i>Regio VIII</i>	Censo
87	Lucio Elio Doroteo	M	PNCLIBCI V	LIB	106	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
88	Cayo Pompusio Montano	M	PNCF[...CI V?]	CR	107	<i>Bononia?</i> [laguna]	Bolonia? [laguna]	<i>Regio VIII</i>	Censo
89	Pollia Donata	F	NCFCIV	CR	110	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
90	Munacia Prócula	F	NCFCIV	CR	110	<i>Regium Lepidi</i>	Reggio Emilia	<i>Regio VIII</i>	Censo
91	Tito Purenio Tuto	M	PNCFCIV	CR	111	<i>Forum Cornelia</i>	Imola	<i>Regio VIII</i>	Censo
92	Lucio Antistio Soterico	M	PNCLIBCI V	LIB	113	<i>Ravenna</i>	Ravenna	<i>Regio VIII</i>	Censo
93	Lucio	M	UF	?	114	<i>Forum Cornelia</i>	Imola	<i>Regio VIII</i>	Censo?
94	Julia Modestina	F	NCCIV[... F?LIB?]	?	1[... 14-20?]	<i>Carseoli</i>	Ca. Carsoli	<i>Regio VII</i>	Lit.?
95	[...]	F	[...]LIB	LIB	120	<i>Brixellum</i>	Brescello	<i>Regio VIII</i>	Cens/Con.
96	Lucio Terencio	M	PNFCIV	CR	135	<i>Bononia</i>	Bolonia	<i>Regio VIII</i>	Censo
97	Fausto	M	-	<i>Libert</i>	136	-	-	-	Con.

				<i>us Caesar is</i>					
97B	Epimenides <sup>176</sup>	M	-	-	157	-	-	-	-
98	Argantonio rey de Tartesos	M	-	-	150	-	-	-	Lit. (Heródoto y Anacreonte).
99	Sibila Eritrea	F	-	-	1000	-			Lit. (oracular)

Fig. 7. Tabla sintética de las entradas censuales en los *Makrobíoi* de Flegonte.

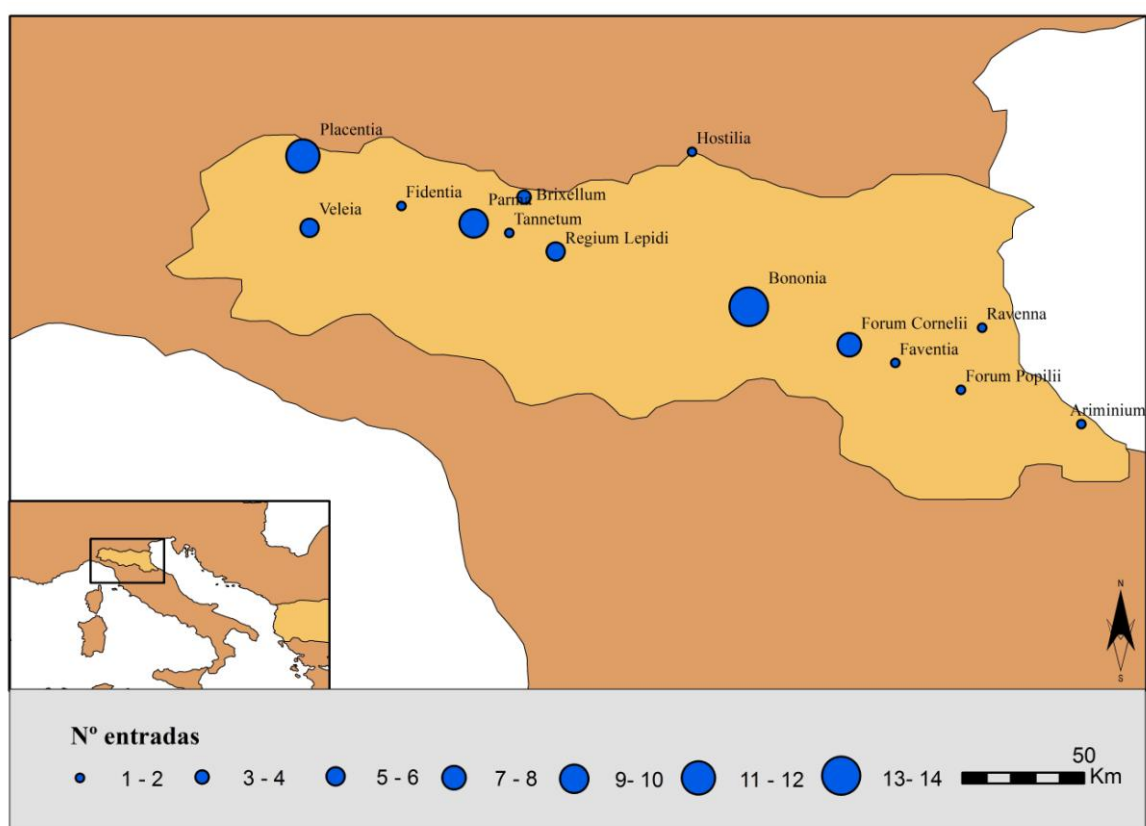


Fig. 8. Distribución de las entradas censuales en los *Makrobíoi* de Flegonte correspondientes a la *regio VIII*.

El análisis permite comprobar en primer término que la única variante se produce en la onomástica de la ciudadanía romana ingenua, pudiendo aparecer o no el *cognomen*. Dado que ambas formas conviven en las mismas comunidades como *Placentia*, *Brixellum*, *Forum Cornelii*, *Veleia*, *Bononia*, *Parma* o *Regium Lepidi*, lo más razonable es pensar que la indicación del *cognomen* fuera voluntaria. Sin embargo, no debe

<sup>176</sup> Entrada tomada de Diogenes Laercio (I, 3), que dice servirse de la obra de Flegonte (vid. Braccini y Scorsone, 2013: 40).



desecharse la posibilidad de que este cambio obedeciera a la propia distancia cronológica entre los individuos registrados (no registrándose los *cognomina* en las entradas más antiguas), pues aunque los archivos de escala local solían utilizar *tabulae ceratae* (de tal forma que al ser reaprovechadas se perdieran las entradas antiguas), también se servían de *libri* en papiro, más perdurables, y de los que el mismo Flegonte pudo haberse servido. Esta doble fuente era utilizada, por ejemplo, en los archivos públicos irnitanos como aparece en su legislación (*lex. Irn.* 9) y sabemos también por la *tabula Heracleensis* a propósito del censo que, en cualquier caso, la información recogida en *tabulae ceratae* solía ser después enviada a Roma en papiro (*tab. Heracleensis*, 148-151; 155-156; Rodríguez Neila, 2005: 81-82). En cualquier caso, esta coherencia nos habla de la veracidad informativa que nos transmite Flegonte, directamente extraída de una fuente censal oficial. Es importante señalar cómo precisamente el único testimonio itálico que no se corresponde con la *regio VIII* supone la única excepción en la fórmula censal, el caso de *Iulia Modestina de Carseoli: N C CIV [F? LIB?]* (*vid.* entrada 94) con una omisión o transmutación de elementos, perteneciente a la *regio VII*.

#### *El censo de provinciales*

En segundo lugar hay una segunda fuente de información de origen censal, en donde aparecen un total de veintidós provinciales de Macedonia, Bitinia-Ponto y Lusitania. En cuanto a los ocho registros macedónicos (I, 47-54) lo más probable es que Flegonte se sirviera de los censos locales a los que tuviera acceso, pues a pesar de la gran extensión de la provincia, los individuos registrados pertenecen a comunidades muy cercanas entre sí, Anfípolis, *Philippi* y Paroikopolis. También resultan indicativos en este sentido, y de gran interés, los cambios en las fórmulas censuales utilizadas según comunidades en este caso, pues mientras Paroikopolis mantiene el orden habitual (*U F CIV PROV*<sup>177</sup>: I, 48; I, 51; I, 52; I, 53), se observa un patrón común en *Philippi* y *Amphipolis*, con una transmutación que se mantiene a pesar de aparecer intercaladas en el texto (*U F PROV CIV*: I, 47; I, 49; I, 50; I, 54). Aunque el tamaño de la muestra sea pequeño, resulta tanto más sorprendente si lo comparamos con la uniformidad rigurosa de las 69 entradas itálicas, lo que a mi parecer justifica que se trate de una huella del procedimiento local a la hora de confeccionar el censo. Por otro lado, el indicativo a la provincia como circunscripción superior a la *civitas* induce a pensar que estos censos locales se insertaran en una política de censo global para el conjunto de Macedonia. Pues lo hace de un modo estereotipado y repetitivo, con el patrón antes señalado, de modo que no parece que Flegonte lo hubiera añadido con fines aclarativos, sino como parte de la documentación que él mismo maneja. Dado que Macedonia es una provincia senatorial en el periodo de gobierno de la dinastía Antonina, momento en el cual Flegonte escribe su obra, huelga señalar que estas entradas suponen un nuevo argumento a tener en cuenta en contra de la tesis que presume la inexistencia de un censo provincial en las provincias senatoriales (*vid.* cap. 3.1). Respecto a los individuos que aparecen en Macedonia y Bitinia-Ponto, al igual que ocurrirá en los casos lusitanos,

<sup>177</sup> Para el sistema de abreviaturas *vid.* tabla *supra*.

constan de expediente personal peregrino, cuya onomástica se resuelve por nombre único con filiación a excepción del bitinio, de Sínope, Lucio Fidículo Nepote (I, 61).

Centrándonos en el censo de lusitanos, es pertinente plantear la hipótesis de que, frente al carácter resumido como *numerus multitudinis* que nos da Plinio a partir del *tabularium* provincial, en este caso se trata del tipo de información censual que manejaría el *conventus*, en donde ya sí cuentan con un registro de sus nombres propios, filiación, *origo* y edad. En este sentido es preciso superar dos obstáculos que requieren, en última instancia, una información actualizada sobre el siempre controvertido asunto de los problemas fronterizos: los límites conventuales y la asignación del lugar apropiado a las *civitates*. Esto nos permite concluir que todas las entradas se concentran, como ocurre con la información del censo de otras zonas del Imperio, en un territorio concreto que ha de identificarse con el *conventus Scallabitanus*.

La comunidad de Κονιμβριγησια (*Conimbrigesia*) es posiblemente la que menos problemas plantea, siendo fácilmente identificable con Conímbriga, a la que se adscriben dos individuos de onomástica peregrina: Arruncio hijo de Appio (I, 66) y Tanfio hijo de Celtio (I, 67). Situada junto a Condeixa a Nova, pertenece de forma inequívoca al *conventus Scallabitanus*, siendo uno de los núcleos estructurantes de la vía que unía *Olissipo* con *Bracara Augusta*.

Otra entrada corresponde a Docurio, hijo de Alucio, que se dice de Αἰβουροβισυγγησια (*Eburobisingesia*), es decir, aparece alterada por la terminación –*gesia* como ocurre con Conímbriga. Esta comunidad sólo puede tratarse de la lusitana *Eburobrittium*, a pesar de no mencionar la provincia en estas entradas. Flegonte, dentro del patrón ordinal base según la edad<sup>178</sup>, agrupa a los individuos por zonas concretas, de modo que en este caso omite excepcionalmente la alusión a la provincia pues ya la menciona en el primero de los registros de *Lusitania* (I, 62), de igual modo que tiende a resumir cuando se repite la *civitas* aludiendo simplemente a que se trata “de la misma ciudad”. Así aparece en un caso cercano, en donde se sobreentiende que se trata de Bitinia, a pesar de sólo incluir la referencia a la *civitas* de Sínope (I, 61), pues los anteriores son también de esta misma provincia. Dicho esto, debe desecharse la posibilidad de que esta ciudad pueda identificarse con *Eburobriga* (Avrolles, Francia), pues además de no coincidir la terminación (sería *Eburobrigesia*) habría hecho alusión a su provincia en caso de no ser lusitana<sup>179</sup>. Por otro lado, los recientes trabajos

---

<sup>178</sup> Y, dentro de este, primero a los itálicos y después a los provinciales.

<sup>179</sup> En toda la obra de Flegonte sólo existe una excepción en el caso de Pelio, hijo de Celtio, del que dice ser de la *polis* de Απειλοχαριο (*Apilocario*) (I, 65), que además de los problemas de identificación que plantea aparece entre los testimonios lusitanos, sin aludir tampoco a su provincia. Por tanto, considero que hay dos posibilidades de interpretación: O bien que dado el presumible origen cario de Pelio, Flegonte (natural de la cercana Tralles) hubiera tenido un conocimiento directo y lo intercalara aquí por alguna razón; o bien, y lo que considero más probable, que dada su inserción entre los testimonios lusitanos y la omisión común a la provincia en estas entradas, se trataría de un extranjero con indicación de su antigua ciudadanía, tal y como aparecería en el censo de los *interannienses*, mencionados inmediatamente antes, entre los que habitaba. Esto explicaría asimismo por qué en I, 66 no recuerda que Conímbriga es lusitana, pues todas estas entradas (I, 62-68) pertenecen a una misma fuente que se da por sabida tras su aclaración en I, 62.

arqueológicos han permitido despejar la incertidumbre sobre el lugar que ocupó *Eburobrittium*, pues Plinio (*NH.*, 4, 113) sólo la nombra de un modo escueto, situándola cerca de Conímbriga y Colipón (San Sebastián de Freixo), lo que había dado lugar a todo tipo de suposiciones. Sin embargo, ahora puede ya ubicarse de un modo definitivo junto a la localidad de Óbidos (Leiria: Moreira, 2002) si bien su *corpus* epigráfico no permite conocer con seguridad su estatuto jurídico (Encarnação y Moreira, 2010) aunque se le había supuesto un rango municipal desde época Flavia (Salinas de Frías y Rodríguez Cortés, 2000: 25).

Por último, recoge también a tres peregrinos de la ciudad que nombra como *Ιντερανησια* (*Interanisia*): Alucio hijo de Apiliuta (I, 62), Ambato hijo de Docurio (I, 63) y Camalo, hijo de Cantolgunio (I, 63). Este caso tampoco arroja problemas en lo relativo a la comunidad a la que refiere, pues al ser nombrados como “lusitanos” de un modo explícito sólo pueden tratarse de los *interannienses*, mencionados por Plinio entre las comunidades lusitanas estipendiarias (*NH.*, 4, 118). Sin embargo, su localización ha sido más controvertida pues tradicionalmente se había entendido en territorio vetton, por ser uno de los *municipia*<sup>180</sup> que aparece en la conocida inscripción honorífica del puente de Alcántara tras haber contribuido a su construcción (105 d.C.: *CIL* II, 720), dentro del *conventus Emeritensis*. El principal criterio para atisbar su posible ubicación antigua respondía únicamente a aquel de orden filológico, adivinando una situación “entre dos ríos”, como invita a suponer su propia etimología. De tal modo que el debate se centraba en cual de las posibles “mesopotamias” vetonas podría corresponder a los *Interannienses*, siendo propuestos varios candidatos entre los que discurriría (los ríos Águeda y Tormes, Coa y Águeda, etc; *vid.* Maia, 1974), en cualquier caso, al Oeste de los *Lancienses Transcudani* asociados al Coa (*Cuda*; *cfr.* Guerra, 2007: 173-77). Sin embargo, a partir de la primera propuesta de Alarcão, que fue el primero relacionar el territorio de los *Interannienses* con las inmediaciones de Viseu (1988), su tesis se ha consolidado gracias al desarrollo de la identificación del sistema viario en la región que unía *Augusta Emerita* y *Bracara Augusta*, vertebrando el territorio de los *Igaeditani*, *Lancienses Oppidani*, *Tapori*, *Interannienses* y *Coilarni* que aparecen en la inscripción del puente de Alcántara. En este sentido la aparición de numerosos miliarios<sup>181</sup>, con especial presencia en la serra da Estrela, ha permitido reconstruir este recorrido y reubicar de un modo coherente con los datos disponibles las *civitates* “alcantareñas”, atendiendo a que la relación de pueblos lusitanos del epígrafe no se atiene a un criterio de corte administrativo, sino geográfico, vertebrado por la red viaria (Carvalho, 2007: 150-53). De tal modo que ya es un hecho ampliamente aceptado que la *civitas Interanniensium*, beneficiaria directa de la construcción del puente, se situaría en la

<sup>180</sup> En fecha reciente se ha atribuido el término *municipia* a una adición del *praescriptum* de Nebrija además de otros añadidos que habrían alterado posteriormente la transmisión de la lectura del epígrafe, cuya superficie se encuentra actualmente totalmente erosionada y resulta ilegible. Esta hipótesis se ha propuesto a partir del análisis de la tradición manuscrita sobre la inscripción desde la documentación de época Moderna (Carbonell *et al.*, 2007). Siguiendo esta propuesta, la referencia a los *interannienses* sería una interpolación de Nebrija, si bien su reconstrucción por esta *civitas* sigue resultando probable según la lectura que ya Juan Honorio realiza *in situ* a comienzo del siglo XVI al interpretar: [+ca. 7+]nienses.

<sup>181</sup> Además del término augustal del 2/4-6 d.C. en la cercana Guardão (Tudela, Viseu; *HEp* 15, 541), en donde a pesar de su estado fragmentario ya se podían adivinar a los *interannienses* (Alarcão, 1988: 35).

vertiente Norte del río Mondego (Alarcão 1988: 40-41; 2005; Carvalho, 2007: 127-155; *vid.* mapa 4: 118-19 y mapa 5: 130-131; Vaz, 2006; 2010: 320-23; Guerra: 2007: 172 y 183), superando así la serra da Estrela que marca la frontera convencional que separa los *conventus Scallabitanus* y *Emeritensis* (TIR, J-29: 67-68).

Ref. Fleg.	Antropónimo	Formula censual	Status	Origo	Civitas probable	Lugar actual	Conventus
I, 62	Alucio hijo de Apiliuta	<i>U F CIV PROV</i>	Peregrino	Ἰντεραννησία (Interaniesia)	<i>Interannienses</i>	ca. Viseu (Viseu)	<i>Scallabitanus</i>
I, 63	Ambato hijo de Docurio	<i>U F CIV</i>	Peregrino	Ἰντεραννησία <sup>1</sup> (Interaniesia)	<i>Interannienses</i>	ca. Viseu (Viseu)	
I, 64	Camalo hijo de Cantolgunio	<i>U F CIV</i>	Peregrino	Ἰντεραννησία (Interaniesia)	<i>Interannienses</i>	ca. Viseu (Viseu)	
I, 65	Celtio hijo de Pelio	<i>U F CIV</i>	Peregrino	Ἀπιλοχαρίο <sup>1</sup> (Apilocario)	<i>Interannienses</i> ? (incola?)	ca. Viseu (Viseu)	
I, 66	Arruncio hijo de Appio	<i>U F CIV</i>	Peregrino	Κονιμβριγησία (Conimbrigesia)	<i>Conimbriga</i>	Condeixa-a-Nova (Coímbra)	
I, 67	Tanfio hijo de Celtio	<i>U F CIV</i>	Peregrino	Κονιμβριγησία (Konimbrigesias)	<i>Conimbriga</i>	Condeixa-a-Nova (Coímbra)	
I, 68	Doccurio hijo de Alucio	<i>U F CIV</i>	Peregrino	Ἐβουροβισγῆσια (Eburobisingesia)	<i>Eburobrittium</i>	Quinta das Janelas, Óbidos-Gaeiras (Leirias)	

Fig. 9. Registros censales de peregrinos lusitanos en los *Makrobíoi* de Flegonte.

Aunque el alcance de esta hipótesis esté irremediablemente hipotecado por el tamaño de la muestra, resulta en cualquier caso sorprendente que todos los individuos mencionados se concentren en el marco conventual escalabitano, más si tenemos en cuenta que no nombra a ningún centenario de zonas más extensas, urbanizadas y pobladas de *Lusitania*, como la vecina emeritense, en donde fácilmente se recogerían más casos si se tratara de un censo provincial. Por el contrario, la mayor parte de las entradas se concentran precisamente para una *civitas*, la *Interanniense*, cuyo centro urbano no está confirmado, pues los indicios de época romana no son concluyentes para definir un *caput civitatis* que vertebrase de forma clara el territorio circundante<sup>182</sup>, como sí

<sup>182</sup> Una *civitas* que, por lo demás, parece mantener su hábitat en castros romanizados y sitios romanos dispersos (*vid.* Vaz, 2006: 151). La consideración de Viseu como *caput civitatis* a partir de la primera propuesta de Alarcão (1988: 38-40), se basa fundamentalmente en los restos de una *fossa*, la llamada “Cava de Viriato”, que son las huellas más visibles en el paisaje, y ha sido interpretada como posible campamento romano, si bien además de estar fuera del contorno de la ciudad puede ser el lugar de establecimiento del cuartel de Almanzor en su campaña hacia Santiago de Compostela (Ines Vaz, 2006: 150). Los restos de material de datación romana son exiguos, pudiendo sólo adivinarse un pequeño tramo

ocurre en otros lugares cercanos como Bobadela, lo que nos aleja de la posibilidad de que se trate de un censo local de esta comunidad. Esta carencia de centro administrativo bien reconocible entraría en consonancia con muchas otras *civitates* lusitanas de toda esta región de Beira: “Nestas regiões do interior norte da *Lusitania* repetís-se-ia de alguma forma o mesmo fenómeno que se terá verificado noutras regiões da Hispânia, como sejam a *Asturia* e a *Gallaecia*, onde são recorrentes os casos de *civitates* cujas capitais não poderão ser propriamente consideradas ciudades, dada a sua morfologia se afastar marcadamente do modelo urbano ‘clásico’” (Carvalho, 2007: 99). A ello se suma el indicio de una fórmula censal uniforme (*U F CIV*), a pesar de tener una apariencia algo descuidada, pues aunque no menciona de forma estereotipada las ciudades como en el resto de registros, no se aprecian las transmutaciones de orden que sí pueden intuirse en otros censos presumiblemente locales como serían los macedónicos. Del mismo modo, quizás la omisión a la provincia, totalmente excepcional en los casos lusitanos<sup>183</sup>, vaya en esta misma línea de la función de intermediación del *conventus*, aunque en última instancia se integrara en una política de censo a nivel provincial. La publicación reciente por Sylow y Ventura de la primera alusión en ámbito epigráfico al orden conventual lusitano<sup>184</sup> (2009: 486-89; *HEp* 19, 19), de época Julio-Claudia, puede encaminarse a esta reivindicación del *conventus* como ente funcional. Un papel que, en coherencia con Flegonte, le permita dejar de estar relegado al de simple ornamento de la descripción pliniana sobre *Lusitania*, aunque nos resulte todavía desconocido en sus detalles.

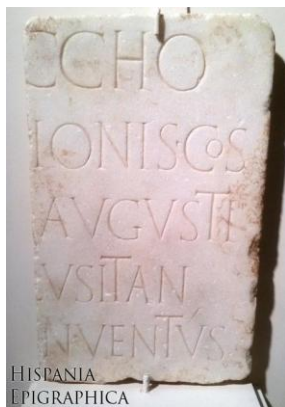


Fig. 10. Testimonio epigráfico sobre el marco conventual lusitano.

de muralla, además de otros pequeños vestigios de difícil adscripción cronológica (*vid.* Sobral de Carvalho y Cheney, 2007; Vaz, 2010: 320-23), lo que no parece suficiente para identificar una capitalidad segura a este núcleo.

<sup>183</sup> Salvo en el primero, con un fin meramente aclarativo.

<sup>184</sup> Se trata de una placa de revestimiento de un pedestal honorífico de gran tamaño, cuyo campo epigráfico es fragmentario tras un recorte en su margen derecho y quizás también en la parte inferior: [---] Bo]ccho / [---] Ionis · co(n)s(ulis) / [---] · Augusti / [---] Lusitan(iae) / [---co]nventús / -----?. El *apex* en [co]nventús según la interpretación de Sylow y Ventura implica una V larga que denota un caso nominativo de plural englobando a los tres *conventus* lusitanos, de forma inédita. Sin desechar esta opción, no veo inconveniente en que sea un genitivo del singular, como es lo más común, refiriéndose en la capital provincial a las funciones desempeñadas en uno sólo de sus *conventus*. Aunque la inscripción se haya encontrado en el foro de *Augusta Emerita* su adscripción al *conventus emeritensis* resulta a mi juicio la menos probable, dado el poder regional que su familia parece tener tanto en el *conventus Scallabitanus* (*Olisipo*, Lisboa: *HEp* 8, 608; *Scallabis*, Santarém: *HEp* 12, 667) como en el *Pacensis* (*Salacia*, Alcácer do Sal: *HEp* 7, 1201; *HEp* 7, 1202; *Caetogriga*, Tróia, en zona fronteriza interconventual: *HEp* 12, 666; *vid.* Sylow y Ventura (2009: 486 y n. 25 y 26) y González Herrero (2002).

	Zona censada	Status	Sexo	Fórmula censual <sup>185</sup>	Nº registros	Ref. tabla	Fuente
Italia	Regio VIII	C. R.	H	<i>P N F Civ + Edad [1]</i>	19	1, 6, 7, 8, 20, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 42, 75, 76, 77, 86, 96,	Censo regio VIII Aemilia
				<i>P N C F Civ + Edad [1]</i>	21	2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 27, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 69, 82, 85, 91	
			M	<i>N C F Civ + Edad [1]</i>	4	43, 46, 89, 90	
		Lib.	H	<i>P N C Lib Civ + Edad [1]</i>	9	4, 15, 17, 19, 21, 83, 84, 87, 92	
			M	<i>N C Lib Civ + Edad [1]</i>	8	22, 39, 70, 71, 72, 73, 74, 78	
	Carseoli	-	M	<i>N C Civ [F? Lib? + Edad?] [2]</i>	1	94	Fuente literaria / Censo regio VII
Macedonia	Philippi y Amphipolis	Per	H	<i>U F Prov Civ + Edad [3]</i>	4	47, 49, 50, 54	Censos locales
	Paroiko polis	Per	H	<i>U F Civ Prov + Edad [4]</i>	4	48, 51, 52, 53	
Bitinia-Ponto	Tiana y Nicomedia	Per.	H	<i>U F Civ [Prov] + Edad [5]</i>	6	55, 56, 57, 58, 59, 60	Censos locales
	Sinope	CR	H	<i>P N C Civ + Edad [6]</i>	1	61	
Lusitania	Conventus Scallabitanus	Per	H	<i>U F Civ [Prov<sup>186</sup>] + Edad [7]</i>	6 + 1?	62, 63, 64, 66, 67, 68 + 65?	Censo conventual

Fig. 11. Tabla sintética de las fórmulas censuales según su dispersión geográfica.



Fig.12. Dispersión de los registros por fórmulas censales numeradas (vid. tabla supra).

<sup>185</sup> Los colores marcan el tipo de fórmula según la leyenda del mapa de dispersión siguiente [1-7].

<sup>186</sup> Sólo recogido en la primera entrada, seguramente con carácter explicativo.

En suma, tanto el localismo, la descompensación por zonas, como los patrones en las fórmulas censuales, invitan a pensar que la información que suministra Flegonte es un conglomerado de fuentes censuales de distinto origen que hubiera recopilado durante su periplo vital, al servicio como *libertus Caesaris* del emperador Adriano (López Barja, 2014: 462-63), aunque no deban reducirse en principio a los de orden provincial si la hipótesis es correcta. Aunque se nos escapen los pormenores de su vida su cercanía al poder da verosimilitud a la información que aporta, pues aunque algunas de las edades sean fantasiosas, parece actuar en una posición cercana al emperador, como dice al ser presentado ante éste uno de sus *longevos* (IV, 96). Su posición de influencia explica, por tanto, esta posibilidad de acceso a *tabularii*, más detallados y de escala local, ya sean comunitarios o conventuales. Plinio, por el contrario, sólo proporciona el inventario general de la *Citerior*, sin las complicadas sumas que hubieran sido necesarias en caso de que estos peregrinos aparecieran así registrados individualmente a escala provincial, mientras en *Lusitania* opta por el criterio del prestigio en su relación de *civitates* (Beltrán Lloris, 2007: 142), sin el *conventus* como hilo conductor de su descripción. De hecho también pareció interesado en recoger testimonios de longevidad extraordinaria, pero entre los provinciales no menciona ningún caso de la *Citerior*, y todos parecen haber sido exclusivamente extraídos de fuentes literarias e indirectas, como los *Annales* o las listas de senadores (*vid. NH.*, 7, 153-59).

Por otro lado, si aceptamos la información suministrada por Flegonte, sólo puede concluirse que dentro de la intermediación del *conventus* la unidad básica que prevalece es la *civitas*, elemento matriz de la administración romana, sin reconocer en los datos censuales a los individuos por unidades menores a ésta. La forma de registro, mediante la indicación de antropónimo con filiación, edad y *origo*, sería suficiente para garantizar un control sobre las obligaciones personales del individuo respecto a la administración romana. Dicho esto, el argumento que Flegonte representa a la hora de trazar un modelo aplicable al Noroeste, aunque recoja casos lusitanos y no de la *Citerior*, se erige a mi juicio en una prueba superior respecto a otros testimonios. Me refiero sobre todo a la sugerente propuesta de López Barja (1999; 2014), quien ha perfilado una hipótesis dirigida a dar una carta de naturaleza administrativa a *castella/*⊙=castro, como centros mínimos de adscripción censal en un contexto de poblamiento atomizado, con *populi/civitas* sin un centro claro. En este sentido observa una analogía respecto al caso de la judía *Babatha*, correspondiente a la provincia de Arabia el 127 d.C., que se dice “Yo, Babatha, (hija) de Simón, de Maoza, (del distrito) de Zoarene, de la región administrativa de Petra, domiciliada en propiedad, en la mencionada Maoza”. Es decir, que su fórmula recoge además del distrito (*≈civitas*: Zoarene), “unidades menores” como serían su domicilio de residencia y domicilio fiscal, de forma repetida por ser coincidente (Maoza). Algo semejante ocurriría en algunas regiones del Noroeste, cuya adscripción individual a *castella/*⊙ en epigrafía sería un indicativo de “domicilio fiscal” que actúan con un rango inferior a la *civitas* pero con entidad desde el punto de vista administrativo. Algunos ejemplos representativos, entre otros muchos, serían *Cloutius Clutami f(ilius) duplicarius alae Pannonior(um) Susarru(s) ⊙ domo Curunniace* (Salona, Dalmacia: *CIL* III, 2016); *Popilius Hirsutus Flavi Vendieci f(ilius) Lanci(ensis)*

*domo (=castellum) Vacoeci* (Santa María de Tribes, Ourense: AE 1903, 236=IRG IV, 119; *vid. ambas en* López Barja, 1999: 357 y n. 21); ó *Tillegus Ambati f(ilius) Susarrus* O *Alobrigiaeco* (Tabula de El Caurel, Lugo: HEp 8, 334); *Castellani Paemmeiobrigenses ex gente Susarriorum* y *castellani Aiiobrigiaecini ex gente Gigurriorum* (Edicto de El Bierzo, León: HEp 7, 378; *vid. Redentor*, 2011, vol. I: 227-29; Olmo, 2016: 435-36; ).

Sin ánimo de extendernos demasiado en este aspecto, que en su justa medida entra dentro del espectro interno de la *civitas* sobre el censo y al que más tarde nos referiremos, lo más plausible es que, de ser cierta la hipótesis de López Barja, una persona como Flegonte, que no duda en dar una mayor información cuando la tiene (como ocurre, recordemos, con los testimonios que extrae en fuentes literarias o por conocimiento personal), habría hecho alusión a este tipo de unidades menores si así aparecieran en el censo. Evidente no podría ser el caso de Conímbriga, donde no existen testimonios de *castella*, aunque bien podría haber referido a otras unidades menores de esta comunidad como el sistema de *vicus* y/o *gentes* (*vid. HEp* 12, 630<sup>187</sup>). Sin embargo tampoco lo hace para el propio territorio *interanniense*, en donde se ha testimoniado el *castellum Aracoelensium* en Mangualde (Mangualde, Viseu AE 1954, 93), además de otro cercano a esta *civitas*, O *Nacosos* de los *Arbuenses* en S. João da Fresta<sup>188</sup> (Mangualde, Viseu: HEp 1, 698), sin alusión a *civitas* por estar probablemente en su interior. A ello se suma la posibilidad, recogida en HEp 3, 200 por A. Canto, de un ciudadano romano de la tribu *Galeria* emigrante en *Arucci* (Aroche, Huelva) sea además *Interam[---]* O *Ga[---]* bien entrado el siglo II, de modo que debe contemplarse la hipótesis de que pueda tratarse de un *interamniense* que menciona su comunidad por

<sup>187</sup> Encontrado cerca de las murallas de Conímbriga en Condeixa-a-Velha (Condeixa-a-Nova, Coimbra): [Deo Marti?] Neto[ni]? / Valerius Avit[us] / M(arcus) Turranius • Sulpici[anus] / f(ilius)] de vico Baedoro / gentis Pinton(um?).

<sup>188</sup> De hecho, aunque la mayor parte de testimonios de *castella* predominen en el *conventus* bracarense y lucense, parecen tener una dispersión mayor a la considerada inicialmente. Así se ha demostrado ya para el *conventus Asturum*, tradicionalmente inserto en el “área de las *gentilitates*” en oposición al “área de los *castella* (=O)” y el *Scallabitanus* (Mangas y Olano, 1995; Santos Yanguas, 2009: 172; *cfr. Pereira*, 1982) y existen casos dentro del *conventus Scallabitanus* (e.g. HEp 10, 749, en Cárquere, Resende, Viseu). Por tanto, no debe presuponerse que toda alusión fuera de este ámbito original responda a una procedencia exógena. Bien es cierto que la inscripción AE 1954, 93 carece de indicación a la *civitas*, lo que permitiría confirmar su pertenencia a los *Interannienses*, pero no lo es menos que ésta suele incorporarse cuando el individuo fallece alejado de la misma, como ocurre en el caso de los *castellani* de Huelva, que explicitan ser *Limici* (e.g. HEp 1, 355; CILA I, 24) e *Interamici* (CILA I, 6), o el que se dice *astur transmontanus castello Intercatia* (Colonia, Alemania: CIL XIII, 8098). Por el contrario, buena parte de los *castellani* de los *conventus* bracarense y lucense la omiten por resultar obvia, lo que nos habla de un origen local o cercano (e.g. HEp. 4, 1011; CIL II, 2433; AE 1992, 997; HEp 6, 636; AE 1973, 303; CIL II, 2520; HEp 6, 764; HEp 7, 1229; HEp 2, 853; CIL II, 2480; HEp 4, 345). A falta de una confirmación definitiva, no hay pruebas concluyentes que impidan considerar la existencia de *castella* entre los *interannienses* (que, recordemos, comparten características con el Noroeste en cuanto a su dinámica de poblamiento) pues aparecen también en otras zonas cercanas sin aludir tampoco a su *civitas* (HEp 1, 698 *vid. supra*) o incluso, quizás, entre los *lancienses* (Santa María de Tribes, Ourense: IRG IV, 119). Esta dispersión, al fin y al cabo, tampoco debe sorprendernos si el término *castellum* carece de una dimensión técnica, siendo aplicable a una considerable cantidad de supuestos: “no es creíble pensar en una homogeneidad morfológica de los *castella*, ni en términos sincrónicos ni diacrónicos y lo que sí parece común a todos ellos es que se trata de entidades de poblamiento (agrupado o disperso) que articulan el espacio rural en el marco de la *civitas*” (Orejas y Ruiz del Árbol, 2010: 1112).



encontrarse fuera de su contorno y que consolida los indicios antes mencionados<sup>189</sup>. A mi juicio estos testimonios invalidan la posibilidad de que el *castellum* pudiera actuar como elemento de referencia para el censo. Pues tenemos, por un lado, pruebas de que también en territorio interamniense proliferaron *castella*, y que estos pudieron sobrevivir hasta una época muy cercana a la que escribe Flegonte en donde ya se habría concedido el *ius Latii*. Y, por otro, la información que nos transmite Flegonte, directamente tomada del censo, en donde alude a esta misma comunidad en el marco único de la *civitas* sin mencionar cualquier tipo de unidad menor de este tipo.

Por otro lado, el argumento no es puramente *ex silentio*, ya que sobre el testimonio de Babatha pesan además una serie de sesgos e incompatibilidades que, en mi opinión, lo hace difícilmente extrapolable al Noroeste, aun como elemento de comparación. En primer lugar el hecho de tratarse de un registro de propiedad por la vía personal y mediante *professio* o juramento (*P. Yadin* 16, 34), lo que en principio resulta en un procedimiento distinto respecto a una asignación global de *tributum soli* a la *civitas*. De hecho, el motivo principal del registro no parece propiamente la propiedad, que simplemente nombra sin definir su contorno o sus vecinos (*cfr.* Ulp. 3 *de cens.* = *D.* 50, 15, 4, 0-2), sino la producción de cebada que Babatha reconoce y parece convenientemente gravada mediante un tipo impositivo porcentual que paga en dinero o en especie (*vid.* *P. Yadin* 16, 18-33 y *cfr.* Hyg. 205 L). Este modelo fiscal en Occidente sólo lo encontramos en casos aislados como Panonia o la *decuma* siciliana, pues entre otros aspectos implica una burocratización y control exhaustivo de la propiedad/producción difícil de asumir de forma sistemática en ámbito provincial. De ahí que Roma no tendiera a implantarlo de un modo generalizado<sup>190</sup>, sino simplemente a mantenerlo cuando ya contaban con una estructura administrativa al efecto antes de su integración. Por otro lado debe tenerse en cuenta que Babatha es judía, y como tal, su registro pudo verse mediatizado por su propia especificidad y probable vínculo con el *fiscus Iudaicus*, y que ya hemos explorado (*vid.* cap. 4.2).

A ello se suman otros dos aspectos más a tener en consideración, pues también resulta sorprendente que si tomamos esta fórmula como elemento de comparación, no aparezca un elemento clave como sería la edad en un documento censual oficial (ni de ella ni de su marido, que actúa en este caso como guardián), mientras en Flegonte sí aparece convenientemente señalado, lo que no deja de tener sentido si marca el inicio de las obligaciones personales.

También la entidad jurídica del “pueblo de Maoza” (recordemos, dentro del distrito zoroaeno y dependiente de Petra) parece asimilarse más al concepto occidental de *civitas* que propiamente al de un *castellum*. Así el *P. Yadin* 26 trata el litigio sobre unas

---

<sup>189</sup> Evidentemente, la situación fragmentaria del epígrafe no permite comprobar de modo fehaciente si se trataría de un *interamniense* o un *interamicus*, ambos con menciones a *castella* (*vid.* tabla *supra*).

<sup>190</sup> Sobre su excepcionalidad nos habla el propio Cicerón (2*Ver.*, 5, 12): “Entre Sicilia y las demás provincias, jueces, hay una diferencia en el sistema de impuestos agrarios. Las demás, o tienen como impuesto un canon fijo, que se llama impuesto fijo, como sucede con los hispanos y con la mayoría de los cartagineses, en concepto de recompensa por nuestra victoria o reparación de guerra, o se ha fijado por los censores un arrendamiento, como ocurre en Asia con la ley Sempronia”.

tierras que la propia *Babatha* mantiene con Miriam, la segunda esposa de su marido Juddah, y en este caso, aunque Maoza parece integrarse dentro de la *iurisdictio* de Petra y responde ante el *legatus Augusti pro praetore* (vid. *P. Yadin* 23), tanto la citación como el propio documento se realizan en la propia Maoza, en donde se presume también una *iurisdictio* local. De hecho, a propósito del problema que plantea el *P. Yadin* 16 al contravenir la *formula censualis* de Ulpiano, pues Babatha no va a Petra como sería natural, sino a Rabbath-Moab<sup>191</sup>, Lo Cascio afirma que “Per di più, non erano le autorità di Petra a effettuare materialmente la riscossione: come risulta da altri documenti, la riscossione era effettuata a livello locale –dunque a Maoza” (2000b: 210). La entidad de Maoza como unidad fiscal se aprecia también en la constante alusión a las fronteras de Maoza (*en horiois*), dentro de las cuales se encuentran sus propiedades (*P. Yadin* 16, 17; 21; 25; 29). En este sentido, aunque la entidad jurídica del *ager castellani* sea cuestionable y, a lo sumo, circunstancial<sup>192</sup>, nunca se articuló como unidad fiscal. Al contrario, tanto la *riscossione* como la *imposizione*, siguiendo la propia nomenclatura técnica de Lo Cascio, parece integrarse siempre en el seno de la *civitas* como unidad mínima. Así es que, incluso en los pocos testimonios en donde se adivina una territorialidad del *castellum*, además de ser de carácter fiscal, pagan en tanto que dependen de una *civitas* de referencia: así por ejemplo los propios (*agri*) de los *castellani Aiobrigiaecini*<sup>193</sup> han de contribuir *cum susarris*, como antes de la *immunitas* lo habían hecho los *agri* de los *castellani Paemeiobrigenses* (*HEp* 7, 378).

Por tanto, considero que en este sentido debe imperar un criterio de cercanía según el cual la información censal de los lusitanos del *conventus Scallabitanus*, en principio, tendría más en común con el Noroeste que con otras fuentes como la lejana Arabia, cuya estructura fiscal resulta muy distinta. De hecho las obligaciones personales podrían ser semejantes en lo que respecta a la fiscalización de la mano de obra con distintos fines, como la dedicada a una explotación aurífera que está experimentando una nueva dimensión en toda la zona norte lusitana, aunque todavía sea necesario un estudio específico sobre las cualidades de este modelo de gestión.

Aunque la verticalidad del poder se complete con las relaciones de políticas en el seno de las comunidades locales (también en el proceso de elaboración del censo), resulta difícil de mantener una descentralización absoluta de estas atribuciones para hacerlas descansar en la *civitas* si requirió un control individual, cosa que en el ámbito fondiario pudo superarse mediante el *ager universus* (vid. cap. 9.4). En este sentido el *conventus* garantizaba el abastecimiento y el control de la mano de obra como sede del

<sup>191</sup> Según la *formula censualis* de Ulpiano, al margen de la *origo* del individuo, la propiedad se registra y tributa dentro de la *civitas* en cuyo territorio está (Ulp. *de cens.* 3=D. 50, 15, 4, 2), de tal modo que lo apropiado habría sido que Babatha acudiera a Petra, y no a Rabbath-Moab. Ante esta aparente contradicción se habría propuesto un criterio de distancia, que no satisfizo a Lo Cascio desde el punto de vista jurídico (2000b: 209-211), pues mientras Rabbath-Moab está en torno a 40 km de Maoza, Petra duplica esa distancia (Lewis, 1989: 69).

<sup>192</sup> Normalmente se ha sustentado en el caso hispánico (además del *ager* ya comentado del Edicto de El Bierzo) a partir de otra inscripción rupestre de difícil lectura y desarrollo hallada en Villardebós, Ourense: S T P / INT COM CI I, para la que Pereira (1982: 252-55) propuso: *S(altus) T(erritorium) P(ublicum) (Castelli) Int(...?) com(prehensus) ci(vitate) I(nteramniense)*.

<sup>193</sup> Tanto es así que, en coherencia con las nuevas obligaciones fiscales contraídas por sus *agri*, los *Aiobrigiaecini* parecen haber pasado a formar parte de los *Susarri* (vid. Hernando Sobrino, 2002).

control sociopolítico y jurisdiccional, mientras la relación entre una élite local colaborativa y los grupos dependientes participa como acicate, cuyo papel coercitivo a escala local resulta más eficaz que aquel que la administración romana pudiera representar. La fuerza centrípeta desde el punto de vista administrativo se materializa así en la visibilidad excepcional que las capitales conventuales juegan en el Noroeste, únicos puntos donde aflora con claridad el fenómeno del urbanismo y buscan una reproducción de los modelos canónicos. Así, por ejemplo, también sabemos por la inscripción funeraria de *Iulius Rufinus Leontius* (ha. finales s. II/III: AE 1972, 282<sup>194</sup>), pudo existir un *tabularium* en la sede lucense que englobara a toda su circunscripción conventual<sup>195</sup> (Dopico Caínzos, 2013: 94). Y serán precisamente los *conventus* del Noroeste los que sobrevivan con mayor nitidez en el registro fósil de diversos autores tardíos como Hidacio<sup>196</sup> o S. Isidoro<sup>197</sup>, si bien adecuados ya a nuevas circunstancias y funcionalidades<sup>198</sup>. Como ya observó en su día Sancho Rocher: “no deja de llamar la atención que todas, o casi todas las veces que en época tardía se emplea la palabra *conventus* en sentido de región, se haga alusión a alguno de los conventos del Noroeste, que fueron los de menor implantación urbana, y, por ello, tuvo que ser más importante aquí el peso del convento” (1978: 175).

En coherencia con todo lo mencionado y de la especial presencia administrativa que parece tener en la *Citerior* la intermediación del *conventus* respecto a otras provincias, no resulta tan extraña la aparición de un *censitor conventus Caesaraugustano* el año 74-75 d.C. (*CIL* VIII, 7070; Ozcáriz, 2012: 572), que actúa precisamente en el mismo momento de realización del censo del que seguramente se nutriera también Plinio, aunque en este caso no arrojará cifras poblacionales. Sin embargo, este testimonio en ocasiones ha sido infravalorado por considerarse incompatible con otro, el censo que C. *Mocconius Verus* había realizado para *XXIII[I] civitatum Vasconum et Vardulo(l)orum*

<sup>194</sup> *D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulio Rufino / Leontio ex tab(ulario) / civi Asturice(n)si / annorum XXVIII / Rufonius Rufi/nus pater et Ru/fia Paterna mater / filio piissimo.*

<sup>195</sup> La escueta información del epígrafe no permite, sin embargo, despejar algunas dudas planteadas, como si pudiera corresponder al tabulario de otra de las sedes conventuales del Noroeste, como *Asturica*, pues el difunto dice ser *civis Asturicensis* (vid. Rodríguez Neila, 2005) o que tuviera una dimensión local a pesar de carecer de un estatuto privilegiado claro (cfr. Dopico, 2013: 94). De un modo análogo, también para López Barja *Lucus* pudo servir de lugar de centralización administrativa de los *populi* galaicos como se desprende de la existencia de este tabulario lucense (López Barja, 1999: 355). El *tabularium* de *Lucus* así pues sería la reproducción a escala conventual del *tabularium censualis* provincial que, sabemos, también existía en *Tarraco* por la inscripción de un bergidoflaviense que la desempeña (*CIL* II, 4248), con una información presumiblemente más inventariada. Por otro lado, tampoco puede desecharse la posibilidad de que el *grammaticus* aparecido en *Asturica* (*CIL* II, 5079) pudiera tener una función relacionada con este tipo de labor administrativa en su respectiva sede de *conventus*.

<sup>196</sup> *In conventu Lucensi contra voluntatem agresti Lucensis episcopi Pastor (Continuatio Chronicorum Hieronymianorum: 102) 'Eruli' marítima conventus Lucensis loca nonnulla crudelissime invadunt (ibidem: 194; en Sancho Rocher, 1978: 174).*

<sup>197</sup> *Nam Asia locus est, provincia Asiae Phrygia, Troja regio Phrygiae, Ilium civitas Trojae. Item regiones partes sunt rovinciarum Cantabria Asturia. A rectoribus aute regio nuncupata est, cuius partes territoria sunt (Etym., XIV, 5, 21; en Sancho Rocher, 1978: 175).*

<sup>198</sup> En algunos casos parece transformarse, desde estas cualidades originarias como aglutinador subprovincial de *civitates* a “comunidad/reunión de creyentes” de escala regional: *Convenientibus episcopis in ecclesia Tolet... Exuperantius de Gallaecia, Lucensis conventus...* (Concilio de Toledo, 397-400); *Quum Gallaeciae provinciae episcopi tam ex Bracarensi quam ex Lucensi... in metropolitana Bracarensi ecclesia convenissent* (Concilio de Braga, 572 d.C.; en Sancho Rocher, 1978: 175).

(CIL VI, 1643). Es decir, un censo a comunidades pertenecientes a entidades sociales que según Plinio pertenecen al *conventus* Cesaraugustano y Cluniense respectivamente (NH., 3, 3, 24-26), obviando en cierto modo la estructura conventual<sup>199</sup>. Sobre este punto, ya se ha puesto de relieve en varias ocasiones lo problemático de inferir unos límites conventuales inmutables en el tiempo cuando nuevos hallazgos epigráficos se han erigido en factor de corrección (o, mejor dicho, de matización cronológica), a la información que nos transmite Plinio. Así ha ocurrido, por poner un ejemplo, con las variaciones y ampliaciones de los límites interprovinciales e interconventuales respecto al río *Durius* como referente fronterizo en la descripción pliniana del Noroeste (vid. e.g. Alarcão, 1988: 58-59; Alarcão *et al.* 1990: 321; Sastre, 2001a: 143-50; 2002: 47; Romero, 2015: 267-79) o la vida efímera del *conventus Arae Augustae*, pues al fin y al cabo entran en la lógica del *conventus* como un instrumento adaptativo de control. Si tenemos en cuenta que el censo de Mocconio Vero es necesariamente posterior al 74 d.C. por la alusión a la *legio* VII y lo más probable es que acometiera este encargo en el periodo de gobierno de Adriano o Antonino Pío (Alföldy, 1969: 128-29), la distancia cronológica es suficiente para atender a esta posibilidad de cambios en las fronteras conventuales como se ha defendido a propósito de esta inscripción (López Barja, 1999: 350; Le Roux, 2004; Ozcáriz, 2012: 572-74; 2013: 84-85). De hecho, ya fue convenientemente apuntado por Sayas que los números de *civitates* registradas para vascones y várdulos son superiores a los que aparecen aquí censados (1989a: 140-143). Es decir, el objetivo del censo no era el conjunto de estas, por otro lado, cuestionables “unidades étnicas” de várdulos y vascones, sino de *civitates* específicas que desde una perspectiva romana se engloban en determinados horizontes étnico-culturales de referencia, más o menos artificiales, y en todo caso carentes de entidad desde el punto de vista administrativo. Por tanto, este tipo de censo no entra en contradicción con el relativo al *conventus Caesaraugustanus*, pues responde a una lógica distinta, dirigida al registro de una o varias comunidades concretas que conocemos por otros casos análogos: los censos galos de la *civitas Remorum* (CIL XII, 1855, 1869 y 1870), el que acometió el *Procurator Augusti ad census accipiendos trium civitatum Ambianorum Murrinorum Atrebatium* (CIL VI, 41277; *Epigraphica* 1957, 84) o el, para Pflaum, *procurator (ad census accipiendos) civitatis Senonum Tricassinorum Meldorum Parisiorum et civitas Haeduarum* (CIL XII, 2924; Pflaum, 1960, vol. 2: 1044); en Siria el *census Apamenae civitatis* (CIL III, 6687); el censo de las *civitates XXXXVIII ex provincia Africa* (CIL III, 388); en Bitinia el realizado para las comunidades de la *regio* de *Phlagonia* (CIL III, 6819; *cfr.* AE 1903, 117); o el censo en *Britannia* de la zona ocupada por los *Brittones Anavionenses* al sur de la actual Escocia (CIL XI, 5213; Rivet, 1982: 321). Al fin y al cabo, aunque la provincia sea el marco básico también podía englobar sólo a una parte de ella, como se observa en el caso de las actividades de *M. Sulpicius Felix, electo et retento ad cens(um) excipiendum in partem provinc(iae) Arm(eniae) item Capp(adociae)* (AE 1931, 38). Por otro lado, también el *cursus*

<sup>199</sup> Así se ha interpretado erróneamente, como han destacado Beltrán Lloris y Velaza (2013: 58-64), el *Ter(minus) Aug(ustalis)* recientemente hallado en Lekunberri en un canto rodado sin trabajar (Pérex y Rodríguez, 2011), como un indicador del límite interconventual del Cluniense y Caesaraugustano, precisamente para la franja fronteriza entre Várdulos y Vascones (vid. cap. 5.2).

*honorum* de *Mocconius Verus* induce a pensar en un censo castrense, que habría desempeñado como tribuno laticlavio de la *legio* VII y no, como es más común, por un *legatus* o *procurator* enviado al efecto. En este sentido, la capacidad de mandos militares para acometer censos *ad hoc* en zonas concretas se desprende, quizás, de otro de los censos hispánicos, el del tribuno militar *misso pro censore ad lusitanos* en época de Augusto (*CIL* X, 680: ¿del conjunto de la provincia o sólo de algunas *civitates* lusitanas?). De modo que el objetivo del censo en la zona de várdulos y vascones estaría más bien dirigido a la obtención de nuevas aportaciones de *auxilia*, con un alcance circunstancial y limitado (Sayas, 1989a: 147-48) y no invalida, en suma, el censo que toma como marco el *conventus* Cesaraugustano.

Explotación y conocimiento siempre han sido un binomio presente en los distintos sistemas de dominación, poder y saber, también en la Antigüedad (Plácido, 2014). La consolidación y asimilación de las poblaciones a los intereses imperialistas requiere saber sobre ellas, adaptar los propios ejes administrativos y mentales, con el fin de rubricar un sistema en beneficio propio. De modo paralelo al conocimiento sobre los recursos o posibilidades económicas de explotación, la generación de un discurso que no sólo justifique, sino que retroalimente y amplíe estas condiciones de dependencia, suele ser un instrumento recurrente y eficaz. Los mayoritarios *peregrini* se definen no en vano por su *libertas* y por el reconocimiento de su *civitas*, aunque dicho reconocimiento vaya más bien ligado a unas coordenadas ideológicas imperialistas, bien gestadas en época de Augusto y que se dejan sentir asimismo en el Edicto de El Bierzo, en donde “la seguridad que proporciona el dominio permite pasar de la destrucción a la conservación de los vencidos” (Plácido, 2014: 165). Algunos líderes de pueblos sometidos fueron proclives a este dominio y conservación a pesar de conocer la realidad escondida tras el discurso, como se respira en las palabras de *Cerialis* asignadas por Tácito: “como pretexto ponen la libertad y bonitas palabras: nadie que haya ambicionado someter a otros a su dominio ha dejado de emplear estos mismos términos” (Tac., *Hist.*, IV, 73, 3 trad. J.L. Conde; *vid.* López-Barja de Quiroga 2011: 73; Sastre *et al.*, e.p.). Por el contrario, la imposición del censo es el hecho positivo que marca el comienzo del sometimiento, como se expone con claridad a propósito de la intergración del pueblo de los cietas en época de Tiberio (Tac. *Ann.*, VI, 41, 1). También en Asia se entendió el conocimiento del nombre de las personas, objetos y comunidades como el punto de arranque de la dependencia, y tanto mejor ciudadano eras cuanto con mayor crueldad imponías el cumplimiento de las nuevas obligaciones: *qui honorum quid acerbissime crudelissimeque fecerat, is et vir et civis optimus habebatur* (Caes. *BC.*, 3, 32, 2-3).

En el Noroeste, la construcción de la *civitas* y el *conventus* produjo nuevos espacios de interdependencia e interlocución hasta entonces inéditos, un nuevo diálogo de escalas superpuesto a las realidades sociales preexistentes para transformarlas. Desde esta perspectiva dialéctica, el *conventus* resulta en un buen exponente por su naturaleza dual, por un lado es un núcleo irradiador de la ideología imperial, de la pertenencia a un orden político superior considerado como deseable, por otro, la sede de la dependencia administrativa y del control social, invalidando el discurso de integración que él mismo emite.

### 5.3 El censo provincial y la *civitas* peregrina.

La labor de intermediación y control del *conventus* entre la escala comunitaria y provincial no equivale a negar toda capacidad de actuación a la *civitas* como agente histórico con operatividad administrativa. Si bien la valoración del procedimiento de elaboración del censo en la *civitas* peregrina parte de una limitación documental que invita a ser prudentes en el alcance de las conclusiones. Lo máximo a lo que puede aspirarse en este sentido es, como planteó Nicolet (1985), si son los documentos lo que parten de la *civitas* hasta llegar a los núcleos centralizadores desde el punto de vista administrativo (sedes conventuales y provinciales) o es el Estado quien se involucra directamente en la tarea a nivel interno de la *civitas*, ya sea mediante subdivisiones de ésta o mediante la vía personal de registro. Esto permite, por tanto, atisbar dos formas de interacción posibles que deben ser analizadas por separado a partir de los datos disponibles. La primera cuestión entra de lleno en la cuestionable entidad jurídico-territorial de las unidades inferiores a la *civitas* en el Noroeste. Y, la segunda, requiere evaluar el grado de acomodo que encuentra en ámbito peregrino la tendencia de Roma por descentralizar el procedimiento de elaboración del censo para hacerlo descansar en el principio de autonomía comunitaria. En este punto, trataremos de dibujar una alternativa a partir de distintos paralelos de época republicana e imperial.

#### 5.3.1 *Civitas peregrina* y censo centralizado: La cuestión de los *castella*.

El máximo exponente de centralización desde el punto de vista administrativo en relación al censo es el ya comentado método de registro *kat'oikian* egipcio, “casa por casa” (*vid.* cap. 4.1), en donde el funcionariado accede directamente a la unidad mínima de ocupación para recoger a todos sus habitantes. De este sistemático procedimiento para cada *nomoi*, con sus respectivas variaciones en materia fiscal, resultarían las cifras globales a escala “provincial” de la prefectura Egipcia. Especialmente explícito resulta el edicto de Vibio Máximo para el año 104 d.C. (*P. Lon.* 904, part. 3), en donde todos los habitantes deben acudir a los domicilios en que están censados para un nuevo registro. También algunos papiros (*eg. BGU 159, 372, Geneva Pap. 16 y Fay. Pap. 24*), que a pesar de no contar con una referencia directa al censo, recogen los casos de personas que abandonan sus domicilios con el objeto de eludir sus obligaciones fiscales. Se trata, por tanto, de un control directo, riguroso y sistemático que asume la administración de la prefectura, hasta tal punto de recoger casos en que son los mismos funcionarios quienes se trasladan, en caso de fallecimiento, hasta la casa para comprobar materialmente el deceso y poder ser, así, eliminados del inventario. Este tipo de método presupone por tanto un avanzado sistema administrativo y burocrático para su control, en este caso heredado del periodo ptolemaico y de las necesidades de adaptar fiscalmente la especificidad egipcia, tanto por la situación jurídica y socioeconómica de sus súbditos, como por las variaciones de las cosechas según la irregular crecida del Nilo en el ámbito de la tributación fondiaria. Salvando las distancias, este método de control personal resulta difícil de sostener en el Noroeste, incluso desde una perspectiva

comparada. En este caso las sedes conventuales aparecen como los principales enclaves en que se presume una cierta centralización administrativa, mientras el poblamiento rural predominante, alejado del modelo de “ciudad clásica” (Sastre, 2001a), la difícil accesibilidad por la accidentada orografía del terreno, o un exiguo aparato administrativo sólo suplido por la presencia del ejército, parecen dificultar esta tarea. Evidentemente los primeros censos que recogieron las poblaciones del Noroeste se encontraron, además, con el agravante de una nula experiencia previa en esta materia, cuyas comunidades se insertan ahora en esquemas de interdependencia de mayor escala, como son el *conventus* o la misma *civitas* desde un periodo post-conquista temprano. Es posible que en las primeras labores del censo tras la provincialización definitiva se encontraran con dificultades semejantes a las que Claudio reconoce en la *tabula* de Lyon a la hora de censar comunidades galas carentes de los conceptos de “city-state and his ideology” (Goffart, 1977) y se trata de una nueva institución ajena a sus costumbres: *novum tum opere et inadsuetum Gallis* (FIRA<sup>2</sup> I, 284-5; *vid.* Corbier, 1988; Woolf, 2012).

Volviendo la mirada al Noroeste, una perspectiva análoga al caso egipcio (de nuevo, salvando las distancias), en donde es el funcionariado romano quien se involucra y desplaza para acometer el censo de cada núcleo, se esconde sin embargo tras algunas de las propuestas interpretativas que han visto detrás del signo  $\oslash$  una unidad censal. Antes de revisar estas hipótesis, especialmente defendidas y desarrolladas con diferentes matices por Bermejo (1978-80) y Brañas (2004), además de la postura ya analizada de López Barja<sup>200</sup> (1999; 2014), se hace necesario sin embargo comentar sucintamente este largo debate historiográfico, nodo a partir del cual nace la ramificación de  $\oslash$ =unidad de censo.

El estudio sobre las formaciones sociales del Noroeste a partir de ciertos indicadores recogidos en el hábito epigráfico (*castella*,  $\oslash$ , *gentes* y *gentilitates*) se ha convertido en uno de los grandes escenarios de debate donde cada tentativa ha buscado trabar un armazón teórico para dar una explicación coherente al siempre complejo tránsito de las sociedades pre-estatales hacia su integración en el Imperio. Con este motivo de fondo han proliferado distintas cuestiones transversales según fuera el principal centro de interés para cada autor que ha cultivado el debate, haciendo mayor o menor hincapié en según qué aspectos (cronológicos, territoriales y de contenido). Dado que la nómina de autores y corrientes interpretativas excede nuestro objetivo<sup>201</sup>, baste en este sentido con exponer de un modo simplificado las principales variantes para centrarnos después en aquellas que atañen al censo.

Un primer eje de la discusión se basó en si la naturaleza de estos signos asociados a individuos tenía un componente gentilicio, o constaban de entidad territorial y toponímica. La primera postura, que hundía sus raíces en los constructos sociológicos universalizantes de Morgan (*vid.* Beltrán Lloris, 1988), fue apuntada por primera vez por Schulten (1943) y, más tarde, matizada según distintos modelos de parentesco. En el

---

<sup>200</sup> En este segundo caso impera, sin embargo, la idea contraria al apoyarse en el registro de propiedad de Babatha que, como ya hemos comentado, es quien se desplaza.

<sup>201</sup> Para lo cual me remito, entre otras, a la síntesis historiográfica de Brañas (2004: 156-92).

debate interno de esta primera corriente, el nudo del problema se basaba en cómo debía resolverse la analogía de cada una de estas unidades (*castella*,  $\oslash$ , genitivos de plural, *gentes* y *gentilitates*) dentro de la pirámide parental de relación social. Es decir, su gradación y equivalencias dentro de un esquema uniforme amparado en el acervo indoeuropeo: *populus*, *tribu*, *gens*, *gentilitas*, *centuria*, *cognatio*, *fratría*, familia extensa, familia nuclear, etc. Un producto derivado de estos presupuestos surgía con la consideración del signo  $\oslash$ , como había creído Schulten, en términos de *centuria*, de modo que difieren del sistema de *gentes* tan sólo en la escala (Adrados, 1948: 5-10; Tovar, 1949; Caro Baroja, 1977: 96-118), sin cuestionar una naturaleza gentilicia de amplio espectro. Estos argumentos teóricos encontraron una contrastación documental clara en el epitafio de *Aemilius Balaesus* que se decía de la *cognatio de cen(turia)* en Aldeia Nova (Miranda do Douro, Bragança: *HEp* 7, 1173). De tal modo que para los principales continuadores de esta propuesta en la escuela francesa (Étienne *et al.* 1976; Tranoy, 1981: 374; Le Roux y Tranoy, 1984), había una plasmación explícita tanto del régimen centuriado como de su naturaleza gentilicia y de parentesco por la alusión a la *cognatio* como unidad de parentesco menor, si bien catalizado por el efecto de Roma. A lo sumo aceptaron la variante *cognatio de cen(tilitas)*, por la habitual confusión c/g en un contexto de introducción del latín (Le Roux y Tranoy 1984: 245-52). Sin embargo, esta segunda posibilidad nada cambiaba del contenido de fondo del modelo más allá de hacerlo coincidir con la nomenclatura habitual de estas unidades (*gentilitates*) en ámbito zoela, *civitas* a la que nos remite el lugar del hallazgo de la inscripción (reutilizado en la ermita de Aldeia Nova y asociable al castro de São João; *vid.* Beltrán, 2015, vol. 2: 507-508).

La dimensión territorial detrás del signo  $\oslash$  no se advirtió hasta la obra de Albertos (1975: 63-66), cuyo argumentario pivotaba sobre los testimonios epigráficos de varios galaicos encontrados en la provincia de Huelva. Entre ellos la principal evidencia se encontraba casos como el de *Talabriga*, mencionada bajo la forma  $\oslash$  *Talabrica* (*CILA* I, 24) o *Talabrigensis* (*AE* 1952, 65), de donde se podía inferir que el signo  $\oslash$  remitía a un lugar (*-briga*), perspectiva que sería completada con más casos que presentan una clara analogía toponímica. En coincidencia con otros documentos del conjunto onubense y de la propia *Callaecia*, el signo  $\oslash$  debía interpretarse como *castellum* o *castrum* en coherencia con su naturaleza territorial y toponímica. La nueva explicación permitía asimismo despejar algunos problemas, como la falta de concordancia de género entre el femenino  $\oslash$  (=centuria) y los demostrativos neutros *eodem* y *hoc* en algunas inscripciones (*ERPL* 155; *CIL* II, 2480<sup>202</sup>). Este indudable paso adelante sobre su entidad territorial hizo que surgiera un segundo eje de la discusión, dirigido a la configuración de dos áreas, netamente diferenciadas, en cuanto a su modelo social y organizativo. Sobre todo Pereira, uno de los principales continuadores de la propuesta

<sup>202</sup> *Fabia Eburi* / *f(ilia)* *Lemava*  $\oslash$  / *Eritaeco a(nnorum)* / *XL Virius Caessi f(ilus)* *Le/mavus*  $\oslash$  *eo/dem an(norum)* / *VII hic s(iti) s(unt)* / *Caessius* / - - - - - (*ERPL* 155: Astorga, León). Más problemática es *CIL* II, 2480, desaparecida y sólo transmitida por tradición manuscrita. Cuenta con dos versiones, sólo una de las cuales repara en  $\oslash$  y *hoc*: *Aemiliano Flaco de hoc*  $\oslash$  *Ture/obriga L(ucius) Aelius Flacus signifer leg(ionis)* / *II Aug(ustae) curavit instruendum* / *vivo volente et presente sacratissimo* / *suo patre* (Nogueira da Montanha, Chaves; *vid.* Rodríguez Colmenero, 1999, vol. I: 223-225).



de Albertos, remarcó la singularidad de *Callaecia* como “región histórica” desde una perspectiva etnogenética y dinámica (Pereira 1978; 1982; 1984; 1999; 2005b *vid.* 2014), pues entre otros aspectos la dispersión de  $\mathcal{O}$ /*castella* parecía coincidir con los *conventus Lucensis* y *Bracaraugustanus*. Mientras, por su parte, otros autores abundaron en el estudio del área de las *gentes/gentilitates* más o menos coincidente con el *conventus Asturum*, como fenómeno contrapuesto al de los *castella*, y depositario de formaciones sociales gentilicias con distintos matices (Pereira y Santos, 1980; González, 1985).

Una primera reacción respecto a este estado de la cuestión partirá del mantenimiento de posiciones gentilicias de raigamenbre céltica, cuya supervivencia a veces se ha mantenido incluso aceptando el desarrollo  $\mathcal{O}$  como *castella* en ámbito galaico, en tanto que etnias que comparten un espacio común y están lideradas por un *Princeps* (Rodríguez Colmenero, 1988; García Quintela, 2002: 51-53; Luján, 2011; o, volviendo a la *centuria*: Brañas, 2004: 193-96; también, fuera del celtismo propiamente: Coelho Ferreira da Silva, 1986: 272-279<sup>203</sup>). Esta versión, muy simplificada, entroncará parcialmente con la lectura en términos de  $\mathcal{O}$ =*censum* como veremos.

Sin embargo, los nuevos horizontes para la comprensión y desarrollo del problema se abrieron por dos frentes: uno epistemológico y otro metodológico. El primero, obviamente por el hallazgo de un importante número de testimonios epigráficos con referencia a  $\mathcal{O}$  y *castella*, desde los veintidós que manejó en su día Pereira (*vid.* 1982: 250), hasta los más de cincuenta con los que contamos actualmente (*vid.* Orejas, Ruiz del Árbol, 2010: 1114-21; *vid* tabla *infra*). Eso sin añadir otros tantos epígrafes con topónimos en los que se presume referencias a *castella*, así como nuevas alusiones a *gentes*, *gentilitates*, etc. El rastreo sistemático acompañado de las propuestas por identificar la ubicación aproximada de estas entidades sociales/territoriales irá, en primer término, disolviendo la frontera anteriormente asignada a estas dos formas de organización contrapuestas. Pues ni sus respectivas áreas de dispersión parecen coincidir con las fronteras conventuales, ni parecen estar netamente separadas, sino entremezcladas en algunas zonas hasta tomar una apariencia sinonímica, como ocurre en los testimonios de El Bierzo o en la cuenca del Navia en Asturias. Así por ejemplo Santos (2009: 172-173), en un artículo reciente, ya acepta de un modo explícito su extensión a otras zonas del *conventus Asturum*, como ya habían apuntado en su día Mangas y Olano (1995), e incluso es probable para algunas zonas del *conventus Scallabitanus* en *Lusitania* (en donde carecen asimismo de referencia a *civitas*: *vid.* Silva Fernandez *et al.*, 2006). Por tanto, aunque su representatividad sea mayor en algunas regiones brácaras y lucenses, sus límites superan entidades de carácter administrativo, conviviendo en algunas zonas del *conventus Asturum*, e incluso de otra provincia, lo que sin duda cuestiona su naturaleza en tanto que unidades de un modelo de ordenación impuesto por Roma (lo que no significa que no sea un subproducto, orgánico, de su llegada).

---

<sup>203</sup> Quien lo entiende como una entidad de parentesco intermedia entre la *domus* del *castrum* (=castellum) y unidades sufamiliares mayores como serían el *populus/civitas* (Coelho Ferreira da Silva, 1986: 267-285).

Dentro del capítulo de hallazgos epigráficos el conocido edicto de El Bierzo (*HEp* 11, 286), por su carácter oficial y explícito, marcó un antes y un después. En primer lugar porque rompe con este sistema dual de *gentes/castella* como elementos cualitativamente distintos, al referirse a dos grupos de *castellani* como parte integrante del esquema de gentes: los *castellani Paemeibrigenses ex gente Susarriorum* y los *castellani Aiiobrigiaecini ex gente Gigurrorum*. A ello debe añadirse la aguda observación de Hernando (2002), mayoritariamente aceptada en la actualidad, según la cual puede extraerse que los *castellani* del edicto berciano fueran también los mencionados en la *tabula hospitalis* de El Caurel bajo la forma  $\oslash$ *Aiobrigiaecum* de un individuo (*HEp* 8, 334: Folgoso de El Caurel, Lugo). Es decir, tenemos un ejemplo que corrobora de forma explícita, por primera vez, una misma entidad con dos formas sinonímicas de expresión,  $\oslash$  y *castellum*. Esta equivalencia, que ya adivinaba Albertos con sólidos argumentos, completa el contenido análogo que también se advertía en otros documentos epigráficos. Así, antes de reparar en la observación de Hernando, ya llamó en su momento la atención que en este pacto de hospitalidad convivieran como aparentes sinónimos las formas  $\oslash$  (de *Aibaiciaeco/Aiobrigiaecum*) y *castellani* (*Toletenses*).

La indicación del Edicto de El Bierzo hace ya insostenible en la actualidad el mantenimiento de una dicotomía regional entre la zona de *gentes* (unidades de parentesco) y *castella* (territoriales) que, sin embargo, se han perpetuado en algunos trabajos recientes (*vid.* Santos Yanguas, 2009). El argumento queda bien sintetizado en la siguiente cita, en donde el autor se acoge a que “en la actualidad es algo generalmente admitido por los investigadores que en la epigrafía de área indoeuropea hispana existen dos conjuntos de términos que reflejan una doble naturaleza en las formas organizativas indígenas. Lo que reflejan los términos que aparecen en la epigrafía como *gens*, *gentilitas* y genitivos de plural en *-on*, *-um*, *-orum*, [...] son estructuras de contenido consanguíneo, parental, y por eso perviven en la epigrafía del siglo II y siglo III junto a las *civitates*, mientras que el signo de C invertida y los términos *castellum* (lugar de habitación) y *castellani* (los habitantes de un lugar) tienen una referencia local, territorial, por lo que dejan de tener reflejo en la epigrafía en una época anterior [tras la concesión del *ius Latii*]” (2009: 176). El argumento se basa, por un lado, en que los *castella* son “unidades de habitación”, normalmente castros, de tal modo que su desaparición a finales del siglo I y comienzos del II en la epigrafía remarcaría el fin de su “función política” con el *ius Latii*, pues en principio continuarían en muchos casos viviendo en estas mismas unidades de habitación. Por el contrario, la supervivencia de referencias a *gentes* en la epigrafía de los siglos II y III supone el mantenimiento de relaciones de parentesco dentro de la *civitas* (2009: 177-79).

Estamos de acuerdo, en este sentido, en que el vocabulario *gens/gentilitas* consta de una semántica mutable por el contexto. Así Bermejo, tomando para sí una cita de Sahlins, hizo una reflexión interesante a propósito de la organización de *Callaecia* en relación al orden gentilicio (aunque no estemos de acuerdo en sus conclusiones finales como veremos): “un linaje, por ejemplo, puede encargarse de cosas diversas. Cuando conserva las tierras de un patrimonio el linaje se nos aparece como una entidad

económica; cuando contiene es un grupo político; cuando ofrece sacrificios a los antepasados es una congregación ritual. Así la ‘economía’ no se nos presenta como un componente esencialmente del mismo tipo que la ‘organización social’, sino como cierto despliegue de grupos sociales generalizados que ejercen también otras funciones” (Bermejo, 1978-80: 96). Lo que tenemos no son dos formulaciones que construyen sociedades distintas, sino agentes sociales que se expresan y visibilizan (eso sí, por razones que se nos escapan) de un modo diferente. En efecto no pueden nunca eliminarse una cruda distinción entre los lazos gentilicios y el territorio, pues toda relación consanguínea trasciende en el territorio, y el territorio se vertebra y cohesiona mediante el parentesco. De este modo, que en los *castella* tomen una formulación toponímica y en las *gentes/gentilitates* antroponímica, bien puede deberse a la naturaleza de estas relaciones sociales y políticas: más relacionadas con lugares concretos en los *castella* por hundir su fundamento en aristocracias locales construidas sobre relaciones de propiedad desiguales de ámbito local, lo que sin duda contribuiría a su indentificación con núcleos y centros fijos, más si tenemos en cuenta que las zonas con mayor concentración de estos testimonios epigráficos cuentan, asimismo, con núcleos de mayor entidad y signos de jerarquización social (*vid.* Sastre, 2001a: 186-97). Mientras, en el caso de las *gentes/gentilitates* la aristocracia toma una apariencia más móvil y aparentemente desligada del territorio pues, si bien necesariamente también han de construirse sobre relaciones de propiedad desiguales, quizás éstas no se concentren en áreas concretas o no evoquen una relación inmediata con un núcleo del que dependa su posición de privilegio. De ahí que en sus manifestaciones las *gentes* tomen esta apariencia más soluble respecto al territorio, más envuelto en los lazos personales, políticos y clientares, lo que, tomado demasiado en serio, puede hacer pensar equívocamente en un modelo de formación social cualitativamente distinto al de los *castella*. Dicho esto, si la ‘entidad’ *castellum* deja de ser habitual en la epigrafía no tiene porqué significar el fin de su territorialidad, sino el fin de su función social en el territorio (como elemento de prestigio, como icono identitario, etc.), que se va diluyendo con el tiempo. Así es que de igual modo tampoco coincide su desaparición con un hecho positivo y cronológicamente fijo (el 74 d.C.) como es la aplicación del *ius Latii*. Si dotan a los *castella* de carácter técnico (se habla incluso de *origo*) la pérdida de su territorialidad debería ser automática en vez de progresiva, lo que entra en contradicción con las menciones a *castella* datables en el siglo II d.C.<sup>204</sup>. Por otro lado,

<sup>204</sup> El carácter progresivo sólo puede aceptarse si se relaciona con la paulatina municipalización latina en el Noroeste, en la que no podemos entrar en este momento. Basta en este sentido con apuntar que no hay testimonio alguno que permita sostener que los *Coelerni* o los *Interamici* en los que se apoya Santos (2009: 179-80) adquieran ese rango por su mera alusión entre las *X civitates* de la inscripción del Padrão dos Povos de *Aquae Flaviae* (Chaves: *CIL* II, 2477). La alusión a *civitates* en área de los *castella* está ya atestiguada desde un periodo muy temprano y no presupone indicio de municipalización. Sirva de ejemplo en este sentido la *civitas Lougeiorum* del año 1 d.C. (*HEp* 1, 458). Sólo se puede intuir un indicio de organización municipal en el caso de los *Limici* brácaros (que testimonian asimismo *castella*: *ŌArcuce HEp* 2, 809=12, 645; *ŌTalabriga CILA* I, 24; *castellum Berense HEp* 1, 355), pues en una inscripción hallada en *Tarraco* un individuo se dice *Ilvir* de esta comunidad y se trata además de un ciudadano romano, que habría adquirido esa condición *per honorem*. Sin embargo, tampoco debe desecharse que su promoción personal fuera el producto del desempeño de otras funciones, como la de *sacerdos* en la capital conventual bracarense o en tanto que *flamen p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris)* (*ibidem*). Desde esta perspectiva no es extraño, dado que el lugar del hallazgo es la capital provincial (*Tarraco*), que el

si no son sinónimos sino que presentan dimensiones distintas dentro de la *civitas*, el “área de los *castella*” debería contar asimismo con referencias a *gentes* en tanto que formas de parentesco reproducidas en el seno de la organización en *castella*, cosa que tampoco se produce.

Dejando al margen algunos de los nuevos problemas y desafíos suscitados por el aumento de estos *corpora* epigráficos, también fue importante la aplicación de nuevos enfoques en el terreno metodológico. El principal componente innovador para abordar el problema fue la incorporación al análisis epigráfico “en bloque” de un marco espacial y multifactorial, esto es, la arqueología del paisaje. Si, como hemos visto, se admitió la equivalencia de  $\mathcal{O}$ (=*castellum*) y, a su vez, un carácter toponímico que parecía designar “lugares de hábitat”, la tendencia general fue presuponer de modo exclusivo su identificación con los castros. Esto favorecía, entre otros aspectos, la comprensión del Noroeste como un territorio periférico de la romanidad, poco romanizado y transformado (*cfr.* Pereira, 1988), y que encontraba en los *castella* un signo de su pervivencia e inmutabilidad. La aportación de la arqueología en un debate eventualmente circunscrito a la “Historia Antigua” permitió enriquecer desde una perspectiva diacrónica la desintegración de la sociedad castreña para construir un nuevo modelo social que se refleja en las nuevas dinámicas de poblamiento. Frente al “Castro” como asentamiento elevado y fortificado, cuya morfología se extiende con uniformidad en el espacio y el tiempo, se escondía sin embargo una amplia gama de situaciones y contextos tras su integración en el Imperio. Así es el caso de los castros que abarcan ambas secuencias cronológicas (los llamados “castros romanizados”), los nuevos castros asociados a las nuevas explotaciones auríferas (“castros mineros”), o los grandes *oppida* que florecen desde el periodo tardorrepblicano (Sastre, 2004; Sastre y Currás, 2016; Currás, Sastre y Orejas, 2016; Orejas y Sánchez-Palencia, 2016). Pero también otras formas de poblamiento, fundamentalmente orientadas a la obtención de mayores cotas de rentabilidad y producción, con el fin de dar respuesta a las nuevas exigencias tributarias en el marco de ordenación romano: los asentamientos en llano o en abierto, en el fondo del valle, algunas *villae* rústicas, los asociados al sistema viario, etc. El paisaje que se nos presenta es, en suma, múltiple en sus formas materiales de organización. De tal modo que en este cuadro resultante ni los *castella* se extienden por toda la zona “castreña” (en tanto que asentamiento fortificado), ni son los castros las únicas formas de poblamiento en la zona de mayor presencia de los *castella* epigráficos. Lo que tenemos, por el contrario, es un área rural con formas de poblamiento dispar que conviven a un tiempo, muchas veces disperso y sin esas “fronteras” bien definidas que llevaron a considerar el castro como unidad (de poblamiento, de ordenación), finalmente inmortalizado en los  $\mathcal{O}$ =*castellum* (Orejas y Ruiz del Árbol, 2010).

---

lenguaje fuera adaptado a las formas canónicas romanas para expresar su gobierno entre los *limici* como *Iivir*. De hecho, otras inscripciones posteriores la siguen mencionando, al igual que en Padrão dos Povos, simplemente como *civitas Limicorum*, como en las dedicatorias de época de Adriano (Sarreaus, Ourense *CIL* II, 2516) o incluso de Antonino Pío (Sarreaus, Ourense: *CIL* II, 2517), cuando lo normal es que hubieran recogido su rango municipal. En cualquier caso, se acepte o no la municipalización de los Límicos, resulta problemático establecer una relación casuística automática con la desaparición de los *castella*, pues los indicios de municipalización en el Noroeste resultan demasiado escasos. De algunas de estas cuestiones nos ocuparemos en el cap. 12.

Al estudio integrado de fuentes de distinto origen debe añadirse, por último, el sesgo que representa la función social de la epigrafía como elemento de visibilización eminentemente aristocrático. En zonas que, como el Noroeste, tienen una escasa implantación del modelo cívico-romano de organización, todo análisis epigráfico debe partir de este sesgo epistemológico (Sastre, 2007). La temprana epigrafía de *castella* (desde el 15 a.C. al siglo II d.C.) no debe erigirse, por tanto, en un indicador válido como fiel reflejo de todo el conjunto social, sino sólo para su minoría rectora (Sastre, 2001a). Esto llevó a una nueva vía interpretativa cualitativamente distinta a la anterior en relación con los *castella*. Mientras la problemática anterior iba dirigida a resolver un problema bifocal (en tanto que unidades de territorio o de parentesco), se propone entonces una lectura social de los *castella*, que en cierto modo integra transversalmente esta dimensión espacial y gentilicia para hacerla descansar en los esquemas de dependencia política y relaciones de poder (Sastre, 2001a: 161-98). Así pudo observarse cómo la tendencia general respecto al área de dispersión de los *castella* se relacionaba con las zonas con mayor jerarquización por la desigualdad social construida por influjo romano y no era extensiva a toda la región del noroeste hispano de un modo continuo (Sastre, 2001a: 186-98). Los *castella* bien podrían identificarse con los grandes *oppida* que encabezan algunas regiones desde el periodo tardorrepblicano, así como también con otros espacios rurales más discontinuos y difusos, aglutinando núcleos de distinta entidad y naturaleza (Orejas y Ruiz del Árbol, 2010).

En el seno de este debate surgió la lectura alternativa a  $\oslash$  como *centuria/censum*, si bien ha quedado ya en parte respondida por la propia deriva interpretativa sobre la lectura del signo y su naturaleza. La postura de partida planteada por Bermejo (1978-80) y continuada por Brañas (1995: 178-90) se fundamenta básicamente en que la administración romana habría tomado como referencia cada núcleo-castro y enviado un *censitor* encargado del registro directo de sus individuos para el pago del *tributum capitis* (recuérdese la analogía con Egipto). Dejando al margen la naturaleza de la capitación peregrina, a la que ya hemos dedicado especial atención anteriormente (cap. 4), es preciso descomponer el resto de argumentos e indicios sobre los que la teoría se apoya.

En primer lugar, la lectura es especialmente dependiente de la consideración de  $\oslash$  como *centuria*, designando en este caso unidades entendidas dentro de un acervo indoeuropeo y céltico coincidente, como serían los *hundred* en ámbito anglosajón, los *huntari* alamanes, los *centena* francos, etc. (vid. Brañas, 2004: 157-58). En el caso romano, este modelo estructuralista se habría desplegado en tres elementos básicos de carácter censitario: unidad político-fiscal primitiva (cien hombres de cada *curia*), porción del *ager* de 200 *iugera* (para el mantenimiento de cien familias) y unidad de reclutamiento. Siguiendo este razonamiento, dado que el esquema de pensamiento decimal no resulta nuevo en la concepción romana, se habría convertido de hecho en la unidad fiscal impuesta en el Noroeste tras la conquista, pues entronca con la propia formulación de las sociedades célticas. Esto, en última instancia, explicaría la supervivencia en los primeros tiempos del Principado de este modelo de organización

“indígena” instrumentalizado por Roma y adaptado a su sistema fiscal. Dejando al margen otros problemas, como los inherentes al celtismo o la documentada transformación social antes comentada, el autor no da una respuesta satisfactoria al hecho de que Roma imponga un modelo que se encuentra en total desuso y vacío de contenido durante todo el periodo que abarca la epigrafía de  $\mathcal{O}$ . Así es que por mucho que Augusto busque resucitar las *mores maiorum* dentro de su discurso de la *res Publica restituta*, ni siquiera la propia ciudadanía romana manifiesta la *centuria* dentro de su concepción colectiva de pertenencia, en donde seguirá siendo la *tribu* el elemento fundamental de adscripción. Siempre debe tenerse en cuenta que el *corpus* de  $\mathcal{O}$  es al fin y al cabo de carácter privado y, como tal, sugiere una manifestación personal de pertenencia, por ecos u paralelos que puedan vislumbrarse. Si la alusión personal a  $\mathcal{O}$  hubo de beber de algún molde romano en el Noroeste, éste sólo podría ser, a lo sumo, las  $\mathcal{O}$  y  $>$  de la epigrafía militar de la zona, expresando la dependencia y subordinación, en este caso, hacia un individuo (el centurión) como la que se produce, por ejemplo, en el esquema típico  $\mathcal{O}$  *Licini Clementis* (AE 1928, 180: Rosinos de Vidriales, Zamora; *cfr.* *HEp* 1, 298<sup>205</sup>), para ser después adaptada y transformada dentro de lo fenomenología social de la región (*castella*). Es decir, nada más alejado de esquemas vagos e uniformizantes del espectro social indoeuropeo, el signo  $\mathcal{O}$  en el Noroeste es una eclosión cultural *ex novo* como es la propia epigrafía en que se representa, en donde se toma un elemento prestigiado socialmente para ser releído desde una perspectiva local. Que en un contexto rural el ejército se torne en referencia cultural de primer orden, en un icono de la *romanidad*, no debe resultar sorprendente, pues la estandarización de los cánones militares a la élite civil de la sociedad provincial ya se ha documentado bien en algunos casos del Noroeste, como vemos por ejemplo en la epigrafía “estilo Picote” del área zamorana inspirada en las inscripciones castrenses (*vid.* Tranoy, 1981: 349-50; Beltrán, 2015). Por otra parte si, como vemos, la interpretación de Bermejo sólo se sustenta a partir del contenido filológico-histórico de la palabra *centuria/censum*, esta posibilidad se disuelve desde el momento que ha podido documentarse el  $\mathcal{O}$  *Aiobrigiaecum* (*HEp* 8, 334: Folgoso de El Caurel, Lugo) y los *castellani Aiobrigiaecini* del edicto berciano (*vid. supra*; Hernando, 2002).

Otra cuestión subyacente y de gran importancia es la entidad jurídico-administrativa que se concede a la  $\mathcal{O}$  como unidad fiscal y de reclutamiento, es decir, como *origo*. Esta parte, en el caso de la *centuria/censum*, de la propia polisemia del término latino que ya hemos comentado (porción de *ager*, unidad de reclutamiento, comunidad política). Es decir, con una naturaleza híbrida, no restringida al componente gentilicio de las primeras interpretaciones desde Schulten: “A resposta desas sociedades ás primeiras esixencias do Imperio, e dicir, a maneira en que as comunidades fixeron fronte ó pago dos tributos romanos e á leva de soldados, requiría unhas condicións precisas das que, ó noso parecer, daba boa conta a hipótese que defendía a organización centuriada das poboacións galaicas” (Brañas, 1995: 200). Este componente territorial compartido entre las distintas propuestas de lectura de  $\mathcal{O}$  (ya sea *castella/castrum/centuria/censum*), ha

<sup>205</sup> (=AE 1986, 340; Santa Eufemia, Córdoba): *Vedia*  $\mathcal{O}$  *l(iberta)* *Gorge an(norum)* *XVIII h(ic)* *s(ita)* *e(st)* *s(it)* *t(ibi)* *t(erra)* *l(evis)*.

llevado a muchos autores, desde la propia Albertos, a considerar estos espacios como una *origo*, es decir, unidades funcionales básicas con entidad jurídica reconocida por la propia Roma y sobre las que descansa el sistema tributario<sup>206</sup>. López Barja fue el primero en advertir la falta de rigor en la utilización de un término técnico como la *origo*, si bien lo mantiene dentro de esta faceta funcional: “las inscripciones con > invertida no son indicaciones de *origo* porque, obviamente, no se trata de ciudadanos romanos ni municipios, pero funcionan de un modo parecido, dado que expresan la vinculación administrativa y tributaria recogida en el censo” (1999: 356-57; *vid.* Olmo, 2016: 435).

Aunque la evolución de la *origo* no esté exenta de debate, existe un consenso general al considerarla como el indicador de la ligación político institucional del individuo con su *civitas*, su adscripción al *ius civitatis* de la comunidad y, con ello, al cumplimiento de sus *munera*. Así se ha reconocido de forma clara para los *municipia* y *coloniae civium Romanorum* de los que nos habla la jurisprudencia clásica, como el mismo Ulpiano al recordar su *origo* en la colonia de Tiro (*D.* 50, 15, 1, 0) o para los municipios romanos a propósito de su transmisión cuando los padres son *municipes* de distintas comunidades (*D.* 50, 1, 1, 2). También, más tarde, el comentarista de *Autum* sobre la obra gayana recordará el momento en que ser *civis Romanus* equivalía a pertenecer a la *civitas* de Roma dentro del ámbito Lacial (*ex Latio origo: Frag. Augustodunensia* I, 6), territorio en que se hacían eficaces sus derechos por aquel entonces. Pero en tanto en cuanto la *origo* indica la adscripción a la *civitas* como unidad fiscal y de derecho, es decir, el vínculo que establece las obligaciones del individuo con su comunidad, también puede aceptarse su uso para otros casos. Así por ejemplo García ha observado la acusada relación de estos indicadores de *origo* y el cumplimiento de sus *munera* en la legislación de algunos municipios latinos de la Bética (García, 1991: 164-193). Aunque en ningún caso se explicita como *origo*, este principio metodológico resulta especialmente elocuente en el caso de los *munera* de los libertos (cuyas obligaciones y derechos son directamente dependientes de la *origo* de su patrono o, más si cabe, si proceden de una situación de esclavitud pública). Ello permite, por otro lado, retrotraer su fundamento al menos hasta finales del siglo I d.C. en vez de circunscribirse al periodo post-clásico o a la legislación de época Severa, que es cuando la *origo* recibe una mayor atención por parte de la jurisprudencia. En este sentido de marco comunitario que conlleva una serie de derechos y obligaciones inherentes al *ius civitatis*, la *origo* puede considerarse extensiva, como ha defendido Nörr y otros autores, también a las *civitates peregrinae* (*vid.* González y Molina, 2011: 11), pero nunca a fracciones internas de ésta. Desde el momento en que las comunidades peregrinas son censadas para el fisco, y sus miembros incluidos en una *civitas* de adscripción como se observa en Flegonte, ya funciona la *origo* y no el *domicilium* (variable) como el vínculo que relaciona al individuo con una comunidad determinada, independientemente del lugar

---

<sup>206</sup> En esta línea, para González la ausencia de territorialidad dentro de la “zona de *gentes*”, convertiría a los *vicus* en indicadores de *origo*: “La carencia de connotaciones territoriales obliga a las *gentes* a precisar la *origo* mediante la mención del *vicus*” (1986: 94-95).

en el que habite<sup>207</sup>. La interpretación de  $\oslash$  como indicador de *origo* tiene, en suma, una serie de implicaciones en materia tributaria y administrativa que, sin embargo, entran en directa confrontación con la documentación existente por varias razones.

En primer lugar, un considerable número de estas inscripciones mencionan de un modo u otro la *civitas* en la que se integran, lo que carecería de sentido si los  $\oslash$  se concibieran como unidades de funcionamiento al margen de escalas más amplias. Este es un fenómeno, como se ha dicho en numerosas ocasiones, que suele ocurrir cuando el difunto fallece alejado de su lugar de origen. Así varios individuos de los  $\oslash$ Arcucis (HEp 2, 809),  $\oslash$ Berensis (HEp 1, 355),  $\oslash$ Talabrica (CIL I, 24) expresan su pertenencia a la *civitas Limicorum* que conocemos por otros testimonios (Plin. NH., 3, 28; Ptol. 2, 6, 43; Hyd. Chron. pref., 1; CIL II, 434; 2477; 2496; 3034; 5953; 4963; 2516; IRG IV, 1); las tres mujeres, Fusca, Eburia y Apana de los  $\oslash$ [E/B]laniobrense (HEp 7, 375),  $\oslash$ Lubris (HEp 7, 388) y quizás  $\oslash$  Miobris (HEp 7, 397) respectivamente, dicen ser de la comunidad de los *Celtici Supertamarci* (Plin. NH., 4, 111; Mela 3, 11; IRPLe 102 y 104); también en la *civitas Lougeiorum* se enmarcan los *castellani Toletenses* de El Caurel (*cum Lougei*: HEp 8, 334), del mismo modo que el  $\oslash$  Aiobrigiaeco al que pertenece Tillegus lo hace como Susarrus (*ibidem*; vid. HEp 7, 378) en este mismo pacto de *hospitium* y clientela; también al ámbito de la comunidad de los Albiones (Plin. NH., 4, 111) nos remite probablemente Nigrinianus, del  $\oslash$  Ercoriobris (CIL II, 2711=ERAs. 59), y un *princeps Albionum* del  $\oslash$  Cariaca (ERAs 14; AE 1946, 121); también el  $\oslash$  Circine (AE 1946, 122) se imbrica muy probablemente en la conocida comunidad de los Copori (Plin. NH., 4, 111; Ptol. 2, 6, 23) pues el segundo difunto dedicado de esta inscripción se menciona como *Princeps Coporum*, además del lugar del hallazgo (en las murallas de *Lucus Augusti*), que nos remite a un lugar cercano a la capital conventual, en donde se tiende a ubicar esta comunidad. En esta misma línea deben considerarse otros, pertenecientes a otras comunidades peor conocidas: como el  $\oslash$ Eritaeco de la *civitas* de los Lemavi (ERPLe 155=AE 1982, 575; vid. Plin. NH., 3, 28; Ptol. 2, 6, 25), que aparece también como zona de procedencia de unidades militares (CIL II, 2103; HEp 1, 214); los  $\oslash$  Narelia (CIL II, 6290) y  $\oslash$  Serantis (AE 1934, 19) perteneciente a la comunidad de los Seurri y/o Seurri Transminienses (Ptol. 2, 6, 27; IRPLe 135); el  $\oslash$  Berisamo que se reconoce como parte de la comunidad de los Cileni (IRG 1, 20) asociados a *Aquae Calidae* y *Aquis Celenis* (Ptol. 2, 6, 26; Plin. NH., 4, 111; Hyd. Chron., 32; CIL II, 2649); el  $\oslash$  Ses(maca?) de la *civitas* de los Aurienses (HEp 2, 579; vid. CIL II, 5613; 6098); el caso de Ladronus del castel[lo] Durbede, que expresa mediante su *cognomen* su pertenencia a la *civitas Bracaraensis* (HEp 14, 419); también el  $\oslash$  Berisum se integra en la comunidad de las Cabarci/Cibarci que menciona Plinio (NH., 4, 111). También es posible que sea el caso de otros testimonios más inseguros, como quizás el  $\oslash$  Nem[---] de los Tamagani (HEp 2, 521; cfr. HEp 2, 518); el posible  $\oslash$  Verio de la comunidad de los Grovii a partir del *cognomen* Grov[i]us que le antecede

<sup>207</sup> Evidentemente con *civitas* nos referimos, como hemos hecho a lo largo de todo el trabajo, a un marco administrativo de carácter territorial impuesto por Roma, en la misma lectura de *politikoùs* que ya se aprecia en Estrabón (3, 3, 8) como bien advirtió Pereira: “a saber, crear una *polis* allí donde no existe; convertir a un pueblo en algo semejante a una polis, a una *civitas*” (1988: 247). No debe por tanto inferirse una relación, como a menudo se hace, entre el establecimiento de una *civitas* como marco de ordenación y el desarrollo del urbanismo (vid. e.g. Lomas Salmonte, 1996).



como es común; el ejemplo, análogo al anterior, del  $\oslash$  *Saqua* cuya difunta consta del *cognomen Caladuma* (CIL II, 2487), que podría corresponder con la comunidad de los *Caladumi*, sin más testimonios epigráficos; el  $\oslash$  *Nacosos* de la *civitas* de los *Arbuenses*, de complicada lectura (vid. HEp 16, 679) o el muy fragmentario  $\oslash$  [...]oc, al que le podría anteceder la mención a una *civitas*, desconocida, en forma de gentilicio *Alesi*[...]e (ERAs 60a). Incluso algunos que aparecen mencionados en las fuentes escritas, como el *castellum Tude* (Tuy, Pontevedra) que menciona Plinio y adquirió cierta preeminencia local a juzgar por algunos miliarios (vid. Sastre et al. 2017: 544-46), son adscritos dentro de la *civitas* de los *Grovii* (NH., 4, 112).

De hecho, puede comprobarse de un modo sistemático cómo la mención de *civitas* en acompañamiento al *castellum* se produce siempre en aquellas inscripciones funerarias cuyo lugar de hallazgo se sitúa fuera de los contornos asignados al *populus* al que se refieren<sup>208</sup>:

Nº de inscripciones funerarias con indicación de <i>origo</i> : 23	<i>Origo</i> junto a mención de $\oslash$	<i>Civitas</i> probable a partir del lugar del hallazgo	Ref. corpus
	<i>Albiones</i>	<i>Cabarci, Vadinienses</i>	23, 24
	<i>Arbuenses</i>	<i>Interannienses</i>	25
	<i>Aurienses</i>	<i>Tiburi</i>	26
	<i>Bracaranse</i>	<i>Metalla de Vipasca</i>	27
	<i>Cabarci</i>	<i>Paesici</i>	28
	<i>Caladuni/Caladumi</i>	<i>Aquae Flaviae, metalla de Río Tinto.</i>	29, 57
	<i>Celtici Supertamarci</i>	<i>Urbs Asturicensis, Urbs Asturicensis/Amaci, Lucus Augusti</i>	30, 31, 32
	<i>Cileni</i>	<i>Neri/Celtici Supertamarci</i>	33
	<i>Copori</i>	<i>Lucus Augusti</i>	34
	<i>Grovii</i>	<i>Caurium</i>	37
	<i>Interamici</i>	<i>Lougei</i>	39
	<i>Interam[ici]/Interam[nienses]</i>	<i>Arucci/Turobriga</i>	38
	<i>Lemavi</i>	<i>Urbs Asturicensis</i>	41
	<i>Limici</i>	<i>Ocelenses Lancienses, Metallum de Sotiel-Coronada, Turobriga</i>	42,43, 44
	<i>Seurri/Seurri Transminienses</i>	<i>Lucus Augusti, Zoelae, Zoelae</i>	8, 46, 47.

Fig. 13 Tabla sintética de menciones de *origo* y *castella* en relación al lugar del hallazgo.

Evidentemente no es posible comprobar con seguridad si los testimonios de  $\oslash$  que no registran su comunidad deben considerarse una mención de procedencia *intra civitatem* o no, por razones obvias. Sin embargo su dispersión general nos invita a pensar que es así, pues en su práctica totalidad fueron encontrados en las regiones con mayor presencia de  $\oslash$ , es decir, permite suponer que tomaron sepultura en su interior haciendo trivial la referencia a su comunidad. De otro modo, y en sintonía con la interpretación como unidades administrativas y *origines* en sentido técnico, deberían aparecer también en lugares alejados sin el reconocimiento a la *civitas* de pertenencia. La única anomalía la encontramos en una inscripción hallada en Colonia<sup>209</sup> (Alemania: CIL XIII, 8098=AE 2002, 1034) de un auxiliar peregrino, *Pintaius*, que sin recordar su *civitas*, alude con la forma menos habitual el *castellum Intercatia* del que procede. Esta

<sup>208</sup> La siguiente información se ha construido a partir de la tabla (vid infra) en donde se aborda la cuestión de forma detallada. De este cómputo se han excluido las menciones a *civitas* y *castella* que no sean de carácter funerario, así como las que se presentan con la fórmula *domo castella* que serán abordadas más adelante.

<sup>209</sup> La problemática inscripción (vid. nº 50 de la tabla) a mi parecer sólo puede tratarse de una *centuria* castrense.

única excepción, que difícilmente puede suponer una enmienda a la totalidad, puede explicarse fácilmente por el contexto, optando por la referencia más genérica y mejor conocida de *Astur transmontanus* en sustitución de la *civitas* (l. 2) dada la lejanía respecto a su lugar de procedencia, además de por poseer más significación también para la cohorte *V Asturum* en la que actuaba. Por el contrario, *Intercatia* (que designa excepcionalmente como *castellum* en vez de  $\oslash$  para evitar la confusión con la *centuria* militar) sigue representando el vínculo afectivo a nivel local sin necesidad de presuponer entidad de tipo administrativo o fiscal.

La alusión u omisión a la *civitas* no representa, en suma, dos momentos distintos en los ritmos respectivos de integración<sup>210</sup>, sino un fenómeno interno que en el seno de la *civitas* aparece desde el temprano periodo post-conquista hasta un punto indeterminado del siglo II d.C.

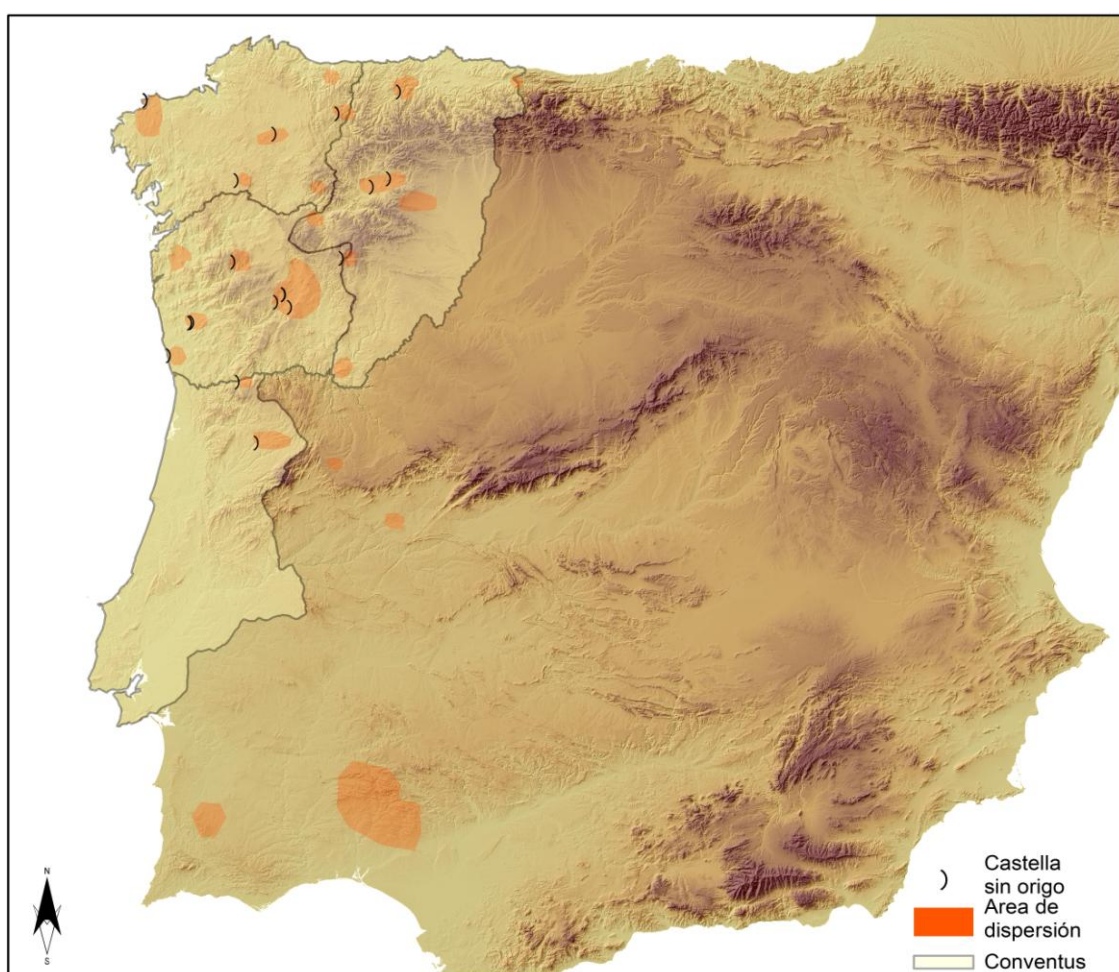


Fig. 14. Dispersión de los *castella* epigráficos en función de la indicación de *origo*.

Si la *origo* no debe reconocerse para fracciones internas de la *civitas*, por sus connotaciones en materia administrativa y tributaria, en el caso de los  $\oslash$  (ya sean leídos como *centuria/census* o *castella*) esto se aprecia con bastante claridad cuando se relacionan con la documentación que remite a la articulación fiscal comunitaria.

<sup>210</sup> Esto puede apreciarse, por ejemplo, en el criterio de indicación de *origo* como argumento para datar inscripciones en el siglo II d.C.

El caso más claro lo encontramos en la *civitas* de los *Interamici* mencionada en Padrão dos Povos como tal (*CIL* II, 2477) y como *Res P(ublica) Int(eramicorum)* (*HEp* 3, 277). Esta *civitas* cuenta además con otras menciones de *origo* en la epigrafía funeraria que, sin referir *castellum* alguno, probablemente podrían datarse ya en el siglo I d.C. por la ausencia de la *adprecatio* a los Manes (*CIL* II, 5637; *CIL* II, 2730; Colmenero, 1997 n° 236), así como otras del siglo II d.C. (*HEp* 2, 609; *CIL* II, 826; Colmenero, 1997, n° 310)<sup>211</sup>. Es decir, en primera instancia convive la simple referencia a la *civitas* para un periodo en que sabemos existen también menciones de  $\bigcirc$  para esta comunidad. Así es el caso de las inscripciones que ahora nos interesan, que al igual que las anteriores, mencionan los  $\bigcirc$  como parte integrante de la *civitas*: *Interamicus exs*  $\bigcirc$  *Louciocelo* (*IRPLe* 222) e *Interam[icus] ex*  $\bigcirc$  *Ca[---]*<sup>212</sup> (*HEp* 3, 200). A ello debe añadirse la propuesta de lectura de Pereira en una inscripción rupestre, ya citada (*vid. supra*), que él interpretó como: *s(altus) t(erritorium) p(ublicum) / (Castelli) Int(...?) com(prehensus) ci(vitate) I(nteramici)\*<sup>213</sup>* (Pereira, 1982: 252-55), y que ha sido apuntada como una de las pruebas para reconocer un *ager* propio y reconocido por Roma para los  $\bigcirc$ . Sin embargo, a la hora de una interlocución en materia fiscal con Roma prima el marco global de la *civitas* y no sus elementos internos. Así lo demuestra el importante testimonio de *Quintus Licinius Vegeto*, un aristócrata local que asume las deudas impuestas sobre el conjunto de la comunidad de los *Interamici*, que es la entidad que cobra sentido para el fisco romano (*cum fisco*): *Q(uinto) Licinio Veget[o] / res p(ublica) Int(eramicorum) / super alia con/plura merita / pares cum fisco / rationes infati/gabili cura et / industria eius / consecuta* (*HEp* 3, 277; Le Roux, 1989).

Aunque en el caso anterior estemos limitados por las dificultades inherentes a la datación de la inscripción, en principio no debe presuponerse de forma automática un cambio asociado a su estatuto jurídico por el simple hecho de recoger una interlocución fiscal entre la *civitas* y el *fiscus* romano. De hecho tampoco constituye indicio de municipalización que esta comunidad se reconozca como *Res P(ublica) Int(eramica/Interamicorum)*, pues “le vocable s’appliquait à toutes les communautés, quel que fût leur rang. Une république, indépendamment de son statut juridique, supposait seulement la gestion de biens collectifs, d’un patrimoine ou d’un trésor

<sup>211</sup> Sólo se han tomado en consideración las que pueden asignarse con más probabilidad a los *Interamici* bracarenses, pues algunas podrían corresponder también a *Interamnium Flavium*, que en ocasiones expresa su gentilicio mediante el homónimo *interamicus*. De hecho existe una confusión constante en el tratamiento de estas inscripciones, que la historiografía no ha hecho más que ampliar y reproducir.

<sup>212</sup> Este segundo caso se trata además de un indudable ciudadano romano, con *tria nomina* y perteneciente a la *tribu Galeria*. Supone un caso interesante de *civis romanus*, cuya indicación de tribu nos remite a concesiones *viritim* de época augustea (*vid. Vidal*, 2007: 230) en convivencia con los primeros *castella*.

<sup>213</sup> Pereira los nombra como *Interamnienses* por la recurrente confusión antes mencionada (*vid. nota supra*). Sin embargo piensa sin duda en los *Interamici* a los que nos estamos refiriendo (y no a *Interamnium Flavium*), pues “la lectura *ci(vitas) I(nteramniensis)* parece plenamente justificada por la distancia entre el lugar de hallazgo de la inscripción que comentamos, en Enxames-Vilardevós, y el lugar de hallazgo de una inscripción dedicada por la *res p(ublica) Int(eramniensis)*, Asadur en la provincia de Orense [...] unos 60 km en línea recta” (el subrayado es mío; Pereira, 1982). Sobre esta segunda inscripción en la que se apoya “L’abréviation de la deuxième ligne INT à donné lieu à une hésitation entre *Int(eramnica) et Int(eramniensis)*. L’épigraphie hispanique n’autorise pourtant pas d’autre solution que la forme *Interamicus* seule usitée” (Le Roux, 1989: 341). Para lo que ahora nos interesa, independientemente del nombre que se le asigne, lo importante es reconocer todos estos elementos relacionados con los *castella* en el seno de una misma comunidad para su análisis de conjunto.

public, au nom du *populus*” (Le Roux, 1989: 350). Por tanto, en principio, nada tiene por qué cambiar en relación a la *civitas* como unidad fiscal, sea anterior o posterior al periodo de expresión de los  $\mathcal{O}$ .

Esto queda comprobado con la segunda relación explícita entre *castella* y obligaciones fiscales en el Edicto de El Bierzo del 15 a.C., es decir, en el inmediato periodo post-conquista. En su segunda parte se menciona la petición de los *Susarri* para que los *castellani Aiiobrigiaecini* contribuyan a su *civitas* como anteriormente habían hecho los *castellani Pameiobrigenses*, y hablando explícitamente de *munera*: *om/ni munere fungi iubeo cum / Susarris* (HEp 11, 286, l. 20-22). La *civitas* de los *Susarri* se articula como unidad de *munera*, y es de hecho la que de nuevo interactúa con los poderes centrales (*volente ipsa civitate*). Esto subraya todo lo que hemos venido afirmando en las páginas precedentes. Por un lado, que los *castella* sólo cobran sentido como parte integrante de un entorno jurídico único, y uniforme, como es la *civitas* a la que pertenecen. Una relación que ya se expresa desde las primeras intervenciones romana en la ordenación del territorio del Noroeste. Por otro lado, reincide en lo inapropiado de relacionar la noción de *origo* con *castellum* para reconocer en él una unidad fiscal y de derecho. Como decíamos, el término *origo* pocas veces es expresado de un modo explícito y, podría decirse, está mucho más presente en la historiografía contemporánea que en los textos clásicos. De hecho sólo a partir de época Severa, y sobre todo en el derecho post-clásico, es cuando empieza a tomar relevancia su concreción jurídica rigurosa. Por tanto, si aceptamos el uso del término para el periodo alto-imperial dentro del terreno puramente metodológico, sólo cobra sentido para las *civitates* (municipios, colonias o comunidades peregrinas) en tanto en cuanto sirve para expresar un marco jurídico común reconocido por Roma del que destilan los derechos y deberes individuales, como son los *munera* a los que estos *castellani* han de contribuir *cum Susarris*.

Para finalizar, hay dos inscripciones en donde convive la referencia a  $\mathcal{O}$  y *domo*. Ambas se interpretaron en primera instancia para rubricar esta relación de  $\mathcal{O}$  con lugares concretos (normalmente castros), tal y como refleja el término *domus*, que complementaría y refuerza al *castellum* como este “lugar” en que el individuo vive. Pero sobre esta primera aproximación se han propuesto también otras versiones que es preciso analizar, de nuevo tendentes a esta consideración de  $\mathcal{O}$  como unidades de referencia para el sistema administrativo romano, y basadas en la contraposición entre *origo* y *domicilium*:

IRG IV, 119 (Santa María de Trives, Ourense): *Popillius Hi/rsutus Flavi Ve/ndieci f(ilius) Lanci(ensis)  $\mathcal{O}$  domo Va/coeci an(norum) XXXII / h(ic) s(itus) e(st)*.

CIL II, 2433 (S. Martinho de Dume, Braga): *Apil(us) / Arqu(i filius) / Mun(...) / Perifu(...) / Pen(...) d(omo) /  $\mathcal{O}$  Acrip(ia) / h(ic) s(itus) e(st)*

Por un lado, Bermejo observa en la primera de estas inscripciones una reduplicación totalmente innecesaria con los términos *castello-domo* para indicar el lugar, de modo que “Si por el contrario se lee el término como *centuria* no se produce

una reduplicación de conceptos, sino una superposición de dos términos que indican la localidad según la tradición indígena y la latina” (1978-80: 105). Los *Vacoeci* serían, en suma, los habitantes de un castro cuyas obligaciones fiscales son establecidas a partir del *domicilium* dentro del componente territorial de la *centuria* céltica, cosa que como vimos debe desecharse si desde un primer momento sus *munera* no dependen del lugar de habitación, sino de la ligazón jurídica contraída con su *civitas* y recogida en el censo. Si aceptamos el desarrollo de la segunda de estas inscripciones (que Bermejo no tiene en consideración, además del edicto del El Bierzo, aún por descubrir en ese momento), el añadido *domus* tampoco parece servir como refuerzo sinonímico simplemente para expresar esa idea de “lugar” (como quería Albertos para consolidar la tesis territorialista de los *castella*) a través de una nomenclatura latina e indígena. Por el contrario, parece más apropiado pensar en un interés por reflejar su calidad de *incola* a través de la expresión de su residencia, pues la indicación *domo* sería banal si pertenece (tanto él como su  $\oslash$ ) a la *civitas*.

Esto puede observarse mediante el contraste de *CIL* II, 2433 con *HEp* 4, 1.011<sup>214</sup>, pues ambas inscripciones mencionan el  $\oslash$  *Acripia*. Las dos se han hallado en lugares muy cercanos entre sí (Dumes y Avelar), y sin aparente referencia a la *civitas* a la que pertenece el *castellum*. Es decir, lo más probable es que su fallecimiento se hubiera producido dentro del territorio de la *civitas* y el  $\oslash$  *Acripia* pertenezca a ésta (seguramente *Bracara*, que cuenta con otro testimonio de *castellum*: *AE* 1973, 303). Sin embargo, ¿por qué *CIL* II, 2433 la refiere como *domo* mientras *HEp* 4, 1.011 se limita a mencionarla como  $\oslash$  *Acripia*? La única hipótesis convincente a menos que banalicemos la referencia a *domus* es que *Apilus* procediera de otra *civitas*, a la que podría aludir en alguno de los términos anteriores, como *Perifu(...?) Pen(...?)*, o ni siquiera la incluyera, pero sí recogiera su condición de *incola* simplemente mediante la indicación de su residencia, *domo* $\oslash$ , pues la mención a la *civitas* a la que pertenece el  $\oslash$  *Acripia* se trivializa en su interior como estamos viendo. El *domicilium* como tal, en tanto que posible ligazón jurídica que le proporciona su condición de *incola*, sólo cobra sentido en el nivel de la comunidad de *Bracara*, por mucho que sea el producto, en sentido no técnico, de la ‘residencia’ en algún punto de su interior (*vid.* González Fernández, 2011).

Otra lectura sobre la primera de las inscripciones, la de *Popillius Hirsutus* (*IRG* IV, 119; *vid supra*), nos lleva a estas mismas conclusiones como veremos. Antes es preciso comentar la interpretación de López Barja, que consiste en reconocer a los *castella* como *cuasi-origines* y unidades de referencia censuales; por ello, considera que en este epígrafe “la indicación de *domo* designa la *origo* en contraposición al domicilio” (1999: 357 y n. 21). El objetivo nuevamente es que los *castella*, en tanto que núcleos de poblamiento donde la residencia ata al individuo con el fisco (los castros que Roma tomaría como patrón para el censo), se expresan en este caso con el término *domo*, que equivale a la *origo* por tanto. Los *Lanci(enses)* serían, desde esta perspectiva, el *populus* en donde *Popillius Hirsutus* tendría su domicilio, mientras su *origo* seguiría siendo el

<sup>214</sup> *Arquius / Viriati f(i)lius /  $\oslash$  Acripia / h(ic) s(itu)s est / Melgae/cus Pelisti / monument(um) posu(it)* (=CIL II, 2435).

*castellum Vacoecus*. No queda claro, sin embargo, qué relación existe entre los *Lancienses* y el *castellum Vacoecus*, si pertenece a éste o no, pues en efecto no están documentados *castella* en el ámbito territorial de este *populus*. Pero, sobre todo, surgen dudas sobre por qué el criterio de residencia se impone sólo para considerar su *domo castello* como *origo*, pues siguiendo este mismo razonamiento, la perdería en el momento en que cambia de domicilio a la *civitas* Lanciense. Si por contrario, como deja entrever, este criterio de residencia en  $\oslash$  se pierde al transmitirse por herencia ¿qué sentido tiene incluir la fórmula *domo* acompañando a  $\oslash$ ?. Considero que una interpretación más natural y en coherencia con todo lo visto anteriormente aparece si tenemos en cuenta simplemente el lugar del hallazgo de la inscripción. Éste nos remite a Santa María de Trives (Ourense), un lugar suficientemente alejado como para reconocer una *origo extra civitatem*, que sólo puede ser Lanciense por haber fallecido fuera de los contornos de su *civitas*. A mi modo de ver, lo que busca reflejar la alusión  $\oslash$  *domo Va/coeci*, a la manera que *Api(lus)* se dice *d(omo)  $\oslash$  Acrip(ia)*, es el ámbito local en el que vive, el domicilio de residencia, sin implicaciones administrativas de ningún tipo, como ya hemos explorado. La *civitas* a la que  $\oslash$  *Vacoeci* pertenece no se menciona por estar precisamente en su interior, seguramente los *Lemavi* o *Interamici*, cercanos al lugar del hallazgo y con otros *castella* documentados. Entre ellos habitaría en calidad de *incola* (extranjero) sin perder su *origo Lanciense*, tomando sentido entonces la precisión *domo*.

<i>Origo</i>	<i>Residencia</i>	<i>Civitas de pertenencia de <math>\oslash</math> según el lugar del hallazgo</i>	<i>Domicilium en calidad de incola</i>	<i>Lugar del hallazgo</i>	<i>Ref. epigráfica (nº corpus)</i>
<i>Lanciense</i>	$\oslash$ <i>Domo Vacoeci</i>	<i>Tiburi</i>	<i>Tiburi</i>	Santa María de Trives (Ourense)	<i>IRG</i> IV, 119 (nº 40)
<i>Pen(...?)</i>	<i>D(omo) <math>\oslash</math> Acripia</i>	<i>Bracara</i>	<i>Bracara</i>	São Martinho de Dume (Braga)	<i>CIL</i> II, 2433 (nº 2)

Fig. 15. Tabla sintética de las menciones a *castellum* + *domo*.

Estas indicaciones del lugar de residencia, sin carácter técnico, no dejan de ser normales si interpretamos el *corpus* de *castella* como inscripciones de carácter funerario, privado, y, por tanto, sujetas a la forma por la que el individuo opta por expresar un determinado sentimiento de pertenencia; están, en suma, sesgadas por sus preferencias afectivas. Unas veces podría coincidir con su *origo*, como ocurre con el desplazado *Labilius Sabinus* (Las Valeras, Cuenca: *CIL* II, 3182) que recuerda “su casa” entre los Límicos: *d(omo) Lim(icus)*. Otras, dentro de un contexto más local, podrían referir simplemente a la casa familiar, como la que recogen dos dinteles del castro de Sanfins: *Coroneri Camali domus* y *Camali Domi / Caturro* (vid. Silva, 1986; Sastre, 2001a: 197-98).

Desde estos presupuestos se hace mucho más natural la interpretación y lectura de algunos epígrafes con mención al *castellum* vinculados a este sentido de casa o domicilio de residencia. Así ocurre, por ejemplo, con una inscripción aparecida en la



muralla de Lugo que cuenta con una importante abrasión en su superficie, lo que ha fomentado importantes variantes de lectura. Entre ellas, y con bastante acogida (*vid.* Crespo Ortiz de Zárate, 2009-2010: 76), destaca la propuesta de lectura del  $\bigcirc$  *Laedies* con el significado de *castro vel casa* (Ares Vázquez, 1995), con el fin de señalar el tipo de dependencia de los cuatros niños honrados: bien como esclavos comunitarios del castro *Laedies* (identificado a su vez desde el criterio toponímico con el castro de Laxo), o bien como esclavos de *la casa*. De este modo “el contenido del texto abre nuevas perspectivas sobre las formas de dependencia y sobre los métodos de inscripción censual”:

*HEp 6, 636 (Lugo): Martialis an(norum) X / Loveus an(norum) IX Paternus / an(norum) IIII s(ervi) e(x)  $\bigcirc$  (castellum/castrum/casa) Laedie(n)s(i) / Gemel(l)inus Flori filius*

Si tenemos en cuenta el contexto del hallazgo y los criterios que se han seguido<sup>215</sup>, la lectura de la inscripción puede reconducirse en este mismo sentido sin inferir modelos excepcionales en el contexto del Noroeste hispano como la esclavitud, y menos aún con los problemas interpretativos que genera esta versión comunitaria de “esclavos públicos” dependientes de un castro. Dicho esto, considero que una interpretación más apropiada resulta de desarrollar “se” de la tercera línea como “*se(urri)*”, por varias razones<sup>216</sup>. Por un lado, porque se ubica en la situación más común para la indicación de la *origo*, muchas veces abreviada e inmediatamente antes del  $\bigcirc$  en el que concreta de un modo más específico su lugar de pertenencia. Seguiría una estructura análoga a la que encontramos en *Auri(ensis) exs  $\bigcirc$  Ses(maca)*, *Bracarus castell[lo] Durbede*, *Cabarcus  $\bigcirc$  Beriso*, *Celtica Superta(marica)  $\bigcirc$  Lubri*, *Grov[i]us  $\bigcirc$  Verio*, entre otros ejemplos (*vid.* tabla *infra*). De hecho, esta *civitas* cuenta con otros testimonios de *castella* que siguen además esta misma sucesión de elementos: *Seur(r)us  $\bigcirc$  Narelia* (CIL II 6269) y *Seurra Trans(miniense) exs  $\bigcirc$  Serante* (AE 1934, 19). Lógicamente en la elección de la *civitas* seurra prima el criterio de cercanía, a pocos kilómetros de la capital conventual, más probable que otras *civitates* candidatas, como podrían ser los *se(urbi)* bracarenses, sin ningún testimonio de *castella* por otra parte. El lugar del fallecimiento de los niños en *Lucus Augusti* explica, en suma, la referencia a su origen *extra civitatem* y al *castellum* donde habrían habitado, pues ni siquiera se podrían denominar *incolae* propiamente dichos (de ahí que no se refiera *domo*), sino personas de paso por la capital conventual que encontraron allí su sepultura. La reconstrucción propuesta sería la siguiente:

*Martialis an(norum) X / Loveus an(norum) IX Paternus / an(norum) IIII Se(urri)  $\bigcirc$  Laedies / Gemel(l)inus Flori filius.*

<sup>215</sup> Básicamente, que la indicación de *civitas* junto al *castellum* se suele realizar fuera del lugar de origen y que el significado de *domus* relacionado con  $\bigcirc$  sólo cobra sentido en situaciones concretas de “incolado” cuando el difunto muere fuera de su *civitas* de *origo* y sólo menciona el  $\bigcirc$  en que vive, sin referir la *civitas* de adscripción de  $\bigcirc$ .

<sup>216</sup> La propuesta *IRPLu 31* no ha reparado en esta posibilidad por la interpretación de una interpunción entre S-E, que sin embargo, no parece concluyente dadas las pequeñas perforaciones que se presentan en todo el campo epigráfico a causa del deterioro fomentado por la abrasión de su superficie.

Los *castella* fueron, en suma, un fenómeno particular del Noroeste y, sin duda, un producto del profundo proceso de transformación de la sociedad. No es necesario ver en ellos el resultado de un *civitas* disfuncional que debe ser paliada con unidades menores., simplemente por el medio rural en que se produce. El análisis de las anteriores páginas creo que aporta nuevos argumentos para entender que los *castella* sólo cobran sentido en el marco de la *civitas* que los da forma y los genera como resultado de la necesaria construcción de vínculos cohesionadores entre sus élites sociales.



N <sup>217</sup>	Texto completo	Tipo	⌋ / Castellani	Mención de origo	Civitas de ⌋	Civitas/tes probable(s) de ⌋ según el lugar del hallazgo <sup>218</sup>	Origo extra civitatem (y civitas probable en cuyo interior se menciona <sup>219</sup> ):	Lugar del hallazgo	Ref. Ep.
1	Arquius Viriati f(ilius) e(x) ⌋ Acripia h(ic) s(itus) e(st) Megaecus Pelisti monument(um) posu(it)	Funeraria	E(x) ⌋ Acripia	No	No consta	Bracara		Avelar (Braga).	CIL II 2435; HEp 4, 1011
2	Apil(us) Arqu(i) filius Mun(...) Perifu(...) Pen(...) d(omo) ⌋ Acrip(ia) h(ic) s(itus) e(st)	Funeraria	D(omo) ⌋ Acripia	Insegura: Mun (...) Perifu(...) Pen(...) ?)	No consta	Bracara	Sí (Bracara)	São Martinho de Dume (Braga).	CIL II 2433
3	Bodocena Aravi f(ilia) ⌋ Agubri an(norum) XII h(is) s(ita) e(st)	Funeraria	⌋ Agubris	No	No consta	Paesici		Villaverde, (Belmonte de Miranda, Asturias)	HEp 5, 39; AE 1996, 891
4	C(aius) Caielianus Modestus castellanis Aracoelensibus d(onum) d(edit)	Honorífica	Castellani Aracoelenses	No	No consta	Interamnienses		São Cosmado (Mangualde, Viseu)	AE 1954, 93
5	I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ⌋ Aviliobris pr(o) salute	Votiva	⌋ Aviliobris	No	No consta	Neri/Artabri		Cores (Ponteceso, A Coruña)	HEp 4, 344; AE 1984, 552; AE 1992, 997
6	S(altus) T(erritorium) P(ublicum) ⌋ Int(...) Com(prehensus) Ci(vitate) I(nteramici)	Rupestre	⌋ Int(...?).	Insegura	Ci(vitate) I(nteramici)			En el robledal del Val de Castiñeiros, Enxames (Vilardevós, Ourense).	Pereira, 1982: 252-55;
7	Pintaius Pedicili f(ilius) Astur Transmontanus castel(l)o Intercatia signifer c(o)ho(rtis) V Asturum anno(rum) XXX stip(endiorum) VII h(eres) es t(estamento)	Funeraria	Castellum Intercatia	No	No consta	Civitas indeterminada del conventus Asturum		Colonia (Alemania)	CIL XIII 8098
8	Martialis an(norum) X Loveus an(norum) IX Paternus an(norum) III Se(urri) ⌋ Laedies Gemel(l)in(us) Flori filius	Funeraria	Laedies	Sí	Seurri		Sí (Lucus Augusti).	Muralla de Lugo	IRPLugo 31; HEp 6, 636;

<sup>217</sup> Se ha seguido el orden alfabético y parte del contenido del *corpus* recogido en: Orejas y Ruiz del Árbol, 2010, ampliado y desarrollado en esta tabla.

<sup>218</sup> Así se considera metodológicamente por ser más probable en tanto en cuanto la *origo intra civitatem* suele obviarse en el interior de la comunidad. En algunos casos se aplican otros criterios.

<sup>219</sup> Se aplican los mismos criterios que los indicados antes (*vid. nota supra*).

9	<i>Albura Caturonis f(ilia) O Letiobri ann(or)um LXX h(ic) s(ita) e(st)</i>	Funeraria	O Letiobris	No	No consta	Bracara		Braga (Braga)	AE 1973, 303
10	<i>Medamus Arcisi f(ilius) hic situs est castel(l)o Meidunio monumentum fecerunt (castellani?) Ancondei amico caro</i>	Funeraria	Castellum Meidunio	No	No consta	Coelerni		Santiago de Cadós (Bande, Ourense)	CIL II 2520; IRG IV 130
11	<i>D(is) M(amibus) Lucila Vitalis O Olca an(nor)um XI</i>	Funeraria	O Olca	No	No consta	Desconocida		Vila (Rodeiro, Pontevedra)	CIRG II, 84; HEP 6, 764
12	<i>---/ [---] Naviae D O P P R</i>	Votiva	O P(...?)	No	No consta	Bergidum?/ Interamnium?/Amaci?		El Valle-Tedejo (Folgo de la Ribera, León).	ERPL 24; HEP 10, 351
13	<i>Iovi O Queledini</i>	Votiva	Castellani Queledini	No	No consta	Bergidum?/ Interamnium?		Castro de San Andrés de Montejos (León).	ERPL 46; IRPL 30; AE 1928, 162; vid. HEP 6, 626.
14	<i>O Sermaceles B F D</i>	Indeterminada	O Sermaceles	No	No consta	Aquae Flaviae		Entre Tinhela y Agordela (Valpaços, Vila Real).	CIL II, 2494; HEP 7, 1229.
15	<i>Camalus Borni f(ilius) hic situs est annor(um) XXX ex O Tardu(m) frater facie(ndum) Ael(i)us curavit</i>	Funeraria	O Tardu(m)	No	No consta	Aquae Flaviae		Redondelo (Chaves, Vila Real)	CIL II, 2484; HEP 2, 853;
16	<i>Aemiliano Flaco de hoc O Tureobriga L(ucius) Aelius Flac(c)us signifer leg(ionis) II Aug(ustae) curavit instruendum vivo volente et presente sacratiss(imo) suo patre</i>	Honorífica	De hoc O Tureobriga	No	No consta	Aquae Flaviae		Nogueira da Montanha (Chaves, Vila Real)	CIL II, 2480; AE 1992, 993b
17	<i>Ex O Uliainca Lanatus Mebdi ex O Fi(... )An(nor)um LXX</i>	Funeraria	Ex O Uliainca y ex O Fi(...?)	No	No consta	Bracara Augusta		Vila Boa, Guilhabreu (Vila do Conde, Porto)	EE VIII, 110; Redentor, 2011, 266.
18	<i>I(ovi) O(ptimo) M(aximo) O Venaesini p(ecunia) s(ua)</i>	Votiva	O Venaesini	No	No consta	Gigurri?		Capilla del cementerio de Lubián (Zamora)	HEP 11, 587; AE 2003, 962.
19	<i>Genio Castelli Bloena Sabini (filia) v(otum) l(ibens) s(olvit)</i>	Votiva	Castellum (Aviliobris?)	No	No consta	Neri/Artabri		Cores, Ponteceso (A Coruña).	CIRG I, 67; HEP 4, 345; AE 1992, 998
20	<i>Deae Cenduediae sacrum castellani</i>	Votiva	Castellani	No	No consta	Bergidum?/ Interamnium?/		San Esteban de Toral (León).	ERPL 4; HEP 6, 626; AE 1995, 855

21	Cara anterior: <i>I(ovi) O(ptimo) M(aximo) castellani</i> [-----] Cara lateral derecha: <i>C(astellani) v(otum) p(onendi) l(ibenter) a(nimo) c(uraverunt)</i>	Votiva	<i>Castellani</i>	No	No consta	<i>Paesuri</i>		Cárquere (Resende, Viseu).	<i>HEp</i> 10, 749
22	[---] <i>gen Alesi</i> [...] <i>ex</i> $\oslash$ [...] <i>oc an(norum)</i> [...] <i>XIIII</i> [h(ic)] <i>s(itus) est</i> [...] <i>d(...)</i> [...] <i>t(erra) l(evis)</i>	Funeraria	<i>Ex</i> $\oslash$ [...]	No	No consta	No identificada		Procedencia desconocida	<i>ERA</i> (1985), 60 <sup>a</sup> ; Mangas y Olano (1995: 346)
23	<i>Nicer Clutosi</i> $\oslash$ <i>Cariaca principis Albionum an(norum) LXXV hic s(itus) est</i>	Funeraria	$\oslash$ <i>Cariaca</i>	Sí	<i>Albiones</i>		Sí ( <i>Cabarci</i> )	La Corredoria, Vegadeo (Asturias)	<i>AE</i> 1946, 121; <i>ERAs</i> 14
24	<i>Nigrinianus Nigrini (filius) Al(bionis?) ex</i> $\oslash$ <i>Ercoriobri annorum V C L N T</i>	Funeraria	<i>Ex</i> $\oslash$ <i>Ercoriobris</i>	Sí	<i>Albiones</i>		Sí ( <i>Vadinienses</i> )	Villanueva de Cangas (Cangas de Onís, Asturias).	<i>CIL</i> II 2711; <i>ERAs</i> 59
25	<i>L(ari) Coutici ut L(ari) Coutioso Tonc(?)</i> $\oslash$ <i>Nacosos Malgeinus Leuri f(ilius) Arbuensis v(otum) a(nimo) l(ibens) s(olvit)</i>	Votiva	$\oslash$ <i>Nacosos</i>	Sí	<i>Arbuenses</i>		Sí ( <i>Interamnienses</i> )	Quinta do Casal de Casais (S. João da Freixa, Mangualde, Viseu).	<i>AE</i> 1985, 517; <i>HEp</i> 1, 698; <i>HEp</i> 16, 679
26	<i>Naviae Ancetolu(s) Auri(ensis) exs</i> $\oslash$ <i>Sesma(aca) votum possit q(...)</i> <i>e(...)</i> <i>c(...)</i> <i>f(...)</i>	Votiva	<i>Exs</i> $\oslash$ <i>Sesmaca</i>	Sí	<i>Aurienses</i>		Sí ( <i>Tiburi</i> )	Cercanías del río Navea a su paso por Puebla de Trives (Ourense)	<i>CIL</i> II 2601; <i>HEp</i> 2, 579; <i>IRG</i> IV, 83;
27	<i>Ladronu[s] Dovai (filius) Bra[ca]rus castel[lo] Durbedic(o) (hic) situs e(st) an(n)oru[m] XXX</i> [s(it) t(ibi)] <i>t(erra) l(evis)</i>	Funeraria	<i>Castel[l]um Durbedicus</i>	Sí	<i>Bracara</i>		Sí (cerca de las explotaciones mineras de Aljustrel).	Junto a la villa rustica de Herdade dos Franciscos, ca. Garvão (Ourique, Beja)	<i>AE</i> 1984, 458; <i>HEp</i> 14, 419
28	<i>Flaus Auledi f(ilius) Cabarcus</i> $\oslash$ <i>Beriso an(norum) XV h(ic) s(itus) e(st)</i>	Funeraria	$\oslash$ <i>Beriso</i>	Sí	<i>Cabarci</i>		Sí ( <i>Paesici</i> )	Ablaneda, Godán (Salas, Asturias)	<i>CIL</i> II 5739; <i>ERAs</i> 17.
29	<i>Louci[a] Maturi f(ilia) Caladum/na Saqua a(n)oru[m] L h(ic) s(ita) e(st) flaciendum c(uravit) Maxuminus s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)</i>	Funeraria	$\oslash$ <i>Saqua</i>	Insegura	<i>Caladumi/Caladuni</i>		Sí ( <i>Aquae Flaviae</i> )	Chaves, (Chaves, Vila Real)	<i>CIL</i> II, 2487.
30	<i>Fusca Coedi f(ilia) Celtica Supertamarica</i> $\oslash$ [E/B] <i>laniobrense Secoila Coedi f(ilia) soror sua posuit</i>	Funeraria (?)	$\oslash$ [E/B] <i>laniobrense</i>	Sí	<i>Celtici Supertamarici</i>		Sí ( <i>Asturica</i> )	Astorga (León)	<i>CIL</i> II 2902=566 7; <i>IRPLE</i> 109; <i>HEp</i> 7, 375

31	<i>Eburia Calveni f(ilia) Celtica Sup(ertamarica) ∩ Lubri an(norum) h(ic) s(ita) e(st)</i>	Funeraria	∩ <i>Lubris</i>	Sí	<i>Celtici Supertamarci</i>		Sí (Asturica?/Amaci?)	Andiñuela, Santa Colomba de Somoza (León).	AE 1997, 873; <i>HEp</i> 7, 388.
32	<i>Apana Ambolli f(ilia) Celtica Supertam(arica) ∩ Miobri an(norum) XXV h(ic) s(ita) e(st) Apanus fr(ater) f(aciendum) c(uravit)</i>	Funeraria	∩ <i>Miobris</i>	Sí	<i>Celtici Supertamarci</i>		Sí ( <i>Lucus</i> )	Crecente (Lugo)	<i>HEp</i> 7, 397; <i>HEp</i> 13, 436; AE 1997, 863;
33	<i>Caeleo Cadroiolonis f(ilius) Cilenus ∩ Berisamo an(norum) XL et Ceasarus Caeleonis f(ilius) an(norum) XV h(ic) s(iti) s(unt)</i>	Funeraria	∩ <i>Berisamo</i>	Sí	<i>Cileni</i>		Sí ( <i>Neri/ Celtici Supertamarci</i> )	Cícere (Santa Comba, A Coruña)	<i>IRG</i> I, 20; <i>CIRG</i> I, 52.
34	<i>Vec]ius Verobli f(ilius) prince[ps - - -] Cit(- - -) ∩ Circine an(norum) LX [---]o Veci f(ilius) princeps co[porum? ---] h(ic) s(iti) sunt heredes sib[i] f(aciendum) c(uraverunt)</i>	Funeria	∩ <i>Circine</i>	Sí	<i>Copori</i>		Sí ( <i>Lucus</i> )	Muralla de Lugo (Lugo)	<i>CIL</i> II 2585; <i>IRLu</i> II, 50; <i>AE</i> 1946, 122.
35	<i>(...) eorum locco restituo castellanos Aliobrigiaecinos ex gente Gigurrorum volente ipsa civitate eosque castellanos Aliobrigiaecinos omni munere fungi iubeo cum Susarris (...)</i>	Edicto de Augusto	<i>Castellani Aliobrigiaeci ni</i>	Sí	<i>Gigurri</i>			Un lugar indeterminado en la comarca de El Bierzo (León)	<i>HEp</i> 7, 378; <i>HEp</i> 8, 325; <i>HEp</i> 11, 286; <i>AE</i> 2000, 760.
36		Literaria	<i>Castellum Tude</i>		<i>Grovii</i>				<i>NH</i> 4, 112;
37	<i>Bassus Medami f(ilius) Grov[i]us ∩ Verio an(norum) XXV h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)</i>	Funeraria	∩ <i>Verio</i>	Sí	<i>Grovii</i>		Sí ( <i>Caurium</i> ).	Muralla de Coria (Cáceres)	<i>CIL</i> II 774; <i>HEp</i> 8, 69.
38	<i>P(ublius) Plotius P(ubl[ii] f(ilius) Gal(eria) Reburus Interam[icus] ex ∩ Ga[...] ann(orurum) XXI h(ic) s(itus) e(st) [fraterna]e pietatis opu[s sed]emque videtis [extrem]am quae Plotio [- --] in morte fuit [tunc cum] fratris Vegeti [inde di]cavit cura sep[ulchr]um et pietate</i>	Funeraria	<i>Ex ∩ Ga[---]</i>	Sí	<i>Interam[ici] (brácaros) ó Interam[nien ses] (lusitanos).</i>		Sí ( <i>Arucci / Turobriga</i> )	Aroche, Huelva	<i>HEp</i> 3, 200; <i>HEp</i> 1, 269; <i>HEp</i> 16, 429.

	[sua] i[u]stum persolvit amorem								
39	<i>Festus Lovesii filius</i> <i>Interamicus exs</i> ∩ <i>Louciocelo hic sepelitus</i> <i>est an(norum) III</i>	Funeraria	<i>Exs</i> ∩ <i>Louciocelo</i>	Sí	<i>Interamici</i>		<i>Sí (Lougei)</i>	Cacabelos (León)	<i>ILER</i> 3456; <i>IRPLe</i> 222; <i>ERPLLe</i> 158.
40	<i>Popilius Hirsutus Flavi</i> <i>Vendieci filius</i> <i>Lanci(ensis) ∩ domo</i> <i>Vacoeci an(norum) XXXII</i> <i>h(ic) s(itus) e(st)</i>	Funeraria	∩ <i>domo</i> <i>Vacoeci</i>	<i>Sí (Lanciense)</i>		<i>Tiburi</i> (en condición de incola)	<i>Sí (Tiburi)</i>	Santa María de Trives (Puebla de Trives, Ourense)	<i>IRG</i> IV, 119
41	<i>Fabia Eburi filia</i> <i>Lemava</i> ∩ <i>Eritaeco a(nnorum) XL</i> <i>Virius Caessi filius</i> <i>Lema[v]us ∩ eodem</i> <i>an(norum) VII hic s(iti)</i> <i>s(unt) Caessius [...]</i> .	Funeraria	∩ <i>Eritacum</i> ∩ <i>eodem</i>	Sí	<i>Lemavi</i>		<i>Sí (Asturica)</i>	Astorga (León)	<i>AE</i> 1982, 575; <i>AE</i> 1987, 610c; <i>ERPLLe</i> 155
42	<i>Fuscus Severi filius</i> <i>Lim(icus) ∩ Arcuce</i> <i>an(norum) XXII h(ic)</i> <i>s(itus) e(st) s(iti) t(ibi)</i> <i>t(erra) l(evis) p(ater)</i> <i>f(aciendum) c(uravit)</i> <i>curante Tauroco</i>	Funeraria	∩ <i>Arcuce</i>	Sí	<i>Limici</i>		<i>Sí (Ocelenses Lancienses</i> <sup>220</sup> )	Castro de Cabanca, Vila do Touro (Sabugal, Guarda).	<i>HEp</i> 2, 809; <i>HEp</i> 12, 645
43	<i>Reburrrus Vacisi filius</i> <i>castello Berensi Limicus</i> <i>h(ic) s(itus) e(st) [A]pus</i> <i>fratr(i) fecit</i>	Funeraria	<i>Castellum Berense</i>	Sí	<i>Limici</i>		<i>Sí (Metallum de Sotiel Coronada)</i>	Calañas (Huelva)	<i>CIL</i> II, 5353; <i>HEp</i> 1, 355.
44	<i>Ancetius Vaccei filius</i> <i>Limicus ∩ Talabrica</i> <i>an(norum) XXII h(ic)</i> <i>s(itus) e(st) s(iti) t(ibi)</i> <i>t(erra) l(evis) [F]lavus</i> <i>Aquilus frat[er] sui et</i> <i>Talavius Cloutius Cloutai</i> <i>f(ilius) et Urtenius [...]</i> <i>Turdae (filius) et frates</i> <i>eius [f]aciendum</i> <i>curaveru[nt] ob m(erita)</i> <i>eius</i>	Funeraria	∩ <i>Talabrica</i> ó <i>Talabriga</i>	Sí	<i>Limici</i>		<i>Sí (Turobriga)</i>	El Repilado, Jabugo (Huelva)	<i>CILA</i> I, 24
45	(...) <i>cum Lougeis</i> <i>castellanis Toletensibus</i> <i>sibi uxori liberis</i> <i>posterisque suis eumque</i> <i>uxorem liberosque eius in</i> <i>fidem clientelamque suam</i> <i>suorumque in perpetuo</i>	Pacto de hospitium clientelaque	<i>Castellani Toletenses</i>	Sí	<i>Lougei</i>			O Caurel, San Pedro de Esperante (Lugo)	<i>AE</i> 1961, 96; <i>AE</i> 1973, 289; <i>HEp</i> 8, 334; <i>IRPLL</i> 55.

<sup>220</sup> Seguimos la propuesta de Carvalho (2007: 118-119) para adscribir este territorio a la *civitas* mencionada.

	<i>castellanei Toletensis receperunt (...)</i>								
46	<i>Reburus Ari (filius) Seur(r)us 3 Narelia an(norum) LXII</i>	Funeraria	<i>3 Narelia</i>	Si	<i>Seurri</i>		<i>Si (Zoelae)</i>	Felgar (Moncorvo, Bragança)	<i>CIL</i> II, 6290; <i>EE</i> VIII, 126.
47	<i>Tridia Modesti (filiiae) Seurr[a]e Transm(iniensis) exs 3 Serante an(norum) XX Valerius u(xori) f(ecit)</i>	Funeraria	<i>exs 3 Serante</i>	Si	<i>Seurri Transminiens es</i>		<i>Si (Zoelae)</i>	Felgueiras (Moncorvo, Bragança)	<i>AE</i> 1934, 19.
48	<i>(...)Tillegus Ambati f(ilius) Susarrus 3 Alobrigiaeco hospitium fecit cum (...)</i>	Pacto de hospitium	<i>3 Alobrigiaecum</i>	Si	<i>Susarri</i>			O Caurel, San Pedro de Esperante (Lugo)	<i>AE</i> 1961, 96; <i>AE</i> 1973, 289; <i>HEp</i> 8, 334; <i>IRPLLu</i> 55.
49	<i>(...) castellanos Paemeiobrigenses ex gente Susarrorum (...) castellanis Paemeiobrigenses ex gente Susarrorum quibus ante ea(m) immunitate omnium rerum dederam (...)</i>	Edicto imperial	<i>Castellani Paemeiobrigenses</i>	Si	<i>Susarri</i>			Un lugar indeterminado en la comarca de El Bierzo (León)	<i>HEp</i> 7, 378; <i>HEp</i> 8, 325; <i>HEp</i> 11, 286; <i>AE</i> 2000, 760.
50	<i>L(ucius) Cas(sius) Caen(icus) Tamac(anus?) 3 Nem [---]? dec(urio) al(ae) I Gig(urorum) comp(luribus) bel(lis) toq(uibus) [p]hal(eris) [bi]s donatus Iovi O(ptimo) M(aximo) v(otum) s(olvit) l(ibens) a(nimo)</i>	Votiva	<i>3 Nem [---]?</i>	Insegura	<i>Tamagani ó Tamacani</i>			Junto al castro de Cabanca, Castrelo de Val (Ourense)	<i>IRG</i> IV, 66; <i>HEp</i> 2, 521; <i>AE</i> 1976, 296; <i>AE</i> 1981, 528.
51	<i>Castel(l)u(m)</i>	Sillar constructivo de arenisca	No consta	No	No consta	<i>Ocela</i>		Castro de Pelóu, Grandas de Salime (Asturias)	Villa Valdés, 2009a, nº 57; 2009b: <i>HEp</i> 118, 14.
52	<i>3 T(ureobriga)</i>	Inscripción rupestre	<i>T(ureobriga?)</i>	No	No consta	<i>Aquae Flaviae</i>		Embalse romano de Abobeira, Chaves, Chaves.	<i>HEp</i> 5, 1057b;
53	<i>3 T(ureobriga)</i>	Inscripción rupestre	<i>T(ureobriga?)</i>	No	No consta	<i>Aquae Flaviae</i>		Embalse romano de Abobeira, Chaves, Chaves.	<i>HEp</i> 5, 1057c; <i>HEp</i> 7, 1238;
54	<i>Iovi Optimo / et Maxsumo / sacrum (castellani)Arro/nidaeci et</i>	Votiva	<i>(castellani) Arronidaeci et (castellani)</i>	No	No consta			Iglesia parroquial de S. Vicente de Serrapio, Aller	<i>CIL</i> II 2697; <i>ERA</i> 1

	(castellani) Col/iacini pro sal/ute sibi et su/is posuerunt		Coliacini					(Asturias)	
55	[---]OVIO Tabalieno / Luggno/ni (castellani) Argan/ticaeni / haec mon(umenta) possierunt	Funeraria	(castellani) Arganticaeni	Sí	Luggoni			Iglesia parroquial de Grases, Villaviciosa (Asturias)	HEp 12, 6; HEp 18, 22ERA 11
56	[G]eni[o Cast(elli) F]estus [Avi]tus e[x v(oto)] l(ibens) a(ram) p(osuit)	Votiva	[castelli]	No	No consta			Capilla de San Blas de Medeiros, junto al yacimiento de Muro do Castro (Monterrey, Ourense)	HEp 19, 268
57	[---] Anto[nius?] Marci f(ilius) C[ala]dunus C[- 1-2-]o an(norum) XX hic s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)	Funeraria	C[-1-2-]o	Sí	Caladuni		Sí (asociable a las explotaciones mineras de Río Tinto).	Berrocal (Huelva).	CILA I, 1989, n° 57; AE 1991, 1004; HEp 3, 206.

Fig. 16. Tabla sintética de las menciones a los *castella* epigráficos en relación a las indicaciones de *origo*.

### 5.3.2 El modelo de censo descentralizado: una nueva propuesta a partir de la experiencia republicana.

Goffart, en su clásico trabajo *Caput and Colonate* (1974: 10), se sorprendía al comprobar, no sin razón, de hasta qué punto la principal preocupación de la administración romana provincial no parecía muchas veces la precisión o sistematización de los modelos impositivos, la figura fiscal como tal, sino la correcta exacción del tributo. Esto es, la faceta más económica en la que reside el beneficio: la percepción de una cantidad predeterminada independientemente del procedimiento. Así, es ya un hecho comprobado y generalmente aceptado el carácter heterogéneo que se le atribuye a la fiscalidad de cada provincia y conforme a la especificidad de las comunidades que lo integran, lo que en último término descansaba sobre el *imperium* del gobernador y su *ius edicendi*. Lo importante, podríamos decir, no es tanto el rigor en el sistema de explotación como la eficacia de la explotación en sí misma. El imperialismo suele ser una política de fines más que de medios, preocupado por la reproducción del sistema y su supervivencia. Es por ello que las excepciones proliferan cuando enfrentamos el sistema estandarizado, expuesto por la jurisprudencia clásica con fines didácticos y vulgarizado en el compendio justiniano, con las concreciones que de él encontramos en ámbito provincial (*vid* Valiño, 2006). Tanto es así que la *forma censualis* ulpiniana no encaja, como hemos visto, por ejemplo, con el testimonio de *Babatha*, como tampoco ocurre siquiera con Flegonte al citar a ciudadanos de *Philippi*, una colonia con *ius Italicum* y en principio exenta, ni se cumple en ocasiones la dicotomía provincial (imperial/senatorial) en relación al censo. Quizás estemos demasiado sesgados por los mecanismos impositivos actuales, tan tendentes a la estratificación de la riqueza, a controles sistemáticos y uniformes guiados por ideales de justicia (cumplidos o no), dentro de la concepción de los Estados modernos. Modelos que, también quizás, no deban presuponerse a la generalidad del mundo antiguo, en primera instancia por sus limitaciones logísticas, pero, también, por el predominio de otros principios como la arbitrariedad y el consiguiente fomento de la desigualdad que conlleva tener por único objetivo la simple consecución de estos fines económicos. Tanto es así que en el caso de las *civitates peregrinae* del Noroeste, y seguramente de muchos de los *oppida stipendiaria* de la *Citerior* mencionadas por Plinio, de la satisfacción de estas exigencias fiscales dependía el mantenimiento de la autonomía en sus asuntos internos y la reproducción del orden social existente amparado en la *fides*. Esta premisa, arropada por poderes coercitivos como el ejército y cargos con jurisdicción provincial e imperial, ambos cuerpos bien documentados en el Noroeste, pudieron representar un acicate suficiente para el mantenimiento de sistemas descentralizados de control y suplir, de esta forma, el siempre más costoso registro directo de los bienes y de las personas a través del censo.

Como abordamos en páginas anteriores, los *conventus* aglutinan los principales indicios de centralización por parte del Estado romano en el Noroeste, sin duda para garantizar el funcionamiento administrativo básico y el control de la mano de obra de sus poblaciones. No en vano resultan en los principales núcleos en donde aparecen con



claridad los esquemas de la ciudad clásica de la mano del fenómeno urbano, gracias en última instancia a su eficaz labor de intermediación. Sin embargo, la visibilización del *conventus* en el Noroeste, a consecuencia de su ruralidad predominante, no supuso una nula capacidad de actuación a las *civitates* que los componen, pues son las unidades básicas sobre las que descansa el sistema fiscal y el censo. Así pues, de ser ciertas nuestras hipótesis, debemos explorar una segunda posibilidad: si no son los castros/*castella* las unidades de un registro acometido por funcionarios imperiales, que fueran las propias *civitates* los sujetos encargados de la elaboración de sus propios censos, en última instancia enviados al *censitor* del *conventus* para la gestión de la fuerza de trabajo y el control de sus poblaciones desde el *tabularium*.

La tendencia general desde Mommsen ha consistido en aceptar la expansión del modelo censual romano en Italia durante todo el periodo republicano, lo que implica una estandarización para comunidades con distintos expedientes que culmina con la *lex Heracleensis*. Así sería, por supuesto, en el caso de las colonias y municipios romanos, pero también se hace extensivo a otros tipos de comunidades, como a aquellas colonias latinas que, tras rebelarse a contribuir a la cargas en plena contienda con Cartago, pasarían a ser censadas *ex formula ab Romanis censoribus* de un modo permanente (Liv. 27, 9-10). Se considera además que este sistema romano terminaría por abrazarlo por entero tanto la latinidad colonial como los *socii* itálicos y sería el que se exportara a las provincias del Alto Imperio, ya dentro del esquema *tributum/stipendium* y provincias senatoriales/imperiales. Sin embargo, es preciso recordar algunos trabajos clásicos como la obra de Ilari (1974), en cuya monografía se demostró de un modo fehaciente el uso hasta la tardía República de modelos descentralizados de censo en comunidades tanto dentro como fuera de Italia. Frente al carácter censitario del censo romano, el procedimiento en estos casos se basaba en el envío de las llamadas *listas de iuniores*, en donde Roma simplemente exigía una determinada contribución, en este caso de hombres *qui arma ferre possunt* hasta los 46 años de edad<sup>221</sup> y con una periodicidad de cuatro años<sup>222</sup>. En ellos no se establecía un procedimiento tipificado ni se injería en la autonomía local, sino que eran las comunidades quienes mantenían sus propios criterios a la hora del registro y su confección, mientras que la lista, compuesta quizás por el nombre de los *iuniores* y sus edades o su número en bruto, era transmitida a Roma por uno de sus legados locales (Ilari, 1974; Baronowski, 1984). Este modelo, como observó Ilari, no dependía del tipo de contrato o tratado específico (*societas*, *foedus*, *amicitia*), o de los acuerdos establecidos en el momento fundacional, como ocurriría con las colonias latinas<sup>223</sup>, sino de un sistema genérico de aportaciones

---

<sup>221</sup> Es decir, no eran inventarios sistemáticos ni generales de los montantes globales de la población, sino dependientes del tipo de contribuciones exigidas.

<sup>222</sup> Vid. Polyb., 2, 23, 6-13.

<sup>223</sup> Efectivamente estas colonias latinas rebeldes a las que excepcionalmente se le impone el censo romano, seguramente con carácter temporal, nos demuestran cómo este modo de proceder sólo se establece en caso de no cumplir con las obligaciones prometidas. La referencia a los pagos *quotannis* invita a pensar en un periodo determinado de vigencia del censo romano aunque no se indique de forma explícita (quizás los cinco años en que disfrutaron de la exención no autorizada por Roma), más si tenemos en cuenta una dureza en los nuevos requerimientos que haría inviable la contribución por un periodo de tiempo prolongado. Por otro lado, en la queja formal de estas colonias ante una petición que

regulado a través de la *fides*. Aunque los aliados no pertenecieran formalmente al sistema político-institucional romano, su compromiso a contribuir con sus tropas se amparaba en estas supuestas relaciones de igualdad, en acuerdos entre estados independientes cuya autonomía en materia de política interior o en el uso de sus propias leyes quedaba intacta. Aunque no dejaran de ser una entelequia en la que Roma ejercía su primacía política, los principios de bilateralidad se mantenían desde esta virtualidad instrumental. Un gran paso adelante en el dibujo de esta alternativa teórica respecto al paradigma dominante desde Mommsen, nacía en tanto en cuanto Ilari no consideraba que este tipo de contribuciones de itálicos (mediante la *formula togatorum*) tuviera un contenido y naturaleza jurídica distinta respecto a las peticiones que se hacían a los aliados transmarinos fuera de Italia. Si normalmente en los escasos pasajes en donde se hizo uso de estas *formulae* cuasi fiscales se solía hacer referencia a *socii* itálicos o latinos, no se debía a una concepción distinta en donde cobrara forma una entidad *Italia* frente a la alteridad que representa el exterior, sino a motivos prácticos de cercanía, accesibilidad y afinidad cultural (Ilari, 1974: 25-85). La lectura de la dualidad de época imperial entre Italia y las provincias contaminaba en cierto modo la naturaleza de este tipo de relaciones previas sobre las comunidades dependientes de Roma, todas ellas en conjunto *socii* (o del *nomen* latino), en donde “Non c’è alcuna ragione apriorística per la quale i Romani non avrebbero potuto assoggettare anche i transmarini agli oneri della *formula togatorum*” (Ilari, 1974: 79).

De hecho, la evolución de las aportaciones de las comunidades itálicas sobre principios descentralizados de censo discurría de un modo paralelo respecto a los cambios que se han detectado en las imposiciones de Roma fuera de Italia como veremos. En primer término porque, como observó Nicolet con acierto respecto a Italia, las peticiones iniciales de carácter militar no se limitaron a aportaciones de *auxilia* como se pensaba, sino que comportaban también contribuciones económicas en concepto de *stipendium* que se fueron institucionalizando progresivamente (Nicolet, 1978): Así Polibio en su descripción del modo de reclutamiento de itálicos reconoce similitudes con el romano, y recuerda que no sólo se envía el número de efectivos solicitados dirigidos por el oficial aliado, sino que cuentan además con un pagador (*misthodontèn*) (VI, 21, 4); también el relato de Livio sobre la rebelión de las doce colonias latinas durante la guerra contra Cartago muestra la íntima relación entre el *dilectus* y el pago de sumas económicas como causa del conflicto, pues se niegan a aportar ambas (*nec pecunia, quae daretur in stipendium esset*<sup>224</sup>; *negaverunt consulibus esse unde milites pecuniamque darent*<sup>225</sup>) mientras los aliados cumplen con las dos (*decimum annum dilectibus, stipendiis se exhaustum esse*<sup>226</sup>). Se preservaba, así, la naturaleza republicana de la voz *stipendium*, que no se trata todavía de un impuesto relacionable con la tributación provincial como aparecerá en la jurisprudencia clásica (relacionada con la fiscalidad de las provincias senatoriales, en teoría), sino con la suma

---

consideraban excesiva no se recurre a ninguna cláusula del tratado fundacional de la colonia, sino a las imposibilidades prácticas para acometer la leva por una población menguada (*vid.* Liv. 27, 9-10).

<sup>224</sup> Liv. 28, 9, 13.

<sup>225</sup> Liv. 28, 9, 7.

<sup>226</sup> Liv. 29, 15, 3.

económica, asépticamente hablando, destinada al pago de las soldadas. El impuesto como tal, del cual se extrae una parte para el *stipendium*, no es sino el *tributum ex censu* de los *cives Romani* para el mantenimiento de las legiones romanas, y que se mantendrá con esta naturaleza desde el asedio de Veyes del año 406 a.C. (primera vez que se requiere un acantonamiento prolongado y la consiguiente manutención del ejército), hasta su abolición el año 167 d.C.<sup>227</sup>. De hecho, también según Nicolet, la institucionalización de estas cargas económicas bajo el término *stipendium* debió agudizarse más si cabe tras el fin de la tributación cívica romana, creando la simiente que dará lugar a la guerra social de comienzos del siglo I a.C., que no se tratará entonces simplemente de una lucha por una asimilación e integración jurídica, sino un conflicto auspiciado también por la presión económica. El silencio de las fuentes acerca de la evolución de la situación “fiscal” de los *socii* no impide pensar, sin embargo, en el mantenimiento de estos modelos descentralizados de exacción, tanto militar como económica. Así se desprende de las quejas de los *socii* y latinos durante todo el siglo II a.C. como relata Livio ya para el 187 (39, 3, 4-5) y el 177 a.C. (41, 9, 9-12) por el *ius migrandi* y las manumisiones fraudulentas. La inscripción en el censo romano de algunos de sus ciudadanos locales a partir del uso abusivo de estos instrumentos no se veía acompañado de una aminoración de las contribuciones económicas y militares exigidas, pues el cálculo que Roma establecía a partir de las listas de *iuniores* estaba sobredimensionado por las inscripciones dobles de estos ciudadanos migrantes, tanto en los censos locales que se seguían manteniendo como en el romano: *eos censores ipsum parentemve eius apud se censum esse probassent socii*<sup>228</sup>. Si el modelo descentralizado de censo debió mantenerse hasta finales del siglo II a.C., como reflejan las obligaciones militares que aparecen incluso en la *lex agraria* del 111 a.C.<sup>229</sup>. (*lex agr.* 21 y 50), el *stipendium* por el contrario parece desnaturalizarse desde su antigua condición de pago del servicio militar. Estas cantidades, calculadas todavía sobre las listas de *iuniores qui arma ferre possunt*, ya no se limitaban a la temporalidad del periodo de movilización sino a aportaciones económicas regulares. De este modo, el pasaje que nos transmite Apiano sobre la situación de pobreza en que viven los *socii Italiótai* el año 133 a.C. señala de nuevo este binomio militar y económico entre las causas de su decadencia. Pero las aportaciones pecuniarias toman ahora una apariencia distinta, alejada ya de su carácter circunstancial originario, y se usa el término *eisphorai*, la figura fiscal regular y de carácter cívico en ámbito ateniense desde época clásica (App. BC., I, 7; *vid.* Christ, 2007). La probable continuidad del régimen descentralizado de control, que sólo vuelve a intuirse el 111 a.C. (*lex agraria*<sup>230</sup>) hubo de tener fin, a lo sumo, con el *census* del

<sup>227</sup> Cic. *Off.* 2, 76; Liv. 40, 60, 1; Valerio Maximo, 4, 3, 8; Plin. *NH.*, 33, 56; Plut. *Aem.*, 38. Para la evolución de tributo cívico romano *vid.* Marchetti, 1977 y Nicolet, 1977.

<sup>228</sup> Liv. 39, 3, 5: “Se encargó a Quinto Terencio Culeón de localizarlos y obligar a volver a donde estuviera censado a todo aquel que los aliados demostrasen que figuraba en sus listas de censo él o su padre”.

<sup>229</sup> También la *lex repetundarum* del 122 a.C. ofrecía *vacatio militiae* e *immunitas* de los *munera publica* (del *stipendium*: *vid.* Nicolet, 1978: 9-10) a los *socii* y *latini* itálicos que no aceptaran la ciudadanía romana, lo que implica que, al menos hasta este momento, se había mantenido este régimen de contribuciones sobre el conjunto, a partir de ahora sostenido sólo por una parte de sus miembros.

<sup>230</sup> 1 y 50: ...*socium nominisve Latini, quibus ex formula togatorum milites in terra Italia inperare solent*...

70/69 a.C., cuando los itálicos son por primera vez censados como ciudadanos romanos y han de trasladarse hasta Roma para ser inscritos<sup>231</sup>. Por lo demás, la *tabula Heracleensis* (145-150) datada con dificultad en el 45 a.C. no hará sino fijar los nuevos criterios timocráticos para la elaboración del censo en las comunidades itálicas, ahora desde coordenadas romanas. Así están presentes en la *lex Osca Tabulae Bantinae* perteneciente a este municipio romano de Lucania, de controvertida datación pero posterior a la guerra social, en cuyo capítulo 4 reconoce ya que todo ciudadano de *Bantua* debe regirse por los presupuestos y proedimiento establecidos por el *censitor* en el registro de sus propiedades y personas: *censetor (sic) ipse et pecuniam qua lege ii censores censere proposuerint*. Los nuevos municipios se convierten en núcleos descentralizados de producción de *cives Romani* y, en sintonía, acometerán sus respectivos censos locales para ser después enviados a Roma (*vid.* Nicolet, 1985: 17-24), como ocurría en las no tan lejanas listas de *iuniores*, pero ahora predeterminados por un procedimiento tipificado y de cuño romano. Desde esta perspectiva sucinta la tendencia general que se aprecia en las formas de interlocución con las comunidades fuera de Italia discurre, como decíamos, en términos parejos. Predomina una política imperialista de fines, tanto para los *socii* transmarinos como para las comunidades vencidas por conquista y que pasan a ser dependientes de Roma por el *ius Bellum* y dentro de un contexto, recordemos, en que todavía no se ha construido la dualidad Italia/provincias. Entre ellos, también primaba la descentralización de funciones y un sistema de obligaciones basado en la *fides*.

Para los primeros (los *socii* extraitálicos), el sistema de obligaciones responde en gran medida a las fórmulas análogas que encontramos en ámbito itálico, y que estuvieron especialmente presentes en la parte oriental del dominio romano por su mayor experiencia estatal. Se contraían mediante el reconocimiento como *philoï ka symmachoi* de Roma, e ingresaban en la llamada *formula amicorum et sociorum*, con distintos matices jurídicos y cronológicos en los que ahora no podemos entrar según se tratara de acuerdos con individuos, comunidades o reinos<sup>232</sup> (*vid.* Bowman, 1995). Para lo que ahora nos interesa lo importante es remarcar cómo el ingreso en la *formula* se establecía en este caso mediante un *foedus*, en el que se fijaba el carácter de las aportaciones, como el que el noble macedónico Onésimo se obligaba a leer diariamente dos veces para recordar su cumplimiento (Liv. 44, 16, 4). Este acuerdo, que desde la romanística ha recibido la fórmula contractual del “tratado internacional” moderno, estaba regido igualmente por el principio de compromiso que evoca la *fides*. Es decir, se basaba en un deber supuestamente recíproco, en una normatividad más o menos difusa en que quedan fijados unos comportamientos esperables para ambas partes, si bien la

<sup>231</sup> Según Cicerón, el procedimiento centralizado del censo de ciudadanos en Roma provocó la llegada de grandes multitudes para la inscripción en el censo: *comitiorum ludorum censendique causa* (Cic. Verr., 1, 18).

<sup>232</sup> Además, por supuesto, de otras nociones teóricas que han intervenido en la comprensión de este proceso, como el influyente modelo acuñado por Badian (1958) basado en la clientela (*vid.* también Sands, 1908: 49-139) y que ha sido objeto de una reciente revisión por diferentes autores (*vid.* Jehne y Pina, 2015; Nicols, 2001). También la nítida distinción entre el *foedus aequum* (entre iguales) e *iniqum* (desiguales, con la cláusula de *maiestas* romana) que fue desarrollada en la jurisprudencia postclásica, a la que seguramente pertenezca, pero que ha tenido sus seguidores para periodos precedentes desde el período republicano (*vid.* Baronowski, 1990; Espada Rodríguez, 2013: 257).

definición y concreción de la *fides* siempre permanecía bajo exclusividad romana<sup>233</sup>. Cicerón describe la *fides* en este mismo sentido, *dictorum conventorumque constantia et veritas* (Cic. *Off.*, 11, 23), “la actitud perseverante y veraz ante las palabras dadas o los acuerdos celebrados” (Nörr, 1995: 18). Sin embargo, el carácter instrumental y retórico de la *fides* y su falsa bilateralidad no escapaba al entendimiento de estos “socios y amigos” de Roma desde los primeros momentos. Así ya el propio rey Hierón II de Siracusa, que será recordado como *fidelissimus imperii Romani cultor* (Liv. 26, 32 4; *vid.* 26, 32, 4), denuncia en tono jocoso que los romanos siempre tengan en la boca la palabra *fides* pero luego desarrollen una política favorable para aquellos que la contravienen en beneficio de Roma<sup>234</sup> (Diod. 23, 1, 4). El cumplimiento de la *fides* solía basarse en estos casos también en aportaciones de soldados y naves que, si bien eran solicitadas seguramente con una mayor irregularidad respecto a la *formula togatorum*, debían estar a disposición de Roma si fuera necesario. Sin embargo las obligaciones militares también se vieron recurrentemente acompañadas de aportaciones de índole económica por diversas vías. Una de ellas puede observarse, por ejemplo, a través de una formulación aparentemente desinteresada y que entra en plena coherencia con la virtualidad de estas relaciones bilaterales como es “el regalo” (*munus*). Así aparece en algunos ejemplos dentro del contexto bélico entre Roma y Macedonia los años 170-69 a.C. por parte de diversas comunidades griegas que habían estado *sub ditione Persei et ante Philippi* (*vid.* Liv. 43, 6, 5, 1-14). *Póleis* como Mileto, Atenas, Lámpsaco o el pueblo de Alabanda, con el fin de granjearse el favor de la potencia dominante frente a la debilidad macedónica, proponen el envío de todo aquello que *strictu sensu*, pertenece al ámbito de los *amici et socii populi Romani*, al que formalmente ya no pertenecen<sup>235</sup>. Es decir, con un fin persuasorio se anteceden a la incorporación en estas *formulae* contrayendo sus mismas obligaciones, pero con carácter previo: así los atenienses informan de haber enviado *quod navium habuerint militumque* y también trigo para su mantenimiento; Alabanda envió junto a trescientos jinetes una corona de oro de cincuenta libras de peso y lo mismo Lámpsaco, por su parte, junto a toda la ayuda prestada a los comandantes romanos, regaló también otra corona de oro de ochenta libras, siendo en este último caso incorporada después a la *formula* por petición propia (*in sociorum formula referre*). No hay, de hecho, grandes diferencias con las contribuciones que prometen los embajadores de Cartago y Mesina como fieles aliados (*fideliumque socium muneribus functos esse*), y que llegan en el mismo momento que los anteriores griegos, compuestas de igual modo por una suma importante de soldados,

<sup>233</sup> Sobre le espectro religioso que recibe la *fides romana* en época republicana: *vid.* Boyancé, 1972.

<sup>234</sup> Se trata aquí de los marmetinos, itálicos contratados por la monarquía siciliana como *mercenarii* inicialmente y que tras la prestación de servicios habían tomado *Mesana* (actual Mesina) incumpliendo lo pactado. En este pasaje Roma presiona para que Hierón II levante el asedio sobre esta ciudad que permanecía bajo control marmetino. Interesante también resulta la perplejidad de Menipo, embajador del rey Antíoco de Asia, cuando al acudir ante la audiencia de T. *Quincius* con el fin de solicitar la amistad y alianza con el pueblo romano, le son impuestas una serie de condiciones que se le asemejan al trato propio del derecho de guerra sobre el vencido, incluyendo decisiones sobre asuntos internos del reino como la especificación de las ciudades de Asia que debían ser libres y exentas de tributos así como las tributarias (Liv. 34, 57, 4 - 59, 3).

<sup>235</sup> Se convirtieron en *socii* el 196 a.C., lo perdieron tras caer bajo la órbita de dominación macedónica (*vid.* App. *Mac.* 9, 4).

jinetes, elefantes, naves y abundante cantidad de trigo para su mantenimiento. Sin embargo, resulta interesante comprobar cómo el embajador cartaginés destaca que sus aportaciones militares y económicas, aunque se llamen también “regalo” (*munus*) a semejanza de las contribuciones griegas, se trata en su caso en realidad de un “deber” (*officium*) (Liv. 43, 6, 12). El *munus*, de apariencia irregular y esponánea y que, de hecho, se envuelve en la retórica de la reciprocidad (Roma devuelve el gesto con pequeñas sumas de ases de bronce), entra dentro, por tanto, de las formas no convencionales de contribución propias del régimen irregular de la fiscalidad republicana. Tanto es así que siglos después, en la jurisprudencia clásica y postclásica, todavía se recuerde entre las acepciones de la palabra *munera* este sentido de “regalo”<sup>236</sup>, que sin embargo desde Alto Imperio ya sólo cobra sentido para aludir a las cargas de la tributación ordinaria, de ahí que se derive la *immunitas* de su exención o se denomine *múnicepe* al que cumple con sus *munera publica y civilia*<sup>237</sup>, mientras para “regalo” propiamente dicho se reservará el término *donum*.

Si damos un pequeño salto en tiempo, puede apreciarse cómo las cargas de los *socii* extratálcos están ya, en el siglo I a.C., igualmente asimiladas dentro del esquema del *stipendium*, a semejanza de lo mencionado para los *socii* itálicos de la *formula togatorum* y, como veremos, también a los integrados por conquista. Estamos en estos momentos en un contexto de translación desde el modelo republicano hacia el imperial, en donde ahora son las comunidades extratálcas (integradas como *socii* o por derecho de guerra) quienes sostienen casi exclusivamente la financiación del sistema romano toda vez se ha producido el fin de la tributación cívica romana en Italia, la reforma mariana del ejército y el proceso de integración mencionado para los antiguos *socii* y *latini* itálicos tras la guerra social. Un ejemplo podemos encontrarlo en la paz de Dárdano del año 85 a.C. que puso fin a la primera etapa de beligerancia entre la Roma de Sila y Mitrídates, rey del Ponto, lo que significó dos años de paz hasta la vuelta a las hostilidades con la segunda guerra mitridática (83-81 a.C.). Dejando al margen los detalles del conflicto (*vid.* Gómez, Naco y Vidal, 2012: 204-10) la firma de esta paz revela un trato oscilante en el que se confunden imposiciones propias del vencido y del *socius*. Por un lado, porque tras varios años de intensa actividad bélica, Mitrídates ingresa como *philos kai symmachos*, no se firma *deditio* alguna, y desde la formalidad el Ponto pasa a integrar el cuerpo de la *formula sociorum*. De hecho se le exigen, además de sus dominios sobre varias regiones asiáticas, las peticiones que le son

<sup>236</sup> D. L. 16, 18, 0 = Paul. 9 ed.: “La palabra ‘munus’ tiene tres acepciones: primeramente, la de regalo (*donum*), y de ahí se dice que se dan o envían *munera*; en segundo lugar, la de carga (*onus*), que, al ser remitida, proporciona una exención, y de ahí que se hable de inmunidad (*immunitas*); en tercer lugar, la de deber, de donde que se hable de *munera* militares y que llamemos ‘muníficos’ a algunos militares; así, pues, se habla de ‘municipes’ porque participan en las cargas municipales”.

<sup>237</sup> Ulp. 2 ed. = D. 50, 1, 1, 1: *Et proprie quidem municipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem, ut munera nobiscum fecerent: sed nunca abusive municipes dicimus suae cuiusque civitatis cives* (“Se llaman propiamente municipes los que participan en las cargas, los que han sido admitidos en una ciudad para conllevar sus cargas con nosotros, pero ahora llamamos abusivamente municipes a los ciudadanos de cualquier ciudad”); Gell. NA., 16, 13, 6: “Son pues municipes los ciudadanos romanos de los municipios, los cuales usan sus propias leyes y su derecho; sólo comparten con el pueblo romano un *munus* honorífico, por cuyo ejercicio parece que recibido el nombre”; D. 50, 16, 18, 0 = Paul. 9 ed igitur *municipes dici, quod munera civilia capiant*.

propias a su nueva condición, como es la entrega de naves y soldados para proceder a la lucha contra las tropas lideradas por Fimbria (que Roma acometerá inmediatamente después). Pero por otro lado, en el episodio se advierten algunas condiciones más propias del vencido por *deditio in fidem* que del *socius*, como las fuertes sumas económicas que de nuevo parecen acompañar las contribuciones de soldados y naves (Plut. *Sull.*, 22, 3;). Éstas se consideran en concepto de multa y, de hecho, Sila se dirige a él en términos de facción victoriosa: “Los que hablan primero suelen ser los que tienen algo que pedir, los vendedores pueden permanecer en silencio” (Plut. *Sull.*, 24, 1). Resulta extraño este tipo de tratamiento si tenemos en cuenta que el acuerdo responde a una labor diplomática previa, y en ningún momento se atisba consideración de vencido: Mitrídates establece también sus condiciones (respecto a su influencia en Paflagonia, por ejemplo), no hay deposición de armas (acude al encuentro con su ejército y regresa con él), el acuerdo se sella amistosamente (*vid.* Plut. *Sila* 24, 3)<sup>238</sup>, etc.

Otro caso emblemático y especialmente representativo por situarse excepcionalmente en la parte occidental lo encontramos en las relaciones diplomáticas previas al conflicto que tuvieron lugar con el germano Ariovisto, según las versiones ofrecidas por César y Dion Casio. En el contexto de las aspiraciones de César para el sometimiento de las Galias (58 a.C.), la zona que permanecía bajo control germano (los *Sequani* a los que había hecho tributarios) suponía una amenaza para los *Aedui*, *socii* de Roma (*BC.*, 1, 43). Sin embargo, las comunidades lideradas por Ariovisto también pertenecían a la *formula sociorum et amicorum* tras ser nombrado durante el consulado de César *philos kai symmachos* según Dion Casio (38, 34, 3) y *rex et amicus* en la narración cesariana (*BG.*, 1, 35, 2). Son varios los elementos que pueden descomponerse en torno al tipo de relación establecida: por un lado el reconocimiento de *auctoritas* a Ariovisto (*BG.*, 1, 33) y los repetidos *beneficia* que recibe de Roma en compensación (*BG.*, 1, 33; 1, 41; 1, 42). También los intercambio de *munera*, tan propios de relaciones teóricamente bilaterales como hemos visto (*BG.*, 1, 42). Desgraciadamente la narración César se centra en las contraprestaciones positivas que comportaba ser aliado de Roma, lo que aminora la información disponible sobre el régimen de contribuciones que pesaba sobre Ariovisto. Sin embargo, éste puede intuirse en varios puntos. Por un lado, el régimen parece convenientemente pactada a través de acuerdo previo, regido por el principio de *aequitas* (*aequitate condicionum perspecta*: *BG.*, 1, 40) en el que se habrían fijado las obligaciones de las partes. Y cabe suponer, que de modo análogo al anterior del Ponto, no se trataría de una *amicitia inter privatos*<sup>239</sup>, sino de un acuerdo político en que mediaba alianza militar (Dion Casio habla de *symmachia*) y sumas económicas más o menos predeterminadas. Sobre este aspecto resulta reveladora la posición de Ariovisto durante la reunión presencial que

<sup>238</sup> A medida que Roma va dominando el antiguo reino pónico mantiene, sin embargo, este mismo sistema de relación de alianza, tanto con Farnaces, el hijastro de Mitrídates que le sucede tras el fin de la tercera guerra, nombrado *philos kai symmachos* el 63 a.C tras traicionar a su padre (D. Cass., 37, 14, 2), como con el rey pónico Polemo, que recibirá el mismo título que Farnaces el 26/25 a.C. (D. Cass., 53, 25, 1).

<sup>239</sup> De hecho, como ha observado Bowman (1995), la categoría de *socius et amicus populi Romani* en siglo I a.C. incluye ya todo tipo de relación entre estados, mientras anteriormente a veces se expresaba de un modo diferenciado según se hiciera en términos de *amicitia* o *socius*.

ambos establecen ante un inminente inicio de las hostilidades. El líder germano busca ahora restituir el *status quo* anterior, manteniendo su área de influencia sobre los *sequani*, para lo cual se compromete a contribuir con cuanto Roma necesite para futuras contiendas militares: *Quod si discedisset, magno se illum praemio remuneraturum et quaecumque bella geri vellet sine ullo eius labore et periculo confecturum* (BG., 1, 44). Mantener las circunstancias de paz, su ingreso en la *formula* y el pago de *stipendium* (que se infiere de *remunerare*, en el sentido de “gratificar” económicamente en futuras campañas), pasaría entonces por respetar lo inicialmente pactado, y que con toda seguridad constituía ya, antes del conflicto, en la “contraprestación” a estos *beneficia* y *munera* que Roma parece otorgarle.

Sin embargo, aunque Ariovisto hubiera cumplido su parte, se reproduce de nuevo la ambigüedad respecto al trato al vencido, como reivindica el propio líder germano y de modo análogo al caso del Ponto. En la relación epistolar previa entre ambos, Ariovisto se acoge a los principios bilaterales de sus relaciones desde el propio lenguaje romano, como por ejemplo, al negarse a acudir a la llamada ante César, pues entre iguales es la parte que pide algo quien debe personarse (BG., 1, 34). Su postura es contestada con una nueva embajada, en donde se rompe el virtual equilibrio entre estados aliados al establecerse que la continuidad de las relaciones de amistad pasaba ahora por el cumplimiento de algunas condiciones impuestas unilateralmente por Roma. La respuesta de Ariovisto se mantiene, sin embargo, desde las coordenadas diplomáticas romanas entre estados independientes y reconociendo en las nuevas exigencias una vulneración a lo pactado, pues no sólo atañe a su política exterior (a propósito de los eduos), sino que se extralimita al injerir en sus asuntos internos (los *sequani*). Sobre este punto, resulta de gran interés cómo el argumentario del líder germano pivota en torno a las nociones romanas de integración de los vencidos, pero aplicadas a su propio territorio: es derecho de guerra de los vencedores dar las leyes que estimen oportunas a los derrotados sin responder a la voluntad de otros (BC., 1, 36<sup>240</sup>), la conversión de los eduos y secuanos en estipendiarios se amparaba en condiciones de *bellum iustum*<sup>241</sup> (BG., 1, 36<sup>242</sup> y 44<sup>243</sup>), Roma no tiene capacidad para disminuir las rentas de sus territorios (BG., 1, 36<sup>244</sup>), ni tampoco entrometerse *in suo iure* como tampoco podían ellos introducirse en el derecho ajeno (BC., 1, 36<sup>245</sup>). Al margen del desenlace de la contienda, la incompreensión de Ariovisto sobre la formalidad de los distintos modos de dependencia sólo es concebible si atendemos, de nuevo, al proceso por el cual la preponderancia romana disuelve sus matices y diferencias. Frente a los *tria genera foederatum* que un siglo antes definía Antíoco (Liv., 34, 57, 7-9), entre conquistados y

<sup>240</sup> *Ius esse belli, ut qui vicissent eis, quos vicissent, quem ad modum vellent imperarent: item populum Romanum victis non ad alterius praescriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuesse.*

<sup>241</sup> Huelga sobre este punto señalar que ya para el propio Ariovisto el *stipendium* constituye un impuesto que debe pagar con una regularidad anual, a la manera en que lo define Cicerón en las Verrinas (vid infra.): [...] *quod convenisset, stipendiumque quotannis penderent* (BG., 1, 36).

<sup>242</sup> [Aeduos] *stipendiarios esse factos.*

<sup>243</sup> *Stipendium capere iure belli, quod victores victis imponere consuerint. Non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum intulisse.*

<sup>244</sup> *Magnam Caesarem iniuriam facere, qui suo adventu vectigalia sibi deteriora faceret.*

<sup>245</sup> *Si ipse populo Romano non praescriberet, quem ad modum suo iure uteretur, non oportere sese a populo Romano in suo iure impediri.*



conquistadores (*cum bello victis dicerentur leges*), entre iguales tras la guerra (en clara alusión a los *socii* itálicos: *cum pares bello aequo foedere in pacem atque amicitiam ueniret*) y entre iguales sin mediar conflicto (en referencia a los reinos aliados extraitálicos, como sería su caso: *cum qui nunquam hostes fuerint ad amicitiam sociali foedere*), sus márgenes se van, cada vez más, confundiendo en la tardía República. El sistema de la *fides*, multiforme según los tipos de acuerdo o tratado, será cada vez más homogénea en lo que respecta al régimen de contribuciones: en especie, pecuniarias (*stipendium*) y aportaciones militares cada vez más regulares.

Pero si damos un paso más, hay también un pequeño pasaje que suele pasar desapercibido, y que supone un indicio a tener en cuenta sobre el conocimiento numérico que César parece tener sobre los territorios bajo control de Ariovisto: *nunc esse in Gallia ad centum et xx milium numerum* (BG., 1, 31). Resulta difícil de determinar si César interpola aquí una información propia cuando recoge las quejas de los *Aedui* durante el *consilium*, o ésta corresponde a otro tipo de estimación de sus *socii* galos. De ser cierta la primera hipótesis, cabría preguntarnos entonces si este conocimiento numérico podría formar parte de un modo de proceder semejante a las antiguas listas de la *formula togatorum* que debieron mantenerse hasta la República avanzada, transferido a la *formula sociorum* extraitálica. Los escasos testimonios de ingreso en calidad de *philoï kai symmachoi* no nos permiten confirmar la hipótesis, pero a mi juicio resulta altamente probable que Roma manejara cierta información, al menos sumaria, sobre las fuerzas disponibles de sus *socii* según lo estipulado en los acuerdos, como ocurría en Italia anteriormente. ¿Cómo si no podría Roma hacer valer lo pactado si, por poner un ejemplo, desconociera el número de barcos disponibles de sus *socii navales*<sup>246</sup> cuando las flotas constituyen un recurso difícilmente improvisable? Seguramente tuvieran algunas diferencias respecto a las listas de *iuniores* republicanas: una periodicidad flexible según las necesidades de la coyuntura política, o que sus contingentes no se integraran en la mayoría de ocasiones en el ejército romano como *auxilia*, siendo más ventajoso para Roma dirigir la política exterior del reino aliado. Pero en cualquier caso, el conocimiento numérico (que en este caso incluye el total de la población) estaría regido del mismo modo por un procedimiento descentralizado, en donde son las comunidades locales quienes acometen un registro propio, orientado a las exigencias romanas, y enviado para su conocimiento. César parece haberse servirse poco antes, de hecho, de instrumentos análogos para los vecinos helvecios en el mismo año en que derrota a Ariovisto (58 a.C.), en este caso sometidos por conquista, y que cabría suponer que no sería muy diferente al caso del *socius* germano, dada la delgada línea que, cada vez más, se difumina entre sendas formas de dependencia:

*In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum, qui arma ferre possent, et item separatim pueri, senes mulieresque. Quarum omnium rerum summa erat capitum Helvetiorum milia CCXIII, Tulingorum milia XXXVI, Latobrigorum XIII, Rauracorum XXIII, Boiorum XXXII; ex his, qui arma ferre possent, ad*

<sup>246</sup> Así, por ejemplo, sería en gran medida el caso de Egipto cuya dependencia a Roma tras la victoria sobre Ptolomeo se sella con el nombramiento de Cleopatra el 46 a.C. como *philos ka symmachos* (D. Cass., 43, 27, 3; *vid.* 42, 33-44).

*milia nonaginta duo. Summa omnium fuerunt ad milia CCCLXVIII. Eorum qui domum redierunt censu habito, ut Caesar imperaverat, repertus est numerus milium C et X.* (Caes. BG., 1, 29).

Este pasaje, brevemente comentado antes (cap. 5.1), nos vuelve sobre la pista acerca de un modo de proceder semejante a las antiguas *formulae* y sus listas. Por un lado, le son enviados a César los documentos censuales helvecios escritos en griego y conforme a sus propios criterios, pues a César le interesaba conocer la disminución demográfica tras el conflicto. Estas sumas incluían no sólo los datos globales, sino asimismo desglosados en las distintas comunidades dependientes de éstos. Además, dentro de estas cantidades se incluye, a diferencia del censo romano republicano característico, también a las mujeres, niños y ancianos, junto a *qui arma ferre possent*. Cuando César, tras la conquista, quiere conocer los recursos humanos disponibles no les impone un censo romano, sino que manda repetir el censo helvecio (*redierunt censu habito*). ¿Es posible considerar que el hábito censual helvecio fuera restituido para lo sucesivo? En principio, no hay argumentos para sostener que no fuera así, incluso para comunidades *in deditionem accepit* (BG., 1, 28), como refleja este ejemplo. De hecho, una vez terminadas las hostilidades, depuestas las armas y recuperados los rehenes nos encontramos ante un claro acto de *reddere* (vid. Sastre, 2001: 105-08), en donde se supera la condición dediticia accediendo a la peregrinidad plena: se les devuelven las tierras (BG., 1, 28) y se les otorga *libertas* y *ius civitatis*, como demuestra el hecho de que los boyos, tras ser incluidos en su territorio, lo hagan *in parem iuris libertatisque* (*ibid.*). Es entonces, desde su nueva condición peregrina, cuando vuelven a realizar sus censos como había hecho anteriormente y que será la base para futuras contribuciones. Imposiciones seguramente análogas, por otra parte, a las que ya se habían establecido anteriormente para algunos de los conquistados galos de la *Transalpina*, ahora obedientes al pueblo romano y que, devueltas también sus tierras<sup>247</sup>, contribuyen para las necesidades de la guerra en *Hispania* (74-72 a.C.): *magnas pecunias ad eorum stipendium, maximun frumenti numerum ad Hispaniense bellum tolerandum imperavit* (Cic. Font., 13).

La evolución que recibe el *stipendium* para quienes se integraron en virtud del derecho de conquista (*victoriae praemium ac poena belli*) también siguió un camino análogo, como ya anticipamos. Para la República media, como ha demostrado Ñaco (2003) para *Hispania* y otras zonas de Occidente primó un modelo basado en lo que denominó *vectigal incertum*, es decir, el *stipendium* flexible, temporal y no sistemático, en un contexto de guerra transmarina que debe autofinanciarse. Éste se basaba en la transferencia al vencido del pago del salario legionario movilizado (*stipendium*), que en esta ocasión no se asentaba formalmente sobre un pacto en pie de igualdad entre *socii*, sino sobre el compromiso de la *fides* tras la rendición incondicional (*deditio in fidem*). Para el momento de esta transición de la fiscalidad republicana a la imperial, Cicerón

---

<sup>247</sup> En este pasaje Cicerón contrapone claramente el colectivo de galos a los que obligó a retirarse de sus tierras frente “a los demás”. Sobre este segundo grupo recaen las imposiciones mencionadas (vid. Cic. Font., 13).

refleja un cambio importante en la consideración del *stipendium*<sup>248</sup> que ya se establece como un impuesto fijo a propósito de los *hispani*, entre otros: *vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli*<sup>249</sup> (Cic. 2Verr. 3, 6, 12). La regularidad creciente de las contribuciones va, así, germinando hacia su institucionalización, configurándose como una figura que pierde su faceta compensatoria de los daños de una guerra que se alimenta a sí misma, para convertirse en una suerte de impuesto con carácter fijo (*certum*). Una carga que, por otro lado, recae sobre el colectivo comunitario y no sobre la individualidad del *deditus* y que resulta en acompañamiento de otras contribuciones militares toda vez ingresan en la *civitas peregrina* y, dentro de ésta, cristaliza finalmente en expedientes administrativos como los *oppida stipendiaria* plinianos de la *Citerior*.

En esta complicada transición desde el régimen republicano (que, debe recordarse, carece hasta bien entrado el siglo I a.C. de una concreción jurídica clara del suelo provincial<sup>250</sup>) hasta el sistema imperial (cuando se expresa la confusión entre *tributum (soli)* y *stipendium*), tiene gran importancia para nosotros el siguiente fragmento de Cicerón en coherencia con la posición que hemos mantenido: “Cada ciudad solía dar siempre al capitán de su nave los fondos destinados a la flota para trigo, pagas y demás gastos (*Sumptum omnem in classem frumento, stipendio ceterisque rebus suo quaeque navarcho civitas Semper dare solebat*)[...] Se había obrado siempre así, como digo, no sólo en Sicilia, sino en todas las provincias, incluso con los salarios y gasto de aliados y latinos, cuando solíamos hacer uso de sus tropas auxiliares (*Erat hoc ut dico factatum Semper, nec (non) solum in Sicilia, sed in omnibus provinciis, etiam in sociorum et Latinorum stipendio et sumptu, tum cum illorum auxiliis uti solebamus*)” (Cic. 2Verr. 5, 25).

El orador critica en este pasaje a Verres durante su gobierno en Sicilia por el uso fraudulento de barcos y cargas que corresponden los *socii navales*<sup>251</sup> mamertinos, pero en donde el arpinate establece una comparativa interesante. Llama en este punto la atención que Cicerón, buen conocedor de las prácticas administrativas romanas, tome como elemento retrospectivo precisamente la *formula togatorum*<sup>252</sup> (y sus consiguientes listas), que además de recordarse como plenamente integradas en el sistema *stipendium*,

<sup>248</sup> De hecho la obra de Naco (2003) se fundamenta en el contraste entre el régimen fiscal de la República Media y el “modelo del *stipendium*” de época de Cicerón, cuya extrapolación a periodos precedentes había generado una fiscalidad de rasgos uniformes e inmutables en el tiempo.

<sup>249</sup> “en el resto, o se impone una contribución fija (*vectigal certum*), que se califica como ‘subyugada’ o ‘sometida a contribución’ (*stipendiaria*), como es el caso de los hispanos y de una mayoría de púnicos” (vid. Naco, 2003: 242, n. 317 y 241-48).

<sup>250</sup> “La evidencia disponible no resulta suficiente para probar la existencia de algún tipo de regulación jurídica romana del suelo extratitánico, junto con su régimen de contribución fiscal, con anterioridad a la caída de la República” (Naco, 2003: 237; vid. 237-40).

<sup>251</sup> Así se observa en las cláusulas *Mamertinis in ipso foedere sanctum atque praescriptum ut navem dare necesse sit* (Cic. 2Verr. 5, 50; 51) y *Qui ex foedere ipso navem vel usque ad Oceanum, si imperassemus sumptu periculoque suo armatum atque ornatum mittere debuerunt* (Cic. 2Verr. 5, 50; vid. Nicolet, 1978: 10).

<sup>252</sup> Dada la contraposición con el elemento anterior (*provinciae*), la expresión *etiam in sociorum et Latinorum stipendio* sólo puede tratarse de la *formula togatorum* itálica.

le sirven para describir un modelo fiscal que se habría exportado *in omnibus provinciis*. Evidentemente Cicerón habla desde su tiempo histórico sobre un sistema caduco (*uti solebamus*) pero representativo en lo que se refiere a la ambigüedad que se respira en el régimen de contribuciones tardorrepurbanas que hemos visto. Aquí, como observó Millar (1966), “does not seem to take into account differences between civitates which were *liberae* or *foederatae*, or were merely *stipendiariae*”, lo que a mi juicio se explica por este estado transitorio entre la República al Imperio que está presente en la propia concepción ciceroniana, muy cercano al comienzo del “inventario del mundo” augusteo. Una situación en la que se va dibujando, por un lado, la idea de una Italia exenta que para Cicerón corresponde al antiguo ámbito de acción de las *formulae* repurbanas. Por otro, un sistema provincial heterogéneo y complejo, pero que para el arpinate se asemeja al antiguo sistema itálico hasta el punto de considerarlo su precedente inmediato. En esencia, aunque la ligación jurídica sea cualitativamente distinta entre los distintos sistemas de control y explotación fiscal respecto a las *formulae togatorum*, los principios de descentralización a través de la *fides*, el reconocimiento de autonomía interna, un régimen de contribuciones semejantes y, finalmente, los criterios propios para la elaboración del censo, construyen esa idea de la transferencia de un modelo único exportado de Italia a las provincias. La simplificación se basa, en suma, en un modo análogo de proceder e interactuar con las comunidades provinciales desde la “descentralidad” y la autonomía interna, lo que en última instancia produce la diversidad (jurídica, socioeconómica) en función de la siempre genuina solución local adaptada a las demandas romanas.

Cuando pocos años después Augusto se propone su empresa del censo provincial, sabemos que a su muerte dispone ya de una información sumaria de *quantum civium sociorumque in armis* (Tac. *Ann.*, 1, 11, 4; *vid.* Suet. *Aug.*, 101, 6; D. Cass., 56, 33, 1-3) y se están produciendo los primeros censos provinciales. Y, si recapitulamos, esta labor es el producto de una iniciativa imperial, trasladada a las sedes provinciales y, en el caso del Noroeste de *Hispania*, también a las sedes conventuales más tarde como se ha defendido, para explotar recursos clave como el beneficio del oro en el s. I d.C. Estas sedes conventuales, por su mayor conocimiento sobre las necesidades y posibilidades de explotación, serían los núcleos centralizadores desde donde se gestionaban las aportaciones de mano de obra, se controlaban las obligaciones personales, se impartía justicia y se realizaba el censo (cap. 5.2). Sin embargo, hay muchas cuestiones sobre el procedimiento seguido en el proceso de elaboración del censo (ya sean de ámbito provincial o conventual), pues en la mayoría de los casos testimoniados sabemos poco más que la titulación de los *legati* o *procuratores ad census accipiendos* y *censitores*<sup>253</sup>: ¿hasta qué punto sabemos que efectivamente estos *legati* se involucraron en el nivel interno de las *civitates* para acometer los censos de mayor escala desde un registro individualizado? ¿Por qué han necesariamente de seguir un criterio uniforme, a imagen y semejanza del romano, timocrático e individual, que sea producto de una

---

<sup>253</sup> Una reflexión muy interesante sobre este punto puede encontrarse en la propuesta de Goffart sobre la naturaleza de la fiscalidad altoimperial en términos de contribuciones informales (Goffart, 1974: 3-21), quizás algo excesiva y, de hecho, fuertemente criticada por Lo Cascio “portando alle estreme conseguenze i ragionamenti del Grelle” (2000: 219).

extrapolación del *lustrum* romano? Teniendo en cuenta esta cercana experiencia republicana sobre comunidades dependientes no romanas: ¿no es más probable imaginar un sistema censual que descansa también en la unidad que representa la *civitas* altoimperial y en su capacidad para gestionarse a sí misma? ¿No pudieron estos *censitores* ejercer, más que una labor de confección propiamente, de supervisión de los censos remitidos por las propias *civitates* para que su información se adecuara y diera una respuesta eficaz a las necesidades de sus ‘recursos humanos’? ¿No puede esta realidad esconderse detrás de los censos sobre las *XXIII[I] civitatium Vasconum et Vardulo(l)orum* (*CIL* VI, 1643), el tribuno *misso pro censore ad Lusitanos* (*CIL* X 680), los peregrinos interannienses de Flegonte o las cifras que nos da Plinio sobre los *conventus* del Noroeste? ¿No primó siempre, al fin y al cabo, el fin sobre los medios dentro de la mentalidad imperialista romana?

Si tenemos en cuenta este precedente republicano y la importancia del principio de autonomía comunitaria pueden explicarse con una mayor naturalidad muchas de las soluciones que se adoptan desde el propio ámbito local como unidad fiscal y de censo. Así es el caso de la autonomía inherente al expediente municipal latino, como ha destacado García, pues no necesariamente ha de pasar por el tamiz uniformizante de las *leges datae flavias*<sup>254</sup> (*vid.* García, 2001d: 129-39). Al ser comunidades que adquieren este expediente tras una existencia previa, tanto física como jurídica, se siguieron rigiendo en gran medida por sus propio *iura* e *instituta* del periodo anterior y acometen sus propios censos<sup>255</sup>. Así por ejemplo, no debió cambiar demasiado la situación de *Ebusus* (Ibiza), al pasar de *civitas foederata* (Plin. *NH.*, 3, 76) a municipio latino<sup>256</sup>, cuando aparece en esta segunda fase un testador que sufraga la cantidad de 90.000 sestercios para el pago del *quodannis tributum Romanis penderetur* que pesaba sobre el colectivo comunitario y es ejecutado por su legado testamentario, *C. Cornelius Servinus* (*CIL* II, 3664). Ello constituye un prueba de cómo son los munícipes ebusitanos quienes, subscribiendo la opinión de Grelle, “sono obbligati al tributo nei confronti della loro comunità, non di Roma” (1963: 43, n. 47) y los problemas son gestionados en su seno sin intermediación estatal, como seguramente ya había ocurrido en su etapa federal. De hecho, este ejemplo no es muy diferente al caso ya visto de Vegeto en el Noroeste, quien equilibra las cuentas que pesaban globalmente sobre la *civitas peregrina* de los *Interamici* con el fisco (*HEp* 3, 277: *pares cum fisco rationes*). Los principios son los mismos, a medida que se produce el agigantamiento del Estado romano, éste delega funciones, tuteladas, en las comunidades (*vid.* Rodríguez Neila,

<sup>254</sup> “Hay, por tanto, dos cuestiones que a mi modo de ver no han de ser confundidas, la adquisición de titulación municipal por parte de una comunidad peregrina [...] con la uniformización (y delimitación de las capacidades jurisdiscentes dado que el derecho que se va a aplicar es el romano) que con posterioridad puede (o no) producirse de la mano de una ley municipal” (García, 2001: 136).

<sup>255</sup> Un ejemplo podemos encontrarlo en el caso del municipio de *Osset*, donde acomete esta tarea el *Ilviro* local: *L(ucio) Caesio L(uci) f(ilio) Pollioni aed(ili) Ilvir(o) censu et duomviratu bene et r(e) p(ublica) acto mun(i)cip(es)*.

<sup>256</sup> Así se nombra en una obra evergética de los *Cornelii* a propósito de la construcción de unas conducciones de agua *in municipium Flavium Ebusum* (*CIL* II, 3664). Para otras evidencias y problemáticas *vid.* Sánchez León, 2002-2003: 109-12.

1986). Lo que no debe confundirse con el proceso, desigual, de emulación paulatina respecto al sistema censual y administrativo romano<sup>257</sup>.

Desde esta perspectiva, la *civitas* no sólo goza, en suma, de un papel axial en la estructuración administrativa y de censo, sino que se erige en un elemento agente que participa en su propio sometimiento. La principal fuente con la que contamos para el censo provincial, la epigrafía de funcionarios *ad census accipiendos*, suele concebirse como un desempeño sistemático en la elaboración de los censos locales en el nivel interno pero, en realidad, *accipiere* permite contemplar una labor de supervisión, en donde los funcionarios simplemente “aceptan”, “reciben”, es decir, aglutinan, los censos remitidos por las comunidades locales.

Sin embargo, no se pueden dar más pasos a la hora de adivinar qué tipo de procedimiento/s pudieron seguir las *civitates* del Noroeste a la hora de abordar esta nueva exigencia. Puesto que carecían de una experiencia pre-estatal previa, el paso debió ser complicado y con toda probabilidad paulatino. Sobre estas dificultades nos habla el propio emperador Claudio, cuando repara en su tiempo sobre las dificultades de imponer el registro a algunas comunidades galas inexperimentadas en este campo, para las cuales el censo se define todavía como *novum tum opere et inadsuetum Gallis* (FIRA2 I, 284-5). Pero, además, tampoco cabe suponer que existiera una solución única, sino ajustada a las posibilidades y especificidad de cada *civitas* siempre y cuando registraran la información que a Roma le interesa.

### 5.3.3. La ideología censitaria en el Noroeste: una ausencia.

Sobre el modo de proceder en el plano interno de la *civitas* respecto al censo lo máximo que puede apuntarse es la inexistencia, a mi juicio, de una ideología censitaria en el Noroeste que estratificara a la sociedad conforme a su patrimonio. Es decir, que por mucho que la desigualdad se construya sobre relaciones de propiedad asimétricas entre los individuos, el censo o la cultura timocrática no es el vehículo de institucionalización de la desigualdad. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser una opción posible si la tributación sobre el suelo de la *civitas* se configura en “bloque”, es decir, no resulta del sumatorio de los censos patrimoniales privados. A esta conclusión puede llegarse si atendemos, en el hábito epigráfico del Noroeste, a los dos elementos fundamentales que configuran el binomio de la mentalidad censitaria o geométrica: el *munus* y el *honor* (López Barja, 1996). La unión de ambos, presente ya en la institución del censo de Servio según la tradición (*vid.* Liv. 1, 42, 4-5), se caracterizaba básicamente por la idea, tan romana, de que el ideal de gobernanza de la comunidad política debía, no sólo erigir a los más ricos en la cúspide de la pirámide sociopolítica, convertirlos en sus

---

<sup>257</sup> Ya sea una emulación *motu proprio* desde su propia autonomía o también por disposiciones específicas mediante *leges datae* o incluso como castigo tras incurrir en episodios de rebeldía. Ejemplos de este último caso pueden encontrarse en el mencionado pasaje de las doce colonias latinas rebeldes que se negaron a contribuir en la guerra contra Cartago (*vid. supra*), y es muy posible que fuera también el caso de los *Cietae* de Cilicia con Tiberio, que huyen a las montañas del *Tauros* para eludir el censo romano y pagar tributos: *quia nostrum in modum defferre census, pati tributa adiegebatur* (Tac. *Ann.*, 6, 41, 1). Finalmente, también inferencias desde instancias imperiales en la administración municipal, como pueden observarse en las instrucciones y *mandata* de Trajano a Plinio el Joven a propósito de algunos municipios de *Bitinia* (*Ep.*, 112, 114, 115).

magistrados, sino que éstos contaran entre sus cualidades de gobierno saber revertir su posición privilegiada en beneficio comunitario. El fenómeno evergético es, por tanto, la materialización más palpable de esta formulación ideológica a través del censo (López Barja, 1996: 120-24): las élites asumen su papel como referente político (*honor*) y responden con su propio patrimonio para la mejora de la comunidad hasta formar parte consustancial de su ejercicio de gobernanza (*munera*). Los *munera*, además de ser el elemento característico de la cualidad de *civis* (e incluso lo definen, como ocurre con los *municipes*), han de ser repartidos geométricamente, correspondiendo a la franja superior un desembolso complementario, fijado en preceptos tanto morales (liberalidades privadas) como institucionales (por ejemplo, la *summa honoraria* en centros promocionados<sup>258</sup>).

El caso del Noroeste parece distanciarse de esta norma, tan extendida en ámbito provincial hispano (*vid.* Melchor, 1992; 1993; 1994b). Mientras la *civitas* se define como la “unidad de *munera*” ya en el edicto berciano y las muestras de exhibición de poder y de la individualidad ( $\approx$ *honor*) sean relativamente abundantes en el Noroeste hasta el punto de constituir un elemento intrínseco del hábito epigráfico (Sastre, 2007), no se produce la contrasprestación habitual con este tipo de actuaciones evergéticas:

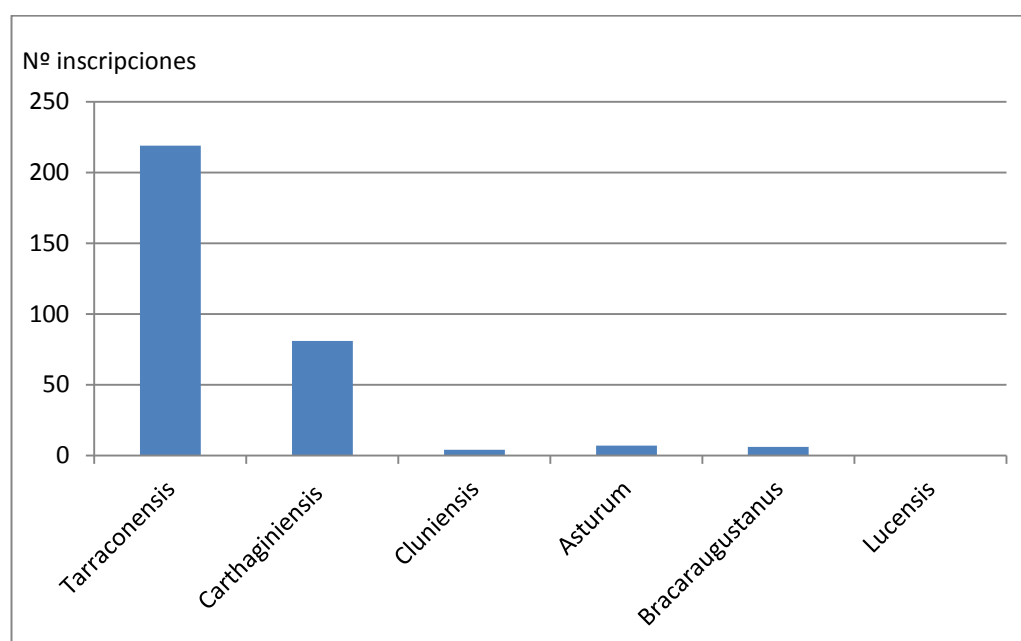


Fig. 17. Gráfica de distribución de epigrafía evergética a partir de Melchor (1994b: 64, tab. 1; *vid.* 1994a y 2009).

Las razones profundas que imperan en esta conducta sociopolítica resultan, sin embargo, difícilmente descifrables, pero por determinados aspectos sus elites sociales no se ven en la necesidad u obligación de gratificar a la comunidad política, de la que emana su estatus, con actuaciones *de sua pecunia*. Hay otro tipo de manifestaciones, pero carecen de este tipo de significado. Así ocurre, por ejemplo, con las dedicaciones o construcciones a divinidades tanto del panteón romano como local, a veces mal consideradas como evergéticas (*cf.* García Martínez, 1997), pues su objeto es el culto o

<sup>258</sup> *Vid.* Melchor Gil, 1994a y 2009.

el cumplimiento de un *votum*, no la reversión del privilegio en la comunidad por mucho que pueda, colateralmente, producirlo. Así sería el caso, por ejemplo, del conjunto de inscripciones del complejo religioso de Panóias (Vila Real, Portugal; *CIL* II, 395a-e) dedicado ya, con mayor seguridad, a Isis y Serapis tras la revisión y restitución reciente de sus campos epigráficos (Correia, Pires y Sousa, 2014, *cfr.* Alföldy, 1995). En él aparece repetidamente un miembro del *ordo* senatorial (nombrado como *vir clarissimus*), *C. Calpurnius Rufinus*, que lo manda construir (*in hoc templo lo[ca]t[i]s aedem*) y que lo hace en cumplimiento de un voto privado (*votum miscetur*: *CIL* II, 2395d; *votum cremantur*: *CIL* II, 2395b), por lo demás, desconocemos la relación del individuo con la comunidad y no puede descartarse un origen externo dada su proyección política. Pero también pueden añadirse otros supuestos del Noroeste malinterpretados a mi juicio como supuestos actos de evergetismo (*vid.* García Martínez, 1997), pues además de una naturaleza distinta (cultural), carecen de los elementos propios de este fenómeno: la placa votiva a *Deo Vago Donnaego* (Carrizo de la Ribera, León; *CIL* II, 2636 *ERAs* 108; *IRPLe* 63; *ILS* 4509) es sufragada por iniciativa de la *res p(ublica) Ast(urica) Augusta* aunque la iniciativa parta de sus magistrados (*per magistros*), como demuestra el hecho de que su ejecución sea encomendada a un *curator*; las dedicaciones a *Hercules* (Rosinos de Vidriales, Zamora; *AE* 1963, 16) y *Diana* (León; *CIL* II, 2660 a-d; *HEp* 12, 317), tampoco pueden considerarse propiamente evergéticas, pues las realizan miembros de las legiones que no pertenecen a la comunidad y precisan incluso su origen alógeno de *Mauretania (domo Chova ex provincia Maur[e]tania)* y *Lybia (e Lybia)* respectivamente; o la dedicación de los *Q(ueledini)* a Júpiter (San Andrés de Montejos, León; *HEp* 6, 626), por tratarse de un acto colectivo y que entra, por tanto, en directa contradicción con la evergesía.

Un punto intermedio entre práctica cultural y evergetismo sí nos lo encontramos en el complicado conjunto rupestre de la “Fonte do Idolo” en las inmediaciones de la antigua ciudad de *Bracara*, dedicado a las divinades de *Nabia* y *Tongus Nabiagus* (*CIL* II, 2419=*HEp* 5, 966=*HEp* 17, 215). Tras las campañas de excavación de 2002 y 2006 ha podido dotarse de un contexto arqueológico que facilita la interpretación apropiada de los epígrafes, al parecer directamente asociados al estanque ritual documentado en sus inmediaciones, además de obras de drenaje y canalización que, quizás, pudieron estar conectadas con las termas de Granjinhos (Garrido, Mar y Martins, 2008). El promotor de la primera fase del complejo fue *Celicus Frontus* según reza la inscripción (*fecit*). Sin embargo, de nuevo parece responder más a un estímulo religioso que propiamente evergético, pues en principio no pertenece a la *civitas* tras reconocer su origen externo *Arcobrigense*. Digo en principio, pues aunque el topónimo está testimoniado en el *conventus Caesaraugustanus* (Plin. *NH.*, 3, 24; *vid.* Ptol. 2, 6, 28; *It. Ant.*, 437; *Rav.*, 309, 17) y en un lugar ambiguo del suroeste hispánico (Ptol. 2, 5, 6), no puede descartarse que pudiera existir un tercero en *Callaecia* (*vid.* Luján, 2008: 78), más que por los argumentos filológico-celtistas apuntados a veces, por el hallazgo en 2002 de una nueva indicación del topónimo en Chaves (Carneiro, 2005: 104-105). Por otra parte sus sucesores (*pronepotes*), que ya estarían en cualquier caso integrados en la comunidad, participan en labores posteriores de ampliación o reconstrucción del santuario (*renovarunt*) según se recoge con claridad en *CIL* II, 2420 (= *HEp* 5, 967) y en



sendas fases constructivas, de modo que ya se dan los elementos para poder considerarse, con más rigor, evergéticas además de religiosas. Sólo faltaría conocer con seguridad su uso público, extremo que ha sido puesto en duda por Lemos al calificarlo como posible santuario de uso familiar en una villa cercana a la capital conventual o incluso fruto de un pacto, entre población local y élite romana, que estaría colocado en unos orificios todavía observables junto a la figura togada y que otorgaría al monumento una naturaleza distinta (Lemos, 2003; 2007-2008: 210-213; *cfr.* Garrido, Mar y Martins, 2008: 53-67).

Lo mismo puede decirse de las manifestaciones de culto imperial, de propaganda militar o en agradecimiento de obras públicas (*viae, pontes*<sup>259</sup>) cuyo discurso interno consta de una direccionalidad distinta a la evergética, hacia los poderes centrales en vez de a los elementos internos de la *civitas* (sobre estas cuestiones *vid.* Sastre, 2002: 25-26). Salvo el citado ejemplo de Vegeto, que equilibra las cuentas de los *Interamici* y, quizás, la mencionada “Fonte do Idolo” de *Bracara* (Garrido, Mar y Martins, 2008) no se testimonian más prácticas de este tipo, como tampoco señal alguna del agradecimiento comunitario a sus élites gobernantes, propias de otros ámbitos peninsulares (*vid.* Melchor, 1994b: 66-67). Sin duda la estructuración genuina del sistema social del Noroeste y la falta de urbanismo tengan mucho que decir en este punto. Pero estos condicionantes materiales sin duda también pudieron cristalizar en formas distintas de gestión y reparto de las cargas comunitarias para beneficio de sus élites, al estar asentadas sobre principios culturales distintos y seguramente distanciados del carácter progresivo tan propio de la mentalidad romana (y su consiguiente gravámen a la aristocracia). Desde este presupuesto, la inexistencia de una práctica tan habitual como es la evergesía podría ser indicativa de una conducta social y fiscal distinta, en donde el privilegio de la clase dominante se asienta precisamente en la exención respecto al conjunto social dependiente. Así es que aunque aparezcan los elementos propiciatorios para que se produzca la génesis de la ideología censitaria, el *munus* colectivo y los *honores* (en el sentido de una élite política que visibiliza su posición), no aparece el producto característico de la ecuación, la evergesía, la retribución a la *civitas* de los privilegios que ella le ofrece como ejercicio de responsabilidad política.

---

<sup>259</sup> *Cfr.* García Martínez, 1997: 154-58, en donde, extrañamente, se consideran actos evergéticos la construcción de *viae* que reconocen como sus promotores a *legati Augusti pro praetore* bien conocidos como *C. Calpetanus Rantius* (AE 1928, 178; *CIL* II, 4854; *HEp* 7, 535; AE 1974, 401; *CIL* II, 4798; *CIL* II, 4802; *CIL* II, 4803; *CIL* II, 4838; *HEp* 5, 976; *IRPL* 320; *HEp* 11, 283 y 655; *HEp* 13, 826), y que aparece además en la inscripción del puente de Alcántara (*CIL* II, 2477), tampoco correspondiente a evergetismo local desde este planteamiento, por cierto.

## 5.4 La pizarra de Pelóu: ¿una *tabula censualis*?

El curso de las excavaciones de 2003-06 en el castro conocido como “monte Castrello” de Pelóu (Grandas de Salime, Asturias) tuvo entre otros sorprendentes hallazgos epigráficos una inscripción interpretada como *tabula censualis* (HEp 14, 21; HEp 18, 21; Villa, de Francisco y Alföldy, 2005=2006-08; Villa, 2009a, nº 58: 246-47; Villa, 2009b: 20-22; Menéndez-Bueyes y Carriles, 2011: 289-90). Se trata de una lista de individuos inscrita en pizarra, material común del contexto geológico de la región occidental asturiana pero que, salvo algunas excepciones (López Barja, 2014: 464), no ha recibido una atención monográfica. De hecho López Barja ha sido el primero en cuestionar su naturaleza de censo oficial a través de la informalidad del documento y de los nombres que aparece, estela que seguiremos a lo largo de las siguientes páginas. Por esta razón, y por constituir un documento de especial interés para el apartado que nos ha ocupado hasta ahora, se hace necesario un análisis detenido con el fin de contrastar la hipótesis sobre su naturaleza censal a partir del resto de la información con la que contamos sobre la confección y morfología del registro provincial romano.

### 5.4.1 Contexto arqueológico: el castro romano y su paisaje minero.

El castro de Pelóu fue dado a conocer por González y Fernández-Vallés (1973), pero no ha sido hasta las campañas de excavación del recinto y de otros asentamientos de la zona interfluvial Navia-Eo, realizadas desde los años 90, cuando se ha avanzado en el conocimiento sobre la transformación regional del occidente asturiano por el profundo impacto de la dominación romana. En el caso de Pelóu, los cuatro sondeos acometidos hasta la fecha han planteado una secuencia diacrónica de larga duración, desde los siglos V/IV a.C. a una última fase bajo imperial, cuando se recupera el lugar de hábitat tras su abandono del siglo II d.C.<sup>260</sup> (Montes, Hevia, Villa y Menéndez, 2009: 320-22; Montes, Hevia y Villa, 2010: 17-22). A 645 m de altura absoluta y en una posición preeminente en la cuenca del río Trasmonte da Boliqueira, el recinto fortificado se encuentra inmediatamente enfrente de las explotaciones romanas de oro en primario de Vilavilleiro/Valabilleiro y muy cercano a las cortas de Pedras Apañadas. Su población hubo de participar con seguridad en las labores de extracción y acondicionamiento de las explotaciones, pues, además de su proximidad a las estructuras mineras, algunos de los canales de agua destinados al abastecimiento de la explotación aurífera dibujaron los fosos delimitadores del asentamiento y se vinculan a un depósito en su parte superior (Sánchez-Palencia y Suárez, 1985: 134-35 y 238; Sánchez-Palencia, 1995: 148 y 155; Villa, 2010: 91-93 y 105).

---

<sup>260</sup> De hecho la hipótesis inicial antes de la excavación le concedía una catalogación de “castro minero” de fundación romana, motivado por los movimientos poblacionales relacionables con la explotación de mano de obra minera (*vid.* Montes, Hevia, Villa y Menéndez, 2009: 315).

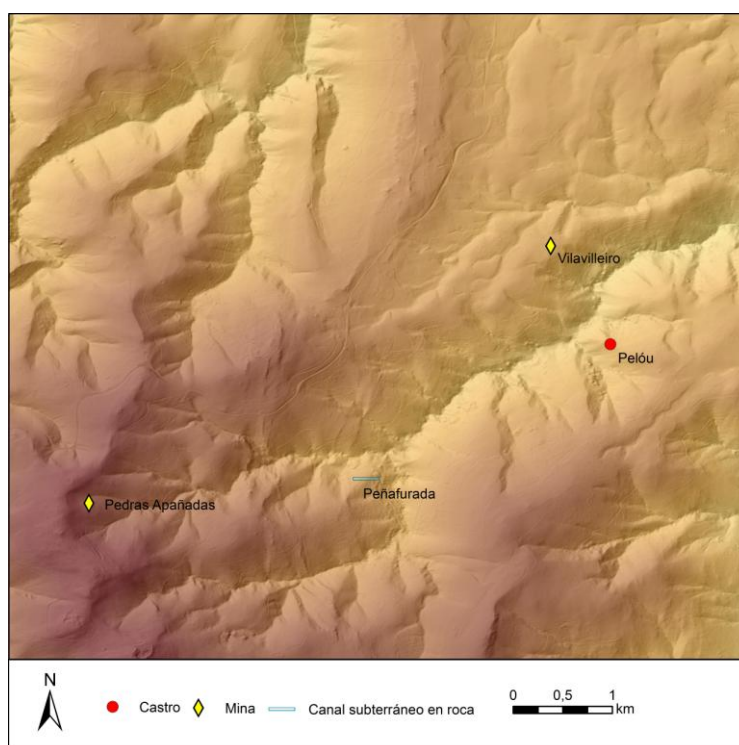


Fig. 18. Situación de Pelóu respecto a su entorno minero inmediato.



Fig. 19. Fosos y depósito minero asociado a Pelóu. Fuente: Montes *et al.* 2009: 315.

En la etapa romana altoimperial (fase 3) se han registrado dos hogares en el interior del recinto (C-1 y C-3), el vial de acceso y una posible remodelación del perímetro fortificado, que presenta una constricción del espacio interno frente al periodo precedente, como refleja la superposición de la atalaya sobre una de las cabañas del nivel inferior de ocupación. Las razones de esta disminución del espacio habitado se desconocen, pero resultan en cualquier caso sorprendentes si tenemos en cuenta el ya de por sí pequeño tamaño del asentamiento en época romana. El resto de testimonios asignables a esta época han perfilado la presencia de personal militar en el castro, nada extraño si tenemos en cuenta sus necesarias funciones técnicas y de supervisión de las labores de prospección y explotación aurífera hasta el punto de constituir un binomio recurrente en el Noroeste (Sastre, Beltrán y Sánchez-Palencia, 2010; Fernández Ochoa y Morillo, 2015). En un paisaje minero como Pelóu puede adivinarse una anatomía social compuesta por población local dependiente, involucrada en las labores, junto a miembros del ejército, siempre más visibilizados, pero sin presuponer que los primeros fueran enteramente desplazados por los segundos<sup>261</sup>. Se han hallado piezas de armamento militar datadas en el siglo I d.C., como un puñal de antenas forjado en

<sup>261</sup> La colaboración de las comunidades peregrinas con un ejército cuya funciones en el territorio requieren una movilidad considerable hunde sus raíces en una institución romana tan antigua como lo es el *hospitium militare*, también para periodos de paz, y objeto de legislación desde el siglo I a.C. (vid. Naco, 2001; Cic. *Att.* 5, 10, 2; 5, 16, 3).

hierro<sup>262</sup> (Villa, 2009a, nº 60: 250-51), un gancho y una cadena igualmente de hierro cuya tipología se asemeja a los aparejos de la caballería itálica (Villa, 2009a, nº 61: 252-53), las posibles asas de un casco legionario (Villa, 2009a, nº 68: 266-67) y un puñal cuyas similitudes formales con el descubierto en el castro minero de Corporales han sugerido que “ambas deben responder a un mismo cuerpo de ejército con idénticas o muy parecidas motivaciones respecto a su presencia” (Fernández, 2008: 113-14; *vid.* 94-95 y 92; Villa, 2009a, nº 63: 256-57).

La primera lectura de la pizarra de Pelóu como *tabula censualis* se integra en un encuadre administrativo dibujado a partir de dos inscripciones halladas en contexto arqueológico altoimperial. La primera es un grafito procedente del cercano castro de Chao Samartín (*HEp* 18, 15<sup>263</sup>; *vid.* Villa, 2009b: 20-21), hallado en una estancia interpretada como posible taller de fabricación de productos textiles, sobre un que contendría en fragmento cerámico un saludo a la *civitas Ocela* citada por Estrabón (3, 4, 3). Ello sería coherente con el prominente papel de Chao Samartín sobre el entorno, como refleja la gran *domus* hallada en su interior (*vid.* Villa, 2009b). La segunda se trata de un sillar de arenisca encontrada dentro del castro de Pelóu, cuya lectura, habida cuenta de los desperfectos de su parte superior, pudiera ser *castel[l]u[m]* o *castel[l]o* (*HEp* 18, 14). En el primer caso, constituiría si no me equivoco el único testimonio en donde la comunidad se auto-representa como *castellum* en su interior, en nominativo y de un modo aséptico y descriptivo, cuando lo común es que los *castella* formen parte de la estructura onomástica en epigrafía funeraria privada (○) o nombren a colectividades en inscripciones votivas (*castellani*). En el segundo caso, en ablativo, sería la parte final de una inscripción más amplia que daría comienzo en el sillar inmediatamente superior, pero cuyo contenido no se ha conservado. La segunda posibilidad no asegura, por tanto, que el *castellum* deba identificarse con el propio Pelóu al poder aludir a otro exterior según fuera el sentido del texto no conservado. Sea como fuere, el valor concedido a esta documentación situaría a Pelóu dentro de una secuencia administrativa más amplia, por un lado en dependencia con el castro de Chao Samartín, considerado *caput* de la *civitas* de los *Ocelae* y del que sería tributario (*vid.* Villa, 2009b) y, por otro, se identifica el *castellum* con el propio castro, aspecto cuestionable como ya se ha mencionado (*vid.* cap. 5, 3, 1; Orejas y Ruiz del Árbol, 2010).

En este marco la pizarra de Pelóu se interpretó como un documento de censo oficial, “a modo de *tabula censualis*, donde se refieren los individuos o grupos familiares sometidos a contribución en el territorio vinculado al *castellum* y cuyo pago bien pudiera realizarse, ocasionalmente, mediante prestación de servicios en las importantes explotaciones auríferas de su entorno” (Villa, de Francisco y Alföldy, 2005: 274=2006-08: 498; Wulff, 2012: 533-34). El texto con los nombres que han podido restituirse (Villa, 2016: 26-27) es el siguiente:

<sup>262</sup> Además de otro afalcatado con hoja de hierro y empuñadura de bronce también datado en el siglo I d.C. (Villa, 2009a, nº 62: 254-55).

<sup>263</sup> *HEp* 18,15: *Copiam [---]uro flavienses salutem Ocelae feliciter*. Sobre la comunidad dedicante no hay una solución satisfactoria, si bien se ha especulado con la posibilidad de *Bouron*, nombrada por Ptolomeo (22, 6) en ámbito lucense y sin el epíteto de asignación flavia (bajo la forma reconstruida *[b]uroflavienses*).

Col I: *Flavinus / Antio++vs / Flavius* // Col. II: *Torgalinus?, Lucius, Antonius, Fullonius, Quintinus[- -], Frontinu, Fronto, ¿Mussora?, Quintus, Quintinus, Lucianus, Septumus* // Col. III: *Pambanus, Pontius, Flavianus, Duanus (o Duavus), et filius posuerunt frugem, Sempronius, Lucius, Ursinianus, Gemellus, Beduna, Maritumus, Maritumus, Flucinus (o Fluvinus), Antonius Capito, Calpurnius, Aemilius, Sextus [- -]*



Fig. 20. Fotografía y restitución del texto epigráfico. Fuente: Villa, 2016: 26-27.

#### 5.4.2 La población del recinto fortificado como factor interpretativo.

Si tenemos en cuenta la naturaleza censal que se le presupone a la *tabula*, debe incorporarse como factor interpretativo el aspecto demográfico del asentamiento, al menos desde una perspectiva meramente aproximativa y orientativa. Así, podrá trazarse conjeturalmente el espectro social al que puede corresponder la pizarra y comprobar si puede o no limitarse a la población del asentamiento. Con este fin, dentro de la problemática intrínseca a estudios de este género, el método que mejores resultados ha brindado para este tipo de poblamiento fortificado ha sido el que se calcula sobre la superficie habitada. Ello se debe, por un lado, a la carencia generalizada de necrópolis en el Noroeste, herramienta habitual de estos estudios; por otro, a los problemas derivados de las estimaciones demográficas que se han abordado a partir del análisis de la “capacidad de carga” de la comunidad (la cantidad de individuos que puede sostener su entorno), sobre todo en lo que respecta a la definición del territorio de captación, así como los parámetros sobre la capacidad productiva de las sociedades preindustriales. La metodología que aplicaremos a Pelóu busca adaptar dentro de la variabilidad regional de los castros occidentales de Asturias la aplicada en las estimaciones demográficas realizadas para los recintos fortificados de época romana en otros territorios del Noroeste. Hay varias cuestiones que deben tenerse en cuenta:

- La definición del área total del poblado, calculada a partir de fotointerpretación del recinto perimetral de la fortificación, lo que excluye otras estructuras como pueden ser los fosos exteriores o viviendas extramuros. En el caso concreto de Pelóu, además, deben tener en cuenta otros problemas, como la dificultad de definir con



precisión algunos de sus límites por la construcción de una pista moderna<sup>264</sup> y la paulatina transformación del enclave a lo largo del tiempo por las explotaciones mineras antiguas, con la consiguiente variación y ampliación de sus fosos adyacentes. Por otro lado, a pesar de la gran pendiente del sector sur junto al foso, se ha incluido dentro del recinto habitable ante la posibilidad de un acondicionamiento en terrazas. Evidentemente las conclusiones a las que aquí pueden llegarse tiene sólo un carácter interino sujeto a los avances en la excavación del asentamiento y a la obtención de una necesaria “imagen fija” de la ocupación para un periodo concreto. Con el fin de intentar paliar algunos de estos factores, la definición del recinto se ha elaborado complementando varias capas base: una mdt con resolución de 2m a partir de las nubes de puntos LiDAR del último retorno (*ground*)<sup>265</sup>, mapa de pendientes, e imágenes del vuelo americano (1956-57) y del PNOA actual (2014).

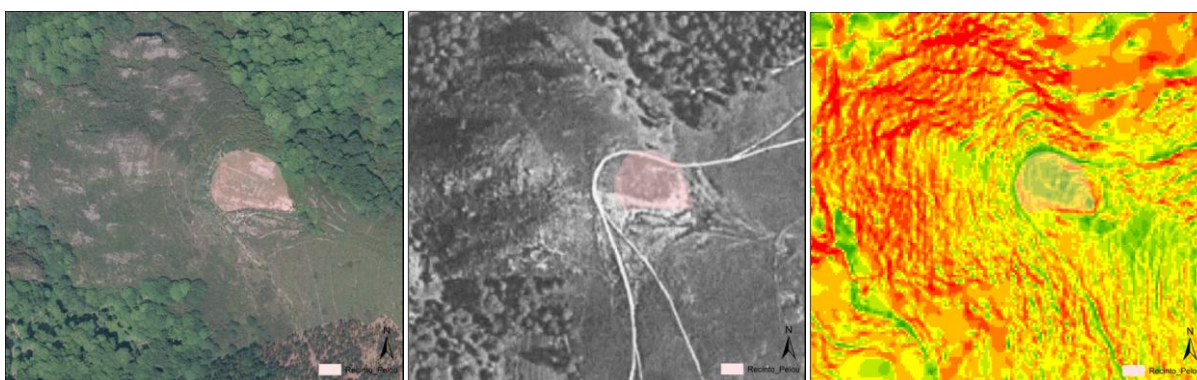


Fig. 21. Contorno aproximado del área habitable del castro de Pelóu.

- El cálculo de la densidad de poblamiento por hectárea de la superficie habitable. Para ello he aplicado como datos base las estimaciones demográficas realizadas por Fernández-Posse y Sánchez-Palencia para los castros romanos de la cuenca de la Cabrera y el Eria (1988), pues han sido tomadas como referencia válida para varios análisis territoriales posteriores: para la Valduerna leonesa (Orejas, 1996: 96-97 y 176 n. 24), el Baixo Minho (2014: 46-50) o Aliste y Sayago en Zamora (Romero, 2015: 397-415)<sup>266</sup>. Sin ánimo de introducirnos en exceso en determinadas cuestiones y problemáticas, es preciso analizar dos aspectos que intervienen en la densidad de poblamiento por unidad de superficie habitable.

<sup>264</sup> En este caso, el trazado hipotético sobre la parte del Norte del recinto engloba una parte que se habría visto arrasada por la pista y que se ha considerado parte posible del asentamiento antes de su destrucción a efectos de calcular la superficie habitable.

<sup>265</sup> Aunque la principal ventaja del uso de LiDAR frente a la topografía tradicional resida en la discriminación de la cubierta vegetal sobre el nivel de suelo, en este caso persiste en los laterales del asentamiento una cierta cantidad de ruido que sería preciso refinar y suavizar mediante algoritmos de interpolación. Dado que esta distorsión no se presenta en el interior del recinto no se ha considerado necesario la aplicación de geoprocesamiento para este fin.

<sup>266</sup> Otras posibilidades metodológicas pueden encontrarse en Domergue para la Valduerna leonesa (1986: 52-53; *cfr.* Orejas, 1996: 178-179) o Carballo para las cuencas del Ulla y Deza, ya en ámbito gallego (1986; 1990; 2001).

A) La discriminación del espacio no habitado dentro del total del asentamiento, ya sea porque permanece vacío de unidades domésticas o porque presenta estructuras con distinta funcionalidad a la puramente residencial. Para este punto sería necesario calcular el porcentaje de la superficie edificada del castro de Pelóu, en donde sólo dos cabañas se han relacionado con el periodo de ocupación romano (C-1 y C-3). A ello se suma que C-3 ha tomado el calificativo de gran cabaña (12 x 6 m), con un área aproximada de 56,5 m<sup>2</sup> sobre su planta elíptica y podría carecer de una función residencial. Por otro lado, algunos cálculos de las superficies internas de otros castros orientales de Asturias con características semejantes a Pelóu y mejor conocidos cuentan con una información insuficiente para poder inferir una estimación de densidad propia. Así sería el caso, por ejemplo, del castro de Pendía, también de larga diacronía y relación directa con las explotaciones auríferas de su entorno, pero en cuya estructuración interna sólo se ha distinguido la superficie destinada a estructuras no residenciales (termas, fortificaciones, grandes estructuras, etc.) del resto, por lo que la superficie total engloba el callejero con el área dedicada a los hogares y no se puede utilizar para este objetivo (Rodríguez del Cueto, 2015: 251-54). Por esta razón aplicaremos la estimación de densidad máxima y mínima planteadas por Fernández-Posse y Sánchez-Palencia para la Cabrera leonesa, asumiendo unas pautas de ocupación análogas, siempre sujetas a revisión posterior conforme avancen las excavaciones y aparezcan reflejadas otras estructuras no residenciales características de esta zona. En este caso el cálculo de densidad se estableció sobre los porcentajes de superficie edificada de castros romanos cuya articulación interna era bien conocida. Ello dio como resultado un 60% para el Castro de Corporales y un 34% para la Corona de Quintanilla, lo que fue tomado como referencia a la hora de establecer una horquilla de densidades entre el máximo y el mínimo respectivamente para época romana. Para nuestro caso, como decíamos, nos moveremos en esta misma horquilla como decíamos, que oscila entre los 101 y 294,4 hab./ha sobre el total del recinto habitable.

B) La definición del número de habitantes por unidad doméstica. Debe advertirse que se carece de información directa para estimar cuántos individuos podrían vivir en cada núcleo habitacional, pues entre otras razones se desconoce la articulación familiar de estas sociedades y la forma en que ello se plasma en las pautas de residencia. Las aproximaciones a la demografía antigua suelen proceder de estudios etnográficos contemporáneos. El índice que aplicaremos aquí, es de nuevo el planteado por Fernández Posse y Sánchez-Palencia, según el cual se estima en 4,65 individuos por hogar, al proceder de un área cercana (La Cabrera Alta: 1988: 227, n. 65), si bien se ha planteado una revisión al alza de estas cifras a tenor de datos demográficos procedentes de sociedades actuales en vías de desarrollo (Currás, 2014: 48) o análisis etnográficos de otros continentes (González Ruibal, 2006: 199-200).

Hechas estas previsiones, del cálculo de superficie habitable resulta un total de 2.926 m<sup>2</sup>, muy cercano a la estimación de 0,3 ha (Montes *et al.*, 2009: 313), sin duda un recinto fortificado de escasas dimensiones en relación con otros del occidente asturiano. A ello se suma lo ya mencionado sobre la sobredimensión de algunas estructuras no habitacionales dado el escaso tamaño del asentamiento, pues entre las intervenciones parciales ya destaca una gran cabaña, una sauna y una reestructuración del recinto original que parece reducirse de tamaño en la fase romana. Ello nos permite atisbar que la estimación sobre la horquilla demográfica seguramente sea más tendente a los datos mínimos que a los máximos. La aplicación de las densidades planteadas para Peláu nos abre un intervalo de 29,55 a 86,14 individuos como máximo.

¿Puede entonces el listado hacer referencia a la población local? Según la publicación de la *tabula* en 2005 (*HEp* 14, 21; *HEp* 18, 21; Villa, de Francisco y Alföldy, 2005=2006-08) han podido distinguirse hasta un total aproximado de 45-50 individuos, repartidos en tres columnas, de los que se han reconocido 31 nombres, aunque seguramente fueran más si tenemos en cuenta el desconocimiento sobre la parte no conservada y los trazos de otros nombres que no han podido identificarse por el estado fragmentario de su parte inferior y el reverso. Sin embargo esta cifra supera ya la estimación demográfica, pues a excepción de *Beduna* y, a lo sumo, *Mussora*, se representan únicamente hombres. Es decir, incluso dando por sentado que refleja a varones de todas las edades, incluyendo niños y ancianos (lo que teniendo en cuenta las características de un censo sería lo menos probable), las cifras totales elevarían la cuantía en torno a la centena, asumiendo una proporción 1:1 de mujeres, con lo que se supera la estimación demográfica más generosa. Pero si consideramos que sólo estarían registradas las personas con la edad necesaria para la prestación de servicios, como se le presupone a un censo de este tipo, el volumen supera ampliamente las previsiones. Es decir, el factor demográfico, aunque nunca pueda hablarse de certezas, proporciona un primer indicio para cuestionar que la pizarra sea un registro de la población de Peláu o de una parte de ella, sino de un ámbito más amplio o cualitativamente distinto.

#### **5.4.3 La lista de Peláu: ensayo sobre su naturaleza y composición interna.**

Surge entonces inmediatamente la cuestión: ¿Qué tipo de personas están representadas en la pizarra de Peláu? Si nos atenemos a la onomástica, todos los individuos son nombrados simplemente por el *cognomen* o el nombre único en nominativo a excepción de *Antonius Capito* (col. III), sin más elementos de referencia. Ello constituye, en primer término, un problema de cara a la interpretación censal del documento, como ya ha sido acertadamente notado por López Barja (2014: 464) con sólidos argumentos. Resulta extraño, tratándose a priori de un registro oficial, que no aparezcan estructuras bimembres o se señalen otros aspectos, tales como la filiación o la *origo*, con el fin de evitar una estructura onomástica asociable a la esclavitud. Por supuesto, también la falta de indicación de la edad (a la que se adscriben las



obligaciones personales) supone una carencia difícil de eludir si nos atenemos a un documento con tal vocación. Las principales fuentes sobre el censo provincial de la *Citerior* no permiten conocer con seguridad la forma en que los individuos eran registrados en el mismo, pues ni la epigrafía de *procuratores ad census accipendos* y *censitores* suministran datos de este tipo (aunque algunos de ellos pudieran tener un origen militar<sup>267</sup>), ni tampoco Plinio, quien simplemente resume los datos globales de *capita libera* para los tres *conventus* noroccidentales (*NH.*, 3, 3, 28) como ya se ha visto. Sin embargo, un nombre único se antoja de todo punto insuficiente para garantizar la ligazón administrativa con sus obligaciones fiscales. Seguramente fuera inasumible logísticamente, para el contexto de Pelóu, un registro pormenorizado por *professio* como el que se acomete en el ámbito local itálico a mediados del siglo I a.C. según la *Tab. Heracleensis*, en donde la propiedad fondiaria se asocia a fórmulas onomásticas completas (l. 145-150). Pero sí habría de ser necesario, como mínimo, la indicación de la edad y la *civitas* de adscripción, tal y como aparece en los centenarios lusitanos de Flegonte durante el gobierno de Adriano (I, 62-64 y 66-68<sup>268</sup>; *vid.* López Barja, 2014: 464; cap. 5.3.1).

A la hora descomponer el perfil más probable de los individuos de la lista, es preciso plantear la cuestión de si se trata de un reflejo verosímil de las tendencias onomásticas locales como sería esperable en un censo. Del total de los 31 nombres reconocidos, una amplia mayoría (25) está compuesta por *praenomina* o *cognomina* latinos que actúan como nombre único. De entre ellos, casi todos corresponden a elementos nominales latinos muy comunes tanto dentro como fuera de *Hispania*<sup>269</sup> (20), junto a otros menos habituales o testimoniados en provincias más localizadas<sup>270</sup> (5). Los seis restantes plantean, por otro lado, algunos interrogantes que es preciso desgranar. Tres corresponden a nombres masculinos que carecen de cualquier paralelo epigráfico (*Torgalinus/Torcualinus*, *Duanus/Duavus*, *Flucinus/Fluvinus*) y otro (*Pambanus*) sólo se testimonia una vez en Egipto<sup>271</sup>. Esto puede llevar a pensar bien en una restitución errónea de sus nombres bien en una onomástica muy localizada cuya procedencia resulta difícilmente rastreable. Más interés si cabe plantea la inclusión de, quizás, dos

<sup>267</sup> Podrían recordarse los dos casos ya analizados (*vid.* cap. 5.1): el tribuno militar *misso pro censore ad lusitanos* a finales del siglo I a.C. (*CIL* X, 680) o el tribuno laticlavio de la *legio VII* para *XXIII[I] Civitatum Vasconum et Vardulo(l)orum* durante el gobierno de Adriano o Antonino Pío (Alföldy, 1969: 128-29; *CIL* VI, 1643; *vid.* Sayas, 1989a; Ozcáriz, 2012: 572-74; 2013: 84-85; López Barja, 1999: 350), si bien se tratarían de censos más específicos que el de orden provincial, para zonas y motivaciones concretas.

<sup>268</sup> Se sigue la numeración propuesta en la edición de Braccini y Scorsone (2013).

<sup>269</sup> *Flavinus*, *Flavus*, *Lucius*, *Antonius*, *Fullonius*, *Quintinus*, *Frontinus*, *Fronto*, *Quintus*, *Quintinus*, *Lucianus*, *Pontius*, *Flavianus*, *Sempronius*, *Lucius*, *Gemellus*, *Antonius Capito*, *Calpurnius*, *Aemilius*, *Sextus*.

<sup>270</sup> Así es el caso de *Septumus*, menos frecuente y con algunas derivaciones onomásticas, tanto dentro como fuera de ámbito hispánico; *Ursianus*, sin paralelos en *Hispania* pero representado en otras provincias; o *Maritumus*, documentado exclusivamente en las provincias galas e hispanas y que aquí aparece por duplicado sin poder determinar si alude al mismo o a distintos individuos. En este grupo se ha incluido hipotéticamente *Antio[+]+Jus*, ante la posible restitución de *Antio[ni]us*, si bien no puede desecharse *Antio[ch]us*, que podría corresponder a un liberto manumitido plausiblemente en un entorno jurídico distinto.

<sup>271</sup> La única referencia proviene de la relación de mártires cristianos desde la Antigüedad, en este caso en Alejandría a comienzos del siglo III d.C. (*Index Sanctorum Iunii*, 5, 355).

mujeres, algo que no puede asegurarse para *Mussora* al carecer de paralelos claros<sup>272</sup>, pero sí para *Beduna*, pues su correspondiente masculino, *Bedunus*, se testimonia en Villalcampo (Zamora: *HAE* 896), Bragança (Bragança: *CIL* II, 2507) y quizás en Astorga (León: *HEp* 2, 442=10, 344<sup>273</sup>). Estamos, en suma, ante una lista dispar, compuesta en su mayoría por nombres latinos masculinos, jalonados por otros muy poco comunes que abarcan tanto a varones como a una minoría femenina y, quizás, a un niño que aparece junto a su padre (*Duavus et filius*). A primera vista, la muestra en su conjunto no parece demasiado representativa de la población local que ocuparía un castro romano en el siglo I d.C. (momento en que se data la inscripción), sobre todo si se tienen en cuenta las tendencias onomásticas regionales y el medio rural en que se encuentra el castro, donde el proceso de aculturación onomástica hubo de ser más lento. En un área como El Bierzo, cuya actividad minera, jerarquización del espacio y presencia del aparato administrativo son mucho más acusadas, los porcentajes de nombres latinizados de *duo* y *tria nomina* sólo alcanzan el 16% respecto al 84% con onomástica peregrina en el periodo post-flavio (Sastre, Beltrán y Alonso, 2012: 39-45; Zubiaurre, 2017: 437-38). Cifras semejantes, del 18 y 82% respectivamente, nos ofrece un contexto rural con mayor información epigráfica como es la *civitas* de *Vadinia*<sup>274</sup> de la zona oriental asturiana (*vid.* cap. 10; González, 2011) y, como Pelóu, también inserta en un proceso transformativo catalizado por la minería aurífera romana (Sastre y Sánchez-Palencia, 2013). Si nos atenemos a los datos que arroja la lista de Pelóu su proporcionalidad inversa respecto a los ejemplos anteriores resulta sintomática, con un 81% que presenta elementos latinizados para, a lo sumo, un 19% no latino. Sería deseable una mayor cantidad de testimonios sobre la onomástica local, pero se trata de una región especialmente escasa en manifestaciones de este tipo. Ello nos habla, en último término, del hábito epigráfico como práctica casi exclusiva de las élites sociales y la llegada de grupos exógenos en estos primeros momentos pues, de hecho, los escasos testimonios para esta zona consisten en marcas de alfarero de cerámica *TSH* decorada e importada en donde se immortalizan nombres externos como *Agilianus*, *Paternus Curius* o *Maternus Capito* en Chao Samartín (*HEp* 14, 22-28), por lo que en modo alguno pueden considerarse reflejo de prácticas onomásticas locales ni representativas de un espectro social amplio. En principio lo más sensato es pensar que

<sup>272</sup> Evidentemente la terminación en -a no es determinante, y sólo se documenta su misma raíz en una inscripción fragmentaria cercana al *limes* germano en Corre (Francia: *Carte Archéologique de la Gaule*, 2002: 204).

<sup>273</sup> Sólo ha podido leerse *Bedenu*, lo que dificulta la lectura del caso y el contenido de la inscripción, pudiendo hacer referencia a un individuo en nominativo o acusativo, pero también a una colectividad en genitivo plural *Bedunum*, quizás entonces relacionado con la *Bedunia* de los conocidos *termini pratorum* de Soto de la Vega y Castroalbón (León).

<sup>274</sup> Se trata en este caso de la epigrafía funeraria con mención de *origo* vadiniense, incluyendo tanto a dedicantes como difuntos dentro del estudio del formulario onomástico monográfico acometido por la autora (*vid.* González, 2011: 103 y n. 39). La mayor parte del *corpus* sería coetáneo al periodo de ocupación de Pelóu, a excepción de la minoría datada para el siglo III d.C. (Martino, 2012). Los *orgonomesci*, también en ámbito costero del oriente asturiano, presentan un 62% (5) de onomástica peregrina frente a un 38% (3) latinizada (de entre los ocho individuos con adscripción segura a esta *civitas* para un *corpus* datado entre los siglos II y III d.C.: *HEp* 9, 72; *ERAs* 37; *ERAs* 56; *HEp* 5, 658a-b; *CIL* II, 6301; *HEp* 5, 381; *Vid.* González, 2007-08). No se ha tenido en cuenta *ERAs* 60-h por ser una reconstrucción nominal insegura, al igual que la filiación de *ERAs* 37.

los nombres de la población autóctona tuvieran más que ver con el *[Rebu]rrus* testimoniado en un grafito de producción regional del Chao Samartín (*vid.* Hevia y Montes, 2009: 135), el *astur transmontanus Pintaius* reclutado como auxiliar en el siglo I (*CIL* XIII, 8098) el colectivo *Elanianium*, sin paralelos (Chao Samartín; *HEp* 18, 16); o *Provesica* del tramo más bajo del Navia (Castrillón: *CIL* II, 5740), que con los *Antonius*, *Lucianus*, *Sextus*, *Calpurnius* o *Quintinus* que aparecen en esta lista de un modo predominante. En caso de englobar a un colectivo, lo más probable es que la pizarra nombre fundamentalmente a militares, cuya presencia está bien documentada arqueológicamente y es coherente con el cotexto minero del asentamiento. Si bien no se trataría de lista exclusivamente militar, sino salpicada con algunos nombres de posible origen local, como la mujer *Beduna* o el individuo que aparece junto a su hijo (*Duavus/Duanus et filius*: col. III). Es decir, se trata en todo caso de un inventario de nombres que denota un contingente social heterogéneo y desigualmente representado.

Más elementos nos alejan de la idea de un texto oficial aparte del carácter escueto de la antroponimia. Por un lado, ha sido señalada la posibilidad de que la pizarra tuviera un formato rectangular y fuera ideado para ser expuesto al público, quizás en un lugar cercano a uno de los paramentos exteriores en que fue hallado. Esta hipótesis se sustenta en las huellas de posibles perforaciones de sus cantos (Villa, 2016: 26-27). La fotografía no permite realizar una comprobación de estos ojales con claridad, pero resulta improbable que fuera diseñado con este fin dado que la cara interna, peor conservada y con un campo epigráfico menor, también pudo estar inscrita tras adivinarse algunos trazos de posibles nombres que no son posibles de restituir (Villa, de Francisco y Alföldy, 2005: 272=2006-08: 497). La pizarra como soporte epigráfico es, en cualquier caso, un elemento especialmente tendente a la fragmentación y laminación, de ahí que su uso como soporte sea bastante excepcional. También destaca el hecho de que un material de procedencia local y poco idóneo para la práctica epigráfica pudiera servir para un documento oficial, sobre todo si tenemos en cuenta que la inscripción se produjo con posterioridad a la exfoliación de buena parte de su superficie. Es decir, ni siquiera se utilizó una pizarra en estado óptimo, sino una pizarra reutilizada, para lo que se presume un uso *ad hoc*.

Si recapitulamos todos los argumentos esgrimidos: una lista compuesta por un grupo heterogéneo, casi exclusivamente masculino y latinizado, que supera las cifras que se le presuponen al asentamiento, unido al carácter informal de la onomástica, el descuido en el *ductus* y el propio soporte, lo más lejos a lo que puede llegarse en la interpretación, sin salir del propio epígrafe, es que se trate de un documento de consumo eventual, producido seguramente por intermediación del ejército, no circunscrito al castro, y que desempeñaría una función específica para un momento concreto, pero cuyas causas concretas resultan difícilmente asociables a lo que implica un censo.

#### 5.4.4 Comparativa con otras listas de nombres.

Las listas inventariadas de personas no son algo excepcional y pueden obedecer a diferentes propósitos, tal y como las encontramos en diferentes momentos y lugares del Alto Imperio. Una comparativa con otras listas, como la que plantea López Barja (2014), permite reafirmar su carácter no oficial, a la vez que abre nuevas posibilidades interpretativas.

En primer lugar, un gran conjunto de inscripciones con listas nos lo suministran diversas fuentes de carácter oficial, ya sean de ámbito imperial o de las administraciones locales. Se trata, en su mayoría, de documentos solemnes que tienen implicaciones directas en la situación de las personas a las que aluden, de modo que siempre constan de una fórmula onomástica más o menos completa con el fin de evitar cualquier confusión sobre quiénes son objeto de sus disposiciones. Su funcionalidad y material (normalmente en bronce) se aleja sensiblemente de la caracterización de nuestra pizarra, aunque formalmente (disposición en columnas, etc.) se asemejen. Casos de este tipo los encontramos ya en *Hispania* en el periodo republicano, como las dos listas inscritas en caracteres celtibéricos en los bronce de Torrijo del Campo (Teruel: *HEp* 11, 547) y el bronce de Botorrita que contiene III *tabula Contrebiensis* (Zaragoza: *HEp* 14, 382). El desconocimiento sobre esta lengua impide conocer con exactitud los propósitos de ambos documentos, pero sin duda debieron ser lo suficientemente importantes para ser inscritos en este material y, quizás, expuestos. No obstante, el estudio de las terminaciones y sus casos, a falta de una mejor comprensión del celtíbero, parece reflejar secuencias onomásticas complejas. Así, el bronce de Torrijo, dado a conocer en 1997, contiene una pequeña enumeración de nombres de individuos y derivados ligados por la conjunción copulativa *-kue*, a los que parecen asociarse referencias a lugares, granjas o terrenos, pertenecientes al individuo que les da nombre (Rubio Orecilla, 1999: 146). También sería el caso de la *tabula Contrebiensis* III de Botorrita, cuyo contenido es también sustancialmente onomástico y carece de una articulación evidente más allá de una sucesión de nombres tras un pequeño encabezamiento. El análisis exhaustivo de su composición interna (Beltrán, de Hoz y Untermann, 1996: 43-121) ha permitido identificar hasta 241 personas nombradas explícitamente, cuya estructura onomástica, a través de dos variantes principales, contiene elementos análogos a la fórmula de “Tirtano de los Abulocos, hijo de Letondo, Beligiense” de la estela de Puig des Molins (Ibiza) o de “Lubo de los Alisocos, hijo de Avalo, de Contrebia Belaisca” como lo encontramos en la *tessera Fröhner* (*HEp* 13, 767). Es decir, junto al antropónimo aparecen otros elementos que facilitan su identificación como el patronímico, el grupo familiar, el lugar de procedencia<sup>275</sup>, etc. Lo mismo puede decirse de las dos listas que componen el bien conocido bronce de Áscoli (*CIL* VI, 37045), en el que lógicamente se indican con rigor sus secuencias onomásticas completas para la obtención de la ciudadanía romana y el *duplex frumentum*, con indicación del nombre acompañado del

---

<sup>275</sup> Aunque en la *tessera Fröhner* no puede asegurarse que la referencia a *Contrebia* (*kontebiaz belaiskaz*) no sea en realidad el lugar en que se firmó el pacto de *hospitium* (vid. Beltrán Lloris, 2001: 49, n. 88). En cualquier caso esta posibilidad no afecta a la lectura de Botorrita III.

antropónimo en todos los casos a excepción de los ilerenses, que presentan fórmulas onomásticas bimembres latinizadas y filiación, y todos ellos agrupados según su comunidad de origen (*Bagareses*: 1; [...] *licenses*: 4; *Ilerenses*: 3; *Begenses* :1; *Segenses*: 9; *Ennegenses*: 3; *Libenses*: 2; *Suconsenses*: 2; *Illuersenses*: 2). Lo mismo puede decirse de los nombres de los 56 ciudadanos romanos que forman el *consilium* en este mismo documento, con estructura onomástica completa incluyendo la *tribu*. En el bronce de la *sortitio illicita* hallado en La Alcudia (Elche: *HEp* 9, 27), la lista de los diez individuos beneficiados por los lotes requieren también una identificación precisa, mediante *tria nomina*, filiación, mención de *tribu* y *origo* anterior (de *Icosium*, *Praeneste*, *Aurelia Carissa*, *Corduba*, *Malaca*, etc.), al igual que deben establecerse con claridad las coordenadas de la(s) centuria(s) implicadas en el reparto de los 13 *iugera* de la *pértica* colonial (vid. Pena, 1998; Alföldy, 2003: 41-45).

Otras largas listas oficiales proceden de entornos jurídicos promocionados de Italia, como el nutrido elenco de *nomina decurionum* del *album Canusinum* del 223 d.C. (*CIL* IX, 338), en donde los *Ilviri quinquennales* inscribieron en cuatro columnas un total de 164 miembros que, de igual modo, son presentados con *tria nomina* y ordenados gradualmente según su categoría (*patroni clarissimi viri*, *patroni equites romani*, *allecti inter quinquennales* y *Ilviralicii*)<sup>276</sup>. La aparición en el *album* debe recoger escrupulosamente los individuos implicados en la *lectio senatus*, pues además de los *honores* implica asumir las cargas derivadas de su nuevo desempeño (*honorarium decurionatus*). O en el controvertido mármol del *album Herculaneum* (*CIL* X, 1403), compuesto por otra larga secuencia nominal distribuida en tres columnas con *status* jurídico heterogéneo: *cives Romani ingenui* agrupados por *centuriae*, con *tria nomina*, filiación y *tribu*, y los restantes sólo con *tria nomina* con indicación de su condición libertina o bien pertenecientes a un enigmático grupo de *incerti*<sup>277</sup>. Del mismo modo, las listas de *iudices* seleccionados de *Irni* incluían sus *praenomina nomina item patrum praenom[i]na et ipsorum tribus cognomina in tabulis* (*lex Irn.* 18, l. 20-21).

En segundo lugar, si interpretamos la lista de Pelóu a modo de placa de dedicantes, como un fragmento de una inscripción más amplia que se habría perdido en la parte superior, puede analizarse un correlato hipotético con diversas listas que encontramos en manifestaciones de agradecimiento, ya sean de carácter oficial o producto de una iniciativa privada. En este caso, sin embargo, la informalidad onomástica de la pizarra se erige de nuevo en un factor que nos aleja de la documentación de esta naturaleza. Debe partirse del hecho de que los individuos que se immortalizan en este tipo de inscripciones honoríficas lo hacen también para honrarse a sí mismos, para visibilizar su posición de predominio en el entorno local, de tal manera que la autorrepresentación se convierte también en un ejercicio de culto a la individualidad. Esto, en términos prácticos, se materializa en una formulación personal

<sup>276</sup> El bronce podría tratarse de una muestra de agradecimiento al emperador, en que se conmemora la ampliación del *ordo* local de *Canusium* de algunos años antes (Salway, 2000).

<sup>277</sup> Este grupo lo componen una serie de individuos también con *tria nomina* y un *vacat* en el lugar en donde debería aparecer su filiación o condición de *libertus*, lo que ha dado pie a diversas conjeturas sobre su expediente personal, desde la primera lectura de la inscripción, que reconocía a todos ellos como libertos imperiales y miembros del *collegium* de los *Augustales*, a otras posteriores que los consideran latinos junianos o *incolae*. Un resumen sobre estas cuestiones en Mouritsen (2007).

que tampoco suele dar lugar a ambigüedades y presenta, al menos, los elementos mínimos para permitir una correcta e inequívoca identificación en un contexto social más o menos amplio. Algunos ejemplos representativos los encontramos en la dedicatoria de dos pedestales de estatua por la *V cohors* de *vigiles* de Roma (*CIL* VI, 1057-58), con una colosal lista de dedicantes de más de un millar de miembros de la cohorte repartidos en varias columnas y ordenados por criterios jerárquicos. Aquí, a pesar de las limitaciones de espacio, todos ellos presentan *tria nomina*. También de Roma procede la dedicación a Adriano (136 d.C.) de los *magistri pagorum* de Roma de la Basa Capitolina (*CIL* VI, 975), en cuyos laterales se hallan inscritos en series de tres columnas hasta 311 *curatores*, *denuntiatores* y *magistri vicorum*. En este caso el orden viene determinado por las *regiones* en que desempeñan sus funciones (la I, X, XII, XIII o XIV), son desglosados en sus respectivos *vici* y, finalmente, nombrados mediante *tria nomina* y filiación/*libertus*. Una dedicatoria semejante procede del municipio romano de Sala, en Mauretania Tingitana, que es ofrecida por decreto decurional a *M. Sulpicius Felix* el 144 d.C., con una amplia proyección política (*AE* 1931, 36; *vid.* Gsell y Carcopino, 1931). La descripción de su *cursus honorum* y los motivos para la erección de la estatua son seguidos, en un lateral, por una lista de 38 *amici* repartidos en dos columnas, quienes de nuevo indican sus *tria nomina* y uno de ellos recuerda, además, la cuestura.

Esta tendencia a reflejar con rigor el nombre completo del individuo se cumple en la práctica totalidad de representaciones de dedicantes en epigrafía honorífica, aunque lo normal es que en términos cuantitativos esta sucesión sea menor respecto a los tres ejemplos anteriores. Por tanto, ya no sólo el carácter vil del material empleado en Pelóu, sino la sucinta referencia nominal de todos los personajes que aparecen disuelve la posibilidad de dibujar cualquier paralelo con dedicatorias de esta naturaleza. Tampoco debe sorprendernos si se recuerda la inexistencia en Asturias de otras referencias epigráficas de este género. Las inscripciones honoríficas revelan ante todo una manifestación de sociabilidad política determinada y, en tanto que tal, requieren una caracterización cívica clásica en donde las formas de dependencia fructifiquen en modos evergéticos de interacción, normalmente dentro del medio urbano. De este modo, si el Noroeste no parece un ámbito propicio para la evergesía respecto al resto de *Hispania* (*vid.* cap. 5.3.3), no hay lugar tampoco para el agradecimiento y, cuando lo hay, aparece capitalizado por expresiones de culto imperial. Al menos así lo refleja el único ejemplo asturiano<sup>278</sup> de la Campa Torres, en un contexto totalmente distinto al que ahora nos ocupa, en donde Cneo Pisón realiza su conocida dedicatoria a Augusto el año 9-10 d.C. (*CIL* II, 2703), quizás asociado con la erección de un faro (Fernández, Morillo y Villa, 2005: 137-144; *cfr.* Santos Yanguas, 2014: 296-98).

---

<sup>278</sup> Existen en el ámbito asturiano otras inscripciones de culto imperial, pero consideradas tradicionalmente falsas (*CIL* II, *Supp* 510\*; 228\* y 508\*).

#### 5.4.5 Replanteamiento: La pizarra de Pelóu como documento de gestión militar.

Desechadas las posibilidades anteriormente expuestas queda, sin embargo, una tercera vía de comparación que sí contiene evidentes parecidos en cuanto a la naturaleza que podría tener el documento de Pelóu. El paralelo sobre el que construiremos nuestra hipótesis nos lo suministran algunas listas realizadas en un contexto militar que, como la pizarra, se caracterizan por su informalidad, pues son “documentos de consumo” para un momento y un fin determinado. Se trata de algunas de las tablillas que conforman el heterogéneo conjunto de *tabulae Vindolandenses*, del que ya se han reconstruido, editado y publicado unos novecientas ejemplares en los últimos años (Bowman *et al.* 1983; 1994; 2003; 2010; 2011). Éstas reflejan diversas facetas de la vida cotidiana del campamento de Vindolanda (Northumberland, Reino Unido), con un periodo de ocupación del 85-135 d.C. asociado a la defensa del *limes* superior de la isla. Aunque su estado de conservación es fragmentario, por su soporte en madera y con trazas de tinta, las *tabulae Vindolandenses* presentan toda una serie de afinidades con la pizarra de Pelóu desde un punto de vista metodológico:

- Una finalidad no oficial. Son documentos escritos de muy diversa naturaleza, desde la correspondencia privada hasta algunos de carácter práctico en los que se recogen aspectos diversos de la gestión interna de Vindolanda con respecto a su entorno: intercambios, reparto de trabajos militares y civiles, suministros, pequeñas transacciones, etc.
- Un carácter informal, lo que se traslada a la propia caracterización onomástica de los individuos registrados en las tablillas, totalmente simplificada y en donde basta con incluir, de un modo referencial, un solo elemento onomástico, normalmente latino. Al tratarse de un contexto local y un fin eminentemente práctico, los individuos cuentan con los elementos nominales mínimos para poder ser identificados por quien escribe, como parece ocurrir en Pelóu. Del mismo modo, presentan un *ductus* irregular y no es extraña su reutilización pues, al no ser pensadas para ser expuestas, se aprovechan en ambas caras.
- Un contexto militar compartido: las *tabulae Vindolandenses* proceden de un campamento y con toda probabilidad fueron realizadas por militares. Como ya avanzamos, la presencia militar en Pelóu está confirmada, tanto por la documentación arqueológica del yacimiento como, sobre todo, por el contexto minero inmediato, que implica una presencia militar estable para tareas de supervisión y apoyo técnico (*vid. supra*). La hipótesis de que un militar pudiera ser el ejecutor de la pizarra de Pelóu también es coherente con la escasa difusión del latín y de la epigrafía en este contexto rural y momento cronológico (finales s. I d. C.; *vid. Sastre, 2007*).
- Una muestra de individuos heterogénea. Como se ha defendido para Pelóu, su caracterización onomástica latinizada nos lleva a pensar que la mayor parte de individuos registrados fueran en su mayoría militares representados

con un nombre único, aunque no exclusivamente, pues algunos casos pueden aludir a población local, a mujeres (*Beduna, Mussora*) o a sus hijos (*et filius*). Esta problemática se despeja si otorgamos a la pizarra una funcionalidad práctica, *ad hoc*, y no oficial, a semejanza de las *tabulae Vindolandenses*. En el contenido de las tablillas no resulta extraña la convivencia de contingentes militares que, como quizás en la lista de Pelóu, resultan predominantes en sus listas, pero jalonadas con civiles que aparecen involucrados en diversas actividades económicas o logísticas del campamento. Al fin y al cabo ambos casos comparten un mismo efecto dinamizador, aquel que representa la presencia del ejército y su comportamiento e interlocución respecto al entorno local próximo.

- Una misma distribución: los documentos contables y de gestión que refieren pagos, transacciones o gestión de trabajos se componen, como en Pelóu, en sucesivas listas de individuos dispuestos en columnas.
- Unas características morfológicas análogas. Frente al uso de soportes más cotizados y reservados para inscripciones solemnes, como ocurre en los anteriores tipos de listas y sería esperable para una *tabula censualis*, la vileza del material empleado como soporte, la pizarra o la madera, de pequeño tamaño y fácil obtención en el medio próximo, resulta consecuente con un uso eventual.
- Por último, un marco cronológico compartido, aunque la fase III de Pelóu presenta un recorrido cronológico algo más amplio hasta su abandono en el siglo II d.C.

Las tablillas de Vindolanda son un buen exponente de lo común que resultan los listados en ámbito castrense y suponen un testimonio de gran utilidad a la hora de plantear una alternativa sobre la función que pudiera tener el documento de Pelóu, pues al fin y al cabo un ejército movilizado expresa relaciones y necesidades semejantes respecto a su entorno (de abastecimiento, de supervisión, de gestión, etc.). Así puede observarse ya en dos sucesiones de nombres únicos que se acercan a la morfología de la pizarra pero carentes de los elementos necesarios para identificar una finalidad específica con garantías por el estado fragmentario en el que se encuentran. Un primer ejemplo lo componen seis individuos cuyos nombres han podido identificarse, aunque las marcas de tinta y las partes no conservadas invitan a pensar que serían algunos más. En este caso ya aparecen individuos con una onomástica heterogénea compuesta por nombres únicos y, como en Pelóu, también en nominativo, relacionada con algún tipo de cuenta o inventario: Col. I: *Medragus / Aceptus / Proculus* / [Trazos de tinta] / [---] // Col. II: *Tagomas / Secundus / Mansuetus / (denarios)* / [---] (*Tab. Vindol.*: 864; Bowman, Thomas y Tomlin, 2010: 215-216). De nuevo en nominativo encontramos otra (*Tab. Vindol.* 44) que recoge en torno a 11 individuos, aunque sólo han podido restituirse 6 nombres, y es considerada como una posible lista de soldados pertenecientes a la *cohors I Tungrorum* cuya motivación no es explicitada: [---] / [Trazos de nombres] / [Trazos de nombres] / *Fuscus / Settius / Expeditus / Albinus* /



*Verecund[us]* / *Festus* / [Trazos de nombres] / [Trazos de nombres] / [Trazos de nombres] / [---].

Para asignar una hipótesis funcional a la pizarra, debemos atenernos al único elemento que consta de cierta literalidad, y que conscientemente he obviado hasta ahora. Se trata de la alusión en la tercera columna “*Duanus/Duavus et filius possuerunt frugem*”, lo que ha sido considerado uno de los principales argumentos para deducir un valor censual al documento. Es decir, según esta perspectiva el listado recogería las contribuciones en trigo a las que estarían sometidas las poblaciones locales incluidas en el listado como pago del *tributum soli*. Sin embargo, no hay elementos que permitan inferir tales conclusiones. El registro oficial de cargas fiscales individuales de este tipo, según la información disponible de otras provincias, anota con claridad a los individuos gravados, los campos objeto de imposiciones fiscales y las cantidades pagadas, como lo encontramos, por ejemplo, en una lista de pagos de este tipo en el *nomos Arsinota* del siglo I d.C.<sup>279</sup> (vid. Hoogendijk y van Minnen, 1991, *plate* XX: 141-142), en el ya mencionado litigio que la judía *Babatha* mantiene sobre sus tierras en la provincia de Arabia el 127 d.C. (*P. Yadin* 16 y ss.; Lewis, 1989) y, de modo suficientemente explícito, en la *forma censualis* de Ulpiano (*Dig.* 50, 15, 3-4).

De hecho, las propias *tabulae Vindolandeses* ofrecen diversos ejemplos de pagos y contribuciones muy parecidos al de la pizarra sin necesidad de inferir un gravamen oficial o un censo<sup>280</sup>. La *ratio frumenti* de *Tab. Vindol.* 63, recoge una sucesión de *nomina* o *cognomina* en dativo a los que se asocian cantidades variadas de modios de trigo que un individuo parece asignar con distintos propósitos. En este caso sería, como opinan los editores, una cuenta privada en ámbito castrense, pues algunas de las justificaciones así parecen indicarlo (pagos de deudas, intercambios, etc.). También el registro de *Tab. Vindol.* 586 nos ofrece una estructura análoga, con diversas cantidades de trigo y gachas dispensadas o recibidas por varios militares con un solo elemento onomástico latino, en dativo (*Attico, Vitale, Decimo, Masclo, Vitale*)<sup>281</sup>; o, algo más distinto y oscuro, el registro del *praetorium* en que en sucesivas fechas se entregan productos a varias personas (*Tab. Vindol.* 581). Otras, en vez de especie, aluden a cantidades económicas. Mientras el anverso de *Tab. Vindol.* 609 representa pequeñas cantidades de dinero, expresadas en *denarios* y *semis*, el reverso dispone una serie de individuos quizás relacionadas con estas sumas, en forma de pagos o transacciones.

<sup>279</sup> Se trata aquí de una lista conservada en papiro que sigue la estructura siguiente: nombre del propietario/arrendador, nombre de su padre, nombre de su abuelo, medidas del campo, producción de trigo, etc. Lógicamente, en un contexto muy distinto al que nos ocupa.

<sup>280</sup> Estas recogen las variadas motivaciones que pueden esconderse detrás de distintos tipos de cómputos y listados por parte del ejército, aunque no se han tenido aquí en cuenta por no estar asociadas a nombres concretos, como las cuantías de soldados de la *I cohors Tungrorum*, en las que se recoge los totales de soldados presentes, ausentes, indispuestos, etc. (*Tab. Vindol.* 37 y 857), las listas de productos objeto de transacción o intercambio oficial o privado (*Tab. Vindol.* 67, 591, 596, 601), la distribución de productos entre miembros del ejército (*galliculae: Tab. Vindol.* 605), etc.

<sup>281</sup> En las listas de Vindolanda resulta común la repetición de nombres, tratándose, con toda probabilidad, de una misma persona implicada en distintas transacciones o tareas. Esta repetición se produce también sintomáticamente en la pizarra de Pelóu por ser un documento similar, en los casos de *Lucius*, *Quintinus* y *Flavinus*, además del poco corriente *Maritumus*.

Aquí también convive una onomástica diversa en la que se mezclan nombres latinos e indígenas con un solo elemento onomástico, expresado en dativo o nominativo: ([...] *Frissi / Suasso / Germanu[s] / Caussa / Marcellinu[s] / Modius / Senecio / Sactius / Viator / Crescens Cir [---] / Crenscens (sic) / Leubius / Varieunus / [trazas de nombres] / Veruini / Mart[---] / [---]*), semejante a la más fragmentaria *Tab. Vindol.* 610. Las motivaciones que se esconden tras la creación de un documento con las características de la pizarra seguramente tengan mucho más que ver con las necesidades, compartidas con Vindolanda, de registrar y gestionar diversos aspectos de la vida castrense y su entorno local que con censos o registros oficiales. Ello, sin duda, ayuda a comprender muchas de las singularidades morfológicas y de contenido que aparecen en la pizarra. Si volvemos a la fórmula *possuerunt frugem* toma importancia para nosotros el matiz semántico que introduce Paulo en el título dedicado a *de verborum significatione*:

*‘Frugem’ pro reditu appellari, non solum frumentis aut leguminibus, verum et ex vino, silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis capitur, Iulianus scribit. ‘Fruges’ omnes esse, quibus homo vescatur, falsum esse: non enim carnem aut aves ferasves aut poma fruges dicit*<sup>282</sup>  
(Paul. 49 ad ed.=D. 50, 16, 77, 0).

Para el jurista post-clásico el término *fruges* abarca una amplia gama de supuestos que no han de limitarse a los cultivos agrícolas, sino que su beneficio (*reditus*) puede aludir a cualquier tipo de material suministrado por la tierra desde una perspectiva genérica. Es decir, abraza desde la tala de árboles (*caedua silvae*), la extracción de diversos materiales como las arcillas y yesos (*cretifodinae capere*) y de la propia roca (*lapidicinae capere*). De hecho, establece su contraposición con los animales, pues aunque habitan en su superficie, su proliferación no deriva directamente de una “gestación subterránea”, de modo que sería inadecuado catalogarlos en esta categoría, como ocurre con los frutos de los árboles (“frutos” de *fruges*). Evidentemente *possuerunt frugem* resulta demasiado sucinto y no puede desecharse que aluda efectivamente a algún tipo de dispensa o transacción relacionado con el grano. Pero sin embargo la semántica que nos transmite Paulo sobre este término permite contemplar otras opciones, sobre todo si tenemos en cuenta el escaso interés agrícola que el entorno de Pelóu pudiera tener para el ejército. Si se tiene en cuenta el entorno, *ponere frugem* pudo aludir también a *lapidicinae capere*, es decir, con el sentido de que *Duavus et filius* aportaron su fuerza de trabajo en el desempeño de extraer roca. Para Varrón, *fruges* se relaciona con cualquier tipo de recurso que proporciona la tierra (*Ling.*, 5, 104). Asimismo, Tácito utiliza *fruges* para recordar la gran entrada del oro extraído en los *metalla* imperiales para el año 60 d.C.: *Non enim solitas tantum fruges nec confusum metallis aurum gigni, sed nova ubertate provenire terram* (Tac. *Ann.*, 16, 2, 2). Sin duda esta terminología entra en consonancia con la huella indeleble que han dejado en el paisaje las labores de acondicionamiento de las explotaciones auríferas del entorno próximo al castro. Éstas debieron requerir abundantes esfuerzos y recursos,

<sup>282</sup> “*Fruges*, escribe Juliano, se dice por rédito, no sólo de cereales o verduras, sino también el que se recoge de vino, del bosque talar, de canteras de piedra o greda; pero se dice que es falso que comprenda todo aquello de lo que se alimenta el hombre, pues no se llama así la carne de aves o animales que se cazan, ni las frutas” (*ibid.*).

como se observa en la propia configuración del asentamiento, rodeado de sucesivos fosos y un depósito, la red de galerías de las minas en primario de Vilavilleiro justo en frente del mismo o los cercanos canales de Peña Furada (fig. 22; Sánchez-Palencia *et al.* 2006), excavados en roca para la distribución de agua salvando la cota hasta las explotaciones.



Fig. 22 Canales de distribución de agua de Peña Furada. Fuente: Villa, 2009.

De ser cierta esta hipótesis estaríamos ante un documento de cuenta, para el registro y control *ad hoc*, pero no menos importante, cuya función hubo de ser la gestión de mano de obra por parte del ejército para sucesivas *operae*, como la encontramos en Egipto (*vid.* P. Berlin 6765), en las propias *tabulae Vindolandenses*, donde se distribuyen por el centurión los trabajos de *fabri* a su cargo (*Tab. Vindol.* 862), o en las inscripciones rupestres asociadas al mantenimiento de la red hidráulica minera del Valle de Airoso (León; Sastre y Sánchez-Palencia, 2002: 229-31; *vid.* cap. 5.2.1). Aquí, dirigidas a las labores mineras en que hubieron de involucrarse tanto miembros del ejército en sus facetas técnicas y de supervisión, como los locales, en las trabajos más duros para la extracción en roca del mineral y en la propia construcción de la infraestructura minera.

**III. Catastro y *civitates* peregrinas:  
Aproximación a los diferentes sistemas  
de control, gestión y explotación de los  
suelos provinciales.**

Nunca hubo una distinción conceptual tan clara entre “personas” y “cosas” como la que sí imaginó la jurisprudencia clásica. Sin embargo, aquí también la distinguiremos para clarificar y diferenciar el aspecto censual y las obligaciones personales del bloque anterior, con el análisis de los distintos expedientes que atañen al territorio y los suelos. Este esquema entra en consonancia con el modelo de integración administrativa y fiscal que se defiende para el Noroeste, en donde el cómputo poblacional para conocer la mano de obra disponible no entraña el registro de la propiedad personal al resolverse en bloque para cada *civitas* como más adelante abordaremos. Desde este planteamiento, analizaremos en este bloque los principales expedientes del suelo que definieron el marco de explotación desde época augustea, siguiendo una gradación de lo general (ideología en la ordenación del espacio) a lo concreto (su materialización en el Noroeste), para procurar la construcción de un modelo general que sea coherente con la diversidad y problemática de la documentación existente en esta materia. El objetivo no es sólo la definición rigurosa de las estructuras jurídicas ideales desde una perspectiva institucionalista y ahistórica, como la reflexión en torno a la implantación y adaptación de la teoría a la praxis territorial. Conclusiones a las que sólo pueden llegarse atendiendo a su incidencia en el paisaje y en la sociedad o, en sentido inverso, analizando hasta qué punto pueden extraerse del paisaje indicios sobre el modo en que Roma ordenó y dominó el territorio.

## 6. El proceso formativo del suelo itálico.

No puede entenderse la caracterización que recibe el territorio provincial con la restitución republicana augustea sin atenernos, en primer término, a la configuración ideológica de Italia, pues no sólo se transmite a las condiciones de privilegio de sus suelos para ser exportado (*ius Italicum*) sino que en oposición a él se dibujará la propia consideración del suelo provincial, tributario por definición. La articulación de Italia como entidad jurídica y administrativa diferenciada del conjunto fue el producto resultante de un complejo proceso evolutivo, cuyos hitos (el fin del *tributum ex censu* romano del 167 a.C. y la uniformización de la situación jurídica de Italia tras el fin de la guerra social, hasta el Pó) sentaron las bases jurídicas e ideológicas que construyeron un nuevo régimen económico, ahora basado casi exclusivamente en un horizonte provincial regularmente gravado. A la vez, es preciso advertir que la concreción jurídica de Italia, en tanto que ámbito de ampliación del *ius civile*, asentaba unas condiciones de privilegio que recibían una proyección tanto territorial como personal, esto es, basada en la coherencia entre el expediente personal del *civis Romanus* en *coloniae* y *municipia* romanos con sus suelos, itálicos y por tanto exentos. Un privilegio que, en ámbito provincial, se nos presenta sin embargo de forma inconexa y dislocada, lo que ha generado toda una serie de problemas interpretativos: por un lado, los beneficios que comporta un expediente jurídico personal determinado, como la ciudadanía romana<sup>283</sup>, por otro, las cualidades de los suelos con los que interactúan las personas jurídicas, que han de pasar por el tamiz del “suelo provincial”, el estatuto específico de la comunidad, del edicto del gobernador y del propio ordenamiento interno de la comunidad. A estos problemas de fondo dedicaremos las siguientes páginas, con el fin de establecer una posición de partida antes de introducirnos en cuestiones específicas sobre la articulación administrativa del Noroeste hispano.

Cabe resaltar que con anterioridad a la abstracción de *Italia* por parte de Augusto, cuando cuenta ya con un *ius* que resume y fosiliza sus propiedades jurídicas, la idea de Italia se ceñía a una entidad territorial de referencia. No se trataba únicamente de un cuadro físico o geográfico, sino del producto secundario del verdadero cauce de expresión que actuaba en estos momentos desde el punto de vista del *ius civile* como es el *ager romanus* y su paulatina expansión en periodo republicano. Aunque las fuentes de información no sean abundantes, me parecen suficientes para apuntar que desde un periodo arcaico, el *ius civile* se concibe como un ejercicio del derecho de ciudadano romano que trasciende, y se ve limitado, por el territorio. Es decir, no es todavía inherente a la cualidad de *civis* de Roma, independientemente de donde viva o esté, sino que se restringe al *ager romanus* en tanto que ámbito territorial en que se hacen eficaces

---

<sup>283</sup> Esto es la adquisición de *civitas* romana por distintos medios: *viritim*, *beneficium* colectivo o *per honorem* desde la latinidad, a lo que se suma el *ius Latii* como *beneficium* colectivo en sí mismo.

sus derechos. La consideración territorial vinculada al ejercicio de la ciudadanía establecía unos límites claros de actuación, dibujaba unos contornos y, con ellos, una línea separatoria que escindía lo propio de lo ajeno. No es necesario considerar un sistema fronterizo de corte actualista, pero sí unos límites simbólicos construidos socialmente para discriminar el radio de aplicación del primitivo *ius civile*, las posibilidades de explotación agraria sin entrar en conflicto con las áreas vecinas, etc. En el famoso *Carmen de los Arvales* (*CIL* VI, 2104), una de las primeras fuentes de la escritura latina, aparece ya por primera vez el concepto *limen* [*sic*] relacionable con este *ager romanus* arcaico, pues no se circunscribe al espacio urbano del *pomerium* sino también a una dimensión agreste que requiere la protección de Marte ante el granizo y otros *prodigia* (Baldi, 1999: 214). Estos umbrales difusos extralimitarían a los propiamente urbanos para crear un concepto de espacio con un contenido jurídico y económico no restringido al *pomerium* y sus límites fijados con la antigua muralla serviana, sino extendidos hasta el IV-VI miliario (*vid.* Pechoux, 2008: 20-32). Se han señalado algunos hitos en el paisaje que pudieron dibujar el *ager Romanus antiquus*, como las construcciones vinculadas al dios *Terminus*, el santuario de *Dea Dia*, la festividad de *Robigalia* y *Ambarvalia* o el templo de la *Fortuna muliebris* (Scheid, 1987; Pechoux, 2008: 31-32) considerados en fechas recientes “a modern misconception” (Ziótkowski, 2009: 91; López Barja, 2008: 16). Estoy con ellos en que el dibujo de un sistema fronterizo puede resultar estéril si se hace desde coordenadas presentes y con un valor fijo, dificultad que ya experimento por otra parte Dionisio de Halicarnaso para su propio tiempo cuando intentó algo semejante (*Hist.*, 4, 13, 4<sup>284</sup>). A mi juicio la proyección territorial de la ciudadanía no es dependiente tanto de la visión “estatalista” que lo entiende como trasunto de la vertebración estatal moderna (López Barja, 2008: 9-10), sino “posibilista”. Es decir, en el sentido de ser dependiente de las limitaciones políticas de Roma por hacer prevalecer su derecho ciudadano cuando todavía no resulta en la potencia preponderante que será después y requiere, en suma, la conformación de un espacio de actuación propio, definido en contraposición con la alteridad política. Sin entrar en el debate sobre los hitos fronterizos, el binomio formado por la ciudadanía y un territorio político en que se hace eficaz se revela cuando ambas facetas colisionan en algunos derechos arcaicos. Algunas disposiciones de este tipo provienen ya de las *Duodecim Tabularum Leges* que implican la existencia de este espacio al aludir al territorio suburbano independientemente de su mención o no como *ager romanus*. Así sería el caso de algunos derechos reales como la *usucapio* o la *mancipatio* que pudiera afectar a los campos para explotación agraria (12*Tab.* 8, 17 y 12*Tab.* 6, 6 b; 5, 2= Cai. 2, 47), pues evidentemente la adquisición del *dominium* por el uso o contraventa no podría ejercerse en cualquier lugar, como podría ser el territorio de otra comunidad vecina sino sólo dentro de unos contornos políticamente definidos y socialmente aceptados. Uno de ellos pudo ser en un primer momento el *Tiber*, que también aparece en las XII Tablas como límite que debe ser superado para poder

---

<sup>284</sup> “Y si alguno quiere calcaular la extensión de Roma mirando a estas tierras, será inevitable que se equivoque, al no tener una referencia segura por la que distinguir hasta dónde se extiende la urbe y desde dónde deja de serlo, de tal modo está entrelazada la ciudad con el campo y tal es la impresión de ciudad extendida hasta el infinito que ofrece a los que la contemplan”.

convertir al ciudadano endeudado en esclavo a la venta (12Tab. 3, 5). Este espacio también se manifiesta por contraposición respecto a la ciudad y el exterior a propósito del desplazamiento del difunto. Mientras en la ciudad se prohíbe directamente la incineración e inhumación (12Tab. 10, 1) y sólo en los territorios enemigos o extranjeros se permite cambiar de lugar los restos después de los ritos fúnebres (12Tab. 10, 5 b; Cic. *De leg.* 2, 24, 60), es porque existe un espacio intermedio entre ambas esferas con determinadas cualidades políticas, jurídicas y religiosas (*ager romanus*?) para el que se circunscribe la prohibición de trasladar el cadáver después del *funus* (12Tab. 10, 5 a). Del mismo modo, difícilmente podrían entenderse otras cuestiones de estos primeros legisladores si no pensaban en unos límites territoriales extraurbanos, por difusos que pudieran ser, sobre los que pesara la jurisdicción romana: la solución para *controversiae de finibus* agrarios (12Tab. 10, 5b; Cic. *De leg.* 1, 21, 55), los *fundi* para los que pudiera recurrirse a las *actiones finium regundorum* (12Tab. 7, 2) y *de pastu pecoris* (12Tab., 8, 7; Dig. 19, 5, 14, 3), la zona en la que pudiera aplicarse la altura máxima de árboles en 15 pies (12Tab. 7, 9 a; Dig. 43, 27, 1, 8), etc.

Contamos también con otros *iura* arcaicos en donde queda en evidencia cómo la pérdida de las cualidades del *civis Romanus* deriva directamente del traspaso físico de su *ager* en tanto que espacio ciudadano que supera el ámbito urbano. Un ejemplo puede encontrarse en el *ius exsilii*, que ofrecía la posibilidad de alejarse del territorio romano y tomar refugio en otra comunidad, lo que ocasionaba la pérdida eficaz tanto de sus obligaciones como derechos inmanentes a su condición ciudadana anterior<sup>285</sup>. De hecho esta posibilidad brindaba interesantes oportunidades para la evasión de responsabilidades, como da cuenta el caso del dictador Camilo, que tras huida a la colonia latina de Ardea arrogándose este derecho (442 a.C.) pudo evitar el pago de quince mil ases librales por sus irregularidades en el reparto del botín sobre Veyes (Liv. 5, 32, 7-9). Esta forma de actuación parte de una concepción aristocrática de la ciudadanía, en donde la pérdida del privilegio que comporta abandonar el territorio romano ya se considera una pena suficiente y en cierto modo sustitutoria de cualquier otra. Sin embargo, el *ius exsilii* no parece un recurso exclusivo para evadirse del ámbito penal o administrativo, también podía ser apelado de forma voluntaria y eventual. El episodio de la protesta de los *tibicines* de Roma el año 311 a.C.<sup>286</sup> resulta muy ilustrativa de la dimensión territorial de la ciudadanía. Estos se acogieron al *ius exsilii* como un siglo antes había hecho Camilo, en esta ocasión con el fin de librarse de sus *munera* religiosos, para lo cual abandonaron Roma e ingresaron en la comunidad latina y federada de *Tibur*. Las presiones de Roma y del propio senado tiburtino para que volvieran a cumplir sus obligaciones por el escrúpulo religioso habían resultado estériles, pues ni estaban ya en territorio romano, como tampoco *Tibur* podía ordenar la devolución de quienes había aceptado en el seno de su ciudadanía. Es entonces cuando

<sup>285</sup> La bibliografía sobre la cuestión es extensa, imposible de desarrollar aquí. Me remito a la obra monográfica de Crifò (1961), quien recalcó su carácter no punitivo dentro del orden gentilicio y estableció los fundamentos originarios del *ius* mayoritariamente aceptados en la posteridad.

<sup>286</sup> Se trata de un colegio dedicado a tocar la música ritual en el templo de Júpiter durante los sacrificios. La razón principal de su rebeldía y apelación final al exilio fue la prohibición de ingesta de alimentos en el templo por escrúpulo religioso a instancias del *ensor*, lo que fue considerado una vulneración a esta costumbre secular.



se recurre a un subterfugio en donde se evidencia cómo sus obligaciones renacen toda vez son devueltos físicamente a Roma, siendo transportados en carros cuando se encontraban dormidos y en estado de embriaguez, según el relato de Livio (9, 30, 5-10). Es decir, es el traspaso físico de sus fronteras lo que hace recobrar la eficacia de esta especie de ciudadanía que había quedado en suspenso frente al concepto, quizás todavía embrionario, de exclusividad ciudadana, que debería ser entonces la tiburtina (*vid.* Torres Aguilar, 1993-94: 710-22 Martín, 2004: 250). Esta concepción se presenta también en el *ius migrandi*, que en cierto modo hacía reversible lo mencionado sobre el *exilium* mediante el retorno físico al territorio romano. Fue una de los *iura* compensatorios que definieron la condición latina colonial hasta su abolición en la primera mitad del siglo II a.C. (Liv. 39, 3, 4-5; 41, 9, 9-12). En ella los fundadores eran *cives Romani* que ejecutaban un *exilium* voluntario para crear una colonia constitucionalmente extranjera y externa al *ager Romanus* (Martínez-Pina, 2004: 160), lo que equivalía a un cambio en su *status civitatis* (García, 1991: 128-30). Así ocurría a menos que recurrieran a este derecho y ejecutaran una *migratio*, basada de nuevo en el acto material de retorno, puesto que el restablecimiento de ciudadanía romana se obtenía automáticamente si fijaban de nuevo su residencia en territorio romano. Cuando Cicerón enumera las formas de perder la ciudadanía recuerda precisamente el *exilium* (Cic. *Caecin.* 34, 100), que no parece tratarse tampoco de un castigo (*non supplicium est*) como de una decisión individual que implica un cambio de lugar de residencia (*locum mutare*), lo que comportaba consecuencias jurídicas al regirse por un *ius civitatis* ajeno al ordenamiento romano. Algunas veces era forzado, como se producía mediante el *interdictum aquae et ignis* regulado en una de las *leges Corneliae* de época silana (aunque de origen posiblemente anterior; *vid.* Rotondi, 1966: 356), por el que la expulsión de la *civitas* romana se hacía efectiva mediante la prohibición de ingesta de agua y alimentos en *ager romanus* (pues carecería de sentido que el interdicto se restringiera a la *Vrbs* hasta el primer milario). Aquí deliberadamente se evita regular el *exilium* y son causas materiales las que animan la expulsión del territorio, que se acciona a título individual y, formalmente, continúa siendo voluntario.

Este tipo de concepciones entran también en plena coherencia con lo que puede observarse para la situación anterior al nacimiento del *ius postilimium*, que por norma general se acepta para el siglo III a.C. a tenor de algunos acontecimientos de las guerras contra Cartago (Hernández-Tejero, 1989). Lo conocemos por la jurisprudencia del periodo clásico y post-clásico, cuando sus fundamentos se habrían visto ya irremisiblemente transformados. Sin embargo, la etimología del *postliminium* (simplemente, traspaso del *limes*) parece hacer más justicia con su sentido originario que con los nuevos matices y contenidos de época imperial, con los que a veces entra en clara contradicción según ha observado Barbatí (2014:592). Para el periodo que nos ocupa, parece relacionarse con el fin de dar solución al problema de aquellos militares que, habiendo traspasado el *limes* romano en campaña exterior, permanecían en una situación de *captivitas ab hostibus* durante un tiempo prolongado. Era entonces cuando, al retornar (y sólo al retornar), podían recuperar sus derechos patrimoniales y personales si este derecho era expresamente concedido, es decir, se volvía a la situación anterior en que habían sido ciudadanos de pleno derecho como si no se hubiera producido ese lapso

de tiempo intermedio. La simple existencia del *ius postiliminium* denota, sin ánimo de ser exhaustivos<sup>287</sup>, dos aspectos evidentes: en primer lugar, que se trata de un privilegio más que de un derecho intrínseco de la ciudadanía, pues debe ser concedido en atención de la casuística concreta y no es extensible a su totalidad, que seguirá sometida al carácter limitante del territorio; por otro, que el *postiliminium* se trata del acto material del “traspaso de la frontera” (tal y como lo entendía también Mucio Escevola, *vid. Cic. Top.* 8, 36) y ello comportaba consecuencias jurídicas inmediatas a menos que se aceptase la aplicación del *ius postiliminium*<sup>288</sup>. Si se tiene en cuenta que el *postiliminium* entendido como acto es anterior a la creación de la excepcionalidad que introduce su *ius* (*postiliminium*) debe reconocerse la naturaleza condicionante del territorio en coherencia con los *iura* arcaicos antes mencionados, generalizada hasta el siglo III a.C. y restringida en lo sucesivo.

En un proceso que resulta difícil de reconstruir con precisión, la proyección territorial del ejercicio del derecho ciudadano converge, hasta confundirse, con una nueva idea de Italia. Una Italia que ya no sólo se concibe como un ente geográfico o una “unidad cultural” más o menos construida, *Italia disciplina et vita* a decir de Catón (*Frag.* 3, 9), sino que va cobrando forma como un cuadro territorial revestido con determinadas cualidades jurídico-religiosas. Esto resulta llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que Italia no es una entidad político-jurídica única, sino una compleja relación de realidades institucionales no constituidas linealmente como prolongación del ordenamiento romano<sup>289</sup>. Salvo el municipio romano y, a lo sumo, la *civitas sine suffragio*, el resto de comunidades eran extranjeras desde el punto de vista constitucional. Evidentemente no estoy en disposición de poder reconstruir este largo y complejo proceso (*vid. Capogrossi, 2000*), pero es imposible no ver en esta idea naciente de Italia un producto de la supremacía política romana, de la instrumentalización de las relaciones federales y de su propio proceso expansivo. Un ejercicio de hegemonía política que tenderá a percibir, en suma, una Italia como reflejo ambiguo de ese cúmulo de dependencias creadas, de constituciones políticas distintas, extranjeras formalmente a excepción del municipio, pero cuyos lazos de sometimiento

<sup>287</sup> Para diversas cuestiones me remito a algunas obras monográficas recientes dentro de la abundantísima bibliografía sobre el tema (*vid. Cursi, 1996; Maffi, 1992; Barbati, 2014*).

<sup>288</sup> Esta situación evidentemente será distinta cuando la ciudadanía romana adquiere una dimensión política distinta, en tanto aparece como una *societas iuris* desligada del territorio comunitario originario. La cualidades jurídicas de esta ciudadanía en suspenso ha constituido uno de los principales debates y problemáticas de los estudios que se han ocupado del *postiliminium* en época tardía (*vid. Barbati, 2014: 670-704*).

<sup>289</sup> Desgraciadamente es imposible reparar en este momento en el espinoso asunto que encierra el significado de la ciudadanía romana republicana y su relación con *rei publicae* independientes, que suele oscilar entre el reconocimiento o no de la *isopoliteia* como forma admitida en la mentalidad jurídica romana desde periodo arcaico, que es nombrada insistentemente por Dionisio de Halicarnaso (*vid. Humbert, 1978: 85-143*). Un debate atravesado además por formas de integración e interlocución con Roma que obedecen a expedientes comunitarios variados, desde los regidos por *foedera* y constitución municipal (más claramente *rei publicae* con capacidad externa limitada o eliminada), hasta otros expedientes que cuentan con sus propias controversias, como la *civitas sine suffragio* (como titulación honorífica o, en radical, oposición, síntoma de supresión político-jurídica y extensión de una ciudadanía romana reducida por la vía municipalizante como sostuvo Humbert, 1978: 205-07); así como la cuestión de los *municipia foederata* extrapolados para el periodo republicano (*cfr. García, 1991: 103-04*).

común a Roma revisten al suelo itálico de unas propiedades distintas respecto al exterior. Creo que la tesis de Nicolet (1994), para quien “la réalité territoriale et humaine de l’Italie se recontrent, à très haut époque, dans les domaines du droit sacré – lié fondamentalement au droit augural – mais aussi du droit de la guerre et du droit de propriété” (1994: 379) es correcta en relación a la evolución general de la administración republicana para Italia.

El concepto de “suelo itálico” empieza a percibirse a partir del siglo III a.C., por ejemplo, en la declaración ritual de la guerra (*indictio belli*) contra Pirro. Antes de ese momento el *ius fetiale* establecía como necesario el lanzamiento físico del *pilum* desde *ager romanus* hasta el territorio enemigo (Serv. *Aen.* 9, 52; Macdonald y Walbank, 1937, 193; Harris, 1979, 166). El precepto religioso, sorprendentemente, se había ejercitado sin ningún impedimento durante la expansión romana por el sur de Italia aunque difícilmente podría haberse desarrollado de un modo técnico y riguroso si, en principio, el *ager romanus* es sólo el conjunto de *heredia* de las tribus rústicas, incluya o no al *ager publicus*. Pero será precisamente la amenaza de Pirro en Epiro, fuera de Italia, cuando se contemple por primera vez la imposibilidad práctica de cumplir la transgresión simbólica y religiosa de la frontera por la separación que representaba el mar Adriático. Y será en este preciso momento, y no antes, cuando se celebrará la ficción jurídico-religiosa del lanzamiento de lanza en el templo de Bellona para cumplir los requisitos formales de declaración de guerra conforme al *iustum Bellum* en lo sucesivo<sup>290</sup>. En mi opinión, esto es posible porque el *ager romanus* ha cambiado en su concepción. Ya no se asocia a un territorio como proyección espacial de la ciudadanía, sino que responde al paraguas del liderazgo romano con respecto al heterogéneo grupo de itálicos dependientes, hasta, paulatinamente, confundirse con Italia como su cauce natural de expresión política. Sólo así puede explicarse la normalización del *ius fetiale* desde territorios que quizás todavía no eran, en rigor, *ager romanus*, sino federados o latinos, y el hecho de que sea Epiro por su carácter extraitálico lo que implica precisamente el punto de ruptura. La identificación explícita de Italia con este espacio ambiguo del *ager romanus*, aparece con claridad en la imposibilidad de nombrar dictador a M. Valerio Mesala en Sicilia el 210 a.C. Según la resolución del senado no podía hacerse fuera de Italia, y resulta ya evidente su identificación directa con el *ager romanus*: *patres extra Romanum agrum, eum autem Italia terminari, negabant dictatorem dici posse* (Liv. 27, 5, 15). Al mismo tiempo, las propiedades sacrales del territorio itálico también perfilan el área de actuación del pontificado máximo, cuyas fronteras no podía superar. En el episodio de la asignación de Sicilia el año 205 a.C., P. Licinio Craso parece incapacitado para entrar en el sorteo por ostentar este sacerdocio, que requiere su presencia física dentro de Italia (*quia sacrorum cura pontificem maximum in Italia retinebat*), y Sicilia es adjudicada a su colega P. Cornelio Escipión de un modo automático sin sorteo (Liv. 18, 38, 12). Si la espacialidad de Italia emerge en este momento, aunque la compongan comunidades integradas por distintas vías que son ajenas al ordenamiento jurídico romano desde el punto de vista de su constitución

---

<sup>290</sup> El ritual de acto de formalización de guerra continuó también durante el Alto Imperio (Suet. *Cl.* 25; Amm. Marc. 19, 2, 6)

política, es porque ya se concibe como el ámbito de ejercicio del *imperium* de los magistrados (Nicolet, 1994: 379).

Un cauce de expresión concreto de esta nueva realidad itálica que debe leerse transversalmente a lo anterior, nos lo proporciona el propio sistema de dependencias políticas, fiscales y militares republicanas hasta la Guerra Social como ya se ha abordado (*vid.* cap. 5.3.2). Un sistema basado en la idea de Italia como una especie de proyecto común, sostenido por la fiscalidad de los *cives Romani* y el régimen de contribuciones de carácter descentralizado de las *formulae togatorum* (de latinos y federados itálicos). Aunque sus contribuciones pudieran ser distintas a título individual, según se estableciera con la *deductio* (*latini* colonarios) o el *foedus* (*socii italici*) específicos, es el suelo Itálico lo que posibilita y construye este modelo de interlocución y dependencia. Así lo suministra la propia *lex agraria* del 111 a.C. al afirmar que el elemento limitante para proceder al reclutamiento de *auxilia* por esta *formula* lo constituye estar *in terra Italia* (l. 21) mientras fuera de ella se procede técnicamente de otro modo<sup>291</sup>. La abstracción de Italia esconde, sin embargo, una creciente desigualdad en el régimen de aportaciones tras la abolición del *tributum ex censu* del 167 a.C., cuya brecha entre la ciudadanía romana respecto al resto sienta la bases del periodo de turbulencias que vivirá Italia hasta la guerra social, en la búsqueda de un equiparación. Respecto a los *socii*, Apiano es muy explícito al referir la situación decadente de los que llama *Ἰταλιῶται*, “diezmados por la pobreza, los tributos y la milicia”. Cabe decir que no se sostiene, como se ha propuesto, que los “italiotas” de Apiano se refieran a la *plebs* romana rústica. Ello se hace evidente, como ha observado Roselaar (2010: 243-51), con la propuesta de Flaco del 125 a.C. que describe el mismo Apiano, en donde se plantea conceder a los *Ἰταλιῶται* la ciudadanía romana, lo que obviamente excluye a quienes ya la tuvieran como sería la *plebs rustica*. Cosa distinta es si atañe también a los latinos o debe limitarse a los itálicos federados. Este colectivo se perfila por oposición a la “otra multitud de hombres, que habitaba en las colonias o en los municipios o de cualquier otra clase” (App. *BC I*, 10), es decir, en alusión a los ciudadanos romanos, pero a priori podría incluir también a los latinos, muchos de los cuales eran colonarios. Sea como fuere, lo que parece claro es que el marco de sometimiento en el último cuarto del siglo II a.C. entre latinos y *socii* es todavía común en el ámbito contributivo, por mucho que los *latini* hubieran podido obtener privilegios específicos como la *provocatio* de forma reciente. La vigencia de este sistema para los latinos se hace evidente en las cargas militares y contribuciones a las que se refiere la *lex repetundarum* del 123 a.C. para quienes no ganaran un juicio *de repetundis* a un ciudadano romano, es decir, la inmensa mayoría latina. Del mismo modo que poco años después, todavía en la *lex agraria* del 111 a.C. parece vigente la *formula togatorum sociumve nominisve Latini* que incluye ambos conjuntos unidos por este mismo marco de sometimiento. Es decir, la ciudadanía romana hasta finales del siglo II a.C. implica, al menos en Italia, no sólo el uso del *ius*

---

<sup>291</sup> Normalmente, la fiscalidad por derecho de conquista paulatinamente institucionalizada (Ñaco, 2003) o en la retórica del *munus* (regalo) entre estados socios formalmente independientes. Debe recordarse, en cualquier caso, que ambas formas de dominación tendieron a confundirse hasta el punto de considerarse las primeras el precedente de las segundas a comienzos del Principado, aunque descansaran técnicamente en lazos muy distintos desde el punto de vista jurídico (cap. 5.3.2).

*civile* o el acceso al *ager publicus*, sino una inmunidad fiscal que le es intrínseca y le separa del resto.

Existe, a modo de recapitulación, un proceso dialéctico que no se resolverá hasta la Guerra Social y la legislación inmediatamente posterior. Por un lado la idea de una Italia como espacio de ejercicio político del poder hegemónico romano diferenciado del exterior, cuyos suelos van adquiriendo determinadas propiedades jurídico-religiosas. Por otro, una desigualdad creciente en el régimen contributivo entre una ciudadanía romana immune y comunidades *in terra Italia* que continúan excluidas de las ventajas por su carácter extranjero. Esta dialéctica se resuelve finalmente con las *leges Iulia de civitate latinis et sociis danda* (90 a.C.) y *Plautia Papiria* (89 a.C.) tras la guerra social, con las que se simplifica el complejo amalgama de situaciones de dependencia de *latini* y *socii*. Cuanto todas las comunidades hasta el Po acceden a la ciudadanía romana y sus expedientes comunitarios se consideran constitucionalmente una extensión de la comunidad romana en *municipia* y *coloniae*, emerge Italia como realidad suficientemente homogénea y coherente<sup>292</sup>. Esta abstracción, por otra parte, sentará las bases ideológicas para que pueda producirse el constructo jurídico del *ius Italicum*, sólo posible si existe una Italia que se concibe como unidad de funcionamiento diferenciado del horizonte provincial.

---

<sup>292</sup> La cuestión de hasta qué punto Italia y sus comunidades funcionan o no de un modo uniforme es una cuestión intensamente debatida e inasumible de en este momento.

## 7. El suelo Itálico en las provincias durante el Alto Imperio.

Para perfilar el significado del *ius Italicum* del Alto Imperio es importante tener presente dos aspectos fundamentales con anterioridad:

1. En primer lugar, que a partir de la obra legislativa que siguió a la guerra Social, la ciudadanía romana empieza a perder su faceta de comunidad política, en el sentido riguroso de ser ciudadano de la ciudad de Roma, para pasar a entenderse como beneficiario de una *societas iuris* común, la suministrada por el ejercicio del *ius civile*. Un síntoma muy claro de este contraste lo encontramos en el primer censo tras la guerra Social, cuando la ciudadanía romana todavía se reviste de aquellas cualidades cívicas, y todos los itálicos son llamados presencialmente a la *Urbs* para convertirse en nuevos *cives Romani ex censu*, lo que motivó un gran revuelo por las limitaciones logísticas de mantener la lógica secular de la “ciudad-Estado”, que ahora se tornaba inasumible (Cic. *Verr.* 1, 18). Pocos años más tarde la ciudadanía romana se ve subsumida por las administraciones locales de Italia, que en contraprestación, funcionan como réplicas de la propia Roma. La *lex Heracleensis* (45 a.C.?), por ejemplo, denota cómo la descentralización de funciones a nivel político y administrativo (como el propio censo de sus ciudadanos), es profunda. Es decir, la ciudadanía romana y sus formas de constitución política se han expandido, pero a costa de una depauperación de su contenido político con carácter práctico. O dicho de otro modo, a partir de la obra legislativa que unifica Italia, un munícipe de Tarento era *civis Romanus optimo iure* y, como tal, contaba con una *tribu* y todas las garantías del *ius civile*, pero su participación ciudadana en los comicios tribados requería un desplazamiento a Roma difícil de ejercitar. Excluido de facto de la toma de decisiones, delegando en la *tribu*, su comunidad política propiamente es ahora la tarentina, que puede ejercer en la elección de los *decuriones*, *IIIviri* y *aediles* de su municipio (*lex Tarent.* l. 7-25; *vid.* Crawford, 1996, vol. 1: 301-12) y son, al fin y al cabo, quienes lideraban la vida pública local ordinaria, parecen capaces de gestionar su *pecunia publica*, etc. Este redimensión de la ciudadanía romana es lo que permite salvaguardar la máxima del derecho público romano sobre la incompatibilidad de ostentar una duplicidad de ciudadanías en Italia, como sería el caso de tantas comunidades anteriormente federadas o latinas colonarias que pasan a convertirse mayoritariamente en *municipia* conformados por ciudadanos romanos. El propio Cicerón es buen conocedor de este principio de incompatibilidad ciudadana, *ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit* (Cic. *Caec.* 100) cuando un ciudadano ejecuta el *exilium* a una comunidad extraña. Sin embargo, no se produce para él en un municipio romano de Italia tras la guerra social, pues la *civitas* de Roma ha cambiado y por ello es ahora compatible con la local. El tan citado diálogo de Cicerón en *De legibus* (2, 1, 3 – 2, 5), es muy claro: para él su comunidad propiamente hablando sigue siendo Arpino, que reivindica: *Quia si verum dicimus, haec est mea et huius mei germana patria*. Y ante la sorpresa de su

interlocutor Ático sobre si son patrias en pie de igualdad o sólo pertenece a la *communis patria* (la romana), expone la dicotomía entre una a la que le liga por nacimiento y filiación (*patria naturae, patria loci*), mientras Roma es la patria que la contiene (*dum illa sit maior, haec in ea contineatur*) y su patria de derecho (*patria iuris*). En suma, con la unificación de Italia la ciudadanía romana se ha extendido como un cuerpo de derecho disponible sobre todo para la proyección de sus élites, gracias a su sistema de garantías, su integración en la carrera de las magistraturas o el acceso a la propiedad agraria en toda Italia. Sin embargo, desde una perspectiva política, prevalece la comunidad local desde el punto de vista de su funcionamiento práctico y, propiamente hablando, es una “ciudadanía” más que una *origo*.

2. En segundo lugar, al funcionar como una unidad de derecho de la mano de la *patria iuris* y conformada con constituciones políticas romana conocidas, *Italia* emerge como unidad de funcionamiento en el Principado. Ya no es un cúmulo de complejas situaciones de dependencia, muchas veces sobre la base de una supuesta, e instrumentalizada, bilateralidad. Sino un marco simplificado cuya uniformidad y coherencia interna permiten distinguirlo, por un lado, del mundo provincial; por otro, de la propia ciudadanía romana como un cauce específico de expresión de naturaleza territorial. Así se observa en algunas leyes que operan sólo con Italia desde mediados del siglo I a.C., como la ley de César durante su dictadura que puso límite al crédito y a la posesión: *qua de modo credendi possidendique intra Italiam cavetur* (Tac. Ann. VI, 16). También la *lex Furia de sponsu*<sup>293</sup>, que parece vigente en época de Gayo aunque promulgada desde tiempo atrás, sólo se aplica *in Italia*, mientras la ciudadanía romana provincial debe regirse por la *lex Appuleia* (Cai. Inst., 3, 121 a; 122). Esta idea se materializa también en la naturaleza jurídica que recibe el “suelo itálico”, para el que la propiedad quiritaria es ahora generalizable. Por esta razón, Gayo sólo reconoce para Italia los procedimientos ordinarios de acceso a la propiedad del *ius civile*: *mancipatio, in iure cessio*, (Inst., 2, 31) y *usucapio* (Inst., 2, 46). El “suelo itálico” es, en abstracto, *res Mancipi* (Cai. Inst. 2, 27), pues todos ellos se mancipan de la misma manera (*eodem modo solent Mancipari*: Inst., 1, 120<sup>294</sup>). Pero el principal privilegio que se traslada indirectamente a la configuración de su suelo es el fiscal al hacerse extensible para los antiguos *socii* y *latini* itálicos la abolición de la tributación sobre el patrimonio (*tributum ex censu*) de la que disfrutaban los ciudadanos romanos. Y aunque, en rigor, es un privilegio que emana de la concesión de la ciudadanía romana y no propiamente del territorio itálico (ya que el *tributum ex censu* es tributación de

<sup>293</sup> Según esta ley las cauciones declaradas en Italia se extinguían a los dos años de ser constituidas. El debate sobre la cronología de esta ley es extenso (vid. Rotondi, 1966: 475-77).

<sup>294</sup> “Se mancipa de esta manera a los individuos que son esclavos como a los que son libres, y también a los animales mancipables, en cuyo número figuran los bueyes, caballos, mulos, asnos; también los inmuebles, tanto urbanos como rurales, que sean mancipables, todos los situados en Italia, se mancipan de la misma manera” (*Eo modo et serviles et liberae personae Mancipantur. Animalia quoque, quae Mancipi sunt, quo in numero habentur Boves, equi, muli, asini, item Praedia tam urbana quam rustica, quae et ipsa Mancipi sunt, qualia sunt Italica, eodem modo solent Mancipari*).

carácter personal y no predial) a mi juicio termina por asimilarse al propio suelo de Italia. Esto se produce a consecuencia de la creación del *tributum soli*, que al gravar exclusivamente el suelo provincial independientemente del *status civitatis* de su dueño, dota indirectamente al suelo itálico de una inmunidad intrínseca. A su vez ello comporta la creación de dos niveles de privilegio en el seno de la ciudadanía romana según tenga su residencia en Italia o las provincias. Para ilustrar este fenómeno pueden destacarse dos momentos del gobierno de Augusto que resultan representativos del contraste. Por un lado, el carácter exento de Italia se sugiere de forma clara en la amenaza de Augusto de volver a imponer el extinto y olvidado *tributum ex censu*, para lo que el 13-14 d.C. manda censar la propiedad de los ciudadanos romanos (en Italia) con fines coercitivos. Una amenaza que carece obviamente de sentido en ámbito provincial donde, como hemos visto, se estaba procediendo desde tiempo atrás a un censo general para cada provincia. Esta reacción había sido provocada precisamente por las resistencias a pagar la reciente *XX hereditatum*<sup>295</sup> por parte de las élites itálicas, como es el propio *ordo* senatorial, habituadas a una situación exenta que ven cuestionada con la fiscalidad indirecta, que será finalmente el modelo impositivo exclusivo de Italia (Brunt, 1990), que no volverá a gravar la propiedad. Sin embargo sabemos que la situación para la ciudadanía romana fuera de Italia era diferente. Unos años antes del suceso anterior, en el tercer edicto *ad Cyrenenses* (6 a.C.) Augusto clarifica que en toda la provincia los nuevos ciudadanos romanos siguen sujetos a las cargas y liturgias en sus comunidades de origen (De Visscher, 1965, l. 55-62; Purpura, 2012: 474-75). La ciudadanía romana en sí no comporta privilegio fiscal alguno, pues como el mismo edicto expone a continuación, sólo atañe a quien se le haya expresamente concedido la *immunitas* sobre sus bienes junto a la ciudadanía por ley o senadoconsulto. Esto viene confirmado por numerosos diplomas militares de *auxilia* que, al licenciarse, reciben en ocasiones la *immunitas* de forma complementaria a la ciudadanía romana. Y, de hecho, la *immunitas* ya venía siendo concedida desde tiempo atrás como privilegio independiente a la concesión ciudadana: mientras el premio por la actuación en la guerra Social según el bronce de Áscoli (89 a.C. *CIL* VI, 37045) se basó en que los jinetes de la *turma Salluitana* sí la recibieran *viritim*, sin alusión alguna de carácter fiscal, a algunos navarcas de Asia y Eubea se les reconoce la *immunitas*<sup>296</sup> sin ciudadanía el 78 a.C., según sabemos por el *sc. de Asclepiade Clazomenio sociisque* (*CIL* I, 203), y sólo ingresan en la *formula amicorum* a título privado. La idea de un suelo itálico exento es, en suma, el resultado de dos factores convergentes: la expansión de un *tributum ex censu* abolido del que ahora disfrutaban los antiguos contribuyentes de la *formula*

<sup>295</sup> Se trata de una tasa indirecta que gravaba el 5% de la herencia entre ciudadanos romanos según se estableció en la *lex Iulia de vicésima hereditatum* del 5 d.C. aplicable al conjunto de la ciudadanía romana, en principio, tanto provincial como itálica.

<sup>296</sup> Fue de hecho una exoneración fiscal tanto de las cargas locales como de cualquier tributo que impusiera el gobernador provincial sobre ellas (l. 8 y 16), además de poder apelar a jueces de Italia (l. 16). Los términos empleados son *ἀλειτουρησία* y *ἀνεισφορία*, que normalmente se han interpretado como inmunidad a las cargas locales y a la tributación imperial respectivamente: una síntesis sobre algunas de estas cuestiones en Raggi (2001: 89-95).



*togatorum in solum Italicum*; por otro lado, la imposición del *tributum soli* provincial independientemente de la pertenencia a la *patria iuris* romana. La conjugación de ambos elementos sienta las bases materiales para hablar de un suelo itálico diferenciado, al que se transfiere entre sus conspicuas cualidades la inmunidad. Agenio Urbico<sup>297</sup> es taxativo al respecto a propósito de las *conditiones possidenti per Italiam: ubi nullus a[iu]ger est tributarius, sed aut colonicus aut municipalis, aut alicuius castelli aut conciliabuli, aut saltus privati* (Agen. Urb. Th. 23, 5-13 = La. 62, 19-27). Es decir, para el agrimensor la contraposición de diferentes situaciones administrativas a la hora de considerar el *ager tributarius* es banal en Italia, pues independientemente de que sean colonias, municipios o incluso entidades inferiores, lo que les aglutina es su asiento sobre *ager* itálico, que carece de tributación predial<sup>298</sup>.

La creación del *ius Italicum* supone la culminación de este largo proceso. Su objetivo era paliar de manera selectiva la discriminación de estos dos cuerpos de ciudadanos romanos que se estaban conformando por la dicotomía itálico-provincial. Otorgado como *beneficium* comunitario, creaba una ficción por la cual la comunidad privilegiada seguía siendo geográficamente provincial, pero jurídicamente tomaba asiento en *Italia*. Las controversias sobre su contenido y alcance son considerables, debido en gran parte a la parquedad de las fuentes que lo mencionan. Aquí nos centraremos en tres cuestiones fundamentales, pues son las que tienen mayor interés para establecer una contraposición con el suelo provincial y la fiscalidad del Alto Imperio:

- El momento de aparición del *ius Italicum*.
- La relación entre *ius Italicum* e *immunitas*.
- La variante personal del *ius Italicum*.

## 7.1 Italia fuera de Italia: la creación del *ius Italicum*:

La principal dificultad a la hora de establecer una cronología para la creación del *ius Italicum* es su desigual dispersión en el tiempo, pues la mayor parte de las referencias proceden del siglo III d.C., en la *forma censualis* de Ulpiano y en Paulo. Se ha sostenido que su aparición corresponde al periodo de gobierno Flavio a partir de algunos presupuestos defendidos por Mazzarino (1974) que comentaremos más adelante, para quien hasta el gobierno de esta dinastía sólo habría existido la *immunitas*, que es después incorporada a un conjunto jurídico más extenso como el *ius Italicum*

<sup>297</sup> La autoría del fragmento es controvertida, y se ha propuesto también Frontino; sobre estas cuestiones *vid.* Castillo, 1996: 76-83.

<sup>298</sup> En principio, la única excepción la constituía el *ager publicus* itálico, sobre el que pesaba un *vectigal*, pero que fue paulatinamente minimizado frente a la propiedad privada predominante (Nicolet, 1994: 381-83; Roselaar, 2010: 284-88).

(*vid.* Watkins, 1988-89). Efectivamente, causa cierta sorpresa que no existan menciones explícitas hasta este momento, y que por ejemplo Augusto, en sus *Res Gestae* refiera fundaciones de colonias de veteranos *in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achaia Asia Syria Gallia Narbonensi Pisidia* (RG 28,1) sin aludir que algunas de ellas pudieran haberlo recibido. Sin embargo, hay una serie de indicios que a mi juicio llevan inequívocamente al comienzo del Principado el momento de creación del *ius Italicum*. Antes de eso, y siguiendo con las *Res Gestae*, es preciso comprobar que el argumento *ex silentio* carece de validez, pues tampoco se destaca ninguna de las concesiones de *immunitas* por parte de Augusto. *Coloniae immunes* en Plinio que fueron fundadas en época augustea y a las que seguramente se le dio en el momento de su fundación la *immunitas*, como los ejemplos hispanos de *Tucci*<sup>299</sup>, y el más inseguro de *Ucubi*<sup>300</sup> por sus méritos en las guerras civiles contra Pompeyo (Plin. *NH.*, 3, 12), tampoco son destacadas en las *Res Gestae*. Un hecho que seguramente pueda explicarse porque no es este tipo de privilegios lo que busca destacarse en el panegírico, como habría ocurrido con el derecho itálico o el derecho latino, sino simplemente las nuevas *deductiones* y el aumento de la nómina de ciudadanos romanos, esto es, el engrandecimiento del Estado romano.

Si nos ceñimos a los testimonios más tempranos que aluden al derecho itálico, éstos nos remiten a época de Augusto, ambas en la obra de Plinio. La primera alude a dos colonias hispanas en su relación de comunidades bajo la jurisdicción conventual cartaginense: *ex colonia Acitana Gemelense, ex Libisosana cognomine Foroaugustana, quibus duabus ius Italiae datum* (*NH.*, 3, 25). En cuanto a *Acci* (El Espejo, Guadix), es de las colonias romanas meridionales con menos dudas de carácter cronológico. En primer lugar, porque no coexisten menciones de *tribu* que induzcan a error como ocurre en otros casos con la *Sergia* y, salvo la excepcional *tribu Pupinia*, todas las indicaciones son de la *Galeria*, permitiendo adscribir su fundación a época de Augusto. El principal argumento nos lo dan las sucesivas emisiones monetarias conmemorativas del momento fundacional, la primera también de época augustea, que nos informan sobre la composición de los primeros colonos: fundamentalmente militares de las *legiones* I y II, cuya identificación “ha permitido incluso sustentar la fijación de la fundación de la colonia en los primeros años del Principado de Augusto” (González Román, 2017: 362). A estos contingentes militares se suman los numerosos *Octavii*, posibles élites locales beneficiadas por el favor del *Princeps* hacia la nueva colonia (González Román, 2017: 365). El caso de *Libisosa* es distinto, tal y como conocemos gracias a las intervenciones arqueológicas que se han realizado desde 1996 en el “Cerro del Castillo” (Lezuza, Albacete) y que han permitido comprobar el asiento de la colonia sobre el *oppidum*

<sup>299</sup> Su adscripción augustea como colonia es clara, y la *immunitas* probablemente también, pues la *deductio* implica la supresión de los preexistente, de modo que resulta difícil de sostener una continuidad cesariana de este privilegio que, en cualquier caso, habría de ser re-concedido con la (re)fundación colonial: *cfr.* Serrano Delgado, 1983.

<sup>300</sup> Quizás más probablemente cesariano, aunque la reorganización del territorio debió ser acometida en época de Augusto junto a la *immunitas* siguiendo el programa de su padre adoptivo (*vid.* Caballos Rufino, 1978: 283-89). En cualquier caso la adscripción cesariana o augustea de numerosas colonias ha sido un continuo problema historiográfico todavía no resuelto de forma concluyente (*vid.* González Román, 2017).

ibérico republicano, parcialmente arrasado en época sertoriana (Uroz Rodríguez y Uroz Sáez, 2014; 2016; Uroz Rodríguez, 2012). Aunque subsisten todavía numerosas incógnitas que deberán despejarse conforme se avance en el conocimiento del sitio, se ha confirmado de forma unánime la *deductio* colonial en el gobierno de Augusto. Una cronología que ya se había supuesto con anterioridad por su *cognomen Foroaugustana* y menciones a la *tribu Galeria* (García y Bellido, 1961-62: 371; Carrasco, 209-2010: 160-62), y a la que ahora pueden sumarse datos sobre el proceso de transformación de la ciudad, cuya construcción del foro hubo de producirse en el momento fundacional augusteo (Uroz Sáez, 2012). La única teoría alternativa planteada por Poveda (2002: 24-32), al retrasar la *deductio* a época tiberiana a partir de algunos sondeos parciales de la curia y otro edificio datables en época de Tiberio ha sido desechada. Pues por un lado estos indicios constituyen en todo caso una fecha *ante quem* y no *post-quem* al tratarse de *TS* Itálica producida a partir del 15 d.C. (Uroz Sánchez, 2012: 108-109). Del mismo modo, también se ha destacado que *Libisosa* recibe un mejor acomodo en el programa de colonización augusteo frente al *unicum* que supone una *deductio* por parte Tiberio, inédita en la península, dada su política fundamentalmente municipalizadora (Andreu, 2008a: 232-33, n. 35; Abascal, 2006: 74-75, n. 74).

Aunque no pueda corroborarse de forma definitiva que la concesión del *ius Italicum* sea coetánea a la deducción, resulta lo más probable por constituir el momento principal de promoción comunitaria, tanto a nivel jurídico como político. Un hito que debe incardinarse dentro de un programa de amplio alcance para *Hispania*, con *deductiones* coloniales a las que se añaden privilegios suplementarios, como son las *colonias* de la Bética fundadas en época de Augusto que se declaran *immunes* en la obra pliniana. A mi juicio Plinio emplea la expresión *duabus ius Italiae datum* precisamente para recordar la vigencia del privilegio en su propio tiempo, pero concedido con anterioridad. De haberlo obtenido con la dinastía Flavia, de quien él mismo es beneficiario político, seguramente lo hubiera destacado como hace en otras ocasiones. Al fin y al cabo, es ya un hecho contrastado que en su relación de comunidades de la *Tarraconense* pudo nutrirse de informaciones de su presente como *procurator* provincial (o de *Asturia et Callaecia*), pero es el *orbis pictus* de Agripa el que actúa de base documental (12-7a.C) y de él pudo haber extraído la información relacionada con *Acci* y *Libisosa*. A Álvaro D'Ors, que coincidía en atribuir la creación del *ius Italicum* a Augusto, le parecía increíble que otras mismas fundadas por él no lo recibieran como *Emerita* o *Valentia* (D'Ors, 1974: 257-58). Un problema que sólo puede explicarse por el carácter selectivo de este *beneficium* otorgado a discreción por el *princeps*, tal y como ha concluido Saquete en su estudio monográfico sobre la cuestión para *Hispania*, es decir, al amparo de una política augustea que busca potenciar y promocionar sólo a determinados contingentes de colonos que se ven perjudicados por no tomar asiento en Italia, pero no al rango colonial en sí mismo (Saquete, 2000; *vid.* Watkins, 1983).

La segunda referencia más temprana al *ius Italicum* también nos los suministra Plinio, a propósito de algunas comunidades de *Liburnia*, seguramente anteriores al caso de *Acci* y *Libisosa*: *Ius Italicum habent eo conventu Alutae Flanates a quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini immunesque Asseriates et es insulis Fertinates Currietae* (*NH.*, 3, 139). Es decir, partimos de una contraposición entre la *immunitas* respecto a los

*Alutae, Flanates, Lopsi y Varvarini*, que son los únicos que habrían recibido el *ius Italicum*. Este fragmento consta, sin embargo, de una extrema complejidad que ha suscitado innumerables conjeturas sobre las causas y el contexto en que se produce la promoción comunitaria y la concesión del *ius Italicum*. El principal elemento de la controversia es la contradicción que convive en la obra de Plinio, en donde por un lado las concesiones mencionadas de *ius Italicum* las sitúa en su relación de *oppida* del *conventus Scardornitanus* de la provincia del Ilírico (*Dalmatia* en época Flavia). Mientras, de forma sorprendente, recoge también dentro de Italia, en la *regio X*, dos de las comunidades liburnas con derecho itálico (*Alutrenses* y *Varvari*), una de las que dice *immunes* (*Asseriates*), otra no privilegiada (*Nedinates*), y que conviven en el texto con comunidades de indudable pertenencia a la *regio X* (*Foroiulienses cognomine Transpadani, Quarqueni, Tarvisiani, Togienses*). No menos importante es la cuestión estatutaria de estas comunidades, sin vestigio alguno de rango colonial hasta el momento en que Plinio escribe, y de su menor entidad respecto a otras colonias del Ilírico como *Iader*, siendo fundamentalmente pequeños enclaves costeros. Las posiciones teóricas sobre esta cuestión pueden simplificarse en dos, a las que después se han adscrito los sucesivos autores, y que oscilan en su fundamento último, en el proceso evolutivo de la frontera nororiental de Italia en el periodo tardo-republicano y augusteo. La primera, formulada inicialmente por Kubitschek (1882), defendía que la *Liburnia* había pasado a formar parte intrínseca de Italia después de caer bajo la órbita romana el 129 a.C. (vid. Plin. *NH.*, 3, 129) hasta que Augusto fijara la nueva frontera de Italia en el río *Formio*. Es decir, la concesión del *ius Italicum* se explica entonces como instrumento compensatorio de su expulsión del privilegiado suelo itálico. Un hecho que justificaría la contradicción pliniana, sobre todo para comunidades bastante alejadas a la frontera, como los *Varvari*, que son sin embargo incluidas dentro de la *regio* itálica. La segunda posición, sugerida por von Premerstein (1918), simplificaba en cierta medida la cuestión al considerar que la inclusión en la *regio X* de algunas comunidades liburnas se debía a un registro cualitativamente distinto, “compresi nella lista dei vicini comuni italici della decima regione” (en Degrassi, 1954:100) cuyos privilegios (de *immunitas* o *ius italicum*) habría motivado su incorporación al censo itálico en vez de al provincial, aun cuando pertenecen a la administración del Ilírico. Sin embargo, ninguna de las posibilidades solventa todos los problemas. La primera hipótesis carece de datos que sostengan semejante entidad para Italia, pues Plinio considera el *Formio* un límite “acrecedentado” de Italia (*NH.*, 3, 127: *auctus Italiae terminus*) aun cuando en su tiempo la frontera era el *Arsia*, una ampliación respecto al anterior, y también Estrabón lo establece en la cercana *Pola* para su presente (5, 1, 1). Es decir, ambos “ben lungi da comprendere la Liburnia” (Malavolta, 1987: 69). Por su parte, la pirueta interpretativa de una fuente censal de la *regio X*, basada en los privilegios de *immunitas* y *ius Italicum*, no da respuesta a que fueran igualmente inscritos los *nedinates*, comunidad no promocionada que se situaba en la parte meridional de *Liburnia* y alejada del confín itálico, mientras otras comunidades cuya entidad bien podrían haber facilitado su entrada entre los “vecinos itálicos” no lo fueran, como *Arba* o las colonias augusteas de *Iader* y *Senia* (Vitelli Casella, 2011: 28-19; 2012: 267-68). No estoy en disposición de ofrecer una respuesta acerca de la naturaleza del listado pliniano de las comunidades de

la *regio X*, pues excede nuestros objetivos. Sin embargo, se hace necesario minimizar la importancia de la relación entre ambos fragmentos, que a mi juicio ha contribuido a oscurecer más que clarificar este intrincado problema historiográfico dado que, hasta que se demuestre lo contrario, no existe una relación coherente entre ambos pasajes que permita sostener una explicación causa-efecto entre concesiones de *ius italicum/immunitas* y la adscripción de algunas de ellas (junto a otras indistintas) en la *regio itálica*.



Fig. 23. *Ius Italicum* e *immunitas* en las comunidades de *Liburnia* según Plinio (*NH.*, 3, 139). Fuente: Casella, 2011.

Si nos ceñimos a la documentación de las comunidades de *Liburnia* que Plinio reconoce de derecho itálico (*Alutae*, *Flanates*, *Lopsi* y *Varvarini*) pueden extraerse conclusiones interesantes de carácter cronológico y del contexto en que hubo de aparecer este derecho. En primer término, es preciso desechar el caso de los *Varvarini*, pues de las cuatro comunidades su posición geográfica, en la zona más meridional de *Liburnia*, invita a pensar en una motivación diferente respecto a los *Alutae*, *Flanates* y *Lopsi*, muy cercanos a *Italia*. En cuanto a estas tres últimas comunidades, resulta de gran utilidad la reciente monografía de Vitelli Casella (2011), gracias no sólo a su disección del texto pliniano y a su propuesta de identificación y ubicación de las comunidades del Norte de *Liburnia*, sino al análisis de su *corpus* epigráfico y arqueológico asociado. Si seguimos las conclusiones del autor, se trata de tres comunidades con indudable vocación marítima y comercial que se ubican en posiciones estratégicas del litoral, en el golfo de Carnaro. Si bien han causado sorpresa dos aspectos relacionados con la cuestión estatutaria: que ninguna de las tres comunidades tengan aparentemente el tamaño y entidad que se le presume a una comunidad con *ius Italicum*, y que sean precisamente los únicos casos documentados de municipios con

este derecho cuando, en lo sucesivo, se relacionará con *coloniae c. R.* exclusivamente. Creo que estas circunstancias anómalas tienen cabida en un *ius* que todavía se encuentra en un estadio embrionario y, podría decirse, “experimental” que es propio de toda innovación jurídica independientemente de su desarrollo posterior. No es necesario desdeñar a Plinio, como sostuvo Margetić (1978-79: 310) al corregir que hubo de haber escrito *ius Latii* en vez de *Italicum*, sino encuadrar la excepción dentro del proceso de desarrollo de este privilegio, que fue cambiando con el paso del tiempo. En primer término, la cuestión del tamaño es semejante al mencionado caso de *Emerita*, del que D’Ors se sorprendía a propósito de *Libisosa*. Y es que, quizás, la concesión de un privilegio que no sólo ampliaba la nómina de ciudadanos romanos (algo para lo que ya Augusto tuvo fundadas reservas) sino que comportaba beneficios suplementarios de carácter fiscal y administrativo que repercutían en el tesoro público puede explicar las reticencias a concederse para las grandes colonias desde un primer momento (como sí ocurrirá en época de las dinastías Antonina y Severa; *vid. D.* 50, 15, 1-8). De tal modo que, a la luz de los datos, el derecho itálico estaría reservado al principio sólo a algunos centros medianos o pequeños sobre los que recaía determinados intereses, se les quería dar mayor atractivo, o cuyo valor estratégico se buscaba potenciar, como el caso de *Libisosa*, pero no a las colonias de gran masa social.

En primer lugar, es importante conocer su estatuto y el momento en que se produce su promoción jurídica. Ello permite establecer una fecha contemporánea o *post quem* a la concesión del *ius Italicum*, que requiere un entorno jurídico romano para poder ejercitarse y no tiene cabida para una comunidad peregrina. Estas tres comunidades presentan indicios de su conversión en municipios romanos a comienzos del Principado, si bien no es posible determinar con seguridad una promoción augustea o tiberiana. La fuente pliniana no es útil en este sentido, pues sólo les define como *oppida* (*NH.*, 3, 140), y debe recurrirse a los indicios epigráficos. Siguiendo las conclusiones de Casella, los *Alutae* que deben identificarse con *Albona* en vez *Alvaria*, fue con Tiberio cuando se produjera su conversión a municipio romano, tal y como parecen indicar las numerosas menciones a la *tribu Claudia* (Vitelli, 2011: 33-35). Para los *Flanates* que el autor relaciona con *Flamona* concluye que “correspondrebbe ad una fundazione Augustea” (2011: 57) frente a las propuestas que la datan en época tiberiana por algunas menciones a la *Claudia*. Por último los *Lopsi*, de menor tamaño y una aparente relación orgánica con *Senia*, pero con un superior componente social itálico, oscilan del mismo modo entre ser obra municipal de Tiberio o de Augusto (2011: 182-87). Es decir, los indicadores epigráficos nos remiten según el autor a una promoción temprana, pero no es de momento posible asociarlas a Augusto o Tiberio o si deben incluirse o no dentro de una misma línea política de municipalización en la zona.

En segundo lugar, la reforma de la frontera nororiental de Italia resulta clave para comprender el momento y el contexto en que el *ius Italicum* aparece como ficción jurídica. Debe tenerse en cuenta que, sobre todo *Flanona* y *Albona*, distaban menos de 10 km de la frontera de Italia cuando ésta se estableció en el río *Arsia*, una distancia escasa cuantitativamente hablando, pero que se tornaba insalvable desde el punto de vista administrativo, jurídico y fiscal. El *ius Italicum* permitía entonces exportar un “recinto” itálico en *ager* provincial sin necesidad de realizar una ampliación mayor que

pudiera abarcar a terceros no deseados. De modo que el momento en que se establece el Arsia como límite fronterizo que les excluye por escasos kilómetros de los beneficios de Italia fue, muy probablemente, contemporáneo o ligeramente anterior a la creación del derecho itálico. En este sentido, el límite “acrecentado” (*auctus*) que Plinio establece en el *Formio* ya no era el límite de *Liburnia* en el momento en que el naturalista escribe (*NH.*, 3, 127: *auctus Italiae terminus*). Como concluye Watkins (1988-89: 132-33), su establecimiento debe datarse el 42 a.C., cuando la Galia Cisalpina pasa a formar parte de Italia a instancias de Octaviano, que recupera y materializa una aspiración de César (*App. BC.*, 5, 3; *D. Cass.* 48, 12, 5; *Str.* 5, 1, 1). El sentido de *auctus*, que Plinio recuerda, toma sentido respecto al confín Itálico precedente en el Rubicón, ahora “acrecentado” hasta buena parte de la *Venetia* e *Istria*. Sin embargo, no será la última de las ampliaciones de Italia ni la que cobra interés para el derecho Itálico. En la época de Plinio el límite entre Italia y *Liburnia* ya lo constituía el río Arsa: *nunc finis Italiae fluvius Arsia* (*NH.*, 3, 129; *vid.* 3, 44; 3, 132), *Arsiae gens Liburnorum iungitur usque ad flumen Tytum* (*NH.*, 3, 139) y, por consiguiente del Ilírico, *a flumine Arsia ad flumen Dinium* (*NH.*, 3, 150). Es este río que atraviesa la península de Istria el que sitúa fuera de Italia, por escasos kilómetros, a las comunidades liburnas de *Albona*, *Flanona* y, en menor medida, los *Lopsi*. ¿Cuándo se estableció? Con seguridad, en época de Augusto. Para el momento en que Estrabón escribe, *Pola*, situada más allá del *Formio* pero dentro *Arsia*, ya forma parte de Italia (*Str.* 5, 1, 9). Y de hecho lo común es pensar que Estrabón tomara *Pola* como referencia del propio río *Arsia*, pues se trata del principal centro político del confín de Italia en la península y muy cercano a su desembocadura. Si seguimos la propuesta de Deggrasi (1954: 54-59) el establecimiento del *Arsia* podría datarse con precisión entre el 16-15 a.C., momento cercano a la creación de las *regiones* itálicas. También el hallazgo 2001 del *terminus* de Emona constituye un nuevo argumento a favor de la intervención de Augusto en la frontera nororiental de Italia en estos momentos (Šašel Kos, 2003)<sup>301</sup>. Que *Albona*, *Flanona* y *Lopsi* fueran municipios con *ius Italicum* cuando este privilegio suele asociarse a colonias tiene pleno sentido en tanto en cuanto la concesión del beneficio itálico buscaba equipararlos, a todos los efectos, con los municipios cercanos “más acá” del *Arsia*, de los que a priori sólo se diferenciarían por el *ager peregrino* y provincial circundante. Es decir, en origen el *ius Italicum* se ideó con el fin de ampliar selectivamente Italia hasta estos “enclaves costeros” para que funcionasen en pie de igualdad con los otros municipios romanos geográficamente itálicos, y no cabe pensar entonces que el *ius Italicum* tuviera un contenido menor, sino una asimilación plena y eficaz a las cualidades del suelo itálico. Sin duda la experiencia administrativa de los municipios de *Liburnia* sirvió de inspiración para otros problemas derivados de la desigualdad entre la ciudadanía

<sup>301</sup> La lectura del cipo junto al resto del *corpus* epigráfico de la colonia de *Emona* permite a la autora sostener su adscripción a Italia desde el siglo II a.C. hasta época alto-imperial, aunque Plinio la recoge como parte de la frontera de *Pannonia* (*NH.*, 3, 147). A mi juicio lo más probable es que Plinio bebiera de una fuente informativa previa a la reforma fronteriza augustea, datable entre 25 y el 15 a.C., tal y como sostiene Vitelli Casella (2012: 269-72). Pues las implicaciones del fragmento pliniano no son sólo geográficas, como quiere Šašel Kos (2003: 13-14), sino también administrativas: “Vuelta al septentrion está la Pannonia. Alcanza desde allí hasta el Danubio. En ella están las colonias de Emona y Siscia” (*NH.*, 3, 147).

romana itálica y provincial en el futuro, como los tempranos testimonios de *Hispania* o la colonia augustana de *Berytus* (D. 50, 15, 1, 1=Ulp. 1 *de cens.*). Así será el caso de las *deductiones* coloniales para el asiento de veteranos, muchas veces aquejados de las malas tierras recibidas en ámbito provincial (*vid.* Tac. *Ann.* I, 17), para lo cual el *ius Italicum* permitía potenciar su atractivo a la vez que sorteaba el problema de la escasez de los *fundi privati* itálicos.

## 7. 2 Relación entre *ius Italicum* e *immunitas*.

La cita de Plinio sobre estas comunidades de *Liburnia* fue la base sobre la que Mazzarino (1974) cuestionó los fundamentos de la relación entre *ius Italicum* e *immunitas*. Hasta entonces la doctrina acordaba de manera unánime que a pesar de que la *immunitas* podía concederse en una amplia gama de supuestos, el *ius Italicum* la contenía de un modo intrínseco. Retomaremos ahora la cuestión, dado el importante sedimento que esta alternativa teórica ha tenido en todos los trabajos posteriores que han tratado el derecho itálico. Sus consideraciones son filológicas, y se desprenden exclusivamente del siguiente aserto de Plinio sobre el *conventus* Escardonitano: *Ius Italicum habent eo conventu Alutae Flanates a quibus sinus nominatur Lopsi Varvarini immunesque Asseriates et ex insulis Fertinates Curricatae* (NH., 3, 139). Según el estudioso italiano, la parte *immunesque Asseriates et ex insulis Fertinates Curricatae* conforma un sujeto unitario dependiente de *Ius Italicum habent*, por lo que habría que concluir que no sólo serían los *Alutae Flanates Lopsi* y *Varvarini* quienes tuvieran derecho itálico sino las siete comunidades, y dentro de éstas las tres últimas tendrían además la *immunitas*. Es decir, la *immunitas* sería un privilegio complementario que, al menos en el tiempo de Plinio, no formaría parte consustancial del *ius Italicum*. Para consolidar esta perspectiva recurre a otro fragmento del naturalista con estructura semejante, en el que la *Tingitana*<sup>302</sup> abarca a *Gaetuli*, *Baniurae*, pero igualmente a *Autololes et Nesimi*, unidos por un -que copulativo y no adversativo, como ocurriría entre las propias comunidades de *Liburnia*. Sin embargo, al examinar otros ejemplos en Plinio puede comprobarse que tiene perfecta cabida un desarrollo adversativo, en donde -que permite delimitar dos conjuntos distintos, en concordancia, por otra parte, con la mayoría de testimonios en que se relaciona *immunitas* e *ius Italicum* dentro de una misma frase en otras fuentes. A propósito de antiguos pueblos que habían ocupado *Hispania* en el pasado Plinio recuerda dos grupos, implícitamente separados por un sentido cronológico, los más antiguos (*Hiberos et Persas et Phoenicas*) y los más recientes (*Celtasque et Poenos*)<sup>303</sup>. Entre las comunidades de la *Hispania Citerior*, aísla mediante -que los dos núcleos de *Urci* y *Barea* y parte de *Bastitania* que pertenecen a la Bética: *...Carpetani iuxta eos Vaccae Vettones et Celtiberi Arevaci oppida orae próxima Urci adscriptumque Baeticae Barea regio Bastitania mox deinde*

<sup>302</sup> Plin. NH., 5, 17: *Gaetula nunc tenent gentes Baniurae multoque validissimi Autololes et horum pars quondam Nesimi qui avolsi his propriam fecere gentem versi ad Aethiopas*

<sup>303</sup> Plin. NH., 2, 8: *In universam Hispaniam M. Varro pervenisse Hiberos et Persas et Phoenicas Celtasque et Poenos tradit.*



*Contestania...* (NH., 3, 19). A propósito del *conventus* de *Clunia*, el conjunto de arévacos lo componen *Secontia*, *Uxama*, *Segovia*, *Nova Augusta*, *Termes* y *Clunia*, separados de los otros *populi* no arévacos de la zona de costera: *Vardulique ex pradictis et Cantabri* (NH., 3, 27). En la *regio* VIII itálica aísla el dato geográfico (*saltus Galliani*) respecto a una larga relación de comunidades: ...*Otesini Padinates Regienses a Lepido Solonates, saltusque Galliani qui cognominatur Aquinates, Tennetani Veleiates...* (NH., 3, 116). Resulta definitiva la descripción de las comunidades alpinas a *Pola ad Tergestis* (Pola-Trieste) frente a los carnos y tauriscos de la siguiente franja montañosa (*iuxtaque*): *Fecusse Subocrini Catali Menonealeni iuxtaque Carnos quondam Taurisci appellati, nunc Norici* (NH., 3, 133). El caso de las comunidades liburnas parece más acorde integrarlas en este mismo sentido de contraposición, de énfasis entre situaciones administrativas distintas. De hecho, estas notas informativas se imbrican en el sentido general del fragmento, que no es tanto la descripción de *ius Italicum habent eo conventu* como defendía Mazzarino, sino la enumeración de *Liburnorum civitates XIV* inmediatamente anterior, dentro de las cuales Plinio jalona datos de naturaleza administrativa: cuatro sin estatuto definido (*Lacinienses, Stulpinos, Burnistas, Olbonenses*), cuatro con *ius Italicum* (*Alutae, Flanates, Lopsi, Varvarini*), y tres con *immunitas* (*Asseriates, Fertinates, Currictae*) de entre “los que no pesa nombrar”, para continuar finalmente con otra listado siguiendo la línea de costa.

En otros lugares donde se relaciona *ius Italicum e immunitas*, su disposición obedece también a un plano estrictamente jerárquico en el que se busca exponer distintos niveles de privilegio. Ello explica que sea precisamente en el *de censibus* donde cobra especial relevancia la discriminación este tipo de situaciones administrativas y fiscales, mientras otro tipo de referencias estatutarias de carácter jurídico-político (municipios/colonias) quedan en un segundo plano. Con una estructura muy semejante al fragmento de Plinio sobre las comunidades liburnas, el jurisprudente Paulo destaca el *ius Italicum* de algunas colonias hispanas, especificando que en la *Citerior Ilici* y *Valentia* gozan de este derecho, y “también allí” (*quoque ibidem*) *Barcino* es inmune (D. 50, 15, 8, 0=Paul. 2 *de cens.*<sup>304</sup>). En caso de que *ius Italicum* no contuviera la *immunitas* cabría esperar algún caso más en que se concedieran ambas. Por el contrario, sí contamos con ejemplos que reinciden en la idea de que el *ius Italicum* implica un carácter exento del suelo, al que se suma un contenido complementario por la asimilación de su suelo al de *Italia*. Ello explica cómo algunas comunidades que en principio son *immunes* aparecen más tarde con derecho itálico como una ampliación de sus privilegios iniciales, aparte del estrictamente fiscal. Al menos, así puede observarse de forma clara en el mencionado caso hispano de *Ilici*, *immune* en la narración de Plinio (NH., 3, 39) y de derecho Itálico en Paulo (*vid. supra*). O en la provincia de África, en donde la *immunitas* de *Carthago* se desprende de la existencia de un *defensor immunitatis perticae Carthaginiensium* que actúa en época de Trajano (AE 1963, 94), antes de su conversión en colonia de derecho itálico con

<sup>304</sup> *In Lusitania Pacenses et Emeritenses iuris Italici sunt, idem ius Valentini et Licitani habent, Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt.*

Septimio Severo y Caracalla (*D.* 50, 15, 8, 11=Paul. 2 *de cens.*; *cfr.* Cataudella, 1986). Precisamente para la época en que Plinio recoge el caso de las comunidades liburnas, sabemos por Paulo que Vespasiano otorgó la *immunitas* del *tributum capitis* a la colonia Cesarea en Judea, y que Tito lo amplió al *tributum soli* (*D.* 50, 15, 8, 7= Paul. 2 *de cens.*; *vid.* cap. 4.2.1). Sin embargo, Paulo puntualiza de manera sintomática que la *immunitas* de esta colonia no se produjo como consecuencia del derecho itálico, una aclaración que carecería de sentido si éste no incluyera entre sus beneficios la inmunidad fiscal.

La relación entre *ius Italicum* e *immunitas* está mediatizada, a mi juicio, por el hecho de que la “exención fiscal” deviene en uno y otro caso de un origen distinto. Si el *ius Italicum* implica inmunidad, lo es por su capacidad de crear una asimilación plena de la comunidad y sus suelos a la condiciones de *Italia*, por su vocación discriminatoria respecto al *ager* provincial. La inmunidad fiscal es, por tanto, sólo una consecuencia indirecta de la dejación del cobro del *tributum ex censu*, de los *portoria*<sup>305</sup> y del despliegue de la propiedad quiritaria en suelo itálico. Esta concepción la revela a mi juicio el mismo Plinio al utilizar la expresión *ius Italiae datum* (a Acci y Libisosa), un derecho de *Italia*, que sería sinónimo del *ius Italicum* empleado a propósito de las comunidades de *Liburnia*. También está presente más tarde, a pesar de que distancia entre Italia y las provincias se fuera disipando con el paso del tiempo. Por ejemplo, un episodio destacado en este sentido lo encontramos la muerte del primer emperador fuera de Italia, con Trajano el 117 d.C. en Selinunte de la provincia *Cilicia*. Un hecho inédito que rápidamente buscó subsanarse mediante la concesión inmediata del derecho itálico por escrúpulo religioso, puesto que “così se poteva affermare, che Traiano morì in suolo Italico” (Triantaphyllopoulos, 1974: 157; *vid.* Birley, 1997: 80). Del mismo modo, para la colonia augustea de *Berytus*, que poseyó *ius Italicum* quizás desde su fundación, se especifica que esa denominación se extiende a sus suelos (al igual que Laodicea): *iuris italici sunt et solum eorum* (*D.* 50, 15, 8, 3= Paul. 2 *de cens.*). Es decir, el *ius Italicum* se nos revela como algo más que un simple conjunto de privilegios o una ficción jurídica, implica la apropiación de las cualidades de *Italia* y su exportación, una “Italia fuori di Italia” (Giardina, 1994: 70). La *immunitas* como tal no se concede, deriva de esa naturaleza. De hecho, hay varios indicios que denotan cómo el derecho itálico va un paso más allá del carácter exento de las comunidades que lo recibieron. Gayo menciona el *ius Italicum* a propósito de su comentario a la *leges Iulia et Poppaea* de época de Augusto, las llamadas leyes caducarias para ajustar los matrimonios de ciudadanos romanos a las buenas costumbres y a la moral (*D.* 50, 15, 7= *Gai. ad leg. Iul. et Pap.*; *vid.* Saquete, 2000: 382). Como algunos autores han propuesto, tampoco hay razones que impidan pensar, por tanto, que los privilegios de los que gozaba *Italia* fueran también extensibles a las comunidades receptoras de *ius Italicum*, como la evasión de dar *hospitium* a tropas regulares (Nicolet, 1994) y la autonomía o *libertas* respecto a la jurisdicción del gobernador señalada comúnmente en colonias orientales con las

---

<sup>305</sup> En principio Italia también estaba exenta de los *portoria* (gravamen al movimiento de mercancías y bienes) desde el 60 a.C. con la ley Cecilia, si bien era un privilegio de la ciudadanía itálica, a la que sí tenían que hacer frente los peregrinos que comerciaban en la península según estableció César: *peregrinarum mercium portoria instituit* (Suet. *Caes* 43).

estatuas de Marsyas<sup>306</sup> (Serv. *Ad Aen.* 4, 58; Macrobian. *Sat.* 3, 20; Paoli, 1938; Habetzeder, 2010). También algunos de los derechos privados circunscritos a *Italia*, como la *lex Furia de sponsu*, la *exceptio annalis Italici contractus* o la *excusatio quattor liberorum* (vid. Triantaphyllopoulos, 1974: 156-57; Nicolet, 1995: 391-94). Una información determinante a la hora de considerar la relación entre *ius Italicum* e *immunitas* que hemos defendido proviene de Agenio Urbico, quien refiere los tipos de colonias que pueden tomar asiento en *ager* provincial: *At si ad provincias respiciamus, habent agros colonici quidem iuris habent et colonicos qui sunt immunes, habent et colonicos stipendiarios* (Th. 23, 8-13= La. 62, 23-27=; vid. González Román, 1997: 156). Es decir, la contraposición se establece con respecto al carácter *stipendiario* del suelo, que se hace extensible al rango colonial a menos que deje de serlo, por ser itálico (recuérdese el caso de *Berytus*), o por concederse la inmunidad. Recibir simplemente el rango colonial no cambia las propiedades jurídicas del suelo, por el que debe igualmente tributar. Ello explicaría que Ulpiano buscara reflejar en *de censibus* el carácter estipendiario de la Ptolemaida mediante su alusión a que sólo tuviera el título de colonia (*nihil praeter nomen coloniae habet*), en contraste con la colonia con derecho itálico de Laodicea (vid. D. 50, 15, 1, 3=Ulp. 1 *de cens.*).

Mientras el *ius Italicum* parece un privilegio bastante restringido, pues requiere al menos la ciudadanía romana colectiva para poder ejercitarse, la *immunitas* podía concederse de manera aislada, y es normal encontrarla en una amplia gama de supuestos. En principio la comunidad con *immunitas* estaría sometida a todo lo que implica esta bajo el *dominium* imperial con la excepción del pago de los impuestos prediales (sin mencionar otros tipos de inmunidad de carácter individual). Es semejante por ejemplo a la concesiones de *libertas* que, por mucho que formara parte intrínseca del *ius Italicum* (González Román, 1994: 137), podía ser concedida aisladamente sin menoscabar la naturaleza provincial de la comunidad, como ocurrió con numerosas *poleis* griegas durante el gobierno de Nerón (Paus. 7, 17, 3-4) y seguramente se esconda detrás de un oscuro de pasaje de Estrabón, según el cual la colonia latina de *Nemausus* no estaba sometida al edicto del gobernador (Str. 4, 1, 12). Las concesiones de *immunitas* sólo cobran sentido dentro de la amplia gradación de privilegios del que el imperialismo romano dispuso para favorecer selectivamente a comunidades sin necesidad siquiera de absorberles en su ciudadanía. Es por esta razón que podía concederse a perpetuidad a diferentes entidades comunitarias, como nos las encontramos en las colonias (eg. Plin. *NH.*, 3, 19; *CIL* II, 1663) pero también a comunidades peregrinas (vid. Ulp. 2 *de cens.*=D. 50, 15, 4, 3). Con ello la comunidad perdía el carácter estipendiario del suelo, tal y como aparece en el anterior pasaje de Frontino a propósito de las colonias, y se pone de relieve en Plinio, cuando menciona algunos *oppida immunes* (eg. Plin. *NH.*, 4, 7) que deben interpretarse en oposición a los *oppida stipendiaria*. Es decir, se trata de comunidades sin un estatuto definido mediante

---

<sup>306</sup> La importancia de este símbolo asociado al *ius Italicum* ha tendido a minimizarse con el paso del tiempo, en el caso de *Hispania* no se documenta en ningún tipo de colonia.

el empleo aséptico de *oppidum* y cuya seña distintiva es la pérdida de su carácter estipendiario.

En otro orden, la *immunitas* también podía servir como un instrumento eficaz de injerencia en el seno de las *civitates*, potenciando según las circunstancias a determinadas entidades e individuos que podían eludir algunas cargas sin implicar cambio estatutario alguno de su comunidad. La construcción de este tipo de desigualdades internas facilitaría en gran medida la adhesión y fidelidad de determinados grupos sociales con capacidad de control sobre las capas subalternas. Dos claros ejemplos de este tipo son las *immunitates* otorgadas en época de Augusto a dos *castella*. El primero es el que conocemos por una inscripción del siglo III en el que Augusto habría confirmado la *immunitas* y los *finis* del *castellum Thudedense* que ya disfrutaban desde los tiempos del rey Juba antes de entregar el reino el 25 a.C., y finalmente recuperan con Septimio Severo y Caracalla<sup>307</sup>. Es complicado presuponer que entre ambos reinados el término *castellum* mantenga una naturaleza estática, y no determinados usos del “pasado” con fines políticos. Lo que sí parece claro, al menos para la concesión de Augusto, es el papel de la *immunitas* en la reproducción del orden social vigente, de integrar sin promover cambios abruptos en las relaciones sociales, siempre y cuando la realidad social heredada mantuviera una predisposición colaborativa. También en el contexto de integración post-conquista procede la *immunitas omnium rerum* otorgada a los *castellani Paemeiobrigenses* del edicto de El Bierzo (15 a.C.), en donde el trato de privilegio deriva de la obediencia a las nuevas obligaciones administrativas (*permanisse in officio*) a las que otros no habían dado una respuesta satisfactoria (*desciscentibus ceteris*). No es verosímil que la *immunitas* sea el premio de un fenómeno de rebelión militar en la que sólo los *Paemeiobrigenses* habrían permanecido leales como abordaremos más adelante (Wulff, 2012: 507-15; *vid.* cap. 11.2). Evidentemente el caso de los *castellani Paemeiobrigenses* difiere del *c. Thudedense* en tanto en cuanto no parte de una realidad administrativa supralocal antes de su integración en la órbita romana. Sin embargo, ambas concesiones son coherentes con el uso de la *immunitas* dentro del proceso de construcción de la desigualdad y de conformación de élites sociales útiles en el interior de la *civitas*, ya sea para su creación (como lo serían los *c. Paemeiobrigenses* respecto a otros *castellani* de la *civitas Susarrorum*), como para su consolidación, (los *castellani Thudedenses* frente a otros de la *pertica* de Tipasa).

La cuestión principal en la *immunitas* concedida a entidades interiores de una *civitas*, tomando el ejemplo astur de los *Paemeiobrigenses*, es determinar hacia qué/quién se hace efectiva esa inmunidad, hacia el Estado romano o hacia la propia comunidad. Dado que el sujeto fiscal es la *civitas* en su conjunto, en principio hay dos posibilidades que cuentan con argumentos a favor y en contra:

<sup>307</sup> AE 1985, 972: *Imp(erato) Caes(ar) L(ucius) Sept(imius) Severtus Pius / Pert(inax) Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Part(hibus) max(imus) / pont(ifex) max(imus) p(ater) p(atriciae) et Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aure(lius) Antoninus Pius Aug(ustus) Arab(icus) / Adiab(enicus) Part(hicus) max(imus) p(ater) p(atriciae) [[et P(ublius) Sept(imius) Geta]] castellanis Thude(densibus) fines et immunitatem / a rege Iuba per confirmatione[m]? / divi Aug(usti) concessos post / [m]ultis saecu(lis) felicissimis temporibus / sui divino iudicio restituerunt / Thude(de)nses determinationes se/cuti términos posuerunt / et ded(icaverunt) Fel(iter).*

1. Que los “colectivos” inmunes lo sean respecto al Estado Romano (*fiscus* /*aerarium*). En este caso, la *immunitas* de un *castellum* implicaría la aminoración del montante global de la *civitas*, que debería respetar el privilegio otorgado a esa minoría social. Es decir, en este caso el *castellum Paemeiobrigense* debería responder al resto de *munera* cívicos de la *civitas* de los *Susarri*, a excepción de la recolecta para satisfacer el *tributum* debido a Roma por el disfrute de sus suelos, que en este caso serían los *agri et fines* que poseían en tiempos de L. Sestio Quirinal. Esta posibilidad ha sido defendida por la investigadora E. García al observar que la *immunitas omnium rerum* (o *aneisphoria panton ton hyparhonton*) suele concederse separadamente a las cargas locales en otros documentos y contextos (García, 2000a: 114-18). Por ejemplo, en la epístola de Octaviano a Seleuco Navarca del 41 a.C, en donde se distingue de la *vacatio munera publica* (FIRA I, 55). También en el edicto de Octaviano *de triunviri privilegiis veteranorum* la contiene separadamente a la exención de los *munera* públicos y del servicio militar (FIRA I, 56). En el caso de los veteranos, posteriormente Ulpiano también reincide en que la *immunitas* de los licenciados es válida en su *civitas* o en la que habiten en calidad de *incolae*, sin embargo no parecen exentos a los *vectigalia* u otras *patrimoniarum onera*<sup>308</sup>, y tampoco a *munera* como el mantenimiento de las vías que pasasen por sus posesiones<sup>309</sup>. En contra de esta opción nos remite indirectamente la observación de Hernando (2002), según la cual posteriormente los *castellani Aliobrigiaecini* que en el edicto son *Gigurri*, se inscriben después como parte de la *civitas* de los *Susarri* en la *tabula* de Fogoso de El Caurel: ...*Tillegus Ambati f(ilius) Susarrus / O Aliobrigiaeco* (27 d.C.; *HEp* 8, 334). El cambio de *civitas* sería una consecuencia posterior de la disposición del edicto, por la cual los *Aliobrigiaecini* hubieron de subsanar el vacío contributivo generado por la *immunitas Paemeiobrigense* entre los *Susarri*, siendo finalmente absorbidos entre ellos como aparecen en El Caurel. Ante esto surgen dos preguntas difíciles de responder si aceptamos la interpretación de Hernando: ¿Si la *immunitas* de los *castellani Paemeiobrigenses* no afecta a sus *munera* con los *Susarri*, por qué la *restitutio*<sup>310</sup> de los *Aliobrigiaecini* en su lugar también lleva aparejada contribuir a ellos (*omni munere fungi cum Susarris*)? ¿Si la *immunitas* sólo supone una pérdida de ingresos para el Estado, por qué se necesita implicar a otro *castellum* de una *civitas* distinta cuando sería más sencillo ajustar el tributo global impuesto a los *Susarri*?
2. Que los colectivos *immunes* lo sean con respecto a su comunidad. Es decir, la *immunitas* no se concede en detrimento de los ingresos del *fiscus*, sino que supone una

<sup>308</sup> D. 49, 18, 2, 0-1= Ulp. 3 *opin.*: “La inmunidad que se concede a los licenciados honrosamente del ejército vale también para las ciudades en que vivan como residentes, y no se extingue por el hecho de que acepten voluntariamente alguna magistratura o cargo. Los impuestos y contribuciones ordinarias deben pagarlos todos (*Honeste sacramento solutis data immunitas etiam in eis civitatibus apud quas incolae sunt, valet: nec labefactatur, si quis eorum voluntate sua honorem aut munus susceperit. Vectigalia et patrimoniarum onera sollemnia omnes sustinere oportet*)”.

<sup>309</sup> D. 49, 18, 4.

<sup>310</sup> Entiendo el sentido de la *restitutio* en el sentido de responder de las obligaciones, de ocupar un “vacío” (vid. López Barja, 2010).

injerencia de Roma en el reparto de la carga comunitaria impuesta a la *civitas*. La *immunitas* de un *castellum* provoca, en la práctica, un aumento de la presión fiscal para el resto, que ahora cuenta con menos fuentes de ingresos para hacer frente al mismo *tributum*. A mi juicio esta es la razón por la que la *immunitas* aparece en diversas ocasiones asociada a los *munera*, pues entre las cargas locales una parte importante va destinada a la satisfacción del *tributum* de Roma. En el caso *Paemeiobrigense*, esta interpretación se ajusta mejor al objetivo del edicto: castigar al conjunto de los *Susarri* a excepción de los *Paemeiobrigenses*. Cosa distinta es que, a efectos de eficacia, algunos de los *munera* que se habrían tornado inasumibles para los *Susarri* requirieran un aporte externo de los *Aliobrigiaecini* para poder llevarlos a buen término a petición de la propia *civitas* (*volente ipsa civitate*). No debe olvidarse que los *munera*, aun siendo una carga teóricamente local, pueden dirigirse a cumplir intereses imperialistas como ya se ha visto a propósito del mantenimiento de la red viaria o en el trabajo en las explotaciones mineras más tarde, de ahí que no fuera extraño que gobernadores y emperadores se involucraran en el buen funcionamiento de los *munera* locales (*vid.* Pereira, 2011: 111-22). El caso de la *restitutio* del edicto tiene perfecta cabida entre las competencias que Ulpiano asigna más tarde a los gobernadores provinciales, que deben velar porque los *munera* sean equitativos y no provoquen debilitamientos contraproducentes de las *rei Publicae*<sup>311</sup>. La ambigüedad entre *immunitas* y *munera* sólo tiene sentido dentro de la política injerencista de Roma, generadora de desigualdades útiles, en el seno de las comunidades. El *sc.* de *Asclepiade Clazomenio sociisque*, bilingüe y de datación imprecisa (ss. I a.C./ I d.C. *vid.* Raggi, 2001), identifica exclusivamente *immunitas omnium rerum* con la exención de todas las cargas y liturgias locales que Aclepiades, Polystratos y Meniskos tenían en sus *poleis* de *Asia* e *Eubea*. De hecho entre ellas no se cuenta precisamente la exención fiscal, que requiere una disposición complementaria (*immunes omnium rerum et sine tributa sint*), y que se suma a otros privilegios económicos como la posibilidad de evadirse de las contribuciones que solicitaran sus ciudades en caso de endeudamiento (*vid.* l. 15-16). En líneas semejantes del III edicto de Augusto *ad Cyrenenses* del 6 a.C. (*FIRA* 68, l. 56-62) puede extraerse que los ciudadanos romanos a los que el *princeps* o el senado les concediera la *immunitas* quedaban liberados de los *munera* en sus comunidades. Se trata aquí de una inmunidad que surte efecto también sobre las cargas locales sobre la propiedad desde el momento que accedieran a la ciudadanía romana (pero no después, lo que crearía el riesgo de una proliferación descontrolada de propiedad immune por los *cives Romani*). Es decir, una *immunitas* conceptualmente afín al caso *Paemeiobrigense*, en donde la *immunitas* para un colectivo (*castellani* o ciudadanos romanos respectivamente) se ejercita mediante la

<sup>311</sup> D. 50, 4, 3, 15 = Ulp. 2 *opin.*: “El gobernador provincial debe velar para que en las comunidades se impongan los *munera* y los *honores* equitativamente, por turno, según edades y dignidades y de acuerdo con la gradación establecida desde antiguo para los *munera* y los *honores*, para que no se cargue indiscriminadamente y con frecuencia a las mismas personas y la ciudad pierda fuerzas (*Praeses provinciae provideat munera et honores in civitativus aequaliter per vices secundum aetates et dignitates, ut gradus munerum honorumque qui antiquitus statuti sunt, iniungi, ne sine discrimine et frequenter isdem oppressis simul viris et viribus res publicae destituantur*)”.

exención del *tributum soli* por la vía local, sin cambios en el montante global al que está sometido el conjunto.

Como breve conclusión a este apartado, puede decirse que la *immunitas* y el *ius Italicum* son instrumentos netamente diferenciados, tanto en la finalidad que pretenden como en su propia naturaleza. El *ius Italicum* contiene la *immunitas* desde su mismo origen, pero ni se reduce a ésta, ni es un complemento de época Flavia. Su naturaleza es producto de la plena asimilación al suelo itálico desde el gobierno de Augusto, momento en que toma sentido por la configuración del *ager provincialis*, con el que se establecerá en clara contraposición.

### 7.3 El *ius Italicum* personal.

Desde la perspectiva que hemos defendido en las páginas anteriores, la dimensión personal del *ius Italicum* sólo cobra sentido en tanto que el individuo es parte integrante de una comunidad de derecho romano de la que deviene los beneficios contemplados en su *status* comunitario. Tanto en Plinio como en Ulpiano, Paulo, y Celso (*D.* 50, 15, 1-8), el *ius Italicum* es un *beneficium* colectivo, de modo que si sus ciudadanos pueden denominarse *coloni Romani iuris Italici* lo son gracias a su *origo*, y no a causa de un privilegio personal cómo si ocurre con la *immunitas*<sup>312</sup> (*vid supra*). La causa de ello a priori es sencilla: el uso del *ius civile* a semejanza del practicado en Italia se produce sin embargo en comunidades geográficamente provinciales, lo que hace que su ejercicio quede relegado a un plano fundamentalmente local, determinado y limitado por ese “entorno jurídico” provincial.

En este punto surge el problema de algunas alusiones desde las que se ha defendido la posibilidad de una variante estrictamente personal del *ius Italicum*, sin necesidad de que su comunidad ostente este *beneficium*. La teoría inicial fue planteada por Triantaphyllopoulos (1963; 1974) a partir de una inscripción fragmentaria hallada en *Didyma* en Asia Menor, junto a la *via Sacra* (ha. s. II d.C.) y dedicada a *Iulia*, sacerdotisa del templo de Ártemis posiblemente en Mileto o en la misma *Didyma*. Aquí la cuestión estriba en que su madre *Paula* [---] *Claudia* se declara *Ιταλικον δικαίο[v]* (l. 5) y, aunque en principio no hay razones que impidan reconocer esta expresión como el equivalente en griego del *ius Italicum* (pues bajo esta misma apariencia aparece también en el *Index titulorum Basilicorum codici Coislino* 151 *praefixus*), hay distintas posibilidades de comprender esta breve alusión aparte del estrictamente personal. De hecho se trata del único testimonio en este sentido para toda la parte oriental del Imperio, toda vez la propuesta de reconstrucción de Welles del *P. Dura* 45, como [νόμοι]ς Ειταλικούς (l. 6), quizás de un colono de *Dura Eutopos* (Mesopotamia), es una hipótesis bastante insegura. Aparte de su carácter excepcional, es una inscripción privada que puede contener usos del lenguaje no necesariamente escrupulosos desde el

<sup>312</sup> eg. AE 1975, 872 (Bir Halima, prov. Africa): *P(ublio) Petronio Victorico / laudatissimo viro ab splen/didissimo ordine col(oniae) Aurel(iae) Ant(oniiniana) Ka/rt(haginis) et municipii Aur(eli) Ant(oniniani) Abbir(itani) Mai(oris) im/munitate consecuto* [---]

punto de vista técnico. La función social de la inscripción, visibilizar y exaltar el estatus social de la madre de la dedicada, puede enmascarar otras realidades por las licencias y expresiones hiperbólicas propias de toda producción de carácter honorífico. Prueba de ello es que las fuentes jurídicas nunca mencionen esta modalidad personal, que en apariencia sólo puede ser producto de la pertenencia a una comunidad ciudadana de la que emanan sus privilegios. Ulpiano, por ejemplo, es muy claro al señalar la relación entre el derecho itálico y su *origo* en Tiro: *Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria Phoenice splendidissima tyriorum colonia, unde mihi origo est* (D. 50, 15, 1, 0= Ulp. 1 *de cens.*). En nuestro caso carecemos de fuentes complementarias que permitan considerar que Didyma o Mileto ostentaron en algún momento el derecho Itálico, si bien tampoco puede confirmarse que *Paula Claudia* tuviera su *origo* en ninguna de estas dos comunidades, pues no lo menciona. Paula Claudia pudo tener un origen externo, ya sea por estar censada en Italia o por tener su *origo* en una comunidad con *ius Italicum* (Malavolta, 1987: 67). En principio también parece improbable pensar que una mujer recibiera un privilegio personal de este tipo cuando ni si siquiera se han documentado concesiones personales de *immunitas* a mujeres, sin duda un privilegio mucho más laxo. Por otro lado su hija *Iulia* no parece tenerlo, o al menos no lo menciona, quizá precisamente por una *mutatio civitatis* tras la pérdida de la *origo* familiar e integrarse en *Didyma*, donde ejerce sus labores sacerdotales. Son, en cualquier caso, puras conjeturas ante la falta de información. Sea como fuere, las dudas y complicaciones que conlleva plantear un *ius Italicum* personal llevan al propio Triantaphyllopoulos a considerarlo un reconocimiento fundamentalmente honorífico y consolatorio, animado por la brecha existente entre la ciudadanía romana itálica y provincial. Evidentemente, si la potencialidad jurídica que teóricamente proporciona no entra en consonancia con el *status* comunitario, tener *ius Italicum* en ámbito provincial se convierte en algo vacío o incompleto. La posibilidad de transmitir o adquirir propiedad quiritaria y realizar el acto de la *mancipatio*, por ejemplo, no puede eludir las cualidades del “objeto” *nec Mancipi* de las provincias (Gai. *Inst.*, 2, 27), no puede beneficiarse de las garantías de la *auctoritas* de la propiedad quiritaria, o de los privilegios fiscales, cosa que sí es posible gracias a la proyección territorial del derecho itálico. Es decir, aun aceptando un *ius Italicum* que sólo modifique el *status* personal, éste quedaría relegado, en la práctica local, a una cuestión de estatus social.

Unas conclusiones semejantes pueden extraerse a propósito de dos testimonios oscuros de la *Historia Augusta* correspondientes a la *Tarraconense*, en donde J. Gagé (1969), recogiendo la propuesta de Triantaphyllopoulos, consideró una forma de *ius Italicum* personal, estela que han seguido otros autores posteriormente (Cautadella, 1987; González, 1994: 131-32; Bowman, Gamsey y Rathbone, 2000; Ruiz de Arbulo, 2014: 134-36). En el primero, del gobierno de Adriano, se convocó una asamblea (*conventus*) en Tarraco a la que fueron llamados todos los colonos de *Hispania* para el alistamiento (*dilectumque ioculariter*), a lo que se oponen entre burlas los llamados “*Italici*”,



mientras los *ceteri* parece que aceptaron con reticencias<sup>313</sup>. Por otro lado, el segundo pasaje menciona una *Italica adlectio* con Marco Aurelio que ha sido también relacionada con una posible alusión a este tipo de promoción personal al derecho itálico<sup>314</sup>.

El primer pasaje es sencillo de rebatir, pues no hay nada que impida pensar en que fueran algunas colonias hispanas con *ius Italicum* las que se opusieran al *dilectus* frente al resto no privilegiado (*ceteri*). No hay ningún indicio que permita suponer este carácter personal que le otorga J. Gagé, simplemente basado en la relación entre ambos pasajes. Además, tampoco puede descartarse que pudieran ser de nuevo los colonos de Itálica, los *italicenses*, quienes se escondieran detrás de esta vaga alusión de *italici* (Syme, 1964). Ello explicaría que pudieran ser agrupados entre los colonos de *Hispania* al que, *strictu sensu*, no pertenecen las colonias receptoras del derecho itálico salvo a efectos geográficos. Ambas opciones explican, en cualquier caso, las reservas a participar en un *conventus* con apariencia extraordinaria, por ser beneficiarios de cierta autonomía y privilegios en el *dilectus* (gracias al *ius Italicum*) o, por ser llamados a un *conventus* ajeno al de su propia provincia (*italicenses*).

El segundo pasaje entraña más problemas a la hora de interpretar esta *italica adlectio*, que J. Gagé conecta con el *dilectus* de Adriano y ciertas inscripciones para defender su teoría del derecho itálico personal, cuyos privilegios fiscales individuales habrían menoscabado el empobrecimiento de los tesoros públicos locales de algunas comunidades locales. Semejante fenómeno, que a decir de los *scriptores* de la *Historia Augusta* habría dejado exhaustas a las provincias hispanas (*Hispanis exhaustis*) si se toma en tal sentido, contrasta sin embargo con apenas dos indicios de carácter epigráfico que recogen una *italica adlectio* personal de manera explícita en *Hispania*. Antes de entrar en ellos, cabe recordar que el *ius Italicum* es un beneficio que se otorga (las fuentes jurídicas mencionan *dare, concedere, facere*), y a priori resulta extraña la alusión a una *adlectio* que, en principio, se utiliza para designar la adscripción de personas a un *ordo* por designación o elección. Si tenemos en cuenta el resto de inscripciones hispanas que mencionan una *adlectio* (o *allectus*) todas ellas tienen este mismo significado de coptación político-institucional, como las *adlectiones inter praetorios* (Tarraco: *CIL* II, 4114 ; Liria, Valencia: *CIL* II, 3788; León: *CIL* II, 2666, León), *inter tribunicios* (Tarraco: *CIL* II, 4114; 4126; 4130; ) *in decurias* (Tarraco: *CIL* II, 4213; 4223; 4263; 6094; 6096; *RIT* 261; *HEp* 15, 341; Sevilla: *CIL* II, 1180; Denia: *CIL* II, 3584), *inter quinquennales* (Tarraco: *RIT* 342), *ad numerum decurionum* (Tarraco: *AE* 1961, 330; Isona, Lérida: *CIL* II, 4463), etc. Así aparece también en otro punto de la *Historia Augusta*, sobre la vida de Pertinax a propósito de los abusos en las

<sup>313</sup> HA A. 12, 4: Convocó a todos los colonos de *Hispania* a una asamblea en Tarragona, y al ver que los *Italicis* rechazaban el alistamiento entre mofas, como textualmente afirma Mario Máximo, y que el resto de colonos lo hacían con fuertes amenazas, actuó con prudencia y cautela (*Omnibus Hispanis Tarraconem in conventum vocatis, dilectumque ioculariter, ut verba ipsa ponit Marius Maximus, retractantibus Italicis vehementissime ceteris prudenter et caute consuluit*)”.

<sup>314</sup> HA, MA. 11, 7: “Se preocupó de los jueces que había nombrado para Italia, siguiendo el ejemplo de Adriano, quien había encargado ejercer la justicia a personas que ostentaban el rango consular. Veló con discreción por las provincias de *Hispania* que estaban exhaustas por las levas de colonos Itálicos,... contraviniendo las disposiciones <de Adriano> y Trajano (*Hispanis exhaustis Italica adlectione contra Traiani quoque praecepta verecunde consuluit*)”.

*adlectiones* de pretores (HA P. 6, 10). Si repasamos las dos inscripciones en las que se apoya la tesis de J. Gagé sigue teniendo perfecta cabida una interpretación de este tipo sin inferir rasgo alguno de *ius Italicum* personal.

La primera atañe a uno de los *flamines* provinciales que operan en *Tarraco*, en este caso procedente del municipio romano de *Tritium Magallum*, donde completó el *cursus honorum* local y seguramente pertenecería a una familia relacionada con el pujante comercio y producción de su cerámica (Espinosa, 1988). Para este individuo se menciona la enigmática *allecto Italicum*, que significaría una promoción personal al derecho itálico para Gagé (CIL II, 4227<sup>315</sup>). A mi juicio, el autor no tiene en cuenta otros ejemplos del conjunto epigráfico de *Tarraco*, que cuentan con ejemplos muy semejantes al que ahora nos ocupa. Me refiero concretamente a los numerosos *flamines* de diverso origen en la *Tarraconense* que, también en el siglo II, parecen seguir un *cursus honorum* análogo, erigiéndose al flaminado provincial tras desempeñar sus honores locales y, lo más importante, declarándose finalmente *adlecti inter V decurias iudicum Romae*<sup>316</sup>. Un camino semejante puede describir la vaga referencia de *allecto Italicum* como una forma de expresión, quizás poco ortodoxa, sobre la proyección del individuo en el *cursus honorum* imperial y su “elección para Italia” a la manera que estos jueces las hubieron de desempeñar en las V decurias de jueces de Roma. Esta interpretación no sólo se imbrica mejor en la terminología, que refiere la elección a un cargo (*allectus*), más tarde depuesto por el emperador<sup>317</sup> (*excusatus*), también permite una reinterpretación del fragmento de la *Historia Augusta*, que menciona la *Italica adlectio* justo a continuación del velo de M. Aurelio por “los jueces que había nombrado para Italia” (*dati iuridicis Italiae*; HA, MA. 11, 7). Un hecho continuado, a decir por la gran concentración de estas *adlectiones* en Tarraco a lo largo de todo el siglo II, que habría podido dejar desprovisto, y en cierto modo “exhausto”, al *concilium*

<sup>315</sup> CIL II, 4227: Tito Mamilio / Silonis fil(io) Quir(ina) / Praesenti / Tritiens(i) Magal(lensi) / omnib(us) honorib(us) / in r(e) p(ublica) sua functo / decuriali **allecto Italicum** ex/cusato a divo / Pio flami ni p(rovincia) H(ispaniae) c(terioris) / p(rovincia) H(ispania) c(terior).

<sup>316</sup> Entre los ejemplos de Tarraco se cuentan tres procedentes del Noroeste: CIL II, 4223: L(ucio) Iunio Bl[andi(?)] / fil(io) Quirin[a] / Maroni Aem[il(io)] / Paterno Lancien[s(i)] / omnib(us) in re publica / sua honorib(us) functo / Ilvir(o) bis sacerdoti Rom(ae) et / Aug(usti) convent(us) Asturum / **adlecto** in quinq(ue) decuri[as] / le[gitum(e) Romae iudicantium] / flami ni Augustali p(rovincia) H(ispaniae) c(terioris) / p(rovincia) H(ispania) c(terior) y CIL II, 6094: P(rovincia) H(ispania) c(terior) / L(ucio) Fabio L(uci) fil(io) / Quir(ina) Siloni / Brigiaecino / Ilviro sacerdoti / Rom(ae) et Aug(usti) / convent(us) Asturum / **adlecto** in dec(urias) V / iud(icum) Rom(ae) / flami ni p(rovincia) H(ispaniae) c(terioris); HEp 15, 341: M(arco) Iulio Qu[ir(ina) tribu] Se[reniano] Ado[pti]vo ex l(conventu) Lucen[sium] / omnib(us) honorib(us) / in re publi[ca] sua / functo sa[cerdoti] / Romae et Au[g(usti)] l(conventus) Lu[c]e[n]s[iu]m Aris [Aug(ustanis) **ad]lecto** in quin[que] decuri(as) eq[ui]tum] / Romanor(um) a [Divo] / Commod[o] fl[amini] p(rovincia) H(ispaniae) C(terioris)] p(rovincia) H(ispania) C(terior) patrono m[erentissimo]. El resto: CIL II, 6096: [P(rovincia) H(ispania)] c(terior) / Q(uinto) Herennio / Q(uinti) fil(io) Aniensi / Aquilae / omnib(us) honorib(us) / in re p(ublica) sua functo / inter decurias / iudicum Romae / **adlecto** flami ni p(rovincia) H(ispaniae) c(terioris); RIT 261: [- - -]SCE[- - - / G]al(eria) Avito / [Av]obr[i]gensi / [om]nib(us) [h]onorib(us) / [in r(e)] pub[li]ca sua / [fun]cto [**ad]lecto** in / [quin]que [de]curias / [leg]itum[e] Romae iud(icum) / fla]mini A[u]g(ustorum) p(rovincia) H(ispaniae) c(terioris) / p(rovincia) H(ispania) c(terior); CIL II, 4213: P(rovincia) H(ispania) [c(terior)] / Q(uinto) Fab[io] - - - / Gal(eria) M[- - -] / Saet[abitano] / omni[b(us) honorib(us)] / in re p(ublica) s[ua] functo / equo p(ublico) d[on]ato ab Imp(eratore)] / Hadrian[o] Aug(usto) **allecto** / in quinq(ue) d[ecur]ias / ab eodem p[raef]ecto coh[or]tis primae [- - -] / flam(ini) [p(rovincia) H(ispaniae) c(terioris)]

<sup>317</sup> Esta alusión, en la que se involucra el propio Antonino Pío, también nos aleja de una *adlectio* al *ordo* de *Italica*.

*provinciae* como pudo ocurrir en otras provincias hispanas. Y, como refiere el fragmento de la *Historia Antigua*, por provinciales sin rango consular contra las prohibiciones establecidas por Adriano unas décadas atrás.

La otra inscripción, procedente de Santiago de Cacém (Setúbal), menciona sucintamente a *C. Agrius Rufus* como *adlectus Italicensi*, pero no hay ninguna información sobre su *cursus honorum* por lo que, a falta de datos, lo más probable es que no tuviera la proyección política del caso anterior, aunque sí la suficiente para ser inmortalizado en una inscripción honorífica. Ello hace un tanto inverosímil no ya la recepción del *ius Italicum* personal, sino imbricar este caso en el fenómeno mencionado de *Tarraco*. Lo más natural es recurrir de nuevo a su probable relación con la *colonia de Italica*, de la que sería *adlectus* a la manera que, por ejemplo, *L. Licinius Montanus* es *adlectus* al *ordo malacitanus* a pesar de tener una *origo* externa<sup>318</sup> (*origine Sarapioni*), así como el gralliense *M. Sempronius Capito*<sup>319</sup> y el damanitano *M. Valerius Capellianus* se dicen *adlectus* al *ordo Caesaraugustanus*<sup>320</sup>.

En síntesis, hoy por hoy no existen datos lo suficientemente explícitos para tener en consideración la variante personal del *ius Italicum*. Una variante de la que no sólo se desconoce su propia naturaleza y funcionamiento práctico, sino que se nos revela como algo incongruente con lo poco que, por otra parte, sabemos de este *beneficium*, a todas luces, comunitario. Por precaución, sólo cuando contemos con nuevos testimonios e indicios sobre la cuestión en el futuro, quizás pueda entonces recuperarse esta conjetura y convertirse en hipótesis.

---

<sup>318</sup> AE 1996, 883 (Córdoba): *L(ucio) Licinio L(uci) f(ilio) Gal(eria) Montano / Sarapioni origine Malacitano / adlecto Corduben(s)i flamini / divorum Augustorum / provinciae Baeticae splendi/dissimus ordo Malacitanorum / [---]*

<sup>319</sup> CIL II, 4244 (Tarragona): *M(arco) Sempr(onio) M(arci) filio / Quir(ina) Capitoni / Gralliensi adlecto / in ordine Caesaraug(ustano) / omnib(us) honorib(us) / in utraq(ue) r(e) p(ublica) s(ua) f(uncto) / flam(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / p(rovincia) H(ispania) c(iterior)*.

<sup>320</sup> CIL II, 4249, (Tarragona): *M(arco) Valerio / M(arci) fil(io) Gal(eria) / Aniensi / Capelliano / Damanitano adlec/to in coloniam / Caesaraugustanam / ex benefic(io) divi Hadriani / omnib(us) honorib(us) in utraq(ue) / re p(ublica) funct(o) flam(ini) Rom(ae) divor(um) et Aug(ustorum) / p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris)*

## 8. El suelo provincial

El suelo provincial es, en el fondo, un concepto ideológico. Sus cualidades jurídicas y administrativas son el producto de motivaciones políticas que buscan escindir a las nuevas sociedades que pasan a formar parte del Imperio, de aquellas que por su trayectoria, merecen otro nivel de privilegio como es la propia Italia. En este sentido, el *ius Italicum* o la *immunitas* proporcionan esa excepcionalidad necesaria que, selectiva y discrecionalmente, permita suavizar las duras condiciones que implica el asiento sobre suelo provincial. La jerarquización de la sociedad y del territorio desde el punto de vista jurídico y administrativo es, por tanto, un condicionante fundamental a la hora de comprender el proceso de transformación social, pues no sólo lo impulsa en una determinada dirección, también le sirve de sanción política e institucional. En este sentido, el Noroeste hispano ha sido analizado muchas veces desde el prisma de la excepcionalidad y el aislamiento, dentro del discurso civilizatorio de la romanización que, o bien retrasa una integración efectiva en época Flavia o dibuja en él soluciones administrativas excepcionales para combatir su ruralidad. Sus aparentes “peculiaridades” tienen sin embargo perfecta cabida dentro de este marco general de dominación cuyos fundamentos, tributación y descentralización administrativa, proporcionan las condiciones esenciales del proceso de cambio desde Augusto, aunque el tránsito no se resolviese por la vía de la urbanización o de la romanización tal y como se ha entendido tradicionalmente (*vid.* Sastre, Rodríguez y Currás, ep.).

### 8. 1 La ambigüedad del suelo provincial: un espacio “en negativo” respecto a Italia.

La naturaleza del suelo provincial ha sido objeto de una amplia atención historiográfica a la que ya hemos prestado atención anteriormente (cap. 2) y que ahora es preciso retomar de manera sucinta para fijar unos presupuestos de partida. Cabe advertir que las principales fuentes de información para el Alto Imperio, tanto jurídicas como de los tratados de agrimensura, piensan fundamentalmente en *Italia* por ser una unidad de funcionamiento que proporciona una realidad coherente entre la ciudadanía y su suelo. Al fin y al cabo, la finalidad es describir un modelo ideal de funcionamiento, y obras como las de Gayo sólo cobran sentido desde una finalidad didáctica que necesariamente las simplifica. A pesar de ello, estas fuentes arrojan algunos datos sobre la naturaleza del suelo provincial que deben tenerse en cuenta, aunque su escasez nos impida en ocasiones matizar una evolución clara con el paso del tiempo.

Si nos atenemos a éstas de manera global, cabe resaltar que el *ager provincialis* se nos presenta siempre como un espacio profundamente ambiguo y, en cierta medida, oscuro. En él, aparentemente, no cobra importancia la definición rigurosa de sus cualidades intrínsecas, de su naturaleza, como correspondería a un *ager provincialis* con rasgos propios. Todo lo contrario, las fuentes reflejan un suelo provincial articulado en negativo respecto al *solum Italicum*, en el los procedimientos o negocios jurídicos que

parecen serle inherentes, lo son sólo por representar limitaciones en el ejercicio del *ius civile*. Gayo es muy claro en este sentido de oposición funcional: *placet plerisque solum religiosum non fieri* (Inst., 2, 7), *solī Italici nexum esse, provincialis solī nexum non esse* (2, 27), *solum Italicum Mancipi esse, provinciale nec Mancipi esse* (2, 27), *in Italicis pradiis (...) Mancipationem et in iure cessionem recipiunt (...) in provincialibus praediis (...) ne (...) Mancipationem aut in iure cessionem recipiunt* (2, 31), *provincialia praedia usucapionem non recipiunt* (2, 46). Es evidente que para Gayo el suelo provincial es un espacio de “limitaciones” en el que no toma tanta importancia una valoración en positivo de sus propiedades y cualidades consustanciales. Sin embargo, hay dos factores que permiten sostener una visión alternativa sin necesidad de recurrir a la versión del *dominium* patrimonial de Roma sobre las provincias (*ager publicus populi Romani*) y los provinciales (*dediticii*), basadas en un concepto meramente patrimonial del *dominium* en el que las relaciones sociales se resuelven (y se ven limitadas) por los derechos reales de Roma o del emperador.

Uno de los factores que explican la semblanza del *ager provincialis* como “espacio limitado” es la propia diversidad de circunstancias que pueden darse en el seno de una provincia. La distancia que puede existir entre una provincia y otra también participa en la imposibilidad de proceder a una definición total del suelo provincial que sea válida con carácter general. De ahí que el denominador común se convierta más bien en un retrato de aquello que la distingue de *Italia*, de aquello que no es, y no de un ámbito rigurosamente establecido. Aquí entran de lleno diversas cuestiones relacionadas con la especificidad de cada provincia, como la debatida *lex* que actuaría como marco regulador general desde la constitución de la misma (*lex provinciae*). También la relación de las soluciones administrativas para cada comunidad, que oscilaban en función de las circunstancias en que se produjo su incorporación, su integración y su evolución, y eran fijadas en la *formula provinciae*. Por último, la importancia del edicto provincial emitido por cada gobernador para el periodo de su mandato como principal e innovadora fuente del derecho. Aun cuando suele entenderse que buena parte de su contenido era estático (debido las clausulas translaticias que se reproducían de un edicto a otro), éste dependía del criterio exclusivo del gobernador. Por otra parte la tesis sobre la iniciativa de Adriano, que encargó a Juliano la conformación de un edicto provincial único y uniforme a imagen y semejanza del edicto del pretor urbano ha sido cuestionado en numerosas ocasiones y, actualmente, tiende a pensarse en una solución intermedia en que se mantuvo la capacidad de innovación jurídica del gobernador (y, con ello, la variabilidad provincial) conforme a las circunstancias y problemas específicos de cada provincia, aunque existiera la tendencia por asimilar parte del edicto del pretor urbano como modelo del edicto provincial.

Otro factor fundamental a tener en cuenta es la condición jurídica de los provinciales y la importancia de las administraciones locales, en donde la ciudadanía romana no sólo representaba una minoría respecto a los peregrinos, sino que al decir de Gayo, sus negocios jurídicos también estaban parcialmente limitados por su asiento en suelo provincial. Al margen de ésta, que se mantiene como *patria iuris*, la inmensa mayoría social se movía en los márgenes jurídicos que su *ius civitatis* le permitía a nivel local y el *ius gentium* a nivel extralocal e interpersonal, esto es, tanto en las relaciones

entre peregrinos de distintas comunidades como entre éstos y los ciudadanos romanos. El retrato deslavazado de Gayo sobre el *ager provincialis* se debe también a esta doble dimensión, en donde el peso de los derechos locales y del *ius gentium* se imponen respecto a las prácticas y conceptos del derecho quirritario en Italia como la *mancipatio*, la *usucapio*, la noción arcaica del *nexum*, etc. El tratamiento de Gayo respecto al suelo provincial y sus relaciones privatísticas limitadas debe enmarcarse también, por tanto, dentro de su definición sobre las relaciones entre *ius civile* y *ius gentium*:

*Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi pro iure omnes gentes utuntur populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium iure utitur*<sup>321</sup> (Gai. Inst., 1, 1).

Se establece con claridad aquí una oposición entre *ius civile* y *ius gentium* que viene determinada por la escala, a nivel del funcionamiento interno de la comunidad (*ius civitatis/ius civile*) o a la hora de considerar el tipo de relaciones que pueden darse entre individuos de distintas comunidades y que Roma considera (y de este modo impone), como generalizadas e intrínsecas al género humano (*ius gentium/ius communi omnium hominum*). El fundamento del *ius gentium* es la naturalización romana de la razón común, opuesta a las especificidades locales<sup>322</sup>. Las antiguas instituciones del derecho quirritario son desde este punto de vista una creación romana, responden a un ordenamiento propio y exclusivo, y aun cuando puedan ser aprehendidas por un *ius civitatis* ajeno no se trata de lo mismo en tanto en cuanto no se observa de manera general en el derecho de gentes, tal y como ocurre con la *patria potestas* de los gálatas (Gai. Inst., 1, 55; vid. Kaser, 2004: 28). Otras, tan extendidas que se entienden como generalizadas e integradas en el derecho de gentes, como el poder que ejercer el dueño sobre un esclavo, no son *ius civile* por carecer de la misma sustancia en que lo entiendo el derecho romano (Gai. Inst. 1, 82; 84-86; vid. infra). Así, Gayo construye el *ius proprium civium Romanorum* como un derecho reservado a los ciudadanos romanos, su particular *ius civile* como lo son otros *iura civitatum*. Su carácter exclusivo lo reconoce para distintas instituciones que atañen a las relaciones de propiedad como la *mancipatio*, *iure cessio* y *usucapio* (2, 65), a las relaciones domésticas del *manus* (1, 108), el

<sup>321</sup> “Todo pueblo regido por el derecho escrito y por la costumbre sigue, en parte, un derecho que le es propio, en parte un derecho que le es común con el conjunto del género humano. En efecto, el derecho que cada pueblo se ha dado él mismo, le es propio y se llama derecho civil, es decir, derecho propio de la ciudad, mientras que el derecho que la razón natural establece entre todos los hombres es observado de manera semejante en todos los pueblos, y se llama derecho de gentes, es decir, derecho que usa todo el género humano. Así es como el pueblo romano es regido, en parte, por un derecho que le es propio, en parte por el derecho común a todos los hombres” (Gai. Inst. 1, 1; trad. por Núñez, 1965).

<sup>322</sup> 41, 1, 1=Cai. 2 res. cott.: *Quarundam rerum dominum nasciscimur ire gentium quod ratione naturali inter omnes peraeque servatur, quarundam iure civile, id est iure civitatis nostrae, et quia antiquius ius gentium cum ipso genere humano proditum est, opus est, ut de hoc prius referendum sit* (“Adquirimos la propiedad de algunas cosas por derecho de gentes, el cual se observa por igual entre todos los hombres en virtud de la razón natural, y de otras, por derecho civil, es decir, el propio de nuestra ciudad. Como el derecho de gentes se formó antes, con el mismo género humano, es necesario que tratemos antes de él”).

*mancipium* (1, 11) o la *patria potestas* (1, 55), y a la constitución de sociedades *ercto non cito* ante el pretor (3.154 a/b). A ellas cabría añadir muchas otras referidas de manera más laxa como *ius civile*, pero que probablemente fueran también exclusivas de la ciudadanía romana aunque no usara la expresión de *ius proprium c.R.*

En contraposición, el *ius gentium* de Gayo aparece en un plano superior respecto al *ius civile/ius civitatis* para representar las formas de interacción aceptadas para ciudadanos que obedecen a ordenamientos distintos. Es decir, la exclusividad del *ius civile* y el uso restrictivo que hace de él Gayo no implica que el *ius gentium* dejara de estar disponible para la ciudadanía romana en otro nivel, así como para los peregrinos de *civitates* distintas. No debe olvidarse que, por mucho que retóricamente se base en la “razón natural”, fue el marco creado por Roma durante la República para establecer relaciones con comunidades y reinos extranjeros, razón por la cual se ha reconocido en él un derecho internacional público en ciernes. Pero también, desde la creación del pretor peregrino el 242 a.C., el *ius gentium* sirvió para canalizar las relaciones privadas de los ciudadanos romanos con los extranjeros que llegaron a Roma durante la República y carecieran de *ius commercium* (Valiño, 2008: 1700-01). Es por esta razón que Cicerón todavía entiende que todo el *ius gentium* es también *ius civile*, pues se considera todavía un derecho aplicable y pensado para quienes habitaban en la *civitas* de Roma (Cic. *Off.* 3, 17, 69; *vid.* Valiño, 2008: 1701). Sin embargo la perspectiva de Gayo parte de unas circunstancias distintas, en donde la unidad de coherencia que representa Italia y la ciudadanía romana se opone a esa realidad provincial profusa en sus ordenamientos ciudadanos particulares. Por esa razón, aunque construye un *ius proprium civium Romanorum* no puede afirmar su ejercicio en ciertas relaciones de propiedad al ser el *ager provincialis*, en gran medida, un complejo entramado de territorios regidos por *iura civitatum* distintos. Este cambio explicaría la nula atención que Gayo presta al *ius gentium* en su versión diplomática e internacional (íntimamente unido al concepto de *iustum bellum*) y que, por el contrario, centre su atención en las relaciones privadas en un nivel superior del *ius civile/ius civitatis*, pues se ha convertido en el marco de referencia para las relaciones intercomunitarias, no ya de extranjeros en el sentido en el que lo eran durante la república, sino de peregrinos provinciales bajo soberanía romana que mantienen su propio derecho ciudadano. La decadencia del *ius gentium* a partir de la *constitutio Antoniniana* del 212 d.C., que expandió a la vez que simplificó el uso del *ius civile*, es otro indicativo de la dimensión fundamentalmente provincial que adquiere durante el Alto Imperio.

## 8.2. El suelo provincial y las relaciones de propiedad.

Siguiendo el hilo anterior, el carácter inalienable del suelo provincial conforme a los procedimientos del *ius civile* puede entenderse como efecto de este sistema descentralizado, en el que Roma reconoce la personalidad y autonomía jurídica a nivel local. Gayo recurre en varias ocasiones al *ius gentium* y a la *naturalis ratio* para considerar otros procedimientos disponibles en las relaciones de propiedad intercomunitarias que exceden ese marco. De este modo podía salvaguardarse la

exclusividad de los derechos reales que pertenecen al *ius proprium civium romanorum* y requieren que el objeto sea *ex iure quiritium*, a la vez que ofrece una solución práctica y generalista para los negocios entre ciudadanos obedientes a distintos ordenamientos y, en principio, ajenos a los actos formales de la enajenación civil romana. Esta idea prevalece en el reconocimiento de la *traditio* como forma aceptada de adquirir la propiedad en el *ius gentium*, y que se basa en el acto práctico de la simple entrega de una *res corporal*. Su definición en Gayo está inmersa de nuevo en la contraposición con los actos formales del *ius civile*, tanto en las *Institutiones* como en la posterior *Res cottidianae*:

*Ergo ex his, quae diximus, adparet quaedam naturali iure alienari, qualia sunt ea quae traditione alienantur, quaedam civil; nam mancipationis et in iure cessionis et usucapionis ius proprium est civium Romanorum* (Gai. *Inst.*, 2, 65<sup>323</sup>).

*Quarundam rerum dominium nanciscimur iure gentium, quod naturali ratione inter omnes homines peraeque servatur, quarundam iure civil, id est iure proprio civitatis nostrae* (D. 41.1.1=Gai. 2 *res. cott.*<sup>324</sup>).

En un ámbito en que la existencia de la propiedad quiritaria era reducido y cuyo acceso requiere ciudadanía romana o *ius commercium*<sup>325</sup>, Gayo encuentra en el *ius gentium* una vía de intercambio en el que la propiedad goza de cierto reconocimiento jurídico (*pleno iure*<sup>326</sup>), aun cuando no expone en qué términos y, evidentemente, no pueda ser asimilada a la propiedad quiritaria. Ello entronca directamente con la naturaleza de este *dominium*, que por razones de orden trataremos más adelante en este capítulo. A su vez, e indirectamente, la *traditio* del derecho de gentes parece especialmente válida para el ámbito provincial cuando lo considera el procedimiento apropiado para las *rei nec Mancipi*: *Res nec Mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunt* (*Inst.*, 2, 19). Lo importante en este sentido es de nuevo reincidir en el esquema conceptual gayano, en el que *ius gentium* constituye una solución común que prevalece en este caso sobre el *ius civile* y, si lo unimos con la dicotomía anterior, también sobre las formas de intercambio que seguirían el ordenamiento local en el que, por otra parte, se resolverían la mayoría de transacciones, pero que Gayo no trata por carecer de interés respecto a su objetivo, que no es otro que la definición del *ius civile* y sus confines con otros ámbitos de derecho (*ius civitatis/ius gentium*).

<sup>323</sup> “Resulta de lo que hemos dicho anteriormente que las enajenaciones son de derecho natural (tales las que se hacen por entrega), sea de derecho civil; pues la mancipación, la cesión ante magistrado y la usucapión son derechos propios de los ciudadanos romanos”.

<sup>324</sup> “Adquirimos la propiedad de algunas cosas por derecho de gentes, el cual se observa por igual entre todos los hombres en virtud de la razón natural, y de otras, por derecho civil, es decir, el propio de nuestra ciudad”.

<sup>325</sup> *Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est* (Ulp. *Reg.*, 19, 4).

<sup>326</sup> Gai. *Inst.*, 2, 19.



También la *stipulatio*<sup>327</sup> ofrece en el propio Gayo un vía útil para sortear las cualidades del objeto *nec Mancipi* y de la propiedad quiritaria en ámbito provincial entre peregrinos. Éste se basaba en un contrato oral y vinculante entre las partes que creaba una obligación (*verbis obligatio*) de diversa índole, ya fueran transacciones de cantidades económicas, deudas, bienes muebles e inmuebles, *res incorporalia* como usufructos, servidumbres, etc. En concreto Gayo menciona este tipo de contrato como *vero iuris gentium* y, en consecuencia, reconoce a continuación su disponibilidad tanto para la ciudadanía romana como para los peregrinos: *inter omnes homines, sive cives Romanos sive peregrinos* (*Inst.*, 3, 92-93). De nuevo, opone la *stipulatio* del derecho de gentes con la *sponsio*, que siendo un contrato oral requería la reproducción de unas fórmulas rituales precisas en latín y su uso se restringe de nuevo a la esfera del derecho romano exclusivo: *spondeo propria civium Romanorum est* (*Inst.*, 3, 93). Por el contrario la *stipulatio* constaba de una gran simplicidad en sus requisitos. Para Gayo lo importante es la inteligibilidad de lo que se acuerda entre las partes para el nacimiento de la obligación, esto es, la congruencia entre lo que se pregunta con lo que se responde (*vid.* Pérez Bravo, 2009: 140-48), y que sea una lengua conocida para ambos (pero no necesariamente latina o griega, aunque Gayo se sirva de estas dos lenguas como ejemplo<sup>328</sup>). Esta simplicidad convirtió a la *stipulatio* en un recurso útil en ámbito provincial para realizar diversos negocios jurídicos en el seno del *ius gentium* frente al *ius civile*. De hecho, Gayo apela a la *stipulatio* como el procedimiento más oportuno para los *praedia provinciales* que, a diferencia de los itálicos, no podían recurrir a la *mancipatio* o *in iure cessio* a la hora de constituir usufructos o servidumbres (de paso, de acueducto, de relevación, de prohibición, etc.): *Sed haec scilicet in Italicis praediis ita sunt, quia et ipsa praedia mancipationem et in iure cessionem recipiunt. alioquin in provincialibus praediis [...] pactionibus et stipulationibus id efficere potest, quia ne ipsa quidem praedia mancipationem aut in iure cessionem recipiunt* (Gai. *Inst.* 2, 31). De hecho, uno de los escasos testimonios sobre este tipo de servidumbres en ámbito provincial procede precisamente de *Hispania*. Se trata de un *cipo*<sup>329</sup> encontrado en el

<sup>327</sup> Suele presentarse mediante la endíadis *pactiones et stipulationes*, aunque ha sido sometida a discusión si existieron o no diferentes matices entre estos dos tipos de contrato oral. En general la doctrina ha tendido a establecerlos como sinónimos.

<sup>328</sup> De hecho, a continuación, sólo reconoce la imposición del latín en el acto de *deditio*, y que relaciona con la *stipulatio* por su apariencia contractualista y oral mediante la fórmula de pregunta-respuesta, pero que sin embargo él mismo la reconoce en la esfera distinta del *ius bellum* (*vid.* Gai. *Inst.*, 3, 94). Más tarde Ulpiano se expresa en términos todavía más claros a propósito de la *stipulatio* en *D.* 45, 1, 1, 6 = *Ulp.* 48 *Sab.*: “Lo mismo da que se responda en la misma lengua o en otra distinta; por esto, si uno pregunta en Latín y se le responde en Griego, con tal de que la respuesta sea congruente, queda constituida la obligación; y al revés. Pero puede dudarse, <según escribe Sabino> si esto lo admitimos sólo para el Griego o también para otra lengua, como el Fenicio, el Asirio o cualquier otra, y la verdad es que la obligación verbal puede ser en cualquier lengua, siempre que cada parte entienda la lengua de la otra, sea por sí misma, sea por un intérprete de confianza (*Eadem an alia lingua respondeatur, nihil interest. proinde si quis Latine interrogaverit, respondeatur ei Graece, dummodo congruenter respondeatur, obligatio constituta est: idem per contrarium. sed utrum hoc usque ad Graecum sermonem tantum protrahimus an vero et ad alium, Poenum forte vel Assyrium vel cuius alterius linguae, dubitari potest. et scriptura Sabini, sed et verum patitur, ut omnis sermo contineat verborum obligationem, ita tamen, ut uterque alterius linguam intellegat sive per se sive per verum interpretem*)”.

<sup>329</sup> *CIL* II<sup>2</sup>/7, 699a = *AE* 1995, 846 = *HEp* 5, 1995, 313: [Hi]c viae / servitus / imposita / est ab soc(ietate) / Sisap(onensi) susum / ad montes / s(ocietatis) S(isaponensis) lat(a) ped(es) XIV.

llamado Camino del Pretorio”, al Norte de Córdoba, en el que se refleja la constitución de una servidumbre viaria por parte de la *societas Sisaponense* para un tramo que se prolonga hasta los montes<sup>330</sup> y que, con toda probabilidad, fue constituido por medio de la *pactio et stipulatio* (Barrientos, 2006). Cabe remarcar que estos contratos orales creaban en las provincias derechos reales, verdaderas servidumbres y usufructos con garantías jurídicas, y no sólo obligaciones informales, tal y como se ha puesto de relevancia en trabajos monográficos recientes (*vid.* Carreño, 2011).

Existen otras obligaciones relativas a relaciones de propiedad que también pudieron ser disfrutadas por peregrinos en este periodo, aunque sólo fuentes más tardías las incluyan en el *ius gentium*. Tal es el caso de dos de los cuatro tipos de contratos basados en el *consensus* según Paulo, en concreto la compraventa (*emptio venditio*) y al arrendamiento (*locatio conductio*), que en dos ocasiones considera *iuris gentium*<sup>331</sup>. Gayo, aunque no los menciona como tales, sí remite a la antigüedad de la institución al reconocer en el trueque (*permutatio*) la forma más antigua de la *emptio venditio* según un pasaje homérico (*Inst.*, 3, 141) y observa grandes similitudes con la *locatio conductio*<sup>332</sup> (*vid.* 3, 142 y 145). Aquí el *consensus*, basado en el simple consentimiento de las partes, implica que estamos de nuevo ante negocios jurídicos tremendamente simples para facilitar las interacciones entre peregrinos. En este caso, no media siquiera el acto formal de la entrega como sí consta, por ejemplo, la *traditio*. De manera latente, el mismo Paulo compara el *consensus* de la *emptio venditio* con la *stipulatio* para destacar que ni siquiera era necesario en este caso un acto presencial o el intercambio pregunta-respuesta, pudiéndose hacer el *consensus* por carta o a través de terceros. Evidentemente si Paulo observa por dos veces la *locatio conductio* en el *ius gentium* es porque, antes de su tiempo, este negocio consensual se había generalizado por completo entre los peregrinos provinciales a nivel local y, de este modo, lo entiende como un acto compartido de rasgos globales (*ius gentium*) y consustancial a la naturaleza humana (*naturalis*). En otras palabras, aunque la *locatio conductio* tenga una forma precisa en el derecho privado o en las contrataciones públicas por subasta desde época republicana (*vid.* Mateo, 1999: 34-38) su despliega a nivel local, aunque no necesariamente de manera

<sup>330</sup> Posiblemente los montes hagan referencia a minas, dada la amplia tradición de la *societas Sisaponense* en explotaciones mineras como las de cinabrio en Sierra Morena (Arboledas, 2008) y que en este caso pueda relacionarse con las minas detectadas en la confluencia de los ríos Guadiato y Guadalupe (HEp 5, 1995, 313). Desde este punto de vista, la *servitus viae* formaría parte de la infraestructura para facilitar el transporte logístico necesario en las explotaciones mineras de las inmediaciones.

<sup>331</sup> D. 18, 1, 1, 2=Paul. 33 *ad ed.*: “La compra es de derecho de gentes y por ello se realiza mediante el consentimiento y puede contratarse entre ausentes, por mensajero o carta” (*Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur et inter absentes contrahi potest et per nuntium et per litteras*); D. 19, 2, 1=Paul. 34 *ed.*: “La locación y conducción <o arrendamiento> por ser natural y de todas las gentes, no se contrae con palabras, sino por el consentimiento, como la compraventa” (*Locatio et conductio cum naturalis sit et omnium gentium, non verbis, sed consensu contrahitur, sicut emptio et venditio*). Los otros contratos consensuales (el *mandatus* y la *societas*) también pudieron recibir acomodo en el *ius gentium* según Kaser (200: 110-111; 177-80).

<sup>332</sup> Las referencias a la antigüedad de las normas que son reconocidas en el derecho de gentes es frecuente, pues aunque su contenido fuera evolucionando y transformándose a instancias de las cambiantes necesidades romanas, el *ius gentium* se concibe como el estadio jurídico precedente al propio ordenamiento romano. De este modo, también las alusiones veladas a la antigüedad y prerromanidad pueden considerarse indicadoras de su inclusión en el derecho de gentes aunque, el rigor, este no existiera con anterioridad a la creación del pretor peregrino (*vid. eg. D. 41, 1, 1, 0=Gai. 2 res. cott.*).

homogénea, permite su inclusión en el derecho de gentes en un momento indeterminado<sup>333</sup>. A la luz de esto, cabe hacer una pequeña digresión y recordar las implicaciones que ha tenido la inscripción de Penedo de Remeseiros<sup>334</sup>, en donde la referencia a un arrendamiento (*conducta*) y el desarrollo hipotético de *p(ossessio)* por parte del peregrino arrendador permitieron sostener la “forma da tenencia da terra entre os indígenas de Gallaecia” en el marco de la teoría patrimonialista del *dominium* (Pereira y Almeida, 1981: 144; Dopico y Pereira, 1993). Por el contrario, si la inclusión de la *locatio-conductio* en Paulo entre el *ius gentium* no es una creación suya, sino el reconocimiento de una práctica generalizada con anterioridad de la que se hace eco, debemos reiniciar en lo inapropiado de extraer de este tipo de negocio una forma de tenencia generalizada y basada en la presunción de que la *locatio conductio* versa necesariamente sobre *ager publicus populi Romani*. Tal y como se defiende en otro momento (cap. 4.4), el arriendo del peregrino *Allius Reburri* tiene un mejor acomodo en el contexto de los arrendamientos que se producen en el seno de la *civitas* del Noroeste (vid. Sastre y Orejas, 1999: 177-79; Orejas, 2002: 405), algo que el fragmento de Paulo y las indicaciones de Gayo no dejan de reafirmar.

Desde esta perspectiva generalista del derecho de gentes sobre las relaciones de propiedad puede también considerarse la capacidad de heredar y transmitir propiedades. Las fuentes son, sin embargo, demasiado escasas para extraer conclusiones seguras y autores como Kaser (2004: 111-13) se han mostrado escépticos a la hora de poder encontrar el derecho de gentes en el ámbito de las sucesiones testamentarias. A pesar de estas limitaciones, instituciones como el fideicomiso pudieron actuar en el marco de la peregrinidad provincial tal y como Ulpiano da a entender, cuando reconoce indirectamente que se trata de una práctica extendida a todo tipo de gentes pudiéndose realizar en cualquier lengua: *Fideicommissa quocumque sermone relinquuntur, non*

---

<sup>333</sup> Un ejemplo del tratamiento particular lo observamos en la legislación de *Urso*, que establece un periodo máximo de locación del *ager publicus* comunitario en cinco años (cap. 82: *neve locatio longius quam in quinquennium*). La *locatio operis* de la colonia debió regirse *ex lege locationis*, que podría indicar un procedimiento conocido o a una ley específica que estuviera desarrollada en uno de los capítulos no conservados y que podría ser similar (o no) a la de *Malaca o Irni* (cap. 63; vid. Sáez, 1997: 143-48). Por otro lado, un ejemplo muy representativo de la consideración del *ius gentium* como abstracción de instituciones locales que se presumen globales, independientemente de su heterogeneidad, lo encontramos en Gayo a propósito de la esclavitud. Para el jurisprudente, la esclavitud *iuris gentium est*, porque observa que en los lugares en donde existe el dueño suele tener unos poderes análogos a los de la *potestas* romana del *dominus*, como la capacidad de decidir la muerte del esclavo o el hecho de que la propiedad adquirida por el *servus* recaiga en el *dominus* (Gai. *Inst.*, 1, 52). Todo ello a pesar de que la esclavitud romana fuera regulada por unos cauces precisos y que, propiamente, la *potestas* fuera un concepto ligado a los poderes del magistrado, el *pater* sobre sus hijos, y el *dominus* romano (vid. *D.* 50, 16, 215). De hecho el propio Gayo es consciente de algunas características diferentes que atribuye a la esclavitud en el *ius gentium*, sobre todo relacionadas con la naturaleza matrilineal en la transmisión de la *libertas* a los descendientes entre esclavos y libres (vid. Gai. *Inst.*, 1, 82; 84-86). Este argumento es extrapolable al caso, ya señalado, de la *patria potestas* que Gayo observa entre los gálatas aunque, evidentemente, no se produjera en los mismos términos del *pater familias* romano, dado que él mismo la considerara *ius proprium civium romanorum* (Gai. *Inst.*, 1, 55).

<sup>334</sup> CIL II, 2476 (Vilar de Perdizes, Vila Real): *Allius Reburri Rogo Deu(m) Adiutorem / In Ac (sic) conducta conservanda / q̄i(s)q̄is (sic) in ac (sic) conducta p(ossessionem) m̄ici (sic) aut meis/ involaverit si r(emps) quaecunquae (sic) res at m̄ici (sic) / it a v s l s̄iquit ea res v s l v f / Danceroi*.

*solum Latina vel Graeca, sed etiam Punica vel Gallicana vel alterius cuiuscumque gentis* (D. 32, 11, 0=Ulp. 2 de fideic.).

De todo esto podemos extraer, en suma, que el marco conceptual gayano, basado en las mencionadas contraposiciones entre los niveles *ius civile/iura civitatum* y *ius gentium* guarda una estrecha relación con las diferencias existentes entre Italia y las provincias. Es decir, el derecho de gentes toma una apariencia de derecho compartido, socialmente construido, que busca sortear ciertas limitaciones inherentes al *ager provincialis*. Que el *ius gentium* no recibiera una definición precisa y sistemática quizás sea un indicativo de que debemos alejarnos de su concepción como un cuerpo de derecho uniforme y bien articulado cuando, en realidad, pudo tratarse de una especie de “acuerdo de mínimos” en donde el verdadero peso lo llevan los ordenamientos locales, mayoritariamente peregrinos (*vid.* Ando, 2016).

Existen algunos testimonios excepcionales en los que actos de enajenación exclusivos del *ius civile* parecen operar en ámbito provincial (concretamente la *mancipatio*), contraviniendo en apariencia las disposiciones gayanas sobre el *ager provincialis* (*nec mancipi*). Antes de entrar en ellos, debemos anticipar la conclusión de que ambos casos reciben un mejor acomodo desde la perspectiva local del *ius civitatum* sin necesidad de violentar el esquema conceptual gayano. De hecho, la respuesta se encuentra en el mismo jurisprudente y en las relaciones que, como hemos dibujado, él mismo proporciona: un nivel teóricamente horizontal entre *ius civile/ius civitatum*, y el *ius gentium* como mecanismo facilitador de las relaciones intercomunitarias (*Inst.*, 1, 1). En este marco, debe recordarse que el mismo Gayo es plenamente consciente de las semejanzas que pueden existir en el seno del derecho local respecto a figuras jurídicas que el mismo considera *ius proprium civium Romanorum* (como la *patria potestas* de los gálatas) y que, por ser distintas en su sustancia jurídica, sólo pueden tratarse de simples emulaciones de las prácticas romanas, ya sea mediante una apropiación meramente terminológica o también formal<sup>335</sup>. Por otra parte ambos testimonios se reafirman sobre el principio de personalidad jurídica, en donde el *status* personal no transforma las propiedades del suelo provincial.

El primero es el conocido Bronce de Bonanza (Puerto de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz: *CIL* II, 5042; 5046), cuya cronología puede establecerse con dificultad en el siglo I d.C.<sup>336</sup> y que en origen, se trataría de un díptico cuya segunda

---

<sup>335</sup> Según Gayo la *mancipatio* es una “venta simbólica” (*imaginaria venditio*) considerada *ius proprium civium Romanorum* (*Inst.*, 1, 119) para la adquisición de esclavos, animales mancipables y los *praedia urbana* y *rustica* itálicos (*Inst.*, 1, 120). Requería la transmisión del bien en manopresa, aunque en los inmuebles podía realizarse estando ausentes (I, 121). El acto ritual requería la formulación de una frase ritual en presencia de al menos cinco testigos ciudadanos romanos junto al *libripens* (*vid.* 1, 120). En términos semejantes la describe también Ulpiano (*Reg.*, 19, 3): “La venta solemne es el tipo de enajenación propia de las cosas mancipables, y consisten en formular unas palabras precisas, concurriendo el portador a la balanza y estando presentes cinco testigos” (*Mancipatio propria species alienationis est rerum mancipii, eaque fit certis verbis libripende et quinque testibus praesentibus*).

<sup>336</sup> Las cronologías que se propusieron tras la aparición del documento en 1868 oscilan entre el cambio de Era (Hübner, 1869: 243; Rodríguez de Berlanga, 1884: 543 ss.) y finales del siglo I – comienzos del II d.C. (Rudorff, 1873: 52). Los estudios posteriores que han retomado la cuestión admiten un horizonte

parte se ha perdido. En él se recoge por un lado el contrato (l. 1-5) sobre una *mancipatio fiducia causa* entre *L. Baianus* (mancipante) y la esclava *Dama* (accipiente) con motivo de las deudas pendientes del primero sobre *L. Titius* (dueño de *Dama*). En una segunda parte (l. 6-17) se documenta anexo el *pactum* por el que los bienes mancipados constituyen la garantía fiduciaria en caso de que *L. Baianus* no pudiera afrontar los pagos, pudiendo ser vendidos total o parcialmente tanto por *L. Titius* como por su heredero. Los bienes objeto de la *mancipatio* son el esclavo y el *fundus Baianus*, que deberían retornar del acreedor al deudor si las deudas (presentes y futuras) eran satisfechas. La gran atención que ha recibido el Bronce de Bonanza se ha concentrado fundamentalmente en sus peculiaridades formales, en el estudio de la *fiducia cum creditore* y el sistema de garantías jurídicas del *pactum*, dentro de un bloque documental unitario en que el queda englobado junto a otras fuentes epigráficas análogas de procedencia itálica como algunas *tabulae pompeyanas* (vid. eg. Lambrini, 2015). La cuestión de que pueda documentarse la *mancipatio* de un *fundus* en suelo provincial no mancipable ha quedado, salvo algunas excepciones, en un segundo plano.

En este sentido es preciso atenerse a la situación del *fundus Baianus* en relación a sus circunstancias geográficas y administrativas, pues no hay argumentos que impidan considerar que esta práctica se hubiera podido desarrollar en uno de los numerosos *oppida stipendiaria* que, según Plinio, resultan predominantes tanto en la provincia Bética (120: Plin. *NH.*, 3, 7) como en el *conventus Gaditanus* (vid. 3, 15). Autores como D’Ors ya sostuvieron acertadamente que en el Bronce de Bonanza “la *mancipatio* aparece como negocio imitado del derecho de Roma, pero no presupone, ni la ciudadanía de los que en ella intervienen, ni el *dominium ex iure Quiritium* sobre el suelo objeto de la misma” (D’Ors, 1974: 261). De esta manera, no resulta necesaria la existencia de *ius Italicum* y, como acto de emulación local, podía darse “incluso entre *peregrini*” (D’Ors, 1974: 259; vid. 1953: 433-34). Sin embargo, el objetivo de D’Ors en este artículo era plantear su teoría sobre las cualidades del *ager colonialis* hispano, lo que le lleva injustificadamente a insertar el contenido del Bronce en el contexto colonial de *Hasta Regia* (1974: 259; Plin. *NH.*, 3, 11; Mela, 3, 4) y, con ello, a reafirmar su teoría sobre la inexistencia de propiedad quiritaria en las colonias hispanas, tuvieran o no *ius Italicum*. Por tanto, aunque sus conclusiones sean válidas en lo que respecta al contenido y alcance de la *mancipatio*, sus implicaciones en la configuración del *ager* colonial hispano resultan inciertas. Como apuntó González Román con sólidos argumentos, las referencias toponímicas del Bronce no permiten comprobar que el *fundus Baianus* se encontrara dentro del *territorium* de esta colonia tal y como sostenía D’Ors (González Román, 2004: 141-42). El contrato simplemente lo describe como parte del *ager* llamado *Veneriense* que estaría en las inmediaciones del *pagus Olbensi*, sin poder conocer su adscripción en términos administrativos: *...fundum Baianum qui est in agro qui / Veneriensis vocatur pago Olbensi...* (l. 1-2). Planteamientos como los de Schulten, que vieron en el *pagus* de *Olba* un precedente hipotético de *Onuba* sólo se asientan en una semejanza homofónica (González Román, 2004: 141-42). Tampoco la

---

cronológico general para el siglo I d.C. (D’Ors, 1953: 431; González Román, 1994: 140; Bueno, 2004: 154).

conexión del *ager Veneriense* con la comunidad latina de *Nabrissa Veneria*<sup>337</sup> (España, 2017: 606-7) parece convincente en tanto en cuanto el sentido de la frase sigue a mi parecer un criterio jerárquico para ubicar el *fundus*. Es decir, el *ager Veneriense* del que forma parte el *fundus* se trata de una pequeña porción interior del *pagus* mencionado inmediatamente después, y no sugiere que haga alusión al *ager civitatis*.

No sabemos, en síntesis, para qué comunidad específica se produce la *mancipatio* de Bonanza. Lo que sí podemos es reparar en ciertos elementos que invitan a pensar en una comunidad de constitución no romana. Algunos de estos argumentos se han relacionado con la propia naturaleza del Bronce, que para algunos investigadores se trataría bien de un modelo importado de Italia para la realización de contratos, (con lo que su toponimia y terminología se trasladaría inmediatamente a esta península<sup>338</sup>), bien como un documento que se nutre de un modelo del que todavía se intuyen ciertos vestigios y rasgos. Sin poder descartar estas posibilidades, creo que las anomalías también pueden incidir en una adaptación local de la *mancipatio* romana, en una relectura parcial o, simplemente, en una emulación de tipo meramente terminológico. Ello explicaría que no siguieran el acto formal de la *mancipatio*, en donde era necesaria la presencia del *libripens* y del *antestatus*, cuyos nombres no son recogidos ni existe un espacio en blanco para ellos, simplemente porque tal acto nunca se produjo. También la onomástica de los dos individuos libres *L. Titius* y *L. Baianus* resulta inusual para ciudadanos romanos que establecen un contrato de este tipo y, como intuyó D'Ors, bien podrían tratarse de peregrinos con onomástica latinizada que emulan los actos y procedimientos de la *mancipatio*. Que la comunidad en cuestión fuera uno de los mayoritarios *oppida stipendiaria* de la Bética en el siglo I d.C. o fuera una comunidad latina poco importa, toda vez ambas son entidades con autonomía en su ordenamiento interno<sup>339</sup>. La *mancipatio* debe ser tomada, en suma, en este contexto local y peregrino, cuyas instituciones propias pueden adaptarse o no a la praxis romana, pero que en ningún caso presuponen ni la existencia de propiedad quiritaria ni que el suelo provincial dejara de ser, en rigor, *nec Mancipi*<sup>340</sup>. Al fin y al cabo, encontramos en momentos cronológicos cercanos al Bronce expresiones en donde la *mancipatio* se utiliza de manera mucho más laxa a como la entienden Ulpiano y Gayo. Tácito la refiere para denunciar una enajenación poco escrupulosa de una estatua de Augusto en la compraventa de una villa (Tac. *Ann.* I, 72) y Plinio recuerda la falsa *mancipatio* de las

---

<sup>337</sup> No existe una posición común sobre el expediente comunitario de *Nabrissa Veneria* (Lebrija, Sevilla). Tiende a pensarse en una comunidad de derecho latino, pero existen divergencias en cuanto a si se trata de una colonia o un municipio (vid. breve síntesis en: González Fernández, 2013: 264-65). El conocimiento arqueológico del sitio inclina a pensar en un municipio, donde antiguo el *oppidum* turdetano convive con un espacio urbano yuxtapuesto de época romana (Tomassetti, 1997).

<sup>338</sup> D'Ors, por ejemplo, no descartaba que el *fundus Baianus* deba relacionarse con la ciudad italiana de *Baiae* (1953: 436).

<sup>339</sup> Sobre la autonomía del municipio latino (vid. García, 2001). La legislación municipal Flavia también resulta muy representativa de la apropiación e implantación de procedimientos romanos desde una perspectiva local dentro de una política imperial de uniformización a escala provincial.

<sup>340</sup> En esta línea también se podría intergrar la complicada tablilla de Somerset para la que se propuso una posible *mancipatio* entre peregrinos britanos a partir de ciertas analogías en las fórmulas con las *mancipationes* de los contratos dácicos (Turner, 1956), si bien la *mancipatio* no se menciona de manera explícita y el estado fragmentario invita a ser precavidos.

joyas de Lolia Paulina, procedentes del saqueo perpetrados por su antepasados en las provincias (Plin. *NH.*, 9, 117).

Otra fuente indispensable la constituye uno de los contratos procedentes de Dacia que recoge la *mancipatio* de un inmueble el 157 d.C. entre la peregrina *Andueia Batonis* y el ciudadano romano *Veturius Valens*, probablemente un soldado de la *legio XIII Gemina*, dentro del contexto de las explotaciones mineras de *Alburnus Maior* (*FIRA* III, 90). Aunque nos centraremos en este testimonio por sus implicaciones en la configuración del suelo provincial, también hay que relacionarlo con otros tres contratos donde se recoge la expresión *emit mancipioque accepit* a propósito de la venta de tres esclavos con peregrinos involucrados en el acto de compra-venta (*FIRA* III, 87-89). Todo ello ha dado lugar a una nutrida bibliografía encaminada a considerar hasta qué punto pueden considerarse una *mancipatio* real o se trata de una extralimitación del lenguaje a la vez que se han sopesado diversas soluciones en relación con las cualidades del suelo de *Alburnus Maior* o los privilegios suplementarios que pudieron gozar las partes intervinientes para explicar la aparente anomalía. Y es que, en efecto, el contrato incurre en dos claras incongruencias difíciles de conciliar entre sí. Por un lado, la más evidente, que la *mancipatio* exclusiva de la ciudadanía romana pueda efectuarse con *peregrini*, para lo cual se ha visto una solución en el *ius commercium*<sup>341</sup>. Por otro lado, la naturaleza del objeto de la compraventa (dejando al margen a los esclavos mancipados): un inmueble que sigue sujeto a tributación como refleja una de sus cláusulas<sup>342</sup>, y que sin embargo es mancipado a pesar de que para Gayo los bienes estipendiarios y tributarios, como el propio suelo provincial, son categorías autoexcluyentes: *Item stipendiaria praedia et tributaria non mancipi sunt* (*Inst.*, 2, 14). Ello lleva aparentemente a un callejón sin salida en el que las soluciones que podrían darse por separado se invalidan entre sí. Pues aunque el *ius commercium* pudiera permitir la *mancipatio* ésta no puede eludir la naturaleza del bien “mancipado”, que como se ha dicho sigue siendo tributario y *nec mancipi*. Por otro, si como pensó en su día von Premerstein (1919), la *mancipatio* está justificada por una hipotética dependencia del territorio de *Alburnus Maior* con *Apulum*<sup>343</sup>, colonia con *ius Italicum* según Ulpiano (*D.* 50, 15, 1, 9=Ulp. 1 *de cens.*), tampoco resulta compatible con el asiento del bien en suelo tributario, más si es una peregrina la que accede a él. Que convivan ambas concesiones parece una solución complicada, más si tenemos en cuenta que ni se hace alusión al *ius commercium* en el contrato ni está demostrada la relación de *Alburnus Maior* con *Apulum*, que por otra parte no debió recibir el *ius Italicum* antes de la dinastía Severa (Ardevan y Zerbini, 2007: 135-38), cuando el contrato se firma el 157 d.C.

---

<sup>341</sup> Ulp. *Reg.*, 19, 4: *Mancipatio locum habet inter cives Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est.*

<sup>342</sup> Volveremos más tarde sobre esta cláusula: *Convenitq(ue) int[er] eos [uti] Veturius Va[lens pro ea] domo tributa usque ad recensum dep[e]n[dat]* (*FIRA* III, 90, l. 15-16).

<sup>343</sup> Se trata de la *colonia Aurelia Apulensis*, que adquiere el rango colonial en época de Commodo. No debe confundirse con el cercano municipio de *Apulum* de época Severa que nace a partir del asentamiento de la *legio XIII Gemina*, a pesar que ambas comunidades se presenten como un continuo urbano (Szabó, 2015).

Ante esto hay quienes han visto en las peculiaridades formales de estos contratos ciertos indicativos que llevan a pensar en que no se trate de una *mancipatio* real, sino una licencia terminológica para referir un simple acto de compraventa que tiene un mejor encaje en el esquema de la *traditio* o la *stipulatio* (Arangio-Ruiz, 1990: 328-29; Meyer, 2004: 180-83; Coch, 2017: 50-52). Ello explica, como ocurre en el Bronce de Bonanza, que se aluda a la *mancipatio* sin que tampoco medie alusión alguna al acto ritual o a la expresión de las fórmulas orales precisas que Gayo proporciona (*Inst.* 1, 20-21; *vid.* *Ulp. Reg.* 19, 3) o que, de nuevo, no se hagan constar los nombres del *libripens* y del *antestatus* como garantía de la *mancipatio*. La falta de escrupulosidad formal tiene coherencia, al fin y al cabo, con el contexto del hallazgo de las tablillas, en el corazón de las explotaciones mineras auríferas de Roşia Montană y en donde la presencia del ejército pudo mediatizar la apariencia de estos negocios<sup>344</sup>, importando modelos de contratos que facilitaran la necesaria interacción económica con las poblaciones locales. De hecho dos de los contratos se sellaron en las *canabae* de la *legio XIII Gemina* (*FIRA* III, 88 y 89), el *Appius Proclus* de uno de ellos fue veterano de esta legión (Punt, 2012: 90-91) y tiende a pensarse que *Veturius Valens* también perteneciera a ella (Le Teuff, 2012: 103). Por otro lado, la *domus* mancipada por *Andueia Batonis* se encontraría no muy lejos de este contexto como revela la descripción de su situación administrativa junto a la mención de las propiedades colindantes: *qu<a>e est Alb(urno) Maiori vico Pirustar[um in]t[er] ad [fine Platorem Acepp]tianum et Ingenum Callisti* (l. 3-4). Aunque carecemos de mayor información sobre el origen de *Andueia Batonis*, su onomástica presenta una estructura peregrina formada por nombre único y antropónimo. *Andueia* sólo se documenta una vez más en otra tablilla más fragmentaria (*CIL* III, 928,02), si bien la dispersión de su antropónimo se concentra en Dacia y, en menor medida, Dalmacia y Panonia, principal origen, por otra parte, de la mayor parte de las élites movilizadas y atraídas por el régimen de concesiones mineras (*vid.* Noeske, 1977: 321-26; Pundt, 2012).

Respecto a la naturaleza del bien es de gran importancia para nosotros la cláusula por la cual *Veturius Valens* se compromete a pagar los tributos correspondientes de la *domus* hasta que se realice el próximo censo en beneficio del adquirente, *Andueia Batonis*: *Convenitq(ue) int[er] eos [uti] Veturius Va[lens pro ea] domo tributa usque ad recensum dep[e]n[dat]* (*FIRA* III, 90, l. 15-16). Esta cláusula nos informa, por una parte, que el territorio estaba sometido a censos con una cierta periodicidad. Por otra, que sobre la propiedad en la que se integra la *domus*, acotada por los fundos colindantes (l. 4), pesa el *tributum* independientemente de que su dueño sea un ciudadano romano o un peregrino. Ambas evidencias hacen poco sostenible que el *ius Italicum* deba tenerse en consideración aunque resolviera el problema de la *mancipatio* (Gai. *Inst.*, 2, 14; 2, 27; *Ulp. Reg.* 19, 3-6; Aген. Urb.Th 23, 5-14=La 62, 19-63, 2; *vid.* Soraci, 1982) pues, como se vio en su momento (*vid.* cap. 7.2), la

<sup>344</sup> La importancia del ejército en la gestión de las explotaciones mineras de Roşia Montană viene confirmada por un considerable volumen de documentación arqueológica y epigráfica. Dado que la gestión de estos *metalla publica* se resolvía por un sistema indirecto de concesiones, el papel del ejército se centraba en este caso en labores de construcción, mantenimiento y control de las infraestructuras mineras junto a la recolecta fiscal por la explotación de los pozos de forma semejante a como lo encontramos en los bronce de Vipasca (Cauuet, 2004).



asimilación con el suelo itálico conlleva la *immunitas* y, por ese motivo, las comunidades con este privilegio tampoco eran recogidas en el censo provincial, razón por la cual son destacadas en la *forma censualis* (Dig. 50, 15). A mi juicio, para poder evaluar el alcance y la naturaleza de la *mancipatio* de este inmueble es preciso atenernos exclusivamente al *status* de la comunidad en la que se produce sin construir vínculos artificiales con comunidades que, como *Apulum*, ostentaron el beneficio itálico.

En este sentido, no hay ninguna evidencia que permita afirmar que *Alburnus Maior* hubiera disfrutado de cualquier tipo de privilegio o promoción colectiva (Găzdac, 2010: 57). De hecho no hay gran documentación que lo mencione al margen de las propias tablillas dácicas. A pesar de la escasez de fuentes, el tratamiento de *Alburnus Maior* se ha visto mediatizado por nociones actualistas que consideran los *metalla* como “distritos mineros”, esto es, territorios sectorial y exclusivamente orientados a la actividad minera y que deben manejarse aisladamente respecto a las organizaciones cívicas. Este tipo de perspectivas ha sido criticada en los últimos años (*vid.* Orejas y Plácido, 2000; Sastre, Beltrán y Sánchez-Palencia, 2010; Zubiaurre, 2017: 228-32) y el caso de *Alburnus Maior* no parece una excepción. El sistema vicánico que nos proporciona la tablilla (*vicus Pirustanum*: l. 3) junto a otros testimonios del entorno del *Alburnus Maior*, como los posibles *vici* de *Deusara* (CIL III: 930-32), *Immenosum maius* (CIL III: 948-49) o *Kartum* (CIL III: 936-39) invitan a pensar en una organización cívica que convive con las explotaciones mineras sobre *ager publicus* como ocurre en otras zonas del Imperio<sup>345</sup> y en el propio Noroeste hispano. De hecho la descripción de la propiedad *qu<a>e est Alb(urno) Maiori vico Pirustar[um in]t[er] ad [fine Platorem Acepp]tianum et Ingenum Callisti* (l. 3-4) no es muy distinta al procedimiento recogido por Ulpiano sobre cómo debían censarse las propiedades tributarias en una comunidad: *agri sic in censum referantur: nomen fundi cuiusque et in qua civitate et in quo pago sit et quos duos vicinos proximos habeat...* (D. 50, 15, 4, 0=Ulp. 3 de cens.: *vid.* 50, 15, 4, 2). Esto permite suponer que *Alburnus Maior* gozaría de cierta operatividad administrativa, razón por la cual su *civitas* se toma como unidad de referencia para el censo y el tributo que aparecen en el contrato. Por otro lado el hallazgo de varias necrópolis, *loca sacra* y restos de zonas hábitat en el entorno apuntan hacia un poblamiento estable relacionado con las explotaciones mineras inmediatas, aunque buena parte de sus habitantes tuvieran un origen alógeno y no se haya reconocido aún un centro administrativo claro (Hirt, 2010: 41-44). La relación orgánica que *Alburnus Maior* pudo establecer con la cercana *Ampelum*, sede de la *officina metallorum* en donde el procurador centralizaba la gestión de toda la región minera circundante, tampoco sugiere que deba considerarse una *mancipatio* en sentido estricto. *Ampelum* carece de cualquier tipo de promoción comunitaria en el momento en que se firma el contrato y, menos aún, del derecho itálico, no siendo hasta el gobierno de Septimio Severo cuando adquiriera un estatuto municipal (Hirt, 2010: 126-28).

<sup>345</sup> La existencia de entidades adscribibles al *ager peregrinus* y al *ager publicus* dentro de un mismo paisaje minero puede observarse también en la convivencia de los conceptos *vicus*, *metallum* y *territoria/fines metallorum* de las *leges metalli Vipascensis* y la *metallis dicta* de Aljustrel (Portugal). Sobre estas cuestiones: *vid.* Hirt, 2010: 49-51.

Sólo cabe suponer, a la luz de todo lo mencionado, que la *mancipatio* era un procedimiento conocido, posiblemente mera emulación de las prácticas o del vocabulario jurídico, que puede tener perfecta cabida en el *ius civitatis* de una comunidad peregrina y tributaria en tanto que se trata de adaptaciones locales de la praxis jurídica romana. De este modo, de testimonios como los anteriores no deben sobreentenderse indicios de un *ius propium civium Romanorum* que disuelva las diferencias entre Italia y las provincias, sino todo lo contrario, refuerza la idea de que el peso de los ordenamientos locales en el sistema descentralizado de *civitates* fue un factor de primer orden en la semblanza ambigua y “limitada” que recibe el suelo provincial. Se trata de fenómenos que deben entenderse, en suma, dentro del espectro de las múltiples dinámicas de aculturación local y de un lenguaje de poder entre dominador y dominado, también en los negocios jurídicos.

El concepto de “propiedad provincial” y “propiedad peregrina” ha estado atravesado por la prolija discusión sobre las cualidades del *dominium populi Romani vel Caesaris*, al que ya hemos prestado una amplia atención en el apartado correspondiente (cap. 2.1). En líneas generales, se ha puesto una nota crítica sobre el concepto unitario de propiedad (Burdese, 1989; *vid.* Giliberti, 1996) con el fin de recalcar la existencia de otras formulaciones en ámbito provincial, aunque evidentemente no puedan asimilarse a la propiedad quiritaria ni sea equiparable el conocimiento que tenemos sobre ellas. Ya se ha mencionado que para Gayo en el suelo provincial no tiene cabida la *mancipatio* e *in iure cessio* por la inexistencia de propiedad quiritaria, es decir, no hay lugar para los actos de enajenación de la propiedad civil, y el jurista los concibe dentro de los esquema de la tenencia como *possessio vel usufructus* (*Inst.* 2, 7). Sin embargo, esta inexistencia del *dominium ex iure Quiritium* no parece implicar, a juzgar por las fuentes, que no se desarrollara una forma de propiedad que gozara de cierto reconocimiento y garantías jurídicas, a veces semejante a la propiedad quiritaria. De acuerdo con el mismo Gayo, la *traditio* sobre los bienes no mancipables *pleno iure alterius fiunt, si modo corporales*<sup>346</sup> *sunt et ob id recipiunt traditionem* (*Inst.*, 2, 19). Para, a continuación, decir que si existe una *traditio ex iusta causa* la cosa se hace tuya, se traspasa el dominio siempre y cuando la parte que lo da en *traditio* tenga efectivamente ese dominio: *statim tua fi te a res, si modo ego eius dominus sim* (*Inst.*, 2, 20). En 2, 21, inmediatamente después, Gayo resalta que los predios provinciales *in eadem causa sunt*, es decir, que se aplica en la misma medida este *dominium* a todos ellos, aunque después pase a referir la diferencia entre los tributarios y estipendiarios (*Inst.*, 2, 21). En 2, 40 vuelve a recordar que existe un tipo de *dominium* único que está disponible para la peregrinidad: *Sequitur ut admoneamus apud peregrinos quidem unum esse dominium: nam aut dominus quisque est aut dominus non intellegitus*, para el que observa cierta analogía con la propiedad quiritaria de época arcaica, cuando todavía no se había desarrollado la noción del *duplex dominium* de la ciudadanía romana en Italia: el *dominium ex iure Quiritium* (propiedad

<sup>346</sup> Los terrenos se encuentran dentro de la categoría de *res corporales* junto a los esclavos, las joyas y todo tipo de bienes tangibles (*Inst.*, 2, 13). De este modo, lo que menciona a propósito del *dominium pleno* a partir de *traditio* es aplicable a todos estos bienes, aunque a veces se sirva de ejemplos *corporales* particulares como en *Inst.*, 2, 20.

civil protegida por la *rei vindicatio*) y el escidindido *in bonis habere* (propiedad pretoria protegida por la *actio publiciana*).

¿Cómo se articula entonces este *dominium* que suele relacionarse con nociones de uso: *uti, frui, habere, possidere*? Antes que Gayo, a finales del siglo I d.C., Agenio Urbico proporciona información importante sobre las cualidades de este *dominium* a propósito *De controversiis agrorum*, en donde ésta parece quedar tutelado de manera muy semejante al *dominium* quiritario:

*Et stipendiarios, qui nexum non habent neque possidendo ab alio quari possunt. Possidetur tamen a priuatis, sed alia condicione[m]: et uenerunt, sed nec mancipatio eorum legitima potest esse. Possidere enim illis quasi fructus tollendi causa et prastandi tributum condicio<ne> concessum est. Vindicant tamen inter se non minus fines ex aequo ac si prouatorum agrorum. Etenim ciuile est debere eos discretum finem habere, quo unus quisque aut colere se sciat oportere aut ille qui iure possidet possidere. Nam et controuersias inter se tales mouent, quales in agris immunibus et priuatis solent euenire. Videbimus tamen an interdicere quis possit, hoc est ad interdictum prouocare, de eius modi possessione[m]. Multa enim et uaria incidunt, quae ad ius ordinarium pertinent, per prouinciarum diuersitatem (La. 63, 1-12; Th. 23, 13-24)*

Antes de este pasaje, el agrimensor procede a identificar claramente el *ager stipendiarius* con el suelo provincial, al perfilarse como un rasgo compartido que no distingue entre expediente comunitarios, a menos que se haya concedido la *immunitas* o el *ius Italicum* (vid. cap. 7). De hecho aquí, el adjetivo *stipendiarius* busca simplemente enfatizar un carácter “gravado” que englobaría asimismo al *ager tributarius*, al que no dedica ni una level mención, aunque para Gayo implique un tipo de *dominium* distinto según el tipo de provincia, del *populus* o del César. De hecho que la tenencia del *ager stipendius* se produzca a condición del pago del un *tributum* (*tributi condicio<ne>*) es ya sintomático de que *tributum* y *stipendium* conforman una hendíadis más que una forma radicalmente distinta de tributar en función de que la provincia sea imperial o senatorial (Grelle, 1963, 16-21). Esto nos permite reconocer y evaluar las características del *ager provincialis* en su conjunto, y las formas de propiedad que le son inherentes, mencionadas inmediatamente después en este fragmento.

En este sentido, el suelo estipendiario parece compartir algunas de las características que tiempo después vienen recogidas por Gayo a propósito del *ager provincialis* como ya se ha visto. En primer lugar reincide en que se trata de una forma de *possessio*, y que ésta no es susceptible de *usucapio* (*neque possidendo ab alio quari possunt*; vid. Gai. *Inst.*, 2, 46). Tampoco parece compatible con los actos de enajenación propios del *ius civile*. Las transacciones carecen del *nexum* (*qui nexum non habent*; Gai. *Inst.*, 2, 27: *provincialis soli nexum non esse*), mal conocido, pero cuya sustancia jurídica guardaba cierta semejanza en origen con la *mancipatio* según se desprende en las doce tablas (*Tab. 6, 1: nexum mancipatimque*; vid. Castillo, 1996: 80). Más

interesante es todavía la imposibilidad de proceder a una *mancipatio* de manera legítima (*sed nec mancipatio eorum legitima potest esse*), lo que por un lado es coherente con la visión de Gayo: [*solum*] *provinciale nec mancipi est* (*Inst.*, 2, 27). Pero por otro, deja entrever la existencia de *mancipationes* “ilegítimas”, como las mencionadas en el Bronce de Bonanza o en las tablillas dácicas, que al pertenecer al orden del derecho local, no son *mancipationes* estrictas sino actos de compraventa flexibles en las que, por emulación, podían intervenir peregrinos o propiedades no regidas por el derecho quirritario (*vid supra*).

Sin embargo, del pasaje no se infiere una forma de *possessio* despojada de garantías jurídicas como ha querido ver la teoría patrimonialista del *dominium* provincial, sino una tenencia en cierto modo asimilable a la propiedad privada y que, en buena medida, es el fruto del protagonismo y presión de las oligarquías provinciales que todavía se mueven en los márgenes de la peregrinidad. Es por esta razón que podía comprarse y venderse, aun siendo distinto al concepto de propiedad del derecho romano (Saumagne, 1965, 82-85; Orejas, 2002: 404-05; Castillo, 1996: 80-83). Las controversias que tenían lugar en su seno, a la manera de las propiedades inmunes y privadas, invitan a pensar en determinados mecanismos de protección: *vindicant tamen inter se non minus fines ex aequo, ac si privatorum agrorum [...] controversias inter se tales movent, qualis in agris immunibus et privatis solent evenire*. Es decir, se podía “vindicar” por ellos de manera análoga la propiedad privada y, por ello, era necesaria una delimitación clara de sus confines. Esta acción de “vindicar” sugiere que “la propiedad provincial seguramente habría sido protegida a través de la concensión de una *actio in rem* útil, construida a imagen y semejanza de la *rei vindicatio*” (Carreño, 2011: 317). También Frontino, al tratar las *controversiae de proprietate*, alude precisamente a los *compascua* comunales de las provincias, llamados *pro indiviso*, como una forma de propiedad colectiva proclive a este tipo de disputas y en donde queda implícita la posibilidad de apelar a instancias más altas que el derecho local litigando por la vía jurídica ordinaria (*de quibus iure ordinario litigatur*: Front, Th. 6). Siguiendo a Carreño (2011: 317-19), esta protección sobre los suelos provinciales pudo haber dejado un poso en dos rescriptos de Diocleciano en donde se utilizan términos relativos al *dominium* para referir la posesión del suelo provincial, así como la posibilidad de su “vindicación”: *dominium rei tributariae vindicetis* (*Frag. Vat.* 315) *tributarii praedii dominus constitutus extraneus vindicationem habere potest* (*Frag. Vat.* 316), si bien se produce en un momento en el que la diferencia entre Italia y las provincias se han disuelto ya de manera completa.

Evidentemente, los procesos de este tipo nos son en gran medida desconocidos y variarían según el edicto de la provincia concreta bajo la tutela y el criterio del gobernador. Aun con todo, cabe suponer que existieron determinadas adaptaciones procesales del derecho romano a través del edicto provincial, al menos desde un punto de vista meramente formal, en donde la “ficción de ciudadanía” pudo esconderse detrás de este tipo de *actiones* disponibles para la peregrinidad. Así Gayo, a propósito de la *actio furti nec manifesti* y la *actio legis Aquiliae* dice que debe recurrirse a la ficción de que el peregrino tenga la *civitas romana* cuando es demandado, pero también cuando es demandador, por las leyes romanas, siempre y cuando sea justo extender la acción al

extranjero, como podría ocurrir en el ejemplo del hurto: *Item civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constituta est, si modo iustum sit eam actionem etiam ad peregrinum extendi* (Gai. Inst., 4, 37). Evidentemente el jurista se refiere al proceso formulario aplicado a Italia que sucedió a las rígidas *legis actiones*, precisamente tras la afluencia de abundantes contingentes extranjeros a la península para quienes el procedimiento arcaico no era accesible por razones lingüísticas. Sin embargo, existen algunas alusiones al ejercicio de estas ficciones de ciudadanía también en ámbito provincial y con peregrinos implicados en relaciones de propiedad. El caso más interesante, aunque corresponda al periodo tardo-republicano, es la disputa del 87 a.C. entre las comunidades peregrinas de los *Salluienses* y los *Allauonenses* que conocemos por la *II Tabula Contrebiensis*<sup>347</sup> (HEp 3, 415). Se trata de una disputa que versaba sobre la construcción de un canal por los primeros, que tras haber comprado un terreno público a los *Sosinestani* no habían tenido en cuenta la voluntad contraria de los *Allavonenses*, por lo que se cuestiona tanto la validez de venta (l. 1-5), como si la infraestructura podía extenderse *per agrum privatum Sosinestanorum*<sup>348</sup> más allá del espacio delimitado por unos mojones hincados a tal efecto<sup>349</sup> (l. 6-11). Lo interesante para lo que nos ocupa es que en la controversia el gobernador C. Valerio Flaco, actuando en calidad de *imperator*, se sirve instrumentalmente del procedimiento formular romano vigente en Italia e indica que la elección de los jueces que dirijan la fase *apud iudicem* sean elegidos entre los senadores de *Contrebia* como comunidad peregrina neutral. En este procedimiento no se aplicó el derecho romano, pero se evidencia cómo las formalidades del edicto pretorio pueden ser incorporadas al edicto provincial para proteger la integridad de las propiedades públicas y privadas de comunidades peregrinas, en donde se recurre a la ficción de ciudadanía por ser terreno conocido por el gobernador en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. También Cicerón, en su defensa de la aplicación de los procedimientos establecidos por la *lex Rupilia* de la provincia de Sicilia frente a la perversión de estas normas por Verres queda implícito el ejercicio de la ficción de ciudadanía cuando un peregrino (siciliano) litiga con un ciudadano romano: *quod ciuis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex, quod Siculo a ciui Romano, ciuis Romanus datur* (Cic. 2Verr. 2, (13), 32<sup>350</sup>). En época alto-imperial la ficción de ciudadanía aparece incluso en ámbito

<sup>347</sup> Para un análisis pormenorizado de la controversia, dentro de la extensa bibliografía que se ha ocupado de la cuestión, remitimos fundamente a los análisis de D'Ors (1980) y Torrent (1981), quienes asentaron los fundamentos jurídicos y las divergencias interpretativas mantenidas después por quienes han retomado la cuestión.

<sup>348</sup> Sobre este asunto, llama la atención que deba tomarse una decisión sobre la venta de estos terrenos privados, en donde la expresión *iure suo vendidisse* plantea la existencia de un derecho de venta (*iure suo vendi*) que puede ser reconocido para los *agri* de los *Sosinestani* (vid. ln. 3; vid. Torrent, 1981: 97).

<sup>349</sup> En este punto alberga dudas la interpretación textual del fragmento, que ha oscilado entre *[i]ntra* de la primera edición del bronce y *u<l>tra* propuesto por Beltrán Lloris (2009), lo que altera en cierto modo el contenido de la disputa “más allá” (y, por tanto, por terrenos privados) o “más acá” de los mojones. En este sentido opto por la interpretación más reciente, si bien la cuestión sigue abierta.

<sup>350</sup> De manera resumida el procedimiento descrito por Cicerón que estaría vigente en Sicilia sería el siguiente según la situación de la partes: a) Entre peregrinos de la misma ciudad: derecho local b) Entre peregrinos de distintas ciudades: sorteo de jueces. c) Particular peregrino (demandante) – comunidad peregrina (demandado): senado de una ciudad peregrina neutral.d) Comunidad peregrina (demandante): - particular peregrino (demandado): senado de una ciudad peregrina neutral; e) Ciudadano romano

local. En el municipio latino de *Irni* sus munícipes (compuestos, recuérdese, tanto por latinos como por ciudadanos romanos, además de los *incolae* sometidos a sus jurisdicción) debían litigar por sus asuntos privados como si fueran ciudadanos romanos ante el pretor de Roma cuando sus *iura* locales no cubrieran determinadas casuísticas: *si eam rem in urbe Roma praetor p(opuli) Romani inter cives Romano iudicari iussisset* (cap. 91; *vid.* cap. 93).

Por tanto, las palabras de Agenio Urbico, que revelan cómo la *possessio* del *ager stipendiarius* provincial resulta muy semejante a la propiedad privada, pueden cobrar sentido dentro de las competencias del gobernador, en donde la llamada “propiedad peregrina” o “la propiedad provincial” gozan de ciertos mecanismos de protección en el edicto. Así pues la posibilidad de “vindicar” por una propiedad privada en *possessio* que indica el agrimensor, tiene sentido dentro del recurso formal que proporciona la “ficción de la ciudadanía” ante los litigios de individuos o comunidades que carecen de una constitución y ordenamiento romano pero se arrojan formas de defensa de sus propiedades dominicales (*vid.* Ando: 2016). En esta línea, la opinión de Kaser parece correcta: “de la tradición romana surge un grupo de fuentes en que *possidere* se encuentra junto a otras expresiones del dominio de la cosa – *habere, uti, frui*– en composiciones variables, pero evidentemente en dirección hacia un uso técnico. Éste se introdujo de modo aislado incluso en el edicto pretorio, y ahí designa, más allá de la simple posesión, un título similar a la propiedad de un individuo sobre los fundos provinciales, propios del Estado o del emperador” (Kaser, 2004: 166; *vid.* 155-67).

### 8.3 La propiedad peregrina en el Noroeste hispano.

En el Noroeste hispano existe una serie de inscripciones que pueden tener acomodo en este mismo esquema, en donde la “propiedad peregrina” constituye una propiedad privada que es respetada y reconocida por el derecho local de la comunidad. Pero también, a ojos de la administración romana, son *possessiones* desplegadas en los términos de ese *dominium* pleno, que puede ser protegido por la administración provincial en segunda instancia, quizás a través del *conventus iuridicus* primero (Dopico, 1986 y 2013) y de los *legati iuridici per Asturiam et Callaeciam* a partir del siglo II d.C. (Haensch, 2016: 41). Dado que se trata de un grupo de fuentes muy heterogéneo, y con no pocos problemas de datación e interpretación, es preciso analizarlas individualmente. Para ello se abordarán algunos indicadores ya apuntados por otros autores en esta misma dirección y que ahora completamos con un análisis de todas las posibles marcas de propiedad del cuadrante Noroccidental de la península Ibérica desde una perspectiva amplia, buscando conectarlas con el contexto arqueológico y ofrecer un esbozo sobre la situación administrativa de la comunidad a la que pueden adscribirse:

---

(demandante) – peregrino (demandado): juez siciliano. f) Ciudadano peregrino (demandante) – ciudadano romano: juez romano (ficción de ciudadanía: *vid.* Kaser, 2004: 163.) g) Otros asuntos: jueces del *conventus civium romanorum*.

▪ El caso más elocuente quizás lo constituya las *possessiones* de los *agri Paemeiobrigenses* que aparecen en el edicto de El Bierzo (AE 2000, 760), cuando se estaría produciendo el primer inventario de la región recién conquistada: *...eos agros sine controversia possi/dere iubeo / castellanis Paemeiobrigensibus...* (vid. Orejas, 2002: 405). No insistiremos más en la entidad administrativa de estos *castella*, de la que ya nos hemos ocupado a propósito del censo (cap. 5.3.1) y de la concesión colectiva de *immunitas* en el marco de la *civitas* (cap. 7.2). Basta en este sentido con remarcar varios aspectos. En primer lugar, que los *agri* integrados en la *civitas* de los *Susarri* aparecen bajo el control de un colectivo, el *castellum Paemeiobrigense*, por lo que cabría imaginar una forma de propiedad privada, o conjunto de propiedades privadas, dependiente(s) de este grupo social adscrito a determinados lugares, pero carentes de entidad administrativa. Se trata por tanto de propiedades que tienen sentido desde el espectro interno de las nuevas unidades fiscales (*civitates*) que se estaban conformando tras la pacificación, heredadas o no de las relaciones de propiedad inmediatamente anteriores, y que ahora se confirman en el nuevo orden romano. Sin embargo, a efectos del edicto imperial, la propiedad local toma cuerpo como una forma de *possessio*, de un dominio por el que se puede acudir a los legados de la provincia en caso de ser vulnerado. La decisión del edicto de confirmar la *possessio* seguramente se hubiera basado en un conocimiento previo transmitido por los *legati* (l. 6: *...cognovi ex ominibus legatis meis...*), cuando L. Sestio Quirinal estaba al frente de la *Transduriana Provincia* entre 21 y el 19 a.C. y se produce el antecedente a la controversia. Es decir, por mucho que el conflicto no se resolviera hasta el edicto del 15 a.C. de un modo definitivo cabe suponer algún tipo de interpelación de las partes a los legados del gobernador, que están procediendo a ordenar desde las nuevas coordenadas romanas el nuevo territorio conquistado. Aquí, sería interesante conocer quién era la otra parte contendiente, si era el mencionado *castellum Aliobrigiacini* de otra *civitas*, quizás los *Gigurri*, o si por el contrario se trata de otra entidad colectiva o privada de la propia *civitas Susarriorum* que no se nombra. Una u otra posibilidad dan lugar a una lectura bastante distinta. De ser el caso la primera opción, no sería extraño, dado el contenido fundamentalmente fiscal del edicto, que en realidad se tratara de una controversia *de territorio* entre dos *civitates* sobre propiedades poseídas individual o colectivamente. Así Higinio, un siglo más tarde, relaciona las disputas por *possessiones* de tierras con la cuestión del *exigere tributum* como una de las causas recurrentes de este tipo de *controversiae de territorio* (vid. Orejas, Sastre, Sánchez-Palencia y Plácido, 2001: 86), pues evidentemente ello tenía implicaciones en la *civitas* a la que estas propiedades debían tributar. De ser así, la *immunitas* implicaría un final automático del problema, como puede dar a entender la expresión *sine controversia* en sustitución de un dictamen final. Si, por el contrario, era un conflicto interno con los límites de un privado u otro *castellum* de la misma *civitas*, ello revelaría la capacidad de injerencia y de tutela de la administración provincial que, a partir de las capacidades jurisdiccionales de estos *legati*, podía resolver problemas que versaran sobre propiedades privadas en el seno de las *civitates* y entendidas, a sus ojos, como *possessiones* bajo el dominio pleno de los provinciales, cuando el derecho

local no diera una respuesta satisfactoria o hubiera disensiones internas, como parece el caso. Esta segunda posibilidad es coherente, por su parte, con la lectura política de los *castellani* como grupos de poder locales cuyos canales de comunicación con las nuevas estructuras del poder imperial redundan en un trato de privilegio que garantiza y amplía el proceso de construcción de una desigualdad útil (*vid.* Sastre, 2001a: 186-97). Sin embargo, dada la falta de elementos de juicio para confirmar cualquiera de estas opciones lo más prudente es dejar esta cuestión abierta.

- La conocida inscripción de Penedo de Remeseiros, datada en el siglo I d.C. (*CIL* II, 2476), que ya se ha abordado (*vid.* cap. 4.4), también puede ser considerada una indicación de propiedad provincial que funciona en los términos del *ius civitatis* (Orejas y Sastre, 1999: 178-79; Orejas, 2002: 405), en donde sólo conocemos al poseedor del arriendo, que busca con celo mantenerlo de generación en generación (*vid.* cap. 4.4). Sin embargo, el sustantivo *conducta* relativo a la parcela agraria permite imaginar la existencia de un *locator* que ostentaría el *dominium*, aunque no pueda determinarse si es un conciudadano del peregrino *Allius Reburri f.* o era la propia *civitas* quien arrendaba el prado como parte de su *ager publicus civitatis*. Por el lugar del hallazgo, que permanece *in situ*, el arriendo puede asociarse a distintas comunidades posibles a las que se ha adscrito este territorio. Situada en un punto intermedio que queda al Noroeste de Chaves y suroeste de Verín, puede relacionarse tanto con los *Bibali*, nombrados como *civitas* en Plinio (*NH.*, 3, 28) y en la inscripción de Padrão dos Povos (Chaves: *CIL* II, 2477), y como foro en Ptolomeo (2, 6, 42) como con los *Tamagani*, sólo conocidos por la epigrafía (*vid.* Alarção, 1988).

- Otro grupo de indicadores epigráficos lo constituyen inscripciones que, de forma más o menos explícita, reseñan marcas de propiedad asociadas a dominios agrarios y que, como afirman los agrimensores con insistencia, podían darse en muy diversos formatos y materiales en función de las costumbres locales, siendo en su mayoría escuetas referencias en genitivo al nombre del dueño en los soportes proporcionados por el medio natural del *fundus*.

La primera de ellas fue dada a conocer por Ferreira (1953: 198-99) tras su descubrimiento en el llamado Caminho da Telheira de Numão (Vila Nova de Foz Côa, Guarda), y en cierta medida olvidada hasta la revisión de Encarnação (1995: 218-20), quien la data en el siglo I d.C. y matiza la lectura de un epígrafe dispuesto a lo largo de una floración rocosa de gran tamaño: *Reburri P(ublii) Fil(ii) / Ortus* (*HEp* 5, 1031). Como concluye este autor, se trata de una propiedad perteneciente a un peregrino lusitano que acompaña su antropónimo indígena *Reburri* con la filiación a la manera latina, mediante la indicación del *praenomen* del padre. La omisión de la *h* en *ortus* se explica por la importancia de la transmisión oral en el proceso de aprendizaje del latín. La marca de propiedad de este <h>*ortus* se ubica en el medio rural de la *civitas* de los *Meidobrigenses*, mencionados por Plinio entre los *oppida stipendiaria* (*NH.*, 4, 118) y que cuentan con una indicación de *origo* en Lamego asociada a una peregrina con nombre único *Boutia* (Viseu: *CIL* II, 5250). El contexto arqueológico del hallazgo se asocia a restos de explotaciones agrarias romanas en forma de *villae* de mediana entidad



en la ribera occidental del Murça (Coixão, 1996; Alarcão, 1999: 32-33). Se disponen junto al trazado de una *via* que partía hacia el Norte desde el principal centro de la *civitas* en el actual Freixo de Numão, un castro de ascendencia prerromana que es reestructurado en época augustea o flavia de acuerdo al nuevo contexto (Alarcão, 1999: 32). En concreto, el *hortus* de *Reburrus* se encontraba a menos de 500 metros de la reconstrucción propuesta para la *via*, por lo que no puede desecharse que la marca de propiedad fuera también un indicativo de la responsabilidad muneraticia del dueño, obligado al mantenimiento de la vía adyacente por el tramo en que limitaba con su propiedad (*vid. infra*).

La siguiente inscripción fue encontrada al pie del monte de São Martinho (Castelo Branco), junto a otros restos de cronología romana, cuando se realizaban trabajos agrícolas en una finca particular (AE 2004, 719; HEp 13, 870). Se trata en este caso de un monolito cilíndrico de granito, bastante deteriorado por las labores en la superficie con el paso del tiempo, pero donde ha podido leerse con dificultad la forma en genitivo *Calaiti / Calvi (filii?)*, en la que “não se vislumbra qualquer outra utilização, para além de, possivelmente, estarnos perante um marco de propriedade” (Curado, Moreira y Salvado, 2004). De ser así, nos encontramos de nuevo ante una propiedad privada con onomástica peregrina, en forma de doble antropónimo compuesto por un nombre bien documentado en la región, *Calaitus*, acompañado de un *cognomen* latino (sin desechar que pueda tratarse de un patronímico). Sin embargo, es difícil otorgarle una datación segura. Posiblemente delimitaría una propiedad privada asociable al núcleo de poblamiento detectado en la parte superior del monte São Martinho, donde se ha documentado un recinto fortificado tipo “castro” y abundantes materiales de prospección que puede adscribirse a época romana: varias fíbulas, *terra sigillata* o monedas de Augusto y Galieno, quizás ya dentro de un habitat más disperso que supera el antiguo recinto fortificado de la edad del Hierro (*vid.* García y Leitão, 1982: 3-4). Aunque el conocimiento arqueológico del sitio sigue siendo bastante deficiente, pudo tener algún tipo de función cultual a juzgar por el considerable número de aras votivas de granito halladas en diversos puntos del monte (cuatro bien conservadas<sup>351</sup>: RAP 31, 209, 590, 633, y cuatro fragmentarias sin texto conservado: *vid.* García y Leitão, 1982, n<sup>os</sup> 5-8), además de la estela funeraria del siglo I d.C. de *Boutius Pelli f.* hallada el año 2000, quizás perteneciente a la *gentilitas* de los *Ilaesuri* (HEp 13, 867). Si tenemos en cuenta que la marca de propiedad no procede de un soporte reutilizado, puede relacionarse con un *fundus* privado quizás perteneciente a la comunidad de los *Tapori* a la que se ha adscrito este territorio<sup>352</sup> (Alarcão e Imperial, 1996: 39-44; Alarcão, 2000: 171; 2005a: 122), mencionada por Plinio (4, 118) entre los *oppida stipendiaria* y quizás promocionada a municipio latino en época Flavia según se infiere de un ciudadano

---

<sup>351</sup> Podrían añadirse otras tres encontradas por el Núcleo Regional de Investigação Arqueológica (Pires: 2011), que el autor anunció como pendientes de una publicación próxima, pero desconozco si permanecen inéditas (o si, sencillamente, no he logrado dar con la publicación).

<sup>352</sup> La controversia sobre la disposición de las comunidades lusitanas de esta zona viene animada fundamentalmente por la interpretación de la relación de comunidades en la conocida inscripción del puente de Alcántara (CIL II, 760). En este sentido, hay quienes han optado por atribuir esta zona a los *Lancienses Oppidani*, que debe apuntarse como otra opción perfectamente posible: *vid.* Guerra, 2007; Carvalho, 2006: 270-75.

romano de la *tribu Quirina* con indicación de *origo* de esta *civitas* (CIL II, 519), si bien no puede desecharse que el acceso a la ciudadanía pudiera haberlo obtenido por algún canal indeterminado en la capital conventual de *Emerita*, de donde procede la inscripción, en vez de *per honorem*.

En el contexto de la capital conventual de *Asturica Augusta* se documentó una inscripción, actualmente perdida, en la que se leía: *Paedatura / T(itii) I(ulii) Valentis / Zoelae* (CIL II, 2651; IRPLe 302; ERPLe 316). El término *paedatura* parece hacer referencia a una medición, que señalaría “posiblemente un terreno propiedad de un particular; el problema reside en saber a qué obedecía tal medida o entre qué lindes se realizaba” (ERPLe 316). Por el contexto de reutilización del epígrafe en la muralla de Astorga, junto a la llamada “Puerta del Rey”, bien pudo recuperarse de las inmediaciones agrarias de la capital, a la manera del resto de marcas de propiedad, en vez del interior de la ciudad. Esta interpretación ha sido acogida por la mayoría de autores que se han ocupado de la cuestión (Sastre, 2002: 60; Orejas y Morillo, 2013: 100). Mañanes (1982, nº 78: 91), en la misma dirección que Schulten (*vid.* 1962: 113) la interpretó como una estela funeraria, en donde la medición indicaría la delimitación del terreno concedido para el sepulcro. A mi juicio esta opción resulta débil, toda vez este tipo de operaciones carece de cualquier tipo de analogías sobre las que cimentar su hipótesis en la epigrafía funeraria del Noroeste, y no creo que el término *pedatura* o cualquier medición en pies deba vincularse exclusivamente a *tituli sepulcrales* como interpretan Vaquerizo y Sánchez (2008). Las “mediciones en pies” pueden versar sobre diferentes tipo de parcela, para lo cual sería deseable conocer sus dimensiones medidas o el formato de su soporte que, sin embargo, no se indican. En principio, una estructura onomástica claramente en genitivo que carece de *adprecatio Manibus* con la que concordar, parece más coherente identificarla con una indicación de propiedad privada agraria. Desde el punto de vista onomástico, el dueño presenta una estructura de *tria nomina* totalmente latinizada que contrasta con las formulaciones más comunes de ámbito zoela, en su mayoría compuestas por nombres únicos acompañados o no de filiación. Aunque esta estructura sí se da en algunos casos, el *nomen Iulius* sólo se documenta por dos veces en una misma inscripción en Picote (s. I - principios del II d.C.) y otra más en una inscripción tardía de Moral de Sayago, si se deja al margen la epigrafía militar de la zona (Beltrán, 2015, vol. I: 269). Sin embargo, los *tria nomina* no son suficientes para conocer su estatuto jurídico personal al faltar una mención de *tribu* que permita identificarlo con certeza como ciudadano romano. En este caso, el dueño de la propiedad no pertenece a la comunidad de *Asturica*, sino que indica su *origo* en la comunidad meridional de los *Zoelae*, seguramente atraído por las mismas razones que otras élites de impacto regional por la importancia de la *urbs Magnifica*, en tanto que capital conventual y sede de la *officina metallorum*, a pesar de carecer de una promoción jurídica probada (Orejas y Morillo, 2013; Santos y Dopico, 2016). La datación imprecisa de la inscripción complica en gran medida las interpretaciones que pudieran hacerse, algo para lo que no ayuda su desaparición.

Más dudas alberga la inscripción recuperada en las excavaciones de Castromao (Celanova, Ourense) efectuadas por García Rollán entre los años 1963 y 1967, para las que se ha propuesto la lectura: [-----] / *opus*/ [-----] / *Rufi Co[e/lern]um agri* y se ha

datado en el siglo I o comienzos del II d.C. por el tipo de letra (Rodríguez Colmenero, 1993, nº 630a). La incertidumbre viene marcada, fundamentalmente, por la falta de información sobre el contexto preciso del hallazgo, además de por el carácter fragmentario de la inscripción. Sin embargo, el hecho de que se inscriba en un ladrillo, un soporte distinto a la mayoría de inscripciones de este tipo procedentes del Noroeste, no invalida su posible función confinal tal y como queda patente en la descripción de los agrimensores que, como Sículo Flaco, reconocen una gran variedad de materiales indicativos de límites privados, desde cerámica reutilizada (*De cond. agr.* Th. 107=La. 142, 28) a muretes de ladrillo (*substructiones et maceriae*: Th. 113=La. 149), como sería el caso. Si la lectura es correcta, podría corresponder a otra marca de propiedad sobre propiedad agrícola como se intuye en la mención *agri* asociado al *cognomen* latino, *Rufus*, en genitivo, como único elemento nominal conservado. Su asociación con Castromao nos remite a uno de los recintos fortificados castreños de larga duración (s. V a.C.), que tras la ampliación y remodelación de su superficie habitable en el siglo I a.C., atribuida sin duda a los profundos cambios estructurales que implicó entrar en la esfera de influencia romana para toda la región (Currás, 2014, vol. 2: 760), se prolonga hasta una etapa final de abandono entrado el siglo II d.C. (García Rollán, 1971 y 2004). De este horizonte cronológico altoimperial procede la conocida *tabula* de Castromao del 132 d.C. (AE 1973, 295) que testimonia un pacto de hospitalidad de los *Coelerni* con un prefecto de la *I cohors Celtiberorum* de *Nova Augusta* (Lara de los Infantes, Burgos: Gimeno y Mayer, 1993: 316-21; Balbín, 2006: 195-96; González-Conde, 2016: 218-21), además de otros hallazgos epigráficos en el castro, como grafitos sobre *sigillata* (Caamaño, 1971) y un ara votiva dedicada al culto regional de *Reva* por un peregrino (AE 1991, 1041; *vid.* Fariña, 1991: 59-64). Para lo que nos interesa, este pacto de hospitalidad ha permitido adscribir con seguridad el territorio a los *Coelerni* (Tranoy, 1981: 382-83), que tuvieron en Castromao uno de sus principales enclaves y se extendían por la región actual de Celanova. En principio los *Coelerni* carecen de indicativos sobre una promoción de cualquier tipo. Aparecen en sólo una ocasión en forma de *origo extra civitatem* en Lugo<sup>353</sup> (AE 1974, 387) e *intra civitatem* en la presente marca de propiedad, si es correcta la reconstrucción de *Co[e/lern]um*, que ofrece algunas dudas. Por lo demás, los *Coelerni* son mencionados como *civitas* en Plinio (*NH.*, 3, 28) y en la inscripción de Padrão dos Povos del 79 d. C. (*CIL* II, 2477) y como *Coelerni ex Hispania Citeriore conventus Bracari* en la citada *tessera hospitalis*; por tu parte, Ptolomeo recoge el *oppidum* de *Coeliobriga*, quizás en referencia al propio Castromao (2, 6, 41).

Otra inscripción atribuible a este tipo de marcas sobre la propiedad agraria procede de Trobajo del Camino (San Andrés de Rabanedo, León), aunque de nuevo se desconocen las circunstancias precisas del lugar hallazgo. Se trata de un soporte sin trabajar, un canto rodado de pequeñas dimensiones en donde se ha leído *Privatu(m)* como indicativo de “propiedad privada perteneciente a una persona particular más que a un colectivo o institución política” (*ERPL*e 317; *vid.* *CIL* II, 5707). Aunque el texto resulta demasiado escueto para sacar grandes conclusiones, Sículo Flaco recuerda la

<sup>353</sup> La reconstrucción de *Co[e/lern]um* en la marca de propiedad ofrece algunas dudas.

costumbre existen algunos lugares de utilizar como mojones amontonamientos de piedras: *Alii congeries lapidum pro terminis observant* (*De cond. agr.* Th., 102=La. 138, 3). En principio, no hay lugar para considerar que se trate de una estela funeraria, pues aunque exista *Privatu(s)* en forma de *cognomen*, no se documenta en todo el cuadrante Noroccidental de la península, concentrándose en el entorno de *Barcino* y *Tarraco*. Del mismo modo, la utilización de este tipo de soporte en estelas funerarias no es común, y sólo la encontramos en regiones muy concretas en donde actúa como señal distintiva del hábito epigráfico local, tal y como ocurre en la comunidad vadinense (*vid. eg.* González, 1997; Sastre, 2002) o en el conjunto epigráfico de Belorado (Burgos; *vid.* Reyes, 2000). Es cierto que el término *privatum* no resulta común en la epigrafía, pero existen otros testimonios que apuntan de manera inequívoca a esta forma de indicar la propiedad individual en el paisaje, tal y como lo encontramos en la señalización de un *iter privatum* en la inscripción rupestre de Algimia de Almonacid (Castellón; Beltrán y Arasa, 1980<sup>354</sup>). El lugar del hallazgo en Trobajo de Camino nos remite al contexto periurbano de *Legio* (León), fundada con Augusto como sede campamental de la *Legio VI* y que tras la consolidación de sus estructuras defensivas hacia el 15 d.C. se convirtió finalmente en la sede estable de la *Legio VII* el 74/75 d.C. junto a las nuevas reestructuraciones del campamento en época Flavia (Morillo, 2003: 90-104). El conocimiento arqueológico del entorno próximo al campamento es todavía insuficiente, pero algunos trabajos e intervenciones realizadas en los últimos años han destacado la presencia de asentamientos civiles en su área inmediata, como el de la zona de San Lorenzo (73/74-III d.C.; Vidal y García, 1996) o el existente junto a la parte sur y occidental (Morillo y Salido, 2014: 525-26; Morillo, Salido y Durán, 2014: 119-27). A ellos se suman los resultados de las excavaciones del 2000-2001 en las que se ha identificado un *vicus* militar en Puente Castro, a 2 km al sur del campamento (s. I- 270 d.C.: Álvarez, Rodríguez y Martínez, 2000-01; Bejeda *et al.* 2012: 334-36), quizás identificable con el *vicus Ad Legionem VII* mencionado en una de las cartas de S. Cipriano (Teja, 1990 y 2005; Fernández, Salido y Zarzalejos, 2014: 120 n. 20; Bejeda *et al.* 2014). Estos avances en el conocimiento arqueológico han revelado una composición social no exclusivamente militar, tal y como ya se intuía en la epigrafía asociada a *Legio*, en la que puede reconocerse “un importante y heterogéneo grupo de civiles en el entorno del campamento, [aunque] las inscripciones conservadas no resuelven cuestiones como la categoría jurídica del asentamiento, que no parece haberse convertido en *municipium*” (Morillo, Salido y Durán, 2014: 123). Sobre la cuestión estatutaria de *Legio* sólo se ha adivinado el estatuto municipal a partir de la existencia de un *lictor* (AE 1967, 225), basado en su función de “auxiliar al magistrado” (Hernández Guerra, 2007: 59) pero que, como ha apuntado Palao (2009: 277), no constituye una prueba suficiente para afirmar tal concesión.

Otro ejemplo lo proporciona una inscripción rupestre identificada en 1880 por Martins Sarmiento (1901: 133-134) en un área conocida como Bouça do Capitão, en las faldas del llamado coto do Sabroso (Barco, Guimarães, Braga), si bien fue desgajada del

<sup>354</sup> CIL II<sup>2</sup>/14, 275 = AE 1984, 606: *Iter privatum / M(arci) Baebi Se/verini*. De Roma procede otra demarcación semejante sobre una parcela: *Ab angulo / qui ripam / contingit / usque et viam / Flaminiam / Calpurniae / M(arci), filiae) Messallae / privata* (CIL VI, 29782).

afloramiento de granito original por Cardozo para su exhibición en el Museu da Sociedade Martins Sarmento, en donde todavía se encuentra. Las primeras lecturas sólo reconocían un antropónimo que oscilaba entre algunas variantes en torno a *Culceius* (CIL II, 5593; Cardozo, 1972: nº 1; Rodríguez Colmenero, 1993: nº 27), sin paralelos en la epigrafía peninsular. Sin embargo, gracias al mejor conocimiento arqueológico y epigráfico de la cercana “citânia de Briteiros”, la propuesta reciente de Redentor ha puesto de manifiesto su probable función de marco de propiedad predial, en donde la relectura de algunos nexos permite dar un contenido sensiblemente distinto, ahora relacionado con las oligarquías locales ligadas a la producción cerámica: *Arg(i)* (tridente invertido) (Redentor, 2011, vol. I: 196-97; vol. 2, nº 342). Como propone el autor, “não seja demasiado aventuroso pensar nesta inscrição rupestre como marco de propriedade – daí propormos o seus desdobramento em genitivo – que assinalaria, assim, um espaço na posse do *officinator Argius*, conhecido por um número considerável de peças encontradas na citânia de Briteiros e que teria como marca o tridente invertido, como decorre da interpretação de uma das pedras de alvenaria epigrafadas da citânia” (Redentor, 2011: vol. I: 196). De hecho, siempre siguiendo a este autor, la ubicación original de la inscripción rupestre nos remite precisamente al río Ave, zona potencial de captación de materias primas para la producción cerámica gracias a sus ricos recursos arcillosos. Aunque se trate de una inscripción bastante críptica, la lectura me parece acertada a juzgar por la fotografía, con el aliciente de la relación que ahora puede establecerse con el papel y la influencia que desempeñó el castro de Briteiros en su entorno próximo, materializadas en las relaciones de propiedad de sus élites. Se trata de unos de los llamados “grandes castros” que se transforman al abrigo de la irrupción de Roma en la región a partir del siglo I a.C. alcanzando las 24 ha y con un espacio intramuros estructurado por tres prominentes recintos defensivos, que pudo nutrirse en estos momentos de cambio de los aportes poblacionales de otros castros cercanos, como Sabroso o Santa Iria (Silva, 2007: 106-11; Lemos y Cruz, 2011; Fonte *et al.*, 2011; *vid.* Sastre, 2004). En la etapa alto-imperial del castro sobresale además una inusual concentración de marcas de propiedad de diversa índole que debemos comentar brevemente en relación a la anterior de coto do Sabroso<sup>355</sup>.

Las más conocidas son algunas recogidas en el interior del recinto, en donde se documentan varios antropónimos normalmente interpretados como indicativos de la propiedad individual o familiar sobre la casa, inscritos en sillares o distintos elementos constructivos que actúan como soporte. Los casos más explícitos son dos conocidos dinteles, uno decorado y en granito en el que se indica *Coroneri / Camali / domus* (CIL II, 5595), que señala su propiedad sobre la construcción, y otro, sin decoración, en el que se indica *Camali Domi / Caturo Camali* (CIL II, 5590). Ello ha permitido interpretar otros testimonios semejantes en esta misma dirección, aunque no aludan a la *domus*, pero que aparecen también en genitivo y en soportes semejantes del interior del castro junto a estructuras habitacionales. Así es el caso del dintel *Camali [domus?]* (CIL II, 5588) asociado a un hogar de planta rectangular, al que se añaden otras dos losas

<sup>355</sup> Las características geomorfológicas de Briteiros, con abundantes afloramientos graníticos, son sin duda una condición de partida para explicar la abundancia de sus inscripciones rupestres, incluyendo un elevado número de petroglifos (una síntesis sobre estas cuestiones en: Valdez y Oliveira, 2005).

asociadas a este nombre, también con la forma en genitivo *Camali*, en el interior del castro (Cardozo, 1972: n<sup>os</sup> 4 y 7; Rodríguez Colmenero, 1993: 57; Redentor, 2011: n<sup>os</sup> 180 y 181). Aunque estos cinco casos resultan asumibles, el problema nace cuando esta interpretación se ha generalizado de manera mecánica y acrítica para todas las referencias a antropónimos relacionadas con el castro de Briteiros, que pasan entonces a indicar la propiedad sobre las casas, y se erige incluso como argumento importante de un modelo social para época prerromana, el denominado como *societés a maison* (González Ruibal, 2006: 405-06). No es momento para abordar la cuestión de los problemas metodológicos de la utilización de la epigrafía para el análisis de las sociedades prerromanas (*vid.* Sastre, 2001a: 164-66), máximo cuando en el mismo dintel de la *Coroneri Camali domus* “es posible que se estén tratando de imitar motivos vegetales clásicos” (González Ruibal, 2006: 387). Aunque no pueda ofrecerse una solución definitiva para todos los ejemplos, creo que debe imponerse la cautela cuando desconocemos las terminaciones (y, por tanto, el caso) de algunas de ellas, más aún cuando otras, en dativo, parecen aludir a otro tipo de funcionalidad. Así ocurre con algunas inscripciones asociadas a estructuras habitacionales, como la inscripción en dativo *[C]aturo / Viriatís* en una losa de un hogar de planta redonda cercana a la muralla en su parte occidental (*CIL* II, 5586; Cardozo, 1972: 9; Rodríguez Colmenero, 1993: 57; García Martínez, 1995: n<sup>o</sup> 32; Redentor, 2011: n<sup>o</sup> 184). También la procedente de una estructura oblonga que en origen se conoció como la “Casa de los Lares” por leerse en una losa *Lari* (Cardozo, 1985: n<sup>o</sup> 9), para la que después se propuso *Latr(ono)* o *Lar(ono)* (*CIL* II, 5597; *HEp* 5, 973; Rodríguez Colmenero, 1993: n<sup>o</sup> 27; García Martínez, 1995: n<sup>o</sup> 39; Redentor, 2011: 186). O la inscripción rupestre de la acrópolis, cercana a la ermita medieval de São Romão, para la que se han sugerido diferentes lecturas en dativo: *Fialicato* (Cardozo, 1985: n<sup>o</sup> 193; García Martínez, 1995: n<sup>o</sup> 37), *Falcato* (Rodríguez Colmenero, 1993: n<sup>o</sup> 22) y *Camali Cato* (Redentor: 2011, n<sup>o</sup> 346). Muy cercana a la anterior, en un afloramiento rocoso de granito, se ha leído el dativo *Salibo* (Cardozo, 1985: n<sup>o</sup> 194) o *Salito* (Redentor, 2011: n<sup>o</sup> 351), con finalidad semejante. A ellas se suman nuevos hallazgos epigráficos tras algunas intervenciones arqueológicas recientes, como las acometidas por Sande Lemos y Cruz en el sector 7, en el que fue hallada, en 2009, una losa entre los escombros procedentes de un núcleo habitacional de la antigua campaña de Sarmento, para la que sólo se lee *Aus*, pero que, de nuevo, se ha propuesto entender como la marca de propiedad *Aus[ci]* (Redentor, 2011: n<sup>o</sup> 179). O la antigua inscripción *Auca* sobre la *pedra formosa* del balneario sur (Calo, 1994: 168-69), entendida originariamente con un sentido funerario, al considerarse erróneamente esta estructura como una cámara de incineración (García y Bellido, 1968: 18-23 y 38-39), y que tras la campaña de 2007 se ha visto completada con otro nominativo, *Camalus*, ahora con una finalidad votiva más clara que seguramente se relacione con el culto al agua (Redentor, 2011: n<sup>o</sup> 177). Un significado análogo pudo tener la inscripción aparecida en un afloramiento de granito cercano a la *pedra formosa* del segundo balneario de Briteiros, en donde dos o más individuos (*Coru* [---] / *abe* [---]? / *Medamus* / *Camali*) pueden estar ofreciendo una dedicatoria relacionada con los rituales iniciáticos y curativos asociados al termalismo (Diez de Velasco, 1997: 89; Pérex y Miró, 2017: 37.1) aunque se encontrara cercana a la casa

reconstruida por Sarmento, con la que se suele poner en relación (Rodríguez Colmenero, 1993: nº 18; García Martínez, 1995: nº5; Redentor, 2011: nº 347). De hecho, el *Medamus Camali* de esta inscripción rupestre es posiblemente el mismo individuo que realiza una dedicatoria a la divinidad acuática *Bormanicus* en el ara de São Miguel das Caldas (Vizela, Braga), una localidad termal próxima a Briteiros (*CIL* II, 2402; Díez de Velasco, 1997: 89; Andreu, 2017; Pérex y Miró, 2017: 37.1; *vid.* García Martínez, 1995: 140-42).

Por último, cuatro inscripciones asociadas al castro de Briteiros han tendido a ser interpretadas de manera un tanto mecánica como marcas de propiedad individual sobre la *domus* por tratarse de nuevo de antropónimos en genitivo. Sin embargo, por el contexto del hallazgo y las características de sus soportes, que no son en apariencia elementos constructivos, sino epigrafía rupestre desgajada del medio natural en época contemporánea, puede lanzarse la hipótesis de que correspondan a propiedades agrarias de las inmediaciones, como la mencionada de coto do Sabroso. Éste podría ser el caso de varias inscripciones encontradas fuera del recinto habitado o en contextos de reutilización, como la descubierta en 1876 por un lugareño al pie del cerro de São Romão junto al camino que conducía a lo alto del poblado, en donde se ha leído el nombre *Arg(i)* (*tridente*) que parece asociarse a una notable familia local relacionada con la producción de cerámica (*vid. supra*; Redentor, 2011: nº 176; *cfr.* Rodríguez Colmenero, 1993: nº 21). Del mismo modo puede contemplarse esta posibilidad para la inscripción reutilizada en el cementerio y en la que, tras un periodo de pérdida, Redentor ha podido completar la lectura *Vironi Camali* (Redentor, 2011: nº 190). Del mismo modo, se ha documentado una laja de granito tosca que estaba reutilizada en los cimientos de una vivienda particular en Ribas, de la que se dio noticia de su origen en Briteiros o inmediaciones, en donde aparece inscrito *Canigi* (*CIL* II, 5591; Cardozo, 1972: nº 8; García Martínez, 1995: nº 31; Rodríguez Colmenero, 1993: nº 25; Redentor, 2011: nº 182). Por último, una inscripción rupestre con indicación *Talabari*, que fue extraída para ser expuesta en el Museo Martins Sarmento, procedente de las intervenciones de Ribeiro en 1930 en torno a un peñasco granítico situado cerca de la parte sur de la zona habitada (Cardozo, 1985: nº 11; Rodríguez Colmenero, 1993: nº 20; Redentor, 2011: nº 189), podría remitir a un contexto agrario cercano o inmediato al poblamiento altoimperial de Briteiros<sup>356</sup>.

Son, en efecto, muchos los interrogantes que plantea la proliferación, en un poblamiento concreto, de este tipo de epigrafía, muchas veces fragmentaria y de difícil lectura, pero en la que se adivina una amplia diversidad de significados y funcionalidades que van más allá de la generalizada relación establecida en torno al hogar familiar y que, menos aún, se trate de una práctica desarrollada por todos los segmentos sociales. No en vano son, en su mayoría, estructuras onomásticas peregrinas que tienden a repetirse con especial presencia local y regional, sirviendo el medio epigráfico para afianzar su autorrepresentación y visibilizar su posición social prominente en el contexto de las oligarquías rurales. Ya se ha destacado, por ejemplo,

---

<sup>356</sup> La adscripción del valle del Ave a una comunidad concreta es problemática, si bien se ha apuntado con fundadas reservas su inclusión en el *populus* de los *Bracari* ante la inexistencia de otras pruebas concluyentes (*eg.* Alarcão, 1998: 52; Tranoy, 1981: 64-65; Dopico y Santos, 2017: 125-26).

que sea precisamente la “casa de Coronerus, hijo de Camalus”, del dintel decorado de Briteiros, una de las unidades domésticas de mayor entidad y espacio asignado (Lemos, 2009: 157), en lo que se presume un distintivo de la clase dominante. Puede concluirse, en suma, que es en el contexto de las aristocracias rurales cuando la apropiación individual del espacio a través del lenguaje escrito ejerce una función encaminada a la confirmación de la desigualdad, en donde toda vez la memoria del individuo se asocia a determinados lugares mediante la petrificación de sus nombres sobre hogares, dominios agrarios o espacios cultuales, permite identificarlo como parte de ese grupo social dominante a la vez que recuerda su acceso privilegiado a la propiedad y a la divinidad.

El peso del que podríamos denominar como “modelo *domus* de Briteiros” también ha trascendido de manera un tanto injustificada en la interpretación de otra inscripción en genitivo que es, sin embargo, ajena a este entorno. Es el caso del epígrafe procedente de Tondela, en ámbito lusitano, que dio a conocer Monteiro en 2004; presenta el genitivo *Caudici* y datado, por sus caracteres paleográficos, en el siglo I d.C. (Viseu: *AE* 2004, 710; *HEp* 13, 1040): “mui versimilmente destinado a figurar na fachada – ou mesmo, quiçá, acima da porta de entrada – de uma casa leva-nos a supor que se subbentenderá a palavra *domus* e que teremos aqui algo de equivalente ao que sucede na Citânia de Briteiros, em relação a *Camali domus*” (Monteiro, 2004, nº 349). Esta afirmación choca, sin embargo, con las características del soporte que, a juzgar por la fotografía, no corresponde en ningún modo a un dintel como los de Briteiros, sino que se trata de un bloque irregular de granito semejante al anterior de Trobajo (León, *vid supra.*), carente de molduras y aparentemente extraído del medio natural sin más alteración que el propio texto inscrito. De hecho, el contexto del hallazgo, reutilizado en una vivienda moderna de esta localidad, no permite establecer relación alguna con estructuras habitacionales o núcleos de poblamiento determinado, como pudieran ser algunos “castros romanos” documentados en la Serra do Camulo, tales como el de São Bartolomeu (Vaz, 1993: 140; *vid.* Plan arqueológico director de Tondela: E.2.7.047), o con otros en forma de *villae* y en espacios abiertos que proliferan en toda esta región durante época romana (Vaz, 1996). Ante la falta de elementos de juicio que confirmen este tipo de extrapolaciones, creo que es conveniente replantear la cuestión hacia un uso más probable de mojón entre dominios agrícolas privados a la manera de los analizados previamente, con los que sin duda comparte una mayor afinidad morfológica, son cuantitativamente más numerosos y se nos presentan menos focalizados desde el punto de vista de su dispersión espacial que los excepcionales ejemplos de Briteiros. De ser así, se trataría de una nueva indicación sobre la propiedad agraria de un peregrino, *Caudicus*, de nombre poco común, sólo documentado otras tres veces en ámbito exclusivamente lusitano: como nombre único en Montelavar (Sintra: *AE* 1962, 326) e Idanha-a-Velha (Castelo Branco: *HAE* 1107), y como *cognomen* de un *flamen* en Terrugem (Sintra: *AE* 1987, 478a). Si se asume una procedencia cercana a Tondela se trataría con toda probabilidad de un territorio asignado a la *civitas* de los *Interannienses* gracias al hallazgo de un *terminus augustalis* del 4 d.C. en la cercana Guarda (Tondela, Viseu: *HEp* 15, 541; *vid.* Alarcão, 2006: 131-34). La propiedad se incribiría en una comunidad que Plinio recoge entre los *oppida stipendiaria* del *conventus Scallabitanus* (*NH.*, 4, 118) y que Flegonte sólo menciona como *polis* de *Interamnesia* en época de



Adriano, a propósito de varios peregrinos centenarios procedentes de esta comunidad (I, 62-64; *vid.* cap. 5.2.2.). Ahora, tras el análisis promenorizado de la tradición manuscrita relativa a la inscripción del puente de Alcántara (*CIL* II, 759; 760 y 761), no cabe suponer que todas las comunidades en ella mencionadas ostentaran el expediente municipal como se pensaba, toda vez el término *municipia* corresponde a una adición reconstructivista del *praescriptum* de Nebrija, así como los propios *[Interan]nienses*, que sólo pueden intuirse (Carbonell, Gimeno y Stylow, 2007).

Quizás también perteneciente al ámbito de los *Interannienses* sea la inscripción rupestre encontrada en un afloramiento granítico de gran tamaño situado en el lugar conocido como “La Mercadora”, cercano a la localidad de Penela da Beira (Penedono, Viseu: *AE* 1986, 292; *HEp* 1, 699). Datada hipotéticamente en el siglo II por sus rasgos paleográficos, su lectura presenta escasos problemas por el gran tamaño de sus letras y su profunda incisión en la roca: *Visancorum / Camali / Concili*, interpretada acertadamente como una marca de propiedad (Botto, 1986). No estoy a favor, como propone la autora, de que deba entenderse *Camali (et) Concilus*, lo que da lugar a una propiedad ostentada por dos individuos. A mi juicio lo más natural es pensar en un sólo propietario peregrino con un doble idionimo, “de Camalo Concilo, de los Visancos”, aunque no pueda desecharse que *Concili* actúe como patronímico (*vid.* Botto, 1986). Desde luego, resulta extremadamente arriesgado considerar, sobre todo si nos atenemos a las características formales de la inscripción, que *Concili* guarde relación alguna con un *concilium* como planteó Rodríguez Colmenero (1993, nº 11: 37-40). De hecho, la transcripción *concili* sobre la que apuntala su teoría y le sirve para debilitar el nominativo *Concilus* de origen, no aparece siquiera en la fotografía que él mismo proporciona. Debe tenerse en cuenta que a pesar de que *Concilus* sólo se documente en esta ocasión, la presencia de nombres carentes de paralelos es un fenómeno especialmente común en este tipo de contextos rurales, con usos onomásticos localistas más acusados. Del mismo modo, la inscripción rupestre de Nespereira (Cinfães, Viseu: *AE* 2001, 1160), donde sí aparece con claridad la institución del *concilium*, resulta difícil de utilizar desde un punto de vista comparativo como propone Fernández Calo (2016: 112-114), primero por el carácter fragmentario y profundamente críptico de su texto<sup>357</sup> y, segundo, porque a juzgar por los términos que en ella aparecen (*Foros* y las posibles comunidades de *Paesures?* *Seari?*, *Olemenses?*), parece indicar un límite fronterizo de otro tipo, seguramente fruto de una controversia. En último lugar, hay poco que decir sobre la adscripción de *Camalus Concili* como *Visancorum*, un colectivo social del que no volvemos a tener noticia y se ha relacionado con Viseu (*vid.* Fernandes, Carvalho y Figueira, 2009: 149-150) con ciertas reservas (Guerra, 1999: 426-27), pero que quizás toma sentido como seña distintiva de una unidad organizativa que remite a un determinado estatus social o familiar privilegiado de referencia, que

<sup>357</sup> *AE*, 2001, 1160; *HEp* 10, 745=11, 712=14, 460: - - - - - / [- - - - -] / *Clemens* [- - -] / *concilium* [- - -] / *C R D S* [- - -?] / *foros* · *Paesur* · *SEA* / *contumaces* [- - -] / *hic* · *Sear* · *I*. Los desarrollos propuestos difieren ostensiblemente en el significado de esta inscripción y, por tanto, en el papel y la naturaleza del *concilium* aquí mencionado (*vid.* Encarnação y Pinho, 2001; Vaz, en *HEp* 11, 712; Alarcão, 2005b: 152-56).

busca de este modo visibilizarse en la marca de propiedad de su dueño y en el propio paisaje.

Para finalizar este conjunto faltan por analizar dos inscripciones que, por diversas razones, generan algunas dudas. La primera se sitúa en un ámbito muy cercano a la capital conventual de *Bracara Augusta*, reutilizada en la Iglesia de Esporões (Braga: *AE* 1983, 578), con una indicación *Severi* interpretada como marca de propiedad por diferentes autores (Santos, Le Roux y Tranoy, 1983: 201; Fontes *et al.*, 2009: n° 565; Redentor, 2011: n° 352). Las dudas provienen en este caso de la morfología del soporte, con cierta apariencia de estela de granito y que, a pesar de tener un aspecto tosco y carente de molduras o decoración, quizá haya sido fragmentada en su parte superior, con la consiguiente pérdida de elementos informativos que pudieran completar en otro sentido la formulación *Severi*; ésta, por otro lado, se dispone extrañamente en el extremo superior del epígrafe a pesar del abundante espacio inferior disponible. A pesar de estas reservas es preciso remarcar como argumento a favor un contexto arqueológico que remite a una posible *villa* romana documentada, en las proximidades inmediatas de la iglesia, por materiales constructivos y cerámica común romana hallada en prospecciones de superficie (Carvalho, 2008, vol. I: 317; vol. 2: 28-29). Con este contexto rural también habría que poner en relación el ara a Júpiter dedicada por un liberto, e igualmente reutilizada en la iglesia de Esporões (*AE* 1983, 553). Por otra parte, el hipotético propietario indicaría simplemente su *fundus* a partir de *Severus* en genitivo, lo que no deja de ser sorprendente por tratarse de un nombre excesivamente común para su empleo con este fin, para el que sería más apropiado utilizar algún otro elemento onomástico identificativo. Según los cálculos de Tranoy para todo el conjunto del Noroeste hispano, *Severus* es el tercer *cognomen* en frecuencia, sólo por detrás de *Iulius* y *Valerius* (1981: 363-364), encontrándose en análoga posición en ámbito galaico como *cognomen* o idionimo único, sólo superado en este caso por *Rufus* y *Flavus* (Vallejo, 2009: 232-33) y el primero para el conjunto de *Hispania* (Abascal, 1994: 506); ello, lógicamente, impide conocer su condición jurídica como propietario. En cualquier caso, se trataría de un dominio agrario que debe enmarcarse en el entorno de *Bracara Augusta*, para la que se han advertido algunos visos de organización centuriada en el espacio agrario (Carvalho y Azavedo, 2011; Carvalho, 2012; *vid.* cap. 4.4). En principio, es una ciudad de nueva planta de época augustea sin un origen campamental demostrado, aunque todavía existen incógnitas sobre el papel desempeñado por las poblaciones preexistentes en su proceso fundacional (*vid.* Morais, 2005a; Martins y Fontes, 2010). Experimenta, a lo largo del siglo I, un paulatino proceso de monumentalización que se hace más acusado en época Flavia y Antonina, fruto en gran medida de su crecimiento económico como eje dinámico y centralizador de las actividades comerciales y productivas en la región, animadas también por sus funciones administrativas sobre todo el *conventus Bracaraugustanus* (*vid.* Martins, 2000; Morais, 2005b y 2010; Martins y Carvalho, 2016). Sin embargo, no existe una posición común sobre la situación estatutaria de la ciudad y su evolución a lo largo del tiempo, como ocurre en el resto de capitalidades conventuales del Noroeste. Se ha destacado que Plinio sólo la nombra como *bracarum oppidum Augusta* (*NH.*, 4, 112) y que en su relación de *populi* por *conventus* no la mencione propiamente, como sí

hace con *Asturica*, limitándose a recordar al *populus* de los *bracari* (*NH.*, 3, 28) en referencia a su origen peregrino. En los últimos años, se ha tendido a pensar que el disfrute del *ius Latii* fuera ya un *beneficium* otorgado por Augusto, no siendo hasta época Flavia cuando adquiere el rango municipal (Le Roux, 1994a y 1996; Martins y Fontes, 2010: 112). Cabe destacar, sin embargo, que la hipótesis se ha fundamentado exclusivamente en la importancia socioeconómica de la ciudad, pues no existen documentos explícitos que recogan tal concesión; no lo menciona Plinio como hace para otras comunidades (más allá de la concesión universal en *Hispania* con Vespasiano) y los porcentajes de ciudadanos romanos, atestiguados en su seno, se ven necesariamente distorsionados por la presencia de miembros del aparato estatal o de los *cives romani qui negotiantur Bracara Augusta* desde comienzos del s. I d.C., tal y como reza una dedicación al *legatus* de época julio-claudia (*CIL* II, 2423). Aunque todavía no pueda resolverse esta cuestión, sería más probable que tanto el *ius Latii* como el expediente municipal lo hubieran recibido en época flavia de manera conjunta, para lo cual deben dejarse a un lado los argumentos del tándem *Romanización formal* - urbanismo. En este sentido, debe mencionarse la reciente hipótesis de Morais a partir de unas lucernas que pudieron tener la marca: *Ex officina / Lucretii / G(-) (ex) M(unicipii) B(racarum) f(iglinis)*, expresando quizás algún tipo de *locatio-conductio* entre el municipio y la familia de los *Lucretii* que sellara este proceso productivo (Morais, 2006; *vid.* AE 2004, 771a-c). Ello nos llevaría al primer indicativo sobre la condición municipal en un momento entre el 75-80 y el gobierno de Adriano, según ha podido datarse por los rasgos tipológicos de las lucernas. A favor de que *Bracara* fuera municipio creo que es importante hacer una pequeña digresión y destacar el salto cualitativo que supone la existencia en la ciudad de actos evergéticos como el de la “Fonte do Idolo”, cuya razón de ser va allá de un mero acto social y resultan totalmente excepcional en todo el Noroeste (*vid.* cap. 5.3.3). Documentar la práctica evergética implica un fenómeno de torsión de la mentalidad colectiva que, frente a las “élites insolidarias” del resto del Noroeste, no sólo supone la existencia de esa ideología censitaria, tan romana, en donde cada cual contribuye en la medida de su riqueza, como condición de partida (*munera*). Supone un paso más, que la adquisición de riqueza privada por un individuo le permite exigir su inclusión dentro de la élite gobernante, de modo que la aparente progresividad tiene su fundamento último en la justificación de la desigualdad y su consiguiente reproducción mediante actos evergéticos. Así el *ius Latii*, que erige en ciudadanos romanos a sus élites políticas (y económicas), es muy coherente con este fenómeno evergético, en donde la reproducción de la oligarquía como especie necesita revertir en la comunidad parte de las riquezas en forma de *honores*, pero que emanan de su condición como clase gestora de los *munera*. A mi juicio, se trata de uno de los principales indicadores que pueden utilizarse para evaluar el impacto del derecho latino, especialmente en zonas como el Noroeste, por ser un síntoma explícito de que la estructura social y, con ella, la ideológica, ha cambiado de manera irreversible. En cualquier caso, y desgraciadamente, los problemas cronológicos del marco de propiedad impiden conocer a cuál de estos dos momentos pudo adscribirse, si a su etapa como comunidad peregrina o como municipio latino.

En último lugar, debe aludirse, aunque sea de manera sucinta, a la complicada inscripción rupestre del lugar de As Torras en Carvalhal de Vermilhas (Vouzela, Viseu). Desde la primera lectura, sencilla, de Encarnação, que simplemente interpretó *Paisaco* como una dedicación a una divinidad local hasta entonces desconocida (Encarnação, 1975: 256-57), el paso de los años ha ido incorporando trazos, lecturas y reinterpretaciones de lo más diverso. En este sentido, únicamente Rodríguez Colmenero la consideró como una posible marca de propiedad privada: *Anio Velli (filius) [agrum oc]/cupavit / Paisicaico pos(uit)/ hac ins(trumentum ó inscriptionem)* con el significado de “Anión, hijo de Vello, tomó posesión de este campo? Paisicaico puso por aquí el título de propiedad” (Rodríguez Colmenero, 1993: nº 7). Sin ánimo de entrar en las abundantes tribulaciones alrededor de este texto, es suficiente decir que la crítica posterior ha desechado de manera unánime esta hipótesis, tendiendo a reconocer dos momentos distintos en el proceso de ejecución del epígrafe, lo que en gran medida ha facilitado esta convivencia extraña y confusa de elementos. Por un lado, una primera parte más antigua, que mantendría una finalidad votiva y, por otro, una segunda añadida con posterioridad que, de forma independiente a la anterior, recordaría por dónde pasaba el “límite de los Paisicaicos”: - - - - - *[occu]pavit / Paisicaico / hac finis* (Gasperini, 2004: 227-235; *vid.* Vaz, 1995a: 109-110; 2000: 484-486; Olivares, 2002: 54), a la manera del cercano *trifinium* de *Silvares* por una división de aguas<sup>358</sup> (*vid.* *HEp* 10, 2000, 750).

■ Si recapitulamos, en el capítulo dedicado a las competencias y funciones que pudo desempeñar la estructura conventual en el Noroeste apuntamos su presumible labor de intermediación entre la administración provincial y las élites de las *civitates* para el aporte y la coordinación de la mano de obra empleada en distintos fines (*vid.* cap. 5.2.1). En este sentido, la red viaria del Noroeste, que tiene como nota distintiva respecto a otras zonas hispanas una estructuración basada en la lógica conventual, podría explicarse por las *munitiones viarum* exigidas desde las capitales del *conventus* a las *civitates* dependientes para las labores de construcción (*vid.* cap. 5.2.1). Es decir, frente a quienes han visto en este fenómeno la “territorialidad” del *conventus* bajo la forma de distrito, puede darse sin embargo una “solución muneraticia”, en donde los *conventus* siguen siendo un sumatorio de las *civitates* que lo integran y que dependen, en última instancia, de la capital conventual. Dentro de este esquema, la responsabilidad del mantenimiento de la red viaria habría recaído colectivamente en las *civitates*, para las cuales no se conocía parcelación interna por ser *ager per extremitatem comprehensus*, lo que impedía asignar una responsabilidad individual desde la administración romana. Era entonces la *civitas*, en razón de la autonomía conferida para sus asuntos internos, quien debía elegir cómo hacer frente a las obligaciones sobre los

<sup>358</sup> No comentaré la inscripción rupestre, también de Vouzela (Viseu), en donde se indica un topónimo mediante la expresión *Hic / locus Dere/vaecas vocatus* (*HEp* 6, 1086), pues aunque se ha interpretado como un distintivo de propiedad que busca remarcar su carácter privado respecto a las inmediatas explotaciones de estaño (Vaz, 1995b), no es algo que pueda extraerse directamente de la lectura del epígrafe.

tramos de vía que le eran asignados o correspondían a sus límites territoriales, evitando enajenaciones privadas y manteniendo el sistema en buen estado de conservación.

Este excursio era necesario para dotar de un marco teórico al pequeño conjunto de inscripciones que han sido interpretadas como marcas de propiedad y aparecen asociadas a la red viaria pues, desde la perspectiva que se plantea, podrían tratarse de indicadores sobre la responsabilidad individual del dueño respecto a los tramos viarios con los que colindaba su propiedad. Es decir, se trata de una solución determinada en el seno de la *civitas* en forma de *munera* locales que responden a las exigencias del imperialismo romano, en cierto modo asimilables a los fenómenos análogos que encontramos en ámbitos muy diversos a propósito del mantenimiento de la red viaria. En este sentido ya habíamos interpretado el epígrafe de *Reburri P(ublii) Fil(ii) / Ortus* (Vila Nova de Foz Côa, Guarda: *HEp* 5, 1031), datado en el siglo I d.C. y muy cercano a la *via* que se orientaba hacia el norte desde Freixo de Numão, en un contexto agrario dominado por *villae* de mediana entidad (*vid supra*).

A este podrían añadirse dos inscripciones rupestres sobre rocas de granito de grandes dimensiones que se disponen cercanas entre sí junto a la antigua calzada romana entre San Salvador de Vilariño y San Miguel del Campo (Pereiro de Aguiar, Ourense: *HEp* 2, 576-577). Aunque la lectura e interpretación sea siempre complicada, creo que debe revisarse la propuesta de Rodríguez Colmenero, que consideró ambas como distintivo fronterizo entre gentilidades (Colmenero, 1997, n<sup>os</sup> 620-21; Peréx y Rodríguez, 2011: 7). A mi juicio, aun aceptando la lectura proporcionada por este autor, *Sigenata* / *Pacata* (*HEp* 2, 576) y *S(igenata) ter[m]inus P(acata)* (*HEp* 2, 577) resultan más coherentes como marcas de propiedad privada dispuestas junto a la *via*, pues *Pacata* corresponde claramente con un nombre femenino que encontramos en testimonios de distintos lugares de *Hispania*. Aparece como *cognomen* en Écija (Sevilla: *HEp* 7, 817), en Pueyo (Navarra: *HEp* 9, 439), en Barcelona (*HEp* 9, 439) y como nombre único en Cádiz (*IRPCa* 435). En el Noroeste encontramos la variante *Pacatia* en Viseu (Viseu: *CIL* II, 405) y *Pacatiana* en Castelo Novo (Fundão, Castelo Branco: *HEp* 17, 228), a lo que se suma la mayor cantidad de testimonios para su formulación masculina *Pacatus*, como es el caso de uno de los *magistri* que aparecen en la dedicación de *Asturica Augusta* a *De Vago Donnaego* en La Milla del Río (Carrizo de la Ribera, León: *CIL* II, 2636) y quizás también en la dedicación a *Cossus* por un *Paca[---]* en Castropodame (León: *AE* 1983, 595), por poner sólo algunos ejemplos<sup>359</sup>. Si, efectivamente, estamos ante un marco de propiedad privada la otra parte debería ser a todas luces un individuo aunque *Sigenata* se trate de un *hapax*, si bien no puede desecharse una lectura incorrecta de esa parte<sup>360</sup>.

<sup>359</sup> Aparece en diferentes puntos de la península: como *cognomen* en Idanha-a-Velha (Castelo Branco: *HEp* 13, 928), Lisboa (*CIL* II, 250), Mérida (*CIL* II, 597), Córdoba (*HEp* 9, 293), Talavera de la Reina (Toledo: *CIL* II, 923) y Villamayor de los Montes (Burgos: *AE* 1994, 1019), además de como nombre único en Beas del Segura (Jaén: *AE* 1983, 1081). A éstos podríamos añadir otros derivados como *Pacatianus* (Alcolea del Río, Sevilla: *CIL* II, 6328b y *AE* 1981, 44).

<sup>360</sup> Tampoco he incorporado a este conjunto, por encontrarse en la alejada zona de los *varduli* y por las dudas que suscita, la inscripción dada a conocer por Fernández y Molinero (2005). Se trata de un canto rodado ligeramente fragmentado y de grandes dimensiones que fue hallado en las excavaciones realizadas por P. Rasines en el tramo de la *via* que unía *Pisoraca* con *Flaviobriga* entre Santullán y la Loma (Cantabria). En ella, donde puede leerse con claridad QVIN (*HEp* 14, 120), los editores consideraron su

■ Las últimas dos inscripciones de Pereiro de Aguiar permiten introducirnos en la espinosa cuestión de fondo sobre la pretendida territorialidad de las “unidades inferiores” a la *civitas* del Noroeste que, aun pudiendo desplegarse en una cierta dimensión espacial, carecían de cualquier tipo de entidad desde el punto de vista administrativo (*vid.* cap. 5.3.1). Sin embargo, en el discurso de la “romanización defectuosa” que acompaña muchas a las sociedades rurales, que entiende la dispersión o la atomización del poblamiento, cuando no la inexistencia de urbanismo, como un rasgo que lleva implícito una desestructuración interna consustancial, todo argumento es poco para construir divisorias, límites y conflictos que articularían, en la praxis, las unidades de funcionamiento real frente a una *civitas* vacía e ineficiente. A mi entender, muchos de estos problemas parten de una base errónea, la negativa a asumir que las organizaciones sociales en el seno de una *civitas* pueden no representar un todo uniforme sino diverso en sus modos de estructuración interna y ser, sin embargo, funcionales. Al fin y al cabo el respeto de Roma por las *consuetudines* y el alto grado de descentralización del sistema impuesto permitían, en gran medida, toda una suerte de soluciones locales desde el punto de jurídico, social o político. En este sentido, sobre el ejemplo de las inscripciones de Pereiro de Aguiar, podría proponerse una funcionalidad análoga para otras sobre los que se ha sostenido este discurso de una *civitas* fallida, basada en cierta medida en las parcelaciones y divisiones de su espacio ciudadano. Me refiero a un largo corolario de inscripciones en las que la aparición de la palabra *terminus* se asocia automáticamente al concepto de límite fronterizo, lo que lógicamente anima una lectura con connotaciones político-territoriales asociadas a las unidades sociales con las que éste término se relaciona. El concepto de *terminus* es, sin embargo, más amplio de lo que cabría esperar y lo encontramos con claridad en la señalización de los límites de propiedades privadas, tal y como brindan algunos ejemplos procedentes de Italia y, por tanto, poco sospechosos de formulaciones sociales ajenas al mundo romano: tres con la indicación *Ter(minus) / M(arci) Vale/ri Her/metio/nis* (Roma: *RAC*, 1970, 225-227), *Terminus / privatus / loco pri/vato / Terti Magi / Mansueti* (Aquileya: *InscrArqu-01*, 79), *In agro / P(ubli) Pacili / terminus / totus est / conlocat(us)* (Marino: *CIL XIV*, 2488), o *Term(inus) / priv(atus) / loco priv(ato), /Terenti Hera[cleae]* (Aquileya: *CIL V*, 1050). También en *Africa* encontramos una sucesión de *termini* numerados con los que se relacionan distintas propiedades de individuos en genitivo: *Tanni, Ampliati, Iluliorum, Flacci, Celsi* (*AE* 1905, 2). Si admitimos la lectura de algunas inscripciones rupestres del Noroeste, puede lanzarse la hipótesis de que puedan representar este tipo de dominios privados. Desde luego sus características externas, totalmente informales, poco tienen que ver con las *termini* públicos que conocemos. Un caso paradigmático puede ser el caso de la inscripción del lugar de “As Bocas” en San Martinho do Campo (*CIL II*, 5608) y en las que aparecen

---

función “como indicadora de una propiedad (quizás *fundus*) al borde de la vía de comunicación, pudiendo interpretarse de esta manera *Quin[ti] (fundus)* (Fernández y Molinero, 2005: 100). Así, estaríamos ante un nuevo indicativo sobre este tipo de responsabilidades muneraticias; sin embargo, y aun a riesgo de disminuir el ya exiguo corpus disponible, no parece aceptable que la propiedad privada pudiera indicarse únicamente mediante el *praenomen*.

dos textos separados por un largo trazo rectilíneo con orientación N-S; en un lado puede leerse *IVD(- - -) T(---) RUF (---)* y *AVICI(- - -) RUF IVD*. La aparición de *T(terminus)* entre elementos que se repiten marcaría, para Rodríguez Colmenero, una línea divisoria de corte “étnico” (Rodríguez Colmenero, 1993: nº 54). Sin embargo parece más apropiado señalar, con Ariño, Palet y Gurt (2004: 28), un límite *inter privati*, a juzgar por las referencias individuales que pueden intuirse, como *Ruff(us)*. Lo mismo podría decirse la inscripción rupestre de O Regueiral (Sanfins, Valpaços, Porto: Colmenero, 1997, nº 618) en un gran peñasco de granito, para cuyas dos caras puede leerse *Termi(us) / Treb(ili)* y *T(erminus) / Obili*. Aquí, de nuevo, la aparición de la palabra *terminus* se asocia de modo mecánico a “la delimitación de fronteras”, de modo que “no aparecen representadas las unidades territoriales tipo *castellum* o *vicus* sino sus habitantes, suponiendo, por nuestra parte, que se trata de *cognationes* o grupo de asimilados” (Rodríguez Colmenero, 1993: 14). No se contempla la posibilidad, por tanto, de un indicativo de propiedad de *Treb(ianus)* (vid. *CIL* II, 1861) y *Obilus*, que sería lo más apropiado dada su morfología, en vez de *Treb(ilium)* y *Obili(um)*. La interpretación dada a la sucesión de hasta cuatro inscripciones con la indicación *PRAEN* y *COROQ* en el lugar de Outeuro Jusão de Samaiões (Veiga de Chaves, Vila Real) también es muy sintomática, pues aun sin haberse advertido ninguna referencia a *terminus*, su disposición intermedia entre dos castros cercanos sería indicativa de términos fronterizos de carácter gentilicio (Rodríguez Colmenero, 1997, nºs 612-15). La situación del hallazgo remite sin embargo una “situação no terreno, seguindo um ribeiro afluente da margen esquerda do Tâmega, na parte meridional da Veiga de Chaves apresenta uma nítida função divisória de parcelas destinadas à agricultura dessa zona” (Silva, 1986: 88). Creo que resulta necesario remarcar su carácter de propiedad privada individual como proponen también Ariño, Palet y Gurt (2004: 28), no ya sólo porque *Praenia* se documenta en forma de nombre personal en Xinzo de Limia (*CIL* II, 5621), sino porque el hallazgo en 2005 de una probable dedicatoria a *Coroquus* por sus *amici* de Chaves (Carneiro, 2005: 105-07), nos remite a un oligarca de considerable influencia en la región, cuyas propiedades en Veiga de Chaves pueden ahora completarse con relaciones desiguales basadas en la *amicitia* con sus grupos subalternos (vid. Sastre, 2010). A éstos podríamos añadir otras inscripciones rupestres como dominios privados de manera más laxa como *term(inus) Cl(audii)* de la inscripción rupestre de Noval (Soutelo, Chaves; Colmenero, 1993, nº 1) que, dada su informal apariencia, resulta más coherente que su lectura entendida como inscripción técnica fronteriza bajo la forma de *Term(inus) Cl(audialis)*. O, por último, la inscripción indeterminada *Ter(minus)*, nuevamente considerada “un hito terminal (...) entre dos *castella* o comunidades de cualquier tipo” (Rodríguez Colmenero, 1993, nº 56).

- Una nueva vía para interpretar posibles indicadores de propiedades privadas lo constituyen algunas inscripciones realizadas sobre molinos romanos, fundamentalmente sobre la parte móvil y rotatoria (*catillus*). El principal precursor de esta idea es Fernández Nieto, cuyos trabajos sobre los rituales de protección del campo del occidente Mediterráneo han permitido observar una relación recurrente entre los dominios agrarios y *molae* que funcionan como hitos delimitantes del *fundus* protegido,

especialmente del granizo (Fernández Nieto 1994-95 y 2005). Estas medidas profilácticas parten de la base ideológico- religiosa de que la protección puede ejercitarse a través de un objeto que es capaz de subsumir y aprehender las cualidades del bien tangible con el que se relaciona. Es decir, el molino actúa como elemento metafórico de referencia, como un talismán, que sirve para garantizar la provisión y fertilidad del campo. En las fuentes antiguas el molino representa el abastecimiento de los alimentos, por lo que suele asociarse con el hambre y la dureza de las labores agrarias. Es en el molino en donde suelen aparecer, por necesidad, los esclavos fugados (Plut., *Con. Prae.* 41); una rueda de molino sobre el cuello, en forma de collar, representa el castigo de la inanición por mal comportamiento (Plut., *Phoc.* 10). Esta misma idea está también presente en otra obra de Plutarco: “Realmente se puede ver que, en la mayoría de la gente, el alma está encerrada siempre en el cuerpo como en un molino, dando vueltas continuamente alrededor de su necesidad de alimento” (Plut., *Mor. Conv. sept. sap.* 159D). Por esta razón, las *molae* aparecen en diferentes ritos para ahuyentar los males del campo y prevenir la hambuna como puede observarse en la noticia que suministra el agrónomo Paladio, en donde la muela debía taparse con paño rojo para evitar el granizo (*Op. Agric.* I, 35, 1). Más interesante para nuestro objeto es la inscripción griega de Noto (Sicilia: Manganaro, 1963: 61; Bevilacqua y Giannobile, 2000), en donde se realiza una *defixio* contra un demonio perturbador también relacionado con el granizo (*Michalázokos*). La inscripción, que debía permanecer enterrada, indica que alrededor de ella debían disponerse tres ruedas de molino que se situaran en los confines de la propiedad para establecer los límites bajo protección del conjuro (Fernández Nieto, 1994-95: 111). También de Sicilia, en este caso relacionada con la antigua ciudad de *Acras* (Palazzolo Acreide), una inscripción revela también un ritual mágico semejante, en donde una rueda de molino aceitero sirve para prevenir de las plagas y el pedrisco de un modo semejante a la de Noto (Pugliese, 1953: 184-89; Fernández Nieto, 1994-95: 111). En *Africa*, también conocemos por la inscripción de Sidi Kaddou (Bou Arada, Túnez: Ferchiou y Gabillon, 1985) un ritual muy parecido, en donde la invocación a nueve dioses contra los fenómenos que amenazan la fertilidad del campo, como el granizo, los vientos y las plagas, debía acompañarse con la colocación de una serie de piedras inscritas y ocultas que delimitaran el *fundus* protegido. Como ha observado Fernández Nieto, todas estas variantes en los actos rituales comportan un mismo contenido mágico: “El valor profiláctico concedido a las piedras de moler era asimismo obvio y derivaba de su condición de agentes de suministro de alimentos que permiten la vida (...) se piensa que está dotado de una potencia intrínseca de fertilidad, potencia que es capaz de defender los frutos paralizando las plagas que les amenazan. De esta forma, la piedra de moler transmite directa e indirectamente su germen de fecundidad a todo el territorio” (Fernández Nieto, 1994-95: 113).

Las cualidades mágicas de las *molae* proporcionan la base para comprender los usos de ruedas de molino inscritas que aúnan una función profiláctica y también liminal de los dominios agrarios. Este es el caso del *catillus* hallado en Santa Eulalia de Esperante (Lugo: *HEp* 7, 400=14, 207) para el que Rodríguez Colmenero había leído un tanto forzosamente *B(ene) O(pus) Feci* con el sentido de “Trabajé bien. Se acabó” (Rodríguez Colmenero, 1996: 273). No obstante, en coherencia con estas connotaciones



mágicas, resulta más apropiado leer *Boieci Fin(is/es)*, es decir, “el límite de Boieco” (Fernández Nieto, 2005). Aunque las circunstancias precisas del hallazgo se desconocen, se trata de una volandera deteriorada por su uso en la molienda que ahora se reutiliza con fines protectores y apotropaicos en relación con propiedades agrarias, lo que explica la referencia a los *finis*. Una finalidad análoga hubo de tener el *catillus* encontrado en 1984 en San Chuis (Allande, Asturias: *HEp* 18, 13) por un grupo de visitantes que merodeaban por sus alrededores. El mayor conocimiento arqueológico del sitio permite relacionar el *catillus* con uno de los principales castros del occidente asturiano, asociado a intensas labores de explotación minera aurífera en su entorno próximo dentro de un paisaje en el convive poblamiento fortificado con una cercana villa en abierto (Villa, 2006; Salido y Villa, 2014: 218-21). En este caso la inscripción aparece también en un molino harinero, en cuyo lateral puede leerse *Turro*, si bien su carácter fragmentario impide conocer la terminación (*HEp* 18, 13). Aquí el principal elemento de incertidumbre es conocer si el indicativo de propiedad individual atañe a una propiedad agraria o al propio molino. Sobre la segunda posibilidad, el análisis comparativo de Salido y Villa, que sólo reparan en la lectura de Rodríguez Colmenero, revela las dificultades de establecer paralelos con otro tipo de *catilli* inscritos, como los que parecen asociarse a unidades militares (*centuria*, *contubernium*, *turma*) o talleres (Salido y Villa, 2014: 220-27). Tal es el caso de algunas marcas enigmáticas que pueden aludir al lugar de su fabricación, como *CE* y *CEA* en la villa romana de Santa María de La Carità (Messigno: *CIL* X, 8057, 6) o las *molae* de Ostia y Pompeya (vid. Bakker, 1999). Esta función de propiedad sobre el molino sí resulta bastante más clara en otro de los escasos *catilli* inscritos de ámbito hispánico, como el hallado en la villa romana de Els Antigons (Reus, Tarragona) cuya marca, *SOH*, está también presente en dos molinos pompeyanos debido al flujo comercial con Italia desde el puerto de *Tarraco* (Gorostidi, 2010: 101-102). El molino sobre piedra volcánica de “Pedrera del Port” junto al puerto de *Tarraco*, con marca *RBOAEFF* (*CIL* II, 6114; *RIT* 814) seguramente se vincula con este mismo fenómeno comercial (vid. Rodá y Comes, 2002).

Volviendo al *catillus* de San Chuis, si tenemos en cuenta el ejemplo más cercano de Santa Eulalia, parece apropiado pensar en un indicador de propiedad privada con fines protectores análogos, tal como han propuesto acertadamente Teira y Amado en su estudio sobre las funciones fronterizas y mágicas asociadas al molino (Teira y Amado, 2014). En primer lugar, porque el molino de San Chuis no corresponde a una marca de fabricación, sino a un antropónimo, *Turro[s]* o, más posiblemente *Turro[mus]* o

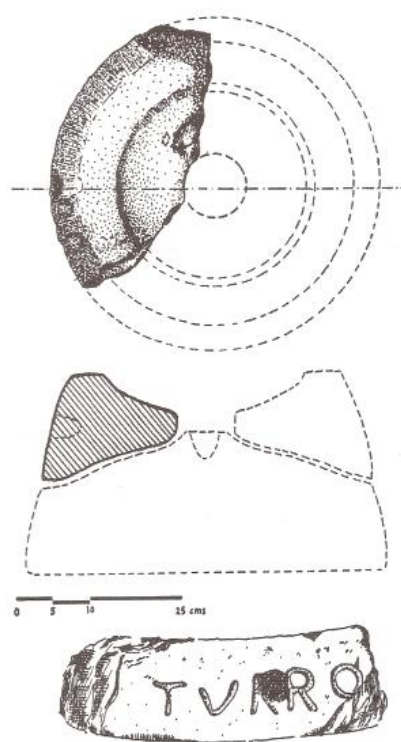


Fig. 24. Dibujo de la mola inscrita del castro de San Chuis realizada por García Linares. Fuente: Salido y Villa, 2014: 223.

*Turro[mi]*, documentado este último en un *vadiniense* de Verdiago (Crémenes, León: *ERPLe* 394). Por otro lado, la referencia a unos *finēs* asociados a un antropónimo del molino de Santa Eulalia supone una prueba evidente de la penetración de estas creencias en el Noroeste, en coherencia con otros testimonios de la parte occidental del Imperio. Una inscripción muy ilustrativa, y no tenida en cuenta hasta ahora sobre las funciones protectoras de las *molae*, es la procedente de Germania Superior, correspondiente a un *catillus* completo en el que se lee *Fines vici* (Kleve: *CIL* XIII 8695), que presentaría una finalidad agraria seguramente semejante a la de *Boeici finēs* de Santa Eulalia, además de la propiamente liminal de un *vicus*. El reconocimiento de las cualidades apotropaicas del molino en el Noroeste lo encontramos también en una miniatura de catilo hecha en pizarra hallada en el castro de Viladonga; pudo tener un función de *exvoto* o ser usada en forma de un collar u amuleto con connotaciones semejantes a las descritas por Plutarco (*vid. supra*; Teira y Amado, 2014: 285). También la extraña estructura del castro de “A Cidade” de San Cibrán de Las (Ourense), compuesta por una sucesión de ruedas de molino premeditadamente hincadas en el zócalo de un muro, podría denotar algún tipo de práctica o creencia relacionada con la función protectora del *catillus* como talismán que ahuyentara los fenómenos meteorológicos adversos (Teira y Amado, 2014: 285), si bien resulta todavía preciso un estudio integral del asentamiento a partir de los resultados de las últimas excavaciones para mejorar su comprensión (*vid. Álvarez et al.* 2017).



Fig. 25. *Catillus* con inscripción: *Fines vici*. (Kleve, Alemania: *CIL* XIII, 8695).

## 9. Las *civitates* peregrinas: fiscalidad y territorio.

### 9.1 Las *civitates* peregrinas en los esquemas de ordenación territorial.

El principio de oposición entre Italia y las provincias se materializa especialmente en la naturaleza gravada del suelo provincial, tal como queda claro en los esquemas de la jurisprudencia clásica (*vid.* cap. 8). A menos que medie una concesión de *ius Italicum* o *immunitas*, el pago de *tributum soli* responde a las cualidades del *ager provincialis* independientemente de la condición jurídica individual ante la inexistencia de bienes exentos regidos por el derecho quirritario. Es decir, atañe a la naturaleza de los bienes desde una perspectiva territorial y no dependiente del estatus jurídico individual ni de los expedientes comunitarios. El fundamento ideológico de la tributación es el *dominium populi Romani vel Caesaris*<sup>361</sup> que recae sobre las provincias, configurando una estructura de dominación condicionante de toda realidad política, jurídica o social. Este *dominium* no implica un *ager publicus* generalizado, sino un *ager provincialis* con rasgos propios y profundamente diversos según la provincia y las coordenadas históricas específicas. Sin embargo, el *dominium populi Romani* como elemento aglutinante resultaba útil dentro de una narrativa que buscaba rememorar el proceso de conquista de las provincias (*pro vincere*) como hecho diferencial que justificaba sus obligaciones tributarias con respecto a una Italia exenta, uniformizada y cuna inmemorial de la cultura romana.

En ámbito provincial, los expedientes comunitarios privilegiados seguramente implicaban la aminoración de las cargas fiscales, además de las ventajas jurídicas, pero no por ello dejaban de estar sometidas a tributación. Algunos tratados de agrimensura, en los que centraremos ahora nuestra atención, son suficientemente explícitos en esta idea básica:

*Prima enim condicio possidendi haec extat per Italiam; ubi nulus a[iu]ger est tributarius, sed aut colonicus aut municipalis, aut alicuius castelli aut conciliabuli, aut saltus privati. At si ad provincias respiciamus, habent agros colonici quidem iuris, habent et colonicos qui sunt immunes, habent et colonicos stipendiarios. Habent autem provinciae et municipales agros, aut civitatum peregrinarum* (Agen. Urb. Th. 23, 5-13 = La. 62, 19-27).

Antes de comentar el pasaje es preciso poner de relieve que la nota dominante en el *corpus Agrimensorum Romanorum*<sup>362</sup> es la descripción técnica del arte mensorio,

---

<sup>361</sup> El tramiento historiográfico sobre las condiciones del suelo provincial y del *dominium populi Romani vel Caesaris* ha sido un tema central de debate jurídico e historiográfico, al que ya hemos dedicado especial atención en el apartado correspondiente, por lo que no lo repetiremos ahora (*vid.* cap. 2).

<sup>362</sup> Para el tratamiento de este *corpus*, que será la fuente de información vehicular de los siguientes apartados, seguiremos el sistema de citación habitual de las ediciones antiguas de Thulin y de Lachmann, fundamentalmente para los tratados de agrimensura de Higinio, Higinio Gromático, Agenio Urbico, Sículo Flaco, Frontino y su comentarista anónimo tardío, por ser los que mayor atención dedican al ámbito provincial. En concreto me he servido, por la calidad de las traducciones y el rico aparato crítico, de las ediciones recientes de *Belles Letres* (que siguen un sistema de citación distinto que sólo utilizaré en el *commentum* anónimo de Frontino), así como la realizada por el grupo de la Universidad de Besaçon en

centrada casi exclusivamente en la *limitatio* y los conflictos y problemas del *ager divisus et assignatus* colonial. De hecho, es común encontrar en las sucesivas *descriptiones* sobre *controversiae* advertencias sobre los límites de este arte y de la capacidad de actuación del agrimensor sobre los polémicas que sobrepasaran la observancia de los *limites* establecidos en las *formae* y/o en los *termini*, que competen al ámbito del derecho y de sus intérpretes: Higino remite al derecho ordinario para todo aquello que no requiera alinear algo o que se establezca en la *formae* (Th. 98 = La. 134, 9) y recuerda que ciertas controversias *magis esse iuris quam nostri operis* (Th. 93=La. 129, 19); Frontino dice que compete al *ius ordinarium* cualquier conflicto que se diera en territorio no mensurado, como los *agri arcifinales* (Th. 10 = La. 24, 8); también el comentarista anónimo de su obra (*Pseudo-Agennius Urbicus*) reincide en la idea de que su oficio no es la jurisprudencia cuando se recurre a ellos por algunas controversias sobre la propiedad y la posesión ya que, al no depender de la *limitatio*, debe apelarse al derecho y a la *iurisdictio* del gobernador: *Hoc argumentum prudentiae est quam proffessionis* (2, 10), *Hoc non est disciplinae nostra iudicium, sed apud praesidem provinciae agitur* (2, 13). A pesar de las distancias entre agrimensura y jurisprudencia, los agrimensores contaban con una considerable formación jurídica y administrativa, pues el modo de mensurar tenía importantes implicaciones en las formas de tributación individual y colectiva sobre las propiedades prediales. Higino Gromático es explícito en esta cuestión, a propósito de las tierras gravadas o exentas: *Nam quemadmodum illis condicio deversa est, mensurarum adactus dissimilis esse debet* (Hyg. Grom. Th. 168). También el oficio de mensurar cuando mediaban controversias requería conocer muchas veces la evolución de los límites y de la realidad administrativa de la comunidad desde su origen (Hyg. Th. 77=La. 283, 5). Estas características convierten a los agrimensores en una fuente indispensable para analizar las relaciones entre expedientes estatutarios con cuestiones fiscales y de ordenación del espacio provincial, tal y como trataremos en las siguientes páginas. Precisamente la obra de Agenio Urbico, compuesta en época Flavia, ha sido en ocasiones considerada a medio camino entre la jurisprudencia y la agrimensura (Castillo, 1998b). Sus conocimientos y preocupaciones sobre cuestiones jurídicas están todavía más presentes que en el resto de tratados, tal y como refleja el pasaje anterior. Si volvemos al fragmento, la descripción de los distintos tipos de *agri* según el expediente comunitario es de hecho coherente con la carta de naturaleza que dimos al *ius Italicum*, a la *immunitas*, y al carácter tributario del suelo provincial. El fragmento se basa en tres contraposiciones de gran importancia que hay que desgranar: la más general, entre las comunidades de Italia y de las provincias (*vid.* cap. 8.1); entre los distintos tipos de colonia; y, por último, una más sutil pero no menos importante, los *agri colonici* respecto a los *agri municipales aut civitatum peregrinarum*.

En cuanto a la contraposición entre los tipos de *ager* colonial de las provincias, Agenio Urbico parece distinguir diferentes situaciones basándose en un criterio

---

el seno de la Action COST G2 “Paysages antiques et structures rurales”, de la de Campbell (2000) y de las versiones bilingües al castellano de Resina Sola (1983) y Castillo (1998a).

fundamentalmente fiscal y que, como propone acertadamente C. Castillo (1996: 79), obedecería a la siguiente catalogación:

- Los *agri colonici quidem iuris*, es decir, aquellos análogos a la *conditio possidendi per Italiam* del pasaje inmediatamente anterior, *ubi nullus ager est tributarius*, lo que sólo puede corresponderse con colonias que reciben el *ius Italicum* y, por tanto, gozan del *dominium ex iure Quiritum*.
- Los *agri colonici immunes*: es decir, caracterizados por una concesión de *immunitas* que los releva de las cargas debidas al fisco, si bien al no estar asimilados a Italia carecen *strictu sensu* del *dominium* quiritarario, aunque los actos formales pudieran ser semejantes, como ya se vio a propósito de la *mancipatio* en suelo provincial (cap. 8.2).
- Los *agri colonici stipendiarii*: se trata de las colonias que carecen de los anteriores beneficios complementarios, lo que implica que sus ciudadanos tuvieran que tributar y, en principio, se les aplicaría la definición de *agri stipendiarii* definida por Agenio Urbico a continuación (*vid.* Th 23, 13-24,1=La. 63, 1-12).

La aparente incongruencia de Agenio Urbico, que relaciona el prestigiado rango colonial con una condición *stipendiaria* de profundas connotaciones negativas por ser reminiscente del proceso de conquista y del trasvase del pago legionario al vencido (*stipendium*), ha motivado numerosas suspicacias sobre el pasaje. De hecho, diversos autores han atisbado en los *agri colonici stipendiarii* una corrupción del texto y proponen diversas soluciones que suelen pasar por cercenar el término *stipendiarius* o dotar de lecturas alternativas a todo el fragmento (*vid.* Gagliardi, 2006: 235-36). La relación entre el rango colonial y la referencia al *stipendium* es, sin embargo, totalmente compatible si la integramos dentro del sentido general del texto, en donde Agenio Urbico no busca designar realidades estatutarias inexistentes (*colonia stipendiaria*) sino simplemente referir el carácter gravado de sus suelos como rasgo inherente del suelo provincial. Es decir, no existe la titulación de *colonia stipendiaria*, sólo en tanto en cuanto las cargas que pesan sobre sus campos divididos y asignados, que el fisco registraba individualmente, las hace diferentes de aquéllas que son inmunes por el *beneficium* de la *immunitas* o por tener *ius Italicum*. Otras fuentes complementarias permiten apoyar esta misma idea, en donde el pago del *tributum soli* es también una obligación de la ciudadanía romana provincial, asentada en las colonias o perteneciente a otro tipo de comunidades. Apuleyo, a mediados del siglo II d.C., recoge a propósito de las acusaciones vertidas contra él por la compra de una finca el caso de *Pudentilla*, una ciudadana romana de *Oea (Tripolitania)*, a la que reconoce como verdadera dueña de estos *praedia*: *...non me, sed Pudentillam suo nomine emissee, Pudentillae nomen in tabulis esse, Pudentillae nomine pro eo agello tributum dependi* (Apul. *Apol.* 101, 5). Las pruebas de su afirmación son, por tanto, la aparición de su nombre en la tablilla del contrato de compraventa, pero también el hecho de que sobre ella penda el *tributum*

correspondiente al inmueble. De hecho, inmediatamente a continuación, indica que puede confirmarse con el cuestor público *Corvinus Celer*, a quien ella había pagado el impuesto, y que se ha identificado con el magistrado local de *Oea* (Segura, 1980: 221, n. 282). El contenido de este fragmento confirma dos ideas. Por un lado, la competencia local en relación con el *tributum soli* (impuesto debido al fisco romano en donde intercede el cuestor local), con altas cotas de autonomía en su gestión y recolecta para el conjunto de la comunidad dentro de un sistema descentralizado en el que *tributum* se confunde con los *munera* patrimoniales del ciudadano (*vid. infra*: D. 50, 4, 6, 5; Pereira, 2011: 89-90). Por otro, la idea que ahora nos interesa: que las cualidades fiscales del suelo y de los bienes prediales son independientes de la condición jurídica personal de sus dueños, incluso si se trata de ciudadanos romanos. De hecho es posible que el *tributum soli* que pesa sobre las propiedades de *Pudentilla* corresponda ya al momento en que *Oea* adquiere el rango colonial a mediados del siglo II (Gasco, 1972: 81-83; Neto, 2015). Esto, a juzgar por la cercanía cronológica con los hechos narrados y la carencia de otros beneficios complementarios conocidos como la *immunitas* o el *ius Italicum*, encajaría con la categoría descrita por Agenio Urbico. También la fórmula *ex tributario solo* que aparece en algunas parcelas de la centuriación de *Arausio* de los catastros de Orange podría indicar aquellas tierras que permanecen con su condición gravada precedente, antes de la *divisio et assignatio*, y que han de seguir pagando los *coloni* (Gagliardi, 2006: 242-43; *cfr.* López Paz, 1999).

Aun fuera de un contexto colonial, también podría recordarse el caso ya analizado de las tablillas dácicas de *Alburnus Maior*, en donde el ciudadano romano *Veturius Valens*, posiblemente un legionario de la *legio XIII Gemina*, conviene continuar pagando el *tributum* sobre la finca en la que se establecía la *domus*: *Convenitq(ue) int[er] eos [uti] Veturius Va[lens pro ea] domo tributa usque ad recensum dep[e]n[dat]* (FIRA III, 90, l. 15-16). O el mencionado tercer edicto de Augusto *ad Cyrenenses* (6 a.C.), en donde se pone de relieve que, a menos que medie la *immunitas*, todos los nuevos ciudadanos romanos están sujetos a las cargas locales (De Visscher, 1965, l. 55-62; Purpura, 2012: 474-75). Tampoco el *princeps* de la *civitas* Zegrense al que se le concede *viritim* la ciudadanía romana junto a su familia en la conocida *tabula Banasitana* del 177 d.C. (*Mauretania Tingitana*) está exento de tributos tal y como se indica con carácter informativo: *sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci* (*vid.* Sherwin-White, 1973). En este sentido, la concesión de ciudadanía incluye la cláusula *salvo iure gentis*, que le permite además conservar todos los privilegios en su comunidad peregrina de origen si verse alterados por la *mutatio civitatis*, además de abrirle las puertas al circuito político provincial, pues no es vano el documento procede del foro de la colonia de *Banasa*, cuando su comunidad se encontraba a unos 600 km al sur, entre la cordillera del Atlas y el río Tensift según la menciona Ptolomeo (4, 1, 5).

Difícilmente podrían explicarse sin considerar el carácter gravado del suelo colonial algunas referencias de los agrimensores que, como Higinio, no distinguen entre expedientes comunitarios sobre controversias fiscales suscitadas por los límites del territorio, lo que implícitamente incluye a las colonias como centro de su interés: *Territorii iuris controuersia agitatus quotiens propter exigenda tributa de possessione*

*litigatur* (Hyg. *De cond.* 1). Todavía más tarde y en contexto distinto, el comentarista de Frontino (s. VI), para explicar la extraña convivencia entre lo público y lo privado que hace el agrimensor al tratar las antiguas propiedades privadas en *ager* colonial dividido y asignado de las provincias, recuerda su carácter gravado, en donde el uso de *publicum* sólo puede significar para el comentarista el pago del *tributum* a la colectividad fruto del trabajo agrario: *quia dum priuatus laborat in proprio et tributum publico et sibi almonia arua excolendo procurat* (Com. *De agr. qual.* 8).

La segunda contraposición dentro del *ager provincialis* (*si ad provincias respiciamus...*), más sutil, pero de gran importancia para lo que nos ocupa, es la que se establece entre la mencionada situación de los *agri colonici* (*iuris Italicum*, *immunes* y los carentes de beneficios fiscales) con respecto a los *agri municipales aut civitatum peregrinarum*. Si, como hemos visto, los *agri stipendiarii* son perfectamente compatibles con el rango colonial, más lo son si cabe en los municipios o en las comunidades peregrinas. De hecho, sólo desde este punto de vista puede cobrar sentido la aclaración, inmediatamente posterior, sobre las relaciones de propiedad que pueden darse en territorio estipendiario, en donde Agenio Urbico está pensando necesariamente en la mayoría de comunidades provinciales (Th 23, 13-24,1=La. 63, 1-12). La diferencia entre las colonias con respecto a municipios y *civitates* peregrinas no reside entonces en esta característica estipendiaria compartida, sino en la forma en la que se produce la *assignatio* de sus territorios y, con ella, la distinta ligazón administrativa y fiscal de las propiedades en *ager stipendiarius*: “La ragione di ciò potrebbe ravvisarsi in una scelta consapevole, da parte dell’autore gromatico, che intendeva affermare la natura particolare delle terre coloniche, il cui possesso aveva un’immediata rilevanza ai fini fiscali all’interno di una procia, e di tutte le altre terre, dei municipi o delle *civitates peregrinae*, che invece rilevavano come totalità, come territorio complessivo, come *ager universus*” (Gagliardi, 2006: 236-37). Las colonias son réplicas de Roma en las provincias, los municipios y comunidades peregrinas mantienen *legibus suis et suo iure utentes* (Grelle, 1963: 38). En este sentido, como expuso Grelle con acierto (1963), el criterio de ordenación del territorio (*assignatio* colectiva o individual) supone divergencias en la forma de tributar y en la ligazón administrativa de la propiedad privada.

Por un lado los *agri divisi et assignati*, a los que los agrimensores dedican casi exclusivamente sus esfuerzos, representaban la *limitatio* ordenada y armónica sobre el territorio conquistado. Aunque la centuriación provincial no sólo se presentara en colonias sino también en *arva publica* (Front. Th. 1=La. 1, 1-14), los autores tienden a identificarla con ellas bajo el aspecto de una geometría ideal, en donde se expresa la armonía entre el cielo y la tierra. En algunos pasajes, la labor agrimensora sobre los campos divididos y asignados se compara con los rituales de la *auguratio*, que dibujaba sus *templa* en el cielo como ellos hacían en la tierra. Higinio Gromático describe el origen celeste de la agrimensura como disciplina que debe ser afín al sistema del universo y se relaciona desde antiguo con la haruspicina (Hyg. Grom. Th. 131; *vid.* Sic. Flacc. Th. 117=La. 153, 2). La *limitatio* de las retículas características de la centuriación no es sólo una técnica, sino una práctica profundamente ritualizada según la religiosidad

romana, como revelan algunas descripciones de los actos culturales realizados con la erección de *termini* (Sic. Flacc. Th. 104-105; *vid.* Cortés 2013: 281-282). A donde quiero llegar con esto es a resaltar que la sobrerrepresentación del *ager divisus et assignatus* en las obras de agrimensura responde a su identificación con el modelo ideal de ordenación del espacio conquistado por Roma, en donde la realidad preexistente se elimina para implantarse una nueva que ahora se rige por parámetros ideológicos romanos. También que, a juzgar por la actividad de los agrimensores en las controversias sobre la propiedad, es normal que dedicaran más esfuerzo a esta genuina apropiación del espacio de cuño romano, pues era en las propiedades sobre *agri* divididos y asignados donde tenían capacidad de actuación en litigios al estar en este caso recogidos individualmente en la *forma* y en los *comentarii* del *tabularium Caesaris* (Sic. Flacc. Th. 119=154, 24; Hyh. Grom. Th. 165, 14-16=La 202, 15-17). Sin embargo, el *ager divisus et assignatus* ni será el único esquema de ordenación del espacio, ni tampoco el más común ni representativo dentro del ámbito provincial.

Como concluyó Grelle (1963), la contraposición de Agenio Urbico toma sentido si la integramos en las tres formas esenciales de mensurar y asignar el espacio: *agri divisi et adsignati* (divididos y asignados), *agri per extremitatem mensura comprehensus* (definidos por su perímetro), *agri arcifinales* (no mensurados ni asignados) del conocido fragmento de Frontino: *Agrorum qualitates sunt tres: una agri diuisi et adsignati, altera mensura per extremitatem comprehensi, tertia arcifinii, qui nulla mensura continentur* (Th. 1=La. 1, 1-4). Mientras las colonias, identificadas con los campos divididos y asignados, obedecen a un modelo de asignación individual de los lotes agrarios a los colonos y, por esa razón, se basan desde un punto de vista teórico en una imposición directa e individual del *tributum*, entre el fisco y los *possesores* particulares, la realidad será distinta para los municipios y las *civitates peregrinae*. En ambos casos, la asignación del territorio se realizaría *per extremitatem*, sin divisiones internas, por lo que la imposición del *tributum soli* no es individual, sino *universus modus*. En estos casos es en la comunidad, y más concretamente en sus élites locales, donde recae la responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones tributarias colectivas desde la descentralidad, impuestas globalmente por el *fiscus* y bajo control del *procurator* (Brunt, 1981: 168-69). Con el fin de no anticipar conclusiones sobre las *civitates peregrinae* (a las que dedicaremos una atención específica posteriormente) nos centraremos ahora exclusivamente en señalar superficialmente el elemento compartido entre estas *civitates* y los municipios, que es, por otra parte, lo que justifica la dicotomía señalada por Agenio Urbico con respecto a las colonias: un esquema descentralizado en donde la autonomía se materializa en el uso de sus *iura* e *instituta* propios y en la autogestión del excedente debido al *fiscus*.

En este sentido, los trabajos de Humbert (1978: 287-309) sobre el origen del expediente municipal han sido fundamentales también para comprender su evolución en el Alto Imperio, durante el que no sólo mantuvieron un condición formal de *rei publicae* extranjeras, sino que se les respetó una altas cotas de autonomía en sus modos de estructuración y organización internos conforme a sus propias tradiciones o decisiones políticas. Esta caracterización ha sido defendida con solvencia por García (2001d: 129-



139), quien observa en la autonomía el rasgo definitorio de la municipalidad, tanto en su precedente romano como en su versión latina, con la que convivirá en ámbito provincial. Según esta autora, la uniformización legislativa que se atisba en las leyes municipales flavias, no es un elemento inherente de la municipalidad, sino contingente para un región urbanizada como la Bética, en donde “fue la necesidad de aunar criterios administrativos en unos municipios tan numerosos como heterogéneos lo que hizo necesario introducir pautas organizativas romanas *per legem*” (García, 2001d: 134). La pervivencia de un *ius civitatis* propio está, incluso, también presente en las *leges datae* de municipios como *Irni* que, a pesar de recurrir a procedimientos romanos para diversos asuntos (*vid. lex Irn.* 64, 91 y 92), cuentan con *iura* e *instituta* propios que continúan vigentes mientras no contradigan la *lex data* (*vid. lex Irn.* 91). Como sugiere también la *lex Irn.* 31, la legislación no parece ajena a la realidad preexistente, sino flexible y adaptativa respecto a las *mores* y *iura* comunitarios. En este sentido es esencial discriminar la pulsión uniformizante de las ordenaciones locales que, incluso desde la descentralidad, abrazarán el derecho romano como suyo, con respecto al propio carácter descentralizado del municipio en sus asuntos internos, que parece incuestionable. Es precisamente la autonomía organizativa como rasgo compartido del expediente municipal (*optimo iure* o latino), lo que lo convierte en algo difícil de definir para Aulo Gelio, cuando afirma su desconocimiento sobre qué son los municipios romanos y su legislación (Gel. NA., 16, 13, 3). No lo hace por ignorancia, sino por la imposibilidad de estandarizar un tipo único de legislación municipal que, en realidad, responde a un nutrido elenco de ordenaciones locales. La vigencia de este principio también está implícita en otra aseveración sobre los derechos de los distintos municipios cuando, pensando seguramente en los itálicos, recuerda que mantienen todavía su propio *ius civitatis*, pero que por anticuado y en desuso ha ido cayendo muchas veces en desconocimiento por los propios municipes (Gel. NA., 16, 13, 8). La conocida *oratio de Italicensibus* de Adriano recogida por Aulo Gelio en estos pasajes reafirma la distancia que todavía existe, en el siglo II d.C., entre los municipios y colonias, teniendo las primeras el privilegio de usar sus propias *leges* y *mores* mientras las colonias carecía de tal autonomía. Ello explica la sorpresa del emperador ante la petición de Itálica por convertirse en colonia. A mi modo de ver, esta autonomía municipal relega la ciudadanía romana a una *patria iuris* en donde prevalecen los modos internos de organización y gestión, la legislación propia, como expone con claridad el mismo Aulo Gelio: “los *municipes* son los ciudadanos romanos originarios de los municipios; se sirven de sus propias leyes y de sus propios derechos; no tienen de común con el pueblo romano más que la facultad de llegar a los honores, y de ahí parecen recibir su nombre; no están sometidos a ninguna otra obligación, a ninguna ley del pueblo romano, a menos que la hayan adoptado espontáneamente<sup>363</sup>” (Gel. NA. 16, 13, 6<sup>364</sup>). Son los

<sup>363</sup> El capítulo 30 de *Irni* puede llevar a pensar en un modo intrínseco de ordenación municipal, pero que responde con toda probabilidad a la estandarización de las políticas municipalizantes en la Bética por parte de la dinastía Flavia.

<sup>364</sup> *Municipes ergo sunt cives romani e municipios legibus suis et suo iure utentes, muneris tantum cum populo romano honorari participes, a quo munere capessendo appellati videtur.* Un reinterpretación interesante de estos *munera honoraria* puede apreciarse en Pereira, para quien no haría referencia a la posibilidad de acceso a las magistraturas romanas, difícil en la práctica, sino que el pasaje respondería a

*municipes* en su conjunto, sin referencia al sector de ciudadanía romana<sup>365</sup>, los sujetos sometidos a la legislación irnitana, en donde sólo se hace necesario aludir a los *incolae* que, carentes de *origo*, están igualmente sometidos a la legislación local y a las *munitiones* y *operae* por tener su *domicilium* dentro del territorio municipal (*lex Irn.* 94 y 83).

A mi juicio, esta autonomía en los asuntos internos también podría desplegarse en la gestión y recolecta descentralizada del *tributum soli* debido al fisco romano por parte del tesoro público local. El punto de partida es el origen etimológico de la propia palabra de *municipium* relacionado con los distintos tipos de cargas locales y servicios prestados a la comunidad<sup>366</sup>. El agrimensor Sículo Flaco define el *municipium* como *munificae esse civitatis* (Sic. Flacc. Th. 99=La. 135, 11)<sup>367</sup>, del mismo modo que, más tarde, Paulo coincide en considerar el origen de los *municipes* en aquellos sometidos a los *munera*, en contraposición al servicio militar y a los “regalos” de los *socii* y *foederatii* (D. 50, 16, 18; vid. Varr., *Ling.*, 5, 179; Fest. *Gloss. Lat.* 126L; vid. cap. 5.3.2). De ello se deduce fácilmente que en la propia definición del municipio está la idea de autonomía económica, en donde son los propios *municipes* los que proporcionan el sostén financiero de la comunidad: ¿se concibe, entonces, la recolecta del *tributum soli* como una parte de los *munera*? Al menos, así lo observa claramente Ulpiano, que los incluye entre los llamados *munera/onera patrimoniales* dentro del título dedicado a las cargas del expediente municipal: *Exactionem tributorum onus patrimonio esse constat* (Ulp. 2 *opin.*=D. 50, 4, 3, 11). Más tarde, el jurista desarrolla un doble tipo de *munera patrimoniales* de gran interés, pues revela la diferencia entre las obligaciones fiscales vinculadas a la *origo* municipal (a las que suman los *incolae*) con respecto a las cargas directas sobre el suelo:

*Sed enim haec munera, quae patrimoniis indicuntur, duplicia sunt: nam quaedam possessoribus inniunguntur, sive municipes sunt sive non sunt, quaedam non nisi municipibus vel incolis: intriptiones, quae agris fiunt vel aedificiis, possessoribus indicuntur: munera vero, quae patrimoniorum habentur; non aliis quam municipibus vel incolis*<sup>368</sup> (D. 50, 4, 6, 5)

---

un sentido que da un valor muy distinto a la palabra *municeps*, “que participan en los *munera* impuestos por el magistrado” (vid. Pereira, 2011: 101 n. 51).

<sup>365</sup> En este sentido debe hacerse notar que, a pesar de que los capítulos 22 y 23 refieran la adquisición de ciudadanía romana como una *mutatio civitatis*, lo hacen precisamente para afirmar que nada cambia en relación a la *patria potestas* de los padres, elegir tutor, etc. Ello reinicia en la idea de ciudadanía romana como potencialidad jurídica hacia el exterior, mientras en ámbito interno se recurre a la ficción de que la ciudadanía no hubiera cambiado: *si civitate mutatus mutata non esset* (*lex Irn.* cap. 22).

<sup>366</sup> No se trata sólo de los *munera civilia*, sino del conjunto de cargas de las que tienen que hacerse responsabilizar los *municipes* como analizó recientemente G. Pereira y que estaría presente en el propio origen etimológico, derivado de *munia* (derechos, cargas, deberes) y *capere* (vid. Pereira, 2011: 99-107).

<sup>367</sup> Se hace eco también de la versión antigua en donde toma nombre por las murallas, seguramente en alusión a ciertos casos de municipios que carecieron de *iurisdictio* sobre territorios más allá de la muralla, tal y como nos informa Hyginio: *sunt nihilo minus quaedam municipia, quibus extra murum nulla sit iuris dictio* (Hyg. Th. 83=La. 119, 25; vid. Th. 129=164, 15, aunque en este segundo caso no se habla explícitamente de municipios y puede cubrir otras posibilidades).

<sup>368</sup> “Pero los *munera* que se imponen a los patrimonios son de dos clases: unos se imponen a los que poseen bienes inmuebles, sean *munícipes* o no lo sean; otro, en cambio, sólo a los *munícipes* y a los residentes: las contribuciones propias de las fincas rústicas o de los edificios se imponen a sus

La disyuntiva entre ambos tipos de *munera patrimoniales* radica entre dos formas de relacionarse con el municipio. Por un lado, quienes participan en la vida pública de la comunidad, ya sean *municipes* de pleno derecho o aquellos que habitan en su territorio sin tener *origo (incolae)*, pero que por vivir en el municipio se les imponen cargas sobre el patrimonio declarado en el censo local, lo que evidentemente incluiría sus propiedades prediales y su capital económico. Por otro lado, los *munera* de los *possesores* que, sin vivir en el municipio ni tener necesariamente vinculación administrativa con él, debían sin embargo responder igualmente a los *munera* derivados de sus propiedades poseídas, lo que incluiría contribuir para el *tributum soli* además de distintos tipos de *munera* relacionados exclusivamente con sus propiedades como, por ejemplo, las *munitiones viarum*. La dimensión que importa para recaudar el tributo es, por tanto, el *ager municipalis* independientemente de si su dueño es munícipe, *incola* o simplemente un *possesor* extranjero. Para el municipio de *Irni* tenemos bien representada esta misma idea de *munera* patrimonial antes de Ulpiano, en donde quedan sometidos a *munera (munitiones y operae)* los *municipes*, los *incolae*, pero también quienes tuvieran propiedades en los *agri municipales*: *municipes incolaeue eius municipi erunt a[u]t intr[a] fines municipi eius habitabunt agrum agroue habebunt (lex Irn. 83, l. 46-47: vid. Pereira, 2011: 88-90)*. El testimonio irnitano subsume, a nivel local, el esquema transmitido por Ulpiano a propósito del pago del *tributum soli*, en donde el dueño debía declarar su propiedad *in ea civitate, in qua ager est; agri enim tributum eam civitatem debet levare, in cuius territorium possidetur (D. 50, 15, 4, 2; vid. Brunt, 1981: 169)*. Aunque Ulpiano no hable específicamente aquí de municipios, pone de nuevo en evidencia dos aspectos: que la responsabilidad fiscal es colectiva de la comunidad como intermediaria<sup>369</sup>, y que el criterio para recaudar el tributo es territorial (a qué comunidad pertenece el *ager* privado, la *origo* personal carece de importancia). Ambas características concuerdan con la asignación del *ager per extremitatem comprehensus* de los municipios y de las *civitates* peregrinas, en donde *tributarum solum per universitatem populis est definitum (Front. Th. 1-2)*. Es cierto que el cap. 83 de la legislación Irnitana no nombra de manera explícita el *tributum*, sin embargo, pueden extraerse dos argumentos en esta misma dirección para completar lo anteriormente mencionado. Por un lado, el término *tributum* (que no *vectigal*) aparece directamente relacionado con el gravamen de los campos públicos del municipio, pero sería probablemente aplicable al resto, cuya omisión se explica por aparecer en el capítulo dedicado a la advertencia sobre los *Iiviri* y sus familias si accedían a *locationes* publicas con *dolo malo (lex Irn. J: González Román, 2008)*. La asimilación de la terminología fiscal romana es posiblemente una consecuencia derivada de esta responsabilidad colectiva sobre el *tributum* romano (vid. Hyg. Th. 74=La. 114, 12). Por otro lado, que era el propio municipio el que gestionaba las cargas sobre las propiedades prediales puede deducirse fácilmente del cap. 76, en donde se establece que los *Iiviri*,

---

poseedores; por el contrario, los *munera* que cargan a los patrimonios, sólo se imponen a los munícipes y a los residentes”.

<sup>369</sup> El carácter colectivo del impuesto al municipio latino de *Ebussus* (Ibiza) se materializa en el acto evergético de *CIL II*, 3664, en donde un privado, a causas de las estrecheces económicas de las finanzas públicas, asume *quodannis tributum Romanis penderetur*.

tras consultar con los decuriones, podían enviar a alguien para inspeccionar los límites de las propiedades, tanto privadas (*finēs*) como públicas del municipio (*agri vectigales*; vid. González Román, 2008: 75-76). Evidentemente, esta inspección (*recognoscere*) de los *termini* implica la existencia de una *forma* agrimensoria de referencia para poder proceder a una comprobación eficaz de los mojones a la vez que actuaba como garantía en controversias entre propietarios o con fines fiscales. Dado que no existía una *limitatio* oficial del espacio interno de los *agri per extremitatem* y, por el sentido del capítulo, no parecen recurrir a un agrimensor oficial, la autonomía municipal seguramente se concretara en operaciones catastrales locales, necesaria por otra parte para la gestión de los tributos. Esta posibilidad se intuye en el propio Frontino cuando reconoce que, a pesar de que el *ager per extremitatem* se mensione sólo por su contorno, se producían en ocasiones parcelaciones del espacio interno que se asemejan a *limitationes*, en probable alusión a este tipo de prácticas locales: *Hunc agrum multis locis mensores, quamvis extremum mensura comprehenderit, in formam in modum limitati condiderunt* (Front. Th. 2). También Higinio señala que en algunos lugares se encontró con parcelaciones extrañas que no ocurrían en los *agri divisi*, lo que remite indirectamente al *ager per extremitatem* de municipios y *civitates peregrinae* (Hyg. Th. 93=La. 129, 19). Quizás, en el *tabularium* de Irni que conocemos por otros capítulos como el lugar de custodia de los *decreta decuriorum* y otros documentos (*Lex Irn.* C, 63 y 73), existiera un catastro de esta índole, aunque no tuviera la misma validez que el mensurado oficialmente, tal y como ocurría en las *limitationes* privadas sobre el *ager arcifinius* que los agrimensores también recogen como práctica extraoficial: *vero possessionum suarum privatim formas fecerunt, quae nec ipsos vicinis nec sibi vicinos obligant, quoniam res est voluntaria* (Sic. Flacc. Th. 102=La. 138, 3).

## 9.2 Las *civitates peregrinas* y el fundamento ideológico de la imposición fiscal colectiva: *Bellum iustum* y *deditio in fidem*.

Desde finales de la República, la política romana basculó definitivamente hacia formas de dominación que dejaron a un lado antiguos instrumentos de sujeción colectiva, como el *foedus* o las *civitates liberae*. Fue entonces la guerra o, mejor dicho, el comportamiento antes, durante y después de ésta, lo que dirigía la política romana sobre las comunidades sometidas o, al menos, así seguía siendo en las narrativas del Alto Imperio, en donde todavía sirve para justificar la situación desigual de las comunidades dependientes conquistadas tiempo atrás. En el mismo momento en que Aelio Arístides, en su conocido discurso del siglo II d.C., hace una loa a las bondades de la integración en el Imperio, la guerra continúa justificando varios siglos después el tratamiento al vencido y la propia tributación. Evidentemente la razón es sencilla, como observa el propio Nerón al querer abolir el *tributum soli* sobre las provincias, los *senatores* le recuerdan que se daría de bruces con una realidad inevitable: *dissolutionem imperii docendo, si fructus, quibus res publica sustineretur, diminueretur* (Tac. Ann., XVI, 1).

El discurso de Arístides<sup>370</sup>, que responde con claridad a la ideología de la clase dominante (Lozano, 2013: 167) y a los principios universalistas de Augusto<sup>371</sup>, no puede evadirse de las necesidades financieras del Imperio, en donde la consecución de la paz a través de una aplicación justa del derecho de victoria debía pasar por el pago de tributos a decir de Tácito, “porque la paz de los pueblos no se puede tener sin ejércitos, ni ejércitos sin estipendios, ni estipendios sin tributos” (*neque quies gentium sine armis neque arma sine stipendiis neque stipendia sine tributs haberi queunt* (Tac. *Hist.*, IV, 73-74; *vid.* Naco, 2003: 63). Las necesidades financieras suponían, por tanto, la jerarquización de territorios y comunidades ante una realidad que no podía dar cuenta, por insostenible, de una vocación universalizante del Imperio que sólo tiene cabida en la retórica.

Dentro de este esquema, las comunidades *peregrinae*, que según Agenio Urbico tenían en común con el municipio la asignación de un territorio estipendiario pero propio, con autonomía interna y restablecimiento de sus leyes e instituciones, respondían a un proceso de integración cuyos fundamentos partían directamente del recuerdo de su sometimiento por las armas. En la *Citerior*, las numerosas comunidades que Plinio refiere como *oppida stipendiaria* constituyen un buen exponente de una condición peyorativa (*nota servitutis*) que hunde sus raíces en el proceso de conquista, pero que ahora se ha revestido de nuevas connotaciones ligadas al *stipendium* como figura fiscal colectiva, estable y ordenada: *vectigal certum quod stipendiarium dicitur* (Cic. *2Verr.* 3, 6, 12). La tributación es necesaria, un mal menor que permite la consecución de la paz y el mantenimiento de la autonomía, y cuya lealtad continuada en el tiempo pudo acarrear beneficios individuales o colectivos.

La forma que toma integración o el sometimiento al poder romano se resuelve en los actos posteriores a la *deditio in fidem*, la rendición sin condiciones. Aquí entra en juego el concepto de *Bellum iustum* en el trato al vencido, el llamado *ius post bellum*, que aun siendo un concepto que sólo toma sentido desde la búsqueda romana por legitimar la construcción retrospectiva de su Imperio, revela algunos principios políticos

<sup>370</sup> “Después de haber dividido en dos partes a todos aquellos que están en el Imperio, –y al decir esto me refiero a toda la ecúmene – por una parte a todo aquel que fuese muy elegante, linajudo y poderoso en cualquier parte, lo hicisteis ciudadano romano y hasta vuestro congénere, mientras que el resto quedó como súbdito y gobernado. Y ni el mar ni toda la tierra que se interponga impide obtener la ciudadanía, y aquí no hay distinción entre Asia y Europa. Todo está abierto para todos. Nadie que sea digno de una magistratura o de confianza es extranjero, sino que se ha establecido una democracia común a la tierra bajo el dominio de un solo hombre, el mejor gobernante y regidor; todos se reúnen aquí como si fuera en el ágora común, cada uno para procurarse lo debido. Lo que una ciudad es para sus propias fronteras y territorios, eso es esta ciudad para toda la ecúmene, como si se presentase como el núcleo urbano común a todo el territorio” (Arist. *Orat.* 26, 59-61; *vid.* 28-30; trad. por Cortés, 1997).

<sup>371</sup> *Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra(rum) imperio populi subieci* (RG 1, 1). El discurso sobre la vocación universalizante y unificadora del Imperio aparece también en otros autores de época augustea como Virgilio (*Aen.* VI, 851-53) y Estrabón, cuando recuerda el propósito de los generales romanos de unificar a todos los pueblos bajo un único gobierno y una administración común (Str. I, 1, 16). Más tarde Plinio reconoce Italia *una cunctarum gentium in toto orbe patria* a la vez que exalta su capacidad de “congregar imperios antes esparcidos, educar los hábitos sociales y, con comunidad de lengua, llevar entendimiento a gentes de hablas tan diferentes y salvajes y aportar la civilización al género humano” (Plin. *NH.*, 3, 3, 39). Un análisis sobre estas cuestiones en: De la Vega, 2005. Esta cuestión la hemos tratado ha propósito del Noroeste en: Sastre, Rodríguez y Currás (e.p.).

fundamentales de gobernanza (López Barja, 2007: 275-290; 2011). En Cicerón (*Off.*, 1, 33-41) se establecen algunas líneas maestras sobre el modo de proceder romano conforme a un ideal de *iustitia* que debía prevalecer tanto en las contiendas militares como después, y que se basaba en la medida y la proporcionalidad sobre el vencido. En concreto, establece tres formas generales de tratamiento que tienen en consideración tanto la propia entidad del enemigo como el grado de oposición a Roma (Cic. *De Off.*, 1, 35; Iso, 2014: 422-24). Por un lado, dos grupos de *competitores*, de suficiente fuerza como para cuestionar la hegemonía romana, diferenciándose según el grado de observación que tuvieran al *ius Bellum* como consenso formal entre las partes contendientes de acuerdo a los preceptos morales del *ius gentium*. Esto es lo que diferencia a los *competitores* representados por Cartago, como enemigo fuerte, cruel y rompedor de pactos (*crudelis e immanis*), que no responde a un ideal de *iustitia* y merece por ello la destrucción completa (*funditus*). Frente al ejemplo de los sabinos, latinos o samnitas que representan aquí el modelo de integración tras aceptar la derrota y cumplir con sus nuevas obligaciones hacia Roma. A éstos hay que añadir el tercer grupo, de mayor interés para nosotros, aquellos *inimici* que, a pesar de oponer resistencia, luchaban sólo por su supervivencia, como Cicerón reconoce para algunos casos hispanos como los *Celtiberi* (vid. Iso, 2014) y sería perfectamente extrapolable al propio Noroeste poco después. A ellos Cicerón les reserva la posibilidad de ingresar en la *humanitas* y aprovechar las ventajas de la integración, pues aún a las comunidades más humildes Roma les profesa *iustitia: meminimus autem etiam adversus infimos iustitiam esse servandam* (Cicero, *de Off.* 1, 41). En este fragmento de Cicerón es el cumplimiento de lo establecido, el respeto a la *fides*, lo que convierte a los *inimici* menores en *iustiores* respecto a Cartago y, ante su situación de inferioridad, Roma no impondrá los grados más altos de castigo, que se reservan para los *competitores* injustos. También Livio, en su construcción discursiva sobre la expansión romana conforme a la *iustitia*, recuerda que Roma no busca sólo la victoria, sino la paz, y para ello era necesario terminar la guerra conforme a un ideal de *iustitia* que debía primar en las condiciones sobre el vencido: *cum victoriam prope in manibus habeat, pacem non abnuere, ut omnes gentes sciant populum Romanum et suscipere iuste bella et finire. Leges pacis se has dicere...* (Liv. 30, 16, 8; vid. López Barja, 2011: 73). Este principio político, precedente inmediato del *big stick*, está plenamente representado en el conocido verso de Virgilio: *parcere subiectis et debellare superbos* (*Aen.*, 6, 847-53), así como en el propio Augusto<sup>372</sup> cuando dijo preferir la conservación a la aniquilación del vencido en las guerras recientes como las cántabro-astures: *externas gentes conservare quem excidere malui* (*RG* 3, 2). Hay aquí, por tanto, una primera conclusión: la misma concepción romana sobre su *dominium* no se basaba en la imposición de la fuerza bruta de las armas o el ensañamiento indiscriminado sobre el derrotado, sino en

<sup>372</sup> La revalorización de la *iustitia* y del *bellum iustum* está especialmente presente en el programa ideológico de Augusto y no resulta casual que sea precisamente durante su gobierno, en la campaña de Egipto contra M. Antonio, cuando se recupera el *ius fetiale* (D. Cass. 50, 5, 4), el antiguo ritual de declaración de guerra que había quedado en el olvido, al menos, desde la campaña de Jugurta si se acepta la teoría de Oost (1954). De hecho, a opinión de Wiedemann, no puede descartarse que el *ius fetiale* corresponda a una creación del propio gobierno augusteo, que es extrapolado al pasado dentro de la narrativa legitimizante sobre el proceso expansivo romano durante la República (vid. Wiedemann, 1986).

la serie de garantías y deberes contraídos entre Roma y el vencido en proporción al desarrollo de los acontecimientos bélicos y de la propia entidad del contendiente. De manera general, era la flexibilidad y la proporcionalidad (la *aequitas*) lo que separaba los casos de mayor oposición, en donde sí podría recurrirse a condiciones extremas y aplicadas con toda su dureza como las esclavizaciones masivas o la destrucción total de las comunidades, del conjunto mayoritario integrado, *minus acerbe*, para el cual es el tributo y el mantenimiento de los acuerdos establecidos en la *deditio* lo que permitía mantener la paz y facilitar la integración. Como ha observado López Barja, el conocido discurso taciteo de *Cerialis* (Tac. *Hist.*, I4, 72-74), defensor de la integración de los galos pero sabedor de que la *libertas* de Roma era limitada<sup>373</sup>, pone de relieve una narrativa en la que “galos y romanos comparten el Imperio en igualdad de derechos, pues mandan legiones y gobiernan provincias tanto unos como otros. Lo único que los separa es el tributo que han de pagar los vencidos a los vencedores” (López Barja, 2011: 73). Las primeras medidas globales en el Noroeste denotan esta misma práctica, en donde hubieron de sopesarse los casos particulares en el ejercicio del *ius post bellum*, como la colaboración con Roma de los *Brigaecini* el 25 a.C. (Flor. 2, 33, 56; Oros. 6, 21, 9-10), y que finalmente se materializaron en una serie de exigencias inmediatas, quizás más relacionadas con la represalia y el botín de guerra en la *deditio* que con las contribuciones propias de una fiscalidad estable, como la toma de rehenes y la venta de algunos de ellos: *hos obsidus adstrinxit, hos sub corona iure belli venundedit* (Flor. II, 33, 52<sup>374</sup>; D. Cass. 53, 29, 2; *vid* García Riaza, 2007). Como denota la exigua epigrafía de esclavos en el Noroeste (Sastre, 2001a: 198-202 *cfr.* García Martínez, 1997; Pastor, 1977: 196) así como la reflexión sobre la mano de obra minera (Mangas y Orejas, 1999; Orejas y Sánchez-Palencia, 2002: 589-96), la vía del sometimiento no se basó en la esclavización de sus poblaciones, en todo caso puntual, sino en la máxima antes mencionada de Augusto, en la que prevalece la conservación sobre la destrucción y el esclavismo (*vid.* RG., 3, 2). Así lo ilustra el tratamiento de Lancia en coherencia con la imagen ciceroniana del *inimicus* que lucha por su supervivencia, que no es *superbus*, en donde a pesar de la resistencia ofrecida no se procede a la eliminación de la ciudad y a la esclavización de sus habitantes como permitía el *ius Bellum* en caso de *oppugnatio* (García Riaza, 2014: 97-98), sino que prima la proporcionalidad de la *aequitas* y la *iustitia*: “Acogió los restos del derrotado ejército la muy poderosa ciudad de Lancia, donde se combatió con la naturaleza del lugar, a tal punto que, cuando exigieron incendiar la ciudad capturada, el general consiguió con dificultad su perdón, para que fuera testimonio más conspícuo de la victoria romana quedando en pie que siendo reducida a cenizas” (Flor. 2, 33, 57-58). Es a partir de entonces la observancia y el respeto a las condiciones y obligaciones fiscales establecidas a través de la *fides* lo que marca el tratamiento de Roma hacia las comunidades según decidan *descindere ab officio* o *permanere in officio*, como queda en evidencia con los premios y castigos del

<sup>373</sup> Tac. *Hist.*, 4, 73, 3: *ceterum libertas et speciosa nomina praetexuntur, nec quisquam alienum servitium et dominationem sibi concupivit ut non eadem ista vocabula usurparet* (“Como pretexto ponen la libertad y bonitas palabras: nadie que haya ambicionado someter a otros a su dominio ha dejado de emplear estos mismos términos”).

<sup>374</sup> Sobre el contenido metafórico de la expresión “bajar al llano” que aparece en el pasaje y actúa aquí como sinónimo de sometimiento: *vid.* Sastre y Plácido, 2008.

edicto de El Bierzo poco después tras el establecimiento del nuevo esquema de ordenación (Wulff, 2012: 510-151; *vid.* cap. 11.1). Así, Floro relata cómo a su beligerancia durante la guerra le ha seguido un tiempo marcado por la *aeterna pax* y la aceptación de las condiciones impuestas tras la *deditio* (*certa fides*). Aquí de nuevo, la *pax* no es la ausencia de guerra, que es sólo su consecuencia indirecta, sino la *pax* entendida como cumplimiento de lo pactado que aparece en Festo (260L): *Pacem a pactione condicionum putat dictam Sinnius Capito, quae utrique inter se populo sit observanda*; es decir, como observa Sini, “la definizione giuridica di pace, bilaterale e imperativa al tempo stesso, esprime pienamente il «significato sacrale originario di *pax*»: acordó tra parti in conflitto (atto quindi rivolto alla pace e non alla “situazione di pace” che da esso conseguiva), che tuttavia prefigurava, a simiglianza della *pax deorum*, una gerarchizzazione dei rapporti tra le parti contraenti” (Sini, 2006).

### 9.3 El *ius post bellum* y el acto de *reddere* de leyes y territorios en el *Corpus Agrimensorum Romanorum*.

Un aspecto central del *ius post Bellum*, por tanto, es la manera en que se resuelve la *deditio in fidem* y se construye la *pax* conforme a estos ideales de justicia y proporcionalidad. Tal y como viene descrito en Livio, la *deditio* era un acto jurídico ritualizado basado en un sistema de tres preguntas-respuesta que conocemos bien por la antigua *deditio* de los *Collatini* de la narración de Livio (1, 38, 1-2). En ella, tras asegurarse la *potestas* de quien hablaba en nombre de la comunidad derrotada, se impone la supresión jurídica de todo cuanto existía con anterioridad: – *Deditisne vos populumque Collatinum, urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia, in meam populiue Romani dicionem?* – *Dedimus*. El mantenimiento de la condición dediticia supone la supresión de toda realidad preexistente y ejemplifica uno de los más duros castigos en el tratamiento al vencido. Esta situación seguramente se escondiera detrás de muchos de los fenómenos del colonialismo romano, donde la abolición de la comunidad se significaba en la *deductio* de una colonia en su lugar o en el mantenimiento de la titulación pública del suelo, bien para ser vendido como *ager quaestorius*, bien para convertirse en *ager vectigalis*. Los agrimensores son muy explícitos al referir esta forma de tratamiento al vencido, directamente relacionada con un proceso de ordenación basado en *ager publicus* en donde se producía la expulsión formal o material de sus antiguos habitantes tras la conquista. No es casual que la territorialización basada en *ager publicus* se relacione para Frontino y Sículo Flaco con el término *territorium* como derivado de *terreo*, “ahuyentar”, “aterrorizar” a los *hostes* o a los antiguos *cives indigenae*: *territorium est quidquid hostis terrendi causa constitutum est* (Front. Th. 8, 4-6 = La. 19, 5- 20, 2), *territis fugatisque inde civibus*<sup>375</sup>, *territoria dixerunt* (Sic. Flacc. Th. 101 = La. 137, 7). Es la victoria del pueblo romano

<sup>375</sup> Los *cives* que aquí aparecen son los *indigenae* nombrados inmediatamente antes, dentro de un proceso bastante ambiguo y confuso sobre los movimientos y reasentamientos de poblaciones relacionados con los municipios y las colonizaciones.



lo que permite hacer uso de los derechos patrimoniales adquiridos en la *deditio*, como pone de relieve Sículo Flaco sobre las tierras arrebatadas al enemigo (*agros ex hoste captos in victorem populum*), que podían recibir después un tratamiento distinto (Sic. Flacc. Th. 100=La. 136, 8): las *divisi et assignati* coloniales (*agri partiti*), las que se venden como *ager quaestorius* con el ejemplo del *ager Sabinorum*, y las que se mantienen como *ager publicus* y pagan por ello un *vectigal* al *aerarium*, como los Montes Romanos de Reate (*populi Romani territorium*). El mantenimiento de *ager publicus* se relaciona insistentemente con el comportamiento sobre el vencido también en Higinio, al referir la expulsión por efecto de la guerra en el *ager* cuestorio “una vez vencidos y expulsados los enemigos” (*quos populus Romanus devictis pulsisque hostibus possedit*: Hyg. Th. 78=La. 284, 3), de modo semejante a como lo hace Sículo Flaco en otro pasaje, *agri ex hoste capti* (Sic. Flacc. Th. 116=La. 152, 18), o Higinio Gromático sobre las colonias, *quas aut victoribus populi Romani* (Hyg. Grom. Th. 140), entre otros muchos ejemplos. Resulta verdaderamente sorprendente que en el tiempo en que escriben los agrimensores sus obras (finales del siglo I-II) se recurra sistemáticamente a la expulsión de las comunidades por la guerra para explicar la existencia del *ager publicus* provincial o el fenómeno del colonialismo, cuando la mayoría de colonias eran ya una realidad bien establecida desde tiempo atrás y las nuevas lo eran más por la recepción de una nueva titulación que por ser consecuencia de una fundación *ex novo*. A mi modo de ver, la recurrente apelación al proceso de conquista en los tratados de agrimensura proporciona un buen indicativo de que el *ager publicus* no constituye la sustancia jurídica del *ager provincialis* sino sólo una que, aun pudiendo efectivamente darse, era propia de procedimientos post-bélicos excepcionales. Si el *ager publicus* era generalizado no sería entonces necesaria la apelación constante al tratamiento sobre el vencido para explicar su existencia. Como puede apreciarse con claridad en otro pasaje de Sículo Flaco, la *divisio et assignatio* no es generalizable, sino que son las guerras la que proporcionan las causas y las razones para dividir las tierras y expulsar a los enemigos: *Causam autem dividendorum agrorum bella fecerunt, caputs enim ager ex hoste victori militi veteranque [est] assignatus hostibus pulsus aequalis in modo manipuli datus est* (Sic. Flacc. Th. 109=La. 154, 24). De hecho la situación del vencido que no supera la *deditio* suponía un trato especialmente duro, de carácter ejemplarizante y excepcional, en donde la supresión de su comunidad y su territorio convertían la indefinición jurídica personal en la marca de su castigo. Así sería el caso de aquellos testimonios de quienes no superaron la *deditio* pero continuaron habitando en su antiguo territorio, ahora colonizado, en calidad de *incolae* dependientes sin reconocimiento alguno de derechos políticos o jurídicos, como los *incolae alienigenae* bien estudiados por Gagliardi, absorbidos entre *Tuder* y la colonia de *Fanum* en el Piceno del que da cuenta el propio Agenio Urbico (Agen. Urb. Th. 45, 6-15=La. 52, 17-53; Gagliardi, 2006: 259-63); o los *Salassi* galos que, tras la esclavización masiva de buena parte de su masa social, los restantes fueron sometidos a capitación e ingresaron forzosamente como *incolae* de la colonia Augusta Pretoria que ocupó su antiguo territorio tras su *deductio* el 24 a.C. (Str. 4, 6, 7; D. Cass. 53, 25; *ILS* 6573; *vid.* Sastre y Orejas, e.p.).

La línea de actuación más habitual tras la *deditio in fidem* da cuenta del ideal de la filosofía política del Principado, en donde un trato *iustus* (a menos que alguna de las partes hubiera vulnerado el *ius Bellum*), pasaba por la devolución a la comunidad vencida de las instituciones, las leyes y el territorio (total o parcialmente). Ello permitía superar la condición dediticia inicial a través de la peregrinidad, en donde la tributación actúa como *nota servitutis* y garantía de la *pax* en los términos que ya hemos visto (*vid. supra*). Esta idea de *restitutio* está ya presente en el proceso de conquista republicano, cuando todavía no existía una configuración del *ager provincialis*: “La verdadera clave del proceso radica en la iniciativa posterior a las descritas [*deditio*], que consiste en la *restitutio*: la devolución a los vencidos, por parte del *imperator*, de su libertad personal y de una parte de sus bienes, así como la reinstauración del sistema “constitucional” y normativo local (instituciones de gobierno, derechos de propiedad, etc.)” (García Riaza, 2012: 164; 2014: 97-98). No en vano el conocido bronce de Alcántara del 104 a.C. establece las medidas que siguen a la aceptación de la *deditio in fidem* por parte de los *Seanoc[---]* lusitanos, en donde al igual que los *Collatini* de Livio, se infiere que se suprimió la existencia jurídica de la comunidad y quedan a disposición de Roma (*AE* 1984, 495; *vid. Díaz Ariño*, 2008: 194-97). Es entonces el *imperator*, oída la *sententia* del *consilium* que lo acompañaba, quien decide qué permanece en poder del *Populus* y qué se devuelve. En este caso, tras la exigencia de algunos prisioneros, caballos y yeguas que ya habían dispuesto, prevalece un acto de *reddere* de las leyes, los edificios, los campos y demás cosas que hubieran tenido hasta el momento de aceptación de la *deditio in fidem*: *L(ucius) Caesius C(ai) [f(ilius) imperator liberos] / esse iussit agros et aedificia leges cete[ra omnia] / quae sua fuissent pridie quam se dedid[erunt quae tum] / extarent eis redidit* (l. 7-10<sup>376</sup>). Un aspecto fundamental es la cláusula *dum senatus populusque vellet* que aparece en el bronce inmediatamente después, interpretada en ocasiones como síntoma del carácter siempre revocable de la devolución, que quedaba entonces sujeta a las decisiones que pudiera tomar el poder romano en lo sucesivo. Es decir, se trata de una lectura que reinicia en la idea de una peregrinidad en precario sobre la que se cierne el retorno inminente a la condición dediticia de partida: “mientras el *Populus* y el Senado quieran”. Como han apuntado otros autores, este tipo de cláusula puede tener sin embargo un sentido distinto, “siempre que el *Populus* y el Senado lo aprueben” (Sastre, 2001a: 108; *vid. López Barja*, 1993: 190), en donde son las decisiones tomadas *ad hoc* por los *imperatores* tras la victoria las que requieren una confirmación posterior. De hecho, diferentes ejemplos muestran esta posibilidad, cuando el senado desautorizaba *a posteriori* a los gobernadores provinciales a propósito del tratamiento dado al vencido, cuya responsabilidad recaía en las decisiones tomadas

<sup>376</sup> “Después Lucio Cesio, hijo de Cayo, determinó que quedaran como estaban los campos y las construcciones, la leyes y las demás cosas que hubieran tenido hasta el día de la rendición” (trad. López Melero *et al.* 1984); En el bronce de Lascuta (189 a.C.; *CIL* II, 5041), el *imperator* Emilio Paulo decreta, desde su campamento, la *libertas* de los habitantes de la Torre Lascutana, hasta entonces dependientes de los *Hastienses* de la Bética y, además: *agrum oppidumqu(e) / quaquod ea tempestate posedisent / item possidere habereque / iussit dum populus senatusque Romanus vellet* (l. 4-8). También la *tabula Contrebiensis* reconoce implícitamente los *agrum quem Salluienses ab Sosinestaneis emerunt* en un momento en que ambas comunidades han pasado a estar dentro de la órbita romana (87 a.C.: *AE* 1979, 377).

por el general (Pina Polo, 2012: 71-72). La dejación de las obligaciones, como la tributación, vulnera y rompe la *pax* como acuerdo bilateral, y puede llevar a un nuevo estado de guerra, en donde la presumible victoria romana puede concretarse en una nueva *deditio*, ahora en términos más duros ante un incumplimiento de la *fides* que lo convierte en *inimicus iniustus*. Un argumento que no suele ser tenido en cuenta para reflejar la pérdida de la condición dediticia procede del propio Noroeste cuando, en un presumible contexto de resistencia al tributo en tiempos de Nerón, el reinicio de las hostilidades se produce en clave bélica y requiere la participación de la *Legio VI (CIL XI, 395; vid. cap. 11.2)*. Las condecoraciones que reciben los soldados, como el propio *M. Veturius Valens (torquibus phaleris armillis)*, vienen a demostrar indirectamente el reconocimiento de la condición extranjera y autónoma de las comunidades *astures*, en donde el retorno a una “situación de guerra” los confirma como sujetos políticos. Una concepción bélica, huelga decir, difícilmente conciliable con una intervención militar sobre colectivos dediticios en los que Roma ejerce un dominio patrimonial, para los cuales el conflicto seguramente se hubiera expresado en términos bien distintos. Y es que, como puede extraerse de Séneca, en clara alusión al *dominium populi vel Caesaris*, todo pertenece al César, pero bajo otro concepto pertenece también a los particulares, lo que es de una *res publica* en conjunto tiene después propiedades privadas, del mismo modo que todo es de los dioses, no todo está consagrado a los dioses (*vid. Sen. Ben., 7, 4-7; vid. cap. 2, 3, 1*). El *dominium* es político y responde a una concepción imperialista, progresivamente tutelada por el gobernador, por el creciente despotismo del *princeps* y por el papel coercitivo del ejército, pero cuyos fundamentos se basan en el reconocimiento de la autonomía comunitaria en tanto que es el instrumento esencial del propio sometimiento colectivo.

La principal fuente de información del Alto Imperio sobre el acto de *reddere* de las comunidades peregrinas procede precisamente del *corpus Agrimensorum Romanorum*. Como ha observado Orejas con acierto (2002: 396-97), el acto de *reddere* está implícito en las propias omisiones de los tratados agromensorios, que pese a no responder a una finalidad única, su lectura conjunta invita a pensar en dos motivaciones u objetos de interés fundamentales: la mensura sobre los *agri divisi et assignati* ya comentada, debido al importante papel que debían desempeñar en las *controversiae* derivadas de la *limitatio*; y, por otro, el *ager publicus* no asignado ni concedido, sobre el que el gobierno romano se reservaba una capacidad de intervención futura (*ius subsecivorum*). De hecho, esta segunda preocupación es coherente con el momento histórico en que algunos de los agrimensores escribieron sus tratados, cuando la dinastía Flavia hizo prevalecer sus derechos patrimoniales sobre los *subseciva*<sup>377</sup>, muchas veces enajenados, como el caso de las tierras reales de Cirene<sup>378</sup> (Hyg. Th. 86=La. 123), para

<sup>377</sup> En concreto corresponden a esta época las obras de Frontino, Higinio Gromático y, quizás, Sículo Flaco.

<sup>378</sup> Según Higinio la recuperación de estas parcelas de *ager publicus* enajenado se saldó con una nueva *limitatio* definida por *termini* con la inscripción *OCCCVPATI A PRIVATIS FINES P(opuli) R(omani) RESTITUIT*.

ser vendidos con fines recaudatorios por el fisco<sup>379</sup>. El escaso interés que los agrimensores prestaron al *genus agri* de Frontino, *per extremitatem mensura comprehensus* propio de las comunidades peregrinas (y de los municipios) constituye ya una omisión muy indicativa: por un lado, del reconocimiento de una autonomía en la que los agrimensores no tienen capacidad de actuar por no estar limitada internamente ni responder a los esquemas romanos sobre la propiedad; por otro, reinicia en la idea de que la devolución de las leyes, instituciones y territorios tras la *deditio* es plena y no revocable (aun cuando el gobernador irá protegiendo el *ius possidendi* de algunas propiedades privadas). Dicho en otras palabras, si Roma no hubiera renunciado a sus derechos patrimoniales, *dum senatus populusque vellet*, esta capacidad de revocación se habría plasmado en un tratamiento análogo al que reciben las otras categorías de *agri* que afectaban directamente al Estado, como ocurre incluso entre los *agri arcifinales* no mensurados (eg. Front. Th. 2, 13).

A pesar de que las comunidades peregrinas no fueran el centro de su interés, existen numerosas alusiones más o menos veladas que nos permiten avanzar en su conocimiento, sobre todo cuando los agrimensores buscan establecer las diferencias y los contrastes con otros expedientes y condiciones del suelo. La superación de la situación dediticia está presente especialmente en varios pasajes de Sículo Flaco, en donde la contempla de manera coherente con una concepción de *iustitia* en la aplicación del *iust post bellum* muy semejante a la mencionada anteriormente. Así, para explicar la diversidad de las situaciones administrativas que podían darse en una provincia lo vincula al comportamiento debido, tanto en las situaciones de guerra como en las de paz:

*Quidam enim populi pertinaciter adversus Romanos bella gesserunt, quidam experti virtutem eorum servaverunt pacem, quidam cognita fide et iustitia eorum se eis addixerunt et frequenter adversus hostes eorum arma tulerunt. Leges itaque pro suo quisque merito acceperunt: neque enim erat iustum, ut his, qui totiens ammisso periourio rupere pacem ac bellum intulere Romanis, idem praestati quod fidelibus populis* <sup>380</sup>(Sic. Flacc. Th. 98-99= La 135, 10-11).

*Iustitia, fides, pax* son los elementos principales sobre los que se evalúa qué tipo de leyes reciben las comunidades (*leges itaque pro suo quisque merito acceperunt*) y que, para el caso de las comunidades peregrinas, parecen encajar con aquellos que comprobaron su fuerza y luchaban por su supervivencia pero fueron sometidos a las condiciones de la *pax* romana. Ello los distingue con claridad de los *competitores* (*populi pertinaciter adversus Romanos bella gesserunt*) que no se atienen al *ius bellum* o a las condiciones de la *deditio* (*rupere pacem*) y son por ello *iniusti*. Es a estos a

<sup>379</sup> La alusión a las políticas Flavias sobre la recuperación de los *subseciva* está presente en la mayoría de tratados de agrimensura (vid. eg. Hyg. Th. 97=La. 133, 10; Sic. Flacc. Th. 128=La. 163, 13).

<sup>380</sup> “En efecto, algunos pueblos lucharon tenazmente contra los romanos; otros que comprobaron su fuerza, conservaron la paz; y otros, conocida su lealtad y su justicia, se convirtieron en sus aliados y, con frecuencia, se levantaron en armas contra sus enemigos. Así pues, cada uno recibió leyes, según su comportamiento, puesto que no era justo garantizar a éstos que cometiendo traición tan a menudo rompían la paz y luchaban contra los romanos, lo mismo que a los pueblos leales” (Trad. de Castillo, 1998a).

quienes no se les dan leyes y no superarían la *deditio*, en marcada oposición a las comunidades peregrinas (*quidam experti virtutem eorum servaverunt pacem*) o a los que ingresan en mejores condiciones en el Imperio sin mediar necesariamente una guerra (*quidam cognita fide et iustitia eorum se eis addixerunt et frequenter adversus hostes eorum arma tulerunt*). En otro pasaje reincide en términos parejos sobre esta misma idea a propósito de la *condiciones agrorum*:

*Conditio autem agrorum varia sunt ad diversae, quae aut casibus bellorum aut utilitatis populi Romani aut ab iniustitia, ut dicunt, inaequales sunt*<sup>381</sup> (Sic. Flacc. Th. 101= La. 137, 7).

Este pasaje gira de nuevo en torno al concepto de *iustitia* y al trato dado al vencido para explicar la propia diversidad de expedientes prediales. Aquí introduce además la *utilitas*, la evaluación por parte de Roma de los recursos que pudieran interesarle, seguramente con el fin de reservarse un derecho patrimonial sobre parte de dominios agrarios que no entraran en el acto de *reddere*. En este caso, Sículo Flaco parece hacerse eco de ciertas extralimitaciones que podían producirse en la *deditio in fidem*, cuando los intereses de Roma prevalecen sobre la proporcionalidad que debe primar en el *iust post Bellum* y no responden al ideal de *aequitas* (*inequales sunt*).

*Causam autem dividendorum agrorum bella fecerunt. Captus enim ager ex hoste victori militi veteranosque [est] assignatus hostibus pulsus aequalis in modo manipuli datus, nec tamen omnibus personis victis ablati sunt agri; nam quorundam dignitas aut gratia aut amicitia victorem ducem movit, ut ei<s> concederet agros suos*<sup>382</sup> (Sic. Flacc. Th. 119=La. 154, 24).

Este pasaje nos permite retomar diferentes aspectos que hemos tratado previamente. Por un lado, reincide implícitamente en la contraposición del conocido pasaje de Agenio Urbico anteriormente analizado (cap. 9.1), en donde el *ager colonialis* asimilado al dividido y asignado se contrapone claramente con los *agri municipales aut civitatum peregrinarum*, que se caracterizan por estar mensurados sólo por su contorno y responden colectivamente al *tributum* romano. Por otro lado, supone una referencia meridiana a otras posibilidades en el *ius post bellum*, siendo la división de las tierras y la supresión de la comunidad una posibilidad contingente de ordenar el territorio conquistado, pero no la única, pues se circunscribe al propio desarrollo de las hostilidades. El papel del general en el transcurso del primer marco de ordenación tras la *deditio* parece fundamental, y permite contemplar otros tratamientos al vencido que se concretan en las concesiones de tierra. Este caso, aunque aluda a tierras particulares que se otorgaban a sus antiguos dueños cerca de las parcelaciones de *agri divisi et assignati*, remite al mismo acto jurídico de devolución (*reddere*) de los anteriores pasajes. La realidad sólo difiere en la *assignatio*, que en muchos casos no era colectiva

<sup>381</sup> “Las categorías de las tierra son variadas y diversas; son distintas por las circunstancias de las guerras, por los intereses del Pueblo Romano o, como dicen, por iniquidad” (Trad. de Castillo, 1998a).

<sup>382</sup> “Ahora bien, las guerras proporcionan la razón de dividir las tierras, porque la tierra tomada del enemigo se ha dado y asignado, una vez expulsados los enemigos. Sin embargo, no se han arrebatado las tierras de todos los vencidos, pues la dignidad de algunos, la benevolencia o la amistad, conmueve al general vencedor de tal manera que les concede sus propias tierras” (Trad. de Castillo, 1998a).

para el conjunto de la comunidad, sino individual, tal y como conocemos incluso en actos de *reddere* a los latifundistas propietarios que mantienen sus propiedades previas (Hyg. Th. 79=La. 115, 21). Del mismo modo, al referir el antiguo proceso de la *occupatio* por conquista recuerda que muchas veces se aplicaba el respeto a lo ya establecido y los vencidos no eran sometidos a las leyes de los vencedores (Hyg. Th. 79=La. 115, 21). Esto, de nuevo, sólo es posible dentro de una situación de *deditio* en la que Roma dispone de sus propios criterios a la hora de configurar el nuevo marco territorial y administrativa del territorio conquistado.

#### 9.4 La *assignatio* del *ager civitatis* a las comunidades peregrinas.

El aspecto clave en la articulación de las comunidades peregrinas desde el punto de vista territorial es la *assignatio* global de su propio territorio como *ager civitatis*, que podía coincidir o no con la situación preexistente a la guerra. En el caso del Noroeste, sin una articulación política previa que superara el castro como unidad básica de funcionamiento, la superposición artificial del nuevo marco de ordenación del territorio se convirtió en un catalizador esencial del cambio. Los agrimensores vuelven a ser explícitos en este punto, como revela el fragmento de Frontino, que debe recordarse una vez más:

*Ager est mensura comprehensus, cuius modus universus civitati est adsignatus, sicut in Lusitani Salma<n>ticensibus aut Hispania citeriore Pala<n>tinis et in conpluribus provinciis tributarium solum per universitatem populis est definitum.* (Front. Th. 1-2).

La *assignatio* se produce *universus modus*, de manera coherente con un modelo agrimensorio que sólo tiene en cuenta el perímetro, la frontera, y por consiguiente, el *tributum soli* recae *per universitatem populis*. La imposición de un territorio implica aquí la descentralidad y el establecimiento de un tributo como término esencial de sujeción, independientemente de su estructuración sociopolítica o económica interna. Este modelo, que se presume bastante generalizado (*in conpluribus provinciis*) a pesar de su infrarrepresentación en los tratados de agrimensura por las causas ya aducidas, lo ejemplifica con los casos cercanos de *Pallantia* en la *Citerior* y de la lusitana *Salmantica*. El caso de *Salmantica* evidencia a través de los estudios arqueológicos que la *assignatio* global es compatible con la inexistencia del fenómeno urbano. El yacimiento del Teso de las Catedrales denota cierta capacidad administrativa, pero no puede considerarse ni mucho menos una ciudad desde el punto de vista morfológico, sino un núcleo destacado que responde a la necesaria jerarquización interna del *ager civitatis*, en cuyo paisaje dominan formas de poblamiento de pequeños núcleos agrarios desde el siglo I d.C. (Salinas de Frías, 1992-93; Ruiz del Árbol, 2001: 478-81; Ariño, 2006; *vid.* Jiménez y Arias, 1983; Angoso, 1985). Prueba de ello es que el comentarista tardío de Frontino se sorprenda incluso de que el tratadista aluda a *Salmantica* cuando en su tiempo histórico (s. V/VI d.C.) denota todavía una realidad rural más acorde con el sistema vicánico (*Com. An. Front. I, 10*). En la tardía *Ars Gromatica Gisemundi* (Ripoll., 106),

recientemente estudiada por Andreu Expósito (2013), todavía se recuerda *Salmantica* como ejemplo del *ager universus* tras las profundas reformas de las provincias noroccidentales en el Bajo Imperio (*vid.* Olesti y Andreu, 2016: 100-01).

La cita de Frontino sobre la *assignatio* del *ager civitatis* no es una referencia aislada. La encontramos también a propósito de su definición del *ager extraclusus*, caracterizado por su exclusión de una primera *assignatio*, pero que podía ser posteriormente asignado por quien tuviera competencia para ello. Ello le lleva a definir las entidades que sí recibían una *assignatio* y no eran por tanto susceptibles de esta condición, entre las cuales menciona específicamente a las comunidades peregrinas, *rei publicae...peregrinae urbis*, en pie de igualdad con otros tipo de asignaciones, como las coloniales, los *subseciva* en *ager publicus*, o el de los *loca sacra* y *religiosa*.

*Est et ager similis subsiciuorum condicioni extra clusus et non adsignatus; qui si rei publicae populi Romania ut ipsius coloniae, cuius fine circumdatus, sive peregrinae urbis aut locis sacris aut religiosis aut quae ad populum Romanum pertinent datus non est, iure subsiciuorum in eius qui adsignare potuerit remanet potestate* (Front. Th 3).

En este sentido, deben ser también tenidas en cuenta las referencias a las asignaciones que se caracterizan por la ausencia de una *divisio* previa como mecanismo de mensurar el espacio. Se trata normalmente de alusiones insertas en las explicaciones técnicas sobre la centuriación, en donde las *civitates* peregrinas se presentan de forma implícita o explícita como realidades que entran en relación o conflicto con el *ager divisus et assignatus*. La fuente esencial sobre este punto es Sículo Flaco, quien recuerda en primer término distintas formulaciones entre los actos de *assignare* y *dividire* los campos, que no necesariamente deben producirse conjuntamente como ocurre en los *agri divisi et assignati* (Sic. Flacc. Th. 118=La. 153. 27). Entre otras posibilidades que observa destaca precisamente los *agri redduntur sine divisione*, como alusión velada al *ager per extremitatem mensura comprehensus*, devuelto total o parcialmente sin divisiones internas tras la *deditio*. Aquí no entraría el acto de *reddere* sobre particulares, que según el propio agrimensor sí parece establecido en una *divisio* recogida en la *forma* con sus medidas (Sic. Flacc. Th. 119=La. 154, 24). En otro pasaje, de considerable complejidad, refiere la posibilidad de una *assignatio sine divisio* en relación con algunas fundaciones coloniales en las que no se asignan todos los territorios vecinos, sino sólo aquéllos que la colonia precisaba; pero que, a veces, al requerir campos suplementarios (en alusión seguramente a las prefecturas), se recurría a una *assignatio* sin las divisiones propias de la centuriación, sólo por el contorno : *monte illo, pago illo, illi iugera tot, aut illi agrum illum, qui fuit illius* (Sic. Flacc. Th. 124-125=La 160, 13). Sin embargo Sículo Flaco no se limita a esta casuística, sino que extiende la *assignatio sine divisio* a algunas regiones en donde se ha producido el acto de *reddere* sobre los campos (*redditi sunt agri*), lo que a mi juicio englobaría a las comunidades peregrinas, además de otras posibilidades. De hecho, en otro punto advierte sobre la importancia de una observancia cuidadosa de los *termini* (*inscriptiones*) en ámbito colonial, porque bajo una apariencia semejante pueden no

corresponder a los *divisi et assignati*, sino a otros, entre los que incluye de nuevo los *agri reddit* (Sic. Flacc. Th. 119=La. 154, 24). Por su parte, Higinio Gromático recuerda que de forma graciosa se podían hacer concesiones al antiguo *possesor* o a una *res publica* (Hyg. Grom. Th. 166). A mi juicio todas estas alusiones corresponden un mismo procedimiento, en el que la asignación puede darse a individuos, en asignaciones viritanas como las de Cartago Nova (Conde, 2003: 202-03), pero también a colectivos, como las que aparecen en los probables *agri reddit* de Lacimurga<sup>383</sup> junto a una centuriación, razón por la cual se incluyeron en la *forma* catastral para prevenir controversias de territorio (AE 1993, 1018).

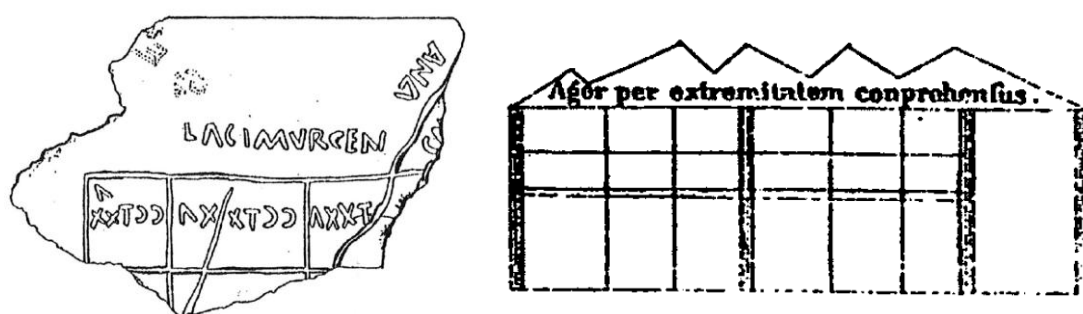


Fig. 26. Relación entre el *ager per extremitatem* devuelto a la comunidad y su relación con el espacio centuriado. A la izquierda la inscripción catastral de los *fines Lacimurgensium* (AE 1993, 1018), a la derecha la figura 42 de la edición de Thulin del *Liber Diazographus*.

El acto jurídico es el mismo, pero cambia el resultado: las *assignationes* particulares dependen de la *iurisdictio* de la colonia al asentarse en su territorio y ser ostentadas por *incolae* como tierras *concessa*, *restituta*, *reddita* o *excepta*<sup>384</sup> (vid. Hyg. Th. 127=La. 162, 14; Hyg. Grom. Th. 165 y 166); las *assignationes* colectivas se integran en un acto de *reddere* conjunto que incluye las leyes y el territorio peregrino (o municipal), del que pasan entonces a depender a todos los efectos. El objetivo político no es dislocar todas las relaciones de propiedad previas a la *deditio*, sino reconfigurarlas conforme a los intereses del *populus Romanus*. Esto muchas veces pasaba por la devolución plena de las propiedad a las *civitates* recientemente creadas, en otras, sólo convenía un retorno parcial a la situación anterior, discriminando positivamente sólo las élites colaboracionistas, *bene meriti* (vid. Hyg Grom. Th. 160), respecto a un grueso social, *male meriti*, privado de todas sus posesiones previas (vid. Hyg Grom. Th. 166).

<sup>383</sup> La reconstrucción de la parte superior indicaría los (*fines*) *Lacimurgen(sium)* (Sáez, 1990: 218); Laacimurga se ha relacionado con el núcleo del Cerro de Cogolludo (Navalvillar de Pela, Badajoz), si bien todavía no se ha podido identificar con seguridad de qué comunidad se trata, oscilando normalmente entre la Lacimurga del territorio vetón lusitano (Ptol. 2, 5, 7) o la de la Beturia céltica de Plinio (*NH.*, 3, 3, 14; *CIL* II, 5068), así como tampoco la correspondencia clara con un término colonial determinado, para lo que se han propuesto numerosas posibilidades, como los *c(oloni) Ucubitani* o una prefectura de Mérida (vid. Clavel- Lévêque, 1993). Para una síntesis reciente sobre el tratamiento historiográfico de la *forma* y el estado actual de la cuestión vid. Cordero, 2010; España, 2017: 358-71.

<sup>384</sup> Este podría ser el caso de los *Tricastini* galos en cuyo territorio se dedujo la colonia de veteranos de *Iulia Firma Secundanorum Arausio* el año 35 a.C., que es después parcialmente devuelta en algunas parcelas bajo la indicación *Tric(astinis) Redditi*, en situación de dependencia respecto a la nueva colonia (Piganiol, 1962: 82-83).



En coherencia con las *assignationes* colectivas, el *corpus Agrimensorum Romanorum* refiere en diferentes ocasiones la existencia de *formae* definidas únicamente *per extremitatem*, como las que tendrían las *civitates* peregrinas. Así se dice con claridad para los *loca sacra*, que al igual que estas comunidades se definían únicamente por su contorno y se calculaba en ocasiones su superficie total<sup>385</sup>:

...quos agros quasue territoriorum formas aliquotiens comperimus extremis finibus comprehensas sine ulla mensurali línea, modum tamen in esse scriptum<sup>386</sup> (Sic. Flacc. Th. 127=La. 162, 14).

Del mismo modo, Frontino, cuando describe el *ager per extremitatem* que se asigna a las comunidades, lo considera sometido a la *forma* oficial por parte de los agrimensores, aunque después pudiera presentar limitaciones internas (Front. Th. 1). El paralelismo que establece con las propiedades privadas (*eadem ratione et privatorum agrorum mensurae aguntur*) se debe seguramente a su definición de los contornos y al cálculo de la superficie total como ocurría con cada lote de los *agri divisi et assignati*, con los que está más familiarizado. Prueba de estas mediciones es que las superficies de las *formae* debían emplear la terminología y las unidades de medida extranjeras para evitar controversias: *licet peregrinis vocabulit possit* (Hyg. Th. 85=La. 121, 26). Las *formae* eran un instrumento esencial del marco de ordenación, que actuaba tanto como garantía pública de las fronteras como para definir el ámbito agrario devuelto y sometido a la tributación colectiva de la *civitas*. Higinio Gromático nombra la existencia de un *tabularium Caesaris* donde se depositaban las *formae* y, aunque se limita a la concerniente a las fundaciones coloniales, indica que en los *libri aeris* se recogían también los *beneficia* a los colonos e *inter civitates* (Hyg. Grom. Th. 165). Seguramente se trata del mismo archivo nombrado por Sículo Flaco en el santuario de César, en el que se custodiaban las *formae* de todas las tierras y en donde el agrimensor parece querer diferenciar entre las divididas y aquéllas que sólo son asignadas, como serían las devueltas “en bloque” a la comunidad:

*Hi tamen quiquid instituerunt curandum erit ut fide aestimetur, nequis voluntario finem proferat <aut> illa tantum fides videatur, quae aereis tabulis manifestata est. Quod si contra dicat sanctuarium Caesaris respici solet, omnium enim agrorum et divisorum et assignatorum formas, sed et divisionum et <assignationum> comentarios, et principatus in sanctuario habet. Quaelcumque enim formae fuerint, si ambigatur de earum fide, ad sanctuarium principis revertendum erit*<sup>387</sup> (Sic. Flacc. Th. 118-119).

<sup>385</sup> Los pastos públicos (*compascua*), caracterizados también por una *assignatio* colectiva, eran del mismo modo recogidos en la *forma* según Higinio Gromático (Th. 164).

<sup>386</sup> “Algunas veces encontramos que estos campos y las *formae* de estos territorios han sido comprendidas por sus linderos extremos sin ninguna línea de medida; no obstante se ha escrito la extensión en su interior” (trad. de Castillo, 1998a).

<sup>387</sup> “Se deberá vigilar todo lo que éstos dispusieron para que sea considerado de garantía y nadie de manera arbitraria lleve más lejos el lindero; o sólo considere como garantía lo que ha sido certificado por las tablas de bronce. En cuando a esto, si alguien lo contradice se acude al Santuario de César, pues el Príncipe guarda en el santuario las *formae* de todas las tierras, tanto de las divididas como de las asignadas, pero también los comentarios de las divisiones y de las asignaciones. En efecto, de cualquier tipo que haya sido las *formae*, si se discute por su credibilidad deberá recurrirse al santuario del Príncipe” (trad. de Castillo, 1998a).

Según Moatti, estos *comentarii* adjuntos incluirían toda la información que debiera conocerse desde el punto de vista administrativo, lo que incluiría *beneficia* individuales y colectivos además de información diversa de carácter fiscal recopilada por quienes efectuaban la *assignatio* (Moatti, 1993: 50-54). Por esta razón las *formae* tenían una función múltiple: cartográfica, jurídica y administrativa (Moatti, 1993: 43). De hecho, conocemos que en el cuadrante Noroccidental de *Hispania* se produjeron controversias de territorio seguramente entre comunidades estipendiarias (*vid.* Cortés, 2013: nº 12), que requirieron la intervención del gobernador en relación con cuestiones fiscales (Hyg. Th. 74, 4=La. 114, 12). Así es el caso de la *terminatio ex causa cognita* de Carvalinho en la sierra de Camulo (Guardão, Tondela, Viseu: AE 1954, 88), quizás entre las comunidades estipendiarias de *Elbocori* e *Interannienses* (Alarcão, 2006: 131-134), en donde actúa el por entonces gobernador de *Lusitania* el 5/6 d.C. (Ariño, 2005: 98-100): *Imp(erator) Caesar Div[i f. Augustus co(n)sule] XIII trib(unicia) potest[ate - - terminus] / August(alis) inter [---et---]/ienses Q(uinto) Artic<u>le[io Regulo leg(ato) Aug(usti) - - -] / causa cognit[a - - -]*. Ello es indicativo tanto de que existían *formae* de las comunidades que actuaban como garantía pública para controversias (a partir de las cuales podía procederse al restablecimiento de la *terminatio*), como de la existencia de una copia del *tabularium* para cada provincia, como se ha sugerido recientemente (Olmo, 2016: 154). Del mismo modo, documentos del periodo post-conquista, como el Edicto de El Bierzo, difícilmente pueden ser entendidos sin la elaboración temprana de una *forma* catastral en la que se definen las unidades administrativas de *Gigurri* y *Susarri*, se interviene internamente en la fiscalidad y en las *possessiones* del territorio comunitario, y cuyo lenguaje es además muy cercano al que los agrimensores emplean (Orejas, 2002: 399).

La definición de los contornos *per extremitatem* de las comunidades hubo de suponer importantes desafíos de cara a mensurar estos espacios colectivos en la *forma* y en la *limitatio* a través de *termini*, tanto por su extensión, como por las dificultades del terreno. Frontino hace referencia a algunas dificultades de este *genus agri*, en donde la interposición de montes, ríos y otros accidentes complicaba la tarea de aplicar la técnica de los ángulos rectos en el cálculo de las superficies (Front. Th. 15-16=La. 31-33). Es de suponer que, a menos que fuera necesario, el dibujo de los contornos se serviría en múltiples ocasiones de los accidentes geográficos para definir las fronteras en lugar de los *termini* fijos, tal y como denota el propio *corpus Agrimensorum*, en donde los montes y los ríos (entre otros elementos naturales visibles) aparecen como un recurso frecuente en la práctica de la *limitatio* y así estarían recogidos en las *formae*.

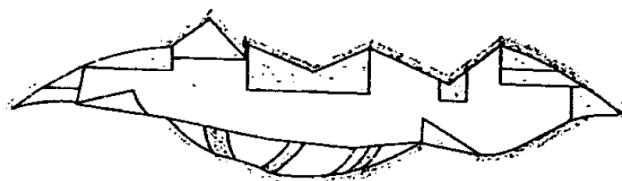


Fig. 27. Representación gráfica del territorio medido *per extremitatem* de la figura 4 de la edición de Thulin de Frontino, *De agr. qual.*.

Un texto de Higinio puede ser muy indicativo de esta práctica. En él describe de manera genérica cómo se procede a la definición de los contornos en *formae* comunitarias para su consulta en caso de *controversiae de iure territorio*, que muchas veces escondían motivaciones fiscales:

*Nam invenimus saepe in publicis instrumentis significanter inscripta territoria ita ut 'Ex colliculo qui appellatur ille, ad flumen illud, et per flumen illud ad rivum illum aut viam illam, et per viam illam ad infima montis illius, qui locus appellatur ille, et inder per iugum montis illius in summum et per summum montis per divergia aquae ad locum qui appellatur ille, et inde deorsum versus ad locum illum, et inde ad compitum illius, et inde per monumentum illius ad locum unde primum coepit scriptura esse'*<sup>388</sup> (Hyg. Th. 74, 4=La. 114, 12).

A menudo, eran precisamente los términos vagos de las *formae* los que parecen motivar las disputas territoriales por motivos fiscales a decir de Higinio, razón por la cual debía realizarse un análisis presencial de la *limitatio* física instituida por *termini* o reconfigurarse una nueva<sup>389</sup>. A estos procedimientos para discernir la antigüedad o artificiosidad de los *termini* dedicaron una gran atención, dentro de una genuina labor de peritaje sobre el terreno (*vid.* Front. Th. 15-16=La. 31-33), lo que muchas veces pasaba por la consulta de las *formae* y los *comentarii* con el fin de conocer cómo había evolucionado la comunidad con el paso del tiempo desde el punto de vista territorial y administrativo (Hyg. Th. 77=La. 283, 5<sup>390</sup>).

En el ámbito del Noroeste, como ha propuesto Orejas acertadamente (2002: 402-03), existe un paralelismo muy claro entre la descripción de la *forma* de Higinio y el bronce fragmentario de la Dehesa de Morales en Fuentes de Ropel (Zamora: *AE* 1993, 1035), de difícil datación, que podría denotar esta misma práctica agrimensoria:

---

<sup>388</sup> “En efecto a menudo, vemos en los documentos oficiales claramente descritos los territorios, así como ‘Desde esa colina que se llama así hasta aquel río y a través de aquel río hasta aquel arroyo o aquel camino, y a través de aquella vía hasta el pie de aquel monte, este lugar es llamado así; y de allí a través de la cumbre de aquel monte hacia lo más alto y por lo más alto del monte, por las divisorias de agua, al lugar que es llamado así y desde allí hacia abajo, hasta aquel lugar, y de allí al cruce de caminos de aquel (lugar), y de allí a través del monumento (sepulcral de aquel hasta el lugar desde donde primeramente comenzó a trazarse (la frontera)’” (trad. de Castillo, 1998a).

<sup>389</sup> El fragmento anterior de Higinio se inserta en el contexto de las controversias entre *partes*, como serían las propias comunidades, en donde la *terminatio* física complementa el análisis descriptivo de las *formae*: *Territorii [aeque] iuris controversia agitata, quotiens propter exigenda tributa de possessione litigatus, cum dicat una pars in sui eam fine territorio constituta<m>, et altera e contrario similiter. Quae res [haec autem controversia] territorialibus est finienda terminibus* (Hyg. Th. 74, 4=La. 114, 12; el subrayado es mío).

<sup>390</sup> *Nam de qualitatibus, antiquitati<bu>s, possessionibus, territorio<i>s, terminibus, signis et his similitibus considerandum est, ab origine[m] quemadmodum tenuerint [coeperint]: deinde aliquid usque ad nostram aetatem descenderit aut permaneat, opus est exquiri* (“En efecto se debe reflexionar acerca de las categorías (de los campos), antigüedades, propiedades, territorios, mojones, señales y similares; cómo se han establecido desde el principio. Después es necesario que se indague lo que haya llegado hasta nuestro días o lo que persista”; trad. de Castillo, 1997).

Col. I	Col. II
[- - -] <i>Publicos</i>	<i>usque Burrilligiam Voligobend</i> [- - -]
[- - -] <i>Fr]?ntonem</i>	<i>sinistro versus limite ipso per</i> [- - -]
[- - -] <i>NQ L LVC</i>	<i>collem in conspectu Seguisonal</i> [- - -]
[- - -] <i>VANDIS</i>	<i>pert(icae) CXXXV inde sinistro versu</i> [s- - -]
[- - -] <i>PRI</i>	<i>cunas citra Cillobendam per</i> [- - -]
	<i>Vagabrobendam LXII inde in co</i> [- - -]
	<i>pert(icae) C inde rectum dextra clivo</i> [- - -]
	<i>Benda usque Gadarnauregium</i> [- - -]
	<i>Amala via Cariensi veter usq[ue</i> [- - -]
Ab	<i>dextra inde dextroversus</i> [- - -]
	<i>p(erticae) CX inde in rectum usque viam</i> [- - -]
	<i>Idinensis p(erticas) CXXXIII inde tran[sunt</i> [- - -]
	<i>versus pert(icae) XXXV item XXXXII it[em</i> [- - -]
	<i>de secundum Caldobendam</i> [- - -]
	<i>versus per limitem in cli[vo</i> [- - -]
	<i>idem L usque viam Burru</i> [- - -]
	<i>inde in limite in clivo</i> [- - -]
	<i>riensem dextra in</i> [- - -]
	<i>idem tra&lt;n&gt;siun</i> [- - -]
	<i>de usque</i> [- - -]
	<i>qui est</i> [- - -] <i>tere</i> [- - -]

La mayoría de autores que han tratado el documento coinciden en señalar que se trata de una *sententia de terminis* entre dos comunidades, cuya publicación en bronce daría por terminada la *controversia de iure territorio* a la manera de la *sententia Minuciorum* de la tavola della Polcevera del 117 a.C. (García y Abásolo, 1993; Rodríguez Almeida, 1998 y 2002: 3-12; Ariño, Martínez y Gurt, 2004: 33; Prósper, 2010). Sólo la revisión de este documento por Mayer, García y Abásolo propuso una lectura alternativa basada en el contexto salino cercano de las lagunas de Villafáfila (a 20 km), lo que permitiría reconocer en el bronce una delimitación de *ager publicus* dedicada a la explotación de este recurso por parte del Estado romano o mediante concesionarios (Mayer, García y Abásolo, 1998; Mayer, 2009: 175-77). Desgraciadamente el carácter clandestino de su aparición impide una contextualización precisa de este tipo, a lo que debe añadirse la fragilidad de un argumento que descansa sobre el término *publicus* de la columna 1 y que, como ya hemos tratado, puede referirse a otras realidades ajenas al *ager publicus populi Romani* (vid. cap. 4.4). Tampoco el genérico *[Fr]?ntonem*, que se ha considerado el posesor de una finca colindante, puede ayudar a precisar la naturaleza del documento, pues ni sabemos su estatuto o cargo, ni la función desempeñada en el bronce o si guarda relación alguna con la comunidad. Aun cuando la teoría sobre una *controversia*, es posible puede apuntarse otra posibilidad interpretativa dado que en el bronce ni hay referencia alguna a las dos comunidades en presunto conflicto (o, al menos, no se han conservado), ni hay elementos seguros sobre los que establecer una datación. A mi juicio, en vez de una *sententia*, el contenido podría definir simplemente la descripción de una *forma* sobre la *assignatio* del territorio de una determinada comunidad. De hecho la descripción de la

*limitatio agrorum*, como coinciden varios autores (vid. Mayer, García y Abásolo, 1998: 170-71; Rodríguez Almeida, 1998), no parece referirse una frontera parcial como sería propio de una controversia intercomunitaria, sino a una descripción perimetral en donde se utilizan distintos indicativos fronterizos semejantes a los descritos por Higinio en las *formae*. Al fin y al cabo el propio pasaje anterior de Higinio parece querer indicar que es precisamente la ambigüedad de este tipo de *formae* lo que motiva *controversiae* de *iure territorio* que deben solucionarse entonces a través del análisis de la *terminatio* física de los territorios: *cum dict una pars in sui eam fine territorio constitum, et altera e contrario similiter, quae res [haec autem controversia] territorialibus est finienda terminibus* (Hyg. Th. 74, 4=La. 114, 12).

La discusión radica, pues, en si se trata de una *limitatio* de una propiedad particular análoga a las observadas en los *termini* privados del Noroeste (vid. cap. 8.3) o si, por el contrario, se trata por el contrario de la *forma* de una *civitas*. A mi modo de ver, aunque las indicaciones de distancias en *perticae* juegan favor de la primera opción, pues no superan los 400 m, pueden ser engañosas a la hora de evaluar la entidad objeto de la *limitatio*. Así da cuenta la mención de numerosos topónimos identificables con diversos núcleos de poblamiento rural que actúan como referencia para establecer los confines y que, a la manera ambigua y general que transmite Higinio, podrían en realidad cubrir distancias considerables. Sólo en la parte conservada del bronce se recoge *Burriligia*, *Burru-*, *Voligobenda*, *Seguisona*, *Cillobenda*, *Vagobrobenda*, *Cadanavaegium*, *Amala*, *Caldovenda*, además del (*pagus*?) [---]*idiniensis* y se estructura además sobre tres tramos viarios (Mayer, García y Abásolo, 1998: 172). Del mismo modo, las descripciones orográficas permiten adivinar un ámbito de cierta envergadura, cuyos límites atraviesan posiblemente varias (*la*)*cunae*, el *flumen* que se intuye junto a *Caldobenda* y varias crestas montañosas. Sobre estas últimas es de gran interés el nuevo paralelismo que puede establecerse con el anterior fragmento de Higinio, en donde recuerda la *limitatio* que se define por las partes altas de un sistema montañoso: *per iugum montis illius in summum et per summum montis*. En el bronce se alude a tres *clivi* en los que se intuye una considerable distancia fronteriza, sobre todo cuando dos de ellos parecen indicar claramente el límite establecido a lo largo de las cumbres de un sistema montañoso análogamente a como lo describe Higinio, *per limitem in clivo* e *in limite in clivo*. Aunque desgraciadamente el carácter fragmentario del bronce no permite conclusiones seguras sobre las motivaciones que se esconden detrás de la *limitatio*, creo que no debe desecharse la posibilidad de que el documento se corresponda en realidad a una *forma* en la que se describa la *assignatio* del territorio a una comunidad en sustitución de las *formae* catastrales de carácter cartográfico. Esta opción es, al fin y al cabo, perfectamente compatible con la lectura *publicos* de la columna I que, como critica Ulpiano, se emplea en la práctica para designar el ámbito público local de las comunidades (Ulp. 10 *ed.=D.* 50, 16, 15). El original de esta copia, que estaría en manos de la administración provincial o del *tabularium Caesaris*, podría corresponder con la documentación de la que nos informa Sículo Flaco, sobre la existencia en los

archivos públicos de *descriptions* perimetrales análogas<sup>391</sup> a la de las comunidades peregrinas y del propio bronce de Fuentes de Ropel<sup>392</sup>:

*Nam invenimus saepe in publicis instrumentis significanter descripta territoria: vocabulis enim aliquorum locorum comprehensis incipiunt ambire territoria* (Sic. Flacc. Th. 128=La. 163, 13).

Las *formae*, ya fueran de carácter cartográfico o descritas de un modo literal, requerían complementariamente una delimitación física sobre el terreno, en donde los hitos del paisaje que actuaban como marcadores fronterizos se completaban con *termini* inscritos, ya fuera para solucionar controversias como las de la sierra de Camulo (*vid. supra*) o para prevenirlas en caso de no existir límites claros proporcionados por la propia naturaleza y la orografía del lugar. En el cuadrante Noroccidental de la península se produce precisamente una de las mayores concentraciones de *termini* augustales de todo el Imperio, que aluden a demarcadores de distintos tipos y en los que queda reflejado con claridad el reconocimiento del territorio de las comunidades peregrinas, cuyo *ager* se configura *modus universis*:

Nº	Datación	Civitas delimitada (1)	Civitas (2)	Civitas (3)	Otras entidad delimitada	Objeto	Lugar	Ref. epigr.
1	15-13 a.C.	Iuliobriga (ager Iuliobrigensium)			Leg. IIII Macedonica	Prata militares (dividit)	Valdeolea (Cantabria)	ERCan 16
2	15-13 a.C.	Iuliobriga (ager Iuliobrigensium)			Leg. IIII Macedonica	Prata militares (dividit)	Valdeolea	ERCan 17
3	15-13 a.C.	Iuliobriga (ager Iuliobrigensium)			Leg. IIII Macedonica	Prata militares (dividit)	Valdeolea	ERCan 18
4	15-13 a.C.	Iuliobriga (ager Iuliobrigensium)			Leg. IIII Macedonica	Prata militares (dividit)	Castrillo del Halla, Valdeolea	ERCan 19
5	15-13 a.C.	Iuliobriga (ager Iuliobrigensium)			Leg. IIII Macedonica	Prata militares (dividit)	Castrillo del Halla, Valdeolea	ERCan 20
6	15-13 a.C.	Iuliobriga (ager Iuliobrigensium)			Leg. IIII Macedonica	Prata militares (dividit)	La Cuadra, Valdeolea	ERCan 21
7	15-13 a.C.	Iuliobriga (ager Iuliobrigensium)			Leg. IIII Macedonica	Prata militares (dividit)	La Cuadra, Valdeolea	Fernán dez, Bolado y

<sup>391</sup> Como ha observado Castillo con acierto, el agrimensor buscar indicar aquí un procedimiento posible cuando se mensuran diferentes entidades territoriales continuas, razón por la cual se mencionan explícitamente las colonias, municipios y prefecturas, pues en ocasiones tenían unos territorios discontinuos y no podía recurrirse a este procedimiento (Castillo, 1996: 64-68).

<sup>392</sup> Un caso semejante podría corresponder al mojón técnico de labor agrimensora en la inscripción del Alto Valle del Duero (AE 1996, 901; *HEp* 7, 1111=14, 409), para el que Ariño ha propuesto una limitación de las líneas exteriores de un polígono *per extremitatem mensura comprehensus* que arrancaría en los límites IIII y V en dirección opuesta, con las siguientes unidades de medida expresadas en pasos e indicaciones de superficie en *iugera* (Ariño, 2005: 107; *vid. Ariño, Gurt y Palet, 2004: 33*). Desgraciadamente se desconoce de lugar del hallazgo, que remite a un ámbito vago del norte de Burgos. El carácter críptico del texto tampoco ayuda a la hora de otorgarla una funcionalidad segura y se han propuesto innumerables opciones que pasan también por la centuriación o por la reforma fiscal de época Tetrárquica (*vid. Teja y Carrié, 1996: Canto, en HEp 7, 1111; Roth, 2004; Rubini, 2004*). Siguiendo el desarrollo de Ariño, el texto sería el siguiente: Lado A: *K(aput) h(uius) l(imitis) CD VIII / iug(era) XVII DCCCXVII*s; Lado B: *K(aput) h(uius) l(imitis) V DCCXXIII iug(era) XXIII CLIX*.

								Callejo , 2012
8	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Cuena, Valdeolea	<i>ERCan</i> 22
9	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Cuena, Valdeolea	<i>ERCan</i> 23
10	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	El Halla, Valdeolea	<i>ERCan</i> 24
11	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Las Henestrosas, Valdeolea	<i>ERCan</i> 25
12	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Las Henestrosas, Valedeolea	<i>ERCan</i> 26
13	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Las Henestrosas, Valdeolea	<i>ERCan</i> 27
14	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Las Henestrosas, Valdeolea	<i>ERCan</i> 28
15	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Las Quintanillas, Valdeolea	<i>ERCan</i> 29
16	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Rebolledo, Valdeolea	<i>ERCan</i> 30
17	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Rebolledo, Valdeolea	<i>ERCan</i> 31
18	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Hormiguera, Valdeprado del Río (Cantabria)	<i>ERCan</i> 32
19	15-13 a.C.	<i>Iuliobriga</i> ( <i>ager Iuliobrigensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Sotillo de San Vitores, Valdeprado del Río	<i>ERCan</i> 33
20	15-13? a.C.	<i>Segisamo</i> ( <i>ager Segisamonensium</i> )			<i>Leg. IIII</i> <i>Macedonica</i>	<i>Prata</i> militares ( <i>dividit</i> )	Villasidro, Sasamón (Burgos)	<i>CIL</i> II 5807
21	4/5 d.C.	Indeterminada: ¿ <i>Talabriga</i> ?	Indeterminada: ¿ <i>Langobriga</i> ?			Límite fronterizo	Ul (Oliveira de Azeméis, Aveiro).	<i>AE</i> 1958, 10
22	4/5 d.C.	<i>Lancienses</i> (¿ <i>Oppidani</i> ?)	<i>Igaeditani</i>			Límite fronterizo (... <i>inter</i> ...)	Peroviseu (Penamacor, Castelo Branco)	<i>AE</i> 1976, 273
23	5/6 d.C.	<i>Lancienses Oppidani</i>	<i>Igaeditani</i>			Límite fronterizo (... <i>inter</i> ...)	São Salvador (Penamacor, Castelo Branco)	<i>CIL</i> II 460
24	4/5 – 5/6 d.C.	[---]	[---] <i>ieses</i>			Resolución de controversia ( <i>legatus</i> <i>causa</i> <i>cogniuit</i> )	Carvalinho (Guardão, Tondela, Viseu)	<i>AE</i> 1954, 88
25	5/6 d.C.	<i>Bletisamenses</i>	<i>Mirobrigenses</i>	<i>Salmanticenses</i>		<i>Trifinium</i> ( <i>inter</i> ... <i>et</i> ... <i>et</i> ...)	Ledesma (Salamanca)	<i>CIL</i> II 859
26	5/6 d.C.	<i>Mirobrigenses</i>	<i>Salmanticenses</i>	¿ <i>Valutenses</i> ?		Límite fronterizo ( <i>inter</i> )	Ciudad Rodrigo (Salamanca)	<i>CIL</i> II 857
27	5/6 d.C.	<i>Mirobrigenses</i>	<i>Salmanticenses</i>	¿ <i>Valutenses</i> ?		Límite fronterizo (... <i>inter</i> ...)	Ciudad Rodrigo (Salamanca)	<i>CIL</i> II 858
28	¿ <i>august</i> <i>ea</i> ?	<i>Mirobrigenses</i>	[---] <i>Ipolibedenses</i>			Límite fronterizo (...[ <i>inter</i> ]...)	Traguntía (Salamanca)	<i>CIL</i> II, 5033
29	43 d.C.	<i>Arabrigenses</i>	<i>Coilarni</i>			Límite fronterizo (... <i>inter</i> ...)	Goujoim (Armamar, Viseu)	<i>AE</i> 1979, 331
30	43 d.C.	Indeterminada	Indeterminada			Límite fronterizo	São Pedro de Balsemão (Lamego, Viseu)	<i>CIL</i> II <i>suppl.</i> 6199

31	41-54 d.C.	<i>Civitas Beduniensium</i>			<i>Legio Gemina</i> X	<i>Prata</i> militares (...inter...)	Quintana Congosto, Castrocabón (León)	ERPLe 315
32	41-54 d.C.	<i>Civitas Beduniensium</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	Castrocabón (León)	ERPLe 305
33	41-54 d.C.	<i>Civitas Beduniensium</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 306
34	41-54 d.C.	<i>Civitas Beduniensium</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 307
35	41-54 d.C.	<i>Civitas Beduniensium</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 308
36	41-54 d.C.	<i>Civitas Beduniensium</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 309
37	41-54 d.C.	<i>Civitas Luggonum</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 310
38	41-54 d.C.	<i>Civitas Luggonum</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 311
39	41-54 d.C.	<i>Civitas [---]</i>			<i>Cohors Gallorum</i> IV	<i>Prata</i> militares (...inter...)	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 312
40	41-54 d.C.	[---]			<i>Cohors Gallorum?</i> IV	<i>Prata</i> militares	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 313
41	41-54 d.C.	[---]			<i>Cohors Gallorum?</i> IV	<i>Prata</i> militares	El Espino, Santa Colomba de la Vega (León)	ERPLe 314
42	Indeter minada (s. I?)	<i>Astures (Lucus Asturum?)</i>	<i>Luggoni</i>			Límite fronterizo (?)	Valle del Sueve (Asturias)	ERAs 62

Fig. 28. Tabla sintética de los *termini publici* del cuadrante Noroccidental de la península Ibérica.

El conjunto de *termini Augustales* del Noroeste es uno de los principales argumentos sobre el que puede defenderse la territorialidad y reconocimiento territorial de las comunidades peregrinas (Vid. Sastre y Orejas, 1999; Orejas, 2002; Ariño, 2005). El más explícito seguramente sea *Salmanica*, que Frontino toma como ejemplo de *ager per extremitatem mensura comprehensus* (Front. Th. 2), y que recibe una delimitación del territorio asignado respecto a *Mirobriga*, dentro de un proyecto de ordenación augusteo del noreste de *Lusitania* que parece acometerse en apenas tres años (4-6 d.C.: *CIL* II, 857 y 858). Sin ánimo de ser exhaustivos, pues se trata de un conjunto heterogéneo que no en vano ha sido abundantemente tratado por la historiografía (vid. Cortés, 2013), me limitaré a recalcar algunos aspectos específicos relacionados con la territorialidad de las comunidades peregrinas mencionadas.

Los más tempranos (15-13 a.C.), de la *legio* IV *Macedonica* asentada en Herrera del Pisuerga, sirvieron para demarcar los *prata* militares con respecto al *ager Iuliobrigensis* y el *ager Segisamonensis*. Una de las cuestiones más controvertidas ha sido la datación del conjunto, pues sólo se nombran como *terminus Augustalis* sin una alusión al emperador ni a su titulatura que permita afinar la precisión. La cronología se ha hecho coincidir con el momento fundacional de ambas comunidades. Respecto a *Iuliobriga* (Retortillo, Campoo de Enmedio, Cantabria) la mayor parte de autores



coinciden en atribuir este momento en el periodo inmediatamente posterior a las guerras Cántabras (Solana, 1981: 142-51), lo que parece confirmarse tras las últimas intervenciones arqueológicas de 2004, en donde los niveles de la primera fase hacia el cambio de era revelan una nueva comunidad, de planta romana, y caracterizada por una “aglomeración urbana poco densa”, cuyo foro no se monumentaliza hasta época Flavia, cuando seguramente se convierta en municipio (Cepeda, Iglesias y Ruiz, 2009). Sobre *Segisamo*, apenas hay datos que remitan al contexto fundacional, aunque suele considerarse cercano al de *Iuliobriga* (Morillo, 2017: 517). De hecho, la titulación del hito de Villasidro (Burgos) es igual al conjunto cántabro salvo por la mención a la comunidad, lo que hace insostenible la teoría de que esta *terminatio* se produjera durante las guerras cántabras y, por tanto, fuera anterior a la de *Iuliobriga* como se propuso (González y Solana, 1975: 192-93; Solana, 1981: 138). La distancia espacial entre ambos conjuntos de *prata* indica, por el contrario, la inserción de las *terminationes* dentro de un programa de ordenación augusteo de escala regional, en donde los territorios militares deben delimitarse en caso de colisión con los *agri* comunitarios que se configuran en estos momentos. Desde mi punto de vista el establecimiento de los *termini Augustales* del *ager Iuliobrigensis* (y posiblemente también del *Segisamonensis*) se produce coetáneamente a la creación del *populus/oppidum* del *Iuliobriga* (Plin. *NH.*, 3, 21 y 27), y no posteriormente, por varias razones. El principal argumento nos lo da el establecimiento de la *legio* IV en Herrera de Pisuerga pocos años antes, desde el 19 a.C., de lo que se infiere que es la *assignatio* del territorio a *Iuliobriga* lo que motiva la intervención gromática con el fin de esclarecer el espacio destinado a los *prata* que, seguramente, ya estaban disfrutando con anterioridad. No debe olvidarse que el objetivo de la *terminatio* es exclusivamente la delimitación de *prata* militares, en donde el *ager Iuliobrigensium* juega un rol secundario. En segundo lugar, tampoco debe dejarse de lado que el término empleado para nombrar las entidades delimitadas, tanto *Segisamo* como *Iuliobriga*, sea precisamente la *divisio* (*dividit*) como acto formal que antecede a la *assignatio* de los territorios en el momento en que se configura la geometría del espacio ciudadano. La propuesta de Abascal (2008: 79-80), que relaciona la *terminatio* con un contexto de promoción municipal desde su fundación resulta débil desde el momento en que sabemos que la mención a los *agri Iuliobrigensis* y *Segisamonensium* no consituye un indicativo que permita identificar este expediente como él defiende, pues Agenio Urbico ya reconoce con claridad la existencia de *agri civitatum peregrinarum* como ya avanzamos (Th. 23, 5-13 = La. 62, 19-27; *vid.* cap. 4.4). Ante la falta de pruebas de una promoción temprana, debemos pensar en que ambos *agri* comunitarios tenían la categoría administrativa estipendiaria independientemente de su evolución posterior (Iglesias, 1999; Andreu, 2004a: 145; Cortés, 2013:108; Palao, 2014: 67). El principal argumento nos lo proporciona precisamente el segundo conjunto relacionado con la *cohors III Gallorum*, en donde la *terminatio* de los *prata* se perfila con respecto las comunidades peregrinas de *Bedunia* y *Luggonum*, mencionadas como *civitates*, al que podría añadirse una tercera cuyo nombre no se ha conservado (*ERPL* 312). Se desconocen las causas concretas que motivaron esta demarcación en época de Claudio, que pudo tener que ver con la asignación de nuevos territorios militares en *agri subsiciva*, o quizás con controversias que motivaron un establecimiento claro de los

*limites* sancionados anteriormente por el uso. Para esclarecer algunas de estas cuestiones sería deseable un mayor conocimiento sobre la llegada y evolución de la *cohors IV Gallorum* en ámbito hispano, con el que a día de hoy no contamos, aunque en el siglo II ya parece estar actuando en *Mauretania Tingitana* (Le Roux, 1982: 89). A pesar de estas limitaciones, suele aceptarse actualmente que la *limitatio* de los *prata* se hizo efectiva sobre el terreno, hecho del que anteriormente se había dudado (Roldán, 1974: 220; Le Roux, 1982: 107; Hernández Guerra, 1999: 116) por el extraño contexto de hallazgo del conjunto de El Espino, en donde la mayoría de ellos aparecieron enterrados juntos. Que todos fueron hincados creo que queda demostrado no ya por el hallazgo de dos de ellos *in situ* o reutilizados (*IRPLe* 306 y 315), sino por las medidas en pasos de dos *termini* precisamente de El Espino (*ERPLe* 308-309), en donde el establecimiento de la distancia con respecto al siguiente *terminus* augustal sólo cobra sentido si se han erigido. La concentración de estos *termini* enterrados en un mismo lugar, a pesar de mencionar dos *civitates* distintas, puede obedecer con bastante certeza al escrúpulo religioso tras el abandono del sitio, aunque en el conjunto cántabro no se produjera tras la partida de la *legio IV Macedonica* (Cortés Bárcena, 2009: 93). Sea como fuere, la definición de estos contornos militares guardó estrecha relación con los movimientos de tropas auxiliares en sus labores de apoyo administrativo y del desarrollo de las explotaciones auríferas, tal y como se observa con mayor claridad en el conjunto de Villalís y Luyego en el siglo II d.C., bajo el mandato del *procurator metallorum* (vid. Zubiaurre y Beltrán, 2017). De hecho, la *terminatio* de ambos conjuntos de *prata* reafirma la importancia de la participación del ejército en las labores de agrimensura. Como coinciden Ariño y Orejas, la plasmación material del *ager per extremitatem* en estas regiones carentes de una organización del territorio ciudadano previo no pudo tener otro protagonista que no fuera él, y es precisamente la entidad de esta obra de ordenación, de la que ha dejado huella parcial la concentración inusual de *termini* en este área, lo que explica el carácter ejemplar del que se hace eco Frontino al citar casos de estas regiones (Ariño, 2005: 103; Orejas, 2002: 399; vid. Orejas, Ruiz del Árbol y Sastre, 2006). La implicación del ejército en tareas de ordenación del espacio está, al fin y al cabo, recogida en los propios tratados de agrimensura. Por ejemplo, Higinio recuerda el papel de un *evocatus* augustal, de quien dice de formación militar y muy hábil en la labor agrimensoria, que se encargó por orden de Trajano de elaborar la *formae* de las asignaciones a veteranos en Panonia (Hyg. Th. 84=La. 120, 23).

Los *Luggoni* aparecen también en otra inscripción fragmentaria considerada como posible indicador fronterizo: [- - -] / *Asturu(m) et / Luggonu(m) / [---]* (ERAs 62; Mangas, 1983: 169; González, 1997: 44-46; Orejas, 2002: 401-02). Aunque la hemos incluido en el conjunto de *termini* no está probada su condición de término augustal y en un primer momento se pensó en una alusión a una unidad auxiliar (García y Bellido, 1961: 145-46; Roldán, 1974: 90; Santos Yanguas, 1981: 183-85), aspecto que ya hemos rebatido en otro momento (vid. cap. 5.2.1). Además de las dificultades para su datación<sup>393</sup> y el vago contexto geográfico de aparición, no hay acuerdo a la hora de identificar qué *Luggoni* son los aquí mencionados. ¿Son estos *luggoni* los mismos de los

<sup>393</sup> Dopico (1988: 62) la data con dudas en el siglo I d.C.

*termini pratorum* leoneses de Santa Colomba de la Vega? Dudo, como ha planteado Olivares (2010: 122), que este hecho obedezca a fenómenos de movimientos poblacionales masivos de una misma comunidad y parece más apropiado imbricarlo en el fenómeno, relativamente frecuente, de homonimia. Por un lado, el lugar del hallazgo en el valle de río Suevo remite a un contexto asturiano en coherencia con Ptolomeo (2, 6, 32), quien relaciona los *Luggoni* con *Paelontium* (actual Beloncio, Asturias), lo que nos lleva al ámbito oriental de la *Asturia* transmontana cerca del límite cántabro. De hecho, se ha planteado que los *Luggoni* transmontanos de este hito puedan identificarse con los *Luggoni Arganticaeni*<sup>394</sup> que aparecen en una inscripción fragmentaria hallada en Grases, Villaviciosa (Asturias: *ERAs* 11; González, 1997: 45; González y Marco, 2009: 66-68). El principal problema ha sido la extraña convivencia de la *civitas* de los *Luggoni* con los *Astures*, también en genitivo, que a primera vista haría alusión al *conventus* en el que los mismos *Luggoni* se integran, lo que dificulta la comprensión del epígrafe como indicativo de un límite. Sobre esta cuestión resulta de gran interés la lectura realizada por González sobre el segundo término delimitado, en donde *Asturu(m)* podía perfectamente referirse a la comunidad limítrofe de *Lucus Asturum* mencionada por Ptolomeo, en referenciada a una *civitas Asturum* que se extendería por la zona de Lugo de Llanera, cerca del Oviedo actual, que estaría en colindancia con los *Luggoni* (González, 1997: 45-47). Si las premisas son correctas, este *terminus* nos proporciona el único indicativo de delimitación fronteriza de toda la zona septentrional del *conventus Asturum*, que habría estado, por tanto, también sometida a los procedimientos de la mensura oficial y de la *terminatio* cuando las circunstancias lo requirieran.

Los *termini augustales* de *Lusitania* septentrional también demuestran el reconocimiento de entidad territorial a toda una serie de *civitates* peregrinas de condición estipendiaria, entre las que se definen distintos límites intercomunitarios en época de Augusto: *Salmanticenses*, *Mirobrigenses*, *Bletisamenses*, *Valutenses*, [---] *polibedenses*, *Igaeditani*, *Lancienses*, *Lancienses Oppidani*, [---] *ieses* y, quizás, entre *Talabrigenses* y *Langobrigenses* (vid. Tabla). Esta obra de ordenación, que se establece en un corto periodo de tiempo (del 4 al 6 d.C.) responde con seguridad a obras de delimitación que deben corresponder con la definición territorial *per extremitatem*. Aquí estriba la cuestión de si el amojonamiento es coetáneo a la asignación del territorio o es posterior. La mayoría de *termini* augusteos no arroja información sobre sus motivaciones y autores como Ariño (2005: 95-104) o Ruiz del Árbol (2001: 478-490) la reconocen como una intervención de gran alcance que busca definir los espacios ciudadanos por primera vez. Desde el terreno de la hipótesis puede plantearse la posibilidad de que la asignación territorial ya se hubiera efectuado en algunos casos y fueran precisamente algunas controversias que proliferan en la región en estos momentos lo que plantea la necesidad de amojonamientos más sistemáticos en las zonas disputadas. Al menos esta posibilidad queda patente en el hito confinal de Carvalinho en la Sierra de Camulo ya mencionado (Guardão, Tondela, Viseu: *AE* 1954, 88), donde

---

<sup>394</sup> Estos *Arganticaeni* se han relacionado por criterios de homofonía con el topónimo de Argandenes, también en la zona de Piloña.

se indica que la delimitación se produce *causa cognita* por por parte del *legatus (propraetore)* Q. Articuleius Regulus, gobernador de *Lusitania* en esos momentos. La datación del *terminus* el 5/6 d.C. por la potestad tribunicia supone la existencia de controversias muy tempranas que se producen, además, en el mismo año en que se efectúa la *terminatio* de varias zonas septentrionales y noroccidentales de *Lusitania* como *Bletisa*, *Mirobriga*, *Salmantica*, *Valuta*, los *Lancienses Oppidani* o los *Igaeditani*<sup>395</sup> ¿Es la controversia un producto derivado de la labor gromática que se establece en estos momentos o se trata de una intervención regional que busca redefinir los territorios comunitarios ya asignados previamente, pero ahora de forma más nítida ante el surgimiento de conflictos? ¿Podrían corresponder en realidad a dos fenómenos que no tienen relación entre sí? La cuestión, por el momento, creo que debe quedar abierta. En cualquier caso no es la última delimitación en la zona septentrional de *Lusitania*, como testimonia el *terminus* augustal de Goujoim (Armamar, Viseu: *AE* 1979, 331) entre *Coilarni* y *Arabrigenses* y el São Pedro de Balsemão entre dos comunidades que no son mencionadas (Lamego, Viseu: *CIL* II *suppl.*, 6199). La datación de ambas en el mismo año 43 d.C. durante el gobierno de Claudio nos remite a un segundo momento de intervención en el territorio dentro de un proyecto, en cualquier caso, de menor entidad respecto al de época augustea tanto por el escaso número de *termini* (2) como por su dispersión más focalizada. Lógicamente la *assignatio* del territorio a una comunidad peregrina no implica que ésta permaneciera inmutable a lo largo del tiempo, y pueden ser muchos los motivos que pueden estar detrás de una *terminatio* sobre territorios ya delimitados, al menos en sus *formae* básicas, en época augustea.

## 9.5 El *tributum soli* de las comunidades peregrinas: la cuestión de la *aestimatio soli*.

El *Corpus Agrimensorum Romanorum* demuestra en varios pasajes la relación existente entre las distintas formas de mensurar el espacio y las cargas fiscales que recaen sobre el suelo. Aunque su oficio no tenga la fiscalidad como su objetivo principal, los agrimensores son plenamente conscientes de las implicaciones tributarias en la mensura del territorio, como se observa con claridad en Higinio Gromático a propósito de territorios inmunes o sometidos a cargas: *Nam quemadmodum illis condicio diuersa est, mensurarum actus dissimilis esse debet* (Th. 168). De hecho, algunos agrimensores parten de la misma base conceptual que se respira en las *Institutiones* gayanas, basada en la oposición entre Italia y las provincias desde el punto de vista fiscal. Sículo Flaco, conocedor de que Italia no es una realidad uniforme desde el punto de vista de los estatutos del suelo (*vid.* Th. 98, 8=La. 134, 16), la describe sin embargo como unidad respecto a las *exterae gentes* de alrededor (Th. 99=La. 135, 11).

<sup>395</sup> También pertenece a este proyecto de ordenación territorial de escala regional, aunque algo más al sur, el *terminus* augustal entre *Avilenses* y [- - -] *obrinenses* de Jarandilla de la Vera (Cáceres: *HEp* 13, 242; *vid.* Gómez-Pantoja, 2011).

La unidad de Italia se infiere en Higinio de un modo todavía más explícito en relación a las provincias:

*Ita ubicumque extra fines legesque Romanorum, id est, ut sollicitus proferam, ubicumque extra Italiam aliquid agitur, inquirendum et de hac ipsa condicione diligenter praemoneo, nequid sit quod praeterisse videamur*<sup>396</sup> (Hyg. Th. 86=La. 123).

Por otro lado, como ya se ha aludido en múltiples ocasiones, el *Corpus Agrimensorum Romanorum* relaciona de manera directa la imposición del *tributum soli*, figura fiscal por excelencia del Alto Imperio, con la forma en que se mensura el espacio comunitario provincial. La definición de Frontino del *ager per extremitatem* denota cómo la base de la asignación territorial comunitaria conlleva también la responsabilidad fiscal colectiva del *tributum soli*: *ager per extremitatem mensura comprehensus: sicut in Lusitani Salma<n>ticensibus aut Hispania citeriore Pala<n>tinis et in conpluribus prouiviis tributarium solum per uniuersitatem est definitum* (Front. Th 1). Del mismo modo, la definición de los *agri stipendiarii* de Agenio Urbico en ámbito provincial es plenamente consecuente con el papel que desempeña el tributo como condición que posibilita el disfrute del territorio de los *agri civitatum peregrinarum*: *tributi condicioni concessum est* (Agen. Urb. Th. 23, 13-24=La. 63, 1-12). La autogestión del montante competía a la comunidad y, con este fin, desarrollaban sus propias figuras fiscales e instrumentos de financiación. Un ejemplo son las tasas sobre *agri vectigales* de las *civitates* peregrinas, que Higinio señala en clara oposición a las estatales (*ager publicus*), a las coloniales y a las municipales: *Vectigales autem agri sunt obligati, quidam r(ei) p(ublicae) p(opuli) R(omani), quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatum aliquarum* (Th. 79=La. 115, 21). Este modelo descentralizado, consustancial a la naturaleza de la comunidad peregrina, es el que se reproduce en todo el Noroeste hispano, lo que la inscripción sobre el adeudo colectivo de los *Interamici* con el *fiscus* no deja de confirmar (HEp 3, 277; Orejas y Sastre, 1999; Orejas, 2002). Si nuestras premisas son correctas, y efectivamente el *tributum soli* se establece sobre el territorio asignado a las comunidades peregrinas, subsisten algunas incógnitas en relación con él que apenas han sido objeto de atención: ¿Qué criterio se seguía entonces para establecer este montante global? ¿Eran cantidades arbitrarias tras la *deditio* o estaban fundamentadas en la superficie, en la producción o en la población? ¿Era una cantidad estable o variable?

El análisis de estas cuestiones hasta la fecha se ha basado casi exclusivamente en el estudio terminológico de la fiscalidad romana, de tal manera que a cada figura fiscal estandarizada (*tributum soli*, *stipendium*, *decuma*, *vectigal*) se le concede un modo de gravamen específico, en dinero o en especie, sobre la producción o fijo, sobre la colectividad o sobre el individuo, según el tipo de provincia imperial o senatorial, etc.

---

<sup>396</sup> “Así, en todas partes fuera del territorio y de las leyes de los romanos, es decir, en todas las partes fuera de Italia, aunque doy a conocer lo más problemático, debe investigarse lo que es discutido, y advierto escrupulosamente sobre esta misma circunstancia para que no haya nada que nos parezca haber omitido” (Trad. de Castillo, 1996).

No voy a reincidir más en la volubilidad de la terminología fiscal romana, que ya se ha hecho notar por numerosos autores (*vid.* Soraci, 2010) y se hace patente sin ir más lejos en el anterior framento de Agenio Urbico, para quien el *ager stipendiarius* tiene como condición el pago del *tributum* (*vid. supra*).

Para clarificar algunas de estas cuestiones creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta un extenso y complejo pasaje de Higinio Gromático en el que establece primero las distintas formas en que puede ser gravada una *provincia* conectadas a formas particulares de limitación de sus espacios: *In quibusdam prouinciis fructus partem praestant certam, alii quintas, alii septimas, alii pecuniam, et hoc per soli aestimationem* (Hyg. Grom. Th. 168). Aquí quedan expuestas las distintas modalidades. Por un lado, el gravamen sobre la producción, del 5% o 7% semejante a la *decuma* siciliana (10%), en donde las contribuciones podían ser en especie o en su versión pecuniaria, basada en una *aestimatio frumenti* en la que la producción se conmuta por cantidades económicas prefijadas en la práctica de la *adaeratio*, tal y como describen los textos ciceronianos del caso siciliano durante el proceso contra Verres (*eg.* Cic. 2Ver. 3, 6, 12 ó 1, 38, 95; *vid.* Naco, 2003: 244). Ambas fórmulas, basadas en la evaluación de la producción anual, son las aludidas por Higinio bajo la expresión *alii quintas, alii septimas, alii pecuniam*. Sin embargo, hay un segundo término que a mi juicio debe ser conectado y sería aplicable a la evaluación del *tributum soli* sobre los *agri per extremitatem* de las comunidades peregrinas: el que dice fijo (*certus*) y el que se establece *per soli aestimationem*. La razón por la que ambos elementos suelen considerarse por separado vuelve a ser la estandarización de las figuras fiscales, en donde el *stipendium* fijo (como dice Cicerón, *vectigal certum quod stipendiarius dicitur*: 2Verr. 3, 6, 12) basado en cantidades arbitrarias o que descansan sobre el trasvase del salario legionario al vencido en su acepción republicana (Cic. *ibidem*: *victoriae praemium ac poena belli*), podría parecer contradictorio con una *aestimatio soli* que en principio se reserva para la fiscalidad sobre la producción<sup>397</sup> (*alii quintas, alii septimas, alii pecuniam*). Creo, sin embargo, que no hay contradicción alguna y la respuesta la proporciona el propio Higinio Gromático a continuación, cuando vincula con claridad el carácter fijo del impuesto con la estimación de la productividad agraria dentro de los *agri vectigales* panónicos:

*Certa [enim] pretia agris constituta sunt, ut in Panonia arui primi, arui secundi, prati, siluae gladiferae, siluae uulgaris, pascuas. His omnibus uectigal ad modum ubertatis per singula iugera constitutum*<sup>398</sup> (Hyg. Grom. Th. 169).

Este pasaje lleva necesariamente a la conclusión de que en las tierras panónicas existía una catalogación de los campos, basada en los usos y en sus posibilidades

<sup>397</sup> El texto base sobre el que se asienta esta dicotomía para época Imperial es el mencionado por Cicerón para Sicilia, en el que el estipendio fijo que se reserva para distintas provincias, entre las que se nombra *Hispania*, se contrapone al *vectigal* sobre la producción (*in agrorum vectigalium rationes*). Un comentario sobre este pasaje en Naco (2003: 341-48).

<sup>398</sup> “En effet, des prix fixes ont été établis pour les terres, comme en Pannonie: terres labourées de première catégorie, de deuxième catégorie, prés, forêts à glands, forêts ordinaires, pâtures. Pour toutes ces terres, le vectigal a été fixé pour chaque jùgere en fonction de la fertilité” (trad. de Clavel-Lévêque *et al.* 1996).

agrarias y, lo que es más importante, es sobre esta labor previa sobre la que evalúa un vectigal fijo que se aplica a cada unidad de superficie. La *aestimatio soli* no es sistemática, no calcula la producción anual, sólo establece unas categorías muy básicas que distinguen dos tipos de *arva* y *silvae* en función de su mayor o menor capacidad agrícola, a la que se añaden otros usos más relacionados con la ganadería (los *prata* y *pascua*). La segunda variable es simplemente la superficie dentro de cada categoría del suelo, que tendría una determinada cantidad asignada. Desde esta perspectiva toma sentido que este modelo de fiscalización se contraponga para el agrimensor con el gravamen porcentual precisamente porque, aun basándose en la *aestimatio soli*, el resultado es un gravamen fijo. Toda vez los campos han sido catalogados, no importa la entidad territorial sometida a *vectigal*, que dependerá del sumatorio de la superficie total de cada tipo de campo. No puede desecharse que la *aestimatio soli* pudiera efectuarse también en el *genus agri per extremitatem* como parte de una labor agrimensoria previa en la que se evaluarán las posibilidades agrarias de los suelos de la comunidad y se estableciera, conforme a ella, el gravamen fijo *per universitatem* que transmite Frontino. Al menos sí se dan las condiciones necesarias, pues los *agri assignati* a las comunidades tenían muy posiblemente sus propias *formae* y *comentarii* adjuntos en el *tabularium* imperial, así como los datos de sus superficies (*vid. supra*). La *immunitas* que se da a los Pameiobrigenses en el Edicto de El Bierzo, cuyas *possessiones* además se confirman, sería coherente con estos mecanismos de mensura y evaluación previa del espacio interno cuando se configura la *civitas* y su territorio. Aunque se trate sólo de una tentadora conjetura, el procedimiento descrito por Higinio Gromático no parece responder a un contexto muy específico, sino bastante generalizado, pues menciona inmediatamente a continuación los abundantes problemas que el sistema de la *aestimatio soli* estaba generando en otras provincias como Asia o Frigia, en donde debía recurrirse constantemente a los *rigores* (de las *formae*) y a nuevas *terminationes* que definieran los contornos en disputa: *Propter quod huius agri uectigalis mensuram a certis rigoribus comprehendere oportet ac singula terminis fundari* (Hyg. Grom. Th. 169). Es decir, al calcularse el tributo fijo sobre la evaluación de la capacidad productiva de las tierras se producían fenómenos de falseamiento que podían dar lugar a distintas controversias, bien porque los particulares hacían falsas declaraciones sobre la explotación de sus propiedades en el plano local (por ejemplo, en los *divisi et assignati*), bien porque los usos del suelo de la comunidad no correspondían con aquéllos sobre los que se había calculado el tributo fijo y se destinaban a otros más lucrativos o que extralimitaban su frontera, entrando entonces en conflicto con las comunidades colindantes o con el Estado romano. Esta posibilidad es coherente con el fenómeno profusamente descrito por los agrimensores sobre las enajenaciones que se producían sobre los campos que superaban las fronteras comunitarias en donde Roma mantiene un derecho patrimonial (*ius susecivorum*), o la conexión directa entre la cuestión de *exigere tributum* y las *controversiae de iure territorio* que nos transmite Higinio (Th. 74, 4=La. 114, 12; *vid.* Th. 97=La. 133, 10).

Una cuestión central para apuntalar esta posibilidad es que el significado de *vectigal* que utiliza Higinio Gromático a lo largo de todo este pasaje no corresponde a su acepción estricta de renta por el disfrute de *ager publicus* (que sería lo más correcto),

sino que consta de un claro sentido genérico, en alusión al *ager* gravado o sometido a cualquier tipo de impuesto. Sólo así puede entenderse que el agrimensor mencione sobre el *ager vectigalis* toda una serie de formas impositivas que pueden darse en las distintas provincias (*in quibusdam provinciis...: vid. supra*), no en Italia, y que parecen concordar con las modalidades características de la tributación de época imperial ya mencionadas. De hecho, el sentido general del fragmento se integra con claridad en la descripción de las múltiples *conditiones* de los *agri vectigales* de las provincias, siendo el *vectigal* el término que simplemente se contrapone a la *immunitas*: *Debet [enim aliquid] interesse inter [agrum] immunem et vectigales*. Los *pretia* no son por tanto precios de los campos, sino el valor producto de la estimación (*pretiare*) sobre la cual se calcula el tributo. Aunque subsisten numerosas incógnitas por la práctica inexistencia de fuentes que aludan al cálculo del tributo, la posibilidad anterior parece más coherente con el modelo fiscal del Alto Imperio, en donde el impuesto sigue partiendo del recuerdo de la victoria romana, pero ya no se basa en la rapiña de los *publicani* o en las exigencias de una guerra que debe alimentarse a sí misma, sino en una nueva economía política asentada en la racionalización y repertorización del territorio sometido.

## **9.6 El *ager civitatis* de las comunidades peregrinas y el *ager publicus* minero: relación y expropiación**

La teoría soberanista sobre el *dominium* provincial y el pleno reconocimiento territorial de las *civitates* peregrinas que hemos defendido podría colisionar en algunos aspectos con la articulación material de las explotaciones auríferas del Noroeste, que funcionan en calidad de *ager publicus populi Romani* bajo el control directo del *procurator* (Sánchez-Palencia, Orejas y Sastre, 2007). Aquí el problema viene determinado por el dinamismo de las actividades mineras, cuyo avance de los frentes de explotación, así como la expansión de las infraestructuras mineras, requiere plantear qué tipo de relación se establece entre *ager publicus* y *ager peregrinus* y cuál fue el procedimiento expropiatorio en que pudo fundamentarse.

Un caso particular lo proporciona la red hidráulica de las explotaciones auríferas, cuya amplia envergadura suponía la superposición de amplias franjas de terreno de titularidad pública en convivencia con *ager peregrinus*. Éstas, además, podían ser objeto de sucesivas ampliaciones conforme se requerían aportes de nuevas fuentes o depósitos para derivarse a distintos sectores de la explotación. Por otro lado, hay documentados numerosos casos de “castros mineros” que aparecen insertos en las propias labores, cuya infraestructura hidráulica conforma los fosos que los rodean (*vid. eg. Orejas, 1996: 129*). En principio, los estudios efectuados sobre la red de canales en el Noroeste denotan que su estructuración responde exclusivamente al uso minero, sin desviaciones o ramales que pudieran servir para el aprovechamiento agrario de las comunidades, lo cual no deja de ser expresivo de su carácter estatal (Sastre y Sánchez-Palencia, 2002; Ruiz del Árbol *et al.* 2014). Sólo en Fuente de la Mora (Salamanca), se ha presentado una excepción a esta dinámica general, al aparecer aterrazamientos de regadío vinculables a un asentamiento romano que pudieron nutrirse de canales mineros



de dos depósitos cercanos (Ruiz del Árbol y Sánchez-Palencia, 1999a y 1999b; Ruiz del Árbol, 2005: 10-104). En cualquier caso debe tenerse en cuenta que la situación de la explotaciones auríferas solía presentarse en terrenos escarpados y montañosos de modestos usos agrícolas, por lo que el poblamiento que suele asociarse a ellos se debe más a los deberes muneraticios de las *civitates* en las explotaciones (*operae*), que a las hipotéticas ventajas derivadas de su relación con las infraestructuras mineras. Dentro de este esquema general de comprensión, no hay documentación específica que proporcione una solución definitiva a estas cuestiones y se han propuesto distintas vías argumentales para comprender el procedimiento de ampliación de *ager publicus* en suelo peregrino.

Una primera posibilidad que no puede desecharse es que la expropiación paulatina del territorio de las *civitates* conforme se producían los desmontes y se abrían nuevos frentes tuviera la consiguiente compensación económica hacia la comunidad, o a sus élites, en forma de indemnizaciones. Aunque en un contexto y tiempo distinto, este modo de actuar se nos presenta en el procedimiento que Roma emplea en la controversia de la *tabula Contrebiensis* II (87 a.C.: *HEp* 6, 998=18, 512), en donde establece que debe hacerse una *aestimatio* del valor de los *agri privati* de los *Sosinestani* por cinco magistrados contrebienses para que los *Salluienses* pudieran hacer la canalización por su territorio: ... *dum quanti is a[ger] aestumatu[s] / esset qua rivos duceretur Salluienses pecuniam solverent*... (l. 9-10). Lógicamente no se trata de *ager publicus*, pero denota la política romana sobre cuestiones directamente implicadas en las expropiaciones para canales hidráulicos que necesariamente deben partir de su propia experiencia administrativa. En el edicto de Augusto sobre el acueducto de Venafró (11 a.C.: *CIL* X, 4842=*ILS* 5742), en donde entre otros aspectos se autorizaba a esta ciudad a ampliar las conducciones, prohíbe que éstas se hagan sin el acuerdo con los dueños de las propiedades privadas (Rodríguez Neila, 1988: 228). De hecho M. Licinio Craso, si bien seguramente por su posición de poder político, logró oponerse con éxito a la iniciativa de construcción de canalizaciones públicas por sus propiedades rústicas como nos transmite Livio para la primera mitad del siglo I a.C. (Liv. 40, 51, 7). También Frontino describe después un procedimiento semejante al caso contrebiense en las canalizaciones de la ciudad de Roma, también *ager publicus*, en donde la resistencia de algunos propietarios privados a veces implicaba la compra de la parcela completa por parte de Roma, que era después revendida en la parte que no se hubiera reservado la titularidad para la conducción de agua (Front. *Aq.* 124, 4; *vid.* Sastre y Sánchez-Palencia, 2002: 221). Sin embargo, no parece que se procediera siempre de este modo a escala local como refleja la legislación de la colonia de *Urso*, cuyo capítulo dedicado a las expropiaciones para obras de canalización establece que los *Ilviri* podían ejercer expropiaciones forzosas de fincas particulares si lo aprobaba la mayoría del consejo comunal, sin aludir a indemnización alguna (*lex Urs.* cap. 99). Desgraciadamente el interesantísimo bronce de Agón<sup>399</sup> (*lex rivi Hiberiensis*: *HEp* 13, 731=17, 202=18, 511)

<sup>399</sup> La edición completa del bronce con traducción al inglés a cargo de Crawford y abundante aparato crítico puede encontrarse en el artículo de Beltrán Lloris (2006). Una versión en castellano en Castillo (2009).

en el que se regula un *collegium* de regantes del valle del Ebro por acuerdo mutuo (*conventio*) y sancionado por la autoridad romana en época de Adriano, no dice nada (o no se ha conservado) sobre el procedimiento en caso de nuevas canalizaciones. Sólo indica en su párrafo décimo (l. 3-7) ciertas medidas de protección a los regantes en caso de embargos indebidos que pudieran hacer los *magistri pagorum* o el publicano<sup>400</sup>, debiendo celebrarse un juicio al término de cinco días. Desgraciadamente esta parte se sitúa en uno de los pasajes peor conservados de la *lex* y, aunque la interpretación del bronce no está ni mucho menos cerrada, cabe pensar en que estas confiscaciones sean sólo propiedades muebles que se usaran como garantía por impagos de multas (*pignoris capio*; *vid.* Torrent, 2009: 4-5). En cualquier caso, la sanción de este acuerdo por parte de la autoridad romana (en donde se discute si fue el gobernador o el *legatus iuridicus*) no se debe a la titularidad pública de las canalizaciones, sino a la necesidad de una garantía que diera plena validez jurídica al acuerdo, seguramente por controversias en el pasado<sup>401</sup>, y por el creciente intervencionismo sobre los *collegia* que, desde la Tardorrepública en adelante, fueron estrictamente regulados al considerarse grupos de presión política y económica desestabilizadores del orden público (Mentxaka, 2009).

En otro orden, también existen documentadas diversas medidas compensatorias por las expropiaciones del territorio comunitario, si bien ninguna de ellas se relaciona con explotaciones mineras sino que están ligadas, fundamentalmente, a las necesidades de *ager publicus* para asiento de veteranos. Entrarían dentro de la categoría que establecen los agrimensores de los *agri ex alienis territoriis sumpti*, como la que Frontino refiere en el caso de la prefecturas que toman territorios *ex alterius civitatis fine* (Th. 14-15=La. 26, 6, 10). Es muy escaso lo que se sabe del procedimiento empleado y resulta arriesgada su extrapolación al Noroeste, pues las indemnizaciones en estos casos, como los territorios comprados a Capua para el asiento de veteranos (Vel. Pat. 2, 81 y D. Cass. 49, 14, 5) o aquéllos que se conmutan por otros en zonas a veces alejadas (*vid.* Castillo, 1996: 198-203), provienen fundamentalmente de comunidades privilegiadas de Italia.

Otra postura, que puede ser convergente con la anterior, parte del ejercicio del derecho minero romano que se configura vagamente en el Alto Imperio. Según esta

<sup>400</sup> La sorprendente alusión en el bronce a los *publicani* ha sido convenientemente tratada por Torrent (2013), quien lo entiende como un arcaísmo o adaptación terminológica de una figura propia del *collegium* encargada de la imposición de multas a quien contraviniera la *lex paganica* y que, en ningún modo, puede hacer alusión al arrendamiento del cobro de impuestos públicos a las *societates publicanorum*, a las que ya se les había puesto coto desde la política iniciada por César y Augusto, y continuada por sus sucesores, dirigida a potenciar el control directo de la fiscalidad imperial encomendada a los *procuratores*. Al menos en el caso de la *Citerior*, los testimonios epigráficos concuerdan con la visión de Torrent, en donde se aprecia con claridad el creciente papel de este cuerpo.

<sup>401</sup> De hecho ya se ha indicado que la *conventio* que produce esta *lex* implica a realidades pagánicas que pertenecen a comunidades distintas, de la colonia de *Caesaraugusta* y del municipio de derecho latino de *Cascantum*: *lex est ex conventione paga[nica(?) omium(?) C]aesaraugustanorum Gallorum Cas[cantensium Bels]ionsium paganorum...* El régimen de la canalización no sería público sino comunal, seguramente construido a raíz del acuerdo entre las comunidades implicadas o por los mismos regantes. Aquí también se da una solución colectiva para su mantenimiento, a la que todos los regantes deben contribuir en los tramos y periodos establecidos, si bien en este caso es por su mutuo beneficio: *Rivos quibus utentur communiter purgent refeciant ita ut qua fine quisque aquam habet usque eo operas praestet...* (*vid.* Beltrán Lloris, 2014; Martínez de Morentin, 2016: 348-349).

propuesta, la conversión del *ager peregrinus* en *ager publicus* se hace efectiva a medida que el Estado ejerce materialmente su *dominium* patrimonial sobre el subsuelo dirigido a la extracción de metales preciosos. Esta teoría, basada en la neta distinción entre suelo superficial y subsuelo es uno de los principales fundamentos del derecho minero desarrollado por Negri (1985), y ha sido planteada para el Noroeste por varios autores (Santos Yanguas, 1979: 63-64; Sastre y Sánchez-Palencia, 2002: 225). Aunque no parece que el derecho minero sufriera un gran desarrollo en la jurisprudencia clásica, se intuye ya en la opinión de Labeón transmitida por Javoleno para época augustea una diferencia cualitativa entre los derechos reales del suelo superficial y el subsuelo sobre el cual podía reservarse un dominio para su explotación futura:

*In lege fundi vendendi lapidicinae in eo fundo, ubique essent, exceptae erant, et post multum temporis in eo fundo repertae erant lapidicinae; eas quoque venditoris esse Tuberó respondit. Labeo, referre, quid actum sit; si non appareat, non videri eas lapidicinas esse exceptas, neminem enim nec venderé, nec excipere, quod non sit, et lapidicinas nullas esse, nisi quae appareant et caedantur, aliter interpretantibus, totum fundum lapidicinarum fore, si forte in toto eo sub terra esse lapis; hoc probo*<sup>402</sup> (D. 18, 1, 77=Iav. 4 post. Lab).

También en otro fragmento de Ulpiano queda implícita la posibilidad de explotar el subsuelo por los poderes públicos si se había arrogado tal derecho con anterioridad (=Ulp. 6 *opin.* 8, 4, 13, 1). Como ha observado Bravo Bosch (2016: 191-192), ambos fragmentos denotan que en el régimen de minas y canteras se imponía un sistema distinto al que reconocía el derecho privado, basado en el principio general de que el dominio del suelo se extendía también a los frutos y bienes que tuviera debajo. La principal ventaja de esta opción interpretativa es que proporciona una solución dinámica a los cambios estatutarios del suelo que resulta coherente con el avance progresivo de los frentes y desmontes mineros y con la propia articulación de numerosos paisajes del Noroeste hispano en donde coexisten sin solución de continuidad las explotaciones auríferas con distintas formas de poblamiento y actividades agrarias. De este modo, el procedimiento expropiatorio se basaría en un subterfugio que no lesiona la integridad territorial de las comunidades peregrinas a menos que Roma ejercitara progresivamente sus derechos reales en el subsuelo, convertido entonces en *ager publicus* que iba horadando los territorios comunitarios.

En tercer y último lugar, se ha observado como tendencia en el Noroeste que importantes zonas de explotación aurífera en *ager publicus* tiendan a coincidir con los hitos del paisaje sobre los que se definen las fronteras entre dos o más *civitates* (Sánchez-Palencia *et al.* 2009: 292-99 y fig. 1). Siguiendo siempre a estos autores, existen algunos ejemplos representativos en donde amplios sectores de explotación

<sup>402</sup> “Se determinó en una cláusula de la venta de un fundo que las canteras que existiesen en cualquier parte de aquel fundo quedasen exceptuadas y después de mucho tiempo fueron descubiertas unas canteras en dicho fundo. Respondió Tuberón que también ellas pertenecían al vendedor. Labeón se refiere a qué se ha querido hacer, porque, si no resulta claro, no habrá de considerar que aquellas canteras han sido exceptuadas, porque nadie vende ni exceptúa lo que no existe y no existían más canteras que las ya descubiertas y explotadas. Si se interpretase de otro modo, todo el contenido del fundo sería cantera si acaso en todo él existiese piedra bajo la tierra. Apruebo esta opinión”.

discurren por territorios limítrofes, como el cinturón marcado por el río Sil cuya larga puesta en explotación a lo largo del siglo I d.C. parece definir los límites entre *Susarri*, *Bergisenses*, *Gigurri* y *Lougei*. La zona minera de “Terra do Bolo” también se perfila en zona limítrofe entre los *Tiburi*, dispuestos en el valle del río Bibei, y los *Gigurri* relacionables con la comarca actual de Valdeorras, además de constituir el límite asignado a los *Tamagi* del valle del Támega. La zona minera de “Salientes” en la cabecera del Arnoia, se dispone entre los territorios de cuatro *civitates*, *Tiburi* (al este), los *Lemavi* (al norte), los *Limici* (al sur) y, quizás, los *Aurienses* (al oeste). Por otro lado, la zona minera de Carballiño se sitúa entre la *civitas* asociada con Lais y San Cibrán y las *civitates* occidentales cercanas a la zona costera, así como la zona minera de “Cexo-Fontechid” podría ubicarse en la frontera meridional de los *Coelerni*. Evidentemente la temprana implantación del sistema de *civitates* que denota el edicto de El Bierzo, para una zona donde más tarde se desarrollarán intensas explotaciones mineras, difícilmente pudo anticipar en las *assignationes* comunitarias por dónde discurrirían ulteriormente estas áreas de explotación, que se fueron perfilando de manera paulatina. Aunque las primeras explotaciones mineras en zonas como la Valduerna no parecen anteriores a Tiberio (Domergue y Sillières, 1977), es cierto que la presencia en el periodo de ordenación post-conquista tanto de militares como de procuradores (Str. 3, 4, 20) pudo verse acompañada de las primeras tareas de prospección y evaluación de los recursos mineros regionales mediante el bateo de los placeres fluviales, para lo cual ya contaban con una experiencia previa en explotaciones auríferas tardorrepublicanas como la Bessa, aunque explotadas mediante el régimen de concesiones (Biella, Italia, Sánchez-Palencia *et al.* 2011). Seguramente la decisión, a finales del siglo I a.C., de ubicar un campamento en el enclave que después se convertirá en la *urbs magnifica Asturicense* tuvo también en cuenta los abundantes recursos auríferos que ya podían intuirse en el momento fundacional en las cordilleras que quedaban a su occidente, y que fueron intensamente explotadas a lo largo del siglo I d.C. No obstante, no parece apropiado pensar que estas primeras aproximaciones resultaran lo suficientemente precisas ni generalizadas como para poder ser tenidas en cuentas en la definición de las *civitates* o en los territorios sobre los que Roma se reservaría como *ager publicus* en vista a futuras labores mineras. La propuesta de estos autores descansa en un modo de proceder que se fue configurando con el paso del tiempo, especialmente a partir de época Flavia, cuando las intervenciones en esta nueva fase de ordenación territorial pudieron ser tendentes a desarrollar una práctica que ya se había producido de facto en el desarrollo de las explotaciones auríferas precedentes: “Es posible que ya en época anterior en algunas regiones funcionara ya otra tendencia de carácter territorial que ahora se hace más activa o consciente: la ubicación de zonas mineras en los límites entre *civitates*” (Sánchez-Palencia *et al.*, 2009: 297). Aunque resulta complicado establecer una secuenciación clara, sin duda este nuevo criterio comportaría ventajas respecto a la expropiación progresiva asentada sobre los derechos reales de Roma en el subsuelo, que representaban formas confiscatorias invasivas en las comunidades, a la vez que facilitaba las aportaciones de mano de obra local que eran repartidas entre las *civitates* limítrofes.

Esta teoría podría parecer tautológica, pues como bien es sabido los límites intercomunitarios toman habitualmente cordilleras montañosas (como se intuye sin ir más lejos en el El Bronce de Fuentes de Ropel) y es en éstas, por las propias condiciones geológicas en las que aparece el oro, donde suelen acometerse (aunque no necesariamente) las labores mineras. Sin embargo, a mi modo de ver, esta hipótesis podría ser compatible con el tratamiento que los agrimensores dan a determinadas categorías gromáticas relacionadas con límites en zonas montañosas en las que Roma puede reclamar una titularidad pública (*ius subsecivorum*) que no habría sido necesariamente ejercida desde el comienzo. El punto de partida es el *ager arcifinius* que, como ha hecho notar López Barja recientemente (2014: 461), ha recibido una escasa atención historiográfica al considerarse algo marginal e irrelevante. Se trata de la categoría más general, dentro de la cual se integran los expedientes gromáticos que nos interesan. Tal y como la definen los agrimensores, tiene como seña distintiva la inexistencia de mensura oficial, lo que le hace distinto a las otras dos *qualitates agrorum*, de los *agri divisi et assignati* y del *ager per extremitatem mensura comprehensus*, según indica Frontino: *qui nulla mensura continetur* (Th. 2). El *ager arcifinius* aparece en dos situaciones fundamentales en relación directa con los territorios asignados: era la franja que quedaba sin asignar entre las propiedades privadas de la centuriación<sup>403</sup> (Hyg. Th. 78=La, 284, 3-7) y las zonas que superaban el territorio asignado, siendo *ager arcifinius* lo que iba más allá del *finis* establecido en la *forma*. Dentro de esta segunda variante los agrimensores aluden a varias categorías agrimensorias que, en realidad, coinciden con una cuestión clave: es precisamente el carácter escarpado, montañoso o poco apto para el cultivo del terreno lo que provoca que ni se mensuren ni asignen, pero sobre ellas Roma parece reservarse un derecho a reclamar su propiedad mediante el ejercicio del *ius subsecivorum*, pues continuaban siendo *ager publicus*. Frontino lo refleja claramente en su definición de los *loca relicta* (abandonados) como aquéllos que, por su aspereza o por arbitrio del fundador, no recibieron límites pero sobre los que recaía el derecho de remanentes: *relicta autem loca sunt quae siue locorum iniquitate siue arbitrio conditoris limites non acceperunt, haec sunt iuris subsiciuorum* (Front. Th. 9). Higinio Gromático la describe en término parejos al relacionarse con la *pars asperis rupibus* que no se asigna ni recibe límites, aunque sí *demonstrationes* (Hyg. Grom. Th. 144). La mayor información la tenemos, sin embargo, para la categoría del *ager extraclusus*, excluido de cualquier tipo de asignación territorial como las *assignationes* a las *rei publicae peregrinae* con las que pudo entonces guardar cierta relación (Front. Th 3), si bien sus descripciones suelen insertarse en ámbito colonial. Este sería el caso de los territorios que por su salinidad o aspereza quedaban fuera de la asignación (Hyg. Th. 120) y, de hecho, el propio Frontino observa

---

<sup>403</sup> Probablemente se trata de su acepción más arcaica con el fin de solucionar los problemas derivados del escaso desarrollo de las servidumbres de paso en época republicana. Según Higinio su nombre procede precisamente de la situación de “apartar y prohibir el paso al vecino”: *Arcifinales agri dicuntur qui arcendo, hoc est prohibendo, vicinum nomen acceperunt* (Hyg. Th. 78=La. 284, 3), Sículo Flaco ofrece una variante más confusa al relacionarlo con el *ager occupatorius*, quizás en referencia a los conflictos que se producen entre *occupatores* irregulares en *agri publici* no mensurados, en donde lo que importa entonces es la capacidad del dueño por hacer prevalecer su propiedad a través del acto físico, y no jurídico, de “apartar al vecino” (Sic. Flacc.Th. 102=La. 138, 3; *vid.* Front. Th. 2).

una clara analogía con los *loca relictia* (Front. Th. 9). Al igual que ellos, el *extraclusus* estaba también sometido al derecho de remanentes, podía ser asignado posteriormente o mantenido como *ager publicus* excluido, y se caracterizaba por su posición *ultra limites* (Front. Th. 9). Ello explica que entre los *subseciva* deban mencionarse las fronteras que se reservan dentro de esta categoría: *naturam extremitatum servantia* (Hyg. Th. 78=284, 3). Higino Gromático, pensando fundamentalmente en un contexto de *agri divisi*, también reproduce algunos de estos rasgos: se encontraban más allá de los límites mensurados y podían darse muchas veces en zonas escarpadas y difíciles (*si fuerit mons asper et confragosus*), siendo en tal caso necesario indicar en la *forma* el lugar en donde daban comienzo (Hig. Grom. Th. 161).

Desde esta perspectiva, la *assignatio* a las comunidades podría haber dejado como “excluidas” o “abandonadas” algunas de estas cordilleras montañosas en vista a futuras explotaciones que quedarían en los límites intercomunitarios. Esto se produciría desde un punto formal, y seguramente inconsciente para las propias comunidades, que en ocasiones mantuvieron su antiguo lugar de residencia hasta finales del siglo I y comienzos del II d.C. Sículo Flaco reconoce que en algunas regiones la anchura de los límites se ha excluido a lo largo de un largo recorrido en alusión a las colonias (*agri excepti*), pero también al fenómeno al que nos estamos refiriendo. Hasta las reivindicaciones de la dinastía Flavia de las tierras sobre las que Roma tenía el *ius subsicivorum* fue relativamente frecuente una política permisiva con la *occupatio* en estos territorios, como mencionan con insistencia los agrimensores (eg. Front. Th. 2; Hyg. Th. 78=La. 284, 3; Th. 86=La. 123; Sic. Flacc. Th. 102=La. 138,3). De estar en lo cierto, ello podría explicar las formas de poblamiento que se encuentran en convivencia con el *ager publicus*, al situarse en *agri relictii* y/o *extraclusus*. Así lo refleja un pasaje de Sículo Flaco que viene sintetizar los principales elementos de nuestra hipótesis, en donde se pone en relación con la *assignatio* del territorio comunitario (*ager universus*):

*Cum non potuerit universus ager in assignationem cadere propter aut asperitatem locorum aut praerupta montium, quamvis excederent fines lege datos, tamen, quoniam vacabant concessi sunt his quorum finibus sumpti erant, nec tamen iuris dictio concessa est*<sup>404</sup> (Sic. Flacc. Th. 129=La. 164, 15).

Ninguna de las tres posibilidades seguramente sea capaz de cubrir todos los supuestos y posibilidades que puedan encontrarse en la práctica. En cualquier caso, se trata de un camino abierto que debe seguir desarrollándose, aun a sabiendas de que la praxis material no siempre coincida exactamente con las conceptualizaciones y modelos teóricos de los agrimensores, que al fin y al cabo son sólo un esbozo de una realidad mucho más diversa y adaptable a las necesidades y especificidades del territorio sometido y ordenado.

<sup>404</sup> “Cuando la tierra no ha podido caer en la asignación debido a la aspereza de los lugares o lo escarpado de las montañas, por mucho que (las tierras) excedieran los confines fijados por la ley, sin embargo, puesto que estaban desiertas, han sido concedidas a éstas de cuyo territorio se habían tomado; no obstante, no se (les) ha concedido la jurisdicción” (trad. de Castillo, 1996).

## 10. La comunidad Vadiniense como ejemplo de integración cívica desde la peregrinidad.

La *civitas Vadiniensis* ofrece una buena oportunidad para explorar las genuinas reacciones que pueden darse en el nuevo marco de dominación romano desde la descentralidad. El sistema impuesto a partir de las guerras cántabro-astures estableció las bases para un cambio que se desplegará en los dos siglos siguientes. Nombrada como *Vadinia* en Ptolomeo (2, 6, 50), era una de las *novem regio Cantabrorum* del *conventus Cluniensis* descritas por Plinio, aunque sólo refiriera de forma explícita *Iuliobriga* (NH., 4, 20, 110-12). Gracias a su característico *corpus* epigráfico y a la menciones de *origo intra civitatem* conocemos su territorio ciudadano de un modo aproximado pero seguro, abarcando los valles del Porma, Esla y Cea en la parte cismontana y varios afluentes del Sella en la transmontana que discurren por la parte suroeste asturiana y el noreste leones. Según la propuesta de Martino (2002), basada en los hitos del paisaje que pudieron actuar de *limites* en conjunción con la dispersión epigráfica, éstos denotan un ámbito comunitario montañoso de gran extensión que se prolongaría a ambos lados de la cordillera. Sus contornos aproximados podrían identificarse en la parte septentrional con el valle del Güeña, seguramente en colindancia con los *Orgonomesci*, hasta el Alto de Ortiguera, continuando entonces por los Picos de Europa hasta el puerto de San Glorio. Su límite oriental concordaría con la cordillera que actualmente limita las provincias de Asturias y León, lo que excluiría del ámbito vadiniense la comarca actual de Fuentes Carrionas en el valle alto del Carrión. Quizás el límite más problemático sea la divisoria aproximada de su parte meridional, que podía situarse en la zona de contacto montaña-llanura, lo que excluiría algunos testimonios epigráficos vadinienses más alejados, quizás explicables por su contexto de reutilización, como el de Vega de Montasterio (nº 61<sup>405</sup>) o Villapadierna (nº 21). La frontera oriental se cerraría a partir del extremo suroeste en torno a la localidad actual de Boñar en el Porma, siguiendo la divisoria de aguas entre el Porma y el Curueño hacia el norte por la sierra de la Cuerna hasta el Puerto de San Isidro.

Las razones por las que se ha elegido el conjunto vadiniense por encima de otros para evaluar el impacto romano del nuevo marco de *civitates* en el Noroeste estriba fundamentalmente en el hecho de que los principales rasgos de la sociedad provincial de esta región, en donde la ruralidad de sus formas de poblamiento, el impacto de la minería aurífera, o sus formas de relación social se insertan dentro de dinámicas profundas de amplia escala que comparten factores de cambio histórico. Además, en el caso *vadiniense* su considerable conjunto de testimonios epigráficos, que ya alcanzan los 73 tras las últimas publicaciones (González y Gorrochategui, 2013; Martino, 2014; Sánchez-Lafuente y Ordóñez, 2017: 240-44), proporciona una base documental más sólida y homogénea de lo que es habitual en otras comunidades rurales

---

<sup>405</sup> Para facilitar la citación de las fuentes epigráficas seguiremos en este apartado la numeración planteada en la tabla (*vid. infra*) en donde se incluye el conjunto de inscripciones de ámbito vadiniense.

del noroeste hispano. Por otro lado, las características formales y de contenido del *corpus* vadiniense invitan también a una reflexión necesaria en torno a la romanización unidireccional y aquélla que reconoce modos distintos de pertenencia y de asimilación al Imperio, modos distintos de “ser romano”. El sistema descentralizado y la autonomía comunitarias son, al fin y al cabo, las bases materiales sobre las que se asienta la heterogeneidad de las respuestas locales posibles. Por esta razón, es preciso descender a las formaciones y relaciones sociales más allá del marco administrativo *per extremitatem*, aunque sea de una manera sintética que no haga justicia con los trabajos monográficos previos, pues es el control del excedente fiscal y del poder político la base que opera en la configuración de las élites observables en el medio epigráfico (Sastre, 2001b; 2002).

### **10.1 La ruralidad de la *civitas Vadiniensis*.**

Tradicionalmente la *civitas Vadiniensis* ha servido como ejemplo del carácter periférico de las comunidades rurales, cuyo paisaje montañoso, su “pobre” cultura epigráfica y material, se consideran síntoma del aislamiento cultural, social y político durante el Alto Imperio a la manera en que Estrabón describe a los pueblos montañoses (Str. 3, 7-8). El papel jugado por la teoría clásica de la Romanización, aplicada consciente o inconscientemente, ha sustentado la negación del “cambio cultural” en favor de una continuidad prerromana que se atisbaba en la supervivencia de la cultura castreña, en los rasgos formales de sus asentamientos fortificados, e incluso en las instituciones sociales representadas en el medio epigráfico. En este sentido, el aspecto “tosco” de la epigrafía vadiniense, inscrita muchas veces en piedras de aluvión de gran envergadura tomadas de las cabeceras de los ríos, ha abundado en esta perspectiva aislacionista en tanto que síntoma de un grado de romanización insuficiente o defectuoso, en vez de presentarse como un fenómeno contingente y coherente con los fundamentos de la sociedad romana provincial. Algunas lecturas de conjunto en las últimas dos décadas han contribuido a repensar y romper algunos de estos paradigmas gracias a la mayor información disponible tras la publicación de nuevas inscripciones, el mayor (aunque todavía deficiente) conocimiento arqueológico y, sobre todo, gracias al cuestionamiento de la aplicación del modelo de ciudad clásico al medio rural (Sastre, 2001a). A pesar de estos avances, han persistido algunas de estas tendencias en la interpretación de la comunidad vadiniense que es preciso comentar aunque sea someramente, pues reproducen algunos rasgos perfectamente extrapolables sobre la articulación de las comunidades rurales del Noroeste hispano:

1. Se parte de la negativa a considerar el mundo rural como entidad capaz de estructurarse a sí misma de un modo funcional eficaz, siendo la *civitas* muchas veces un concepto asimilado y confundido con el fenómeno urbano, como ya se ha mencionado en varias ocasiones. El conocimiento arqueológico disponible sobre la articulación del poblamiento vadiniense denota de manera clara la total ausencia de estructuras urbanas o núcleos que actuaran como eje centralizador de las actividades administrativas y de



gobierno del conjunto comunitario. Algunos lugares en donde se da la circunstancia de una mayor concentración de testimonios epigráficos como, por ejemplo, Liegos (4) o Crémenes (6), conviven sin embargo con un paisaje rural que pudo asociarse con pequeño núcleos fortificados de época romana, como los “castros” de Liegos y Villayandre respectivamente. Se trata de una tendencia general que ha podido documentarse mediante prospecciones en los valles del Porma, Esla y Cea (Celis, 1985; Gutiérrez, 1985; 1986-87; Liz, 1996; Sastre y Sánchez-Palencia, 2013), si bien todavía se precisa de trabajo de campo más intensivo y, sobre todo, de un estudio territorial y diacrónico que permita confirmar una analogía que ya se intuye con respecto a otros paisajes rurales del Noroeste hispano, también caracterizados por la carencia de *urbes* en época romana, como El Bierzo, la Valduerna, la Valderia (León: Sánchez-Palencia y Fernández-Posse, 1985; 1988; Orejas, 1996; Sánchez-Palencia, 2000: 227-306), el Baixo Minho (Pontevedra; Currás, 2014: 796-885), el occidente de Zamora y Tràs-os Montes oriental (Esparza, 1986; Sastre, 1999; Romero, 2015), el Noroeste de *Lusitania* (Ruiz del Árbol, 2005) o la zona occidental de Asturias (Villa, 2007). En este sentido, será imprescindible la identificación de otras formas de poblamiento rural de época romana que encontramos en otras zonas del Noroeste hispano (en abierto, en llano, etc), cuyas dificultades de localización mediante prospecciones en superficie ha implicado un análisis centrado en los recintos fortificados de época prerromana y romana que debe ser completado. En este contexto, la aplicación del modelo clásico de *civitas* suele asumir la existencia necesaria de una *urbs* o un centro reconocible al que se le asigna un *ager* en posición dependiente, de modo que la ruralidad se convierte tácitamente en una entidad incompleta que sólo toma sentido si se perfila una conexión clara con un centro urbano (normalmente aquél de rasgos más romanizantes), capaz de regularizar y centralizar su estructura social, política y económica (*vid.* Pérez Losada, 2002: 23-58). Este sesgo metodológico, que implícitamente niega la capacidad del mundo rural por convertirse en un agente histórico “independiente” (*vid.* Pereira, 1984), se esconde detrás de las numerosas tentativas y esfuerzos por identificar la capitalidad vadiniense sin ningún resultado satisfactorio hasta el momento. El problema es entonces la localización, no el cuestionamiento sobre su existencia: “La localización del centro administrativo urbano de *Vadinia* aún es hoy una incógnita así como su estatuto jurídico pero puede tratarse de una comunidad que recibiera el estatuto municipal con los flavios, si bien su modo de vida no debió de modificarse demasiado del existente con antelación a la conquista romana” (Iglesias, 1999: 303). Las especulaciones sobre cuál de los núcleos debe corresponderse con el *caput civitatis* vadiniense han sido numerosas, pero descansan en gran medida en afirmaciones carentes de datos en las que sustentarse. Algunas de ellas son, por ejemplo, Benia de Onís (Asturias), sugerida por Santos Yanguas (2015: 102), la *Deobriga* cercana a Pedrosa del Rey (Mangas y Martino, 1997: 326), el castro de Morgovejo-La Canalina y La Uña (Peralta, 2003: 129; *cfr.* Luengo, 1940), o la corona de Acevedo (Vidal, 2015: 385). Para superar algunos de estos presupuestos debe recordarse que un modelo, como es el de la ciudad clásica, es sólo un instrumento de comprensión que permite simplificar y relacionar información compleja y diversa, no un marco estanco que debe contener todas las soluciones posibles. Al fin y al cabo, el modelo descentralizado que se ha planteado no impone una

estructura social, cultural o de poblamiento determinada, que se produce orgánicamente, y es la autonomía de la comunidad la piedra angular que permite considerar otros caminos en la gestión de los espacios cívicos. En algunos casos, pudo pasar porque un centro concreto desempeñe funciones administrativas como se ha propuesto para los ámbitos rurales del NE peninsular (Oller, 2011; 2014), en otros, como en los propios vadinienses, debe atenderse a otro tipo de estructura social, en donde el papel de las aristocracias locales y sus relaciones políticas pudieron formalizar un ámbito de cohesión suficiente que reemplazara o sustituyera los centros administrativos estables (Sastre, 2002: 101-02).

2. En conexión con lo anterior, el rechazo a las *civitates* rurales como entes funcionales se ampara tácitamente en concepciones actuales que tienden a identificar los centros urbanos como sinónimo de “progreso” y “desarrollo”, mientras lo rural significa pobreza y precariedad. Detrás de esta enunciación simplista, pueden considerarse sin embargo dos vías interpretativas que han buscado subsanar la carencia de estructuras urbanas o monumentales en las que repose un horizonte rural dependiente. La primera de ellas, enunciada por Knapp (1986), es cuestionar en clave de continuismo prerromano la propia existencia de la *civitas* ante la falta de la unidad de coherencia que representa el tándem urbanismo-*civitas*, por lo que no sería hasta el siglo II d.C., momento en que la menciona Ptolomeo (2, 6, 50), cuando empieza a cobrar forma. La omisión de Plinio, que sólo menciona *Iuliobriga*, abre una puerta a la duda que no se plantearía si existiera un centro de apariencia romana o con ciertos rasgos monumentales. Evidentemente este tipo de suposiciones, basadas exclusivamente en fuentes literarias, ya no pueden sustentarse al entrar en contradicción con un *corpus* epigráfico al que se le ha ido reconociendo una datación cada vez más temprana (Sastre, 2002: 79-82; Martino, 2012). De hecho el caso vadiniense proporciona una muestra excepcional de *origines intra civitatem* cuya concentración, presentándose en 45 de las 73 inscripciones totales, denota un esfuerzo por visibilizar una identidad cívica compartida que se configura desde los primeros momentos. Todas las formas abreviadas VAD- en genitivo que aparecen después del nombre significan implícitamente *cives* como demuestra la inscripción de Pedrosa del Rey: *Cor(nelius) Mate(rnus) cives*<sup>406</sup> / *Vad(iniensis)* (nº 43; *vid.* González, 1997: 96-100). Por tanto, más allá de la existencia probada de la *civitas* de *Vadinia* desde los primeros momentos, es importante destacar cómo el sentimiento de pertenencia colectivo y supralocal de la *civitas*, de “orgullo cívico” (*vid.* Andreu, 2008b: 363 n. 77; González y Ramírez, 2007), no resulta contradictorio con la ruralidad de sus formas culturales o de poblamiento. Es más, lugares como Clunia, capital del *conventus* al que pertenece *Vadinia* y que terminará por convertirse en colonia con Galba, tiene 10 *origines intra civitatem*, un número considerable pero muy inferior al vadiniense (*vid.* González, 2011: 95). Es importante, por tanto, la reflexión acerca del porqué este fenómeno de identificación puede estar más presente y visibilizado en el mundo rural que en las realidades urbanas. Aspecto

---

<sup>406</sup> El plural *cives* en lugar de *civis* en esta inscripción (*vid.* nº 43) podría aludir conjuntamente tanto al dedicante como al difunto, *Boderus Sdubleginus*, si bien pudo tratarse de un error, dada la abundancia de errores ortográficos y gramaticales en el conjunto vadiniense.

que, a mi modo de ver, toma todo el sentido si se reconoce como parte de una estrategia contingente de visibilización que responde a las propias condiciones y necesidades del mundo rural, en vez de entenderlo en el marco de la “excepcionalidad”. Como planteó Sastre (2002), este proceso de consolidación de las relaciones sociales supralocales pudo tener un cariz elitista y reactivo a la fragmentación y dispersión del medio, en donde la reproducción de la clase dominante requirió aquí un esfuerzo suplementario que garantizara la fortaleza de sus lazos de cohesión y solidaridad, identificándose finalmente con el marco de la *civitas* del emana su estatus social.

Hecho este paréntesis necesario, la ineficiencia del medio rural se utiliza como argumento en otras propuestas que recurren a determinados instrumentos administrativos del aparato romano partiendo de la negativa apriorística de otras formas de estructuración político-administrativas no urbanas. Un ejemplo lo proporciona la propuesta de Mangas y Martino (1997: 336) sobre la hipotética *adtributio* de *Vadinia*, en donde la premisa de partida sobre la incapacidad del mundo rural por asumir y gestionar su territorio hace necesario contemplar dependencias administrativas y fiscales con otra *civitas* que sí dispongan de los recursos suficientes. La *adtributio* ‘in senso tecnico’ del clásico trabajo de Laffi (1966), cuyas conclusiones siguen vigentes a día de hoy, sólo se testimonia con claridad en la Italia augustea, donde algunas comunidades peregrinas alpinas fueron *adtributae* a colonias y municipios como *Brixia*, *Verona*, *Tergeste* o *Tridentum* según se aprecia en el *Tropaeum Alpium* (*CIL* V, 7817), en la *tabula Clesiana* del 42 d.C., con claro carácter retroactivo (*CIL* V, 5050), y quizás tenga un precedente en el caso de los *Langenses Viturii* de la *Sententia Minuciorum* del 117 a.C. (*CIL* I<sup>2</sup>, 584). Las conclusiones de Laffi pusieron de relieve que “il centro cittadino da cui dipendono le comunità *adtributae* è sempre un centro di diritto latino o romano, *colonia* o *municipium*” (Laffi 1966: 89)” y se da la circunstancia de que en toda la *regio Cantabrorum* no existe ninguna comunidad que cumpla estos requisitos administrativos. El único caso con suficientes indicadores para plantear un *status* promocionado fue *Iuliobriga*. Sin embargo, su promoción a *municipium latinum* no ocurrió antes de época Flavia, como se deduce de las adscripciones a la *tribu Quirina* por parte de un *flamen provincialis* y de *C. Annius Flavius* procedentes de esta comunidad (*CIL* II, 4192). También los trabajos arqueológicos de Retortillo han puesto en evidencia que la monumentalización del *forum* nos remite a este periodo (Cepeda, Iglesias y Ruiz, 2008: 106-108; 2009). En otras palabras, no existe una comunidad promocionada a la que *Vadinia* pudiera vincularse como *adtributa* para un momento temprano, que es cuando requeriría la aplicación de estos instrumentos para facilitar el proceso adaptativo a las nuevas estructuras de forma análoga al caso alpino.

El primer paso es, por tanto, dejar de lado este tipo de apriorismos y prejuicios, contruidos sobre perspectivas ideales del funcionamiento de las “ciudades romanas” y aproximarnos a la cuestión desde el reconocimiento de una *civitas* rural que es capaz de gobernarse y gestionarse a sí misma (*vid.* Revell 2009: 40-79). Al fin y al cabo, es una posibilidad coherente con la visión que arrojan algunas fuentes literarias. La opinión de Plutarco sobre *Panopeus* en la Fócide es clarificadora: “Desde Queronea hay veinte estadios a Panopeo, una ciudad de los focidios, si se puede llamar ciudad a la que no

tiene edificios públicos ni gimnasio, ni teatro, ni ágora, ni agua que baje a una fuente, sino que viven en refugios al descubierto como cabañas de montaña junto a una torrentera. Sin embargo, su región tiene mojones con sus vecinos, e incluso envían delegados a la Asamblea Focidia” (Paus. 10, 6, 1). A pesar de la sorpresa inicial de Pausanias sobre el aspecto rural de *Panopeus* los elementos claves que le permiten considerarla una *civitas* parecen ser dos: el reconocimiento de sus *limites* por el poder romano y de su capacidad política e institucional materializada en el envío de sus propios legados. La perspectiva de Pausanias parece coherente con el modelo descrito por los tratados de agrimensura, en donde la autonomía y el territorio *per extremitatem* son los fundamentos articuladores de la *civitas* independientemente de sus formas de estructuración locales. También la conocida cita de Cicerón (*Rep.* 1, 39), en la que recuerda que una *res publica* no es cualquier modo de congregarse, revela sin embargo cierta libertad en sus formas de estructuración interna, en donde los aspectos claves son el acuerdo en torno al derecho común (*consensus iuris*) y la conciencia sobre el interés colectivo (*communio utilitatis*). Por tanto, hasta que no existan documentos que inviten a pensar en lo contrario, es preciso contemplar el proceso de integración *vadiniense* dentro de los ejes de “normalidad” administrativa que se aprecian en el resto del Noroeste desde el periodo post-conquista y sobre los que no reincidiremos de nuevo.

En este sentido, los trabajos arqueológicos realizados durante los años 2002-2003 por Sánchez-Palencia, Fernández-Posse y Sastre, parcialmente publicados en 2013 (Sastre y Sánchez-Palencia, 2013), han aportado pruebas sobre la imbricación del ámbito vadiniense en el proceso de explotación de la minería aurífera. Ello constituye ya, sin duda, un nuevo argumento para romper la perspectiva sobre el aislacionismo o la “excepcionalidad” de esta comunidad e incorporarla dentro de un proceso histórico de amplia escala. Por otro lado, nos permite poner en relación brevemente cómo las labores mineras identificadas se integran en las formas sociales que se detectan en el ámbito epigráfico.

La perspectiva de paisaje planteada por estos autores ha permitido identificar hasta el momento dos áreas principales de explotación, si bien trabajos futuros seguramente puedan demostrar que no fueron las únicas. Por un lado, en la parte oriental se han documentado toda una serie de labores en la parte alta del valle del Esla, alrededor del pantano de Riaño. Algunas de ellas se encuentran en la desembocadura del río Yuso dentro del lugar conocido como “Los Casares” y “Valdecasares” (Riaño), el “Morrón Carretero” (Pedrosa del Rey), “La Cavén y San Pastor” en el monte de Majavieja y “El Joyo”, ambas junto a la localidad actual de Barniedo de la Sierra (Sastre y Sánchez-Palencia, 2013: 258-62). Es común que en contextos mineros, por su carácter más dinámico, surja un incremento de los testimonios epigráficos. En este sentido, el principal foco se encuentra en torno al actual Riaño con cinco inscripciones, cuatro de ellas procedentes del antiguo lugar de esta localidad antes de ser anegada por las aguas del pantano, y otra más en La Puerta, y pudieron guardar relación con el sitio de “Cima La Cueva”, actualmente también sumergido. Todas ellas (*vid.* tabla *infra*: n<sup>os</sup> 1, 2, 27, 39, 63) representan peregrinos de origen local, dos con onomástica latina (*Cornelius*,

*Sempronius*), que cubren el periodo desde finales de siglo I al II d.C. en concordancia con el principal periodo de explotación de la minería aurífera del Noroeste. Esta breve muestra epigráfica expone dos menciones de *origo intra civitatem* (n<sup>os</sup> 1, 63) además de diversas relaciones sociales aristocráticas (que comentaremos más adelante), de *amicitia* (n<sup>os</sup> 1, 63) y las agrupaciones sociales de los *Pentilocum* (n<sup>o</sup> 1), *Pentiocum* (n<sup>o</sup> 27), *Cadaricum* (n<sup>o</sup> 2) y *Veliagum* (n<sup>o</sup> 39). En el caso de Pedrosa del Rey se han documentado dos inscripciones datadas en el siglo I (con mención de *origo*) y el III d.C. respectivamente (n<sup>os</sup> 57 y 43). La más tardía requiere un comentario más detenido, pues ha recibido distintas interpretaciones. Se trata de una inscripción funeraria que refleja una relación de *amicitia* entre el difunto, *Boderus Sdubleginus*, y *Cornelius Meternus, cives Vadiniensis*. La cuestión estriba en el desarrollo de *EX PR EOR* y la interpretación del término *conniventium* que sigue al último individuo citado. González propuso el desarrollo *ex pr(aecepto) eor(um) conniventium*, es decir, por “mandato o recomendación de sus conciudadanos” (González, 1997: 105-111). La coherencia interna del epígrafe invita a pensar, a mi juicio, en una iniciativa privada de *Cornelius Maternus*, tanto por la indicación de la *amicitia* como porque se trata de su heredero, *h(eredi)*. Éstas serían las motivaciones que movieron al dedicante a la erección del *monumentum*. La interpretación de Mangas y Martino (1997: 338-339) se ajusta mejor a la lógica interna del epígrafe y permite establecer ahora una relación con las labores mineras del entorno minero cercano. Estos autores propusieron *ex(actor/-ceptor) pr(incipis) eor(um) conniventium*, es decir, un subalterno de un *princeps* en vez de la propuesta de la primera edición, como antiguo príncipe (*ex princeps*: Mangas y Vidal, 1989: 134-47). Por otro lado la existencia de *principes* queda probada en otra inscripción hallada en ámbito vadiniense (Valmartino, Cistierna: n<sup>o</sup> 8). Si la interpretación del epígrafe es correcta, el contexto minero permite inclinarnos hacia la figura del *exactor*, en vez de *exceptor* (encargado de tomar notas en juicios y reuniones), una figura directamente relacionada con la recolecta de tributos. Se trataría entonces, sin duda, de una adaptación local del lenguaje institucional romano, que es protagonizada por un individuo con indicación de *origo vadiniense*, subalterno de un *princeps*, y cuyo cauce de actuación se desarrollaría en las aldeas próximas (*conniventium*). Esto subraya tanto la autonomía vadiniense en la gestión de sus asuntos internos como la supervivencia de instituciones propias en el siglo III d.C. El papel de las aristocracias locales en el control social y territorial del espacio cívico, en este caso manifestado en labores fiscales, es a su vez coherente con un contexto minero inmediato en el que se requería una cooperación local para la gestión de la mano de obra destinada a *operae*, entre otras facetas, ya dentro del proceso de declive de la minería en el Noroeste.

Continuando con el sector oriental de las explotaciones auríferas (Sastre y Sánchez-Palencia, 2013: 258-62), se documenta una inscripción de Barniedo de la Sierra, junto a las labores de “La Cavén y San Pastor” y “El Joyo”, si bien su estado fragmentario sólo conserva el nombre de un peregrino, *Ambadus Palari n[---]* (n<sup>o</sup> 18). Finalmente, las labores de “El Joyo de la Gudiella” podrían relacionarse con núcleos de poblamiento cercanos como “Pandiello” y el “Peñón de Liegos” (Liegos), si bien la escasez de datos arqueológicos impide dibujar ninguna conclusión segura. En cualquier

caso, 100 m al norte de las mencionadas labores se documentan cuatro inscripciones en contexto de reutilización en la actual localidad de Liegos que abarcan un arco cronológico del I-III d.C. (n<sup>os</sup> 16, 53, 54 y 55), todas con indicación de *origo Vadiniensis* salvo la primera, y dos de ellas con relaciones de *amicitia* (n<sup>os</sup> 15, 53). Mientras en las dos más tempranas de finales del s. I y II d.C. (n<sup>os</sup> 54 y 53 respectivamente), sólo aparece onomástica local en forma de nombre único o con doble antropónimo junto a la filiación (*Andotus Ubalacinus Viadonis f.*, *Cludamus*, *Caelio Amparami f.*), las del siglo III mantienen onomástica local de nombre único (*Aliomus*, *Maisontina*: n<sup>o</sup> 16), formas mixtas locales latinas (*Cestius Boddus*: n<sup>o</sup> 55) y *duo nomina* latinos (*Cestius Flavus* n<sup>o</sup> 55). Otros núcleos de poblamiento todavía más próximos a estas labores, como el “Castro de la Magdalena” (Burón), carente de datación (Gutiérrez, 1986: 332), o el “Castro de Burón”, situado frente a las labores del “Joyo de la Gudiella” pero seguramente prerromano (*ibidem*), carecen de testimonios epigráficos cercanos.



Fig. 29. La corta de “El Reguerón” o “La Roza” en Isoba (Puebla de Lillo).  
Foto: F-J. Sánchez-Palencia (Sastre y Sánchez-Palencia, 2013: 263).

El sector occidental de las explotaciones mineras documentadas se extiende por las cabeceras de los ríos Porma y Curueño (Sastre y Sánchez-Palencia, 2013: 262-66): la corta en los lugares conocidos como “El Reguerón / La Roza”, cerca del arrollo de Pinzón en Isoba; en torno a 500 metros al sudeste, junto al lago del Ausente, indicios de las labores en una corta polilobulada. Próximo a este contexto se encuentra también la gran corta de la cara norte de “Peña Lázara” conectada con un depósito en la cumbre que se nutriría de las arroyadas cercanas. En la cabecera del río Curueño hay, a ambos márgenes del arroyo Ríopinos, zanjas superficiales y una corta que también pudo conectarse con un posible canal de abastecimiento en su parte superior. Dentro de la zona del puerto de Vegarada aparecen zonas removidas y labores superficiales, además

de una nueva corta minera orientada hacia el puerto de San Isidro. En proximidad a las labores mineras hay algunos núcleos con apariencia de asentamiento fortificado que pudieron prolongarse o corresponder a sitios de época romana, tal y cómo lo encontramos en Asturias occidental (eg. Montes *et al.* 2009; Villa 2009; 2010). Quizás, el asentamiento fortificado de “Castrillón” o “Castriltejón” (Puebla de Lillo), muy cercano a las explotaciones de “Peña Lázar” y que cuenta con indicios de ocupación en época romana hallados en las prospecciones de 2002-2003, corresponda a este fenómeno. Desde el punto de vista epigráfico, el número de inscripciones tiende a disminuir a medida que nos adentramos en los tramos más altos del valle del Porma y en situación periférica del territorio vadiniense. En contexto minero propiamente dicho, sólo encontramos una inscripción documentada en el Puerto de San Isidro y datada entre finales del I y el II d.C. (nº 9). Aunque en este caso carezca de mención de *origo* no hay duda de que pertenece a un ciudadano de esta comunidad, como revela su morfología típica de las estelas vadinienses, en una piedra de aluvión irregular de cuarcita, con el encabezado común *M(onumentum)* y dos nombres, *Andotus* y *Arenus* bien representados en la onomástica de *Vadinia* (nºs 1, 53 y 1, 30, 61 resp.). Por tanto, esto lleva a plantear que las explotaciones del sector occidental deban incluirse con bastante seguridad dentro del ámbito vadiniense a diferencia del límite sugerido por Martino, quien excluye el valle del Curueño (Martino, 2002: 630).

Como breve recapitulación, la muestra que puede relacionarse de uno u otro modo con las explotaciones mineras denota, por un lado, una considerable homogeneidad a lo largo del tiempo, tanto por la onomástica de los individuos que son mencionados, como por las relaciones sociales que se dan en su seno. En otro orden, permite reafirmar el carácter no sectorial de las actividades mineras: el carácter de las inscripciones no cambia por la mera existencia de actividades mineras cercanas, tanto desde el punto de vista morfológico como del contenido de su epigrafía. Es decir, se trata de un panorama coherente con una minería no industrializada, sectorial ni especializada, que convive con el paisaje rural que nos encontramos en tantas otras zonas del Noroeste. Llama la atención que las explotaciones mineras no se vean acompañadas de una mayor representación del aparato estatal o, sobre todo, del ejército<sup>407</sup>, cuando sin duda fue gracias a su apoyo técnico que pudieron llevarse a buen término. Aquí, sólo parecen representarse las oligarquías locales de manera semejante a las zonas mineras de la *civitas Zoelarum*, lo que quizás deba ser motivo de reflexión como indicador de posibles variantes en el sistema de gestión y desarrollo de las explotaciones auríferas.

---

<sup>407</sup> Sólo se documentan un soldado de la *legio IX Hispaniae* en Verdiago (Crémenes: *ERPLE* 401) y un veterano de la *legio XX* en Crémenes (*ERPLE* 377).

## 10.2 *Vadinia* y los *vadinienses*: las formaciones políticas y socioeconómicas como elemento de cohesión.

El conjunto total de inscripciones *vadinienses* del Alto Imperio se ha incrementado hasta los 73 testimonios tras el último hallazgo (Sánchez-Lafuente y Ordóñez 2017), lo que supone una concentración epigráfica nada desdeñable si la comparamos con otras *civitates* rurales del Noroeste hispano<sup>408</sup>. El aspecto clave (a la hora de abordar y valorar el registro) es todavía, sin embargo, la cuestión de la representatividad de la epigrafía como medio de visibilización social: ¿Inmortaliza el *corpus* vadiniense a toda el espectro social o está sesgado desde una perspectiva de clase? Desde el punto de vista metodológico debe tenerse en cuenta que los ritmos en relación al cambio cultural en las estructuras rurales eran distintos a los del mundo urbano. Esto no quiere decir que la ruralidad simplemente incorpore cambios lineales de un modo tardío o incompleto, sino que lo hace de un modo distinto, y ello hace inviable cualquier tipo de valoración que se establezca dentro un marco comparativo entre ambas realidades en pie de igualdad. Dado que el mundo rural ha tendido a tener un interés historiográfico menor respecto al urbano, el análisis de sus expresiones culturales, como es la propia epigrafía, requiere muchas veces perspectivas innovadoras que sean capaces de explicar su propia especificidad. De acuerdo con Sastre (2007), todo análisis de la epigrafía de los paisajes rurales del Noroeste hispánico debe partir del reconocimiento de un acceso desigual a la escritura y de altas cotas de analfabetismo que convierten el hábito epigráfico en un medio de representación predominantemente elitista. En primer término, esta posición teórica es coherente con la abundancia de errores en las inscripciones vadinienses a pesar de su homogeneidad formal y, en cierto modo, estereotipada. Así es el caso, a modo de ejemplo, de algunas variantes erróneas de la fórmula inicial *Monumentum* que suele encabezar buena parte de las estelas vadinienses, como *Monimentum* (nº 5) o *Munimentum* (nºs 25, 44, 54, 57); monoptongaciones debidas a cuestiones fonéticas y orales, como el dativo *sue* en lugar de *suae* (nºs 15, 33, 40); errores de concordancia entre nominativo/genitivo y singular/plurar (nºs 43, 67, quizás 37), con tiempos verbales (nºs 13, 53), etc.

Además de este indicativo, el conjunto vadiniense proporciona otra vía de aproximación a la cuestión de la representatividad social gracias a la homogeneidad formal de sus soportes. Como ya anticipamos, su expresión epigráfica tiene un aspecto bastante homogéneo que se reproduce sin grandes variaciones a lo largo del tiempo, y que tiene como seña distintiva un soporte inusual que utiliza piedras de aluvión moldeadas por la fuerza erosiva del agua, muchas veces de grandes dimensiones. Al menos 47 de las 73 inscripciones, el 64% (de 11 de ellas sólo conocemos el texto por tradición manuscrita), utilizan este soporte, tomado de las cabeceras de los ríos con altos costes de transporte. Este tipo de soporte sólo se documenta en otros dos lugares del

---

<sup>408</sup> Algunas inscripciones consideradas “vadinienses” en *ERPL*e no se han incluido en este estudio por no estar probado su origen en esta zona y por carecer de elementos que permitan identificarlas como tales (vid. *ERPL*e 351, 359, 374 y 402). Por otro lado, las dos inscripciones de miembros del ejército halladas en zona vadiniense (*ERPL*e 377 y 401, véase nota precedente) se han tenido en consideración, pero al margen de la tabla y de la numeración propuesta, que se reserva para las formaciones sociales locales.



Imperio Romano como fenómeno local: los *Bagienni* del valle de Tanaro (Italia; Menella, 1983) y el *corpus* de la localidad actual de Belorado (Burgos; Reyes, 2000), además de algunos casos aislados como el epígrafe del *princeps Albionum* de Vegadeo (Asturias: *ERAs* 14). El aspecto aparentemente “tosco” o poco refinado de las inscripciones vadinienses es uno de los argumentos principales sobre los que se ha construido el discurso de su romanización fallida o incompleta y, por esta razón, un producto cultural tardío que refleja los rasgos supervivientes de la sociedad prerromana (*vid.* González, 1997: 111-23). La datación absoluta de algunos de ellos que remite a los siglos III-V (*aera cos*, *cos*: n<sup>os</sup> 14, 15, 32, 34, 36, 68<sup>409</sup>), para los que se discute si remiten a cronologías de la Era hispánica o consular (*vid.* Knapp, 1986), llevó a pensar en una cronología tardía bajoimperial para todo el conjunto. Otros estudios monográficos que han abordado la cuestión cronológica, como los de Sastre (2002: 81-82) o más recientemente Martino (2012), han propuesto dataciones exclusivamente basadas en las fórmulas epigráficas, que retrotraen la cronología a periodos más tempranos dentro de un arco temporal que se extiende por los siglos I-III d.C. Parece un criterio más ajustado que aplicar criterios basados en secuencias onomásticas lineales, donde se presume una creciente latinización nominal que construye, a su vez, argumentos circulares sobre la romanización. Las inscripciones con datación absoluta demuestran lo improductivo de estas aproximaciones.

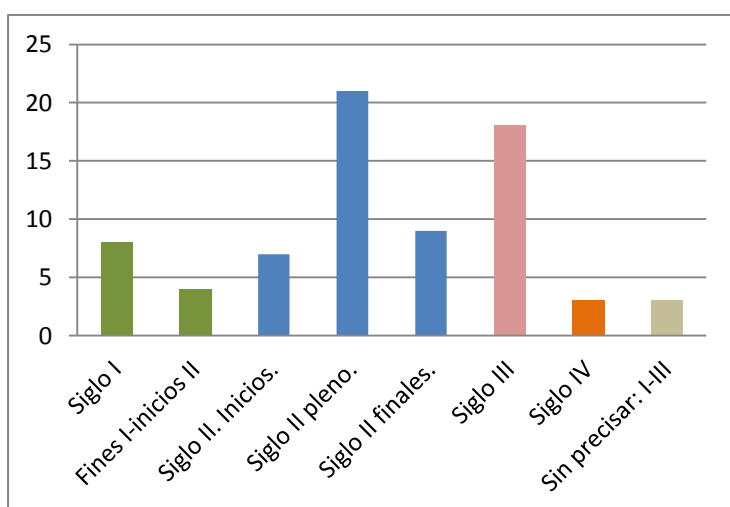


Fig. 30. Cronología del conjunto epigráfico vadiniense (a partir de Martino, 2012; a la izquierda).

Fig. 31. Ejemplo representativo del conjunto vadiniense (*ERPLe* 391). Fuente: Archivo de Monumentos y Arqueología IPCE (a la derecha).

<sup>409</sup> Se ha excluido en este estudio la epigrafía posterior al siglo III por exceder nuestro marco cronológico.

### 10.3 Análisis de acceso a los recursos y costes de producción en relación con los soportes de las inscripciones vadinienses.

Volviendo a la cuestión del análisis de la representatividad social, una vía necesaria es la valoración y aproximación a los costes de producción de las inscripciones teniendo en cuenta la especificidad de sus soportes. Ello permite descartar cualquier tentativa especulativa basada en criterios estéticos o formales como la “tosquedad” y “rudeza” vadiniense, entendidos como reflejo de la precariedad del mundo rural y de un estatismo cultural que se prolonga desde el Hierro a la Edad Media. El examen de los soportes revela que, al menos, el 77% de las inscripciones vadinienses de las que se cuenta con información sobre el material empleado corresponde a grandes bloques de cuarcita cuya gran dureza hace que sea inusual en epigrafía romana. En vez de la utilización de otros materiales disponibles en su medio natural y accesibles a corta distancia como la arenisca (sólo empleada en el 16% de las inscripciones vadiniense), la elección de la cuarcita debe ser concebida como un indicador de estatus de las clases dominantes (Sastre, 2001b). De hecho, a pesar de la dureza y sus características poco proclives para el hábito epigráfico, una gran muestra de las inscripciones consta además de abundantes elementos decorativos inscritos, como *hederae* de gran tamaño, caballos, árboles, y diversos motivos vegetales, quizás relacionados con ritos y creencias de ultratumba (García Martínez, 1999).

Otro indicador importante para resaltar el carácter elitista de la epigrafía vadiniense reside en el hecho de que las grandes piedras de aluvión empleadas para los soportes no proceden de los tramos más bajos del valle en el que se encuentran los testimonios epigráficos conservados (y, también, el poblamiento) sino de las cabeceras de los ríos, donde la fuerza del agua es suficiente para erosionar los bloques pero insuficiente para el arrastre y la reducción de su volumen, tal y como se ha demostrado empíricamente (Domokos *et al.* 2014). Ello implica que los soportes no se encontraban en el entorno inmediato (como sí ocurre, por ejemplo, en los “cantos rodados” del conjunto de Belorado, de menor tamaño), sino que su obtención requería un alto coste de extracción y transporte por un medio montañoso. De aquí puede deducirse que estamos ante expresiones culturales sólo accesibles a un sector privilegiado de la sociedad vadiniense (Sastre, 2001b).

En este sentido puede proponerse una forma de aproximación a los costes de transporte a través de estudios de movilidad entre las áreas de captación de los soportes y los lugares centrales en donde se producen mayores cantidades de testimonios epigráficos. Se trata más de una propuesta más que de una solución cerrada, en donde se han podido identificar las áreas potenciales de captación mediante el empleo de diferentes herramientas de los sistemas de información geográfica (*ArcGIS* 10). En primer lugar, a través de la identificación de los puntos de ruptura de los perfiles topográficos de los ríos, con el fin de aislar la zona identificable con el comienzo de las cabeceras fluviales, a partir de los afluentes secundarios y terciarios del Porma, Esla y Cea, y excluyendo los afluentes cuaternarios y arroyadas, sin fuerza erosiva suficiente. Para ello se ha empleado una *MDT* de 5 m que actúa como base del perfil topográfico

sobre el que se extrapola la fotointerpretación vectorial de los cursos fluviales a escala 1:10.000 de la IDE de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, se han volcado los datos disponibles sobre la dispersión de la epigrafía vadiniense y del poblamiento. En último lugar, se ha creado un mapa de fricción basado en el relieve y se han calculado los costes acumulativos de movilidad “a pie” a partir de la “función de Tobler” (Tobler 1993), también sobre la MDT de 5 m de resolución. Los cálculos finales son la media en tiempo, con ida y vuelta, hasta las principales áreas potenciales de captación que se encuentran en el entorno aplicando un búfer de 25 km, lo que abre un intervalo cronológico entre el comienzo y el final de dicha área.

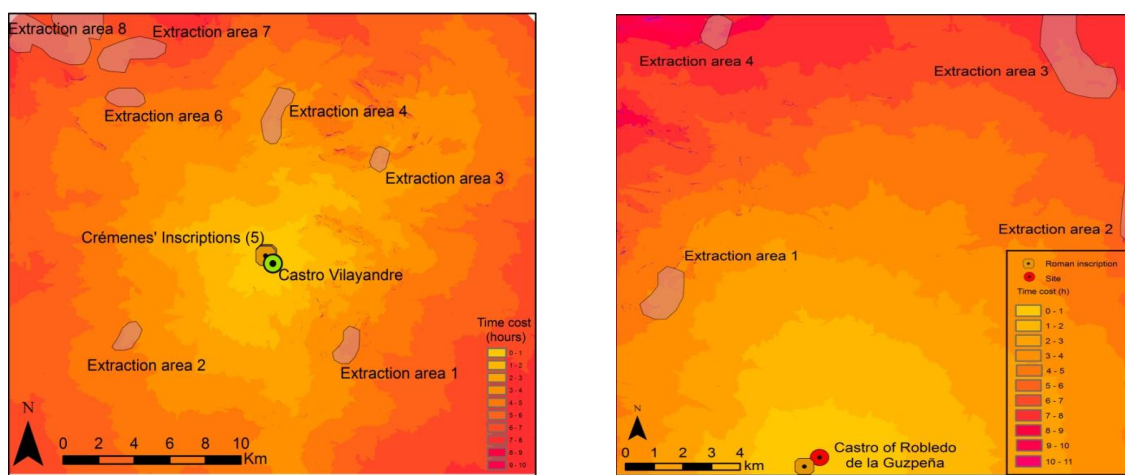


Fig. 32. Mapa de isocronas (1h) de los castros de Vilayandre y Robledo de la Guzpeña respecto a las áreas potenciales de captación de soportes.

Esta propuesta experimental sólo se ha aplicado a los recintos fortificados de Villayandre (Crémenes) y Robledo de la Guzpeña si bien sería deseable, en caso de que se considere una propuesta útil, su aplicación sistemática en el resto del territorio vadiniense en un futuro, así como incorporar otros elementos de fricción como la cubierta vegetal. La elección de estos dos asentamientos se ha debido a varias razones. En primer lugar, porque están exentos de las dificultades técnicas de otros casos, en donde la construcción de pantanos como el de Riaño o el Porma obliga a la reconstrucción del paleocauce para poder llevar a buen término el análisis de movilidad. Por otro lado, ambos asentamientos cuentan con testimonios epigráficos en el entorno inmediato que representan los principales rasgos y formaciones sociales de la epigrafía vadiniense, como los 5 encontrados en Crémenes y los 2 de Robledo de la Guzpeña, lo que permite plantear una asociación plausible entre epigrafía y poblamiento. Desgraciadamente no existen datos de prospección sobre los que extraer conclusiones cronológicas respecto al castro de Villayandre, por lo que su periodo de ocupación en época romana debe quedar en suspenso. Las prospecciones superficiales del castro de Robledo de la Guzpeña sí permiten adscribirlo con seguridad al periodo romano gracias al hallazgo de *TSH* y varios molinos rotatorios (Gutiérrez, 1986-87).

El resultado final arroja unas medias de 8-10 horas para el castro de Vilayandre y de 11-13 horas para el de Robledo de la Guzpeña, lo que supone un elevado coste en el proceso productivo del soporte epigráfico que nos remite indudablemente a una manifestación cultural de las élites sociales. Debe tenerse en cuenta que estas cifras deben tomarse como un mínimo orientativo que, con toda seguridad, representa unos costes de movilidad muy inferiores a los reales. No debe perderse de vista que se trata de un cálculo que no tiene en cuenta el proceso de extracción del soporte ni el esfuerzo suplementario que conlleva su transporte a través de la orografía vadiniense. Sólo representa un valor en tiempo, a pie, de forma continua (sin descansos) y sin otros elementos de fricción que dificultarían el avance como la cubierta vegetal. Dentro de un contexto de economía campesina, la pérdida de un día de trabajo y la más que posible necesidad de pernoctar para obtener el soporte, invitan a pensar en un contenido social restrictivo del *corpus* vadiniense. Las conclusiones finales dependerán, como decía, de una aplicación sistemática. No obstante, esta aproximación revela un grado de “sofisticación” que queda invisibilizado desde el punto de vista esteticista, que considera estas expresiones culturales como toscas o poco refinadas.

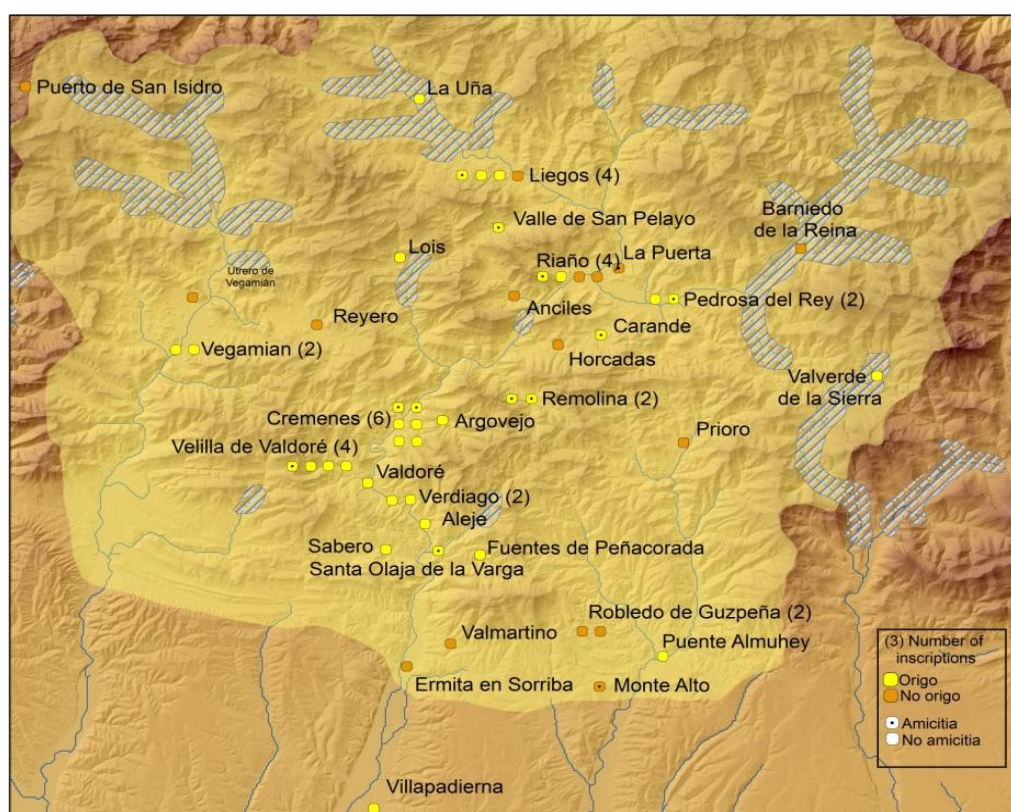


Fig. 33. Dispersión de la epigrafía vadiniense cismontana en relación a las áreas potenciales de captación de soportes.

## 10.4 Relaciones políticas: *principes*, *amicitia* y genitivos de plural.

La lectura e interpretación del conjunto vadiniense parte, por tanto, de un sesgo social que impide la extrapolación de sus contenidos al campesinado, por lo que las instituciones y relaciones sociales que inmortaliza sólo cobran sentido como expresión cultural de las oligarquías locales. No es posible conocer los modos de estructuración social completos, pero la epigrafía aporta información fundamental sobre el proceso de jerarquización introducido por el sistema descentralizado de *civitates* y la imposición de los tributos colectivos. En este sentido, instituciones como los *principes*, las relaciones *inter amicos* o los genitivos de plural, pueden cobrar forma al insertarse en el proceso de desarrollo y consolidación de las clases dominantes, fundamentadas en la acumulación del poder político, el control del excedente fiscal y la desigualdad en las relaciones de propiedad. Estas relaciones de poder aportarían en una *civitas* rural como la vadiniense la cohesión necesaria para una vertebración eficiente a nivel político, administrativo y social. De este modo otras soluciones planteadas, como la existencia de un necesario *caput civitatis* o el recurso a la *adtributio* resultan innecesarias.

1. Los *principes*. Esta figura ofrece un buen ejemplo de la importancia del surgimiento de élites colaborativas capaces de ejercer un control social concomitante con los intereses y necesidades del imperialismo romano a escala local. Como ha destacado acertadamente Mangas, se trata de una institución de profunda raigambre en la mentalidad romana que para época imperial se nos presenta en numerosas comunidades no promocionadas de las provincias romanas, normalmente para representar élites capaces de ejercer su autoridad sobre segmentos sociales, una comunidad o conjunto de comunidades (Mangas 1999; *cfr.* Rodríguez Neila, 1998). Se trata de personalidades que hunden las bases de su poder en un estatus social adquirido sobre el entorno, no son un designio directo e impuesto por el poder romano, aunque lógicamente éste lo instrumentalizase (*vid.* Caes. *BC.*, 2, 19, 1-2). Los testimonios de *principes* aparecen en varias comunidades peregrinas del Noroeste además de *Vadinia*. *Nicer Clutosi*, perteneciente al  $\bigcirc$  *Cariaca* aparece representado como *princeps Albionum* del valle del Navia (Plin. *NH.*, 4, 111; Ptol. 2, 6, 4) en una estela funeraria sin dedicante del siglo I d.C. y cuyo formato es semejante al de los soportes vadinienses (Vegadeo, Asturias: *ERAs* 14). La inscripción fragmentaria hallada en Lugo proporciona más información (AE 1946, 122). Por un lado, alude a dos *principes* de los *Copori*<sup>410</sup>, lo que reinicia en la idea de que se trata de “notables locales”, pudiendo ser varios, y nos aleja de una figura única a la manera de una jefatura. Aunque se haya querido reconstruir el nombre del *princeps* inicial haciéndolo coincidir con la filiación del *princeps* difunto para expresar una relación (y sucesión) padre e hijo, no es algo que el estado actual de la inscripción permita suponer<sup>411</sup>. El lugar del hallazgo, en Lugo,

<sup>410</sup> Aunque para el primero no se menciona la comunidad de la que es *princeps* tiene sentido que sea también la de los *Copori* al ser una estela funeraria compartida.

<sup>411</sup> [Vec]ius Veroblii f(ilius) prince[ps - - -] / Cit(- - -)  $\bigcirc$  Circine(nsi) an(norum) LX / [- - -]o Veci f(ilius) princeps Co[porum] / [- - -] h(ic) s(itu) sunt heredes sib[i] / f(aciendum) c(uraverunt): AE 1046, 122.



también podría ser indicativo del papel de los *principes* como elemento de enlace con la capital conventual, cuyo territorio se encontraba en sus proximidades. De hecho, la posible mención a la provincia *Citerior* que se intuye en el primer *princeps* es también reflejo del alto grado de asimilación e identificación de las élites con las estructuras administrativas romanas de amplia escala.

En 1997 fue dada a conocer la primera alusión clara a un *princeps* que permite extender esta figura al ámbito vadiniense. En la ladera sur de Peñacorada en Valmartino (Cistierna, León) fue hallada una estela funeraria datada en el siglo I d.C. (Mangas y Martino, 1997; nº 8): *Dovider/us Ampa/rami f(ilius) pr/inceps Ca/ntabroru/m h(ic) s(itus) e(st) De/obrigi f(ili)?-ecerunt?) p(osuerunt)/ m(onumentum)*. Aquí la cuestión estriba en reconocer cuál es su entidad y su área de influencia como *princeps Cantabrorum*. ¿Se trataría de una figura global para el conjunto de *Cantabri*? Aunque no se señala en este caso la *origo* vadiniense, todo hace pensar que se trataría de un miembro de esta comunidad, no ya sólo por el lugar del hallazgo, sin contexto de reutilización, sino por los rasgos formales y de contenido del epígrafe. Por un lado, el soporte responde a la caracterización típica vadiniense, un bloque fluvial de caliza cuarcítica de gran tamaño cuyo alisado del campo epigráfico, inusual en la epigrafía vadiniense, se puede explicar por el carácter monumental de una estela dedicada a un *princeps*. Por otro lado, el antropónimo *Doviderus* nos remite a las formas onomásticas localistas de *Vadinia* poco comunes en otros lugares. Encontramos *Doviderus* en Gamonedo de Onís (Onís, Asturias: nº 32), *Doviterus* en Puente Almuhey (Valderrueda, León: nº 44) y el derivado *Dovideara* también en Valmartino (Cistierna, León: nº 22). Del mismo modo, el patronímico *Amparamus* debe adscribirse al ámbito vadiniense, aparece en Liegos (Acebedo, León: nº 54), Crémenes (León: nº 69) y Robledo de la Guzpeña (León: nº 73); los dos *Amparami Nemaiecanum* del pacto de hospitalidad de Herrera del Pisuerga podrían ser también vadinienses (*HEp* 12, 363; *vid. infra.*). A mi modo de ver, el carácter localista de este *princeps* debe llevar a una lectura restrictiva del término *Cantabrorum* que lo acompaña pues, de hecho, se trata seguramente de un dedicatoria funeraria realizada a expensas de unos *Deobrigi* vadinienses. El genitivo *Cantabrorum* podría simplemente considerarse una adscripción personal hiperbólica, de carácter identitario, en tanto que se trata de un “notable” o “principal” con poder e influencia regional (Sastre, 2001b; Mangas y Martino, 1997: 335-36), aunque las bases de su poder emanen de las relaciones de propiedad y de control social que ejerce en ámbito vadiniense. A mi juicio, este tipo de lecturas resultan más coherentes con las connotaciones socioeconómicas del *princeps* como persona que deriva sus privilegios del estatus, no de una estructura administrativa o política que articula entidades administrativas inexistentes, como serían los *Cantabri*, en detrimento del *conventus Cluniensis*. Por tanto, podría plantearse que en ámbito vadiniense y del resto de *populi* cántabros existieran varios “principales” locales, adscritos a determinados grupos oligárquicos, y que en cierto modo existiera esa unidad afectiva, los *Cantabri*, como ámbito regional en el que se entretajan sus relaciones de poder supralocales. Otras soluciones, como que se trate de una figura única que engloba a todo el conjunto cántabro (González, 2002; Pitillas, 2003: 87) o el matiz introducido por Alarcão (2003: 97-98), que lo reconoce como *princeps* vadiniense elegido en representación del

conjunto cántabro por un *concilium* colectivo, dan un contenido excesivamente institucional a una figura que, en principio, carece de tales elementos. De ser así, la política general de permisividad romana en la estructuración política de las comunidades seguramente habría encontrado aquí sus límites, al presentarse instituciones con supuestos rasgos monárquicos que englobarían a 9 *populi* sin capacidad política exterior reconocida. Como observó Mangas, la capacidad de influencia supralocal se ejerce por otras vías, como refleja el caso del posible vadiniense *Amparamus Nemaiecanus Cusaburensi(u)m* al recibir la *civitas* honoraria *Maggavienssum* en el pacto de hospitalidad de Herrera del Pisuerga del 14 d.C. (HEp 12, 363). Ello denota tanto su importancia individual en ámbito vadiniense, quizás posible ascendiente del *princeps* de Peñacorada (Mangas, 1999: 311; Sastre, 2002: 83), como sus vínculos y relaciones de poder con otras *civitates* cercanas. La inscripción de Pedrosa del Rey del siglo III que ya hemos comentado (nº 43: *vid. supra*), constata la pervivencia en el tiempo de *principes* vadinienses. Aquí, figuras como el *ex(actor) pr(incipis) eor(um)* (Mangas y Martino, 1997: 338-339) toman sentido dentro de la capacidad de vertebración política y administrativa local del *princeps*, concretada sobre el conjunto de aldeas y su campesinado (*conniventium*), y convergente con los intereses del imperialismo romano: la recolecta de tributos y las aportaciones de mano de obra destinadas a *operae* mineras como las que requerirían las cercanas explotaciones de “Los Casares y Valdecasares” (Riaño), “Morrón Carretero” (Pedrosa del Rey, Prioro), “La Cavén y San Pastor” o “El Joyo” (Barniedo de la Sierra). La figura del *Ilvir* que se ha intuido en una inscripción fragmentaria de Utrero (Vegamián, Boñar, León: nº 30), corresponde en realidad a un antropónimo en genitivo *Cilli Vironigi Arenni f(ili)i*, lo que vuelve a incidir en que fueron los *principes* y las formaciones oligárquicas las que proporcionaron lazos de cohesión suficientes, y sustitutivos de modelos administrativos y organizativos romanos.

2. Relaciones *inter amicos*: tras el último hallazgo (González y Gorrachategui, 2013: nº 63) el conjunto vadiniense cuenta ya con hasta 13 inscripciones (18% del total) que recogen relaciones de *amicitia* entre dedicante y dedicado en inscripciones funerarias (nºs 1, 4, 6, 7, 25, 39, 43, 47, 51, 53, 58, 63, 70):

Nº	Cronología (d.C.)	Dedicante	Dedicado
51	s. I (finales) – II (comienzos)	No consta	<i>Pentius Festus Doideri filius</i>
63	s. I (finales) – II (1ª mitad)	<i>Aliomus</i>	<i>Cadus Cornelius Rebonis? filius</i>
1	s. II	<i>Arenus Andoti (filius)</i>	<i>Boderus Pentilocum Tridi fil(ius)</i>
4	s. II	<i>Fronto Doiderigum</i>	<i>Tridius Alongun Bode filius</i>
6	s. II	<i>Elanus Arga(elus)</i>	<i>Pentovius Elaesus</i>
25	s. II	<i>Aurelius Proculus</i>	<i>Neconus Boddegum Loancinis filius</i>
39	s. II	<i>Tridallus</i>	<i>Elanias Veliagum filius Paterni</i>
53	s. II	<i>Cludamus</i>	<i>Andotus Ubalacinus Viadonis filius</i>
6	s. II	<i>Cadus Pedacianus</i>	<i>Pentovius Falmici f(ilius) Aulgigum</i>
47	s. II (2ª mitad)	<i>Pentovius Petronius</i>	<i>Boderus Maternus Boddi filius</i>
58	s. II (2ª mitad)	<i>Lugua Caddecun</i>	<i>Vado Biracideginus Anemidi filius</i>
7	s. II (finales)	<i>Turantus Boddegum</i>	<i>Doiderus Arcaun Boderi filio</i>
43	s. III	<i>Cornelius Maternus</i>	<i>Boderus Sdubleginus</i>

Fig. 34. Testimonios de *amicitia* en el conjunto vadiniense.

Como ya se ha hecho notar, la *amicitia*, “amistad”, es un término elástico que se relaciona con el diálogo y las relaciones de poder dentro de un contexto oligárquico (Sastre, 2002: 83-84; Sastre y Sánchez-Palencia, 2013: 267-68). Sin duda se trata de vínculos que buscan reforzar la unidad y cohesión de la clase dirigente como contrapeso a la dispersión y la ruralidad del medio, de manera análoga a la función que desempeña la *origo intra civitatem* antes mencionada. Como revela este conjunto, se trata de un fenómeno con presencia a lo largo del Alto Imperio, si bien parece tener en el siglo II un especial cauce de actuación. Una de las cuestiones que se han planteado, es si la *amicitia* responde a un plano simétrico o desigual entre las partes. El principal problema a la hora de avanzar en el tipo de relaciones que se esconden detrás de las dedicatorias *inter amicos* viene determinado por la menor información sobre los dedicantes, lo que impide conocer si, por ejemplo, contaban con los genitivos de plural que sí acompañan a algunos de los difuntos. A pesar de esta carencia deben hacerse notar algunas observaciones de conjunto. Por un lado, en ningún caso se repiten o aparentan relación alguna las estructuras onomásticas de los *amici*, lo que plantea como opción más probable que no se trata de individuos con vínculos de parentesco, lo que es coherente con el uso de *amicus*. Tan sólo el nombre *Turantus Boddegun* coincide en su raíz con la filiación del dedicado, *Boddi f.* (nº 7). Por otro lado, es cierto que algunos nombres y sus derivados parecen tener especial presencia en la estructura onomástica de los dedicados como *Pentius* (nº 51), *Pentovius* (nº 6), *Pentilocum* (nº 1); *Boderus* (nº 1, 43, 47), *Bode f.* (nº 4), *Boddi f.* (nº 47), *Boderi f.* (nº 7), *Bodeggun* (nº 25); *Doiderus* (nº 7) *Doideri f.* (nº 51). Sin embargo, aunque con menor frecuencia, aparecen también como dedicantes: *Pentovius* (nº 47) *Boddegun* (nº 7), *Doiderigum* (nº 4). Por tanto, puede intuirse el peso de ciertos grupos sociales, pero es difícil determinar si existe realmente una parte débil o dependiente o se trata, por el contrario, de relaciones simétricas entre grupos oligárquicos. Evidentemente estos grupos sociales dominantes presentarían desigualdades internas, cambiantes con el paso del tiempo, pero no necesariamente deben considerarse como relaciones de subordinación. Por otro lado, considerar que la parte que recibe la dedicatoria sea la “fuerte” respecto al dedicante podría ocultar formas de protección de los segundos sobre los primeros. A mi modo de ver, la dispersión geográfica de las relaciones *inter amicos* juega a favor de su papel cohesionador entre grupos sociales en pie de igualdad. Puede plantearse, por lo tanto, que la *amicitia* no se documenta entre los vadinienses trasmontanos precisamente por mayor focalización en la zona del actual Corao, con una orografía suave que facilita las relaciones de poder político. De esta perspectiva, cabría suponer que es el relieve abrupto y la dispersión de los vadinienses cismontanos lo que hace necesario recurrir al fortalecimiento de los vínculos políticos a través de una *amicitia* facilitadora de la cohesión y la solidaridad entre las oligarquías locales.

3- Relaciones volubles de parentesco: 5 inscripciones recogen a *avunculi* como dedicantes o difuntos en inscripciones funerarias (nºs 17, 21, 23, 26, 65) y una registra a un *cognatus* (nº 56). Puede plantearse que la institución del avunculado no aluda a relaciones de parentesco reales, sino que podría reflejar interacciones sociales



asimétricas basadas en dependencias socioeconómicas entre élites. En este sentido, el *avunculus* como parte dominante podría ocultar, detrás de su apariencia paternalista de “familiar lejano”, otro tipo de intereses análogos a los que aparecen en la clientela política (Sastre, 2001b). En este grupo cabe considerar los 21 genitivos de plural, como parte de un mismo fenómeno que también ha sido estudiado con mayor profundidad (Sastre, 2001a: 168-76; 2002: 84-102): *Araum* (nº 23, 50), *Arcaedunum* (nº 10), *Arnunimorum* (nº 40), *Aroniaecivorum* (nº 14), *Bedunigum* (nº 65), *Bodeggum/Boddegum* (nºs 7, 46, 25), *Bodivescum* (nº 19), *Caddecun* (nº 58), *Cadaricum* (nº 2), *Corovescum* (nº 11), *Doiderigum* (nº 4), *Veliagum* (nº 39), *Veronigorum* (nº 22), *Vironigum* (nº 29), *Pentiocum* (nº 1) y, quizás, *Aliomigum* (nº 61) y *Tamaricum* (nº 64). La construcción de la dependencia hacia un individuo de mayor estatus social, explicaría por qué los genitivos de plural muchas veces derivan de nombres personales como *Bodeggum/Boddegum*, relacionado con *Bodus/Boddus* (nºs 4, 15, 46, 47, 55) y *Boderus* (nºs 7, 19, 43, 47), *Doiderigum* con *Doiderus* (nºs 7, 17, 26, 46, 51, 64) o *Doiterus* (nºs 57), *Pentiocum* con *Pentius* (nºs 29, 37, 51), *Pentus* (nºs 13) y *Pentovius* (nºs 6, 47), etc. Desde la interpretación elitista de la epigrafía vadinense, es lógico pensar que estas instituciones hubieran podido tener una base originada en lazos de parentesco. Los aparentes linajes, desde esta perspectiva, pudieron ser un constructo identitario de las clases sociales dominantes, en el que el recuerdo de un miembro notable de su ascendencia (ya sea real o imaginario), proporciona el argumento de autoridad necesario para anclar y reproducir su posición de privilegio.

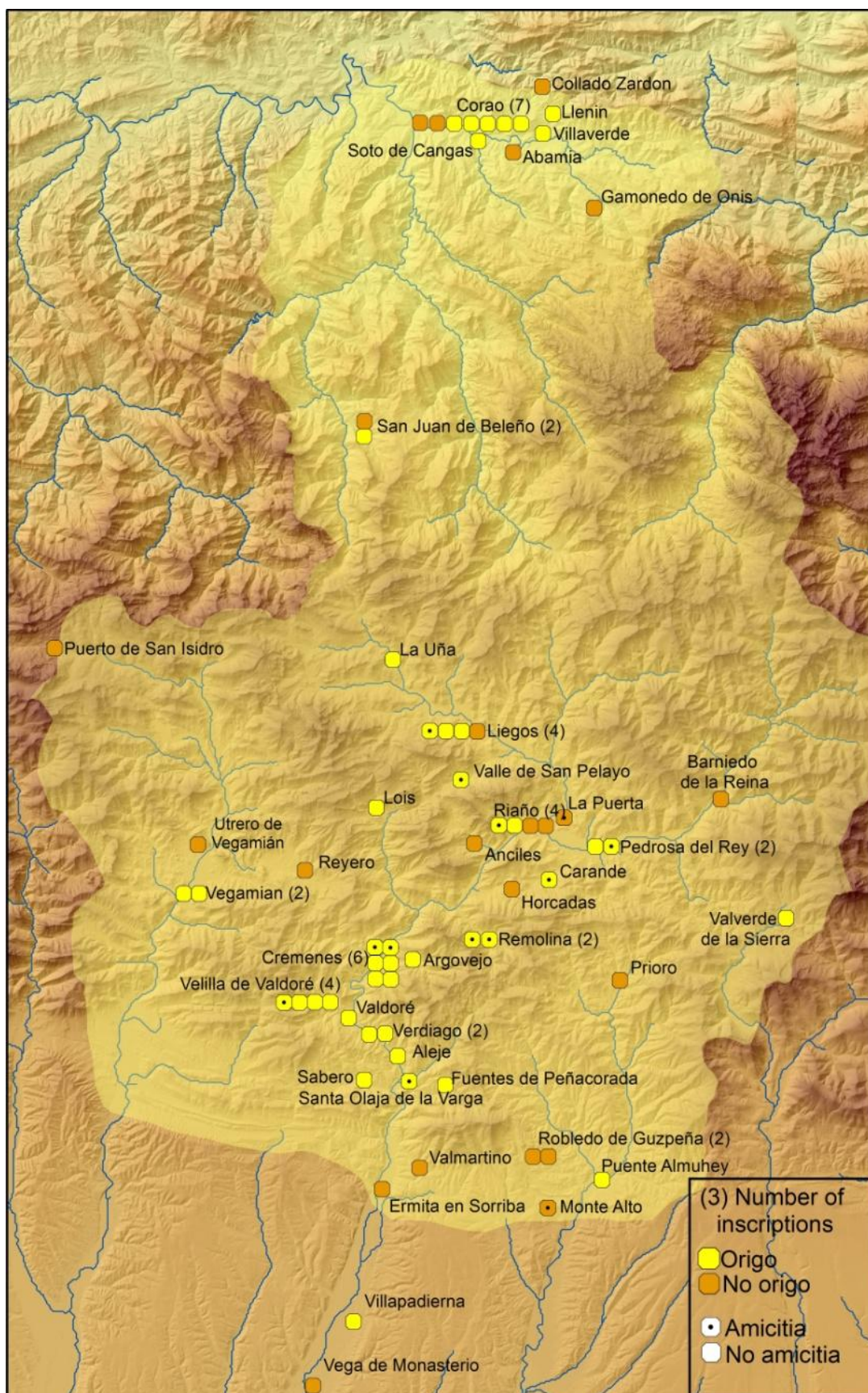


Fig. 35. Dispersión de menciones de *origo intra civitatem* y de relaciones políticas *inter amicos* en el conjunto epigráfico vadiniense.

Nº	Referencias bibliográfica	Texto	Soporte (material)	Fun- ción	Dedicado	Dedicante	Origo	Aspectos destacados	Datación (Martino. 2012)	Lugar de hallazgo
1	AE 1976, 302; IRPLe 285; ERPLe 364.	<i>M(onumentum) / [Bo]d[ero] Pent[i]ocum Tridi fil(io) / Vad(iniensi) anno(rum) XXX / Arenus Andoti (filius) / am(ico) v(otum) po(suit)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Boderus Pentilocum Tridi fil(ius)</i>	Arenus Andoti (filius)	Sí	<i>Amicitia</i> (votum solvit)  Gen. Plural.	II d.C.	Riaño (León)
2	AE 1976, 303; IRPLe 287; ERPLe 367.	<i>M(onumentum) / [Ara]us Cadaric(um?) / [Ara]vi filius / [- - -] an(n)oru(m) XX[- - - / Ar]aus f(ilio) pos(u)i[t / h(ic)] s(itus) [e(st)]</i>	Canto rodado (arenisca rojiza)	F	<i>Araus Cadaricum? Aravi filius</i>	[---] [Ar]aus	No	Gen. Plural.	II d.C.	Riaño (León)
3	AE 1976, 306; IRPLe 271; ERPLe 354	<i>M(onumentum) / Amba[to] / Placi[do Am]/bati [f(ilio) Va(diniensi) an(norum)] / XXX [- - -]/us [- - -] / h(ic) [s(itus) e(st)]</i>	Canto rodado (arenisca)	F	<i>Ambatus Placidus Ambati filius</i>	[--]us [---]	Sí	-	II d.C.	Fuentes de Peñacorada (Cistierna, León)
4	AE 1976, 307; IRPLe 282; ERPLe 391	<i>M(onumentum) / Tridio Alongun / Bode f(ilio) Va(diniensi) an(norum) XXV / Fronto Doideri/gum amico suo / pos(u)it h(ic) s(itus) e(st) / t(erra) l(evis)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Tridius Alongun Bode filius</i>	Fronto Doiderigum	Sí	<i>Amicitia</i>  Gen. Plural.	II d.C.	Remolina (Crémenes, León).
5	HEp 1989, 389; AE 1982, 579; IRPLe 268; ERPLe 384.	<i>Monime(ntum) / Necali Ca/laca Abru/naeni f(ili) Va[d(iniensi)] / Daeceius / posuit om/nes tres / an(norum) XXX</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Necalus Calaca Abrunaeni filius</i>	Daeceius	Sí	Indeterminado	I d.C. (II mitad)	Crémenes (León)
6	HEp 1, 406 =HEp 8, 327; AE 1982, 580; IRPLe 289; ERPLe 388.	<i>M(onumentum) / [Pe]ntovio Ela[es]o militi a(lae?) / [---] Vad(iniensi) an(norum) XXV / [Ela]nus(?) Arga / [am]ico p(osuit) h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Pentovius Elaesus</i>	Elanus Arga ó Arga(elus)	Sí	<i>Amicitia</i>  <i>Miles</i>	II d.C.	Santa Olaja de la Varga (Cistierna, León)
7	AE 1986, 389; ERPLe 373	<i>D(is) M(anibus) / Doidero / Arcaun Bo/deri f(ilio) Vad(iniensi) / an(norum) XXX Turanto / Boddegun / amico suo / pos(u)it / h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Doiderus Arcaun Boderi filio</i>	Turantus Boddegun	Sí	<i>Amicitia</i>  Gen. Plural.	s. II d.C. (finales)	La Velilla de Valdoré (Crémenes, León).
8	HEp 7, 380;	<i>Doider/us Ampa/rami f(ilius) pr/inceps Ca/ntabruru(m)</i>	Canto	F	<i>Doiderus</i>	Deobrigens	No	<i>Princeps</i>	s. I d.C.	Peñacorada ladera

	AE 1997, 875; ERPL <sup>e</sup> 374.	<i>h(ic) s(itus) e(st) De/obrigi f(ili) ?-ecerunt?) p(osuerunt)/ m(onumentum)</i>	rodado revasado (caliza cuarcítica)		<i>Amparami filius</i>	<i>es?</i>		<i>Cantabroru m</i>	(pleno)	Sur, Valmartino (Cistierna, León).
9	CIL II, 2696; IRPL <sup>e</sup> 5675; ERPL <sup>e</sup> 356	<i>M(onumentum) / Andoti Fl/avi Areni f(ili) / an(norum) LX / h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Andotus Flavus Areni filius</i>	No	No	-	Finales s. I d.C. – comienzo s II d.C.	Puerto de S. Isidro, Puebla de Lillo (León).
10	CIL II, 2706; ERAs 50	<i>D(is) M(anibus) / Antoni Pate(rni) / Arreni f(ili) / Vad(iniensis) Arc/aedun[u(m)] / an(norum) XL Ael(ius) / f(ilio) p(osuit) / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)</i>	Desconocido	F	<i>Antonius Paternus Arreni filius Arcaedunum?</i>	Aelius	Sí	Gen. plural	s. III d.C.	Corao (Cangas de Onís, Asturias).
11	CIL II, 2708; ERAs 55	<i>M(onumentum) [- - -] / Cassio / Corovescum / [- - -] i vi fil(io) Vadi/niensi / [an(norum)] IX(?) V/[- - -] fil(io) suo [p(osuit)]</i>	¿Canto rodado? (desconocido)	F	<i>Cassius Corovescum</i>	[---]	Sí	Gen. plural	s. II d.C.	Villaverde (Cangas de Onís, Asturias)
12	CIL II, 2709; ERAs 51	<i>M(onumentum) Fusci / Cabedi / Ambati f(ili) / Vadinie/nsis / an(norum) XXV / h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Fuscus Cabedus Ambati filius</i>	No	Sí	-	Finales s. I d.C. – comienzo s II d.C.	Corao (Cangas de Onís, Asturias).
13	CIL II, 2712; ERAs 48	<i>M(onumentum) / Penti Falvi Vic[to]ris f(ili) / Vad(iniensis) an(norum) XXX / pater ei pro me[r] (ita) / pos{s}(u)it</i>	Canto rodado	F	<i>Pentus Falvus Victoris filius</i>	<i>pater</i>	Sí	-	Finales s. I d.C. – comienzo s II d.C.	Corao (Cangas de Onís, Asturias).
14	CIL II, 2713; ERAs 49.	<i>D(is) M(anibus) m(onumentum) / pos(uit) Ant(onius) Flac(cus) / Vad(iniensis) co(niugi) su(ae) / [Te]r(entiae) Aroni/aecivoru(m) an(norum) XLI / co(n)s(ulatu) CCCXXXIIX / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)</i>	Desconocido	F	<i>Terentiae Aroniaecivorum</i>	<i>Antonius Flaccus</i>	Sí	Gen. plural	s. III d.C. (datación consular)	Corao (Cangas de Onís, Asturias).
15	CIL II, 2714; ERAs 52.	<i>D(is) M(anibus) m(onumentum) / Ter(entius) Bod(dus) Va(diniensis) / pos(uit) matr(i) / sue car(ae) V/occarec/ae ann(or)um XXCIIIX / co(n)s(ulatu) CCCXXXIIX / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)</i>	Estela oikomorfa	F	<i>Terentius Bodus</i>	<i>Voccareca ó Voconia Careca</i>	Sí	-	s. III d.C. (datación consular)	Corao (Cangas de Onís, Asturias).
16	HEp 1, 395; CIL II, 5705; ERPL <sup>e</sup> 379; IRPL <sup>e</sup> 272.	<i>D(is) M(anibus) m(onumentum) p(osuit) / Aliomus parens / filiae suae pie/ntissimae Mais/ontini an(norum) p(lus) m(inus) XVIII</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Aliomus</i>	<i>Maisontina</i>	No	-	s. III d.C.	Liegos (Acebedo, León)
17	HEp 1, 381;	<i>M(onumentum) / Ablon/nio Tauri/no Doid/eri f(ilio)</i>	Canto	F	<i>Ablionus</i>	<i>Placidus</i>	Sí	Avunculado	s. II d.C.	Armada, Vegamián

	<i>CIL II, 5708; IRPLe 257; ERPLe 348.</i>	<i>Va/d(iniensi) anno/rum XXX / h(ic) s(itus) e(st) / Placidus / av(u)nculis / po(suit)</i>	rodado (cuarcita)		<i>Taurinus Doideri filius</i>					(Boñar, León).
18	<i>CIL II, 5709; IRPLe 259; ERPLe 352.</i>	<i>M(onumentum) p(osuit) / Ambad/us Palar/i n[ - - - / - - - / - - - ] / XX</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	[---]	<i>Ambadus Palari filius?</i>	¿?	-	s. III d.C.	Barniedo de la Reina, (Boca de Huérgano, León).
19	<i>CIL II, 5711; IRPLe 290; ERPLe 362</i>	<i>D(is) M(anibus) / Bodero / Bodives(cum) / Doideri f(ilio) / a(nnorum) XXV / filio suo / m(ater) p(osuit) h(ic) s(itus) / est</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Boderus Bodivescum Doideri filius</i>	<i>mater</i>	No	Gen. plural?	s. II d.C. (finales)	Sorriba (Cistierna, León).
20	<i>CIL II, 5712; IRPLe 294; ERPLe 369.</i>	<i>M(onumentum) / Caesaron[i / I]ul(ii) l(bagi) / [f]ilius an(o)/rum XXXX / [. ]utuda Am(m)ia / [pa]tri posuit / [V]adinie(n)sis / [h(ic)] s(itus)] e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Caesaro Iulius l(bagi) filius</i>	<i>[--]utuda Ammia</i>	Sí	-	s. II d.C.	Valverde de la Sierra (Boca de Huérgano, León).
21	<i>CIL II, 5713; IRPLe 299; ERPLe 396.</i>	<i>D(is) M(anibus) / Cangilus / Virono / av(u)nculo / suo Segis/ami f(ilio) Va(diniensi) / an(norum) XXXV / h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Cangilus</i>	<i>Vironus Segisami filius</i>	Sí	Avunculado	s. II d.C. (2ª mitad)	Villapadierna (Cubillas de Rueda, León).
22	<i>HEp 1, 408; CIL II, 5714; IRPLe 293; ERPLe 385.</i>	<i>M(onumentum) D(is) Ma(nibus) / Dovide/ara f(ilio) p(osuit) / Negalo / Veronigo/ru(m) an(norum) XXV</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Negalus Veronigorum</i>	<i>Dovideara</i>	No	Gen. plural.	s. II d.C. (2ª mitad)	Valmartino (Cistierna, León).
23	<i>CIL II, 5716; IRPLe 296; ERPLe 380.</i>	<i>[---]Manlii Ar(avm) Elan/i f(ili) Va(diniensis) an(norum) XXX / Cadus av(u)n(culo) suo / p(osuit) h(ic) s(itus) e(st)</i>	Forma irregular: ¿Canto rodado? (caliza)	F	<i>Manilus Araum Elani filius</i>	<i>Cadus</i>	Sí	Avunculado Gen. plural.	Finales s. I d.C. – comienzo s II d.C.	La Velilla de Valdoré (Crémenes, León)
24	<i>CIL II, 5716; IRPLe 292; ERPLe 382.</i>	<i>M(onumentum) / Munigaligi / Abani Bouti f(ili) / Vad(iniensis) an(norum) XXV / h(ic) s(itus) h(est) / h(eres?)</i>	Estela con cabecera semicircular . Soporte irregular (cuarcita)	F	<i>Munigaligus Abanus Bouti filius</i>	No	Sí	-	Finales s. I d.C. – comienzo s II d.C.	Valdoré (Crémenes, León)
25	<i>CIL II, 5718; IRPLe 276; ERPLe 383</i>	<i>M(onumentum) Neconi / Boddegun Loan/cinis fili(o) Va(diniensi) ann(or)um {ann(or)um} / XXI Aurelius Pro(culus) / pos(uit) am(ico) suo / mun{u}ment(um!)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Neconus Boddegun Loancinis filius</i>	<i>Aurelius Proculus</i>	Sí	<i>Amicitia</i>  Gen. plural	s. II d.C.	Valle de San Pelayo, Liegos (Acebedo, León).
26	<i>HEp 1, 382; CIL II, 5720; IRPLe 258;</i>	<i>[ - - - ] Virono Taur/o Doideri f(ilio) / Vad(iniensi) annoru/m XL h(ici) s(itus) e(st) / Placidus av(u)nculis pos(uit)</i>	Canto rodado (Cuarcita)	F	<i>Vironus Taurus Doideri filius</i>	<i>Placidus</i>	Sí	Avunculado	s. II d.C.	Armada, Vegamián (Boñar, León)



	ERPLe 397.		ferruginosa)							
27	HEP 1, 402; CIL II, 5721; IRPLe 286; ERPLe 392	[T]uranto [- - - / Pe]ntiocum [- - - / - - -]vivi f(ilio) ann(orum) [- - -] / Sempr[onius / - - -] p(osuit) fratri s(uo)	Canto rodado (Cuarcita)	F	Turantus Pentiocum [--- ]vivi filius	Sempronius	¿?	Gen. plural	s. II d.C.	Barrio de Sedeñal, Riaño (León).
28	CIL II, 5722; IRPLe 297; ERPLe 400.	[- - -] / oi Vadinien(s) / Ob Boveci fili(i) / an(norum) XXV	Canto rodado (cuarcita)	F	[---]	Bovecus	Sí	-	s. I d.C. (finales)	La Velilla de Valdoré (Crémenes, León).
29	CIL II, 5723; IRPLe 298; ERPLe 349.	M(onumentum?) / [Pen]tio Vir[on]i gun Ca[di f(ilio)] an(norum) XL / [- - -]V / [- - -]JO / [h(ic)] s(itus) e(st)	Canto rodado (cuarcita)	F	Pentius Vironigun Cadi filius	¿?	¿?	Gen. plural	s. II d.C. (2ª mitad)	Verdiago (Crémenes, León).
30	CIL II, 5724; IRPLe 291; ERPLe 371	Cilli Vir/onigi / Arenni f(ili) an(norum) / [- - -] / [- - -]	Alterada (cuarcita)	F / V	Cillus Vironigus Arenni filius	¿?	¿?	Il vir?	s. I d.C.	Utrero, Vegamián (Boñar, León).
31	CIL II, 5735; ERAs 40	D(is) M(anibus) M(onumentum) / Ael(ius) pos(uit) Sep(timio) Sil(ono) / fra(tri) suo Vad(iniensi) / anno(rum) XXXV / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) En figura de caballo: L(ucio) Sep(timio) Sil(oni) ben(e)	Canto rodado (no consta)	F	Septimius Silo  Lucius Septimius Silo	Aelius	Sí	-	s. III d.C.	San Juan de Beleño (Ponga, Asturias)
32	CIL II, 5738; ERAs 57	D(is) M(anibus) m(onumentum) pos(itum) / Dov(iderus) fil(iae) su(a)e / car(ae) Fla(viae) an(norum) XX / c(onsulatu) CCCCXXCII En figura de caballo: Fla(via) vin(cas?)	Irregular (no consta)	F	Flavia  Flavia Vin(cas?)	Doviderus	Sí	-	s. III d.C. (datación consular)	Gamonado de Onís (Onís, Asturias)
33	CIL II, 5742; ERAs 47.	D(is) M(anibus) m(onumentum) / pos(uit) Tere(ntius) fili(a)e su(a)e Cant(iae?) an(n)oru(m) XV sit tibi / tera lebes(!)	Canto rodado (no consta) Campo epigráfico oikomorfo.	F	Terentius	Cantia	No	-	s. III d.C.	Coraín, (Cangas de Onís, Asturias)
34	CIL II, 5752; ERAs 56.	Pos(uit) An[n]a D(- - -) Vad(iniensis) [m]ar(ito) suo / Dom(itio) Fla[vo] / O[rg(enomesco)] an(norum) L[.] / co(n)s(ulatu) CCCX[.]VI s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)	Placa irregular	F	Domitius Flavius	Anna D[---]	Sí	-	s. III d.C. (datación consular)	Llenín (Cangas de Onís, Asturias)
35	CIL II, 5754; ERAs 54	D(is) [M(anibus?)] / pos(suit) - - -] / COIV[- - -] / car(a)e [- - -] / AMB[	Irregular. Campo epigráfico oikomorfo.	F	¿?	¿?	¿?	-	s. III d.C.	Abamia (Cangas de Onís, Asturias)

36	HEp 1, 76; CIL II, 5756; ERAs 53	[- - -]l v(icit) an(nos) / [- - - (a)er]a con[s(ulari) - - - / - - -] ]XXVII / [sit ti]bi terra [levis]	Irregular (caliza)	F	-	-	-	-	s. III d.C. (datación consular)	Corao (Cangas de Onís, Asturias)
37	HEp 1, 380; CIL II, 5719; IRPLe 254; ERPLe 386.	M(onumentum) / Penti(i) / Balaesi f(ili) / Vadini(ensi) / an(norum) XXX / Viamus / p(osuit) Alisste/giani (filius? locativo?) h(ic) / s(itus) e(st)	¿Canto rodado? (cuarcita)	F	Pentius Balaesi filius	Viamus Alisstegiani filius	Sí	-	Finales s. I – comienzo s. II d.C.	Prados de Media Vega, Aleje (Crémenes, León)
38	HEp 1, 399; IRPLe 279; ERPLe 350; ILER 3499; HAE 1813.	D(is) M(anibus) m(onumentum) p(osuit) / Venus Labar[a] / patri suo Alio / Pendiegino / po(suit) m(onumentum) an(norum) XXX	Canto rodado (pizarra silícea)	F	Alius Pendieginus	Venus Labara	No	-	s. III d. D.	Prioro (León)
39	CIL II, 5715; IRPLe 280; HEp 1, 401; ERPLe 376	M(onumentum) / Elanio Veliagu(m) / filius Paterni / an(norum) XXX Trida/llus p(osuit) amico suo / s(itus) h(oc) s(epulchro)	Canto rodado (cuarcita)	F	Elaninus Veliagum filius Paterni	Tridallus	No	Amicitia Gen. plural	s. II d.C.	La Puerta (Riaño, León).
40	HEp 2, 25; ERAs 41.	D(is) M(anibus) Peregrinus / et Pompe(ia) Ar/nunimo/ru(m) / fili(a)e su(a)e pien/ti(s)sim(a)e Supe/rri(a)e anno/ru(m) p/lus minus / (a)et(at)is nove(m)	Estela con cabecera discoidea. Antropomorf a. (no consta)	F	Superia	Peregrinus ¿Arnunimor um?  Pompeia Arnunimoru m	No	Gen. plural	s. III d.C.	San Juan de Beleño (Ponga, Asturias)
41	IRPLe 255; ERPLe 347	D(is) M(anibus) m(onumentum) / Accua Abil[io] / filio suo / pientissim[o]	Canto rodado (silíceo)	F	Abilius	Accua	No	-	s. III d.C.	Anciles (Riaño, León).
42	HEp 1, 411; ERPLe 394	M(onumentum) / Turrom[i] / Va(diniensis) Com(i) f(ili) / an(norum) XXV / Pude(n)s fr(atr) / pos(uit) / h(ic) s(itus) e(st)	Desconocid o	F	Turromus Comi filius	Pudens	Sí	-	s. II d.C.	Verdiago (Crémenes, León)
43	HEp 2, 449=3, 243=7, 385; AE 1988, 763; AE 1998, 767; ERPLe 365.	D(is) Ma(nibus) m(onumentum) p(osuit) / Cor(nelius) Mate(mus) cives / Vad(iniensis) ex(aactor) pr(rincipis) eor(um) / conniventium / Boderus Sdu/blegino h(eredi) ami(co) / suo plu(s) min(us) / an(n)orum XLV  En figura de caballo: Sdu(bleginus)	Canto rodado (cuarcita)	F	Boderus Sdubleginus	Cornelius Maternus	Sí	Amicitia  Connnivent um  Cives	s. III d.C.	Pedrosa del rey (Riaño, León).

								<i>Princeps?</i> <i>Exactor?</i>		
44	HEp 6, 632; AE 1995, 883; ERPLe 375	<i>Munim(entum) [D]oviteri [-]etoni [++]lti f(ili)</i> <i>Vadiniens(is) An(norum) [---] / - - -</i>	Bloque (arenisca)	F	<i>Doviterus [---]</i> <i>etoni [---]lti filius</i>	¿?	Sí	-	s. I d.C. (segunda mitad).	Puente Almuhey (Valderrueda, León)
45	HEp 12, 305.	<i>Aliomo / Victori / Numisi(i) / f(ilio) Vadi(niensi) /</i> <i>an(norum) XXX / h(ic) s(itus) (est)</i>	Canto rodado (cuarcita) Cabecera semicircular tosca	F	<i>Aliomus Victor</i> <i>Numisii filius</i>	-	Sí	-	Finales s. I – comienzo s s. II d.C.	La Uña (Acebedo, León)
46	IRPLe 256; ERPLe 393	<i>D(is) M(anibus) / [T]urenno / [B]oddegun / [B]oddi f(ilio)</i> <i>Vad(iniensi) an(norum) / XXX pos(u)it / [D]oiderus pa/tri</i> <i>suo pien/tissumo / s(itus) h(oc) s(epulchro)</i>	¿Canto rodado? Irregular (pizarra cuarzosa)	F	<i>Turenus</i> <i>Bedeggun</i> <i>Boddi filius</i>	<i>Doiderus</i>	Sí	Gen. plural	s. II d.C. (2ª mitad).	Argovejo (Crémenes, León).
47	IRPLe 261; ERPLe 363	<i>D(is) M(anibus) m(onumentum) / Pentovi(u)s /</i> <i>Petroniu/s ami(co) su(o) / Bodero M/a(terno) Bod(di)</i> <i>fi(llo) Va(diniensi) / an(norum) XX h(ic) / s(itus) e(st)</i> <i>d(edicavit)</i> <i>En una figura de caballo: varias letras (¿?)</i>	Canto rodado (caliza)	F	<i>Boderus</i> <i>Maternus Boddi</i> <i>filius</i>	<i>Pentovius</i> <i>Petronius</i>	Sí	<i>Amicitia</i>	s. II d.C. (2ª mitad).	Carande (Riaño, León)
48	IRPLe 264; ERPLe 366; HEp 1, 388	<i>M(onumentum) / Bovec[io &lt;F=&gt;usc]o Ques[adioc&lt;i</i> <i>f(ilio)=H&gt;] / Vad[iniesis an(norum) / [- - -] / [P]arnua</i> <i>m(ater) p(osuit)</i>	Canto rodado (arenisca)	F	<i>Bovecius</i> <i>Fuscus</i> <i>Quesadioci filius</i>	<i>Parnua</i>	Sí	-	s. II d.C.	Crémenes (León)
49	IRPLe 266; ERPLe 398	<i>M(onumentum) / [- - -]o Flacco / Flacci f(ilio)</i> <i>Vad(iniensi) an(norum) / XXX Aurelius patri /</i> <i>f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(itus) e(st)</i>	Desconoci do	F	<i>[---]us Flaccus</i> <i>Flacci filius</i>	<i>Aurelius</i>	Sí	-	s. II d.C.	Crémenes (León)
50	IRPLe 267; ERPLe 378	<i>Iunius Aravu[m] / Abili f(ilius) Vad(iniensis) an(norum)</i> <i>XX[.] / h(ic) s(itus) e(st) / nepotes sui posierun[t!]</i>	Irregular (cuarcita)	F	<i>Iunius Aravum</i> <i>Abili filius</i>	-	Sí	Gen. plural	s. I d.C.	Crémenes (León)
51	IRPLe 269; ERPLe 387	<i>Pentio [Fe]/sto Do[id]eri f(ilio) V[ad(iniensis)] / an(norum)</i> <i>XX / h(ic) s(itus) e(st) / amici / ob m(erita)</i>	Estela con flor hexapétala en cabecera (arenisca rojiza)	F	<i>Pentius Festus</i> <i>Doideri filius</i>	-	Sí	<i>Amicitia</i>	Finales s. I – comienzo s s. II d.C.	Crémenes (León)
52	IRPLe 270;	<i>M(onumentum) / Segi[- - -] / Mar[- - -] / Vad(iniensis)</i>	Irregular,	F	<i>Segi[---] Mar[---]</i>	¿?	Sí	-	s. II d.C.	Crémenes (León)



	ERPLe 389	<i>an(norum) [- - -] / h(ic) s(itus) e(st) D[oci]us p(atri) pos(uit)</i>	fragmentari a (cuarcita)							
53	HEp 1, 396; IRPLe 273; ERPLe 357.	<i>M(onumentum) / Andoto Ubala/cino Vadonis f(ilio) / Vad(iniensi) an(norum) XXV Clu/damus amico / pos{s}(u)it / h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Andotus Ubalacinus Vadonis filius</i>	<i>Cludamus</i>	Sí	<i>Amicitia</i>	s. II d.C.	Liegos (Acebedo, León)
54	IRPLe 274; ERPLe 368.	<i>Munimentum / Caelionis / Amparami f(ili) / Vadinie(n)sis</i>	Canto rodado (cuarcita roja)	F	<i>Caelio Amparami filius</i>	-	Sí	-	s. I d.C. (2ª mitad)	Liegos (Acebedo, León)
55	IRPLe 275; ERPLe 370	<i>[D(is)] M(anibus) m(onumentum) p(ositum) / Ces(tius) Fla(vius?) pa(tri) p(osuit) / suo Ces(tio) Bod(do) / Vad(iniensi) an(norum) LXXXV / h(ic) s(itus) t(erra) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Cestius Boddus</i>	<i>Cestius Flavius</i>	Sí	-	s. III d.C.	Liegos (Acebedo, León)
56	IRPLe 277; ERPLe 353	<i>M(onumentum) / Ambato Param/onis f(ilio) Vad(iniensi) an(norum) / XXX Origenus / cognato suo / p(osuit) h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (¿pizarra?)	F	<i>Ambatus Paramonis filius</i>	<i>Origenus</i>	Sí	<i>Cognatus</i> (pariente)	s. II d.C.	Lois (Crémenes, León)
57	HEp 7, 386; AE 1928; 170; IRPLe 278; ERPLe 390	<i>Munim(entum!) / Tedi Vicani / Vadiniensis / Doiteri f(ili) / an(n)orum / XXX</i>	Desconocid o	F	<i>Tedus Vicanus Doiteri filius</i>	-	Sí	-	s. I d.C. (2ª mitad)	Pedrosa del Rey (Riaño, León)
58	HEp 1, 400; AE 1976, 308; HAE 1817; IRPLe 283; ERPLe 395	<i>D(is) M(anibus) / Vadone Bi/racidegino / Anemidi f(ilio) Va(diniensis) / an(norum) XXX Lugua Ca/ddecun am/ico suo pos(u)it / h(ic) s(itus) e(st)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Vado Biracideginus Anemidi filius</i>	<i>Lugua Caddecun</i>	Sí	<i>Amicitia</i>  Gen. plural	s. II d.C. (2ª mitad)	“Las Congas”, Remolina (Crémenes, León)
59	IRPLe 284; ERPLe 381	<i>Meduge/no Valenti / Magilonis / f(ilio) an(norum) XL / - - - - -?</i>	Placa irregular, fragmentari a (arenisca)	F	<i>Medugenus Valens Magilonis filius</i>	¿?	¿?	-	s. I d.C. (finales)	Armada, Reyero (León)
60	IRPLe 288; ERPLe 358	<i>Mon(umentum) / L(ucio) Antonio / Aquili f(ilio) / Vad(iniensi) an(norum) / XX Lepid/us nep(oti) s(uo) p(osuit)</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Lucius Antonius Aquili filius</i>	<i>Lepidus</i>	Sí	-	s. II d.C.	Sabero (León).
61	HEp 12, 316; IRPLe 295; ERPLe 360	<i>D(is) Ma(nibus) / [A]renus / [Al]iomigu(m) / Manilio / [...]dolo / [...]atri suo / [...]A[-c.3-] III O/[- - -] ++</i>	Canto rodado (cuarcita)	F	<i>Manilius [...]dolus</i>	<i>Arenus Aliomigum</i>	¿?	Gen. plural	s. II d.C. (2ª mitad)	Vega del Monasterio, Cubillas de Rueda

										(León)
62	HEp 12, 318	[---]erus / [---]cian [---] / su(o) po(suit) M(onumentum) / Ab(ili) fil(i) / + an(norum) XI	¿Canto rodado?, fragmentario (¿?)	F	¿? Abili filius	[---]erus [---]cian [---]	¿?	-	Indeterminada	Horcadas (Riaño, León)
63	FE 109, 479 [2013].	M(onumentum) / Cado Cor(nelio) / R[.]bon(is/-i?) / Vad(inensi) An(norum) / XXV Alio/mus Am[i]/co suo / h(ic) s(itus) e(st)	Canto rodado (arenisca)	F	Cadus Cornelius Rebonis? filius	Aliomus	Sí	Amicitia	Finales s.I – s. II d.C. (1ª mitad)	Riaño (León)
64	Celis and Grau 2012	D(is) M(anibus) / Garbilo Mel(---?) Com[i?]/ f(ilio) Doideru[s] / Tam(aricum?) amic[o] / suo ann(or)um XXX / p(ientissimo) p(osuit) (monumentum)	Canto rodado (cuarcita)	F	Garbilus Mel(-?) Comi filius	Doiderus Tamaricum?	No	Gen. plural?	Finales s. I – comienzo s. II d.C.	“El Coto” o “Monte Alto”, ha. La llama de la Guzpeña, (Prado de la Guzpeña, León)
65	Martino, 2014	M(onumentum) / Tridio Quieto Be/dunigum Corai f(ilio) Va(diniensi) an(norum) L Origenus av(u)ncul[o] s(uo) p(osuit) h(ic) s(itus) e(st)	Canto rodado (cuarcita rojiza)	F	Tridius Quietus Bedunigum Corai filius	L. Origenus	Sí	Avunculado Gen. plural	s. II d.C.	La Velilla de Valdoré (Crémenes, León)
66	Martino, 2014	---- / [---] [.] + D [---] / [---] VALA + [----] / ann(or)um [---] / suo [---] / + +	Estela irregular, fragmentaria (caliza)	F	¿?	¿?	¿?	-	Indeterminada	Robledo de la Guzpeña (Prado de la Guzpeña, León)
67	ERAs 60f	D(is) m(anibus sacrum) / Elanus A/ravi filius / verna Vadi/nienses(!) anno/rum XXIV / Araus pio filio / ob merita / (sit tibi) t(erra) l(evis)	Canto rodado (no consta)	F	Elanus Aravi filius	Araus	Sí	Verna	s. III d.C.	Soto de Cangas (Cangas de Onís, Asturias)
68	ERAs 60g	M(onumentum) / D(is) M(anibus / pos(uit) mu(numentum!) / Reburinia / mar(ito) suo / car(o) Flao a/n(norum) LV co(n)s(ulatu) CCC/LXXVII s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)	Estela irregular (no consta)	F	Flaus	Reburinia	No	-	s. III d.C. (datación consular)	Collado de Zardón (Cangas de Onís, Asturias)
69	ERPLe 355	Amparamo Brigetino	Indeterminada	F	Amparamus Brigetinus	¿?	¿?	-	Indeterminada	Crémenes (León)
70	CIL II 6338k	M(onumentum) p(osuit) / Cadus Pedac(i)anus Pento/vio Aulgigun / amico suo / Falmici filio / an(norum) XXX	Canto rodado (cuarcita)	F	Pentovius Falmici f(ilius) Aulgigun	Cadus Pedacianus	No	-	s. II d.C.	Velilla del Río Carrión (Palencia)
71	ERPLe 361; AE 1976,	[ - - - ] / [ - - ] / [a]mico su[o] / Balaeso Fr[o]ntoni an(norum) [---] / H(oc) L(oco) [E(st)]	Canto rodado	F	[ - - - ]		No	Amicitia	Indeterminada	Aleje (Los Crémenes, León)

	305		("piedra grisácea")							
72	IRPLE 265; ERPLe 399	[ - - - ] / [ - - - ]s Doi/[der]us f(i)lius) / [C]anus Can/ives f(i)lius) / Caldaecus (filius) / Anna Mad/ucena f(il)ia	Irregular paralelepípe da (caliza)	F?	Doiderus Canus Canives Caldaecus Anna Maducena	[ - - - ]	No	-	Indetermin ada	Crémenes (León)
73	Sánchez- Lafuente and Ordóñez, 2017	M(onumentum) / [A]mpa/[r]ami p(ientissimo?) / Cica/ni [f(i)lius)] / [A(nnorum)] LX	Fragmentari a (arenisca)	F	Amparamus Cicani filius	-	No	-	Indetermin ada	Robledo de la Guzpeña (Prado de la Guzpeña, León)

Fig. 36. Tabla sintética del conjunto epigráfico vadiniense.

## 11. Los fenómenos de resistencia al tributo.

### 11.1 El concepto de “revuelta nativa”: romanización y pacificación.

Un elemento recogido tangencialmente en las fuentes del Noroeste, y conocido por otros casos imperiales, es el fenómeno de las llamadas “revueltas indígenas”, que han sido objeto de interés como movimientos contrarios a la integración en el Imperio. Sin embargo, es posible poner en cuestión esta visión centrada en el “revival” de tradiciones indígenas frente al dominador, y proponer una interpretación “desde dentro del Imperio” y que tiene en cuenta la situación conflictiva propia de la existencia de relaciones de explotación y que pudo verse agravada en los momentos de mayor presión fiscal.

A pesar de los avances de los últimos años, la *Romanización* como concepto civilizatorio ha mantenido un peso específico en la interpretación de los conflictos locales, muchas veces de un modo subliminal. En este sentido es representativa la influencia de autores como Dyson (1971) que, en pleno proceso de emancipación post-colonial respecto a los antiguos imperios europeos, reinterpretaron episodios de sublevación de época romana desde la perspectiva de las “revueltas nativas”, en donde existe todavía una esencia prerromana que permanece latente en el orden provincial romano: “an effort made by a native people whose cultural and political identity is under assault by a superior culture to assert its independence and self-identity. Such movements are very common in contact situations when the *native* group realizes the potential finality of their subjugation. This often leads to a sudden, massive effort to expel the invader” (Dyson, 1971: 246). Desde esta perspectiva la confrontación socio-política al imperialismo romano dibuja sin embargo una oposición entre dos categorías sociales ontológicas que quedan adscritas a un orden étnico-cultural diferenciado, de la romanidad o del indigenismo, para enfrentarse. Ello plantea problemas de diversa naturaleza, como el método para observar esa latencia del horizonte indígena, muchas veces presupuesto sobre la base de una romanización incompleta, cuando no defectuosa. También, el carácter aséptico y uniformizante del nativo, que subsume los modos de estructuración social internos o el papel de las clases rectoras, para proyectar un discurso de unidad que recuerda a los viejos (y nuevos) nacionalismos.

El Noroeste romano ha sido una zona especialmente sensible a este tipo de tratamiento historiográfico. Sus paisajes rurales se han confundido con la marginalidad y la escasa implantación de Roma en la región, sólo interesada en la explotación de sus ricos recursos auríferos. En esta zona “ocupada” se presume entonces un conflicto constante, en donde la fricción entre invasor e invadido anula los rasgos de la sociedad provincial romana y convierte sus tensiones inherentes en algo ajeno e, incluso, “exterior” a ella. Una primera plasmación de este tipo de ideas en el Noroeste puede constatarse, a modo de ejemplo, en la lectura habitual del Edicto de El Bierzo del 15 a.C. (AE 2000, 760). Como ya se ha indicado en varios apartados precedentes, se trata

de un documento de primera importancia que revela alguna de las claves fundamentales sobre las intervención de Roma en la región conquistada pocos años antes (19 a.C.), en donde un nuevo marco de ordenación territorial y administrativo, acompañado de la imposición de tributos y exenciones, se ha superpuesto en poco tiempo a una realidad preexistente que hasta entonces carecía de cualquier tipo de experiencia estatal que fuera más allá del castro como unidad social y política. Para lo que nos ocupa ahora, es interesante comprobar cómo las motivaciones de la intervención de Roma se han leído desde una perspectiva bélica en donde se asume un contexto marcado por la inestabilidad y la resistencia. Los premios y castigos del edicto de El Bierzo giran en torno a los actos de los *castellani Paemeiobrigenses* que *permanisse in officio*, en contraste con otros, no mencionados, *desciscentibus ceteris* (1.4-5). Pero como ha destacado recientemente Wulff en un extenso trabajo (Wulff, 2012), la cercana experiencia de las guerras cántabro-astures no implica interpretar sendas posiciones en un sentido de conflicto permanente, en el que resulta inverosímil entender *permanisse officio* en clave de “lealtad” a Roma mientras los demás hacían defección y se rebelaban: “Sintetizando la cuestión, son inconsistentes los siguientes puntos que se derivan de la *communis opinio*: 1) Las permanentes rebeliones no constadas en las fuentes. 2) Su carácter sencillamente imposible con las legiones romanas poco menos que al lado. 3) Que una pequeña comunidad siguiese, ella sola, fiel a Roma en un contexto donde todas las otras comunidades son hostiles. 4) Lo ridículo del premio ante tanta heroicidad. 5) La inexistencia de castigos a los rebelados. 6) Y la curiosa circunstancia de que Roma pida permiso a unos rebeldes para la única medida en las que se les afecta” (Wulff, 2012: 508-09). Por el contrario, como defiende acertadamente el autor con múltiples ejemplos textuales, la clave está en el cumplimiento de las nuevas imposiciones romanas, en donde la dicotomía entre *descindere ab officio* o *permanere in officio* cobra el sentido de satisfacer (o no) las obligaciones comunitarias con Roma, fundamentalmente fiscales, y marca la diferencia en torno al premio o al castigo (Wulff, 2012: 510-15). La principal ventaja de este tipo de lecturas es que el conflicto no se “externaliza”, sino que se asume como parte consustancial del proceso dialéctico en que se construye, desde sus cimientos, la nueva sociedad romana en el Noroeste. Evidentemente, con la huella de la conquista aun reciente, el proceso de integración en las nuevas estructuras de dominación romana hubo de ser un tránsito abrupto y no exento de problemas de inadaptación a las nuevas exigencias imperialistas. Sin embargo, esto ocurre sin necesidad de construir un bloque homogéneo del nativo contra el Estado pues, debemos insistir, la sociedad prerromana del Noroeste nunca dispuso de una organización o identidad colectivas a la que recurrir más allá del castro como unidad de funcionamiento básico (*vid.* Currás, Sastre y Orejas, 2016).

Si he recurrido de nuevo al edicto es porque resulta sintomático de una tendencia historiográfica recurrente muy bien definida en su momento por Corbier: “Ceux-ci ont en effet eu tendance [des historiens modernes] à interpréter tous les phénomènes de *résistance* ou de *refus* de l’impôt comme les signes d’une remise en cause du pouvoir de Rome, et de la revendication, face à celui-ci, d’une identité ethnique ou religieuse, ou, au sens propre, d’une indépendance ”(Corbier, 1988; *vid.* Clavel-Lévêque, 1988: 204). Estos rasgos están perfectamente descritos en el tratamiento no ya sólo del edicto, como

ya se ha visto, para la etapa inmediata a las guerras cántabras. También se reproducen sospechosamente ochenta años más tarde, cuando la conquista constituía ya un recuerdo lejano.

Sabemos por una inscripción honoraria hallada en la localidad italiana de Rímini en el siglo XV, actualmente perdida, de la existencia de un conflicto en el que participó *M. Vettius Valens* en calidad de primopilo de la *Legio VI* establecida en León, dentro de su dilatada carrera militar. En ella se mencionan unas *gestae contra astures*, por las que de hecho recibió insignias militares: ... *donis donato ob res prosper(e) / gest(as) contra astures torq(uibus) phaler(is) arm(illis)*... (CIL XI, 395). En principio, no cabe dudar de que la inscripción aluda a una intervención de carácter militar, pero desconocemos por completo su naturaleza, su entidad o sus motivaciones. Sólo cabe pensar, a partir del silencio de otras fuentes, en hechos puntuales en cierto ámbito astur, seguramente sin demasiada transcendencia. De hecho no debe asumirse una gran contienda por la aparición del término *gesta*, que se emplea también para labores administrativas como ejemplifica la estatua honorífica de Tarraco a *C. Cornelius Valens* por la gesta que representó su *legatio censualis* (CIL II, 4208; *vid.* Sayas, 1989a: 148-52). A pesar de la vaguedad de esta escueta referencia a las *gestae contra astures* no se ha dudado, sin embargo, en conectarlas con labores tardías de pacificación o levantamientos a la manera de las revueltas nativas. Esta tendencia nace desde un comienzo con Hübner, quien las integra entre “las repetidas tentativas de aquella nación belicosa para recobrar su libertad” (1888: 131) y se ha desplegado en la bibliografía posterior con profusión a la vez que ha adquirido diversos matices (*vid.* Fernández Palacios, 2009: 86-87). De una manera más aséptica, autores como González Echegaray (1960: 61) o Blázquez (2000: 101-102) la reconocen como una rebelión del conjunto del pueblo astur. Sin embargo este último ya había apuntado un signo de inestabilidad inherente: “siempre hubo inseguridad en la región astur (...) Roma en Asturias no estuvo interesada nada más que en extraer minerales de oro y estaño, principalmente, sacar tropas auxiliares para la defensa de las fronteras y algún que otro producto, como caballos para las carreras del circo” (1983: 154-55). García y Bellido, para quien el *dominado* se ve ante el imperativo ineludible de la “convivencia con el romano y la adopción, lo antes y mejor posible, de sus formas de vida” (1967: 9) reconoce en el conflicto un síntoma de su carencia y la ineficacia de la conquista, en donde los astures se nos presentan “no del todo dominados, aunque hubieran sido vencidos” (1967: 21 y n. 40). Más expresivo es si cabe el tratamiento que tiende a considerar el conflicto de Nerón como una tentativa tardía que conecta con las guerras cántabras en la línea de García y Bellido. Así aparece, por ejemplo en Tranoy y Santos al relacionar tácitamente ambas contiendas (Tranoy 1981: 143; Santos, 2004-05: 238) o en Martínez Pereda al situar la intervención de *Veturius Valens* entre las consecuencias posteriores de la misma en clave continuista respecto al carácter indómito demostrado durante su conquista (1989: 50-52). Blázquez Cerrato la considera un síntoma de que “las guerras contra cántabros y astures no significó la paz efectiva” (1998: 202) De manera más laxa, Martín y Gómez-Pantoja a propósito de las incógnitas que subyacen a un Edicto de El Bierzo, leído también en clave de rebelión o lealtad, se destaca que “incluso después de la formalización de la paz debió de continuar la inestabilidad en la zona, como nos recuerda la condecoración

recibida en tiempos de Claudio o Nerón, por un primopilo de la legión *VI Victrix*” (2001: 59). Más recientemente, Pitillas Salañer, la califica como “reducto de esa vieja resistencia” (2006: 24-25) y recupera el componente étnico de la dicotomía romano-indígena para considerar la intervención como “una acción de limpieza en suelo astur” (2007: 119). Fernández Palacios, el único en tratar de manera monográfica las *gestae contra astures*, y con un importante esfuerzo de contextualización del conflicto con el que, además, estamos de acuerdo en sus líneas generales, concluye sin embargo que: “en las problemáticas circunstancias en que se han delineado no puede extrañar que una zona que había sido pasada por las armas e incompletamente aculturada/integrada intentase, dejando aparte otros motivos e intereses en juego, una revuelta con el poder oficial romano” (2009: 94).

El argumento de la romanización cultural y el discurso de las “revueltas nativas” de Dyson deben ser soslayados, pues sólo se basan en la reproducción de las narrativas sobre la barbarie del irredento y, como tales, aparecen en el proceso de conquista pero no después. Como Woolf (2012: 28-33) ha planteado recientemente, los conflictos de la sociedad provincial romana del siglo I d.C. parten de una determinada noción romana del “orden” que pasa por la comunión y equilibrio de intereses entre élites locales y estructuras centrales, y es la ruptura de esta armonía lo que toma la consideración de “desorden” independientemente del nivel de integración o aculturación que se le presuponga a la entidad en conflicto. Tampoco debemos olvidar, como ha señalado Lavan, que nunca debe presuponerse un conflicto del grueso social cuando el silencio sobre la voz del rebelado es absoluta y las narrativas disponibles sólo buscan exaltar la imposición del orden sin aludir a las cualidades de ese desorden (Lavan, 2016). Este marco conceptual, totalmente desligado del proceso de conquista y de un esencialismo indigenista, es el que también debe prevalecer en la comprensión de la *gestae contra astures* (Morillo y García Marcos, 2000: 602; Morillo, 2002: 87; Costa y Carlsson-Brandt, 2015: 24).

## **11.2 El episodio de revuelta antifiscal astur en el contexto de las políticas públicas de Nerón.**

El Noroeste no fue sólo un ámbito de explotación imperial ocupado militarmente por el ejército, sino un espacio integrado en el sistema imperial y en un paisaje ordenado desde las coordenadas ideológicas romanas. Gracias al mejor conocimiento de la arqueología militar, se ha hecho patente que la disposición y distribución de las tropas no iba dirigida a aplacar el carácter levantisco de las comunidades, lo que sin duda habría dibujado una distribución muy diferente (*vid.* Morillo, 2002), sino a labores de apoyo en aspectos logísticos y administrativos concretos (Le Roux, 1982: 119-126 y 270-74; Sánchez-Palencia *et al.*, 2006: 277-82; Sastre, Beltrán y Sánchez-Palencia, 2010; Palao, 2014: 57-71). De ser cierta la tendencia a la inestabilidad, tampoco se explicaría la marcha el 63 d.C. de la *legio X* establecida en *Petavonium*, o que a partir del 70 sólo se mantuviera la recién creada *legio VII* en León. De hecho el *topos* sobre el carácter indómito de los astures durante el Alto Imperio sólo esta presente en la

historiografía contemporánea, no vuelve a repetirse en las fuentes literarias que mencionan el periodo post-conquista. Las narrativas disponibles revelan que, desde la perspectiva del poder romano, existe una equivalencia entre la integración en las estructuras imperiales y la pérdida de la naturaleza contestaria anterior de forma automática, en donde no caben valoraciones de índole cultural o que atañen a la estructuración del poblamiento. Floro, por ejemplo, que no deja de recordar su naturaleza hostil y proclive a la desobediencia durante la contienda (2, 34=4, 12: *inmunes imperii agitabant* ó 2, 34 =4, 12, 50: *postquam extrema barbari vident*), entiende la entrada en la órbita romana como sinónimo de pacificación sin entrar a valorar el grado de implantación o emulación a la cultura itálica: *Hic finis Augusto bellicorum certaminum fuit, idem rebellandi finis Hispaniae. Certa mox fides et aeterna pax, cum ipsorum ingenio in pacis artes promptiore* (2, 34=4, 12, 59). También Estrabón refleja esa equivalencia entre integración y pacificación que se deja sentir en Floro, en cuya descripción de la barbarie congénita de los astures antes de ser conquistados, le sigue la etapa de Augusto y Tiberio en que sus comunidades adquieren unos rasgos cívicos, πολιτικούς y su barbarie es aplacada por la paz (*vid.* Str. 3, 3, 8; Pereira, 1988: 246-249). Aunque evidentemente estas narrativas se vean sesgadas por la carga ideológica y propagandística de la *pax romana*, numerosos testimonios epigráficos constatan el pronto abrazo al nuevo orden y la adaptación a la nueva estructura de dominación, especialmente por parte de las élites. Así lo atestiguan diversos ejemplos epigráficos que podrían recordarse y a los que ya hemos prestado atención, como la *tabula Lougeiorum* del 1 d.C. (AE 1987, 162), la abundante muestra epigráfica de *castellani* con mención de origo a lo largo del siglo I y comienzos del II d.C., o en las importantes concentraciones de *origines intra civitatem* en ámbitos como el *vadiniense*.

Evidentemente la integración en la red de *civitates* no equivale en ningún caso a la inexistencia de conflictos en su seno como parte de la sociedad provincial, sino a casuísticas locales que también se ven inmersas en el devenir histórico global. Desde este punto de vista, debemos anticipar que las *gestae contra astures* pueden cobrar un significado más ajustado a la realidad si se revierte su consideración habitual de efecto tardío de la pacificación, para concebirlas en el eje de las “revueltas antifiscales” que proliferaron en el siglo I d.C. en diversos lugares del Imperio.

Debe recordarse que el conjunto de comunidades del *conventus Asturum* asumían unos elevados costes de sumisión de partida, lo que hacía un aumento de la presión fiscal un elemento desestabilizador de primer orden. En este sentido, pudo ser fundamental el papel protagonista que pudieron desempeñar las aristocracias locales en el conflicto, cuya labor en la gestión del tributo y enlace con la autoridad romana, las convertía en las primeras interesadas en una política impositiva asumible con la que ampliar sus beneficios como clase dominante respecto a los segmentos sociales subalternos de los que extraía el excedente fiscal. La ampliación de los ingresos del *fiscus* añadía un elemento de fricción entre aparato imperial y élites colaboracionistas que podía expresarse en conflictos de distinta intensidad, desde impagos parciales, retrasos en las contribuciones hasta, finalmente, un levantamiento que se saldaba con la intervención del ejército (Corbier, 1988). Ello explica por qué resulta extrañamente



común, como ha observado Woolf (2012: 29), que en las revueltas antifiscales del siglo I d.C. predominan actores pertenecientes a élites locales en apariencia plenamente integradas en las redes de poder romano. No son reyertas populares de los contribuyentes, a quienes poco importaba el destino de su excedente cuando ni siquiera existía una filosofía evergética en las clases rectoras del Noroeste, sino conflictos con un claro componente aristocrático que, ulteriormente, podría desplegarse hacia las capas sociales inferiores mediante el sistema de dependencias. Si nos remitimos a las condiciones de sometimiento de los astures pueden plantearse unos altos costes de sumisión que lo convertían en un territorio especialmente sensible a eventuales aumentos de la presión fiscal.

Por un lado, las comunidades astures de época Julio-Claudia carecieron de estatuto privilegiado (*vid.* Orejas y Sastre, 1999; Orejas, 2002). En época de Nerón, sólo *Asturica Augusta*, la *urbs magnifica* de Plinio (*NH.*, 3, 28), puede considerarse propiamente hablando una ciudad en toda la región astur, si bien tampoco hay indicativos de haber recibido ninguna promoción o *beneficium* (Orejas y Morillo, 2013). Lógicamente desconocemos las cantidades específicas del tributo, pero a veces pudieron ser excesivas como aparece en la cercana *civitas* de los *Interamici*, en donde más tarde se vislumbra una acumulación de impagos que terminan por requerir la intervención de un privado para sufragar la deuda comunitaria contraída con el fisco (*HEp* 3, 277; Le Roux, 1989). La intensificación productiva documentada en los análisis de poblamiento, la existencia de levas que se deduce de la abundancia de tropas auxiliares del Noroeste, y el aporte de mano de obra para las minas son indicadores de imposiciones tributarias sin duda gravosas (*vid.* cap. 5.2.1.).

Si volvemos la mirada a nuestra inscripción, es preciso realizar una tentativa sobre la cronología aproximada del conflicto, que tiende a situarse en un horizonte excesivamente amplio en Claudio y Nerón, para poder dotarla de un contexto histórico más preciso. El elemento más seguro nos lo proporciona la fecha consular del 66 d.C., año en que se ejecuta esta inscripción honorífica, pero el análisis de su carrera militar y política puede permitirnos acotar más las posibilidades gracias a que la sucesión de cargos se expone de un modo jerárquico y cronológico, desde sus comienzos como soldado raso hasta alcanzar la procuratela imperial de *Lusitania* (*vid.* Cowan, 2014: 28):

*M(arco) Vettio M(arci) f(ilio) Ani(ensi) / Valenti / mil(iti) coh(ortis) VIII pr(aetoriae) beneficiario praef(ecti) pr(aetorio) / donis donato bello Britan(nico) / torquibus armillis phaleris / evoc(ato) Aug(usti) corona aurea donat(o) / [(centurioni) coh(ortis) VI vig(illum) / [(centurioni) stat(or)um] [(centurioni) coh(ortis) XVI urb(anae) [(centurioni) coh(ortis) / II pr(aetoriae) exercitatori equit(um) speculatorum princip(i) / praetori(i) leg(ionis) XIII Gem(inae) ex trec(enario) [p(rimo) p(ilo)] leg(ionis) VI / Victr(icis) donis donato ob res prosper(e) / gest(as) contra Astures torq(uibus) phaler(is) arm(illis) / trib(uno) coh(ortis) V vig(illum) trib(uno) coh(ortis) XII urb(anae) trib(uno) coh(ortis) / III pr(aetoriae) [p(rimo) p(ilo) II] leg(ionis) XIII Gem(inae) Mart(iae) Vic(tricis) / proc(uratori) Imp(eratoris) [[[Neronis]]] Caes(aris) Aug(usti) prov(inciae) Lusitan(iae) / patron(o) coloniae speculator(es) X h(onoris) c(ausa) / C(aio) Luccio Telesino C(aio) Suetonio Paulino co(n)s(ulibus) (CIL XI, 395).*

El primer elemento *post quem* nos lo proporciona su actividad en la *cohors VIII Praetoria*, a la que vuelve como *evocatus* tras haber cumplido su *honesta missio*, y que habría participado en la campaña de Claudio sobre *Britannia*. Es en este escenario donde nuestro protagonista habría recibido sus primeras insignias militares, que deben relacionarse con gran probabilidad con la victoria del 43 d.C. como aparece en la inscripción. Etapas posteriores de la conquista resultan más improbables, al carecer de datos que nos permitan corroborar el mantenimiento de esta *cohors* en sucesivas campañas, a la vez que reducen el margen de tiempo para los sucesivos cargos militares que nuestro protagonista desempeña con posterioridad. En segundo lugar, menciona mucho más tarde su actividad como *primus pilus* de la legión *XIII [decimocuarta] Gemina Martia Victrix* a la que accede tras tres tribunados de cohorte. Sin embargo sabemos que estos epítetos de la legión los recibe tras la victoria contra Boudica en Britania el año 61 d.C. De modo que cuando accede a este rango tiene que ser ya un momento posterior, entre el 61 y el 66 d.C. en un intervalo en el que accede también a la procuratura imperial en *Lusitania*, que podría mantener durante más de un año. Aunque con más dudas, debe tenerse en cuenta también que el motivo de esta inscripción honorífica es la celebración y agradecimiento de sus diez años como *Patronus coloniae speculatores* para el año 66 d.C. Ello invita a pensar que la conexión con este cuerpo de los *speculatores* de la guardia pretoriana pueda proceder de su labor de instrucción como *exercitator equitum speculatorum*, que habría ejercido entonces con anterioridad al 56 d.C. pues en ese momento carece de la entidad suficiente para erigirse en *patronus coloniae*. Es decir, nos permite apuntar la posibilidad de un nuevo término *post quem* a la revuelta. Como parece impensable que su patronato fuera anterior a adquirir un alto cargo en el *ordo* ecuestre, posiblemente fuera a partir de su actividad como *princeps Praetorii*, cuando pueda hablarse del inicio del patronato colonial. Es decir, de este modo, y a la luz de las indicaciones anteriores, la revuelta astur puede insertarse con mayor probabilidad en un momento indeterminado del periodo que abarca entre el 57 d.C. y a lo sumo el 63/64 d.C. ante el desconocimiento sobre el tiempo que ejerció cada tribunado de cohorte.

Este arco cronológico permite asociar las *gestae contra astures* con una tentativa antifiscal que se produce en una etapa del gobierno de Nerón en donde se están produciendo importantes reformas económicas, fiscales y monetarias que hubieron de repercutir en ámbito astur con especial incidencia, tanto por las duras condiciones en que se produce su integración administrativa como por la intensificación de las explotaciones mineras auríferas. Varios indicios nos orientan hacia esa misma respuesta.

Precisamente el año 58 a.C. Nerón realiza una decisión política de cierta importancia en terreno fiscal según nos informan los *Annales* de Tácito (Tac. *Ann.* 13, 50). Animado por las quejas contra los *publicani* por sus abusos, procede a una reforma encaminada a aminorar ciertas cargas. Sin embargo en su resolución, las figuras objeto de estas reducciones del gravamen fueron exclusivamente las de tributación indirecta, que eran las que todavía estaban gestionadas por este cuerpo. Es decir, aquellas que gravan la actividad económica pero no el bien predial, lo que suponía un especial privilegio dirigido a los comerciantes ultramarinos y, sobre todo, a la ciudadanía

romana de Italia, pues eran estos tipos impositivos los únicos a los que estaban sometidos por el carácter exento del suelo itálico (*vid.* Brunt, 1990). Es importante señalar que estas aminoraciones no supusieron una disminución del tesoro público Romano, sino el agravamiento de la tributación directa en la búsqueda de un equilibrio financiero y ampliando la desigualdad entre Italia y las provincias. Según el relato de Tácito, no se disminuyeron los *portoria*, ni el *tributum* sobre los provinciales, pues ello cuestionaba la supervivencia de la propia república. En ámbito provincial, se propone simplemente un mayor control sobre los *publicani* y la reducción al impuesto sobre el transporte de trigo.

Una prueba evidente del contexto vertebrado por el aumento de la presión fiscal son los episodios de resistencia al tributo a lo largo de esta década, seguramente semejantes al que se produce en ámbito astur. Autores como Bowersock (1987) han tendido a diversificar conceptualmente los episodios de revuelta en movimientos contestatarios de naturaleza “religiosa”, “política”, “identitaria”, etc. Sin embargo, es común encontrar en ellos unas motivaciones económicas o fiscales que después se despliegan en otros frentes y adquieren diversas connotaciones. El más representativo por su cercanía a la reforma fiscal del 58 es el conocido episodio de revuelta de las comunidades britanas de *Iceni* y *Trinovantes* del 60-61, en donde las narraciones de Tácito (*Ann.*, 14, 29-39; *Agr.*, 13, 1-16,4) y Dion Casio (62, 1-12) recorren unas duras condiciones de sometimiento que estallan con las nuevas confiscaciones y exigencias tributarias de Nerón, a veces confundidas con tentativas de independencia (*vid.* Gambash, 2012). Los préstamos privados a un alto interés, como el contrajo Séneca con algunas de estas comunidades (D. Cass., 62, 2, 1), muestran de manera fehaciente el endeudamiento colectivo originado por el incremento de las imposiciones fiscales. La revuelta judía del 66 d.C., que surge a partir de la confiscación del procurador Gesio Floro de 17 talentos de oro del tesoro custodiado en el templo de Salomón para satisfacer impagos pendientes (Joseph. *BJ.*, 2, 293-94), o incluso el levantamiento de *Vindex* en ámbito galo, cuyo trasfondo denota resistencias a los impuestos de Nerón para granjearse apoyos de las élites provinciales (D. Cass., 62, 2, 1), son también fenómenos insertos en una misma coyuntura marcada por la presión impositiva.

De hecho, Tácito es muy explícito al referir la situación del erario público durante el gobierno de Nerón y su consiguiente sed de recursos sobre las provincias. Una política que dejará su impronta en la caricaturización del emperador con la *avaritia*, el dispendio de los recursos públicos y su viraje hacia el despotismo. Un eco de estas dificultades económicas en parte sufragadas por la presión sobre las provincias la encontramos en la provincia de *Africa*. Se trata del relato paródico sobre el afán de Nerón por encontrar el tesoro escondido por Dido en Cartago, cuyo ahínco en la empresa generaba todo tipo de burlas y para lo cual no cesó en empeñar tanto a miembros del ejército como a campesinos empleados en *operae* para desenterrarlo sin éxito (Tac. *Ann.*, 16, 1-3). La importante escala del gasto público a lo largo de toda la década de los 60 es prácticamente un lugar común en las narrativas literarias que inmortalizaron su reinado (*eg.* Tac. *Ann.* 15, 52, 1-2; *Ann.*, 15, 43, 2; Plin. *NH.*, 129; Suet. *Ner.* 30-32; D. Cass. 63, 2, 1-2; 63, 6, 5). La caricatura de Nerón sobre sus dispendios no dejan de ser distorsiones de una base real, marcada por necesidades

financieras con el fin de sufragar un gran volumen de gasto público con el que fortalecer su posición como patrono universal y jefe de los ejércitos (De la Hoz, 2009; 2010). En este sentido, el fin de la guerra con *Armenia* el 63 d.C., a la que se habrían dedicado importantes recursos con anterioridad, permitirá madurar su política de fortalecimiento del tesoro imperial a través de la vía fiscal, iniciada con la reforma del 58d.C., a la que ahora se incorporan cambios profundos en la política monetaria.

El análisis de la circulación monetaria y de las medidas imperiales respecto del numerario es de mucho interés para estas cuestiones. El tema, en relación sobre todo con la minería a partir de época Flavia, ha sido revisado y actualizado recientemente por Zubiaurre (2017). En este caso, me centraré en la etapa de gobierno de Nerón, por cuando puede esclarecer el carácter fiscal de la revuelta. Como ha destacado con sólidos argumentos J. de la Hoz (2009), la moneda alto-imperial es uno de los principales instrumentos a disposición del *princeps* para encaminar reformas de carácter fiscal y ampliar los recursos disponibles. Según este autor, el monopolio del estado romano en el proceso de acuñación de metales preciosos dota al control sobre el oro y la plata de un gran valor estratégico al permitirle intervenir en el déficit fiscal. Esto se debe, siempre siguiendo a este autor, a que las emisiones no son una respuesta en términos de demanda de moneda, para la cual era difícil conocer tales necesidades, sino a un indicativo del gasto público con el que se busca combatir los problemas públicos de financiación. La relación entre emisiones y fiscalidad es tanto más interesante cuando se produce, con Nerón, una de las principales reformas monetarias del Alto Imperio, en donde la devaluación del denario, que nunca podrá revertirse, convertirá al oro en el metal de referencia a partir del año 60 d.C. y da comienzo una serie de emisiones atípicas, tanto porque en ellas prevalece el oro respecto a la plata, como por el abundante numerario en oro que se pondrá en circulación vinculado al mencionado gasto público de Nerón.

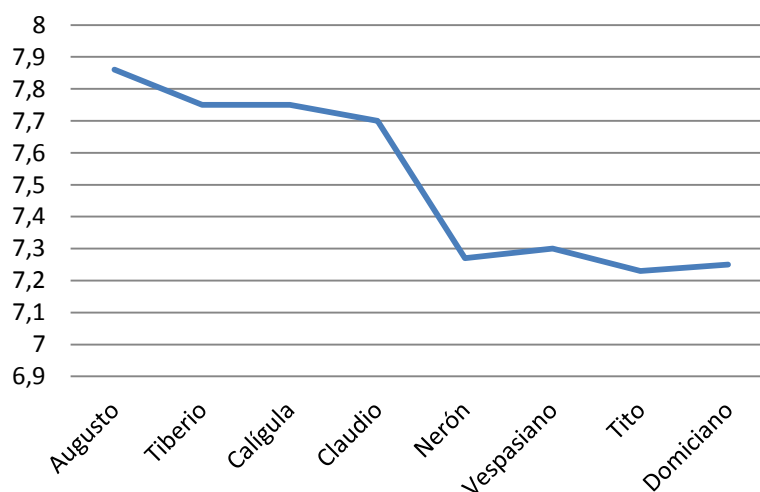


Fig. 37. Evolución del peso del áureo en el siglo I d.C. (A partir de Duncan-Jones, 1996).

La importancia creciente de las emisiones en oro se ha puesto en estrecha relación con la precaria situación de la moneda de plata en un contexto de bimetalismo monetario oficial toda vez se había paralizado la acuñación en bronce del 54-64/64 en las cecas de Roma y *Lugdunum*. La devaluación del denario, en la que no entraremos en profundidad (*vid.* Butcher y Ponting, 2005) viene motivado por la dificultad en el acopio de este metal, tanto por las circunstancias de escasez en explotaciones como *Vipasca*, como por un régimen de gestión indirecto que comportaba menos beneficios para el fisco. Las minas de oro de Occidente contaban, por el contrario, buena salud y un sistema de gestión directo a cargo de *procuratores* que permitía ajustar con mayor eficacia las necesidades del fisco imperial dirigidas al gasto público con eventuales aumentos en los ritmos de explotación. Es decir, controlar el oro significaba disponer de una poderosa herramienta de autofinanciación (Lo Cascio, 2008). Según los cálculos de J. de la Hoz, Nerón habría necesitado doce veces la masa de plata equivalente para poder acuñar ese mismo valor en oro y, de hecho, el volumen absoluto de las acuñaciones en oro fue, como mínimo, el doble respecto a las de plata pese a tener un valor muy superior (De la Hoz, 2010: 104). En un marco general, las abundantes emisiones de moneda de oro a partir del 60/61 sólo fueron posibles gracias a la ampliación de las reservas mediante una intensificación de las explotaciones auríferas al que, de manera complementaria, pudo sumarse el botín de la guerra de *Armenia* o algunas confiscaciones como las anteriormente mencionadas por Tácito o Flavio Josefo. La reforma monetaria del 64 d.C., por la que se redujo el peso del áureo entre el 2,5-4,5% no explica por sí sola el gran volumen de emisiones de oro, pero sí confirma una política imperial dirigida a expandir instrumentalmente la capacidad de financiación del Estado a través de este metal de manera complementaria al incremento de la presión tributaria. Gracias al nuevo patrón, cada libra de oro procedente de las explotaciones podía estirarse hasta los 44/45 áureos, cuando previamente sólo podían obtenerse 40. A ello se suman los beneficios productos de la reacuñación lucrativa mediante la refundación de los áureos antiguos conforme al nuevo patrón (De la Hoz, 2010: 104-05).

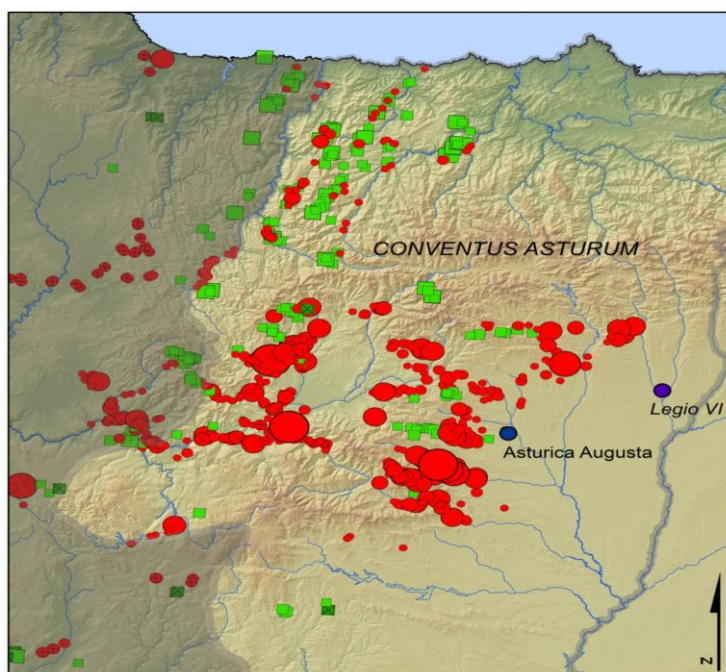


Fig. 38. Explotaciones mineras en primario (verde) y en secundario (rojo) en el *conventus Asturum*. Fuente: EST-AP.

Es de suponer entonces que la política de gasto público de Nerón, la creciente presión fiscal y las necesidades crecientes de amonedación para la financiación del tesoro imperial afectarían especialmente a la región astur y al conjunto del Noroeste por sus riquezas auríferas y principal área de explotación aurífera de todo Occidente. Tácito, hablando para el año 60, recuerda precisamente el gran aflujo de oro que se estaban extrayendo de las *metalla publica* en estos momentos en que comienza el despegue de las acuñaciones en oro: *nec confusum <in> metallis aurum gigni, sed noua ubertate provenire terram* (Ann. XVI, 2, 2).

También resultan significativas las palabras de Plutarco sobre los años siguientes, cuando Galba estaba al frente de la provincia *Citerior* como gobernador (60-68d.C.) antes de su desafío al poder imperial. Entre los factores que incentivaron el conflicto posterior del 69 recoge precisamente la voracidad de los enviados del emperador en la provincia durante esta década, en coherencia con la reforma fiscal del 58 y la intensificación de las labores mineras: “Allí [prov. *Tarraconense*] los odiosos agentes de Nerón saqueaban las comarcas de una manera cruel y despiada, pero él [Galba] no podía ayudar de otra manera más que conmoviéndose y mostrando sus condolencias, como si estuviera en cierto modo dando ánimos y ofreciendo consuelo a los que de alguna manera estaban oprimidos y marginados” (Plut., *Galba*, 4). La referencia a los *procuratores* es clara en tanto que se trata de los enviados directos del emperador para labores relacionadas con la recaudación fiscal y la gestión de los *metalla publica*. El lamento de Galba por su incapacidad de actuación sobre un cuerpo que desarrolla su actividad en su provincia es muy sintomático de la revaloración creciente que van a experimentar las procuratelas a partir de estos momentos como instrumento al servicio del emperador a través del *procurator ab rationibus* de Roma. Ello permitía estrechar el control sobre aspectos clave de la financiación del gobierno imperial y garantizar su fortaleza al actuar en la práctica sin la necesaria intermediación de la administración provincial. A juzgar por los sucesos posteriores, como la proclamación de Galba como emperador precisamente por parte de la *Legio VI Victrix* afincada en *Legio* (León), se hizo manifiesto el riesgo de un eventual corte de los suministros de oro para jugar a favor del rebelado. Sin duda los acontecimientos vividos en el 69 d.C. y las inestabilidades de la década precedente ayudan a explicar la paulatina singularización administrativa del Noroeste hispano (*vid.* Orejas, 1996: 106-15) y una presencia más estable de los procuradores imperiales en el Noroeste, más tarde confirmada en el 74 por Plinio (*NH.*, 19, 35), en el 79 d.C. (*CIL* II, 2477), y que culminará con la *procuratela per Asturiam et Callaeciam* con Nerva y Trajano (*CIL* V, 534; *vid.* Ozcariz, 2013: 185-194). Este proceso, que pudo dar comienzo ya con Nerón al convertir el oro en el eje de su política monetaria dirigida al gasto público, y no exento de ciertos abusos por las necesidades económicas, contribuyó a su mala imagen en la provincia en tiempos de Galba, en donde circulaban poemas difamatorios contra el emperador (Plut. *Galb.* 4).

Queda, sin embargo, una última cuestión: ¿En qué medida puede apreciarse la política monetaria de Nerón en ámbito astur? ¿Hay indicios para algún tipo de conexión con la revuelta? Para valorar estas cuestiones es preciso atenernos a algunas limitaciones y problemas metodológicos. El primero es evidente, no podemos aproximarnos a la circulación monetaria a través del oro, porque su conservación no es representativa del grado de circulación por su valor intrínseco, que tiende a ser muy escaso y se vería irremisiblemente infrarrepresentado como indicador de la financiación procedente del tesoro público. Ello implica que la valoración deba hacerse de manera aséptica a través del total de la moneda circulante, en donde evidentemente predominará el bronce sobre los metales preciosos. Debe asumirse, por tanto, que a mayor circulación de moneda pueda vislumbrarse una entrada del numerario en metal precioso con el que se realizan los tipos de cambio. En segundo lugar, la larga vida del numerario en época antigua y los ritmos más lentos de las transacciones supone diferenciar claramente entre la cronología de la emisión de moneda, adscrita a un determinado reinado, con la cronología de su circulación en un lugar concreto, que podía dilatarse ampliamente en el tiempo. La descontextualización de los hallazgos impide, en la mayoría de los casos, poder conocer una asignación estratigráfica que permita datar un momento más preciso de circulación como sí ha sido posible en el caso de Herrera del Pisuerga (Gómez y Morillo, 2008; *vid.* Morillo y Gómez, 2006: 295-96). A pesar de estas limitaciones, pueden extraerse algunas conclusiones a partir de la circulación monetaria de las principales sedes militares y administrativas del *conventus Asturum* durante el gobierno de Nerón:

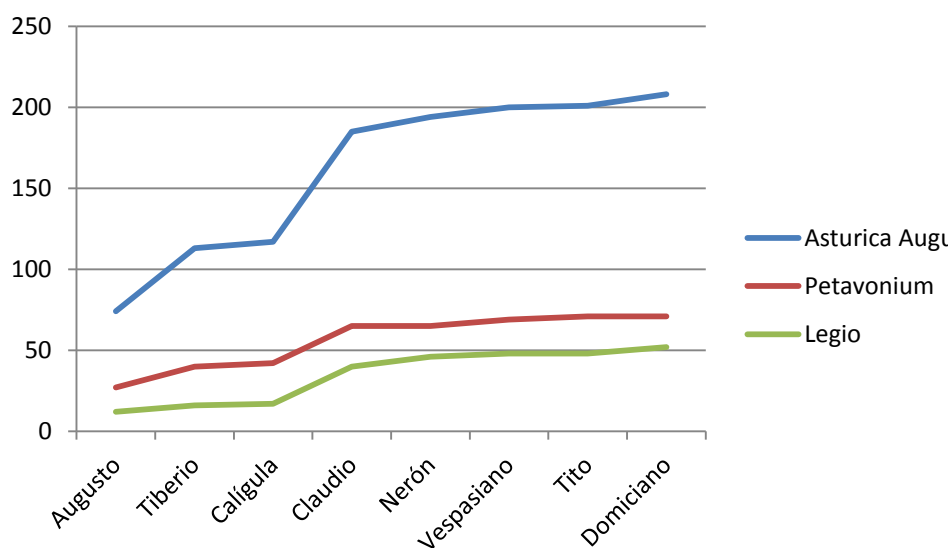


Fig.39. Circulación monetaria a través de la suma acumulada de hallazgos de moneda en los centros administrativos y militares del *conventus Asturum* durante el siglo I d.C. A partir de los datos de Vila (2012: 215-26) y Morillo y Gómez (2006).

El conjunto de emisiones de Nerón en toda la península Ibérica está caracterizado por una gran escasez. Este fenómeno se ha explicado normalmente por la herencia del gobierno de Claudio, con abundantes acuñaciones en bronce de las cecas hispanas que surtieron la falta de numerario procedente de Roma, hecho al que contribuyó su interrupción del 53 al 63/64 d.C. (Vila Franco, 2012: 409). Morillo y Gómez (2006: 282) tampoco descartan el mantenimiento de las emisiones hispanas de imitación de Claudio a comienzos del gobierno de Nerón. Esta misma tendencia se aprecia en las tres sedes de entidad militar y administrativa de los *astures*, en donde la escasa llegada de numerario neroniano contrasta con la abundante cantidad de moneda del periodo precedente, que continuaría en circulación en estos momentos. Un argumento que puede explicar la escasez de metal precioso amonedado en el caso de *Legio*, tanto oro como plata, es la salida de la moneda nueva a manos de la *Legio VI* cuando se dirigió al campamento de *Novaesium* el 69-70 d.C., (Tac. *Hist.* V, 23; Gómez y Morillo, 2006: 283).

No obstante es importante advertir que la llegada de moneda de época claudiana pudo ser un efecto posterior del efecto dinamizador de Nerón ante la escasez de emisiones durante su propio reinado en metales viles. A favor de esta posibilidad creo que deben tenerse en cuenta dos argumentos que apuntan hacia una financiación directa del aparato imperial frente a la movilidad de la moneda en los circuitos provinciales. En primer lugar, ya se ha llamado la atención sobre el hecho de que la moneda de Nerón en *Legio* y en *Asturica* (no hay testimonios en *Petavonium*) proceda exclusivamente de las cecas oficiales centrales. En el caso de *Asturica*, aunque la muestra sea pequeña (7), tanto la moneda en oro como en bronce conservada fue acuñada en su totalidad en Roma, mientras *Legio* registra tres de Roma y otra de *Lugdunum* (Gómez y Morillo, 2006: 282-83). Ello contrasta con un periodo precedente en que predominan las emisiones de las cecas hispanas, fundamentalmente del valle del Ebro como parte del flujo económico provincial. En segundo lugar, aunque la moneda de Nerón sea escasa en términos cuantitativos absolutos es tanto más llamativa la sobrerrepresentación de la moneda de oro. El predominio de aureos de época de Nerón es una tendencia que se ha advertido en todo el Noroeste de la península (Sagredo, 2007: 135-146). En el estudio sistemático de Blázquez Cerrato se pone de relieve que es precisamente en el área más militarizada del *conventus Asturum*, correspondiente a la parte septentrional de la *via* de la Plata, donde se concentran los hallazgos de áureos de época neroniana (Blázquez Cerrato, 1998). A opinión de esta autora, esto no responde a un azar de la conservación, sino que es indicativo de los pagos destinados al mantenimiento del ejército que pudo intervenir en estos momentos en la revuelta en la que participó *M. Vettius Valens* (Blázquez Cerrato, 1998: 208). Aunque la relación con nuestro conflicto resulte incierta, puede establecerse una relación económica lógica entre este fenómeno y la llegada de abundante numerario claudiano al que se añaden complementariamente las acuñaciones de época de Nerón desde Roma en ámbito militar. Es decir, es la financiación pública de Nerón, basada en el oro, lo que promueve una demanda de moneda en bronce con la que satisfacer las transacciones, para lo cual se recurre a la llegada del principal numerario existente en esos momentos, de época claudiana, a través del circuito económico regional y provincial. Ello explicaría las características de la circulación monetaria que



se aprecian en las zonas con mayor presencia militar y administrativa, en coherencia con el incremento del gasto público y del interés por los recursos auríferos del Noroeste.

Es cierto que subsisten todavía muchas incógnitas sobre el conflicto, su entidad y su naturaleza que resultan difíciles de conocer en la situación actual de conocimiento. Pero en cualquier caso, las *gestae contra astures* dentro de la biografía de *M. Vettius Valens* debe desligarse del discurso de la pervivencia prerromana, de la romanización incompleta o de la pacificación tardía. Es, por el contrario, síntoma de un contexto mucho más complejo, agravado por la política de gasto público de Nerón y sus circunstancias de inestabilidad. Una coyuntura de resistencia ante la creciente presión fiscal que sólo cobra verdadero sentido como parte de un conflicto inserto en las estructuras de dominación y explotación romanas, en las que el Noroeste y la región astur, estaban perfectamente integrados.

## 12. El impacto del *ius Latii* en el Noroeste: ruptura o continuidad.

Sin duda es indispensable abordar la cuestión del *ius Latii* para completar el panorama interpretativo sobre las formas de dominación romana en el Noroeste y los procesos de cambios de las comunidades locales a partir de época flavia. En las páginas siguientes, abordaré sólo algunas interpretaciones que afectan directamente al modelo descentralizado de las comunidades peregrinas, a su fiscalidad, y la relación que puede establecerse entre peregrinidad y latinidad en el Noroeste. En función de ello, apuntaré hacia un replanteamiento o, al menos, una nota crítica que permita acerca posiciones historiográficas contrapuestas.

Tras la postura de Millar (1977: 458-86; 630-35; *vid.* Mackie, 1983: 201-206), que negó la existencia de latinidad provincial y la redujo a la expresión de la latinidad juniana, en la actualidad tiende aceptarse de manera generalizada el impacto del *ius Latii* en las provincias hispanas durante el Alto Imperio. Este proceso, que habría comenzado con anterioridad de manera selectiva, se hizo general con Vespasiano según la célebre cita de Plinio: *Universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit* (NH., 3, 30). A pesar de la claridad de esta afirmación las desavenencias han venido propiciadas en tres niveles distintos que deben desgranarse someramente en lo sucesivo:

- El contenido, naturaleza y definición jurídica del *ius Latii* respecto a la peregrinidad y la ciudadanía romana.
- La relación contingente o necesaria entre derecho latino y municipalización.
- El despliegue de las anteriores posturas desde el punto de vista metodológico en torno a los criterios e indicadores que permiten comprobar su existencia o inexistencia, con especial incidencia en el Noroeste hispano.

La especificidad del Noroeste hispano, dadas sus formas de estructuración políticas, socioeconómicas, y sus paisajes rurales, tal y como lo hemos en cierta medida representado en el ejemplo vadiniense, ha provocado que el debate en torno a la latinidad se resuelva de manera binaria. Por un lado, aquéllos que ven en el edicto de Vespasiano (acompañado o no de municipalización) el factor fundamental que se esconde tras la desaparición de los castros, de los *castella* y del surgimiento de nuevas formaciones sociales. Por otro, los que entienden el Noroeste como una excepción o aplicación parcial del edicto de Vespasiano. Esta dualidad, lógicamente muy simplificada, establece el foco de análisis en el tercer punto antes referido, los indicativos de la latinidad (o municipalidad) y deja de lado la reflexión en torno a qué es la peregrinidad desde un punto de vista conceptual. El debate metodológico se ciñe entonces a los indicadores, desde una apariencia aséptica que no proporciona con claridad una definición de municipio, sino que tiende a relacionar la noción del cambio cultural como trasunto sobre el que entender la organización interna de las

comunidades. Este último aspecto, ha estado además lastrado en una doble dirección: el paradigma de la Romanización a la hora de identificar municipios a los que se presume una reproducción de la ciudad romana ideal (urbana, monumental), y al contrario, entendiendo las tentativas uniformizantes de las *leges datae* de los municipios latinos de la Bética como la base consustancial de lo que debe ser un municipio, lo que actúa tanto como condicionante a la hora de valorar su identificación como de considerar su extrapolación.

Dicho esto, creo que la vía adecuada para valorar el *ius Latii* en el Noroeste no debe partir directamente del debate sobre los indicadores, sino de la base teórica sobre la que éstos se construyen. Aunque algunas de las ideas ya se han ido planteando en los capítulos precedentes las retomaré ahora con el fin de abordar tres aspectos fundamentales: qué entiendo por el *ius Latii* y si cobra sentido en el seno de la peregrinidad o como *civitas* aparte; qué es el municipio latino y qué importancia pudo tener en el Noroeste; qué papel tuvo el *ius Latii* en relación a aspectos fiscales y territoriales.

## 12.1 El derecho Latino: naturaleza y concepto.

En el Alto Imperio, el contenido jurídico reconocido al *ius Latii* incluye una serie de derechos que el individuo con este privilegio puede ejercitar para regular sus relaciones con ciudadanos romanos, como el *ius connubii* (que posibilitaba un matrimonio *iustum* reconocido por el *ius civile*), el *ius commercii* (acceso a la propiedad quiritaria a través de negocios conforme a derecho con un ciudadano romano) y, el más conspicuo, el llamado *ius adipicendae civitatem romanam per magistratum* que posibilitaba el acceso a la ciudadanía romana por desempeño de una magistratura en sede local. Es decir, su articulación va dirigida claramente a regular las relaciones jurídicas que pudieran producirse con la ciudadanía romana. El debate de partida ha oscilado entre dos vías fundamentales de comprensión en torno a cómo se ejercita este derecho, si se trata de un derecho personal (*Personalrecht*) o comunitario (*Gemeinderecht*), con numerosos estudiosos adscritos a sendas posiciones en las que no vamos a entrar (*vid.* Mentxaka, 1993: 41-44). En principio debe pensarse que el *ius Latii* se desplegaba tanto en una variante personal, en tanto que el ciudadano puede ejercitar tales derechos individuales hacia el exterior de su propia comunidad cuando interactuaba con ciudadanos romanos, como en las relaciones con los ciudadanos romanos generados en su propio entorno comunitario a través del *beneficium* colectivo. En este sentido, se ha planteado que el *ius Latii* podría funcionar como una *civitas* latina, real o ficticia, que se desliga conceptualmente de la población peregrina presentándose como un escalón intermedio entre ésta y la *civitas romana*. Los argumentos para sostener esta afirmación proceden de su aparición como figura reconocida en dos capítulos de la *lex Irnitana*, en donde los *cives latini* aparecen con postestad para realizar manumisiones (*lex Irn.* 28 y 72), además de una referencia en la *lex Malacitana*, en la que se vislumbra una dicotomía casi horizontal con respecto a los *cives Romani* a propósito del derecho a voto en los comicios: *incolae, qui cives*

*R(omani) Latinive cives erunt (lex Malac. cap. 53)*. Aunque existen variantes en su comprensión, se entiende por *civitas Latina* con un sentido de *societas iuris*, de comunión de derechos compartidos que actúa como unidad conceptual desligada del territorio o de una comunidad precisa y, por tanto, sujeta a una definición jurídica específica sobre su contenido. Autores como Curchin (1990: 19) propusieron incluso que en los primeros 17 capítulos perdidos de la *lex Irnitana* se habrían desarrollado las disposiciones que configuraban la *civitas* latina. Sin embargo, las leyes no hacen precisión alguna sobre qué se entiende por esta latinidad, y son prácticamente inexistentes otros testimonios, por lo que su ausencia se explica por ser algo sabido por todos (Andreu, 2004a: 13). Ello lleva a entender que en las comunidades con el beneficio latino convivirían dentro de su cuerpo ciudadano los *cives Latini*, como ciudadanía preparatoria para el acceso a la *civitas Romana*, y aquéllos que ya la hubieran recibido por desempeño de sus magistraturas o por reproducción interna. Las consecuencias de este posicionamiento construyen por tanto un espacio de convivencia entre dos ciudadanías, romana y latina. El contenido de esta última, por su vocación adaptativa, viene así a resolver un problema que se considera central: el de la incompatibilidad de la ciudadanía romana *per honorem*, entendida con carácter exclusivo, y una *civitas Latina* que permite la interlocución jurídica con la ciudadanía romana con la que cohabita en contexto local. Esta perspectiva conlleva sucintamente dos consecuencias:

- La desaparición de la peregrinidad, al entenderse el privilegio una *mutatio civitatis* a la ciudadanía latina.
- La desaparición de la ciudadanía local que queda relegada a una *origo* de carácter meramente administrativo (García, 1991: 62), pues en caso contrario se reproduciría el mismo problema de incompatibilidad con la ciudadanía romana que se produce en su seno.

Uno de los principales problemas que plantea la propuesta es que hace descansar en exceso el constructo de la *civitas* latina en el peso de la praxis jurídica del *ius civile*. Es decir, se da por sentado que la potencialidad jurídica que proporciona la ciudadanía romana puede ejercitarse independiente del entorno jurídico, ya sea *Italica* o *Vadinia*, sin tener en cuenta que no puede eludir tampoco las condiciones jurídicas de los bienes y del entorno, sobre los que también interactúa, y que están condicionados por la naturaleza restrictiva del suelo provincial y de la propia comunidad (*vid.* caps. 7-8). Por ejemplo el *ius commercium*, que desde esta perspectiva posibilita unos negocios jurídicos entre romanos y latinos que de otro modo no podrían darse, presume el acceso a una propiedad quiritaria que, en realidad, no es posible a no ser que preexista mediante concesión de *ius Italicum* o funcione sólo como una ficción jurídica. Por otro lado, infravalora la importancia de la ciudadanía local, del *ius civitatis* como entorno que facilita el problema de la doble ciudadanía, perfilándose con un carácter instrumental para la praxis administrativa. A mi modo de ver, el problema de la exclusividad de la ciudadanía romana y las incompatibilidades que produce, construyendo cuerpos sociales incapaces de interactuar entre sí, debe pasar no sólo por

entender la evolución de la propia ciudadanía romana como *patria iuris* cosmopolita que va perdiendo su faceta de *civitas* estricta en ámbito provincial, sino por reconocer la importancia y eficacia del *ius civitatis* en la práctica jurídica en la que se desenvuelven la mayoría de habitantes del Imperio Romano, más aún en zonas rurales, siendo entonces la *civitas* romana una potencialidad orientada fundamental hacia el exterior de la comunidad, como refleja el propio S. Pablo de Tarso cuando apela a ella (*Hechos de los apóstoles*, 22, 22-29). El privilegio de la ciudadanía (y la consiguiente preocupación por su reproducción) es relativa, depende de los beneficios que comporta en el entorno inmediato. Al fin y al cabo, también el contenido de la ciudadanía romana desvalorizado en la práctica cuando se conforma la dicotomía entre Italia y las provincias, con indudable connotaciones jurídicas y territoriales, y se construyen dos formas de ciudadanía romana aunque fuera su apariencia única. Del mismo modo, también el desarrollo del *ius gentium* estaba aportando soluciones en la interacción entre ciudadanos romanos y peregrinos con anterioridad. Esta advertencia sobre la importancia del *ius civitatis*, que quizás no tenga tanta trascendencia en la Bética por la tendencia uniformizante de la legislación local y la abundancia de ciudadanía romana con la que interactuar es fundamental en contextos como el Noroeste, en donde la falta presumible de una asimilación a nivel local de los procedimientos del derecho civil acompañado de un cuerpo de ciudadanía romana exiguo y una estructura social diferente, convierte el *status* de ciudadano romano en un privilegio de menor importancia, cuyo ejercicio práctico cobra mayor sentido hacia el exterior, a amplia escala, que en sede local. Aquí se expresa la distancia que puede existir entre el derecho formal y los condicionamientos de su ejercicio práctico.

La visión contraria a la que defiende una *civitas latina* ha sido desarrollado por la escuela francesa fundamentalmente, a partir de los trabajos de autores como Christol (1989) o Chastagnol (1990), que analizaron las estructuras onomásticas de comunidades de la *Narbonense* con derecho latino, y construyeron un modelo opuesto al anterior. Para ellos una comunidad con *ius Latii* se componía de dos cuerpos sociales distintos, los ciudadanos romanos y los peregrinos, siendo estos últimos capaces de sumarse a los primeros a través del ejercicio del *ius adipiscendae c.R. per magistratum* gracias al *ius Latii*. La abundancia de huellas en la epigráfica sobre los matrimonios que se producía entre ciudadanos romanos y peregrinos hizo considerar a Chastagnol el *ius connubium* entre los contenidos de la latinidad en estos casos. La postura de estos autores implica, en muy resumidas cuentas, la existencia de un subgrupo de peregrinos que se distancia del resto de peregrinos provinciales por los privilegios suplementarios que conlleva el *ius Latii*.

Ambas posturas se oponen como las dos caras de la misma moneda si se otorga un carácter flexible a la peregrinidad. Aunque esto puede resultar obvio no debe dejar de mencionarse. La peregrinidad es un concepto ficticio, no existe una *civitas* peregrina única como seguramente tampoco una *civitas latina*. Desde la perspectiva romana la única *civitas* es Roma, que es la que cuenta con un cuerpo de derecho reconocido y uniforme. La peregrinidad es sólo un concepto abstracto de la jurisprudencia para

definir al “otro”, quien no tiene un ordenamiento conocido, pues carece de rasgos de uniformidad y sólo se articula por oposición al *ius civile*. A mi modo de ver, la importancia que se da a las relaciones entre estos cuerpos abstractos, “latinidad”, “peregrinidad”, oscurece más que contribuye a plantear soluciones. La peregrinidad tiene en su razón de ser un contenido jurídico laxo y cuyo nexo de unión lo compone el conjunto de ordenamientos comunitarios reconocidos y permitidos por la propia Roma. Hay, en otras palabras, tantas “peregrinidades” como “ciudadanías locales” en tanto que se trata de entidades “extranjeras” (*peregrinae*) reconocidas. La funcionalidad del concepto de peregrinidad actúa cuando se precisa de una categoría en la que englobar situaciones diversas, pero que tienen en común un ordenamiento reconocido no romano. Es por esta razón, como ya vimos, que el *ius gentium* se sitúa en una escala superior respecto al *ius proprium civium Romanorum* de Gayo, precisamente para facilitar las relaciones entre comunidades reconocidas y autónomas, pero carentes de un ordenamiento común sobre el que realizar interacciones y negocios jurídicos entre sus ciudadanos (*vid.* cap. 8.1-2). Como concluyó acertadamente López Barja, es evidente que la latinidad provincial ocupó la atención de la jurisprudencia como lo revelan algunos fragmentos de *Pauli Sententiae* que la mencionan a pesar de su carácter tardío (*Pauli Sent.* 2, 21, 1; 4, 9, 8; 4, 10, 3), y ello permite dibujar al *Latinus* como sujeto jurídico: “como un grupo de *status* al que el legislador podía referirse de forma colectiva sin incurrir por ello en un error ni caer en el absurdo” (López Barja, 1991: 55). Sin embargo, no considero que esta atención específica haga referencia a una *civitas latina* incompatible con el concepto más extenso de una peregrinidad a la que puedan reconocérsele ciertos privilegios específicos. La expresión *cives Latini* (*lex Malac.* cap. 53) toma sentido en referencia al grupo de *incolae* que podían votar y que, al no pertenecer por definición al municipio, son englobados como *cives Latini* y *cives Romani* de manera abstracta por sus múltiples *origines* posibles (Calzada, 2010). Según Calzada el análisis de la terminología de la legislación flavia permite concluir que “nunca hubo una *civitas latina* sino exclusivamente romana, y frente a ésta, la de cada hombre libre respecto a su ciudad originaria” (Calzada, 2010: 39-40; *vid.* Torrent, 2017). Desde un punto de vista terminológico, la categoría jurídica de peregrinidad es a mi juicio coherente con la definición que dan estos autores al propio municipio latino, entendido como expediente sobre el que ni siquiera recae una *lex* específica y puede mantener, como veremos, sus propios ordenamientos e instituciones extranjeros. En donde sí hay una intervención más directa, como en las *leges datae* municipales, sí encuentro más problemas para su ingreso en la peregrinidad en sentido amplio pues, aun cuando pudiera ser voluntaria, supone una injerencia que desconfigura la autonomía local.

Pensando en el Noroeste, creo por tanto que impera una solución terminológica o conceptual que, en realidad, no altera los fundamentos del *ius Latii* ni provoca semejante ruptura social, pues sus contenidos están igualmente incluidos. Gayo define a los latinos, como los que tenían sus propias poblaciones y sus propias ciudades (*qui proprios populos propriasque civitates habebant*) para diferenciarlos de los latinos junianos (*alii Latini*), y los incluye explícitamente *in numero peregrinorum*, precisamente por el reconocimiento a esa realidad local que en su tiempo habría perdido

en gran medida sus rasgos propios por la pulsión romanizante de sus instituciones y derechos (Cai. I, 79). En este fragmento se intuye, dentro de quienes *numero peregrinorum erant*, al gran grupo de las *exterae nationes et gentes*, dentro de los cuales los *Latini* aparecen como una concreción (*sed etiam qui Latini nominantur*) en los términos que ya hemos visto<sup>412</sup>. Cabría por tanto imaginar una amplia gradación interna al concepto de peregrinidad, que se extiende desde el nivel inferior de los *peregrini dediticii* de Ulpiano (Reg. 20, 14: *nullius certae civitatis cives*; y, según Gai. Inst. 1, 26 *pessima libertas*), hasta un nivel superior representado por los *Latini optimo iure*. La ciudadanía romana generada no compite con un nivel “peregrino” pues operan en niveles distintos. El “nivel peregrino” es en realidad el local (el de los límicos, el de los lancienses...), cuyos miembros del gobierno tras adquirir la ciudadanía romana, también se cuentan entre ellos. Estos ciudadanos romanos interactúan con sus conciudadanos en este nivel en su vida ordinaria, a través de sus *iura e instituta* propios, tienen validez local y el *ius Latii* sanciona sus relaciones y negocios pero no los transforma, a la vez que ahora facilita la reproducción de sus élites como ciudadanos romanos que, de otro modo, no sería posible a menos que mediara una concesión individual.

Es cierto que una perspectiva inclusiva de este tipo, en donde la *Latinitas* queda englobada en el concepto más amplio de la peregrinidad tiene, sin embargo, implicaciones indirectas a la hora de establecer los criterios de identificación que, en cierta medida pierden su razón de ser. Desde este punto de vista, han sido dos las posturas fundamentales a la hora de considerar las dinámicas onomásticas que se darían en una comunidad latina. Por un lado, la tesis mencionada de Chastagnol (1990), que desde la observancia de dos grupos sociales (ciudadanos romanos y peregrinos con *ius Latii*) identifica a los primeros como aquellos con *duo y tria nomina* frente a los que nombres peregrinos, basados en nombre único y patronímico. Este cauce ha sido un canal especialmente empleado en el Noroeste hispano, pues la escasez de ciudadanía romana no procedente del ejército o del aparato imperial, encuentra en cierto modo su refrendo en una supervivencia mayoritaria de construcciones onomástica no romanas, en donde el peso menor de los *duo y tria nomina* corresponderían con una ciudadanía romana que habría adquirido este *status* por el desempeño de magistraturas. Evidentemente este planteamiento tiene bastantes problemas pues, por un lado, asimila un *status* jurídico a una práctica cultural, la latinización onomástica, de tal manera que la transmisión de los *nomina* latinos se entiende guiada por el *ius adipiscendae c.R. per magistratum* y la filiación, no como un fenómeno espontáneo de los individuos. Por otro lado, al establecer su fundamento en la “latinización” se trata de un criterio muy dependiente de los usos culturales del entorno local, llevando a conclusiones deudoras del concepto clásico de la romanización: la latinización sólo muestra a la ciudadanía romana, lógicamente “romanizada”, la latinización de peregrinos se obvia, pues a ellos se le asignan nombres locales o estructuras onomásticas indigenizantes que les reafirma como “no romanizados”.

---

<sup>412</sup> Gai. Inst., 1, 79: *Adeo autem hoc ita est, ut ex [- -] non solum exterae nationes et gentes sed etiam qui Latini nominantur; sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque civitates habeban et eran peregrinorum numero.*

Esta tesis ha sido refutada por la propuesta de E. García con carácter general para el derecho latino (1993; 2001d: 139-50; 2012a; 2012b) y con carácter particular en el Noroeste hispano (2010). Esta autora indica con acierto que la ciudadanía romana no puede observarse inmediatamente en los *duo* o *tria nomina*, pues únicamente es la mención de *tribu* la nota definitoria de la ciudadanía romana. Ello lleva a pensar, por tanto, que detrás de *duo nomina* puedan encontrarse ciudadanos romanos pero también otras realidades socio-jurídicas. Su argumentación la construye a través del análisis de comunidades con probada condición de municipio latino en la Bética, cuya abundancia de *tria nomina* y el menor número de secuencias onomásticas completas de ciudadanos romanos llevaría a la conclusión, si se aplica el criterio de Chastagnol, que su cuerpo social es casi por entero de ciudadanos romanos. En los casos de la Bética, donde sabemos según la *lex Irnitana* que la manumisión de los esclavos públicos proporciona la condición latina (cap. 72), los manumitidos tienen *tria nomina* como queda reflejado en el ámbito epigráfico (eg. *CIL* II, 2009; *AE*, 1972, 254; vid. Dardaine, 1999: 225-27). Ello confirma, por tanto, que los latinos empleaban o podían emplear esta estructura, al menos en la Bética. El problema viene determinado por la variabilidad territorial en la latinización onomástica y, en otro orden, a la hora de considerar un criterio específico que permita identificar a la condición latina cuando se carece de información probada de partida sobre el expediente o condición jurídica comunitaria. En este sentido, la autora proporciona un modelo flexible que desarrolla sobre la propuesta de Alföldy (1966). Parte, por un lado de algunas medidas de Claudio dirigidas contra la usurpación de nombres romanos por personas de condición peregrina, al menos de los *nomina*, según un escueta referencia de Suetonio (*Cl.* 25, 3), y de *CIL* V, 5050, en donde se permite a los *Anauni*, *adtributi* al municipio romano de *Tridentum* utilizar los gentilicios romanos, lo que lleva a pensar que no estaría permitido por regla general. Ello concordaría con el vasto uso que se hace de *duo* y *tria nomina* en los municipios béticos, que serían por tanto ajustados a derecho debido a una condición latina que lo hace posible. En otras regiones, donde no se hubieran implantado estas estructuras de manera generalizada, como sería el propio Noroeste hispano, los criterios se flexibilizan, pues la autorización de *duo* o *tria nomina* de los latinos supone una vía onomástica posible, pero no impuesta o necesaria. De tal manera, los latinos pueden esconderse detrás de realidades onomásticas más variadas, mientras los peregrinos por carecer de esta prerrogativa, se les reduce a expresiones onomásticas indigenizantes, excluidos de los *tria nomina* por este tipo de iniciativas legislativas. Al desconocer el estatuto preciso se debe apelar entonces al criterio de la “romanización cultural”<sup>413</sup>: si se mantienen los nombres locales, como parece por ejemplo en Vadinia, la latinidad se ha adaptado a los usos onomásticos locales y tradicionales. Si por el contrario se aprecia “latinización” onomástica, los *duo* y *tria nomina* referirán a latinos o a los ciudadanos

---

<sup>413</sup> “A pesar de la firme defensa de la idea de que la onomástica expresa un estatuto preciso, se ha de recurrir en algunas circunstancias de difícil ubicación estatutaria al concepto de ‘romanización cultural’ para dar cobertura a aquellas prácticas onomásticas en las que población, supuestamente peregrina, parece expresar su deseo de integrarse en el sistema del que está temporalmente excluidos utilizando estructuras nominales que en principio no le son propias” (García, 2012a: 429).



romanos (*vid.* Sastre, 2001a: 216). Hay por tanto, un problema de base, la crítica sobre la dicotomía simplificadora entre ciudadanos romanos y peregrinos de los estudios onomásticos se traslada a aquella que opone a latinos y ciudadanos romanos.

A mi modo de ver, al menos en el caso del Noroeste hispano, el criterio onomástico puede ser un indicio pero no tiene valor probatorio de las condiciones jurídicas individuales. Da la impresión de que la latinidad se presupone en los propios criterios de identificación, lo que indirectamente los invalida. Si todas las formas onomásticas son posibles en el seno de la latinidad, y habrían de serlo a partir del edicto de latinidad de Vespasiano, nada lo hace exclusivo o característico de éstas. Por tanto, desde un punto de vista terminológico y metodológico sigue siendo más práctica la referencia a la peregrinidad, por su carácter amplio y definido *por no ser ciudadanos romanos*. Ello no impide que a estos peregrinos se les pueda reconocer el *ius Latii*, pero debemos partir de reconocer nuestro desconocimiento qué forma nomina concreta permite su identificación. Y a estos se suman los problemas de datación de las inscripciones para determinar si los casos se sitúan en periodo pre o post-flavio.

De hecho en el Noroeste se da la circunstancia de la práctica inexistencia a menciones a *tribu* que permitan identificar con certeza a la ciudadanía romana. Desde mi punto de vista, siempre pensando en el Noroeste, la exclusión de *duo* y *tria nomina* como formas onomásticas de la peregrinidad, en los términos que ya hemos mencionado, supone dejar de lado dinámicas y cambios interesantes en las estrategias de visibilización social, sobre todo cuando éstas pudieron producirse con anterioridad al edicto de latinidad de Vespasiano. *P. Arquius Clemens*, con *origo* gigurra y datado en época pre-flavia (*ERPL* 12), entraría dentro de la categoría de ciudadanía romana o latina, sin embargo, para este momento podría ser un peregrino sin *ius Latii*, cuyos rasgos onomásticos latinizantes tienen que ver con estrategias de visibilización política en plena zona minera de las Médulas, lugar de hallazgo del epígrafe (San Pedro de Trones), y donde la administración romana era una realidad bien presente. Ello deja una carta abierta en la interpretación de los *duo* y *tria nomina* según el contexto específico, pues podría cubrir a ciudadanos romanos originados en sede local, a peregrinos con *ius Latii*, pero también a comportamientos onomásticos de las clases dominantes que buscan una identificación hiperbólica con las estructuras de poder romano. El aumento de *duo* y *tria nomina* en el siglo II d.C. que se detecta como dinámica general en distintas zonas del Noroeste (*vid.* Sastre, Beltrán y Alonso, 2012) seguramente guarde relación parcial con el *ius Latii*, pero no como factor único de explicación. De la prohibición de Claudio apenas tenemos una breve nota, desconocemos su alcance real fuera de Italia y si el estado Romano dispuso de herramientas y capacidad logística para hacer prevalecer esta normativa en la práctica, más aun en los contextos rurales del Noroeste. En principio no sería tan grave cuando se les permite a los *Anauni* en un municipio romano de Italia, que ni siquiera cuentan con un *civitas* propia y plena en tanto que *adtributi* (*vid. supra*). Las burlas de Marcial sobre Cínamo, por quitar una sílaba a su nombre para que pareciera romano y no un extranjero (*Ep.* 6, 17), lo que permitiría confundirlo con un ciudadano romano del municipio hispano de Bómbilis probablemente, denotan la fuerte separación que pudo existir entre la praxis cultural y la teoría del marco normativo.

## 12.2 Edicto y municipio latino. Modelos para el Noroeste.

Otro de los núcleos fundamentales de la discusión se ha desplegado en torno al perfil constitucional de la latinidad y la relación contingente o necesaria con el expediente municipal. En función de cómo se entiende esta relación, dentro del debate general sobre el *ius Latii*, se concibe de una manera muy distinta su impacto particular en el Noroeste hispano a partir de época Flavia.

La aparición de la *lex Irnitana* en 1981 mostró a las claras que existía la categoría del *municipium Latinum* (cap. 30), sin embargo, se han mantenido diferencias ostensibles en torno a cómo se relaciona con el edicto de latinidad de Vespasiano. De forma muy resumida, el debate estriba en si el edicto de latinidad convierte necesariamente a las comunidades en municipios sin necesidad de una *lex data*, si existe un periodo adaptativo entre la promulgación del edicto y la *lex* municipal, y si el disfrute del *ius Latii* puede darse entonces sin adquirir un estatuto que es entonces selectivo y complementario. Contemplar este “periodo adaptativo” o “formativo” es la base de partida sobre la que evaluar después qué requerimientos se precisan para considerar lo que debe ser un municipio.

Las dudas iniciales provienen del espacio de tiempo entre el edicto de latinidad (73/74 d. C.) y la datación de la *lex Irnitana* (91 d.C.). Algunos capítulos de la *lex*, como el 19-20, han planteado el interrogante de si la mención al edicto que allí se hace, identificable con el de Vespasiano, implica una conversión al expediente municipal ya en ese momento, siendo entonces ratificado y desarrollado por la *lex Irnitana* o, por el contrario, requiere la promulgación de la *lex* para convertirse en tal. Evidentemente no se trata de una menudencia técnica, sino la base interpretativa sobre la que se evalúa todo lo demás. Autores como Stylow (1986: 290-303) o Lamberti (1993) entienden edicto y *lex* como capítulos separados, para lo cual se apoyan en las conocidas inscripciones cordobesas de los denominados *municipia Flavia* de *Igabrum* (Cabra: AE 1986, 334d) y *Cisimbrium* (Rute: AE 1981, 496; AE 1986, 334b). En ellas un edil y dos *Ilviri* realizan tres dedicatorias por haber conseguido la ciudadanía romana *per honorem beneficio imperatoris*, lo que remitiría a esta fase transitoria de disfrute del edicto en vía de municipalización, siendo la *lex* posterior algo contingente que regula su funcionamiento interno, pero no otorga un expediente municipal que ya se estaba disfrutando provisionalmente desde el edicto. De otro modo, no tendría sentido un agradecimiento imperial si la adquisición de la ciudadanía romana era producto de las leyes municipales de *Igabrum* y *Cisimbrium*. Autores que han retomado esta cuestión como González Román (2001: 121-26=2008: 125-30), cuestionan por un lado que estas comunidades puedan auto-proclamarse municipios en estas inscripciones sólo a consecuencia del edicto si no constaban de una *lex* reguladora. En este sentido observa que el agradecimiento del *beneficium* imperial difícilmente podría hacer alusión al edicto de Vespasiano cuando una de ellas dice explícitamente *beneficio Domitiani*. Por tanto, para este autor, el *beneficium* sólo podría tratarse de la obtención de la *civitas Romana* cuando, en un momento en que ya cuentan con una *lex* municipal desde un momento temprano, la materialización del *ius adipiscendae c.R. per magistratum* en

sede local no es inmediato y todavía requiere un reconocimiento *viritim* a través de la emisión de un *diploma* por parte del emperador. El agradecimiento se debe, en suma, al procedimiento administrativo que le permite de manera efectiva convertirse en ciudadano romano tras el desempeño de las magistraturas. Esta perspectiva salvaguardaba, así, la distancia entre el edicto de latinidad y una *lex municipalis* que se considera complementaria pero no de obligada promulgación. Esta discusión es muy ilustrativa de una concepción muy distinta sobre la naturaleza del municipio sobre la que después descansa una amplia gama de opciones interpretativas. Mientras para Lamberti el carácter municipalizante se entiende entonces con una motivación “romanizadora” y, por tanto, más laxa en los criterios que permiten ser considerado como tal, para González supone una confirmación legal a un proceso histórico que debe darse con anterioridad. Es decir, requiere la asimilación y despliegue previo de un conjunto de características formales y organizativas propias de la “ciudad romana”, sus instituciones, su ordenamiento, una morfología urbana y monumental, que actúan como requisitos para la concesión de una *lex* que implica el cambio al *status* municipal.

Desde este esquema básico pueden comprenderse mejor los problemas suscitados en el Noroeste hispano en cuando al alcance, motivaciones o contenido del *ius Latii* y de la propia municipalización latina. En el Noroeste no se reproducen los rasgos propios del modelo de la “ciudad clásica” y se parte de una estructura social y política complementamente distinta, en donde las aristocracias rurales asumen un control político y socioeconómico que se basa en la descentralización y la autonomía de las *civitates* peregrinas. La inexistencia de centros urbanos, a excepción de las capitales conventuales y de *Aquae Flaviae*, y que sólo esta última se autodefinen y tenga confirmado un estatus municipal (AE 1973, 304; AE 2000, 745; AE 1973, 305) ha planteado diversas propuestas teóricas que, en cierto modo, encierran el mismo esquema antes anunciado entre el *ius Latii* del edicto y las leyes municipales en la Bética. En principio, tesis como las de Galsterer (1971: 50), que cuestionó la implantación universal del *ius Latii* en *Hispania*, siendo el Noroeste una de sus excepciones, ha dado a paso a las que centran el foco de su atención en la municipalización partiendo de aceptar la eficacia del edicto de latinidad de Vespasiano.

Por un lado, aquéllos que observan con carácter desvinculado el *ius Latii* del edicto y la *lex* municipal suelen entender que existe un periodo transitorio en que han de reproducirse los rasgos “municipalizantes” para obtener un estatus municipal que se entiende restrictivo. Así autores como Le Roux (1991a: 579-80) plantearon que la extensión del *ius Latii* se produce eficazmente en las comunidades peregrinas, que pasan a ingresar entonces en una categoría intermedia que recibiría acomodo en la expresión pliniana del *oppidum latinum*. Se trataría de una entidad administrativa que se aplica para algunas fundaciones *ex novo* de época augustea en el Noroeste, que habrían recibido el *ius Latii* sin título municipal como *Bracara* y sería extensible al periodo post-flavio acompañado de indicios tímidos de urbanismo debidos al derecho Latino, pero insuficientes para adquirir la promoción comunitaria (Le Roux, 1996). El término vago de *oppidum* en el relato pliniano, que sólo suele destacar el rango colonial, entraría en consonancia con una categoría cuasi-técnica definida por la implantación de *ius Latii* a la manera de los *oppida stipendiaria* de la *Citerior*. Para Le Roux, esta etapa

transitoria sentaría las bases para la reproducción de la clase dominante como ciudadanía romana en vista de un posible y deseable cambio estatutario en el futuro: “au lieu de se traduire par une émancipation complète de la communauté originelle la mutation du statut ne privilégie que la fraction la plus riche et la plus désireuse de tirer avantage de la *civitas Romana*, dans un contexte où de nombreuses communautés étaient appelées à choisir cette solution” (Le Roux, 1991: 581). Algunos autores han presentado grandes objeciones a este modelo, considerándolo un constructo moderno que alude a entidades administrativas sin bases documentales más allá de la fuente pliniana y en donde el término *oppidum*, carente de un contenido técnico, puede ocultar realidades administrativas variadas que, en acompañamiento del adjetivo *latinum* sólo podrían aludir a los *municipia latina* como categoría válida (García, 2001c: 107-124; vid. Espinosa, 2013: 56-70). Quienes se han ocupado de la variabilidad de significados que esconde el término *oppidum* han reafirmado las dificultades para considerar un uso de tipo técnico, que suele relacionarse con aspectos topográficos, morfológicos y urbanos (Beltrán Lloris, 1999; Courault, 2015).

A pesar de ello, el término *oppidum Latinum* ha permanecido vigente como concepto explicatorio de este proceso transitorio entre latinidad y municipalidad. Así, el jurista Kremer ha planteado cinco estructuras organizativas locales que pueden disfrutar el *ius Latii* en distintas formulaciones a partir del 89 a.C. Todas ellas tienen en común una realidad pre-existente: “colonia ficticia”, *oppidum*, *civitas*, *gens adtributa* y *municipium*. Interesa destacar aquí que la eficacia del *ius Latii* opera en torno a la noción de *oppidum* como núcleo urbano, haciendo que la ruralidad bien quede excluida, bien deba relacionarse con realidades urbanas (*oppida* o *municipia latina*) para ser disfrutada a partir de una *adtributio* (Kremer, 2006; vid. Andreu, 2007). El argumentario de Kremer ha sido incorporado recientemente para el caso del Noroeste por Ortiz de Urbina (2012). Con anterioridad, esta autora (Ortiz de Urbina, 1996) ya había propuesto para *Callaecia* y otros ejemplos africanos y galos el concepto de “municipalización virtual” como etapa transitoria que prepara un marco operativo (reproducción de una ciudadanía romana incipiente en sede local), institucional (adaptación de las magistraturas y ordenamiento interno) y morfológico (urbanización). Es decir, se presume de nuevo un marco lineal de transformación, que en caso de no culminarse quedaría como una formulación “virtual” e insuficiente que no se habría visto acompañada finalmente del *status* municipal. Ello explicaría los rasgos de la sociedad y las instituciones del Noroeste hispano como ejemplo de una voluntad no conseguida en su plenitud. En su reciente revisión, esta perspectiva ha sido matizada a partir del análisis de Kremer. En concreto, retoma la categoría de *civitas latina* utilizada por este autor para algunas comunidades galas (Kremer, 2006: 149-50 y 195-96) y la aplica a algunas comunidades del Noroeste hispano que se denominan *civitas*, como las que aparecen en la inscripción del puente de *Aquae Flaviae* del 79 d.C. (Chaves: *CIL* II, 2477). La ausencia de aglomeraciones urbanas suficientes, unido a ciertos indicativos epigráficos de la incidencia local del derecho latino, la llevan a pensar sin embargo en un régimen de *adtributio* del que deriva el disfrute del *ius Latii* (Ortiz de Urbina, 2012: 657-64). En realidad, no queda clara la relación planteada entre las distintas categorías de *oppidum*, *civitas* y *adtributi* latinos, y la extrapolación sólo parece basarse en el

paralelismo terminológico con una *civitas* que se aprecia ya, sin embargo, en el Edicto de El Bierzo, y nunca se documenta junto al epíteto *latinum*. Tampoco parece coherente la *adtributio*, que requiere un centro promocionado al que ser “atribuido” como reflejan los ejemplos alpinos, cuando Ortiz de Urbina sólo reconoce en *Aquae Flaviae* una promoción. De hecho el concepto de *civitas latina* de Kremer requiere el reajuste a una categoría que califica de “*civitas* sin disposición de un centro urbano”, en donde sólo algunos casos como los *Limici*, con rasgos de un esfuerzo de adecuación institucional a la manera de “virtualidad” municipal, podrían incorporar a las comunidades cercanas a los beneficios del *ius Latii* mediante una atribución.

La tesis contraria está bien ejemplificada en la propuesta de García (1991b; 1998; 2001d), a la que se han sumado otros autores con posterioridad (eg. Andreu, 2004a). Parte de una consideración muy distinta tanto del estatuto municipal como del significado y alcance de las *leges datae* a los municipios. Mientras los anteriores autores entienden la adquisición del expediente municipal como fruto directo de una *lex* reguladora que es aplicada selectivamente sobre la base de un grado de adaptación ya adquirido, García parte de la idea del *municipium latinum* como instrumento de integración, no de sanción a una situación pre-existente. Este expediente, creado en época augustea tras el largo periplo de transformación previo del derecho latino (García, 2001a; 2001b; 2001c), habría sido recibido por todas las comunidades hispanas como consecuencia directa del edicto de Vespasiano. En este sentido, la *lex municipalis* denota la implantación de un modelo organizativo e institucional romano que no sería inherente de la condición municipal, sino a una posibilidad que se da en determinadas circunstancias de la Bética bajo una motivación uniformizante que busca asimilar las instituciones y los procedimientos del derecho romano al derecho local, quizás por petición expresa de sus comunidades (García, 1991b: 170; 1995). De este modo, las leyes de los municipios béticos, aun siendo la fuente más clara sobre el contenido de la latinidad, podrían actuar como un “espejismo” distorsionador del carácter flexible del municipio latino que, en realidad, no requiere una *lex* para convertirse en tal. La universalidad del edicto de Vespasiano implicaría, en suma, la conversión automática de todas las comunidades peregrinas en municipios latinos sin requerir la etapa preparatoria dibujada en el concepto de *oppidum Latinum*. Para E. García, las cualidades del municipio latino son básicamente el reconocimiento de las leyes, la autonomía y las instituciones propias de los derechos locales, que ahora se ajustan a derecho y reciben una sanción jurídica sobre unos requisitos mínimos (García 1991b). La asimilación a las leyes e instituciones del derecho romano son entonces un fenómeno contingente e imbricado en procesos complejos y desiguales de asimilación a la cultura romana, dejando vía libre a una posible continuidad de las estructuras previas.

### 12. 3 El municipio latino en el Noroeste: implantación formal y plasmación material.

En el contexto del Noroeste, esta flexibilidad del expediente municipal latino tendría la virtud explicativa de integrar la región en el proceso global de municipalización y extensión del *ius Latii* en *Hispania* sin alterar de manera sustancial las condiciones y organizaciones internas de las comunidades peregrinas. De hecho, las características que la autora perfila se expresan en términos muy similares a los que hemos defendido sobre el funcionamiento del municipio desde el punto de vista fiscal y administrativo, siendo la descentralidad del esquema augusteo, la autogetión del excente fiscal y el asiento sobre el suelo estipendiario (independientemente del *status* individual) la base operativa que continuaría con la concesión del derecho latino (cap. 8; *vid.* García, 1996). Los estatutos del suelo no cambian por la incorporación de un derecho ideado para la interlocución jurídica con la ciudadanía romana, como ya observó D’Ors hace algún tiempo (1974: 256) y hemos visto en algunos ejemplos concretos sobre la tributación del suelo (cap. 7.2). Si se recaudó algún tipo de impuesto indirecto exclusivo de la ciudadanía romana, como la *XX hereditatis* o la *XX libertatis* no ha dejado rastro alguno al contrario que en otras zonas de la provincia (*vid.* Muñiz, 1980: 250-61). Ahora bien, en este punto debe plantearse una pregunta: Si toda la diversidad de respuestas culturales, políticas, sociales e institucionales que se producen en las comunidades del Noroeste tienen cabida en el municipio latino, ¿en qué medida o aspectos particulares se expresa este cambio? ¿supone cambios estructurales o es un factor menor en el proceso evolutivo interno de sus comunidades?

El enconado debate sobre la naturaleza del derecho latino ha encontrado en el Noroeste una vía crítica para evaluar la idoneidad de las formulaciones teóricas globales, siendo entonces un escenario en que ampliar o restringir la nómina de municipios latinos. Se parte de la base de una entelequia municipal (muy diversa en su concepción) que da por sentado el deseo de integración de las comunidades y sus élites a la *civitas Romana* independientemente de la estructura social, lo que reduce la cuestión a un estadio formal (municipalización o no municipalización). No se interroga sobre por qué no hay interés alguno en mostrar el estatus municipal más allá del hecho positivo y formal de la “municipalización”. Aquí la idea que debe rescatarse es “el cambio” y cómo y en qué medida se produce.

A mi modo de ver, el significado y alcance de la *civitas* romana que aparece ahora en sede local no debe desligarse de las condiciones previas y de la estructuración interna de las comunidades rurales del Noroeste. Es decir, el privilegio que comporta el estatus de ciudadano romano es muy dependiente, en la práctica, del entorno en que se mueve y en que puede ejercitar unos derechos que lo convierten en una posición “deseable” en mayor o menor medida. No es necesario dudar de la implantación del *ius Latii*, pero si relativizarlo como práctica reguladora de las relaciones sociales. Esta premisa de partida es la clave para comprender ulteriores estrategias de visibilización social, que no necesariamente deben ir dirigidas a la latinización onomástica como ya se ha mencionado, sino orientadas al “interior” de la comunidad, incluso por parte de la

ciudadanía romana *per honorem*. Del mismo modo, supone un condicionante que opera en la reproducción de la ciudadanía romana en sede local, que aun siendo ahora posible mediante el *ius connubium* del derecho latino, pudo no guardar el mismo grado de interés del que se le presupone en otras zonas. Es decir, una cosa es aceptar el *ius connubium* como derecho adquirido y otra muy distinta es que se convirtiera en un condicionante que pudiera orientar las relaciones matrimoniales como sí se intuye en la *epistula* de Domiciano al municipio de *Irni*. La *civitas* romana, uniforme en su contenido intrínseco, es desigual en su puesta en práctica, en su “utilidad” social. Evidentemente el desarrollo del *ius Latii* abría ahora una puerta que antes estaba cerrada, pero cuyo efecto se aprecia sólo en una élite capaz de disfrutar de los privilegios prácticos de la *civitas Romana* a escala conventual y provincial, fundamentalmente en la carrera política. A nivel local prevaleció el desarrollo interno de los *iura e instituta* locales, sin indicativos que permitan considerar una causalidad o impacto directo del derecho latino más allá de la sanción jurídica o de la reproducción de la ciudadanía romana para una minoría interesada.

Las fuentes epigráficas revelan distintas instituciones políticas y administrativas que toman sentido dentro del proceso evolutivo interno de las comunidades locales gracias a una autonomía disfrutada desde la ordenación augustea que se despliega en los siglos siguientes. Una de ellas es la figura del *magistratus*. Como ha puesto de manifiesto recientemente Curchin, se trata de una formulación política propia de las comunidades peregrinas, susceptible de sobrevivir (o no) con el derecho latino (Curchin, 2015). Un ejemplo lo encontramos en la renovación del *hospitium* entre dos *gentilitates*, *Desoncorum* y *Tridiavorum*, del conocido pacto de los *Zoelae* (*CIL* II, 2633; *vid.* Balbín, 2006). La datación consular indica que se rubricó el 27 d.C. en *Curunda*, en donde la autoridad competente que garantiza el pacto en este momento es *Abienus Pentili*, en calidad de *magistratus*. Sin duda hace referencia a un notable local con capacidades políticas suficientes para sancionar un pacto de estas características, al que se suman otros diez individuos como testigos dentro de su área de influencia. La nueva renovación del pacto del 152 d.C., en donde se incorporan dos miembros de otras *gentes*, se sella sin embargo en *Asturica Augusta* (*Asturicae*). No hay en este caso mención expresa a un determinado título o cargo, sólo los nombres *L. Comitius Silo* y *L. Flavus Severus* procedentes de la capital conventual, quizás miembros de la administración provincial o conventual que representan el papel que en el pacto previo corresponde a los testigos junto al *magistratus*. En cualquier caso, queda implícito el reconocimiento el 152 d.C. al papel oficiado por el *magistratus* en el primer pacto, que sienta las bases de la ampliación en la segunda parte cuando se elabora el bronce de *hospitium*. Esta institución se repite en la Tabla de El Caurel el 28 d.C. (*AE* 2000, 748), en la que *Tillegus Ambati f.* acuerda el *hospitium* con el *castellum* toletense de la comunidad de los *Lougei*. Aquí se menciona los *mag(istratus) Latinus Ari* y *Aius Temari*, seguramente de la *civitas Lougeiorum* para rubricar el nuevo vínculo. Por la semejanza con el anterior de los *zoelae*, en donde aparece desarrollado *magistratus* (no *magistri*) no cabe dudar que hace referencia a una figura política análoga, codificada con este apelativo en el lenguaje propio de las tablas de hospitalidad. También el

fragmentario bronce de El Picón (Pino del Oro, Zamora) pudo nombrar a los *m[ag(istratibus)]* de *Bletisama* a opinión de Beltrán Lloris, pero su estado de conservación imposibilita cualquier tentativa segura (*HEp* 18, 479; Beltrán Lloris, 2010: 135; *vid.* Sastre y Beltrán, 2010). Otras referencias cercanas a esta institución las encontramos en los pactos de Paredes de Nava del 2 a.C., *per mag(istratus) Flaisicum* (*CIL* II, 5763), y el de Herrera de Pisuerga del 14 d.C. por los tres *mag(istratus) Caraegius et Abuanus et Caelius* (*HEp* 12, 363). A mi modo de ver, no es necesario considerar que todas las menciones a *magistratus* deban aludir a una única institución política, perfectamente definida y uniforme (en términos de duración, número, funciones, etc.). Se trata de un término genérico que permite poner de relieve el peso político de determinados individuos en su comunidad, aunque luego sus formulaciones y matices fueran distintos en cada caso. No debe perderse de vista que se trata de documentos sesgados por un contexto de asimilación del lenguaje latino, en donde la imposibilidad de ajustar una terminología precisa al cargo convierte al *magistratus* en un figura útil de referencia. De hecho también la encontramos quizás en la dedicatoria votiva de *Asturica Augusta* al *deus Vagodonnaegus* datada entre finales del siglo I y comienzos del II, realizada *per mag. G. Pacatum et Fl(avium) Proculum* sufragada por un tercero (*ERPL* 29). En este caso, se ha argumentado que la hipotética mención a *magistratus* no correspondería con una magistratura de tipo municipal (Orejas y Morillo, 2013: 107). El papel de *Asturica* como sede de la administración conventual y de la gestión de los *metalla publica* es distinto al de una comunidad cívica al uso y carece de un cuerpo cívico que permita considerar extrapolaciones con otros comunidades del *conventus* (Sastre, 2001a: 218-19). El contexto del hallazgo, junto a una villa romana a 30 km de *Asturica* en la actual Milla del Río (Carrizo de la Ribera, León) hace más apropiado el desarrollo *mag(istri)*, en coherencia con el modelo pagano-vicánico que parece desarrollarse en el entorno de *Asturica Augusta* (Orejas y Morillo, 2013: 107-10). Sea como fuere, los *magistratus* toman sentido como miembros de unas élites locales colaboracionistas con el poder romano que ejercen funciones de control político y social suficientes. En este sentido, otras denominaciones pudieron referir a una realidad pareja como es el caso los *principes* de los *Copori*, el *princeps Albionum* o los *principes vadinienses* que ya hemos tratado con anterioridad y, que al menos para el caso vadiniense, perduran del siglo I al III d.C. (cap. 10.4).

Este vocabulario estandarizado puede dar una apariencia uniformizante a formas de organización política que son, en realidad, producto de las tensiones dialécticas entre lenguaje y realidad institucional dentro del proceso de cambio experimentado en cada comunidad. Por tanto, contemplar la continuidad en su empleo terminológico no implica asumir un inmovilismo institucional sino una diversidad de respuestas locales no necesariamente teledirigidas hacia una implantación de estructuras de la administración cívica de tipo romano. Lo mismo ocurre con algunas figuras consideradas indicativas de la adaptación a formas organizativas romanas, como la alusión al *ordo Zoelarum* que se documenta en un ara de difícil datación hallada en Castro de Avelãs (Bragança) dedicada al *deus Aernus*, y actualmente desaparecida (*CIL* II 2606). La alusión a *ordo* puede cobrar perfecto sentido como “asamblea aristocrática de las grandes familias locales” (Sastre, 2001a: 219), en coherencia tanto con un lugar del hallazgo que remite a



uno de los lugares centrales de esta comunidad, como al diálogo de poder de las grandes familias zoelas que pueden rastrearse en su corpus epigráfico durante el Alto Imperio (vid. Sastre, 2002; Beltrán, 2015). La utilización de un término que en ámbitos adaptados a los modos organizativos romanos sirve para identificar al “estamento dirigente de las grandes familias que suelen manejar los resortes de la administración y la religiosidad a escala local” (Rodríguez Neila, 1977: 206), puede ser releído en clave local para manifestar y visibilizar a grupos de poder no necesariamente coincidentes con el contenido que la terminología romana puede desprender. Lo mismo podría decirse del ya mencionado Bronce de El Picón que, a pesar de su estado fragmentario podría documentar la existencia de un *senatus* de Bletisama (*HEp* 18, 479). La referencia al *senatus* cobra sentido dentro de una fórmula que busca revestir de autoridad al pacto (...*senatus [populusque] Bletisamen[sis]*) sin necesidad de observar un correlato directo y lineal con que estas comunidades “se organizaran al modo y manera romanos” (González, 2010: 166). De existir un *senatus* más allá de la fórmula sancionadora no creo que difiriera mucho del contenido político y aristocrático que hemos visto en el caso del *ordo Zoelarum*. La muestra de testimonios epigráficos disponibles no es suficientemente extensa para poder apreciar con claridad el proceso evolutivo de muchas de estas instituciones a lo largo del tiempo, hecho al que contribuye la escasez de epigrafía honorífica o de carácter público en medios rurales. A priori no cabe pensar que el *ius Latii*, acompañado de una municipalización formal, supusieran grandes alteraciones o injerencias en el desarrollo genuino de las comunidades concretas. La adquisición de ciudadanía romana *per honorem*, a falta de otras figuras institucionales que permitan plantear otras opciones, se habría podido ejercer desde las diversas formulaciones políticas generadas en ámbito local.

En este sentido debe ser mencionado el importante conjunto de *flamines* procedentes del Noroeste que son honrados en *Tarraco*, tomado como la prueba más explícita de la adaptación de algunas comunidades al modo organizativo romano a partir de la mención al *dunvirato* que habrían ejercido en sus comunidades de origen, y a partir del cual habrían adquirido la ciudadanía romana. En principio no hay ningún argumento que permita dudar de su recepción en la *civitas* romana *per honorem*, sin embargo, sí es cuestionable que lo hicieran verdaderamente a partir de este tipo de magistratura. Es muy representativo que sea precisamente en la capitalidad provincial donde se concentran exclusivamente todas las referencias a *Iiviri* (3) cuando no existe, en todo el contexto geográfico del Noroeste, alusión alguna al ejercicio de este tipo de cargos públicos en el Alto Imperio. La figura del togado de *Flavionavia* (Pravia, Asturias), que es apuntado por Andreu como indicativo de asimilación institucional por parte de esta comunidad (2004a: 150), no menciona en realidad la edilidad ni el *duunvirato*. Sólo recoge [- - -] *Jario Sesti* (*ERAs* 20). El epíteto “flavio” de esta comunidad puede corresponder a cambios territoriales o a la creación de nuevas *civitates* previamente absorbidas en otras sin necesidad de suponer una implantación necesaria de modelos organizativos romanos. El conocimiento arqueológico denota formas de poblamiento rural disperso a lo largo de la cuenca baja del Nalón que ni siquiera han permitido conocer un lugar preciso con el que relacionar *Flavionavia* y que, por otro lado, Ptolomeo integra en el s. II d.C. entre los *Paesici* (2, 6, 5; vid. Santos, 1997; Fernández

Ochoa y Morillo, 1999: 86). La única referencia a un duumviro en el Noroeste es *C. Lepidus Marci f.* firmante del Itinerario de Barro y, aunque no menciona el lugar de desempeño del cargo, ha tendido a relacionarse con *Asturica* por la vaga referencia de su hallazgo en la región de Astorga y la propia distribución topográfica de las tablillas. Gracias a los análisis recientes por termoluminiscencia se han despejado las dudas sobre su autenticidad y han podido datarse en una horquilla del 227 al 310 d.C., seguramente tendente hacia el 267-276 d.C. (Ochoa, Morillo y Gil, 2012). Ello q nos lleva a un periodo cronológico tardío y posterior a la *constitutio Antoniniana*, dentro de un contexto histórico radicalmente distinto al que ahora nos interesa.

La mención a los tres *Ilviri* de la *civitas Limicorum* (CIL II, 4215) *Lancia* (CIL II, 4223) y *Brigaecium* (CIL II, 6094) se integra dentro del programa iconográfico y propagandístico del foro de *Tarraco* que busca representar la integración de las diversas élites provinciales a través de una larga carrera política que les permite alcanzar el flaminado. Se trata de dedicaciones realizadas a expensas de la propia administración provincial, a la que seguramente tuvieron derecho al término de su flaminado como se observa en la *lex de flamonio* narbonense (Alföldy, 1973). Su disposición se situaba en un espacio de la plaza inferior del foro, junto a los pedestales dedicados a emperadores divinizados y sus círculos familiares en torno al templo de Augusto de la parte superior. En este espacio inferior aparecen toda una serie de ciclos iconográficos que buscan indudablemente manifestar el carácter colectivo y provincial del foro y del papel integrador del *concilium provinciae*. Así pues, la desigual presencia y funcionalidad de los *conventus* de la *Tarraconense* queda omitido bajo el aspecto de racionalidad y homogeneidad administrativa que desprende el ciclo de los genios conventuales en época de Adriano (Mar, Ruiz de Arbulo y Vivó, 2013), por poner un ejemplo. Cabe suponer, ante la falta de un correlato en la epigrafía del Noroeste, que estas menciones a los duumviros se correspondan con intentos de estandarizar o normalizar el *cursus honorum* de una élite profundamente integrada en las estructuras administrativas de escala imperial (Sastre, 2001a: 218), en donde los localismos se ocultan bajo la pátina de proyectos iconográficos que buscan exaltar la vocación integradora del *concilium provinciae*.

Por otra parte, el conjunto de *flamines* y *sacerdotes* augustales de *Tarraco* es la principal evidencia del impacto del *ius Latii* en el Noroeste. Evocan a esa minoría capaz de hacer efectivo el principal privilegio que de él emana, la adquisición de la ciudadanía romana *per honorem*, y cuya significación se materializa en los niveles de escala conventual y provincial más que en ámbito local. La mayoría manifiesta haber alcanzado el flaminado desde el desempeño de *omnibus honoribus in re publica sua*, de donde provendría su condición de ciudadanos romanos, aunque desconozcamos las características específicas o la nomenclatura de sus cargos en las comunidades. Aquí lo interesante no es sólo el hecho positivo de que se exprese un vínculo directo entre la recepción de la *civitas* romana por desempeño de los *honores*, sino a su claro propósito de representarse como ciudadanos romanos dentro de una estrategia de visibilización claramente divergente respecto a la que se aprecia en el medio local. Sus estructuras onomásticas no dan lugar a ninguna ambigüedad que permita cuestionar su condición de ciudadanos romanos, con *tria nomina*, filiación y mención a la *tribu* salvo alguna

excepción, además de la mención a la *origo* y el *conventus* de procedencia: El lanciense *L. Iunius f. Quirina Maro Aemilius Paternus* (RIT 287), el brigaecino *L. Fabius Luci f. Quirina Siloni* (RIT 275), el bergidoflaviense *C. Valerius Arabinus Flaviani f.* (RIT 333), el límico *M. Flavius Marci f. Quirina Sabinus* (RIT 276), el aquiflaviense *C. Ceraecius Cai f. Quirina Fuscus* (RIT 266), los avobrigenses *L. Sulpicius Quinti f. Galeria Nigrus Gibbrianus* (RIT 307) y [- - -] *Galeria Avitus* (RIT 261) y el bracaraugustano *Q. Pontius Quinti f. Quirina Severus* (RIT 299). A ellos debe sumarse el flamen *M. Ulpius Reburrus Cai f. Quirina Reburrus* que sólo se menciona del *conventus Bracaraugustaus* (RIT 308), quizás por ser oriundo de su capital al igual que su probable mujer, *Pompaeia Maximina* que aparece en el conjunto como *flaminica* y procede también de este *conventus* (RIT 324).

Este fenómeno choca con la escasez de las menciones de *tribu* en los contextos locales del Noroeste que, como ya se ha dicho, parten de una estructura social que mediatiza las ventajas de la ciudadanía romana y su consiguiente visibilización. A pesar de ello, si nos ceñimos a la dispersión de la *tribu* Quirina (por ser la que se vincula con la nueva ciudadanía generada a partir del derecho latino desde finales del s. I y a lo largo del II) pueden distinguirse dos grupos. El primero y más numeroso lo forman, sintomáticamente, individuos relacionados con núcleos de la administración o el ejército, como los documentados en *Asturica Augusta* (Astorga): el militar *L. Pompeius Faventinus* (CIL II, 2637), el *flamen* y *sacerdos Romae et Augustorum* designado por la *Citerior C. Iulius Fidus* (CIL II, 5124); el veterano *L. Aelius Reburrus* (CIL II, 6291); y en *Legio* (León): *L. Aemilius Valens* (CIL II, 2675), *G. Aemilius* (IRPLE 155), ambos en soporte con cabecera semicircular con disco solar de radios curvos típico de contextos militares; [- - -] *genius* [- - -] *getus* [Ve] *getus* con dudosa mención a *tribu* (IRPLE 209), *L. Aurelius Fraternus* (CIL II, 2681) y *L. Terentius Reburrus* (CIL II, 5700). Lógicamente estas sedes se tornan en lugares dinámicos para la ciudadanía romana, ya fuera de origen alógeno, aquellos que la obtuvieron tras su licenciamiento, o por filiación dentro del espectro de las relaciones que se establecen entre las élites locales y los centros de poder romano.

El resto de menciones a la *tribu Quirina* en el Noroeste son muy escasas y desigualmente repartidas (vid. Andreu, 2004b). Se relacionan con dos de los principales centros urbanos del Noroeste a excepción de la encontrada en ámbito de la *civitas Limicorum* y *Zoelarum*. Dos provienen precisamente de *Aquae Flaviae* (Chaves), la única comunidad que se declara como municipio. Esto indica que, en este ambiente, tiene sentido y por tanto se hace visible la mención explícita de la ciudadanía romana con la *tribu*: [- - -] *Fa]bius* (AE 1974, 398), [- - -] *Laucius Rufinus* (AE 1973, 302). El segundo centro principal es *Bracaraugusta*, capital conventual y eje muy dinámico de actividades comerciales a escala regional (vid. Martins, 2000; Morais, 2005b y 2010; Martins y Carvalho, 2016), animado también por la llegada de *cives romani qui negotiantur Bracaraugusta* desde época julio-claudia (CIL II, 2423). Según la reciente hipótesis de Morais, no habría que desechar la auto-denominación como municipio según la leyenda de algunas lucernas datables entre el 75-80 y el gobierno de Adriano como ya mencionamos (vid. cap. 8.3): *Ex officina / Lucretii / G(-) (ex) M(unicipii) B(racarum) f(iglinis)* (Morais, 2006; vid. AE 2004 a-c). A ello se suman los

excepcionales actos de evergetismo como la “Fonte do Idolo” (Garrido, Mar y Martins, 2008), sólo posibles mediante una transformación profunda de la estructura social y de la propia mentalidad cívica (*vid.* cap. 5.3.3). Aquí se registra un total de 5 individuos que manifiestan su ciudadanía romana con mención a la *tribu Quirina*: el prefecto de la *cohors VI Brittonum* *L. Terentius Rufus* (*CIL* II, 2424), muy fragmentariamente [-] *Lucret[ius] [S]aturnin[us]* (*CIL* II, 2444), *L. Valerius Rufinus* (*CIL* II, 2450), *Aulus Caelius Flaccus* (*CIL* II, 2437) y *T. Caelius Flaccus* (*CIL* II, 2438). Fuera de este contexto sólo encontramos la tribu *Quirina* en la inscripción de Mosteiro de Ribeira (Ginzo de Limia, Ourense: *CIL* II, 22566) dentro del territorio asociado a los límicos, dedicada a *M. Iunius Robustus*. También en la dedicación al *deus Mentoviacus* en zona zoela, realizada por *M. Atilius Silus* y conservada en el ayuntamiento de Zamora (*CIL* II, 2628). Y, por último, en Pinhão (Alijó, Vila Real: *CIL* II, 6291), en este caso dedicada a *L. Aelius Reburus*, que se dice *veteranus* de *Asturica*, y que seguramente correspondiera con un licenciado de la *legio VII Gemina* (Le Roux, 1982: 197).

El debate en torno a la implantación del *ius Latii* y la municipalidad en el Noroeste no es una cuestión que deba plantearse en un código binario (sí o no), sino que ha de partir de la reflexión sobre unas condiciones materiales, sobre un sistema social determinado. De ello depende el cómo, en qué medida y en qué aspectos concretos pudo resultar beneficioso, tanto para Roma como para los grupos dominantes locales. Volcar el derecho latino, con mayúsculas, en el Noroeste, o ampliar y reducir la nómina de municipios es terreno baldío si se antepone el concepto jurídico abstracto sobre la realidad social. No ha sido por tanto el objetivo cuestionar su implantación formal, sino introducir matices en las facetas en donde se materializa y que, en el actual estado de conocimiento, sólo permiten relativizar su impacto más allá de una minoría que fue capaz de capitalizar los aspectos potenciales que el derecho latino brindaba. El desarrollo de las comunidades del Noroeste a lo largo del siglo II d.C., fue el despliegue del sistema augusteo y del establecimiento de un sistema descentralizado que convirtió a las élites sociales en la pieza angular de la dominación fiscal y administrativa sobre sus propias comunidades. El derecho latino no hizo sino sancionar una realidad (social, política, institucional) ya presente y potenciarla en algunas de sus facetas. La pérdida de la semántica del recinto amurallado como unidad sociopolítica del Hierro, la desaparición final de los castros a lo largo del siglo II d.C., y la ruralidad heterogénea que surge y cambia los paisajes del Noroeste obedecen a un *continuum* histórico marcado por los sucesivos ritmos del imperialismo romano. Podría decirse entonces que sus territorios y sus poblaciones se “romanizaron”, y en realidad lo hicieron, pero sólo desde la descentralidad y desde su propia singularidad.



## 13. Conclusiones.

La fiscalidad imperial fue la estructura de explotación que posibilitó un sometimiento colectivo eficaz con unos niveles de burocratización e intervención exigüos en comparación con la entidad territorial objeto de su dominio. No es de extrañar que haya ocupado un lugar destacado en la historiografía desde el siglo XIX. Los estudiosos que sentaron las bases del conocimiento de la fiscalidad imperial tuvieron que afrontar el desafío de construir un modelo coherente que pudiera explicar la enorme diversidad y heterogeneidad de la documentación disponible. En el contexto de su presente histórico, mediatizado por la realidad de los estados-nación y el fenómeno del colonialismo del momento, dibujaron una estructura fiscal de rasgos unívocos y globalizantes partiendo de la premisa de que los horizontes provinciales debían entenderse como ámbito de anexión y prolongación eficaz del Estado. Este sustrato ideológico ha dejado su poso en la teoría patrimonialista del suelo provincial, entendiendo que el ejercicio de la dominación se construye sobre el carácter público del suelo en tanto que sobre éste recae el *dominium* eminente del *populus* y del César. A pesar de que este modelo teórico haya sido sometido a sucesivas matizaciones y reinterpretaciones con el paso de tiempo, todavía prevalece una visión que denota un carácter centralizador y estático del Estado que ha dejado poco margen de maniobra al papel desempeñado por las comunidades locales. La aplicación de esquemas fijos (provincias imperiales/senatoriales) y la implantación uniforme de figuras fiscales estereotipadas (*tributum soli/stipendium* y *tributum capitis*) ha desvinculado muchas veces los estudios sobre la fiscalidad antigua, reducidos al aparato filológico, del proceso histórico de las provincias y de los territorios concretos. Repensar la fiscalidad sólo es posible desde una doble dirección, que ha de partir no sólo del cuestionamiento de algunos de sus principios teóricos, sino de la observación de una realidad social concreta a la que modula, como factor fundamental del cambio histórico y dentro de la cual, a la vez, cobra sentido.

Desde estas premisas de base, esta tesis doctoral ha buscado reafirmar el componente histórico de la fiscalidad romana como parte del proceso de cambio que tiene lugar en el tránsito de época republicana al imperial. El gobierno de Augusto marca la culminación de una transformación profunda que altera la propia concepción del Estado romano y del espacio provincial sometido por las armas. De una estructura de explotación basada en la economía de guerra y en la paulatina imposición permanente de tributos, el comienzo del Principado da lugar a una nueva, fundamentada en el repertorio de los territorios, los habitantes y los recursos disponibles de un modo más racional y ordenado. Ello no implicó, sin embargo, la implantación de un esquema uniforme sino de una política “consciente” de exacción a las provincias, en donde son las necesidades e intereses del imperialismo romano y la evaluación de los condicionantes y circunstancias específicas las que moldean el sistema fiscal y administrativo impuesto para cada realidad provincial y comunitaria concreta. Este

marco flexible permite por tanto conectar la política fiscal con los procesos de provincialización e integración específicos en vez de ser el modelo general el que actúe como condicionante de partida.

El análisis desde estos planteamientos permite cuestionar el carácter generalizado que se presupone al *tributum capitis* como figura fiscal complementaria a la tributación predial y normalmente asociada a todo el conjunto de comunidades peregrinas. La desigual dispersión geográfica de las fuentes que nos remiten a la capitación personal no permite sostener su expansión a partir del “laboratorio fiscal” egipcio, de donde proviene la mayor parte de la documentación disponible. Por el contrario, el estudio caso por caso atendiendo al proceso de integración con las comunidades o grupos étnicos con los que se relaciona revela que el *tributum capitis* fue un recurso de carácter más bien excepcional. Los contextos en los que aparece tienden a relacionarse con procesos duros de integración provincial que tienen en común la incapacidad de acceso a la propiedad de buena parte de sus poblaciones por distintas casuísticas. La riqueza de la documentación papirológica ha distorsionado el perfil de una forma impositiva que sólo es posible gracias a la experiencia burocrática de la prefectura egipcia desde época ptolemaica. En Egipto parece gravar sólo a quienes carecen de facto de propiedades agrarias, ya sean la minoría de comerciantes metropolitanos o los habitantes de la *chora* que trabajan las antiguas *gé demotiké* que pasan a formar parte del *ager publicus* o del *patrimonium Caesaris* en época romana. Aquí el factor que delimita el cobro o no de la capitación es la no pertenencia a las *civitates* griegas (*Naucratis*, *Ptolemais* y Alejandría), únicas exentas, lo que conforma un heterogéneo grupo de peregrinos *Aegyptii* adscritos a la *chora* a efectos administrativos y fiscales: aquellos de cultura griega, con el pago de la mitad de la cantidad, y la amplia mayoría del campesinado egipcio. La *laographia* egipcia forma parte del propio acervo administrativo egipcio que Roma aprehende, reinterpreta y adapta. Las escasas informaciones sobre las modalidades de capitación reflejan la falta de homogeneidad en las cantidades cobradas, el rango de edad sujeto a esta carga o a diferencias claras según el sexo. En el caso de Judea, las referencias vagas al *tributum capitis* se relacionan con bastante seguridad sólo con la paulatina institucionalización y expropiación del *didrachmon* judío que culmina finalmente con la creación del *fiscus Iudaicus*. En este caso, el duro proceso de integración de las comunidades judías se saldó con una capacidad limitada de acceso a la propiedad en algunas regiones, dentro del contexto de expropiaciones forzosas de tierras y de las *deductiones* de *Cesarea Maritima* y *Aelia Capitolina* (Jerusalén). En otras zonas de la provincia en donde los judíos pudieron integrarse en mejores condiciones no se observa la incapacidad de acceso a la propiedad agraria, y a pesar del carácter infamante del impuesto sí pudo complementarse con el *tributum soli* y el consiguiente acceso a la propiedad. El caso judío ilustra el proceso de instrumentalización de unas contribuciones originariamente cultuales para convertirse en recursos fiscales permanentes con un claro contenido simbólico y propagandístico con respecto a las comunidades y etnias irreverentes al poder romano. La tercera categoría, única presente en la parte occidental del Imperio, se relaciona con la incapacidad de acceso a la propiedad por colectivos sociales no integrados o no reconocidos en su plenitud en la *civitas* en las que habitan. En estos

casos la capitación parece tener una dimensión local, más que un impuesto de carácter estatal. En la parte oriental, los testimonios de capitación se relacionan de nuevo casi exclusivamente con las comunidades judías que viven en entornos griegos, cuya falta de adecuación e integración en las estructuras cívicas, bajo una apariencia de “duplicidad” ciudadana, termina por institucionalizar la confiscación local de sus impuestos cultuales. En occidente se perfila bajo formas de indefinición jurídica a partir de procesos de integración excepcionales que se saldan con la eliminación administrativa de la comunidad. Son aquí los *incolae* no recogidos ni integrados en la nueva realidad administrativa los que parecen convenientemente relacionados con la capitación, cuando a la *deditio* le sucede la expropiación de su antiguo territorio y la *deductio* de una colonia en su antiguo lugar. Es el caso del ejemplo macedónico de la *epistula* de Antonino Pío, de los *Salassi* respecto de la colonia *Augusta Pretoria*, de los trinovantes respecto de *Camulodunum* tras la fundación de la *colonia Claudia Victricensis*, y podría plantearse para explicar la referencia a la *incolae contributi* de Urso, entre otros ejemplos. En estos casos, la indefinición jurídica, con *libertas* pero sin *civitas*, supone la peor marca de los castigos posibles, sólo superada por el estadio siguiente, la esclavitud. Las connotaciones infamantes de la capitación cobran forma como una figura impositiva local pensada para quienes no poseen, ni pueden poseer, propiedades agrarias por su genuino proceso de integración post-conquista. La valoración general del llamado *tributum capitis*, que tiene una apariencia homogénea en el *de censibus* de Ulpiano, debe cuestionarse como una figura única y global, y sólo tiene sentido en procesos específicos de provincialización.

La nueva concepción imperial que da lugar con el programa augusteo también se concretó en desarrollo del censo provincial como medio óptimo para el control y la fiscalización de las poblaciones dependientes. El antecedente del censo de la ciudadanía romana mediante *professio*, que estratificaba a la sociedad romana conforme a su patrimonio continuó a pesar de la abolición del *tributum ex censu* el 167 a.C. Sin embargo, no fue éste el sistema establecido en el mundo provincial, sino una relectura del mismo que revela la concepción de un imperio que ha cambiado las bases de su sostenimiento económico. De una república construida por sus ciudadanos se establecen ahora definitivamente los cimientos de una economía imperial, basada en el gravamen a los súbditos que hace posible el privilegio y la exención de toda Italia. En este sentido, la experiencia romana en contacto con las burocratizadas monarquías helenísticas como los registros *kat'oikian* egipcios colaboraron en la instauración de un modelo censual que había dejado de basarse en el registro masculino *qui arma ferre possunt*, y se convierte en el recuento total de las poblaciones. Este sistema de registro no implica, sin embargo, que la tributación sobre el suelo se basara en la declaración individual de las propiedades agrarias, estableciendo un vínculo directo entre el *possesor* privado y el *fiscus* en las provincias imperiales como se ha sostenido habitualmente. El censo provincial y la información que se recoge era variable, según las necesidades e intereses específicos de Roma en las provincias y en las regiones concretas. Lógicamente allí donde se establecieron sistemas impositivos personales fijos, como en Egipto, es normal que se acompañaran de un tipo de registro “casa por casa” como el que brinda con



generosidad la documentación papirológica. Sin embargo no hay datos que permitan sostener que en otras regiones las declaraciones del patrimonio personal, especialmente de los bienes inmuebles, fueran recogidas en el censo provincial a la manera del censo republicano de los ciudadanos romanos más allá de los *agri divisi et assignati* asociados normalmente a colonias o a repartos a veteranos.

El análisis de la información disponible para el funcionamiento del censo en la *Citerior*, más escasa de lo deseable, permite dibujar un modelo basado en tres niveles. El nivel superior viene representado por las actividades de los *procuratores ad census accipiendos*, que recogerían una información sumaria de las comunidades dependientes a efectos de un ejercicio eficaz de gobierno, si bien resulta difícil de precisar su periodicidad o su proceso de elaboración. Lógicamente a ese nivel corresponde las iniciativas del gobernador provincial, encomendadas al procurador financiero y al desempeño del ejército en labores de apoyo a tareas administrativas. Los recuentos poblacionales podrían ser tanto del conjunto de la provincia como de regiones concretas en donde se requería su conocimiento por distinto motivos, tal como se desprende del censo de los vascos y várdulos de Moconio Vero. Desde mi punto de vista, es necesario reevaluar la funcionalidad del nivel intermedio que pudo desempeñar el *conventus* como instrumento de intermediación e interacción entre las *civitates* y la administración provincial a efectos censuales. La información suministrada por Flegón, Plinio y la epigrafía remite a esta posibilidad, en donde el *conventus* se convierte en un instrumento de control, de desigual presencia en la *Citerior*, que pudo facilitar la explotación del medio local gracias a una presencia más directa sobre el territorio. A mi modo de ver, los cómputos poblacionales suministrados por Plinio para el Noroeste, siguiendo el marco conventual, resultan coherentes con algunos indicativos sobre el control y la gestión de la mano de obra para determinados fines imperialistas que se resuelven en este marco. Este podría ser el caso de las *munitiones* exigidas para la construcción de la red viaria, para el *dilectus* de *auxilia* y, quizás, también para la mano de obra minera en forma de *operae* hasta la creación de la procuratela *per Asturiam et Callaeciam* que unifica los tres *conventus* noroccidentales. Para explicar algunas singularidades del sistema de *civitates* del Noroeste, como su predominante carácter rural, se ha tendido a recurrir a modelos administrativos ajenos que se mueven en el horizonte de la ciudad clásica. Para ello se ha manejado de manera flexible instrumentos como la *adtributio* o la *contributio*, exclusivos en principio de centros promocionados y que sólo conocemos bien en su contexto itálico, con el fin de paliar una articulación aparentemente defectuosa o ineficiente. Por el contrario, muchas de estas cuestiones pueden simplificarse si se repara en el papel de intermediación del *conventus*, que en la *Citerior* y, sobre todo en el Noroeste, tuvo una especial actividad como refleja su visibilización urbana y su papel administrativo y estructurante del entorno. No en vano los autores tardíos que recordarán la organización conventual suelen evocar precisamente los noroccidentales por su especial importancia respecto a otras regiones. Reconocer el papel intermediador del *conventus* no impide, sin embargo, defender también el papel de la *civitas* como unidad mínima del sistema administrativo y fiscal que, a través del proceso de construcción de su desigualdad interna fue un activo agente de su propio sometimiento. Frente a la corriente que sólo reconoce en los expedientes promocionados

capacidad para estructurarse a sí mismos, pueden presentarse precedentes descentralizados de control censal en la experiencia republicana romana (tanto de itálicos como de extra-itálicos) que se van asimilando también a las comunidades estipendiarias en el siglo I a.C. En ellos se pone de relieve cómo son las propias comunidades las que envían sus listas a petición de los requerimientos de Roma. Tanto es así que cuando en Roma el *stipendium* ya se considera por Cicerón un impuesto cívico regular, vaciado de su contenido republicano, él mismo reparará en este sistema como el precedente inmediato de las comunidades estipendiarias, que ahora se extiende al horizonte provincial.

En el marco de la unidad mínima administrativa que representa la *civitas* he analizado el papel de los *castella/centuria* epigráficos, pues han sido en ocasiones identificados como entidades inferiores administrativas, fiscales o censuales, hasta la concesión definitiva del *ius Latii*. Es la *civitas* la que actúa siempre como “unidad de *munera*” y, por tanto, como *origo* en las zonas en que se registran ambas entidades. Así aparece ya en el edicto de El Bierzo, donde los *castellani Aliobrigiaecini* deben contribuir *cum Susarris*. O en el caso de los *Interamici* que cuentan con varios *castella* epigráficos, es la *civitas* la responsable fiscal como demuestra el acto evergético de Vegeto al equilibrar las cuentas de su *res publica* con el fisco. Un argumento definitivo creo que lo constituye de nuevo el caso de la comunidad peregrina y rural de los *Interannienses* lusitanos, pues representa el límite de la dispersión de los *castella* epigráficos. La información censal que aporta Flegón sólo recoge su *civitas*. Por último, si relacionamos la dispersión de los *castella* con las menciones u omisiones a la *civitas* de pertenencia, puede comprobarse que sólo toman sentido como parte de una *civitas* de adscripción, a veces trivializada por estar en su interior. La dimensión social de los *castella* cobra significado en el contexto de las relaciones políticas a nivel interno de la *civitas*, en tanto retratan a los grupos de poder que la estructuran, la lideran y la instrumentalizan. La consideración de estos fenómenos como un producto imperfecto de la *civitas* ideal podría compararse con las nociones modernas de la eficacia estatal como es el del propio concepto de *Estado fallido*. Se han visto en las disensiones políticas internas del edicto del Bierzo o en los pactos de hospitalidad entre *gentilitates* de una misma *civitas* síntomas de una “*civitas* fallida”, cuando fueron en realidad parte estructurante de una comunidad peregrina a la que se le reconoce autonomía plena en sus asuntos internos.

La pizarra de Pelóu, considerada una *tabula censualis* del *castellum* dependiente del Chao Samartín, ha sido apuntada como prueba de un registro oficial, razón por la cual requería un tratamiento monográfico. La aproximación demográfica al castro, el análisis de su composición interna y sus índices de latinización nos alejan a mi juicio de esta posibilidad. La comparación con otras listas de nombres permite plantear una analogía con las *tabulae Vindolandenses*, que contienen listados análogos dedicados a transacciones y a la gestión de la mano de obra en la que se ven involucrados tanto militares como población local. Las características del soporte y el contenido permiten apuntar hacia un documento militar parecido, relacionado en este caso con las labores de construcción de la infraestructura minera que revela su propio paisaje inmediato.

El otro gran horizonte del proyecto augusteo fue la ordenación del territorio provincial y el riguroso control ejercido a través del catastro. La puesta a punto de este instrumento sentó las bases para la exacción del tributo imperial por excelencia: el *tributum soli*. El nuevo esquema observó dos grandes realidades diferenciadas en materia fiscal: Italia y las provincias. La Italia exenta y paulatinamente uniformizada se convertirá en el centro del poder político y económico gracias a la explotación fiscal de las provincias. Este proceso se inserta en una narrativa que exalta la unidad secular de Italia a la vez que reafirma el recuerdo de la guerra como justificación discursiva de la imposición fiscal sobre las comunidades provinciales. En sentido, tiene plena significación histórica la creación del derecho Itálico por parte de Augusto como un instrumento capaz de discriminar a comunidades concretas de las profundas desventajas que tenía el asiento en suelo provincial. Se trataba, de este modo, de una ficción que aprendía y asimilaba plenamente una realidad itálica, mucho más variable en realidad, para ser exportada con dos efectos directos: la *immunitas* de sus suelos y la plena eficacia en el ejercicio de un *ius civile* que no se veía coartado por la configuración jurídica y administrativa del suelo provincial. Por otro lado, surge una realidad provincial profundamente diversa que se configura por oposición a Italia como ámbito limitado en el ejercicio del derecho, en los privilegios políticos y en el propio gravamen inherente de su suelo, de modo independiente al estatus jurídico personal. La dualidad Italia-provincias fue un contructo que posibilitó el ensanchamiento del cuerpo de una ciudadanía romana depauperada en su contenido con el fin de satisfacer las demandas y la creciente presión de las élites provinciales, a la vez que la configuración de Italia y del derecho itálico construían un subconjunto de ciudadanos romanos que no sufrían la merma de sus privilegios pasados.

El debate en torno a la naturaleza jurídica del suelo provincial también ha encontrado grandes obstáculos en el análisis del Noroeste. La consideración de su genuina estructuración social, política y cultural, como algo ajeno a una romanización teleológica y uniformizantes, ha tenido también su reflejo en el ámbito fiscal y administrativo. La aplicación de las tesis patrimonialistas ha tendido entonces a buscar soluciones también en los ejes de la ciudad clásica en dos vertientes: bien a través de su negación, lo que convierte al Noroeste en una región periférica y reducto de pervivencias prerromanas que no se ven superadas, a lo sumo, hasta la concesión del *ius Latii*. Bien la que afirma su implantación como un producto imperfecto vertebrado por el discurso del “Estado/*civitas* fallido” antes mencionado, en donde la escasa presencia del fenómeno urbano se soslaya con instrumentos excepcionales como la *adtributio* o la *contributio*, o bien, con la pulsión por identificar un *caput civitatis* aun cuando el registro no sustenta tal papel de primacía política. La negación a que una *civitas* rural sea capaz de estructurarse a sí misma parte sin embargo de preconcepciones modernas que son contradictorias con el propio sistema fiscal y administrativo romano. En este sentido, mi contribución ha buscado poner de relieve la autonomía y la descentralización como ejes axiales del funcionamiento de las *civitates* peregrinas que se impone desde el gobierno de Augusto. El análisis de la fiscalidad imperial no debe ver condicionado por una estructura ideal desligada de los procesos históricos territoriales. Dado que se trata de un factor de cambio de primer orden, debe imbricarse

y dar sentido a los procesos de transformación sociopolíticos que se generan en el Noroeste hispano. Desde este punto de vista el sistema de *civitates* peregrinas se integra de manera coherente con el registro del proceso de jerarquización social y la ruralidad del poblamiento, que fueron respuestas contingentes que tiene perfecta cabida en el nuevo marco de dominación augusteo.

La autonomía y devolución de los *iura e intituta* propios a las comunidades peregrinas del Noroeste forma parte de la concepción romana del *bellum iustum* contra el *inimicus* de pequeña entidad que lucha por su propia supervivencia. El ejercicio de *aequitas* en el tratamiento al vencido permite superar la *deditio* a través de un nuevo vínculo sellado por la *fides* que sólo tiene por condición la satisfacción de los tributos impuestos sobre la colectividad. El amplio margen de maniobra en la organización interna es respetado siempre y cuando se cumplan las obligaciones establecidas en el ejercicio del *ius post bellum*, marco que garantiza la *pax* y evita el retorno a la situación de guerra. El *Corpus Agrimensorum Romanorum* da numerosas pistas, explícitas e implícitas, sobre cómo se concibe y controla el espacio provincial dominado y el de las propias *civitates* peregrinas mediante el expediente del *ager per extremitatem mensura comprehensus*. La *assignatio* global del territorio comunitario y la tributación *universus modus* sienta un nuevo marco catalizador del cambio que se intuye con claridad en los *termini publici* del Noroeste desde época augustea entre otros testimonios. El nuevo marco establece una nueva escala de interacción social y política, en donde las entidades cívicas son capitalizadas por élites sociales emergentes. El proceso heterogéneo de construcción de la desigualdad no sólo desarticula por completo el sistema social prerromano basado en el recinto fortificado como unidad funcional, también confirmará el papel de las élites sociales como instrumento primordial que estructura internamente la *civitas*, garantiza la satisfacción de los tributos y ejerce el control social sobre las capas subalternas que posibilita la explotación eficaz de la minería aurífera. La necesidad de obtener el excedente fiscal supone, por un lado, la incentivación de un proceso de intensificación productiva que es coherente con la orientación agraria de las nuevas formas de poblamiento rural, en convivencia con unos recintos fortificados cada vez más vacíos de su contenido semántico previo. En otro orden, el control del excedente fiscal no reproduce formulaciones censitarias o timocráticas que se revierten en la comunidad en actos evergéticos. Genera, por el contrario, una estructura social distinta que pudo fundamentarse en la asimetría de contribuciones no progresivas entre las oligarquías locales y el campesinado dependiente. Las inscripciones rupestres pueden ser indicativas de las nuevas relaciones de propiedad que se generan a partir de la acumulación de un capital político por una minoría que disfruta de un acceso desigual a la tierra y que visibiliza su estatus social mediante la apropiación del paisaje comunitario.

El estudio de caso de la comunidad vadiniense como ejemplo paradigmático de una *civitas* rural permite explorar formas genuinas de estructuración social y política desde la descentralidad, pero que sólo cobran sentido como parte del nuevo sistema de ordenación y de los intereses mineros en la región. El análisis del conjunto vadiniense ha requerido también una aproximación sobre los costes de producción de los epígrafes proponiendo un estudio de movilidad como método para evaluar la representatividad

social del medio epigráfico gracias a las características de sus soportes. El conjunto vadiniense denota la pronta identificación de las oligarquías locales con una realidad cívica de la que emana su posición de privilegio y en donde se hace necesarios distintos recursos para favorecer la cohesión y solidaridad entre miembros de las oligarquías locales.

El Noroeste no fue una zona vestigial o un simple feudo de explotación económica o minera, sino un territorio sensible a los cambios de más amplia escala de la política imperial que fueron modulando su propio desarrollo y procesos de cambio. Algunos episodios de conflicto normalmente leídos desde un concepto de “revuelta nativa” que reproduce el carácter irreverente del incivilizado y la dualidad romanidad/indigenismo de la romanización cultural, pueden tener un contenido muy distinto si se les dota de un contexto que no reniega de base de su imbricación en los procesos históricos globales. El ejemplo del conflicto astur en época de Nerón es representativo de la incidencia de una política imperial de gasto público, cuya reforma fiscal y monetaria en torno al oro hubo de tener un peso específico en la principal zona de explotaciones auríferas de todo el Imperio, hasta el punto de ocasionar fenómenos de resistencia antifiscal como las que se documentan en otros contextos provinciales en estos momentos.

Del mismo modo, el Noroeste tampoco fue una realidad ajena al impacto del derecho Latino a partir del edicto de Vespasiano para el conjunto de *Hispania*. Su implantación formal fue completa, y permitió sancionar una realidad institucional y organizativa interna que continuó generándose, en lo sucesivo, desde la descentralidad de cada comunidad concreta. El derecho latino no implicó sin embargo cambios teledirigidos a la adecuación con los modelos romanos de organización cívica en el ámbito institucional o de sus formaciones sociales. El debate sobre la municipalización o no municipalización es una cuestión inerte si no se acompaña de una reflexión sobre el papel del derecho y del privilegio en la sociedad, no sólo como algo impuesto u otorgado, sino como algo asumido y que tiene significado en una determinado sistema social. En las comunidades rurales del Noroeste encontró su materialización más eficaz en la integración de aquella minoría social capaz de capitalizar el acceso a la ciudadanía romana *per honorem* que el derecho latino brindaba y que abría el paso a los circuitos políticos de escala conventual y provincial.

Los fundamentos del programa augusteo no fueron transformados sino potenciados en época Flavia. Con ello se garantizaba la reproducción de un sistema imperialista que había encontrado su principal virtud en delegar el peso de la explotación provincial en el papel estructurante desempeñado por los agentes locales, la parte más activa del sometimiento colectivo.

## Bibliografía.

- ABASCAL PALAZÓN, J. M. (1994), *Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania* (=Anejos de Antigüedad y Cristianismo II), Murcia.
- ABASCAL PALAZÓN, J. M. (2006), “Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción jurídica de ciudades”, *Iberia* 9: 63-78.
- ABASCAL PALAZÓN, J. M. (2008), “La epigrafía de los límites de las ciudades romanas de Hispania. Una revisión”, en J. M. Iglesias Gil (ed.), *Actas de los XVIII Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, julio 2007)*: 77-94.
- AGUILAR GUILLÉN, M. A. – ÑACO DEL HOYO, T. (1997), “Fiscalidad romana y la aparición de la moneda ibérica. Apuntes para una discusión. 195-171 a.C.: algunos textos polémicos”, *HABIS* 28: 71-86.
- AICHINGER, A. (1992), “Zwei Arten des Provinzialcensus? Überlegungen zu neupublizierten israelischen Papyrusfunden”, *Chiron* 22: 35-45.
- ALARCÃO, J. – ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. – CEPAS PALANCA, A. – CORZO SÁNCHEZ, R. (eds.), *Tabula Imperii Romani*, hoja J-29, Madrid.
- ALARCÃO, J. – IMPERIAL, F. (1996), “Sobre a localização dos Lancienses e dos Tapori”, en M. J. Maciel (ed.), *Miscellânea em homenagem ao Professor Bairrão Oleiro*, Lisboa: 39-44.
- ALARCÃO, J. (1988), *O domínio romano em Portugal*, Lisboa.
- ALARCÃO, J. (1998), “Ainda sobre a localização dos *populi* do *conventus Bracaraugustanus*”, *Anales de Arqueología Cordobesa* 9: 51-58.
- ALARCÃO, J. (1999), “Os arredores das cidades romanas de Portugal”, *Archivo Español de Arqueología* 72: 31-37.
- ALARCÃO, J. (2000), “Os nomes de algumas povoações romanas da parte portuguesa da Lusitania”, en T.-G. Gorges y T. Nogales (coords.), *Sociedad y cultura en Lusitania romana. IV Mesa Redonda Internacional*, Mérida: 165-172.
- ALARCÃO, J. (2003), “A organização social dos povos do Noroeste e Norte da península Ibérica nas épocas pré-romana e romana”, *Conimbriga* 42: 5-115.
- ALARCÃO, J. (2005a) “Ainda sobre a localização dos povos, referidos na inscrição da ponte de Alcântara”, en M. S. Perestrelo (coord.), *Actas das 2<sup>as</sup> Jornadas de Património da Beira Interior. Lusitanos e Romano no Nordeste da Lusitania*, Guarda: 119-132.

- ALARCÃO, J. (2005b), “O territorio dos *Paesuri* e as suas principais povoações”, *Conimbriga* 44: 147-172.
- ALARCÃO, J. (2006), “Notas de arqueología, epigrafía e toponimia - IV”, *Revista portuguesa de Arqueología* 9: 131-147.
- ALARCÃO, J. DE – GORGES, J. G. – MANTAS, J. V. – SALINAS DE FRÍAS, M. – SILLIÉRES, P. – TRANOY, A. (1990), “Propositions pour un nouveau tracé des limites anciennes de la Lusitanie Romaine”, en *Les villes de Lusitanie romaine: Hiérarchies et territoires. Table ronde internationale du CNRS (=Collection de la Maison des Pays Ibériques 42)*, París: 319-329.
- ALBERTINI, A. (1923), *Les divisions administratives de l'Espagne romaine*, Paris.
- ALBERTOS FIRMAT, M<sup>a</sup> L. (1975), “Organizaciones suprafamiliares en la Hispania antigua”, *Studia Archaeologica*, 37: 5-66.
- ALBERTOS FIRMAT, M<sup>a</sup> L. (1977), “Perduraciones indígenas en la Galicia romana: los castros, las divinidades y las organizaciones gentilicias en la epigrafía”, *Actas do Coloquio Internacional sobre el Bimilenario de Lugo*: 17-37.
- ALFÖLDY, G. (1966), “Notes sur la relation entre le droit de cité et la nomenclature dans l'Empire romain”, *Latomus* 25: 37-57.
- ALFÖLDY, G. (1969), *Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und offiziere in den Spanischen Provinzen des Roemischen Reiches von Augustus bis Diokletian*, Steiner-Wiesbaden.
- ALFÖLDY, G. (1973), *Flamines prouvinciae Hispania citerioris (=Anejos de Archivo Español de Arqueología 6)*, Madrid.
- ALFÖLDY, G. (1995), “Inscripciones, sacrificios y misterios. El santuario rupestre de Panóias, Portugal. Informe preliminar”, *Madrider Mitteilungen* 36: 252-258.
- ALFÖLDY, G. (2000a), *Provincia Hispania Superior*, Heidelberg.
- ALFÖLDY, G. (2000b), “Das neue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 131: 177-205.
- ALFÖLDY, G. (2003), “Administración, urbanización, instituciones, vida pública y orden social”, *Canelobre* 48: 35-57.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Y. – LÓPEZ GONZÁLEZ, L. – FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. – GARCÍA QUINTELA, V. (2017), “El *oppidum* de San Cibrán de Las y el papel de la religión en los procesos de centralización en la Edad del Hierro”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid* 43: 217-239.
- ÁLVAREZ ORDÁS, J. C. – RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. – MARTÍNEZ MURCIEGO, N. (2000-01), “Instrumental médico procedente de la excavación del yacimiento de época romana de la carretera del cementerio. Puente Castro, León. Una

- aproximación”, *Lancia: revista de prehistoria, arqueología e historia antigua del noroeste peninsular* 4: 141-158.
- ANDO, C. (2011), “Law and the Landscape of Empire”, en Benoist, S., Daguet-Gagey, A., Hoët-van Cauwenberghe, C. (eds.), *Figures d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain imperial (II<sup>e</sup> s. av. n. è - VI<sup>e</sup> s. de n. è.)*, París: 25-47.
- ANDO, C. (2015-2016), “Colonialism, Colonization: Roman Perspectives”, en D. L. Selden y P. Vasunia (eds.), *The Oxford Handbook of Literatures of the Roman Empire*, Oxford.
- ANDO, C. (2016), “Legal pluralism in practice”, en P. du Plessis, C. Ando y K. Tuori (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford: 283-293.
- ANDREAU, J. (2002), “Twenty Years After Moses I. Finley’s ‘The Ancient Economy’”, en Scheidel, W. – Reden, S. von (eds.) (2002), *The Ancient Economy*, Edimburgo: 33-49.
- ANDREU EXPÓSITO, R. (2013), *Edició crítica, traducció i estudi de l’Ars Gromaticæ siue geometria gisemundi*. Tesis doctoral. Dir.: C. Ferrero Hernández y O. Olesti Vila. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.
- ANDREU PINTADO, J. (2004a), *Edictum, municipium y Lex: Hispania en época flavia (69-96 d.C.)*, Oxford.
- ANDREU PINTADO, J. (2004b), “Apuntes sobre la *Quirina tribus* y la municipalización flavia de Hispania”, *Revista portuguesa de Arqueologia* 7: 343-364.
- ANDREU PINTADO, J. (2004c), “Latinización y municipalización en el Alto Imperio: Nuevas perspectivas para el estudio de la Hispania de los Flavios”, en F. Beltrán Lloris (ed.), *Antiqua iuniora. En torno al Mediterráneo en la antigüedad*, Zaragoza: 189-210.
- ANDREU PINTADO, J. (2007), “En torno al *ius Latii* Flavio en Hispania. A propósito de una nueva publicación sobre latinidad”, *Faventia* 29, nº 2: 37-46.
- ANDREU PINTADO, J. (2008a), “Municipalización y vida municipal en las comunidades romanas de la Meseta Sur”, en G. Carrasco Serrano, *La ciudad romana en Castilla-La Mancha*, Cuenca: 225-260.
- ANDREU PINTADO, J. (2008b), “Sentimiento y orgullo cívico en Hispania: en torno a las menciones de *origo* en la Hispania Citerior”, *Gerión* 26: 349-378.
- ANDREU PINTADO, J. (2017) “La sacralización del agua en Hispania romana: una perspectiva epigráfica”, en Pérex Agorreta, M. J. – Miró i Alaix, C. (eds.), *VBI AQVAE IBI SALVS. Aguas mineromedicinales, termas curativas y culto a las aguas en la Península Ibérica (desde la Protohistoria a la Tardoantigüedad)*, Madrid: 91-120.



- ANGOSO GARCÍA, L. (1985), “El asentamiento rural romano de El Cenizal (60-70 d.C. – finales del siglo IV d.C.)”, *Salamanca. Revista provincial de Estudios* 17-18: 341-388.
- ARANGIO RUIZ, V. (1990), *La compravendita in diritto romano*, vol. 2, Nápoles.
- ARBOLEDAS MARTÍNEZ, L. (2008), “Aspectos sociales y fiscales en las minas romanas del Alto Guadalquivir”, *Pynerane* 39, nº 2: 71-99.
- ARDEVAN, R. – ZERBINI, L. (2007), *La Dacia romana*, Soveria Mannelli.
- ARES VÁZQUEZ, N. “Un epitafio de esclavos do castro de Lexo”, *Boletín do Museo Provincial de Lugo* 7, nº 2: 65-69.
- ARIÑO GIL, E. – GURT ESPARRAGUERA, J. M. – LANUZA GARRIGA, A. DE – PALET MARTÍNEZ, J.M. (1994), “El estudio de los catastro rurales: una interpretación estratigráfica del paisaje”, *Zephyrus* 47: 189-217.
- ARIÑO GIL, E. – GURT ESPARRAGUERA, J.M. – PALET I MARTÍNEZ, J.M. (2000-01), “La inscripción catastral de Ilici. Ensayos de interpretación”, *Pyrenae*, 31-32: 223-226.
- ARIÑO GIL, E. – GURT ESPARRAGUERA, J.M. (1992-93), “Catastros romanos en el entorno de *Avgusta Emerita*. Fuentes literarias y documentación arqueológica”, *Studia Storica. Historia Antigua* 10-11: 45-66.
- ARIÑO GIL, E. – PALET I MARTÍNEZ, J. M. – GURT ESPARRAGUERA, J. M. (2004), *El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana*, Salamanca-Barcelona.
- ARIÑO GIL, E. (2005), “La Hispania Citerior occidental y la Lusitania septentrional entre Augusto y los Flavios: el *ager per etremitatem mensura comprehensus*”, en *L'Aquitaine et l'Hispanie septentrionale à l'époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux. Colloque Aquitania Sainte, 11-13 septembre 2003 (=Aquitania Supplément 13)*, Burdeos: 95-112.
- ARIÑO GIL, E. (2006), “Modelos de poblamiento rural en la provincia de Salamanca (España) entre la Antigüedad y la Alta Edad Media”, *Zephyrus* 59: 317-337.
- BADIAN, E. (1958), *Foreign clientelae (264-70 B.C.)*, Oxford.
- BAENA DEL ALCÁZAR, L. – BELTRÁN FORTES, J. (2002), *Escrituras romanas de la provincia de Jaén*, Murcia.
- BAGNALL, R. S. – FRIER, B. W. (1994), *The demography of Roman Egypt*, Cambridge.
- BAGNALL, R. S. (1991), “The beginnings of the Roman census in Egypt”, *Greek, Roman and Byzantine Studies* 32: 255-265.
- BAKKER, J. T. (1999), *The mills bakeries of Ostia*, Amsterdam.

- BALBÍN CHAMORRO, P. (2006), *Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la Antigüedad*, Salamanca.
- BALDACCI, P. (1969), “*Patrimonium* e *ager publicus* al tempo dei Flavi. Ricerche sul monopolio del Balsamo Giudaico e sull’uso del termine *fiscus* in Seneca e Plinio il Vecchio”, *La parola del passato* 24: 349-367.
- BALDI, P. (1999), *The Foundations of Latin*, Berlín.
- BALLEINE, C. F. (1906), “The *Tributum Capitis*”, *The Classical Review* 20, nº 1: 51-53.
- BARBATI, S. (2014), “Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del *postliminium*”, en S. Giglio (ed.), *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XX Convegno Internazionale. Roma e barbari nella tarda antichità*, Ariccia: 587-813.
- BARONOWSKI, D. W. (1987), “The Formula Togatorum”, *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 33, nº2: 248-252.
- BARONOWSKI, D. W. (1990), “*Sub Umbra Foederis Aequi*”, *Phoenix* 44, nº 4: 345-369.
- BARRIENTOS GRANDÓN, J. (2006), “*Servitus viae* en Hispania y servidumbres rústicas en provincias (A propósito de Cil. II/7 699a=Ae. 1995, 846)”, en J. L. Linares (coord.), *Liber amicorum Juan Miquel: estudios romanísticos con motivo de su emeritazgo*, Barcelona: 79-96.
- BARTEL, B. (1980), “Colonialism and Cultural Responses: Problems Related to Roman Provincial Analyses”, *World Archaeology* 12, nº 1: 11-26.
- BEJEGA GARCÍA, V. – GONZÁLEZ GÓMEZ DE AGÜERO, E. – CAMPOMANES ALVAREDO, E. – SAN ROMÁN FERNÁNDEZ, F. – MUÑOZ VILLAREJO, F. (2014), “Análisis arqueomalacológico de la *cannaba* de *Ad Legionem VII Geminam* (Puente Castro, León): Primeros resultados”, en J. Honrado, M. Á. Brezmes, A. Tejeiro y O. Rodríguez (coords.), *Investigaciones Arqueológicas en el valle del Duero*, León, vol. 2: 333-346.
- BELLINI, V. (1964), “*Deditio in fidem*”, *Revue historique de droit français et étranger*, 42: 448-457.
- BELTRÁN LLORIS, F. – ARASA I GIL, F. (1980), “Un nuevo caso de *iter priuatus* en una inscripción rupestre de Algimia de Almonacid (El Alto Palancia, Castellón)”, *Cuadernos de prehistoria y arqueología castellonenses* 7: 127-134.
- BELTRÁN LLORIS, F. – VELAZA FRÍAS, J. (2013), “El límite occidental del convento jurídico Cesaraugustano”, *Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra* 21: 51-71.

- BELTRÁN LLORIS, F. (1988), “Un espejismo historiográfico: las ‘organizaciones gentilicias’ hispanas”, en G. Pereira (dir.), *Actas I Congreso Peninsular de Historia Antigua*, Santiago de Compostela: 197-237.
- BELTRÁN LLORIS, F. (1999), “*Municipium c. R.*, *oppidum c.R.* y *oppidum Latinum* en la NH de Plinio: una revisión del problema desde la perspectiva hispana”, en J. González (ed.), *Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano*, Sevilla: 247-267.
- BELTRÁN LLORIS, F. (2001), “La hospitalidad celtibérica: una aproximación desde la epigrafía latina”, *Palaeohispanica* 1: 35-62.
- BELTRÁN LLORIS, F. (2006), “An irrigation Decree from Roman Spain: The *Lex Rivi Hiberiensis*”, *Journal of Roman Studies* 96: 147-197.
- BELTRÁN LLORIS, F. (2007), “*Locorum nuda nomina*? La estructura de la descripción pliniana de Hispania”, en G. Cruz Andreotti, P. Le Roux y P. Moret (coords.), *La invención de una geografía de la Península Ibérica*, vol. 2: 115-160.
- BELTRÁN LLORIS, F. (2009), “*Vtra eos palos*. Una relectura de la línea 7 de la *tabvla Contrbiensis*”, en *Espacios, usos y formas de la epigrafía en época antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U. Stylow (=Anejos de Archivo Español de Arqueología 48)*, Madrid: 33-42.
- BELTRÁN LLORIS, F. (2010), “*Hospitium* y ciudadanía en la tábula de El Picón”, en I. Sastre y A. Beltrán, *El bronce de El Picón (Pino del Oro). Procesos de cambio en el occidente de Hispania*, Castilla y León: 129-136.
- BELTRÁN LLORIS, F. (2014), “La *lex rivi Hiberiensis* nel suo contesto: i *pagi* e l’organizzazione dell’irrigazione in *Caesar Augusta*”, en L. Maganzini y C. Buzzacchi (eds.), *Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana*, Nápoles: 55-74.
- BELTRÁN LLORIS, F. – UNTERMANN, J. – DE HOZ BRAVO, J. J. (1996), *El tercer bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca)*, Zaragoza.
- BELTRÁN ORTEGA, A. – RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. – SASTRE PRATS, I. (2015), “Territorios imperiales en el occidente de la península Ibérica. Una visión desde el estudio del paisaje”, en A. Beltrán, I. Sastre y M. Valdés (eds.), *Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde la antigüedad. Homenaje a Domingo Plácido. Actas del XXXI coloquio GIREA*, Madrid: 607-621.
- BELTRÁN ORTEGA, A. (2015), *Epigrafía y territorio: Las ‘civitates’ de la ‘Asturia’ meridional y la ‘Lusitania’ nororiental*. Tesis doctoral inédita. Dir.: I. Sastre Prats y M. R. Hernando Sobrino. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- BENARIO, H. W. (1954), “The Dediticii of the Constitutio Antoniniana”, *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 85: 188-196.

- BÉRENGER-BADEL, A. (2007), “Le cumul du gouvernement de province et d’une mission ordinaire”, *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani Inscriptionibus Descriptae* (Barcelona, 3-8 septiembre 2002), Barcelona: 141-146.
- BERMEJO BARRERA, X. C. (1978-80), “Variaciones sobre el tema de la centuria”, *Cuaderno de estudios gallegos* 93-95: 95-117.
- BERTRAND, J. M. (1991), “Territoire donné, territoire attribué: note sur la pratique de la attribution dans le monde impériale de Rome”, *Cahiers du Centre Glotz* 2, 125-164.
- BEVILACQUA, G. – GIANNOBILE, S. (2000), “Magia rurale siciliana: iscrizioni di Noto e Modica”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 133: 135-146.
- BICKERMANN, E. (1926), *Das Edikt des Kaisers Caracalla in ‘P. Giess. 40*, Berlín.
- BIRLEY, A. R. (1997), *Hadrian. The restless emperor*, Oxon.
- BLANCH NOUGUÉS, J. M. (2013), “Dignidad personal y libertad: libertad y ciudadanía en la Antigua Roma”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid* 17: 163-182.
- BLÁZQUEZ CERRATO, C. (1998), “Aproximación a la circulación monetaria en torno al *Iter ab Emerita Asturicam*”, *Zephyrus* 51: 208-209.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (1983), “Los astures y Roma”, en J. L. Maya (ed.), *Indigenismo y romanización en el Conventus Asturum*, Madrid: 143-163.
- BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. (2000), “El emperador Nerón en Hispania”, en J. L. Maya (ed.), *Los pueblos de España y el Mediterráneo en la Antigüedad. Estudios de Arqueología, Historia y Arte*, Madrid: 331-45.
- BOTTO, M. M. D. (1986), “Inscrição Rupestre de Penela da Beira”, *Ficheiro Epigráfico* (=Suplemento de ‘Conimbriga’) 16, nº 72.
- BOWERSOCK, G. W. (1987), “The mechanics of subversión in the Roman provinces”, *Zeitschrift. Entretiens sur l’Antiquité classique* 33: 291-320.
- BOWMAN, A. – GARNSEY, P. – RATHBONE, D. (2000) (ed.), *The Cambridge Ancient History. Volume XI: The High Empire, A.D. 70-192*, Cambridge.
- BOWMAN, D. A. (1990), “The *Formula Sociorum* in the Second and First Centuries B. C.”, *The Classical Journal* 85, nº 4: 330-336.
- BOYANCÉ, P. (1962), “*Fides* et le serment”, en M. Renard (ed.), *Hommages à Albert Grenier* (= 1972, *Études sur la religion romaine*, Roma), Bruselas: 91-103.
- BOYANCÉ, P. (1972), “*Fides Romana* et la vie internationale”, *Publications de l’École française de Rome* 11, nº1: 105-119.

- BOZZA, F. (1942), “Caio II, 7 e la proprietà provinciale”, *Athenaeum* 20: 66-85.
- BOZZA, F. (1943), “Caio II, 7 e la proprietà provinciale (continuazione)”, *Athenaeum* 21: 13-20.
- BOZZA, F. (1964), “D. 41.2.3.23 e la classificazione dei *genera possessionum*”, *Synteleia V. Arangio-Ruiz* 2: 616-622.
- BRACCINI T. – SCORSONE, M. (eds.) (2013), *Flegonte di Tralle. Il libro delle meraviglie e tutti i frammenti*, Turín.
- BRAÑAS ABAD, R. (1995), *Indíxenas e Romanos na Galicia Céltica*, Santiago de Compostela.
- BRAÑAS ABAD, R. (2004), “A sociedades castrexa a través da epigrafía”, *Cuadernos de Estudios Gallegos* 51, nº 117: 155-205.
- BRAVO BOSCH, M. J. (2016), “La relación del mundo romano con el medioambiente” en A. Fernández de Buján (dir.), *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano III*, Madrid: 173-197.
- BRAVO CASTAÑEDA, G. (2001) (coord.), *La caída del Imperio Romano y la génesis de Europa*, Madrid.
- BROUGHTON, T.R.S. (1936), “On Two Passages of Cicero Referring to Local Taxes in Asia”, *The America Journal of Philology* 57, nº 2: 173-176.
- BROUX, Y. – DEPAUW, M. (2015), “Developing Onomastic Gazetteers and Prosopographies for the Ancient World through Named Entity Recognition and Graph Visualization: Some Examples from Trimegistos People”, en L. M. Aiello y D. McFarland (eds.), *Social Informatics. SocInfo 2014 International Workshops, GMC and Histinformatics*, Barcelona: 304-313.
- BRUNT, P. A. (1981), “The Revenues of Rome. Review of *Untersuchungen zu den Direkten Staatsabgaben der Römischen Kaiserzeit (27 V.Chr. – 284 N. Chrs.)* by Lutz Neesen”, *Journal of Roman Studies* 71: 161-172.
- BRUNT, P. A. (1990), “Publicans in the Principate”, *Roman Imperial Themes*, Oxford: 354-432.
- BUENO DELGADO, J. A. (2003-2004), “El Bronce de Bonanza”, *Anuario de la Facultad de Derecho*, nº 2004: 154-165.
- BURDESE, A. (1989), “La proprietà e le proprietà nell’esperienza giuridica romana”, *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 55: 411-418.
- BURMAN, P. (1734), *De vectigalibus populi romani*, Leiden.
- BUTCHER, K. – PONTING, M. (2005), “The Roman *Denarius* under the Julio-Claudian Emperors: Mints, Metallurgy and Technology”, *Oxford Journal of Archaeology* 24, nº 2: 163-197.

- BUTCHER, K. (2003), *Roman Syria and the Near East*, Los Ángeles.
- CAAMAÑO GESTO, J. M. (1979), “Marcas de alfarero en cerámicas romanas encontradas en Galicia”, *Gallaecia* 5: 63-99.
- CABALLOS RUFINO, A. (1978), “*Colonia Claritas Iulia Vcubi*”, *Habis* 9: 273-292.
- CABALLOS RUFINO, A. (2010), “Colonizzazione cesariana, legislazione municipale e integrazione provinciale: la Provincia Hispania Ulterior”, en G. Urso (ed.), *Cesare: precursore o visionario?*, Pisa: 63-84.
- CADIOU, F. (2008), *Hibera in Terra Miles: Les armées romaines et la conquête de l’Hispanie sous la République (218-45 av. J.-C.)* (=Biblioteca de la Casa de Velázquez 38), Madrid.
- CAGNAT, M. R. (1882), *Les impôts indirects chez les romains*, París.
- CANTO, A. M. (1990), “La *tabula Lougeiorum*: un documento a debate”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid* 17: 167-275.
- CALO LOURIDO, F. (1994), *A plástica da Cultura Castrexa galego-portuguesa*, A Coruña.
- CALORE, A. (2003-04), *Forme giuridiche del ‘Bellum Iustum’*, Brescia.
- CALZADA GONZÁLEZ, A. (2010), “*Origo, incolae, municipes y civitas romana* a la luz de la *lex Irnitana*” *Revista Internacional de Derecho Romano* 4 (=Anuario de historia del derecho español 80: 673-688): 17-51.
- CAMPBELL, B. (2000), *The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, Text, Translation and Commentary*, Londres.
- CANTO, A. (1996), “*Oppida stipendiaria*: los municipios Flavios en la descripción de Hispania de Plinio”, *Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid* 23: 212-243.
- CANTO, A. (2001), “Rarezas epigráficas e históricas en los nuevos edictos augusteos de El Bierzo”, en L. Grau Lobo y J. L. Hoyas (eds.), *El bronce de Bembibre. Un edicto del emperador Augusto del año 15 a.C.*, León: 153-164.
- CAPOCCI, V. (1925), “La Costituzione Antoniniana”, *Atti Acc. Lincei*, 322: 1-136.
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (1991), “I rapporti fondiari fra ordinamenti locali e integrazione giuridica”, en Pani, M. (ed.), *Continuità e trasformazioni fra Repubblica e Principato. Istituzioni, política e società*, Bari: 233-248.
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (2000), *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della ‘civitas Romana’*, Roma.

- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. (2002), *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Nápoles.
- CAPPONI, L. (2011), *Roman Egypt*, Londres.
- CARBALLO ARCEO, L. X. (1986), *Povoamento castrexo e romano da Terra de Trasdeza*, Santiago de Compostela.
- CARBALLO ARCEO, L. X. (1990), "Los castros de cuenca media del río Ulla y sus relaciones con el medio físico", *Trabajos de Prehistoria*, 47: 161-199.
- CARBALLO ARCEO, L. X. (2001), *A cultura Castrexa na Comarca de Deza*, Lalín.
- CARBONELL I MANILS, J. – GIMENO PASCUAL, H. – STYLOW, A. U. (2007), "Pons Traiani, Qantara es-Saif , Puente de Alcántara. Problemas de epigrafía, filología e historia", en M. Mayer, G. Baratta y A. Guzmán (eds.), *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Provinciae Imperii Romani Inscriptionibus Descriptae*, vol. 1, Barcelona: 247-258.
- CARCOPINO, J. (1919), *La Loi de Hiéron et les Romains*, Paris.
- CARDOVANA, O. D. (2012), "Historical Ecosystems. Roman Frontier and Economic Hinterlands in North Africa", *Historia* 61, nº 4: 458-494.
- CARDOVANA, O. D. (2014), "Vici e agri vectigales nelle testimonianze epigrafiche e nei gromatici (Britannia)", en E. Werner y P. Funke (eds.), *XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (27-31 Augusti MMXII)*: 595-597.
- CARDOZO, M. (1972), *Catalogo do Museo de Martins Sarmento. Secção de Epigrafia latina e de Escultura Antiga*, Guimarães.
- CARDOZO, M. (1985), *Catálogo do Museu de Arqueologia da Sociedade Martins Sarmento: Secção de Epigrafia Latina e de Escultura Antiga*, Guimarães.
- CARNEIRO, S. (2005), "Novos contributos para a epigrafia de *Aquae Flaviae* – achados fortuitos 1999-2005", *Aquae Flaviae* 33: 102-119.
- CARO BAROJA, J. (1977), "Organización Social de los pueblos del Norte de la Península Ibérica en la Antigüedad", *Legio VII Gemina*, León: 13-62.
- CARRASCO SERRANO, G. (2009-2010), "Contribución al análisis del proceso de romanización de la provincia de Albacete", *Hispania Antiqua* 33-34: 157-168.
- CARREÑO SÁNCHEZ, R.M. (2011), '*Pactionibus et stipulationibus*'. *Contribución al estudio de la constitución de servidumbres prediales en el Derecho Romano clásico*. Tesis doctoral inédita. Dir.: J. L. Linares Pineda. Universitat de Girona, Girona.

- CARRETERO VAQUERO, S. (1999), “El ejército romano del Noroeste peninsular durante el Alto Imperio. Estado de la cuestión”, *Gladius* 19: 143-156.
- CARVALHO, H. P. A. – AZEVEDO MENDES, F. (2011), “Centuriatione ed evoluzione degli assetti agrari intorno alla città di Bracara Augusta (*Hispania Citerior Tarraconensis*)”, en P. L. Dall’Aglío y G. Rosada (eds), *Atti del Convegno Sistemi centuriali e opere di assetto agrario tra età romana e primo medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi e interpretativi*, Pisa: 155-166.
- CARVALHO, H. P. A. (2008), *O povoamento romano na fachada ocidental do Conventus Bracaraensis*. Tesis doctoral. 2 vols. Dir.: M. M. R. Martins. Universidade do Minho, Braga.
- CARVALHO, H. P. A. (2012), “Marcadores da paisagem e intervenção cadastral no território próximo da cidade de Bracara Augusta (*Hispania Citerior Tarraconensis*)”, *Archivo Español de Arqueología* 85: 149-166.
- CARVALHO, P. C. (2006), *Cova da Beira: ocupação e exploração do território na época romana*, Coímbra.
- CASTILLO PASCUAL, M. J. (1996), *Espacio en orden: el modelo gromático-romano de ordenación del territorio*, Logroño.
- CASTILLO PASCUAL, M. J. (1998a), *Hyginvs et Sicvlvs Flaccvs. Opuscula agrimensorum veterum* (=Biblioteca de textos latinos 1), La Rioja.
- CASTILLO PASCUAL, M. J. (1998b), “Agennius Urbicus ¿Agrimensor o jurista?”, *Iberia* 1: 95-107.
- CASTILLO PASCUAL, M. J. (2009), “Documentos de regadío en el valle del Ebro. ¿Figuraba la vascona *Cascantum* en el Bronce de Agón?”, en J. Andreu (ed.), *Los Vascones de las fuentes antiguas*, Barcelona: 415-421.
- CASTRO NUNES, J. DE (1950), “Os miliários de Nerva na *Gallaecia*”, *Cuaderno de Estudios Gallegos*, 5: 161-174.
- CATAUDELLA, M. R. (1986), “Società e diritto nell’Africa romana. *Ius Italicum*: aspetti e riflessioni”, en A. Mastino (ed.), *L’Africa romana. Atti del IV Convegno di studio*, Sassari: 117-132.
- CAUET, B. (2004), “Apport de l’archéologie minière à l’étude de la mise en concessions des mines romaines aux IIe et IIIe siècles. L’exemple de *Vipasca* (Aljustrel, Portugal) et d’*Alburnus Maior* (Rosia Montana, Roumanie)”, en J.-G. Gordes, E. Cerrillo y T. Nogales (eds.), *V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana*, Cáceres: 33-60.
- CELIS SÁNCHEZ, J. (1985), *El poblamiento prehistórico y protohistórico del valle medio del río Esla (Carta arqueológica)*, León.



- CEPAS PALANCA, A. (1995), “La organización administrativa del territorio de la Hispania Romana”, *Stvdia historica. Historia antigua* 13-14: 143-151.
- CEPEDA OCAMPO, J.J. – IGLESIAS GIL, J.M. – RUIZ GUTIÉRREZ, A. (2008), “Territorio rural y espacio urbano en *Ivliobriga*, en J. Mangas y M. A. Novillo (eds.), *El territorio de la ciudades romanas*, Madrid: 309-332.
- CEPEDA OCAMPO J.J. – IGLESIAS GIL J.M. – RUIZ GUTIÉRREZ, A. (2009), “El foro romano de *Ivliobriga* (Cantabria): Nuevas investigaciones arqueológicas”, *Archivo Español de Arqueología* 82: 97-114.
- CHASTAGNOL, A. (1990), “L’onomastique de type pérégrin dans les cités de la Gaule Narbonnaise”, *Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité* 102, nº2: 573-593.
- CHAYANOFF, A. V. (1985), *La organización de la unidad económica campesina*, Buenos Aires.
- CHRIST, M. R. (2007), “The Evolution of the Eispheia in Classical Athens”, *The Classical Quarterly* 57, nº 1: 53-69.
- CHRISTOL, M. (1989), “Le droit latin en Narbonnaise: l’apport de l’épigraphie (en particulier, celle de la cité de Nîmes)”, en C. Castillo (ed.), *Novedades de Epigraphia Jurídica en el último decenio*, Pamplona: 65-76.
- CLAVEL-LÉVÊQUE, M. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1998), *Atlas historique des Cadastres d’Europe II*, Luxemburgo.
- CLAVEL-LÉVÊQUE, M. (1983) (dir.), *Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques (Table ronde de Besançon, Mai 1980)*, Paris.
- CLAVEL-LÉVÊQUE, M. (1988), “Résistance, révoltes et cadastres: problèmes du contrôle de la terre en Gaule transalpine”, en Toru Yuge – Masaoiki Doi (ed.), *Forms of Control and Subordination in Antiquity*, Leiden-New York- KØbenhavn-Köln: 177-208.
- CLAVEL-LÉVÊQUE, M. (1993), “Un plan cadastral à l’échelle. La forma de bronze de Lacimurga”, *Estudios de la Antigüedad* 6-7: 175-82.
- CLEMENTE FERNÁNDEZ, A. I. (2015), “Diversas consideraciones en torno al municipio de Munigua y la epístula de Tito a los muniguenses”, *Revista General de Derecho Romano* 25.
- COCH ROURA, N. (2017), *La forma estipulatoria. Una aproximación al estudio del lenguaje directo en el Digesto*, México.
- COIXÃO, A. (1996), *Carta arqueológica do concelho de Vila Nova de Foz Côa*, Vila Nova de Foz Côa.

- CONDE GUERRI, E. (2003), *La ciudad de Carthago Nova: la documentación literaria (Inicios - Julioclaudios)*, Murcia.
- CORBIER, M. (1988), “L’impôt dans l’Empire romain: résistances et refus (I<sup>er</sup>-III<sup>e</sup> siècles)”, en T. Yuge y M. Doi (eds.), *Forms of Control and Subordination in Antiquity*, Leiden-New York-København-Köln: 259-274.
- CORBIER, M. (1991), “Cité, territoire et fiscalité”, *Epigrafia. Actes du colloque international d’épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance* (=Collection de l’École française de Rome 143), Roma: 629-665.
- CORDERO RUIZ, T. (2010), “El cerro del Cogolludo. *Lacimurga Constantia Iulia* o *Lacimurga/Lacinimurga*”, *Romula* 9: 7-18.
- CORREIA SANTOS, M. J. – PIRES, H. – SOUSA, O. (2014), “Nuevas lecturas de las inscripciones del santuario de Panóias (Vila Real, Portugal)”, *Sylloge epigraphica Barcinonensis*, 12: 197-224.
- CORTÉS BÁRCENA, C. (2009), “El territorio militar en la epigrafía de la Hispania romana: los *termini pratorum*”, en A. Morillo, N. Hanel y E. Martín (eds.), *LIMES XX. XX Congreso Internacional de Estudios sobre la frontera romana. León, (España), septiembre, 2006* (=Anejos de Gladius 13, vol. I), Madrid: 91-101.
- CORTÉS BARCENA, C. (2013), *Epigrafía en los confines de las ciudades romanas. Los ‘Termini Publici’ en Hispania, Mauretania y Numidia*, Roma.
- CORTIJO CEREZO, M. L. (2007), “El papel del *conventus iuridicus* en la descripción geográfica de Plinio el Viejo. El caso Bético”, en G. Cruz Andreotti, P. Lerroux y P. Monet (eds.), *La invención de una geografía de la península Ibérica (Actas del Coloquio Internacional celebrado en la Casa de Velázquez de Madrid entre el 3 y el 4 de abril de 2006)*, vol. 2, Málaga-Madrid: 271-304.
- COSTA GARCÍA, J. M. Y CARLSSON-BRANDT FONTÁN, E. (2015), “Violencia pública y privada en la antigua Gallaecia”, en F. Suárez y A. Cabana (coords.), *Historia, cultura, violencia. Actas do X Curso de Primavera (Lugo, 22-25 de abril de 2014)*, Santiago de Compostela: 11-34.
- COTTON, H. M.; DI SEGNI, L.; ECK, W.; ISAAC, B.; KUSHNIR-STEIN, A.; MISGAV, H.; PRICE, J.; ROLL, I.; YARDENI, A. (eds.), *Corpus Inscriptionum Iudaeae / Palaestinae*, Jerusalén.
- COURAULT, C. (2015), “El concepto de *oppidum* en Hispania: entre síntesis y reflexión”, *MUNIBE. Antropologia-Arkeologia* 66: 259-270.
- COWAN, R. (2014), *Roman Guardsman 62 BC – AD 324*, Oxford.

- CRAWFORD, M. H. (1996), *Roman Statutes*, 2 vols., Londres.
- CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, S. (2009-2010) “Corpus de inscripciones sobre la esclavitud infantil en Hispania romana”, *Historia Antiqua* 33-34: 57-84.
- CRIFÒ, G. (1961), *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, Milano.
- CURADO, F. P. – MOREIRA, S. – SALVADO, P. (2004), “Maro de propriedade (?), Castelo Branco”, *Ficheiro Epigrafico (Suplemento de 'Conimbriga')* 75, nº 334.
- CURCHIN, L. A. (1990), *The local magistrates of Roman Spain*, Toronto.
- CURCHIN, L. A. (2015), “*Magistri* or *Magistratus*? A problem in hispano-latin epigraphy”, *Veleia* 32: 159-76.
- CURRÁS REFOJOS, B. – SASTRE PRATS, I. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. (2016), “Del castro a la *civitas*: dominación y resistencia en el Noroeste Hispano”, en R. Morais, M. Bandeira, M. J. Sousa (eds.), *Celebração do bimilenário de Augusto. 'Ad nationes. Ethnous Kallaikon'*, Braga: 125-135.
- CURRÁS REFOJOS, B. X. (2014), *Transformaciones sociales y territoriales en el Baixo Miño entre la Edad del Hierro y la integración en el Imperio Romano*. Tesis doctoral inédita. 3 vols.. Dir: P. López Barja y A. Orejas- Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- CURSI, M. F. (1996), *La struttura del 'postlimium' nella Repubblica en el Principato*, Napoli.
- D' ENCARNAÇÃO, J. –MOREIRA, J. B. (2010), “*Eburobrittium* e as suas epígrafes singulares”, *Conimbriga* 49: 41-67.
- D'AMATI, L. (2003), “*Matrimonium* e *postlimium*: brevi considerazioni”, *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Sao Pão Paulo* 98: 43-56.
- D'ORS, A. (1944), “Estudios sobre la *Constitutio Antoniniana* II. Los dediticios y el edicto de Caracala”, *Anuario de historia del derecho español* 15: 162-204.
- D'ORS, A. (1953), *Epigrafía jurídica de la España Romana*, Madrid.
- D'ORS, Á. (1974) “La condición jurídica del suelo en las provincias de Hispania”, en *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti local nelle province romane con particolare riguardo alle condizone giuridice del suolo* (=Academia Nazionale dei Lincei 194), Roma: 253-268.
- DARDAINE, S. (1999), “Les affranchis des cités dans les provinces de l'Occident Romain: statut, onomastique et nomenclature”, en J. González (ed.), *Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano*, Sevilla: 213-228.
- DAVIES, J. K. (2005), “Linear and Nonlinear Flow Models for Ancient Economies”, en J. G Manning e I. Morris (eds.), *The Ancient Economy. Evidence and Models*, Stanford: 127-156.

- DE CHURRUCA, J. (1998), “La actitud de Roma ante los judíos de la diáspora en los dos primeros siglos del Principado” en *Cristianismo y mundo romano*, Bilbao: 40-67.
- DE DOMINICIS, M. (1964), “In tema di giurisdizione fiscal nelle province senatorie”, *Synthese* 2: 653-662.
- DE LA HOZ MONTOYA, J. (2009), *Perspectivas económicas del reinado de Nerón. Producción monetaria y suministro de metales*. Tesis doctoral. Dir. G. Chic García. Universidad de Sevilla, Sevilla.
- DE LA HOZ MONTOYA, J. (2010), “Oro y plata en la política monetaria de Nerón”, en A. Storch y G. D. Merola (eds.), *Interventi imperiali in campo economico e sociale da Augusto al tardoantico*, Bari: 97-120.
- DE MARTINO, F. (1973), *Storia de la costituzione romana*, vol. 2, Nápoles.
- DE MARTINO, F. (1979), “*Ager privatus vectigalisque*”, *Diritto e Società nell’antica Roma*, Roma.
- DE VISSCHER, F. (1965), *Les édits d’Auguste découverts a Cyrène*, Osnabrück.
- DEGRASSI, A. (1954), *Il confine nord-orientale dell’Italia romana*, Berna.
- DÍAZ ARIÑO, B. (2008), *Epigrafía latina republicana de Hispania (ELRH)* (=Col. *Instrumenta* 26), Barcelona.
- DIEGO SANTOS, F. (1985), *Epigrafía romana de Asturias*, Oviedo.
- DÍEZ DE VELASCO ABELLÁN, F. P. (1997), “Termalismo y religión: consideraciones generales”, en M. J. Pérex Agorreta (ed.), *Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas: Arnedillo (La Rioja), 3-5 octubre 1998*, Madrid: 85-104.
- DOMERGUE, C. – SILLÈRES, P. (1977), *Minas de oro romanas en la provincia de León*, vol. 1 (=Excavaciones Arqueológicas en España 93), Madrid.
- DOMERGUE, C. (1972-74), “À propos de Pline, *Naturalis Historia*, 33, 70-78, et pour illustrer sa description des mines d’or romaines d’Espagne”, *Archivo Español de Arqueología* 45-47: 499-528.
- DOMERGUE, C. (1986), “Dix-huit ans de recherche (1968-1986) sur les mines d’or romaines du Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique”, *Actas del I Congreso Internacional Astorga Romana*, vol. 2: 7-101.
- DOMOKOS, G. – JEROLMACK, D.J. – SIPOS, A. A. – TÖRÖK, Á. (2014), “How River Rocks Round: Resolving the Shape-Size Paradox” *PLoS ONE* 9, nº 2.
- DOPICO CAÍNZOS, D. – PEREIRA MENAUT, G. (1993), “La gran inscripción de Penedo de Remeseiros (CIL II 2476). Sobre la forma jurídica de tenencia de la tierra entre los indígenas bajo dominio romano”, *II Congresso Peninsular de História Antiga*, Coímbra: 633-641.

- DOPICO CAÍNZOS, M. D. – SANTOS YANGUAS, J. (2016), “La creación de la red de ciudades del poder en la Hispania Citerior”, en *Revista de Historiografía* 25: 111-131.
- DOPICO CAÍNZOS, M. D. (1986), “Los *conventus iuridici*. Origen cronología y naturaleza histórica”, *Gerión* 4: 265-283.
- DOPICO CAÍNZOS, M. D. (1988), *La Tabula Lougeiorum. Estudios sobre la implantación romana en Hispania (=Anejos de Veleia 5)*, Vitoria.
- DOPICO CAÍNZOS, M. D. (2006), “Política imperial y romanización: el papel del emperador Augusto en la transformación de los pueblos indígenas del Noroeste hispano”, *Gallaecia* 25: 427-443.
- DOPICO CAÍNZOS, M. D. (2013), “Nuevas formas de administración, nuevas formas de control: la fundación de *Lucus Augusti* y su *conventus*”, *Portvgalia. Nova Série* 34: 83-100.
- DRURY, P. J. (1984), “The Temple of Claudius at Colchester Reconsidered”, *Britannia* 15: 7-50.
- DUBOIS, M. S. (2015), *Auxillae. A compendium of non legionary units of the Roman Army*, Raleigh.
- DUCOS, M. (1999), “Les jurists romains et le domaine agraire”, en Hermon, E. (ed.), *La question agraire à Roma: droit romain et société. Perceptions historiques et historiographiques*, Como: 120-129.
- DUDLEY, D. R. (1963), *The Rebellion of Boudicca*, Londres.
- DUMÉZIL, G. (1984), “Reflexiones sobre la ciudad antigua”, en Coulanges, F. [1864], *La ciudad antigua* (trad. por J. F. Yvars), Barcelona: 7-31.
- DUNCAN-JONES, R. (1994), *Money and government in the Roman Empire*, Cambridge.
- DUNNETT, R. (1975), *The Trinovantes*, Liverpool.
- DYSON, S. L. (1971), “Native Revolts in the Roman Empire”, *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 20, nº 2: 239-274.
- EICHHORN, K. F. (1843), *Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte*, Göttingen.
- ELLIOT, T. (2004), *Epigraphic Evidence for Boundary Disputes in the Roman Empire*, Chapel Hill.
- ENCARNAÇÃO, J. (1975), *Divinidades sob o domínio Romano em Portugal*, Lisboa.
- ENCARNAÇÃO, J. (1994), “Apostilas epigráficas”, *Hvmanitas* 46: 217-230.

- ENCARNAÇÃO, J. D. – PINHO, L. M. S. (2001), “Inscrição rupestre de Cinfães (*Conventus Scallabitanus*)”, *Ficheiro Eipigráfico (Suplemento de ‘Conimbriga’)* 66, nº 299.
- ERDKAMP, P. (1999), “Agriculture, underemployment and the cost of rural labour in the Roman World”, *The Classical Quaterly* 49, nº 2: 556-572.
- ESCRIBANO PAÑO, M. V. (2005), “Mommsen y el Principado: la descripción del jurista” en Matínez-Pinna, J. (coord.), *En el centenario de Theodor Mommsen (1817-1903): homenaje desde a Universidad española*, Málaga: 253-267.
- ESPADA RODRÍGUEZ, J. (2013), *Los dos primeros tratados romano-cartagineses. Análisis historiográfico y contexto histórico*, Barcelona.
- ESPAÑA CHAMORRO, S. (2017), *Límites y territorios de la Bética Romana*. Tesis doctoral inédita. Dir.: J. M. Luzón y M. C. Cardete. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- ESPARZA ARROYO, A. (1986), *Los castros de la Edad del Hierro del Noroeste de Zamora*, Zamora.
- ESPINOSA ESPINOSA, D. (2009), “El *ius Latii* y la integración jurídica de Occidente. Latinización vs. Romanización”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II* 22: 236-247.
- ESPINOSA ESPINOSA, D. (2013), *Plinio y los ‘oppida de antiguo Lacio’: el proceso de difusión del ‘Latium’ en Hispania Citerior*. Tesis doctoral. Dir. E. B. García. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- ESPINOSA, U. (1988), “Riqueza mobiliaria y promoción política, los *Mamili de Tritium Magallum*”, *Gerión* 6: 263-72.
- ESTEFANIA, D. (1958), “Notas para la delimitación de los conventos jurídicos en España”, *Zephyrus* 9: 51-57.
- ÉTIENNE, R. – FABRE, G. – LE ROUX, P. – TRANOY, A. (1976), “Les dimensions sociales de la romanisation dans la Péninsule Ibérique des origines à la fin de l’Empire”, *VI Congres International d’Etudes Classiques*, París: 95-107.
- ÉTIENNE, R. (1958), *Le culte imperial dans la péninsule Ibérique d’Auguste a Dioclétien*, Paris.
- FARIÑA BUSTO, F. (1991), “Dos notas a propósito de Castromao (Celanova, Ourense)”, *Cuadernos de Estudios Gallegos* 39, fasc. 104: 57-71.
- FERCHIOU, N. – GABILLON, A. (1985), “Une inscription grecque magique de la région de Bou Arada (Tunisie), ou les quatre plaies de l’agriculture Antique en Proconsulaire”, en S. Lancel (ed.), *Actes du II Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord (=Bulletin Archéologique*

*du Comité des Travaux Historique et Scientifiques*, fasc. 19B), París: 109-125.

FERNANDES, L. S. – CARVALHO, P. S. – FIGUEIRA, N. (2009), “Divinidades indígenas numa ara inédita de Viseu”, *Acta Paleohispanica. Actas do X coloquio sobre línguas e culturas paleo-hispânicas* (=Paleohispánica 9), Zaragoza: 143-155.

FERNÁNDEZ CALO, M. (2016), “O desenvolvimento político pre-municipal dos pobos galaicos”, *Gallaecia* 35: 99-128.

FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (2008), “Las dagas del ejército altoimperial en Hispania”, *Gladius* 28: 87-175.

FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (2010), “Restos del armamento de la *legio IIII Macedonica* hallados en su campamento de Herrera de Pisuerga (Palencia, España)”, *Gladius* 30: 99-116.

FERNÁNDEZ NIETO, F. J. (1994-95), “El uso mágico de las muelas (con una referencia a la arqueología espacial)”, *ARSE: Boletín Anual del Centro Arqueológico Saguntino* 28-29: 109-116.

FERNÁNDEZ NIETO, F. J. (2005), “Un *catillus* de Lugo y las virtudes mágicas de las soleras y volanderas *in finibus*”, *MHNNH. Revista Internacional de Investigación sobre Magia y Astrología Antigua* 5: 343-354.

FERNÁNDEZ OCHOA, C. – MORILLO Cerdán, Á. – GIL SENDINO, F. (2012), “El *Itinerario de Barro*. Cuestiones de autenticidad y lectura”, *Zephyrus* 70: 151-179.

FERNÁNDEZ OCHOA, C. – MORILLO Cerdán, Á. – VILLA VALDÉS, Á. (2005), “La torre de Augusto en la Campa Torres (Gijón, Asturias). Las antiguas excavaciones y el epígrafe de Calpurnio Pisón”, *Archivo Español de Arqueología* 78: 129-146.

FERNÁNDEZ OCHOA, C. – MORILLO Cerdán, Á. (1999), *La tierra de los Astures. Nuevas perspectivas sobre la implantación romana en la antigua Asturias*, Gijón.

FERNÁNDEZ OCHOA, C. – MORILLO Cerdán, A. (2002), “El Convento Araugustano y las Aras Sestianas: reflexiones sobre la primera organización administrativa del Noroeste hispano”, *Latomus* 61: 889-910.

FERNÁNDEZ OCHOA, C. – MORILLO Cerdán, Á. (2008), “La romanización atlántica: modelo o modelos de implantación romana en el Noroeste peninsular”, *Portvgalia. Nova Série* 36: 183-197.

FERNÁNDEZ OCHOA, C. – SALIDO DOMÍNGUEZ, J. – ZARZALEJOS PRIETO, M. (2014), “Las formas de ocupación rural en Hispania. Entre la terminología y la praxis arqueológica”, *Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid* 40: 111-136.

- FERNÁNDEZ PALACIOS, F. – MOLINERO ARROYABE, J. T. (2005), “La colonia romana de *Flaviobriga* y su *territorium*. (Primera parte)”, *Hispania antiqua* 29: 79-105.
- FERNÁNDEZ PALACIOS, F. (2009), ¿Revueltas en la Península Ibérica en tiempos de Nerón?, *Aquila Legionis* 12: 81-99.
- FERNÁNDEZ VEGA, P. Á. – BOLADO DEL CASTILLO, R. – CALLEJO GÓMEZ, J. – MANTECÓN CALLEJO, L. (2012), “Un nuevo término augustal del *ager Iuliobrigensium*”, *Archivo Español de Arqueología* 85: 267-271.
- FERNÁNDEZ-POSSE, M. D. – SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. (1988), *La Corona y el Castro de Corporales II. Campaña de 1983 y prospecciones en la Valderia y la Cabrera*, Madrid.
- FERNÁNDEZ-POSSE, M. D. – SÁNCHEZ-PALENCIA, F. J. (1998), “Las comunidades campesinas en la cultura castreña”, *Trabajos de Prehistoria* 55, nº 2: 127-150.
- FERREIRA, J. A. P. (1953), *Antiguidades de Numão*, Oporto.
- FINLEY, M. I. (2003) [1973], *La economía de la antigüedad*, México.
- FISHWICK, D. (1997), “The Provincial Centre at *Camulodunum*: Towards an Historical Context”, *Britannia* 28: 31-50.
- FLEMING, A. (2007), *The Dartmoor Reaves: Investigating Prehistoric Land divisions*, Oxford.
- FONTE, J. – VALDEZ, J. – SANDE LEMOS, F. – CRUZ, G. (2011), “Citânia de Briteiros e médio vale do Ave (NW de Portugal): SIG e análise arqueológica do território”, en V. Mayoral y S. Celestino (eds.), *Tecnologías de Información Geográfica y análisis arqueológico del territorio. Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida* (=Anejos de Archivo Español de Arqueología 59), Mérida: 359-366.
- FONTES, L. – VILAR, B. – CARVALHO, H. – RIBEIRO, J. (2009), *Museu Pio XII: coleção de epigrafia e de arquitectura antigas (séculos I a.C. – VII d.C.)*, 2 vols., Braga.
- FRANCE, J. (1993), “Administration et fiscalité douanières sous le règne d’Auguste: la date de la création de la *Quadragesima Galliarum*”, *Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité* 105, nº 2: 895-927.
- FRANCE, J. (2001), “Remarques sur les *tributa* dans les provinces nord-occidentales du Haut Empire romain (Bretagne, Gaules, Germanies)”, *Latomus* 60, nº 2: 359-379.



- FRANCE, J. (2007), "Les catégories du vocabulaire fiscal dans le monde romain", en J. Andrau y V. Chankowski (eds.), *Vocabulaire et expression de l'économie dans le monde Antique*, Burdeos: 333-368.
- FRANK, T. (1924), "Roman *census* statistics from 225 to 28 B.C.", *Classical Philology* 19: 329-341.
- FRANK, T. (1927a), "*Dominium in solo provinciali* and *ager publicus*", *Journal of Roman Studies* 17: 141-161.
- FRANK, T. (2004) [1927b], *An Economic History of Rome*, Kitchener.
- FREND, W. H. C. (1956), "A Third Century Inscription Relating to Angareia in Phrygia", *The Journal of Roman Studies* 46, nº 1-2: 46-56.
- FREYBURGER, G. (1986), *Fides: étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne*, París.
- FUSTEL DE COULANGES, N. M. (1964) [1894], *Recherches sur quelques problèmes d'Histoire*, Bruselas.
- FUSTEL DE COULANGES, N. M. (1984) [1864], *La ciudad antigua* (trad. por Yvars J. F.), Barcelona.
- GABBA, E. (1977), "Esercito e fiscalità a Roma in età Repubblicana", en A. Chastagnon, C. Nicolet y H. van Efferterre (coords.), *Armées et fiscalité dans le monde Antique* (=Colloques nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 936), París: 13-34.
- GAGÉ, J. (1969), "*Italica adlectio*: À propos de certaines formes du *ius Italicum* en Espagne au temps de Trajan", *Revue des Études Anciennes* 71, nº 1-2: 65-84.
- GAGLIARDI, L. (2006), *Mobilità e integraziones delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, Milán.
- GALSTERER, H. (1971), *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der iberischen Halbinseln*, Berlín.
- GAMBASH, G. (2012), "The Rule a Frocious Provincie: Roman Policy and the Aftermath of the Boudican Revolt", *Britannia* 43: 1-15.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (1991a), *El 'Ius Latii' y la municipalización de Hispania: aspectos constitucionales*. Tesis doctoral. Dir: J. Mangas. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (1991b), "El *ius Latii* y los *municipia Latina*", *Hispania antiqua* 17: 337-348.

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (1993), “Una propuesta de identificación epigráfica de los *Cives Latini*”, *Hispania antiqua* 17: 337-348.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (1995), “Sobre la función de la *lex municipalis*”, *Gerión* 13: 141-154.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (1996), “El desarrollo de la municipalización latina: La Bética y el Noroeste”, en S. Rebores y P. López Barja (eds.), *A cidade e o mundo: romanización e cambio social*, Xunzo de Limia: 149-164.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (1997): “*Incolae contributi* y la *lex Ursonensis*”, *Studia historica* 15: 171-180.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (1998), “Características constitucionales del municipio latino”, *Gerión* 16: 209-221.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2000a), “*Immunitas* y *adtributio*”, en F.-J. Sánchez-Palencia y J. Mangas (coords.), *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, Ponferrada: 113-122.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2000b), “Plinio y los *oppida stipendiaria*. A propósito de un artículo de Alicia M<sup>a</sup> Canto”, *Gerión* 18: 571-591.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2001a), “I. La aparición de un nuevo concepto de latinidad: la *lex Pompeia de Transpadanis*”, *Gerión. Anejos* 5: 13-29.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2001b), “II. La Galia Narbonense. El desarrollo de la condición latina provincial”, *Gerión. Anejos* 5: 31-72.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2001c), “III. La Hispania de Plinio: la aparición del municipio latino”, *Gerión. Anejos* 5. *El municipio latino* : 73-124.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2001d), “IV. El municipio latino. Ensayo de definición y características constitucionales”, *El municipio latino (=Anejos de Gerión V)*: 125-180.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2007a), “Ciudadanía e imperio”, en D. Plácido, F. J. Moreno y L. A. Ruiz (eds.), *Necedad sabiduría y verdad: el legado de Juan Cascajero (=Gerión 25 extra. 1)*, Madrid: 311-21.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2007b), “Ni ciudadanos, ni extranjeros: la condición jurídica de la población provincial”, en J. Mangas y S. Montero (eds.), *Ciudadanos y extranjeros en el mundo antiguo: segregación e integración*, Madrid: 227-240.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2010), “Latinidad y onomástica en el Noroeste”, en I. Sastre y A. Beltrán (eds.), *El bronce de El Picón (Pino de Oro). Procesos de cambio en el occidente de Hispania*, Castilla y León: 145-155.

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2011), “Movilidad, onomástica e integración en Hispania en época republicana. Algunas observaciones metodológicas”, en J. M. Iglesias y A. Ruiz (coords.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander: 47-66.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2012a), “Sobre la condición latina y su onomástica: los ediles de Andelo”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua* 25: 423-436.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2012b), “Movilidad, onomástica e integración en época republicana: algunas observaciones metodológicas”, en J. M. Iglesias y A. Ruiz (eds.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander: 47-66.
- GARCÍA MARTÍNEZ, S. M. (1995), “La epigrafía romana del concelho de Guimarães. Un estado de la cuestión”, *Revista de Guimarães* 105: 139-171.
- GARCÍA MARTÍNEZ, S. M. (1997), “El fenómeno de la esclavitud en el Noroeste hispanorromano según la evidencia epigráfica”, *Memorias de historia antigua* 18: 195-218.
- GARCÍA MARTÍNEZ, S. M. (1997), “Evergetismo y propaganda imperial en el Noroeste hispanorromano: su manifestación epigráfica”, *Lancia. Revista de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua del Noroeste peninsular* 2: 149-164.
- GARCÍA MARTÍNEZ, S. M. (1999), “Los motivos iconográficos en la epigrafía funeraria. Dos ejemplos concretos: los Vadinienses y los Zoelas”, en *XXIV Congreso Nacional de Arqueología*, vol. IV, Murcia: 633-642.
- GARCÍA QUINTELA, M. V. (2002), *La organización socio-política de los Populi del Noroeste de la Península Ibérica. Un estudio de antropología política histórico comparada* (=Tapa. Trabajos de Arqueología e Patrimonio 28), Santiago de Compostela.
- GARCÍA RIAZA, E. (2007), “*Tempus poenae*. Represalias contra poblaciones sometidas durante la expansión romana en Hispania”, en G. Bravo y R. González (eds.), *Formas y usos de la violencia en el mundo romano*, Madrid: 19-30.
- GARCÍA RIAZA, E. (2011), “Derecho de guerra en occidente durante la expansión romano-republicana. Planteamientos metodológicos”, en García Ríaza, E. (ed.), *De fronteras a provincias. Interacción e integración en Occidente (ss. III-I a.C.)*, Palma de Mallorca: 31-63.
- GARCÍA RIAZA, E. (2012), “Sobre los mecanismos de integración de los vencidos en el Occidente romano-republicano. Algunas observaciones”, en F. Marco, F. Pina y J. Remesal (eds.), *‘Vae victis!’ Perdedores en el mundo antiguo* (=Col. Instrumenta 40), Barcelona: 161-176.

- GARCÍA RIAZA, E. (2014), “Derecho de guerra y diplomacia en la época de Augusto”, *Stvdia Historica. Historia Antigua* 32: 91-122.
- GARCÍA ROLLÁN, M. (1971), “Memoria de la excavación arqueológica de Castromao”, *Archivo Español de Arqueología* 123-124: 175-211
- GARCÍA ROLLÁN, M. (2004), “Hitos importantes en la excavación de Castromao (Caeliobriga)”, *Boletín Auriense* 34: 9-14.
- GARCÍA ROZAS, R. – ABÁSOLO ÁLVAREZ, J. A. (1993), “Bronces romanos del Museo de Zamora”, en F. Burkhalter y J. Arce (coords.), *Bronces y religión romana. Actas del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos (Madrid, mayo-junio, 1990)* (=Monografías de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma), Madrid: 171-196.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. (1961), “El *exercitus Hispanicus* desde Augusto a Vespasiano”, *Archivo Español de Arqueología* 34: 114-160.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. (1961-62), “Las colonias romanas de *Valentia*, *Carthago Nova*, *Libisosa* e *Ilici*. Aportaciones al estudio del proceso de romanización del S.E. de la península”, *Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina*, Murcia: 367-372.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. (1967), “La latinización de Hispania”, *Archivo Español de Arqueología* 40: 3-29.
- GARCÍA Y BELLIDO, A. (1968), “Cámara funeraria de la cultura castreña”, *Archivo Español de Arqueología* 41, nº 117-118: 16-44.
- GARCÍA, J. M. – LEITÃO, M. (1982), “Inscrições romanas do monte de S. Martinho – Castelo Branco”, *Centro de Estudos epigráficos da Beira. Cadernos de Epigrafia* 6: 3-18.
- GARCÍA, J. M. (1991), *Religiões antigas de Portugal. Aditamentos e observações as «Religiões da Lusitânia» de J. Leite de Vasconcelos. Fontes epigráficas*, Lisboa.
- GARDNER, A. (2013), “Thinking about Roman Imperialism: Postcolonialism, Globalisation and Beyond?”, *Britannia* 44: 1-25.
- GARRIDO, A. – MAR, R. – MARTINS, M. (2008), *A Fonte do Ídolo: análise, interpretação e reconstituição do santuário*, Braga.
- GASCOU, J. (1972), *La politique municipale de l'Empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère*, Roma.
- GASCOU, J. (1984), “La carrière de Marcus Caelius Phileros”, *Antiquités africaines* 20: 105-120.
- GASPERINI, L. (2004), “Rilettura di iscrizione latine rupestri dall'Alto Portogallo”, en E. Lanzillota (ed.), *Ricerche di Antichità e Tradizione Classica. Atti degli*

*incontri di Studio (Villa Mondragone, Monte Porzion Catone)*, Roma: 227-235.

- GĂZDAC, C. (2010), *Monetary circulation in Dacia and the provinces from the Middle and Lower Danube from Trajan to Constantine I (AD 106-337) (=Coins from Roman Sites and Collections of Roman Coins of Romania 7)*, Cluj-Napoca.
- GERBER, A. – GREEF, A. (1903), *Lexicon Taciteum*, Hildesheim.
- GIARDINA, A. (1995), “L’identità incompiuta dell’Italia romana”, *Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992)*, Roma: 1-89.
- GILBERTI, F. (1996), “*Dominium Caesaris*”, *Index* 24: 199-228.
- GILMAN, A. (1997), “Cómo valorar los sistemas de propiedad a partir de datos arqueológicos”, *Trabajos de Prehistoria* 54, nº 2: 81-92.
- GIMENO PASCUAL, H. – MAYER OLIVÉ, M. (1993), “Una propuesta de identificación epigráfica: Lara de los Infantes / Nova Augusta”, *Chiron* 23: 313-321.
- GINSBURG, M. S. (1931), “*Fiscus Iudaicus*”, *The Jewish Quaterly Review* 21, nº 3: 281-291.
- GOFFART, W. (1974), *‘Caput’ and Colonate. Towards a History of Late Roman Taxation*, Toronto.
- GÓMEZ BARREIRO, M. – MORILLO CERDÁN, Á. (2008), “Moneda romana y establecimientos militares durante las guerras cántabras y el siglo I d.C.: el registro estratigráfico de Herrera de Pisuerga (Palencia)”, *Salduie* 8: 139-151.
- GÓMEZ CASTRO, D. – ÑACO DEL HOYO, T. – VIDAL PALOMINO, J. (2012), “El inmediato ‘posconflicto’ y la construcción de la paz en el mundo antiguo: tres casos de estudio”, *Arys* 10: 191-214.
- GÓMEZ-PANTOJA FERNÁNDEZ-SALGUERO, J. L. (2011), “Un nuevo *terminus augustalis* en Lusitania”, en A. Sartori y A. Valvo (eds.), *Identità e Autonomie nel mondo romano occidentale (Iberia-Italia Italia-Iberia. III Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia Antica, Gargnano, 12-15 maggio 2010) (=Epigrafia e Antichità 29)*, Faenza: 291-317.
- GONZALES, A. (2002), “Les requêtes de Pline le Jeune auprès de Trajan”, en S. Ratti (ed.), *Antiquité et Citoyenneté. Actes du colloque International de Besançon 3-5 novembre 1999 (=Collection ISTA 850)*, Besançon: 35-49.
- GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. – SOLANA SAINZ, J. M. (1975), “La Legión IV Macedónica en España”, *Hispania Antiqua* 5: 151-203.

- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (2013), “Epigrafía de la Bética. Nuevos testimonios”, *Cuadernos de Filología Clásicos. Estudios Latinos* 33: 253-280.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. – MOLINA GÓMEZ, J. A. (2011), “Precisiones a las menciones de *origo* con la fórmula *domo* + topónimo/gentilicio en la epigrafía romana de Hispania”, *Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica* 79: 1-29.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (2011), “El término *origo* en la epigrafía latina”, *Zephyrus* 68: 229-237.
- GONZÁLEZ GARCÍA, F. J. – LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2010), “La estela de Crecente: reflexiones sobre el proceso romanizador en la Galicia Antigua”, en P. Bueno, A. Gilman, C. Martín y F.-J. Sánchez-Palencia (eds.), *Arqueología, sociedad, territorio y paisaje. Estudios sobre prehistoria reciente, protohistoria y transición al mundo romano en homenaje a M<sup>a</sup> Dolores Fernández Posse*, Madrid: 349-360.
- GONZÁLEZ HERRERO, M. (2002), “Contribución al estudio prosopográfico de los équites lusitanoromanos. El *cursus honorum* del tribuno *Lucius Cornelius Lucii filius Galeria Bocchus*”, en *Aquila legionis: Cuaderno de estudios sobre el Ejército Romano* 2: 33-57.
- GONZÁLEZ PARDO, M. (1965), “En torno a una inscripción gigurra”, *Archivo Español de Arqueología* 38: 80-83.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. – GORRACHATEGUI CHURRUCA, J. (2013), “Nueva estela vadiniense hallada en Riaño, León (*Conventus Cluniensis*)”, *Ficheiro Epigráfico* 109 (=Suplemento de ‘Conimbriga’), n<sup>o</sup> 479.
- González Rodríguez, M. C. – Ramírez-Sánchez Morales, M. (2007), “Observaciones sobre la mención de la *origo* ‘*intra civitatem*’ en la epigrafía funeraria hispana”, en M. Mayer, G. Baratta y A. Guzmán (eds.), *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae*, vol. 1, Barcelona: 595-600.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. (1985), “La organización social indígena del área indoeuropea de la Península Ibérica en la Antigüedad. Estado de la cuestión y consideraciones previas”, en J. L. Melena (ed.), *Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae*, Vitoria, vol. 1: 547-556.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. (1997), *Los astures y los cántabros vadinienses. Problemas y perspectivas de análisis de las sociedades indígenas de la Hispania Indoeuropea* (=Anejos de *Veleia*. Series Minor 10), Vitoria.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. (2002), “Anotaciones sobre las élites indígenas cántabras y su integración por parte de Roma”, M. J. García Soler (ed.), *Timês Charin. Homenaje al Professor Pedro A. Gainzarain*, Vitoria: 309-318.

- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. (2009), “Divinidades y devotos indígenas en la *Tarraconensis*: las dedicatorias colectivas”, *Actas do X coloquio sobre línguas e culturas paleo-hispánicas* (=Paleohispánica 9), Zaragoza: 65-81.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C. (2011), “En torno a la expresión de la *origo* en el Noroeste hispano: el caso de los cántabros vadinienses como ejemplo de integración cívica”, en J. M. Iglesias y A. Ruiz (eds.), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander: 93-117.
- GONZÁLEZ ROMÁN, C. (1994), “*Ius Italicum* e *immunitas* en las colonias romanas de Hispania”, en J. González (ed.), *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid: 131-145.
- GONZÁLEZ ROMÁN, C. (1999), “El trabajo en la agricultura de la Hispania romana”, en J. F. Rodríguez Neila, C. González Román, J. Mangas y A. Orejas, *El trabajo en la Hispania romana*, Madrid.
- GONZÁLEZ ROMÁN, C. (2017), “Augusto y las colonias de la Hispania meridional”, *Gerión* 35, nº esp.: 349-370.
- GONZÁLEZ ROMÁN, J. (2001), “*Ius Latii* y *Lex Flavia Municipalis*”, *Mainake* 23: 121-136.
- GONZÁLEZ ROMÁN, J. (2008), *Epigrafía jurídica de la Bética*, Roma.
- GONZÁLEZ RUIBAL, A. (2006), *Galaicos. Poder y comunidad en el Noroeste de la península Ibérica (1200 a.C. – 50 d.C.)* (=Brigantium 18), A Coruña.
- GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ VALLES, J.M. (1973), “Castros del sector lucense y otros no catalogados”, *Cuadernos de estudios gallegos* 28, nº85: 143-152.
- GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ-VALLÉS, J. M. (1976), “Castros del sector lucense y otros no catalogados”, *Miscelánea histórica asturiana*, Oviedo.
- GONZÁLEZ-CONDE PUENTE, M. P. (2016), “Adriano y el Noroeste de Hispania c. 132-134 d.C.: Actuaciones en el valle del río Limia (Ourense)”, *Lvcentvm* 35: 217-226.
- GOODMAN, M. (2006), “The meaning of *Fisci Iudaici Calumnia Sublata* on the coinage of Nerva”, en J. D. Shaye y J. J. Schwartz (eds.), *Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism. Louis H. Feldman Jubilee Volume* (=Ancient Judaism and Early Christianity 67), Leiden: 81-90.
- GOROSTIDI PI, D. “*Ager Tarraconensis*, 3. Les inscriptions romanes”, *Documenta* 16, Tarragona.
- GREENIDGE, A. H. J. (1894), *Infamia; its place in Roman public and private law*, Oxford.
- GRELLE, F. (1963), *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Nápoles.

- GRELLE, F. (1966), “La signoria sul suolo provincial nella Parafrasi di Teofilo”, *Labeo*, 12: 209-218.
- GRELLE, F. (1990), “L’appartenenza del suolo provinciale nell’analisi di Gaio, 2.7 e 2.21”, *Index*, 18: 167-183.
- GSELL, S. – CARCOPINO, J. (1931), “La base de M. Sulpicius Felix et le décret des décurions de Sala”, *Mélanges d’archéologie et d’histoire* 48: 1-39.
- GUERRA, A. (1999), “Nomes de cecas visigodas no Noroeste Peninsular e toponímia pré-romana”, en R. M. S. Centeno, M. P. García y Bellido y G. Mora (coords.), *Rutas, ciudades y moneda en Hispania*, Madrid: 423-432.
- GUERRA, A. (2007), “Sobre o territorio e a sede dos *Lancienses* (*Oppidani* e *Trancvdani*) e outras questões conexas”, *Conimbriga* 46: 161-206.
- GURT ESPARRAGUERA, J.M. –DE LANUZA I GARRIGA, A. – PALET I MARTÍNEZ, J.M. (2000-2001), “Revisión del catastro romano de *Ilici* (Elche)”, *Pyrenae* 27: 215-226.
- GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A. (1985), *Poblamiento Antiguo y Medieval en la montaña central leonesa*, León.
- GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. A. (1986-87), “Tipologías defensivas en la cultura castreña leonesa”, *Zephyrus* 39-40: 329-335.
- HABETZEDER, J. (2010), “Marsyas in the garden? Small-scale sculptures referring to the Marsyas in the forum” en *Opuscula: Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome* 3: 163-178.
- HAENSCH, R. (2016), “Las ciudades del poder en el Imperio”, *Revista de Historiografía* 25: 29-43.
- HARDING, A. (2008), “A conversation with Colin Renfrew (Professor Lord Renfrew of Kaimsthorn)”, *European Journal of Archaeology* 11, nº 2-3: 143-170.
- HARMATTA, J. (1974), “The problem of the juristic conditions of land in *Pannonia*”, *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti local nelle province romane con particolare riguardo alle condizione giuridice del suolo* (= *Accademia Nazionale dei Lincei*, n. 194), Roma: 77-88.
- HAVERFIELD, F. (1904), “Theodor Mommsen”, *The English Historical Review* 19, nº 73: 80-89.
- HAVERFIELD, F. (1923), *The Romanization of Roman Britain*, Oxford.
- HEINZE, R. (1937), “*Fides*”, *Hermes* 64 (= 1939, *Vom Geist des Römertums*, Berlín: 25-58), 64: 140-166.



- HERNÁNDEZ GUERRA, L. (1999), *Epigrafía romana de unidades militares relacionadas con Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora): estudio social, religioso y prosopográfico*, Valladolid.
- HERNÁNDEZ GUERRA, L. (2007), *El tejido urbano de época romana en la Meseta Septentrional*, Salamanca.
- HERNÁNDEZ-TEJERO, M. (1989), “Aproximación histórica al origen del *ius postliminii*”, *Gerión* 7: 53-63.
- HERNANDO SOBRINO, M. R. (2002), “Nota sobre nota. El bronce de El Bierzo y la ‘Tabula’ de El Caurel”, *Gerión* 20, nº 2: 577-584.
- HEVIA GONZÁLEZ, S. – MONTES LÓPEZ, R. (2009), “Cerámica Romana Altoimperial de fabricación regional del Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid* 35: 27-187.
- HIDALGO DE LA VEGA, M. J. (2005), “Algunas reflexiones sobre los límites del *oikouménē* en el Imperio Romano”, *Gerión* 23, nº 1: 271-285.
- HIN, S. – CONDE, D. A. – LENART, A. (2016), “New light on Roman census papyri through semi-automated record linkage”, *Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History* 49, nº 1: 50-65.
- HINGLEY, R. (2003), “Recreating coherence without reinventing Romanization”, en A.D. Merryweather y J.R.W. Prag (eds.), *Romanization? Proceedings of a post-graduate colloquium held at the Institute of Classical Studies, Disgressus Supp.* 1: 111-119.
- HINGLEY, R. (2005), *Globalizing Roman Culture: unity, diversity and empire*, Londres Nueva York.
- HIRT, A. (2010), *Imperial Mines and Quarries in the Roman World. Organizational Aspects 27 BC-AD 235*, Oxford.
- HOOGENDIJK, F. A. J. – VAN MINNEN, P. (eds.) (1991), *Papyri, Ostraca, Parchments and Waxed Tablets: in the Leiden Papyrological Institute (P.L. Bat. 25)*, Leiden.
- HOPKINS, K. (1980), “Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.-A.D. 400)”, *The Journal of Roman Studies* 70: 101-125.
- HOPKINS, K. (2002), “Rome, Taxes, Rents and Trade” en W. Scheidel y S. von Reden, (eds.), *The Ancient Economy*, Edimburgo: 190-230.
- HÜBNER, E. (1869), “Ein *pactum fiduciae*”, *Hermes* 3: 283-89.
- HÜBNER, E. (1888), *La Arqueología de España*, Barcelona.
- HUMBERT, M. (1978), *Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale*, Roma.

- IGLESIAS GIL, J. M. (1999), “Ciudad y territorio externo: *Iuliobriga y Vadinia*”, en J. J. Iglesias y J. A. Muñiz (eds.), *Regio Cantabrorum*, Santander: 297-304.
- ILARI, V. (1974), *Gli Italici nelle strutture militare romane*, Milán.
- ISAAC, B. (1980-81), “Roman Colonies in Judaea: The Foundation of Aelia Capitolona”, *Talanta* 12-13: 31-53.
- ISAAC, B. (1984), “Judaea after A. D. 70”, *The Journal of Jewish Studies* 35: 44-55.
- ISAAC, B. (2009), “Latin in cities of the Roman Near East”, en H. M. Cotton, R. G. Hoyland, J. J. Price y D. J. Wasserstein (eds.), *From Hellenism to Islam*, Cambridge: 43-72.
- ISO ECHEGOYEN, J.-J. (2014), “Sobre la guerra y los *Celtiberi* en el *De Officiis* (I, 34-40) ciceroniano” en A. Duplá, M. V. Escribano, L. Sancho y M. A. Vilacampa (eds.), *Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza*, Zaragoza: 419-25.
- JACQUES, F. (1977), “Le cens en Gaule au II siècle et dans la première moitié du III siècle”, *Ktema* 2: 285-328.
- JEHNE, M. – PINA POLO, F. (2015) (eds.), *Foreign clientelae in the Roman Empire: a reconsideration*, Stuttgart.
- JIMÉNEZ GONZÁLEZ, M. C. – ARIAS GONZÁLEZ, L. (1983), “Dos nuevos yacimientos romanos imperiales en la provincia de Salamanca”, *Salamanca. Revista provincial de Estudios* 8: 81-100.
- JONES, A. H. M. (1936), “Another Interpretation of the *Constitutio Antoniniana*”, *Journal of Roman Studies* 26, nº 2: 223-235.
- JONES, A. H. M. (1941), “*In eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris*”, *Journal of Roman Studies* 31: 26-31.
- JONES, A. H. M. (1957), “*Capitatio and Iugatio*”, *The Journal of Roman Studies* 47, nº 1: 88-94.
- KASER, M. (2004), *Ius gentium* (Trad. de F. J. Andrés Santos), Granada.
- KEHOE, D. P. (1984), “Private and imperial management of Roman estates in North Africa”, *Law and History Review* 2: 241-63.
- KEHOE, D. P. (1997), *Investment, Profit, and Tenancy: The Jurist and the Roman Agrarian Economy*, Michigan.
- KEHOE, D. P. (2007), *Law and the Rural Economy in the Roman Empire*, Michigan.
- KENNEDY, K. (2006), “Demography, the Population of Syria and the *Census* of *Q. Aemilius Secundus*”, *Levant* 38, nº 1: 109-124.

- KEYES, C. W. (1931), "Syntaximon and Laographia in the Arsinoite Nome", *The American Journal of Philology* 52, n° 3: 263-269.
- KISSEL, T. (2002), "Road building as a *munus publicum*", en P. Erdkamp (ed.), *The Roman Army and the Economy*, Amsterdam: 127-160.
- KNAPP, R.C. (1986), "Cantabria and the *era consularis*", *Epigraphica* 48: 115-146.
- KREMER, D. (2006), *Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, París.
- KUBITSCHKE, W. (1882), *De Romanarum tributum origine ac propagatione*, Viena.
- LAFFI, U. (1966), *Adtributio e contributio: problema del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa.
- LAISTNER, M. L. W. (1921), "Dediticii: The Source of Isidore", *Journal of Roman Studies* 11: 267-268.
- LAMBERTI, F. (1993), *Tabulae Irnitanae, municipalità e 'ius Romanorum'*, Nápoles.
- LAMBRINI, P. (2015), "Il negozio fiduciario e la sua causa", *Studi Urbinati. Scienze giuridiche, politiche ed economiche* 66: 35-49.
- LANDAU, G. (1854), *Die Territorien in Bezug auf ihre Bildung und Entwicklung*, Hamburgo.
- LAUNARO, A. (2011), *Peasants and Slaves: The Rural Population of Roman Italy (200 BC to AD 100)*, Cambridge.
- LAVAN, M. (2016), "Writing revolt in the early Roman empire", en J. Firnhaber-Baker y D. Schoenaers (eds.), *The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*, Londres: 19-38.
- LE GLAY, M. (1981), "Les *censitores provinciae Thraciae*", *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 43: 175-184.
- LE ROUX, P. (1982), *L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste a l'invasion de 409*, Paris.
- LE ROUX, P. (1989), "Aux frontières de l'épigraphie juridique: l'inscription d'Asadur, Orense (AE 1973, 317=1974, 394)", en C. Castillo (ed.), *Epigrafía jurídica romana. Actas del Coloquio Internacional AIEGL. Homenaje al prof. Álvaro D'Ors*, Pamplona: 338-354.
- LE ROUX, P. (1991), "*Municipium Latinum* et *Municipium Italiae*: a propós de la *Lex Irnitana*", en *Epigrafía. Actas del Colloque International d'Epigraphie Latine en mémoire de Atilio Degrossi* (=Collection de l'école française de Rome, 143), Roma: 561-582.
- LE ROUX, P. (1994a), "Bracara Augusta: ville latine", en V. Oliveira (coord.), *Trabalhos de Antropologia e Etnografia. 1º Congresso de Arqueologia Peninsular (Porto, 12-18 Outubro de 1993): actas*, vol. 4, Oporto: 229-240.

- LE ROUX, P. (1994b), "Cités et territoires en Hispanie: l'Epigraphie des limites", *Mélanges de la Casa de Velázquez* 30: 37-52.
- LE ROUX, P. (1996), "Las ciudades de la *Callaecia* romana durante el Alto Imperio", *Gerión* 14: 363-379.
- LE ROUX, P. (1999), "Vectigalia et revenus des cités en Hispanie au Haut-Empire", *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai, 1996) (=Collection de l'École française de Rome 256)*, Roma: 155-173.
- LE ROUX, P. (2003), "Les territoires de la Péninsule Iberique aux derniers siècles avant notre ère", en A. Morillo, F. Cadiou y D. Hourcade (coords.), *Defensa y territorio en Hispania de los Escipiones a Augusto*, León: 13-22.
- LE ROUX, P. (2004), "La question des *conventus* dans la péninsule Ibérique d'époque romaine", en C. Auliard y L. Bodiou (eds.), *Au jardins des Hespérides. Histoire, société et épigraphie des mondes anciens. Mélanges offerts à Alain Tranoy*, Rennes: 337-356.
- LE TEUFF, B. (2012), *Census: les recensements dans l'empire romain d'Auguste à Diocletien*. Tesis doctoral. Dir.: J. France y J.-L. Ferrary. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Burdeos.
- LE MOS, F. S. – CRUZ, G. (2011), "Citânia de Briteiros", *Povoado proto-histórico*, Guimarães.
- LE MOS, F. S. (2003), "Bracara Augusta: periferia imediata", *Forum* 33: 11-25.
- LE MOS, F. S. (2007-2008), "Antes de Bracara Augusta", *Forum* 42-43: 203-239.
- LE MOS, F.S. (2009), "A cultura castreja no Minho. Espaço nuclear dos grandes povoados proto-históricos do Noroeste peninsular", en P. Pereira (ed.), *Minho, Traços de Identidade*, Braga: 122-213.
- LEPAULLE, P. (1922), "Review de *La Loi de Hiéron et les Roma*", *The American Journal of Philology* 43, n° 2: 181-184.
- LEVY, M. A. (1929), "La Sicilia e il *dominium in solo provinciali*", *Athenaeum* 17, n° 4: 514-524.
- LEWIS, N. (1989) (ed.), *The documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri*, Jerusalén.
- LEWIS, N. (1994), "The Babatha Archive: A Response", *Israel Exploration Society* 44, n° 3: 243-246.
- LIVA, S. (2012), "Un caso de 'indulgentia imperiale': l'*epitula Titi ad Muniguenses*", *Rivista di Diritto Romano* 12: 1-7.

- LIZ GUIRAL, J. (1996), "Epigrafía y arqueología vadinienses", *Actas ArqueoLeón. Historia de León a través de la Arqueología*, León: 83-90.
- LO CASCIO, E. (1994), "The Size of the Roman Population: Beloch and the Meaning of the Augustan Census Figures", *The Journal of Roman Studies* 84: 23-40.
- LO CASCIO, E. (2000), *Il Princeps e il suo Impero: studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari.
- LO CASCIO, E. (2000a), "La struttura fiscale dell'Impero Romano", *Il Princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari: 177-203.
- LO CASCIO, E. (2000b), "Census provinciale, imposizione fiscale e amministrazioni cittadine nel Principato", *Il Princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari: 205-219..
- LO CASCIO, E. (2008), "The Function of Gold Coinage in the Monetary Economy of the Roman Empire", en W. V. Harris (ed.), *The Monetary Systems of the Greeks and Romans*, Oxford: 160-173.
- LOLOS, Y. (2009), "Via Egnatia after Egnatius: Imperial Policy and Inter-regional contacts", en I. Malkin, C. Constantakopoulou y K. Panagopoulou (eds.), *Greek and Roman Networks in the Mediterranean*, Londres: 264-284.
- LOMAS SALMONTE, J. (1996), "Consideraciones sobre las *civitates* del cuadrante Noroccidental de la península Ibérica", en A. Rodríguez Colmenero (coord.), *Los orígenes de la ciudad en el Noroeste hispánico*, Lugo: 171-192.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (1991), "Latini y Latini Iuniani. De nuevo sobre IRN. 72", *Studia historica. Historia antigua* 9: 51-60.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (1993), *Epigrafía Latina*, Santiago de Compostela.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (1996), "La ciudad republicana y altoimperial", en S. Reboreda y P. López Barja (eds.), *A ciudades e o mundo: Romanización e cambio social*, Xinzo de Limia: 117-124.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (1999), "El censo provincial, los *populi* y los *castella* de Gallaecia", *Gallaecia* 18: 347-362.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2001), "La provincia Transduriana", en F. J. Sánchez-Palencia y J. Mangas (coords.), *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, Ponferrada: 31-45.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2005), "Los partidos políticos en la obra de Mommsen", en Martínez-Pinna, J. (ed.), *En el centenario de Theodor Mommsen*, Málaga: 207-218.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2007), *Imperio legítimo. El pensamiento político romano en tiempos de Cicerón*, Madrid.

- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2008), “La concepción política del territorio en la Roma Republicana”, en J. Mangas y M. Á. Novillo (eds.), *El territorio de las ciudades romanas*, Madrid: 9-30.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2010), “*Provincia y restitvo* en el bronce de El Bierzo”, *Arichivo Español de Arqueología* 83: 175-181.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2011), “Sobre la guerra justa”, *SEMATA. Ciencias Sociais e Humanidades* 23: 61-76.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2014), “El censo en las *ciuitates peregrinae* (con una nota sobre la pizarra de Pelou)”, en A. Duplá, M.V. Escribano, L. Sancho, M. A. Villacampa (eds.), *Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza*, Zaragoza: 459-464.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P. (2017), “La reorganización provincial bajo Augusto”, en J. Mangas y A. Mayorgas (eds.), *La Hispania de Augusto* (=Gerión 35, nº esp.), Madrid: 237-246.
- LÓPEZ MELERO, R. – SÁNCHEZ ABAL, J. L. – GARCÍA JIMÉNEZ, S. (1984), “El bronce de Alcántara. Una deditio del 104 a.C.”, *Gerión* 2: 265-324.
- LÓPEZ PARDO, F. (1986), “A propósito de un diploma militar hallado en Baelo”, *Gerión*, 4: 319-323.
- LÓPEZ-REDONDO RODRÍGUEZ, C. (2010), “La *Tabula Heracleensis*: Organización municipal”, en F. R. Barroso (coord.), *Temas de direito privado: uma homenagem ao professor Agerson Tabosa* (=Revista Jurídica da UNIF), Fortaleza: 167-215.
- LOZANO GÓMEZ, F. (2013), “El discurso a Roma a Elio Carístides”, en C. Fornis (ed.), *Los discursos del poder / el poder de los discursos en la Antigüedad Clásica*, Zaragoza: 157-171.
- LÓPEZ PAZ, P. (1999), “La formula *ex tributario solo* del catastro de Orange y la categoría jurídica de las tierras coloniales. *Ius Italicum e immunitas*”, en J. González (ed.), *Actas del Congreso Internacional Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano*, Sevilla: 289-294.
- LUENGO MARTÍNEZ, J. M. (1940), “El Castro de Morgovejo (León)”, *Atlantis. Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria y Museo Etnológico Nacional* 15, Madrid: 170-177.
- LUJÁN MARTÍNEZ, E. R. (2008), “Galician Place-Names Attested Epigraphically”, en J. L. García Alonso (coord.), *Celtic and other languages in ancient Europe*, Salamanca: 65-82.
- LUJÁN MARTÍNEZ, E. R. (2011), “*Briga* and *castellum* in North-Western Hispania”, en E. R. Luján y J. L. García Alonso (eds.), *A greek man in Iberian Street*.

*Papers in Linguistics and Epigraphy in Honour of Javier de Hoz*, Innsbruck: 225-242.

LUZZATTO, G. I. (1971), “*Stipendium*”, en A. Azara y E. Eula (dir.), *Novissimo Digesto Italiano*: 444.

LUZZATTO, G. I. (1974), “Sul regime del suolo nelle province romane. Spunti critici e problematica”, en *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* (=Accademia Nazionale dei Lincei, nº 194), Roma: 9-53.

LUZZATTO, G. I. (1985), *Roma e le province*, vol. 1 (=Storia di Roma 17), Bologna.

MACDONALD, A. H. – WALBANK, F. W. (1937), “The Origins of the Second Macedonian War”, *Journal of Roman Studies* 27: pp. 180-207.

MACKIE, N. (1983), *Local administration in Roman Spain*, Oxford.

MAFFI, A. (1992), *Ricerche sul ‘postlimium*, Milano.

MAIA, M. (1974), “Vilas Romanas do Território Interanniense”, *Arqueólogo Português. Serie III* 7: 215-226.

MALAVOLTA, M. (1987), “Il *ius Italicum* delle comunità Liburniche della Dalmazia”, *Atti e Memorie della società dalmata di Storia Patria* 12, nº 1: 65-70.

MANGANARO, G. (1963), “Nuovi documenti magici della Sicilia orientale”, *Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei* 18: 57-74.

MANGAS MANJARRÉS J. – MARTINO GARCÍA, D. (1997) “*Princeps Cantabrorum* en una nueva inscripción”, *Gerión* 15: 321-339.

MANGAS MANJARRÉS, J. – OLANO PASTOR, M. (1995), “Nueva inscripción latina. *Castella y castellani* del área astur”, *Gerión* 13: 339-347.

MANGAS MANJARRÉS, J. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1999), “El trabajo en las minas en la *Hispania Romana*”, en F. J. Rodríguez y C. González, (eds.), *El trabajo en la Hispania Romana*, Madrid, 207-335.

MANGAS MANJARRÉS, J. – VIDAL ENCINAS, J. (1989), “Organización social y política de los Vadinienses a la luz de una nueva inscripción”, en J. Santos (dir.), *El solar vascón en la Antigüedad. Cuestiones de lengua, arqueología, epigrafía e historia* (=VII Cursos de Verano de San Sebastián), Vitoria: 127-147.

MANGAS MANJARRÉS, J. (1983), “La difusión de la religión romana en Asturias”, *Indigenismo y Romanización en el Conventus Asturum*, Madrid: 167-177.

MAÑANES PÉREZ, T. (1982), *Epigrafía y numismática de Astorga Romana y su entorno*, Salamanca.

- MAR MEDINA, R. – RUIZ DE ARBULO BAYONA, J. – VIVÓ I CODINA, D. (2013), “Los genios de los *conventus iuridici* y el lugar de reuniones del *concilium provinciae Hispaniae Citerioris*. ¿Una ‘curia’ de uso provincial en *Tarraco*?”, en B. Soler, P. Mateos, J. M. Noguera y J. Ruiz de Arbulo (eds.), *Las sedes de los ‘Ordines decurionum’ en Hispania: análisis arquitectónico y modelo tipológico* (=Anejos de Archivo Español de Arqueología 67), Mérida: 25-41.
- MARCHETTI, P. (1977), “A propos du *tributum* romain: un impôt de quotité ou de répartition”, en A. Chastagnon, C. Nicolet y H. van Effenterre (coords.), *Armées et fiscalité dans le monde Antique* (=Colloques nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 936), París: 107-134.
- MARGETIĆ, L. (1978-79), “Plinio e le comunità della Liburnia”, *Atti Rovigno* 9: 300-357.
- MAROTTA, V. (2014), “Egizi e cittadinanza romana”, *Cultura giuridica e diritto vivente* 1: 1-21.
- MARQUARDT, J. (1889), *L’Administration Romaine. Organisation de l’Empire Romain* (=Manuel des Antiquités Romaines 8), vol. 1, París.
- MARTÍN, F. (2004), “El exilio en Roma. Los grados del castigo”, en J. R. Remesal, F. Marco y F. Pina (coords.), *Vivir en tierra extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo: actas de la reunión realizada en Zaragoza los días 2 y 3 de junio de 2003*, Barcelona: 247-54.
- MARTÍN, F. Y GÓMEZ-PANTOJA, J. (2001), “El *aes Bergidense* ¿documento singular?”, en L. Grau y J. L. Hoyos (eds.), *El bronce de Bembibre. Un edicto del emperador Augusto*, León: 57-66.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS, M. L. (2016), “Aproximación al régimen jurídico de una comunidad de regantes: el bronce de Agón”, en A. Fernández de Buján (dir.), *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano III*, Madrid: 323-250.
- MARTÍNEZ MORCILLO, J. A. (2011), “La contravención del *ius belli* durante la primera mitad del siglo II a.C.: cinco casos de estudio”, en E. García Riaza (ed.), *De fronteras a provincias. Interacción e integración en Occidente (ss. III-I a.C.)*, Palma de Mallorca: 67-79.
- MARTÍNEZ MORCILLO, J. A. (2012), “Acabar con la identidad del enemigo: política romana de reorganización de territorios sometidos en contexto de guerra (s. II a.C.)”, en J. M. Aldea, P. Ortega, I. Pérez y M. Reyes (coords.), *Historia, identidad y alteridad. Actas del III Congreso Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores*, Salamanca: 137-161.



- MARTÍNEZ MORCILLO, J. A. (2013), “El asalto de núcleos de población. Bases jurídicas, procedimiento y consecuencias durante la República romana”, *Espacio, Tiempo y Forma, serie II. Historia Antigua* 26: 107-122.
- MARTÍNEZ PEREDA, M. J. (1989), “Penetración romana en los Picos de Europa”, *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses* 60: 15-66.
- MARTÍNEZ-PINNA NIETO, J. (2004), *Tusculum latina. Aproximación histórica a una ciudad del antiguo Lacio (siglos VI-IV a.C.)*, Roma.
- MARTINO GARCÍA, D. (2002), “Propuesta de delimitación del territorio de la *civitas* de los Vadinienses”, en S. Crespo y A. Alonso (eds.), *Scripta Antiqua in honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez*, Valladolid: 621-31.
- MARTINO GARCÍA, D. (2012), “Acerca de la cronología de la epigrafía Vadiniense. Revisión historiográfica y nuevas propuestas”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua* 25: 305-326.
- MARTINO GARCÍA, D. (2014), “Nuevas aportaciones al corpus epigráfico vadiniense”, *Veleia* 31: 199-211.
- MARTINS, M. – CARVALHO, H. (2016), “As transformações do território: *Bracara Augusta* e o seu cadastro”, *Revista de Historiografia* 25: 219-243.
- MARTINS, M. – FONTES, L. (2010), “*Bracara Augusta*. Balanço de 30 anos de investigação arqueológica na capital da Galécia Romana”, en R. González (coord.), *Simulacra Romae II: Rome, les capitales de province (‘capita provinciarum’) et la création d’un espace commun européen: un aproce archéologique*, Alicante: 11-124.
- MARTINS, M. (2000), “*Bracara Augusta* revisitada”, *Revista Cultural da Câmara Municipal de Braga* 49, nº 103: 265-280.
- MASON, D. J. P. (1988), “*Prata legionis* in Britain”, *Britannia* 19: 163-189.
- MASTINO, A. – ZUCCA, R. (2014): “*L’Cossonius L. f. Stell(atina tribu) Gallus Vecilius Crispinus Mansuanius Marcellinus Numisius Sabinus pro consule provinciae Sardiniae* e la *constitutio* del *Forum Traiani*”, *Gerión* 32: 199-223.
- MASTROCINQUE, A. (1999), “Propriété foncière archaïque et modèles d’interprétations modernes”, *Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Serie II* 3: 101-109.
- MASTROCINQUE, A. (2008), “Le città libere dell’impero e i *dediticii*”, *Mediterraneo Antico*, 11, nº 1-2: 199-208.

- MATEO, A. (1999), *'Manceps, redemptor, publicanus': contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma*, Santander.
- MATHISEN, R. W. (2006), "Peregrini barbari and cives Romani. Concepts of Citizenship and the Legal identity of Barbarians in Later Roman Empire", *The American Historical Review* 111, nº 4: 1011-1040.
- MATTINGLY, D. J. (1997), "Africa: a landscape of opportunity?", en P. Foss y J. H. Humphrey (eds.), *Dialogues of Roman Imperialism*, Cambridge: 117-139.
- MAURER, G. (1854), *Einleitung zur Geschichte der Mark*, Munich.
- MAYER I OLIVÉ, M. – ABÁSOLO ÁLVAREZ, J. A. – GARCÍA, R. (1998), "El bronce de Fuentes de Ropel (Zamora)", *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* 64: 161-174.
- MAYER I OLIVÉ, M. (2009), "Algunas observaciones sobre la microtoponimia paleohispánica", *Acta Paleohispanica X. Actas do X Colóquio sobre línguas e culturas paleo-hispánicas (Lisboa, 26-28 de fevereiro de 2009)* (=Paleohispanica 9), Zaragoza: 177-188.
- MAZZARINO, S. (1974), "Ius Italicum e storiografia moderna", en *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti local nelle province romane con particolare riguardo alle condizione giuridice del suolo* (=Accademia Nazionale dei Lincei 194), Roma: 357-372.
- MEICKLE, S. (2002), "Modernism, Economics and the Ancient Economy", en W. Scheidel y Reden, S. von (eds.), *The Ancient Economy*, Edimburgo: 233-250.
- MELCHOR GIL, E. (1992), "Evergetismo y distribuciones en la Hispania romana", *Florentia Iliberritana* 3: 375-398.
- MELCHOR GIL, E. (1993), "Construcciones cívicas y evergetismo en Hispania romana", *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua*, 6: 443-466.
- MELCHOR GIL, E. (1994a), "Summae honorariae y donaciones ob honorem en la Hispania romana", *Habis* 25: 193-212.
- MELCHOR GIL, E. (1994b), "Consideraciones acerca del origen, motivación y evolución de las conductas evergéticas en Hispania romana", *Studia Historica. Historia Antigua* 12: 61-81.
- MELCHOR GIL, E. (2009), "La regulación jurídica del evergetismo edilicio durante el Alto Imperio", *Bulletí Arqueològic* 31: 145-169.
- MENELLA, G. (1983), "Le pietre fluviali iscritte dei Bagienni (Aspetti e problema di una classificazione preliminare)", *Rivista di Studi Liguri* 49: 18-27.
- MENÉNDEZ-BUEYES, L. R. – CARRILES GARCÍA, A. (2011), "Fiscalidad y poder entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media en un reino postgermánico: el Reino

- de Asturias (periodo formativo, siglos V-VIII)”, en C. Díaz y I. Martín (eds.), *Between taxation and rent. Fiscal problems from Late Antiquity to Early Middle Ages*, Bari: 271-304.
- MENTXAKA ELEXPE, R. M. (1993), *El Senado municipal en la Bética hispana a la luz de la Lex Iritana*, Vitoria.
- MENTXAKA ELEXPE, R. M. (2009), “*Lex rivi Hiberinsis*, derecho de asociación y gobernador provincial”, *RIDROM: Revista Internacional de Derecho Romano* 2: 1-46.
- MEYER, E. A. (2004), *Legitimacy and Law in the Roman World. ‘Tabulae’ in Roman Belief and Practice*, Cambridge.
- MEYER, P. M. (1910), “Drei Erlasse Caracallas aus den Jahren 212 und 215”, en *Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen (P. Giss)*, Leipzig-Berlín.
- MEYER, P. M. (1920) [1910], *Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische*, Berlín.
- MILLAR, F. (1966), “The Emperor, the Senate and the Provinces”, *The Journal of Roman Studies* 56, nº 1-2: 156-166.
- MILLAR, F. (1990), “The Roman *Coloniae* of the Near East”, en H. Solin y M. Kajava (eds.), *Roman Eastern Policy and Other Studies in Roman History*, Helsinki: 7-58.
- MILLET, M. (1990), “Historical issues and archaeological interpretations”, en T. Blagg y M. Millet (eds.), *The Early Roman Empire in the West*, Oxford: 35-41.
- MOATTI, C. (1993), *Archives et partage de la terre dans le monde romain (Ile siècle avant – Ier siècle après J.-C.)*, Roma.
- MÓCSY, A. (1974a), *Pannonia and Upper Moesia*, Reino Unido.
- MÓCSY, A. (1974b), “Il problema delle condizioni del suolo attribuito alle unità militari nelle province danubiane”, *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti local nelle province romane con particolare riguardo alle condizione giuridice del suolo* (=Accademia Nazionale dei Lincei, nº 194), Roma: 345-355.
- MOMMSEN, T. (1942) [1877], *Compendio del derecho público romano*, Buenos Aires,
- MOMMSEN, T. (1956) [1855-56], *Historia de Roma*, vol. 1 (trad. de A. García Moreno), Madrid.
- MOMMSEN, T. (1984) [1896], *Le Droit Public Romain*, 7 vols., París.
- MONTEIRO, A. J. N. (2004), “Bloco epigrafado do Tondela”, *Ficheiro Epigráfico (Suplemento de ‘Conimbriga’)* 77, nº 349.

- MONTES LÓPEZ, R. – HEVIA GONZÁLEZ, S. – VILLA VALDÉS, Á. – MENÉNDEZ GRANDA, A. (2009), “Monte Castrelo de Pelóu (Grandas de Salime). Avances sobre su secuencia estratigráfica e interpretación histórica”, en *Excavaciones arqueológicas en Asturias 2003-2006*, Asturias: 313-322.
- MONTES LÓPEZ, R. – HEVIA GONZÁLEZ, S. – VILLA VALDÉS, Á. (2010), “‘Monte Castrelo’ de Pelóu: Un Asitiamentu Prehistóricu de llarga perduración en Grandas de Salime. L’ocasu del paradigma castreño d’aniciu romanu n’Asturies”, *Asturies: Memoria encesa d’un país*, 30: 4-27.
- MONTESQUIEU (1822), *Del espíritu de las leyes*, vol. 3, Madrid.
- MORAIS, R. (2004), “De novo sobre a municipalidad de *Bracara Avgvsta* no período Flavio”, *Conimbriga* 45: 125-137.
- MORAIS, R. (2005a), “*Ab vrbe condita*. Desde a fundação da cidade de *Bracara Augusta*”, *Sagvntvm* 37: 125-138.
- MORAIS, R. (2005b), *Autarcia e Comércio em Bracara Augusta. Contributo para o estudo económico da cidade no período Alto-Imperial*, Braga.
- MORAIS, R. (2010), “*Bracara Augusta*”, en C. Carreras y R. Morais (coords.), *The Western Roman Atlantic Façade: A study of the economy and trade in the Mar Exterior from the Republic to the Principate* (=BAR International Series 2162), Oxford: 213-222.
- MORALEJO, J. L. (1979) (trad.), “Introducción”, *Anales. Cornelio Tácito*, Madrid: 7-41.
- MOREIRA, J. B. (2002), *La Cidade Romana de Eburobrittium – Óbidos*, Porto.
- MORILLO CERDÁN, Á. – DURÁN CABELLO, R. M. (2017), “Territorios militares en Hispania: nuevas perspectivas”, *Gerión* 35, nº 2: 511-536.
- MORILLO CERDÁN, Á. – GARCÍA MARCOS, V. (2000), “Nuevos testimonios acerca de las legiones VI *Victrix* y X *Gemina* en la región septentrional de la Península Ibérica”, en Y. Le Bohec (ed.), *Deuxième congrès de Lyon sur l’armée romaine: Les legions de Rome sous le Haut-Empire Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998)*, vol. I, Lyon: 589-607.
- MORILLO CERDÁN, Á. – GÓMEZ BARREIRO, M. (2006), “Circulación monetaria en los campamentos romanos de León”, M. P. García-Bellido (coord.), *Los campamentos romanos en Hispania (27 a.C.-192 d.C.)* (=Anejos de Gladius 9), vol. 1, Madrid: 258-298.
- MORILLO CERDÁN, Á. – SALIDO DOMÍNGUEZ, J. – DURÁN CABELLO, R. (2014), “Aglomeraciones secundarias de carácter militar en Hispania”, en *Homenaje a la profesora Catalina Galán Saulnier* (=Anejos a Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 1), Madrid: 117-132.

- MORILLO CERDÁN, Á. – SALIDO DOMÍNGUEZ, J. (2014), “Military *Vici* in Roman Spain”, en L. Vagalinski y N. Sharankov (eds.), *Limes XXII. Proceedings of the 22<sup>nd</sup> International Congress of Roman Frontier Studies (Ruse, Bulgaria, September 2012)*, Sofía: 519-530.
- MORILLO CERDÁN, A. (2000), “La *legio IIII Macedonica* en la península ibérica”, en Y. le Bohec y C. Wolff (eds.), *Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du II Congr's sur l'Armée Romaine*, vol. 2, Lyon: 589-608.
- MORILLO CERDÁN, Á. (2002), “Conquista y estrategia: el ejército romano durante el periodo augustes y julio-claudio en la región septentrional de la Península Ibérica”, en Á. Morillo (coord.), *Arqueología militar romana en Hispania (=Anejos de Gladius 5)*, Madrid: 67-93.
- MORILLO CERDÁN, Á. (2003), “Los campamentos romanos de Astorga y León”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua* 16: 83-110.
- MORILLO CERDÁN, A. (2008), “Cultos militares y espacios sagrados en el campamento de la *legio VII gemina* en León”, *Gerión* 26, nº 1: 379-405.
- MOSHE GIL (2007), “The Decline of the Agrarian Economy in Palestine under Roman Rule”, *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 49, nº 3: 285-328.
- MOURITSEN, H. (2007), “CIL X 1403. The *album* from *Herculaneum* and the Nomenclature of *Latini Iuniani*”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 161: 288-90.
- MUELLER, G. H. (1986), “Weber and Mommsen: Non-Marxist Materialism”, *The British Journal of Sociology* 37, nº 1: 1-20.
- MUÑIZ COELLO, J. (1980), *El sistema fiscal en la España romana (República y Alto Imperio)*, Huelva.
- MURGA GENER, J. L. (1982), “El *iudicium cum addictione* del Bronce de Botorrita”, *Cuadernos de Historia J. Zurita* 43-44: 7-94.
- NAQUET, H. (1875), *Des impôts indirects chez les romains sous la Republique et sous l'Empire*, París.
- NEGRI, G. (1985), *Diritto Minerario Romano, I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici*, Milán.
- NETO, B. M. L. (2014), “As ciudades romanas na Tripolitânia: o caso de *Oea* (século II d.C.)”, *Romanitas. Revista de Estudos Grecolatinos* 6: 107-124.
- NICOLET, C. (1977), “Armées et fiscalité: pour un bilan de la conquête romaine”, en A. Chastagnon, C. Nicolet, C. y H. van Efenterre, (coords.), *Armées et fiscalité dans le monde Antique (=Colloques nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 936)*, París: 435-454.

- NICOLET, C. (1978), "Le *stipendium* des allies Italiens avant la Guerre Sociale", *Papers of the British School at Rome* 46: 1-11.
- NICOLET, C. (1985), "Centralisation d'Etat et problème du recensement dans le monde gréco-romain", *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne. Actes de la table ronde de Roma (15-17 octobre 1984)* (=Publications de l'École française a Rome 82), Roma: 9-24.
- NICOLET, C. (1988), *L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain*, París.
- NICOLET, C. (1991), "Les Fastes d'Ostie et les recensements augustéens", *Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance (Actes de colloque de Rome: 27-28 mai 1988)* (Publications de l'École française de Rome 143), Roma: 119-131.
- NICOLET, C. (1994), "L'Italie comme cadre juridique sous le Haut-Empire", *L, Italie d'Auguste à Dioclétien. Actes du colloque international de Rome (25-28 mars 1992)*, Roma: 377-398.
- NICOLS, J. (2001), "Hospitium and political friendship in the late Republic", en M. Peachin (ed.), *Aspects of Friendship in the Graeco-Roman World*, Rhode Island: 99-108.
- NOESKE, H. C. (1977), "Studien zur Verwaltung und Bevölkerung der dakischen Goldbergwerke in römischer Zeit", *Bonner Jahrbücher Band 177*: 271-416.
- NÖRR, D. (1995), *La 'Fides' en el Derecho Internacional Romano* (Trad. por R. Domingo), Madrid.
- NORTHWOOD, S. J. (2008), "Census and Tributum", en L. de Ligt y S. J. Northwood (eds.), *People, Land and Politics*, Leiden-Boston.
- NOVILLO LÓPEZ, M. Á. (2012), "Emigrantes en el mundo romano: algunas precisiones sobre el término *incola*", *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua* 25: 415-422.
- ÑACO DEL HOYO, T. – ARRAYÁS MORALES, I. (2006) (eds.), *War and Territory in the Roman World* (=BAR. International series 1530), Oxford.
- ÑACO DEL HOYO, T. (2003), *Vectigal incertum: economía de guerra y fiscalidad republicana en el occidente romano, su impacto histórico en el territorio (218-133 a. C.)*, Oxford.
- ÑACO DEL HOYO, T. (2008), "La tasa republicana sobre los pastos públicos (*scriptura*) y los territorios provinciales: reflexiones preliminares", en J. Uroz, J. M. Noguera y F. Coarelli (eds.), *Iberia e Italia. Modelos romanos de integración territorial. Actas del IV Congreso Hispano-Italiano Histórico-Arqueológico*, Murcia.

- ÑACO DEL HOYO, T. (2010-11), “Roma y el impacto de su ejército en la *Hispania* republicana, un enfoque ‘total’”, *Faventia*, 32-33, pp. 295-303.
- ÑACO DEL HOYO, T. – PRIETO ARCINIEGA, A. (1999), “Moneda e historia monetaria en la *Hispania* Republicana: ¿Economía, Política, Fiscalidad?”, *Studia Historica. Historia antigua* 17: 193-241.
- OLESTI VILA, O. – ANDREU EXPÓSITO, R. (2016), “Límites provinciales y agrimensura en la *Hispania* del Bajo Imperio”, en P. Diarte-Blasco (ed.), *Cities, Lands and Ports in Late Antiquity and the Early Middle Ages: Archaeologies of Change*, Bolonia: 92-105.
- OLESTI VILA, O. (2013), “La organización territorial de la colonia de *Barcino*: posibilidades y límites de los estudios catastrales”, en R. M. Cid y E. García (eds.), *Debita verba. Estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés*, vol. 2, Oviedo: 75-91.
- OLIVARES PEDREÑO, J. C. (2002), *Los dioses de la Hispania céltica*, Alicante.
- OLIVARES PEDREÑO, J. C. (2010), “Los *astures* del *conventus Lucensis* y el culto al dios *Lug* en el Noroeste de *Hispania*”, *Dialogues d’histoire ancienne* 36, nº 2: 117-136.
- OLIVER, J. H. (1958), “A New Letter of Antoninus Pius”, *The American Journal of Philology* 79, nº 1: 52-60.
- OLLER GUZMÁN, J. (2011), “La ciudad sin ciudad: la *civitas sine urbe* como elemento de control territorial”, *Estrat Crític* 5: 190-203.
- OLLER GUZMÁN, J. (2014), “La *civitas sine urbe* y su función de vertebración territorial en el territorio provincial hispano: los casos de ‘Egara’ y Caldes de Montbui”, *Pyrenae. Revista de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental* 45, nº 1: 89-110.
- OLMO LÓPEZ, R. (2016), *El centro en la periferia: las competencias y actividades de los gobernadores romanos en las provincias hispanas durante el Principado (27 a.C.-235d.C.)*. Tesis doctoral inédita. Dir. E. García, P. López Barja y D. Mantovani. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- OOST, G. I. (1954), “The Fetial Law and the Outbreak of the Jugurthine War”, *The American Journal of Philology* 75, nº 2: 147-159.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – BELTRÁN ORTEGA, A. (2010), “Desplazados e inmigrantes en los *metalla* hispanorromanos. Epigrafía en contexto”, *Arqueologia Espacial (Arqueología de la Población)* 28: 399-417.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – MORILLO CERDÁN, Á. (2013), “*Asturica Augusta*: reflexiones sobre su estatuto y su papel territorial (finales del siglo I a. C. – principios del siglo III d.C.)”, en R. M. Cid y E. García (eds.), *Debita verba*:

*estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés*, vol. 2, Oviedo: 93-119.

- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – PLÁCIDO SUÁREZ, D. (2000), “Las Médulas y la explotación minera en la Antigüedad. Las Médulas como ejemplo del concepto de *metallum*”, en F. J. Sánchez-Palencia (ed.), *Las Médulas (León). Un paisaje cultural en la Asturia Augustana*, León: 19-31.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. – SASTRE PRATS, I. (2006), “*L’ager mensura comprehensus* et le sol provincial: l’Occident de la Péninsule Ibérique”, en D. Conso, A. Gonzales y J. Y. Guillaumin (eds.), *Le vocabulaires techniques des arpenteurs romains. Actes du colloque international (Besançon, 19-21 septembre 2002)*, Besançon: 193-199.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. (2010), “Los *castella* y la articulación del poblamiento rural de las *civitates* del Noroeste peninsular”, en C. Fornis, J. Gállego y P. López Barja (coords.), *Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido*, vol. 2, Zaragoza: 1091-128.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. (2002), “Mines, Territorial Organization and Social Structure in Roman Iberia: *Carthago Noua* and the Peninsular Northwest”, *American Journal of Archaeology* 106, nº 4: 581-599.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. (2016), “Del final de la conquista al inicio de la explotación minera: Augusto y el control del Noroeste hispano”, en M. D. Dopico y M. Villanueva (eds.), *Clausus est Ianus. Augusto y la transformación del Noroeste hispano*, Lugo: 341-360.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – SASTRE PRATS, I. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. – PLÁCIDO SUÁREZ, D. (2001), “El edicto de Augusto de El Bierzo y la primera organización romana del Noroeste peninsular”, en F.-J. Sánchez-Palencia y J. Mangas (coords.), *El Edicto de El Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, Ponferrada: 63-112.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – SASTRE PRATS, I. – ZUBIARURRE IBÁÑEZ, E. (2013), “Organización y regulación de la actividad minera hispana altoimperial”, en M. Zarzalejos, P. Hevia y L. Mansilla (eds.), *Paisajes mineros antiguos en la Península Ibérica. Investigaciones recientes y nuevas líneas de trabajo. Homenaje a Claude Domergue*, Madrid: 31-46.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. – SASTRE PRATS, I. (1999), “Fiscalité et organisation du territoire dans le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique: *civitates*, tribut, et *ager mensura comprehensus*”, *Dialogues d’historire ancienne* 25, nº 1: 159-188.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1995-96), “Territorio, análisis territorial y Arqueología del Paisaje”, *Studia Historica. Historia Antigua*, 13-14: 61-68.



- OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1996), *Estructura social y territorio. El impacto romano en la cuenca noroccidental del Duero*, Madrid.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. (1999), “El estudio del paisaje: visiones desde la arqueología”, *Arqueología Espacial. Arqueología del paisaje*, 19-20: 9-19.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. (2002), “El territorio de las *civitates* peregrinas en los tratados de agrimensura. Las *civitates* del Noroeste hispano”, *Habis* 33: 389-406.
- OREJAS SACO DEL VALLE, A. (2014), “Trabajos y trabajadores en las minas de la *Hispania* romana”, en S. Castillo (ed.), *Mundo del trabajo y asociacionismo en España. Actas del VII Congreso de Historia Social de España*, Madrid: 15-35.
- ORTIZ DE URBINA, E. (1996), “Derecho Latino y ‘municipalización virtual’ en Hispania, África y Gallia”, en E. Ortiz y J. Santos (eds.), *Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania (=Revisiones de Historia Antigua 2)*, Vitoria: 137-151.
- ORTIZ DE URBINA, E. (2012), “Derecho latino, organización cívica y élites hispanas”, en J. Santos y C. Andreotti (eds.), *Acta 12. Romanización, fronteras y etnias en la Roma Antigua: el caso Hispano (=Revisiones de Historia Antigua 7)*, Vitoria: 633-664.
- OTTO, W. (1905), *Priester und temple im hellenistischen Ägypten; ein beitrag zur kulturgeschichte des hellenismus*, Leipzig-Berlín.
- OUDSHOORN, J. G. (2007), *The Relationship between Roman and Local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives. General Analysis and Three Case Studies on Law of Succession, Guardianship and Marriage*, Leiden-Boston.
- OZCÁRIZ GIL, P. (2006), *Los conventus de la Hispania Citerior*, Madrid.
- OZCÁRIZ GIL, P. (2011), “The ‘dioceses’ of *Hispania Citerior* in the High Empire. A Historiographic Invention”, *Studia Humaniora Tartuensis* 12: 1-18.
- OZCÁRIZ GIL, P. (2012), “Divisiones administrativas conventuales y realidades etno-territoriales”, en J. Santos y G. Cruz (eds.), *Romanización, fronteras y etnias en la Roma Antigua: el caso Hispano, Revisiones de Historia Antigua VII (=Anejos de Veleia)*, Vitoria: 559-579.
- OZCÁRIZ, GIL. P. (2013), *La administración de la provincia Hispania Citerior durante el Alto Imperio Romano*, Barcelona.
- PALAO VICENTE, J. J. (2009), “Los asentamientos civiles en los campamentos hispanos durante el Alto-Imperio”, *Limes XX. XX Congreso Internacional de Estudios sobre la Frontera Romana*, Madrid: 525-540.

- PALAO VICENTE, J. J. (2014), “Augusto y el ejército romano en la provincia *Hispania Citerior*. ¿Nuevas propuestas a viejos interrogantes?”, *Veleia* 31: 53-78.
- PALET MARTÍNEZ, J. M. – ORENGO ROMEU, H. A. – FIZ FERNÁNDEZ, J. I. (2011), “Integración de metodologías SIG para el estudio del territorio en época romana: aplicación a las centuriaciones del *ager tarraconensis*”, en V. Mayoral y S. Celestino (eds.), *Actas del V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida* (=Anejos de Archivo Español de Arqueología 59), Mérida: 631-649.
- PALET MARTÍNEZ, J. M. – ORENGO ROMEU, H. A. – RIERA MORA, S. (2011): “Centuriación del territorio y modelación del paisaje en los llanos litorales de Barcino y Tarraco. Una investigación Interdisciplinar a través de la integración de datos arqueomorfológicos y paleoambientales” *Atti del Convegno Sistemi centuriali e opere di assetto agrario tra età romana e primo medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi e interpretativi*, Pisa: 113-129.
- PAOLI, J. (1938), “Marsyas et le *Ius Italicum*”, en *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 55: 96-130.
- PASTOR MUÑOZ, M. (1977), “Participación indígena astur en la vida social romana”, *Memorias de historia antigua* 1: 191-200.
- PASTOR, J. (1997), *Land and Economy in Ancient Palestine*, Londres.
- PATRICH, J. (2011), *Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima. Caput Judaeae, Metropolis Palaestinae* (=Ancient Judaism and Early Christianity 72), Leiden-Boston.
- PECHOUX, L. (2008), *Les sanctuaires de périphérie urbaine en Gaule romaine*. Tesis doctoral. Dir.: J.-C. Beal. Universidad Lumière-Lyon 2., Lyon.
- PENA, M. J. (1998), “Apuntes sobre los repartos de tierras en la Hispania republicana y las listas de nombres”, *Faventia* 20, nº 2: 153-161.
- PENELLA, R. J. (1987), “War, Peace and the *ius fetiale* in Livy 1”, *Classical Philology* 82, nº 3: 233-237.
- PERALTA LABRADOR, E. (2003), *Los Cántabros antes de Roma*, Madrid.
- PEREIRA MENAUT, G. – FERREIRA DE ALMEIDA, C. A. A. (1981), “A grande inscrição do Penedo de Remeseiros, Vilar de Perdizes, Montalegre (*CIL II* 2476)”, *Arqueología* 4: 142-145.
- PEREIRA MENAUT, G. – SANTOS YANGUAS, J. (1980), “Sobre la romanización del Noroeste de la Península Ibérica: las inscripciones con mención de *origo personal*”, *I seminario de Arqueología* 3: 271-81.
- PEREIRA MENAUT, G. (1978), “*Caeleo Cadroiolonis f. Cilenus, Berisamo et at: centuria or castellum?* A discussion”, *Hispania antiqua* 8: 271-280.

- PEREIRA MENAUT, G. (1982), “Los *castella* y las comunidades de Gallaecia”, *Zephyrus* 34-35: 249-268.
- PEREIRA MENAUT, G. (1984), “La formación histórica de los pueblos del Norte de Hispania. El caso de *Gallaecia* como paradigma”, *Veleia* 1: 271-288.
- PEREIRA MENAUT, G. (1988), “Cambios estructurales versus romanización convencional. La transformación del paisaje político en el Norte de Hispania”, en J. González y J. Arce (eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis* (=Anejos de Archivo Español de Arqueología), Madrid: 245-259.
- PEREIRA MENAUT, G. (1992), “Aproximación crítica al estudio de etnogénesis: la experiencia de *Callaecia*”, en G. Ruiz Zapatero y M. Almagro Gorbea (coords.), *Paleoetnología de la Península Ibérica: actas de la Reunión celebrada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (13-15 diciembre 1989)* (=Complutum 2-3), Madrid: 35-44.
- PEREIRA MENAUT, G. (2005a), “¿Qué es un *munus*?, *Mainake* 27: 395-431.
- PEREIRA MENAUT, G. (2005b), “Nuevas perspectivas sobre la vida en los castros galaico-romano”, *Veleia* 22: 121-128.
- PEREIRA MENAUT, G. (2011), *Munera Civitatum. La vida de la Ciudad Romana Ideal*, Sevilla.
- PEREIRA MENAUT, G. (2014), “Cómo se construye una región histórica en época del emperador Augusto. El caso de *Callaecia*”, *Studia historica. Historia Antigua* 32: 179-196.
- PÉREX AGORRETA, M. J. – MIRÓ I ALAIX, C. (eds.) (2017), *VBI AQVAE IBI SALVS. Aguas mineromedicinales, termas curativas y culto a las aguas en la Península Ibérica (desde la Protohistoria a la Tardoantigüedad)*, Madrid.
- PERÉX AGORRETA, M. J. – RODRÍGUEZ MORALES, J. (2011), “Término augustal hallado en Lekunberri (Navarra): estudio preliminar”, *Trabajos de Arqueología Navarra* 23: 5-19.
- PÉREZ BRAVO, C. (2009), “La *stipulatio*. Características generales”, *Ars Boni et Aequi* 5: 137-156.
- PÉREZ LOSADA, F. (2002), *Entre a cidade e a aldea. Estudio arqueohistórico dos “aglomerados secundarios” romanos en Galicia* (=Brigantium 13), A Coruña.
- PFLAUM, H. G. (1960), *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, vol. 2, París.
- PIGANIOL, A. (1954), *Atlas de centuriations romaines de Tunisie*, París.
- PIGANIOL, A. (1962), *Les documents cadastraux de la colonie romaine d’Orange*, París.

- PINA POLO, F. (2003), “¿Por qué fue reclutada la *turma Salluitana* en *Salduie*?, *Gerión* 21, nº1: 197-204.
- PINA POLO, F. (2012), “Generales y clientelas provinciales: ¿qué clientelas?”, en J. Santos y G. Cruz (eds.), *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: el caso hispano* (=Anejos de *Veleia. Revisiones de Historia Antigua VII*), Vitoria: 55-79.
- PIRES CANINAS, J. C. (2011), “A cerâmica de engobe brinado do monte de São Martinho (Castelo Branco)”, *Acafa* 4: 3-9.
- PITILLAS SALAÑER, E. (2003), “El papel del *princeps* como elemento de enlace entre Roma y los pueblos indígenas”, *Historia Antiqua* 27: 81-94.
- PITILLAS SALAÑER, E. (2006), “Soldados auxiliares del ejército romano originario del NW de Hispania”, *Hispania antiqua* 30: 21-34.
- PITILLAS SALAÑER, E. (2007), “Función integradora del ejército romano de ocupación en tierras del norte y del noroeste de *Hispania* durante la etapa de postconquista”, *Hispania antiqua* 31: 111-126.
- PLÁCIDO SUÁREZ, D. (2014), “Conocimiento y explotación de los pueblos del Noroeste hispano en la tradición literaria grecolatina”, *Gerión* 32: 157-179.
- PLANA, R. (1989), “Le territoire d’Ampurias: première phase de l’implantation romaine”, *Dialogues d’Histoire Ancienne* 15, nº 2: 249-281.
- POLO TORIBIO, G. (2012), “Finalidad probatoria de la *professio censualis*”. *RIDROM. Revista Internacional de Derecho Romano* 8: 118-142.
- PONTE, V. (2010), “Régimen jurídico de las vías romanas”, *Las técnicas y las construcciones en la ingeniería romana*, Madrid: 75-118.
- POVEDA NAVARRO, A. M. (2002), “*Fora Hispana*: La evidencia de *Libisosa Forvm Avgvstvm* (Lezuza, Albacete)”, *Conimbriga* 41: 5-38.
- PREMERSTEIN, A. (1919), “*Ius Italicum*”, *Real Ecyclopädie*, col. 1238-1253.
- PRIETO ARCINIEGA, A. (1972), “Sobre los límites del *Conventus Cordubensis*”, *Hispania Antiqua* 2: 125-134.
- PRITCHARD, R. T. (1970), “Cicero and the *Lex Hieronica*”, *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 19, nº 3: 352-368.
- PRÓSPER, B. M. (2010), “Toponimia celta en la inscripción de Fuentes de Ropel. Seguisona y sus correlatos europeos”, en F. Cortés y J. V. Méndez (coords.), ‘*Dic mihi, mvsa, virvm*’: *homenaje al profesor Antonio López Elire*, Salamanca: 533-540.
- PUGLIESE CARRATELLI, G. (1953), “Epigrafi magiche cristiane della Sicilia orientale”, *Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei* 8: 181-89.

- PUNDT, H. A. (2012) *Mining Culture in Roman Dacia: Empire, Community, and Identity at the Gold Mines of Alburnus Maior ca. 107-270 C.E.*, Portland.
- PURPURA, G. (2012), “Gli *Edicta Augusti ad Cyrenenses* e la genesi del SC Calvisiano”, *Annali del seminario giuridico della università di Palermo* 55: 463-518.
- RABANAL ALONSO, M. A. – GARCÍA MARTÍNEZ, S. M. (2001), *Epigrafía Romana de la Provincia de León: revisión y actualización*, León.
- RADIN, M. (1916), “The International Law of the Gallic Campaigns”, *The Classical Journal* 12, nº 1: 8-33.
- RAGGI, A. (2001), “*Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*”, *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 135: 73-116.
- RAMELLI, I. (2002), *Studi su ‘Fides’*, Madrid.
- RATHBONE, D. (1993a), “Egypt, Augustus and Roman Taxation”, *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 4: 81-112.
- RATHBONE, D. (1993b), “The *census* qualifications of the *assidui* and the *prima classis*”, Sancisi-Weerdenburg (eds.), *De Agricultura. In memoriam Pieter Willem de Neeve*, Amsterdam: 121-152.
- REDENTOR, A. J. M. (2011), *A cultura epigráfica no ‘conventus Bracaravgstanvs (pars occidentalis). Percursos pela sociedade Brácara da Época Romana..* Tesis doctoral. 3 vols. Dir.: J. de Encarnação. Universidad de Coimbra, Coimbra.
- RESINA SOLA, P. (1983), *Frontino: De agri mensura*, Granada.
- REVELL, L. (2009), *Roman Imperialism and Local Identities*, Nueva York.
- REYES HERNANDO, V. O. (2000), *El conjunto epigráfico de Belorado, Burgos, Valladolid*.
- RIVET, A. L. F. (1982), “The Brittones Anavionenses”, *Britannia* 13: 321-322.
- RODÀ DE LLANZA, I. – COMES, R. (coords.) (2002), *Scripta manent. La memoria escrita de los romanos*, Barcelona.
- RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (1948), *El sistema gentilicio decimal de los indoeuropeos occidentales y los orígenes de Roma*, Madrid.
- RODRÍGUEZ ALMEDIA, E. (1993). “Apéndice”, en F. Burkhalter y J. Arce (coords.), *Bronces y religión romana. Actas del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos (Madrid, mayo-junio, 1990)* (= *Monografías de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma*), Madrid: 171-172.
- RODRÍGUEZ ALMEIDA, E. (2002), *Formae urbis antiquae. Le mappe marmoree di Roma tra la Repubblica e Settimio Severo* (= *Collection de l’École française de Rome* 305), Roma.

- RODRÍGUEZ COLMENERO, A. – FERRER SIERRA, S. – ÁLVAREZ ASOREY, R. D. (2004), *Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Noroeste hispánico (Conventos Brarense, Lucense e Asturicense)*, Lugo.
- RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1988), “Nuevos *termini* territoriales entre unidades gentilicias galaico-romanas”, en G. Pereira (dir.), *Actas del 1<sup>er</sup> Congreso Peninsular de Historia Antigua (Santiago de Compostela, 1-5 julio 1986)*, vol. 2, Santiago de Compostela: 271-289.
- RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1993), *Corpus-catálogo de inscripciones rupestres de época romana del cuadrante noroeste de la península Ibérica (= Lauroco 1)*, Braga.
- RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1996), “Achados epigráficos varios”, *Lauroco* 2: 265-273.
- RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (1997), *Aquae Flaviae I. Fontes epigráficas da Gallaecia meridional interior*, Chaves.
- RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (2010a) “El Dios *Dancerus* de la cañada de Remeseiros (Vilar de Perdizes, Montalegre, Portugal), un Silvano indígena protector de los contratos de arrendamiento”, *Serta Palaeohispanica J. de Hoz Palaeohispanica* 10: 133-146.
- RODRÍGUEZ COLMENERO, A. (2010b), “Redescubrimiento y reinterpretación de las tres inscripciones romanas dadas a conocer por Gómez Moreno en los canales de Las Médulas (León)”, *Lauroco* 5: 227-230.
- RODRÍGUEZ DE BERLANGA, M. (1884), *Los bronce de Bonanza, Lascuta y Aljustrel*, Málaga.
- RODRÍGUEZ DEL CUETO, F. (2015), “Análisis del sistema defensivo y del uso del espacio intramuros de un poblado fortificado: el Castro de Pendía (Boal, Asturias) entre la Edad del Hierro y Época Romana”, *Munibe. Antropología-Arkeologia* 66: 243-258.
- RODRIGUEZ NEILA, J. F. (1977), “La terminología aplicada a los sectores de población en la vida municipal de la Hispania romana”, *Memorias de historia antigua* 1: 201-214.
- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (1978), “La situación socio-política de los *incolae* en el mundo romano”, *Memorias de Historia Antigua*, 2: 147-169.
- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (1986), “Cuestiones en torno a la censura municipal romana”, *Gerión* 4: 61-99.
- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (1988), “*Aqua publica* y política municipal romana”, *Gerión* 6: 223-252.
- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (1998), “*Hispani Principes*. Algunas reflexiones sobre los grupos dirigentes de la hispania romana”, *Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra* 6: 99-137.

- RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (2005), *'Tabula publicae': Archivos municipales y documentación financiera en las ciudades de la Bética*, Madrid.
- ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1974), *Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España antigua*, Salamanca.
- ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1983), "La conquista del norte de Hispania y la participación de los astures en el ejército imperial romano", *Lancia: revista de prehistoria, arqueología e historia antigua del noroeste peninsular* 1: 119-138.
- ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1989), *Ejército y sociedad en la Hispania Romana*, Granada.
- ROMERO PERONA, D. (2015), *Territorio y formaciones sociales en la zona astur-lusitana del Duero*. Tesis doctoral inédita. Dir.: F. Arasa y F.-J. Sánchez-Palencia. Universitat de Valencia, Valencia.
- ROSAFIO, P. (1993), "The emergency of the Tenancy and the *Precarium*", en J. C. Gieben, *De agricultura. In memoriam Pieter Willem de Neeve (1945-1990)*, Amsterdam: 164-176.
- ROSELAAR, S. (2008), "Regional variations in the use of ager publicus", en L. De Light y S. J. Northwood (eds.), *People, Land and Politics. Demographic developments and the transformation of Roman Italy, 300-13 A.D.*, Leiden-Boston: 557-586.
- ROSELAAR, S. (2010), *Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 BC*, Oxford – Nueva York.
- ROSENSTEIN, N. (2007), "War and Peace, Fear and Reconciliation at Rome", en K. A. Raaflaub (ed.), *War and Peace in the Ancient World*, Oxford: 226-244.
- ROSTOVTZEFF, M. (1994), *Per la storia del colonato romano* (trad. de A. Marcone), Brescia.
- ROTH CONGÉS, A. (2004), "La borne de Canabrie: un *lapis varutus*?" *Histoire et Mesure* 19, nº 1: 21-40.
- ROTONDI, G. (1966), *Leges Publicae Populi Romani. Elenco cronológico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Darmstadt.
- ROXAN, M. M. (1999), "Two Complete Diplomas of Pannonia Inferior: 19 May 135 and 7 Aug. 143", *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 127: 249-273.
- RUBINI, J. (2004), "La borne de Cantabrie. Nouvelles pistes pour l'étude et la restitution des techniques romaines", *Histoire et Mesure* 19, nº 1: 41-93.
- RUBIO ORECILLA, F. J. (1999), "Aproximación lingüística al bronce de Torrijo (Teruel)" *Veleia* 16: 137-157.
- RUDORFF, A. A. F. (1873), "Über die baetische Fiduciatafel. Eine Revision", *Zeitschrift für Rechtsgeschichte* 11.

- RUEY-LIN CHANG (2014), *Un dossier fiscal hermopolitain d'époque romaine*, El Cairo.
- RUIZ DE ARBULO, J. (2014), "El *signaculum* de *Caius Valerius Avitus*, duoviro de *Tarraco* y propietario de la villa de Els Munts (Altafulla)", *Pyrenae* 45, nº 1: 125-151.
- RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. – SASTRE PRATS, I. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. (2014), "Water Networks of Roman Gold Mines of Northwestern Iberian Peninsula", *Water History* 6: 95-113.
- RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. (1999a), "Les 'terrasses' de la Fuente de la Mora (El Cabaco, Salamanque, Espagne): l'occupation et l'organisation du territoire dans le Nord-Ouest de la Lusitanie", *Dialogues d'Histoire Ancienne* 25, nº 1: 213-221.
- RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. (1999b), "La minería aurífera romana en el Nordeste de Lusitania: Las Cavenes de El Cabaco (Salamanca)", *Archivo Español de Arqueología* 72: 119-139.
- RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. (2001), *Organización y explotación del territorio en el Nordeste de Lusitania en época Altoimperial*. Tesis doctoral. Dir.: F.-J. Sánchez-Palencia. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
- RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. (2005), *La arqueología de los espacios cultivados. Terrazas y explotación agraria romana en un área de montaña: la sierra de Francia (Salamanca)* (=Anejos de *Archivo Español de Arqueología* 36), Madrid
- SÁEZ FERNÁNDEZ, P. (1990), "Estudio sobre una inscripción catastral colindante con Lacimurga", *Habis* 21: 205-227.
- SAEZ FERNÁNDEZ, P. (1997), "Las tierras públicas en la *lex Ursonensis*", *Studia Historica, Historia Antigua* 15: 137-152.
- SAGREDO SAN EUSTAQUIO, L. (2007), "La circulación de la moneda de oro en la meseta Norte en la Antigüedad", *Historia Antiqua* 31: 127-162.
- SALIDO DOMÍNGUEZ, J. – VILLA VALDÉS, Á. (2014), "Molino rotatorio roman con inscripción *Turro* procedente del castro de San Chuis (San Martín de Beduledo, Allende, Asturias)", *Zephyrus* 73: 217-229.
- SALINAS DE FRÍAS, M. – RODRÍGUEZ CORTÉS, J. (2000), "Substrato y romanización de las oligarquías locales de la provincia romana de Lusitania", en J.-G. Gorges y T. Nogales Basarrate (coords.), *Sociedad y cultura en Lusitania. IV Mesa Redonda Internacional*, Mérida: 17-34.
- SALWAY, B. (2000), "Prefects, *patroni*, and decurions: a new perspective on the album of *Canusium*", *Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement* 73: 115-171.
- SÁNCHEZ LEÓN, M. L. (2002-2003), "Municipios flavios en las islas Baleares", *Memorias de historia antigua* 23-24: 103-118.



- SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. – ORDÓÑEZ TASCÓN, J. L. (2017), “Las estelas de Robledo de la Guzpeña (León)”, *Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua* 41: 238-257.
- SÁNCHEZ-PALENCIA F.-J. – FERNÁNDEZ-POSSE, M.D. (1985), *La Corona y el Castro de Corporales*. Madrid.
- SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. – FERNÁNDEZ-POSSE, M. D. (1988), *La Corona y el Castro de Corporales. Campaña de 1983 y prospecciones en la Valderia y la Cabrera*, Madrid.
- SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. – SASTRE PRATS, I. – PÉREZ GARCÍA, L. C. (2006), “Las zonas mineras romanas del noroeste peninsular. Infraestructura y organización del territorio”, en I. Moreno (coord.), *Nuevos elementos de ingeniería romana. III Congreso de las Obras Públicas Romanas*, Castilla y León: 265-285.
- SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. (1995), “Minería y metalurgia de la región astur en la antigüedad”, en *Astures. Pueblos y culturas en la frontera del Imperio Romano (Gran Enciclopedia Asturiana)*, Gijón: 141-157.
- SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. (2000) (ed.), *Las Médulas (León). Un paisaje cultural en la Asturia Augustana*, León.
- SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. – SASTRE PRATS, I. – CURRÁS REFOJOS, B. X. – ROMERO PERONA, D. (2009), “Minería romana en la cuenca meridional de los ríos Sil y Miño”, *Revista Aquae Flaviae* 41: 285-301.
- SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F.-J. – VAUDAGNA, A. – PECHARROMÁN FUENTE, J. L. – BELTRÁN ORTEGA, A. – CURRÁS REFOJOS, B. X. – ALONSO BURGOS, F. – RUIZ DEL ÁRBOL MORO, M. (2011), “La zona minera de La Bessa (Biella, Italia) como precedente republicano de la minería de oro en *Hispania*”, en P. Bueno, A. Gilman, C. Martín, F.-J. Sánchez-Palencia (coords.), *Arqueología, sociedad, territorio y paisaje: estudios sobre Prehistoria reciente, Protohistoria y transición al mundo romano en homenaje a M<sup>a</sup> Dolores Fernández Posse*, Madrid: 329-348.
- SÁNCHEZ-PALENCIA, F.-J. – RUIZ DEL ÁRBOL, M. (2000), “Estructuras agrarias y explotación minera en Lusitania Nororiental. La Zona Arqueológica de Los Cavenes (El Cabaco, Salamanca)”, en J.-G. Gorges. y T. Nogales (coords.), *Sociedad y cultura en Lusitania romana. IV Mesa Redonda Internacional*: 343-358.
- SÁNCHEZ-PALENCIA, F.-J. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. – SASTRE PRATS, I. (2007), “Roman Gold Mines: Legal and Territorial Practices”, en F. Reduzzi (ed.), *Sfruttamento tutela e valorizzazione del territorio. Dal diritto romano alla regolamentazione europea e internazionale. Atti del convegno organizzato nell’ambito dell’action COST A27 (=Diasphora 12)*, Nápoles: 181-193.

- SANCHO ROCHER, L. (1978), “Los *conventus iuridici* en la Hispania romana”, *Caesaraugusta* 45-46: 171-194.
- SANDS, P. C. (1908), *The Client Princes of the Roman Empire*, Cambridge.
- SANNA, M. V. (2007), “*Capitis deminutio e captivitas*”, *Tradizione Romana* 6: 1-31.
- SANTAPAU PASTOR, M. C. (2002-2003), “La categoría jurídica de la tierra en Hispania romana”, *Lvcentum* 21-22: 191-205.
- SANTOS YANGUAS, J. – DOPICO CAÍNZOS, M. D. (2016) “El impacto de *Asturica Augusta* como ciudad del poder en su ámbito”, *Revista de Historiografía* 25: 287-300.
- SANTOS YANGUAS, J. (1979), “Formas de propiedad y producción en el Noroeste hispánico en época romana altoimperial”, *Memorias de historia antigua* 3: 63-72.
- SANTOS YANGUAS, J. (2009), “De nuevo sobre los *castella*: naturaleza, territorio e integración en la *ciuitas*”, en D. Kremer (ed.), *Onomástica Galega II. Onimia e onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste peninsular. Actas do segundo coloquio Leipzig, 17 e 18 de outubro de 2008 (=Verba. Anuario Galego de Filoloxía 64)*, Santiago de Compostela: 169-183.
- SANTOS YANGUAS, N. (1981), *El ejército romano y la romanización de los astures*, Oviedo.
- SANTOS YANGUAS, N. (1985), “Los *conventus* jurídicos del Noroeste peninsular”, *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos* 115: 599-619.
- SANTOS YANGUAS, N. (1997), “*Flavionavia*, una *civitas* romana en territorio de los Astures Transmontanos”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua* 10: 415-436.
- SANTOS YANGUAS, N. (2004-2005), “El final de las guerras astur-cántabras y la desmilitarización del ejército romano en territorio de los astures”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua* 17: 237-250.
- SANTOS YANGUAS, N. (2007), “La cohorte de caballería de Astures y Galaicos”, *Cuadernos de Estudios Gallegos* 54, nº120: 35-44.
- SANTOS YANGUAS, N. (2014), “El culto imperial”, *Ilus. Revista de Ciencias de las Religiones* 25: 285-318.
- SANTOS YANGUAS, N. (2015), “La inscripción de Pentio Flavio hallada en Corao (Cangas de Onís) y los vadinienses del oriente de Asturias”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua* 28: 97-108.
- SANTOS, L. – LE ROUX, P. – TRANOY, A. (1983), “Inscrições romanas do Museu Pio XII em Braga”, *Bracara Augusta* 37: 183-205.

- SAQUETE CHAMIZO, J. C. (2000), “Privilegio y sociedad en *Augusta Emerita*: la cuestión del *ius Italicum* y la *immunitas*”, en J.-S. Gorges y T. Nogales (coords.), *IV Mesa Redonda Internacional. Sociedad y cultura en la Lusitania Romana*, Badajoz: 379-389.
- SARMENTO, F. M. (1901), “Materiaes para a archeologia do concelho de Guimarães”, *Revista de Guimarães* 18: 117-135.
- ŠAŠEL KOS, M. (2003), “Emona was in Italy, not in Pannonia”, en von Herausgegeben, M. Šašel Kos y P. Scherrer (eds.), *The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia*, Ljubljana: 11-19.
- SASTRE PRATS, I. – SÁNCHEZ-PALENCIA, F.-J. (2002), “La red hidráulica de las minas de oro hispanas: aspectos jurídicos, administrativos y políticos”, *Archivo Español de Arqueología* 75: 215-233.
- SASTRE PRATS, I. – SÁNCHEZ-PALENCIA, F.-J. (2013), “Clientela y minería de oro entre los cántabros vadinienses”, en E. García y R. M. Cid, *Debita verba II: estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés*, Oviedo: 253-270.
- SASTRE PRATS, I. – BELTRÁN ORTEGA, A. – ALONSO BURGOS, F. (2012), “La epigrafía de las zonas mineras de *Asturia Augustana*”, en F.-J. Sánchez-Palencia (ed.), *Minería romana en zonas interfronterizas de Castilla y León y Portugal (Asturia y NE de Lusitania)*, Castilla y León.
- SASTRE PRATS, I. – BELTRÁN ORTEGA, A. – SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, F. J. (2010), “Ejército y comunidades locales en el noroeste peninsular: formas de control y relaciones de poder en torno a la minería del oro”, en J. J. Palao Vicente (coord.), *Militares y civiles en la antigua Roma: dos mundos diferentes, dos mundos unidos*, Salamanca: 117-34.
- SASTRE PRATS, I. – BELTRÁN ORTEGA, A. (2010) (eds.), *El bronce de El Picón (Pino del Oro). Procesos de cambio en el occidente de Hispania*, Castilla y León.
- SASTRE PRATS, I. – CURRÁS REFOJOS, B. X. – ALONSO BURGOS, F. (2010), “Parentesco, desigualdad y formas de identidad en la Edad del Hierro del Noroeste”, *Arqueología Espacial* 28: 169-186.
- SASTRE PRATS, I. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. – CURRÁS REFOJOS, B. X. – ZUBIAURRE IBÁÑEZ, E. (2017), “La formación de la sociedad provincial en el Noroeste hispano y su evolución: *civitates* y mundo rural”, *Gerión* 35, nº 2: 537-552.
- SASTRE PRATS, I. – OREJAS SACO DEL VALLE, A. (e.p.), “Pervivencia y cambio en el proceso de dominación romana del Occidente de Hispania”, *Lo nuevo y los viejo en las sociedades antiguas. Actas XXXVI Coloquio del GIREA (Bellaterra, 12-13 diciembre 2013)*, Barcelona.

- SASTRE PRATS, I. – PLÁCIDO SUÁREZ, D. (2008), “*Deditio in fidem* and peasant forms of dependence in the Roman provincial system: the case of Northwestern Iberia”, en A. Gonzales (ed.), *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition. XXX<sup>e</sup> colloque du GIREA (Besançon, 15-17 décembre 2005: 501-509)*, vol. 2, Besançon: 501-509.
- SASTRE PRATS, I. – RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A. – CURRÁS REFOJOS, B.X. (e.p.), “La hegemonía del Imperio: Ideología y cambio social y cultural en el marco de la expansión romana. El Noroeste hispano”, *Praxis e ideología de la violencia: para una anatomía de la dependencia en las sociedades patriarcales esclavistas, desde la Antigüedad*, Besançon.
- SASTRE PRATS, I. – RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A. – CURRÁS REFOJOS, B.X. (e.p.), “El mundo rural en el sistema provincial romano: una reflexión para el Noroeste hispano”, *Historiografía de la esclavitud*, Madrid.
- SASTRE PRATS, I. (1998), “El modo de producción tributario como estructura de explotación: esclavismo y tributación”, *Hispania* 58, nº 199: 705-711.
- SASTRE PRATS, I. (1999), “Estructura de explotación social y organización del territorio de la *civitas Zoelarum*”, *Gerión* 17: 345-359.
- SASTRE PRATS, I. (2001a), *Las formaciones sociales de la Asturia romana*, Madrid.
- SASTRE PRATS, I. (2001b), “Las inscripciones Vadinienses en el contexto general de la dominación romana del noroeste”, *Edades: revista de historia* 9: 9-19.
- SASTRE PRATS, I. (2002), *Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía del Conventus Asturum durante el Alto Imperio (=Anejos de Archivo Español de Arqueología 25)*, Madrid.
- SASTRE PRATS, I. (2003), “*Ager publicus* y *deditio*: Reflexiones sobre los procesos de provincialización”, *Histoire, Espaces et Marges de l’Antiquité. Hommages à Monique Clavel-Lévêque*, Besançon: 157-192.
- SASTRE PRATS, I. (2004), “Los procesos de la complejidad social en el Noroeste peninsular: arqueología y fuentes literarias”, *Trabajos de Prehistoria* 61, nº 2: 99-110.
- Sastre Prats, I. (2007), “Campesinado, escritura y paisaje. Algunas cuestiones sobre el mundo provincial romano occidental”, en D. Plácido, F.J. Moreno y L.A. Ruiz (eds.), *Necedad, sabiduría y verdad: el legado de Juan Cascajero (=Gerión. Número extraordinario 25)*, vol. 1, Madrid: 375-382.
- SASTRE PRATS, I. (2010), “Clientela y dependencia social en el Noroeste y Occidente hispanos: pactos y minería”, en I. Sastre y A. Beltrán (eds.), *El bronce de El Picón (Pino de Oro). Procesos de cambio en el occidente de Hispania*, Castilla y León: 157-163.

- SASTRE PRATS, I. (2012), “Las zonas mineras auríferas en el sistema provincial altoimperial: el caso del Noroeste Hispano”, en A. Orejas y C. Rico (eds.), *Minería y metalurgia antiguas. Visiones y revisiones. Homenaje a Claude Domergue (Collection de la Casa de Velázquez 128)*, Madrid: 255-59.
- SAUMAGNE, C. (1965), “Les Domanialités publiques et leur cadastration au premier siècle de l’empire romain”, *Journal des savants* 1: 73-116.
- SAVO, B. (2004) “Le cicladi in età romana. Siro: annotazioni storiche e religiose”, en F. Beltrán (ed.), *Antiqua iuniora: en torno al Mediterráneo en la Antigüedad*, Zaragoza: 27-38.
- SAWICKI, P. (2012), “Remarks on Some Tax Exempts in Ancient Rome”, *Studia Ceranea* 2: 61-73.
- SAYAS ABENGOCHEA, J. J. (1989a), “*Ad census accipiendos* de ciudades vasconas y várdulas y la *legatio censualis* de un pamplonés”, *Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua* 2: 137-152.
- SAYAS ABENGOCHEA, J. J. (1989b), “El bandolerismo lusitano y la falta de tierras”, *Revista de la Facultad de Geografía e Historia* 4: 701-714,
- SCHAUGHEN, D. (1709), *Dissertatio iuridica inauguralis, de re frumentaria*, Bélgica.
- SCHEID, J. (1987): “Les sanctuaires de confins dans la Rome Antique. Réalité et permanence d’une représentation idéale de l’espace romain”, en *L’Urbs. Espace urbaine et histoire (Ier siècle av. J.-C. – III siècle ap. J.-C.). Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985) (=Collection de l’École Française de Rome 98)*, Roma: 583-95.
- SCHULTEN, A. (1962), *Los cántabros y los astures y su guerra con Roma*, Madrid.
- SCHWAHN, W. (1939), “*Tributum*”, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* 2, col. 62.
- SEGRÈ, G. (1922), “Di nuovo sull’Editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e sul papiro di Giessen n. 40, col. 1”, *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano* 32: 3-23.
- SEGURA MUNGUÍA, S. (1980) (trad.), *Apuleyo. Apología. Flórida*, Madrid.
- SERRANO DELGADO, J. M. (1983), “*Colonia Augusta Gemella Tucci*”, *Habis* 12: 203-222.
- SESTON, W. – EUZENAT, M. (1961), “La citoyenneté romaine au temps de Marc Aurèle et de Commode, d’après la *Tabula Banasitana*”, *Comptes rendus des séances de l’Academia des Inscriptions et Belles-Lettres* 105, n° 2: 317-324.
- SHERWIN-WHITE, A. N. (1944), “Geographical Factors in Roman Algeria”, *Journal of Roman Studies* 34: 1-10.

- SHERWIN-WHITE, A. N. (1973), “The *Tabula* of Banasa and the *Constitutio Antoniniana*”, *Journal of Roman Studies* 63: 86-98.
- SILVA, A. C. F. (1986a), “Novos dados sobre a organização social castreja”, en J. J. de Hoz (coord.), *Actas del III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas*, Salamanca: 201-226.
- SILVA, A. C. F. (1986b), *A cultura castreja no Noroeste de Portugal*, Paços de Ferreira.
- SILVA, A. C. F. (2007), “A evolução do sistema defensivo castrejo no Noroeste peninsular”, en L. Berrocal-Rangel y P. Moret (coords), *Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la meseta y de la vertiente atlántica en su contexto europeo. Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez (Octubre 2006)*, Madrid: 99-112.
- SILVA FERNANDES, L. – DO CÉU C. FERREIRA, M. – OSÓRIO, M. – SABINO PERESTRELO, M. (2006), “*Vicus e castellum* na *provincia Lusitania*. Notas epigráficas e arqueológicas”, *Conimbriga* 45: 165-198.
- SIMPSON, J. (1993), “Once Again Claudius and the Temple at Colchester”, *Britannia* 24: 1-6.
- SINI, F. (2003), “*Ut iustum conciperetur bellum*: guerra ‘gusta’ e sistema giuridico-religioso romano”, *Tradizione Romana* 2.
- SINI, F. (2006), “Diritto e *pax deorum* in Roma antica”, *Diritto@Storia* 5.
- SOBRAL DE CARVALHO, P. – CHENEY, A. (2007), “A muralha romana de Viseu. A descoberta arqueológica”, en A. Rodríguez Colmenero e I. Rodá de Llanza (coords.), *Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio: Lucus Augusti como paradigma. Actas del Congreso Internacional celebrado en Lugo en el V aniversario de la declaración, por la UNESCO, de la muralla de Lugo como Patrimonio de la Humanidad*, Lugo: 727-745.
- SOLANA SAINZ, J. M. (1981), *Los cántabros y la ciudad de Iuliobriga*, Santander.
- SOLANA SÁINZ, J.M. (2004), “La pacificación de los pueblos del Norte de Hispania”, *Historia Antiqua* 28: 25-70.
- SORACI, C. (2010), “Riflessioni storico-comparative sul termine *stipendiarius*”, en M. R. Cautadella, A. Greco y G. Mariotta (eds.), *Atti del Convegno Nazionale: Strumento e technique della riscossione dei tributi nel mondo antico*, Padua: 43-80.
- SORACI, R. (1982), “Regime del suolo e rapporti di lavoro nella Dacia Romana”, en G. Susini (ed.), *La Dacia pre-Romana e Romana, i rapporti con l’Impero (Colloquio italo-romano: Roma, 18-19 novembre, Roma: 65-97.*
- STE. CROIX, G. E. M. (1981), *The Class Struggle in the Ancient Greek World*, Reino Unido.

- STROUX, J. (1933), “Die *Constitutio Antoniniana*”, *Philologus* 88, nº 3: 272-295.
- STYLOW, A. (1986), “Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania”, *Gerión* 4: 285-311.
- STYLOW, A. U. – VENTURA VILLANUEVA, Á. (2009), “Los hallazgos epigráficos”, en R. Ayerbe, T. Barrientos y F. Palma (eds.), *El foro de ‘Augusta Emerita’. Génesis y evolución de sus recintos monumentales (=Anejos de Archivo Español de Arqueología 53)*, Mérida: 453-523.
- SYME, R. (1964), “Hadrian and *Italica*”, *Journal of Roman Studies* 54, nº 1-2: 142-149.
- SZABÓ, C. (2015), “Mapping *Apulum*. Reconstructing a Roman City”, en A. Dobos, D. Petrut y S. Berecki, *Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz (=Optiz Archaeologica 8)*, Budapest: 115-124.
- TALBERT, R. J. A. (ed.) (2000), *Atlas of the Greek and Roman Worlds*, Vicenza.
- TEIRA BRIÓN, A. – AMADO RODRÍGUEZ, E. (2014), “Molinos fuera de lugar: Fronteras y contextos de la molienda en la arqueología de la Edad del Hierro del noroeste ibérico”, *Revista d’Arqueologia de Ponent* 24: 271-287.
- TEJA, R. – CARRIÉ, J. M. (1996), “Una inscription de Cantabrie (?): fiscalité tétrarchique ou centuriation?”, *Antiquité Tardive* 4: 263-271.
- TEJA, R. (1990), “La carta 67 de San Cipriano a las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida: algunos problemas y soluciones”, en A. González y J. M. Blázquez (eds.), *Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano. Antigüedad y Cristianismo (=Antigüedad y Cristianismo. Monografía Históricas sobre la Antigüedad Tardía 7)*: 115-124.
- TEJA, R. (2005), “*Ad Legionem consistentibus*: las *canabae* de la *Legio VII* en una Epístola de San Cipriano de Cartago”, en C. Pérez y E. Illarregui (coords.), *Arqueología militar romana en Europa*, Segovia: 305-307.
- TELLERÍA SEBASTIÁN, J. C. (2006), “El significado del concepto *libertas* en los *Annales* de Tácito”, *Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia* 28: 273-297.
- THOMASSON, J. D. (1982), “*Sullo stato dei legati censorios*”, *Epigrafia e Ordine Senatorio. Tituli* 4, vol.1, Roma: 305-318.
- THOMPSON, L. A. (1982), “Domitian and the Jewish Tax”, *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* 31, nº 3: 329-342.
- THUDICHUM, F. (1860), *Die Gau- und Markverfassung*, Gießen.
- TIBILETTI, G. (1974), “*Ager publicus* e sulo provinciale”, *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti local nelle province romane con particolare riguardo alle condizione giuridice del suolo (=Accademia Nazionale dei Lincei 194)*, Roma: 89-104.

- TOMASSETTI GUERRA, J. M. (1997), “Contribución al estudio del urbanismo antiguo en el Bajo Guadalquivir: el caso de Lebrija (Sevilla)”, *SPAL: Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla* 6: 243-262.
- TORRENT RUIZ, A. J. (1981), “Consideraciones jurídicas sobre el Bronce de Contrebia”, *Cuadernos de trabajos de la Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma* 15: 95-104.
- TORRENT RUIZ, A. (2011), “La prohibición de *ius connubii* a los dediticios aelianos”, en A. A. Malcher (coord.), *Anais do XIII Congresso Internacional y XVI Congresso Iberoamericano de Derecho Romano: en homenagem a Silvio Meira e Agerson Tabosa Pinto: o direito de familia, de Roma à atualidade*, Belem: 592-607.
- TORRENT RUIZ, A. J. (2013), “Los *publicani* en la *Lex rivi Hiberiensis*”, *Rivista di diritto romano* 13: 1-10.
- TORRENT RUIZ, A. J. (2017), “La política municipalista Flavia en Hispania: el edicto de Vespasiano *universae Hispaniae Latium tribuit*; la *epistula* de Domiciano promulgadora de la *lex Irnitana*”, *RIDROM: Revista Internacional de Derecho Romano* 19: 153-242.
- TORRES AGUIAR, M. (1993-94), “La pena de exilio: sus orígenes en el derecho romano”, *Anuario de historia del derecho español* 63-64: 701-786.
- TOVAR, A. (1949), *Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas*, Buenos Aires.
- TRANOY, A. – LE ROUX, P. (1973), “Rome et les indigènes dans le Nord-ouest de la Péninsule Ibérique. Problèmes d’épigraphie et d’histoire”, *Mélanges de la Casa de Velázquez* 9: 177-232.
- TRANOY, A. – LE ROUX, P. (1984), “O, le mot et le chose. Contribution au débat historiographique”, *Archivo Español de Arqueología* 56: 239-255.
- TRANOY, A. (1981), *La Galice Romaine. Recherches sur le nord-ouest de la péninsule ibérique dans l’Antiquité*, París.
- TRANOY, A. (1995-96), “La route, image et instrument du pouvoir impérial dans le nord-ouest ibérique”, *Cuadernos de Arqueología* 12-13: 31-37.
- TRIANAPHYLLOPOULOS, J. (1963), “*Ius Italicum* personnel”, *Iura. Rivista internazionale di diritto romano* 14: 109-133.
- TRIANAPHYLLOPOULOS, J. (1974), “*Ius Italicum* personale (inschr. Didyma 331)”, en *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti local nelle province romane con particolare riguardo alle condizione giuridice del suolo* (=Academia Nazionale dei Lincei, n. 194), Roma: 135-163.



- TURNER, E. G. (1956), “A Roman Writing Tablet from Somerset”, *Journal of Roman Studies* 46, 1-2: 115-118.
- UROZ RODRÍGUEZ, H. – UROZ SÁEZ, J. (2014) “La *Libisosa* iberorromana: un contexto cerrado de –y por– las guerras sertorianas”, en F. Sala y J. Moratalla (eds.), *Las guerras civiles romanas en Hispania. Una revisión crítica desde la Contestania*, Alicante: 199-215.
- UROZ RODRÍGUEZ, H. (2012), *Prácticas rituales, iconografía vascular y cultura material en Libisosa. Nuevas aportaciones al Ibérico Final del Sudeste*, Alicante.
- UROZ SÁEZ, J. – UROZ RODRÍGUEZ, H. (2016), “La importancia de las vías de comunicación y *Libisosa*: ejército, comercio y romanización en su contexto arqueológico tardorrepblicano”, en G. Carrasco (coord.), *Vías de comunicación romanas en Castilla-La Mancha, Homenaje a Pierre Sillières*, Cuenca: 151-176.
- UROZ SÁEZ, J. (2012), “La colonias romana de Libisosa y sus precedentes”, en G. Gregorio Carrasco (coord.), *La ciudad romana en Castilla-La Mancha*, Cuenca: 87-130.
- URUEÑA ALONSO, J. (2011), “Los *conventus* de la provincia *Baetica* a partir de la descripción geográfica de Ptolomeo”, *HABIS* 42: 209-227.
- VALDEZ, J. – OLIVEIRA, L. (2005), “A arte rupestre da Citânia de Briteiros. O penedo dos Sinais, um caso Atlântico”, *Revista de Guimarães* 115-116: 51-89.
- VALIÑO ARCOS, A. (2006), “A propósito de la expansión espacial del Derecho Romano”, en J. D. Terrazas (ed.), *Viae Romanae. Estudios en homenaje a Francisco Samper Polo*, Chile: 193-214.
- VALIÑO ARCOS, A. (2008), “Aproximación a la distinción conceptual entre *ius civile* y *ius gentium* en las fuentes romanas”, en J. Alventosa y R. M. Moliner (coords.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Enrique Lalaguna Domínguez*, vol. 2, Valencia: 1689-1704.
- VALLEJO RUIZ, J. M. (2009), “Intentos de definición de un área antroponímica galaica”, en D. Kremer (ed.), *Onomástica galega II: onimia e onomástica romana e a situación lingüística do noroeste peninsular* (=Anejo de *Verba* 64), Santiago de Compostela: 227-262.
- VAQUERIZO GIL, D. – SÁNCHEZ MADRID, S. (2008), “Entre lo público y lo privado. *Indicatio pedaturae* en la epigrafía funeraria hispana”, *Archivo Español de Arqueología* 81: 101-131.
- VAZ, J. L. I. (1993), *A civitas de Viseu: Espaço e Sociedade*, Viseu.

- VAZ, J. L. I. (1995a), “*Saxa scripta* na civitas de Viseu: algumas notas”, *Mathesis* 4: 103-115.
- VAZ, J. L. I. (1995b), “Algunas inscripciones rupestres da civitas de Viseu”, en A. Rodríguez Colmenero y L. Gasperini (eds.), *Saxa Scripta (Inscripciones en roma). Actas del Simposio Internacional Ibero-Itálico sobre epigrafía rupestre (=Anejos de Lauroco 2)*, A Coruña: 279-295.
- VAZ, J. L. I. (1996), “Organização espacial castreja na civitas de Viseu”, *Mathesis* 5: 149-162
- VAZ, J. L. I. (2000), “Epigrafía rupestre e *populi* da serra do Caramulo na época romana”, en G. Paci (ed.), *Miscellanea Epigrafica in Onore di Lidio Gasperini*, Roma: 479-486.
- VAZ, J. L. I. (2006), “A ocupação do espaço de Viseu na época romana”, *Máthesis* 15: 143-154.
- VAZ, J. L. I. (2010), “Elementos para o estudo dos *fora* das ciudades do Norte da Lusitania”, en T. Nogales (ed.), *Ciudad y foro en Lusitania Romana (=Studia Lusitana 4)*, Mérida: 315-324.
- VICENT GARCÍA, J. M. (1998), “La prehistoria del modo tributario de producción”, *Hispania. Revista Española de Historia* 58, nº 3: 823-839.
- VIDAL ENCINAS, J. M. – GARCÍA MARCOS, V. (1996), “Novedades sobre el origen del asentamiento romano de León y la *legio VII gemina*”, en C. Fernández Ochoa (coord.), *Los finisterre atlánticos en la antigüedad (época prerromana y romana). Coloquio Internacional de Arqueología*, Gijón: 147-156.
- VIDAL ENCINAS, J. M. (2015), “Los castros ‘arriscados’ en la provincia de León: un grupo castreño singular”, en R. Martínez y G. Caverio (eds.), *Evolución de los espacios urbanos y sus territorios en el Noroeste de la península Ibérica*, León: 339-401.
- VIDAL TERUEL, N. (2007), *Análisis arqueológico de la romanización del territorio Onubense*, Huelva.
- VILA FRANCO, M. I. (2012), *La monetización del Noroeste de la península Ibérica a través de la red viaria terrestre en época romana*. Tesis doctoral. Dir.: M. P. García-Bellido. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- VILLA VALDÉS, Á. – DE FRANCISCO MARTÍN, J. – ALFÖLDY, G. (2005), “Noticia del hallazgo de un epígrafe altoimperial en el lugar de Pelóu, Grandas de Salime (Asturias)”, *Revista de filoloxía asturiana* 6-8: 495-498.

- VILLA VALDÉS, Á. – FRANCISCO MARTÍN, J. – ALFÖLDY, G. (2006-2008), “Un epígrafe altoimperial en pizarra de Pelóu (Grandas de Salime)”, *Archivo Español de Arqueología* 78: 271-274.
- VILLA VALDÉS, Á. (2006), “El pico San Chuis: reseña de un yacimiento pionero en la investigación castreña en Asturias”, *Sautuola. Revista del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola* 12: 167-179.
- VILLA VALDÉS, Á. (2007), “El Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias) y el paisaje fortificado en la Asturias protohistórica”, en L. Berrocal-Rangel y P. Moret (eds.), *Paisajes fortificados de la Edad del Hierro. Las murallas protohistóricas de la Meseta y la vertiente Atlántica en su contexto europeo* (= *Bibliotheca Archaeologica Hispana* 28), Madrid: 191-212.
- VILLA VALDÉS, Á. (2008), “El ocaso del mundo castreño”, en J. Rodríguez (coord.), *La Prehistoria en Asturias: un legado artístico único en el mundo*, Oviedo: 817-832.
- VILLA VALDÉS, Á. (2009a), “¿De aldea fortificada a *Caput Civitatis*? Tradición y ruptura en una Comunidad Castreña del siglo I D.C.: El Poblado de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias)”, *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología* 35: 7-26.
- VILLA VALDÉS, Á. (2009b) (ed.), *Museo Castro de Chao Samartín*, Principado de Asturias.
- VILLA VALDÉS, Á. (2010), “El oro en la Asturias Antigua: beneficio y manipulación de los metales preciosos en torno al cambio de era”, en J. Fernández-Tresguerres (coord.), *Cobre y Oro. Minería y metalurgia en la Asturias prehistórica y antigua*, Oviedo: 83-125.
- VILLA VALDÉS, Á. (2016) (dir.), *DOMVS. Una casa romana en el castro de chao Samartín. Exposición temporal y ciclo de conferencias*, Gijón.
- VITELLI CASELLA, M. (2011), *La Liburnia settentrionale in età romana: studi di geografia ed istituzioni*. Tesis doctoral. Dir.: P. Donati y L. Zerbini. Università di Bologna, Bolonia.
- VITELLI CASELLA, M. (2012), “Il confine nord-orientale d’Italia nella *Naturalis Historia* (3, 130-147) alla luce del cippo di Bevke”, en S. Busà, P. Pompejano, A. Sterrantino, A. Toscanos y A. Vento (eds.), *Atti del Convegno Internazionale GiMeD. Uno sguardo ‘extra moenia’. Riflessioni su identità culturali e circolazione di idee tra Oriente e Occidente*, Mesina: 265-274.
- VOLTERRA, E. (1956), “Manomissioni di schiavi compiute da peregrini”, *Studi in onore di P. De Francisci*, vol. 4, Milán: 73-105.

- VOLTERRA, E. (1974), "I diritti locali", en *Atti del convegno internazionale sul tema: I diritti local nelle province romane con particolare riguardo alle condizione giuridice del suolo* (=Accademia Nazionale dei Lincei 194), Roma: 55-64.
- VV.AA. *Plan director del patrimonio arquitectónico e arqueológico de la Cámara Municipal de Tondela*, Tondela.
- WAITZ, G. (1844-78), *Deutsche Verfassungsgeschichte*, vol. 1, Kiel.
- WALBANK, F. W. (1949), "Roman Declaration of War in the Third and Second Centuries", *Classical Philology* 44, nº 1: 15-19.
- WATKINS, T. H. (1983), "Coloniae and Ius Italicum in the Early Empire", *The Classical Journal* 78, nº 4: 319-336.
- WATKINS, T. H. (1988-89), "Vespasian and Italic Right", *The Classical Journal* 84, nº 2: 117-136.
- WEBER, M. (1982) [1891], *Historia agraria romana* (trad. de González, V. A.), Madrid.
- WEBSTER, J. (2001), "Creolizing the Roman Provinces", *American Journal of Archaeology* 105, nº 2: 209-225.
- WIEDEMANN, T. (1986), "The Fetiales: A Reconsideration", *The Classical Quarterly* 36, nº 2: 478-490.
- WILCKEN, U. (1912), "Grundzüge", en L. Mitteis y U. Wilcken (eds.), *Grundzüge und Chrestomatie der Papyruskunde* 1.1, Leipzig.
- WILLIAMS, J. (2007), "New Light on Latin in Pre-Conquest Britain", *Britannia* 38: 1-11.
- WISEMAN, T. P. (1969), "The Census in the First Century B. C.", *The Journal of Roman Studies* 59, nº 1: 59-75.
- WOOLF, G. (1993), "Rethinking the oppida", *Oxford Journal of Archaeology* 12, nº 2: 223-234.
- WOOLF, G. (1998), *Becoming Roman: the origins of provincial civilization in Gaul*, Cambridge.
- WOOLF, G. (2012), "Provincial Revolts in the Early Roman Empire", en Popovic, M. (ed.), *The Jewish Revolt against Rome. Interdisciplinary Perspectives*, Leiden-Boston: 27-44.
- WULFF ALONSO, F. (2012), "El edicto de Bembibre y el modelo de dominación romano en el Noroeste peninsular", en J. Santos y G. Cruz (eds.), *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: el caso Hispano* (=Anejos de Veleia. Revisiones de Historia Antigua VII), Vitoria: 499-556.
- ZIÓTKOWSKI, A. (2009), "Frontier Sanctuaries of the Ager Romanus Antiquus: did they exist?", *Palamedes* 4: 91-130.

ZUBIAURRE IBÁÑEZ, E. – BELTRÁN ORTEGA, A. (2017), “El conjunto de Villalís-Luyego-Priaranza de la Valduerna (León). Una propuesta de interpretación”, en L. J. García, L. Arboledas, E. Alarcón y F. Contreras (eds.), *Presente y futuro de los paisajes mineros del pasado: Estudios sobre minería, metalurgia y poblamiento*, Granada: 377-387.

ZUBIAURRE IBÁÑEZ, E. (2017), *Estrategias de control y gestión de los paisajes mineros del Noroeste de Hispania (Siglos I-III d.C.)*. Tesis doctoral inédita. Dir.: A. Orejas y E. García. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

## INDICE DE FIGURAS.

1. Tabla de los miliarios de la <i>via Nova</i>	139
2. Dispersión de miliarios de Tito y Domiciano en la <i>via XVIII</i> según su nomenclatura	140
3. Nº de menciones totales a <i>cohortes</i> y <i>alae</i> de auxiliares procedentes del Noroeste en epigrafía privada (ss. I-II d.C)	146
4. <i>Ala I Gigurrorum</i>	147
5. Tabla de <i>procuratores</i> relacionados con el Noroeste hispano (a partir de Ozcáriz, 2013: 181-200)	154
6. Tabla sintética del cómputo poblacional pliniano	155
7. Tabla sintética de las entradas censuales en los <i>Makrobíoi</i> de Flegonte	162-67
8. Distribución de las entradas censuales en los <i>Makrobíoi</i> de Flegonte correspondientes a la <i>regio VIII</i>	167
9. Registros censuales de peregrinos lusitanos en los <i>Makrobíoi</i> de Flegonte	171
10. Testimonio epigráfico sobre el marco conventual lusitano	172
11. Tabla sintética de las fórmulas censuales según su dispersión geográfica	173
12. Dispersión de los registros por fórmulas censuales numeradas	173
13. Tabla sintética de menciones de <i>origo</i> y <i>castella</i> en relación al lugar del hallazgo	192
14. Dispersión de los <i>castella</i> epigráficos en función de la indicación de <i>origo</i>	193
15. Tabla sintética de las menciones a <i>castellum</i> + <i>domo</i>	197
16. Tabla sintética de las menciones a los <i>castella</i> epigráficos en relación a las indicaciones de <i>origo</i> .	200-06
17. Gráfica de distribución de epigrafía evergética en <i>Hispania Citerior</i>	222
18. Situación de Pelóu respecto a su entorno minero inmediato	226
19. Fosos y depósito minero asociado a Pelóu	226
20. Fotografía y restitución del texto epigráfico de la pizarra de Pelóu	228
21. Zona interior del recinto de Pelóu	229

22. Canales de distribución de agua de Peña Furada.....	242
23. <i>Ius Italicum</i> e <i>immunitas</i> en las comunidades de <i>Liburnia</i> según Plinio. ....	260
24. Dibujo de la mola inscrita del castro de San Chuis.....	312
25. <i>Catillus</i> con inscripción: <i>Fines vici</i> .....	313
26. Relación entre el <i>ager per extremitatem</i> y espacio centuriado.....	335
27. Representación gráfica del territorio medido <i>per extremitatem</i> .....	337
28. Tabla sintética de los <i>termini publici</i> del cuadrante Noroccidental de la península Ibérica.....	341-43
29. La corta de “El Reguerón” o “La Roza” en Isoba (Puebla de Lillo).....	365
30. Cronología del conjunto epigráfico vadiniense.....	368
31. Ejemplo representativo del conjunto vadiniense.....	368
32. Mapa de isocronas (1h) de los castros de Vilayandre y Robledo de la Guzpeña respecto a las áreas potenciales de captación de soportes.....	370
33. Dispersión de la epigrafía vadiniense cismontana en relación a las áreas potenciales de captación de soportes.....	371
34. Testimonios de <i>amicitia</i> en el conjunto vadiniense.....	374
35. Dispersión de menciones de <i>origo intra civitatem</i> y de relaciones políticas <i>inter amicos</i> en el conjunto epigráfico vadiniense.....	377
36. Tabla sintética del conjunto epigráfico vadiniense.....	378-86
37. Evolución del peso del áureo en el siglo I d.C.....	395
38. Explotaciones mineras en primario y en secundario en el <i>conventus Asturum</i> .....	396
39. Circulación monetaria a través de la suma acumulada de hallazgos de moneda en los centros administrativos y militares del <i>conventus Asturum</i> durante el siglo I d.C.....	398

## Resumen

La tesis doctoral *Fiscalidad y ordenación del territorio en Occidente Romano: Su impacto social en el Noroeste de Hispania (ss. I a.C.-II d.C.)* tiene como objetivo el análisis de la estructura fiscal establecida a partir del gobierno de Augusto, dentro de un arco cronológico que abarca desde el siglo I a.C. hasta el siglo II d.C. y analizar su impacto y su implantación en el Noroeste de Hispania. Para este objetivo, el punto de partida son los análisis realizados por el grupo de investigación Estructura Social y Territorio – Arqueología del Paisaje (EST-AP) del Instituto de Historia del CISC durante las últimas tres décadas. El trabajo de este equipo proporciona unos puntos de partida sólidos sobre el sistema de estructuración social y de poblamiento prerromano, el proceso de cambio a partir de la influencia de Roma en época tardorrepública y la transformación completa del Noroeste tras su integración en el Imperio Romano. Tras el fin de las guerras cántabro-astures se abre una etapa de ruptura con la situación precedente que se materializa en tres vertientes fundamentales: el despegue de las explotaciones auríferas a amplia escala, nuevas dinámicas de poblamiento basadas en esquemas casi exclusivamente rurales y la conformación de élites locales que ejercen su control sobre el campesinado subalterno. Esta tesis busca profundizar y resaltar el factor administrativo, fiscal y jurídico en que se produce este tránsito a partir de tres líneas fundamentales de análisis interconectadas entre sí.

En primer lugar, el análisis de la estructura fiscal, a partir de las principales figuras de la tributación provincial romana, como son el *tributum soli*, *tributum capitis* y el censo provincial. Su estudio desde un punto de vista diacrónico permite comprender un proceso evolutivo de fondo en el que se transforman las bases del sistema económico y de la financiación pública del Estado romano. Desde un modelo que va perdiendo los rasgos de la tributación cívica y se impone un gravamen provincial paulatinamente institucionalizado, se da paso a un sistema augusteo basado en la contraposición de Italia y las provincias como dualidad condicionante del ejercicio del derecho, de las relaciones de propiedad y de la propia imposición fiscal. El establecimiento de nuevos sistemas de control, como el censo provincial y los registros catastrales serán herramientas fundamentales para un ejercicio de gobernanza racional, basado en la estimación de los recursos disponibles y optimizar la explotación imperialista de cada realidad provincial concreta. Otros instrumentos como el *ius Italicum*, el *ius Latii* o la *immunitas* también toman sentido como elementos de discriminación de las desventajas que comporta el suelo provincial en distintos niveles. Para analizar estas cuestiones no basta sólo con definir una estructura básica y uniforme, sino que es preciso descender a los contextos concretos a los que nos llevan las fuentes, y entenderlos dentro de los procesos de integración y provincialización concretos. Figuras que suelen considerarse generalizadas como la capitación personal, sólo toman sentido dentro de determinadas casuísticas que no son generalizables a todo el Imperio ni a un estatuto jurídico particular. Tampoco el censo puede entenderse como un procedimiento uniforme ni



sistemático, sino orientado a las necesidades e intereses de Roma, así como a los propios condicionantes materiales.

Un segundo plano corresponde a la configuración y definición de las *civitates* peregrinas. Se trata del expediente de rango menor dentro de los expedientes comunitarios romanos, cuya atención historiográfica ha sido inferior a su importancia. El reconocimiento a sus *iura e instituta*, a su autonomía interna como comunidades extranjeras, explica el tratamiento tangencial que la jurisprudencia y el resto de fuentes le dieron en muchas ocasiones. A pesar de las limitaciones de la documentación, sus fundamentos pueden reconstruirse dentro de la aplicación del derecho de guerra, del análisis de las fuentes jurídicas a través del *ius gentium*, y de su territorialidad y tributación colectiva a través del *Corpus Agrimensorum Romanorum*. El sistema de *civitates* conforma la estructura de financiación básica que permitió, a través de la descentralidad, el control y explotación de buena parte de los tejidos sociales provinciales con un aparato administrativo y unos niveles de injerencia mínimos. La entidad de las *civitates* peregrinas se imbrica también en una necesaria reflexión sobre el cambio cultural y el peso de la llamada Romanización. Frente al proceso lineal, muy cuestionado pero mantenido en la práctica, este sistema descentralizado y su consiguiente desarrollo con la expansión del derecho latino abre la puerta a otros modos de ser romano, y que sólo tienen sentido como parte de cada uno de los procesos locales y del desarrollo de su estructura sociopolítica.

El tercer plano trata el análisis de cómo esta estructura cobra una determinada forma en el Noroeste hispano. Frente a las corrientes que han subrayado la excepcionalidad o singularidad de su proceso histórico, cuando no directamente el aislamiento y la pervivencia prerromana, el Noroeste fue una realidad perfectamente integrada en las estructuras de dominación fiscal y administrativa. La imposición del sistema descentralizado de *civitates* peregrinas y el marco conventual constituyen el marco básico en que se genera un profundo proceso de cambio, condicionado por la imposición de tributos colectivos y aportaciones de *auxilia* y *operae* mineras. Sus consecuencias se materializan en escala local y regional a partir de la construcción de la desigualdad social y la conformación de élites gestoras, visibilizadas en el medio epigráfico. También en las nuevas dinámicas de poblamiento, condicionadas por un *surplus* fiscal y por las demandas de mano de obra en las explotaciones auríferas. Sin embargo, la transformación se resuelve de un modo genuino como ejemplifica el estudio de caso vadiniense o el modo en que la implantación del derecho latino se manifiesta. No fue esta nueva sociedad provincial algo estático ni vestigial, pero tampoco puede entenderse dentro de procesos lineales. Se trata de un proceso múltiple al que sólo podremos aproximarnos mediante la combinación y alternancia de diferentes escalas.

## Abstract

The aim of the doctoral dissertation *Fiscalidad y ordenación del territorio en Occidente Romano: Su impacto social en el Noroeste de Hispania (ss. I a.C.-II d.C.)* is to analyse the roman tax structure organized by Augustus in a long-term perspective since 1st century BC to II century AD considering its establishment and social effects in northwestern *Hispania*. With this aim, the starting point is the previous works made by my research group “Estructura Social del Territorio – Arqueología del Paisaje” (EST-AP) of the Institute of History (CSIC) during the last three decades, focused in NW Iberia. The research results of my group provide a sound basis about pre-Roman social structure and settlement patterns in NW Iberia, the changing process after the first contacts with Roman influence in the Late Republic and, finally, the complete transformation of the whole region after the integration in Roman network. The end of Astur-Cantabrian Wars marked the breaking point with the former period concerning three main aspects: the strong development of gold mining operation in a large scale, new settlement patterns almost exclusively based on rural dynamics and the emergence of local aristocracies within peasant communities. The aim of this thesis is to point out administrative, fiscal and legal factors in this changing process through three key subjects, closely interconnected.

Firstly, an approach of roman tax structure studying the most important taxes, *tributum soli* and *tributum capitis*, and several issues related with provincial *census*. In this sense, a long-term perspective reflects a deep transformation of the public financing system of the Roman State: from a model based on civic duties and irregular payments from provincial communities, to a new order imposed by Augustus, characterised by the dichotomy between Italy and the provinces, which influenced the exercise of roman rights, ownership and tax obligations. The creation of new control instruments over provincial landscapes during the High Empire, like the *census* and land surveys, provided a new basis to roman policies in order to estimate the availability of provincial resources and optimize imperialist purposes over each provincial context. Another legal tools, like the *ius Italicum*, *ius Latii* and *immunitas*, are consistent with selective policies aimed to avoid the disadvantages of living in *ager provincialis* in different ways. In order to approach these issues, however, it is not enough to define uniformly the basic structure. This wide perspective must be complemented with the study of the specific contexts of integration into roman network, depending on current available sources. In this way, the poll-tax, usually considered a fiscal obligation of *peregrini*, it is only attested in special circumstances regarding a lack of ownership rights. The provincial *census* neither was a fix or systematic procedure based on personal income taxes, but a flexible instrument adapted to the imperial needs and also determined by the material conditions of each province.

Secondly, this work try to approach the legal and administrative nature of the *civitates peregrinae*. Despite their great number and importante they have been understudied in comparision with privileged estatutes. The recognition of their own *iura* and *instituta* explains the less attention paid by legal or literary sources, little concerned

with non-roman communities. Despite the paucity of information, the analyse of *ius post Bellum* practices, the concept of *ius gentium*, and the *Corpus Agrimensorum Romanorum*, reveal their communal liability for tribute, a full recognition of their territoriality and ownership, and their legal ground based on authonomy and self-government. The *civitas*' framework was a decentralized model which provided to Rome an efficient public financing system with a minimum administrative apparatus.

'Romanization' and cultural change must be understood as a part of this functioning frame. In opposition to the classical romanization model, this decentralized model, developed with *ius Latii* grant, opens the door to another ways of being Roman as a part of local processes and the development of their own socio-political structure.

Thirdly, this work addresses the way that this tax, political and legal framework was stablished in northwestern *Hispania*. Although a big extent of researchers tent to expose the integration of NW Hispania as a defective or singular process, due to a perceptions which point out its isolation and pre-Roman continuity, this region was, in fact, deeply integrated. The stablishment of a decentralized model based on *civitas*' and *conventus*' system caused a complete change, strongly influenced by the requirements "in block" of *tributum soli*, *auxilia* units and gold-mining labour as a part of their fiscal duties. This involves a social hierarchization process, with growing inequalities and the emergence of local elites that are exposed in epigraphical inscriptions. New rural settlement patters are consistent with the need to obtain fiscal surpluses, and in order to fullfil their mining labour contributions. The changing process was heterogeneous, as the case of *Vadinia* or the study of *ius Latii* effect show. The new provincial society was not a static or defective result in NW Hispania, and it is not possible to approach the issue as a linear process. It was a multipolar change to which we must approach combining different scales and sources of information.

